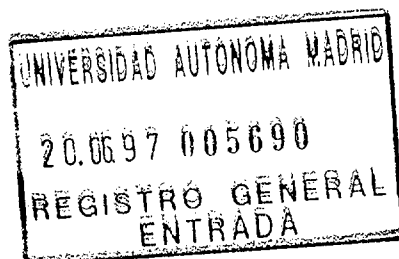
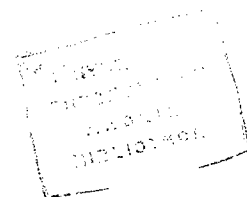


UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID
Facultad de Filosofía y Letras
Departamento de Historia Moderna



DON GASPAR DE QUIROGA (1512-1594).
UN GRAN PATRON EN LA CORTE DE FELIPE II.

R.B.P. 66538



Tesis doctoral realizada por

D^a. HENAR PIZARRO LLORENTE

Bajo la dirección del profesor Dr.

D. JOSE MARTINEZ MILLAN

Junio 1997

Durante los años que he empleado en la elaboración de la tesis que ahora ve la luz, he ido acumulando una importante deuda de gratitud de la que gustaría dejar constancia. Desde los distintos ámbitos que han tenido relación con la misma, son muchas las personas que me han facilitado el camino que ha conducido a su realización. Así, es obligado agradecer a los responsables de diversos archivos e instituciones - Instituto Valencia de Don Juan, Archivo Zabálburu - el buen acogimiento procurado, especialmente, a D. Angel Fernández Collado, por el amable trato recibido en el Archivo de la Catedral de Toledo. El desarrollo de la investigación también me llevó a Madrigal de las Altas Torres, y a entrar en contacto con la Asociación Cultural "El pastelero de Madrigal". Además de resaltar la importante labor que realizan, quiero expresar mi agradecimiento a dos de sus miembros, Firmo Zurdo y Angel Luis Portillo, no sólo porque a ellos debo el conocimiento de información crucial para la reconstrucción de la familia Quiroga, sino también por brindarme su amistad. De ésta trato igualmente para referirme a los miembros del equipo que trabaja bajo la dirección de D. José Martínez Millán, con los que tengo el privilegio de compartir un proyecto. En este sentido, quiero destacar el impagable apoyo que me ha procurado D. Ignacio Javier Ezquerro Revilla, de cuya calidad humana e intelectual he recibido innumerables muestras. Por otra parte, el esfuerzo invertido en la elaboración de estas páginas no se hubiese materializado sin la dirección del profesor D. José Martínez Millán, a quien debo el reconocimiento que merece no sólo haberme dado la oportunidad de poder aprender de su magisterio, sino un ánimo y respaldo constante que entiendo esencial en mi evolución personal y profesional. Por último, quiero dar las gracias a un amigo, D. Rafael Jackson Martín, por su compañía y conversación; a Carmen y José, mis padres, siempre prestos a ayudarme a alcanzar cualquier propósito, y, sobre todo, a Chuma, por su apoyo, comprensión y generosidad sin límite.

INDICE

ABREVIATURAS	1
INTRODUCCION	3

CAPITULO 1

<u>LA ETAPA DE FORMACION (1512-1540)</u>	11
1.1.La familia Quiroga y las élites sociales en Castilla	11
1.2.Los años de estudio	21

CAPITULO 2

<u>BAJO EL PATRONAZGO DEL CARDENAL TAVERA (1540-1545)</u>	29
---	----

CAPITULO 3

<u>A LA SOMBRA DE JUAN MARTINEZ SILICIO (1546-1554)</u>	45
3.1.El apoyo a los estatutos de limpieza de sangre	45
3.2.La colaboración en la reforma de la iglesia toledana	64
3.3.El reverso de unas buenas relaciones	78
3.4.Las consecuencias de su desprotección en la Corte	97

CAPITULO 4

<u>AL SERVICIO DE LA MONARQUIA EN ITALIA (1555-1564)</u>	101
4.1.La estancia en Roma (1555-1559)	101
4.1.1.Quiroga, Paulo IV y los estatutos de limpieza de sangre	105
4.1.2.Bajo la protección de la Compañía de Jesús	109
4.2.La <u>visita</u> al Reino de Nápoles (1559-1564)	113
4.2.1.La labor de Quiroga en Nápoles (1559-1563)	117
4.2.2.La aportación a la reforma del episcopado napolitano	126

CAPITULO 5

<u>LA PARTICIPACION EN EL PROCESO DE CONFESIONALIZACION DE LA MONARQUIA (1565-1572)</u>	133
5.1. A las órdenes del nuevo patrón: Diego de Espinosa	134
5.1.1. La integración en el aparato institucional	138
a/ Miembro del Consejo de Castilla	138
b/ Consejero de la Suprema	140
b.1. El epílogo del proceso hispano de Carranza	142
b.2. Su presencia en la "Junta Magna"	150
5.1.2. La visita al consejo de Cruzada (1566-1573)	152
a/ La labor del visitador Quiroga	154
b/ Las Ordenanzas de 1573	159
5.2. La Presidencia interina del Consejo de Italia (1567-1571).	166
5.2.1. La pugna jurisdiccional con la Santa Sede y el control político de Italia	169
5.2.2. El inicio de una larga visita	175
5.3. La cuestión morisca y las negociaciones para la formación de la Santa Liga.	186
5.4. La trayectoria ascendente de sus oficios eclesiásticos	194
5.4.1. Los problemas en torno al canonicato de Toledo	194
5.4.2. Gaspar de Quiroga obispo de Cuenca (1571-1577)	206
a/ El sínodo diocesano de 1574	214
b/ La polémica cobranza del subsidio	232

CAPITULO 6

<u>GASPAR DE QUIROGA GRAN PATRON CORTESANO</u> <u>(1573-1579)</u>	237
6.1. La herencia política de Diego de Espinosa	237
6.1.1. Gregorio XIII y la Corte hispana	242
6.2. Los años de dominio del "partido papista" (1576-1579)	252
6.2.1. Al frente de la Suprema	260
a/ La renovación de la institución inquisitorial	265
a.1. El Consejo de Inquisición	269
a.2. Los tribunales de distrito	284
b/ La actividad confesionalista del Santo Oficio	291
b.1. La amistad con Fray Luis de León	292
b.2. Arias Montano y su servicio a la Corona	301
b.3. El resurgir de los alumbrados	316
b.4. Santa Teresa y la reforma de las Ordenes religiosas	324
b.5. El control sobre los moriscos	347
b.6. El Indice de Libros Prohibidos	359
c/ Las relaciones de la Inquisición con otras instituciones	370
c.1. Las actuaciones respecto a la Santa Sede	372
c.2. El fuero inquisitorial y los conflictos jurisdiccionales	388
6.2.2. Consejero de Estado	403
a/ En la junta para los asuntos de Flandes	405
b/ El entendimiento con Antonio Pérez	416

6.2.3.Arzobispo de Toledo	430
a/ La finalización del proceso de Bartolomé de Carranza	430
b/ La administración de las rentas del arzobispado de Toledo	436
c/ Quiroga arzobispo primado	459
c.1.El comienzo de la labor arzobispal (1577-1579)	465
6.2.4.El Cardenal de Santa Balbina	475

CAPITULO 7

<u>LA PERDIDA DEL FAVOR REAL (1580-1585)</u>	479
7.1.La reacción del "partido castellanista" y la destrucción de la facción "papista" (1579-1580).	479
7.1.1.La revitalización de la <u>visita</u> al Consejo de Italia	484
7.1.2.La <u>visita</u> al Consejo de Cruzada	495
7.1.3.La pugna por la secretaría de la Suprema	508
7.2.El relegamiento de la <u>gracia</u> real (1580-1585)	513
7.2.1.La caída de Antonio Pérez	513
7.2.2.La anexión de Portugal	523
7.2.3.La labor en el arzobispado de Toledo	537
a/ La celebración de sínodo diocesano	555
b/ El Concilio provincial de 1582	572
7.2.4.La postergación en los asuntos políticos	587

CAPITULO 8

<u>LA REFORMA DEL SISTEMA DE GOBIERNO DE LA MONARQUIA Y LA REHABILITACION DE GASPAR DE QUIROGA (1586-1594)</u>	605
8.1.La segunda gobernación del Consejo de Italia.	615

8.2. Las últimas actuaciones del Inquisidor General.	624
8.2.1. El proceso inquisitorial de Antonio Pérez.	624
8.2.2. Las juntas sobre moriscos.	630
8.2.3. La proliferación de las profecías.	642
8.2.4. La visita a la Compañía de Jesús.	655
8.3. La culminación de la actividad arzobispal.	670
8.4. El final de una larga vida.	703

APENDICES

Apéndice I: Miembros del Consejo de Inquisición (1573-1594)	709
Apéndice II: Inquisidores y fiscales de los tribunales inquisitoriales de distrito (1573-1594)	713
Apéndice III: Composición de oficios y dignidades de la catedral de Toledo (1577-1594)	733
Apéndice IV: Mayordomías del arzobispado de Toledo (1583 y 1589)	783
Apéndice V: Nómina de los oficios de la villa de Alcalá de Henares (1582-1585, 1594)	787
Apéndice VI: Examinadores, jueces y testigos sinodales del sínodo toledano de 1580	795

FUENTES Y BIBLIOGRAFIA	803
-------------------------------	------------

ABREVIATURAS

ACT: Archivo de la catedral de Toledo

ACHV: Archivo de la Chancillería de Valladolid

ADA: Archivo Diocesano de Avila

ADT: Archivo Diocesano de Toledo

AGS: Archivo General de Simancas

CC: Cámara de Castilla

CJH: Consejo y Juntas de Hacienda

GM: Guerra y Marina

PE: Patronato Eclesiástico

PR: Patronato Real

QC: Quitaciones de Corte

SP: Secretarías provinciales

VI: Visitas de Italia

AHN: Archivo Histórico Nacional

Inq: Inquisición

AHPA: Archivo Histórico de Protocolos de Avila

AMAE: Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores

AZ: Archivo Zabálburu

Carp: carpeta

BL: Bristish Library

Add: Additional

Eg: Egerton

BRAH: Boletín de la Real Academia de la Historia

BNM: Biblioteca Nacional de Madrid

BPRM: Biblioteca del Palacio Real de Madrid

BSCV: Biblioteca del Colegio de Santa Cruz de Valladolid

CODOIN: Colección de Documentos Inéditos para la Historia de España

DHEE: Diccionario de Historia Eclesiástica de España. Madrid 1975.

IVDJ: Instituto Valencia de Don Juan

MHSI: Monumenta Historica Societate Iesu

Ms: Manuscrito

RAH: Real Academia de la Historia

INTRODUCCION

No faltará seguro quien se sorprenda al constatar que presento la biografía de un personaje como trabajo de investigación para conseguir el grado de doctor, ni -tal vez- quien deje de esbozar una irónica sonrisa pensando que estoy volviendo a la historia política tradicional, que -hace años- propició la publicación de excelentes biografías en las que se trata de demostrar la importancia y relevantes aportaciones que los personajes estudiados han realizado a la sociedad y a la nación en general. Para evitar semejantes malentendidos, me apresuro a señalar que de ninguna manera pienso que la Historia sea cuestión de modas, que aparecen periódicamente de acuerdo a las apetencias sociales o intereses políticos. Por el contrario, opino que los distintos enfoques obedecen a un intento por comprender de manera más exhaustiva y explicar más adecuadamente la articulación del poder y la realidad social, utilizando, para ello, las metodologías más apropiadas. En este sentido, mi línea de investigación se encuadra dentro de un equipo de trabajo que viene estudiando las relaciones de poder y los "grupos políticos" que se desarrollaron en la Corte de la Monarquía Hispánica, cuya metodología me ha guiado en la realización de este trabajo y que paso a exponer a continuación.

Los planteamientos de la Historia política y social, tal como aún la entienden buena parte de los historiadores actuales, arrancan del siglo pasado cuando, tras la desaparición de la organización sociopolítica de la edad Moderna surgió el concepto de nación que correspondía a una necesidad de identidad y solidaridad colectiva con el fin de articular el individualismo de la nueva sociedad (1). Es, por tanto, una creación de la burguesía del siglo XIX que necesitaba, no solo la creación de un mercado nacional, sino también la

(1).- Sobre el tema, José MARTINEZ MILLAN, "Estudio introductorio" a Rafael ALTAMIRA, Ensayo sobre Felipe II, hombre de Estado. Alicante 1997, por el que me guío.

homogeneización social para su expansión (2). Las revoluciones burguesas trajeron una nueva forma de Estado integrado por una nueva sociedad compuesta por la suma de individuos que todos poseían los mismos derechos, mientras las instituciones que formaron el Estado aparecían nítidas, separadas de la sociedad, dispuestas a actuar sobre ella de manera imparcial en el momento en que fuesen activadas por el grupo social que detentase el poder (3). Para que esta nueva estructura de Estado resultara efectiva, fue preciso que el individuo se convirtiera en ciudadano activo y emocionalmente integrado dentro de una nacionalidad y que el nuevo Estado y sus agentes conformasen la personalidad de los miembros de la comunidad de acuerdo a una nueva entidad (nacional). La labor de interiorización de esta ideología nacionalista, como uno de los elementos necesarios utilizados por la burguesía para construir el nuevo Estado, fue realizada por los historiadores (4), quienes, de acuerdo con estas ideas, analizaron las estructuras políticas del pasado adaptándolo a las instituciones del nuevo Estado (Historia institucionalista), al mismo tiempo que se constituía en protagonista a un ente vago denominado "pueblo", presentando los personajes más relevantes de él como ejemplos a seguir, destancando los principales actos que habían realizado en pro de la comunidad, lo que explica el auge del género histórico de las biografías.

(2).- Juan Sisinio PEREZ GARZON, "Ejército nacional y milicia nacional". Zona Abierta 31 (1984) 23. "La nación es la idea de la comunidad (apoyada en elementos culturales preexistentes) lanzada desde el Estado moderno por la clase dominante (o en vías de dominar), la burguesía, para producir una sociedad correspondiente al Estado y su territorio".

(3).- Bartolomé CLAVERO, "Política de un problema: la revolución burguesa". B. CLAVERO, P. RUIZ TORRES, F.J. HERNANDEZ MONTALBAN, Estudios sobre la revolución burguesa en España. Madrid 1979, p. 15.

(4).- P. CIRUJANO MARIN, T. ELORRIAGA PLANES, J. S. PEREZ GARZON, Historiografía y Nacionalismo español, 1834-1868. Madrid 1985, pp. 6 y 7: "Un progreso siempre entendido como nacional, esto es, en avance continuo hasta culminar su perfeccionamiento, etapa que no era otra sino la propia época coetánea ... Tomaba carta de naturaleza un sujeto colectivo, pero no solo para los hechos coetáneos, sino también proyectándolo al pasado, configurándose una nueva visión de la historia de la conquista cristiana contra los musulmanes, o del significado de las Comunidades y de las Germanías, o de la colonización de América. Una visión con enfoque nacional, sostenida por la acción de un pueblo".

A partir de la segunda mitad del siglo presente, se revisaron tales planteamientos (5), destacando los aspectos sociales de las instituciones (6), sin duda, impulsados por el movimiento a favor de un acercamiento entre ciencia histórica y ciencia social (7). Ello fue el origen de que aparecieran en Europa numerosos trabajos tratando ya, no solo de reconstruir las instituciones y su funcionamiento, sino también de saber qué clase de personas las ocuparon, a las que se consideró elites sociales. Aunque los intentos por coordinar ambas metodologías históricas fueron numerosos, en mi opinión, fue L. Stone quien integró de manera definitiva la tradición historiográfica administrativa (institucionalista) con la nueva historia social al plantear como objeto de investigación la "biografía colectiva" y definir con nitidez el método a utilizar: la prosopografía (8). Con todo, este enfoque metodológico no tenía en cuenta el proceso de articulación políticosocial de las Monarquías durante la Edad Moderna y, por consiguiente, continuaba con los planteamientos de la historiografía liberal, ignorando la verdadera relación que existía entre los diversos cargos y organismos de la Monarquía con el rey. Ello se debía a que se

(5).- Me refiero a los trabajos de F. HARTUNG y R. MOUSNIER, "Quelques problèmes concernant à la monarchie absolue". Relazioni del X Congresso Internazionale di Scienze Storiche. IV.- Storia Moderna. Firenze 1955, pp. 3-55, y a la réplica de J. VICENS VIVES, "Estructura administrativa estatal en los siglos XVI y XVII". Coyuntura económica y reformismo burgués. Barcelona 1974, pp. 99-142.

(6).- Al respecto, J. GIL PUJOL, "Notas sobre el estudio del poder como nueva valoración de la historia política". Pedralbes 3 (1983), 62 ss. Aunque no considero pertinente desarrollar el tema, se impone señalar que por estas fechas, las corrientes marxistas también intentaron explicar la formación del denominado "Estado Moderno" desde una perspectiva económica. El primero que inició el debate fue Maurice DOBB, Estudios sobre el desarrollo del Capitalismo. Buenos Aires 1976 (1ª ed. Cambridge 1945), que después resultó muy rico como testimonian los numerosos seguidores que tuvo. Irónicamente, estas discusiones se debatieron dentro de las mismas estructuras políticas y administrativas de la corriente institucionalista a quien querían suplir.

(7).- Al respecto, F. BRAUDEL, La historia y las ciencias. Madrid 1986.

(8).- L. STONE, El Pasado y el Presente. Madrid 1986, pp. 61-94. Dentro de la historiografía española, el mejor exponente de este tipo de investigación es el prof. P. Molas Ribalta. Sobre el tema, José MARTINEZ MILLAN, "Las investigaciones sobre patronazgo y clientelismo en la administración de la Monarquía Hispana durante la Edad Moderna". Studia Historica. Edad Moderna 15 (1996) 87-89.

proyectaban las estructuras de la sociedad actual a una sociedad estamental, como era la de la Edad Moderna, en la que existía una identificación entre estructura política y categoría social (9).

Tal interpretación provocó la división entre Corte y Estado (10), cuando en realidad no existía, identificando a aquélla con los organismos centrales del gobierno de la Monarquía, e ignorando la estrecha unión que existía entre casa real y administración territorial. Tampoco se ha percibido debidamente que las Cortes de las Monarquías europeas de la Edad Moderna surgieron de las "Casas del Rey", de modo que el dominio del rey sobre los reinos comenzó siendo una ampliación y anexión del dominio que tenía sobre su Casa y Corte (11).

Paralelamente a la corriente institucionalista y marxista que trataban de interpretar la formación del Estado Moderno de acuerdo a esquemas liberales, surgía otra línea de investigación sobre la evolución de la organización política de Occidente que planteaba de modo distinto las relaciones politicosociales de la Edad Moderna (12) y que ha sido difundida por nuestra historiografía, en

(9).- Al respecto, P. SCHIERA, "Sociedade 'de estados', de 'ordens' ou 'corporativa'. A. M. HESPAÑHA, Poder e Instituições na Europa do Antigo Regime. Lisboa 1984, pp. 143-153.

(10).- Así, todos los manuales de Historia, sin excepción, hablan de los distintos Consejos de la Monarquía, incluso desde finales del siglo XV y primera mitad del XVI, como organismos plenamente formados con ordenanzas, nombramientos, etc. sin percatarse de que los nombramientos los hacía el rey "para nuestro Consejo", sin especificar la materia a la que se dedicarían (hacienda, guerra, etc.) porque no existían tales instituciones; al respecto, S. FERNANDEZ CONTI, "El gobierno de los asuntos de la guerra en Castilla durante el reinado del Emperador Carlos V (1516-1558)". Instituciones y Elites de Poder en la Monarquía Hispánica durante el Siglo XVI. Universidad Autónoma de Madrid 1992, pp. 69-70 y 104. Carlos J. de CARLOS MORALES, El Consejo de Hacienda de Castilla, 1523-1602. Junta de Castilla y León 1996, pp. 30-34.

(11).- Sobre la función del rey como padre de familia, resulta esclarecedor, O. BRUNNER, Terra e Potere. Milano 1983, pp. 333-495.

(12).- Me refiero, entre otros, a O. BRUNNER, Land und Herrschaft. Wien 1965 (traducido al italiano, que es la edición que utilizo, en 1993).

los tiempos recientes por historiadores como B. Clavero y A. M. Hespanha (13).

Para esta nueva corriente de investigación la composición social de la Edad Moderna no se daba al margen del sistema político que la regía (como sucede en la Edad Contemporánea). Estos historiadores entienden que la estructura de una Monarquía feudal evolucionada o corporativa, como es la de la Edad Moderna está compuesta -de acuerdo con los tratadistas de la época- por diferentes organismos a semejanza del cuerpo humano, en la que el rey está representado por la cabeza, mientras que el resto de instituciones (señoríos, ciudades, etc.) cumplen la función de los distintos órganos.

De esta manera, el proceso que articuló las Monarquías Modernas -según esta corriente de investigación- arrancó de la Casa del Rey medieval, que comprendía dos grandes áreas de actuación: por una parte la que se ocupaba del servicio y mantenimiento del rey y de su familia, coordinada por el mayordomo (14); por otra, la que centralizaba las relaciones del monarca con los organismos y centros de poder exteriores a su Casa, dirigida por el canciller (15). El fortalecimiento que experimentó la figura del rey durante la baja edad Media propició que la línea divisoria entre ambos campos fuera profundizándose cada vez más al crecer desmesuradamente la segunda con respecto a la primera a medida que el reino se fue articulando política y socialmente bajo su jurisdicción, gracias a la autoridad que se le fue atribuyendo.

(13).- Entre las numerosas obras de ambos historiadores, me remito a: B. CLAVERO, Tantas personas como Estados. Madrid 1986. A. M. HESPANHA, História das Instituições. Epocas medieval e moderna. Coimbra 1982.

(14).- En las distintas ordenanzas y etiquetas de la Casa Real siempre comienzan por el Mayordomo, véase, como ejemplo, el "Libro de la Cámara del Príncipe don Juan, hijo de los Reyes Católicos ..." (BPRM, sección histórica, caj. 49 ó microfilm 1356).

(15).- Sobre dichos oficios, Luis G. DE VALDEAVELLANO, Curso de Historia de las Instituciones españolas. Madrid 1977 (5ª ed.), p. 490. Antonio M. HESPANHA, História das Instituições. Epocas medieval e moderna. Coimbra 1982, p. 147. David TORRES SANZ, La administración central castellana en la baja edad Media. Universidad de Valladolid 1982, pp. 76-82 y 87-93, en donde explica la evolución y cita la bibliografía pertinente. Joseph R. STRAYER, Sobre los orígenes medievales del estado moderno. Barcelona 1981, pp. 48-52.

Todo ello produjo la aparición de un aparato administrativo y el establecimiento de un sistema legal que garantizó la pacífica resolución de los conflictos políticos y sociales, lo que -a mi juicio- constituye el mayor logro del denominado Estado Moderno; pero no se debe olvidar que se consiguió a través de la figura del rey, fuente que legitimaba todo poder (16), cuyo interés se identificó con el interés general del reino (razón de Estado).

Precisamente ha sido este nuevo enfoque el que -por una parte- ha cambiado la función que cumplió la Corte en la estructura política de las Monarquías occidentales de la Edad Moderna (17), considerándola como el

(16).- Sobre el fortalecimiento de la figura real, A. M. HESPANHA, História das Instituições, ..., pp. 302-331. W. ULLMAN, Principios de gobierno y política en la Edad Media. Madrid 1985, parte 2ª, pp. 121-218. E. H. KANTOROWICZ, Los dos cuerpos del rey. Un estudio de teología política medieval. Madrid 1985, pp. 260-296. J. H. SHENNAN, Le origini dello stato moderno in Europa (1450-1725). Bologna 1976, pp. 13-32. J. M. NIETO SORIA, Fundamentos ideológicos del poder real en Castilla (siglos XIII-XVI). Madrid 1988, *passim*. J. BARBEY, La fonction royale. Essence et légitimité d'après les Tractatus de Jean de Terrevermeille. Paris 1983. ID., Etre roi. Le roi et son gouvernement en France de Clovis à Louis XVI. Paris 1992, pp. 54-71, 137-164, 165-208. Alain GUERY, "Le roi est Dieu; le roi et Dieu", en: N. BULST, R. DESCIMON et A. GUERREAU (dirs), L'État ou le Roi. Les fondations de la modernité monarchique en France (XIVe-XVIIe siècles). Paris 1996, pp. 27-50.

(17).- N. ELIAS, La Sociedad Cortesana. México 1982. Su estudio de la Corte está basado en la de Versalles y lo hace desde el punto de vista cultural. La Corte in Europa. Brescia 1983, dirigido por M. Cattini y M. A. Romani, A. STEGMANN, "La Corte como centro administrativo. Gerarchia e decentralizzazione amministrativa in Francia da Francesco I a Luigi XIII", pp. 11-30. J. BOUCHER, "La commistione fra Corte e Stato in Francia sotto gli ultimi Valois", pp. 93-130. De muy distinta manera la concibe C. MOZZARELI, "Principe, Corte e Governo tra '500 e '700". Cultura et ideologie dans la genèse de l'état moderne. Roma 1985, pp. 367-379, así como en: La Corte nella cultura e nella storiografia. Rome 1983, dirigida por C. Mozzarelli y G. Olmi.

La bibliografía anglosajona sobre el tema resulta especialmente abundante en los últimos años desde que, en 1976, apareciera el trabajo de G. ELTON, "Tudor Government: The Points of Contact: III The Court". Transactions of the Royal Historical Society 26 (1976) 211-228, la edición que he utilizado ha sido la que apareció en: Studies in Tudor and Stuart Politics and Government, Cambridge 1983, III, 3-57. Fruto del seminario que el profesor Elton dió sobre este tema, resumen del cual fue el expresado trabajo, surgió el interés de David STARKEY por el problema, quien realizó una innovadora revisión de la idea que sobre la Corte de los Tudor estaba vigente en la historiografía inglesa, que no era otra que la establecida por G. ELTON, The Tudor Revolution in Government. Cambridge 1953, publicando -bajo su dirección- un excelente libro: The English Court: from the Wars of the Roses to the Civil War. London 1987, en el que es preciso destacar los trabajos de: D. A. L. MORGAN, "The house of policy: the political role of the late Plantagenet household, 1422-1485", pp. 25-70, en el que explica la evolución de la household a la Court, y el del propio D. STARKEY. "Intimacy and innovation: the rise of the Privy Chamber, 1485-1547", pp. 71-118. A estos autores vino a añadirse D. LOADES, The Tudor Court. London 1986. (Sobre la discusión historiográfica y con una nueva visión de la Corte de los Tudor: R. A. GRIFFITHS,

centro neurálgico del poder, aunque no el único, pero en relación con el cual, se conformaron todos los demás organismos, de modo que se constituyó en centro inicial de las relaciones de poder entre las élites que configuraron la Monarquía moderna (18). La Corte se convirtió así en el punto de encuentro entre el gobernante y los gobernados, pero de ningún modo constituye el núcleo primigenio desde donde irradiaban sus rayos las instituciones centralistas, creadas en la baja Edad Media, que unificaban y centralizaban los territorios, según la interpretación "institucionalista" de la Edad Moderna, sino como instrumento que utilizaron los sectores privilegiados para dominar el reino (19).

Por otra parte, el nuevo enfoque dado a la estructura política ha llevado a profundizar en las relaciones no institucionales de poder (patronazgo y clientelismo) que articularon aquella sociedad por lo que tienen de composición

"The King's Court during the Wars of the Roses. Continuities in an Age of Discontinuities". Princes, Patronage and the Nobility. The Court at the Beginning of the Modern Age. Oxford University Press 1991, pp. 41-67). El estudio más reciente y tal vez el más completo sobre el tema es el dirigido por R. G. ASCH and A. M. BIRKE, Princes, Patronage, and the Nobility..., ya citado. Pero además, los historiadores anglosajones han estudiado otras Cortes europeas con gran acierto desde este punto de vista, sirva de ejemplo: P. PARTNER, The Pope's men. The Papal Civil Service in the Renaissance. Clarendon Press, Oxford 1990, especialmente, pp. 1-19.

Para un estado de la cuestión y bibliografía completa: P. MERLIN, "Il tema della Corte nella storiografia Italiana ed Europea". Studi Storici 27 (1986) 203-244.

(18).- S. KETTERING, Patrons, Brokers, and Clients in Seventeenth- Century France. Oxford University Press 1986, cap. 6.

(19).- Los historiadores anglosajones lo han visto con gran claridad y así lo han puesto de manifiesto en sus numerosos estudios sobre los Tudor y los Estuardo, ya citados en, supra, nota 24; no obstante, es preciso añadir los siguientes trabajos: Por lo que se refiere a la época de los Tudor, véanse: D. STARKEY, "Court, Council, and Nobility in Tudor England". Princes, Patronage, and the Nobility. The Court at the Beginning of the Modern Age, c.1450-1650. Oxford University Press 1991, pp. 175-203, dirigido por R. G. ASCH and A. M. BIRKE, en donde se critica la visión tradicional de la Corte inglesa en tiempos de Enrique VIII, según la cual, este monarca institucionalizó y centralizó el Reino. V. MORGAN, "Some Types of Patronage, Mainly in Sixteenth- and Seventeenth- Century England". Klientelsysteme im Europa der Frühen Neuzeit. München 1988, pp. 91-116, dirigido por A. Maczak. Este trabajo contiene una muy completa bibliografía sobre el tema. Por lo que se refiere a la época de los Estuardo, es preciso destacar los trabajos de K. SHARPE, "Crown, Parliament and locality: government and communication in early Stuart England". English Historical Review 101 (1986), pp. 321-350. El mismo Kevin Sharpe dirigió: Faction and Parliament. Essays on early Stuart history. Oxford University Press 1978 (la edición que he utilizado es: Methuen. London and New York. 1985), resulta muy interesante para aclararnos en su postura metodológica: "Revisionism revisited", Ibid., pp. IX-XVII. Una constestación a este libro: T. K. RABB, "Revisionism Revisited: Early Stuart Parliamentary History". Past and Present, núm. 92 (1981), pp. 55-78.

sociopolítica basada en la mediación personal. Tal tipo de relaciones (a las que se les consideró como una especie de relaciones feudales) (20) , tuvieron mayor importancia de la que se le había dado y, lejos de resultar un obstáculo para el gobierno resultaron esenciales para mantener e, incluso, extender la autoridad del rey sobre sus territorios (21).

De acuerdo con este planteamiento, el estudio de la biografía de un personaje cortesano relevante cobra un sentido completamente nuevo ya que aparece como el centro neurálgico que, a través de sus redes clientelares, contribuye a estructurar la composición sociopolítica de la Monarquía. Tal capacidad le viene dada por su relación con el rey, fuente de toda gracia, y del que parte como he dicho- la organización política de la Monarquía.

Desde este nuevo enfoque he proyectado mi trabajo.

(20).- Se les denominó Bastard Feudalism. Quien consagró el término fue: K. B. MACFARLANE, "Bastard Feudalism". Bull. Ins. Hist. Tesearch 20 (1945) 161-180, reimpreso en: England in the Fifteenth Century: Collected Essays of K. B. McFarlane. London 1981, pp. 23-43 (que es la que he utilizado). A ello hace referencia C. ROSO, p. 40. Ultimamente, la teoría de Mcfarlane ha sido revisada por P. R. COSS, "Bastard Feudalism Revised". Past and Present, núm. 125 (1989) 27-64.

(21).- Anthony MOLHO, "Patronage and the State in Early Modern Italy", en: Antoni MACZAK (Hrg.), Klientelsysteme im Europa der Frühen Neuzeit. München 1988, pp. 239-240. En el mismo sentido, Mark GREENGRASS, "Functions and limits of political clientelism in France before Cardinal Richelieu", en: N. BULST, R. DESCIMON et A. GUERREAU, L'État ou le Roi..., pp. 72 y 82.

DON GASPAR DE QUIROGA (1512-1594).
UN GRAN PATRON EN LA CORTE DE FELIPE II.

CAPITULO 1

1. LA ETAPA DE FORMACION (1512-1540)

1.1. La familia Quiroga y las élites sociales en Castilla

Don Gaspar de Quiroga fue uno de los numerosos letrados, tan ponderados por los historiadores actuales, que adquirieron protagonismo e influencia en el gobierno de la Monarquía durante la segunda mitad del siglo XVI. Con todo, la relevancia política de don Gaspar no fue casual, ya que obedecía a una actitud o convicción de su familia que, desde los siglos centrales de la Edad Media, generación tras generación, se aplicó en la defensa de la preeminencia de la Monarquía como modo de cohesionar el Reino.

El linaje de los Quiroga tiene sus orígenes en tierras gallegas, concretamente en la comarca lucense (1). La presencia de diversos integrantes de esta familia al lado de los reyes castellanos, desempeñando señaladas funciones, aparece constatada desde los siglos XI-XII. Así, durante el reinado de Alfonso VII, el Emperador, destacó Vasco Pérez de Quiroga, ricohombre del rey y capitán de los reales ejércitos, quien donó a la orden de San Juan de Jerusalén

(1).- La Casa de los Quiroga descende del rey suevo Reciarío II de Galicia y Portugal (RAH, "Salazar" C-14: "Copia del libro de linajes y armas que escribió el Capitán Gonzalo Fernandez de Oviedo y Valdés, Chronista del Emperador Carlos Quinto y de las Indias", fol 173v). Después de éste reinaron en la zona varios príncipes arrianos, destacándose Felipe de Quiroga en la defensa del valle del mismo nombre contra la ofensiva musulmana. Para tal efecto se ayudó de unas estacas, que perduraron representadas en el escudo familiar (L.ANTONIO TEIJEIRO, Quiroga, encomienda de San Juan. Lugo 1988, pp, 7-11; Alberto y Arturo GARCIA CARRAFFA, Enciclopedia heráldica de genealogía hispano-americana. Madrid 1955. Vol.76, pp, 78-93).

el monasterio de San Clodio de Sil (2). Sin embargo, los territorios y jurisdicción de los Quiroga, cuya demarcación incluía los términos de Lor, San Martín, Bendollo y Hospital, fueron cedidos como encomienda a dicha orden en el siglo XIII, lo que vendría a explicar el destacado papel de los componentes de esta familia en el seno de la misma.

El régimen político castellano bajomedieval contempló una serie de cambios, iniciados a mediados del siglo XIII, que condujeron a la inauguración de un periodo de inestabilidad que no concluyó hasta el comienzo del siglo XVI. La Corona y los distintos estamentos sociales pugnaron por definir el modelo político que debía resultar prevaleciente, tratando de salvaguardar sus intereses y de obtener la primacía dentro del mismo. La política desarrollada por el Rey Sabio, continuada por Alfonso XI, encaminada a fortalecer las atribuciones de la monarquía, actuó como revulsivo para el resto de los sectores sociales, que vislumbraban en estas transformaciones una merma de su influencia (3). El proceso de configuración de una monarquía fuerte, en relación con la función que la misma desempeñaba en el modelo de régimen corporativo como fuente de toda gracia y poder, conllevó la aparición de una serie de oficiales reales que se ocuparon de las labores que el rey les encomendaba directamente, prestando así su servicio tanto en la propia Casa regia y la Corte como en el resto de los territorios. La relación que unía a estos servidores con el monarca era personal, puesto que no existía diferenciación alguna entre las esferas pública y privada. Así, era el propio rey quien seleccionaba a estos servidores en su entorno íntimo, muy frecuentemente provenientes de su propia Casa y familia, pasando a

(2).- Casado con Elvira de Losada, el hijo de ambos, Vasco de Quiroga, emparentó con la familia de Gonzalo de Temes, maestre de Alcántara, casándose, a su vez, con su hermana Urraca. Se halló presente junto a Fernando III el Santo en la conquista de Sevilla (AHN, Consejos, leg. 5310, 4ª pieza, fol. 12r; L.ANTONIO TELJEIRO. op. cit., pp. 15-16).

(3).- La significación y transcendencia de la obra política de Alfonso X ha sido puesta de manifiesto por diversos especialistas, así como la lucha por la supremacía estamental a lo largo de la etapa bajomedieval. En este sentido, hemos de resaltar: J.A.MARAVALL, "Del régimen feudal al régimen corporativo en el pensamiento de Alfonso X" Estudios de Historia del pensamiento español. Edad Media. Madrid 1983 (3ªed.), pp. 99-145; L.SUAREZ FERNANDEZ, Nobleza y monarquía. Universidad de Valladolid 1975, passim; B.GONZALEZ ALONSO, "Poder regio, Cortes y régimen político en la Castilla Bajomedieval (1252-1474)" Las Cortes de Castilla y Leon en la Baja Edad Media. Cortes de Castilla y Leon 1988, II, pp. 203-229.

configurar estos una élite social que actuaba en apoyo de los intereses de la Corona, y que adquirieron esta relevancia social en virtud a su cercanía a la figura regia y a los servicios prestados a este proyecto (4). En este sentido, fueron varios los miembros de la familia Quiroga que actuaron en favor de los planteamientos políticos de la monarquía, bajo cuyo mandamiento actuaron integrando esta oficialidad. Entre los mismos, hemos de destacar a Gonzalo Rodríguez de Balboa y Santalla, casado con Emilia Vázquez de Quiroga y prior de la orden de San Juan de Jerusalén, que fue mayordomo mayor del rey Alfonso XI, perteneciente a su consejo y canciller mayor de la reina doña María (5). Igual dignidad dentro de la orden de San Juan desempeñó uno de sus nietos, Gonzalo de Quiroga, quien continuó esta línea de servicios a los reyes tras el cambio dinástico que se produjo a mediados del siglo XIV. A pesar de que los primeros Trastámaras se mostraron más proclives a atender las exigencias estamentales, muchas de las conquistas políticas conseguidas por la Corona en la centuria anterior resultaron irreversibles, y en contra de lo que puede parecer en un primer acercamiento a la labor de estos monarcas, los mismos mantuvieron firme el objetivo de fortalecer el poder regio, concretándose esta tendencia desde finales del siglo XIV y en las primeras décadas del siglo XV (6). Gonzalo de Quiroga fue confirmador de los privilegios reales de Juan II y una persona muy vinculada a don Alvaro de Luna. Murió en la defensa de la isla de Rodas en

(4).- En torno a los oficiales reales en la Baja Edad Media y sus características, véase, G.MARTINEZ DIEZ, "Los oficios públicos: De las Partidas a los Reyes Católicos" Actas del II symposium de Historia de la Administración. Madrid 1971, pp, 125-136; D.TORRES SANZ, La administración central castellana en la Baja Edad Media. Universidad de Valladolid 1982, pp, 42-70; J.M.GARCIA MARIN, El oficio público en Castilla durante la Baja Edad Media. Madrid 1987, pp, 76-92; J.MARTINEZ MILLAN. "Introducción" La Corte de Felipe II. Madrid 1994, pp, 15-18.

(5).- Por otra parte, se hallaba también vinculado familiarmente a los Condes de Lemos, mientras que su esposa, como hemos señalado, tenía relación con los Temes, antecesores de la Casa Córdoba (AHN, Consejos, leg. 5310, 4ª pieza, fols. 13r-v; P.SALAZAR Y MENDOZA, Crónica del Gran Cardenal de España don Pedro Gonzalez de Mendoza. Toledo 1625, pp, 288-289; L.ANTONIO TEJEIRO, op. cit., p, 16).

(6).- En torno a la evolución en la pugna mantenida por la monarquía y los estamentos sociales en este periodo, véase, B.GONZALEZ ALONSO, op. cit., pp, 230-254; J.M.NIETO SORIA, Fundamentos ideológicos del poder real en Castilla (siglos XIII-XV). Madrid 1988, passim.

1456, ostentando, posiblemente, la dignidad de maestro (7).

La presencia de los Quiroga en Madrigal de las Altas Torres (Ávila) parece confirmada en los primeros decenios del siglo XV, cuando la villa se convirtió en una de las sedes de la Corte itinerante de los Trastámaras (8). La vida cortesana en la localidad alcanzó su máximo esplendor en tiempos de Juan II, al contraer el rey en esta población segundas nupcias con doña Isabel de Portugal y producirse en la misma el nacimiento de Isabel la Católica (9). El señalado papel desempeñado por Gonzalo de Quiroga en este reinado, fue continuado por sus descendientes durante el de los Reyes Católicos. En estos años vivió el comendador de San Juan más célebre perteneciente a esta familia, Ruy o Rodrigo de Quiroga, quien también participó en el auxilio de la isla de Rodas en 1480, junto a un deudo suyo, fray García de Quiroga, también caballero de dicha orden. Falleció al año siguiente en su encomienda, siendo enterrado en la capilla de San Juan de la iglesia del Hospital (10). En honor a la memoria de tan destacadas figuras, todos sus descendientes adoptaron y usaron el apellido Quiroga. Entre ellos, Vasco Vázquez de Quiroga, a quien su tío, Gonzalo de Quiroga trajo consigo de Galicia y legó parte de su hacienda (11). Este casó con María Alonso de la Cárcel, hija de Juan Arévalo de la Cárcel, quien tenía fundado mayorazgo en dicha población abulense. De este

(7).- Gonzalo de Quiroga fue hijo de Rodrigo de Quiroga y de Constanza García de Valcárcel, hija, a su vez, del adelantado Garcí Rodríguez de Varcárcel (P.SALAZAR Y MENDOZA, op. cit., p. 288). Sobre su pertenencia al séquito de Juan II, véase, A.GARCIA ZURDO, Madrigal de las Altas Torres, cuna de la Hispanidad. Madrigal de las Altas Torres 1961, p. 23.

(8).- La familia Quiroga no fue la única que se instaló en Madrigal atraídos por la presencia real y por la importancia que la población estaba adquiriendo. Sobre otros linajes que siguieron este camino, entre los que se encontraban los Enríquez, el conde de Fuensaldaña, etc, véase, Ibid., p. 13.

(9).- Sobre la importancia de Madrigal y la frecuente presencia del rey en la población: D.T.JAEN, John II of Castile and the Grand Master Alvaro de Luna. Madrid 1978, *passim*; T.DE AZCONA, Isabel la Católica. Estudio crítico de su vida y de su reinado. Madrid 1993, pp. 4-19.

(10).- En torno a dicho personaje, véase, L.ANTONIO TELJEIRO, op. cit., pp. 22 y 61.

(11).- Vasco Vázquez de Quiroga fue hijo de Constanza García de Quiroga, hermana de Gonzalo de Quiroga, y de Pedro Vázquez de la Somoza, Señor del Pazo de Lor (AHN, Consejos, leg. 5310, 4ª pieza, fol. 18r; P.SALAZAR Y MENDOZA, op. cit., pp. 288).

matrimonio nacieron tres hijos: Alvaro de Quiroga, padre de Gaspar de Quiroga, Constanza, que profesó en el convento de las madres agustinas de Madrigal en 1502 (12), y Vasco de Quiroga, quien, entre otras insignes ocupaciones, fue designado como primer obispo de Michoacán (13).

Sin embargo, teniendo en cuenta tan ilustres precedentes, nuestro interés se centra en el enraizamiento de la familia Quiroga a partir del cambio sociopolítico que se produjo en Castilla durante la segunda mitad del siglo XV. La transición del periodo bajomedieval a la Edad Moderna estuvo marcada por un señalado cambio constitucional que comenzaba a producirse: la separación que se produjo entre jurisdicción y gobierno, inexistente en la etapa anterior (14). La aparición de la Corte, como centro de encuentro entre gobernantes y gobernados, donde estos últimos iban a resolver sus conflictos y a obtener la gracia real que legitimaba su situación en el reino, produjo un aumento de atribuciones del monarca, lo que se tradujo en una ampliación del número de obligaciones de los cargos de la Casa Real y, con el tiempo, en una separación entre el gobierno y la jurisdicción. Para cumplir con todas las funciones que fue sumando el monarca, se comenzaron a utilizar los servicios de personas que

(12).- Archivo del Convento de Nuestra Señora de Gracia, Libro de Profesiones, fol. 31.

(13).- Al igual que ocurre con su sobrino Gaspar, la fecha de su nacimiento no ha podido ser claramente establecida. Los distintos autores apuntan a 1470, 1477, 1478 ó 1479, como las más probables, aunque parece claro que el mismo se produjo en Madrigal. Obtuvo la licenciatura en Derecho canónico, aunque también se debate sobre si el lugar donde efectuó sus estudios fue Salamanca o Valladolid, donde posteriormente sirvió en la Chancillería. Las últimas aportaciones establecen que estudió en ambas universidades consecutivamente. Con una presencia destacada en la Corte de Carlos V, entre 1525-1526 actuó como juez de residencia en Orán, siendo requeridos, en 1530, sus servicios como oidor en la Audiencia Real de Nueva España. En 1533 visitó la provincia de Michoacán, siendo nominado por el Consejo de Indias para ejercer como obispo en dicha diócesis en 1535, dignidad que ostentó a partir de 1538. Sólo regresó a España en el periodo comprendido entre 1547 y 1554, retornando a su obispado, donde falleció en 1565. Sobre dicho personaje, y su vinculación familiar a Gaspar de Quiroga, véase, O. VELAYOS ZURDO, Vasco de Quiroga: olvido y glorificación. Avila 1992, p. 26; F. MIRANDA GODINEZ, Don Vasco de Quiroga y su colegio de San Nicolás. Universidad Michoacana 1990, p. 149; S. ZAVALA, Recuerdo de Vasco de Quiroga. México 1987, pp. 98-100 y 251-255; F. MARTÍN FERNÁNDEZ, Don Vasco de Quiroga (Protector de los indios). Universidad Pontificia de Salamanca 1993

(14).- En torno al cambio constitucional operado en dicho periodo, véase, Ch. H. McILWAIN, Constitucionalismo antiguo y moderno. Madrid 1991, p. 110.

contaban con una formación técnica suficiente para desempeñar estas nuevas funciones encuadradas en la actividad administrativa, lo que se tradujo en la aparición de un nuevo grupo social: los letrados (15). Durante el reinado de los Reyes Católicos, este conjunto de servidores fueron quienes obtuvieron la confianza regia para la ejecución y desarrollo de estas labores, pasando a adquirir una gran preponderancia en la Corte en detrimento de la exclusividad ostentada hasta entonces por la nobleza, que, por otra parte, había mantenido una actitud poco favorable para los intereses de Isabel en el devenir de la guerra civil que la condujo al trono castellano (16). Por el contrario, las familias que habían apoyado a la Reina Católica en dicha contienda, fuertemente asentadas en los poderes municipales, obtuvieron enormes ventajas y acrecentamientos como pago a los servicios prestados. Entre estas hemos de encuadrar a los Quiroga (17).

Por otra parte, estos no fueron ajenos a las luchas por el poder que las distintas facciones cortesanas desarrollaron en la Corte de los Reyes Católicos. Los servidores que habían ocupado los altos puestos de la administración desde los reinados de Juan II y Enrique IV, y que habían propiciado el acceso al trono

(15).- A este respecto, véanse los estudios de José Antonio MARAVALL, "Del régimen feudal al régimen corporativo en el pensamiento de Alfonso X"; Idem, "Los hombres del saber o letrados y la formación de su conciencia estamental"; Idem, "La concepción del saber en una sociedad tradicional". Todos ellos en Estudios de Historia del Pensamiento Español (Edad Media). Madrid 1967.

(16).- Sobre el papel que desempeñó la nobleza durante el reinado de los Reyes Católicos, véase, L.SUAREZ FERNANDEZ, op. cit., pp, 259-271; J.PEREZ., La España de los Reyes Católicos. San Lorenzo del Escorial 1986, pp, 21-25 y 44-46; Idem, Isabel y Fernando. Los Reyes Católicos. Madrid 1988, pp, 67-74 y 171-191; A.DOMINGUEZ ORTIZ, El Antiguo Régimen: Los Reyes Católicos y los Austrias. Madrid 1983 (9ªed.), p, 219.

(17).- S.ZAVALA, op. cit., p, 252, establece la posible relación existente entre fray Hernando de Talavera y la familia Quiroga, apuntando que, entre los que financiaron el viaje de Colón, aparece un Vasco de Quiroga. Por otra parte, P.CASTAÑEDA, DHEE. Madrid 1973, III, p, 2039, en la biografía de Vasco de Quiroga, señala que, "Perteneció al cuerpo de letrados que reemplazó a la nobleza en la Corte de los Reyes Católicos". Muchos de estos personajes fueron conversos, lo que provocó un grave problema sociopolítico. Sobre este tema, me remito al manido artículo de F.MARQUEZ VILLANUEVA, "Conversos y cargos concejiles en el siglo XV" Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 63 (1957), pp, 503-540, pero sobre todo, a su libro, menos conocido por los historiadores, pero mucho más completo para el tema: Investigaciones sobre Juan Alvarez Gato. Madrid 1960, especialmente, el Cap.3. Para la misma cuestión, referido a la Corte de los Reyes Católicos, M.GIMENEZ FERNANDEZ, Bartolomé de la Casas. Madrid 1984 (reimp.), I, pp, 15ss.

de Isabel la Católica fueron desplazados, en la última década del siglo XV, por un nuevo grupo de poder generado en torno a su marido Fernando. Este "partido fernandino" ocupó los cargos más relevantes de la monarquía durante los decenios siguientes. Aunque el grueso principal de sus componentes contaba con un origen aragonés, en el mismo también se integraron un grupo de servidores castellanos fieles a Isabel que se habían agrupado en torno al príncipe Juan. La muerte de éste, unida al resto de tragedias familiares ocurridas en estos años, afectaron notablemente a la reina y tuvo su traducción política en la composición de la facción "fernandina", puesto que dichos servidores, viendo truncadas sus futuras expectativas, pasaron a formar parte del mismo, convirtiéndose Diego Deza, antiguo preceptor del príncipe Juan, en uno de los patrones más destacados (18). Tras la muerte de la reina, aquellos oficiales que se habían visto sustituidos en el ejercicio del poder se agruparon en el llamado "partido felipista" por su apoyo y adhesión a la política de Felipe el Hermoso en contraposición a la propugnada por su suegro (19). En el caso de la familia Quiroga, sus componentes se encuadraron dentro del grupo de castellanos que pasó a formar parte de la facción fernandina, como así lo demuestran diversos hechos. Primeramente, la confianza que Fernando el Católico depositó en Alvaro de Quiroga, padre de nuestro personaje, al poner en sus manos la guardia de dos de sus hijas naturales, Esperanza y María, recluidas en el Monasterio agustino de Nuestra Señora de Gracia de Madrigal de las Altas Torres; la protección que dispensó Juan Pardo de Tavera, sobrino de Diego Deza, patrón del "partido fernandino" a diversos miembros de dicha familia, y en concreto, a Gaspar de Quiroga, como señalaremos más adelante, llegando a emparentar ambas familias a través del matrimonio que unió a Constanza de Quiroga, hermana de Gaspar, con Alvaro de Ulloa, relacionado familiarmente con Diego Deza.

(18).- En relación a los personajes agrupados en torno al príncipe Juan, y el cambio de actitud de la reina en cuanto a las labores de gobierno por la sucesión de muertes en el seno de su familia, véase, T.DE AZCONA, op. cit., pp, 877-880 y 922-923.

(19).- En torno a la configuración y componentes de las distintas facciones cortesanas en la corte de los Reyes Católicos, véase, M.GIMENEZ FERNANDEZ, op. cit., I, pp, 6-15; F.MARQUEZ VILLANUEVA, op. cit., pp, 81-104; J.MARTINEZ MILLAN, "Las élites de poder durante el reinado de Carlos V a través de los miembros del Consejo de Inquisición (1516-1558)" *Hispania* 168 (1988), pp, 115-119.

De igual manera, en su línea de servicios prestados a la consecución del proyecto político de la Corona, la familia Quiroga apoyó activamente la reforma religiosa que se desarrolló a lo largo del siglo XV, especialmente en sus últimas décadas, en la que se produjo el paso de la conventualidad a la observancia en las órdenes religiosas tradicionales. Su actividad estuvo íntimamente relacionada con una importante institución de Madrigal de las altas Torres: el monasterio de las agustinas de Nuestra Señora de Gracia. El convento fue fundado en 1438 extramuros del pueblo, el mismo año que tuvo lugar la llamada "congregación de la observancia" de la Orden de San Agustín (20), aunque ya existía como beaterio. En este había ingresado Catalina, hija de Juan II y de su primera esposa y fundadora del hospital de Madrigal, doña María de Aragón, que no llegó a conocer su integración a la regla, pues falleció en 1424. Por tanto, desde su conformación como convento, el mismo ya nació reformado. En esta cuestión influyó directamente la vinculación de la Corona a los proyectos de la reforma religiosa, sobre todo de aquellos centros relacionados con la familia real (21), puesto que, a partir de su creación, este cenobio iba a albergar la peculiaridad de convertirse en el lugar de destino y custodia de las hijas naturales de varios reyes y príncipes, y de aquí su importancia. Las primeras en tomar el hábito agustino bajo estas circunstancias fueron dos hijas de Fernando el Católico, a las que su esposa Isabel señaló este camino (22). Estas fueron doña Esperanza de Aragón, posteriormente reformadora de la Huelgas Reales de Burgos, y doña María de Aragón, que tras ejercer también labores reformadoras en el

(20).- En torno a la vía de la observancia adoptada por dicha orden, así como sus características, véase, M.ANDRES, La Teología española en el siglo XVI. Madrid 1976, pp, 140 y 150-158; Idem, Pensamiento teológico y vivencia religiosa en la reforma española. Cáceres 1980, pp, 20-23; R.GARCIA VILLOSLADA, Historia de la Iglesia en España. Madrid 1980, III-1º, pp, 327-337.

(21).- En torno a esta actividad, especialmente desarrollada en conventos fundados o habitados por algún miembro de la familia real, véase, L.ALVAREZ, "Contribución al estudio de la reforma religiosa en el reinado de los Reyes Católicos" Revista Agustiniana de Espiritualidad 5 (1964), p, 157.

(22).- Sobre la labor de Isabel con los numerosos hijos naturales de su esposo, véase, P.GARCIA LOUAPRE, Proceso al trono de Isabel la Católica. Barcelona 1994, p, 163.

monasterio de Pedralbes (23), ostentó el priorato de Nuestra Señora de Gracia. Ocupando este cargo, solicitó a Carlos V el antiguo palacio de Juan II como nueva sede para la comunidad, petición que fue concedida por una Real Cédula fechada el 25 de marzo de 1525. En 1527, el abandonado convento de extramuros fue ofrecido a la rama masculina de la orden, que pasó a ocuparlo. Sin duda, el emperador se sintió muy inclinado a esta concesión, pues su propia hija, Juana, que murió siendo niña, en 1530, se encontraba en el monasterio (24). También siguieron este designio una hermana de don Juan de Austria, Barbara de Píramos, y la hija de este, doña Ana de Austria, protagonista de la famosa trama del pastelero de Madrigal. Esta tradición se mantuvo hasta el siglo XVII, pues una hija natural de don Juan José de Austria, hijo de Felipe IV, y con el mismo nombre que la anterior, tomó también el hábito agustino en Nuestra Señora de Gracia (25). La vinculación de la familia Quiroga a dicho convento fue muy estrecha, no sólo porque algunos de sus miembros femeninos profesasen en el mismo (26), así como por ser unos de sus máximos benefactores, sino también por la labor de tutela realizada por Alvaro de Quiroga, padre de nuestro personaje, sobre las hijas naturales de Fernando el

(23).- Entre las religiosas que acompañaron a doña María de Aragón en el ejercicio de esta función se encontraba Isabel de Quiroga (P.SANAHUJA, Historia de la seráfica provincia de Cataluña. Barcelona 1959, pp, 821-822).

(24).- J.MARTIN CARRAMOLINO, Historia de Avila, su provincia, su obispado. Madrid 1873, III, p, 107; Esta hija de Carlos V fue fruto de sus amores con una dama del séquito de la reina viuda Germana de Foix. La niña nació en 1522, falleciendo ocho años después (J.GARCIA MERCADAL, Viajes de extranjeros por España y Portugal. Madrid 1952, I, p, 711; L.PFANDL, Juana la Loca, su vida, su tiempo, su culpa. Madrid 1977 (10ª ed.), p, 153; A.GARCIA ZURDO, op. cit., p, 58). Carlos V favoreció posteriormente la elección de su tía María como abadesa del Real Monasterio de la Huelgas de Burgos (C.ALONSO VAÑES, Doña Ana de Austria. Abadesa del Real Monasterio de las Huelgas. Sus primeros años de gobierno (1611-1614). Madrid 1990, p, 23-24).

(25).- Una breve historia de este monasterio y de su función de acogida de las hijas naturales de los miembros de la familia real, véase en, J.JIMENEZ LOZANO, Madrigal de las Altas Torres. Monasterio de Nuestra Señora de Gracia. León 1994, pp, 6-10; A.GARCIA ZURDO, op. cit., pp, 109-110.

(26).- Ya hemos hecho referencia a como una tía de Gaspar de Quiroga, Constanza, ingresó en 1502. También lo hicieron dos de sus hermanas, Isabel y Juana Angela, en 1512 y 1537 respectivamente, y con posterioridad, sus sobrinas Elvira, Ana y María, hijas de su hermano Juan (C.M.AJO GONZALEZ DE RAPARIEGOS, Historia de Avila y su tierra. Salamanca 1992, IV, pp, 37 y 39).

Católico, como hemos señalado. Si bien habían adoptado el estado eclesiástico, no debemos olvidar que por sus venas corría sangre real y la utilización política que se podía hacer de esta circunstancia, como sucedió, años después, en el caso de la hija de don Juan de Austria y el surgimiento del "sebastianismo". Por ello, sin duda, el contar con una labor de vigilancia tenía una gran importancia, lo que, por otra parte, redundaría obviamente en un aumento del poder e influencia de esta familia (27). En marzo de 1510 Fernando el Católico concedía a Alvaro de Quiroga doce mil maravedíes al año por el concepto de estipendio de dos lanzas, con las que, por otra parte, no estaba obligado a servir. Cuando falleció el Rey Católico, don Alvaro solicitó a Carlos V la continuidad de la merced, cuya retribución se había visto interrumpida tras la muerte de Fernando. Carlos V concedió la prorrogación de la gracia por una Real Cédula fechada en Barcelona el 26 de julio de 1519 en atención a la calidad de la persona y de los servicios prestados (28). De igual manera, al año siguiente, Rodrigo, hijo mayor de Alvaro de Quiroga, presentaba un requerimiento semejante, convirtiéndose él en el beneficiario tras haber acaecido la muerte de su padre. Carlos V nuevamente accedió a esta petición, dado que Alvaro de Quiroga había sido criado de su tía doña María de Aragón, quien había mediado ante el monarca para que prosperase la petición de Rodrigo, como quedaba reflejado en una Real Cédula fechada el 20 de agosto de 1520 (29).

Por otra parte, la vinculación de la familia Quiroga a la Orden de San Agustín y a la vía de reforma representada por esta, adscrita a una espiritualidad tendente a la mística, en contraposición a aquella que establecía una vivencia más "intelectual" y ascética, viene a explicar las buenas relaciones que la misma, y en concreto, Gaspar de Quiroga, mantuvo no sólo con ilustres agustinos, como Fray Luis de Leon, sino también su consonancia con otras Ordenes cuya

(27).- Así lo señala J.ROMAN DE LA HIGUERA, Historia eclesiástica de la Imperial ciudad de Toledo, fol. 179: "Alvaro de Quiroga, natural de Madrigal q fue hidalgo principal y por eso fio de su guarda el Rey Católico sus hijas".

(28).- AHN, Consejos, leg. 5310, fols. 34v-36r.

(29).- Ibid., fols. 37r-38v.

religiosidad optó por dicha vía. Nos estamos refiriendo a los carmelitas y a la destacada figura de Santa Teresa de Jesús, y a la Compañía de Jesús (30). Por otra parte, la adopción de la familia Quiroga de este tipo de religiosidad se debe entender como una herencia de su "isabelismo" (31).

1.2. Los años de estudio

En este contexto político y religioso nacía Gaspar de Quiroga y Vela, en Madrigal de las Altas Torres el 13 de enero de 1512 (32). Nuestro personaje

(30).- M.ANDRES, Pensamiento teológico..., pp, 20-23; Idem, Los Recogidos. Nueva visión de la mística española (1500-1700). Madrid 1975, pp, 21-35; V.BELTRAN DE HEREDIA, Las corrientes de espiritualidad entre los dominicos de Castilla durante el siglo XVI. Salamanca 1941, passim; E.COLUNGA, "Intelectuales y místicos en la Teología española del siglo XVI" Ciencia Tomista 9 (1914), pp, 212-213.

(31).- En torno a la diferenciación de las distintas facciones políticas desde el punto de vista religioso, véase, J.MARTINEZ MILLAN, op. cit., pp, 119-120.

(32).- Si bien la fecha de su nacimiento ha sido establecida con gran precisión respecto al día, martes 13 de enero, no sucede de igual manera en cuanto al año en que se produjo. Son varios los autores que afirman que Gaspar de Quiroga vio la luz en 1500 (P.SALAZAR Y MENDOZA, op. cit., p, 287: "Nació en la villa de Madrigal de el Obispado de Avila, Martes a trece días de el mes de Enero, octavo de la Epifanía, año de mil y quinientos y doze, a las tres horas antes de amanecer. Otra opinión es que nació el año de mil y quinientos, aquel día de trece de Enero, y no me descontenta, porque siempre crey que andava con el año". En el mismo sentido se expresa el autor anónimo del "Memorial de algunas cosas insignes y excelentes virtudes de el Exmo y Rmo señor cardenal D.Gaspar de Quiroga..." (BNM, Ms. 13044, fol 128r); A.GARCIA ZURDO, op. cit, p, 95); Otros autores han fijado el mismo de forma estimativa, calculando su venida al mundo en torno a 1507 (Biografía Eclesiástica Completa. Madrid 1864, Vol. XIX, p, 1204); Sin embargo, en los Anales del Colegio de Santa Cruz de Valladolid, quedó registrado que, cuando en 1536 fue admitido en dicha institución, contaba veintisiete años, lo que situaría su nacimiento en 1509 (BSCV, Ms. n.º 16, fol 141r). Por otra parte, son más numerosos aquellos que aceptan el año 1512 como dato más fidedigno (véase, por ejemplo, M.LOPEZ, Memorias históricas de Cuenca. Madrid 1949, I, p, 241; T.MUÑOZ SOLIVA, Noticias de todos los Illmos señores obispos que han regido la diócesis de Cuenca. Cuenca 1860, p, 207), puesto que, cuando se produjo su óbito en 1594, quedó reflejado en su epitafio que contaba con ochenta y dos años en el momento de su muerte. El mismo, hoy destruido, aparece recogido en: G.GONZALEZ DAVILA, Teatro eclesiástico de las Iglesias Metropolitanas y catedrales de los reinos de las dos Castillas. Madrid 1645, I, p, 491. Sin embargo, este dato tampoco permite zanjar la cuestión, dado que se fijaba como día de su muerte el 20 de octubre, cuando la misma se produjo en el mes de noviembre. Este error nos conduce a pensar que, es posible que, como dicen otros autores, Gaspar de Quiroga no tuviese ochenta y dos años sino ochenta y cinco en el momento de su fallecimiento, lo que nuevamente situaría su fecha de nacimiento de 1509 (J.LOPEZ DE AYALA Y ALVAREZ DE TOLEDO, Conde de Cedillo, Toledo en el siglo XVI después del vencimiento de las Comunidades. Madrid 1901, p, 130 n.110). De esta misma contradicción se hace eco, M.BOYD, Cardinal Quiroga. Inquisitor General of Spain. Dubuque, Iowa, 1954, p, 133 n.7. Por nuestra parte, dados los

fue hijo de Alvaro de Quiroga, hidalgo y regidor de Bercial. Mucho menos conocida y significada socialmente fue la familia materna: Alvaro de Quiroga se casó con Elena Muñoz Vela, hija de Diego Vela y de Isabel González Girón, oriundos de esta zona (33). Este matrimonio trajo al mundo una prolífera progenie compuesta por nueve hijos. Además de Gaspar, que ocupaba uno de los últimos lugares en esta descendencia, la misma la compusieron otros tres varones: el primogénito, Rodrigo, que jugó un importante papel en la promoción del joven Gaspar, como referiremos más adelante (34); Juan de Quiroga, que tuvo un destacado lugar a lado de don Juan de Austria, a quien sirvió como secretario desde la instauración de su Casa, en 1560, hasta el día de su muerte, acaecida en septiembre de 1569, contando con un gran ascendiente sobre el hermano de Felipe II y con el apoyo y amistad de Luis de Requesens (35). Y, por último,

infructuosos resultados de la investigación desarrollada en el Archivo Diocesano de Avila con el fin de localizar la partida bautismal de Gaspar de Quiroga, hemos decidido transmitir el dato más comunmente aceptado. Consultados los primeros libros de bautismo, tanto de la iglesia de San Nicolás de Bari como de Santa María del Castillo, ambas sitas en la localidad de Madrigal, hemos constatado que el registro se inicia en fechas posteriores a los años en que se produjo su nacimiento, comenzando los mismos en 1534 y 1523 respectivamente. Sin embargo, podemos afirmar, en contra de la opinión de Maurice Boyd, que Gaspar de Quiroga fue bautizado en la segunda de ellas, a la que él mismo como sus padres estaban adscritos como parroquianos (AHN, Clero, leg. 589, carp. 25 (s.f.).

(33).- BSCV, Ms. n°16, fol 141r-v; Hay varios autores que confunden el apellido de su madre, a la que llaman Elena Vélez (T.MUÑOZ SOLIVA, op. cit., p. 207; J.P.MARTIR RIZO, Historia de la muy noble y leal ciudad de Cuenca. Barcelona 1974, p. 192). En torno a la genealogía de Gaspar de Quiroga, véase, BNM, Ms. 3451 (ROBLEDA, Genealogía del Cardenal Quiroga); J.B.WARREN, Vasco de Quiroga y sus hospitales-pueblo de Santa Fe. Universidad Michoacana 1977, pp. 11-13).

(34).- Rodrigo de Quiroga contrajo matrimonio con Eustaquia de Rivera, quien otorgó testamento el 12 de octubre de 1533 (AHPA, Protocolos notariales, n° 3740). Perteneció a la cofradía de Santiago de la iglesia de San Nicolás de Madrigal, interviniendo en la aprobación de las ordenanzas de la misma en 1529 (ADA, Madrigal de las Altas Torres. Parroquia de San Nicolás. Libro de Ordenanzas y Aprobación de la Cofradía de Santiago). Se casó en segundas nupcias con Mencia de Zúñiga, quien a su vez se unió a Pedro de Rivera, caballero de la Orden de Santiago y Capitán General de caballos (AHN, Consejos, leg. 5310, 4ª pieza, fol. 15v).

(35).- Juan de Quiroga se casó con Teresa de Villarroel, natural de Fresno el Viejo, población en la que tuvo ciertos problemas en relación con sus derechos de hidalguía. Sobre dicho pleito, véase, ACHV, Sala de Hijosdalgos, leg 12, n° 15. De este matrimonio nacieron cinco hijas. Tres de ellas, como hemos señalado, fueron religiosas en el convento de Nuestra Señora de Gracia: Elvira, que profesó entre 1526 y 1533, y sus hermanas Ana y María, esta última nacida en 1540, tomando ambas el hábito en 1554, recibiendo cada una de ellas una dote de ciento quince mil maravedies. Completaban esta descendencia Isabel, nacida en 1539 (ADA, Madrigal de las Altas

Vasco de Quiroga, quien emprendió la carrera de soldado, muriendo muy joven en el desempeño de su oficio en América (36). De esta unión también fueron vástagos, María de Quiroga, quien contrajo matrimonio con Francisco Fernández de Alderete (37). María de Quiroga otorgó testamento en Simancas el 30 de marzo de 1543, favoreciendo en el mismo, además de a la iglesia de Santa María del Castillo de Madrigal y a los pobres de la localidad, a sus hermanos menores, entre los que se encontraba Gaspar de Quiroga, quien actuó como testamentario, y las dos hermanas de ambos que habían profesado como religiosas en el monasterio de Nuestra Señora de Gracia (38). Son muy pocas las noticias que tenemos de estas a excepción de sus nombres. La mayor de ellas se llamaba Isabel, e ingresó en el convento en 1512. La menor era Juana Angela, quien tomó el hábito en 1537, cuando ya habían fallecido sus padres, por lo que la dote fue otorgada por sus hermanos Juan y Gaspar en febrero de 1536, establecida en dieciocho aranzadas de viña en Madrigal. La prole la completaban Constanza de

Torres. Libro 1º de bautismos de Santa María del Castillo, fols. 10r, 13v), y Elena, de cuya vinculación con Santa Teresa de Jesús nos ocuparemos posteriormente. En torno a la labor de Juan de Quiroga como secretario de don Juan de Austria, véase, C.M.ABAD, Doña Magdalena de Ulloa. La educadora de Don Juan de Austria y la fundadora del Colegio de la compañía de Jesús de Villagarcía de Campos (1525-1598). Santander 1959, p. 39; M.FERRANDIS, Don Juan de Austria, paladín de la Cristiandad. Zaragoza 1939, p. 108; A.OSSORIO, Vida de Don Juan de Austria. Madrid 1946, p. 33. En cuanto a la amistad que le vinculó a Luis de Requesens, actuando en ocasiones como intermediario de la comunicación entre éste y Diego de Espinosa, véase, J.M.MARCH, La embajada de Don Luis de Requesens en Roma por Felipe II cerca de Pio V. Madrid 1950, pp. 109-116 y 199; IVDJ, envío 62 (caja 83) nº 180; J.LOPEZ DE TORO, "Epístolas de Juan Verzosa" Clásicos Españoles, II, Madrid 1945, pp. 115-116.

(36).- AHN, Consejos, leg. 5310, 4ª pieza, fols. 15v-16r.

(37).- De esta unión nacieron cinco hijos: el licenciado Alvaro de Alderete, oidor de la Chancillería de Valladolid, que casó con Juana Ortiz de Villaseñor, hermana del licenciado Ximénez de Ortiz, perteneciente al Consejo Real; el licenciado Pedro de Quiroga, inquisidor del tribunal del Santo Oficio de Valladolid; Juan de Alderete, que contrajo matrimonio con Isabel Sarmiento, y que también fue oidor en dicha chancillería; Fray Diego de Alderete, perteneciente a la Orden de Santo Domingo y profeso en el convento de San Esteban de Valladolid, y Catalina Alderete, monja en el monasterio de la Huelgas de la misma ciudad (RAH, "Salazar" D-31, fol. 130r; AHN, Consejos, leg. 5310, 4ª pieza, fols. 16r-v).

(38).- Una copia del testamento de María de Quiroga se encuentra en: *ibid*, fols. 39v-74r. En torno a un pleito que esta mantuvo sobre un censo contra Alonso Pérez de Bivero, véase, *ibid*, Osuna, leg. 1696, nº 6.

Quiroga, que contrajo matrimonio con Alvaro de Ulloa (39), y Agustina de Quiroga, que se casó con Alonso de Guzmán y Zuazo (40). Gaspar de Quiroga dispensó, desde las altas instancias que ocupó, una gran protección a su familia, especialmente sobre sus sobrinos, a los que no dudó en patrocinar, siendo su predilecto Alvaro de Quiroga, hijo de su hermana Agustina.

Son pocas las noticias que tenemos respecto a sus años de infancia. Aprendió las primeras letras en la casa paterna, entrando, posteriormente, a servir como paje de Juana la Loca, ayudando en las misas que se celebraban en su capilla (41). Fue dicha reina quien sustentó la exigua beca que le permitió iniciar sus estudios en Salamanca (42). Si bien el linaje de los Quiroga era rico en cuanto a ilustres hijos, carecía de medios económicos, engrosando las filas

(39).- El linaje de los Ulloa, asentados en la población de Toro (Zamora), estaba relacionado familiarmente con el Cardenal Diego Deza y, por consiguiente, con Juan Pardo de Tavera, su sobrino, quien también, al igual que los Quiroga, tenía una procedencia gallega (A.COTARELO Y VALLEDOR, Fray Diego Deza. Ensayo biográfico. Madrid 1905, pp, 20-22; J.J.HEALY, Juan de Tavera and his leadership in Castilian diplomacy concerning some imperial issues. 1527-1531. Saint Louis University, Ph. D., 1973, p, 6). Este matrimonio tuvo una hija, María, que fue la esposa de Diego de Monsalve, caballero de Calatrava y con fama de valiente soldado. De esta unión nacieron seis hijos, algunos de los cuales encontraron la muerte prematuramente en combate. De esta descendencia destacan el canónigo de la iglesia de Toledo Alvaro de Quiroga, y el también canónigo y obrero mayor de la misma Francisco de Monsalve (AHN, Consejos, leg. 5310, 4ª pieza, fol. 17r); Antonia, que se desposó con Alonso Ruiz de Medina, sobrino del comendador mayor y regidor de Madrigal. Tuvieron cuatro hijos: Francisco, nacido en 1562, al que apadrinaron Juan de Quiroga y su hija Elena; María de Quiroga (1563-1586), que estuvo casada con Pedro Manuel, Gonzalo Ruiz de Medina, que fue paje real y ostentó el hábito de Calatrava, e Isabel, monja en Madrigal (ADA, Madrigal de las Altas Torres. Libro de bautismos de la iglesia de San Nicolás de Bari, fol 53r y 77r; AHPA, Protocolos notariales, nº 3749, fol 102).

(40).- De este matrimonio fueron hijos: Fray Tomás de Guzmán, provincial de la Orden de Santo Domingo, Tomás de Quiroga, rector del Colegio de San Bartolomé en Salamanca, Alvaro de Quiroga, que se casó con María Estrada, fue caballero de Felipe II y de la Orden de Santiago; María de Quiroga, Juliana de Guzmán, monja en el convento de Santa Catalina de Sena en Valladolid, Tomás de Guzmán, profeso en el monasterio de San Pablo en dicha ciudad, y Elena Zuazo, beata monja del convento de Santa Isabel de la Cruz en Olmedo (AHN, Consejos, leg. 5310, 4ª pieza, fols. 17r-v. En el mismo aparecen recogidas copias de los testamentos de Alonso de Guzmán (fols. 81v-91r) y de Agustina de Quiroga (fols. 102r-110r).

(41).- J.ROMAN DE LA HIGUERA, op. cit., fol 179. El cronista afirma que, durante esta época como paje, Gaspar de Quiroga estuvo a punto de morir ahogado en el Duero.

(42).- Parece que la modestia en los hábitos a la que se acostumbró durante estos años le acompañó el resto de su existencia, aun cuando llegó a ser uno de los hombres más ricos en el reinado de Felipe II (G.MARAÑÓN, Obras Completas. Madrid 1982, VI, p, 123).

de la hidalguía pobre castellana.

Aunque el joven Gaspar es presentado por los cronistas como un aplicado y buen estudiante, no parece muy acorde a esta imagen su ingreso en un Colegio Mayor de reciente creación en 1531 como era el de San Salvador de Oviedo (43), donde ganó la oposición de una beca canonista vacante, obteniendo el grado de bachiller en ambos derechos (utroque iure) en 1532 (44). De igual manera, contribuye a desmentir esta calificación lo sucedido el 26 de julio de 1534, cuando concurrió a otra prebenda canonista en el Colegio de Santa Cruz de Valladolid, vaca por la promoción del doctor Fernando Gálvez a una plaza de oidor en la Chancillería de Granada. Gaspar de Quiroga no logró su pretensión, lo que tuvo además como consecuencia que perdiese la asignación que ostentaba en la institución salmantina, puesto que, en las ordenanzas de la misma, estaba estipulada la prohibición de opositar a cualquier otro colegio durante el periodo en que se podía gozar de esta (45). Sin embargo, este

(43).- Desde este colegio salmantino se trasladó a Valladolid, y no al contrario, como lo refieren, T.MUÑOZ SOLIVA, op. cit., p, 208; A.ORIVE, DHEE Madrid 1973, III, p, 2041; Por otra parte, los pocos años de vida de esta institución, que había sido fundada en 1521-22, comenzando a admitir alumnos desde 1524, nos lleva a pensar que el ingreso no debía revestir demasiada dificultad. En torno a dicho colegio, véase, A.M.CARABIAS TORRES, Colegios Mayores: centros de poder. Los Colegios Mayores de Salamanca durante el siglo XVI. Salamanca 1986, I, pp, 102-110 y II, pp, 433-443.

(44).- S.ZAVALA, op. cit., p, 247, transcribe el acta de bachillerato de Gaspar de Quiroga, que según dicho autor se encuentra en AUS, Libro de Grados n° 542, fol 82, así como la probanza de cursos, registrada en los folios 82v-83 del mismo documento. Por un Breve fechado el 16 de octubre de 1531 se había dado autorización a Gaspar de Quiroga, bachiller en Leyes, para que pudiese ser también promovido a semejante titulación en Cánones "sin dar cumplimiento a todos los requisitos de la constitución" (V.BELTRAN DE HEREDIA, Bulario de la Universidad de Salamanca (1219-1549). Universidad de Salamanca 1966, III, pp, 259-260, doc. n° 1330).

(45).- BSCV, Ms. n° 16, fol 141v-142r; BNM, Ms. 13044, fol. 128r. Desconocemos los motivos que impulsaron a Quiroga a intentar su ingreso en el colegio vallisoletano siendo becario en el de San Salvador de Oviedo, puesto que el prestigio de las universidades de Valladolid y Salamanca como centros de enseñanza era perfectamente equiparable. M.BOYD mantiene que adoptó esta decisión por consideraciones económicas, dado que la realización de los estudios en Valladolid era considerablemente más asequible que su desarrollo en Salamanca (op. cit., p, 5). Si bien esta cuestión pudo tener su influencia ante el pobre estado económico familiar, nosotros nos inclinamos a pensar que la preferencia de Quiroga estuvo determinada por las relaciones que podía adquirir durante su estancia, importantes para su proyección futura, sobre todo en la referida a la familia Mendoza, así como por seguir la estela de su tío, Vasco de Quiroga.

contratiempo no le hizo cejar en su empeño y, al quedar libre otra plaza de becario canonista, volvió a repetir sus exámenes el 7 de mayo de 1535, consiguiendo, en esta ocasión, el ansiado ingreso en el colegio de Santa Cruz el 25 de julio de 1536, ocupando la plaza del bachiller Francisco de Urbaneja. Al año siguiente se licenció en Cánones, pasando, el 13 de abril de 1538, a ocupar la cátedra de Vísperas de Leyes, tras la renuncia que de ella había hecho Juan Vázquez (46).

La función de los colegios mayores consistía, principalmente, en la formación de letrados para el abastecimiento de las instituciones de la Monarquía. Estos colegiales, pertenecientes en su mayoría a familias hidalgas, acudían a las universidades de Salamanca y Valladolid a cursar sus estudios de Derecho como medio para medrar socialmente, pues finalizados los mismos, pasaban a prestar sus servicios en los distintos organismos e instancias administrativas, avalados por el prestigio de los conocimientos adquiridos y por el apadrinamiento de algún patrón cortesano. En este sentido, los colegios se convirtieron en verdaderos centros de poder. Especialmente cotizados eran aquellos que, como Quiroga, desempeñaban funciones en la enseñanza universitaria. Esto dio lugar a la aparición de grandes dinastías de letrados, familias que debían su relevancia social a este funcionamiento promocional, así como a la creación de un sentimiento de "casta". Además de las relaciones familiares y personales, existía entre los colegiales de una misma institución una solidaridad cimentada en la percepción de una educación común, que se traducía en un apoyo prestado entre los condiscípulos cuando se debía elegir un nuevo miembro en cualquier organismo de la Monarquía. La integración de Gaspar de

(46).- Quiroga sólo disfrutó la mitad de los frutos de dicha cátedra al no estar instruido en los Estatutos de la universidad, por lo que recibía el nombre de cátedra de Media Multa (S.ZAVALA, op. cit., p. 99; M.ALCOCER MARTINEZ, Historia de la Universidad de Valladolid. Valladolid 1918, III, pp. 157 y 407; J.DE REZABAL Y UGARTE, Biblioteca de los escritores que han sido individuos de los seis Colegios Mayores. Madrid 1805, p. 289; F.J.GARMA Y DURAN, Theatro Universal de España. Barcelona 1751, IV, p. 64; IVDJ, envío 90, fol. 702 n° 15). Aunque varios de estos autores afirman que Gaspar de Quiroga obtuvo el grado de doctor en esta fecha, parece claro que no ostentó esta categoría hasta su marcha a Roma para servir en el tribunal de la Sacra Rota. Prueba de ello es que siguió anteponiendo a su nombre, hasta ese momento, la titulación de licenciado (BSCV, Ms. n° 16, fol 142r-v).

Quiroga en la vida del Colegio de Santa Cruz, con lo que, según hemos visto, ello conllevaba, y la asunción de estos preceptos sociales fue manifiesta a lo largo de su vida (47).

Durante los años que permaneció en dicha institución, Quiroga actuó como oidor en la Chancillería de Valladolid, lo que le permitió comenzar a labrar la gran reputación que alcanzó como hombre de leyes (48). En esta ciudad permaneció hasta 1540, cuando sus servicios fueron requeridos por Juan Pardo de Tavera, quien le nombró vicario general del arzobispado de Toledo en Alcalá de Henares. La elección que hizo el Cardenal Tavera del joven Gaspar estuvo inducida por la estrecha relación que unía al mismo con Madrigal de las Altas Torres y con varios miembros de la familia Quiroga (49). La ocupación de los altos cargos de la Monarquía por parte de los miembros del "partido

(47).- En torno al tema de los colegios mayores como centros de poder y al encastamiento de los letrados, véase, R.L.KAGAN, Universidad y sociedad en la España Moderna. Madrid 1981, pp, 137-140; A.M.CARABIAS TORRES, op. cit., II, pp, 913-932; D.DE LARIO, "Une expérience manquée: la creation à Bologne de la première bureaucratie moderne espagnole" Melanges de la Casa de Velázquez 17 (1981), pp, 223-232; M.A.SOBALER SECO, Los Colegiales Mayores de Santa Cruz (1484-1670). Una élite de poder. Junta de Castilla y Leon 1987, pp, 225-236. Sobre la promoción que Quiroga hizo de los colegiales de Santa Cruz, esta autora afirma que: "En 1575 el arzobispo de Toledo, Gaspar de Quiroga, antiguo colegial de Santa Cruz, nombró provisor de Cuenca, obispado dependiente de la sede toledana, a Juan de Obregón; en 1578 y 1583 "sacaría" del Colegio a Francisco de Espinosa y a Alonso Anaya Pereira, respectivamente, concediéndoles sendos canonicatos; en 1590 llamó a Juan Vigil de Quiñones para que formara parte de su Consejo de la Inquisición de Toledo" (p, 233); Su solidaridad con sus compañeros de Colegio también es señalada por el cronista J.ROMAN DE LA HIGUERA, op. cit., fol 179; Por otra parte, "su agradecimiento a cualquiera que hubiese servido o beneficiado fue grande; por eso como colegial de Santa Cruz, fundación del Gran Cardenal Mendoza, favoreció mucho a todos los Mendozas" (BNM, Ms. 13044, fol. 133v).

(48).- Según M.A.SOBALER SECO algunos miembros de Santa Cruz sirvieron dicho oficio en la Chancillería sin renunciar a su colegiatura durante la primera mitad del siglo XVI, siendo esta práctica habitual en la segunda mitad de la centuria (op. cit., p, 232); P.SALAZAR Y MENDOZA, op. cit., p, 242; G.GONZALEZ DAVILA, op. cit., I, p, 488. Sobre el funcionamiento de dicha institución, véase, M.A.VARONA GARCIA, La Chancillería de Valladolid en el reinado de los Reyes Católicos. Valladolid 1959; M.S.MARTIN POSTIGO, Los presidentes de la Real Chancillería de Valladolid. Valladolid 1982.

(49).- Juan Pardo de Tavera vivió desde su más tierna infancia en Madrigal de las Altas Torres (P.SALAZAR Y MENDOZA, Crónica del Cardenal don Juan de Tavera. Toledo 1603, p, 4; F.DE PISA, Descripción de la imperial ciudad de toledo. Toledo 1605 (Edición facsímil 1974), p, 252).

fernandino", y la erección de Tavera como un gran patrón cortesano, se tradujo para los Quiroga en la obtención de diversos puestos. La amistad entre Vasco de Quiroga, tío de Gaspar, y Tavera queda constatada al menos desde su época de estudiante, cimentándose después a través de diversos personajes, como Pedro González Manso, obispo de Badajoz, o Bernal Díaz de Luco (50). Sin embargo, parece que esta promoción se debió sobre todo a los oficios que, encaminados a esta finalidad, hizo el hermano mayor de Gaspar, Rodrigo, que desempeñaba el cargo de tesorero al lado del Cardenal desde 1532 (51). Así pues, en 1540, Gaspar de Quiroga comenzó a dar sus primeros pasos en la vida administrativa a la sombra de Juan Pardo de Tavera.

(50).- F.MIRANDA GODINEZ, Don Vasco de Quiroga...., p. 27; A.ZURDO GARCIA, op. cit., p. 67; S.ZAVALA, op. cit., pp. 100-102 y 256-257; C.HERRERON PEREDO, Información en Derecho del licenciado Quiroga sobre algunas provisiones del Real Consejo de Indias. México 1985, p. 13. Estos autores afirman que Tavera influyó decisivamente en su nombramiento como oidor en la Audiencia mexicana; J.B.WARREN, op. cit., pp. 22-27, mantiene, basándose en la narración realizada por Cristobal de Cabrera, que Carlos V ofreció a Vasco de Quiroga a través de Tavera varias alternativas para su futuro: el gobierno de una provincia española, una plaza de inquisidor, algún puesto relacionado con la conversión de judíos, o bien, un oficio en Nueva España, siendo el propio Vasco de Quiroga quien eligió esta última opción.

(51).- El importante papel desempeñado por Rodrigo de Quiroga en el impulso a la carrera administrativa de su hermano ha sido puesto de manifiesto por diversos autores (M.BOYD, op. cit., p. 7; J.ROMAN DE LA HIGUERA, op. cit., fol 179; BSCV, Ms. n° 16, fol 142r; F.DE PISA, op. cit., p. 267; S.ZAVALA, op. cit., p. 100).

CAPITULO 2

2. BAJO EL PATRONAZGO DEL CARDENAL TAVERA (1540-1545)

Muy pocos hubieran podido vaticinar el gran poder que años después adquiriría Juan Pardo de Tavera cuando, a principio de 1506, el Inquisidor General Diego Deza se acercó a Salamanca para convencerle de que aceptase el nombramiento de consejero de Inquisición (1). Por aquella época, Tavera, que había nacido en Toro en el año 1472, era un joven y prometedor profesor en la universidad de Salamanca, cuya fama en el mundo académico le auguraba escalar a altos puestos. Por el contrario, su tío, Diego Deza, miembro cualificado del "partido aragonés o fernandino" (2), acompañaba al Rey Católico, después de haber celebrado cortes en Toro (1505), en un intento desesperado de dicho grupo por seguir en el poder, para lo que le juraron "gobernador perpetuo de los Reynos" (3). De nada valieron tales argucias políticas al "partido aragonés", pues en abril de 1506, Felipe el Hermoso desembarcaba, junto a su esposa Juana, en La Coruña con la pretensión de gobernar Castilla, constituyendo uno de los objetivos inmediatos del nuevo gobierno la destitución del Inquisidor General, Diego Deza, y la supresión de la institución inquisitorial (4). Malas perspectivas se le ofrecían a un joven con futuro, como era Tavera, cuando Deza

(1).- A.COTARELO Y VALLEDOR, op. cit., pp, 117-118 y 212; P.SALAZAR Y MENDOZA, Crónica del Cardenal don Juan de Tavera. Toledo 1603, p, 18.

(2).- M.GIMENEZ FERNANDEZ, Bartolomé de las Casas, I, pp, 13-18; Sobre la composición del "partido aragonés", véase, J.MARTINEZ MILLAN, "Las élites de poder durante el reinado de Carlos V a través de los miembros del Consejo de Inquisición (1516-1558)", Hispania 48 (1988), pp, 116-119.

(3).- L.PADILLA, Cronica de Felipe I llamado el Hermoso. CODOIN, VIII, pp, 121-122.

(4).- Sobre el tema, véase, J.MARTINEZ MILLAN, "Las élites de poder durante el reinado de Carlos V..." pp, 128-131.

lo nombró consejero de Inquisición (1506); con todo, fiel a las súplicas de su tío y al grupo político aragonés, en el se hallaba inserto, aceptó el cargo.

Como era fácil de suponer, una vez que Juana la Loca fue proclamada reina de Castilla y que Felipe el Hermoso comenzó a gobernar, por incapacidad de su esposa, Diego Deza y los miembros del Consejo de Inquisición fueron destituidos, por lo que Tavera tuvo que retirarse bajo la sombra de su tío al arzobispado de Sevilla en cuya catedral le dió una canonjía (5). La inesperada muerte de Felipe el Hermoso permitió al rey Fernando y a su "partido aragonés" controlar de nuevo los principales cargos de la administración central de la Monarquía (6). Tavera experimentó al poco tiempo estos cambios políticos: en 1513 era nombrado visitador en la Chancillería de Valladolid, premiándole al mismo tiempo con la mitra de Ciudad Rodrigo y después con la de Osma (7). Tras la nueva situación sociopolítica que resultó de la revuelta Comunera, Tavera, decidido partidario del Emperador, ascendió a los más altos puestos de la administración central castellana. En 1523 era nombrado presidente de la Chancillería de Valladolid equiparándole con otro cargo eclesiástico a través del ascenso al arzobispado de Santiago. Poco tiempo estuvo en Valladolid, pues, al año siguiente era designado presidente del Consejo de Castilla, cargo que desempeñó hasta 1539 en que fue nominado Inquisidor General (8). Para estas fechas, Carlos V ya le había nombrado miembro del Consejo de Estado, en 1529, y el papa le había concedido el arzobispado de Toledo junto al título de cardenal (9).

El prodigioso encumbramiento que, después de las Comunidades, tuvo

(5).- P.SALAZAR Y MENDOZA, Crónica..., pp, 55-56 y 61.

(6).- Cf. M.GIMENEZ FERNANDEZ, Bartolomé de las Casas, I, cap. 1º.

(7).- Sobre su labor en Osma, J.LOPERRAEZ CORVALAN, Descripción histórica del obispado de Osma. Madrid 1978 (Ed. facsímil), I, pp, 401-404.

(8).- Cf. P.SALAZAR Y MENDOZA, op. cit., pp, 75-76; M.S.MARTIN POSTIGO, op. cit., pp, 38-39.

(9).- AHN, Microfilm, caja 1579.

Tavera en el gobierno de Castilla era signo inequívoco de la confianza que el Emperador había puesto en él, que culminó cuando, tras la muerte de la Emperatriz, le dejó como regente de los reinos peninsulares entre 1539 y 1543. Fue durante estos años cuando se alzó como un gran patrón cortesano hasta el punto de formar un cohesionado "grupo político", integrado en su mayor parte por jóvenes letrados a los que promocionó a las distintas instituciones de la Monarquía. Dentro de este grupo se encontraba Gaspar de Quiroga (10).

El primer cargo que Tavera le asignó al joven Quiroga fue el de vicario general del arzobispado de Toledo en Alcalá de Henares (11). La colaboración con su protector le llevó a realizar sus primeras labores inquisitoriales, aunque no contase con unos poderes específicos para realizar dicha función (12). Sin embargo, durante su periodo de estancia en Alcalá,

(10).- Según P.SALAZAR Y MENDOZA, op. cit., pp, 82-83, el mismo estaba compuesto, además de por Gaspar de Quiroga, por: "El licenciado Pedro Ponce de León, presidente de su consejo, obispo de Plasencia, Inquisidor General. El licenciado Pedro de la Gasca, su vicario general de Toledo y después obispo de Sigüenza. Don Diego Tavera, primer administrador de su hospital, obispo de Jaen, capellán mayor de la reina doña Isabel, tercera mujer del Católico don Felipe II. Don Gerónimo Suárez, obispo de Badajoz, presidente de su Real Consejo de Hacienda. El doctor Bernal, obispo de Calahorra. El licenciado Alba y Esquivel, obispo de Córdoba, presidente de la Chancillería de Granada. Diego de Guzmán de Silva, también administrador, embajador en Inglaterra y Venecia, cardenal de la Santa Iglesia de Roma"; En el mismo sentido, véase, L.ZAPATA, Miscelanea (Varia Historia). Edición facsímil, Badajoz 1983, I, fol 203-204.

(11).- En carta que Gaspar dirigió a su hermano Rodrigo, fechada en Valladolid el 20 de diciembre de 1540, le comunicaba dicho nombramiento, añadiendo que: "Si Alvaro de Quiroga fuera vivo no hiciera más por mí...estimo más que si se me hiciera oidor de esta audiencia" (J.B.WARREN, Vasco de Quiroga y sus hospitales-pueblo de Santa Fe, p, 25).

(12).- Las atribuciones que Quiroga tenía como vicario general estaban referidas a la jurisdicción eclesiástica ordinaria (F.DE PISA, Descripción de la imperial ciudad de Toledo, fol 267v; M.BOYD, op. cit., p, 7), pero no gozaba de facultades apostólicas inquisitoriales. Así, el 2 de julio de 1541, Gaspar de Quiroga dirigía una carta a la Suprema: "Información contra micer Nicolás Griego estante en la Corte. Muy Illes y muy Magnificos Señores. Yo puse diligencia en hacer lo q vra S. me embio a mandar faceria de tomar el dicho Antº hrez, su deposición embio cerrada y sellada con esta como vra S. vera, y si esto o en otra cosa ay en esta como vra jurisdicción q hazer vra S. me mande avisar porq se cumpla luego, yo he hecho buscar aquellos moriscos, y no se halla rastro dellos, nro Sor la muy illes y muy Magcas personas de vra S. en estado y casa acrecente por muchos años en su serviº, en Alcala a 2 de julio. Muy Illes y muy Magcos Ses Besa las manos de vras su mas obediente subdito y servidor. El lido Gaspar de Quiroga" (AHN, Inq., leg. 42, exp. 31, fol 4. Esta carta aparece incluida en el proceso que el tribunal inquisitorial de Toledo seguía contra Nicolás Griego en 1541, acusado de blasfemias. En Ibid., fol 5, se encuentra la deposición de Antonio Hernández firmada por Quiroga, Antonio Dávila y el notario Sangulo). Dicha epístola ha sido transcrita en francés por J.P.DEDIEU, L'administration de la Foi. L'Inquisition de Tolède

además de las obligaciones inherentes a su cargo, sus esfuerzos se centraron principalmente en fomentar y orientar la activa vida cultural de la ciudad, al mismo tiempo que establecía una relación con la Compañía de Jesús que mantuvo a lo largo de toda su existencia.

La aportación de Quiroga al desarrollo cultural alcalaíno quedó reflejado a través del apoyo que prestó a diversos autores, todos ellos relacionados más o menos intensamente con su "grupo político", a través de la supervisión y respaldo que realizó de sus obras. Así, en mayo de 1541 dio su aprobación al libro del jerónimo Alonso de Guadalupe, Beatissimi Doctoris Hieronymi Apotheosis: ac beati Agustini Hipponensis Episcopi historia (13). También acudió a Quiroga, en busca de su beneplácito, el doctor Fernando Gómez Arias de Tavera, perteneciente a la familia del arzobispo de Toledo, quien en dicho año había terminado sus comentarios a las leyes de Toro. La fama adquirida como experto en Derecho y la alta dignidad que ocupaba motivaron al escritor a poner en sus manos el manuscrito para que el vicario general lo corrigiese. Finalmente, el libro vio la luz en 1542, conteniendo una dedicatoria a Juan de Tavera y el agradecimiento a Gaspar de Quiroga (14). Asimismo, la reforma espiritual que este "grupo político" quería implantar se vió reflejado en la publicación de Aviso de Curas, escrito por Juan Bernal Díaz de Luco, configurado como manual de instrucción de clérigos y de enseñanza para los cristianos en general, que se publicó, por orden del protector de ambos, el Cardenal Tavera, en 1543 y que Quiroga prologó. Además de esta relación, unía al vicario general y a Bernal Díaz de Luco, miembro del Consejo de Indias, otra vinculación a la que ya hemos hecho referencia: la amistad que existía entre éste y el tío de Gaspar,

XVI- XVIII siècle. Madrid 1989, p, 178.

(13).- J.MARTIN ABAD, La imprenta de Alcalá de Henares (1502-1600). Madrid 1991, pp, 483-485 n° 321.

(14).- Ibid, pp, 496-498 n° 328A; J.CATALINA GARCIA, Ensayo de una tipografía complutense. Madrid 1889, p, 68 n° 187; BSCV, Ms. n° 16, fol 142v.

Vasco de Quiroga (15). Por último, durante esta etapa, otorgó su licencia, tras someterla a examen, a la obra de Pedro Nuñez de Avendaño, Aviso de Cazadores y de Caza, impresa en diciembre de 1543. La misma estaba dedicada a Iñigo López de Mendoza, tercer marqués del Infantado, marqués de Santillana y conde de Saldaña (16).

En cuanto a sus primeros contactos con los miembros de la Compañía de Jesús, tuvieron como origen la llegada a España de Pedro Fabro en 1541. Era una persona muy cercana a Ignacio de Loyola, quien aseguraba que nadie como Fabro impartía los Ejercicios Espirituales (17). Después de visitar varias ciudades, Zaragoza, Medinaceli y Guadalajara en concreto, Fabro llegó a Alcalá de Henares. El 27 de octubre de dicho año dirigió una carta a San Ignacio en la que narraba su periplo por estas localidades, así como los contactos que había establecido. Señalaba la increíble amistad que había trabado con el vicario general de la población complutense, entablándose una confianza, por parte de Quiroga, que Fabro definía como la existente con un confesor, mostrado su deseo de efectuar los Ejercicios. Según narraba el jesuita, el conocimiento entre ambos se produjo cuando, una vez en Alcalá, quiso celebrar misa en San Justo. El sacristán advirtió que, para poder acceder a sus deseos, era necesaria la autorización del vicario general, a quien Fabro fue a visitar para obtener su licencia. Durante la conversación, trataron sobre el fundador de la Compañía y sus primeros seguidores, de los que Quiroga demostró tener noticia. El entusiasmo del vicario se fue incrementando, permitiendo que Fabro realizase los oficios religiosos, citándole inmediatamente después en su casa para comer

(15).- S.ZAVALA, op. cit., p, 101; J.MARTIN ABAD, op. cit., pp, 509-510; J.CATALINA GARCIA, op. cit., p, 70 n° 194; C.PEREZ PASTOR, La imprenta de Medina del Campo. Junta de Castilla y León 1992, pp, 406-407; T.MARIN MARTINEZ, "El obispo Juan Díaz de Luco y su actuación en Trento" Hispania Sacra 7 (1954), p, 259.

(16).- Ya hemos señalado la vinculación que unió a Gaspar de Quiroga y a la familia Mendoza tras su paso por el colegio de Santa Cruz de Valladolid. Sobre dicho libro, véase, J.MARTIN ABAD, op. cit., pp, 511-513 n° 339.

(17).- Este saboyano, dotado de una atractiva personalidad, perteneció al grupo de los primeros jesuitas que realizaron una labor de apostolado fuera de Italia (R.GARCIA VILLOSLADA, San Ignacio de Loyola. Nueva biografía. Madrid 1986, pp, 678-679; A.RAVIER, Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. Madrid 1991, pp, 381-382).

y continuar departiendo, cuestión en la que emplearon varias horas, a pesar de las numerosas personas que esperaban para poder entrevistarse con Quiroga (18). Debemos suponer que existieron diversos contactos durante los diez días que Fabro permaneció en esta localidad. Prosiguiendo su andadura hacia Madrid, encontró en el camino a Juan Tavera, quien insistió para que retornase en su compañía a Alcalá, adonde se dirigía para descansar durante unas pocas jornadas. Entre los integrantes del séquito del arzobispo de Toledo se encontraba Juan Bernal Díaz de Luco, a quien Fabro calificó como una persona cercana a la Compañía de Jesús desde hacía tiempo. De esta manera, Tavera fue informado de todas las cuestiones referentes a la Orden y de sus atribuciones para predicar y confesar, obteniendo un decidido apoyo del Cardenal para favorecer su desarrollo. Quiroga medió con el arzobispo para que éste expresase sus deseos por escrito y con validez en todo el arzobispado, lo que dio como fruto una licencia particular (19). Así pues, la protección y acogida que Tavera y Díaz de Luco procuraron a los jesuitas durante la década de los cuarenta fue enormemente significativa (20). En cuanto a Gaspar de Quiroga, volvió a entrevistarse con Fabro en 1542, ahondando más en la amistad con el mismo y en su admiración por la Compañía (21). Esta misma inclinación la encontramos en su tío, Vasco de Quiroga, quien mantuvo unas excelentes

(18).- MHSI, Fabri Monumenta, Madrid 1914, p, 129; Este episodio ha sido referido por diversos autores: R.GARCIA VILLOSLADA, op. cit., p, 680; F.CERECEDA, Diego Lainez en la Europa religiosa de su tiempo, 1512-1565, Madrid 1945-1946, I, pp, 378-379; I.IPARRAGUIRRE, Práctica de los Ejercicios de San Ignacio de Loyola en vida de su autor, 1522-1556, Bilbao-Roma 1946, p, 17.

(19).- MHSI, Fabri Monumenta, p, 130: "A la partida me dixo el vicario estas palabras con grandissimo sentimiento; que si yo algunos días pudiese estar cerca del, no sería mucho que él presto dixiesse: paratus sum tecum in carcerem et mortem ire".

(20).- Sobre la vinculación de dichos personajes con la Compañía de Jesús, véase, R.GARCIA VILLOSLADA, op. cit., pp, 687-693; T.MARIN MARTINEZ, op. cit., pp, 260 y 312-314.

(21).- MHSI, Fabri Monumenta, p, 151. En una carta que Fabro dirigió a San Ignacio desde Barcelona el 1 de marzo de 1542 decía: "En Alcalá torné a visitar al vicario general, el cual me dijo que con pocos días que yo me pudiera detener, no fuera mucho de sacarle de los embarços del mundo y de los de su oficio, para que él fuera conmigo". Posiblemente Quiroga estaba haciendo mención a los problemas que estaba teniendo por su pleito con el colegio de San Ildefonso y la universidad alcalaína, en los que la mediación de la Compañía de Jesús, como veremos más adelante, revistió una especial importancia.

relaciones tanto con Ignacio de Loyola como con Francisco de Borja, solicitando la presencia de misioneros jesuitas en su obispado michoacano (22).

Sin embargo, fue en el desempeño de las funciones propias de la vicaría general donde surgieron graves complicaciones para Quiroga. Los tradicionales conflictos entre las jurisdicciones real y la eclesiástica, representada en Alcalá por el vicario arzobispal, se vieron cumplimentados por los que surgieron tras la aparición en dicha localidad de una nueva jurisdicción, la constituida por la Universidad cisneriana, que desde su nacimiento tuvo que soportar continuas injerencias provenientes, principalmente, del arzobispo toledano y de su representante en la población (23). Los ocupantes de la sede primada no acogieron positivamente la presencia de un nuevo fuero ajeno a su autoridad, por lo que no cesaron en los intentos de someterlo a su control. Tanto Fonseca, como Tavera y, posteriormente, Martínez Silicio, buscaron la consecución de este objetivo, propiciando visitas y otros mecanismos de supervisión, así como fomentando la injerencia del corregidor y del vicario general, ambos cargos sujetos a su provisión, en el medio universitario (24). El Cardenal Tavera buscó un posible remedio a estas pugnas a través de incrementar la autoridad del maestrescuela de Alcalá en detrimento de la del rector, tratando de asemejar las atribuciones de esta dignidad con las de su homónimo salmantino. En 1542 designó para ocupar este cargo a Gaspar de Quiroga, que vino así a sumar esta

(22).- S.ZAVALA, op. cit., p, 103; J.J.MORENO, Fragmentos de la vida y virtudes del Illmo. y Rmo. Dr. Don Vasco de Quiroga. México 1766, pp, 93-97.

(23).- En torno a las competencias entre las distintas configuraciones jurisdiccionales en Alcalá y su problemática coexistencia, véase, J.GARCIA ORO, La Universidad de Alcalá de Henares en la etapa fundacional (1488-1578). Santiago de Compostela 1992, pp, 54-55 y 60-62. En este sentido, este autor afirma que : "El vicario complutense era una fragua de conflictos", puesto que, a los ya señalados con el Consejo Real y la Universidad, su actuación también colisionaba en ocasiones con la de la audiencia real y con la jurisdicción del concejo. En torno a las constituciones con las que Cisneros dotó a la Universidad, R.GONZALEZ NAVARRO, Universidad Complutense. Constituciones originales cisnerianas. Alcalá de Henares 1984, pp, 19-116.

(24).- Sobre esta actitud de los prelados toledanos, véase, V.DE LA FUENTE, Historia de las Universidades, Colegios y demás establecimientos de enseñanza en España. Madrid 1885, II, pp, 113-114: el Cardenal Tavera llegó a afirmar "que no había podido Cisneros hacer mayor agravio a la jurisdicción arzobispal que fundar la Universidad de Alcalá"; E.HERNANDEZ SANDOICA y J.L.PESET, Universidad, poder académico y cambio social (Alcalá de Henares 1508 - Madrid 1874). Consejo de Universidades 1990, pp, 22-25.

nueva función a la de vicario general (25). Las tensiones entre Tavera y la universidad alcalaína se encontraban en su máximo apogeo. Ya en 1540, Miguel de Torres, colegial de San Ildefonso, y luego, rector universitario, había acudido a Roma para exponer a la Curia la actuación del arzobispo de Toledo y del vicario general en contra de los derechos de la Universidad (26). La actuación tanto de Gaspar de Quiroga, como de otro de los protegido de Tavera, el licenciado Gasca, en perjuicio de la jurisdicción académica, había sido motivo de un complicado pleito mantenido por los miembros del Colegio de San Ildefonso (27). En 1542 le fueron notificadas a Quiroga unas letras apostólicas que Torres había adquirido como fruto de sus reclamaciones. En el fragor de la discusión entre el notario apostólico, encargado de su notificación, y el vicario general, que estimaba que en diversas cuestiones atentaban contra la jurisdicción real, Quiroga arrebató de la mano de este los documentos que esgrimía y los rompió (28). Como consecuencia de ello, el impetuoso Quiroga recibió el mandato de presentarse personalmente en Roma ante el pontífice para rendir cuentas de su airado comportamiento, especificándose un plazo limitado de tiempo para que cumpliera la orden. A pesar de todas las diligencias que se efectuaron para obligar a Quiroga a obedecer este requerimiento, la protección que le dispensaba el Cardenal Tavera le eximió del sometimiento a esta disposición, pues, por su intervención, el 25 de julio de dicho año, el príncipe Felipe desde Monzón decretaba que no debía abandonar el reino sin su

(25).- Tampoco en esta ocasión aparece claramente establecido el año de su provisión, aunque nos inclinamos a pensar que fue en 1542 por los acontecimientos que se sucedieron (BSCV, Ms. n° 16, fol 143r; P.SALAZAR Y MENDOZA, Crónica del Gran Cardenal..., p, 289. Sin embargo, M.ALCOCER MARTINEZ, op. cit., p, 407; M.BOYD, op. cit., p, 8, sitúan este nombramiento en 1543.

(26).- B.ALCAZAR, Chono-Historia de la Compañía de Jesús en la Provincia de Toledo. Madrid 1710, I, p, LXXV. Narra este autor como a través de dicho viaje a Roma inició sus contactos con San Ignacio de Loyola, profesando, posteriormente, en la Compañía de Jesús.

(27).- Sobre las graves implicaciones que se derivaban del mismo para el vicario general, véase, AHN, Universidades, leg. 329 (caja 1), s.f., donde se encuentra un memorial de agravios cometidos a la jurisdicción del rector. En el mismo sentido, véase, Ibid., leg. 8, carpeta 12, n° 3.

(28).- Ibid., leg. 545 (caja 1), exp. 12; Ibid., leg. 10, n° 16.

autorización expresa bajo pena de perder su naturaleza y temporalidades (29). El regalismo y la defensa de los intereses arzobispales frente a la autoridad de la Universidad y del papa de los que Quiroga hizo gala, le significaron notablemente durante estos años. No han faltado autores que han resaltado que, la actitud adoptada por el vicario general durante este conflicto, fue la base de su acrecentamiento (30).

El patronazgo de Tavera sobre Quiroga lo percibió durante toda su vida. Así, pocos días antes de la muerte de su patrón tomaba posesión de una canonjía, el 12 de junio de 1545, en la catedral de Toledo que había quedado vacante por la muerte del licenciado Fernando de Meneses (31). Tales promociones le permitieron alcanzar unas cuantiosas rentas hasta el punto de que el 12 de enero de 1545 remitió al convento de agustinos de su localidad natal, Madrigal de las Altas Torres, ciento sesenta y ocho mil maravedies para que fuesen puestos a censo, y doce mil más para la capilla mayor. Igualmente, a través de una carta enviada a su sobrina Elena de Quiroga hizo donación a este monasterio de su librería, sin más carga que en dicha capilla se acogiese su propio enterramiento y el de su descendencia (32).

Con todo, la muerte de Tavera, a la que se sumó, dos años después, la de Francisco de los Cobos, produjeron una profunda remodelación en el "juego político" de la Corte. El hueco de influencia, como gran patrón, que dejó vacante Tavera fue ocupado por Fernando de Valdés. Para estas fechas, Valdés era un viejo letrado que de manera oscura, y casi por casualidad, había conseguido introducirse como servidor de Cisneros cuando el célebre cardenal estaba a punto

(29).- La cédula le fue notificada a Quiroga el 4 de agosto de 1542, siendo testigos el contador Juan Pérez de Loaces y sus criados, Ruy García de Figueroa y Aries Desca (ACT, A911.2).

(30).- BSCV, Ms. n° 16, fol 142v-143r; P.SALAZAR Y MENDOZA, op. cit., pp, 289-290; F.DE PISA, op. cit., fol 267v; BNM. Ms. n° 13044, fol 128v; G.GONZALEZ DAVILA, op. cit., p, 488; M.BOYD, op. cit., p, 9; P.MARTIR RIZO, op. cit., p, 192.

(31).- ACT, Actas capitulares. Tomo 7, fol., 37v-38r.

(32).- AHN, Clero, Leg. 589, carp. 18, n° 1.

de morir (33). El hecho de no pertenecer al "grupo fernandino" siempre le mantuvo apartado de los círculos más cercanos al monarca e, incluso, estuvo a punto de ser definitivamente apartado de la Corte si, a la muerte de su patrón, no lo hubiese protegido Francisco de Mendoza - otro servidor de Cisneros - que entabló una estrecha amistad con la familia Chièvres. Ello le sirvió para decantarse por el bando del Emperador en la revuelta de las Comunidades y, una vez acabada ésta, ser integrado y recompensado dentro del grupo social de los vencedores, en un "partido político" que procedía del antiguo círculo cisneriano, al que se le habían unido los antiguos partidarios de Felipe el Hermoso, quienes emigraron y fueron apartados del poder cuando, en 1507, Fernando el Católico y su grupo aragonés - en el que se encontraba Tavera - volvió a gobernar Castilla (34). Varios de los miembros de este grupo ocuparon puestos relevantes de la administración central castellana durante la primera mitad del reinado de Carlos V. Tal fue el caso de Alonso Manrique, nombrado Inquisidor General, quién introdujo - con la recomendación de Francisco de Mendoza - a Fernando de Valdés como consejero de Inquisición.

Con todo, a finales de la década de 1520 los miembros procedentes del antiguo "partido aragonés", que desde la llegada de Carlos V al trono hispano venían controlando el Consejo de Castilla y los cargos dependientes de esta institución, pasaron a ocupar los de Inquisición. No sólo se promocionaba a Francisco de Mendoza, Fernando de Guevara y Fernando de Valdés, sacándolos fuera del Consejo de Inquisición, sino que hasta al propio Inquisidor General, Manrique, en 1529, Carlos V le ordenaba que abandonase la Corte y se retirase

(33).- J.L.GONZALEZ NOVALIN, El Inquisidor General Fernando de Valdés (1483-1568). Su vida y su obra. Universidad de Oviedo 1968, I, p, 19. Valdés se presentó a Cisneros con la única recomendación de un hermano suyo que había servido como capitán en la expedición a Orán, organizada por el cardenal.

(34).- Sobre el tema, J.MARTINEZ MILLAN, "Las élites de poder durante el reinado de Carlos V..." pp, 146-148; M.GIMENEZ FERNANDEZ, op. cit., I, cap. 1º; Sobre la evolución de Valdés, A. POSCHMANN, "El cardenal Guillermo de Croy y el arzobispado de Toledo" BRAH 75 (1919), pp, 201-282.

a su arzobispado de Sevilla (35). Tal proceso se culminaba con el nombramiento de Tavera como Inquisidor General, precisamente en el mismo año (1539) en que moría la Emperatriz, por lo que Carlos V también le encargaba la regencia de los reinos peninsulares ante su ausencia inmediata de ellos y dada la poca edad de su hijo Felipe.

Resulta explicable, por tanto, la enemistad que surgió entre Tavera y Valdés, la poca relevancia que tuvo en el poder el asturiano mientras Tavera vivió, y la consiguiente revancha que aquel se tomó contra los apadrinados de Tavera cuando murió en 1545. El resultado más inmediato para Quiroga fue que, desprovisto de la protección de Tavera, hubo de hacer frente al requerimiento que se le hacía desde Roma a causa del percance con el notario apostólico (36). Tras unos pocos meses de servir en su canonicato, en los que se ocupó, junto al resto de los miembros del cabildo, de los problemas surgidos en torno a la titularidad del adelantamiento de Cazorla (37), y a pesar del nombramiento de vicario general del arzobispado que se le otorgó durante la

(35).- AHN, Inq., libro 320, fol. 270r; Sobre el tema, J.MARTINEZ MILLAN, "Las élites de poder durante el reinado de Carlos V..." p, 149.

(36).- En dicho año, una sentencia del Tribunal de la Rota sancionaba a favor de la jurisdicción y exenciones del rector de la Universidad de Alcalá contra el arzobispo de Toledo y sus jueces (V.DE LA FUENTE, op. cit., II, pp, 595-597). En este sentido, como los conflictos con el sucesor de Tavera, Martínez Silicio, y dicho organismo continuaron, el pontífice Paulo III realizó una ratificación del fuero académico en 1550 (Ibid., pp, 597-605).

(37).- En mayo de 1534 Juan Pardo de Tavera había nombrado adelantado de Cazorla a Francisco de los Cobos. Al producirse el enfrentamiento entre ambos, al que ya hemos hecho referencia, este tuvo un perfecto reflejo en lo concerniente a esta provisión, pues el secretario buscó la perpetuación de la concesión en la figura de su hijo Diego, marqués de Camarasa, y de los descendientes de este, arrebatando así el derecho de designación al titular de la sede toledana. Cobos, actuando a espaldas de Tavera, logró la sanción de sus deseos por una bula de Paulo III, por medio del gran favor que gozaba con Carlos V. Sin embargo, tras la muerte del arzobispo, la determinación del adelantamiento en la sede vacante pertenecía al cabildo, que, en este caso, se limitó a obedecer las letras apostólicas y las órdenes del emperador en favor de Diego de los Cobos (ACT, Actas capitulares. Tomo 7, fols 75r-106v (en torno al parecer expresado por Gaspar de Quiroga, fols 97v-98r); BPRM, II/1823: "Memorial del pleito entre el adelantado mayor de Cazorla, don Francisco de los Cobos y sus descendiente, y el arzobispo de Toledo, don Gaspar de Quiroga y sus predecesores", I, fols 1-68; J.F.RIVERA RECIO, El Adelantamiento de Cazorla. Historia general. Toledo 1948, pp, 99-104.

sede vacante (38), las opciones de Quiroga terminaron cuando, el 2 de noviembre de 1545, le fue notificada al deán de la catedral un instrumento emanado del auditor de la Cámara apostólica por el que el vicario quedaba excomulgado. Esta medida motivó que fuese apartado de la iglesia hasta que obtuviese la absolución, circunstancia que aprovechó Juan de Segovia para desde Roma impetrar su canonjía. Todo ello forzó finalmente su ida a esta ciudad (39). Por otra parte, los intentos realizados por el príncipe Felipe, gobernador del reino en ausencia del emperador, para que el rector y los consejeros de la universidad alcalaína sobreseyesen la causa, y así, impedir su marcha, fueron, en esta ocasión, infructuosos (40).

Este primer viaje de Quiroga a Roma ha dado lugar a diversas versiones y a una famosa anécdota referida a su entrevista con el pontífice. Sin duda, temeroso de las represalias que Paulo III pudiese adoptar en respuesta a la actitud que había exhibido y a su desobediencia, trató de buscar ayuda en Roma. Según narra Gregorio Marañón, acudió a dicha ciudad disfrazado con una larga barba, entrando al servicio de un cardenal con el fin de que éste mediase para que el papa le recibiese en confesión (41). Mucho más acertada nos parece la descripción de los hechos realizada por Jerónimo Román de la Higuera, quien afirma que, una vez llegado a Roma, Quiroga buscó la ayuda de la Compañía de Jesús y el consejo e intervención de su fundador, concertando éste la entrevista

(38).- El 4 de agosto de 1545 el cabildo catedralicio nombró vicarios generales a los canónigos Blas de Ortiz y al licenciado Quiroga, aunque en el caso de este último, la provisión no fue efectiva hasta que no realizó el juramento de su canonicato el 27 de agosto (ACT, Actas capitulares. Tomo 7, fol, 41r y 45r).

(39).- El cabildo otorgó a Quiroga el pertinente permiso para su traslado, proporcionándole trescientos ducados a cargo de la mesa arzobispal para sus gastos (ACT, Actas capitulares. Tomo 7, fol, 110r-111v); J.ROMAN DE LA HIGUERA, op. cit., fol 179.

(40).- La carta que el príncipe dirigió a los responsables académicos, fechada en Madrid, a 15 de noviembre de 1545, no venció la resistencia de estos a continuar con el pleito (P.SALAZAR Y MENDOZA, op. cit., p, 290).

(41).- G.MARAÑÓN, op. cit., p, 123.

con el pontífice en una viña (42). Las buenas relaciones que, desde años atrás, había mantenido con los miembros de dicha Orden, nos lleva a pensar que fue Ignacio de Loyola quien ejecutó estas labores entre las partes y contribuyó a apaciguar los ánimos. Durante el encuentro, Quiroga, reticente y sumiso, rogó a Paulo III que le otorgase su perdón, a lo que el papa preguntó: "Tu qui es?". Su respuesta fue: "Ego sum qui rogat". A partir de aquí, nuevamente vuelven a diferir las distintas interpretaciones. Marañón afirma que el pontífice replicó: "Mira, no seas Quiroga", y que este reiteró: "Qui rogat soy". Román de la Higuera transcribe que, tras el primer intercambio de frases, Paulo III afirmó: "Qui rogat dignus est dudit" (43). Sea como fuese, el desarrollo de la conversación fue favorable a Quiroga, puesto que obtuvo la absolución papal, retornando a Toledo en el verano de 1546, manteniendo desde esta ciudad sus reiterados contactos con la Compañía de Jesús (44).

El 23 de agosto de 1546 don Gaspar de Aponte, abad de San Vicente y canónigo de la catedral toledana, presentó ante el cabildo la absolución lograda por Quiroga, con lo que fue admitido en el seno del mismo. Meses después reclamó los emolumentos que le pertenecían, acumulados durante su periodo de

(42).- J.ROMAN DE LA HIGUERA, op. cit., fol 179-180. Sin embargo, consideramos que el cronista comete, en este sentido, un anacronismo, puesto que "la viña" era la casa que Ignacio de Loyola compró al pie del monte Aventino en 1555 para recreo de los alumnos del Colegio Romano, donde ciertamente, aunque con posterioridad como veremos, Quiroga se entrevistó con San Ignacio cotidianamente (R.GARCIA VILLOSLADA, op. cit., p, 603 n.45). Esta mediación aparece también puesta de manifiesto en C.SAEZ (Ed.), Annales Complutenses. Alcalá de Henares 1990, pp, 489-490.

(43).- No nos interesan tanto los pormenores de la entrevista como el señalar que diversos autores, al referirse a este episodio, confunden este primer viaje de Quiroga a Roma con su segunda estancia, más prolongada, como auditor del Tribunal de la Rota. Este es el caso, como hemos resaltado, del propio Román de la Higuera; F.DE PISA, op. cit., pp, 267-268; BNM, Ms. 13027, fol 198r-v.

(44).- El padre Antonio Araoz, de la Compañía de Jesús, escribía a Ignacio de Loyola desde Vergara, el 19 de noviembre de 1546: "Con el que esta lleva tenía escrito a V.R., y antes por otras vías, y las más por la del Nunçio. En ellas escribí como el despacho de Quiroga recibió Hernando en Madrid, y se lo envió a Toledo. Yo le escrivo que scriva a V.R. lo que más save" (MHSI, Epistolae Mixtae. Madrid 1898, I, p, 329).

ausencia, en función de la denominada constitución de los llamados o desterrados (45).

Sin embargo, para Quiroga aún quedaba por solucionar otro asunto: el impetratorio interpuesto por Juan de Segovia sobre su canonicato toledano. Nuevamente, la intervención de Ignacio de Loyola y, por su mandato, de varios miembros de la Orden en su favor fue decisivo para que pudiese mantener dicha dignidad, alcanzando un concierto con el dicho Segovia a cambio de una pensión sobre la canonjía de doscientos ducados (46). A pesar de la buena voluntad puesta por parte de todos los involucrados, parece que surgieron diversos problemas que dilataban el normal funcionamiento de los pagos, teniendo que actuar la Compañía de Jesús, en una nueva ocasión, en auxilio de Quiroga (47).

Pero, sin duda, aun cuando Quiroga había sorteado todas las dificultades a las que tuvo que hacer frente en los últimos años, gracias, principalmente, al apoyo recibido por parte de la Compañía de Jesús, su situación tras la vuelta a Toledo no era muy favorable. La muerte del Cardenal Tavera había dejado abierta la puerta hacia el encumbramiento de su adversario político, Fernando de Valdés. Los óbitos de García de Loaysa y de Juan de Zúñiga en 1546, a los que se sumó, al año siguiente, el del secretario Francisco de los Cobos, así como el nombramiento del duque de Alba como mayordomo del príncipe Felipe en vísperas de que éste iniciase su primer viaje por Europa, dejaron a Valdés el camino franco para convertirse en el gran patrón cortesano. Heredero de los cargos ostentados por García de Loaysa, en 1547 fue nombrado Inquisidor

(45).- ACT, Actas capitulares. Tomo 7, fols 155r y 174r; Ibid., A9I1.4; La constitución de los llamados o desterrados contemplaba que si un canónigo, racionero o beneficiado, era llamado o desterrado sin culpa por su parte o por cuestiones referentes a la Iglesia de Toledo, seguía manteniendo todas sus prebendas y distribuciones cotidianas, excepto los maitines, durante el periodo que durase su ausencia (Ibid., A9I1.1).

(46).- Véase, en este sentido, J.ROMAN DE LA HIGUERA, op. cit., fol 180; MHSI, Epistolae Mixtae, I, p, 374; Ibid., Monumenta Ignatiana. Serie 1ª. Madrid 1903, I, p, 584.

(47).- Sobre dichas contingencias, véase, Ibid., Monumenta Ignatiana. Serie 1ª. Madrid 1904, II, pp, 15-16 y 218; Ibid., III, p, 285.

General y arzobispo de Sevilla (48). A partir de este momento, Valdés desplegó una fuerte ofensiva contra aquellos que, apadrinados por Tavera, habían ocupado en los años precedentes destacados puestos en la administración de la Monarquía, sustituyéndolos por sus propios protegidos, y propiciando, como en el caso de Juan Bernal Díaz de Luco, su promoción a los obispados que quedaban vacantes como medio para alejarlos de la Corte (49).

Dado que aún no había cuajado un "partido político" que se opusiese al de Fernando de Valdés, si bien, ya se vislumbraba el germen del "partido ebolista" en el que los herederos de Tavera se cobijarían, Quiroga buscó protección en su entorno toledano, pasando a colaborar activamente en la labor iniciada por el nuevo titular de la sede primada, el arzobispo Martínez Silicio.

(48).- J.L.GONZALEZ NOVALIN, op. cit., I, pp, 163-166. Estas nuevas ocupaciones le forzarían a abandonar la presidencia del Consejo de Castilla, que pasaría a ser ocupada por una persona que le era poco afín, Fernando Niño, quien, por otra parte, también falleció en un breve espacio de tiempo.

(49).- En torno al encumbramiento político de Fernando de Valdés y su actuación en realción con los protegidos de Tavera, a los que desbancó de sus cargos para que estos fuesen ocupados por sus propios apadrinados, véase, J.MARTINEZ MILLAN, op. cit., "Las élites de poder durante el reinado de Carlos V..." pp, 153-158; Ibid., "Elites de poder en tiempos de Felipe II", pp, 122-124. Además de Díaz de Luco, nominado obispo de Calahorra en 1545 y enviado inmediatamente a Trento, en 1548 Acuña fue promovido al obispado de Astorga, en 1550 Ponce de León fue designado para ocupar la sede de Ciudad Rodrigo, y en 1555, Diego de Tavera para la de Avila.

CAPITULO 3

3. A LA SOMBRA DE JUAN MARTINEZ SILICIO (1546-1554)

Tras su vuelta de Roma, superados los problemas que habían surgido en torno a su canonicato catedralicio, Gaspar de Quiroga pasó a ejercer las funciones propias de esta dignidad, prestando una activa colaboración en las actuaciones que estaba desarrollando el sucesor de Tavera en la mitra toledana, Juan Martínez Silicio. Dentro de las mismas, la que, sin duda, alcanzó mayor importancia por su significación y transcendencia fue la promulgación de los estatutos de limpieza de sangre de la catedral de Toledo. La postura de Quiroga en relación a la adopción de esta reglamentación estuvo motivada por la evolución de las élites de poder cortesanas, poco favorable a los intereses del canónigo, quien buscó en la cooperación con los planes de Silicio el cobijo forzado tras la muerte de su protector y ante las negativas expectativas que para su futura trayectoria cabía esperar de la erección de Fernando de Valdés como gran patrón cortesano. Sin embargo, la conveniencia de aferrarse a su prebenda catedralicia y su contribución a la labor reformística puesta en marcha por el prelado no significaron la desaparición de la divergencia en materia de religiosidad existente entre ambos. Ello motivó que la buena comunicación establecida se viese alterada por la generación de situaciones problemáticas, enmarcadas dentro de las conflictivas relaciones que el arzobispo mantuvo con el cabildo catedralicio, que se desataron coincidiendo con la ofensiva que Silicio acometió contra la Compañía de Jesús.

3.1.El apoyo a los estatutos de limpieza de sangre

La aparición de este tipo de ordenamientos en el espectro jurídico estuvo íntimamente ligada a la existencia de una realidad sociopolítica corporativa, que

los propios coetáneos representaban asemejando su composición y funcionamiento con el que rige el cuerpo humano. Según esta imagen antropomórfica, el príncipe constituía la cabeza del mismo, mientras que los distintos grupos sociales eran identificados con los diversos órganos del cuerpo. Esto conllevaba que la desigualdad social fuese admitida como algo natural e inherente a la organización y ordenamiento sociopolítico. En este sentido, cada grupo debía ejercer su función de forma autónoma y diferenciada del resto, lo que vino a traducirse en la promulgación de estatutos particulares que establecían tanto los derechos como los deberes en cada uno de los casos (1). Este proceso contemplaba, en el caso hispano, un componente que contribuyó a sumar un mayor grado de complejidad: la existencia de minorías religiosas. La adopción por parte de determinados organismos y entidades de los estatutos de limpieza de sangre, puesto que estos nunca fueron leyes de alcance general, fue una respuesta a los intentos, por parte de cada uno de estos grupos, de salvaguardar su exclusividad y preservar su ámbito de actuación (2).

Sin pretender profundizar en un tema profusamente tratado por diversos especialistas, hemos de señalar que, los orígenes de la configuración sociopolítica moderna comenzaron a perfilarse durante el reinado de Alfonso X. La detención de la dinámica reconquistadora y la percepción del Derecho Romano dieron lugar a una actividad legislatora por parte del rey Sabio encaminada a fundamentar un proyecto político y un reajuste social que constituyeron los cimientos del sistema corporativo. Fue en este periodo de "integración normativa" cuando en los distintos ordenamientos jurídicos comenzaron a aparecer factores de diferenciación social, sirviéndose, incluso, de la cuestión religiosa. A pesar de que las Partidas censuraban los comportamientos deshonorosos hacia aquellos que

(1).- Sobre la concepción de la Edad Moderna como un sistema político y social corporativo, y su desarrollo institucional y jurídico, véase, A.M.HESPANHA, História das Instituições. Epocas medieval y moderna. Coimbra 1982, pp, 207-208 y 403-404.

(2).- J.A.MARAVALL, Poder, honor y élites en el siglo XVII. Madrid 1984 (2ªed.), pp, 94-96, 104-105 y 118-119, define a los estatutos de limpieza de sangre como una medida de "cierre estamental"; A.DOMINGUEZ ORTIZ, El Antiguo Régimen: los Reyes Católicos y los Austrias. Madrid 1983 (3ªed), p, 188; J.SALAZAR ACHA, "La limpieza de sangre" Revista de la Inquisición 1 (1991), p, 307.

abandonaban su religión para convertirse al cristianismo, se empezó a dar, paulatinamente, una mayor importancia social al nacimiento en relación directa con las diferencias raciales-religiosas y con los intentos de cada grupo de asegurar sus privilegios. Es por ello, que los primeros antecedentes de estatuto de limpieza de sangre se encuentran en aquellos que sancionaron las cofradías militares andaluzas fronterizas en los siglos XIII y XIV, al hilo de las masivas conversiones de judíos tras el acaecimiento de los grandes pogroms en las décadas finales de dicha centuria (3).

Por otra parte, esta forma de diferenciación y jerarquización social, que provocaba, como hemos señalado, la existencia de una pluralidad de ordenamientos legales, estaba plenamente imbuida en la concepción del honor en dicha época. Las normas de obligado cumplimiento que estos establecían enmarcaban a cada grupo dentro de un determinado comportamiento social, en función a su estado y de los derechos que estas mismas reglas le procuraban. Sin embargo, esto no venía a equiparar los conceptos de "limpieza" y "nobleza", que los propios coetáneos distinguían perfectamente, puesto que el carecer de limpieza era una característica negativa y limitadora socialmente, pero, el contar con ella no conllevaba, en sí misma, la adquisición de ninguna prerrogativa (4).

Así pues, las numerosas conversiones que se produjeron a finales del siglo XIV, tuvieron como respuesta el surgimiento, a comienzos del siglo XV, de los estatutos de limpieza de sangre en diversas instituciones como medida de

(3).- En torno a la significación de las Partidas y la polémica mantenida entre Alfonso GARCIA GALLO y Aquilino IGLESIAS FERREIROS al respecto, así como una completa bibliografía, véase, J.LALINDE ABADIA, Iniciación histórica al Derecho español. Barcelona 1983 (3ª ed.), pp, 133-135, 300-301 y 332-336; A.DOMINGUEZ ORTIZ, Los judeoconversos en la España Moderna. Madrid 1991, pp, 137-139; J.CARO BAROJA, Los judíos en la España moderna y contemporánea. Madrid 1961, I, pp, 116-117.

(4).- A.M.HESPAHNA, op. cit., p, 387; J.A.MARAVALL, op. cit., p, 94; Ibid., Estado moderno y mentalidad social. Madrid 1986, II, pp, 14-18; A.DOMINGUEZ ORTIZ, La clase social de los conversos en Castilla en la Edad Moderna. Madrid 1955 (reeditado en Granada, en 1991, con un ensayo introductorio de Francisco Márquez Villanueva), pp, 191-197; A.GARCIA VALDECASAS, El hidalgo y el honor. Madrid 1948, pp, 160-178.

segregación social. Si bien, ya en 1414, fueron adoptados por el colegio mayor salmantino de San Bartolomé, los que alcanzaron un mayor eco por los tumultos que provocaron en la ciudad de Toledo fueron los promulgados por el alcalde mayor de la ciudad Pero Sarmiento en 1449. En virtud de los mismos, los judeoconversos quedaban incapacitados para ostentar cargos públicos dentro de la ciudad. Esta, que acogía una importante e influyente comunidad conversa, se dividió entre partidarios y detractores de dicha reglamentación. En su origen influyó la aceptada y reiterada acusación de que los cristianos nuevos utilizaban su preeminencia social y económica para agraviar a los cristianos viejos. El apoyo recíproco que habían recibido y prestado a don Alvaro de Luna, quien había encargado a importantes mercaderes toledanos conversos la recaudación de una contribución extraordinaria en esta ciudad, la impopularidad de la exigencia de un nuevo tributo, y la toma de postura en favor o en contra del válido, fueron cuestiones íntimamente relacionadas con la aparición de este ordenamiento. La negativa, por parte del pontífice Nicolás V, a sancionar la validez de los estatutos y la actitud adoptada por Enrique IV, terminaron por zanjar la cuestión y devolver la calma a la ciudad. A pesar de su fracaso, esta normativa supuso un paso adelante importante, y se constituyó como precedente obligado para los estatutos de limpieza de sangre que vieron la luz en la primera mitad del siglo XVI (5).

La actividad excluyente del elemento converso también fue adoptada por diversas órdenes religiosas durante el siglo XV. La idea de que las conversiones en las décadas precedentes habían sido forzadas por la violenta actuación sobre

(5).- En torno al llamado "estatuto de Pero Sarmiento" y los acontecimientos que tuvieron lugar en Toledo tras su promulgación, véase, J.CARO BAROJA, op. cit., I, pp, 123-128; E.BENITO RUANO, La "sentencia estatuto de Pero Sarmiento" contra los conversos toledanos. Madrid 1957, passim; Idem, "El memorial contra los conversos del Bachiller Marcos García de Mora" Sefarad 17 (1957), 314-351; Idem, Los orígenes del problema converso. Barcelona 1976, pp, 23, 41-83 y 95-132; S.DE HOROZCO, Relaciones históricas toledanas. Introducción y transcripción de J.WEINER. Toledo 1981, pp, 21-27; S.GARCIA-JALON DE LA LAMA, "Los fundamentos jurídicos de la "sentencia-estatuto" de Pero Sarmiento" I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 1988, VI, pp, 201-204. Véase en el mismo volumen el trabajo de A.RODRIGUEZ HORTA, "Sociedad y ocupación de cargos públicos del ayuntamiento de Toledo en la mitad del siglo XV", pp, 207-210; J.P.MOLENAT, "L'oligarchie municipale de Tolède au XVe siècle" Tolède et l'expansion urbaine en Espagne (1450-1650). Rencontres de la Casa Velazquez. Madrid 1991, pp, 159-177.

los judíos, y que pasado este periodo de presión, los neófitos habían retomado las prácticas propias de su religión, estaba plenamente extendida entre la población cristiano vieja. La presencia conversa a lo largo de dicha centuria en las órdenes religiosas había ido en aumento, alcanzando una singular importancia, por los puestos que llegaron a desempeñar en su seno, dentro de la Orden de San Jerónimo. La evidencia de que algunos de sus miembros judaizaban llevó a la misma a exigir "limpieza" de sangre a aquellos que quisiesen ingresar en dicho Instituto, lo que motivó una fuerte polémica. De igual manera actuó la Orden de Santo Domingo, que no estableció una reglamentación general, sino que cada convento fue aplicándola, de forma individualizada, desde 1489 (6).

Si bien, como hemos visto, los estatutos de limpieza de sangre se fueron implantando en diversas entidades como medida de exclusión hacia el elemento converso, fue la creación de una institución durante el reinado de los Reyes Católicos la que propició con su actividad la proliferación de estos ordenamientos en la primera mitad del siglo XVI. Nos estamos refiriendo a la Inquisición (7).

Desde su aparición en los territorios adscritos a la Monarquía Católica, la minoría judeoconversa había despertado todo tipo de reticencias y rechazos. Si bien no han sido plenamente dilucidadas las causas que motivaron esta persecución, resulta indudable que la Inquisición hispana se constituyó con la

(6).- J.CARO BAROJA, op. cit., II, pp, 273-276; A.DOMINGUEZ ORTIZ, Los judeoconversos en la España Moderna, pp, 149-152.

(7).- Si bien son diversos los autores que mantienen que tanto los estatutos de limpieza de sangre como la Inquisición son los dos métodos utilizados por los cristianos viejos en contra de los judeoconversos, es Antonio DOMINGUEZ ORTIZ (Los judeoconversos en la España Moderna, p, 138) quien califica el establecimiento del Santo Oficio como "paso decisivo para el triunfo de los estatutos", puesto que, al llenar las iglesias de sambenitos, facilitó enormemente la toma de medidas puramente sociales, como son los estatutos de limpieza de sangre, en contra de los conversos. Véase también, Los judeoconversos en España y América. Madrid 1978, pp, 55-56. En el mismo sentido, véase, F.MARQUEZ VILLANUEVA, op. cit., p, 125: "En realidad, el funcionamiento de la Inquisición no constituye sino el desenlace trágico - y bien trágico por cierto - de la lucha (...) entre las dos corrientes de opinión, inquisitorial y persuasiva, nacidas en tiempos de Juan II bajo los signos de las disputas en torno al estatuto toledano de 1449"; R.LOPEZ VELA, "Las estructuras administrativas del Santo Oficio" J.PEREZ VILLANUEVA y B.ESCANDELL BONET, Historia de la Inquisición en España y América. Madrid 1993, II, pp, 226-234.

finalidad de dar una solución a dicha problemática (8). Como consecuencia de ello, los primeros tribunales inquisitoriales tuvieron su asentamiento en aquellas ciudades a cuyo estado de conflictividad, tanto desde el punto de vista sociopolítico como religioso, era más acuciante poner remedio, esto es, Sevilla, Jaen, Córdoba y Ciudad Real (9). Por otra parte, la elección inicial de estas sedes no fue casual, puesto que obedeció a la extendida creencia de la época de que los neófitos de la mitad sur peninsular contaban con una menor grado de conversión que los de la mitad norte. Un reflejo de la misma lo constituye el

(8).- Diversos autores han mantenido posturas enfrentadas en torno a esta cuestión. En este sentido, L.SUAREZ FERNANDEZ, "La España de los Reyes Católicos" Historia de España, dirigida por R.MENEDEZ PIDAL. Tomo XVII. Vol.II, pp, 210-216, mantiene que la Inquisición fue fruto del presupuesto de que un gobierno unitario debía ir vinculado a una sociedad definida por una única religión. La existencia de los conversos suponía un peligro para preservar la pureza de la fe y alcanzar esta uniformidad; J.A.LLORENTE, Historia crítica de la Inquisición española. París 1817, I, pp, 142-143, afirma que la Inquisición nació como respuesta a la codicia que despertaban los bienes de los conversos, además de constituir un instrumento de poder en manos del pontífice Sixto IV y de Fernando el Católico; B.NETANYAHU, "¿Motivos o pretextos? La razón de la Inquisición", en A.ALCALA (dir.), Inquisición española y mentalidad inquisitorial. Madrid 1984, pp, 23-44, sostiene que, la inquina que las capas populares cristiano viejas mostraban hacia los conversos, ostentadores de destacados cargos sociales, ponía en peligro la paz social, lo que condujo a los Reyes Católicos a instaurar la Inquisición; Otros trabajos sobre el mismo tema: N.LOPEZ MARTINEZ, Los judaizantes castellanos y la Inquisición en tiempos de Isabel la Católica. Burgos 1954, pp, 260ss; E.BENITO RUANO, Los orígenes del problema converso. Barcelona 1976, passim; M.BATAILLON, Erasmo y España. Madrid 1950, pp, 59-60; J.JIMENEZ LOZANO, Sobre judíos, moriscos y conversos. Valladolid 1989, p, 69; C.ROTH, Los judíos secretos. Historia de los marranos. Madrid 1979, pp, 21-48.

(9).- En torno a la fundación de estos tribunales inquisitoriales y a sus primera actuaciones, véase, J.MESEGUER FERNANDEZ, "El proceso fundacional (1478-1517)", en J.PEREZ VILLANUEVA y B.ESCANDELL BONET, Historia de la Inquisición en España y América. Madrid 1984, I, pp, 322-324; J.CONTRERAS y J.P.DEDIEU, "Geografía de la Inquisición española: la formación de los distritos (1470-1820)" Hispania 40 (1980), 55, 67, 85 y 87; H.Ch.LEA, Historia de la Inquisición española. Madrid 1983, I, apéndice 1, pp, 790, 794 y 795; En relación con el tribunal de Ciudad Real, véase, H.BEINART, Records of the Trials of the spanish Inquisition in Ciudad Real. Jerusalem 1974, I, pp, 13-16; Ibid., Los conversos ante el tribunal de la Inquisición. Barcelona 1983, pp, 61ss; Sobre los tribunales andaluces en general, véase, A.CASCALES RAMOS, La inquisición en Andalucía. Resistencia de los conversos a su implantación. Barcelona 1986, pp, 27-36; En cuanto a la fundación en Sevilla, P.GARCIA DE YEBENEZ Y PROUS, El tribunal del Santo Oficio de Sevilla. Tesis doctoral. Universidad Autónoma de Madrid 1989, pp, 46-55. Respecto al tribunal de Córdoba, véase, G.MATUTE Y LUQUIN, Despojos, infamia y hoguera. Colección de los Autos Generales y particulares de Fe celebrados por el tribunal de la Inquisición de Córdoba. Madrid 1912, p, 13; CODOIN, vol.102; Referido a la implantación del tribunal de Jaen, véase, J.A.LLORENTE, Anales de la Inquisición española. Madrid 1812, I, p, 71; RAH, Códice 184; J.RIBERA, "Origen y fundaciones de las inquisiciones en España", BNM, Ms.7669, fols. 39r-175v; B.LLORCA, "La Inquisición española incipiente" Gregorianum 20 (1939), 101-142.

llamado Libro del Alboraique (10).

Sin embargo, estas primeras actuaciones inquisitoriales en el Mediodía peninsular dejaron translucir unas implicaciones que rebasaban el ámbito puramente religioso. Dentro de las comunidades conversas, la andaluza y la toledana constituían unos grupos que habían alcanzado una gran preeminencia social y económica, considerablemente mayor que la de sus homónimos norteños, lo que sin duda las hacía parecer como más peligrosas y, por tanto, objetivo prioritario desde el punto de vista inquisitorial. Esta sobresaliente posición sociopolítica no podía ser debilitada a través de persecuciones esporádicas, por lo que los cristianos viejos abogaron por un método más sistemático que condujo, como hemos señalado, a la implantación del Santo Oficio. Así pues, los condicionantes sociopolíticos y socioeconómicos fueron decisivos para marcar las diferencias entre ambos grupos, por encima del factor religioso (11).

Hemos de tener en cuenta que, los personajes más influyentes de la época, así como, buena parte de los servidores íntimos de los Reyes Católicos, eran judeoconversos. Si bien, en principio, habían aceptado la existencia de un tribunal que juzgase los delitos cometidos contra la fe, plantearon una fuerte resistencia a su actuación cuando comprendieron que el mismo adquiriría unas dilatadas perspectivas sociales y políticas, puesto que muchos conversos fueron procesados por el simple hecho de serlo, sin que fuese determinante su comportamiento y

(10).- En los escritos del siglo XV se aplicaba a los falsos conversos o "marranos" el apelativo de alboraiques o alboraicós, calificativo derivado etimológicamente de Al-Burak, nombre de la cabalgadura de Mahoma, cuyas características no permitían definirlo como un animal u otro. En cuanto al Libro del Alboraique, se trata de un manuscrito anónimo del que Fidel FITA extrajo la conclusión de que su autor era judaizante, pues constituía un intento de impedir la implantación de la Inquisición en el Norte peninsular. En torno a la polémica mantenida entre FITA y LOEB en cuanto a la identidad del autor, así como una transcripción de dicho manuscrito, véase, N. LOPEZ MARTINEZ, op. cit., pp. 53 y 391-404. Por otra parte, esta creencia respecto al grado de conversión en relación con la geografía peninsular ha sido recogida posteriormente (L. SUAREZ FERNANDEZ, Documentos acerca de la expulsión de los judíos. Valladolid 1964, p. 22).

(11).- En esta línea de interpretación, véase, J. MARTINEZ MILLAN y C. J. DE CARLOS MORALES, "Conversos y élites de poder en Castilla durante la primera mitad del siglo XVI. Rodrigo de Dueñas, consejero de Hacienda de Carlos V" Las tres culturas de Castilla y los sefardíes. Junta de Castilla y León 1990, pp. 149-163.

prácticas religiosas de forma concreta (12). Así pues, los conversos trataron, desde sus destacados puestos en la administración central y municipal, de impedir, o al menos retrasar, la extensión de la Inquisición, lo que vendría a explicar, junto con la inclinación de Isabel La Católica por métodos más apologeticos, el retraso existente entre la fundación de la institución, en 1478, y la creación del primer tribunal en Sevilla en 1481 (13). Tras las primeras actuaciones de los inquisidores en tierras andaluzas contra los conversos, estos elevaron sus quejas ante la Santa Sede, reflejando la persecución de que eran objeto y acusando a los miembros del Santo Oficio de aplicar los castigos con excesiva crueldad, de ambicionar los bienes de los procesados, así como, de utilizar procedimientos que atentaban contra los preceptos del Derecho canónico. La actitud adoptada por Sixto IV, que en 1482 promulgó una bula encaminada a delimitar los privilegios concedidos a los monarcas en 1478, abrió una crisis diplomática entre ambas instancias que retrasó la fundación de otros tribunales inquisitoriales. La cuestión quedó zanjada cuando, en 1483, nuevos ordenamientos papales restituyeron las facultades contempladas en la bula de 1478, y se introdujo la figura de un juez de apelaciones (14).

Así pues, la resistencia ejercida por los conversos al avance del Santo Oficio fue inútil. La Inquisición comenzó a actuar en consecuencia, procurando desbancarlos de los altos cargos de la administración que venían ocupando desde los reinados de Juan II y Enrique IV, y que habían afianzado con el apoyo otorgado a Isabel la Católica durante las guerras civiles que la condujeron al

(12).- En este sentido, véase la carta que Hernando del Pulgar dirigió a un "amigo encubierto" en H.DEL PULGAR, Crónica de los Reyes Católicos. Edición y estudio de Juan de Mata Carriazo. Madrid 1943, I, pp, 49-51; F.MARQUEZ VILLANUEVA, op. cit., pp, 81-104 y 147-152.

(13).- Ibid., p, 125; H.BEINART, Records of the Trials..., p, 13, mantiene que la fundación del tribunal inquisitorial en Ciudad Real, cerca de Toledo pero no en la propia ciudad, obedeció al temor que se tenía a la resistencia de su poderosa e influyente comunidad conversa.

(14).- Sobre dicho proceso, véase, J.MESEGUER FERNANDEZ, op. cit., pp, 300-309; T.DE AZCONA, op. cit., pp, 402-405; B.LLORCA, Bulario pontificio de la Inquisición española. En su periodo constitucional (1478-1525). Roma 1949, pp, 59-72 y 79-102; A.DOMINGUEZ ORTIZ, La clase social de los conversos en Castilla..., p, 32.

trono castellano (15), actuando, a su vez, contra su poderío económico a través del secuestro de sus bienes. Esta persecución afectó tanto al gobierno de las ciudades como a las instancias centrales de la Monarquía, siendo sus anteriores ocupantes sustituidos en el desempeño de estas funciones por una nueva élite de poder. En este sentido, la Inquisición actuó como un "arma de revolución social" (16), pues bajo el barniz religioso que daba a su actuación, como institución encargada de velar contra cualquier desviación de la ortodoxia católica, consiguió que el grupo que detentaba el poder fuese sustituido por una nueva élite dirigente. En este sentido, es fundamental considerar que, a finales de la década de los ochenta, el sistema de los grupos de poder de la Corte de la monarquía Católica estaba cambiando, puesto que, este conjunto de servidores fieles a Isabel la Católica fue suplantado por un nuevo grupo de poder originado en torno a su marido Fernando. Este "partido aragonés o fernandino", en el que abundaba el elemento converso, pasó a dominar la administración central en la última década del siglo XV. Así pues, se puede concluir que la Inquisición fue un instrumento en manos de la Monarquía que, no sólo se orientó a acabar con el peligro de la herejía religiosa, sino que también sirvió para la obtención de objetivos sociales y económicos que se reflejaron en el cambio de una élite por otra, proceso en el que, como hemos señalado, la cuestión religiosa no tenía una especial consideración (17).

Fueron estos conversos, los despojados de sus cargos y perseguidos por la Inquisición, los que protagonizaron, desde los reductos de poder que mantenían al componer el grueso principal de las oligarquías urbanas, una continua oposición a la institución. Ello motivó que procurasen su apoyo político a aquellos proyectos que planteaban la reforma o desaparición de la misma, que

(15).- F.MARQUEZ VILLANUEVA, op. cit., pp, 81-104; B.BENNASSAR, Inquisición española: poder político y control social. Barcelona 1984 (3ª ed.), p, 339; M.P.RABADE OBRADO, Una élite de poder en la Corte de los Reyes Católicos: los judeoconversos. Madrid 1993, pp, 25-31.

(16).- Dicha expresión es utilizada por J.MARTINEZ MILLAN y C.J.DE CARLOS MORALES, op. cit., p, 152.

(17).- J.MARTINEZ MILLAN, "Las élites de poder durante el reinado de Carlos V..." pp, 116-126.

se sirvieron de esta idea para atraer a tan poderosos partidarios a sus filas, buscando el relevo en el poder. Sin embargo, nuevamente hemos de reiterar que, en este sentido, el factor religioso no fue nunca el determinante, puesto que, como hemos señalado, existía un importante componente converso en el "partido fernandino", siendo el grupo partidario de Felipe el Hermoso el que supo encauzar, tras la muerte de Isabel la Católica, el fuerte descontento generado en las ciudades por la actuación inquisitorial. Es decir, que el elemento converso estaba presente en las distintas facciones cortesanas que pugnaban por el poder, constituyendo esta la cuestión principal por encima de consideraciones religiosas. Ello también vendría a explicar que no hubiese una actuación de los conversos como grupo, de forma conjunta, para defenderse de la ofensiva cristiano vieja encarnada por la Inquisición, sino que sus reclamaciones en el campo religioso aparecieron mezcladas con las determinadas por su filiación política y por la lucha por el poder, así como por sus intereses socioeconómicos como destacados miembros de la municipalidad (18).

Así pues, la Inquisición, que había sido creada para dar una solución a la dicotomía de la sociedad hispana y acabar con el peligro que suponía la existencia del "marrano" o falso converso, instrumentalizada su actuación, como hemos señalado, para otros fines sociopolíticos, fue perdiendo, en las primeras décadas del siglo XVI, el rigor procesal que la había caracterizado en los primeros tiempos tras su establecimiento en su actividad contra esta minoría (19). Sin embargo, como hemos referido, la labor desplegada por el Santo Oficio fue esencial para que, ya bajo el reinado de Carlos V, se produjese la mayor eclosión de los estatutos de limpieza de sangre. En este sentido, la propia actitud del emperador no fue ajena a este proceso. La ostentación de destacados puestos de la Monarquía por parte de personajes provenientes del "partido

(18).- Ibid., pp, 128-145; Estos aspectos han sido también destacados por J.I.GUTIERREZ NIETO, "Los conversos y el movimiento comunero" *Hispania* 24 (1964), pp, 249-261; A.DOMINGUEZ ORTIZ, *La clase social de los conversos...*, pp, 33-35.

(19).- Sobre las diversas cuestiones que marcaron este cambio de rumbo, véase, M.AVILES FERNANDEZ, "El Santo Oficio en la primera etapa carolina" J.PEREZ VILLANUEVA y B.ESCANDELL BONET, op. cit, I, pp, 443-470.

fernandino", a los que el emperador otorgó su confianza, la presencia y participación conversa como significados miembros del gobierno municipal en la Comunidades, así como el movimiento erasmista y el surgimiento de las doctrinas protestantes, luterana y calvinista, en Europa, con el peligro político que las mismas conllevaban, influyó decisivamente en que Carlos V adoptase una postura más intransigente respecto a esta cuestión. Esto vino a potenciarse en la década de los años cuarenta con el surgimiento del "neohidalguismo" (20).

Fue, en este contexto, cuando surgieron los estatutos de limpieza de sangre de la catedral de Toledo bajo los auspicios del arzobispo Martínez Silicio. La adopción de este tipo de ordenamientos por parte de los cabildos catedralicios obedeció a las mismas motivaciones que hemos venido exponiendo. Por ello, no deja de sorprender que la primera sede que los promulgó fuese Badajoz, donde el problema converso no revestía una especial importancia. A la catedral extremeña siguieron la de Sevilla y Córdoba, a las que, posteriormente, se sumaron Granada y Cádiz. Antes de mediar el siglo XVI todas las catedrales andaluzas contaban con estatutos de limpieza de sangre. Distinto fue el resultado de este proceso en el Norte peninsular. Los intentos de instituir dichas reglamentaciones en las catedrales de Salamanca, Zamora, Burgos y Tuy, fracasaron por la gran oposición que despertaron en la ciudad. La enorme influencia de los poderosos mercaderes conversos, que obtuvieron el apoyo de los grandes nobles, condujo a este resultado. En el caso de la Corona de Aragón, solamente la catedral de Valencia decidió incorporar esta normativa (21).

(20).- En cuanto a la actitud adoptada por Carlos V y los factores que influyeron en la misma, véase, A.DOMINGUEZ ORTIZ, Los judeoconversos en la España Moderna, pp,47-49; J.I.GUTIERREZ NIETO, "La estructura castizo-estamental de la sociedad castellana en el siglo XVI" Hispania 33 (1973), pp, 539-540 y 553-554; Ibid., "El proceso de encastamiento social en la Castilla del siglo XVI. La respuesta conversa" Actas del Congreso Internacional Teresiano. Salamanca 1983, pp, 103-112; En torno al concepto de intransigencia y el avance de la intolerancia en el siglo XVI, véase, J.A.MARAVALL, La oposición política bajo los Austrias. Barcelona 1974 (2ª ed.), pp, 122-127 y 154-156.

(21).- En relación con la adopción de los estatutos de limpieza de sangre por parte de las catedrales, véase, A.DOMINGUEZ ORTIZ, Los judeoconversos en la España Moderna, pp, 140-143 y 148-149. Esto viene a demostrar que, como señala el autor, aunque, teóricamente, el problema converso era religioso, "no fueron las instituciones religiosas las más intransigentes apologistas del estatuto". Esto lo podemos comprobar no sólo en el caso de las catedrales, sino que

La polémica que provocó la implantación de estos estatutos excluyentes para poder acceder a cualquier cargo, beneficio o prebenda de la catedral toledana estaba íntimamente relacionada con la importante presencia conversa en todos los organismos que albergaba dicha ciudad, referida no sólo al cabildo catedralicio, sino también al gobierno municipal y a la que otorgaba un importante potencial económico. A pesar de la fuerte acción represiva inquisitorial, que, como hemos señalado, fue selectiva, la preeminencia social de los conversos toledanos era evidente (22). Fue por ello que, si bien los enfrentamientos más vivos se produjeron en el ámbito eclesiástico, la importancia de la medida adoptada traspasó este círculo al verse afectadas las familias más señaladas de Toledo. José Gómez-Menor afirma que la medida adoptada por Silicio estuvo encaminada a mermar, en concreto, la influencia de la familia Álvarez de Toledo-Zapata, que contaba con una importante presencia en el cabildo (23). Por otra parte, a estos tampoco fue ajena la lucha nobiliaria que se llevaba desarrollando desde el siglo anterior por el dominio de la ciudad entre

también se puede hacer extensivo a determinadas órdenes religiosas y a la propia Inquisición. En cuanto a la actitud adoptada por la nobleza frente a los estatutos de limpieza de sangre, estuvo directamente relacionado con el "neohidalguismo", pues este estrato más bajo de dicho estamento fue el promotor de los mismos, mientras que los grandes nobles se opusieron, o cuanto menos, no abogaron por su establecimiento. Esta posición de la hidalguía se corresponde perfectamente con la de los letrados, puesto que era este sector social el que nutría los Colegios Mayores, que fueron pioneros, como hemos señalado, en la adopción de estos estatutos. Por el papel que desempeñaban dichas instituciones, esto significaba cerrar a los conversos el camino a los Consejos, por lo que se refugiaron, cada vez más, en el gobierno municipal (Ibid., pp, 160-163; J.CARO BAROJA, op. cit., II, pp, 271-273).

(22).- En este sentido, es significativa la frase pronunciada por Martínez Silicio, dirigida al pontífice, sobre la conveniencia de poner en vigor los estatutos de limpieza de sangre por la abundancia del elemento converso entre los componentes del cabildo: "en breve tiempo la Iglesia toledana, que es la Primera de España, se convertirá en una sinagoga más" (J.GÓMEZ-MENOR, Cristianos nuevos y mercaderes de Toledo. Toledo 1970, p, XVIII). Sobre esta preeminencia conversa, véase, N.LÓPEZ MARTÍNEZ, op. cit., p, 117; J.BLAZQUEZ MIGUEL, Inquisición y criptojudasmo. Madrid 1988, p, 139; M.P.RABADE OBRADO, op. cit., p, 25; L.MARTZ, "Converso Families in Fifteenth and Sixteenth-Century Toledo: The significance of Lineage" Sefarad 48 (1988), pp, 117-128; En este sentido, A.DOMÍNGUEZ ORTIZ señala que, aunque los estatutos de limpieza de sangre se referían a los cristianos nuevos en general, estaban destinados a socavar la significación social de los judeoconversos, pues ningún morisco podría haber optado a un destacado cargo eclesiástico o de los órganos administrativos de la Monarquía (El Antiguo Régimen..., pp, 187-188).

(23).- Op. cit., p, LVII; Ibid., "La sociedad conversa toledana en la primera mitad del siglo XVI" Seminario Toledo judaico. Toledo 1972, II, pp, 57-58; F.MARQUEZ VILLANUEVA, op. cit., p, 36.

los Ayala, que encarnaban la defensa de los intereses de los cristianos viejos, y los Silva, que contaban con el apoyo converso (24).

Como queda dicho, los estatutos de limpieza de sangre de la catedral de Toledo no fueron los primeros que se promulgaron en dicha iglesia (25). En octubre de 1530 habían sido instituidos en la capilla de los Reyes Nuevos, siendo aprobados por la emperatriz Isabel y sancionados por el papa Clemente VII. Fue el propio Martínez Silicio quien introdujo una reforma en los mismos el 26 de julio de 1547, para cubrir ciertos resquicios que los originales no habían contemplado (26). Tampoco fue dicho arzobispo quien propuso su adopción por parte del cabildo catedralicio. Los primeros intentos, en este sentido, se produjeron en tiempos de Juan Pardo de Tavera, aunque las dificultades que encontró para la consecución de este fin le hicieron retroceder y no seguir adelante con esta propuesta. Sin embargo, esta actuación revistió una gran importancia, puesto que Gaspar de Quiroga estaba en 1547 plenamente familiarizado con dicha reglamentación, dado que había prestado su ayuda al Cardenal también en relación a esta cuestión (27).

(24).- En torno a esta pugna nobiliaria y sus implicaciones, véase, J. LOPEZ DE AYALA Y ALVAREZ DE TOLEDO, op. cit., p. 135; J. I. GUTIRREZ NIETO, "Los conversos y el movimiento comunero", p. 239; F. MARTINEZ GIL, Toledo en las Comunidades de Castilla. Toledo 1981, p. 12; A. DOMINGUEZ ORTIZ, La clase social de los conversos en Castilla..., p. 40; M. BOYD, op. cit., pp. 10-11.

(25).- Un clásico, A. A. SICROFF, Los estatutos de limpieza de sangre. Controversias entre los siglos XV y XVII. Madrid 1985. En torno a la famosa polémica mantenida en relación a la transcendencia histórica de esta cuestión entre Américo Castro y Claudio Sánchez Albornoz, véase un resumen de la misma en J. PEREZ, Isabel y Fernando. Los Reyes Católicos. Madrid 1988. Apéndice, pp. 417-425.

(26).- En torno al estatuto de limpieza de sangre de la capilla de los Reyes Nuevos, véase, J. LOPEZ DE AYALA Y ALVAREZ DE TOLEDO, op. cit., pp. 46-47 y 133; A. A. SICROFF, op. cit., p. 130.

(27).- P. SALAZAR Y MENDOZA, Crónica del Gran Cardenal..., p. 290-291: "Ayudó mucho el Doctor Gaspar de Quiroga, a este intento con tan buenos consejos, y diligencias, que venciendo las grandes dificultades, y resistencia que se les hizo: al fin Dios servido que se pudiese el año de quarenta y siete. Estaba Quiroga muy instruido en esta materia y muy deseoso de ver resuelta la plática desde el tiempo del Cardenal Tavera, que fue el primero que levantó la caza"; F. DE PISA, op. cit., p. 261v; BSCV, Ms. 16, fol. 143r-v; Biografía eclesiástica completa, XIX, p. 1204.

La ocasión propicia se presentó para Martínez Silicio cuando Paulo III nombró para ocupar una canonjía a Hernán Ximénez, hijo de un reconciliado por la Inquisición. El arzobispo se negó a admitirle, reuniendo una comisión secreta, elegida con este propósito, para adoptar una resolución definitiva sobre los conversos. Así pues, cuando, a pesar de todos los obstáculos, el 23 de julio de 1547 Martínez Silicio presentó al cabildo los estatutos de limpieza de sangre para su aprobación, el voto del licenciado Quiroga fue favorable a su establecimiento, así como el de la mayoría del mismo (28). Esta decisión no sólo dividió al cabildo en dos bandos sino que, como hemos señalado, tuvo una enorme repercusión en todos los ámbitos de la ciudad. A los que contradijeron el estatuto en el cabildo pronto se unieron otras importantes voces en su repulsa, como la de los arcedianos de Guadalajara y Talavera, Pedro y Alvaro González de Mendoza, hijos del duque del Infantado, y la Universidad de Alcalá de Henares, que no dudó en tachar esta medida de antievangélica. Sin embargo, quien tomó la iniciativa de beligerar en contra de esta reglamentación fue el deán Diego de Castilla, en cuya ascendencia se mezclaban la sangre judía con la de Pedro I de Castilla, quien propuso cambiar la condición de "limpieza" por la de "nobleza" como necesaria para la admisión. Esto constituía un ataque frontal al arzobispo Silicio, cuyo humilde origen era conocido (29). La tensión iba creciendo tanto en el cabildo como en la ciudad, lo que motivó que el príncipe Felipe, en carta fechada en Monzón el 13 de noviembre de 1547, ordenase que no se usase ni tratase sobre el estatuto, considerando necesario, a su vez, atajar los

(28).- El resultado final de la votación fueron veinticuatro votos a favor y diez en contra: A.MARTÍN GAMERO, Historia de la ciudad de Toledo. Madrid 1862, II, pp, 1092-1094; S.DE HOROZCO, op. cit., pp, 47-52; J.CARO BAROJA, op. cit., II, p, 280; ACT, Actas Capitulares. Tomo 7, fol. 221v y 224r; BNM, Ms. 6170, fol. IVv; Ibid., Ms. 9175, fol. 44r; Ibid., Ms. 5684, fol. 261-274.

(29).- V.GARCIA REY, El deán don Diego de Castilla y la reconstrucción de Santo Domingo el Antiguo de Toledo. Toledo 1927, pp, 15-16; Por su parte, Martínez Silicio trató por todos los medios de desacreditar a aquellos que habían votado en contra del estatuto en el seno del cabildo, resaltando su filiación conversa y sus antecedentes de encuentros con la Inquisición. Entre ellos, hemos de destacar al significado erasmista Juan de Vergara. En este sentido, y en relación con la identidad de los mismos, véase, A.A.SICROFF, op. cit., pp, 149-159; A.DOMINGUEZ ORTIZ, Los judeoconversos en la España Moderna, pp, 145-146; J.CARO BAROJA, op. cit., II, pp, 281-286; J.AMADOR DE LOS RIOS, Historia de los judíos en España y Portugal. Madrid 1984, III, 498-502; M.BATAILLON, op. cit., pp, 699-700; BNM, Ms. 6170, fol. 13v-17r; Ibid., Ms. 5767, fol. 13v-16v.

enfrentamientos por medio de un alcalde de Corte, Diego Ruiz de Lugo, que envió a Toledo para que actuase como juez de residencia, quien instó al cabildo catedralicio a desistir de poner en vigor dicho ordenamiento (30).

Todo ello no amedrentó a Silicio, quien decidió apelar a Carlos V, que se encontraba en Alemania, a través de Diego de Guzmán, que obtuvo el permiso del emperador para acudir con su petición en favor de los estatutos a Roma (31). De igual manera, Carlos V remitió varias cartas a Toledo destinadas al licenciado Diego Ruiz de Lugo, al ayuntamiento de la ciudad y al cabildo y deán catedralicio, fechadas el 11 de febrero de 1548, en las que les comunicaba que el conocimiento de este asunto quedaba cometido al Consejo Real. Gaspar de Quiroga fue el encargado de responder a los requerimientos realizados por el alcalde de Corte al cabildo en este sentido (32). Por su parte, Diego de Guzmán obtuvo en Roma un breve de Paulo III que sancionaba los estatutos de limpieza de sangre (33). Nuevamente defensores y detractores de este ordenamiento acudieron al príncipe Felipe, que se hallaba en Valladolid asistiendo a la celebración de las Cortes, para tratar de favorecer sus posturas en relación al mismo (34). La respuesta del príncipe vino a reiterar su decisión anterior. Sin embargo, cuando en octubre de 1548 fue admitido como capellán del coro el presbítero Antonio Tamayo, fue exigida la previa información sobre su "limpieza" en conformidad con el documento papal. Solamente un mes

(30).- S.DE HOROZCO, op. cit., p, 58; A.A.SICROFF, op. cit., pp, 139-140.

(31).- En cuanto a la votación que tuvo lugar en el cabildo favorable al viaje de Diego de Guzmán, y el voto emitido en este sentido por Gaspar de Quiroga, véase, ACT, Actas Capitulares. Tomo 8, fol. 15v-17r.

(32).- S.DE HOROZCO, op. cit., pp, 58-60; ACT, Actas Capitulares. Tomo 8, fol. 19r y 30v-32r.

(33).- Los documentos papales a los que nos referimos, fechados en Roma el 28 de mayo de 1548 se encuentran en ACT, O.I.F.I.I.y O.I.F.I.I.a. Ibid., Actas Capitulares. Tomo 8, fols. 71v-73v. Sobre el voto favorable a su acatamiento realizado por Gaspar de Quiroga, véase, ibid., fol. 79r.

(34).- Sobre la presentación del breve pontificio por parte de Diego de Guzmán al cabildo, el jueves 28 de junio de 1548, así como el voto emitido por Gaspar de Quiroga en torno a enviar al canónigo Rodrigo de Avalos y al doctor Plasencia a presencia del príncipe, véase, S.DE HOROZCO, op. cit., pp, 60-73; ACT, Actas Capitulares. Tomo 8, fol. 38r-40v.

después, el emperador ordenaba al Consejo Real que dejase de entender sobre dicho asunto, y que se obedeciesen, al respecto, los mandatos de Martínez Silicio y del pontífice (35).

No obstante la actitud favorable de Carlos V y de la fortaleza demostrada por el arzobispo para hacer prevalecer su criterio a pesar de las adversidades, pues, como hemos señalado, hizo aplicar la premisa de la limpieza de sangre aun antes de conseguir el beneplácito imperial en virtud de la concesión papal, los adversarios del estatuto no cejaron en su actitud en contra de esta reglamentación, desplegando una importante actividad en Roma. A pesar de que siguieron llegando en los años sucesivos documentos pontificios a Toledo que obligaban a la obediencia del estatuto e imponían graves penas y el silencio a sus detractores, estos continuaron sembrando la polémica en dicha ciudad. Martínez Silicio endureció los métodos represivos hacia los contradictores, procesando al capiscol, al capellán mayor, y a un canónigo, el doctor Herrera, que tuvieron por prisión, primeramente, la torre, y luego, el claustro alto de la catedral (36). El cabildo trató de mediar en su favor cometiendo al licenciado Quiroga y al abad de San Vicente, a los que luego se unieron el obispo Campo y Diego de Guzmán, la gestión de hablar con el arzobispo (37). Sin embargo, a pesar de la actitud de Silicio, los opositores a la implantación de los estatutos de limpieza de sangre no desistieron en su propósito - incluso cuando estos fueron definitivamente sancionados, en 1555, por Paulo IV y un año después por Felipe II - abogando por su revocación en la catedral toledana e insertos en una controversia generalizada que se extendió hasta el siglo XVII.

(35).- En relación a estos aspectos, véase, J.LOPEZ DE AYALA Y ALVAREZ DE TOLEDO, op. cit., p, 135; BNM, Ms.9175, fol. 59v-60r; A.A.SICROFF, op. cit., pp, 169-170; ACT, Actas Capitulares. Tomo 8, fols. 45r-61r.

(36).- En torno a los documentos pontificios emitidos en relación a esta cuestión, véase, BNM, Ms. 9175, fol. 61v y ss; ACT, O.1.F.1.2.y I.6.B.1.14, correspondientes a dos Breves de Paulo III fechados el 7 de enero y el 17 de julio de 1549 respectivamente. Sobre la prisión de diversos miembros de la iglesia toledana a instancias del arzobispo en agosto de 1549, véase, J.LOPEZ DE AYALA Y ALVAREZ DE TOLEDO, op.cit., pp, 49-50; S.DE HOROZCO, Algunas relaciones y noticias toledanas. Madrid 1905, p, 11.

(37).- Ibid., tomo 8, fol. 134r.

Aun admitiendo las motivaciones personales que impulsaron al arzobispo toledano a imprimir esta discriminación hacia el elemento converso en su iglesia, originadas a causa de su bajo origen social, cuya única característica resaltable era su condición de cristiano viejo, así como, a la influencia de sus años de formación en el colegio mayor salmantino de San Bartolomé, ha sido mucho menos atendido un hecho que, a nuestro juicio, tiene una gran importancia: la enemistad que le enfrentaba a Francisco de los Cobos. El origen de la misma se encontraba en que el secretario real había tratado de obstaculizar la designación de Silicio para la mitra toledana apoyando las candidaturas de García de Loaysa y de Fernando de Valdés. Por otra parte, los vínculos que unían a la familia Cobos con determinados canónigos cristianos nuevos del cabildo de la catedral de Toledo fue una cuestión fundamental para la consecución de sus objetivos en relación a la perpetuación de la titularidad del Adelantamiento de Cazorla. Parece claro que Martínez Silicio unió estos tres aspectos, saldando su contencioso con los descendientes de Francisco de los Cobos, reclamando nuevamente el derecho de provisión del Adelantamiento como perteneciente a la jurisdicción episcopal, y tratando de contrarrestar sus apoyos en el seno del cabildo a través de la exigencia de la limpieza de sangre (38). El arzobispo apeló la concesión a perpetuidad realizada por Paulo III al marqués de Camarasa tanto en Roma como ante Carlos V (39), dando así comienzo a un pleito que no se concluyó de forma definitiva hasta los primeros años del siglo XVII, puesto que, aunque por una bula de Paulo IV, fechada el 18 de mayo de 1556, quedaba declarada nula la posesión otorgada a la familia Cobos, estando obligado el titular, Diego de los Cobos, a devolver los frutos adquiridos por este medio de forma indebida, siendo restituido al arzobispado el Adelantamiento. El marqués de Camarasa recurrió esta determinación, primero en la Chancillería de Granada y, posteriormente, en Roma. Por su parte, Martínez Silicio, en virtud de dicho

(38).- A.A.SICROFF, op. cit., pp, 127-128; D.CASTEJON Y FONSECA, Primacía de la Santa Iglesia de Toledo. Madrid 1945, II, pp, 1008-1009 y 1021; El voto de Gaspar de Quiroga en el seno del cabildo fue favorable a la defensa de la jurisdicción episcopal (ACT, Actas Capitulares. Tomo 8, fol. 91v).

(39).- La carta remitida por Martínez Silicio al emperador aparece recogida en S.DE HOROZCO, op. cit., pp, 153-167; BPRM, II/1823, I, fol. 285r-292v.

documento, nombró a Ruy Gómez de Silva adelantado de Cazorla (40).

La actividad desplegada por el arzobispo toledano en favor de la adopción de los estatutos de limpieza de sangre le llevó no sólo a procurar su imposición en su iglesia, sino que trató de hacerla efectiva en todos aquellos ámbitos donde pudiese alcanzar su influencia. Este fue uno de los motivos principales que condujeron a su enfrentamiento con la compañía de Jesús, y que vino a poner de manifiesto las diferencias en materia de religiosidad existentes entre el prelado y dicha Orden. La negativa de Ignacio de Loyola a implantar esta normativa de exclusión para los conversos, a los que se siguió admitiendo sin ninguna contrariedad en el seno de la misma, así como el establecimiento de los jesuitas en Alcalá de Henares y la fundación de un colegio sin contar con la expresa autorización del arzobispo, que interpretó esta acción como un menoscabo de su autoridad, motivaron que Martínez Silicio mostrase una abierta hostilidad hacia los miembros de la Compañía de Jesús. Así, el 29 de octubre de 1551, prohibió a los jesuitas predicar, confesar, administrar la Eucaristía y celebrar misa en la archidiócesis, castigando a aquellos clérigos que realizasen los ejercicios ignacianos (41). Fue necesaria la intervención del nuncio Poggio y del príncipe Felipe para forzar al arzobispo a revisar sus disposiciones, prevaleciendo finalmente los privilegios otorgados por el pontífice a la Orden. La Compañía de Jesús terminó por adoptar los estatutos de limpieza de sangre en 1593, cediendo así a las presiones que se habían realizado respecto a esta cuestión. La polémica dentro del propio instituto estalló en 1572, tras la muerte de Francisco de Borja. La persona que parecía llamada a ser su sucesor era Juan de Polanco, de origen converso. Esta característica fue instrumentalizada por los jesuitas portugueses e italianos, quienes se opusieron al candidato aduciendo este motivo, aunque realmente el problema estrivaba en la elección de otro general hispano. En este

(40).- J.F.RIVERA RECIO, op. cit., pp, 119-120; F.DE PISA, op. cit., fol. 261r.

(41).- Sobre la enemistad de Martínez Silicio hacia la Compañía de Jesús y sus motivaciones, véase, A.A.SICROFF, op. cit., 316-336; M.BATAILLON, op. cit., p, 803; A.DOMINGUEZ ORTIZ, La clase social de los conversos en Castilla, pp, 70-73; J.CARO BAROJA, op. cit., II, pp, 233-234; J.GIL CALVO, La Compañía de Jesús en la Historia de Toledo. Madrid 1979, pp, 33-34; R.GARCIA VILLOSLADA, op. cit., p, 763.

sentido, como veremos, la propia actitud de Gregorio XIII respecto al dominio hispano en la Compañía de Jesús supuso un hecho fundamental en el devenir de la Orden (42).

Si bien Gaspar de Quiroga había colaborado activamente, como hemos señalado, con Martínez Silicio en la promulgación de los estatutos de limpieza de sangre, no se acomodó a las disposiciones realizadas por el arzobispo en relación a los jesuitas, de quien Quiroga había recibido tanto apoyo y a los que siguió demostrando su amistad y cercanía en estas adversas circunstancias. El 30 de octubre de 1551, es decir, sólo un día después de los decretos arzobispaes en contra de la Compañía de Jesús, el jesuita Francisco de Villanueva escribía desde Madrid a Ignacio de Loyola. Le comunicaba que había encontrado en Toledo un ambiente muy favorable hacia la Orden, principalmente proveniente de aquellos que eran contrarios al arzobispo, pero también entre sus partidarios. Entre estos resaltaba a Gaspar de Quiroga, quien no reparaba en afirmar públicamente su adhesión a los jesuitas y a su labor (43). Esta vinculación a la Compañía de Jesús le llevó a realizar, en el verano de 1552, los ejercicios prescritos por San Ignacio, siguiendo sus propios deseos expresados a Pedro Fabro durante sus primeros encuentros y sin tener en cuenta la prohibición arzobispal. Los mismos los realizó en el castillo de Almenara, propiedad del Conde de Mélito y situado en las inmediaciones de Alcalá de Henares, teniendo como director espiritual a Francisco de Villanueva o al Padre Tablares (44).

Así pues, si bien el desvalimiento de Gaspar de Quiroga tras la muerte de Tavera condujo a que prestase su apoyo a diversas actuaciones ejecutadas por Silicio encaminadas a la reforma de la iglesia toledana, no obstante, su

(42).- En relación a estos aspectos, véase, J. LOPEZ DE AYALA Y ALVAREZ DE TOLEDO, op. cit., p. 136; A. MARTÍN OCETE, El arzobispo don Pedro Guerrero y la política conciliar española en el siglo XVI. Madrid 1970, II, p. 398; J. CARO BAROJA, op. cit., II, pp. 235-236.

(43).- MHSI, Epistolae Mixtae. Madrid 1899, II, p. 609: "y el licenciado Quiroga, que en esto no es el que menos calor muestra, dize que, quando vaya a intimarle algo, que tengo dir a su casa, y que quiere yr conmigo, y que sepa todo el mundo que el favorece esta obra, y a de morir por ella".

(44).- I. IPARRAGUIRRE, Historia de los ejercicios de San Ignacio. Bilbao-Roma 1955, I, p. 271; II, p. 550; MHSI, Litterae quadrimestres. Madrid 1895, II, pp. 14-15.

vinculación, ya señalada, a la vía de espiritualidad representada por la Compañía de Jesús dificultó seriamente la buena marcha del entendimiento entre ambos, sobre todo tras producirse el enfrentamiento entre el prelado y dicha Orden. Esta evolución en las relaciones entre el arzobispo y Gaspar de Quiroga se hizo patente a través de su actuación en el seno del cabildo catedralicio.

3.2. La colaboración en la reforma de la iglesia toledana

La importancia de la iglesia de Toledo venía determinada tanto por la enorme extensión territorial de su archidiócesis y la importante cuantía de sus rentas, como por constituir la Iglesia Primada de la Monarquía hispana. A comienzos del siglo XVI se consideró la modificación de su configuración geográfica, tratándose de propiciar la creación de nuevas diócesis atendiendo a los criterios que marcaban el aumento de la población y la necesidad de procurar a los fieles una mayor atención pastoral. Sin embargo, los intentos de desmembración del arzobispado toledano iniciados por los Reyes Católicos obtuvieron el dictamen adverso del Consejo de Castilla. Estos fueron retomados por Carlos V, quien, si bien obtuvo una bula de León X por la que quedaban configuradas dos nuevas diócesis, Alcalá de Henares y Talavera de la Reina, en marzo de 1518, tuvo que plegarse a la resistencia del cabildo catedralicio a admitir la validez del documento pontificio, y a acceder, mientras este estuviese en vigor, a la toma de posesión del nuevo arzobispo, Guillermo de Croy, por lo que se vio forzado a solicitar al pontífice su revocación unos meses después. El consistorio aducía, como anteriormente lo había hecho el Consejo Real, que tales medidas atentaban contra la autoridad y prestigio de la Sede Primada. Es decir que, por encima de los criterios pastorales prevalecieron los jurídicos, que mantenían que el contar con una jurisdicción y unos señoríos temporales importantes constituían un factor esencial para los prelados. Esta era, no obstante, la razón fundamental que había motivado el proyecto de división del arzobispado por parte de los Reyes Católicos, puesto que las características del mismo otorgaban a su prelado un considerable poder que, como se había evidenciado durante la ocupación de la mitra por el arzobispo Carrillo, no

siempre se hallaba en consonancia con las directrices prescritas por la Corona (45).

El cambio constitucional sufrido por la Monarquía hispana en los albores de la Edad Moderna y la génesis de un aparato institucional centralizado conllevaban consustancialmente el desarrollo de una política confesional directamente impulsada desde la Corona. Este proyecto no sólo contemplaba la consecución de la unidad religiosa de los territorios adcritos a la misma y la consiguiente erradicación de la herejía, sino que también establecía unos criterios modélicos que perseguían la reforma de la Iglesia Católica. La conjunción de estas dos esferas, política y religiosa, vino a configurar el pilar fundamental del ideario de la Monarquía, generándose una simbiosis entre ambas que se convirtió en indisoluble, y que fue matizando con ciertas peculiaridades hispanas la propia reforma católica, viniendo además a condicionar seriamente las relaciones entre la Monarquía hispana y la Santa Sede. El andamiaje de esta reforma fue establecido por los Reyes Católicos, quienes junto a una realidad sociopolítica nueva propugnaron el establecimiento de una religión renovada. La culminación del proyecto se fue marcando en diversos jalones a lo largo del siglo XVI. Así pues, fue durante el reinado de Isabel y Fernando, y bajo su supervisión, cuando se dieron los primeros pasos para acometer la labor de reforma de la Iglesia hispana (46).

El vehículo esencial para la aplicación de las medidas reformísticas

(45).- El arzobispado de Toledo no sólo no sufrió ninguna merma territorial a comienzos del siglo XVI, sino que se vio incrementado en 1514 con la adhesión de la iglesia de Orán como vicaría, incorporada por Cisneros, quien había organizado la expedición de conquista. En torno a la evolución geográfica de dicha demarcación, véase, D.MANSILLA, "Panorama histórico-geográfico de la iglesia española en los siglos XV y XVI" en R.GARCIA VILLOSLADA, op. cit., III-1º, pp, 13-14; Ibid., "La reorganización eclesiástica española en el siglo XVI" Anthologica Annua 5 (1957), pp, 44-78; T.DE AZCONA, La elección y reforma del episcopado español en tiempos de los Reyes Católicos. Madrid 1960, p, 31.

(46).- En torno al programa reformístico de los Reyes Católicos, véase, J.GARCIA ORO, Cisneros y la reforma del clero español en tiempos de los Reyes Católicos. Madrid 1971, pp, 31-59 y 351-353; Ibid., La reforma de los religiosos españoles en tiempos de los Reyes Católicos. Valladolid 1969, pp, 31-33; T.DE AZCONA, "El hecho episcopal hispano en tiempo de Carlos V (1516-1558)" El Erasmismo en España. Santander 1986, pp, 285-286.

auspiciadas desde la Corona fue el episcopado. Fue por ello, que se trató de buscar el medio de mantener la provisión de los prelados bajo el control regio. A través de la apoyatura legal que proporcionaba el patronato, del que derivaba el derecho de presentación de las Iglesias catedrales, los monarcas potenciaron el nombramiento de aquellos obispos cuya actuación revistiese unas características acordes a su proyecto político y de reforma eclesiástica. Realmente, se trataba de seleccionar a aquellas personas más aptas para establecer un robusto gobierno en su diócesis, unido a sus cualidades como buen pastor de almas y capacidad de reformatión (47).

La intervención directa de la Corona en la designación del episcopado interfería los intereses de la Santa Sede, pero, principalmente, chocaba con las tradicionales atribuciones de los cabildos, a quienes, hasta los comienzos de la Edad Moderna, correspondía realizar dicha elección. Su exclusión en lo referente a esta actuación motivó que estos organismos se plegasen sobre sí mismos, generando un foco de tensión y de resistencia ante las medidas reformísticas que los nuevos obispos trataban de implantar. Si bien, tradicionalmente, se ha atribuido esta oposición a los criterios reguladores y disciplinarios aplicados por los prelados a motivaciones bastante superficiales, lo cierto fue que los cabildos plantearon su resistencia al proceso de absorción al que se les había condenado (48).

Claro exponente de las pugnas mantenidas entre prelados y cabildos fue la sostenida por la figura emblemática de la política religiosa y del ideario

(47).- Esta visión de "obispo ideal" configurada por la Corona se tradujo en una serie de criterios para su selección, que se pueden resumir en: que fuesen naturales de sus reinos, que condujesen su vida con honestidad, que perteneciesen a un estamento social medio o bajo, y que contasen con una importante formación intelectual. En torno a dichos aspectos, véase, T.DE AZCONA, La elección y reforma del episcopado..., pp, 201-228, 241 y 293-304; Idem, "Reforma del episcopado y del clero de España en tiempos de los Reyes Católicos y de Carlos V (1475-1558)" en R.GARCIA VILLOSLADA, op. cit., pp, 145-163.

(48).- Sobre la privación del derecho de elección de los prelados como motivo principal de la actitud negativa de los cabildos a la reforma religiosa, véase, T.DE AZCONA, "Reforma del episcopado...", pp, 118-123 y 178-179; L.GUTIERREZ MARTIN, El privilegio de nombramiento de los obispos en España. Roma 1967, pp, 93-110.

reformista durante el reinado de los Reyes Católicos, el Cardenal Francisco Ximenez de Cisneros, a quien la Reina Católica puso al frente de la Sede Primada en 1495, y el consistorio catedralicio toledano. Las tensiones entre ambos alcanzaron importantes cotas, sobre todo en lo referente a aquellas medidas innovadoras que atentaban contra sus privilegios jurisdiccionales y exenciones. El celo reformístico de Cisneros, tras los intentos del cabildo de apelar contra el pontífice, temeroso de las consecuencias que le depararía el mismo, y que se saldó con la detención por parte del arzobispo del procurador Alfonso Carrillo, terminó imponiéndose a través de la ejecución de diversas visitas y de la celebración de sínodos diocesanos en Alcalá de Henares y en Talavera de la Reina en 1497 y 1498 respectivamente. Ciertamente, la labor de Cisneros como arzobispo reformador se centró en los primeros años después de su designación, pues, posteriormente, sus obligaciones políticas distrajeran sus esfuerzos para poder alcanzar un mayor desarrollo de su obra (49).

El testigo de la actuación iniciada por Cisneros fue recogido por sus sucesores en la mitra toledana, especialmente por Juan Pardo de Tavera, quien celebró sínodo diocesano en Toledo en 1536. La importancia de su realización residió no sólo en que las constituciones emanadas del mismo configurasen una completa síntesis de las legislaciones diocesanas precedentes, sobre todo de las realizadas en tiempos de los arzobispos Carrillo y Cisneros, sino en que en muchos aspectos supusieron, con la anticipación de varias décadas, un avance de las normativas establecidas en el Concilio de Trento, convirtiéndose, en consecuencia, en obligada referencia para las constituciones diocesanas toledanas postridentinas (50). Al igual que había procedido Cisneros, para mermar la

(49).- Sobre la labor reformística de Cisneros como arzobispo de Toledo, y sus difíciles relaciones con el cabildo catedralicio, véase, J.GARCIA ORO, Cisneros y la reforma del clero..., pp, 271-310; C.SANCHEZ ALISEDA, "Precedentes toledanos de la reforma tridentina" Revista española de Derecho Canónico 3 (1948), pp, 464-477; J.MESEGUER FERNANDEZ, "Relaciones del Cardenal Cisneros con su Cabildo Catedral" V Simposio Toledo Renacentista. Madrid 1980, I, pp, 25-147; Sobre la organización del consistorio toledano, véase, J.GARCIA ORO, La Iglesia de Toledo en tiempos del Cardenal Cisneros (1495-1517). Toledo 1992, pp, 51-67.

(50).- C.SANCHEZ ALISEDA, op. cit., pp, 479-494. Por otra parte, hemos de señalar que, con la llegada de Carlos V al trono y la ostentación de los principales cargos de la Monarquía por individuos provenientes del "partido fernandino", como era el caso de Tavera, esto tuvo una

resistencia del cabildo a la implantación de las medidas reformísticas, Tavera se ayudó de personas de probada fidelidad personal e ideológica que fue promocionando para que formasen parte del mismo. Este fue el caso, como hemos señalado, de Gaspar de Quiroga, que si bien no pudo procurar su apoyo a su mentor y al proyecto de reformas por la inminente muerte de éste tras su promoción como canónigo, no dudó en proporcionar su ayuda a su sucesor en el arzobispado, Juan Martínez Silicio.

La elección de Silicio como nuevo titular de la Sede Primada se debió a una valoración personal del propio Carlos V, que antepuso los criterios de la trayectoria de honestidad vital del candidato y sus aptitudes reformadoras, sin atender a las opiniones de sus consejeros, especialmente de Francisco de los Cobos, quien frente a la candidatura de Silicio apoyaba a otros pretendientes como García de Loaysa y Fernando de Valdés (51). Desde su llegada a la mitra toledana, Silicio emprendió una labor que se hallaba en consonancia con los principios que habían motivado su designación para ocupar dicha dignidad. Para llevar a cabo la consecución y continuación de la aplicación del ideario reformista, el arzobispo tuvo que vencer serias dificultades que le enfrentaron al cabildo, aunque dentro del mismo también encontró diversas figuras que apoyaron sus gestiones contribuyendo a sustentar el proyecto de reformas promocionado desde la Corona. No es nuestra intención realizar un estudio de la tensa convivencia que mantuvieron el prelado y el consistorio catedralicio, en las que el establecimiento del estatuto de limpieza de sangre actuó en todo momento como telón de fondo (52), sino la de reflejar la evolución de las

traducción también en una mayor ocupación de los obispados por parte de eclesiásticos vinculados al mismo, entre los que dominaban los que contaban con una formación jurídica frente a los teólogos, y versados, por tanto, más en una experiencia administrativa que rigurosamente pastoral. "Sin mermar su altura eclesiástica, fueron piezas usadas en el tablero de la política bajo la alta coloración de servicio a la Cristiandad y a la Corona" (T.DE AZCONA, "El hecho episcopal...", pp, 269-280).

(51).- Ibid., "Reforma del episcopado...", p, 156; H.KENISTON, op. cit., pp, 259, 261, 281-282 y 333.

(52).- Por otra parte, las mismas ya han sido esbozadas en el trabajo de H.RODRIGUEZ DE GRACIA, "Documentos para la biografía del Cardenal Silicio" *Anales toledanos* 28 (1984), pp, 85-179, en el que transcribe un documento procedente del Archivo Diocesano de Toledo, fechado en

relaciones entre Martínez Silicio y Gaspar de Quiroga, así como el apoyo del canónigo a dicha labor de reforma a través de sus actuaciones en el seno del capítulo.

La aportación de Quiroga a la reforma de la iglesia toledana fue considerable, quedando constatada por las diversas actividades que llevó a cabo. Así, hemos de destacar, que tomó parte en la instrucción de diversas visitas auspiciadas por el propio cabildo. El 22 de septiembre de 1551 recibió comisión y nombramiento para acudir, junto a otros miembros del consistorio, a la visita del Sagrario catedralicio acompañando a Martínez Silicio (53). De igual manera, el 28 de mayo de 1552 fue comisionado para examinar a los poseedores de las canonjías extravagantes que estaban presentadas hasta dicha fecha (54). Al año siguiente, si bien fue llamado para colaborar en favor de la ejecución realizada por los visitadores del Hospital del Nuncio (55), su labor en torno a estas asuntos se centró en la capilla de San Pedro. El día 27 de enero el consistorio cometió a Quiroga y a Antonio de León que hiciesen información de cómo servían los capellanes de San Pedro. Una vez elaborada, debían reunirse con los letrados del cabildo y resolver sobre dicho asunto según justicia. Efectuada la relación por ambos canónigos sobre la cuestión de si los poseedores de ellas, los racioneros Martín de Mariana y Juan Alvarez, y el capellán del coro y de los Reyes Nuevos, Domingo de Aguirre, estaban obligados a la residencia según era la voluntad del testador, se procedió a la votación en el seno del capítulo. La opinión expresada por Gaspar de Quiroga fue apoyada unánimemente. Esta era que, puesto que la obligación de la residencia estaba establecida, se debía poner de manifiesto a través de la elaboración de un estatuto, y, dado que dos de sus ostentadores estaban impedidos para cumplir con

1556, en el que el cabildo reflejaba los agravios que recibía por parte del prelado.

(53).- ACT, Actas Capitulares. Tomo 8, fol. 231v.

(54).- Ibid., tomo 9, fol. 41v.

(55).- El 18 de enero Quiroga recibió el encargo de atender la petición realizada a los visitadores por el jurado Juan de San Pedro. Las diferencias surgidas entre ambas partes propiciaron un pleito en relación al que, nuevamente Quiroga, junto a otros canónigos capitulares, fue señalado para tratar de alcanzar una concertación (Ibid., fols. 77v y 147v).

la misma por sus otras obligaciones, debían renunciar bien a esta capellanía o bien a sus otras ocupaciones que obstaculizaban esta residencia (56). En consecuencia, Gaspar de Quiroga prestó su apoyo a las proposiciones realizadas por Bernardino de Alcaraz en relación a efectuar diversos nombramientos para cubrir las capellanías de San Pedro, aunque, posteriormente, fue inútil su intento de impedir que el número de las mismas se viese incrementado (57). Igualmente, en mayo de 1554, Quiroga fue nominado por el cabildo como visitador de la iglesia del Santísimo Sacramento de Torrijos, siendo comisionado con posterioridad junto al doctor Peralta para tratar con los capellanes de ésta sobre las peticiones realizadas por el duque de Maqueda (58). Las actividades de Quiroga relacionadas con la ejecución de visitas concernientes al capítulo terminaron en noviembre de dicho año, cuando contradijo la decisión del cabildo de pagar al escribano mayor Antón Gómez los derechos que le correspondían por el ejercicio entero del año por la realización de las copias de la visita. Quiroga mantuvo que sólo se le debían abonar dos terceras partes como era la costumbre (59).

Sin embargo, mucho más interesante nos parece su actuación en relación con las visitas promovidas por el prelado. El 7 de marzo de 1553, el cabildo se reunió para tratar las cuestiones pertinentes acerca de la visita que Martínez Silicio pretendía hacer a los beneficiados de la iglesia toledana. El deán Diego

(56).- Ibid., fols. 79v-82v.

(57).- Ibid., fols. 139r, 140v y 169v-170r; El fundador, don Pedro Tenorio, otorgó el patronato de la capilla al cabildo catedralicio, que, con el incremento de las fundaciones y rentas, acrecentó también el número de capellanes (J.M.CAMPOY GARCIA, Apuntes sobre la parroquia capilla de San Pedro de la Santa Iglesia Primada. Toledo 1926, pp. 5-12). De igual manera, sobre las actividades de Quiroga en relación a la provisión de la capilla de San Eugenio, véase, ACT, Actas Capitulares. Tomo 8, fol. 171v.

(58).- Ibid., tomo 9, fols. 186v y 201r. Dicha iglesia fue fundada por doña Teresa Enriquez, esposa del destacado personaje en la Corte de los Reyes Católicos don Gutierre de Cárdenas, primer duque de Maqueda. La actuación de doña Teresa en favor de diversas fundaciones con advocación al Santísimo Sacramento hizo que Julio II la distinguiese con el título de "la loca del Sacramento". Cuando murió dejó como patrono de su creación en Torrijos a su hijo don Diego y a sus descendientes (M.A.ALARCON, Apuntes históricos sobre la villa de Torrijos. Valencia 1894, pp. 93-123, 158-167 y 223).

(59).- ACT, Actas Capitulares. Tomo 9 fol. 220v.

de Castilla expuso que si bien se había diputado a varios miembros del mismo, entre los que se encontraba Gaspar de Quiroga, para que acudiesen ante el arzobispo para referirle que en la ejecución de esta se guardase por su parte la costumbre establecida por sus antecesores, consistente en que en la misma no mediase juramento, ni escrituras, ni firma del secretario, el prelado no se había pronunciado al respecto. Por ello proponía que nuevamente le fuese solicitada dicha merced, aunque significaba la importancia de que la visita se realizase, por lo que, si no cabía otra solución, cumplirían con la forma de proceder que fijase Martínez Silicio para evitar el surgimiento de inconvenientes. Así pues, el día 27 de dicho mes, el cabildo comisionó a diversos canónigos, entre los que de nuevo se encontraba Quiroga, para reiterar ante el prelado esta petición por los indicios de que la instrucción de la visita iba a dar comienzo (60).

En el mismo sentido hemos de entender la activa participación de Quiroga en la defensa de la jurisdicción de la iglesia toledana, a favor de la preservación de las prerrogativas de la misma frente a la justicia real, así como en el desarrollo de varios pleitos e intervención en diversos conflictos jurisdiccionales. Así, el 26 de octubre de 1548, Quiroga presentó ante el cabildo una relación de los agravios que la justicia seglar había realizado a la iglesia toledana y a sus miembros, representando que había sacado hombres de ella contra razón y justicia, prendiendo a sus beneficiados y confinándoles en las cárceles públicas entre malhechores, así como dictando prisión sobre los oficiales del cabildo que solamente atendían a la realización de su oficio. Quiroga suplicaba al consistorio que, puesto que se habían promovido jueces seculares nuevos, se platicase sobre estas ofensas cometidas para que no se volviesen a repetir, y que los anteriores ejecutores fuesen castigados por su incorrecto proceder. El capítulo comisionó al propio Quiroga y al capellán mayor Blas de Ortíz para que acordasen lo que se debía demandar en este sentido al alcalde mayor y alguaciles (61). Sin embargo, los choques jurisdiccionales se siguieron produciendo, pues, en septiembre de 1550, el cabildo designaba a Bernardino de Alcaraz y a Gaspar de

(60).- Ibid., fols. 86r-89v y 90v; D.CASTEJON Y FONSECA, op. cit., p, 1045.

(61).- ACT, Actas Capitulares. Tomo 8, fol. 81r.

Quiroga para que tratasen con el corregidor acerca de las ofensas que la justicia seglar infligía a la iglesia toledana en la población de Hazaña, apelando sus mandamientos al respecto del nombramiento de oficiales en virtud de la ejecutoria dada sobre la jurisdicción de dicho lugar, y para que mantuviesen informado al consistorio de la evolución del asunto (62). La participación de Quiroga en esta cuestión también venía determinada por que el 11 de abril de dicho año había sido nombrado por el capítulo, junto a Diego de Guzmán, gobernador de la Sagra (63). El 20 de mayo el consistorio encargaba al propio Quiroga y a Leonardo Ortiz, que sustituyó a Diego de Guzmán en el cargo, que acudiesen a designar los oficiales en dicha demarcación (64), produciéndose como resultado el contencioso referido. El origen de las diferencias se encontraba en que el cabildo nombraba a las autoridades en cuatro pueblos situados en la comarca de la Sagra: Alamada y Cobeja de la Sagra, Hazaña y Yeles. Si bien estas poblaciones pertenecían jurisdiccionalmente al realengo, aceptaban nominalmente la jurisdicción de la ciudad de Toledo, que era ejercida de forma efectiva por el cabildo catedralicio, que tenía además en las mismas importantes intereses económicos (65). Así pues, en virtud de esta actuación, los conflictos con la jurisdicción real se sucedían en cada ocasión que el consistorio procedía a la designación de los diferentes cargos. De esta manera, nuevamente en enero de 1554, los capitulares Quiroga y Ortiz hicieron efectivas sus actividades en relación a los asuntos de gobierno de dichos lugares (66). Acudieron a Hazaña como visitadores y con la misión de realizar el

(62).- La gestión debió resultar eficiente, pues, sólo unos días después, el cabildo nominaba como alcalde de Hazaña a Sebastián Martín (Ibid., fol. 186r-v).

(63).- Ibid., fol. 116v.

(64).- Ibid., fol. 124v. El 31 de julio el cabildo les comisionó para que atendiesen las peticiones realizadas desde Hazaña (Ibid., fol. 133v).

(65).- E.LORENTE TOLEDO, Gobierno y administración de la ciudad de Toledo y su término en la segunda mitad del siglo XVI. Toledo 1982, p. 63-64; I.LOPEZ CELADA, Evolución de las rentas del cabildo de la Catedral de Toledo durante el último cuarto del siglo XVI. Toledo 1980, pp. 29-31; V.RODRIGUEZ, Notas sobre la Historia y Geografía de la Sagra. Toledo 1983, p. 16; S.MOXO, Los antiguos señoríos de Toledo. Toledo 1973, pp. 122-123.

(66).- ACT, Actas Capitulares. Tomo 9, fol. 161v.

nombramiento del alcalde, regidores, alguacil, escribano y portero. Sin embargo, no llegaron a señalar a ninguno de los integrantes de la nómina que les fue presentada para este efecto, remitiendo la provisión final al capítulo. Por ello, en octubre de dicho año, el mayordomo de esta población presentó ante el consistorio la petición de que dichos oficios fuesen definitivamente cubiertos, puesto que los gobernadores se limitaron a admitir a los designados por el concejo en espera de la decisión del cabildo (67). Las nuevas provisiones de cargos motivaron que una vez más se iniciase el subsiguiente pleito con la justicia regia en el mes de diciembre, siendo Gaspar de Quiroga comisionado por el capítulo también en esta ocasión para el seguimiento del mismo (68). Por otra parte, los problemas en relación a la justicia real se siguieron sucediendo, así como la intervención del mismo referido a otros temas. El 13 de julio de 1553 recibió el mandato del cabildo de sustanciar un proceso realizado incorrectamente, relacionado con el entredicho surgido en el corregidor de Toledo, con el fin de que se restituyesen unos presos que había sacado de la iglesia de Palomeque (69). De igual manera, en marzo de 1554, Antonio de la Rua, notario de la audiencia arzobispal, presentó en el consistorio un nuevo conflicto existente entre el teniente del vicario general de Toledo y el corregidor y alcalde de esta ciudad en cuanto a que éste se había negado a entregar a un clérigo que tenía confinado en la cárcel real. El capítulo designó nuevamente a Quiroga para que estudiase el proceso, así como para que, junto a Gaspar de Aponte, se entrevistase con el corregidor (70).

Sin embargo, la actuación de Quiroga no sólo se ciñó a los conflictos mantenidos por la iglesia toledana con la justicia real, sino que también afectó a otro tipo de contenciosos. Como hemos señalado, los problemas jurisdiccionales

(67).- Ibid., fols. 218v-219v. El consistorio nombró como alcalde a Alonso de la Pompa, como regidores a Melchor Cabello, a Francisco del Cerro y a Diego Magán, como alguacil a Juan del Cerro el mozo, a Alonso Cabello como escribano, y a Pedro de la Pompa como portero.

(68).- Ibid., fol. 225r.

(69).- Ibid., fol. 107r.

(70).- Ibid., fol. 175r.

habidos entre la Universidad de Alcalá de Henares y el Cardenal Tavera, que tan negativas consecuencias depararon a Quiroga, tuvieron su continuidad durante la prelación de Martínez Silicio, actuando de nuevo el canónigo en favor de los intereses arzobispales. Así, en el mes de agosto de 1549, Quiroga fue encargado por el cabildo, junto a otros de sus miembros, de ocuparse de la apelación presentada por el Colegio de San Ildefonso a los mandamientos establecidos por el comisario encargado de la realización de la última visita (71). En relación con esta ocupación, en enero de 1550 recibió una comisión del consistorio por la que se le ordenaba que ejecutase ante el capítulo una información de lo aducido por dicha institución (72).

Por otra parte, hemos de señalar la importante actividad desplegada por Quiroga en torno a aquellos pleitos que afectaban a la percepción de rentas para las arcas de la iglesia toledana, especialmente en los relacionados con la cobranza del diezmo. Así, el 5 de julio de 1549 fue nombrado por el cabildo para que fuese a Roma a entender en el contencioso que dicha iglesia mantenía en Huéscar y Castilléjar respecto al cobro de dicha renta, asignándosele dos ducados de salario por cada día empleado en la resolución del mismo. También establecía el consistorio que el arzobispo debía designar una persona que fuese a la Corte a ocuparse de este asunto (73). No sabemos si este segundo nombramiento se llegó a realizar, pero parece claro que Gaspar de Quiroga, a pesar de la comisión recibida, no abandonó Toledo, pues siguió asistiendo regularmente a las convocatorias del cabildo, siendo de nuevo designado por éste, el 19 de julio, junto a otros de sus miembros para que acordasen como convenía proceder en relación a las apelaciones realizadas por la iglesia de Guadix en este sentido (74). La actuación de Quiroga en lo referido a este asunto se vió continuada

(71).- Ibid., tomo 8, fol. 135v; Sobre los problemas que enfrentaron al arzobispo con la Universidad alcalaína, véase, C.SAEZ (Ed.), Annales Complutenses, pp. 509ss.

(72).- ACT, Actas capitulares, tomo 8, fols. 156v y 157v.

(73).- Ibid., fol. 130v.

(74).- Ibid., fol. 132v.

en los meses de mayo y junio de 1551 (75), en que fue nominado junto a Bernardino de Alcaraz para atender las peticiones del licenciado Becerra, del consejo arzobispal, en nombre del cabildo de Guadix para que fuesen satisfechas la tercera parte del onceavo de las rentas de Huéscar, Castelléjar y Bolteruela desde el tiempo que se hizo la concordia con el arzobispo Tavera y el consistorio toledano de una parte, y el obispo de Guadix y el cabildo de dicha iglesia por otra, hasta el fin de de 1549, recibiendo el mandato de que, si todo se hallaba en conformidad, realizasen el despacho correspondiente (76). De igual manera, en diciembre de dicho año, ambos fueron comisionados para decidir cómo se debía responder al auto que había intimado el Consejo arzobispal en relación a los diezmos de la iglesia de Corral de Toro (77). Su actividad en torno a estos contenciosos continuó en marzo de 1550, cuando el consistorio encargó a Quiroga que se ocupase de ciertos asuntos relacionados con una dehesa de Ajofrín (78). Dicha población pertenecía al cabildo por donación de Inés García de Barroso. El fruto de los arrendamientos que éste realizaba de las huebras, tierras y prados estaba obligado al pago del diezmo (79). Igualmente, el 27 de abril de 1551, el cabildo hizo nombramiento y comisionó a Quiroga para viajar a Madrid con la misión de entender en el negocio referido a los diezmos de dicha villa, puesto que, en días pasados, se habían notificado unas letras ejecutoriales e innovaciones realizadas por el brazo seglar contra el consistorio toledano. Así mismo, recibió mandato de los dichos señores para confeccionar el despacho y apelación que debía llevar un capellán a Segovia en

(75).- El 27 de enero de 1551, el consistorio había comisionado al tesorero García de Manrique, a Rodrigo Zapata, a los licenciados Quiroga y Salazar, y al deán o en su ausencia a Bernardino de Alcaraz, para que solicitasen y comprobasen la forma cómo se seguían todos los pleitos que la iglesia toledana estaba manteniendo, ocupándose de procurar el dinero necesario para su seguimiento, y se ocupasen de todas las cuestiones inherentes a los mismos (Ibid., fols. 197v-198r).

(76).- Ibid., fols. 216v y 219v. Sin embargo, los problemas en relación a los diezmos de estas poblaciones continuaron durante largos años, enfrentando en un largo pleito al arzobispo Silicio y al duque de Alba, cuya resolución quedó cometida a la Sacra Rota (H. RODRIGUEZ DE GRACIA, op. cit., p. 176).

(77).- Ibid., fol. 152r.

(78).- Ibid., fol. 163r.

(79).- S. MOXO, op. cit., pp. 121-122; I. LOPEZ CELADA, op. cit., pp. 25-27.

relación con este asunto, así como para designar la persona más apropiada para hacerles llegar dichos documentos (80). También, el 2 de mayo de 1552, el capítulo designaba al doctor Blas de Ortiz y al licenciado Quiroga para tratar con Francisco de Rojas sobre la concordia de los diezmos del Castañar, en torno a los que se había establecido un pleito, y para que el tema quedase definitivamente concluido (81).

En otro orden de asuntos, más netamente económicos, hemos de destacar la defensa que Gaspar de Quiroga realizó de los intereses del cabildo toledano en cuanto a la cimentación de sus rentas, así como en la realización de labores de control para que no se produjesen abusos ni fuesen conculcados sus derechos (82). Desde septiembre de 1548 Quiroga fue comisionado por el consistorio para que resolviese la cuestión relativa al tributo que debía pagar el conde de Cifuentes por las casas del capítulo que tenía ocupadas (83). Sin embargo, las negociaciones para alcanzar una concordia al respecto se fueron complicando, situación de la que Quiroga culpaba a la posición mantenida por el propio conde y sus agentes. Por ello, el canónigo pensaba que consentir esta actuación constituía un mal ejemplo, y que se debía hacer efectiva la ejecutoria dictada por el arzobispo en favor de los derechos de la iglesia (84). Durante los meses de febrero y marzo de 1553, la actividad de Quiroga en torno a las casas pertenecientes al cabildo se centró en realizar una información en relación a aquellas que tenía ocupadas Alonso de Rojas (85), presentando, por otra

(80).- Ibid., fol. 213v.

(81).- Ibid., tomo 9, fol. 35v.

(82).- Por ejemplo, en junio de 1549 fue encargado por el cabildo de realizar la comprobación de si los capellanes de la Greda habían sido pagados, recibiendo una instrucción por la que se establecía que, si esto no se había producido, obligase al Marqués de Mondéjar a cubrir sus emolumentos (Ibid., tomo 8, fol. 129v).

(83).- Ibid., fols. 44r y 67r; Ibid., tomo 9, fol. 37v.

(84).- La opinión de Quiroga fue respaldada por la mayoría del cabildo (Ibid., tomo 9, fols. 100r-102v).

(85).- Ibid., fol. 82v.

parte, una contradicción ante el consistorio concerniente a cualquier concierto que se adoptase con Antonio Téllez de Guzmán, porque había tomado para su propia casa un terreno perteneciente a otra propiedad del cabildo. Al igual que en el contencioso mantenido con el conde de Cifuentes, el capítulo adoptó la decisión de hacer efectiva la ejecutoria dictada al respecto (86). La actitud amenazante del capítulo tuvo el resultado apetecido, puesto que en ambos asuntos se alcanzó a la par el entendimiento (87). Otra de las labores destacables de Quiroga en defensa de las rentas capitulares estuvo relacionada con la referida al exterminio de la langosta. Esta plaga, que asolaba las cosechas motivando la subida del precio del cereal, y en consecuencia, la aparición del hambre y de las epidemias, recibía una especial atención por parte del cabildo, que intentaba que el importante conjunto de tierras que poseía no se vieses afectadas por la acción destructora de la misma. Cuando se detectaba su presencia, el consistorio comisionaba a procuradores que coordinasen y realizasen un seguimiento de los trabajos de extinción. En el caso de Quiroga, recibió este mandato durante la primavera de 1550, 1551 y 1553 (88). Por último, y en cuanto a su actuación relacionada con el control de gastos, hemos de significar que, el 7 de julio de 1553 Gaspar de Quiroga y Pedro Cebrian contradijeron que el consistorio tuviese que cubrir el coste de la arroba y media de cera que se había gastado en demasía de las cuarenta que estaban estipuladas para el día de la fiesta del Santísimo Sacramento, solicitando que fuese la persona que la proporcionó quien debía aportar su cuantía (89).

Finalmente, una de las labores ejercidas por Quiroga que revistió gran relevancia fue la derivada de tener en su poder, al menos desde 1548, una de las

(86).- Ibid., fols. 97v-99r.

(87).- Ibid., fols. 174v-175r.

(88).- Sobre la forma de tratar de erradicar la langosta, y la participación de Quiroga en estas actividades, véase, R. IZQUIERDO BENITO, "Las plagas de langosta en Toledo y en la región manchega durante el siglo XVI" *Anales toledanos* 20 (1984), pp. 47-50 y 67-73. Hemos de hacer constar, que en 1551, Quiroga contradijo que los fondos destinados a esta finalidad proveniesen del subsidio.

(89).- ACT, Actas Capitulares. Tomo 9, fol. 115r.

llaves que daba acceso a los documentos recogidos en el archivo catedralicio, haciendo uso de ella en diversas ocasiones a lo largo de los años que ostentó el canonicato, cuando el cabildo le encargaba la localización y presentación de diversos papeles contenidos en el mismo. El abandono de esta función no se produjo hasta que hubo de ausentarse de Toledo, cuando fue nombrado auditor de la Sacra Rota, siendo designado el protonotario Miguel Díaz como nuevo depositario (90). Esta actuación adquiere su significación si tenemos en cuenta que uno de los motivos de enfrentamiento entre Martínez Silicio y el cabildo provenía de que el prelado accedía al archivo y sacaba del mismo escrituras originales, en lugar de pedir la realización de una copia como habían solicitado en cada ocasión sus antecesores (91).

3.3.El reverso de unas buenas relaciones

Para poder comprender la actuación de Quiroga durante estos años hemos de considerar diversos factores. Primeramente, que tras su retorno de Roma se encontraba desprovisto de la protección de un patrón. La muerte del Cardenal Tavera, como hemos señalado, trajo como consecuencia el relegamiento de la Corte y de los cargos que ostentaban para aquellos que habían sido sus apadrinados, que pasaron a ser ocupados por los clientes del nuevo patrón cortesano, Fernando de Valdés. Quiroga, por su parte, para tratar de evitar esta contingencia, intentó aferrarse a su canonicato catedralicio, buscando cobijo a la sombra del nuevo arzobispo. Esto vendría a explicar el hecho de que durante los primeros años de la prelación de Martínez Silicio centrase su actividad y colaborase de forma ostensible en la adopción por parte de la catedral toledana de los estatutos de limpieza de sangre, a pesar de que dicha reglamentación no se hallaba en consonancia con su propia ideología, puesto que la misma se adscribía a la vía de espiritualidad representada por la Compañía de Jesús, que,

(90).- Sobre las diversas comisiones realizadas por Quiroga en relación a los documentos del archivo y la orden de entrega de la llave en marzo de 1555, véase, *Ibid.*, tomo 8, fols. 45r, 61r, 120v-121r, 203v; *Ibid.*, tomo 9, fols. 174r y 249r.

(91).- H. RODRIGUEZ DE GRACIA, *op. cit.*, pp. 150-151.

como hemos señalado, optó por no aplicar dicha medida de exclusión (92). Esta divergencia respecto a Silicio en materia religiosa, que se cristalizó en su pública vinculación y apoyo a dicha Orden, tuvo también un reflejo dentro de su actuación como capitular, puesto que, si bien Quiroga se había plegado obedientemente a las directrices impuestas por el prelado, cuando se produjo la ofensiva de Silicio contra los jesuitas dentro de su arzobispado, a finales de octubre de 1551, las relaciones entre ambos se tornaron tirantes, en referencia con los asuntos que afectaban al cabildo y al entendimiento de éste con el prelado. Por otra parte, teniendo siempre presente estas diferencias ideológicas, y que, como la mayoría de los miembros del consistorio, sufrió los efectos del virulento modo de actuación del arzobispo, como hemos reflejado, Gaspar de Quiroga fue uno de los canónigos más activos durante dichos años, realizando multitud de actuaciones que contribuyeron a la continuación de la reforma religiosa propiciada por el prelado, con el que, a pesar de lo expuesto, no mantuvo una mala comunicación. Esto lo demuestra el hecho de que el cabildo comisionase a Gaspar de Quiroga con mucha frecuencia cuando debían tratar alguna cuestión con Martínez Silicio, encargo poco deseado por los miembros del consistorio, que temían el carácter iracundo del prelado y las humillaciones que les hacía padecer en tales ocasiones. Teniendo esto en cuenta, parece lógico que tratasen de elegir para que acudiese en representación de sus demandas a aquellos canónigos que le fuesen más gratos (93).

Las relaciones de Silicio con el cabildo catedralicio fueron especialmente conflictivas. La enérgica impronta personal que el prelado hizo extensiva a todas las cuestiones referidas al gobierno y dirección de los asuntos relativos al

(92).- Las diferencias ideológicas en materia de religiosidad entre Martínez Silicio y la Compañía de Jesús quedaron constatadas en los ataques realizados por el prelado a los Ejercicios ignacianos, pilar básico de la espiritualidad jesuítica, en la misma línea que los dominicos Pedroches y Mancio, y que forzó a Jerónimo Nadal a elaborar su Apología exercitiorum. En torno a dichos aspectos, véase, M. NICOLAU, Jerónimo Nadal (1507-1580). Sus obras y doctrinas espirituales. Madrid 1949, p. 79; Ibid., "Espiritualidad de la Compañía de Jesús en la España del siglo XVI" Corrientes espirituales en la España del siglo XVI. Madrid 1963, p. 326; I. IPARRAGUIRRE, Estilo espiritual jesuítico (1540-1600). Bilbao 1964, pp. 11ss.

(93).- Sobre el temor que despertaba en los capitulares acudir en presencia del arzobispo por los motivos expuestos, véase, H. RODRIGUEZ DE GRACIA, op. cit., p. 142.

arzobispado toledano, le condujeron a romper el equilibrio de poder establecido entre arzobispo y cabildo, invadiendo las atribuciones legislativas del consistorio a través de la aplicación sistemática de mediadas coercitivas. Si bien, como hemos señalado, la división principal en el seno del capítulo y el tema fundamental de disputa se desarrolló con relación a la implantación del estatuto de limpieza de sangre en la catedral, asunto que, por otra parte, se mantuvo siempre latente durante su prelación y constituyó un continuo foco de tensión, también hubo otras muchas cuestiones que contribuyeron notablemente a generar un ambiente de gran tirantez. Dentro de estas, hemos fijado nuestra atención en aquellas en las que la actuación de Gaspar de Quiroga adquirió una especial relevancia, y que muestran los problemas que planteaban las reformas de la organización política de las diócesis que se estaban produciendo en los reinos hispanos, adelantándose a la reforma tridentina.

Uno de los asuntos que enfrentó a Silicio con el cabildo fue el decretar la prisión, en espera de una sentencia judicial, de dos de sus miembros, Diego López de Ayala y Gaspar de Aponte, abad de San vicente, el 5 de enero de 1551, por haber proferido palabras de alteración y enojo. El consistorio se reunió tres días después, y considerando dicha medida arbitraria, comisionó a varios capitulares, entre los que se encontraba el licenciado Quiroga, para que trataran sobre esta cuestión con el arzobispo. Sin embargo, el prelado despidió a los representantes del consistorio, advirtiéndoles que desistiesen en su actividad o serían sancionados con una pena de quinientos ducados (94). El día 15, el deán y el consistorio celebraron una congregación donde se adujo que la justicia de este tema correspondía al cabildo en virtud de la constitución "De verbis contumeliosis". La misma disponía que si algún beneficiado o canónigo de dicha iglesia profería palabras injuriosas o cometía hechos vejatorios debía ser suspendido de su entrada a la iglesia o al cabildo y privado de sus frutos por espacio de un mes, quedando reservado al prelado el poder de castigar en mayor medida al infractor en relación con la magnitud de la falta cometida. Así pues, al día siguiente, confirmaron el estatuto correspondiente referido al seguimiento

(94).- Ibid., p, 96 n.21.

de dicha constitución, declarando que, cualquier beneficiado de la iglesia que fuese perjudicado por este motivo, sería restituido y puesto en libertad por el consistorio. Si bien esta disposición fue adoptada con el voto favorable de la mayoría del mismo, el doctor Blas de Ortiz, canónigo y vicario general, expresó su opinión que era mucho más favorable a la actuación del arzobispo, puesto que propuso que la constitución "De verbis contumeliosis" fuese sometida al examen de letrados, que aún no hubiesen expresado su parecer, nombrados tanto por Silicio como por el cabildo, y que, siendo ajenos a esta disputa, expresasen su dictamen conforme a Derecho, comprometiéndose ambas partes a aceptar su decisión, negándose, mientras tanto a admitir la validez de dicho documento. La decisión finalmente adoptada por el deán y el consistorio fue otorgar un estatuto, semejante al elaborado el 8 de enero de 1533, en relación a la citada constitución, pues según declararon, consideraban este negocio, como allí quedaba establecido, tocante a la libertad de la iglesia toledana (95). En consecuencia, el 26 de enero apelaron la sentencia judicial emitida por el arzobispo en cuanto a los dos capitulantes presos (96), llegando con sus gestiones ante la Santa Sede, puesto que el 28 de abril de dicho año se procedió a la ejecución de un mandato apostólico por el que el pontífice Julio III aprobaba la costumbre del cabildo de castigar a los prebendados y canónigos con el apartamiento y la pérdida hasta de un mes de sus emolumentos por las faltas en que incurriesen en virtud de la constitución "De verbis contumeliosis", en contra de la actuación realizada por el arzobispo Silicio (97). De esta manera, el cabildo defendió ante el prelado una de sus atribuciones tradicionales que siguió poniendo en aplicación, pues el 19 de junio de 1551 impuso la pena correspondiente por haber incurrido en falta en relación a lo establecido en dicha constitución al racionero Martín Pérez, buscando con este castigo un matiz ejemplarizante para que los beneficiados tuviesen un mayor recato y respeto en

(95).- en torno a dichos sucesos, véase, ACT, Actas Capitulares. Tomo 8, fols. 195v-197r.

(96).- Ibid., fol. 197v.

(97).- Dicho mandato apostólico se encuentra en Ibid., A.9.G.1.6.a.

sus personas y palabras (98). Sin embargo, cuando en agosto de 1553 tuvo lugar durante una reunión del consistorio un duro enfrentamiento verbal entre Gaspar de Aponte y Gaspar de Quiroga, y el cabildo impuso el correctivo dispuesto en la misma notificándolo al arzobispo, Martínez Silicio intervino nuevamente de forma activa en el desarrollo de esta prisión (99). Así pues, los problemas en torno a esta cuestión continuaron, puesto que, en 1556, este fue uno de los aspectos que el cabildo incluyó en su memorial de agravios realizados por el arzobispo, haciendo constar que Silicio obstaculizaba la normal aplicación de esta normativa, a pesar de encontrarse inhibido y pendiente de la resolución de la causa en el tribunal de la Sacra Rota (100).

Sin embargo, el conflicto de mayor gravedad en el que se vio envuelto Gaspar de Quiroga estuvo en relación con otro de los motivos de enfrentamiento existente entre el arzobispo y el cabildo. Una de las prácticas habituales de Silicio, que no habían ejercido sus antecesores en la mitra toledana, era su asistencia a las reuniones del consistorio. Su presencia condicionaba seriamente el resultado de las votaciones, que eran nominales y públicas, por los inconvenientes resultantes de contravenir los designios del prelado. Esta comparecencia se hacía constante si en el capítulo se trataban cuestiones referentes a la dignidad o bien a la provisión de beneficios (101). Fue en referencia a este último aspecto, y en concreto, en torno a la vacante de una canonjía magistral, cuando la actuación del prelado, que trataba de imponer su criterio subyugando las prerrogativas del consistorio, fue acompañada y desencadenó una fuerte hostilidad hacia algunos de los capitulares, que se

(98).- Ibid., Actas Capitulares, tomo 8, fol. 220r.

(99).- Ibid., tomo 9, fols. 125r, 129v, 130r y 131r.

(100).- Por otra parte, como queda reflejado en la respuesta del arzobispo a dicho memorial, el pleito en torno a esta reglamentación entre el prelado y el cabildo se remontaba a los tiempos del Cardenal Tavera (H. RODRIGUEZ DE GRACIA, op. cit., p. 135).

(101).- Si no se hallaba presente, el método utilizado para realizar esta actividad coactiva era a través del conocimiento de los libros de actas del capítulo, que el arzobispo requería para su lectura y así poder conocer los asuntos deliberados en el mismo y el desarrollo de las votaciones (H. RODRIGUEZ DE GRACIA, op. cit., pp. 138-141).

opusieron a aceptar esta intervención. El 10 de noviembre de 1551, el deán Diego de Castilla expuso ante el cabildo que los comisarios enviados por éste habían expuesto al arzobispo la conveniencia de prorrogar el edicto para la admisión de opositores a dicha prebenda. Al día siguiente, Martínez Silicio acudió al consistorio para tratar dicha cuestión, realizando de forma unilateral ciertas disposiciones referidas a los procedimientos que debían seguir aquellos que optasen a la provisión, posponiendo la decisión concerniente a la ampliación del plazo para su presentación. Ello motivó que Antonio de Castro y Gaspar de Quiroga realizasen un requerimiento al notario capitular para que reflejase lo que había sucedido, y como el prelado había adoptado estos criterios considerando únicamente su propia voluntad (102). Sin embargo, las tensiones estallaron al día siguiente, cuando hallándose reunido nuevamente el cabildo, el arzobispo afirmó que el deán, puesto que no era canónigo, no contaba con voto en relación a este asunto. Diego de Castilla trató de explicar al prelado su situación al respecto, pero este se negó a escucharle, advirtiéndole que si hablaba provocaría su enojo, y rogándole que abandonase la reunión. El consistorio en pleno se levantó, y mientras unos acudían a rogar a Martínez Silicio que dejase retornar al deán, catorce capitulares, entre los que se hallaba Gaspar de Quiroga, a pesar de la amenaza de excomunión proferida por el arzobispo, salieron del recinto acompañando al deán. El primero en tomar esta determinación, el tesorero García de Manrique, apeló las censuras y el mandato del prelado (103). Las presiones realizadas por Silicio sobre el resto del consistorio fueron apabullantes, haciéndoles jurar un testimonio concerniente a los hechos acontecidos, así como forzando a través de un consistente interrogatorio individualizado la declaración de muchos de ellos de que la acción había constituido un desacato a su autoridad y un gran alboroto, estableciendo posteriormente la orden de que, bajo las penas de excomunión y de trescientos ducados, el cabildo no se volviese a reunir para tratar en torno a la prorrogación

(102).- ACT, Actas Capitulares. Tomo 8, fols. 259r-v. Dicho requerimiento pensamos que fue motivado por el hecho de que Silicio, en diversas ocasiones, impedía que en los libros de actas constasen aquellas decisiones que conculcaban los derechos capitulares o eran fruto de su arbitrariedad.

(103).- Ibid., fol. 260r.

del edicto o cualquier otro asunto relacionado con la vacante de la canonjía magistral si no era bajo su supervisión, procediendo a confinar en sus casas a aquellos que habían abandonado la sesión capitular en compañía del deán (104). Tras estos sucesos, al día siguiente, Martínez Silicio accedió a la ampliación del plazo para la presentación de opositores, siendo muy significativo que de los mismos, solamente uno de ellos, el licenciado Quintanilla, hizo constar su opción a esta prebenda, mostrándose dispuesto a realizar una renovación de su presentación si fuese necesario, puesto que el favorecimiento de dicho beneficiado por parte del prelado se hizo evidente en diversas ocasiones y a quien, en esta, trataba de promocionar, teniendo presente que partía con desventaja en relación a otros candidatos al no contar con el grado de doctor (105). Así pues, el día 18 se procedió a la admisión de los títulos y a la realización del orden para las lecciones y sermones de los opositores, estableciendo Silicio que aquellos capitulares que se hallaban detenidos en sus casa por orden suya pudiesen asistir a dichos actos, aunque insistiendo y reiterando su mandato de que el cabildo no se reuniese para tratar sobre el tema de la canonjía magistral (106). Así pues, el núcleo del problema se encontraba en que el arzobispo quería ejercer el control sobre dicha provisión, imponiendo su propio candidato, no dudando en utilizar para conseguir su propósito, como hemos visto, todo tipo de medidas coactivas (107).

(104).- La actuación de los miembros del consistorio que permanecieron en el mismo durante el desarrollo de estas gestiones fue muy significativa para establecer los diversos grupos existentes entre los capitulares. Así, mientras que resulta especialmente llamativa la dureza con la que el arzobispo trató al doctor Vergara, a Rodrigo Zapata o a Diego de Guzmán, quienes junto a Blas de Ortiz, Francisco de Silva, Juan de Mariana y Diego López de Ayala, trataron de suavizar la situación para los que optaron por marcharse, sobre todo, el licenciado Silicio, sobrino del prelado y Gaspar de Aponte colaboraron abiertamente con el arzobispo (Ibid., fols 260v-261r-v).

(105).- H. RODRIGUEZ DE GRACIA, op. cit., pp, 98 y 153-154.

(106).- Los opositores que optaban a dicha prebenda eran, por su orden de antigüedad como doctores: Francisco Delgado, Antonio Corrionero, Bartolomé de Torres, Pedro de Mendavia, el obispo Francisco de Frías y el licenciado Quintanilla (ACT, Actas Capitulares. Tomo 8, fols 262r-263r).

(107).- El cabildo se quejaba de que para lograr imponer su opinión en las votaciones hacía detener a ciertos capitulares en sus casas durante la misma, poniéndoles en libertad una vez conseguido su objetivo (H. RODRIGUEZ DE GRACIA, op. cit., pp, 144-147).

Mientras tanto, el deán Diego de Castilla había recurrido ante el Consejo Real en búsqueda de la defensa de sus prerrogativas. Este organismo volvió a remitir la causa al arzobispo, aunque estableciendo la obligatoriedad de que el prelado escuchase al apelante antes de dictaminar según justicia. Por su parte, el deán obtuvo una provisión real por la que se establecía su capacidad para poder ejercer el voto en el seno del consistorio, así como una Cédula firmada por el príncipe Felipe el 28 de noviembre, por la que se ordenaba a Martínez Silicio que no interfiriese en la elección de la canonjía magistral, dejando actuar libremente al deán y al cabildo sin ponerles embargo o impedimento alguno. El arzobispo, tras la notificación de la misma, se plegó a su obediencia y acatamiento, siendo el propio deán quien dispuso que en virtud a dicho documento se diesen por finalizados los alborotos y las novedades (108).

No obstante, las tensiones generadas entre Silicio y el consistorio, y en concreto, las que afectaban a Gaspar de Quiroga, se vieron incrementadas en relación con la celebración de la asamblea eclesiástica que debía reunirse en Madrid en diciembre de 1551 (109). Dicha congregación consistía en una reunión de los representantes de los cabildos catedralicios de las iglesias metropolitanas y catedrales de Castilla, y en distinto grado de la Corona de Aragón, que eran convocados para tratar sobre diversos asuntos de carácter eclesial. Sus objetivos se centraban en promover desde dicho organismo la defensa de las libertades y privilegios eclesiásticos, el tratamiento y resolución de los problemas comunes, y el establecimiento de una concordia económica con la Corona. Tanto los monarcas como los prelados desconfiaban del funcionamiento de esta asamblea, puesto que observaban en el aunamiento de los cabildos la posibilidad de persistencia de aspectos de resistencia y oposición al programa reformístico. Fue por ello, que, ocasionalmente, se prohibió la realización de la congregación, y se trató de que las misma adoptase una función restringida únicamente a realizar el reparto entre las diócesis de la contribución

(108).- ACT, Actas Capitulares. Tomo 8, fols 267r-268r.

(109).- Sobre el llamamiento para la misma, que debía reunirse el día 15, y la apelación al servicio requerido presentada ante el comisario general de Cruzada, véase, Ibid., fol. 257r-v.

económica a la Corona por el concepto del subsidio, asumiendo además la labor de realizar su cobranza (110). El cabildo toledano desempeñaba un papel fundamental en las asambleas del clero, puesto que era quien realizaba la convocatoria, ostentaba la presidencia de la congregación, y sufragaba los gastos que se derivaban de la misma. Así pues, el 10 de diciembre de 1551, el capítulo se reunió para designar a las personas que debían acudir a Madrid en representación de la iglesia toledana, siendo elegidos para este efecto el deán Diego de Castilla y el tesorero García de Manrique. Sin embargo, ante la negativa de este de aceptar la comisión, el cabildo nombró a Gaspar de Quiroga en su lugar, otorgando poder a ambos para asistir y presidir dicha reunión, en la que se debía tratar principalmente sobre la gracia de dos cuartas concedida por el pontífice al monarca por el concepto del subsidio (111). También se diputaba para esta ocasión a Alonso Sánchez, racionero, y al capellán Juan Parra, estipulándose el salario de cada uno de los asistentes en representación de la iglesia toledana en cien ducados (112). Los problemas surgieron cuando el licenciado Silicio, asistente al capítulo, contradijo el poder concedido a Gaspar de Quiroga, alegando que estaba impedido en su asistencia a causa de encontrarse retenido en su casa por orden del arzobispo al formar parte del grupo que abandonó el cabildo acompañando al deán. Diego de Castilla se opuso a la apelación presentada por el licenciado Silicio en la votación, puesto que, al no ser canónigo, no contaba con voto en el capítulo. Esta misma réplica utilizó el licenciado Silicio en contra del deán, quien repuso contar con una provisión real que le autorizaba en este sentido. Silicio, por su parte, insistió en que no se procediese a elegir definitivamente a las personas que debían asistir a la congregación sin que el arzobispo de terminase con anterioridad sobre la cuestión de si el deán podía efectivamente votar, puesto que era a su persona y no al

(110).- T.DE AZCONA, "La reforma del episcopado y del clero..." pp, 179-182; Ibid., "Estado e Iglesia a la luz de las asambleas del clero en el siglo XVI" Actas del Congreso Internacional Teresiano. Salamanca 1984, pp, 297-302; L.CARPINTERO AGUADO, "Iglesia y Corte castellana en el siglo XVI: contribuciones y tributos" Hispania Sacra 41 (1989), pp, 550-551.

(111).- T.DE AZCONA, "La reforma del episcopado..." ,p, 203; Ibid., "Estado e Iglesia..." pp, 307-308.

(112).- ACT, Actas Capitulares. Tomo 8, fols. 266v y 268v.

cabildo a quien iba dirigido dicho documento (113). El 16 de diciembre se volvió a reunir el consistorio para proceder a la nominación de otro representante, proponiéndose buscar un sustituto para Gaspar de Quiroga, puesto que Diego de Castilla ya se encontraba en Madrid. En esta reunión capitular las opiniones nuevamente se hallaron encontradas. Mientras que García de Manrique, Rodrigo de Avalos, Pedro de Céspedes, el doctor Herrera y Juan de Mariana, aducían que no había necesidad de promover a otra persona, puesto que confiaban plenamente en el electo Quiroga, como persona conocedora de su oficio en lo tocante al servicio de la Iglesia y del Rey, hallándose presente el deán, y teniendo en cuenta que la congregación no comenzaría sus reuniones de forma inmediata a causa de las festividades navideñas, por su parte, el doctor Blas de Ortiz, el licenciado Silicio y Lucas de Garnica opusieron que se debía proceder a elegir a otro representante, puesto que éste era el motivo por el que se había convocado el cabildo. Una solución media fue la mantenida por Francisco de Silva, Fernando Bazán, Diego de Guzmán y Leonardo Ortiz, quienes propusieron que se suplicase al arzobispo que otorgase su licencia para que Gaspar de Quiroga pudiese acudir a la congregación eclesiástica, y que si esta no se obtuviese, se procediese entonces a designar a otro comisionado. Tras haberse expresado el cabildo de esta manera, entró en la reunión el racionero Antonio de Huerta, quien expuso a sus miembros la orden expresada por el prelado de que, bajo pena de excomunión y de quinientos ducados para cada uno de ellos, interrumpiesen el capítulo y acudiesen a su posada para asistir a una lectura del obispo Frías, viéndose así obligados, por esta nueva maniobra de entorpecimiento del arzobispo, a posponer la decisión sobre dicho asunto (114). El cabildo no se volvió a reunir en relación a esta cuestión hasta el 13 de enero de 1552, tomando la resolución de nombrar al protonotario y canónigo antonio de León como sustituto de Gaspar de Quiroga para asistir a la congregación. Sin embargo, al día siguiente, el clérigo Francisco García presentó ante el consistorio un escrito en nombre de Quiroga, por el que aducía que, habiendo sido nombrado para acudir a la misma, no admitía la revocación de su

(113).- Ibid., fol. 267v.

(114).- Ibid., fols. 270r-v.

nominación, presentando la correspondiente apelación ante el arzobispo y el pontífice. Nuevamente el cabildo se encontró dividido. Mientras que Blas de Ortiz, Francisco de Silva, Juan de Mariana, el licenciado Silicio, Diego de Guzmán, Gaspar de Aponte, Francisco Téllez y Alonso Ruiz se mostraron conformes con otorgar la apelación requerida, Leonardo Ortiz propuso de nuevo que se tratase de conseguir la licencia de Martínez Silicio. Rodrigo Zapata mantuvo que Quiroga debía haberse hallado en Madrid hacía quince días, y que, si bien se había suplicado al arzobispo le librase del mandato que le obligaba a permanecer en su casa, nunca había accedido a otorgar su permiso. De esta manera, puesto que convenía que asistiesen dos personas a la congregación en representación de la iglesia de Toledo, se decidió diputar a Antonio de León, no comprendiendo el motivo por el que Quiroga se encontraba agraviado, dado que el cabildo era libre de designar a la persona que creyese más conveniente en cada momento, revistiendo una mayor importancia la buena comisión de la iglesia toledana que la persona que hiciese efectiva la misma, oponiéndose, por tanto, a la toma de cualquier medida encaminada a la iniciación de un pleito, pues éste atentaba contra la libertad del propio consistorio. Su opinión fue compartida por el doctor Vergara, Ramiro de Guzmán y Juan Delgado. A pesar de ello, se impuso la opinión mayoritaria de otorgar, conforme a Derecho, la apelación requerida por Quiroga (115). Nuevamente, el día 18 se tornó a convocar al cabildo. Aunque no estaba contemplado en un principio tratar sobre dicha cuestión, varios miembros del mismo, básicamente aquellos que se habían mostrado conformes con la concesión de la apelación, a los que se unieron Diego López de Ayala, Leonardo Ortiz y Lucas de Garnica, convinieron que fuese definitivamente Gaspar de Quiroga quien acudiese a la congregación eclesiástica. Rodrigo Zapata y Juan Delgado mostraron su disconformidad con la adopción de esta determinación, puesto que el cabildo no se había convocado para el tratamiento de dicho asunto, aduciendo además que, puesto que existía un pleito al respecto cuya sentencia estaba cometida al arzobispo, hasta que éste no dilucidase lo que convenía no debía permitir que asistiese ninguno de los dos designados, proponiendo, a su vez, que el cabildo se volviese a reunir con el

(115).- Ibid., tomo 9, fols. 2r-3r.

propósito de nombrar un tercero (116). No obstante, la opinión mayoritaria del cabildo se impuso, y Gaspar de Quiroga acudió a la congregación, contando, presumiblemente, con el beneplácito del prelado, puesto que, el 6 de abril el cabildo mandó librar a dicho canónigo y al deán lo que les restase de pagar del salario que les correspondía por los días empleados en la misma (117).

Por otra parte, la vinculación de Quiroga a los asuntos referidos al subsidio no se limitó a su participación en la asamblea eclesiástica, puesto que, el 29 de agosto de 1552, fue designado por el capítulo para que, con otro letrado del Hospital de San Juan extramuros, concordasen lo que el mismo debía aportar por dicho concepto (118). De igual manera, en abril de 1553, Rodrigo de Zapata y el canónigo Quiroga fueron comisionados para responder a una provisión que el obispo de Lugo, comisario general de Cruzada, había realizado en torno al monasterio de San Juan de la Penitencia, y que había sido notificada al cabildo. En el seno del mismo, la opinión del tesorero García de Manrique fue que de las dotaciones que se asignaron para limosnas de huérfanas y otras obras pías, como lo era el convento de monjas de San Juan de la Penitencia, no se debía pagar subsidio alguno en conformidad con la bula papal referida a dicha cuestión. El consistorio adoptó la decisión de apelar la provisión presentada por el comisario general Suárez de Carvajal (119).

Así pues, la asistencia de Gaspar de Quiroga a la asamblea del clero le sirvió para poder suavizar el tiempo de su prisión en relación con los sucesos acontecidos en la problemática desarrollada en torno a la canonjía magistral, asunto en el que Quiroga siguió actuando tras su retorno de Madrid. En virtud a la Cédula formada por el príncipe Felipe, el cabildo resolvió reunirse sin la

(116).- Ibid., fol. 3r.

(117).- Ibid., fol. 33v.

(118).- Ibid., fol. 53r.

(119).- Ibid., fols. 94r-v; En torno a la evolución histórica de dicho manasterio, fundación cisneriana que acogía la doble función de ser convento y colegio de doncellas, véase, A.SIERRA CORELLA, El convento de monjas de San Juan de la Penitencia de Toledo. Madrid 1935.

presencia del arzobispo, procediendo a realizar la provisión de dicha prebenda, lo que motivó nuevamente el ejercicio de acciones represivas por parte del prelado, que veía así truncados sus deseos de controlar dicho proceso, así como de favorecer a su propio candidato. El 30 de marzo de 1552 el capítulo comisionó a Gaspar de Quiroga para que fuese a hablar con Martínez Silicio en relación a la prisión que la noche anterior había decretado sobre trece miembros del mismo que habían mandado dar posesión del canonicato magistral al doctor Delgado, quien estaba acusado por el promotor fiscal del arzobispado de haber proferido proposiciones malsonantes, hallándose su causa remitida al inquisidor general. El prelado mantenía que mientras no se pronunciase la correspondiente sentencia y se comprobasen sus cualidades no se debía proceder al nombramiento. Desobedeciendo su mandato, el cabildo le había otorgado la posesión de la canonjía magistral (120). Que ambas partes, arzobispo y consistorio acudieron con sus reclamaciones a la Santa Sede, lo demuestra el hecho de que el cabildo comisionó para ir a la Corte a Gaspar de Quiroga y a Gaspar de Aponte para que entendiesen los pormenores que respecto a dicha cuestión se estaban tratando con el Cardenal legado. El mismo día, el 1 de abril, varios miembros del capítulo, entre los que se hallaba el propio Quiroga, otorgaron poder a Alonso Hernández de Segura y a Pedro de Henao, residentes en Roma, para que en su nombre revocasen el anteriormente conferido a Diego Méndez de Robles, diputado en la Corte romana para ocuparse de los pleitos y causas que se sostenían en la misma, sustituyéndole en el desempeño de dichas funciones (121). Mientras tanto, el consistorio se mantuvo firme en su actitud, pues el 6 de abril prestó su juramento el doctor Delgado (122). Por su parte, Martínez Silicio, el día 14 de dicho mes, con motivo de la festividad de Jueves Santo, otorgó un perdón general en relación a los miembros del cabildo que se encontraban presos. En agradecimiento, el consistorio cometió a varios capitulares, entre los que se encontraba Gaspar de Quiroga, que acudiesen a besar las manos al arzobispo por la remisión que había hecho del pleito que

(120).- ACT, Actas Capitulares, tomo 9, fols. 32r-v.

(121).- Ibid., fol. 33r.

(122).- Ibid., fol. 33v.

mantenía con el cabildo en relación con la vacante de la canonjía magistral particularmente, así como del resto sostenido por ambos desde que había ocupado la mitra toledana (123), aunque quedaban excluidas de esta indulgencia la cuestión referente a la firma de las cédulas "ante diem" para realizar la convocatoria del capítulo, origen del conflicto generado en torno a la canonjía magistral, así como el pleito sostenido referente a la constitución "De verbis contumeliosis", posponiendo la toma de una resolución al respecto. Por ello, el 5 de mayo el cabildo comisionó a Gaspar de Aponte, a Francisco de Silva, a Diego de Guzmán y al licenciado Quiroga para que nuevamente acudiesen a mostrar su gratitud al arzobispo por el perdón general otorgado y suplicarle que ambos asuntos quedasen en el estado que se encontraban con anterioridad a su nombramiento como prelado. Si bien el capítulo afirmaba haber presentado apelación al Consejo Real sobre dichos negocios, preferían tratar de buscar un acuerdo entre las partes antes de que se llegase al pleito (124). Sin embargo, los intentos de acercamiento del consistorio no atrajeron la voluntad de Martínez Silicio, quien aceptó que fuese dicho organismo quien determinase sobre dichas cuestiones a través de su sentencia, proponiendo que, a su vez, se tomasen en la ciudad de Toledo dos letrados, uno por cada una de las partes en litigio, para que también tomasen una resolución, así como admitiendo que el cabildo acudiese para su justicia a cualquier otro Consejo o a la Chancillería (125). El día 24 de dicho mes se reunió el consistorio y encargó a García de Manrique, a Rodrigo Zapata, al licenciado Quiroga y al prior Pedro Cebrián, que elaborasen la respuesta que se debía dar a la propuesta del arzobispo. Al día siguiente Gaspar de Quiroga y Francisco de Silva fueron comisionados como emisarios de la misma, portando para ello una instrucción escrita. Según esta, debían representar ante Martínez Silicio, en primer lugar, la novedad que suponía la necesidad de que el prelado firmase las cédulas "ante diem" de convocatoria del cabildo, cuestión fundamental en la generación del conflicto en torno a la canonjía magistral, puesto que esto se oponía al derecho

(123).- Ibid., fols. 34r y 36v.

(124).- Ibid., fols. 37v-38r.

(125).- Ibid., fol. 38v.

y a la costumbre, añadiendo además que esta actuación arzobispal no tenía lugar en ninguna otra iglesia del reino, con el consiguiente perjuicio para el estado y gobierno de la toledana. Si bien en diversas ocasiones habían presentado sus ruegos ante Silicio para que no introdujese esta innovación, las reiteradas negativas del arzobispo habían forzado, como hemos señalado, la apelación del cabildo ante la Santa Sede y el Consejo Real, siendo en cambio esta vía bien acogida por el prelado. Por su parte, y temiendo la desfavorable decisión para sus intereses, debían apelar a la buena razón y prudencia del arzobispo, pues como quedaba reflejado en la propia instrucción, estos organismos solían evitar comprometerse en semejantes negocios, considerando además que invocar a dos letrados de dicha ciudad no sería una buena solución, puesto que jamás osarían a contradecir a una dignidad tan poderosa, a la que, por otra parte, estaban obligados a servir. Debían reiterar lo poco conveniente que era desarrollar el pleito, dado que de un proceso, en ocasiones salían muchos más, además de la dilación de los problemas, tiempo durante el que el cabildo se sentiría permanentemente agraviado y resentido. Por ello, debían convencer al prelado de que era más positivo dejar el asunto en el estado anterior a su llegada a la iglesia toledana, conforme a sus constituciones y a la costumbre existente en todo el reino, donde el cabildo se reúne por llamamiento de su deán o presidente. Por otra parte, el consistorio no reparaba en reprochar la utilización que el arzobispo realizaba de esta actuación, constituyendo además un gran contrasentido que, estando las mesas arzobispal y capitular diferenciadas administrativamente, no pudiesen reunirse libremente para tratar en relación a su propia administración y hacienda, sino que tenían que esperar a que el prelado les firmase la cédula de convocación, retrasando o dilatando la misma a su voluntad. A esto había que añadir que esta práctica impedía o retardaba la ejecución de los mandamientos apostólicos cuando el cabildo no era llamado a reunión, lo que suponía un claro perjuicio para los capitulares en sus rentas y beneficios. Sobre todo, si surgían diferencias entre el mismo y el arzobispo, mal podía el capítulo entender en la manera de proceder convenientemente para su justicia si estaban impedidos para juntarse a deliberar con libertad, sino a través del consentimiento del propio prelado, de quien además siempre temían que se negase a firmar la cédula de convocatoria. Por último, el documento finalizaba significando la enorme baja

que suponía que ninguna congregación, aunque fuese una cofradía, pudiese agruparse cuando fuese su voluntad para tratar sus asuntos, y acusando a Martínez Silicio de que su único propósito era querer someter las libertades del cabildo, no constituyendo esta una conducta acertada ni apropiada para lo que representaba su dignidad y el respeto demostrado por sus antecesores hacia el consistorio (126). Sin embargo, a pesar de los intentos del cabildo de suavizar las tensiones y alcanzar un entendimiento, el arzobispo se mantuvo firme en su postura, repitiéndose hasta el final de su prelación la consecución de las prisiones de sus miembros (127), y sometiendo bajo su control la convocatoria de las reuniones del consistorio.

Así pues, puesto de manifiesto que Gaspar de Quiroga sufrió como el resto de los capitulares las consecuencias de la vigorosa y tenaz actuación del prelado, y que fue durante los meses comprendidos entre octubre de 1551 y mayo de 1552 cuando sus relaciones alcanzaron una alta cota de conflictividad, aflorando las diferencias existentes entre ambos, lo cierto fue que tanto con anterioridad, como hemos señalado en referencia a la actuación de Quiroga en torno a la adopción del estatuto de limpieza de sangre por parte de la catedral, como con posterioridad, las comunicaciones entre ambos se desarrollaron en un clima de cierta cordialidad. En este sentido, las actividades que el cabildo encargó a Quiroga referidas a la provisión de diversos beneficios de la iglesia de Toledo fue más extensa que la circunscrita a la canonjía magistral, motivando que se estableciese la comunicación entre el canónigo y el prelado de forma continuada. Así, el 31 de agosto de 1552 el consistorio comisionó a varios de sus miembros, entre los que se hallaba Gaspar de Quiroga, para que acudiesen a tratar con el arzobispo y le comunicasen lo que el licenciado Gregorio López, perteneciente al Consejo de Indias, había propuesto al capítulo en relación a la posesión que hizo de la prebenda doctoral (128). De igual manera, el 5 de septiembre, nuevamente se designó a Quiroga entre los que debían informar a

(126).- Ibid., fols. 39r-41v.

(127).- H. RODRIGUEZ DE GRACIA, op. cit., pp. 144-147.

(128).- ACT, Actas Capitulares, tomo 9, fol. 53v.

Martínez Silicio sobre el opositor a la canonjía doctoral Pedro Alfonso de Valdivieso, y la contradicción que de su persona había realizado en inquisidor de Toledo Valtodano. Sin embargo, esto no debió representar ningún obstáculo, pues tras la realización de su información, le fue dada la posesión (129). De igual manera, en cuanto a las provisiones de diversos beneficios, Quiroga realizó en algunas ocasiones labores de examinador. Así cuando el 5 de enero de 1553 fue nombrado por el arzobispo Luis de Villar para ostentar una capellanía del coro, el cabildo comisionó a Quiroga para examinar la colación y provisión (130). Así mismo, el día 27 de dicho mes, el licenciado Silicio presentó para ocupar una de las capellanías de Alonso de Fonseca, vaca por muerte del clérigo Andrés Fernandez, a Pedro de Ribadeneyra. El capítulo recibió dicha presentación y cometió a Quiroga su examen, tras el que, si era considerado hábil, mandaba realizar su admisión (131). Por último, en relación a estos asuntos, hemos de señalar que, en agosto de 1554 se procedió a la provisión de la prebenda y canonjía vaca tras la muerte de su ocupante, Martí Gutierre de Céspedes. Martínez Silicio hizo uso de la alternativa que tenía en dicho mes y designó para ocuparla a Garci Díaz de Tablares. Esta actuación arzobispal motivó la apelación ante la Santa Sede de Pedro Pacheco, quien hizo presentación al cabildo del proceso y de las letras apostólicas consiguientes. El consistorio designó a varios de sus miembros letrados, entre los que se encontraba Gaspar de Quiroga, para que examinasen dichos documentos. La resolución adoptada por el capítulo fue favorable al nombramiento realizado por el prelado, otorgando al nominado la posesión de dicho beneficio, considerando que la petición expuesta por Pacheco no se ajustaba a justicia (132). Por otra parte, en relación con esta designación, hemos de significar que el nuevo canónigo era además camarero mayor del arzobispo, lo que venía a suponer una

(129).- Ibid., fols. 54r, 56r-60v.

(130).- Ibid., fols. 74v-75r.

(131).- Ibid., fol. 79v; En torno a la dotación de la memoria de Alonso de Fonseca, arzobispo de Toledo, quien en su testamento, entre otras disposiciones, estableció la creación de dos capellanías, véase, I.LOPEZ CELADA, op. cit., p. 38.

(132).- ACT, Actas Capitulares, tomo 9, fols 206r y 209v-214r.

continuación de la actuación ejecutada por los predecesores de Silicio en cuanto a la introducción en el cabildo de personas afines y favorables a su actuación.

Los mandatos del consistorio a Gaspar de Quiroga para que acudiese como emisario de sus ruegos y demandas a presencia del arzobispo se sucedieron durante los años que éste estuvo al frente de su canonicato, participando, de esta manera, en la mayoría de los asuntos que afectaron a las tensas relaciones entre ambos. Así, el 14 de julio de 1553 el cabildo comisionó a Francisco de Silva y a Gaspar de Quiroga para que fuesen a hablar con el arzobispo en referencia a lo que había tratado el capítulo en torno a la torre de las campanas y a los problemas surgidos (133), aunque dicha exposición debió resultar infructuosa, puesto que las reclamaciones del consistorio tuvieron su continuidad en los años posteriores. Los inconvenientes venían motivados por el hecho de que la provisión del oficial encargado de la misma no pertenecía al arzobispo, que, sin embargo, había procedido a realizarla, designando a una persona que no residía ni cumplía con sus obligaciones, aunque no por ello dejaba de recibir su salario, provocando esta situación innumerables irregularidades en lo referido al tañir de las campanas y otros alborotos resultado de la falta de vigilancia (134). De igual manera, el cabildo volvió a comisionar a ambos en el mes de noviembre para que trataran con el prelado sobre el aumento que pretendía hacer de la limosna que se daba por las misas (135). Martínez Silicio llevó a cabo su propósito, puesto que unos días después el consistorio ordenaba que en adelante se diese por este concepto en la capilla Antigua veinticinco maravedíes, siendo nombrados el propio Quiroga y el doctor Peralta como examinadores de las misas celebradas en la misma en abril de 1554 (136). Así mismo, el 15 de mayo el cabildo fijaba igual cuantía de dádiva en las misas oficiadas en la capilla de San Miguel, así como dos maravedíes por cada hora

(133).- Ibid., fols. 107v y 112r.

(134).- H. RODRIGUEZ DE GRACIA, *op. cit.*, p. 133.

(135).- ACT, *Actas Capitulares*, tomo 9, fol. 143v.

(136).- Ibid., fols. 148r y 177r.

que el capellán de esta residiese en el coro, en función de que, según la relación efectuada por el maestrescuela y por Gaspar de Quiroga, que habían actuado como comisarios, la dotación de dicha capilla era cuantiosa (137).

Durante el último año de estancia de Quiroga en Toledo, su relación con Martínez Silicio estuvo condicionada por un hecho que trajo importantes consecuencias para el devenir de su vida: la visita del príncipe Felipe a la ciudad, en mayo de 1554, dentro del camino que había iniciado para embarcarse hacia Inglaterra, donde iba a desposarse con María Tudor. La estancia del príncipe en la ciudad coincidió con la celebración de su veintisiete cumpleaños, motivo por el que el prelado organizó una serie de actos y festejos (138). Por su parte, Felipe hizo observar a Silicio que la existencia de casuchas y graneros en la plaza del Ayuntamiento provocaban un mal efecto en relación al palacio arzobispal y a la catedral, considerando que era un gran descuido de los prelados el haber consentido su existencia. Atendiendo a la apreciación real, Silicio acometió la compra de dichas edificaciones y su posterior derribo (139). Para tratar con el arzobispo en relación a esta cuestión y en defensa de los intereses del cabildo, Gaspar de Quiroga fue comisionado junto a otros de sus miembros, para que centrasen su actuación en lo referente a las propiedades del consistorio (140). No obstante, la demolición de estas casa por parte de Silicio llevó al capítulo a considerar que esta acción agraviaba sus intereses económicos y a solicitar al prelado la reedificación de las mismas (141). Por otra parte, también en relación con las obras relizadas por Silicio, en esta ocasión concernientes a la propia catedral, el cabildo encargó nuevamente a Gaspar de Quiroga junto a otros capitulares, que acudiesen a concertar con el arzobispo la ubicación del Santísimo Sacramento y la imagen de la Virgen en sus festividades,

(137).- Ibid., fol. 186r.

(138).- Ibid., fol. 186r.

(139).- D.CASTEJON Y FONSECA, op. cit., pp, 1051-1052.

(140).- ACT, Actas Capitulares, tomo 9, fol. 206r.

(141).- H.RODRIGUEZ DE GRACIA, op. cit.,pp, 154 y 169; C.TORROJA MENENDEZ, "El Cardenal Silicio y la reforma de la plaza del Ayuntamiento" Anales toledanos 11 (1976), pp, 54-68.

así como a expresarle la conveniencia de realizar una reja en la primera puerta del Sagrario y la apertura de un postigo para acceder al mismo (142).

3.4.Las consecuencias de su desprotección en la Corte

Las buenas relaciones de Gaspar de Quiroga con la Compañía de Jesús constituían un importante factor de conexión con una nueva facción política que se estaba formando en la corte en torno al príncipe Felipe y encabezada por Ruy Gómez de Silva. Gaspar de Quiroga, así como el resto de letrados que habían sido protegidos por el Cardenal Tavera, se integraron en dicho grupo cortesano, que, a partir de 1554, comenzó a pugnar contra el omnipresente Fernando de Valdés por ocupar los principales puestos de la Monarquía (143). Durante estos años, en los que Quiroga había trabajado en favor de la adopción de los estatutos de limpieza de sangre por parte de la catedral de Toledo según los designios del arzobispo Martínez Silicio, a cuyo servicio había puesto tanto su conocimiento de dicho tema, como su habilidad como legalista, había podido evitar el ser desplazado del puesto que ocupaba y alejado de la Corte, como había sucedido, según hemos señalado, con el resto de los apadrinados por Tavera. A pesar de ello, y de su acercamiento al "partido ebolista", el turno de Gaspar de Quiroga llegó cuando, en 1554, fue nombrado para cubrir la plaza de auditor perteneciente a la Corona de Castilla en el Sacro Tribunal de la Rota en Roma, vacante por la promoción de su anterior ocupante, Diego Deza, al obispado de Canarias. No obstante, esta nominación constituía la segunda elección realizada por el príncipe Felipe, pues, el 12 de mayo de dicho año, había designado para ocupar dicho puesto al doctor Diego de Simancas, oidor de la

(142).- ACT, Actas Capitulares, tomo 9, fol. 187r. Las reclamaciones del consistorio en torno al pobre estado del Sagrario tuvieron su continuación en los años posteriores (H.RODRIGUEZ DE GRACIA, op. cit., p, 150). En cuanto a la realización de la reja destinada a la capilla del Sagrario ejecutada por Juan López, véase, F.OLAGUER-FELIU, Las rejas de la Catedral de Toledo. Toledo 1980, p, 147.

(143).- En torno a la formación del "partido ebolista", así como la vinculación existente entre sus más destacados miembros con la Compañía de Jesús, cuya religiosidad adoptó la facción cortesana, véase, J.MARTINEZ MILLAN, "Grupos de poder en la Corte durante el reinado de Felipe II: la facción ebolista, 1554-1573" Instituciones y élites de poder en la Monarquía hispana durante el siglo XVI. Universidad Autónoma de Madrid 1992, pp, 137-160.

Chancillería de Valladolid. Sin embargo, éste había rechazado dicha provisión, puesto que, contando con la protección de Fernando de Valdés, consideró que sus oportunidades de medro estaban en la Corte, por lo que no estimó conveniente abandonarla para favorecer sus ambiciones políticas (144). Así pues, poco antes de que el príncipe Felipe embarcase en la Coruña con destino a Inglaterra, y tras su paso por Toledo, proveyó para desempeñar este cargo a Gaspar de Quiroga. En este sentido, Martínez Silicio utilizó la influencia que tenía sobre el que había sido su pupilo para que la persona elegida estuviese perfectamente preparada, tanto por su conocimiento del tema como por su formación legal, para obtener del nuevo pontífice, Paulo IV, la sanción definitiva de los estatutos de limpieza de sangre de la catedral de Toledo, pues si bien, como hemos señalado, desde Roma se habían emitido diversos documentos en su apoyo, la misma aún no se había producido. Así pues, esta fue una de las principales ocupaciones que Gaspar de Quiroga debía abordar cuando se hiciese cargo de sus funciones (145). Además, el cabildo catedralicio, reunido el 9 de enero de 1555, designó a Quiroga como su procurador en la Santa Sede, otorgándole poder para tratar sus negocios en dicha Corte, y estableciendo que se le pagase por la ocupación de esta comisión y por espacio de los tres primeros años desde el día que partiese, sin posibilidad de prorrogación, los frutos de tres vestuarios de su canonjía como si la estuviese residiendo, a los que se sumaban los sesenta mil maravedíes que valía ésta cada año, a condición a que renunciase a los frutos de su prebenda, cuya titularidad, por otra parte, seguía manteniendo (146). Así, el 23 de marzo, el capítulo facultó a Quiroga para revocar al procurador que hasta entonces estaba diputado en Roma y para hacerse cargo

(144).- D.DE SIMANCAS, "La vida y cosas notables del Señor Obispo de Zamora don Diego de Simancas" Autobiografías y memoriales. Madrid 1905. NBAE, II, p, 153. Ciertamente sus expectativas de promoción eran fundadas, pues, en 1559, fue nombrado por Fernando de Valdés consejero de la Suprema (J.MARTINEZ MILLAN, op. cit., pp, 170-171).

(145).- En torno a estos aspectos, véase, BSCV, Ms. 16, fol. 143r-v; P.SALAZAR Y MENDOZA, op. cit., pp, 290-291; M.BOYD, op. cit., p, 12; D.CASTEJON Y FONSECA, op. cit., p, 1132.

(146).- Sobre dicha provisión capitular, así como la aceptación de estas condiciones por parte de Quiroga, véase, ACT, Actas Capitulares. Tomo 9, fols. 229v-230r. El consistorio dio orden de realizar la instrucción y poder que Quiroga debía llevar a Roma el 18 de marzo (Ibid., fol. 247v).

de los pleitos y causas que éste estuviese desarrollando (147).

De esta manera, la actuación desplegada por Fernando de Valdés para alejar de la Corte a los jóvenes apadrinados por el Cardenal Tavera en beneficio de sus propios protegidos dio como fruto la marcha de Gaspar de Quiroga a Roma. Rebasados los cuarenta años, teniendo en cuenta la esperanza de vida de la época, su alejamiento de la Corte no constituía un buen síntoma para su futuro político. Contradictoriamente, lejos de constituir su muerte política, su marcha a Roma fue el inicio de una carrera ascendente en la administración hasta convertirse en un gran patrón. Por de pronto, durante su abatimiento, ya instalado en la Ciudad Eterna, de nuevo encontró el consuelo y el apoyo de la Compañía de Jesús.

(147).- Ibid., fol. 248r.

CAPITULO 4

4.AL SERVICIO DE LA MONARQUIA EN ITALIA (1555-1564)

4.1.La estacia en Roma (1555-1559)

Después de su provisión como auditor del Sacro Tribunal de la Rota, Gaspar de Quiroga prolongó su permanencia en Toledo hasta el 1 de abril de 1555. El día venticuatro de dicho mes, embarcó en Alicante en una nave genovesa que puso rumbo a Liorna, donde continuó su viaje por tierra, llegando el 25 de mayo a la ciudad de Florencia. En el camino hacia Roma fue apresado en Orbieto por la soldadesca francesa, junto a los dos criados que le acompañaban, quienes les robaron los enseres que componían su equipaje, así como el dinero que portaban. Finalmente, hacía su entrada en la Ciudad Eterna el 12 de junio, comenzando a prestar sus servicios en su nuevo oficio en el mes de octubre (1).

La incorporación de Quiroga a este alto organismo eclesiástico coincidió con la llegada al solio pontificio de Paulo IV. La abierta hostilidad del papa a la preponderante presencia hispana en Italia motivó que buscarse el acercamiento a la política de Enrique II, a quien instaba, tras la firma de la tregua de Vaucelles en 1556, para que rompiese la misma y reiniciase el enfrentamiento con la Monarquía hispana. Por otra parte, la actuación francesa en Siena había propiciado la alianza de los Farnesio con Felipe II, lo que agravaba los intereses

(1).- En torno al accidentado viaje que Quiroga tuvo hasta su llegada a Roma, véase, P.SALAZAR Y MENDOZA, Crónica del Gran Cardenal..., p, 291; G.GONZALEZ DAVILA, op. cit., p, 488; BSCV, Ms. n° 16, fol. 143v.

de la familia Caraffa, a la que pertenecía el Pontífice (2). En defensa de estos, no dudó en perseguir y mostrar su enemistad a las casas italianas que estaban vinculadas y apoyaban la política filipina, especialmente, a los más significados en este sentido, los Colonna, así como a los servidores de la Monarquía hispana en Roma (3). El duque de Alba fue el encargado de tratar de encauzar las conflictivas relaciones con Paulo IV. Su alejamiento de la Corte, tras su designación para hacerse cargo de tan delicado asunto, a lo que sumó sus nombramientos como virrey de Nápoles y capitán general de Milán, estuvo determinado por la actividad desarrollada por la facción cortesana encabezada por Ruy Gómez de Silva, que tras la llegada de Felipe II al trono, pugnó por la ocupación de los principales cargos de la Monarquía, relegando de la Corte y de los altos puestos de la administración a aquellos servidores que, como en el caso de Alba, habían ostentado los mismos durante el reinado de Carlos V. Además, la dificultad de la empresa encomendada implicaba un alto riesgo de fracaso y, como consecuencia, la pérdida definitiva de la confianza regia (4). La actitud reiteradamente desafiante del Pontífice condujo, a pesar de los intentos encaminados a evitarlos, al enfrentamiento armado. Tras la derrota infringida a los franceses en San Quintín, Paulo IV se apresuró a buscar un entendimiento con el duque de Alba. La paz quedó definitivamente restituida en septiembre de 1557.

Gaspar de Quiroga había asistido en el desempeño de su oficio a este

(2).- L.VAN DER ESSEN, Alexandre Farnèse, prince de Parme, Gouverneur général des Pays-Bas. Bruxelles 1933. Tomo I.

(3).- Sobre las causas que motivaron la enemistad de Paulo IV hacia la Monarquía hispana, así como su actuación en relación a la familia Colonna, véase, L.PASTOR, Historia de los Papas. Barcelona 1927, XIV, pp, 83-152; L.SERRANO, "Anotaciones al tema: el Papa Paulo IV y España" Hispania 3 (1943), pp, 293-325; M.RIVERO RODRIGUEZ, "El servicio a dos Cortes: Marco Antonio Colonna, almirante pontificio y vasallo de la Monarquía" La Corte de Felipe II, pp, 320-322.

(4).- W.S.MALTBY señala que el duque de Alba aceptó esta misión motivado, principalmente, por la necesidad de defender los importantes intereses familiares en dichos territorios. En torno a esta cuestión, así como en relación con el relegamiento de la Corte por la pujanza del partido ebolista, El gran Duque de Alba. Un siglo de España y de Europa, 1507-1582. Madrid 1983, pp, 115-117 y 124-125; J.MARTINEZ MILLAN, "Grupos de poder en la Corte...", pp, 167-168.

periodo de tensas relaciones y, posteriormente, guerra abierta entre la Santa Sede y la Monarquía hispana. En contra de lo que aconteció a otros servidores enviados a Roma, Quiroga no sufrió ningún tipo de persecución u hostigamiento por parte de Paulo IV, siendo las relaciones entre ambos extremadamente cordiales. La razón de la deferencia con que el Pontífice obsequiaba a Quiroga se encontraba, por una parte, en el conocimiento y amistad que unió a ambos durante su anterior estancia en Roma del auditor de la Sacra Rota, cuando tuvo que afrontar la resolución de los conflictos jurisdiccionales surgidos con la Universidad de Alcalá de Henares; pero, principalmente, la misma se encontraba en la cercanía de ambos personajes a Ignacio de Loyola. Cuando llegó a dicha ciudad, Quiroga se apresuró a reiniciar sus contactos con el fundador de la Compañía de Jesús quien, nuevamente, le dispensó su apoyo y orientó sus pasos en tan comprometida situación (5). Por otra parte, el conocimiento entre Paulo IV e Ignacio de Loyola se remontaba a 1535, cuando la Compañía de Jesús era aún un simple proyecto. Los encuentros que tuvieron lugar desde entonces entre ambos crearon unas fuertes conexiones entre los planes ignacianos y la concepción de la reforma católica que tenía Caraffa y sus planteamientos para llevarla a cabo, que quedaron plasmados en su labor de cofundación de la Orden de Clérigos Regulares. Si bien, posteriormente, la relación se vió enturbiada por el nacimiento de ciertas reticencias por sus divergencias en materia de espiritualidad y religiosidad, durante su pontificado, Paulo IV favoreció a la Compañía de Jesús en diversos aspectos, tanto a lo largo de la vida de San Ignacio, como cuando, tras su fallecimiento, fue sucedido por Diego Laínez al frente de la misma (6). Así pues, Quiroga, no solo no sufrió ningún tipo de represalia por parte del papa, sino que a lo largo de su estancia en Roma y en consonancia con el alto nivel de entendimiento que alcanzó con el pontífice, éste

(5).- BSCV, Ms. n° 16, fols. 143v-144r: "Quando estuvo la primera vez en aquella corte santa había entablado amistad con San Ignacio de Loyola y ahora se internó más en ella, tratando con el santo varios arduos negocios que produjeron las discordias y guerra abierta que se encendió entre Paulo IV y el Emperador Carlos V y si hijo Felipe II y otras incidencias que siempre ocurren en aquel gran Teatro del Mundo"; P.SALAZAR Y MENDOZA, op. cit., p. 291.

(6).- Sobre estas cuestiones, véase, L.PASTOR, op. cit., pp. 213-221; A.VENY BALLESTER, Paulo IV cofundador de la clerecía religiosa (1474-1559). Trayectoria ejemplar de un Papa de la Contrarreforma. Palma de Mallorca 1976, sobre todo, pp. 172-177 y 211-224.

le favoreció a través de su designación para ostentar diversos beneficios eclesiásticos, entre los que destacaban el referido a la iglesia de Santo Tomé en Toledo, el de Valdarachas, y el deanazgo de la iglesia de León. De igual manera, cuando en abril de 1559 murió Gutierre Vargas de Carvajal, obispo de Plasencia, de cuya vacante se informó Quiroga atendiendo su oficio en el tribunal de la Rota, se apresuró a escribir desde el propio organismo solicitando al papa que le favoreciese nuevamente en esta ocasión. Los cuantiosos beneficios que proporcionaba esta vacante hacía que la misma fuese muy codiciada, siendo solicitada por otras personas entre las que se encontraba el Cardenal Pacheco. Sin embargo, Paulo IV concedió el disfrute de la misma enteramente a Quiroga (7). En este sentido hemos de señalar la vinculación existente entre el prelado plasence y la Compañía de Jesús, que se plasmó en la amistad que le unía a Francisco de Borja, así como en la fundación de un colegio jesuítico que patrocinó en la ciudad de Plasencia (8).

Si bien, durante los años que permaneció en Roma, se ocupó con dedicación de las obligaciones inherentes a su oficio de auditor, realizando un fructífero trabajo recopilado en cuatro volúmenes que se conservan en la biblioteca del Colegio de Santa Cruz de Valladolid en los que se recogen las decisiones adoptadas por dicho organismo en las que tuvo una intervención directa (9), su labor más destacada estuvo relacionada con la actividad que desplegó ante Paulo IV con el objetivo de obtener la sanción definitiva de los

(7).- P.SALAZAR Y MENDOZA, op. cit., p, 291. Este autor refiere como Paulo IV pronunció, en relación a esta concesión, una frase que parece vinculada a los contactos de Quiroga con los pontífices: "Qui rogat exauditur"; BNM, Ms. n° 13044, fol. 129r; F.DE PISA, op. cit., p, 268; De igual manera, aparece referido en dichos documentos que, cuando en agosto de 1559, se produjo el fallecimiento de Paulo IV, se encontró entre sus papeles algunas memorias sobre la provisión de nuevos cardenales que esperaba hacer en el mes de septiembre. Entre los designados se encontraba Gaspar de Quiroga.

(8).- Sobre la figura del obispo Gutierre de Vargas de Carvajal, su estrecha relación con la Compañía de Jesús, y su favorecimiento de esta Orden, véase, C.GUTIERREZ, Espanoles en Trento. Valladolid 1951, pp, 548-560; J.SIMON DIAZ, Historia del Colegio Imperial de Madrid. Madrid 1952, I, p, 5.

(9).- BSCV, Ms. n° 16, fol. 143v; J.REZABAL Y UGARTE, op. cit., p, 291; M.N.ALONSO CORTES, Catálogo de manuscritos de la Biblioteca de Santa Cruz. Valladolid 1976, pp, 287-291.

estatutos de limpieza de sangre de la catedral de Toledo. Por otra parte, el residir en Roma le permitió reanudar de forma personal y continuada su amistad con Ignacio de Loyola. Su vinculación a la Compañía de Jesús supuso para Quiroga el puente que necesitaba para volver a introducirse en el juego cortesano.

4.1.1 Quiroga, Paulo IV y los estatutos de limpieza de sangre.

Desde que, en julio de 1547, fueron aprobados por el cabildo catedralicio toledano la adopción de los estatutos de limpieza de sangre a instancia del Cardenal Martínez Silicio, defensores y detractores de esta reglamentación habían acudido a Roma para tratar de inclinar el veredicto del Pontífice de forma favorable a sus posiciones en relación al mismo. Diego de Guzmán había conseguido imponer sus argumentos frente a los que Paulo III trataban de impedir la validez de esta promulgación, obteniendo un breve, que presentó al cabildo el 28 de junio de 1548, por el que quedaba sancionada la vigencia y puesta en práctica de este ordenamiento. En virtud a este documento papal, el arzobispo toledano comenzó a aplicar las premisas recogidas en el mismo, incluso con anterioridad a que Carlos V, quien había cometido el entendimiento de este asunto al Consejo Real, mostrase su conformidad de que las disposiciones del papado al respecto fuesen acatadas y obedecidas. A pesar de que, como hemos señalado, en los años sucesivos se reiteraron los mandatos pontificios que establecían la observancia del estatuto de limpieza de sangre e imponían graves penas y el silencio a sus adversarios, estos continuaron presentando sus alegaciones en Roma y provocando tensas situaciones en la ciudad de Toledo (10).

Cuando Gaspar de Quiroga llegó a Roma, una de las principales misiones que llevaba encomendadas era la de conseguir del nuevo Pontífice, Paulo IV, una

(10).- El pontífice Julio III conformó el estatuto de limpieza de sangre de la catedral toledana a través de un breve fechado el 22 de febrero de 1550 (ACT, O.I.F.1.4.).

sanción concluyente de los estatutos de limpieza de sangre de la catedral toledana que zanjase definitivamente la polémica suscitada. El auditor se aplicó inmediatamente a la consecución de este objetivo, obteniendo muy pronto fruto a su labor, pues el 28 de febrero de 1555 el papa confirmaba esta reglamentación, estableciendo la prohibición de que las causas concernientes a dicho estatuto fuesen tratadas por las distintas estancias eclesiásticas, pues el fallo de la misma quedaba cometido exclusivamente al Sacro Tribunal de la Rota (11). El 6 de agosto de 1556, en respuesta a la petición realizada de Martínez Silicio, Felipe II ratificaba desde Bruselas, la validez y aplicación de este ordenamiento (12). El pronto entendimiento alcanzado por parte de Quiroga con el Papa sobre dicha cuestión, debió servir, sin duda, para cimentar la buena relación que unió a ambos durante los años de estancia del auditor en Roma, y que tantos beneficios y concesiones le deparó. Por otra parte, la premura de la concesión indica que Gaspar de Quiroga no debió encontrar grandes dificultades para atraer a Paulo IV a sus argumentos puesto que, en el consistorio celebrado el 17 de julio de 1555, entre otras resoluciones, Paulo IV estableció, a través de una bula, la imposición de importantes limitaciones a los judíos que vivían en los territorios de la Iglesia. Así pues, la resolución favorable a la sanción de este ordenamiento se encontraba perfectamente en consonancia con la línea de la actuación papal. A este respecto, el propio Pontífice centró su actividad, tras finalizar el conflicto político que le enfrentó a la Monarquía hispana, en una rigurosa defensa de la ortodoxia católica frente a las corrientes reformistas que se estaban desarrollando en Europa (13). El peligro que suponía la existencia de la reforma protestante, tanto religiosa como política, y la actuación desplegada

(11).- La Bula de confirmación del estatuto se encuentra en, *Ibid.*, O.I.F.1.5.a.

(12).- En torno a la confirmación del estatuto de limpieza de sangre de la catedral de Toledo realizado por Paulo IV y la ratificación de Felipe II, véase, A.A.SICROFF, op. cit., pp, 170-172; D.CASTEJON Y FONSECA, op. cit., p, 1132; S.DE HOROZCO, op. cit., pp, 93-95; Biografía Eclesiástica Completa, XIX, pp, 1204-1205.

(13).- En relación a lo acontecido en el consistorio de julio de 1555, así como en cuanto a la labor de Paulo IV en consonancia con su ideario reformista, en la que destacan los procesamientos de los cardenales Pole y Morone, su actuación para evitar el tráfico de literatura herética y la promulgación del Índice de Libros Prohibidos en 1559, véase, L.PASTOR, op. cit., pp, 83-84 y 153-289.

por Felipe II encaminada a salvaguardar sus reinos de toda posible influencia que supusiese una desviación de la doctrina católica, compusieron la justificación esgrimida por el monarca para proceder a la aprobación del mismo estatuto al que se había negado a dar su conformidad en 1548. Si bien, como hemos visto, esta sanción no significaba en sí misma más que el reconocimiento de una situación de hecho, la adopción, definitivamente establecida, de los estatutos de limpieza de sangre por parte de la Sede Primada de la Iglesia hispana supuso un hito decisivo en la discriminación social del elemento converso (14).

Sin embargo, esta determinación favorable a la existencia de los estatutos de limpieza de sangre tanto por parte del Papa como del Monarca, no zanjó la polémica que se había generado en torno a esta reglamentación. La actitud tan propicia exhibida por Paulo IV hacia la misma, en consonancia con el cariz de estricta observancia de los preceptos católicos que imprimió a su pontificado, no fue continuada por sus sucesores en la Silla de Pedro con un talante tan favorable. Pío IV y Pío V no dejaron de mostrar sus escrúpulos ante la puesta en práctica de este ordenamiento discriminatorio, aunque la presión diplomática ejercida por Felipe II consiguió que los mismos fuesen aceptados, lo que, por otra parte, no logró impedir que los recursos y apelaciones de los adversarios de estos estatutos o de los perjudicados por su aplicación, siguiesen llegando a Roma donde eran admitidos, no respetando las disposiciones de Paulo IV en relación a su reserva del entendimiento de dicho tema únicamente al tribunal de la Sacra Rota (15) En este sentido, y a pesar de la explícita prohibición de la

(14).- Hemos de tener en cuenta el extendido mito antisemítico de la época por el que la sangre judía se consideraba la causante de la herejía protestante, y se la acusaba de realizar una actuación como quinta columna para debilitar a la Iglesia. En este sentido, véase, A.A.SICROFF, op. cit., pp, 172-173; J.I.GUTIRREZ NIETO, "La discriminación de los conversos y la tibetización de Castilla por Felipe II" Revista de la Universidad Complutense 87 (1973), pp, 99-129.

(15).- Sobre las reticencias que la Santa Sede expresó hacia esta reglamentación, véase, J.CARO BAROJA, op. cit., p, 280; A.DOMINGUEZ ORTIZ, Los judeoconversos en la España Moderna, p, 169: "Pío IV no dudó en decir al Cardenal Pacheco, enviado por Felipe II, que los estatutos «eran contra derecho y traían revueltas en las iglesias»; Ilustrativa es también la carta que Luis de Requesens, embajador en Roma, dirigió a Felipe II el 10 de septiembre de 1566: "Dos días ha que viniendo a propósito destos negocios informé al papa de los inconvenientes que tenía el admitir aquí apelaciones sobre la limpieza de sangre que han de tener los prevenidos de la iglesia de Toledo y en las otras que tienen el mismo estatuto y pareciole bien (...)pero dixome que él no

Inquisición, realizada en 1572, en cuanto a que no se tratase dicho asunto por escrito, tanto si fuera de forma apologética como en su detracción, fueron numerosos los autores que se ocuparon del mismo manteniéndose así abierta la polémica hasta el siglo XVII (16).

La Corona, si bien favoreció y promocionó la existencia de los estatutos de limpieza de sangre en aquellos organismos e instituciones eclesiásticas que los adoptaron, como un elemento en consonancia con la política confesionalista que estaba ejecutando, no tuvo una intervención directa en los procesos de asunción de los mismos en la mayoría de los casos. Sin embargo, en lo que se refiere a la Inquisición, fueron los mandatos reales los que impusieron, en la década de los años setenta del siglo XVI, su implantación de forma definitiva (17). Por otra parte, desde los últimos decenios de dicha centuria se inició un debate, que tuvo su reflejo, en consecuencia, en el seno del Santo Oficio, sobre la necesidad de moderar el rigor de esta reglamentación. Ya no se trataba, como en los años precedentes, de argumentar en contra o a favor de su legitimidad o justificación, sino de poner de manifiesto, como lo hizo el dominico Agustino Salucio entre otros, la conveniencia de establecer algunas limitaciones a la exigencia de limpieza de sangre, poniendo, a su vez, de manifiesto los efectos negativos que esta práctica había provocado. Algunos autores han afirmado que no deja de ser paradójico que Gaspar de Quiroga, desde el cargo de Inquisidor General, fuese una de las personas que más abogaron por esta reforma, teniendo en cuenta la extensa labor realizada en favor de la aprobación de dicho ordenamiento en la catedral de Toledo y de la aplicación que hizo de esta reglamentación cuando él

pasaría de aquí adelante ninguna comisión destas si no le engañaban / y para que esto no se hiciese que avisase dello al cardenal Simoneta que tiene la signatura de justicia..."(IVDJ, envío 9 (caja 16) n° 630); En el mismo sentido, véase la carta enviada por la iglesia de Toledo a Felipe II fechada el 15 de noviembre de 1568 (AZ, carp. 146, n° 101).

(16).- Dichos libros y autores han sido objeto de un amplio estudio. Entre otros, véase, A.A.SICROFF, op. cit., pp, 178-257; A.DOMINGUEZ ORTIZ, Los judeoconvertos en España y América, pp, 84-90; J.LOPEZ DE AYALA Y ALVAREZ DE TOLEDO, op. cit., pp, 133-134.

(17).- En tono a la exigencia de limpieza de sangre por parte de la Inquisición, véase, R.LOPEZ VELA, op. cit., pp, 234-252.

mismo fue promovido como arzobispo primado (18). Sin embargo, hemos de tener en cuenta que la actuación de Quiroga en este sentido fue motivada por una serie de factores que ya han sido expuestos, así como que esta normativa no era acorde a sus propias convicciones en materia de religiosidad. Por ello, no debe resultar extraño que, cuando Quiroga se halló en una posición destacada por los cargos que ostentaba, tratase, cuanto menos en parte, de subsanar sus consecuencias. Además, la adopción de estos estatutos, perseguida desde el siglo XV y alcanzada, en su madurez, durante la primera mitad del siglo XVI, conllevaba y perseguía una serie de implicaciones y fines sociopolíticos, como hemos significado, que en la década de los años ochenta se encontraban, en cierta medida, superados, como quedó reflejado, por otra parte, en el propio cambio de rumbo que había adoptado la polémica. No obstante, los tímidos y superficiales intentos reformísticos no fueron concretados. La resistencia a suavizar este mecanismo de exclusión social por parte de los ostendadores de los cargos burocráticos de la Monarquía consolidó su vigencia (19).

4.1.2. Bajo la protección de la Compañía de Jesús

Desde la muerte de su protector, Juan Pardo de Tavera, Gaspar de Quiroga había quedado desamparado en el devenir de las pugnas cortesanas. Su marcha a Roma fue consecuencia del ascenso de una nueva facción, uniendo así su destino al del resto de los servidores que habían medrado bajo los auspicios del Cardenal Tavera, que habían sido relegados de la corte y sustituidos en la ocupación de los altos cargos de la Monarquía por el grupo encabezado por el nuevo patrón cortesano, Fernando de Valdés. Por otra parte, como el resto de los jóvenes que habían sido apadrinados por Tavera, Gaspar de Quiroga pasó a

(17).- En cuanto a la confirmación de esta reglamentación efectuada por Gregorio XIII, véase, P.SALAZAR Y MENDOZA, op. cit., pp, 305-306.

(19).- En relación a estos intentos de reforma y sus motivaciones, así como sobre la actuación de Quiroga, véase, R.LOPEZ VELA, op. cit., pp, 252-256; A.A.SICROFF, op. cit., p, 216; A.DOMINGUEZ ORTIZ, Los judeoconvertos en la España Moderna, pp, 73-74; J.REZABAL Y UGARTE, op. cit., p, 292; H.KAMEN, "Una crisis de conciencia en la Edad de Oro en España: Inquisición contra limpieza de sangre" Bulletin Hispanique 88 (1986), pp, 321-356; I.S.REVAH, "Gil González de Avila et les statuts de purité de sang" Studia historica in honorem R.Lapesa. Madrid 1974, II, pp, 493-496.

formar parte de un nuevo "partido" que se estaba generando en torno a Ruy Gómez de Silva buscando la protección de un nuevo patrón ante los embates de Valdés. Durante los años que Quiroga permaneció en Roma, en la Corte, el grupo ebolista fue organizándose firmemente, planteando su oposición al asturiano e incrementando su influjo en todos los ámbitos de la Monarquía. Esta facción cortesana que se agrupó principalmente en torno a una élite portuguesa y a diversos miembros de la familia real, tuvo como sus figuras más señaladas al propio Ruy Gómez, a la princesa doña Juana y a Francisco de Borja, éste último, sobre todo, en relación a su pertenencia a la Compañía de Jesús, cuya religiosidad fue asumida por los componentes de dicho grupo (20). La vinculación del auditor de la Sacra Rota con algunos miembros de dicha Orden favoreció las aspiraciones de Quiroga no sólo en lo referente a su relación con Paulo IV y en la obtención de diversos beneficios y concesiones, sino que supuso, a través de esta mediación y protección, su definitiva integración en la facción ebolista y en consonancia con ello, su incorporación al aparato administrativo de la Monarquía.

El trato que mantuvo con Ignacio de Loyola fue cotidiano desde su llegada a Roma. Los encuentros entre ambos se sucedieron tanto en el propio alojamiento del auditor, como en la Casa de la Compañía o en la "viña", lugar adquirido por San Ignacio para recreo de los estudiantes del Colegio Romano (21). Incluso, en los meses que siguieron a su establecimiento en la Ciudad Eterna, Quiroga recibió ayuda económica de la Compañía de Jesús, obedeciendo esta aportación, posiblemente, a suavizar su precaria situación tras el percance ocurrido en Orbiato (22). También veló por sus intereses económicos la

(20).- J.MARTINEZ MILLAN, "Grupos de poder en la Corte durante el reinado de Felipe II...", pp, 139-160; Ibid., "Familia real y grupos políticos: la princesa doña Juana de Austria (1535-1573)" La Corte de Felipe II, pp, 80-88.

(21).- Así lo refirió el propio Gaspar de Quiroga: "le debí de ver más de cien mil veces en esta vida. ¿Había día que no nos viésemos o en la [Casa de] la Compañía, o en mi casa o en la viña?" (R.GARCIA VILLOSLADA, San Ignacio de Loyola..., p, 603).

(22).- En este sentido, véase el envío del estado de las cuentas de la Orden remitido por el Padre Luis Consalvio de Cámara a Ignacio de Loyola el 14 de noviembre de 1555 (MHSI, Monumenta Ignatiana. Serie primera, Vol.X. Madrid 1910, p, 136).

princesa Doña Juana, quien dirigió una carta al deán y cabildo catedralicio toledano para insistir en el mandato efectuado cuando Quiroga fue nombrado como su procurador en Roma en relación a la percepción de los frutos de su canongía. Por el mismo, debía percibir dichas rentas por los tres años siguientes a su nominación. Trascurridos estos, la hermana de Felipe II solicitaba a dicha Iglesia que se le siguiese acudiendo con sus beneficios durante el tiempo que estuviese desempeñando ese oficio o bien, cuanto menos, por un nuevo espacio trienal (23).

Acompañó y asistió a San Ignacio a lo largo de su enfermedad, siendo una de las personas que mejor llegó a conocer al fundador de la Orden jesuítica como fruto de esta asiduidad (24). En consonancia, cuando en 1585 fue encargado, por iniciativa del jesuita Pedro de Ribadeneyra, al pintor Alonso Sánchez Coello la realización de un retrato de Ignacio de Loyola a partir de una mascarilla mortuoria, puesto que éste no había accedido a ser retratado en vida, fue requerida la opinión de Gaspar de Quiroga para que corrigiese aquellos rasgos fisionómicos que a su parecer, por el método empleado, quedaban poco precisados o distorsionados en relación con la imagen real (25).

Tras la muerte de San Ignacio, Quiroga continuó sus contactos con la Compañía de Jesús y con el sustituto de aquel al frente de la misma, Diego Laínez. En carta el padre Araoz envió a éste, en septiembre de 1557, le

(23).- La carta que la princesa doña Juana dirigió a la iglesia toledana se encuentra recogida en, RAH, "Salazar" A-52, fols. 309r-310r.

(24).- BSCV, Ms. nº 16, fol. 144r: "y en la enfermedad y gloriosa muerte del Santo Patriarca asistió con igual devoción que el más amante de sus numerosos hijos". Sin embargo, a pesar de lo aquí referido, Gaspar de Quiroga no se hallaba presente cuando el 31 de julio de 1556 falleció Ignacio de Loyola, según la narración que de dicho tránsito han realizado diversos autores (J.I.TELLECHEA IDIGORAS, Ignacio de Loyola, solo y a pie. Salamanca 1990, pp, 364-366; I.CASANOVAS, San Ignacio de Loyola. Fundador de la Compañía de Jesús. Barcelona 1980 (3ª ed.), pp, 369-384; C.DE DALMASES, El Padre maestro Ignacio. Madrid 1982, p, 251).

(25).- En torno a las motivaciones de Pedro de Ribadeneyra para realizar dicho encargo, así como un pormenorizado relato del proceso de elaboración del cuadro, y las aportaciones e impresiones expresadas por Quiroga, véase, MHSI, Monumenta Ignatiana. Serie Cuarta. Vol.I. Madrid 1904, pp, 758-763; J.M.GRANERO, San Ignacio de Loyola. Panoramas de su vida. Madrid 1963, p, 456; a la estrecha relación que unió a ambos personajes hizo una significativa mención el propio Ribadeneyra en la dedicatoria que de su libro hizo a Gaspar de Quiroga (Vida de San Ignacio de Loyola. Madrid 1967 (3ª ed.), pp, 11-12 y 238).

comunicaba que su predecesor había favorecido la labor que estaban desarrollando las monjas del refugio de San Felipe de la Penitencia de dicha ciudad, y que tanto Felipe II con anterioridad, como entonces Ruy Gómez de Silva habían acudido en su recomendación ante varios religiosos jesuitas. Araoz solicitaba a Láñez que este patrocinio fuese continuado, remitiéndole para la obtención de la información precisa sobre los pasos que se debían seguir a la que le podía proporcionar el auditor de la Rota como persona bien informada al respecto (26). Por otra parte, fue también durante estos años, cuando Gaspar de Quiroga entabló relación y amistad con dos jesuitas que tuvo gran influencia y continuidad a lo largo de toda su vida. Nos estamos refiriendo a Pedro de Ribadeneyra y a Juan de Mariana (27).

Sin embargo, como hemos referido, la importancia de la vinculación de Quiroga a la Compañía de Jesús durante estos años, vino determinada por la mediación realizada por diversos de sus miembros para obtener su promoción. En diciembre de 1557, el jesuita Alfonso Salmerón fue el mensajero utilizado por Quiroga para hacer llegar sus peticiones en este sentido a la Corte de Bruselas, y en especial a Ruy Gómez de Silva (28). No obstante, su valedor más importante fue Francisco de Borja. A comienzos de 1558, el contacto entre ambos ya había sido firmemente establecido, siendo muy significativa la favorable opinión que tenía Borja de las cualidades y pareceres de Quiroga en

(26).- MHSI, Lainii Monumenta. Madrid 1912, II, pp, 426-427; Las condiciones que Antonio Araoz tenía para desenvolverse en los ambientes cortesanos han sido puestas de manifiesto por J.L.GONZALEZ NOVALIN, "La Inquisición y la Compañía de Jesús" Anthologica Annua 37 (1990), pp, 27-31.

(27).- J.GIL CALVO, La Compañía de Jesús..., p, 52.

(28).- En carta que Salmerón remitió a Láñez desde Bruselas decía: "Al señor auditor Chiroga se puede decir que yo le di sus letras para quienes iban, y encomendé su negocio a todos y en especial al Sr.Rui Gómez". En relación a dicho asunto, escribía a Salmerón el Padre Juan Polanco desde Roma el 5 de enero de 1558: "En el negocio del auditor Quiroga holgará nuestro Padre que se estienda V.R. un poco en escribir lo que ha hecho para podérselo mostrar a él". Estas indicaciones fueron atendidas por Salmerón. como consta por una nueva carta que Polanco le remitió el día 12 de febrero (MHSI, Epistolae Salmeronis. Madrid 1906, I, pp, 222, 225 y 239).

relación con los asuntos que estaban tratando con el auditor (29). Este respaldo fue decisivo para que Gaspar de Quiroga obtuviese la designación para ocupar el primer cargo administrativo que desempeñó, pues, en abril de 1559, era nombrado visitador en el reino de Nápoles. Solamente un mes después, y antes de que llegasen a Roma los despachos que confirmaban esta provisión, Borja respondía a un requerimiento efectuado por Felipe II, por el que el monarca solicitaba ser informado secretamente de las personas que el jesuita considerase más adecuadas para ocupar diversos puestos en las instituciones de la Monarquía así como los más idóneos para ser promovidos a los obispados. Dentro de este último grupo, Francisco de Borja incluyó a Quiroga, realizando una laudatoria recomendación de su persona y condiciones (30).

4.2. La visita al Reino de Nápoles (1559-1564) (31)

Entre 1556 y 1559 los territorios italianos adscritos a la Monarquía hispana fueron sometidos a una serie de modificaciones en la estructuración de su sistema de gobierno que culminaron con la fundación del Consejo de Italia. Esta

(29).- En este sentido, véase la carta que Borja remitió a Laínez fechada en Valladolid el 15 de febrero de 1558: "He hablado asímesmo a un don Gaspar, persona de mucha qualidad, muy confidente y devoto nuestro, y a quien devemos mucho, dándole parte de todo; y holgó mucho del expediente que se había tomado, alabándolo, y de la devoción del amigo Bivona y del medio. Consóleme que le hubiese parecido lo mismo que a mí, poque le tengo por hombre de mucha prudencia, ultra la mano que tiene en todo por su autoridad y otras partes" (Ibid., Sanctus Franciscus Borgia Epistolae. Madrid 1908, III, pp, 334 y 337).

(30).- En esta relación, fechada el 5 de mayo de 1559, Borja resaltaba ante Felipe II: "el doctor Quiroga es limpio, fue colegial del colegio del Cardenal en Valladolid y catedrático; es hombre muy docto, virtuoso y prudente, fue vicario de Alcalá en tiempos del Cardenal Tabera, y después auditor de Rota y aora le ha mandado V.M. ir por visitador de Nápoles" (Ibid., p, 481; BSCV, Ms. n° 16, fols. 144r-v). Por su parte, Quiroga respondió a este respaldo siguiendo muy de cerca los avatares de Borja con la Inquisición. En este sentido, véase, MHSI, Epistolae Salmeronis. Madrid 1906, I, pp, 362-363; J.L.GONZALEZ NOVALIN, op. cit., pp, 45ss.

(31).- Algunos aspectos aquí señalados ya han sido puestos de manifiesto en otro trabajo ("La visita al Reino de Nápoles de 1559: el enfrentamiento entre Gaspar de Quiroga y Juan de Soto", P.FERNANDEZ ALBADALEJO, M.MARTINEZ MILLAN, V.PINTO CRESPO (Coord.), Política, religión e Inquisición en la España Moderna. Madrid 1996, pp, 567-586), sin embargo, consideramos que la reiteración de algunas cuestiones es absolutamente necesaria para una mejor comprensión de la evolución vital del personaje. En dicha aportación, nos centramos en ciertas consideraciones vinculadas a los aspectos procesales de la visita en los que no vamos a insistir.

institución, que fue incorporada al organigrama administrativo polisinodial como un organismo independiente del Consejo de Estado, tuvo en su origen la función de cumplir un doble objetivo. Mientras que, a través de su puesta en marcha se trataba de introducir una mayor agilidad en la resolución de los asuntos, cuya acumulación generaba problemas de funcionamiento, por otra parte, se estaba desarrollando una pugna entre las distintas facciones cortesanas por conseguir establecer su influencia y dominio sobre las cuestiones referentes a estos territorios. El grupo encabezado por Ruy Gómez de Silva, consiguió de forma paulatina hacerse con el control sobre diversas parcelas de poder, copando los cargos más relevantes de la Monarquía y desplazando de los mismos a aquellos servidores que los habían ostentado durante los últimos años del reinado de Carlos V. Este nuevo grupo ascendente consiguió extender su esfera de influencia a las cuestiones italianas a través de la ocupación de los principales puestos del nuevo organismo por parte de individuos pertenecientes a dicho "partido". Así, Diego Hurtado de Mendoza, duque de Francavilla y suegro de Ruy Gómez fue promovido a la presidencia del Consejo de Italia, mientras que la secretaría del mismo fue encomendada a Diego de Vargas, protegido del secretario Francisco de Eraso. Además, ésta quedaba desgajada de la secretaría de Estado ocupada por Gonzalo Perez, perteneciente al grupo político encabezado por el duque de Alba (32).

El dominio que la facción ebolista adquirió en el Consejo de Italia se vió incrementado con la formación de una nutrida red clientelar en dichos territorios que se fue perfilando a partir de la labor desplegada por Ruy Gómez de Silva en cuanto a los asuntos relacionados con la concesión de Mercedes y nombramientos de oficios que ejecutaba de forma directa, consiguiendo, a su vez, un notable entendimiento con la élite italiana favorable a la presencia hispana,

(32).- En cuanto a las razones políticas y administrativas que motivaron la fundación del Consejo de Italia, véase, M.RIVERO RODRIGUEZ, "La fundación del Consejo de Italia: Corte, grupos de poder y periferia (1536-1559)" Instituciones y élites de poder en la Monarquía hispana..., pp. 214-216.

a la que atrajo a través de la generación de intereses comunes (33). En el caso concreto de Nápoles, la nobleza local tenía establecido su vínculo de unión con la facción dominante en la Corte mediante el entendimiento existente entre Ruy Gómez de Silva y el secretario Diego de Vargas con el virrey, el duque de Alcalá, y la princesa de Ascoli (34).

La reestructuración de los organismos administrativos que regían los territorios italianos, cuyo resultado fue la aparición de una nueva institución consiliar, estuvo íntimamente relacionada con la transición de un reinado a otro. Este cambio monárquico conllevó la puesta en práctica de un nuevo entendimiento en lo referido a las cuestiones del gobierno de Italia. La necesidad de definir las competencias del recién creado Consejo, en relación con los servidores de la Monarquía que efectuaban su labor en dichas posesiones, no sólo afectó a las funciones y significación de los virreyes (35), sino que, unido a la ascensión del "partido" ebolista, que generó un ambiente cortesano propicio para hacer responsables del deficiente estado de la administración de estos territorios a aquellos que se habían ocupado de ella en época del emperador, condujo a la activación de una serie de visitas, que se ejecutaron tanto en Nápoles como en Sicilia y Milán, y que se conocen como las Visitas Generales de 1559. La visita constituía uno de los métodos más significativos empleados por la Monarquía para la revisión y control de su aparato institucional y de los servidores que lo conformaban. Su instrucción consistía en una investigación encaminada a desvelar los aspectos de la actividad y organización administrativa, que se separaban de un correcto funcionamiento, con el fin de aplicar una acción

(33).- En torno al entendimiento alcanzado con las élites italianas y su reflejo en el sistema de gobierno, véase, P.MOLAS RIBALTA, "El sistema político de la Monarquía hispana en el siglo XVI" Congreso Nacional Jerónimo Zurita, su época y su escuela. Zaragoza 1985, pp, 102-104.

(34).- En relación con la red clientelar formada por el príncipe de Eboli, véase, M.RIVERO RDRIGUEZ, El Consejo de Italia y el gobierno de los dominios italianos en la Monarquía hispana durante el reinado de Felipe II (1556-1598). Tesis doctoral. Universidad Autónoma de Madrid 1991, pp, 95-100.

(35).- Respecto a las innovaciones administrativas que conllevó la puesta en funcionamiento del Consejo de Italia, así como el influjo de estas sobre la figura del virrey, véase, H.G.KOENIGSBERGER, La práctica del Imperio. Madrid 1975, pp, 81 y 195-201.

correctora y ejemplarizante sobre aquellas gestiones y comportamientos que no se adecuasen a la normativa establecida (36). Al constituir un proceso de cariz extraordinario, su mano ejecutora, el visitador, contaba para realizar su función con una serie de atribuciones que, en consecuencia, se encontraban contrapuestas por su naturaleza a las que tenían los miembros ordinarios de las instituciones (37). En este sentido, si bien las visitas no siempre tenían un reflejo en lo concerniente al ordenamiento administrativo, por el contrario, conllevaban habitualmente un relevo de los integrantes de las instituciones donde aplicaba su ejecución, lo que convertía a la visita en un importante instrumento político dentro del proceso de pugna cortesana por la ostentación de los puestos más relevantes de la Monarquía.

En este contexto hemos de entender la visita del reino de Nápoles de 1559. Aunque determinados historiadores han interpretado la visita como un instrumento que perseguía acabar con los comportamientos irregulares que llevaban a cabo los servidores de los distintos organismos de dicho territorio, así como realizar un ordenamiento y control de la administración fiscal, financiera y judicial, que se tradujese en un mayor asentamiento del poder real (38); nosotros pensamos, más bien, que fue motivada por la ascensión del "partido" ebolista y el dominio que había establecido sobre el Consejo de Italia. Este hizo que desde el mismo se auspiciase la realización de una visita como medio para expulsar de las instituciones napolitanas a aquellos servidores que estaban

(36).- Sobre la naturaleza y características de las visitas, véase, G.CESPEDES DEL CASTILLO, "La visita como institución indiana" Anuario de Estudios Americanos 3 (1946), pp, 984-1025; P.L.ROVITO, Repubblica dei togarì. Nápoles 1981, pp, 71ss.

(37).- La función y características de los comisarios extraordinarios, y el importante papel desempeñado por los mismos en las grandes reformas monárquicas, ha sido puesto de manifiesto por historiadores del Derecho como O.HINTZE, Historia de las formas políticas. Madrid 1968, pp, 115-192.

(38).- En torno a esta cuestión, véase, G.D.'AGOSTINO, Il Parlamento Generale del regno di Napoli nell'età spagnola, 1556-1596. Nápoles 1984, I, p, XXV; R.MANTELLI, Burocrazia e finance pubbliche nel Regno di Napoli. Nápoles 1981, pp, 39-51; G.MUTO, "Come leggere il Mezzogiorno spagnolo. Fonti e problemi storiografici in studi recenti" Cheiron 17-18 (1992), pp, 73-75; J.M.GARCIA MARTIN, Monarquía Católica en Italia. Burocracia imperial y privilegios constitucionales. Madrid 1992, pp, 292-293.

desempeñando sus oficios desde el reinado de Carlos V, posibilitando así que sus cargos pasasen a ser ocupados por individuos pertenecientes a dicha facción política, contribuyendo de esta manera a asentar y fortalecer su poder en relación con los asuntos italianos (39).

4.2.1 La labor de Quiroga en Nápoles (1559 - 1563)

Así pues, planteada la conveniencia de que se procediese a la institución de las visitas, era necesario realizar la elección de las personas a quienes debía encomendarse este cometido. Andrés de la Cueva obtuvo la designación para hacerse cargo de la que afectaba a Milán, Juan Mauriño y Antonio Agustín fueron encargados de la concerniente a Sicilia, mientras que Gaspar de Quiroga era nombrado visitador en el Reino de Nápoles (40). Sin duda, su vinculación a la facción ebolista a través tanto de su propio devenir en relación con los grupos cortesanos, así como por su vinculación con destacados miembros de la Compañía de Jesús, cuyo patrocinio fue esencial, junto con su formación como hombre de leyes y el carácter regalista que había exhibido en algunas de sus actuaciones, motivaron la provisión de Quiroga para desempeñar esta función.

Las visitas de 1559, auspiciadas por el "partido" ebolista, se proyectaron como una continuación de los intentos que habían tenido lugar en los años precedentes. Este grupo había vertido fuertes críticas sobre la labor realizada

(39).- En este sentido hemos de entender la sustitución de don Pedro de Toledo, quien fue relevado de su cargo de virrey de Nápoles por su vinculación con el duque de Alba. En torno a su figura y gestión, véase, C.J.HERNANDO SANCHEZ, Castilla y Nápoles en el siglo XVI. El virrey Pedro de Toledo. Linaje, estado y cultura (1532-1553). Junta de Castilla y Leon 1994, pp, 304-339; M.RIVERO RODRIGUEZ, "Poder y clientelas en la fundación del Consejo de Italia (1556-1560)" Cheiron 17-18 (1992), pp, 37-44; A.CERNIGLIARO, Sovranità e feudo del regno di Napoli, 1505-1557. Napoli 1983, I, pp, 335-358; Sobre este periodo, véase el aporte documental de G.CONIGLIO, Il viregno di don Pietro di Toledo (1532-1553). Napoli 1984.

(40).- Es falso que Quiroga recibiese el encargo de realizar la visita de Sicilia además de la de Nápoles. Parece que este error, que fue recogido por diversos autores, tiene su origen en las noticias biográficas que sobre este personaje aporta Francisco de Pisa (op. cit. p, 268), y que tuvo su reflejo en varios trabajos: G.GONZALEZ DAVILA, op. cit., p, 488; T.MUÑOZ SOLIVA, op. cit., p, 208; M.LOPEZ, op. cit., p, 242; En torno a dicha cuestión, véase, BSCV, Ms. nº 16, fol. 144r.

durante las mismas, referidas tanto a su falta de efectividad como a la prematura suspensión que motivó que quedasen inconclusas. En lo que concierne a Nápoles, Pedro Pacheco, obispo de Mondoñedo, había sido encargado de efectuar una visita en 1532, que se llevó a cabo entre 1536 y 1538 (41). Su instrucción fue inducida por las denuncias presentadas por el regente Juan de Figueroa ante Carlos V, en relación con la corrupción e irregularidades que cometían los servidores de las instituciones napolitanas en el ejercicio de sus oficios, así como en cuanto a la incapacidad del virrey para controlar esta situación. Los problemas que surgieron en el desarrollo de la visita, centrados en el enfrentamiento mantenido entre el visitador y el virrey, y que condujeron a su cancelación, aparecieron reflejados en las instrucciones expedidas desde Bruselas el 19 de abril de 1559, destinadas a la realización de la ejecución de la nueva visita por parte de Gaspar de Quiroga. Si bien se trataba de aprovechar la experiencia anterior con el propósito de superar los inconvenientes que pudiesen acontecer, lo cierto fue que, al plantearse esta visita como una prolongación de aquella, adoleció de semejantes impedimentos (42).

Obedeciendo el mandato regio, Quiroga abandonaba Roma para cumplir con la nueva misión que se le había encomendado en Nápoles, donde desembarcó el 17 de noviembre, instalándose en el palacio del príncipe de Salerno (43). El auditor de la Sacra Rota había planeado cumplir con su oficio como visitador y retornar a Roma para seguir ejerciendo dicho cargo. Sin

(41).- En relación a esta, véase, G.CONIGLIO, Il regno di Napoli al tempo di Carlo V. Napoli 1951, pp, 66-68; A.CERNIGLIARO, op. cit., I, pp, 325-327; M.RIVERO RODRIGUEZ, El Consejo de Italia..., pp, 183-187.

(42).- Una copia de dicha instrucción se encuentra en, BNM, Ms. 988, fols. 63r-74r, junto con las que se realizaron destinadas al virrey y al duque de Alba (Ibid., fols. 76r-136r). Se trata de una reproducción mal fechada, pues aparece en su data el año 1558, cuando la misma fue despachada el 19 de abril de 1559 desde Bruselas (R.MANTELLI, op. cit., pp, 17-22). Es factible que la existencia de varias copias y el error en la datación de algunas de ellas se deba a que, según refería Felipe II en abril de 1560, se había perdido en el mar una nao con dieversas escrituras, entre las que se encontraban las que concernían a la visita napolitana. El monarca solicitaba a Quiroga que mandase sacar una copia tanto de la instrucción como de la comisión que le habían sido conferidas por este motivo (AGS, SP, libro 424, fol. 26r). Una copia de esta comisión expedida en la misma fecha se encuentra en, RAH, "Salazar" F-24, fols. 87v-96v.

(43).- BSCV, Ms. n° 16, fol. 144v.

embargo cuando fue designado para la instrucción de la visita, puesto que tenía que abandonar la plaza que ocupaba en dicho tribunal, el rey nombró para sustituirle en el desempeño de este cargo a Francisco de Sarmiento, oidor de la Chancillería de Valladolid. Antes de iniciar su viaje hacia Nápoles, Quiroga presentó sus quejas ante el rey en relación con la exclusión de la que había sido objeto (44). La falta de justificación que Felipe II encontraba en esta protesta forzó a Quiroga a tener que explicar las causas que le habían llevado a presentar el recurso. A pesar de sus esfuerzos, la persona que el monarca había designado para cubrir la plaza de auditor había comenzado a prestar sus servicios, por lo que Gaspar de Quiroga quedó definitivamente desvinculado de su desempeño (45).

Según quedaba recogido en las instrucciones de la visita, Gaspar de Quiroga debía llevar a cabo la elaboración de una amplia información en torno al funcionamiento de los órganos administrativos de la Monarquía en dicho territorio, así como del proceder de sus servidores, poniendo un especial interés en aquellas cuestiones que ayudasen a alcanzar una mayor ordenación de la fiscalidad, las finanzas y de la administración de justicia, realizando, en su conjunto, una revisión de todos aquellos aspectos que contribuyesen a la defensa de las prerrogativas regias (46). En consonancia con ello, según se desprende de la correspondencia que mantenía con Felipe II, el visitador se aplicó en revisar los gastos que se producían en el Reino, tratando de buscar una reducción de los mismos, poniendo de manifiesto aquellos que, a su juicio, no consideraba

(44).- El 10 de abril de 1560 Felipe II escribía a Quiroga refiriéndose a la protesta realizada por éste, pidiéndole una clarificación de sus intenciones y aludiendo que, cuando aceptó el cargo de visitador de Nápoles, era bajo el presupuesto de que ello conllevaba abandonar el puesto de auditor (AGS, SP, libro 424, fol. 26r).

(45).- Felipe II reconoció en los intentos de Quiroga por retener la plaza de auditor la intención de salvaguardar su porvenir tras la finalización de la visita. En relación a este asunto, tranquilizaba a Quiroga en octubre de 1560: "a su tiempo se terná memoria de vra persona y servicios, la memoria q es razón y mereceis" (Ibid., fols. 75r-v).

(46).- En torno a este aspecto, véase, M.RIVERO RODRIGUEZ, "Doctrina y práctica política en la Monarquía hispana. Las instrucciones dadas a los virreyes y gobernadores de Italia en los siglos XVI y XVII" *Investigaciones históricas* 9 (1989), pp. 203-204.

absolutamente necesario consignar (47). Establecida por el propio Quiroga una relación de estos que mereció la aprobación del monarca, Felipe II le instó para que fuese anotando los remedios que se podían poner a dicha situación para minimizar los gastos (48). En este sentido, la labor del visitador también se centró en tratar de aumentar la partida correspondiente a los ingresos, a través de establecer una vigilancia para que las exenciones fiscales se ejecutasen de forma correcta, sin que se beneficiasen de las mismas entidades que no contaban con dicho privilegio, o bien, controlando la realización de cualquier otro tipo de actividades fraudulentas o abusivas, sobre todo por parte de los arrendadores (49). En relación con la defensa de las prerrogativas regias el visitador debía poner una especial aplicación en atender los asuntos relacionados con la administración de la justicia en el reino, puesto que la correcta elección de los servidores de los tribunales y de los jueces era uno de los aspectos que más preocupaba a Felipe II (50). Así, se trataba de perseguir y poner freno a la creación y proliferación de oficios instituidos de forma irregular, es decir, aquellos que no contaban con la autorización expresa del monarca. Quiroga debía realizar una concienzuda información sobre estos, reflejando la naturaleza, calidad y origen de los mismos, así como del salario que tenían asignado, y de la necesidad real de su existencia. Si esta era cierta, el visitador debía informarse de la persona que era más apropiada para ocuparlo, para que así, la situación pudiera ser normalizada a través de la expedición del título y nombramiento regio correspondiente (51). Para que Quiroga pudiera realizar esta labor le fue remitida desde la Corte una nómina en la que eran enumerados los oficios que habían sido instituidos y proveídos por los cauces correctos. Esta fue

(47).- AGS, SP, libro 424, fols. 25r-v y 74v.

(48).- Ibid., fols. 119r y 120v. Por otra parte, sobre los gastos que el propio generó durante su estancia en Nápoles, véase, G.CONIGLIO, Il viceregno di Napoli e lotta tra spagnoli e turchi nell Mediterraneo. Napoli 1987, I, pp. 248-251.

(49).- AGS, SP, libro 424, fol. 161r.

(50).- Ibid., fols. 74r-75v.

(51).- Sobre la insistencia de Felipe II en torno a esta cuestión, véase, Ibid., fols. 185r-186r y 211r-v.

utilizada por el visitador para poder remitir al Monarca un informe en el constaban aquellos que existían o se ejecutaban sin observar la normativa (52). Por otra parte, Quiroga aconsejó a Felipe II que no se procediese a efectuar ninguna nueva provisión hasta que su cometido en el Reino no estuviese finalizado, por las consecuencias que de los resultados que se obtuviesen se pudiesen desprender. El Monarca aceptó atender esta recomendación mientras que esta ausencia de designaciones para cubrir los oficios de justicia no afectase al buen funcionamiento de las instituciones (53).

Por otra parte, hemos de destacar que no es correcta la afirmación realizada por algunos autores en relación a que Gaspar de Quiroga tuvo una especial dedicación a la realización de la visita en su actuación en torno a los monasterios napolitanos (54), puesto que, por otra parte, el marco geográfico de la misma se limitó a la propia ciudad de Nápoles y se centró, como hemos señalado, en sólo algunas de las instituciones administrativas del reino (55).

El conocimiento que Quiroga logró alcanzar de los problemas que aquejaban al reino de Nápoles durante los años de permanencia, se evidencia en la correspondencia que mantuvo con Felipe II de forma continuada. Así, advertía al rey en cuanto a la situación de fuerte carestía que se sucedió entre 1559 y 1563, que se veía agravada por el gran crecimiento demográfico que conoció la ciudad de Nápoles (56). De igual manera, proporcionaba noticias en torno a la derrota sufrida por la expedición naval, cuyo objetivo era la conquista de Trípoli, en la isla de Djerba, y de las causas que motivaron el desastre, apuntando como solución, para evitar la repetición de episodios similares, la

(52).- Ibid., fol. 226v. Una interesante relación de los oficiales napolitanos aparece recogida en IVDJ, envío 80 (caja 104) n° 2.

(53).- AGS, SP, libro 424, fol. 119r.

(54).- M.BOYD, op. cit., p. 13; G.MARAÑÓN, Antonio Pérez..., I, p. 107.

(55).- R.MANTELLI, op. cit., pp. 18-20; AGS, SP, libro 424, fol. 210v.

(56).- R.MANTELLI, op. cit., p. 11; AGS, Estado, leg. 1050, n° 62 y 63.

creación de una potente armada real en el Mediterráneo (57). En relación con este suceso, hemos de destacar la buena relación que unió al visitador con uno de los responsables de este intento fracasado, el duque de Medinaceli, que además, ostentaba el cargo de virrey de Sicilia. Esto se puede constatar por la correspondencia cruzada entre ambos, así como por la vinculación que mantuvo Quiroga con diversos miembros de su familia y, en concreto, con Luisa de la Cerda (58).

Para poder realizar las gestiones propias de su labor de visitador, Quiroga contó con la ayuda de una serie de colaboradores, entre los que debemos destacar a Juan de Casanate, que actuó como secretario de la visita, estableciéndose una relación entre ambos que se prolongaría durante el resto de sus vidas (59). Por otra parte, hemos de señalar la positiva coordinación establecida entre Gaspar de Quiroga y el virrey de Nápoles, Pedro Afán de Ribera, duque de Alcalá. Felipe II trató, a través de los diversos llamamientos realizados a ambos en este sentido, que las relaciones se desarrollasen en un clima de cooperación, con el fin de que no aconteciesen los mismos inconvenientes que habían surgido durante la visita realizada por Pedro Pacheco y que habían conducido a su suspensión. Sin embargo, aunque aparecieron diferencias de opinión y pequeños enfrentamientos, ambos acataron las ordenes reales y mantuvieron cierta cordialidad mientras Quiroga permaneció en Nápoles, estallando la tensión entre ambos cuando se produjo el retorno del visitador a

(57).- En torno a este suceso, así como los informes remitidos por Quiroga a Felipe II, véase, L.CABRERA DE CORDOBA, Felipe II, rey de España. Madrid 1876, I, pp, 280-283; C.FERNANDEZ DURO, Estudios históricos del reinado de Felipe II. Madrid 1890, pp, 1-244; F.BRAUDEL, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II. Madrid 1976, I, p, 206; AGS, Estado, leg. 1050, nº 47, 54 y 136.

(58).- Ibid., SP, libro 424, fol. 160v; Ibid., VI, leg 22 (s.f.). Sobre la vinculación del duque de Medinaceli con Ruy Gómez de Silva, véase, H.KOENIGSBERGER, The government of Sicily under Philip II of Spain. Londres 1951, pp, 179-180.

(59).- Además de Casanate, colaboraron con Quiroga, Vicencio de Mariconda, Prospero Caravita, Marino Russo, Luis Suárez de Toledo y el doctor Mansilla, entre otros(R.MANTELLI, op. cit.,pp, 45-46; AGS, SP, libro 424, fols. 52r-v y 120r; Ibid., leg. 1, fol. 78; Ibid., VI, leg. 20, nº 4 (s.f.).

la Península (60). El virrey napolitano no acogió de buen grado la llegada de Quiroga al reino con el mandato real de realizar una visita por lo que ésta significaba, reflejando su intranquilidad en la reflexión realizada de que estando él mismo recientemente proveído en su cargo había podido encargarse de la realización de la misma (61). La soterrada pugna entablada entre ambos por mantener la visita bajo su control reprodujo la situación y problemática que se había originado durante la actuación del obispo de Mondoñedo en la década de los años treinta: la paralización de la vida administrativa, las quejas presentadas desde el propio territorio y sobre todo, la constatación de que los problemas que aquejaban la administración del reino partían de la falta de acciones resolutivas por parte del virrey debido a la influencia de la élite dirigente, y por consiguiente la reversión en su descrédito y desautorización (62).

Como consecuencia de ello, en abril de 1561, Felipe II ordenaba a Quiroga que terminase las gestiones relativas a la instrucción de la visita. Sin embargo, el visitador remitió un informe al monarca en el que hacía constar las causas que existían para que esta fuese continuada. Si bien Felipe II autorizó su prolongación, recomendaba a Quiroga que la visita se finalizase de forma rápida. A pesar de ello no se culminaría hasta 1563 (63). El 2 de noviembre de dicho año remitía el visitador una carta al virrey de Sicilia comunicándole la inminencia de su partida, así como su deseo de abandonar el reino tras la dureza

(60).- En torno a las diferencias surgidas entre ambos, como en relación a los llamamientos efectuados por Felipe II para que buscasen el entendimiento, véase, Ibid., leg. 1, nº 36; Ibid., SP, libro 424, fols. 25r, 55v, 119v, 135r, 193v y 210r-v; R.MANTELLI, op. cit., pp, 31-33.

(61).- La realidad en cuanto a la tensión existente entre Quiroga y el duque de Alcalá fue puesta de manifiesto por el secretario del reino Juan de Soto (AZ, carp. 128, nº 66).

(62).- Sobre los problemas administrativos que contempló Nápoles durante el virreinato del duque de Alcalá, véase, G.CONIGLIO, *I viceré spanoli di Napoli*. Napoli 1957, pp, 98 y 113-115; V.GLEIJESES, *La Storia di Napoli dalle origine ai nostri giorni*. Napoli 1974, p, 582.

(63).- En torno a estos aspectos, véase, M.RIVERO RODRIGUEZ, op. cit., pp, 190-194; AGS, SP, libro 424, fol. 160r.

que había revestido la labor realizada (64). Embarcó un mes después, llegando el 24 de diciembre a Genova. Allí esperó a los legados hispanos que retornaban a la Península tras la finalización del Concilio de Trento, en compañía de los cuales viajó, en febrero de 1564, en las naves que también transportaban a los sobrinos de Felipe II, Rodolfo y Ernesto (65).

En relación con los resultados y consecuencias de la visita de Quiroga a Nápoles, hemos de señalar que, a pesar de las dificultades intrínsecas que conllevaba la realización de su labor por la propia naturaleza de esta, los mismos se ajustaron a los objetivos que habían sido marcados en la instrucción. Las informaciones recogidas por el visitador dieron lugar a una importante labor procesal en referencia a las irregularidades cometidas por los miembros de los órganos administrativos del reino (66). De igual manera, estas produjeron una serie de ordenamientos generales y particulares desde la Corte orientados a lograr una agilización y mejor funcionamiento de las instituciones regnícolas (67), así como a una mayor participación del reino al sustento económico de la Monarquía (68).

(64).- "Si a v.ex^a.pareciere que yo soy bueno para servir en algo en la Corte o en otra cualquier parte, ternía por gran ventura q me embie a mandar, porq en la execución conociesse v.ex^a quan de veras soy su sery^o y quanto me precio dello" (Ibid., VI, leg. 22 (s.f.)).

(65).- La llegada de las mismas a Barcelona, ciudad a la que el monarca había acudido a recibir a los archiduques, se produjo el 17 de marzo. Quiroga continuó su viaje integrando el séquito real hasta Valencia, donde solicitó y adquirió la licencia de Felipe II para viajar a Madrid, haciendo su entrada en la Corte el 27 de abril (BSCV, Ms. n^o 16, fol. 144v; P.SALAZAR Y MENDOZA, op. cit., p, 292).

(66).- En este sentido, véase, AGS, VI, leg. 2, libro 2: "Libro de los cargos que resultan de la visita hecha por Monseñor Gaspar de Quiroga visitador general del reino de Nápoles".

(67).- Sobre esta cuestión, véase, por ejemplo, "Las relaciones que dio el doctor Quiroga sobre la reformatión de los tribunales de Nápoles y los decretos que sobreello se hicieron en cons^o" (IVDJ, envío 62 (caja 83) n^o 188).

(68).- La magnitud de la documentación elaborada por Quiroga se puede apreciar en el inventario que de los papeles producidos en la visita se realizó en 1572 con motivo de la realización de su depósito en el castillo de Simancas (BNM, Ms. 1029, fols. 292r-298r); R.MANTELLI, op. cit., pp, 33-39 y 49-51; G.GALASSO, "Momenti e problemi di storia napolitana nell'età di Carlo V" Archivio Storico per le province napolitane 1 (1961), p, 91; G.CONIGLIO, Visitatori del viceregno di Napoli. Bari 1974, pp, 17-23 y 98ss.

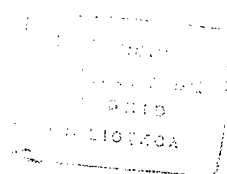
Por otra parte, hemos de señalar que Gaspar de Quiroga no perdió, durante su estancia en Nápoles, su vinculación y buenas relaciones con la Compañía de Jesús tratando de favorecer su labor y manteniendo, a su vez, a través de su mediación, el contacto con la Corte filipina (69). En este sentido, alguna gestión realizada por el padre Araoz en la misma debió generar algún tipo de malentendido entre Quiroga y Ruy Gómez de Silva. El visitador escribía a Diego Laínez, en agosto de 1560, para que tratase de solucionar esta cuestión, pues, por esta causa, llevaba algún tiempo sin recibir carta del portugués y temía que, el favor que recibía de Felipe II a través de éste se viese afectado, cuando su única intención, según el propio Quiroga señalaba, había sido favorecer a la orden (70). Sin embargo, este pequeño equívoco no enturbió las relaciones de Quiroga con los miembros de la Compañía de Jesús. Así, estando en Nápoles recibió la visita de Francisco de Petrarca y de Alfonso Salmerón, quien acudió a entrevistarse con Quiroga por encargo de Pedro de Ribadeneyra y cuya predicación causó gran impresión en Nápoles (71). Muy poco después fue el propio Ribadeneyra quien acudió a este reino en su camino hacia Sicilia, a donde se dirigía tras recibir el nombramiento de comisario y provincial de dicho territorio. Durante el tiempo que permaneció en Nápoles hasta que el jesuita embarcó hacia su destino, se cimentó aún más la amistad iniciada por ambos tiempo atrás (72).

(69).- En este sentido, véase, MHSI, Epistolae Salmeronis, I, pp, 404 y 485.

(70).- En relación a este asunto escribieron a Laínez tanto Quiroga como Antonio Araoz (Ibid., pp, 191-192 y 195-196). Por otra parte, la actividad del jesuita en la Corte se encontraba en declive a causa de sus actuaciones poco apropiadas, así como el aprecio de sus correligionarios, llegando a un enfrentamiento abierto con Francisco de Borja (J.L.GONZALEZ NOVALIN, op. cit., pp, 36 y 49-50).

(71).- En consonancia con esta actuación, véase lo referido por el padre Francisco de Petrarca a Bobadilla en una carta fechada en Nápoles el 14 de febrero de 1562: "Mro. Pietro con li suoi figlioli è qui aspettando vento. Ha predicato doi volte al vicerè assai bene; non credo predicarà più. Li predicatori publicano gran cose del Rdo. Padre Vicario; et Fiamma ha detto, che tutta Napoli è obligatissima a Salmerone, et lui ha il sommo predicamento de predicatori. Si raccomanda alli Patri monsignor Chiroga, et habbiamo conferito molte cose. E devotissimo della Compagnia" (MHSI, Bobadillae monumenta. Madrid 1913, p, 397). En torno a la visita de Salmerón a Quiroga, Ibid., Ribadeneyra. Madrid 1920, I, p, 423.

(72).- Ibid., p, 74; B.ALCAZAR, op. cit., pp, 69-70.



La actividad del visitador en relación con cuestiones político religiosas no se ciñó solamente a su vinculación con la Compañía de Jesús, sino que, obedeciendo un mandato de Felipe II, Gaspar de Quiroga se informó, a través de los exámenes que realizaba, de la actuación de un foco luterano existente en el reino (73). Para erradicar este núcleo protestante, el monarca opinaba que, puesto que la Inquisición despertaba fuertes reticencias en este territorio, era necesario actuar en contra de la herejía por la vía ordinaria y por medio de la justicia real, como personas insumisas contra el rey y la República (74). El conocimiento que alcanzó Quiroga de la situación religiosa en Nápoles, así como de su labor en torno a la designación de los preladados de su Iglesia, le llevaron a colaborar desde su papel de visitador con otros aspectos de la política de la Monarquía.

4.2.2 La aportación a la reforma del episcopado napolitano

Desde el comienzo de su reinado, Felipe II era consciente de la importancia que tenía inmunizar a sus reinos de toda posible influencia de aquellas ideologías religiosas que no se ajustasen a la ortodoxia católica, así como a poner los medios convenientes para eliminar cualquier brote de protestantismo (75). Erigido en el adalid de la defensa de la religión católica en Europa, la reforma protestante suponía para el Monarca hispano una enorme amenaza, no

(73).- En este sentido, véanse las cartas que el rey dirigió al duque de Alcalá y al visitador, encomendando a Quiroga la realización de esta función, fechadas el 13 de octubre de 1560, AGS, SP, libro 424, fols 71v-73r; R.MANTELLI, op. cit., p. 15; En torno a la influencia de Juan de Valdés sobre este grupo luterano, véase, J.C.NIETO, Juan de Valdés y los orígenes de la reforma en España e Italia. México 1979, pp, 237-276; P.LOPEZ, Il movimento valdesiano a Napoli. Mario Galeota e le sue vicende col Sant'Uffizio. Napoli 1976, passim; F.ELIAS DE TEJEDA, Nápoles hispánico. Madrid 1958, II, pp, 317-338.

(74).- R.MANTELLI, op. cit., pp, 14-17; IVDJ, envío 80 (caja 104) n° 9-11; AGS, SP, libro 424, fol. 113r; En este sentido, véase la relación de gracias, capítulos y concesiones que suplicaba el reino de Nápoles a Felipe II en 1560 con los pareceres del virrey (IVDJ, envío 80 (caja 104) carp. 2, n° 13). En cuanto al gran celo imprimido por el duque de Alcalá en el tratamiento de dicho asunto, véase, G.CONIGLIO, I viceré spanoli..., pp, 100-105.

(75).- En términos generales, M.BATAILLON ha definido esta política como de "cordón sanitario" (Erasmus y España. México 1950, pp, 719-720). Por otra parte, los llamamientos tanto a Quiroga como al virrey en torno a la vigilancia que se debía ejercer sobre las cuestiones religiosas napolitanas fueron constantes. Véase, por ejemplo, AGS, SP, libro 424, fol. 226v.

sólo desde el punto de vista religioso, sino también político. En este sentido, tras la firma del tratado de paz de Cateau-Cambresis y el consiguiente giro en las relaciones con Francia, el monarca había instado en diversas ocasiones al papado para que se reanudase la asamblea conciliar tridentina como vehículo a través del que establecer los pilares, tanto doctrinales como disciplinales, de la reforma católica, que a su vez, sirviese como soporte ideológico sobre el que sustentar su actuación política. Si bien el nuevo pontífice, Pio IV, procedió prontamente a la convocatoria del Concilio, su preparación revistió serias dificultades ante la complicada situación político-religiosa que contemplaban Francia y el Imperio.

La definición en cuanto al carácter de la misma abrió un periodo de gran actividad diplomática y de tirantez en las relaciones entre el papa y Felipe II. La polémica giró en torno a su consideración como continuación de las dos reuniones tridentinas anteriores, punto indispensable de partida según el criterio del monarca hispano, o bien como una asamblea ecuménica nueva, propugnada por el papado para tratar de conseguir la asistencia de representantes franceses e imperiales. La necesidad de ambas instancias por alcanzar un entendimiento para lograr la consecución del proyecto llevó a que dicha cuestión quedase solventada, aunque la misma dilató durante varios meses el comienzo de la celebración del concilio (76). Una vez superado este primer escollo, el interés de Pio IV se centró en activar la esencial asistencia de los legados hispanos, tanto peninsulares como, especialmente, aquellos cuyas diócesis se encontraban en los territorios italianos adscritos a la Corona hispana. En relación a estos últimos, y en concreto a los prelados napolitanos, es donde resalta la actuación de Gaspar de Quiroga y del virrey, estando esta en consonancia con las premisas recibidas desde la Corte en relación con los avatares tridentinos.

Uno de los virreyes que más rápidamente, en abril de 1561, remitió al

(76).- F.GARCIA CUELLAR, "Política de Felipe II en torno a la convocatoria de la tercera etapa del Concilio tridentino" *Hispania Sacra* 16 (1963), pp, 25-60; E.JULIA MARTINEZ, "El Concilio de Trento y el Imperio español" *Verdad y Vida* 3 (1945), pp, 233-258; B.CHUDOBA, "Las relaciones de las dos Cortes habsburguesas en la tercera asamblea del Concilio tridentino" *BRAH* 103 (1933), pp, 297-368; M.F.MINGUELEZ, "La Iglesia y Felipe II" *La ciudad de Dios* 47 (1948), pp, 138-150; L.PASTOR, op. cit., XV, pp, 186-256.

monarca una lista sobre los obispos que podían ser consiliares, fue el duque de Alcalá. A pesar de que, junto al requerimiento efectuado por el rey en este sentido, Felipe II ordenaba que se hiciese partir a los prelados hacia Trento, no se adjuntaron las credenciales necesarias. Si bien se alegó por parte del monarca que dicha contingencia obedecía a un descuido, esto provocó un nuevo retraso en el traslado de los legados, lo que estaba en conexión con la evolución de las pugnas diplomáticas anteriormente aludidas, puesto que el rey no mostró intención real de requerir a los consiliares napolitanos su marcha a Trento hasta el mes de agosto (77).

Por otra parte, el interés de Felipe II en torno a las cuestiones relacionadas con el arzobispado napolitano estaba además motivado porque el control que ejercía sobre la provisión de oficios y beneficios eclesiásticos no era tan completo como el que ostentaba en Sicilia. Puesto que Nápoles era feudo de la Santa Sede, correspondía al pontífice la designación de la mayoría de los mismos, estando reservado el derecho de presentación del monarca a un número muy limitado de prelacías y arzobispados. Referida a estos, Felipe II había puesto un especial interés, en que se eligiese a las personas que fuesen más idóneas para ocupar dichas dignidades, insistiendo en la importancia de que cumpliesen con la residencia en sus diócesis, obedeciendo esta determinación a la concepción de que los obispos constituirían el vehículo esencial de la reforma católica (78). En este sentido, el 10 de abril de 1560 el monarca comunicaba a Quiroga que había instado al pontífice en relación con esta cuestión a través de su embajada en la Santa Sede en consonancia con las recomendaciones que el propio visitador había realizado en torno a la necesaria residencia de los prelados (79). De igual manera, en noviembre de 1561, Felipe II escribía a

(77).- C.GUTIERREZ, Trento, un problema: la última convocación del Concilio (1552-1562). Universidad Pontificia de Comillas 1995, pp, 491-494.

(78).- M.RIVERO RODRIGUEZ, op. cit., p, 87; J.I.TELLECHEA IDIGORAS, El Obispo ideal en el siglo de la Reforma. Roma 1953.

(79).- AGS, SP, libro 424, fol. 25v. En su carta al visitador el rey afirmaba: "al [obispo] de Ríoles se le envía con este correo la presentación de aquel arzobispado con orden espresa q le vaua luego a residir como juzgais ser necesario para el bien de aquella iglesia y descargo de nra conciencia".

Quiroga ensalzando la labor del visitador en relación con los asuntos religiosos en Nápoles, notificándole sus nuevos contactos con el papa en torno a la residencia y elección de los prelados (80). Si bien no dificultó en ningún momento su asistencia al concilio, Felipe II estaba interesado en que se sumasen a la asamblea aquellos que fuesen más apropiados para llevar a cabo la actuación que de ellos se esperaba en la misma, cuyos resultados revestían tanta importancia para el monarca. La intranquilidad y recelo que despertaron en Pio IV las previsibles posiciones hispanas, motivaron a que el papa pusiese todo su interés no tanto en las calidades de los prelados como en su número, en un intento de conseguir una mayoría de representantes italianos afectos a la Curia romana frente al grupo constituido por hispanos y franceses. Como consecuencia de ello, ofreció ayuda económica al virrey napolitano durante el otoño de 1561 para que concurriesen la mayor cantidad posible de obispos. Así pues, esto vendría a explicar el hecho de que legados procedentes de un mismo territorio se encontrasen en "partidos" conciliares distintos (81).

De igual manera, en julio de 1562, ya iniciadas las sesiones tridentinas, el rey contestaba a las cartas enviadas por el visitador entre octubre de 1561 y febrero de 1562 en las que recordaba al monarca la necesidad de nombrar pastor en la iglesia de Castelamar, que cumpliese con la residencia y pusiese remedio a la precaria situación de la misma. Felipe II comunicaba a Quiroga que tratando de elegir a la persona adecuada para emprender la reforma en la misma, había sido designado para ocupar este cargo Scipion de Arezo, quien había declinado este nombramiento, habiendo sido proveído en su lugar Antonio de Lauro (82).

El conocimiento que Gaspar de Quiroga alcanzó a través de la labor

(80).- Ibid., fol. 160v.

(81).- En torno a estas cuestiones, véase, A.MARIN OCETE, El arzobispo don Pedro Guerrero..., II, pp, 487-495; F.CERECEDA, "El nacionalismo religioso español en Trento" Hispania 5 (1945), p, 237; R.GARCIA VILLOSLADA, "La reforma española en Trento" Estudios eclesiásticos 39 (1964), p, 71.

(82).- AGS, SP, libro 424, fols. 209v-210r.

realizada en Nápoles en cuanto a temas relacionados con la reforma del episcopado del reino, motivó a Felipe II a solicitar su parecer, cuando el mismo ya se encontraba en la península, junto al de otros prelados que habían asistido al Concilio de Trento, sobre las personas que el visitador consideraba más apropiadas para cubrir las vacantes que se fuesen produciendo en los obispados italianos (83). Las opiniones expresadas por Quiroga en torno a la idoneidad de las personas seleccionadas debieron tener gran influencia en el ánimo regio, puesto que de los diez integrantes de su nómina al menos dos de ellos, como consta al margen del propio memorial, fueron nombrados para ocupar sendas prelacías. Así, don Tiberio Caraffa, hermano del duque de Nochera, al que el visitador calificaba de hombre docto y virtuoso, que había sido cubiculario de Paulo IV y firme candidato al cardenalato, quien había abandonado Roma durante la contienda mantenida entre dicho pontífice y la monarquía hispana retornando a Nápoles, fue proveído en la iglesia de Potencia. De igual manera, Felice de Rubeis, doctor del Sacro Consejo de Capuana, realizó nombramiento para la iglesia de Tropea. Por otra parte, no deja de ser significativo que, junto con el aludido Tiberio Caraffa, Quiroga señalase a otro miembro de esta ilustre familia napolitana, Antonio Caraffa. Sin duda, las buenas relaciones y favorecimientos con que el pontífice Paulo IV le había obsequiado durante su etapa de auditor en la Sacra Rota romana, cimentaron su vinculación a la misma (84).

(83).- F.CERECEDA, Diego Laínez..., I, p. 332; En la carta que Felipe II remitió al arzobispo de Granada, Pedro Guerrero, el 6 de junio de 1564, encargando la realización de una lista de personas encaminada a esta finalidad le encarece que, "sean personas enteras y en quien demás de las letras concurren las otras partes que para semejante dignidad se requieren señaladamente de las que fuesen naturales de Nápoles y Sicilia y que tiene prelacías en ambos reynos" (AGS, SP, libro 424, fol. 329v). En la misma se señalaba que, de igual manera, se hiciese extensivo este encargo a los obispos de Ciudad Rodrigo y Lugo. Por el memorial elaborado en cumplimiento de la orden real sabemos que también fueron requeridas las opiniones de los obispos de Valencia y Lérida.

(84).- En torno a la nómina elaborada por Gaspar de Quiroga, así como la confeccionada por el resto de los consultados, véase, *Ibid.*, Estado, leg. 1054, fol. 256. Además de los ya mencionados, el visitador recomendaba al genovés residente en Nápoles Jerónimo Spinola "hombre de buen avida y muchas letras", a Juan Minutulo "caballero pobre y de bonissima vida", a Hector Piscicello "docto cavallero viejo y de bien, fue casado", a Anibal Caracciolo "al presente obispo de la Isola", a Diego de Escobar "Presidente de la R.C. de la sumaria sacerdote doctor y hombre de bien", a don Bernardino de Figueroa "theologo al presenta arçobispo de Nazarete merece otro mejor" y al abad Gabriel Sánchez, "doctor hombre de bien de buena vida y costumbres y inteligente para

Como la marcha de Gaspar de Quiroga de Nápoles se produjo días antes de que se estableciese la finalización del Concilio reunido en Trento, no pudo colaborar en la aplicación de los decretos emanados de este en dicho territorio, aunque mantuvo su activa colaboración tanto con la política confesional de la Monarquía como con los asuntos italianos. Esta labor fue encomendada por Felipe II al virrey. Si bien la preocupación que despertaba en el monarca la presencia de elementos heréticos en Nápoles le llevó a solicitar en marzo de 1564 la intervención de la Inquisición romana para atajar los efectos de su extensión y proceder a su erradicación (85), así como a tratar de mejorar su relación con el pontífice a través de las diversas mercedes realizadas a los sobrinos del papa en el reino de Nápoles (86), cuando en julio de 1564 ordenaba al duque de Alcalá que velase por la aplicación de los preceptos salidos de la asamblea tridentina, establecía claramente en la instrucción las peculiaridades que iba a revestir la aplicación de la reforma católica en la Monarquía hispana, fruto de la simbiosis que se había generado entre estos principios y los pilares ideológicos de la política filipina. El rey ordenaba al duque de Alcalá que se observasen y ejecutasen las resoluciones adoptadas en el Concilio al igual que en el resto de los reinos de la Monarquía, pero instaba al virrey para que cuidase especialmente de que en su aplicación no se viesen afectadas o perjudicadas ninguna de las prerrogativas regias, poniendo un marcado énfasis en las cuestiones concernientes a los patronazgos y en relación al cumplimiento de las bulas provenientes de Roma, siendo advertido de que no permitiese ninguna innovación en este sentido (87). Fue referido a este último aspecto donde surgieron los mayores problemas con la Santa Sede en cuanto a la obediencia del virrey a las órdenes recibidas del

qualquier cosa".

(85).- En este sentido, véase la carta que el rey remitió a los cardenales integrantes del Santo Oficio romano solicitando su colaboración en relación a esta cuestión (IVDJ, envío 6 (II) fol. 84).

(86).- En torno a dicho asunto, véase la carta enviada por Luis de Requesens a Felipe II, fechada en Roma el 1 de febrero de 1564 (Ibid., envío 9 (caja 16) n° 557).

(87).- AGS, SP, libro 424, fol. 337v.

monarca, y en concreto, en lo concerniente a la aplicación de la bula "In Coena Domini" (88).

(88).-En torno a la actuación regalista exhibida por el virrey, véase, G.CONIGLIO, I viceré spanoli..., pp, 106-107; G.GALASSO, op. cit., p, 108; J.MATEU IBARS, "Los Enriquez de Ribera, virreyes de Nápoles y su diplomacia con la Santa Sede sobre el "regio exequatur", la bula "Coena domini" y la Inquisición" Archivio Storico per la province napolitane 14 (1976), pp, 112-113; P.LETURIA, "Felipe II y el pontificado según don Luis de Requesens y Zúñiga" Estudios eclesiásticos 25 (1928), p, 67; J.L.LOPEZ MARTINEZ, Historia legal de la bula "In Coena Domini". Madrid 1968, pp, 20ss.

CAPITULO 5

5. LA PARTICIPACION EN EL PROCESO DE CONFESIONALIZACION DE LA MONARQUIA (1565-1572)

Tras su llegada a la Corte, en abril de 1564, Gaspar de Quiroga siguió ocupándose de los asuntos relacionados con la visita que había realizado al reino de Nápoles, pasando a rendir cuentas de la misma ante el Consejo de Italia, hallándose dedicado a esta actividad hasta el mes de noviembre del año siguiente. El largo periodo de tiempo empleado en la vista de dicha materia nos proporciona una idea de la ingente cantidad de documentación que ésta generó, así como de la importancia que revistió como forma de actuación política, puesto que, según se había establecido en las instrucciones otorgadas al visitador en 1559, su principal labor había consistido en la recabar una información que orientase la actuación del Consejo de Italia, facilitando la articulación de un eficaz gobierno de los territorios italianos desde la Corte hispana. Dicha institución pasaba a asumir las funciones que habían sido restadas a los virreyes, además de proceder al control de los mismos, así como a ejercer la definición y defensa de las prerrogativas regias, no sólo en lo concerniente a los temas administrativos y jurisdiccionales, sino también en relación a las cuestiones patrimoniales y hacendísticas (1).

Si bien Quiroga había mantenido informados tanto al monarca y al Presidente de este organismo, Diego Hurtado de Mendoza, como al confesor real fray Bernardo de Fresneda, de los pormenores de su proceder (2), en julio de

(1).- M.RIVERO RODRIGUEZ, El Consejo de Italia..., pp, 196-197.

(2).- AGS, SP, Leg.1 nº84.

1564, recibía una orden real para que junto con los licenciados Diego de Villagómez y Gómez de Montalvo, miembros del Consejo Real, y Francisco Hernández de Liébana, del de Indias, se reuniesen en la posada del Presidente del Consejo de Italia para tratar en relación a los procesos resultantes de la visita, señalando que las cuestiones referidas a temas hacendísticos fuesen remitidas a esta institución. De igual manera, Felipe II advertía, que puesto que el príncipe de Melito había sido proveído virrey de Cataluña (3), su asistencia e intervención en esta reunión sería ocasional, aduciendo además que la designación de estos consejeros obedecía principalmente a este impedimento del Presidente, así como a la excusa representada por el regente Polo en lo concerniente a la determinación de la visita, no quedando en el Consejo de Italia mas letrado que el regente Percolla (4).

Por otra parte, el enriquecimiento en las acepciones de este organismo consiliar, y su consiguiente fortalecimiento, estaba inscrito dentro de un amplio proyecto de reformas conducentes a una mayor centralización administrativa que Felipe II había acometido como medio para llevar a cabo la confesionalización de la Monarquía. En este sentido, para incrementar el control sobre dichos territorios desde la Corte, el monarca había realizado, tras la finalización de las visitas, un intento de instaurar tribunales inquisitoriales en Nápoles y Milán. Si bien este propósito se vio frustrado ante la gran oposición que despertaba en dichos territorios el Santo Oficio, esta intencionalidad se tradujo en un robustecimiento del aparato institucional de la Inquisición en Sicilia (5).

5.1. A las órdenes del nuevo patrón: Diego de Espinosa

El proceso de confesionalización de la Monarquía hispana, iniciada por

(3).- Ibid., libro 424, fol.333r. El rey escribía al duque de Francavilla advirtiéndole que si bien había sido nombrado en el cargo de virrey sin tener que renunciar a la presidencia del Consejo de Italia, el salario que recibía por este concepto no tendría continuidad tras finalizar el año 1564.

(4).- Ibid., fols.334r-335r; R.MANTELLI, op. cit., pp, 6 y 24.

(5).- M.RIVERO RODRIGUEZ, op. cit., pp, 221-228.

Felipe II en torno a 1560, conllevó la realización de una serie de reformas que involucraron la concepción y estructuración de la política, la religión, la cultura y la sociedad (6). Estos cambios afectaron de una forma directa a las facciones cortesanas e indirectamente a las instituciones que conformaban el organigrama administrativo. El proyecto reformístico puesto en marcha por Felipe II estaba orientado a mantener a sus reinos fuera del influjo de toda corriente que, partiendo de una heterodoxia religiosa, desencadenase el desarrollo de alteraciones sociopolíticas. La implantación de un ideario de intransigencia religiosa, en el que la Inquisición se convirtió en la pieza clave como instrumento para perseguir y castigar la herejía y establecer el control social, tuvo su reflejo en el ámbito institucional, puesto que, para llevar a cabo la consecución de este propósito, el rey procedió a realizar una centralización administrativa de la Monarquía, persiguiendo la finalidad de conseguir una mayor agilidad y eficacia en el funcionamiento de las instituciones y, por tanto, en la aplicación de estas directrices. La necesidad de fortalecer dichos organismos como medio a través del que imponer los principios de contrarreformismo católico, y por ende, la propia orientación política de la Monarquía, matizó la defensa de la ortodoxia católica propugnada por el papado con ciertas particularidades contempladas en el reformismo hispano, fruto de la simbiosis entre dicha ideología y los propios intereses políticos de la Monarquía. Se abrió, pues, un periodo en el que las relaciones entre la Corte hispana y la Santa Sede no resultaron siempre fáciles, al producirse numerosos conflictos de competencias a consecuencia del forcejeo mantenido entre ambas por salvaguardar su poder. Por otra parte, para poner en práctica este conjunto de reformas en sus dos vertientes, Felipe II contó con la colaboración de un grupo de servidores que actuaron con extremado celo tanto en la consecución de la confesionalización de la Monarquía como en defensa del

(6).- Las nuevas corrientes historiográficas, desarrolladas principalmente por historiadores alemanes como Wolfgang Reinhard y Heinz Schilling, han realizado una revisión del tradicional concepto de "Reforma" religiosa aplicado al devenir histórico de Europa Central, estableciendo un paralelismo entre las transformaciones a las que ésta dio lugar y las que provocó la estructuración y desarrollo de la Contrarreforma católica, pasando a acuñar un nuevo concepto para denominar este proceso: confesionalización. En torno a la introducción y utilización de esta nueva terminología en la historiografía española aplicada al reinado de Felipe II y a la Monarquía hispana, así como una completa bibliografía en relación a esta cuestión, véase, J.MARTINEZ MILLAN, "En busca de la ortodoxia: el Inquisidor General Diego de Espinosa" *La Corte de Felipe II*, pp, 191 y 506.

regalismo regio. Esto, sin duda, tuvo importantes consecuencias en la evolución de las facciones cortesanas.

Cuando Gaspar de Quiroga retornó a la Corte, encontró que la configuración de los "partidos" cortesanos era muy distinta a la que había dejado en 1554, cuando abandonó la Península para acudir a Roma. Entre dicho año y 1559, como hemos señalado, se había producido la formación de la facción ebolista, que había iniciado una pugna con Fernando de Valdés por el control del favor regio, y, en consecuencia, de las instituciones de la Monarquía. La pujanza de este grupo redujo el ámbito de influencia del arzobispo de Sevilla al Consejo de Inquisición. Para poner fin a la preponderancia del asturiano y provocar su alejamiento definitivo de la Corte, sus adversarios políticos trataron de forzar su residencia en la mitra sevillana. Sin embargo, el descubrimiento del núcleo luterano vallisoletano y las implicaciones que por las declaraciones de algunos de los procesados se derivaban para el arzobispo de Toledo, Bartolomé de Carranza, sirvieron para que Valdés pudiese revitalizar su poder, aunque de forma muy limitada, puesto que si bien consiguió mantenerse al frente de la Suprema hasta 1566, no logró introducir en la misma a ninguno de sus protegidos a partir de 1560, pasando a estar dicho organismo bajo el influjo ebolista (7). El retorno de Felipe II a la Península en 1559 para hacerse cargo de la Monarquía vino a cimentar el auge del "partido" ebolista y a ahondar en el declive político de Fernando de Valdés, puesto que, si bien éste había adoptado la defensa férrea de la ortodoxia católica como medio de seguir en el poder, el rey pronto fue consciente de las contradicciones que encerraba la actuación del Inquisidor General. Valdés trató de crear, a través de la adopción del radicalismo religioso, una identidad entre su actuación al frente del Santo Oficio y los presupuestos ideológicos de la Monarquía. Sin embargo, toda su actividad perseguía unas dilatadas perspectivas sociopolíticas. La apresurada publicación del Catálogo de Libros Prohibidos de 1559, la acusación de "alumbrados" que hizo recaer sobre los miembros de la Compañía de Jesús, cuya religiosidad, como

(7).- Sobre la pérdida de poder de Fernando de Valdés a partir de 1554 y el ascenso de la facción encabezada por Ruy Gómez de Silva, véase, J.MARTINEZ MILLAN, "Elites de poder en tiempos de Felipe II", pp, 129-133; Ibid., "Grupos de poder en la Corte...", pp, 160-172.

hemos referido, había sido asumida por los miembros del grupo ebolista, y, sobre todo, el procesamiento inquisitorial del arzobispo de Toledo, convencieron a Felipe II, que en un primer momento había apoyado estas actuaciones, de que Fernando de Valdés no era la persona indicada para acometer la confesionalización de la Monarquía (8).

La responsabilidad de llevar a cabo esta actividad reformadora recayó en Diego de Espinosa, figura de nuevo cuño, que ejecutó esta labor no tanto a través de cambios operados en las propias instituciones como mediante la estructuración de relaciones personales no institucionalizadas. Es decir, Espinosa conformó un equipo de letrados que, situados en los cargos administrativos adecuados, contribuyeron a la consecución de una mayor centralización y eficacia en el funcionamiento de las instituciones. Así pues, el ascenso del nuevo patrón, Espinosa, que en el verano de 1565 era nombrado presidente del Consejo de Castilla y al año siguiente se ponía al frente de la Suprema, a la par que declinaba la influencia de los principales miembros del "partido" ebolista, y que el duque de Alba era apartado de la Corte al ser nombrado general de los ejércitos destinados a los Países Bajos, fue acompañado de un cambio en los oficiales que prestaban sus servicios en los órganos administrativos (9). Si bien Espinosa constituyó su propia red clientelar, también se ayudó de letrados que provenían de la facción ebolista, como fue el caso de Gaspar de Quiroga, quien pasó a colaborar activamente, y bajo su coordinación, en el proceso de reformas que Felipe II estaba propugnando, siguiendo las directrices de una política confesionalista en virtud de la que los preceptos de la reforma religiosa se fueron aplicando de forma condicionada y combinada con los intereses políticos de la Monarquía. Así, en noviembre de 1565, Quiroga obtuvo los nombramientos de

(8).- J.L.GONZALEZ NOVALIN, op. cit., El Inquisidor General..., II, pp, 289ss.

(9).- En torno a la figura de Diego de Espinosa y a las características del proceso de confesionalización de la Monarquía, véase, J.MARTINEZ MILLAN, "Grupos de poder en la Corte...", pp, 180-190; Ibid., "En busca de la ortodoxia...", pp, 180-190.

consejero de Castilla y de Inquisición con una breve diferencia de días (10). Por consiguiente, su entrada en los órganos conformantes de la Monarquía vino a coincidir con un proceso de cambios auspiciados por el propio Felipe II y en el que estaba llamado a colaborar. Sin embargo, si bien Quiroga actuó en favor de la consecución de dicha política bajo la protección y favorecimiento de Espinosa, no podemos considerar que formase parte de su círculo clientelar. Esta consideración obedece a que continuó manteniendo unas excelentes relaciones con los miembros del grupo ebolista, así como una actitud más proclive que la exhibida por el nuevo patrón al entendimiento con la Santa Sede. Estas diferencias, que existieron soterradamente mientras Espinosa contó con el beneficio del favor regio, se fueron poniendo de manifiesto a medida que fue declinando su poder.

5.1.1. La integración en el aparato institucional

a/Miembro del Consejo de Castilla

La llegada de Quiroga al Consejo Real se produjo solamente unos meses después de que Espinosa se pusiese al frente de este organismo. Los servicios que prestó en dicha institución no concedieron a Quiroga un especial protagonismo, al menos comparable a su participación en otros organismos de la Monarquía y en el entendimiento de diversas materias, como la visita que le fue encomendada al Consejo de Cruzada en febrero de 1566, y la ostentación de la gobernación del Consejo de Italia entre 1567 y 1571. Estas actividades debieron mermar bastante sus posibilidades de efectuar una señalada actuación en cuanto a los asuntos tratados en el mismo. No obstante, hemos de resaltar su participación en la autorización realizada junto a Soto Salazar de las constituciones del Hospital fundado por el Cardenal Tavera, que finalmente fueron aprobadas por fray Bernardo de Fresneda y Francisco Pacheco, confesor

(10).- El 23 de noviembre de 1565 Quiroga era nombrado miembro del Consejo de Castilla, pasando a ocupar la plaza del licenciado Villagómez que había fallecido. Su provisión para la Suprema fue firmada solamente cuatro días después (AGS, QC, leg. 20, fols. 1203-1206; P.SALAZAR Y MENDOZA, op. cit., p. 292; BSCV, Ms. n.º 16, fol. 144v).

de la reina. De esta manera, Quiroga continuó vinculado a la familia de quien fue su protector, puesto que el patrono de dicho Hospital era Juan Pardo de Tavera, hijo del difunto Arias Pardo, sobrino del Cardenal, y de Luisa de la Cerda, con quien mantuvo a lo largo de su vida una gran amistad (11).

Sin embargo, hemos de tener en cuenta que Gaspar de Quiroga formó parte del equipo de letrados escogido por Espinosa para llevar a la práctica su proyecto de reformas, cuyas consecuencias se dejaron sentir en la administración de la Monarquía en términos de racionalidad y agilidad, siendo el Consejo de Castilla uno de los órganos donde con mayor rapidez comenzó a realizar su labor de patronazgo (12). La elección de estos personajes venía determinada tanto por su formación jurídica como por su adhesión y subordinación al ideario confesionalista propugnado por el Monarca y puesto en práctica por Espinosa. En este sentido, la trayectoria de Quiroga venía a cumplir dichos condicionantes, puesto que estaba avalado por su proceder regalista y al servicio de la defensa que desde la Monarquía se realizaba de la ortodoxia católica. Además, constituía una pieza de gran utilidad por su conocimiento y buenas relaciones establecidas con la curia romana que, tras su retorno a la Península, siguió cultivando, manteniendo una amistosa comunicación con el nuncio y los diversos legados papales. Esta cuestión no suponía un asunto baladí, puesto que el nombramiento de letrados eclesiásticos para integrar el Consejo de Castilla obedeció a que dicha institución fue la encargada de valorar si la aplicación de los decretos emanados del Concilio de Trento, auspiciada por el rey, que incorporó esta normativa a las leyes del Reino por una Cédula real fechada en julio de 1564, entraban en

(11).- J.GIL CALVO, op. cit., p, 33.

(12).- Si bien Espinosa empezó a realizar su labor a través de la ayuda de personajes provenientes de diversos ámbitos, como eran el confesor regio fray Bernardo de Fresneda, el doctor Martín de Velasco, el secretario real Pedro de Hoyo y Francisco de Menchaca, pronto inició la estructuración de su propia red clientelar, dejando sentir su influencia en los asuntos relacionados con la Hacienda (véase, en este sentido, el desplazamiento político del secretario Francisco de Eraso a través de la realización de una visita en C.J.DE CARLOS MORALES, "El poder de los secretarios reales: Francisco de Eraso" *La Corte de Felipe II*, pp, 140-145), e introduciendo en el Consejo de Castilla a diversos individuos de su total confianza. Sobre la promoción de estos personajes como miembros de esta institución bajo la presidencia de Espinosa, véase, J.MARTINEZ MILLAN, "Grupos de poder en la Corte...", pp, 175-176 y 186-187.

conflicto o atentaban contra el propio ordenamiento legal de la Monarquía o los privilegios otorgados a la Corona, ambos puntos esenciales que había que salvaguardar. La asunción de esta labor por parte del Consejo de Castilla, restada a las deliberaciones de los concilios provinciales, así como su proceder en relación a la reforma de las Ordenes religiosas, motivó la aparición de conflictos jurisdiccionales con la Santa Sede, que se mostró disconforme con la injerencia del poder temporal en los asuntos eclesiásticos. La causa de que esta actividad condujese a dichas disputas vino determinada por sus objetivos, puesto que, como hemos señalado, la aplicación de las medidas de reforma religiosa se vieron condicionadas por el principio de salvaguarda de las prerrogativas regias, lo que tuvo una incidencia directa en la celebración en los diversos concilios provinciales en las diócesis hispanas, en la reforma de las Ordenes religiosas o en los asuntos relacionados con el patronato regio (13). Así pues, Gaspar de Quiroga prestó sus servicios en dicho organismo hasta que, en junio de 1572, abandonó la Corte para acudir al obispado de Cuenca, tras su nombramiento como prelado en dicha sede. Su plaza en el Consejo Real fue cubierta por Hernando de Chaves (14).

b/Consejero de la Suprema

La pugna mantenida por Felipe II y la Santa Sede por mantener y fortalecer sus ámbitos de influencia, así como la subordinación realizada por el monarca del programa de reformas religiosas y de defensa radical de la ortodoxia católica al ideario político de la Monarquía, generaron situaciones de un alto

(13).- En relación con este aspecto, véase, entre otros, Ibid., "En busca de la ortodoxia...", pp, 200-209; B.LLORCA, "Aceptación en España de los decretos del Concilio de Trento" Estudios Eclesiásticos 39 (1964), pp, 459-482; R.HINOJOSA, Los despachos de la diplomacia pontificia en España. Madrid 1896, pp, 162-163; L.SERRANO, "Primeras negociaciones de Felipe II con el Papa S.Pio V" Hispania 1 (1940), pp, 93-96; J.L.SANTOS DIEZ, Política conciliar posttridentina en España. El concilio provincial de Toledo de 1565. Roma 1969, pp, 26-32; M.DE CASTRO, "La supresión de los Franciscanos conventuales en la España de Felipe II" Archivo Ibero-americano 42 (1982), pp, 187-191; E.DE LA MADRE DE DIOS y O.STEGGINK, Santa Teresa y su tiempo. Salamanca 1984, II, pp, 56-63; J.GARCIA ORO, "La reforma de las Ordenes religiosas en los siglos XV y XVI" R.GARCIA VILLOSLADA, op. cit., III-1º, pp, 317-340.

(14).- BL, Add.28.704, fol.325b.

grado de tensión entre ambas instancias. El devenir de estas vicisitudes tuvo un especial reflejo en la labor desarrollada por aquellas instituciones que participaban de una jurisdicción mixta, eclesiástica y temporal, y que, integradas en la configuración polisinodial de la Monarquía, ponían al servicio de la misma unos poderes que manaban directamente del pontífice. Este era el caso de dos instituciones, los Consejos de Inquisición y de Cruzada (15), con los que Gaspar de Quiroga mantuvo a lo largo de su evolución vital una señalada vinculación, tras su nombramiento como miembro de la Suprema en noviembre de 1565 y su designación como visitador del Consejo de Cruzada en febrero de 1566.

La elección de los miembros del Consejo de Inquisición por parte de Espinosa, señalando para ocupar plaza de consejero a diversos servidores que a su vez desempeñaban otros relevantes cargos en el seno de la Monarquía (16), vino a poner de manifiesto el carácter de las reformas que se estaban llevando a cabo, así como a establecer que, para la implantación del confesionalismo, las modificaciones administrativas debían ir acompañadas de la definición de un ideario religioso que sirviese de soporte a la política regia y, a su vez, como instrumento de control social. En este sentido, la actividad desplegada por el Santo Oficio al servicio de este proceso se convirtió en un pilar esencial. La confesionalización de la Monarquía, además de definir e implantar los preceptos de la ortodoxia católica, como se trató de efectuar a través de la reforma de los estudios universitarios y de la configuración de un Catálogo de Libros Prohibidos, iniciado en 1569 por Espinosa, cuyos trabajos se culminaron

(15).- R. LOPEZ VELA, op. cit., pp, 63-76; J. MARTINEZ MILLAN y C. J. DE CARLOS MORALES, "Los orígenes del Consejo de Cruzada (siglo XVI)" *Hispania* 179 (1991), pp, 901-903.

(16).- Durante la etapa que Diego de Espinosa ocupó el cargo de Inquisidor General accedieron a la Suprema, junto a Gaspar de Quiroga y a Francisco Soto Salazar, ambos fieles colaboradores de Espinosa que lo hicieron en 1565, Juan de Ovando, Hernando de Vega de Fonseca, Juan Redín, Pedro Velarde y Pedro Fernández Temiño (J. MARTINEZ MILLAN, "Grupos de poder en la Corte...", pp, 179 y 189); La pertenencia de Quiroga al Consejo Real forzó que su asistencia a la Suprema estuviese limitada a las reuniones que se mantenían por la tarde (Ibid., "Estructuras de la hacienda de la Inquisición" en J. PEREZ VILLANUEVA y J. ESCANDELL BONET, op. cit., II, p, 919).

en 1583, cuando Gaspar de Quiroga se encontraba al frente de la Suprema, así como de proceder a la difusión de dichos principios mediante la predicación y la catequización de la población, sobre todo en el ámbito rural, necesitaba contar con una labor de vigilancia que, ejercida por la Inquisición, permitiese castigar y erradicar las desviaciones que de estos principios se pudiesen producir dentro de la sociedad hispana. Esto conllevó que, bajo el mandato de Diego de Espinosa, el Santo Oficio contemplase una serie de modificaciones encaminadas a la consecución de un fortalecimiento de la institución y a una adecuación de sus estructuras (17).

La incorporación de Quiroga a la Suprema coincidió con la llegada a la Península de una legación papal integrada por tres cardenales, Hugo Buoncompagni, el nuevo nuncio ante Felipe II, Castagna, y el auditor de la Sacra Rota Aldobrandini, a los que acompañaba el General de la Orden de San Francisco, Felice Peretti. La elección de tan selectos embajadores por parte de Pio IV estuvo en relación directa con la enjundia de los temas que debían abordar en la Corte hispana, así como en su interés en que la misión se viese culminada con éxito. Los delegados pontificios traían poderes para entender en cuestiones concernientes a las censuras eclesiásticas que habían recaído sobre los moriscos del Reino de Valencia, a la reforma de los frailes claustrales que se estaba llevando a cabo, a la aplicación del exequatur regio, y al conocimiento del proceso inquisitorial que desde 1559 se estaba desarrollando contra el arzobispo de Toledo Bartolomé de Carranza (18). Fue en relación a esta última cuestión donde Quiroga comenzó a ejercer su labor en el seno de la institución inquisitorial.

b.1. El epílogo del proceso hispano de Carranza

Desde que el Inquisidor General Fernando de Valdés obtuviese las

(17).- Sobre dichos aspectos, véase, Ibid., "En busca de la ortodoxia...", pp, 209-221.

(18).- Sobre la formación de esta delegación, así como en torno a las materias en que debían desarrollar su actuación véase, R.HINOJOSA, op. cit., pp, 160-162; L.SERRANO, "Un legado pontificio en la Corte de Felipe II" Hispania 2 (1942), pp, 64-67.

facultades otorgadas por Paulo IV para el procesamiento del arzobispo Carranza por parte de la Inquisición hispana, dicha causa había sido un constante foco de tensiones entre la Santa Sede y la Corte filipina (19). Muy poco tiempo después de haber realizado estas concesiones fallecía Paulo IV, siendo elegido para ocupar la Silla de Pedro un nuevo pontífice, Pío IV, que se mostró menos proclive que su predecesor al favorecimiento del Santo Oficio hispano en esta causa. El cambio de talante operado en el papado, apoyado por gran parte de la Curia, en relación a esta actuación inquisitorial se tradujo en las continuas peticiones realizadas a Felipe II para que se finalizase la instrucción del proceso con el fin de que fuese remitido a Roma, donde se debía dictar la sentencia (20). La recusación del Inquisidor General como juez del proceso por parte de Carranza, lo que suponía una mayor complicación para el desarrollo de la causa, vino a conjugarse con la apertura de las difíciles negociaciones que condujeron a la convocatoria de la tercera etapa del Concilio de Trento. Por otra parte, en el transcurrir de la celebración de dicha asamblea conciliar, no faltaron las voces de algunos legados hispanos que demandaron al pontífice que la causa fuese trasladada a Roma y finalizada con brevedad (21). Para Felipe II el

(19).- En relación con la actividad desplegada por Valdés ante Paulo IV para lograr su objetivo, que se vio satisfecho en los breves otorgados por el pontífice en enero de 1559, véase, J.L.GONZALEZ NOVALIN, "El deán de Oviedo don Alvaro de Valdés. Gestiones de la Inquisición española contra Bartolomé de Carranza en la Corte de Paulo IV" Archivum Historiae Pontificae 7 (1969), pp, 287-327; J.I.TELLECHEA IDIGORAS, "Felipe II y el Inquisidor General don Fernando de Valdés. Documentos inéditos" Salmanticensis 16 (1969), pp, 329-372.

(20).- Los poderes otorgados por Paulo IV permitían a la Inquisición hispana realizar la instrucción del proceso, no obstante, quedaba claramente establecido que la resolución final pertenecía al pontífice. En torno a esta cuestión, véase, Idem, "El proceso del arzobispo Carranza, "test" de las tensiones Iglesia-Estado" en J.PEREZ VILLANUEVA, La Inquisición española. Nueva visión, nuevos horizontes. Madrid 1980, pp, 71-72. Por otra parte, el interés del papa respecto al seguimiento de esta causa aparece reflejado en las instrucciones dadas a sus legados, como en el caso de Filippo Gherio, que llegó a la Península en octubre de 1560 con el encargo de tratar con Felipe II sobre diversas materias, entre las que figuraba este asunto (R.HINOJOSA, op. cit., pp, 127-136).

(21).- Esta petición de los legados en el Concilio, junto con la aprobación realizada por una comisión que trabajaba en el seno del mismo en la configuración de un nuevo Índice de Libros Prohibidos del Catecismo elaborado por el arzobispo de Toledo, contrariaron seriamente las pretensiones de Felipe II (J.I.TELLECHEA IDIGORAS, "El proceso del arzobispo Carranza...", pp, 74-75; Ibid., "Sondeo en el proceso romano del arzobispo Carranza" Archivum Historiae Pontificae 3 (1965), pp, 194-195).

procesamiento de Carranza había rebasado el ámbito de la espiritualidad y había adquirido un marcado cariz político, puesto que el traslado de la causa a Roma, con el consiguiente menoscabo de la autoridad del Santo Oficio, y la posibilidad de que el papa dictase, finalmente, una sentencia absolutoria, supondrían un enorme desprestigio para la institución inquisitorial, pieza clave en la política confesionalista desarrollada por la Monarquía. La desautorización de la Inquisición se traduciría así en el descrédito del ideario de defensa de la ortodoxia católica mantenido por el monarca consustancial a la propia idiosincrasia política de la Monarquía. Fue por ello que, el interés de Felipe II no se centró durante la evolución del proceso del arzobispo de Toledo en el castigo de una posible desviación de la rectitud doctrinal, sino en la salvaguarda de la fortaleza de la Inquisición hispana frente a las demandas que se realizaban desde Roma. En este sentido, la causa de Carranza se convirtió en un importante motivo de conflicto entre la Monarquía y la Santa Sede que, si bien se materializó en los intentos realizados por el rey tratando de evitar, en última instancia, el sometimiento de la causa a la jurisdicción papal, y procurando la competencia de su entendimiento y resolución en solitario a la Inquisición hispana, desde Roma, aunque de forma muy mediatizada por el devenir de las relaciones con la Monarquía hispana y sus propios intereses políticos en cada uno de los momentos, se pugnó por hacer prevalecer esta prerrogativa. En consecuencia, el proceso de Carranza se convirtió en un instrumento que ambas instancias utilizaron para hacer prevalecer su postura, como medio para obtener un fortalecimiento de su poder (22).

Pío IV concedió nuevas prórrogas al Santo Oficio para que se concluyese la instrucción del proceso, expirando el plazo de las mismas en enero de 1565. El rey envió a Roma a Rodrigo de Castro para tratar de atraer al pontífice a sus pretensiones, sin embargo, éste solamente consiguió arrancar al papa la promesa de enviar a un legado que actuaría como juez único de la causa, asistido por

(22).- L.SERRANO, "Un legado pontificio...", pp, 68-72; G.MARAÑÓN, "El proceso del arzobispo Carranza" BRAH 127 (1950), PP, 135-178; M.PHILIPPSON, "Felipe II y el pontificado" Estudios sobre Felipe II. Traducido por R.HINOJOSA. Madrid 1887, pp, 120-121.

diversos consejeros. El designado fue Hugo Buoncompagni (23). Como hemos señalado, el legado papal llegó a la Corte hispana en el mes de noviembre, coincidiendo con el nombramiento de Gaspar de Quiroga como consejero de la Suprema. Sin embargo, su conocimiento y tratamiento de dicho asunto era anterior a su ingreso en esta institución. En la declaración realizada por el licenciado Céspedes en Toledo, el 29 de julio de 1559, este testigo, presentado por Carranza para cimentar la recusación que como juez del proceso había realizado del Inquisidor General, afirmaba que conocía cómo Fernando de Valdés y su sobrino, el deán de Oviedo, habían infamado en Roma al arzobispo de Toledo bajo la acusación de ser un hereje, actuación en la que había colaborado Juan de Bedoya, procurador del Santo Oficio en dicha ciudad. Céspedes aludía que, conversando con Gaspar de Quiroga, que se encontraba entonces en Roma desempeñando su labor como auditor del Tribunal de la Sacra Rota, éste comentó cómo había entendido por los mismos deán y procurador, a quienes trataba en su casa, que Carranza era tan luterano como aquellos que habían sido ajusticiados en el Auto de Fe celebrado en Valladolid en dicho año (24). Igualmente, tras su regreso a la Corte, en mayo de 1565, Quiroga elevó

(23).- El 20 de junio, el embajador Luis de Requesens informaba desde Génova al secretario Gonzalo Pérez sobre este nombramiento: "Pareceme q el P.P. trata de enviar legado a España al Cardl. buoncompaño q es tenido por buen sujeto y con todas las blanduras extraordinarias" (IVDJ, envío 9 (caja 14), fol. 106). Este informe favorable no menguó el desagrado que Felipe II sentía ante esta embajada, por lo que a través de Rodrigo de Castro inició una labor de obstruccionismo con el fin de evitar la intervención de Roma (L.SERRANO, op. cit., pp. 73-78; J.I.TELLECHEA IDIGORAS, "Sondeo en el proceso...", pp. 195-198; Idem, El proceso romano del Arzobispo Carranza (1567-1576). Roma 1988, p. 7).

(24).- Idem, Fray Bartolomé de Carranza. Documentos históricos. Madrid 1962, I, p. 212; En relación con el procesamiento de Bartolomé de Carranza, también fue llamada a declarar una de las hermanas de Gaspar, Agustina de Quiroga, vecina de Valladolid, que, cuando el 24 de septiembre de 1562 prestó su testimonio, afirmó tener cincuenta y cuatro años cumplidos. Llamada como testigo de abonos, Agustina afirmó conocer a Carranza hacía muchos años, "e que este negocio desea que se despache más a la honra de Dios, aunque mucho más holgaría que el arzobispo saliese libre, que no que tuviese ese su negocio otro suceso". Preguntada sobre su conocimiento de los integrantes del núcleo luterano vallisoletano, y en concreto, por su relación con Ana Enríquez, hija del marqués de Alcañices, con el dominico fray Domingo de Rojas, con doña Francisca Zúñiga, hija de Antonio de Baeza, con el licenciado Francisco de Herrera, y con el doctor Cazalla y su hermano, afirmó desconocer o haber mantenido un trato muy superficial con todos ellos, con la excepción de fray Domingo de Rojas, a quien escuchó predicar y con quien confesó, teniéndole entonces por un buen cristiano, como al resto de los inculpadados hasta que se produjo su detención (Ibid., op. cit., III, pp. 327-329).

al rey un informe realizado por Martín de Azpilcueta en torno a la prisión de Carranza, donde recogía diversas quejas expuestas por el propio arzobispo, así como la opinión del letrado en relación al modo futuro de proceder en la causa (25). Por otra parte, la actuación del fiscal del Consejo de Inquisición, encaminada a entorpecer el trabajo del legado papal a través de la petición del nombramiento de jueces hispanos, y la muerte de Pío IV a comienzos del mes de diciembre, pusieron fin a la embajada de Buoncompagni sin que se hubiese producido ninguna modificación en el estado de este asunto (26).

Con la elección de Pío V como nuevo pontífice, la causa del arzobispo de Toledo tomaba un nuevo rumbo. Desde febrero de 1566 el papa comenzó a demandar la remisión a Roma del proceso y del reo. El firme propósito de Pío V de que se pusiesen en práctica los decretos emanados del Concilio de Trento y de defender la jurisdicción eclesiástica de toda posible injerencia para obtener su prevalecimiento se tradujeron en una sólida determinación en relación al traslado de Carranza, ante la que el rey, a pesar de las gestiones realizadas por el embajador Luis de Requesens, tuvo finalmente que ceder (27). No

(25).- Dicho informe se encuentra en BL, Add., 28.452, fols. 248r-254v (E.LLAMAS MARTINEZ, Documentación inquisitorial. Manuscritos españoles del siglo XVI existentes en el Museo Británico. Madrid 1975, pp. 85-86; Idem, "Documentación Mss. sobre la causa del Arzobispo de Toledo Fray Bartolomé de Carranza existente en el British Museum" Studium Legionense 12 (1971), pp. 248-250). Menos favorable fue la relación que se estableció entre su hermano, Juan de Quiroga, y el procesamiento de Carranza. Por una carta que Luis de Requesens escribió al Cardenal Pacheco, en octubre de 1565, sabemos que Juan de Quiroga, que se hallaba sirviendo en casa del embajador, fue acusado de proporcionar información sobre la causa al deán de Talavera a través de la extracción y copia de los documentos que contenía el escritorio de Requesens. Dicho eclesiástico se encargaba de hacerlos llegar al papa modificando parte de los mismos: "dice que había visto papeles por donde se entendía que los arzobispos de Santiago y Sevilla y el Consejo de Inquisición estaban hechos a una contra este neg^o". El propio Requesens se encargaba de exculpar a Juan de Quiroga, acusando a un paje suyo de realizar esta labor de espionaje, señalando que no se habían tomado medidas represivas en su contra por consejo de Rodrigo de Castro, que pensaba que no era oportuno para la marcha de las negociaciones (IVDJ, envío 9 (caja 14), fol. 167); Sobre la estancia de Juan de Quiroga en Roma junto al embajador, véase, J.M.MARCH, La embajada de Don Luis de Requesens en Roma por Felipe II cerca de Pío IV y Pío V. Madrid 1950, pp. 57 y 199.

(26).- L.SERRANO, "Un legado pontificio..." pp. 79-84.

(27).- J.M.MARCH, La embajada de Don Luis de Requesens..., pp. 97-98; Pío V no dudó en establecer, por un breve firmado el 30 de julio de 1566, la pena de excomunión para aquella persona que impidiese o dilatase el envío del proceso instruido por la Inquisición a Roma, fijando

obstante, el celo demostrado por el pontífice no facilitó la labor del nuncio Castagna, quien trató de mediar en las problemáticas situaciones que se produjeron entre Felipe II y el legado papal Pedro Camaiani, y de tranquilizar los ánimos del pontífice en relación a este asunto. Así, el 17 de noviembre de 1566 escribía al Cardenal Alejandrino, nepote de Pío V, como había mantenido una conversación con Gaspar de Quiroga en torno a esta materia. Quiroga aseguró al nuncio que el rey, en contra de la opinión expresada por algunos miembros del Consejo Real, había ordenado el traslado del arzobispo y de su proceso. No dejaba de señalar Castagna la fiabilidad que tenía su interlocutor, así como la promesa de Diego de Espinosa, quien había sustituido a Fernando de Valdés al frente de la Suprema, sumando este cargo a la ostentación de la presidencia del Consejo de Castilla, de que, en quince o veinte días, Carranza sería liberado de su prisión en Valladolid para iniciar su camino hacia Roma (28). El compromiso establecido por Espinosa se cumplió, puesto que Carranza inició su viaje en los primeros días de diciembre, llegando a su destino en mayo de 1567. Daba así comienzo una nueva etapa en el devenir de la causa del arzobispo toledano: el proceso romano (29).

un plazo de tres meses para que sus órdenes fuesen obedecidas. En octubre, decidió delegar a Pedro Camaiani, obispo de Fiesole, para que acudiese ante Felipe II con el mandato de que pusiese en ejecución dicho breve a través de su publicación si el monarca insistía en incumplir su requerimiento. La llegada del representante papal, cuando Felipe II ya había hecho promesa al nuncio Castagna de acceder a los deseos del pontífice, enojó enormemente al rey, provocando nuevamente el incremento de la tensión en las relaciones entre ambas instancias (L.SERRANO, "Primeras negociaciones de Felipe II..." pp, 111-119).

(28).- Sobre la actuación de Castagna con un propósito conciliador, véase, R.HINOJOSA, op. cit., pp, 172ss; L.PASTOR, Historia de los Papas. Madrid 1963. Vol.18, pp, 4-12; En relación a sus contactos con Quiroga, L.SERRANO, Correspondencia diplomática entre España y la Santa Sede durante el pontificado de S.Pío V. Madrid 1914, I, pp, 389-394: "Mons. Chiroga, che fù Auditor di Rota, hora è del Consiglio Reale et de la Inquisitione, similmente mi ha giurato sopra la conscientia sua per la messa ch'haveva celebrato quel'giorno, che il Re haveva, contra il voler d'alcuno del suo Consiglio, comandato che mandassi l'Arcivescovo et il processo; et dipoi ha detto che si facci ogni instancia per finirla, et che già questo fatto non ha difficoltà nessuna. Questo è anchor'esso homo grave eclesiastico et verdadero".

(29).- J.I.TELLECHEA IDIGORAS, "Inventario del proceso del arzobispo Carranza al tiempo de su traslado a Roma (1567)" BRAH 164 (1969), pp, 97-118; Idem., El proceso romano..., p, 8; Idem, "El preceso romano del Arzobispo Carranza. Las audiencias de Sant'Angelo (1568-1569)" Anthologica Annua 41 (1994), pp, 311-638.

El interés demostrado por Pío V en este asunto hacía presagiar la adopción de una resolución en un breve espacio de tiempo. Sin embargo, la llegada de nuevas acusaciones desde la Península Ibérica fueron dilatando durante dos años la pronunciación de una sentencia que conllevaba una enorme carga política, por las consideraciones que tanto Felipe II como el papa vinculaban a la misma, conscientes de que lo que se estaba poniendo en valoración era el prestigio y autoridad de la Inquisición (30). Finalmente, en diciembre de 1569, la determinación del proceso parecía inmediata. De nuevo se volvió a recurrir a la maniobra de enviar otra remesa de imputaciones con el fin de evitar que se produjese un desenlace que, según todos los indicios, no sería acorde con los deseos de Felipe II, quien, por otra parte, había decidido mandar a Gaspar de Quiroga, como buen conocedor del proceso y del funcionamiento de la Santa Sede, con la que mantenía excelentes relaciones, para que actuase en favor de los intereses de la Monarquía en lo referente a este asunto. No obstante, ante la excusa presentada por Quiroga para no verse nuevamente desplazado de la Corte, el monarca resolvió adoptar otro procedimiento. En lugar de acudir a Roma, Quiroga se trasladó junto al rey a Córdoba con motivo de la rebelión de los moriscos en Granada (31). A la resuelta determinación del

(30).- En octubre de 1569, el monarca había entregado a su embajador en Roma una instrucción en la que estaba incluido un memorial, en el que se enumeraban aquellas ocasiones en que desde la Santa Sede se había actuado en menoscabo de los privilegios y autoridad de la Inquisición en los últimos años. Pío V respondió a estas acusaciones deteniéndose en cada uno de los capítulos que componían dicho documento. Especial atención nos merece el tercero de ellos. El problema que reflejaba había surgido porque el Inquisidor General había designado a Francisco Soto Salazar como visitador del tribunal inquisitorial de Murcia. Si bien este, tras la finalización de su labor, había informado al pontífice sumariamente de los resultados de su misión, Pío V había encargado semejante actuación a Gaspar de Quiroga, derogando así el privilegio concedido a los Inquisidores Generales como únicos de las personas a quienes se les encomendaban la realización de las visitas. Sin embargo, el pontífice explicaba en su respuesta que, la designación y mandato realizado por el correspondiente breve a Quiroga se efectuó desconociendo la orden dada por Espinosa en relación a la visita, no existiendo intención de agraviar la actividad inquisitorial. Por otra parte, este hecho nos permite reiterar las buenas relaciones que mantenía Quiroga con la Santa Sede y la confianza que se tenía en Roma sobre su proceder. En torno a estas cuestiones, véase, L.SERRANO, *Correspondencia diplomática...*, III, pp, 169-170 y 221.

(31).- La estima que el papa tenía a Quiroga y la influencia que éste podía ejercer, según afirmaba el embajador Juan de Zúñiga, para favorecer los deseos del rey respecto a la solución del proceso, véase, E.LLAMAS MARTINEZ, "Documentos Mss sobre la causa del arzobispo de Toledo..." pp, 264-265. En carta que el nuncio Castagna escribió al Cardenal Alejandrino, el 22 de diciembre de 1569, además de informar de la partida de la Corte hacia Córdoba a causa de la gravedad de la rebelión de los moriscos granadinos, decía: "...Fùvero che il Re era persuaso a

monarca de que el dictamen final del proceso fuese condenatorio, lo que supondría un respaldo a la actuación realizada por la Inquisición, o bien, evitar por todos los medios la conclusión de la causa, vino a sumarse, a comienzos de 1570, el interés de Pío V de atraer a Felipe II a la configuración de una Liga que pusiese freno a la expansión del imperio turco (32). A finales de dicho año, las gestiones en torno al proceso se habían finalizado. No obstante, la enorme presión diplomática ejercida por el rey para obtener un desenlace conforme a sus deseos y, por otra parte, la necesidad política del pontífice de conseguir la anexión de la Monarquía hispana a su proyecto, procuraron que, si bien en manos de Pío V obraba una sentencia absolutoria, no hubiese procedido a su publicación y a la determinación del proceso cuando se produjo su fallecimiento en 1572 (33). Esta fue una labor que efectuó su sucesor en el solio pontificio, Hugo Buoncompagni, que años atrás, como hemos señalado, había desarrollado una breve legacía en relación a esta materia. Si Gregorio XIII era un buen conocedor de este asunto, también lo era la persona que, a partir de 1573, ocupó el cargo de Inquisidor General, Gaspar de Quiroga. Sobre ambos recayó la responsabilidad de poner fin a este largo y espinoso proceso.

mandar Mons. Quiroga a S.S. per la causa di Toledo; ma mi pare che egli si sia excusato o vero fatto opera che non li sia commandato; et intendo che S.M. in questo mezzo ha mutato proposito, et non mandarà nessuno per questo" (L.SERRANO, *Correspondencia diplomática...*, III, p, 207). Quien sí se incorporó, en enero de 1570, a la congregación creada por el papa para dilucidar la causa de Carranza en calidad de censor fue el jesuita Francisco de Toledo, a quien, años después, Quiroga recurrió para demandar su ayuda en relación con los problemas surgidos con la aprobación por parte de la Santa Sede del Concilio Provincial de Toledo de 1582. La realización de una censura benevolente hacia el arzobispo motivó que el embajador Zúñiga pidiese a Pío V su sustitución por otro calificador hispano, así como el comienzo de un ataque, buscando su descrédito personal, en torno a su falta de "limpieza de sangre" (J.I.TELLECHEA IDIGORAS, "Censura inédita del padre Francisco de Toledo, S.I., sobre el catecismo del arzobispo Carranza" *Revista española de Teología* 29 (1969), pp, 3-21).

(32).- Idem, "Sondeo en el proceso romano...", pp, 199-205; Idem, *El proceso romano...*, pp, 31-40; Idem, "Memorias sobre el proceso y muerte del arzobispo Carranza" *Príncipe de Viana* 146-147 (1977), pp, 221-228.

(33).- Idem, "Sondeo en el proceso romano...", pp, 210ss.

b.2. Su presencia en la "Junta Magna" (1568)

La implantación de las reformas confesionalistas en los reinos peninsulares se vieron completadas con las que se realizaron en América. La conveniencia de proceder a la organización y estructuración del gobierno temporal y espiritual en las Indias fue puesta de manifiesto ante Diego de Espinosa a través de la realización de diversos informes, así como por la actitud mostrada por Pío V ante la situación y problemática que contemplaban dichos territorios (34). Para tratar sobre la forma de proceder en dichos asuntos, en el verano de 1568, se reunió en la posada del Inquisidor General una junta que se conoce con el nombre de "Junta Magna". Entre los numerosos asistentes a la misma se encontraba Gaspar de Quiroga, aunque su convocatoria no estuvo relacionada, como erróneamente han afirmado diversos autores, con una supuesta pertenencia al Consejo de Hacienda, sino como miembro de la Suprema (35).

(34).- Los problemas más graves reflejados en los memoriales elaborados por Luis Sánchez en 1566 y Melchor Pérez de Arteaga en 1568 estaban referidos a la conflictiva actuación de los poseedores de encomiendas, principalmente en los virreinos de Perú y Nueva España, así como al enfrentamiento de estos con los miembros del clero presentes en aquellos territorios. Antes de proceder a la realización de la junta, la primera medida adoptada por Felipe II fue la realización de una visita al Consejo de Indias, actividad que fue encomendada, en 1567, a Juan de Ovando, figura muy cercana a Diego de Espinosa. Sobre la misma, véase, J.DE LA PEÑA CAMARA, "Nuevos datos sobre la visita de Juan de Ovando al Consejo de Indias, 1567-1568" Anuario de Historia del Derecho Español 12 (1935), pp, 427-438; Idem, "La Copulata de Leyes de Indias y las Ordenanzas ovandinas" Revista de Indias 2 (1941), pp, 121-146; J.MANZANO MANZANO, "La visita de Ovando al Real Consejo de Indias y el Código Ovandino" en VV.AA., El Consejo de Indias en el siglo XVI. Valladolid 1970, pp, 111-123. Desde comienzos de 1568, Pío V reprochaba a Felipe II el incumplimiento de su compromiso evangelizador, condición básica de las concesiones realizadas desde Roma a la Corona hispana sobre estos territorios, mostrando sus deseos de establecer una Congregación permanente que se ocupase de este tema, así como de señalar un nuncio que asistiese en las Indias para que entendiese sobre las cuestiones relacionadas con la jurisdicción eclesiástica (L.PASTOR, op. cit., XVIII, pp, 29-30; P.BORGES, "Nuevos datos sobre la Comisión pontificia para Indias de 1568" Misionaria Hispanica 47 (1959), pp, 213-243).

(35).- Es posible que la numerosa lista de asistentes a esta junta se deba a que se celebraron dos reuniones diferenciadas de forma sucesiva, tratándose en la más temprana asuntos de carácter general, pasándose, posteriormente, al tratamiento de cuestiones más específicas, aunque no se ha podido dilucidar que personajes asistieron a cada una de ellas. Igualmente, parece que la actividad desarrollada por Quiroga estuvo adscrita a la consideración de problemas relacionados con aspectos hacendísticos, lo que ha motivado esta confusión. En torno a estas cuestiones, así como en relación a los componentes de la junta, véase, D.M.SANCHEZ, El deber de Consejo en el Estado Moderno. Las juntas "ad hoc" en España (1471-1665). Madrid 1993, pp, 96-98; D.RAMOS PEREZ, "La "Junta Magna" y la nueva política" Historia General de España y América. Madrid 1982, VII,

Las reformas adoptadas por la junta, que terminó sus sesiones al finalizar el año, se inscriben en el mismo proceso de implantación del confesionalismo que se estaba desarrollando en la Península (36). En este sentido, se estableció la aplicación de una serie de medidas encaminadas a fortalecer el ejercicio del gobierno y de la jurisdicción de la Corona en los territorios indianos, así como a proceder a una adecuación de las estructuras eclesiásticas a los preceptos tridentinos, planteando una modificación de la extensión de las diócesis, consistente en aumentar su número y reducir su tamaño, para lograr una actuación más eficaz de los prelados, a los que, por otra parte, se instaba a la celebración de concilios en los que se juzgaba conveniente contar con la asistencia del virrey. De igual manera, se impulsaba el desarrollo del clero secular bajo la tutela arzobispal, en detrimento del clero secular de carácter misionero. Estas transformaciones se tradujeron en una mayor centralización del gobierno de las Indias, puesto que, en virtud de la activación del patronato regio, Felipe II procedió al nombramiento de los prelados destinados, junto con los nuevos virreyes, a la puesta en práctica de este proyecto en Perú y Nueva España. Así pues, al igual que se estaba llevando a cabo la confesionalización de la Monarquía en los reinos peninsulares, en las posesiones americanas este proceso no se efectuó a través del aparato institucional, sino que se puso en ejecución mediante la designación de diversos personajes, todos ellos recomendados al monarca por Diego de Espinosa (37). Por último, la

pp, 438-439; J.PEREZ VILLANUEVA y B.ESCANDELL BONET, op. cit., I, p, 714.

(36).- Sobre las deliberaciones de la junta, en la que se abordaron cuestiones referidas a temas religiosos, administrativos, hacendísticos, mineros y militares, véase la síntesis realizada por D.RAMOS PEREZ, op. cit., pp, 439-454; D.M.SANCHEZ, op. cit., pp, 99-100; E.SCHAFER, El Consejo Real y Supremo de las Indias. Sevilla 1935, I, pp, 165-169.

(37).- Para el cargo de virrey en Perú, el monarca designó a Francisco de Toledo, quien había formado parte de la junta (R.LEVILLIER, Don Francisco de Toledo, supremo organizador del Perú. Su vida, su obra (1515-1582). Madrid 1935, p, 81, señala como esta circunstancia agravó enormemente al Consejo de Indias, tanto por las condiciones de su nombramiento para asistir a la misma, como por el hecho de que este organismo, al que competían estas materias, sólo estaba representado por el presidente y un vocal), siendo designado como prelado de dicha diócesis Jerónimo Loaysa. En el caso de Nueva España, fue designado como virrey Martín Enríquez de Almansa, ocupando la sede arzobispal Pedro Moya de Contreras. Una semblanza de dichos personajes, así como el establecimiento de su vinculación con Diego de Espinosa, aparece recogida en J.MARTINEZ MILLAN, "En busca de la ortodoxia...", pp, 221-224.

importancia de la función desempeñada por el Santo Oficio en el proceso confesionalista determinó la decisión de hacer extensivo su funcionamiento a las Indias, estableciéndose, inicialmente, la fundación de cuatro nuevos tribunales inquisitoriales (38).

5.1.2. La visita al Consejo de Cruzada (1566-1573)

Para llevar a cabo su actividad reformadora, Diego de Espinosa instrumentalizó una serie de visitas que condujesen al establecimiento de un mayor fortalecimiento institucional (39). Sin embargo, como hemos señalado, la consecución de una visita no suponía, solamente, una revisión del funcionamiento del organismo y del limpio proceder de sus servidores, sino que, además de plantear una posible reforma estructural del mismo, conllevaba, habitualmente, un relevo de los oficiales que le componían. En este aspecto, la visita, y sobre todo, sus resultados, estaban íntimamente ligados a la evolución y maniobrabilidad de las distintas facciones que, en la corte filipina, pugnaban por el ejercicio del poder. Así, se planteó la visita al Consejo de Cruzada en 1566, no sólo para hacer más ágil y estructurado su funcionamiento, sino también para dar cabida a la red clientelar de Espinosa, expulsando al equipo anterior. Como hemos señalado, la realización de una visita, como instrumento de actuación política, podría ser discutida en cuanto a su efectividad en relación con la resolución de la problemática administrativa de la institución visitada, pero no en cuanto a su significación como relevo de los servidores que desempeñaban sus funciones en la misma. En este sentido, resulta altamente indicativo el año en

(38).- De inmediata realización fue la implantación de tribunales en México y Lima, designándose como los primeros inquisidores y fiscales que los conformaron a personas vinculadas a Diego de Espinosa (Ibid., pp, 224-227; B.ESCANDELL BONET, "Las adecuaciones estructurales: establecimiento de la Inquisición en Indias" en J.PEREZ VILLANUEVA y B.ESCANDELL BONET, op. cit., I, pp, 713-730).

(39).- Hemos de entender la visita del Consejo de Cruzada inscrita en un marco más amplio de actuación sobre las instituciones y de control de las finanzas regias, puesto que la misma se desarrolló a la par que las ya aludidas, esto es, la que afectó al secretario Eraso y la ejecutada por Ovando, así como la que se instruyó en el Consejo de Italia, de la que nos ocuparemos más adelante. En este sentido, véase, C.J.DE CARLOS MORALES, Política y finanzas en el siglo XVI. El gobierno del Erario Real y el Consejo de Hacienda de Castilla, 1523-1602. Tesis doctoral, UAM 1994, pp, 132-133.

que se ordenó su realización en el Consejo de Cruzada, pues en 1566, como hemos referido, Fernando de Valdés tuvo que abandonar la Corte y el cargo de Inquisidor General para ir a residir a su arzobispado sevillano, sobre todo, si tenemos en consideración la vinculación que existía entre Valdés y el comisario general de Cruzada, el confesor real fray Bernardo de Fresneda.

Fresneda, que había sido nombrado comisario general de Cruzada en sustitución de Juan Suárez de Carvajal, y comisario del Subsidio de Galeras en 1562 (40), había mantenido una fuerte conexión con Fernando de Valdés, con el que le habían unido unos intereses similares. Si bien el franciscano había ascendido al confesionario regio bajo los auspicios de Ruy Gómez de Silva, el temor a que la prestigiosa figura de Bartolomé de Carranza le pudiese arrebatar tan privilegiado cargo, y el nombramiento del navarro como arzobispo de Toledo, dignidad que ansiaba, llevó al confesor a cambiar sus afectos y a realizar un acercamiento al Inquisidor General, al no ver recompensados sus servicios en la medida que esperaba (41). Al igual que el propio Valdés, Fresneda adoptó una postura de radicalismo religioso, que si bien estaba en consonancia con su propia ideología, supo instrumentalizarlo como arma contra su rival, el arzobispo Carranza, siendo uno de los principales hacedores de la desgracia del dominico, e interviniendo activamente en su procesamiento inquisitorial (42). La salida de Valdés de la Corte motivó el comienzo de una actuación política contra su aliado Fresneda a través de la visita del Consejo de Cruzada, que se saldaría con el relevo del franciscano del cargo de Comisario General en 1571. Si bien

(40).- Felipe II solicitó su nombramiento al pontífice por una Real Cedula fechada el 11 de abril de 1562, en la cual también solicitaba su designación como nuevo obispo de Cuenca (J.M.POU Y MARTI, "Fray Bernardo de Fresneda, confesor de Felipe II, obispo de Cuenca y Córdoba y arzobispo de Zaragoza" Archivo Ibero-Americano 33 (1930), apéndice I, pp, 592-593; C.SANZ Y DIAZ, Breve historia de la diócesis de Cuenca. Cuenca 1974, p, 31; AGS, PR 20-26 (I y II).

(41).- H.PIZARRO LLORENTE, "El control de la conciencia regia: El confesor real fray Bernardo de Fresneda" La Corte de Felipe II, pp, 149-188.

(42).- J.I.TELLECHEA IDIGORAS, Fray Bartolomé de Carranza y el Cardenal Pole. Un navarro en la restauración católica de Inglaterra (1554-1558). Pamplona 1977, pp, 153-168; Idem, El Arzobispo Carranza y su tiempo. Madrid 1968, I, pp, 72-75.

Fresneda, esgrimiendo su radical defensa de la ortodoxia religiosa combinada con una importante dosis de regalismo, intervino activamente en el proceso de confesionalización de la Monarquía, no perteneció al grupo clientelar de Diego de Espinosa, lo que conllevó que el franciscano tuviese serias dificultades para mantener su oficio de confesor real, siendo progresivamente relegado, e interviniendo cada vez en menor medida en la toma de decisiones políticas (43).

a/ La labor del visitador Quiroga

Aunque Fresneda había ejercido el oficio de comisario general durante el primer año desde su nombramiento (44), en diciembre de 1563, a causa de su estancia en Monzón para asistir a la celebración de las Cortes que estaban reunidas desde el mes de septiembre, delegó, durante su ausencia, sus facultades como comisario general de Cruzada en Diego de Espinosa, quien ya dejaba sentir su creciente influencia en la política cortesana (45). Las diversas ocupaciones del franciscano le apartaron de la Corte hasta 1566, siendo durante este periodo Pedro Deza y Guzmán quien ejerció el oficio de Comisario General (46), lo que ha llevado a diversos autores a confundir dicha subdelegación y ejercicio con la posesión nominal del mismo (47). Deza, quien por otra parte, era hechura de Espinosa (48), tuvo que abandonar la Corte en 1566, cuando fue

(43).- J.MARTINEZ MILLAN, "Grupos de poder en la Corte...", pp, 185-186; H.PIZARRO LLORENTE, op. cit.

(44).- Sobre su actividad, véase, IVDJ, envío 91 n°509; Ibid., envío 89 (caja 126) n°457.

(45).- BL, Add. 28.351, fols, 46,51 y 56.

(46).- La facultad de los Comisarios de Cruzada para subdelegar quedó establecida por un Breve otorgado por Pio IV, fechado el 12 de octubre de 1560. Por otro Breve de mayo de 1562 se había determinado que el Comisario de Cruzada debía residir allí donde se encontrase el rey (J.FERNANDEZ LLAMAZARES, Historia de la Bula de la Santa Cruzada. Madrid 1859, pp, 127 y 198).

(47).- Véase al respecto la lista de Comisarios Generales presentada por el propio FERNANDEZ LLAMAZARES o por A.PEREZ DE LARA, Compendio de las Tres Gracias de la Santa Cruzada, Subsidio y Excusado. Madrid 1610.

(48).- J.MARTINEZ MILLAN, "Elites de poder en tiempos de Felipe II", p, 145.

nombrado presidente de la Chancillería de Granada, coincidiendo con el retorno a la misma de Bernardo de Fresneda, una vez concluida la celebración del Concilio provincial de Toledo, convocado en 1565, y al cual asistió en su calidad de obispo de Cuenca. Sin contar con aliados en la Corte, y siendo ajeno al grupo clientelar del nuevo patrón cortesano, quien, sin duda, buscaba el control del Consejo de Cruzada tras la salida del mismo de su protegido Deza, Espinosa desplegó su actividad política a través de la instrucción de una visita a dicho organismo.

La responsabilidad de llevar a cabo la visita solía recaer en individuos con amplia experiencia en el campo administrativo, y a la vez, plenamente identificados con los intereses del patrón cortesano que la había auspiciado. En este caso, la persona elegida fue Gaspar de Quiroga, a quien avalaba su larga trayectoria, siendo comisionado para la misma por una cédula real fechada el 24 de febrero de 1566 (49), coincidiendo con el retorno de fray Bernardo de Fresneda a la Corte. Según la misma, se ordenaba al visitador que se informase de cómo el comisario general, asesores, contadores, y demás oficiales que componían el Consejo de Cruzada, habían usado y ejercido sus cargos respecto a lo que el Pontífice, a través de sus bulas y breves, y el propio Monarca mediante sus instrucciones, habían mandado y establecido.

Así pues, Gaspar de Quiroga dió comienzo a una visita que se prolongaría por espacio de siete años, durante los que se produjeron importantes modificaciones tanto en el ámbito particular del Consejo de Cruzada como en la evolución de las diversas facciones cortesanas en la pugna por el poder. Las conflictivas relaciones entre Felipe II y el papado habían entorpecido y esterilizado los esfuerzos realizados por el monarca para obtener la renovación de la concesión de la cruzada correspondiente al trienio 1563-66. Mientras que el monarca buscaba la perpetuación de dicha renta, el pontífice aducía que dicha concesión era contraria al espíritu y a los acuerdos alcanzados en el Concilio de

(49).- AZ, carp. 128 n°199; el texto de la misma aparece también reflejado en BSCV, Ms. n° 16, fols. 144v-145v.

Trento, y apoyaba su negativa en poner fin a las situaciones irregulares y a los abusos que tradicionalmente se venían cometiendo en el cobro de la misma. Además estaba la cuestión de la remisión a Roma del proceso del arzobispo Bartolomé de Carranza, a la que, como hemos señalado, Felipe II se oponía firmemente y que Pío V estaba resuelto a conseguir. Estos forcejeos abrieron un nuevo periodo de tensiones entre la Corte hispana y el Vaticano (50). La actitud regalista exhibida por el Comisario General en este conflicto motivó que el nuncio Castagna presentase diversas quejas sobre sus procedimientos (51). Para subsanar la pérdida que sufría la hacienda real, Pío V, dispensó, en 1567, una nueva gracia, el excusado, con lo que el Consejo de Cruzada completó su contribución dentro de los ingresos económicos de la Monarquía. El descontento del clero, al ver aumentados sus tributos con esta nueva concesión, chocó nuevamente con la firme postura regalista de Fresneda, que trató de atajar los problemas que surgieron en torno a la elevación de diversas demandas para acabar con las exenciones en los pagos, y por otra parte, con una serie de situaciones irregulares que el propio clero generó para aumentar sus ingresos en relación con el cobro de la cruzada y del subsidio (52). Sin embargo, el Pontífice no concedió una nueva Bula de Cruzada hasta enero de 1569, si bien, introduciendo en la misma fuertes limitaciones, no satisfaciendo por ello las expectativas de Felipe II, que decidió no hacer uso de dicha concesión. En 1571, Pío V consideró el transigir con las demandas de la Monarquía hispana con el fin de integrar a la misma en la liga que se estaba formando para poner freno a la expansión del Imperio Turco, y así, en mayo de dicho año, el Papa otorgó la cruzada por un periodo de dos años, que posteriormente sería prorrogado por un

(50).- CODOIN, Vol.97, pp, 375-379; M.ULLOA, La hacienda real de Castilla en el reinado de Felipe II. Roma 1963, pp, 378-79; R.HINOJOSA, Los despachos de la diplomacia..., pp, 170-178.

(51).- L.SERRANO, Correspondencia diplomática..., I, p, 445: "Il vescovo di Cuenca ha havuto a dire piu volte che se bene N.S. volesse annullare il sissidio et la Cruzada, che nondimento il Re li riscoteria, poiche se ne servono in opere pie contra li infideli".

(52).- Ibid., II, pp, 148-149 y 458; AGS, PR 20-59; Ibid., Casa y Sitios Reales, leg 258, fol 50; J.BADA, Situació religiosa de Barcelona en el segle XVI. Barcelona 1970, pp, 251-253; M.ULLOA, op. cit., pp, 372 y 378-80.

nuevo bienio (53), accediendo incluso a que parte del excusado, inicialmente destinado a la lucha contra el turco, pudiese ser invertido por Felipe II en su empresa contra Inglaterra (54).

Durante estos años, Gaspar de Quiroga había seguido instruyendo la visita al Consejo de Cruzada y a los oficiales que le componían, compaginando dicha actividad con la que, como hemos señalado, desarrollaba en otros ámbitos, y, desde 1567, con la Presidencia del Consejo de Italia, dignidad que ostentó de forma interina durante la ausencia de Diego Hurtado de Mendoza, Duque de Francavilla, quien fue nombrado por el rey para servir el virreinato de Cataluña, pero sin ser rescindido por ello de dicho cargo. Sin duda, Quiroga hizo valer su experiencia y largos años de trabajo en Roma y Nápoles para ser presentado ante los ojos del Monarca como un buen conocedor de los asuntos italianos. Su actuación al frente de dicho consejo se prolongó hasta marzo de 1571, siendo tan graves y cuantiosos los asuntos que tuvo que tratar durante este período, que Felipe II le exoneró de la responsabilidad de llevar a cabo la visita al Consejo de Cruzada, designando para continuarla al licenciado Hernando de Chaves, quien se encargó de la misma hasta su finalización, ocupando, igualmente, la plaza en el Consejo de Castilla dejada por Gaspar de Quiroga tras su promoción al obispado conquense, mientras Quiroga abandonaba la Corte en 1570 para acompañar al rey en su viaje a Andalucía, con motivo de acabar con la revuelta de los moriscos granadinos. Parece claro que, a tenor de los resultados de la visita, el grueso de la misma estaba elaborado antes de la marcha de Quiroga, a quien, por tanto, hemos de reconocer la autoría de la misma, en cuyo trabajo también se ocupó Juan de Casanate, vinculado a Quiroga desde la estancia de

(53).- AGS, PR 20-80; J.GOÑI GAZTAMBIDE, Historia de la Bula de Cruzada en España. Vitoria 1958, pp, 608-611; A.FERNANDEZ COLLADO, Gregorio XIII y Felipe II en la nunciatura de Felipe Seg (1577-1581). Toledo 1991, p, 102; P.PIERSON, Felipe II de España. México 1984, p, 159.

(54).- L.SERRANO, op. cit., IV, p, 441.

éste en Nápoles, y para quien solicitó una gratificación por la labor desarrollada (55). Sin embargo, y según refirió el propio Gaspar de Quiroga, quienes tomaron las determinaciones oportunas, en función del trabajo que él había realizado, fueron los doctores Velasco y Gasca, y Francisco de Soto Salazar, todos ellos figuras cercanas y colaboradores de Diego de Espinosa (56). El doctor Martín de Velasco había sido el encargado de redactar las Ordenanzas que, en julio de 1554, sirvieron para reglamentar el Consejo de Cruzada, y que, por otra parte, estaban integradas en un conjunto de remodelaciones y ordenamientos efectuados en otros órganos de la Monarquía, como son los Consejos de Castilla, Inquisición, y de Italia. Velasco había llevado a cabo una visita a las Contadurías Mayores de Hacienda y Cuentas entre 1553 y 1554, actuando en favor de los intentos de la facción cortesana ebolista para hacerse con el control de los recursos financieros de la Corona, en detrimento de Vazquez de Molina y de Fernando de Valdés (57). Así pues, profundo conocedor del funcionamiento de dicha institución, y agente activo en la aplicación y desarrollo de los principios de la política confesionalista dirigida por Espinosa, Velasco colaboró, nuevamente, en la visita de 1566, encaminada a renovar el funcionamiento del organismo, y en contra de los intereses del Comisario General, Fresneda, vinculado, como ya hemos señalado, a Fernando de Valdés.

Si bien no conocemos la fecha exacta en que se concluyó la visita al Consejo de Cruzada, sí podemos establecer que la misma se hallaba muy perfilada a finales de 1571. Disminuida la actividad política de fray Bernardo de Fresneda, y su propio influjo sobre la figura regia, en dicho año, el franciscano hubo de abandonar su cargo en el confesionario real y el de Comisario General

(55).- AZ, carp 128, n° 200.

(56).- Ibid, n° 198.

(57).- J.MARTINEZ MILLAN y C.J.DE CARLOS MORALES, op. cit., pp, 923-925; La confianza del monarca en Velasco fue tal, que además se encargó de llevar en la Corte todo el proceso y manejo de papeles de la celebración de los concilios provinciales que tuvieron lugar en torno a 1565. De igual manera, cuando se produjo la muerte de Diego de Espinosa, en 1572, se pensó en Velasco como su sucesor en la presidencia del Consejo de Castilla, como referiremos más adelante.

de Cruzada. Así, el 12 de octubre de 1571, el embajador Juan de Zuñiga recibía el aviso de que, a causa de tener que ir Fresneda a residir a su nuevo obispado de Córdoba, lo que supuso su definitivo relegamiento de la Corte, el oficio de Comisario General de Cruzada recaería en Francisco de Soto Salazar, obispo de Segorbe y consejero de la Suprema, a quien el propio Fresneda había designado a cuenta de una breve estancia en Cuenca (58). Aunque se hacía alusión a la mucha edad y precaria salud del franciscano como motivo para su sustitución, la causa principal de la misma era la pérdida del favor del Monarca y su aislamiento en la Corte, pues resulta paradójico que se impusiese al nuevo obispo de Córdoba cumplir con las obligaciones de la residencia mientras que en su lugar era nombrado otro prelado. Solamente un mes después, el embajador remitía a Felipe II los breves por los que Francisco de Soto Salazar era nombrado comisario de Cruzada, Subsidio y Excusado, a pesar de los inconvenientes que puso el pontífice en que dicha dignidad recayese nuevamente en un obispo (59). Así pues, el principal objetivo para el cual se había instruido la visita se había cumplido, al conseguir que fray Bernardo de Fresneda fuese sustituido en el cargo por un personaje, Soto Salazar, que contaba con toda la confianza de Diego de Espinosa, con quien había colaborado estrechamente dentro de las directrices de aplicación de la política confesionalista (60).

b/ Las Ordenanzas de 1573

Desde el punto de vista puramente administrativo, la visita dió lugar a unas Ordenanzas promulgadas en 1573 (61), que no entrañaban ningún

(58).- AGS, Estado, leg. 917, fols. 233-234 y 236-237; IVDJ, envío 60 (caja 80 bis), fols. 188-189 y 191-192.

(59).- AGS, Estado, leg. 915, fol. 107.

(60).- Sobre la figura de Francisco de Soto Salazar, y su colaboración con Diego de Espinosa, véase, J.MARTINEZ MILLAN, "Grupos de poder en la Corte...", p. 179; Ibid., "En busca de la ortodoxia..".

(61).- Las mismas fueron firmadas por Felipe II, en el Pardo, el 16 de diciembre de dicho año. (BSCV, Ms. 16, fol. 145v).

cambio estructural, sino que vinieron a suponer una reafirmación de las que en julio de 1554, el entonces príncipe Felipe otorgase antes de embarcarse rumbo a Inglaterra (62). Así se deduce de un somero cotejo de ambos documentos, es decir, de las Ordenanzas de 1554, y las conclusiones de la visita de 1566 (63). Se trataba, según se perseguía a través de la aplicación de la política confesionalista, de dotar a la institución de una práctica y de unos servidores que contribuyesen a su fortalecimiento y a una agilización de su funcionamiento, insistiendo así en el cumplimiento de los aspectos regulados en 1554 que, o bien no se habían cumplido, o aún no se habían hecho efectivos. Así, se establecía que en las provisiones de justicia, que en 1554 quedaba especificado que debían ser señaladas por el asesor, las ocupaciones de este en el Consejo Real y otros menesteres conllevaban que las mismas quedasen sin resolver y muriesen en el tribunal, por lo cual se fijaba, como resultado de la visita, que el número de asesores se ampliase a dos, y que al menos, uno de ellos, convendría que perteneciese al Consejo de Aragón. Así mismo, se reiteraba que los contadores no debían señalar las cuestiones de justicia, práctica que se había extendido en los últimos años, insistiendo en que, según se dispuso en 1554, las cédulas y provisiones debían ir rubricadas necesariamente por el asesor, no siendo válida únicamente la firma del comisario general. De igual manera, respecto al oficio desarrollado por los contadores, se ponía especial atención en la labor ejercida por los secretarios, quienes trabajaban con un salario muy bajo y estaban vinculados al contador que servían, dado que en ocasiones no procedían con la limpieza conveniente. Por este motivo se reglamentaba la existencia de un único secretario o escribano, no dependiente del contador, para los procesos judiciales, mientras que un secretario del rey se ocuparía, a partir de entonces, de refrendar los despachos. Si bien se consideraba, tras la visita, que las retribuciones que los contadores percibían, compuestas por el salario, ayuda de costas, y los muchos derechos que cobraban, alcanzaban cuantías excesivas y se debían limitar, los mismos no sufrieron variación. Se insistía también en que se cumpliera la

(62).- Novísima Recopilación. Libro II, título IX.

(63).- Los mismos aparecen recogidos en AZ, carp 128, nº 200; Sobre la conformidad expresada por el monarca con el espíritu de las Ordenanzas, así como algunas advertencias que realizó en relación con ciertos capítulos, véase, BL, Add, 28.359 fol. 75.

ordenanza número treinta de 1554, por la cual, los contadores se tenían que juntar una vez en semana para conferir sus libros, cuestión que no habían cumplido, pues según se especificaba, lo habían hecho de seis en seis meses. Se reiteraba la necesidad del encuentro semanal bajo pena de perder el salario de aquella semana que incumpliesen la disposición. También se establecía que debían presentar al Consejo la memoria de sus derechos.

En cuanto al oficio de receptor, se fijaba que el mismo fuese de provisión real, dejando de depender su designación del comisario general, situación que había provocado algunas irregularidades, como el haber librado empréstitos de forma indebida, no pudiéndose negar el receptor a ello a causa de su dependencia del propio Comisario. También se contemplaba un aumento de la dotación salarial de dicho oficio, al considerar que era escasa y no percibir ningún derecho por su ejercicio. De igual manera, para tener un mayor control del dinero que estaba a su cargo, se regulaba que cuando el receptor tuviese una suma superior a mil ducados, lo librase en aquellas personas a quien tuviese que pagar, siempre bajo la supervisión de los contadores, y los receptores de partido deberían entregar al que residía en la Corte, cada cuatro meses, todo el dinero procedente de las composiciones, aplicaciones, condenaciones, etc. Así mismo, se establecía que los salarios de los oficiales y servidores del Consejo de Cruzada se pagasen por tercias.

Por otra parte, los resultados de la visita ponen de manifiesto una clara intención de acabar con las situaciones irregulares y con los cobros abusivos que tradicionalmente se generaban en relación con la cruzada, así como, de conseguir un mayor control sobre los ingresos procedentes de dichas concesiones integrantes de la hacienda real. Así, se ordenaba que no efectuase ninguna libranza sin que fuese firmada de mano del rey, pues si bien esto ya estaba reglamentado, en los últimos años se habían cometido excesos en este sentido, pues los contadores, con ocasión de la celebración de algunas fiestas, o por otros motivos, instaban al receptor para que pagase ciertas cantidades de dinero sin existir libranza, sino por su sola autoridad, descontando luego al receptor dichas

cantidades de otras mayores recibidas para que no se notase dicha falta en la Contaduría de Cuentas, solapando dichos gastos bajando la cuantía de los recibos o utilizando otro tipo de métodos. De igual manera, se decretaba que no se pagase en adelante a los aposentadores las cantidades acostumbradas en cada predicación de buleta, que percibían en razón de lo que tenían que pagar a los prelados y a sus secretarios por la licencia para poder predicar, pues se pensaba que los obispos no se opondrían a la voluntad real, y no exigirían dichas licencias, lo que suponía un sustancial ahorro. También se procuró agilizar los pleitos y negocios fiscales reforzando las figuras del procurador o solicitador fiscal y del relator, solicitando que su dedicación fuese exclusiva, para lo que se demandaba un aumento de sus salarios, y se proponía que existiese un solicitador fiscal en cada partido que ejerciese un cierto control, informando al comisario general y a los comisarios de partido sobre los excesos que se cometiesen en su demarcación. Sin embargo, en este sentido, no quedó nada proveído de forma definitiva, según se desprende de los resultados de la visita. De la misma también se deducía que existía negligencia en los cobros de los recargos, restas, y alcances de las bulas y jubileos, de composiciones, pesquisas, y de otros ingresos de diverso carácter, llevando algunos sin recaudarse por espacio de varios años, con el perjuicio consiguiente para la hacienda de la Cruzada. Por último se establecía que se despachasen cartas para efectuar la predicación en igual número que predicadores hubiese, pues parece que las licencias se habían multiplicado y excedido el número de los mismos, a causa de los cuantiosos derechos que de dichos despachos percibían los contadores, quienes obligaban a los tesoreros a aceptar los mismos. De igual manera, se regulaba en relación con el nombramiento, por parte del comisario general, de jueces para realizar ejecuciones y otro tipo de autos referentes a la hacienda de la Cruzada, pues en relación a su labor se habían cometido todo tipo de excesos y abusos. Así, se fijaba que dichos jueces sólo se proveyesen en aquellos casos en que fuesen absolutamente necesarios, y que esta determinación se tomase en el seno del Consejo.

Resulta altamente significativo que, en los resultados de la visita, si bien se especificaban irregularidades cometidas por los oficiales que formaban parte

del tribunal, no aparecía, en ningún caso, una personificación del infractor, sino que para referirse a los mismos se aludía, de una forma genérica, al cargo que desempeñaban. Sin embargo, este tratamiento varía sustancialmente en el caso del Comisario General, puesto que en punto primero de dicha relación se realizaba una valoración negativa de su gestión: "El Commisario general haze muchas ausencias y esta occupado en otros negocios demas de los de la cruzada y por esta causa se viene a faltar a los que tocan a la cruzada y padece detrimento la hacienda della. Conviene proveerse q el Commiss^o general se desocupe de otros negocios de manera q no falte a estos". Fray Bernardo de Fresneda, como hemos señalado, unía al cargo de comisario general de Cruzada las dignidades de obispo de Cuenca y confesor real, cuyo ejercicio le permitía tener el privilegio de acceder a las sesiones de todos los consejos, cuando en estos se tratasen cuestiones religiosas o bien que pudiesen afectar a la conciencia regia (64). A causa de desarrollar dichas actividades, parece que el franciscano no se ocupaba con la diligencia necesaria de las obligaciones que le imponía el oficio de comisario general. Esto, sin duda, había provocado inconvenientes durante su gestión, como quedó claramente expresado en las quejas, que en este sentido, había realizado el nuncio Castagna en 1566, en relación con el retraso en la recaudación del subsidio de galeras, que obligó a Felipe II a solicitar una prorrogación del plazo para el cobro de dicha gracia (65). La nota negativa puesta en la labor del comisario general venía acompañada por la recomendación de que éste abandonase sus otras ocupaciones para poder asistir, según quedaba establecido, tres días de cada semana a las sesiones del Consejo, en concreto, los martes, jueves, y sábados, que se desarrollarían por espacio de dos horas durante la tarde. La fijación específica de las mismas se dejaba a la voluntad del comisario general. De producirse dicho abandono, ello vendría a suponer la muerte política de Fresneda, dado que su influencia y poder se cimentaba en la ostentación del cargo de confesor real. Dejar de realizar dicha función supondría perder su influjo sobre el monarca, lo

(64).- L.P.GACHARD, Don Carlos y Felipe II. S.Lorenzo del Escorial 1984, p, 171; Sobre su participación en diversas juntas, véase, D.M.SANCHEZ, op. cit., pp, 85-138.

(65).- L.SERRANO, Correspondencia diplomática..., I, p, 236.

que unido a su aislamiento en relación con la facción cortesana dominante, al no encuadrarse en el grupo clientelar de Espinosa, derivaría en su relegamiento, como así sucedió en 1571, cuando se vio forzado a abandonar la Corte para ir a residir a su obispado cordobés, una vez que el rey decidió relevarle del oficio de confesor.

Así pues, y como ya hemos señalado, si bien la visita de 1566 al Consejo de Cruzada no conllevó ningún cambio estructural, sirvió para conseguir, según los designios de la política confesional de la Monarquía y de sus artífices, un mayor control sobre la institución, que quedó reflejado en la limitación de las funciones del Comisario General en lo relativo al nombramiento de los servidores del tribunal y en la disponibilidad de los ingresos, funciones que pasaron a integrarse dentro de las atribuciones reales o del propio organismo. También cumplió la misión principal de producir un relevo de los oficiales que le componían, en relación con la evolución de las distintas facciones cortesanas y su pugna por el poder. Que la visita estaba dirigida en contra del comisario general Fresneda, y que buscaba su sustitución en dicho oficio por una persona próxima al patrón cortesano Diego de Espinosa, así como un relevo en los oficiales que servían en el Consejo de Cruzada para acomodar a su propia red clientelar, resulta evidente si tenemos en cuenta la evolución del resto de los componentes de dicho órgano, puesto que, entre 1571, cuando Fresneda se vio abligado a abandonar la Corte y el cargo de comisario general, y 1573, año en que se promulgaron las nuevas instrucciones, se produjo un relevo de aquellos oficiales que habían sido promovidos a sus cargos por Bernardo de Fresneda, dando paso a personajes más cercanos al nuevo comisario Soto Salazar. Así, el asesor Doctor Diego de Lagasca, que murió en 1572, fue sustituido por el licenciado Jerónimo Contreras, quien sirvió en dicho puesto hasta 1578 en que falleció. Hemos de señalar, que si bien en los resultados de la visita de 1566 se establecía que el número de asesores se ampliase a dos, el licenciado Contreras aparece como único servidor en dicha categoría durante estos años. En el caso de los contadores, tanto Francisco de Santoyo, quien hizo dejación del cargo en 1571, como Pedro de Esquivel, que falleció en 1572, fueron sustituidos por Gaspar de Cuéllar y Juan de Portillo respectivamente, quienes estarían

vinculados al Consejo de Cruzada hasta la década de los noventa. El fiscal Pedro de Espinosa fue enviado en 1572 a servir los negocios de la Cruzada en Roma, nombramiento que no fue bien recibido por el embajador Juan de Zúñiga, aunque, posteriormente, se desarrollaría una buena colaboración entre ambos (66), pasando a ocupar el oficio de fiscal Luis de Maldonado, quien ejercería dicha labor hasta 1595. En cuanto a los relatores, Francisco de Torquemada hizo dejación de su puesto en 1572, pasando a desempeñarlo Jerónimo de la Carrera, quien lo ostentó hasta 1578.

Sin embargo, este relevo no afectó a los oficios que podríamos denominar como "técnicos" dentro del organismo, tales como el de tasador de procesos, dado que Pedro de Torres, quien fue designado para ocupar dicho puesto en 1562, sirvió hasta 1575 en que falleció, o como el solicitador de negocios fiscales, Juan de Prado, quien fue proveído en febrero de 1571 y sirvió en dicho cargo hasta el final de la centuria, en similitud con los alguaciles Juan González de la Torre y Diego Díaz del Castillo. De igual manera, siguió desempeñando su oficio de traductor el secretario Diego Gracian, a quien en los resultados de la visita se señalaba como perjudicado por el ejercicio de los contadores, puesto que estos se negaban a pagar lo que le correspondía en función de las signaturas y refrendaciones que efectuaba. Así mismo, quedaba destacada la labor del portero del Consejo, Uberto Bermejo de Borgoña, quien desempeñó dicho oficio entre 1564 y 1597, cuya dedicación se significaba en la visita, a consecuencia de lo que se le acrecentó el salario en junio de 1573 (67).

5.2. La presidencia interina del Consejo de Italia (1567-1571)

El ascenso de Diego de Espinosa como gran patrón cortesano no había mermado el influjo que la facción ebolista venía ejerciendo en dicha institución desde su fundación. A pesar de las reiteradas ausencias de su presidente, Diego

(66).- J.GOÑI GAZTAMBIDE, op. cit., p. 614.

(67).- Los datos sobre los oficiales que componían el Consejo de Cruzada, y su evolución, han sido extraídos de AGS, Comisaría de Cruzada, leg. 290.

Hurtado de Mendoza, desde 1564, con motivo del desempeño del cargo de virrey de Cataluña, la dirección de dicho organismo siguió adscrita a individuos encuadrados en dicho grupo, siendo Gaspar de Quiroga designado para hacerse cargo de su gobernación en julio de 1567 (68). Además de su filiación ebolista, avalaba a Quiroga el conocimiento que de los asuntos italianos había adquirido a través de su actuación como visitador en Nápoles, así como sus buenas relaciones con la Santa Sede, puesto que, en el desarrollo de su cometido, hubo de entender e intervenir en los contenciosos mantenidos entre la jurisdicción eclesiástica y regia por sus competencias en los territorios italianos. En este sentido, contó con el apoyo y la ayuda de Juan de Zúñiga, que fue nombrado, en 1568, embajador en Roma en sustitución de su hermano, Luis de Requesens.

Por otra parte, su llegada a esta institución propició el inicio de una relación que tuvo una importancia esencial en la evolución de su trayectoria política y eclesiástica, así como en su propio encumbramiento como gran patrón cortesano. El año anterior se había producido el fallecimiento de Gonzalo Pérez, siendo desgajada en dos partes la secretaría de Estado que había ocupado. Mientras que el tratamiento de los asuntos del Norte fue encomendado a Gabriel de Zayas, fue Antonio Pérez quien pasó a ocuparse de las materias concernientes a Italia, ostentando el título de secretario al efecto desde 1568. Por tanto, fue en torno a la consideración de estos temas donde surgió el conocimiento y

(68).- Entre 1559 y 1566 había ostentado el cargo de gobernador del Consejo de Italia Juan de Figueroa, Lorenzo Polo y Marcelo Pignone. La denominación de gobernador estaba referida a aquellas personas que ocupaban la presidencia de forma interina e informal, puesto que el nombramiento no se refrendaba por ningún documento, sino que se establecía a través de un mandato oral. La designación de Gaspar de Quiroga constituye un caso peculiar, dado que no contaba con una vinculación anterior al organismo (M.RIVERO RODRIGUEZ, El Consejo de Italia..., pp. 75-76 y 366); Sobre su nominación, junto con la que recibió una consignación de dos mil ducados, véase, P.SALAZAR Y MENDOZA, op. cit., p. 292; BSCV, Ms. n° 16, fol. 145v; Coincidiendo con el ejercicio de este cargo, Quiroga pasó a ocupar en la Corte una posada de mayores dimensiones. Aunque este cambio de residencia vino motivado por las obras y reestructuraciones que se estaban llevando a cabo en la ciudad, también pone de manifiesto el relevante papel que dicho personaje estaba adquiriendo. En este sentido, véase el billete que el secretario Pedro del Hoyo dirigió al monarca en marzo de 1568 (AZ, carp. 146, n° 104).

vinculación entre ambos personajes (69).

Si bien Diego de Espinosa se planteó y materializó la realización de una visita al Consejo de Italia en la misma línea de actuación que estaba desarrollando en relación a otras instituciones de la Monarquía, el control que el grupo ebolista ejercía sobre este organismo conllevó que la misma no fuese operativa. Esta situación vino propiciada porque la persona designada como visitador, Francisco Hernández de Liébana, quien recibió la comisión correspondiente en 1568, se encontraba encuadrada dentro de dicha facción cortesana, a lo que había que añadir que, tanto Gaspar de Quiroga desde la presidencia como el secretario del Consejo Diego de Vargas, obstaculizaron su normal ejecución. Así pues, la instrucción de la visita se fue dilatando a lo largo de los años, reactivándose en la década siguiente como un reflejo del cambio producido en la configuración de los grupos que en la Corte pugnaba por el control de las instituciones (70).

La actividad de Gaspar de Quiroga referida a las cuestiones relativas a la gobernación de los territorios italianos había tenido su continuación tras su retorno de Nápoles, interviniendo no sólo en la determinación de la visita que

(69).- El propio Pérez refería, en febrero de 1570: "Al doctor Quiroga, que hace el oficio de presidente [conocía] desde que hace el dicho oficio" (AGS, CC, Leg. 2797, fol. 292r). Sobre dichas cuestiones, véase, M. BOYD, op. cit., pp. 13-14; M. MARAÑÓN, Antonio Pérez (El hombre, el drama, la época). Buenos Aires 1947, I, pp. 46-47 y 123; A. PEREZ, Relaciones y cartas. (Intr. y ed. de A. ALVAR EZQUERRA). Madrid 1986, I, p. 15; Un perfil biográfico de Gabriel de Zayas, persona cercana al duque de Alba, en P. RODRIGUEZ, "Gabriel de Zayas (1525-1593). Notas biográficas" Espacio, Tiempo y Forma Serie IV, 4 (1991), pp. 57-70.

(70).- En torno a estas cuestiones, véase, M. RIVERO RODRIGUEZ, op. cit., pp. 101-102; Respecto al control ejercido por el embajador en Roma, el príncipe de Eboli y Antonio Pérez sobre los asuntos italianos, hemos de señalar que, si bien la relación entre los dos primeros eran plenamente cordiales, en febrero de 1568 Juan de Zúñiga escribía a Cristóbal de Moura rogándole que mediase de forma disimulada para suavizar su contacto con el secretario, al que encontraba "un poco seco y recatado". Intuía Zúñiga que esta situación se debía a que Pérez le había instado para que junto con su hermano, Luis de Requesens, estableciesen claramente su pertenencia de dicho "partido" cortesano a través de mostrar enemistad a Gabriel de Zayas, perteneciente al círculo del duque de Alba: "Y yo no me hallaba tan obligado que no me pareciese que podía entretener a entrambos teniendo de todos antes amistad; hame caído ahora este por amo y así querría que me le allanasedes sin que él supiese que yo tengo tal sospecha" (CODAIN, Vol. 97, p. 397).

había realizado, sino que, como buen conocedor de la realidad de su problemática, su opinión e intercesión fue requerida en diversas ocasiones (71). Así, en agosto de 1566, habiéndose producido el fallecimiento del doctor Castillo, quien tenía el mandato de cubrir la plaza de regente por Nápoles en el Consejo de Italia, vaca por la promoción de Polo como gobernador del mismo, se había considerado qué persona sería más idónea para ocupar este cargo. Puesto que, como consecuencia de la visita efectuada por Quiroga, habían sido suspendidos de sus oficios los regentes del Consejo Colateral Reberter y Vilano, y Juan Andrea de Cutis, perteneciente al de Capuana, no siendo apropiados para desempeñar esta función los letrados hispanos residentes en dicho reino, se había determinado, tras consultar la opinión de Gaspar de Quiroga, promocionar como regente del Consejo a Antonio Patiño, a pesar de haber sido condenado en la visita al pago de trescientos escudos, cuestión que se estimaba secundaria ante los pocos hispanos disponibles y las otras cualidades que el candidato reunía (72).

Si bien Quiroga se ocupó entre 1567 y 1571 de las atribuciones propias del gobierno de esta institución, tutelado por las principales figuras del grupo ebolista

(71).- El 16 de abril de 1565 Gonzalo Pérez informaba a Felipe II como, cumpliendo con la orden real, los regentes Polo y Pignone, junto a Gaspar de Quiroga, se habían reunido para tratar en torno a las pretensiones presentadas por Julio Cinughi, adoptando la resolución de esperar la información que se había requerido al virrey de Nápoles sobre su caso. El deficitario estado económico del solicitante movió al secretario a indicar al monarca la conveniencia de efectuar la concesión de una ayuda económica mientras se definía su situación. En el mismo documento Gonzalo Pérez refería como había encargado nuevamente a Polo y Quiroga, a los que en esta ocasión se unía Casati, que entendiesen en el asunto suscitado en torno a Renart, que atribuía sus tribulaciones a la actuación de sus enemigos. Dicho despacho aparece recogido en A.GONZALEZ PALENCIA, Gonzalo Pérez, secretario de Felipe II. Madrid 1946, I, p, 247; II, p, 480.

(72).- AGS, SP, Leg. 1, nº 5; En torno a los regentes por el reino de Nápoles, hemos de señalar el caso de Tomás Salernitano, quien, si bien obtuvo el nombramiento, permaneció en dicho territorio para hacerse cargo de la visita realizada por Gaspar de Quiroga. Requerido en la Corte, en 1568, para cubrir la vacante de Marcelo Pignone, rechazó el cargo (M.RIVERO RODRIGUEZ, El Consejo de Italia..., p, 414). No obstante, el 13 de octubre de 1569 dirigía una carta a Quiroga solicitando una plaza en el Consejo de Italia, mostrándose como un afecto cliente, y significando la ininterrumpida comunicación que ambos habían mantenido (BNM, Ms. 1029, fols. 119r-v).

(73), sin duda, su actuación se vió marcada por los graves conflictos jurisdiccionales que se desarrollaron entre la Monarquía hispana y el papado durante este periodo en los territorios italianos.

5.2.1. La pugna jurisdiccional con la Santa Sede y el control político en Italia

Aunque, como resultado del proceso de confesionalización de la Monarquía, los conflictos se sucedían igualmente en otros ámbitos, los choques entre la jurisdicción real y eclesiástica por hacer prevalecer sus prerrogativas tuvieron uno de sus escenarios principales y más significativos en los territorios italianos adscritos a la Monarquía hispana. En cada uno de ellos adoptaron una forma distinta en función de sus condicionantes específicos, pero la cuestión de fondo era común en el conjunto. Mientras que Pío V alentaba la implantación de las reformas tridentina, no mostrándose dispuesto a permitir la intromisión de otras instancias en los asuntos eclesiásticos, Felipe II trataba de mantener intactos los privilegios concedidos a la Corona hispana por los pontífices anteriores, así como las atribuciones del poder regio en el gobierno y control de los mismos. Así, en lo concerniente al reino de Sicilia, el motivo de queja por parte del papa vino determinado por el uso abusivo que se efectuaba de la Monarchia Sicula (74). Esta controversia tuvo su reflejo en los cargos de la administración,

(73).- Sobre la actuación de Quiroga al frente del Consejo de Italia, véase, por ejemplo, AZ, carp. 145, nº 7; En marzo de 1571 terminaba su desempeño de esta función. Así lo comunicaba el nuncio Castagna al Cardenal Alejandrino: "Il Duca di Francavilla è qui, et ha lassato il governo di Catalogna, et è ritornato nel suo pristino loco di Presidente del Consiglio d'Italia. Hora si va pensando che si farà di Mons.Quiroga, il quale no va più in detto Consiglio d'Italia..." (L.SERRANO, op. cit., IV, p, 221). Por otra parte, Quiroga fue siempre consciente de que su paso por la presidencia de dicha institución era temporal. Así, en febrero de 1570, el duque de Alba escribía al rey en relación a la visita que estaba desarrollando al parlamento de Dole, apuntando la conveniencia de que acudiese una persona desde Italia: "Quiroga dice muy bien en lo que para la visita podría ayudar el presidente que hubiera de ser, pero como no sabe la intención de V.M. no se puede seguir aquel camino" (Epistolario del III Duque de Alba Don Fernando Alvarez de Toledo. Madrid 1952, II, p, 330).

(74).- En torno a esta cuestión, véase, L.PASTOR, op. cit., Vol.18, pp, 6, 10-11, 14, 28, 45, 47, 53; R.HINOJOSA, op. cit., pp, 202-203; L.CABRERA DE CORDOBA, op. cit., I, pp, 513-514. En carta que el nuncio Castagna remitió al cardenal Alejandrino, fechada el 1 de octubre de 1568, refería como el presidente Gaspar de Quiroga le había informado de que el rey había ordenado

puesto que el talante reconciliador del virrey, el marqués de Pescara, mostrándose proclive a buscar el entendimiento con el papado en su intento de propiciar una solución a este tema, sus enfrentamientos con el tribunal del Santo Oficio siciliano y la evolución de las facciones cortesanas en relación con los asuntos italianos, motivaron que desde Madrid se le retirase el apoyo, procediéndose a su sustitución en 1571 (75).

En el ducado de Milán, el celo reformador del arzobispo, el Cardenal Borromeo, chocaba con la defensa de la jurisdicción regia efectuada por el virrey, el duque de Alburquerque, y por el Senado. Para atender al remedio de algunos delitos contra los preceptos eclesiásticos y asegurar las buenas costumbres, Borromeo hizo uso de antiguos privilegios concedidos a los arzobispos milaneses para crear una "familia" armada. El Senado de Milán mostró su disconformidad ante la posibilidad de que los legos tuviesen que acatar la autoridad de los mismos, pues se estimaba en esta actuación una merma de la jurisdicción real. Mientras en Roma se dilucidaba la razón de las partes, los acontecimientos se precipitaron. La actividad de los alguaciles arzobispales provocó la reacción del Senado en su contra, y esta, a su vez, la posterior

al Consejo de Italia tratar en torno a esta cuestión, no mostrando ninguna confianza en los resultados: "Ma io cognosco che aspettano li capi de gli abusi di là forsi da quelli propii che abusano, li quali daranno quella informatione che li parerà; onde quando si havesse da venire supra ciò a capi particolare, bisognarebbe che li fossero date annotationi de gli abusi de la parte nostra, benche come no detto, dovendo il Sig. Commendatore essere sopra tutte le cose trattare sin qui, trattara anchora de questo" (L.SERRANO, op. cit., II, p, 471). Sobre el origen y carácter del conjunto de derechos conocido como Monarchía Sícula, véase, J.M.MARCH, El Comendador Mayor de Castilla Don Luis de Requesens en el gobierno de Milán, 1571-1573. Madrid 1943, pp, 192-194; J.PEREZ VILLANUEVA, "Baronio y la Inquisición española". Baronio Storico y la Contrarreforma. Sora 1982, pp, 3-53.

(75).- G.CATALANO, Controversie giurisdizionali tra Chiesa e Stato nell'età di Gregorio XIII e Filippo II. Palermo 1955, pp, 50-51. Desde que el duque de Medinaceli fuese destituido como virrey de Sicilia en 1564 a causa de su enfrentamiento con el marqués de Favara, familiar de Ruy Gómez de Silva (M.RIVERO RODRIGUEZ, op. cit., pp, 97-98), había ocupado dicho cargo García de Toledo, al que unió el de Capitán General de la Mar, actuando en la defensa de la isla de Malta contra el acoso turco. Sobre la importancia estratégica y política de dicha acción, véase, L.SERRANO, "Un legado pontificio..." pp, 84-88; Idem, España en Lepanto. Madrid 1971, pp, 11-24. Por otra parte, su caída en desgracia estuvo vinculada al declive del secretario Eraso (CODOIN, Vol.30, pp, 38-39). Sobre la sucesión de virreyes sicilianos en relación con la evolución de las facciones cortesanas, H.G.KOENISBERGER, La práctica del Imperio. Madrid 1975, pp, 195-205.

excomunión lanzada por Borromeo contra el presidente y dos miembros de dicha institución. El virrey, ajeno a la actuación senatorial, trató de buscar la reconciliación, sin embargo, como consecuencia de sus infructuosos intentos, el asunto pasó a dirimirse entre la Santa Sede y Felipe II (76). A causa de la exigencia papal de que los excomulgados acudiesen ante su presencia, el monarca determinó, en octubre de 1567, enviar a Roma al marqués de Cerralbo para que se hiciese cargo de las negociaciones, debiendo procurar alcanzar un acuerdo con Borromeo que el pontífice únicamente hubiese de confirmar. Entre tanto, el nuncio Castagna hacía las gestiones posibles ante Felipe II, quejándose de que en Milán se hubiese prohibido a los ciudadanos declarar en favor del arzobispo. Además, algunos de los informes que Borromeo había remitido al nuncio, Castagna había procurado hacerlos llegar al presidente Quiroga, de quien trataba de obtener su mediación en este tema (77). Por otra parte, el presidente del Consejo de Italia mantuvo informado al nuncio del desarrollo y estado en el que se encontraba el conflicto (78). Las actuaciones desplegadas por los Cardenales Pacheco y Granvela, junto a Luis de Requesens, lograron que Pío V revocase la orden de comparecencia dada a los senadores a cambio de que se diese satisfacción a Borromeo, quien debía, igualmente, cancelar las censuras eclesiásticas pronunciadas (79).

Sin embargo, este capítulo no zanjó los enfrentamientos entre la

(76).- Una descripción pormenorizada del conflicto entre el Senado milanés y el Cardenal Borromeo se encuentra en L.PASTOR, op. cit., Vol.18, pp, 14-18; J.M.MARCH, El Comendador Mayor de Castilla..., pp, 192-194.

(77).- Véase al respecto la carta que el nuncio remitió al Cardenal Alejandrino fechada en diciembre de 1567 (L.SERRANO, Correspondencia diplomática..., II, p, 276).

(78).- En una misiva que Castagna escribió al Cardenal Alejandrino, datada el 1 de octubre de 1568, refería: "Mons. Quiroga mi ha detto che il Re ha già scritto a Milano che non è intentione di S.M. che si toglia il suo a la chiesa et che si se li faccia aggravio nessuno, ma che questa lettera forsi non haverà fatto effecto perche pretendono di là che la chiesa non fosse mas in possessione di tenere alcuna fameglia, maxime per laici; et che mandorno sopra questo infiniti testimonii examinati che provano questa negativa" (Ibid., pp, 470-471).

(79).- Sobre dichas mediaciones y la resolución papal, véase, L.PASTOR, op. cit., Vol.18, p, 19; J.M.MARCH, La embajada de Don Luis de Requesens..., pp, 104-105.

jurisdicción real y eclesiástica en Milán. Ante el agravamiento de la situación, el duque de Alburquerque estableció una rígida normativa contra aquellas personas que atentasen contra el fuero regio. La implantación de esta reglamentación venía a coincidir con la decisión de Borromeo de hacer efectiva una visita a la iglesia de Santa María de la Escala, que, por privilegio otorgado por Clemente VII, estaba eximida de la autoridad del prelado milanés, aunque la condición fijada en la concesión de obtener el consentimiento arzobispal nunca se había cumplido. Las pretensiones del cabildo de eximirse de este control fueron apoyadas por el virrey y el Senado, lo que motivó una violenta situación que, finalmente, el arzobispo supo reconducir a su favor (80).

Igualmente, la amistad existente entre Francisco de Borja y el Cardenal Borromeo, cimentada en la identificación del prelado con la vía de religiosidad encarnada por la Compañía de Jesús, y por la participación de los jesuitas en el proyecto de reforma religiosa que estaba llevando a cabo en el arzobispado de Milán se tradujo en el apoyo procurado por los miembros de dicha Orden a la actuación del Cardenal, lo que vino a provocar que, en los momentos más álgidos de la pugna jurisdiccional, desde la Corte, tanto Gaspar de Quiroga como Diego de Vargas realizasen una llamada de atención sobre la inconveniencia de alentar el modo de proceder de Borromeo en sus afanes reformísticos, origen de sus controversias con los representantes del poder real (81).

La práctica desarrollada en los territorios adscritos a la Monarquía hispana de no proceder a la aceptación y publicación de los documentos emanados de la

(80).- En torno a este episodio, G.CATALANO, op. cit., pp, 34-40 y 54-55; L.PASTOR, op. cit., Vol.18, pp, 19-23; R.HINOJOSA, op. cit., pp, 193-197; J.M.MARCH, El comendador Mayor..., pp, 195-199; R.ROBRES LLUCH, "San Carlos Borromeo y sus relaciones con el episcopado ibérico postridentino, especialmente a través de fray Luis de Granada y de San Juan de Ribera" Anthologica Annua 8 (1960), p, 91.

(81).- El 17 de mayo de 1568, el jesuita Antonio Araoz escribía al General de la Compañía de Jesús: "Terriblemente se queixa el secretario Vargas y el presidente Quiroga, y otros, de un sermón de Milán de uno de los nuestros; y como llueve sobre mojado, de otros de más cerca, lebanta mareta y aun tempestad" (MHSI, S.Franciscus Borgia. Madrid 1910, IV, p, 605). La llegada de los jesuitas a Milán fue un propósito personal de Borromeo, donde favoreció la fundación de un colegio de dicha Orden (A.DEROO, Carlos Borromeo, reformador conciliar. Villava 1968, pp, 122, 141-142, 208, 303-323).

Santa Sede sin el previo beneplácito del Consejo Real provocó las protestas de Pío V en relación al infringimiento y oprobio que se realizaba a la jurisdicción eclesiástica, siendo especialmente conflictiva la aplicación del exequatur en el reino de Nápoles (82). El pontífice representó los inconvenientes que se derivaban de esta cuestión ante Felipe II a través del nuncio ordinario y del legado Pedro Camaiani, que unió el tratamiento de este tema a su misión en torno al arzobispo Carranza. También el papa exhortó a Diego de Espinosa y a Gaspar de Quiroga para que utilizasen su influencia con el monarca para poner fin a los conflictos jurisdiccionales. En concreto, refería al presidente del Consejo de Italia el incidente que había sucedido en relación al obispo de Strongolo, visitador apostólico, pidiendo que informase del mismo al rey, pues pensaba que el virrey, el duque de Alcalá, al que llegó a amenazar con la excomunión, había actuado en este asunto sin disponer del consentimiento regio (83). En este sentido, en febrero de 1567, Castagna entregó a Felipe II una carta del papa en la que se ponían de manifiesto las dificultades y la obstaculización que afectaban al desarrollo de la visita eclesiástica en Nápoles, obteniendo la promesa regia de ocuparse de este tema, cuya discusión remitió al Consejo de Italia, expresando sus deseos de que se satisficiera al pontífice tanto al duque de Alcalá como a Luis de Requesens, sin que, por otra parte, esto se tradujese en un cambio de actitud en relación a la defensa de los privilegios concedidos a la Corona en cuanto al entendimiento de los asuntos eclesiásticos (84). A esta situación,

(82).- En torno al origen de este procedimiento y de su distinción del placet, aunque ambos términos se utilizaban de forma bastante indiferenciada, véase, J.M.MARCH, La embajada de Don Lius de Requesens..., pp, 126-128; L.PASTOR, op. cit., Vol.18, pp 6, 10-11, 14; G.CATALANO, op. cit., pp, 145-149.

(83).- L.SERRANO, Correspondencia diplomática..., II, pp, 28-29; L.CABRERA DE CORDOBA, op. cit., I, pp, 513-514: "y se ofendió [el papa] porque habiendo enviado un obispo visitador de las iglesias, el Duque de Alcalá no le admitía hasta que no se le diese el exequatur en el Consejo"; L.CATALANO, op. cit., pp, 40-41.

(84).- En carta que el nuncio Castagna remitía al Cardenal Alejandrino, fechada el 17 de febrero de 1567, decía sobre esta cuestión: "Noi credemo che sia cosi, et che S.B. restara soddisfatta, tal che non faremo altro sopra questo finche non habbiamo altro avviso, facendoli intendere che li doi Brevi, uno al Presidente del Consiglio Reale et l'altro a Mons.Gaspere Chiroga non sono da noi stati presentati, perche no essendo senon sopra questa causa et no havendovi loro far'niente, semo l'uno et l'altro stati di parere di non darli per non adoptare in vano Brevi di S.S., che sono degni di molta stima" (L.SERRANO, Correspondencia diplomática..., II, p, 47; L.PASTOR, op. cit.,

en la que Pío V veía la imposibilidad de proceder con normalidad a la reforma del clero napolitano, vino a sumarse la problemática que suscitó la promulgación de la bula In Coena Domini en abril de 1568. La nueva formulación e innovaciones que recogía la misma, entre las que se encontraba su carácter perpetuo hasta que se efectuase una nueva versión, en lugar de proceder a su publicación anual cada Jueves Santo, así como las disposiciones en relación a los tributos y censuras dictados por la Iglesia y, sobre todo, la defensa que realizaba de la jurisdicción eclesiástica ante los abusos e injerencias provenientes de la secular, revocando todos los privilegios otorgados por los pontífices precedentes, no fue bien acogida por Felipe II (85). El profundo disgusto demostrado por el monarca ante la determinación papal y las múltiples observaciones y reclamaciones realizadas sobre el contenido de la bula se concretaron en Nápoles en la obstaculización de su publicación. En este sentido, la actuación desplegada por el duque de Alcalá fue esencial, pues continuó exhibiendo su celo regalista sin amedrentarse ante la contingencia de una probable excomunión, llevando la aplicación del exequatur hasta sus más extremas posibilidades (86). Por su parte, el nuncio Castagna hacía llegar al monarca las reiteradas quejas realizadas por la Santa Sede en cuanto a la situación napolitana y el proceder del virrey,

Vol.18, pp, 12-13, 27 ; R.HINOJOSA, op. cit., pp, 184-185).

(85).- Sobre las novedades contenidas en dicha bula y el carácter de las mismas, véase, L.SERRANO, La embajada del Don Luis de Requesens..., pp, 120-121; L.PASTOR, op. cit., Vol.18, pp, 30-31; G.CATALANO, op. cit., pp, 24-34, 43-48. En mayo de 1568 Juan de Zúñiga escribía a su hermano: "plegue de Dios de aquí a entonces no se atravesie ninguna dificultad sobre la bula In Coena Domini que lo desbarate todo, que según el papa quiere ejecutarlo esta todo harto peligroso. El duque de Alcalá envía este correo a saber qué manda el Rey que haga en ello y a mí me escribe que si me pareciere entretanto hacer algunas diligencias que las haga, que confía en mí tanto S.E. que me lo remite porque se siente flaco para llevar carga tan pesada; yo lo estoy tanto, que hasta que el Rey escriba no hablaré en ello, si el Papa no se quejase primero de que no se obedece, que entonces como reos habríamos de responder. Dáme este negocio infinito cuidado, porque veo al papa aparejado para dar sobre esto con todo al través y por la otra parte no hallo como puede el Rey pasar por ello" (CODOIN, Vol.97, p, 477).

(86).- Sobre la actitud adoptada por el duque de Alcalá, las gestiones realizadas por Luis de Requesens y su hermano ante Pío V y las del nuncio Castagna en la Corte referidas a dicha cuestión, G.CATALANO, op. cit., pp, 40-42, 49-50; L.PASTOR, op. cit., Vol.18, pp, 30-52; J.M.MARCH, La embajada de Don Luis de Requesens..., pp, 122-132; P.LETURIA, "Felipe II y el pontificado según D.Luis de Requesens y Zúñiga" Estudios Eclesiásticos 25 (1928), p, 67; L.SERRANO, Correspondencia diplomática..., II, p, 470: "Ma nel discorso il Cardinale [Espinosa] mi disse liberamente che il Re tanto tiene che se li dimandi che lassi l'exequatur di Napoli quanto che lassi il Regno di Spagna".

quien en sus informes hacía constar como, en todo momento, se había mantenido en los márgenes que le procuraba el ejercicio de la jurisdicción real y de los privilegios otorgados a la Corona en materias eclesiásticas. Para realizar esta labor, Castagna buscó siempre la mediación ante el monarca de personas que pudiesen influir en su ánimo, de forma favorable para sus intenciones, en referencia a estas contiendas jurisdiccionales, siendo Gaspar de Quiroga uno de los máximos destinatarios de sus representaciones (87). Según la visión de Pío V, era la actuación desplegada particularmente por el duque de Alcalá la que había provocado la situación tensa que se vivía en Nápoles, puesto que Felipe II había insistido, en diversas ocasiones, en sus deseos de satisfacer al pontífice. Sin embargo, esta benévola perspectiva de la postura filipina no era muy acorde a la realidad, puesto que la actuación del virrey napolitano estaba directamente inspirada y obedecía a las directrices políticas que venían marcadas desde la Corte. Esto motivó que, cuando, en 1571, el Cardenal Granvela pasó a ocupar el virreinato de Nápoles, los conflictos jurisdiccionales tuviesen una amplia continuidad (88).

5.2.2. El inicio de una larga visita

Como hemos señalado, la realización de una visita conllevaba no sólo la revisión del funcionamiento administrativo de la institución objeto de la misma y del recto proceder de sus miembros, sino que, habitualmente, implicaba el relevo de estos. Sus puestos pasaban a ser ocupados por fieles servidores del patrón que hubiese auspiciado la consecución de la visita como fórmula de actuación política para lograr el dominio de dicho organismo y, en consecuencia, de las materias vinculadas a su ejercicio. Igualmente, como hemos referido, en 1568 se ponía en marcha la realización de una visita al Consejo de Italia. El control ejercido por el "partido" ebolista sobre esta institución y la designación

(87).- En este sentido, véase, L.SERRANO, Correspondencia diplomática ..., II, pp, 44-45; Ibid., III, p, 112; IVDJ, envío 81 (caja 108) nº 1135.

(88).- En torno a estas cuestiones, véanse las acertadas apreciaciones realizadas por R.HINOJOSA, op. cit., pp, 204-205; L.CATALANO, op. cit., pp, 52-56, 82-84.

de Francisco Hernández de Liébana como visitador desvirtuaron su efectividad durante los primeros años de su ejecución, no revitalizándose su instrucción hasta la década siguiente, en relación directa con la evolución de las facciones cortesanas. No obstante, las actuaciones realizadas en torno a la visita vinieron a poner de manifiesto la existencia de diversos enfrentamientos en el seno de dicho grupo, comenzándose a vislumbrar el germen del "partido" papista. Si bien nuestra intención no es profundizar en el estudio pormenorizado de sus incidencias, hemos de señalar algunas cuestiones que estuvieron directamente relacionadas con Gaspar de Quiroga.

Según se desprende de las declaraciones efectuadas por las diversas personas que fueron requeridas en el desarrollo de las indagaciones, la visita estaba orientada a esclarecer la actuación del secretario del Consejo, Diego de Vargas, lo que condujo a que se evidenciasen, no sólo los turbios manejos que efectuaba en torno a múltiples materias, sino también la complicidad de diversos servidores de la Monarquía en los territorios italianos, así como las tensas relaciones que mantenía con Gaspar de Quiroga y Antonio Pérez. Especial significación reviste, en este sentido, el entendimiento existente entre Diego de Vargas y el duque de Alcalá, virrey de Nápoles, con quien Quiroga había mantenido un fuerte, aunque soterrado enfrentamiento, durante el periodo en que actuó como visitador en dicho reino. Si bien la callada indisposición que ambos habían mantenido fue expuesta por el secretario Juan de Soto como alegato de defensa ante el resultado que la labor del visitador arrojaba en su contra, lo cierto era que el propio Ruy Gómez de Silva estaba al corriente de las disensiones existentes dentro del grupo (89). Esta circunstancia era también conocida por aquellos individuos que de alguna forma habían estado relacionados con la instrucción de la visita al reino napolitano realizada por Quiroga, como era el caso de Andrés Ponce de León, personaje estrechamente vinculado a Luis de Requesens, quien, por su parte, no dudó en favorecer a Andrés Ponce, que

(89).- El duque de Alcalá consideraba a Quiroga un enemigo, y así lo comunicaba al príncipe de Eboli en 1568, solicitando que no le fuesen mostrados sus despachos, puesto que temía la actividad que pudiese desarrollar en su contra. Por su parte, Ruy Gómez trataba de apaciguar los celos del virrey, afirmando que Quiroga únicamente estaba motivado por el cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo (M.RIVERO RODRIGUEZ, El Consejo de Italia..., p. 197).

ocupaba el puesto de lugarteniente del virrey durante el desarrollo de la misma, y en mostrar, por contra, su abierta enemistad al duque de Alcalá por el modo como se había conducido con su protegido (90).

Por otra parte, los miembros de la facción encabezada por Diego de Espinosa, conscientes de que la visita se mostraba un mecanismo ineficaz por el control ejercido en el Consejo por el grupo ebolista y por la adhesión a dicho "partido" del visitador, expusieron al rey, al margen de su instrucción, las irregularidades cometidas por el virrey de Nápoles en su gestión, involucrando en estas actividades al resto de la red clientelar establecida por Ruy Gómez para hacerse con el control de los asuntos italianos. El encargado de realizar esta

(90).- La amistad entre Andrés Ponce de León y Luis de Requesens se remontaba a 1553, cuando aquel entró a su servicio como letrado. Tras su paso por el reino de Nápoles, Andrés Ponce desempeñó el cargo de Gran Canciller de Milán entre 1565 y 1572, retornando a la Península en 1573, siendo nombrado miembro del Consejo de Estado. Sobre la vinculación entre ambos y la influencia que Ponce tenía en el ánimo de Requesens, véase, A.XAVIER, Luis de Requesens en la Europa del siglo XVI. Madrid 1984, pp, 304-305; J.M.MARCH, El Comendador Mayor Don Luis de Requesens..., pp, 148-151, poniéndose de manifiesto la responsabilidad que tuvo Ponce en el enfriamiento de las relaciones entre Requesens y Diego de Espinosa. En una carta que el Comendador Mayor remitió a Andrés Ponce, el 23 de octubre de 1565 refería en torno al virrey napolitano: "nos espantó a él [Juan de Zúñiga] y a mí el negocio y temimos al duque de Alcalá de la misma manera que el visitador Quiroga (...) que el duque sepa que yo sé sus maldades y las he puesto en manos del rey por que v.m. lo quiso así no aventuro cosa alguna ni se me da un maravedí, porque aunque el duque tiene más hacienda que yo, soy mucho mejor nacido que él y mucho más hombre de bien y no me hará Dios tanto mal que no lo entienda así la gente (...) se me acuerdas muy bien cuando él andaba tan fuera de juego y tan desfavorecido que no le mandaba el Emperador cubrir con haberlo mandado a su tío (...) así que no es hombre el duque con quien yo tengo que temer de romper" (IVDJ, envío 9 (caja 14), fol. 240). Igualmente, Requesens escribía a su hermano sobre el mismo tema: "Infinito huelgo que Andrés Ponce fuese tan bien visto del rey y de toda la Corte, y que tenga la opinión que merece, y pues le han entendido, el debe de estar contento de su jornada y demasiado hidalgamente se hubo de callar lo que calló y he gustado de lo que aquel ministro le dijo, que se echase una piedra sobre aquel negocio (...) y de lo que apuntáis pensara que se quedaba allá, y no veo de que sino en la presidencia de Italia o en la contaduría si se formase aquel oficio, puesto caso que ni Ruy Gómez ni Velasco le ayudarían a ello, aunque sean sus amigos, pero saco que se debe volver acá (...) De habelle tocado nada en la visita de Nápoles me ha pesado en extremo, que, aunque las culpas debieron ser hartas livianas, habrán hecho sus enemigos que suene hartos la condenación; y espántome que digais que no son tan amigos el duque de Alcalá y Ruy Gómez como pensamos, porque creo que hay hartas prendas en medio de las que en estos tiempos suelen aprovechar" (CODOIN, Vol.97, pp, 385-386). Sin duda, los rumores que corrieron por Italia, en torno a 1566, sobre la posible provisión de Requesens como virrey de Nápoles, no contribuyeron a mejorar la relación entre ambos. Por otra parte, Requesens también profirió quejas ante su hermano respecto a la forma del secretario Vargas de manejar los asuntos del Consejo, cuando ocupaba el cargo de gobernador en Milán (J.M.MARCH, op. cit., p, 86).

función fue Hernando Avalos Sotomayor, lugateniente de la Cámara de la Sumaria, personaje vinculado al secretario Mateo Vázquez (91). En sus denuncias, Avalos significaba la necesidad de que el duque de Alcalá fuese relevado de su cargo a causa del caótico estado de los tribunales, las provisiones escandalosas que efectuaba de los oficios, sin tener en cuenta las ordenanzas reales, y el incumplimiento sistematizado de los mandatos regios, proliferando los sobornos y la corrupción, referida, especialmente, a la venta de oficios de justicia y de los beneficios eclesiásticos, así como al mantenimiento de diversos negocios fraudulentos (92). No dejaba de significar que, si bien este comportamiento era sobradamente conocido tanto en Nápoles como en la Corte, nadie se atrevía a denunciar explícitamente su actuación por el fuerte respaldo con el que contaba el virrey, señalando al secretario Diego de Vargas y a la princesa de Ascoli como sus protectores (93). Como método de defensa, desde noviembre de 1568 hasta febrero de 1571, el duque de Alcalá desplegó una campaña de desprestigio contra Hernando de Avalos ante Felipe II, intentando conservar el favor real y la ostentación del cargo de virrey (94).

No obstante, como hemos señalado, el enfrentamiento existente entre diversos miembros del "partido" ebolista provocó que las declaraciones que efectuaron en la instrucción de la visita no fuesen favorables al binomio formado por Diego de Vargas y el duque de Alcalá, resultando especialmente significativas las realizadas por Gaspar de Quiroga y por Antonio Pérez. El

(91).- A.W.LOVETT, Philip II and Mateo Vázquez de Leca: the government of Spain (1572-1592). Genève 1977, p. 142.

(92).- IVDJ, envío 80 (caja 104), nº 14.

(93).- Ibid., nº 15-16: "En la Corte a sobornado a todos, el sº Vargas porque le ha ofrecido ayudarle en su visita, le ayuda ahora a él porque no venga a las orejas de V.M. sino lo que él quiere y lo peor es que dicen que por medio de la Princesa de Ascoli la visita será humo y así se hizo visitador a Francisco Hernández".

(94).- Diversas cartas enviadas por el duque de Alcalá tanto al rey como a don Fadrique Enríquez de Ribera en su defensa, en las que hacía diversas acusaciones contra Hernando de Avalos se encuentran en Ibid., nº 18-25; Por otra parte, la vinculación de Avalos a Mateo Vázquez y al Cardenal Granvela, cuando este pasó a ocupar el virreinato de Nápoles en 1571, quedaba claramente establecida en la carta que Requesens escribió a Espinosa a finales de dicho año (J.M.MARCH, op. cit., pp. 93-94).

secretario presentó su testimonio el último día de febrero de 1570, asegurando que Vargas recibía múltiples sobornos, consiguiendo que los oficios en la administración y beneficios eclesiásticos fuesen proveídos por su mano únicamente considerando su propio interés económico, de lo que se había quejado amargamente Quiroga al rey, pudiendo avalar igualmente esta afirmación los secretarios Juan de Soto y Escobedo. Pérez señalaba que singularmente valiosos eran los regalos que Vargas recibía del duque de Alcalá y del marqués de Pescara, virreyes de Nápoles y Sicilia respectivamente. De igual manera, el secretario aseguraba que la relación entre Vargas y Quiroga era muy tensa, lo que había provocado que Vargas no se recatase de desprestigiar públicamente al gobernador del Consejo de Italia (95). Sin embargo, las acusaciones más graves que Pérez vertió sobre Vargas estaban relacionadas con el manejo de la práctica totalidad de las materias concernientes a los territorios italianos, habiendo establecido un entendimiento con los virreyes del que se servía para que todos los negocios pasasen por sus manos, excediéndose así en el ejercicio de sus atribuciones, y resaltando la inconveniencia de que, además de actuar como secretario, contase con voto en el Consejo. Como resultado de todo ello, Pérez afirmaba que, no sólo muchos despachos provenientes de estos territorios eran consultados por Vargas directamente con el rey, sin que fuesen puestos en conocimiento del Consejo de forma previa, sino que intervenía indebidamente en los asuntos concernientes a la secretaría de Estado que se ocupaba de las cuestiones italianas. En consecuencia, transgredía notoriamente la división de competencias fijada entre ésta y la secretaría del Consejo de Italia, que había sido establecida por una instrucción real en 1556, perjudicando en su ejercicio al secretario de Estado que tuviese encomendadas estas funciones, es decir, primeramente a Gonzalo Pérez y, posteriormente, a él mismo, siendo inútiles las quejas representadas por su padre al rey en relación a este

(95).- La declaración efectuada por Antonio Pérez se encuentra recogida en AGS, CC, Leg. 2797, fols. 392r-401v. Respecto al enfrentamiento entre Quiroga y Vargas refiere: "que pasaron entrellos algunas palabras pesadas y que después entendió que se avían reconciliado en St. Hieronimo de Madrid, y que las palabras que pasaron no sabe quales fueron/ y que una persona que por el presente no se acuerda quien es, avía oydo al mismo a Vargas hablar mal de la persona del doctor Quiroga con palabras no buenas, como dezir que era un leño, y que no sabía lo que hazía".

comportamiento. Antonio Pérez se mostraba muy resentido hacia Vargas por su injerencia continua en los temas pertenecientes a la secretaría de Estado y por el menoscabo que había sufrido su padre, sobre todo, cuando las atribuciones estaban perfectamente delimitadas, y eran conocidas por Ruy Gómez de Silva, que había sido encargado por el monarca de transmitir a cada uno de ellos cual era su marco de actuación, por lo que, por extensión, Pérez culpaba al príncipe de Eboli de consentir los excesos cometidos por Vargas (96). Menos incisiva fue la testificación efectuada por Gaspar de Quiroga, aunque, en términos generales, vino a ratificar las acusaciones proferidas por el secretario. Quiroga presentó su testimonio el 29 de mayo de 1572, tras haber terminado su cometido como gobernador del Consejo de Italia. Respecto a su relación con Diego de Vargas durante el periodo que había ocupado la presidencia de esta institución, Quiroga señalaba cómo había intentado obligar al secretario a que guardase la instrucción otorgada por el rey para el cumplimiento de su oficio, a pesar de que éste se había resistido a presentar el documento aduciendo su pérdida. De igual manera, significaba la inconveniencia de que, ejerciendo el oficio de secretario, contase con voto en el Consejo, acusando a Vargas de actuar en relación a diversos despachos al margen del organismo, especialmente, respecto a los que procediesen de los virreyes. No dudaba en recomendar que el oficio de secretario se dividiese, ocupándose una secretaría de los negocios de Sicilia y Milán, y otra de los de Nápoles, o bien, haciendo una separación por materias, presentando, adjuntamente, un pormenorizado memorial de los asuntos que debía tratar el secretario y la actuación correcta a la que debía ajustar su proceder, con la que el comportamiento de Vargas no se correspondía de manera adecuada. No dejaba de referirse a la fama que tanto Diego de Vargas como su primo, Gaytán, tenían de recibir dádivas, así como el favorecimiento realizado por el duque de Alcalá a varios familiares del secretario, otorgándoles la ostentación de importantes oficios en el reino de Nápoles. Si bien omitía cualquier alusión a su enfrentamiento con Vargas, evocaba como había tenido que advertir al secretario y a Gaytán que, el trato áspero y riguroso que este último deparaba a los

(96).- En este sentido, Antonio Pérez adjuntaba a su testificación una documentación que reflejaba los asuntos que estaban cometidos al entendimiento del secretario de Estado de Italia (Ibid., fols. 402r-405v).

negociantes italianos había motivado que se hubiesen presentado quejas ante el presidente del Consejo de Italia cuando él mismo se encontraba ocupando dicho cargo, lo que, evidentemente, no era provechoso para la buena marcha de los asuntos (97).

Otro enfrentamiento nacido en Nápoles, que se siguió desarrollando tras el retorno de Gaspar de Quiroga a la Península, fue el que mantuvo con el secretario Juan de Soto, personaje cercano al duque de Alcalá (98). Resultado de la visita realizada por Quiroga fue un largo proceso que afectó al secretario, en el que, a través de un grueso expediente, se hacía al mismo objeto de una variada gama de acusaciones sobre las irregularidades cometidas en el ejercicio de su oficio (99). Soto atribuía el enconado proceder del visitador a que, a causa de su ostentación de la baronía de Marzano y de haber realizado a través de la misma un ventajoso matrimonio, había despertado la envidia de varios criados del duque de Alcalá, que habían vuelto el ánimo del virrey en su

(97).- El testimonio de Gaspar de Quiroga se encuentra en *Ibid.*, fols. 362r-372r.

(98).- El napolitano Juan de Soto había entrado, en 1555, al servicio de duque de Alba, al que acompañó durante su permanencia en Nápoles. Acudió con su protector a la Corte del Emperador en Bruselas, en 1558, obteniendo, este mismo año, el nombramiento de secretario del reino de Nápoles del virrey Juan Manrique de Lara. Su vinculación al duque de Alba hizo que Diego de Vargas reclamase el ejercicio del cargo ocupado por Soto en virtud a su nombramiento como secretario del Consejo, lo que forzó a este, como medio para mantenerse en el oficio, a iniciar un acercamiento a la facción ebolista, lo que, además facilitó su entendimiento con el nuevo virrey, el duque de Alcalá. Los motivos que provocaron este cambio de afectos en Soto, así como los que propiciaron su enfrentamiento con Gaspar de Quiroga, han sido estudiados más ampliamente en H. PIZARRO LLORENTE, "La visita al reino de Nápoles de 1559: el enfrentamiento entre Gaspar de Quiroga y Juan de Soto" P. FERNANDEZ ALBALADEJO, J. MARTINEZ MILLAN, V. PINTO CRESPO (Ed), Política, religión e Inquisición en la España Moderna. Madrid 1996, pp, 567-586.

(99).- En contra de Juan de Soto fueron presentados sesenta y siete cargos, entre los que eran especialmente significativos el hecho de haber ejercido el oficio sin contar con el título correspondiente, no tener la preparación necesaria para el despacho de los memoriales propios de su cometido, ostentar diversos cargos incompatibles entre sí, favorecer a sus criados, pagando salarios correspondientes a puestos que no servían, la extorsión y usurpación de funciones a varios oficiales, la realización de cobros ilícitos, etc. Quiroga había puesto gran énfasis en señalar sus turbios tratos con Jerónimo de Gennaro, conocido delincuente a quien Soto ayudó a cambio de obtener la compra de la baronía de Marzano, propiedad de Gennaro, a un precio muy ventajoso. Las acusaciones realizadas contra el secretario aparecen recogidas en AGS, VI, Leg. 1, exp. 1 y 2. Una copia de dichos cargos se encuentra en *Ibid.*, leg. 2, fols. 232-245.

contra, siendo aprovechado este desfavorecimiento por Quiroga para iniciar este proceso, en 1563, como forma de ofensiva y de venganza contra el virrey, puesto que veladamente se acusaba al duque de Alcalá de no vigilar el correcto funcionamiento institucional y de no velar por la realización de una recta gestión por parte de sus servidores (100).

No obstante, Juan de Soto recibió un tratamiento diferenciado del resto de los procesados en la visita, puesto que, en agosto de 1564, fue suspendido de su oficio hasta que no fuese emitida la sentencia definitiva. Esta no se pronunció hasta junio de 1566. En la misma se establecía la condena del secretario a pagar diversas penas pecuniarias, a asumir y cubrir las faltas cometidas por su oficial, Juan Pablo Benet, así como a restituir a su anterior propietario los lugares adquiridos en Marzano y Marzanelo. A esto vino a sumarse la suspensión realizada por Felipe II para el ejercicio de su oficio durante los tres años siguientes al día en que la sentencia se hizo pública, quedando expresamente establecido que no podría volver a actuar como secretario del reino de Nápoles, tras la finalización de este plazo, sin la previa autorización real (101). A los distintos memoriales que Juan de Soto elevó al monarca tratando de mitigar los efectos de estas sanciones, se unió su preocupación ante la proyectada reforma de las atribuciones inherentes al cargo de secretario del reino de Nápoles, que había sido planteada como consecuencia de la visita y que Soto trató de que no se llevase a cabo. En este sentido, el enfrentamiento de Soto con Diego de Vargas se agudizó, al estar el secretario del Consejo de Italia percibiendo, en virtud de una Cédula Real, ciertos derechos pertenecientes al oficio del napolitano (102). Durante este periodo, Soto fue requerido en dos ocasiones para que prestase declaración en la instrucción de la visita que se estaba realizando

(100).- Las acusaciones proferidas por Soto, en este sentido, se encuentran en AZ, carp. 128, n° 66.

(101).- Una copia de la sentencia de Juan de Soto, fechada el 19 de junio de 1566, se encuentra en, AGS, VI, Leg. 1, n° 5, fols. 1-3.

(102).- Sobre los intentos del secretario por mejorar su situación y la pugna mantenida por Vargas en relación a su oficio, véase, Ibid., fols. 6-8, 10, 12, 14-17, 19-30, 33-35; R.MANTELLI, op. cit., pp. 30-31.

sobre dicha institución. En la primera de ellas, efectuada el 14 de marzo de 1568, no dudaba en desprestigiar la figura de Gaspar de Quiroga, de quien afirmaba que no había procedido con igual rigor hacia todos los procesados en la visita al reino de Nápoles, puesto que había favorecido a varios protegidos del regente Figueroa. Sobre su gestión al frente del Consejo de Italia, estimaba que era ineficaz a causa de sus muchas ocupaciones y de la cortedad de su entendimiento, siendo además una persona inapropiada para ostentar este cargo por su carácter colérico. De igual manera, manifestaba que Quiroga había otorgado un relevante oficio en Calabria a uno de sus sirvientes, en concreto, a un joven paje, contando con el apoyo para ello del secretario Diego de Vargas, a quien acusaba de recibir cuantiosos sobornos, de los que presentaba una completa relación en la que especificaba los nombres de los pagadores y las cantidades que había percibido, así como de emplear a sus deudos en significados cargos. Terminaba por constatar las irregularidades que Vargas cometía desde su privilegiada situación en el Consejo de Italia, a cuyos miembros ocultaba diversos asuntos y otras opiniones para poder manejar la resolución de las materias a su antojo (103). En su segunda testificación, que realizó el 16 de junio de 1569, reiteró las afirmaciones realizadas en la anterior, añadiendo nuevas informaciones, mucho más detalladas, que apoyaban sus aseveraciones. Sin embargo, introdujo también alguna novedad, mostrándose conocedor de las tensas relaciones que existían entre Quiroga y Vargas, así como de la vinculación y trato que mantenían el secretario y el virrey de Nápoles, el duque de Alcalá (104). Así pues, Soto aprovechó el marco de la visita al Consejo de Italia

(103).- En concreto, Soto se refería al daño que había sufrido don García de Toledo, virrey de Sicilia, a cuyo servicio se encontraba. El testimonio de Soto aparece recogido en AGS, CC, Leg. 2797, fols. 1r-10v. En torno a su trayectoria durante estos años, hemos de señalar que, si bien, en 1559, había realizado un acercamiento a la facción ebolista, no interrumpió sus contactos con su antiguo protector, el duque de Alba, desarrollando un doble juego y ambigüedad que le permitió servirse en cada momento de la mejor opción. Sobre este aspecto, véase, M.RIVERO RODRIGUEZ, "La Liga Santa y la paz de Italia (1569-1576)". P.FERNANDEZ ALBADALEJO, J.MARTINEZ MILLAN, V.PINTO CRESPO (Coord.), Política, religión e Inquisición en la España Moderna, pp, 609-620.

(104).- La misma se encuentra en AGS, CC, Leg. 2797, fols 216r-250r. En referencia con las apreciaciones realizadas sobre Quiroga, mantenía que no era apto para el cargo que ocupaba por su falta de experiencia así como de ingenio, y la destemplanza de su carácter, que había exhibido pródigamente durante su etapa de visitador en Nápoles, sazónando sus acusaciones con diversos

para poner una nota negativa sobre el gobernador y el secretario del mismo, insistiendo, precisamente, en que si bien era conocido su enfrentamiento con el primero como fruto de su labor de visitador en Nápoles, y el pleito que mantenía con el segundo, su declaración se ajustaba a la veracidad de los hechos.

La pugna emprendida por Soto para defenderse de la ofensiva desplegada por Vargas le permitió alcanzar algunos de sus objetivos, logrando ser restituido en su oficio en Nápoles y obteniendo alguna compensación económica. Sin embargo, cuando obtuvo el puesto de secretario al lado de don Juan de Austria, en marzo de 1570, no dudó en utilizar su mediación para actuar en contra de aquellos que habían aprovechado su menguada situación, instando a don Juan para que el entendimiento de sus reclamaciones fuese cometido a personas conocedoras de los asuntos italianos, pero que, en ningún caso, la cuestión fuera remitida al Consejo de Italia por la conocida enemistad que le profesaban el secretario Diego de Vargas, Hernández de Liébana y Gaspar de Quiroga, quien continuaba ostentando la gobernación de dicho organismo (105).

Juan de Soto había accedido al cargo de secretario de don Juan de Austria bajo los auspicios de Ruy Gómez de Silva, quien había visto satisfechos sus deseos de vincular al hermano de Felipe II a su facción política (106). Para asegurar su influjo sobre la figura de don Juan, el príncipe de Eboli trataba de mantener bajo su control a aquellas personas y servidores más cercanos al mismo, y de forma muy significativa a sus secretarios. Así, al producirse, en septiembre de 1569, el fallecimiento de Juan de Quiroga, hermano de Gaspar, durante el transcurso de la guerra para apaciguar la revuelta de los moriscos

ejemplos.

(105).- AZ, carp. 128, n° 66; IVDJ, envío 96 (caja 139), n° 622; CODON, Vol. 28, pp. 138-139.

(106).- C.M.ABAD, Doña Magdalena de Ulloa. La educadora de don Juan de Austria y la fundadora del Colegio de la Compañía de Jesús de Villagarcía de Campos (1525-1598). Santander 1959, pp. 41-42; C.IBAÑEZ DE IBERO, Juan de Austria. político e innovador. Madrid 1944, p. 81. Por otra parte, su designación fue bien acogida por el grupo "albista", quienes, en virtud a la ambigüedad de Soto, veían en el nuevo secretario precisamente el efecto contrario, pudiendo lograr, a través de su mediación, sustraer a don Juan de la esfera ebolista (M.RIVERO RODRIGUEZ, op. cit.).

granadinos, fue nombrado en su lugar Juan de Soto de Cisneros, quien solamente ejerció esta ocupación por espacio de unos meses, pues murió en marzo de 1570 (107). Fue entonces cuando el napolitano Juan de Soto pasó a desempeñar, mediando la recomendación de Ruy Gómez, el cargo de secretario de don Juan de Austria (108). No obstante, la ocupación de tan señalado cargo no hizo cejar a Soto de sus intentos de ser compensado por las consecuencias de la sentencia fruto de la visita de Quiroga al reino de Nápoles, sobre todo porque su nueva situación le permitía contar con una valiosa protección. La elaboración de nuevos memoriales, en los que hacía especial insistencia en el asunto que le enfrentaba con Diego de Vargas, forzó a que se nombrasen jueces que dirimiesen la justicia de las partes. Para tal efecto fueron designados Gaspar de Quiroga, Francisco Hernández de Liébana y el doctor Scipion Cutinario (109). La perseverancia de Soto en la consecución de su justicia motivó a Felipe II a ordenar al Cardenal Espinosa que, junto al gobernador del Consejo de Italia remitiesen una relación del pleito al virrey de Nápoles. La falta de un acuerdo entre las partes que pusiese fin al seguimiento del proceso provocó serias preocupaciones a Quiroga, puesto que si la causa debía resolverse en el seno del Consejo de Italia se vería forzado a apartar de dicho organismo al secretario Vargas y a su primo, Gaytán, por contar con intereses directos en la misma (110). La beligerante actitud de Soto encontró su réplica en el vertido de

(107).- Juan de Austria comunicó a Felipe II la muerte de Juan de Quiroga el 6 de septiembre de 1569, apuntando la posibilidad de que su puesto fuese ocupado por Arriola, servidor de Eraso, o bien por Soto, que había sido criado de don García de Toledo. Don Juan parecía inclinarse por el segundo puesto que Arriola no contaba con experiencia en las cuestiones de la mar (CODOLIN, Vol. 28, pp, 20-21). El cuatro de marzo de 1570 volvía a solicitar al monarca la provisión de un secretario ante el fallecimiento de Soto de Cisneros (Ibid., p, 77).

(108).- El cuatro de marzo de 1570, Ruy Gómez hacía relación a don Juan de la brillante trayectoria de Soto y de su experiencia en las cuestiones relacionadas con la guerra: "Suplico a V.Ex^a le favorezca que él se lo sabra merecer y aunque esotro Soto viva, si es posible, V.Ex^a no suelte a este, porque yo le prometo que es una joya preciosa en estas materia" (Ibid., p, 70; Ch.PETRIE, Don Juan de Austria. Madrid 1968, p, 125).

(109).- AZ, carp. 128, n° 68.

(110).- Sobre los intentos realizados por Quiroga para que esta situación no se llegase a producir, véase, Ibid., n° 70-71. Sin duda, en esta coyuntura, Quiroga antepuso los intereses faccionales.

acusaciones que, como forma de contraofensiva, fueron realizadas sobre su persona ante Felipe II, en relación con la apropiación ilícita de dinero perteneciente a la hacienda regia y el cobro irregular de licencias a la población morisca durante el desarrollo de la contienda granadina, lo que conllevó que el monarca ordenase la apertura de una investigación (111).

Si bien Soto supo aprovechar para favorecer sus intereses la protección de Ruy Gómez de Silva y de don Juan de Austria, a quien acompañó como secretario en los avatares de la Santa Liga y durante su estancia en Italia, la muerte del príncipe de Eboli y el cambio de las facciones cortesanas producido en 1573, con el consiguiente encumbramiento del grupo encabezado por Antonio Pérez y Gaspar de Quiroga, trajeron para Soto nefastas consecuencias.

No obstante, aunque la visita realizada al Consejo de Italia se mantuvo inoperante durante los primeros años de su instrucción, el círculo cercano a Diego de Espinosa y al duque de Alba logró fortalecer su influencia en torno al control de los asuntos italianos, teniendo este hecho su reflejo en el relevo de los virreyes de Nápoles y Sicilia en 1571. Esta situación vino determinada porque durante el periodo 1570-1573 ninguna de las facciones cortesanas consiguió establecer una situación de claro dominio, por lo que el beneficio de la gracia regia se mostró de diferente signo en función de las diversas circunstancias que atravesaba la política de la Monarquía en cada momento, siendo la constitución y devenir de la Santa Liga uno de los ejes fundamentales de la misma (112).

5.3. La cuestión morisca y las negociaciones para la formación de la Santa Liga

El levantamiento protagonizado por los moriscos granadinos entre 1568 y 1571 supuso un importante foco de preocupaciones para Felipe II, que

(111).- Ibid., nº 67.

(112).- En torno a estas consideraciones, véase, M.RIVERO RODRIGUEZ, "El servicio a dos Cortes: Marco Antonio Colonna, almirante pontificio y vasallo de la Monarquía" La Corte de Felipe II, pp, 345-349.

contemplaba el originamiento de una situación bélica en los territorios peninsulares paralelamente con el desarrollo del estado de revuelta que se vivía en Flandes. Sin pretender acometer la labor de señalar las causas que motivaron el surgimiento de este conflicto, esclarecidas en diversos estudios, el estallido de la guerra supuso el afloramiento de una serie de presiones que tanto desde el punto de vista religioso como económico y social se ejercieron sobre dicho colectivo (113). El proceso de confesionalización de la Monarquía promovida por el rey se había traducido, en la política concerniente a esta minoría, en un riguroso intento de lograr su conversión y asimilación. En este sentido, el Concilio provincial granadino, celebrado en 1565, había puesto de manifiesto la necesidad de acometer una serie de actuaciones conducentes a esta finalidad (114). Por otra parte, en la Corte, Diego de Espinosa iba a ser la persona encargada de ejecutar la política auspiciada desde la Corona en relación a la cuestión morisca. La junta reunida en 1566 para este efecto puso en marcha la aplicación de diversas medidas adoptadas en época de Carlos V, siendo Pedro Deza, personaje cercano a Espinosa, quien, a través de su nombramiento como presidente de la Chancillería de Granada, debía acometer su realización en la práctica. La intransigencia y dureza que Deza imprimió a esta actividad, con el beneplácito del presidente del Consejo Real e Inquisidor General, propiciaron que el Capitán General de Granada, el marqués de Mondéjar, expresase sus reticencias en referencia a este modo de proceder, puesto que era previsible,

(113).- Además de las tradicionales crónicas de D.HURTADO DE MENDOZA, Guerra de granada. Ed. de B.BLANCO GONZALEZ. Madrid 1970; G.PEREZ DE HITA, Guerras civiles de Granada. Madrid 1913; L.DEL MARMOL CARVAJAL, Rebelión y castigo de los moriscos. Málaga 1991 (Ed. facsímil), véase, A.DOMINGUEZ ORTIZ y B.VICENT, Historia de los moriscos. Vida y tragedia de una minoría. Madrid 1978, cap. 2; K.GARRAD, "La Inquisición y los moriscos granadinos, 1526-1580" Bulletin hispanique 67 (1965), p. 74; J.CARO BAROJA, Los moriscos en el reino de Granada. Madrid 1976 (2ª Ed.), pp. 175-201; J.REGLA, Estudios sobre moriscos. Barcelona 1974 (3ª Ed.), pp. 195-208; R.DE LERA GARCIA, El Tribunal de la Inquisición de Granada: un poder económico y social. Tesis doctoral inédita. UAM 1994, pp. 359-365.

(114).- J.LOPEZ MARTIN, "El concilio provincial de Granada de 1565 y sus previsiones sobre los moriscos del reino de Granada" Anthologica Annua 36 (1989), pp. 509-541; Ibid., "El arzobispo de Granada Don Pedro Guerrero y la Compañía de Jesús" Anthologica Annua 24-25 (1977-78), pp. 462-468; J.PEREZ DE HEREDIA, "El Concilio provincial de Granada de 1565" Anthologica Annua 37 (1990), pp. 493-495; A.MARIN OCETE, "El Concilio provincial de Granada de 1565" Archivo teológico granadino 25 (1965), pp.

según su opinión, que los moriscos optasen por la rebelión. Aunque sus acepciones fueron rechazadas por el Consejo de Castilla que, dominado por Espinosa, respaldó la actuación de Deza, encontraron eco en el Consejo de Guerra, cuyos miembros, pertenecientes tradicionalmente al estamento nobiliario, eran partidarios de una política menos rigurosa en relación a los moriscos. Estas dos visiones, es decir, la representada por los letrados al servicio de Diego de Espinosa, opuesta a la defendida por los nobles, dificultó enormemente el desarrollo y evolución de la contienda, puesto que tampoco compartieron la misma opinión en relación a la persona que debía encargarse de dirigir las acciones militares (115). Si bien Espinosa logró imponer a su candidato, el marqués de los Vélez, en detrimento del marqués de Mondéjar, apoyado por el Consejo de Guerra, posteriormente, al fracasar en su objetivo de apaciguar la revuelta, Felipe II determinó que fuese su hermano, Juan de Austria, quien ostentase el mando, asesorado por una junta en la que estaban representadas todas las tendencias, e imponiéndole la tutela de Luis de Requesens (116).

(115).- Sobre las dificultosas relaciones que Espinosa mantuvo con la nobleza, que no asumió de buen grado el protagonismo de los letrados, véase, S.FERNANDEZ CONTI, Los consejeros de Estado y Guerra en la Monarquía hispana durante la época de Felipe II (1548-1598). Tesis doctoral. UAM 1997, pp, 121-130; J.MARTINEZ MILLAN, "Elites de poder en tiempos de Felipe II..." pp, 143-145; Idem, "Grupos de poder en la Corte..." pp, 191-193; Idem, "En busca de la ortodoxia..." pp, 213-214.

(116).- En este sentido, una pieza importante al lado de Don Juan era su secretario Juan de Quiroga, hermano de Gaspar. Si bien C.M.ABAD, Doña Magdalena de Ulloa..., p, 39, afirma que, cuando en 1560 se conformó la Casa del hermano de Felipe II, Juan de Quiroga pasó a ocupar dicho cargo, entre 1565 y 1568 le encontramos vinculado al servicio de Luis de Requesens en Roma, como hemos señalado en relación al proceso inquisitorial del arzobispo Carranza (J.M.MARCH, La embajada del Don Luis de Requesens..., p, 199; J.I.TELLECHEA IDIGORAS, "El doctor Pazos en el proceso de Carranza (cartas inéditas)" en E.VERDERA Y TUELLS (Ed.), El Cardenal Albornoz y el Colegio de España. Bolonia 1979, VI, pp, 482-484), abandonando la Ciudad Eterna en 1568 junto al embajador, que pasó a iniciar su labor de tutela sobre don Juan, que había recibido el nombramiento de Capitán General de la Mar (IVDJ, envió 62 (caja 83), n° 180 y 782; J.LOPEZ DE TORO, "Epístolas de Juan de Verzosa" Clásicos Españoles, II, Madrid 1945, pp, 115-116). Negándose a volver a ocuparse en la embajada en Roma, a pesar de las peticiones realizadas al respecto por Juan de Zúñiga, Juan de Quiroga entabló contacto definitivamente con Juan de Austria, a quien comenzó a servir en labores de secretario con el beneplácito de Luis de Requesens (CODOIN, Vol. 97, p, 438; J.M.MARCH, op. cit., p, 115; A.OSSORIO, Vida de Don Juan de Austria. Madrid 1946, p, 33; M.FERRANDIS, Don Juan de Austria, paladín de la Cristiandad. Zaragoza 1939, p, 108). En lo relativo a la participación de don Juan de Austria en la guerra de Granada, fueron tanto su secretario Quiroga como doña Magdalena de Ulloa los encargados de estimular al joven para que solicitase a su hermano el encargo de dicha misión (Ibid., pp, 116 y 130; C.IBAÑEZ DE IBERO, op. cit., p, 94; C.M.ABAD, op. cit., p, 43). La llegada de Requesens para participar en el conflicto y realizar su tutela no fue

El relevo del marqués de los Vélez no sólo provocó su relegamiento, sino que arrastró en su caída al presidente de la Chancillería, al que se comenzó a acusar de haber sido el responsable del levantamiento morisco a causa de la radicalidad y rigor con el que había procedido en el desempeño de su labor sobre dicha comunidad. Por otra parte, la falta de resultados positivos y las nefastas consecuencias que se originaron en torno a la actuación de estos dos protegidos de Espinosa tuvieron su reflejo en el declinar del influjo que el Cardenal tenía sobre el monarca, viéndose obligado, en la Cuaresma de 1569, a realizar una visita a su diócesis de Sigüenza, siendo aprovechada esta coyuntura por los miembros del grupo ebolista para poner de manifiesto ante el rey los inconvenientes que se habían derivado de la política propugnada por Espinosa, tanto en lo referente a esta cuestión como en los acontecimientos acaecidos en los Países Bajos, y afianzarse en el disfrute de la confianza y del favor regio (117). A esta problemática de índole política había que unir los inconvenientes procedentes de la situación económica, que se concretaban, principalmente, en las dificultades que conllevaba el mantenimiento y abastecimiento de los ejércitos, así como en los fraudes que se estaban cometiendo, sobre todo en las cuestiones relacionadas con el secuestro de los

bien acogida por don Juan, quien representó sus quejas ante Ruy Gómez de Silva y el duque de Sessa. Las desavenencias entre ellos fue uno de los motivos que provocaron el nombramiento de Requesens como virrey de Milán en 1571, tras los sucesos de la batalla de Lepanto y el fallecimiento del duque de Alburquerque (J.M.MARCH, "Don Luis de Requesens en la guerra de Granada y unas esclavitas moriscas" *Ejército* 41 (1943), pp, 38-43; Idem, *El Comendador Mayor de Castilla...*, pp, 16-18 y 61-66). Por otra parte, como hemos señalado, Juan de Quiroga murió en el transcurso de la guerra, en septiembre de 1569.

(117).- La caída en desgracia de Pedro Deza propició que le fuese instruida una visita, siendo el encargado de ejecutarla el doctor Redín, miembro del Consejo de Castilla y de la Suprema vinculado a la Casa Mondejar. Si bien Espinosa evitó através de su influjo las consecuencias previsibles de la misma, tras su muerte, en 1577, Deza fue destituido de la presidencia de la Chancillería granadina, pasando a ocupar semejante cargo en la de Valladolid. Sobre dichas cuestiones, así como en relación a la pérdida de influencia de Diego de Espinosa, véase, J.MARTINEZ MILLAN, "Elites de poder en tiempos de Felipe II", pp, 146-148; Idem, "En busca de la ortodoxia...", pp, 215-216; A.A.RUIZ RODRIGUEZ, *La Real Chancillería de Granada en el siglo XVI*. Granada 1987, pp, 86-96.

bienes de los moriscos (118).

La prolongada duración de la guerra motivó que, a comienzos de 1570, Felipe II decidiese trasladarse a Andalucía. Entre los personajes que acompañaron en su viaje al rey figuraba Gaspar de Quiroga, quien, posteriormente, cuando ocupó el cargo de Inquisidor General, pudo hacer uso de la experiencia y conocimientos adquiridos sobre la cuestión morisca en el transcurso de esta estancia, que se prolongó hasta el verano de dicho año (119). Sin embargo, la cercanía de Quiroga a la figura regia adquirió una importante significación, sobre todo por los oficios que desempeñó para favorecer la labor del legado pontificio Luis de Torres, que llegó a Córdoba, donde se hallaba Felipe II, en marzo de 1570, con la misión de atraer al monarca a la formación de la liga que la Santa Sede y la república de Venecia proyectaban formar para terminar con el avance otomano en el Mediterráneo.

Desde que Pío V había accedido al solio pontificio, una de sus principales preocupaciones había sido la continua amenaza que representaba para Italia la expansión del Imperio turco (120). Tras el fracaso de la expedición sobre Malta, las ambiciones otomanas se volcaron en el control del Mediterráneo oriental, representando el dominio de Chipre un enclave de alto valor estratégico. Esta pretensión atentaba seriamente contra los intereses comerciales venecianos

(118).- La designación del contador Francisco Gutierrez de Cuéllar en 1569, hombre cercano a Espinosa, obedeció a la necesidad de esclarecer la confusión creada en torno a estos temas. Sin embargo, los intereses de aquellos que estaban obteniendo sustanciosas ganancias por la situación bélica obstaculizaron notablemente su misión. En torno a la misma, véase, IVDJ, Envío 62 (caja 83), n° 441-526; C.J.DE CARLOS MORALES, Política y finanzas en el siglo XVI..., p. 138.

(119).- P.SALAZAR Y MENDOZA, op. cit., p. 293; BSCV, Ms. n° 16, fol. 146r; D.CASTEJON Y FONSECA, op. cit., p. 1133; M.BOYD, op. cit., pp. 15-16 y 19, afirma que la elección de Quiroga como obispo de Cuenca, en 1571, vino determinada por el problema morisco y su gran conocimiento del mismo. Según nuestro criterio, en la designación de Quiroga para ocupar la sede conquense resultaron primordiales otro tipo de valoraciones.

(120).- L.PASTOR, op. cit., Vol.18, pp. 302-304; L.SERRANO, La Liga de Lepanto entre España, Venecia y la Santa Sede (1570-1573). Madrid 1918, I, pp. 28-46; Sobre la tradicional visión de Felipe II como defensor de Italia frente al expansionismo turco, véase, F.MEREGALLI, "La presencia de la España de Felipe II en Italia según Scipione Ammirato" Hispania 33 (1973), pp. 77-100.

y, aunque la República no se mostraba partidaria de los proyectos bélicos trazados por el pontífice en cuanto a la formación de una Liga, sino de obtener la ayuda puntual y necesaria para la defensa de sus intereses, acabó aceptando entrar a integrar la misma junto a la Santa Sede. Mucho más dificultoso fue atraer a Felipe II a este proyecto, cuyo poderío militar era, por otra parte, imprescindible para acometer con ciertas garantías el desarrollo de la contienda. Las pugnas jurisdiccionales mantenidas entre el monarca y Pío V habían condicionado profundamente sus relaciones, lo que además no venía a favorecer que Felipe II accediese a entrar en ninguna coalición, como era la Liga, que se encontrase bajo el patrocinio papal, pues vendría a suponer un reforzamiento del poder del pontífice (121). No obstante, el fracaso de la política desarrollada por Espinosa para terminar con la rebelión morisca granadina y las dificultades para establecer un control sobre el Norte de Africa, así como, la recuperación de espacio por parte de la facción ebolista en el favor real, más tendente a la cooperación con la Santa Sede que el equipo de letrados en los que se apoyaba Espinosa para la ejecución de su política de defensa a ultranza de las prerrogativas regias, motivaron un cambio de actitud en Felipe II, mostrándose más receptivo hacia la propuesta bélica realizada por Pío V (122). Para allanar los obstáculos existentes para lograr la consecución de la Liga, el pontífice comisionó a un legado, Luis de Torres, que sería el encargado de convencer definitivamente al monarca hispano de formar parte de dicha empresa, quien, a su vez, trataba de obtener en compensación lo que las frecuentes instancias de los embajadores hispanos en Roma no habían logrado en los

(121).- Coincidiendo con la llegada de Luis de Torres, en marzo de 1570, el nuncio Castagna comunicaba al Cardenal Alejandrino que el monarca se encontraba abatido, lo que representaba un inconveniente para las negociaciones. Además, el rey se había negado a permitir la publicación de la bula pontificia que derogaba las episcopales, enviando a Gaspar de Quiroga a entrevistarse con Castagna en relación con lo que se quería transmitir al papa (L.SERRANO, Correspondencia diplomática..., III, pp, 281-282).

(122).- Sobre dichas cuestiones, véase, M.RIVERO RODRIGUEZ, "El servicio a dos Cortes: Marco Antonio Colonna...", pp, 333-338.

últimos años: la concesión de la Cruzada (123).

Llegado a Córdoba, Torres comenzó a desarrollar hábilmente su labor diplomática, entrando en contacto, primeramente, con aquellos personajes cercanos al rey que se encontraban más proclives al entendimiento con la Santa Sede, portando cartas de recomendación para Ruy Gómez de Silva y don Juan de Austria, aunque no por ello descuidó sus atenciones hacia Diego de Espinosa y el confesor real fray Bernardo de Fresneda. El primero en recibir su visita fue el secretario Antonio Pérez, que se mostró dispuesto a favorecer su misión y a continuar con la amistad que su padre había mantenido con el legado (124). Después pasó a tratar sobre dicho asunto con la princesa doña Juana, anhelando además su intercesión en la corte portuguesa, donde pensaba trasladarse con posterioridad para obtener su adhesión a la Liga. Torres continuó sus gestiones entrevistándose con Ruy Gómez, el duque de Feria y el arzobispo de Sevilla (125), siendo Gaspar de Quiroga, en su calidad de presidente del Consejo de Italia, uno de los personajes cortesanos con cuyo favorecimiento quiso contar, encontrando a Quiroga muy inclinado a procurarle su ayuda, enmarcándose este acogimiento en el mantenimiento de sus buenas relaciones con la Santa Sede. El 24 de abril, Luis de Torres informaba al Cardenal Alejandrino sobre sus actividades, altamente esperanzadoras para la consecución de sus propósitos. Refería que tanto Ruy Gómez de Silva como Quiroga le habían apuntado que el único inconveniente podía provenir de la desconfianza que despertaba el proceder de Venecia en el seno de la Liga, pues se pensaba que solamente buscaba satisfacer sus propios intereses, para abandonar su vincualción a la

(123).- Sobre el talante de la embajada de Luis de Torres, así como una recopilación de sus datos biográficos, véase, L.SERRANO, *La Liga de Lepanto...*, pp, 50-67; Idem, *España en Lepanto*. Madrid 1971, pp, 25-26; P.PASTOR, op. cit., Vol.18, pp, 55, 315-319; R.HINOJOSA, op. cit., pp, 188-193.

(124).- IVDJ, envío 60 (caja 80 bis), fol. 281r-v; J.I.TELLECHEA IDIGORAS, "Antonio Pérez a través de la documentación de la nunciatura de Madrid" *Anthologica Annua* 5 (1957), p, 654; A.DRAGONETTI DE TORRES, *La lega di Lepanto nel carteggio diplomatico inedito di Don Luys de Torres nunzio straordinario di S.Pio V a Filippo II*. Torino 1931, p, 100.

(125).- Ibid., pp, 92, 99-112.

misma una vez obtenidos los resultados apetecidos (126).

La cuestión referente a la concesión de la Cruzada y el recelo que provocaba la actitud de Venecia mantenía remiso a la mayoría del Consejo de Estado. Torres siguió al rey hasta Sevilla, donde continuó realizando su misión apoyándose principalmente en Antonio Pérez, en el príncipe de Eboli y en Gaspar de Quiroga. El legado solicitó al monarca que, para facilitar las deliberaciones que condujesen a alcanzar un entendimiento, las negociaciones pasasen a desarrollarse en Roma a través del embajador Juan de Zúñiga y de los Cardenales Granvela y Pacheco. Finalmente, y tras múltiples consultas al citado organismo, Espinosa notificó a Torres que Felipe II aceptaba entrar a formar parte de la Liga, remitiendo a Roma la conclusión del tratamiento de este asunto (127). En este sentido, la información que el enviado papal remitió referida a la toma de postura de las distintas facciones cortesanas en lo concerniente tanto a la cuestión de la Liga en particular como a la actitud que estas tenían en cuanto a las relaciones con la Santa Sede en general, resulta altamente esclarecedora. Torres establecía que la difícil comunicación que Pío V y Felipe II habían mantenido se debía al influjo político de personajes como Diego de Espinosa y el doctor Velasco, existiendo otro "partido" en la Corte, conformado por Ruy Gómez, el prior don Antonio, el duque de Feria y Gaspar de Quiroga que se mostraban proclives al entendimiento entre ambas instancias, pero que, su apartamiento de los puestos de mayor influencia había propiciado el seguimiento de la actuación que tantos problemas había generado, enturbiando la buena correspondencia entre el pontífice y el monarca hispano. También conformaba que Espinosa, en la cuestión concreta de la Liga, había procedido de forma favorable a los deseos e intereses de la Santa Sede, como así lo había reiterado Gaspar de Quiroga, mereciendo dicho personaje una alta credibilidad tanto por su demostrada adhesión y apoyo a la política propugnada por el papado, como porque no se encontraba incluido en el círculo clientelar de Diego

(126).- Ibid., p, 113.

(127).- Véase la carta que Luis de Torres remitió al Cardenal Alejandrino fechada el 20 de mayo de 1570 en, *ibid.*, pp, 133-138; L.SERRANO, *Correspondencia diplomática...*, III, pp, 365-368.

de Espinosa (128). Así pues, estas apreciaciones vienen a reiterar lo que hemos señalado anteriormente, esto es que, si bien Gaspar de Quiroga colaboró activamente en determinados aspectos conducentes a la confesionalización de la Monarquía, para lo que se puso al servicio del nuevo patrón cortesano, el Cardenal Espinosa, de quien alcanzó un alto favorecimiento, no abandonó su encuadramiento político ni identificación ideológica con el grupo ebolista, comenzando a perfilarse como uno de los principales personajes de la facción "papista".

Finalizadas sus gestiones en la Monarquía hispana habiendo alcanzado su objetivo, Luis de Torres se trasladó a Portugal para desarrollar en dicha Corte una labor semejante que condujese a su inclusión en la Liga. Gaspar de Quiroga tuvo noticias de su actuación a través de la correspondencia que el legado mantenía con Juan de Casanate, fiel amigo del presidente del Consejo de Italia. Torres siempre se mostró agradecido por el apoyo que había recibido, que tuvo su continuación cuando retornó a Madrid en julio de 1570, así como en los años posteriores, una vez que, cumplida su misión, volvió a Roma (129).

(128).- A.DRAGONETTI DE TORRES, op. cit., pp, 155-156; L.SERRANO, Correspondencia diplomática..., III, p, 372: "Che dopò l'audenza havuta dal Re, era stato col Cardinale Spinosa et informatolo de particolari con S.M. pregandolo che se mostri nelle speditioni grato a tanto amore quanto semper in S.B. era visto verso di lui. Dice che non poteva trovar maggiore volunta di quella que se vedeva in lui verso il serviggio di S.S. et mostrava fino con le lagrime; et che Quiroga che non solea essere molto amico de detto Cardinale con tutto ciò affermava che in tutti i trattati di questa negotiatione si era portato sopramodo bene; et che a Quiroga si poteva dar molte fede come quello che era di singular bonta et fede et tale che ardiva de dire che patitia el martirio per serviggio di questa S.Sede. Dice che haveva trovato di questa buona volunta il Duca di FERIA, Ruy Gómez, il prior don Antonio et oltremodo particolarmente affettionati alla persona propia del Papa; ma soggionse sed modicum fermentum totam massam corrompit; et che bastava più uno a far male che tanti a far bene; et che de quì si vedevano nascere gli inconvenienti che tal hor se vedevano; et dice che il Papa gli deve dar fede in ciò, poiche egli haveva come naturale di Spagna toccato con mano la verita, perchè a lui non era stata nascosta cosa alcuna de gli humore di quella corte".

(129).- En carta que Luis de Torres remitió al Cardenal Alejandrino, el 24 de julio de 1570, refería: "Ma scuso il Cardenale con le sue molto faccende. (...)sia certa V.S.Illma che il Cardenale non avrebbe spedito questo negozio con tanta celerità, como ha fatto, quando non si fosse trovato obbligato per quello, che mi diesse, avendomi nella medesima conformità parlato con Monsignor Quiroga, testimonio tanto degno di fede" (A.DRAGONETTI DE TORRES, op. cit., pp, 200-201, 203); De igual manera, el 28 de agosto de 1573, el Cardenal Farnesio escribía a Felipe II reiterándole su deseo de que Luis de Torres fuese proveído como obispo de Monreale, apuntando que dicho ruego también había sido presentado a Gaspar de Quiroga. Los oficios del Cardenal obtuvieron su fruto (AGS, Estado, leg. 921, fol. 51).

5.4. La trayectoria ascendente de sus oficios eclesiásticos

5.4.1. Los problemas en torno al canonicato de Toledo

Desde que en 1559 Paulo IV estableciese mediante una bula la supresión de una canonjía de cada iglesia metropolitana catedral o colegial en favor del sustento de la Inquisición, los cabildos mostraron su disconformidad con esta concesión papal a través de una doble actuación. Por una parte, trataron de que dicho documento pontificio quedase sin aplicación, no aportando el producto correspondiente a la canonjía destinada al Santo Oficio o bien dilatando indefinidamente su toma de posesión (130). Por otra, dificultaron o negaron la percepción de los frutos a los oficiales inquisitoriales que ostentaban una prebenda, y que, por ejercer dicha función, no podían cumplir con la obligada residencia. Esta fue la situación que hubo de afrontar Gaspar de Quiroga cuando, en 1566, tras su nombramiento como miembro de la Suprema, requirió al cabildo toledano la percepción de los frutos pertenecientes a su canonicato (131).

Desde que retornó de Nápoles, sus ocupaciones en relación con los

(130).- El 26 de mayo de 1564 los capitulares toledanos ordenaron que se procurase que la canonjía suprimida por la Inquisición se concertase perpetuamente con el Santo Oficio, "q[ue]dando presto lo que se a de pagar por ella sobre vest[uari]os y refitor y quedando la calonjía a provisión del Cabº y se de una carta al Sr. don Pº Pacheco pa[ra] el Sr. Arçobpo de Sevilla pa[ra] que lo trate con su sª Illma y que se ponga en lo espiritual y temporal y ande ally hasta que se concluya" (ACT, Actas Capitulares. Tomo 12, fol. 100v).

(131).- El breve conocido como "De fructibus" fue concedido por primera vez en 1484 por el pontífice Inocencio VIII a requerimiento de los Reyes Católicos, y facultaba a los canónigos servidores del Santo Oficio a percibir sus frutos sin que, a causa de esta ocupación, hubiesen de cumplir con la residencia en sus iglesias. Este privilegio se fue renovando de forma quinquenal como consecuencia de las peticiones realizadas por los monarcas hispanos ante la Santa Sede. Sobre la oposición realizada por los cabildos y algunos prelados en torno a dicha cuestión, así como en relación a la supresión de la canonjía en favor de la Inquisición, véase, J.MARTINEZ MILLAN, "Las canonjías inquisitoriales: un problema de jurisdicción entre la Iglesia y la Monarquía (1480-1700)" *Hispania Sacra* 34 (1982), pp. 21-28; Idem, *La Hacienda de la Inquisición (1478-1700)*. Madrid 1984, pp. 99-123; J.P.DEDIEU, op. cit., p. 180.

asuntos referidos a la visita habían mantenido a Quiroga alejado de Toledo (132). Su ingreso en el Consejo de Inquisición, en noviembre de 1565, posibilitó que, el 2 de enero del año siguiente, el inquisidor Soto presentase al consistorio toledano una petición, realizada en nombre de Quiroga y del Inquisidor General, solicitando que fuesen satisfechos los frutos de su canonjía. La votación que tuvo lugar en el seno del cabildo estableció una división entre los capitulares proclives a satisfacer las demandas de Quiroga y aquellos que se opusieron a que percibiese su renta por no haber cumplido con la residencia, y, por tanto, con sus obligaciones en la catedral toledana. Así, mientras que los primeros adujeron que el Santo Oficio tenía privilegio apostólico para que los oficiales inquisitoriales canónigos ganasen sus beneficios, privilegio que la iglesia de Toledo no había respetado en este caso. Puesto que Quiroga había perdido durante muchos años su renta, y era el propio arzobispo de Sevilla quien avalaba su petición, se debía buscar la manera de llegar a un entendimiento antes de que el asunto degenerase en un pleito. También señalaban la necesidad de que se especificase y singularizase su situación concreta, dado que supondría un enorme perjuicio que, a través de esta actuación, se crease un precedente por el que los canónigos pudiesen ganar sus frutos en ausencia. Por contra, los opositores afirmaban que las Constituciones de la catedral toledana y del Concilio de Trento prohibían realizar esta práctica por el incumplimiento de la residencia, proponiendo que se siguiese por el camino legal la resolución de la justicia de las partes y se informase de esta cuestión al rey (133). El 21 de enero el

(132).- El 22 de febrero de 1565 el cabildo mandaba que se esperasen veinte días a Gaspar de Quiroga por cuanto había vacado en su semana una sacristía y una capellanía en el sepulcro por muerte del clérigo Pedro Ruiz. Se establecía que, pasado este plazo, se proveyese sobre ello, teniendo en cuenta las peticiones y recomendaciones que se habían realizado en torno a estas provisiones (ACT, Actas Capitulares. Tomo 12, fol. 156r).

(133).- Los canónigos que emitieron un voto favorable a los deseos de Quiroga fueron el capiscol Bernardino Zapata, Fernando Ortiz, el licenciado Valdivieso, el capellán mayor Rodrigo de Zapata, Fernando de Barriovero, Jerónimo de Sotomayor, Garci Díaz, Jerónimo Mexía de Gomara, Alonso de Rojas, Rodrigo de Mendoza, Juan Cebrián de Ibarra, Antonio Suárez, Ramiro de Guzmán, Miguel Díaz y Rodrigo Dávalos. Dentro del segundo grupo se hallaban Fernando de Bazán, el doctor Peralta, Francisco de Herrera, Fernando de Ribadeneyra y Rodrigo Tenorio (Ibid., fols. 226r-227v). Dos días después, el 4 de enero, el cabildo reunido comisionó a Rodrigo Dávalos y al licenciado Ibarra para que respondiesen a las cartas enviadas por el arzobispo de Sevilla y por Gaspar de Quiroga conforme a lo que se había tratado (Ibid., fol. 228r).

cabildo se tornó a reunir para tratar sobre la carta que habían recibido del monarca con orden de favorecer la intención de Quiroga. La decisión adoptada fue compeler a este para que se ocupase de los asuntos que el capítulo toledano tenía en la Corte, percibiendo por el desarrollo de esta función los frutos correspondientes al vestuario contemplado en su prebenda. El cabildo quedaba citado para el día siguiente, posponiendo hasta entonces el llevar a cabo esta actuación (134). En el transcurso de la reunión consiliar del día 22, sus integrantes reiteraron los votos expresados en la reunión anterior, fijando el disfrute de esta renta por el plazo de un solo año, y comisionando a Francisco Silicio y a Rodrigo de Zapata para que hiciesen la instrucción de los negocios de la iglesia toledana en los que Quiroga debía ocuparse (135). No obstante, el 28 de enero fue notificado al cabildo un mandato del Inquisidor General, por el que se ordenaba que acudiesen con la totalidad de las rentas de la canonjía a Quiroga, quedando emplazado el consistorio para celebrar una reunión dos días después. En la misma, las opiniones se volvieron a encontrar divididas, puesto que, mientras que una parte minoritaria mostraba su conformidad con acatar las órdenes del arzobispo de Sevilla, la mayoría del capítulo se inclinó por hacer prevalecer los derechos de la iglesia toledana, decidiendo, finalmente, enviar al licenciado Ibarra a Madrid con el fin de que tratase personalmente con Quiroga sobre la conveniencia de que aceptase los emolumentos correspondientes al vestuario, mostrándose dispuestos a hacer entrega de dichos frutos por un periodo de tiempo más amplio que el único año contemplado en un principio. De igual manera, el canónigo comisionado debía informarse de los argumentos que

(134).- Favorables a establecer esta obligación para Quiroga fueron Bernardino Zapata, el abad de Santa Leocadia Francisco Silicio, el doctor Peralta, Fernando Bazán, Esteban Varela, Fernando de Barriovero, Jerónimo Mexía de Gomara, Rodrigo de Zapata, Antonio Suárez, Fernando de Ribadeneyra, el licenciado Ibarra, Rodrigo Tenorio y Miguel Díaz, quedando fijada la cantidad a pagar en cuatrocientos mil maravedíes. Unicamente presentó su contradicción Fernando de Bazán, aunque se plegó a obedecer las órdenes reales (Ibid., fols. 234r-235r).

(135).- Algunos de los capitulares mostraron su conformidad con el pago de los frutos y con que Quiroga se ocupase en la Corte de los asuntos del cabildo, creyendo innecesario que hubiese de ser compelido (Ibid., fols 235r-236v).

Quiroga esgrimía en caso de que no se aviniese a alcanzar esta concertación (136). En consonancia con el designio de los capitulares, la misión encomendada al licenciado Ibarra se ejecutó con rapidez, pues el 3 de febrero se veía en el cabildo la carta que este había enviado desde Madrid, ordenándole que retornase a Toledo, y convocando una nueva sesión para tratar el modo de proceder tras el rechazo de Quiroga a aceptar la oferta del consistorio (137).

El temor a las posibles censuras que pudiesen recaer sobre el capítulo a causa de su desobediencia había sido puesto de manifiesto por algunos de sus miembros desde que se inició el tratamiento de este asunto, proponiéndose el interponer una apelación con antelación a que se produjese esta consecuencia como respuesta a su actitud. Ante la negativa de Quiroga de avenirse al concierto, la posibilidad de que la formulación de las mismas se produjese se incrementó, por lo que, tanto el capiscol Bernardino de Zapata como el abad de Santa Leocadia Francisco Silicio y Miguel Díaz, todos ellos canónigos, quisieron expresar explícitamente la conveniencia de obedecer la orden del Inquisidor General y lo establecido por los breves apostólicos en relación al pago de los frutos en ausencia, por considerar tremendamente perjudicial para la iglesia toledana el mantenimiento de otra postura, resaltando que Quiroga contaba con el apoyo de personas muy influyentes (138). El 5 de febrero, el cabildo, previniendo las molestias o daños que pudiesen sufrir los miembros de la iglesia toledana al reiterar su inconformidad con acceder a la petición realizada por Quiroga, estableció que, si esto sucedía, con el subsiguiente perjuicio para alguno de sus componentes por defender su iglesia en lo concerniente a este asunto, y fuesen excomulgados, presos o llamados a Madrid, serían tenidos por presentes y residentes durante todo el tiempo que, por cualquiera de estas causas, estuviesen apartados de sus obligaciones, sin que por ello se resintiesen los frutos

(136).- Ibid., fols. 236v-238r. Por otra parte, esta cuestión fue tratada igualmente el 1 de febrero en el cabildo espiritual (Ibid., tomo 13, fol. 51v).

(137).- Ibid., tomo 12, fol. 238v.

(138).- Ibid., fol. 239r.

de sus beneficios. De igual manera, también obtendrían esta ventaja aquellos que debiesen acudir a Roma para el seguimiento de este tema, haciéndose cargo el consistorio de los pleitos que se pudiesen iniciar contra cada uno de los integrantes de la iglesia de Toledo que tomase parte en esta cuestión, sufragando, asimismo, el coste de sus operaciones, cubriendo con las rentas de la mesa capitular el menoscabo que recibiesen sus bienes por este motivo, y subsanado todo tipo de quebrantos que se pudiesen producir. Realizada esta declaración protectora, los asistentes pasaron a emitir sus votos, adoptando la resolución mayoritaria de presentar una apelación al mandato efectuado por el Inquisidor General (139). La reclamación fue incluida en el voto de Rodrigo Dávalos y presentada ante el vicario de Toledo, que actuaba como juez ordinario de todo el arzobispado, con anterioridad a ser interpuesta ante el arzobispo de Sevilla. Las razones alegadas en este recurso eran las mismas que habían expuesto en sus opiniones los capitulares contrarios a acudir con las rentas de su canonicato a Quiroga. Se señalaba como el deán y el cabildo se sentían agraviados por la orden que habían recibido de Fernando de Valdés y, si bien habían admitido ésta con el acatamiento y temor a las penas que el propio mandato contenía en caso de desobediencia, se negaban a cumplirlo por las causas que generalmente se aducían en casos semejantes, a las que había que añadir que Gaspar de Quiroga había jurado no pedir los frutos de su canojía en ausencia, ni había notificado al consistorio ninguna bula o privilegio por el que estuviesen obligados a realizar el susodicho pago. Pasaban, posteriormente, a alegar los inconvenientes que se desprendían de acudir con sus frutos a los canónigos que no residían en su iglesia, por contravenir sus Constituciones, estatutos y privilegios, así como lo

(139).- Mientras que Bernardino Zapata, Pedro de Peralta, el licenciado Valdivieso, Rodrigo Zapata, Rodrigo de Mendoza y Sebastián Ribera siguieron mostrando su conformidad con que se realizase el pago a Quiroga, y, sobre todo, el temor a las censuras que iba a realizar el arzobispo de Sevilla, el resto de los capitulares presentes, entre los que se encontraban Rodrigo Dávalos, Fernando Bazán, Esteban de Varela, Fernando de Ribadeneyra, Rodrigo Tenorio, Ramiro de Luzarán y Pedro González de Mendoza, expresaron su convicción de que era necesario apelar la orden recibida del Inquisidor General en virtud de lo contenido en los privilegios y Constituciones de la iglesia toledana, y en defensa de su libertad (Ibid., fols. 240v-242r).

establecido por el Concilio tridentino y por los propios monarcas hispanos (140).

El 7 de febrero, el cabildo nombraba a Pedro González de Mendoza y al licenciado Pobladora para que acudiesen a la Corte a tratar sobre dicho asunto conforme a la instrucción confeccionada por el consistorio, aunque, finalmente, se trasladó únicamente el primero de ellos, portando cartas dirigidas al Inquisidor General y al rey (141). Pocos días después, el comisionado recibía nuevas directrices. Puesto que Felipe II había ordenado que esta cuestión se remitiese al criterio del licenciado Menchaca, miembro del Consejo Real, debía volver a entrevistarse con el monarca para solicitar que, dado que Fernando de Valdés había procedido con nuevos mandatos, que habían sido notificados al consistorio, mientras que Menchaca no emitiese un juicio sobre la razón de las partes en este negocio, pidiese al Inquisidor General que no continuase con esta actuación. Igualmente, el cabildo le recomendaba que, tras informarse a través de Menchaca, tomase dos letrados para que le asesorasen, poniendo en conocimiento de los mismos los tres puntos esenciales en los que el capítulo basaba su justicia (142).

(140).- Por otra parte, el temor a las represalias que se podrían adoptar seguía haciendo efecto entre los capitulares. El 6 de febrero, el doctor Herrera también quiso expresar explícitamente su acatamiento a la orden recibida (Ibid., fols. 242r-243v).

(141).- La demarcación de diversos miembros del capítulo de la postura mantenida por el mismo se seguía produciendo, siendo en esta ocasión Antonio Suárez de Toledo, Esteban Varela y el licenciado Ibarra los que expresaron su deseo de obedecer el mandato recibido (Ibid., fols. 244r-245v).

(142).- El primero de ellos se refería a que la bula que tenía el Santo Oficio no contenía las derogaciones suficientes en relación a la que poseía el cabildo para no dar frutos en ausencia. El segundo consistía en que, si este primer punto no fuese cierto, no quedaba anulado el aspecto de que la cuantía a pagar fuese superior a sesenta florines de oro de Aragón, de los que además habría que realizar reducciones por varios conceptos. El tercero contemplaba que el Inquisidor General, aunque era juez en las causas propias del Santo Oficio, en este caso estaba impedido, puesto que la bula otorgada a la Inquisición no le concedía esta función por ser una de las partes interesadas. Al no existir una subdelegación, toda la cuestión debía remitirse al juicio emitido por Menchaca, en el que mostraban una completa confianza en que sería favorable a sus pretensiones. Este debía ser notificado a Fernando de Valdés por los letrados que asesoraban al canónigo comisionado (Ibid., fols. 246r-v). El 1 de marzo, esta cuestión también fue tratada por el cabildo espiritual (Ibid., tomo 13, fol. 52r).

No obstante, la evolución de estas gestiones no fueron muy favorecedoras de las pretensiones del consistorio. El 6 de marzo, sus miembros decidieron nombrar a Fernando de Ribadeneyra y a Pedro Manrique para que acudiesen a la Corte para ocuparse del seguimiento de este asunto, reuniéndose tres días después para adoptar una decisión en torno a la declaración presentada por Fernando de Valdés. Las dificultades que empezaba a entrañar este tema llevaron a que se resolviese, por la mayor parte de los votos, obedecer la orden dada por el Inquisidor General, acordándose acudir a Gaspar de Quiroga con todos los frutos pertenecientes a su canonjía. Por su parte, también Quiroga había iniciado un acercamiento al cabildo para lograr ver satisfecha su demanda. Así pues, el consistorio dio poder al solicitador en la Corte, Pedro Sánchez de la Torre, para que pidiese la absolución de la ejecución que estaba ordenada por parte del arzobispo de Sevilla (143).

Sin embargo, si bien el contencioso parecía finalmente resuelto, la actuación que el cabildo toledano había desarrollado en Roma provocó que, por parte del auditor de la Cámara apostólica, se remitiese un mandato de citación a la parte contraria, de inhibición para los jueces, y compulsoriales. El capítulo, reunido el 31 de mayo y contando con este apoyo, decidió continuar con las diligencias necesarias para hacer prevalecer su postura, acordando que el solicitador tomase un letrado para este efecto (144). El 26 de junio se

(143).- Especialmente relevantes fueron los pareceres expresados por dos de los capitulares que se mostraron dispuestos a efectuar el pago. El doctor Peralta significó que Quiroga se contentaba con que se le diesen las rentas correspondientes al vestuario y sesenta mil maravedíes, mostrándose conforme, según había comunicado al cabildo, con que se le encomendasen los negocios que la iglesia toledana tenía en la Corte, afirmando Peralta la necesidad de que fuese compelido a ello. De igual manera, Pedro Manrique mantuvo que era conveniente llegar a un acuerdo con Quiroga que se tradujese en la cobranza de parte o de todos los frutos de su canonicato, pero que para ello debía renunciar a esgrimir los privilegios jurisdiccionales de la Inquisición y ocuparse de los asuntos de la iglesia en Madrid (Ibid., tomo 12, fols. 253v-254v). El 5 de abril, el capítulo ordenó a los contadores que se ocupasen de la petición presentada por Quiroga, realizando el mandato de libranza el día 8, que alcanzó una cuantía de quince mil ochocientos veintiseis maravedíes, por lo que le pertenecía de los frutos de la canonjía hasta diciembre de 1565 (Ibid., fol. 263r-v). Sobre el tratamiento en el cabildo espiritual de dicho tema, véase, Ibid., tomo 13, fols. 53v y 54v.

(144).- Algunos de los capitulares, como los licenciados Pobladora e Ibarra y Miguel Díaz, mostraron su disconformidad con que se procediese al seguimiento de esta causa, advirtiendo que se estaba poniendo en entredicho tanto a la Inquisición como al Consejo Real. En este sentido,

notificaba al consistorio una provisión real por la que se ordenaba al capítulo que los documentos apostólicos llegados de Roma se enviasen al Consejo Real. Junto a estos papeles, el cabildo mandó a la Corte al capellán del Coro Ribera para que, entre otros temas, durante quince días siguiese el devenir de este asunto (145). El presidente de esta institución, Diego de Espinosa, escribió al monarca como los miembros de la Suprema le habían informado del comportamiento del cabildo toledano desde el comienzo del litigio que les enfrentaba, representando al rey que, ante las graves consecuencias que se podrían deducir del estado del negocio, el Consejo Real había proveído un alguacil para que prendiese al notario que autorizó la presentación de la apelación contra Fernando de Valdés y Gaspar de Quiroga. Dicho alguacil portaba también una provisión para que el consistorio le entregase los documentos en los que basaba su justicia. De igual manera, se solicitaba al corregidor de Toledo que realizase una información sobre lo sucedido. Si bien Felipe II mostraba en su respuesta la conformidad con las medidas tomadas por Espinosa, expresaba su deseo de que esta cuestión no constituyese un nuevo motivo de tensión con el pontífice, representando la conveniencia de advertir a Luis de Requesens para que ejecutase los oficios apropiados, así como para prevenir que el papa recibiese informaciones falsas (146). El tratamiento que el Consejo Real dedicó a este conflicto se prolongó por espacio de varios meses. El 30 de septiembre requirió, a través de una provisión real, nueva documentación al cabildo toledano sobre este caso (147). Por su parte, el consistorio se mantuvo firme en sus consideraciones, sumando a las razones aludidas hasta entonces el hecho de que ni el propio monarca ni el Consejo Real les habían ordenado, en ningún momento, que renunciasen al seguimiento de su

resulta bastante significativo el importante número de miembros del cabildo que se negaron a emitir su voto (Ibid., tomo 12, fols. 274r-275v).

(145).- Ibid., fols. 279r y 281r.

(146).- IVDJ, envío 21 (caja 30), nº 39; AHN, Inq., libro 249, fols. 212v-213r.

(147).- Mientras tanto, el 29 de agosto llegaban a la iglesia de Toledo nuevas actuaciones ejecutadas por el Santo Oficio referidas al pago a Quiroga de los frutos de su canonicato, siendo contemplado en diversas ocasiones este asunto, durante estos meses en el cabildo espiritual (ACT, Actas Capitulares. Tomo 12, fols. 296r; Ibid., tomo 13, fols. 55r-60r).

justicia, sino que solamente se había procedido contra aquellos que pusieron en ejecución la citación e inhibición llegadas de Roma por el modo como realizaron esta actuación. Aducía también el cabildo que desde entonces no habían vuelto a llevar a la práctica ninguna iniciativa, aun cuando el secretario del tribunal inquisitorial de Toledo había presentado una revocación del auditor de la Cámara apostólica, que era el juez que había discernido las dichas citación e inhibición, quedando éstas, y las acciones que se hubiesen desprendido de ellas, anuladas. En este sentido, se comprometía el capítulo a que, si desde Roma se enviasen nuevos despachos, los pondrían en conocimiento del rey antes de proceder a su aplicación (148).

Desconocemos cómo se continuó el desarrollo de este proceso, aunque sí podemos señalar algunas de sus consecuencias. Mientras que el mayor beneficiado del mismo fue Gaspar de Quiroga, al conseguir ver satisfechas sus demandas en relación al cobro de todos los frutos pertenecientes a su canonjía, el resto de los implicados en este caso vieron como se convertían en realidad algunos de sus temores. Así, si bien Felipe II había apoyado las demandas presentadas al cabildo toledano para que hiciesen efectivo el pago, había señalado su interés en que esta cuestión no conllevara un agravamiento de sus difíciles relaciones con la Santa Sede. Sin embargo, este fue uno de los puntos que se incluyó en el memorial que se presentó ante Pío V en 1569, acusándole de haber subyugado los privilegios de la Inquisición hispana. Se reprochaba al pontífice que, sin tener consideración a la calidad de Quiroga como consejero de la Suprema, el auditor de la Cámara apostólica realizase un monitorio en su contra, que fijó en la iglesia de San Justo de Madrid, dando lugar a que se produjese una algarada general de los consistorios de las catedrales contra los inquisidores que tenían en ellas beneficios o prebendas, pensando que contaban con el apoyo de Roma para actuar de esta manera en detrimento del Santo Oficio (149). Por otra parte, el cabildo toledano había reiterado su deseo de que, si finalmente se hubiese de

(148).- Ibid., tomo 12, fols. 305r-307r.

(149).- L.SERRANO, Correspondencia diplomática..., III, p. 174.

acudir con sus rentas a Quiroga, este caso no conllevarse en ningún modo la creación de un precedente. No obstante, el efecto obtenido fue justamente el contrario. De esta forma, en enero de 1573, el consultor del tribunal inquisitorial de Valladolid, el licenciado Juan de Ibarra, demandaba al cabildo de Toledo los frutos de su canonjía, en la que no residía como consecuencia de su ocupación en el Santo Oficio. El voto emitido por el capitular Francisco Dávila remitía directamente a lo acontecido con Gaspar de Quiroga, recomendando que se atendiese esta petición sin que se tornase a iniciar el camino del pleito, remarcando que a Quiroga hubo de acudirle con este pago durante todo el tiempo que se ocupó en la Suprema (150).

Así pues, después de un largo litigio, Quiroga logró ver colmada su pretensión, ostentando el canonicato toledano hasta que fue promovido al obispado de Cuenca. Elevado a la dignidad episcopal, hizo resignación del mismo en manos de Pío V, quien realizó nombramiento para su ocupación en Pedro del Hoyo, capellán de los Reyes Nuevos (151).

El favorecimiento que Gaspar de Quiroga recibió del patrón cortesano Diego de Espinosa en su inclusión e intervención en el aparato administrativo de la Monarquía tuvo un paralelismo en los asuntos eclesiásticos. La influencia de Espinosa suavizó los problemas que Quiroga tenía en relación con su canonicato toledano a través de la concesión de una pensión de ochocientos ducados que el rey le otorgó sobre el obispado de Canarias, el 17 de mayo de 1567, beneficio del que gozó hasta que pasó a ostentar la prelación conquesa (152). De igual manera, al producirse, en 1568, el fallecimiento de Fernando de Valdés, Espinosa proponía a Felipe II diversos personajes que consideraba dignos de ocupar el

(150).- ACT, Actas Capitulares. Tomo 15, fol. 338v.

(151).- Las bulas y letras apostólicas fueron notificadas al cabildo el 11 de marzo de 1572 (Ibid., fol. 291r).

(152).- P.SALAZAR Y MENDOZA, op. cit., p. 292; BSCV, Ms. n° 16, fol. 145v; M.BOYD confunde los datos cuando afirma que, en 1565, Felipe II nominó y el pontífice confirmó a Quiroga como obispo de Canarias (op. cit., p. 13), basando esta información en la proporcionada por M.ALCOCER MARTINEZ, op. cit., III, p. 407.

arzobispado sevillano. Si bien se refería como posible candidato al obispo de Zamora, Juan Manuel, por la tensa situación que se estaba viviendo en dicha diócesis, realizaba una calurosa recomendación de tres de sus protegidos: Francisco de Soto Salazar, Juan de Ovando y Gaspar de Quiroga. Este último afirmaba que deseaba recogerse, no siendo que el monarca le otorgase mayor prebenda que la canongía que tenía en Toledo (153). La significación alcanzada por Quiroga en la Corte a través de su colaboración con Espinosa llevó a que, en octubre de dicho año, se encontrase incluido en la reducida nómina de hispanos que fue presentada ante la Santa Sede como candidatos a obtener el capelo cardenalicio (154).

Por otra parte, Gaspar de Quiroga, como hemos señalado, continuó manteniendo excelentes relaciones con distintos miembros de la Curia romana. A la buena y fluida comunicación mantenida con el nuncio destacado en la Corte filipina había que unir la correspondencia que mantenía con el Cardenal Antonio Caraffa, sobrino de Paulo IV. En carta fechada el 17 de marzo de 1569, Quiroga se ponía al servicio del purpurado, recordando que él mismo era hechura del fallecido pontífice (155). De igual manera, el 21 de mayo comunicaba a Caraffa su voluntad de favorecerle ante Felipe II. Sin embargo, consciente de sus limitaciones, le proponía que se pudiese en contacto con Diego de Espinosa, pues

(153).- IVDJ, envío 21 (caja 30), nº 50; El patrocinio ejercido por Espinosa era correspondido con el agradecimiento de Quiroga, quien se apresuró a felicitar a éste por su provisión en el obispado de Sigüenza y por la concesión del capelo cardenalicio, interesándose, incluso, por los detalles del ceremonial. En este sentido, véase la carta, fechada el 23 de abril de 1568, que escribió Espinosa a Quiroga en contestación de la suya en, *Ibid.*, envío 92 (caja 132), s.f.

(154).- L.SERRANO, *Correspondencia diplomática...*, II, p. 491; P.RODRIGUEZ Y J.RODRIGUEZ, *Don Francés de Alava y Beaumonte. Correspondencia inédita de Felipe II con su embajador en París*. San Sebastián 1991, p. 107.

(155).- BNM, Ms. 1029, fol. 131r; También le comunicaba que solía leer el Comentario de Teodoreto sobre el Salmo I que Antonio Caraffa le había proporcionado (J.I.TELLECHEA IDIGORAS, "Cartas españolas y portuguesas dirigidas a Antonio Caraffa, Pío IV y Pío V" *Anthologica Annua* 9 (1961), p. 483, nº 30).

su influencia era "gota echada en el mar" en relación con el poder que éste tenía (156). La buena imagen de Quiroga en Roma no sólo estaba referida a los Cardenales sino también al propio pontífice. Prueba de ello fue que, en enero de dicho año, Pío V accedió a conceder a Quiroga un oratorio privado, en atención a sus muchos méritos y a los servicios prestados a la Santa Sede (157), siendo especialmente bien acogida su promoción al obispado de Cuenca, en octubre de 1571, por considerar al nuevo prelado un ferviente defensor de los intereses del papado (158).

5.4.2. Gaspar de Quiroga obispo de Cuenca (1571-1577)

La designación de Gaspar de Quiroga para ocupar la sede conquense vino determinada por el favorecimiento recibido por su patrón cortesano Diego de Espinosa, quien medió ante Felipe II para que consiguiese la obtención de un mayor beneficio eclesiástico, así como porque su perfil biográfico y experiencia al servicio del proceso de confesionalización de la Monarquía le significaban como un obispo capaz y eficaz para acometer la aplicación de los criterios reformísticos en su diócesis. Esta labor había sido iniciada por su predecesor en dicha dignidad, el confesor real fray Bernardo de Fresneda, quien ostentó la

(156).- También solicitaba su opinión sobre una súplica que quería realizar al pontífice. Quiroga quería vincular un préstamo que ostentaba en la diócesis de Plasencia, de doscientos ducados de cuantía, a un hospital de su población natal, Madrigal de las Altas Torres. Refería al Cardenal como el pueblo se había deteriorado de forma grave económicamente en los últimos años. Pretendía Quiroga que el Papa hiciese dicha concesión, además de la libre disposición de sus frutos mientras viviese (Ibid., pp, 483-484, n° 31).

(157).- L.SERRANO, Correspondencia diplomática..., III, pp, 75-76.

(158).- Ibid., IV, pp, 482-483; El 6 de febrero de 1572, Quiroga escribía una carta de agradecimiento al Cardenal Caraffa en relación con este nombramiento (J.I.TELLECHEA IDIGORAS, op. cit., p, 485). En este sentido, nos interesa resaltar como Luis de Requesens fue una de las primeras personas que transmitieron a Quiroga el parabién por su promoción, comunicándole, a su vez, el nuevo destino que el monarca le había señalado como virrey de Milán (J.M.MARCH, La batalla de Lepanto y Don Luis de Requesens Lugarteniente General de la Mar. Madrid 1944, p, 67).

prelacia de Cuenca entre 1562 y 1571 (159).

En 1565, Felipe II había exhortado a los obispos en sus reinos para que conviniesen la celebración de concilios provinciales, a través de los que se pudiesen hacer efectivos los decretos emanados del Concilio de Trento. El llamamiento real fue atendido, celebrándose en dicho año reuniones conciliares simultáneas en las iglesias metropolitanas, correspondiendo a Fresneda, siendo Cuenca sufragánea de la Sede Primada, acudir al Concilio provincial que se celebró en Toledo entre julio de 1565 y marzo de 1566. A los problemas derivados de la enorme extensión de la archidiócesis toledana, y, como consecuencia, a la diversidad de problemas que contemplaba, hubo de sumar otras dificultades, provenientes de la permanencia durante largos años de su arzobispo, Bartolomé de Carranza, en las cárceles inquisitoriales, por lo que hubo de ser el obispo de Córdoba, como sufragáneo más antiguo de la demarcación, quien asumiese la presidencia (160). Por otra parte, el rey, quien había demostrado un enorme interés en que se celebrasen estos sínodos, pretendía que la actuación desarrollada por los mismos no escapase a su control. Para ello, designó a un representante regio que acudiese a las sesiones, siendo elegido Francisco de Toledo para cumplir esta función en el Concilio provincial toledano, mientras que, en la Corte, Diego de Espinosa y el doctor Martín de Velasco, ayudados por el secretario Gonzalo Pérez, procedían a la coordinación de todos los asuntos derivados de esta materia (161). La finalidad última de esta

(159).- J.M. POU Y MARTI, "Fr. Bernardo de Fresneda, confesor de Felipe II, obispo de Cuenca y Córdoba y arzobispo de Zaragoza" Archivo Ibero-americano 33 (1930). Apéndice I, pp, 592-593; C.SANZ Y DIAZ, Breve historia de la diócesis de Cuenca. Cuenca 1974, p, 31; G.VAN GULIK y C.EUBEL, Hierarchia Catholica medii et recentioris Aevi. Münster 1923, III, p, 174; H.PIZARRO LLORENTE, op. cit., pp, 178-181.

(160).- Sobre el papel dinamizador ejercido por el monarca en la celebración de dichos concilios, véase, J.L.SANTOS DIAZ, op. cit., pp, 7-26; A.MARIN OCETE, "El Concilio provincial de Granada", pp, 43ss; B.LLORCA, "La aceptación en España de los decretos del Concilio de Trento", pp, 341-360; Sobre la reunión celebrada en Toledo, véase, A.FERNANDEZ COLLADO, "El Concilio provincial toledano de 1565" Anthologica Annua 42 (1995), pp, 425-613.

(161).- En agosto de 1565, era convocada una junta en Segovia cuya finalidad era la resolución de los problemas que estaban planteando la celebración de los distintos concilios. Junto a Gonzalo Pérez y el doctor Velasco, formaron parte de la misma el duque de Alba, Juan Manrique y el

estructuración venía determinada, como hemos señalado, por la necesidad de proceder a la matización de los decretos tridentinos para que se hallasen en consonancia con los intereses políticos de la Monarquía, excluyendo además del entendimiento de diversas cuestiones a los concilios provinciales, pasando a ser el Consejo Real donde se valorase si lo dispuesto en esta reglamentación entraba en conflicto con el ordenamiento legal del Reino y los privilegios otorgados a la Corona, pilares primordiales que había que salvaguardar. Esta forma de actuación no sólo provocó las quejas de la Santa Sede, sino que intranquilizó seriamente a los cabildos catedralicios. La aplicación de los criterios reformísticos emanados de Trento revitalizó la oposición de los consistorios contra aquellas disposiciones que atentaban contra sus prerrogativas y exenciones. Esta reglamentación, reforzada por los acuerdos adoptados en los Concilios provinciales, provocó enfrentamientos de diversa índole entre los capítulos de las iglesias y los prelados, quienes, tras acabar las sesiones conciliares, acudieron a sus diócesis para proceder a la consecución de las decisiones adoptadas. Sin embargo, tanto desde Roma como por parte del Consejo Real, fue respaldada la actuación de los obispos en detrimento de los cabildos. El interés que la Santa Sede y la Monarquía tenían en que esta ordenación se llevase a efecto forzó a los litigantes consistorios a buscar el acuerdo (162).

doctor Gallo (A.MARIN OCETE, op. cit., pp, 122-123; J.L.SANTOS DIEZ, op. cit., p, 19; R.LEVILLIER, op. cit., pp, 73-75; R.GARCIA VILLOSLADA, op. cit., III-2º, pp, 28-31; J.MARTINEZ MILLAN, "En busca de la ortodoxia...", pp, 207-209). Este modo de proceder disgustaba enormemente al papa, y dificultaba seriamente la labor del embajador Luis de Requesens, quien no dudaba en responsabilizar de este procedimiento al doctor Velasco (P.LETURIA, "Felipe II y el pontificado...", p, 64). Sobre el relevante papel desempeñado por Martín de Velasco en la celebración de los Concilios provinciales, véase, A.GONZALEZ PALENCIA, Gonzalo Pérez..., pp, 250-293.

(162).- Algunos precedentes de la reacción de los consistorios se encuentran en, F.CERECEDA, "El litigio de los cabildos" y su repercusión en sus relaciones con Roma " Razón y Fe 130 (1944), pp, 215-234; T.MARIN, "Primeras repercusiones tridentinas. El litigio de los cabildos españoles. Su proceso en la diócesis de Calahorra" Hispania Sacra 1 (1948), pp, 325-349; J.L.SANTOS DIEZ, op. cit., pp, 59-54; B.LLORCA, "La aceptación...", pp, 462-463; F.GARCIA GUERRERO, El decreto sobre la residencia de los obispos en la tercera asamblea del Concilio tridentino. Cádiz 1943, pp, 15-16; J.BADA, Situación religiosa de Barcelona en el siglo XVI. Barcelona 1970, pp, 208-209; J.GOÑI GAZTAMBIDE, "Los cabildos españoles y la confirmación del Concilio de Trento" Annuaire Historiae Conciliorum 7 (1975), pp, 425-458; J.GIL SANJUAN, Los cabildos catedrales de Castilla ante la reforma tridentina. Tesis doctoral inédita. UCM 1973, passim.

Estas dificultades hubo de afrontar fray Bernardo de Fresneda en su ocupación como obispo de Cuenca. El confesor real no había residido en su obispado a causa de sus muchas ocupaciones en la Corte y en virtud del mantenimiento de su cercanía a la figura regia, siendo el provisor general del mismo, Hugo de Velasco, quien se ocupó, bajo la supervisión de Fresneda, de realizar las gestiones pertinentes (163). La orden dada por el obispo a su provisor para que se llevasen a efecto las reformas contempladas en Trento motivó la respuesta del cabildo. Como el propio confesor informaba a Felipe II, el 12 de octubre de 1564, catorce canónigos capitulares habían acordado el envío a Roma de nueve o diez mil ducados en un intento de retener y poder acumular la ostentación de varias prebendas y beneficios incompatibles entre sí, según establecían los decretos conciliares. Fresneda proponía al rey, como fórmula para poner orden antes de que este comportamiento fuese más generalizado, instar a los obispos a celebrar sínodos diócesanos en sus respectivas iglesias, sin que esta práctica se viese retrasada por las convocatorias de los concilios provinciales. No obstante, el prelado conquense llevó a cabo esta iniciativa en 1566, tras la finalización del Concilio provincial de Toledo. Fruto de esta congregación diocesana fueron las Constituciones publicadas en 1571 (164).

En dicho año, fray Bernardo de Fresneda era promovido al obispado de Córdoba y, perdida la gracia real, alejado de la Corte y de su cargo de confesor

(163).- Respecto a la actividad que desarrolló en los primeros años tras su nombramiento, véanse los traslados autorizados por Fresneda correspondientes a 1562-1563, conservados en BNM, Ms. 621-622; Tampoco residía en el obispado el deán, Constantino del Castillo, a quien ya Felipe II, en agosto de 1562, había reclamado que abandonase la Corte romana en un plazo de cuatro meses, y retornase para atender a su iglesia. En abril de 1563, el monarca insistía en su mandato enviando a su embajador en Roma una sobrecédula con este fin. También escribió el obispo de Cuenca a Requesens en apoyo de lo establecido por el rey, obligándole así a cumplir con la residencia y deberes para con su iglesia (Pío V y Felipe II. Primeros diez meses de la embajada de D. Luis de Requesens en Roma, 1562-1563. Madrid 1891. Colección de Libros Raros y Curiosos, XX, pp. 6-8).

(164).- Dichas Constituciones fueron publicadas en Madrid por el impresor Alonso Gómez (A.PALAU Y DULCET, Manual del librero hispanoamericano. Barcelona 1951, IV, p. 48; C.PEREZ PASTOR, Bibliografía madrileña o descripción de las obras impresas en Madrid. Madrid 1891, I, p. 23 n° 47). Sobre la importancia de las mismas en cuanto a la regulación de ciertos cargos en el obispado, véase, F.B.LUJAN LOPEZ, Iglesia parroquial de San Bartolomé. Tarazona de la Mancha. Albacete 1987, p. 31; S.T.NALLE, God in the Mancha. Religious Reform and the people of Cuenca, 1500-1650. Johns Hopkins University 1992, p. 52.

regio. Su sustituto en la prelación de Cuenca fue Gaspar de Quiroga. El rey hizo su presentación el 11 de octubre de 1571, despachándose la bula correspondiente por Pío V el día 17 de diciembre. Tomó posesión el 19 de enero de 1572, siendo consagrado el 15 de abril en la iglesia de Santa María de Madrid por Diego de Espinosa, actuando como asistentes Francisco de Soto Salazar, obispo de Segorbe, y Juan Beltrán de Guevara, prelado de Nazara, en Sicilia. En Cuenca, el doctor Diego Gómez de la Madrid, inquisidor del tribunal con sede en dicha ciudad, realizó la asunción del cargo en su nombre (165).

Las obligaciones de Quiroga en la Corte le retuvieron hasta el mes de junio, en que emprendió viaje a Cuenca, haciendo su entrada en dicha ciudad el día 16. Sin embargo, la estancia del obispo en su diócesis se prolongó solamente durante unos meses, puesto que, en mayo de 1573, se encontraba nuevamente en la Corte para recibir el nombramiento de Inquisidor General. Durante el plazo que residió en su obispado, Quiroga inició la ejecución de la labor para la que había sido designado (166). Siguiendo el camino iniciado por la actuación de su predecesor y el énfasis que el Concilio tridentino había puesto en la necesidad de realizar visitas en la diócesis, que pusiesen de manifiesto y permitiesen castigar las conductas erróneas o delictivas, cuyo entendimiento competía a la Curia episcopal, estimuló eficientemente la activación de los procesos. De igual manera, y aunque durante los varios años que duró su prelación

(165).- Posteriormente, el propio doctor Diego Gómez ostentó la dignidad de obispo en la diócesis de Badajoz. P.SALAZAR Y MENDOZA, op. cit. p. 293; M.LOPEZ, op. cit. I, p. 242; BN, Ms. 13027, fol. 111r; T.MUÑOZ SOLIVA, op. cit., p. 208; G.GONZALEZ DAVILA, Teatro eclesiástico..., I, pp. 488-489; M.BOYD, op. cit., p. 16; BSCV, Ms. nº 16, fol. 146r; CI.SANZ Y DIAZ, op. cit. p. 31; P.L.LLORENS RAGA, Episcopologio de la diócesis de Segorbe-Castellón. Madrid 1973, I, p. 280; J.TORRES MENA, Noticias conquenses. Cuenca 1985 (Edición facsímil), pp. 291-292. Mientras que Quiroga conservó los ochocientos ducados de pensión sobre el obispado de Canarias, cuando accedió a la prelación conquense, repartió sus otros beneficios eclesiásticos, traídos de Roma, entre sus sirvientes y sobrinos (G.VAN GULIK y C.EUBEL, op. cit., III, p. 174; F.DE PISA, op. cit., p. 268). El 26 de julio de 1572, Gabriel de Zayas tomó posesión de los préstamos de las villas de Posadas, Belmonte, Palma y Trasierra con un mandamiento de fray Bernardo de Fresneda, por la resignación realizada por Gaspar de Quiroga (AGS, PR, 25-35).

(166).- S.T.NALLE, Religion and reform in a spanish diocese: Cuenca, 1545-1650. Johns Hopkins University 1983, p. 79: "Despite Fresneda's many responsibilities at Court, the Franciscan found time to give Cuenca considerable attention in his attempts to bring Cuenca would not leave as impressive record in the diocese, but Gaspar de Quiroga is well-remembered as a model bishop of the Spanish Catholic Reformation".

no acometió una inspección general de su circunscripción, entre 1572 y 1573, ordenó la realización de visitas a tres conventos femeninos, y puso un especial cuidado en que se realizasen trabajos de catequización en las distintas parroquias (167). Quiroga introdujo en el obispado de Cuenca un programa reformístico en el que se conjugaron varios elementos. Junto a los preceptos de reforma eclesiástica acordados en el Concilio provincial de Toledo para toda la archidiócesis, destacando su preocupación por promocionar la extensión del conocimiento de la doctrina católica y la reformación de las costumbres, el prelado dedicó gran parte de sus esfuerzos y rentas a prestar ayuda a los más desfavorecidos, lo que le hizo ganar una fama de limosnero que le acompañó desde entonces hasta el final de su vida. Para lograr la consecución de estos objetivos se apoyó en dos órdenes religiosas, la Compañía de Jesús y la Orden de San Agustín, a las que había estado vinculado desde su juventud y cuya religiosidad compartía (168). Esto, sin duda, marcaba las diferencias entre Quiroga y su antecesor en el cargo fray Bernardo de Fresneda. La rigidez e intransigencia con la que el confesor real había acometido la labor de introducir

(167).- Ibid., pp, 80-82, 227; Idem, God in la Mancha..., pp, 53-54; Junto a estos arduos asuntos, Quiroga también encontró tiempo para ocuparse en el patronazgo de las artes. Así, la custodia de la catedral de Cuenca, según reza en la inscripción de su zócalo, fue iniciada en 1528, siendo finalizada su composición en 1573, bajo la prelación de Quiroga. De igual manera, mandó realizar una custodia para la iglesia de San Juan en la villa de Alarcón, a costa de las fábricas de las iglesias de esta población. Sobre dicha actividad, véase, A.PONZ, Viaje por España. Madrid 1947, pp, 253-255, 294. Una revisión de estas noticias en, D.PEREZ RAMIREZ, La custodia de la catedral de Cuenca. Cuenca 1985.

(168).- M.BOYD, op. cit., pp, 20-22; T.MUÑOZ SOLIVA, op. cit., p, 209: "Este célebre prelado, tomando como modelo a su glorioso predecesor S.Julián, reformó completamente este obispado. Templado en la comida y no bebiendo vino, siempre que se sentaba a la mesa le leían un capítulo de las Sagradas Escrituras. Recto siempre, fue severo con los inquietos y deshonestos, y si los veía incorregibles al castigo, con su mansedumbre paternal y sabios consejos los atraía a la enmienda de sus extravíos. Con los pobres fue sumamente generoso: hubo día que los distribuyó dos mil ducados. En las tres pascuas mandaba a los párrocos le enviasen relación de los pobres de sus feligresías y les señalaba limosnas según su calidad, y en Navidad daba a cada pobre doce reales, y además su limosnero visitaba a las personas indigentes y honradas y las socorría. Las huérfanas y jóvenes pobres merecieron toda su caridad: les señalaba dotes para que en el santo matrimonio se viesen libres de las sugestiones de la miseria y del vicio"; J.P.MARTIR RIZO, op. cit., pp, 192-193; Sobre sus contactos con la Compañía de Jesús, cabe destacar que, en 1576, hallándose enfermo el canónigo Pedro de Marquina, fundador del colegio jesuítico de Cuenca, Gaspar de Quiroga acudió a bendecir la nueva iglesia de esta academia, visitando posteriormente al moribundo, a quien persuadió de que donase su casa y renta a dicho colegio (B.ALCAZAR, Chrono-historia..., p, 502).

la reforma eclesiástica en el obispado, había quedado reflejada en las Constituciones sinodales que se realizaron durante su prelación. En este sentido, hemos de recordar que Fresneda esgrimió, al igual que Fernando de Valdés, un pronunciado radicalismo religioso como medio para mantener su parcela de poder. Si bien Quiroga continuó favoreciendo la implantación de los criterios reformísticos no se abstuvo de matizar y suavizar algunas de las disposiciones adoptadas por Fresneda. Esta fue la función principal del sínodo diocesano que convocó en la primavera de 1574, donde las diferentes vías de religiosidad de ambos obispos quedaron constatadas (169).

Quiroga no pudo retornar al obispado conquense hasta la Cuaresma de 1574. Tras ponerse al frente de la Suprema, su presencia fue requerida en el acto de juramento del infante don Fernando como Príncipe heredero, que tuvo lugar en la iglesia de San Jerónimo en Madrid, el 31 de mayo de 1573 (170). A las responsabilidades inherentes al oficio de Inquisidor General vino a sumarse su inclusión en el Consejo de Estado, en noviembre del mismo año, desarrollando en su seno, durante este tiempo, una especial dedicación a la delicada situación que se vivía en Flandes. Los ruegos realizados por el prelado al monarca para que le permitiese ir a atender su iglesia se produjeron en diversas ocasiones. En marzo de 1574, Felipe II solicitaba a Quiroga que dilatase su partida hasta la Semana Santa, pues estimaba imprescindible su presencia en el tratamiento de estos asuntos, teniendo además presente que, cuando volviese

(169).- La adopción del radicalismo religioso por parte de Fresneda y su acercamiento al Inquisidor General Fernando de Valdés había venido motivado por su desvinculación de la facción cortesana ebolista, que, como hemos significado, se identificaba con la religiosidad representada por la Compañía de Jesús. Así pues, Fresneda no dudó en unir sus ataques a los de Melchor Cano, tachando a los jesuitas de "alumbrados", y enjuiciar negativamente los preceptos mantenidos por la corriente teológica "mística" (H. PIZARRO LLORENTE, op. cit., p. 164; M. BATAILLON, op. cit., pp. 543-546; MHSI, *Lainii Monumenta*, Madrid 1915, IV, p. 429).

(170).- BSCV, Ms. n.º 16, fol. 147r; L. CABRERA DE CORDOBA, op. cit., II, p. 140: "Ocupados los asientos sin precedencia por los que habían de jurar, Don Juan Manuel, Obispo de Zamora y electo de Sigüenza y Don Gaspar de Quiroga, Obispo de Cuenca, y el de Avila junto al Presidente". Este juramento se producía dieciocho meses después del nacimiento del infante. Quiroga también se había hallado presente en su bautizo, ostentando ya la prelación de Cuenca, acompañando a Soto Salazar y al Cardenal Espinosa, junto a los que había oficiado la ceremonia (C. PEREZ PASTOR, *La imprenta de Medina del Campo*. Junta de Castilla y León 1992, p. 181).

a Cuenca debería permanecer allí algún tiempo, puesto que el obispo tenía la intención de celebrar sínodo diocesano (171).

Uno de los primeros asuntos en los que se ocupó Quiroga cuando llegó a su sede episcopal fue el referido a las casas del tribunal inquisitorial de Cuenca. El asentamiento del Santo Oficio en la ciudad había constituido un importante foco de tensión entre el tribunal y la iglesia conquense, al haber ocupado este como habitáculo, en tiempos del obispo Alfonso de Fonseca y con su autorización, el recinto destinado a palacio o residencia arzobispal. Sus sucesores en la prelación trataron de que estos aposentos fuesen desalojados por los inquisidores, aunque el apoyo real atorgado a la institución inquisitorial hizo infructuosas las demandas realizadas en este sentido, hasta 1530, cuando quedó únicamente ocupado por la Inquisición el llamado "cuarto del Arca de la Limosna" o "de San Julián", por haber sido edificado por este prelado. Esta situación no sufrió variación hasta que se reunieron en la misma persona las dignidades de obispo de Cuenca e Inquisidor General. Con acuerdo de la Suprema, Gaspar de Quiroga ordenó que el tribunal se instalase en las casas del arcediano de Cuenca, en la calle de San Pedro. No obstante, por no constituir este un lugar apropiado, Quiroga solicitó al monarca que autorizase la construcción de una edificación propia del Santo Oficio en el recinto del castillo, arrasado en tiempos de los Reyes Católicos como castigo a los Hurtado de Mendoza. El 30 de septiembre de 1574, Felipe II autorizó la utilización de este lugar para levantar la morada inquisitorial, poniendo como condición que, tanto él como sus sucesores, podrían volver a disponer de esta fortaleza si tuviesen necesidad de ello, procediendo entonces, si las circunstancias lo requiriesen a derribar la construcción del Santo Oficio. El inicio de las obras se fue dilatando,

(171).- El 16 de marzo de 1574 Quiroga escribía al rey: "Yo he dejado de suplicar a V. Md. estos días fuese servido de mandarme dar licencia para ir a Cuenca por el suceso de los negocios de Flandes que aunque mi presencia es de poca importancia he querido hallarme en Consejo de Estado con ayudar siquiera con mi amén y porque de aquí al jueves se habrán visto todos y tomado resolución en ellos suplico a V. Md. humildemente sea servido mandarme dar licencia como otras veces lo he suplicado pues la pido por lo que toca al servicio de Dios y de V. Md. y descargo de su real conciencia y de la mía" Al día siguiente, tornaba a comunicar por carta con el monarca: "mi ida a Cuenca se quedará para cuando V. Md. manda y plega a N. Sr. que yo sea de algún provecho para servir a V. Md." (BL. Eg. 1506, fols. 18v-20r).

pues en 1578 aun no se habían comenzado. Sin embargo, antes de que las mismas llegasen a su fin, el 12 de noviembre de 1583, el tribunal inquisitorial se trasladó y ocupó sus nuevas casas (172).

Paralelamente a la ejecución de estas gestiones, el obispo de Cuenca centraba sus esfuerzos en la celebración del sínodo diocesano, que tuvo lugar entre el 25 de abril y el 10 de mayo de 1574. Antes de detenernos en la mayor obra de carácter reformístico que Quiroga realizó durante su prelación, hemos de significar que, tras la finalización de las gestiones concernientes al mismo, la aprobación de las Constituciones y el mandato de su cumplimiento (173), hubo de retornar a la Corte requerido por las obligaciones inherentes a los importantes cargos que desempeñaba en el seno de la Monarquía. A partir de este momento, sus estancias en Cuenca tuvieron muy poca duración, lo que le imposibilitó, a pesar de los deseos del prelado, poder continuar con la aplicación de los criterios reformísticos en su obispado, aunque no por ello descuidó el tratamiento de cualquier asunto que estuviese referido a la propia ciudad de Cuenca o a su diócesis episcopal (174). De igual manera, cumplió con el encargo recibido por el pontífice Gregorio XIII, quien pidió al obispo de Cuenca que realizase una recopilación de los Concilios celebrados en la Península

(172).- Sobre dichas cuestiones, véase, AHN, Inq., libro 578, fol. 220v; BSCV, Ms. n.º 16, fol. 147r; D. PEREZ RAMIREZ, Catálogo del archivo de la Inquisición de Cuenca. Madrid 1982, pp. 43-47; A. HERRERA GARCIA, "Los anales eclesiásticos de Cuenca de Juan Bautista Valenzuela" Hispania Sacra 20 (1967), p. 342; La Cédula Real autorizando la edificación de las casas inquisitoriales en el castillo aparece reproducida en J. MOYA PINEDO, Corregidores y regidores de Cuenca. Siglos XV al XIX. Cuenca 1977, pp. 121-122; Sobre la intervención de Quiroga en otras tensiones surgidas entre la iglesia conquense y el tribunal inquisitorial, véase, AHN, Inq., libro 356, fols. 260v-261r.

(173).- BPRM, II-233.

(174).- En carta que Quiroga escribía a Rodrigo de Castro, el 24 de junio de 1576, refería: "En Cuenca estuve cincuenta días, que fue como estar ninguno, por lo mucho que había de hacer allí y el poco tiempo que de acá me dieron. Si Su Majestad va a Aragón este verano, como dicen, pienso tornar a Cuenca a acabar lo que entonces no pude" (A. HUERGA, Historia de los Alumbrados. Madrid 1978, I, p. 612); De igual manera, en abril de dicho año, el rey se había dirigido al prelado, a través de Juan Vázquez y por su propia mano, en relación a que la ciudad de Cuenca se había negado a encargarse de su encabezamiento, a pesar de las diligencias efectuadas por el corregidor. Felipe II pedía a Quiroga que, para evitar los inconvenientes que se derivaban de esta situación, mediase con su autoridad para que la ciudad se aviniese a encabezarse (AGS, PR, leg. 75, n.º 91).

Ibérica. Aceptada la labor, Quiroga recabó la ayuda de Juan Bautista Pérez, figura de gran brillantez, a quien el prelado incorporó a su casa tras el fallecimiento de su anterior protector, el arzobispo de Valencia Martín Pérez de Ayala, y con quien mantuvo una vinculación que se prolongó hasta el final de sus días. En 1575 estaba terminado el primer volumen, siendo enviado al papa el segundo tomo sólo un año después. Si bien, en 1580, Gaspar de Quiroga comunicaba la consecución de un tercero, no aparece constatada su remisión a Roma (175).

a/ El sínodo diocesano de 1574

Desde que Gaspar de Quiroga recibió el nombramiento como obispo de cuenca, tuvo la intención de celebrar un sínodo diocesano destinado a cumplir una doble función. Si bien, por una parte, debía constituir el vehículo a través del que encauzar la aplicación del programa de reforma religiosa, por otra, también debía servir para rectificar la labor realizada por su predecesor en la prelación. Ambas facetas quedaron ampliamente reflejadas en su desarrollo, puesto que, las sesiones sinodales se ocuparon de poner gran énfasis en la necesidad de instruir a los feligreses en los preceptos de la doctrina católica emanados del Concilio de Trento, sobre todo, en el ámbito rural y en referencia a la población morisca, en fortalecer el control social, así como en reformar las costumbres y usos del clero, de igual manera, se llevó a cabo una profunda revisión de las Constituciones sinodales elaboradas por Fresneda y publicadas en 1571. El corto lapso de años transcurrido desde su entrada en vigor hasta la nueva convocatoria de sínodo realizada por Quiroga viene a poner de manifiesto que el nuevo obispo consideraba necesario matizar y reconducir los criterios reformísticos aplicados por su antecesor en la prelación, contrastándose así el distinto entendimiento que tenían sobre diversas cuestiones, fruto de las diferentes vías de religiosidad que representaban. Además, Quiroga desempeñó esta función ajustándose a los

(175).- A.PONZ, op. cit., p, 373; J.REZABAL Y UGARTE, op. cit., p, 292; P.L.LLORENS RAGA, op. cit., I, pp, 319-320; BSCV, Ms. nº 16, fol. 148r; F.ORTI Y FIGUEROLA, Memorias históricas de la fundación y progresos de la insigne Universidad de Valencia. Madrid 1730, p, 239.

criterios confesionalistas de la Monarquía, retocando en ocasiones este cuerpo normativo para que no se hallase en contradicción ni se ocasionasen conflictos jurisdiccionales tanto con el Derecho Común como con otro tipo de ordenamientos que rigiesen parcelas administrativas, como podían ser los aranceles reales.

El domingo 25 de abril, en conformidad con lo publicado en los edictos públicos de convocatoria, tenía lugar en la catedral de Cuenca la primera congregación del sínodo diocesano reunido por Quiroga (176). Tras celebrar el ceremonial acostumbrado en dichas celebraciones, el obispo designó a las personas que debían actuar como oficiales. Así, fue proveído como fiscal el licenciado Suero Méndez, el maestro Jerónimo Paulo, clérigo de la diócesis de Toledo y notario apostólico, fue nombrado notario y secretario, mientras que el racionero Andrés López ocupó el cargo de maestro de ceremonias, función que también desempeñaba en la catedral conquense, siendo nominados Juan de Varela y Francisco de Camañares como nuncio y portero respectivamente (177). Establecida la obligatoriedad de los convocados al sínodo de asistir a sus sesiones, bajo pena de ser considerados en rebeldía y recibir los castigos incluidos en el edicto promulgado por el prelado (178), escucharon la

(176).- "...movidos con sancto zelo del servicio de Dios nro Sr y del buen gobierno de las iglesias y estado ecclesiástico del y de la reformation y bien universal de sus subditos..." (BSCV, Ms. n.º 316, fol. 139r). Hemos de advertir que la relación sobre dicho sínodo, incluida en este manuscrito y efectuada por Jerónimo Paulo, secretario de Quiroga, no se halla completa, puesto que no se encuentran recogidas las sesiones que tuvieron lugar entre el 8 y el 10 de mayo.

(177).- Terminada la procesión alrededor de la iglesia, Quiroga celebró misa de Pontifical, asistido por los canónigos Alonso Gonzáles y Bartolomé Nuñez, diácono y subdiácono, participando en la misma Pedro de Mendoza, arcediano de Huete, Pedro Carrillo, que ostentaba la dignidad de chantre, junto con los canónigos licenciado Muñoz y Gil Muñoz. Finalizada la misa, se procedió al rezo de la oración y al canto de la letanía, tras lo que el canónigo Suárez de Camañares declamó el evangelio y la profesión de fe (Ibid., fols. 139v-143v).

(178).- La obligación de asistir a esta reunión se había fijado sobre el deán y cabildo de la catedral de Cuenca, el prior y el consistorio de la iglesia colegial de Belmonte, y para el arcipreste y clerecía de los arciprestazgos de Cuenca, Huete, Alarcón, Uclés, Pareja, Moya, Requena y del Castillo de Garci Muñoz, así como para los vicarios perpetuos de todos los arciprestazgos (Ibid., fol. 144r). Algunos arciprestes no pudieron acudir a la convocatoria a causa de su avanzada edad o por encontrarse enfermos, por lo que, en su lugar, fueron admitidos procuradores, que presentaron sus poderes el día 26 de abril.

predicación realizada por el dominico fray Hernando del Castillo, prior del monasterio de Nuestra Señora de Atocha en Madrid, que se hallaba en Cuenca con motivo de la realización de una visita al monasterio de los frailes de la Merced sito en dicha ciudad (179).

Finalizada la sesión inaugural, Quiroga convocó la siguiente congregación para el miércoles 28 de abril, comenzándose a realizar las labores propias de la actividad sinodal tras la designación de los asientos que cada cargo y dignidad debían ocupar (180):

"...yoel dho notario y secretario por mandato de su señoría Illma en alta e intelligible voz fuy llamando a los dichos Arçiprestes, vicarios y clereçía q estaban con sus sobrepelliçes aguardando entre las dos puertas del cabildo a que su Sría los mandase llamar, y dar a cada uno el asiento q en la primera congregación se les avía dicho que se les avía de dar para asistir a la dha sta synodo y así les llamé en la manera siguiente, estando como dicho es: sentados a la mano derecha de su Sría Illma el dicho provisor y arcediano de Alarcón, y a la mano siniestra los dichos Don Pedro de Mendoza y Pedro de Marquina diputados del cabildo de la dha Catedral

Los que se han de sentar a la mano derecha de su Sría Illma consequitivamente como fueren llamados son los siguientes

El licenciado Juan de la Portilla provisor que estaba ya sentado

(179).- "...tractódel estado ecclesiástico, y de la obligación que avía de tenerse en lo que se devía a tanto misterio, y la que tenían los ecclesiásticos de mostrarse y ser en las palabras y obras luz y sal del pueblo" (Ibid., fol. 144v); En este mismo sentido predicó, en la segunda sesión del sínodo, Gonzalo Muñoz, canónigo penitencial de la iglesia de Cuenca: "Trató de la obligación que tenían los obispos y curas de ser obreros de la iglesia de Dios, advirtiéndolo a cada uno lo que devía hazer en su offiçio y ministerio" (Ibid., fol. 147r).

(180).- Ibid., fols. 147v-149r.

Luis barba Arcipreste de Cuenca (181)
Juan Fernández de Molina Arcipreste de Huete
Juan Bautista Maestre Arcipreste de Uclés (182)
Gil Ruiz de la Coba vicario de yniesta
Rodrigo de Torres vicario de Cañete
El bachiller Cristobal Alonso procurador del Arcipreste de Moya
Miguel Gómez (183) procurador del Arcipreste de Pareja
El Doctor Juan Carrión procurador del vicario de Utiel
Francisco de Briones (184) y Gaspar del Hoyo procuradores del
Arciprestadgo de Cuenca
Don Juan Carrillo (185) y el Bachiller Alonso de Cuenca (186)
procuradores del Arciprestadgo de Huete
El licenciado Hernández procurador del Arciprestadgo de Moya

Los que se han de sentar a la mano yzquierda de su Sría Illma son los siguientes

Don Pedro de Mendoza Arcediano de Huete y canónigo y el canónigo Pedro de Marquina diputados del cabildo de la Cathedral, los quales como dicho es estaban ya sentados

El licenciado Diego Ponce canónigo de la Collegial de Belmonte procurador y diputado del prior y cabildo della (187)

Clemente Rodríguez Arcipreste de Requena

(181).- Posteriormente, se sentó precediendole Marcos de Parada, arcediano de Alarcón, lo que agravio al arcipreste de Cuenca.

(182).- En la primera sesión aparece como Juan Francisco Maestre.

(183).- Era beneficiado de Alcocer.

(184).- Era beneficiado de la iglesia de San Nicolás en Cuenca.

(185).- Juan Carrillo de Mendoza era cura de Barajas.

(186).- Era cura de Santa María de Atienza de Huete.

(187).- El licenciado Diego Ponce de León actuó en la primera sesión como procurador del arcipreste de Alarcón.

Francisco de Arboleda Arcipreste del Castillo de Garci Muñoz
El Bachiller Gaspar Navarro vicario de su Sría de Pareja
El licenciado Céspedes de Torremocha vicario de Huerta
El licenciado Pedro del Poço vicario de Provençio
Francisco Lucas procurador del Arcipreste de Alarcón (188)
Juan del Poço Abbad mayor de curas y beneficiados de Cuenca
El licenciado Pedro del Poço y Antonio Caçeo (189) procuradores del
Arciprestadgo de Alarcón
procurador del Arciprestadgo de Uclés el licenciado Pedro Murcia
El Bachiller Juan Fernández de Paniagua procurador del Arciprestadgo de
Requena
Francisco de Arboleda y el licenciado Melchor López procurador del Castillo de
Garci Muñoz
Pedro Martínez procurador del Arciprestadgo de Pareja
Juan de Bustamante procurador de la clerecía de la vicaría de yniesta".

Por otra parte, en bancos corridos bajo el estrado, se encontraron
presentes los representantes de las ciudades (190):

Alonso Alvarez y Bartolomé del Pozo, regidores diputados de Cuenca (191).
Bernardino de Santa Cruz y Hernando del Castillo, regidores y diputados de
Huete.
Andres de la Orden Quixano, procurador de la villa de Alarcón.
Diego Ramírez de Alarcón, procurador de la villa de Moya.
García de Alarcón, procurador de la villa de Cañete.

(9).- Fue procurador del arcipreste de Pareja en la primera congregación.

(189).- Era cura de la Osa.

(190).- Ibid., fols 152r-v y 154v.

(191).- En la primera sesión se hallaron presentes el corregidor de Cuenca, Juan de Beaumont y Navarra, y el teniente de corregidor Juan de Aguilera.

En este sentido, hubo de atender una petición presentada por el doctor Espinosa, abad de Monteagudo, quien solicitó que se le otorgase una ubicación para asistir al sínodo como abad que no estaba sujeto a ningún arciprestazgo ni vicaría. Semejantes demandas fueron realizadas por Martín López de Orduña y por el doctor Perseval, vicarios perpetuos de la villa de Zafra y de Montalbán, quienes estaban obligados a comparecer en la reunión según establecía el edicto de convocatoria (192). De igual manera, hubo que atajar las protestas de algunos de los congregados en relación con el emplazamiento que les había correspondido, por el que se sentían agraviados en los derechos y competencias de sus cargos. El prelado se mostró inflexible en relación a estas cuestiones, haciendo permanecer a cada uno de ellos en el asiento que le había asignado, cortando todo posible brote de diferencias en torno a este asunto, y demostrando estar informado del orden y lugar que habían ocupado en el sínodo precedente celebrado por fray Bernardo de Fresneda, en previsión del surgimiento de posibles polémicas por este tema (193).

Quiroga hizo una exhortación a los asistentes resaltando la importancia de la labor de curas y sacerdotes, que antepuso a la del prelado, reiterando la obligación que tenían de poner en su conocimiento todo aquello que fuese conveniente para el remedio de las almas de sus feligreses y el buen gobierno del clero de su obispado. Igualmente, les animó a que su colaboración en el sínodo fuese fructífera, recomendando que usasen de modestia y templanza al realizar sus proposiciones. Por su parte, hizo tres propuestas sobre las que debían versar los trabajos. La primera estaba referida a ciertas palabras que aparecían recogidas en el Manual del obispado conque se podían contener errores,

(192).- En la congregación habida el 30 de mayo el sínodo dió la aprobación a su petición. Al vicario de Montalvo se le dió asiento a la izquierda del prelado, detrás del vicario de Provencio, mientras que, el vicario de Zafra y el abad de Monteagudo se sentaron uno junto a otro, a la derecha, detrás del vicario de Cañete (Ibid., fols. 155v-156r).

(193).- El arcipreste de Cuenca, Luis Barba, estimaba que debía preceder al arcediano de alarcón, mientras que Juan Fernández de Molina, arcipreste de Huete, opinaba que, a su vez, él debía situarse con anterioridad al de Cuenca (Ibid., fols. 149r-v). A pesar de que Luis Barba reiteró su petición (Ibid., fol. 152v), el prelado se mantuvo firme en su determinación. Reclamaciones semejantes fueron también presentadas por los diputados de las distintas ciudades (Ibid., fols. 154v, 156r-157r).

poniendo como ejemplo la fórmula que se utilizaba para administrar la Extremaunción, en la que se absolvía al enfermo con solamente realizar una confesión general, careciendo de materia de pecados, así como en referencia a otras cuestiones relacionadas con este sacramento. Quiroga sugería que este tema se pusiese en conocimiento de teólogos y personas letradas para que determinasen lo que fuese conveniente. El sínodo trató sobre dicho asunto en la sesión que se celebró el 5 de mayo, solicitando el fiscal al prelado que mandase proveer que se corrigiesen o hiciesen desaparecer, según los casos, todas las afirmaciones que implicaban cierta peligrosidad en su aplicación o entendimiento. Tanto el obispo como los congregados mostraron su conformidad en ejecutar todo lo que Suero Méndez había expuesto en relación con la reforma del Manual (194). La segunda proposición realizada por Gaspar de Quiroga versaba en torno al mandato del Concilio tridentino que establecía la existencia de seis examinadores nominados por los sínodos diocesanos para evaluar a las personas que habían de ser proveídas en beneficios. Refería como, en el sínodo celebrado por el obispo Fresneda, se habían encargado de este cometido el doctor Méndez y el doctor Morcillo, canónigos de la catedral, y, según su criterio, personas aptas y fiables para esta ocupación, por lo que solicitaba a la reunión la renovación de su nombramiento. Junto a estas, designaba al prior del Monasterio de San Pablo de Cuenca, al guardián del Monasterio de San Francisco de la misma ciudad, y a los canónigos catedralicios licenciado Muñoz y Juan del Pozo, solicitando que su determinación se consultase en el sínodo para adoptar una resolución. Por último, refería que, puesto que se debían proveer cuatro personas que en el obispado conquense conociesen en las causas delegadas de la Sede apostólica,

(194).- El problema se centraba, en concreto, en cinco renglones escritos en rojo en la página noventa y seis, donde se planteaba la cuestión referida por Quiroga, así como que la absolución fuese plenaria por parte del sacerdote, aunque se tratase de pecados, crímenes o excesos cuyo perdón estaba reservado a la Santa Sede. De igual manera, se establecía, en torno al mismo sacramento, la inconveniencia de lo recogido en las páginas ciento diecinueve del mismo Manual ("Según Sant Anselmo quien con las boca las confesare y con el corazón las creyese no avrá duda de su salvación"), y la necesidad de reformar afirmaciones reflejadas en la ciento veinte ("creyese lo que es la fee cathólica de Jesuchristo como lo cree y tiene la Sta madre iglesia alumbrada por el espíritu Sto se ha de añadir Romana por que esta y no otra es la matriz y la verdadera iglesia") y en la ciento veintiuno ("porque se podría entender que con solos los méritos de Christo, sin hacer obras, se podía yr al cielo que es heregía"). Ibid., fols. 163r-v.

señalaba para realizar este cometido a Pedro de Mendoza, arcediano de Huete, a Pedro Carrillo, chantre de Cuenca, a Marcos de Parada, arcediano de Alarcón, y a Juan Zapata, arcediano de Moya (195). Los nombramientos, tanto de los examinadores como de los jueces apostólicos, se formalizaron en la congregación celebrada el 4 de mayo. Fue designado como examinador, a petición del fiscal Suero Méndez, además de los teólogos propuestos por Quiroga, el licenciado Alvaro de Reynoso, maestrescuela de la catedral e inquisidor en el tribunal de Cuenca, que ejercía el oficio de examinador jurista. En cuanto a los jueces apostólicos, sólo dos de los presentados por el prelado obtuvieron el nombramiento, en concreto, Pedro de Mendoza y Marcos de Parada, puesto que las otras dos plazas fueron proveídas en los canónigos Pedro de Marquina y el licenciado Arboleda (196).

En la sesión que tuvo lugar el 30 de abril, el fiscal presentó a Gaspar de Quiroga una petición significativa. Solicitaba que el obispo ordenase que los que habían sido nombrados testigos sinodales en el sínodo convocado por Fresneda, declarasen sobre aquello que se les había encomendado concerniente al buen gobierno del obispado. Como por los autos procedentes de dicha reunión no constaba quienes habían efectuado dicha labor, Quiroga mandó que, bajo pena de excomunión, los congregados señalasen a los que habían ejercido esta función, así como, siguiendo la solicitud del fiscal se comprobase si las constituciones elaboradas en el sínodo precedente se habían cumplido o si bien, era necesario realizar otras nuevas. Junto a esta demanda, Suero Méndez pidió que se nombrasen jueces para la reducción de capellanías y patronazgos, puesto que no se ocupaban (197). Durante la congregación que tuvo lugar por la tarde, Juan Francisco Maestre, arcipreste de Uclés, propuso al prelado que, puesto que había ordenado la redacción de un memorial general referido al buen gobierno del clero del obispado, diese su licencia para que los arciprestes, vicarios y procuradores asistentes al sínodo reuniesen sus escritos y confeccionasen un único

(195).- Ibid., fols. 150v-151v.

(196).- Ibid., fol. 178r-v.

(197).- Ibid., fol. 153r.

documento que aportase mayor claridad sobre aquellas cuestiones que necesitasen ser reformadas, y que nombrase a una persona que presidiese estas congregaciones en su lugar. Esta petición fue respaldada por los arciprestes de Cuenca y Huete, que solicitaron el permiso del obispo para revisar las Constituciones establecidas por fray Bernardo de Fresneda. Ambas proposiciones obtuvieron el beneplácito de Quiroga (198).

Mientras los miembros del sínodo realizaban la confección de dicho memorial, en las sucesivas congregaciones se siguieron produciendo las peticiones realizadas por el fiscal Suero Méndez, tendentes a la aplicación del ideario reformista. Así, solicitaba al prelado que ordenase, en relación al culto divino, que en toda su diócesis se hiciese oración continua por parte de todos los sacerdotes en las misas y oficios que celebrasen, rogando por el aumento de la fe católica y por la destrucción de los herejes. De igual manera, se debía mandar una plegaria para que se rezase y cantase juntamente con las oraciones, que apareciese en todos los misales en prevención del olvido de los sacerdotes. Tanto los asistentes al sínodo como el propio Quiroga mostraron su conformidad con la propuesta, que quedó reglamentada (199). Así mismo, el fiscal exponía que, puesto que en el obispado de Cuenca se habían avencinado por orden real muchos moriscos procedentes del reino de Granada, y convenía ejercer una tutela sobre ellos, Quiroga debía ordenar que se les instruyese en la fe católica, pues, si esto no se llevaba a cabo, surgirían muchos inconvenientes. Como en el asunto precedente, la petición obtuvo el beneplácito del prelado y del sínodo (200). En este sentido, Suero Méndez representó que la ignorancia existente en el obispado respecto a los artículos de fe y doctrina cristiana se debía a la poca dedicación que los curas y sus tenientes procuraban a su enseñanza, pidiendo a Quiroga que estableciese que, cuando se predicase en las iglesias el evangelio, juntamente se pusiese en conocimiento de los feligreses un artículo de

(198).- Ibid., fol. 155r-v.

(199).- Ibid., fol. 157v.

(200).- Ibid., fol. 158r.

fe o un mandamiento divino o de la Iglesia, tratando de que su temática estuviese relacionada con la festividad que se celebrase ese día, lo que contribuiría al entendimiento de los fieles de las fiestas señaladas por la Iglesia. Para facilitar la actuación de los eclesiásticos, el prelado debía proveer que en cada iglesia hubiese un ejemplar del libro escrito por el dominico fray Felipe de Meneses titulado Luz del alma (201). De igual manera, el fiscal también denunció ante el sínodo que los visitadores del obispado tampoco cumplían con su deber de visitar las iglesias a causa del poco salario que recibían, cifrado en un ducado el primer día que realizaban su labor, y medio ducado en los sucesivos. Esta precariedad motivaba que dejaran de realizar su cometido o lo ejecutasen de manera rápida y sin el detenimiento suficiente. Para remediar esta situación, Suero Méndez proponía que Quiroga ordenase un aumento del dinero que percibían, señalando como conveniente el pago de un ducado por espacio de tres días. El prelado, con la aprobación del sínodo, proveyó que, en adelante, los visitadores cobrasen un ducado durante los dos primeros días que ocupasen en ejecutar la visita, abonándose en el tercero medio ducado, todo ello a costa de la fábrica de la iglesia que visitasen (202). En relación con este tipo de cuestiones económicas, también llegó a la congregación la súplica realizada por parte de los frailes mercedarios de la ciudad de Cuenca al obispo, en referencia con la carestía de los mantenimientos y los elevados precios de todos los artículos. Aducían que la poca limosna que tenían, un real por una misa, no era suficiente para su sustento, por lo que solicitaban un aumento de la misma. El prelado y el sínodo accedieron a la demanda, aumentando en medio real la limosna que percibían por cada misa rezada (203).

Pero, sin duda, la labor más significativa realizada por las congregaciones sinodales estuvo referida a la matización que se llevó a cabo de la obra reformadora realizada en el sínodo precedente por Bernardo de Fresneda. Los arciprestes, vicarios y clerecía asistente obedecieron el mandato efectuado por

(201).- Ibid., fols. 162v-163r.

(202).- Ibid., fols. 163v-164r.

(203).- Ibid., fols. 158v-159r.

Quiroga para que se elaborase un memorial unitario en el que quedasen expuestas las cuestiones que debían considerarse y la manera de ejecutar los cambios pertinentes. El 4 de mayo fue presentado un escrito que recogía sesenta y dos capítulos, que tras ser leídos durante la sesión fueron aprobados, parte de ellos, para que se estableciesen como Constituciones emanadas de la reunión sinodal (204). Posteriormente, el secretario Jerónimo Paulo procedió de igual manera con las Constituciones establecidas por Fresneda en el sínodo de 1566, para dirimirse cuales de ellas permanecerían en vigor para el gobierno del clero del obispado, quedando el resto anuladas. Así, en lo concerniente al capítulo primero, estructurado en seis apartados referidos a la doctrina cristiana (205), Quiroga consideró que había que moderar dos de ellos, en concreto, el tercero, que ordenaba que los curas y sus lugartenientes todos los domingos y fiestas de guardar enseñasen la doctrina cristiana en sus iglesias en las primeras horas de la tarde, inmediatamente después de finalizar la comida, bajo pena de excomunión. Para el prelado, este castigo era excesivamente riguroso por la facilidad por la que se podía incurrir en esta falta, valorando que era suficiente punir con un real cada vez que el cura o su teniente no cumpliesen con la obligación de instruir a los fieles. Reglamentaba, igualmente, que este real pasase a la fábrica de cada iglesia, aplicándose también estas consideraciones a las labores efectuadas por el sacristán, que, por el apartado segundo del capítulo, estaba obligado a enseñar la doctrina cristiana a diario durante el mismo lapso de tiempo. Además, Quiroga mostró sus reparos al apartado sexto, por el que se dictaminaba la excomunión para aquellos legos que se entrometiesen o suscitasen discusiones o dudas en cuestiones referidas a la fe. Según el criterio del obispo, se debía introducir una clarificación, quedando excluidos aquellos que incurriesen en disputa o preguntasen motivados por la finalidad de aprender preceptos

(204).- Ibid., fol. 159r-v.

(205).- "prima de suma trinitale cap. 1 de la doctrina christiana diciendo porque el fundamento de todo nro bien es el fundar la fee cathólica immitiando los Stos concilios hechos por sanctos padres ordenamos y mandamos que donde empieça a mostrar al christiano como se ha de persignar con la señal de la cruz y enseña el pater noster, Avemaría, Credo, Salve y los artículos de la fee, y mandamientos de Dios y de la iglesia, e la demás doctrina christiana que se deve saber..."(Ibid., fol. 160r).

doctrinales que debían saber. Obtenido el beneplácito del sínodo para que estas transformaciones quedasen incorporadas (206), se puso en examen el capítulo segundo, siendo anulados a propuesta del prelado los cuatro primeros apartados referidos a la obediencia de los clérigos a los estatutos comunes, así como a que fuesen llamados a los repartimientos. En relación con el título tercero, quedó aprobado su contenido, aunque fue enmendada alguna de sus disposiciones en torno a las costumbres. Así, se establecía la prohibición de comer los sábados tocino y la manteca sacada de él, quedaba ahora permitido utilizar la grasa proveniente de otros órganos del cerdo. De igual manera se actuó en referencia al capítulo cuarto, donde se añadió en su primer apartado ciertas prerrogativas que quedaban al arbitrio del ordinario, como eran la presentación de edictos y la provisión de beneficios (207). Mucho más profunda fue la revisión efectuada sobre el capítulo séptimo, que versaba en torno a los estados y cualidades, puesto que cuatro de sus seis apartados fueron eliminados, modificándose el consignado en primer lugar, en el que se fijaba que fuese declarado inhábil aquella persona que aportase cartas de favor para ser admitido y examinado a orden sacra, quedando sustituida esta disposición por lo que en relación a este asunto establecía el Concilio de Trento, y también el apartado quinto, por el que se señalaba que aquel eclesiástico que oficiase sin licencia del obispo o de su provisor quedase suspenso en el acto. La pena de suspensión fue trocada por el pago de un ducado al oficiante y otro al que hubiese posibilitado su actuación, aplicándose ambos a la fábrica donde se hubiese celebrado la misa (208).

Sin embargo, en la congregación convocada en la mañana del día siguiente, el 5 de mayo, Quiroga ordenó que, para favorecer la brevedad en la revisión de las constituciones elaboradas por Fresneda, en lugar de leerse una a

(206).- Ibid., fols. 160r-161r.

(207).- Si bien fueron expuestos a la consideración del sínodo y del prelado los capítulos quinto y sexto, fueron aprobados sin introducir ninguna variación. Hemos de señalar que ambos estaban referidos a la actuación del prelado (Ibid., fol. 161v).

(208).- Ibid., fols. 161v-162r.

una en las sesiones sinodales, convenía que los arciprestes, vicarios y clerecía se reuniesen con el provisor del obispado y, tras realizar un exhaustivo examen, determinasen cuales de ellas precisaban ser tratadas por el sínodo, por lo que fijó la próxima sesión para la tarde del día 6 de mayo. Durante la misma, el secretario Jerónimo Paulo refirió la enmienda de cierta palabra recogida en el apartado segundo del capítulo décimo del primer libro, así como la complicación innecesaria que representaba que los abogados tuviesen que juramentar al comienzo del año, como se establecía en el título decimosexto del capítulo cuarto de dicho libro, proveyéndose por el sínodo la eliminación de este juramento. Igualmente, Gaspar de Quiroga señaló como la disposición expuesta en el capítulo cuarto del libro segundo, en su primer título, contravenía el Derecho Común al establecer que los jueces no podían tener asesores. Puesto que la autoridad que tenía un sínodo no podía derogar el Derecho Común, este mandato se debía anular, ordenando que, en dicho aspecto, se guardase lo que dictaba dicho Derecho. La apreciación del obispo contó, nuevamente, con la aprobación de la congregación. De igual modo actuó en referencia con lo reflejado en los capítulos primero y noveno del título décimo, proveyendo que los clérigos pudiesen actuar como testigos en las causas civiles, y prestar declaración con licencia de su arcipreste, siendo necesario el permiso del ordinario o del provisor para intervenir en asuntos criminales, estableciéndose que, en virtud a las diferencias existentes entre delator y acusador, se anulase lo contemplado en el capítulo noveno y se cumpliese con lo reglamentado por el Derecho Común (209). Así mismo se proveyó en cuanto a que los jueces no obtuviesen regalos, quitándose la obligación "In foro conscientis" a pagar la pena fijada para quienes incurriesen en esta falta (210). Quiroga también revisó la obligación existente de contar con la presencia de dos testigos para establecer escrituras públicas, elevando este número a tres en conformidad con el arancel real, reflejando el deber del notario de dar fe y declarar el origen de su

(209).- Ibid., fol. 166v.

(210).- Ibid., fols. 161v-162r. Hemos de señalar que no hubo ninguna variación en lo establecido en el capítulo octavo, a pesar de que se leyó en dicha congregación. De igual manera sucedió con lo recogido en el título decimo cuarto "sobre que tiempo se ha de vender el pan".

conocimiento con el otorgante. De igual manera, amplió hasta veinte días el plazo anteriormente fijado en diez para presentar apelación del juez inferior (211). También procedió a ajustar al Derecho Común y a derogar las disposiciones sinodales que no se correspondían con el mismo referidas a la pena que se aplicaba a los que enajenaban o compraban bienes eclesiásticos, quedando en vigor únicamente el mandato de que cualquier clérigo que directa o indirectamente impidiese al notario o testigos dirigirse a casa de un enfermo para que éste muriese sin testar, fuese penado con la excomunión. En este sentido, estableció que las personas que no cumpliesen con lo estipulado por los testamentos dentro del año, los sacerdotes debían dar noticia de ello al provisor o visitador para que estos hiciesen respetar su contenido, sin que los curas tuviesen en esta asunto la jurisdicción que, por lo recogido en el capítulo correspondiente, anteriormente se les otorgaba (212).

Realizados estos cambios, Quiroga acometió una de las reformas que mayor celebridad obtuvo de las emanadas del sínodo. En relación con lo recogido en el título sexto del segundo libro en torno a las fiestas, el prelado absolvió de todos los votos que se hubiesen hecho en el obispado en referencia a su celebración, reduciendo además el número de las mismas (213). Cada cofradía, existentes en un importante número en la diócesis, había convertido en festivo el día de conmemoración de su titular, lo que, unido a las fiestas señaladas por la Iglesia, suponía un importante conjunto de jornadas ociosas. Quiroga observó que esta práctica era perjudicial para los oficiales pobres,

(211).- Ibid., fols. 166v-167r. Estas disposiciones estaban referidas al capítulo primero del título décimo y al capítulo primero del libro decimo tercero respectivamente.

(212).- "...eque porque ay muchos aniversarios que tienen poca dote, y por esta causa no se cumplen (Sta synodo approbante) su Sría proveyó como en el dho capítulo se dice [título décimo del libro tercero], que sean reducidos a esta manera, que de dos o tres se llegue la pitaça hasta un real al cura y quatro mrs por los aniversarios rezados y real y mº al cura y ocho mrs al sacristán por los cantados " (Ibid., fols. 167v-168r).

(213).- "...quitóde las en el dho título puestas ipsa Sta synodo approbante del mes de Enero la fiesta del Smo nombre de Jesús, attento que el primer día de Enero se celebra/ Del mes de Hebrero a Sta Agueda/ del mes de mayo la invención de la cruz y la fiesta de oy que es St Juan ante portam latinam/ del mes de Julio la visitación de nra sª y el triumpho de la cruz/ y del mes de Agosto nra sª de las nieves/ y del mes de Octubre St Francisco" (Ibid., fols. 165v-166r).

quienes veían mermados sus salarios con el consiguiente efecto negativo para el sustento de sus familias. Además, como no se ocupaban en sus labores, jugaban y gastaban su dinero en entretenimientos completamente alejados de la devoción que festejaban. Así pues, el prelado, considerando el acudir al trabajo "más provechoso al servicio de Dios que la holgaza", desligó de sus juramentos a los cofrades para que pudiesen laborar en dichos días (214). Por otra parte, las iglesias debían seguir celebrando las festividades con la veneración pertinente, que, además, se tenía que transmitir y hacer extensiva al pueblo, manteniéndose la pena de excomunión para aquellos que jugasen mientras se oficiaba la misa, aunque se excluyó de la aplicación de este castigo a aquellos que incurriesen en este comportamiento durante las Vísperas (215).

El prelado también introdujo algunas modificaciones en relación a lo que el sínodo precedente había establecido sobre los sacerdotes. Reiteró la necesidad de que los curas jurasen negar su consentimiento para unir sus beneficios y curados, así como, ratificó la orden existente en cuanto a la manera de repartir los frutos y rentas de los prebendados entre el sucesor del beneficio y los herederos del difunto. Igualmente ratificó lo que estaba fijado en torno al vestuario y hábito que debían llevar, añadiendo que solamente podrían portar anillos los eclesiásticos que ostentasen alguna dignidad, permitiendo la utilización de forros de color, sotana y ropa de tafetán fuera de casa y, dentro de ella, de damasco, aunque ajustándose siempre a la decencia clerical (216).

Quiroga también se ocupó de revisar algunas de las normativas que se habían elaborado referidas a las parroquias. Así, hizo anular la disposición que obligaba a la persona que hubiese inducido a un difunto a elegir sepultura fuera de su parroquia a restituir el cuerpo a aquella que le perteneciese, por considerar

(214).- T.MUÑOZ SOLIVA, op. cit., p. 209; J.P.MARTIR RIZO, op. cit., p. 193.

(215).- BSCV, Ms. n° 316, fol. 166r.

(216).- Esta actuación estaba en relación a lo referido en el capítulo tercero del título undécimo, y en el título primero y el capítulo primero del título cuarto del libro tercero (Ibid., fols. 166v-167v).

esta práctica excesivamente rigurosa. De igual manera, si bien reiteró el mandato de que los feligreses asistiesen a misa en sus parroquias, asimilándose en su cumplimiento el acudir a la catedral por ser considerada parroquia común, declaró que, aunque esto estaba aceptado, no se debía olvidar el cumplimentar a la propia. Del mismo modo, las mujeres viudas debían seguir perteneciendo a la parroquia a la que había estado circunscrito el marido. No obstante, se añadía la aclaración de que esto se mantendría siempre que morasen en el mismo arcedianazgo y no mudasen su estado de viudedad (217).

Tampoco escapó a la labor de verificación de las Constituciones sinodales elaboradas por Fresneda los asuntos referidos al diezmo, que centraron los trabajos de la congregación celebrada el 7 de mayo. En la sesión celebrada el 30 de abril, el arcipreste de Cuenca había entregado al prelado unos memoriales, elaborados junto a los procuradores del propio arciprestazgo, en los que se exponían algunas cuestiones que se estimaban convenientes para la gobernación del clero del obispado, insistiendo, especialmente, en que se guardase la concordia, confirmada por bula apostólica, que habían realizado Pedro de Castro, cuando ocupó la prelación de Cuenca, y fray Juan de Muñatones, en aquel tiempo obispo de Segorbe. Por la misma se trataba de evitar que, a causa de la vecindad entre ambas diócesis, los diezmeros pasasen de una a otra, estableciéndose el castigo para los que incurriesen en esta falta (218). Quiroga declaró que los diezmeros debían pagar la primicia en la parroquia donde recibían los sacramentos la mayor parte del año, estipulándose igualmente las cantidades que se habían de abonar sin que estas interfiriesen en el pago del diezmo (219). El obispo también trató de impedir que se produjesen fraudes en su cobranza, por lo que estableció que los diezmos de pan se pagasen en cada partido según

(217).- Ibid., fol. 168r-v.

(218).- Ibid., fol. 153v.

(219).- Esta declaración venía a completar dos capítulos del título decimo tercero: "las primicias sean media hanega que dizen en este obispado un almud de cada pan, ni sea más ni menos, aunque cja mucha cantidad de pan (...) que si el labrador no cogiere como dize el dho capítulo onze almudes sino diez que un almud deve al diezmo, porque de los tales almudes no se deben primicias porque las tales primicias no han de quitar el diezmo sino que siempre se ha de pagar por entero" (Ibid., fol. 169v).

la costumbre que tuviesen, abonándose allí donde se hallase el individuo avecindado y recibía habitualmente los sacramentos, o bien donde poseía el terreno, no habiendo obligación de abonar diezmo allí donde se despajase. Si por el contrario, la usanza marcaba el pago en el término donde se desparvaba, el prelado ordenaba que el diezmo se partiese por la mitad entre la iglesia en cuyo término se encontraba la tierra y la iglesia del lugar donde viviese el diezmero. De igual manera estipulaba que si el clérigo que debiese los diezmos tenía dos beneficios o más en mismo lugar, debía partir los mismos entre las parroquias donde fuese beneficiado, pero si lo fuese en diferentes lugares, los diezmos pedriales los abonaría en relación a donde estuviese el terrón, mientras que los personales y mixtos debía pagarlos donde residiese la mayor parte del año. Así mismo, reglamentó que fuese borrado el capítulo referido al pago del diezmo en las heredades que pasaban a personas o lugares pios, mandando elaborar una constitución nueva por la que se estipulase la cobranza en la parroquia donde se realizaba con anterioridad a la enajenación (220). Igualmente, estableció que el diezmo correspondiente a cualquier género de pan vendido y a las bestias se pagase a la tercia mayor, mientras que lo referido al alcazer y al ganado domado se llevase al pie del altar. Estas fueron las reformas más significativas que realizó Gaspar de Quiroga en relación a dicha cobranza, puesto que en otras cuestiones, si bien fueron discutidas en la congregación, tan sólo se ratificó lo dispuesto en las constituciones sinodales elaboradas por Fresneda o bien la forma de actuación definida por la costumbre (221).

En relación con este asunto, los procuradores de Huete solicitaron a Quiroga que, como solución a la gran confusión existente en el repartimiento de las rentas, mandase a su contador que hiciese un libro general de todo el obispado donde este tema quedase clarificado. Este registro sería sufragado por las partes interesadas, que recibirían una relación de lo que les concerniese directamente tanto pagar como cobrar. El prelado acogió gustoso la propuesta,

(220).- Ibid., fol. 170r-v.

(221).- Así se proveyó en relación al diezmo de la grana, seda, ganado, salinas y hierba, las heredades censuales, los diezmos personales y mixtos (Ibid., fols. 171r-173r).

ordenando la elaboración del dicho libro becerro al contador (222).

Por otra parte, si bien los trabajos en el transcurso de las sesiones estaban centrados en la reformulación de las constituciones emanadas del sínodo precedente, también se atendió a la reglamentación de otro tipo de cuestiones. Así, el fiscal pidió a Gaspar de Quiroga que ordenase que ningún fraile, independientemente de la Orden a la que perteneciese, pudiese confesar a los parroquianos si no contaba con la licencia explícita del propio obispo o de su provisor, y que se mandase a los curas que no los admitiesen si no demostraban hallarse en posesión de dicho permiso. Quiroga proveyó sobre este asunto en conformidad con lo demandado por Suero Méndez, estableciendo la pena de excomunión para los religiosos que incurriesen en esta falta (223).

Así pues, con la celebración del sínodo diocesano y las constituciones emanadas del mismo, Quiroga cumplió con las expectativas que se habían realizado en la Corte sobre su labor cuando fue elegido para ocupar la prelación conuense. Si bien, por una parte, había conducido a la congregación a aplicar los preceptos del reformismo católico, concretados en la reglamentación establecida en torno a la instrucción doctrinal de los parroquianos, la reforma del clero y las diversas medidas de control social, también reformuló los criterios que había empleado su antecesor. Aunque fray Bernardo de Fresneda había colaborado en el proceso de confesionalización de la Monarquía, nunca perteneció al círculo clientelar de Diego de Espinosa. Su rigidez y radicalidad en materia de religiosidad le llevaron a colaborar gustosamente con la labor que Espinosa estaba realizando. Sin embargo, su aislamiento cortesano provocó su caída en desgracia y su alejamiento de la figura regia. Por contra, su sustituto era una figura en alza, protegido por Espinosa para alcanzar el obispado, y en perfecta consonancia con los principios confesionalistas asumidos por la Monarquía. El breve pero fructífero periodo que ocupó el obispado de Cuenca significaron, ante los ojos de Felipe II, la valía de Quiroga como jerarca

(222).- Ibid., fol. 173r-v.

(223).- Ibid., fol. 171r.

eclesiástico, cuestión que necesariamente hubo de valorar cuando realizó su presentación para ocupar la Iglesia Primada de la Monarquía. No obstante, como veremos más adelante en la elección de Quiroga como arzobispo de Toledo, confluyeron un cúmulo de circunstancias determinadas por el devenir político de la Monarquía.

b/ La polémica cobranza del subsidio

El comisario general Francisco de Soto Salazar, cuya gestión al frente del Consejo de Cruzada había discurrido sin graves inconvenientes tras la aplicación de los resultados de la visita de 1566, nuevamente se vió vinculado a dos protagonistas de la misma, fray Bernardo de Fresneda y Gaspar de Quiroga, a causa de las irregularidades cometidas por ambos, durante los años que ocuparon la prelación, en el cobro del subsidio a los pensionarios del obispado de Cuenca. En este sentido, don Luis Manrique, capellán y limosnero mayor, el secretario Gabriel de Zayas, el maestro Claudio Sublet, el sacristán mayor Antonio Bravo, y los capellanes Melchor de Valdés y Ginés Laynez, elevaron un memorial al rey en el que exponían lo sucedido y reclamaban su justicia (224). Según quedaba reflejado en dicha memoria, el monarca les había hecho merced de una pensión que ascendía a dos mil cuatrocientos ducados sobre las rentas del obispado de Cuenca. En consonancia con las bulas de concesión del subsidio, el pontífice ordenaba que los pensionarios contribuyesen, por rateo, en relación con el verdadero valor de las rentas de las iglesias y monasterios sobre los que tuviesen impuestas sus pensiones. Pero, y según denunciaban, fray Bernardo de Fresneda, mientras ocupó la sede conquesa, había realizado un reparto, respecto al pago del subsidio, por el que resultaba que los pensionarios debían pagar una cantidad mayor que aquella que les correspondía, conforme quedaba establecido en la bula de concesión, y como consecuencia de ello, era el propio obispo quien cubría así su contribución e incluso, con el dinero que llegó a ganar, pagaba las mismas pensiones. Informado Francisco de Soto Salazar de esta situación, aconsejó a los pensionarios que reclamasen justicia, pues no constituían un caso

(224).- IVDJ, envío 90, fols, 545-546.

aislado, dado que dichos abusos habían sido cometidos también por otros preladados, y los pensionarios habían hecho prevalecer finalmente su criterio. Llevando sus reclamaciones, primeramente, ante el obispo Fresneda, a quien el propio nuncio había escrito a instancia de los pensionarios, en este sentido, al no obtener fruto de esta gestión acorde a su propósito, decidieron seguir la recomendación del comisario general, a quien recurrieron para que interviniese y aclarase el asunto. Sin embargo, cuando el obispo de Segorbe descubrió que Gaspar de Quiroga, como prelado de Cuenca, realizaba la misma práctica, intentó por todos los medios no intervenir como juez en la causa. Sin duda, la amistad que unía a ambos, así como el creciente influjo que en la Corte estaba adquiriendo Quiroga, motivaron a Soto Salazar, quien no pudo zafarse de su papel de juez, a entretener y alargar la causa indefinidamente. Así, habiéndose recibido el negocio a prueba con término de ochenta días, y establecido que se nombrase receptor, cuyo trabajo debía ir señalado por el licenciado Contreras, asesor del Consejo de Cruzada, el comisario general se negó a designar persona que se encargase de la receptoría y ordenó al secretario de la causa que no efectuase los interrogatorios. A causa de la actitud de Soto Salazar, los pensionarios recurrieron a la Cámara Real para que el secretario Martín de Gaztelu diese fe sobre el verdadero valor del obispado de Cuenca, basándose en la relación que el propio Fresneda había realizado cuando fue nombrado obispo de Córdoba. Esta documentación, junto a la bula de concesión del Subsidio, fue de nuevo remitida al comisario general, quien, sin modificar su actitud, se negó a pronunciar sentencia en un intento de prolongar la resolución del pleito. Así pues, los pensionarios recurrían al Monarca en búsqueda de justicia, para que mandase resolver al obispo de Segorbe o bien ordenase que uno o dos miembros del Consejo Real se reuniesen con el nuncio para que sentenciase definitivamente la causa.

Este contencioso no encontró una solución durante los años en que Francisco de Soto Salazar ocupó el cargo de Comisario General, siendo su sucesor, Pedro Velarde, quien actuó de forma decisoria sobre dicha cuestión. Por su parte, Bernardo de Fresneda había intentado defenderse aduciendo que, en la irregularidad que se le imputaba, no reconocía al comisario general como juez,

pues no estaba referida ni al subsidio ni a la cruzada, pidiendo que se abstuviese de su conocimiento (225). De igual manera, el presidente del Consejo de Castilla, Diego de Cobarrubias, se desentendió en un primer momento del tratamiento de este asunto, pues refirió a un ministro del Comisario General que él no podía actuar como juez ni proporcionar su parecer sobre este pleito por considerarse parte interesada como pensionario de Segovia y obispo electo de Cuenca (226). Sin embargo, posteriormente trató de tomar parte en la resolución de la causa reuniendo a la Cámara regia. Esto provocó las quejas de Luis de Manrique a Felipe II, puesto que, según afirmaba el capellán, sus miembros no debían participar en la votación ya que se encontraban presionados por el obispo de Córdoba para que estorbasen la labor de los jueces apostólicos en la determinación de su justicia (227). No obstante, todas las acciones ejecutadas por Pedro Velarde se centraron en la gestión realizada por Fresneda, olvidando que las mismas infracciones habían sido cometidas por Gaspar de Quiroga. Sin duda, su creciente influjo cortesano, adquirido por la acumulación de influyentes cargos, pues, al de Inquisidor General, unió en 1577 el de arzobispo de Toledo, así como su vinculación al nuevo Comisario General, determinaron claramente dicha actuación. Finalmente, en febrero de 1578 se pronunció sentencia, por la que se establecía que se debían juntar las partes para que nombrasen contadores, así como un tercero que señalaría el Comisario General, para que se determinase el descuento que se debía hacer a los pensionarios en razón de lo que habían pagado en exceso y para precisar que cantidad se les adeudaba. Sin embargo, entonces surgió un nuevo inconveniente, al producirse el fallecimiento de Bernardo de Fresneda en diciembre de 1577, por lo que sus herederos, viendo reducido el legado, recurrieron la sentencia. En junio de 1578 el rey ordenaba que el presidente del Consejo de Castilla, Pazos, el licenciado Fuenmayor y el doctor Francisco Hernández de Liébana, junto con

(225).- IVDJ, envío 90, fol. 657; Ibid, envío 89 (caja 126) n°412.

(226).- El 6 de septiembre de 1577, Diego de Cobarrubias fue confirmado, por bula de Gregorio XIII, como obispo de Cuenca. Sin embargo, su fallecimiento unos días después le impidió llegar a tomar la posesión (AGS, PR, 62-116).

(227).- IVDJ, envío 90, fol. 545.

Pedro Velarde, viesan el pleito que los pensionarios del obispado de Cuenca mantenían con el arzobispo de Toledo en torno a dicha cuestión (228). Sin embargo, en la sentencia definitiva pronunciada en marzo de 1579, nuevamente aparecen ignoradas las irregularidades cometidas por Quiroga. En la misma se ratificaba la decisión tomada en febrero de 1578.

(228).- AGS, Comisaría de Cruzada, leg. 290. Sobre las razones que presentó Quiroga al monarca para justificar su proceder, véase, AHN, Inq., libro 284, fol. 98.

CAPITULO 6

6. GASPAR DE QUIROGA GRAN PATRON CORTESANO (1573-1579)

6.1. La herencia política de Diego de Espinosa

La muerte de Diego de Espinosa, en septiembre de 1572, vino a coincidir con el fenecimiento de una serie de personajes que habían dominado la escena política en los años precedentes. En abril de dicho año, fallecía Pío V, siendo sustituido en el solio pontificio por Hugo Buoncompagni, que adoptó el nombre de Gregorio XIII. Unos meses después de la muerte del Cardenal, en 1573, se producían los óbitos de Ruy Gómez de Silva, Francisco de Borja, la Princesa doña Juana y el doctor Martín de Velasco. La desaparición de tan significativas figuras inauguró un nuevo período caracterizado, por una parte, por la adopción de un nuevo sistema de gobierno, concretado en la aparición de las juntas y, por otro, como consecuencia del anterior, por una reorganización de las facciones cortesanas que pugnaban por alzarse con el favor regio. El proceso de confesionalización de la Monarquía que había protagonizado Espinosa se había traducido a nivel institucional, como hemos señalado, en la dotación de los Consejos que conformaban el sistema polisinodial con una mayor entidad jurisdiccional y, en consecuencia, en un enriquecimiento del aparato administrativo. Puesto que estos organismos se fueron encauzando, en el desempeño de sus funciones, hacia el tratamiento de asuntos de carácter general y agudizando su carácter de tribunales de justicia, se hizo necesario activar un mecanismo de decisión política que actuase con mayor agilidad y eficacia ante los problemas de la Monarquía. Así pues, la aparición de las juntas como órganos donde se definían las directrices políticas implicó, aunque en un estado muy embrionario, una separación entre las labores de gobierno efectuadas por éstas,

y el ámbito jurisdiccional, cuyo ejercicio quedaba reservado a los Consejos. Esta nueva práctica tuvo un evidente influjo en la formación de los incipientes "partidos" cortesanos que comenzaban a configurarse en la Corte hispana tras la desaparición de Espinosa. Según este novedoso modo de actuación, que pasó a convertirse en habitual, las materias eran sometidas a la consideración de una junta, compuesta por técnicos procedentes de los Consejos, a la que asistía un secretario real, que, fuera de limitarse a efectuar una labor burocrática, se convirtió en el eje central de su funcionamiento, puesto que, además de contar con voz y voto en su seno, actividad que con anterioridad les estaba vetada en los Consejos, eran el vehículo de comunicación entre la junta y el monarca. Recibido el encargo Real de convocar las reuniones, lo que le permitía influir sobre su composición, era posteriormente el encargado de transmitir al rey sus determinaciones, propiciándose así la ocasión de exponer ante el monarca sus propias opiniones (1). Teniendo en cuenta este funcionamiento, junto a la conjunción de muertes acaecidas entre 1572-1573 que condujeron a la desaparición de los antiguos patronos cortesanos, no resulta extraño que dicho papel pasase a ser desempeñado por dos secretarios reales: Mateo Vázquez y Antonio Pérez. Ambos fueron configurando en torno a sí dos grupos que, superado el periodo de incertidumbre tras la desaparición de Diego de Espinosa en relación a quien o a quienes iba a otorgar Felipe II su confianza, lo que se tradujo en una cierta imprecisión en sus formaciones, lucharon por obtener el beneficio de la gracia real.

El secretario Mateo Vázquez trató de recoger el legado político de su protector, Diego de Espinosa. Si bien había entrado a su servicio en 1565, el origen de su conocimiento y amistad con el Cardenal se remontaba a los años 1553-1556, durante la estancia de Espinosa en Sevilla, cuando Mateo Vázquez

(1).- En torno a dicho cambio, véase, C.J. DE CARLOS MORALES, *op. cit.*, pp. 165-166; W.T. WALSH, Felipe II. Madrid 1949 (3ª ed.), p. 580. Distinto sentido le dá, D.M. SANCHEZ, El deber del Consejo en el Estado Moderno, p. 86.

era aún un niño (2). La estrecha relación que le había unido al Cardenal motivó que Felipe II depositase en el secretario su confianza, confiriéndole el manejo de los papeles solamente un día después de su fallecimiento. Desde tan significativa situación, Mateo Vázquez trató de ponerse al frente de la red clientelar formada por Espinosa. Aunque no pudo lograr mantener la unión y homogeneidad dentro de la misma, no consiguiendo evitar el nacimiento de un grupo opositor, se convirtió en un gran patrón cortesano. Este grupo estaba compuesto principalmente por el conjunto de letrados castellanos que habían actuado a las órdenes de Espinosa en la consecución de la confesionalización de la Monarquía, por lo que asumía y representaba, en el espectro ideológico, una visión patrimonialista de la misma, la defensa radical de la ortodoxia religiosa y el ensalzamiento de la "limpieza de sangre". Su ámbito de influencia estaba esencialmente circunscrito a la Corona de Castilla y a las instituciones directamente relacionadas con este territorio (3).

Por otra parte, la elección del nuevo papa, Gregorio XIII, tuvo una importancia primordial en el devenir de las facciones cortesanas en la Corte filipina. El pontífice patrocinó la creación de un grupo cortesano integrado por personajes provenientes del "partido ebolista" (4), que, en algunos de los casos, como en el de Gaspar de Quiroga, habían colaborado activamente en la política desarrollada por Diego de Espinosa y habían medrado bajo su protección. El "partido papista" presentaba un bloque más homogéneo. Estaba formado por letrados que, a través del ejercicio de sus cargos, habían estado relacionados con Roma o bien con las posesiones de la Monarquía hispana en Italia. Esta

(2).- A. W. LOVETT, Philip II and Mateo Vázquez de Lecca: the Gouvernement of Spain (1572-1592). Genève 1977, pp, 11-14.

(3).- Sobre el nacimiento de la facción "castellanista" y sus características, véase, J. MARTINEZ MILLAN, "La herencia de Diego de Espinosa" (en prensa).

(4).- Algunos autores han caracterizado a dicho grupo como el apéndice último del grupo "ebolista", atribuyendo al mismo unos criterios de actuación política identificados con su núcleo originario, esto es, una actitud menos radicalizada y dialogante, sobre todo, en lo referido a la política que se debía desarrollar en los Países Bajos. Véase en este sentido, G. MARAÑÓN, Antonio Pérez. I, pp, 36-38 y 61; W. S. MALTBY, El Gran Duque de Alba..., pp, 94, 124 y 154; A. PEREZ, Relaciones y cartas Intr. y ed. de A. ALVAR EZQUERRA, p, 15.

vinculación quedaba claramente establecida en la evolución vital de Quiroga, que, como hemos señalado, entró en contacto con una de las principales figuras de esta facción, el secretario Antonio Pérez, a través del despacho de los asuntos italianos durante el periodo que actuó como gobernador del Consejo de Italia. Pero, además, lo componían ciertos nobles vinculados al clan de los Eboli y algunos miembros de la familia real como don Juan de Zúñiga y Alejandro Farnesio. Respecto a la cabeza de esta facción cortesana, si bien, en teoría, fue don Juan de Austria, su lejanía de la Corte conllevó que, en la práctica, fuesen Antonio Pérez y la princesa de Eboli quienes en Madrid se pusiesen al frente de la misma (5).

Si bien Gregorio XIII tuvo una destacada influencia en la configuración de las facciones cortesanas tras la muerte de Espinosa con el patrocinio de este grupo "papista", también inició una serie de reformas en la Iglesia (6) que tuvieron una importante repercusión en el proceso de confesionalización de la Monarquía hispana. Era, además, un buen conocedor de esta política y de la problemática que planteaba respecto a sus relaciones con la Santa Sede, tanto por su cercanía a los pontífices anteriores a él y por su amistad con el Cardenal Borromeo, así como por haber asistido a la celebración de la tercera etapa del Concilio de Trento (7). Dentro de las medidas que adoptó Gregorio XIII en relación con el carácter que quería imprimir a su pontificado, orientadas a alcanzar una mayor centralización de la Iglesia para lograr una mejor defensa de su jurisdicción y de la ortodoxia católica frente a otras confesiones, cabe destacar, por la influencia que tuvo en la Corte filipina, el cambio que propició en la Compañía de Jesús, poniéndola al servicio de los intereses del papado. Desde la fundación de dicha Orden, la misma había estado regida por Generales hispanos,

(5).- En torno a la configuración del grupo "papista" véase, J. MARTINEZ MILLAN, "La herencia de Diego de Espinosa (en prensa); Ibid., "Alexandre Farnese, la Corte di Madrid e la monarchia Cattolica" I Farneses: Corti, Guerra e Nobilita in Antigo Regime. Piacenza, noviembre 1994 (en prensa).

(6).- Sobre las mismas, L. PASTOR, op. cit., XIX.

(7).- L. SERRANO, "Un legado pontificio...", pp. 76-79; R. ROBRES LLUCH, "San Carlos Borromeo y sus relaciones...", p. 87.

siendo Francisco de Borja, como hemos señalado, una de las principales figuras de la facción cortesana "ebolista", que, por otra parte, había apoyado desde la Corte hispana el desarrollo de la Orden, y había asumido su religiosidad. Gregorio XIII, consciente de esta vinculación, aprovechó la desaparición de las principales figuras de este grupo, entre cuyas muertes hubo que contar la del propio Borja, para desarraigar a la Compañía de Jesús del fuerte influjo hispano y atraerla, mediante un cambio de espiritualidad, a la realización de una labor más acorde con los intereses de la Santa Sede. Para ello, persuadió a la congregación reunida para la elección de un nuevo General de la conveniencia de designar a un personaje no hispano para la ostentación de esta dignidad, resultando electo, como fruto de la demanda papal, Everando Mercuriano (8). Si con ello el papa logró su objetivo, la Compañía de Jesús perdió el apoyo y la influencia que había tenido en la Corte hispana, generándose situaciones novedosas en relación con la anterior existencia de la Orden. Mientras que, por una parte, arreciaron los ataques provenientes de otras Ordenes, principalmente de los dominicos, y los miembros de la Compañía de Jesús se vieron obligados a comparecer ante el Santo Oficio, por otro, varios de los jesuitas hispanos que se hallaban en Roma fueron enviados a la Península, lo que provocó en los mismos un profundo descontento que degeneró en pretensiones cismáticas. Sus críticas a la nueva orientación de la Compañía de Jesús, de marcado talante regalista, encontraron un buen acogimiento por parte de Felipe II y el beneplácito del Inquisidor General, Gaspar de Quiroga, unido por lazos de amistad con la mayoría de ellos, como en el caso de Pedro de Ribadeneyra, desde los años de estancia en Italia.

No obstante, si bien Gregorio XIII, tras haber ocupado la Silla de Pedro,

(8).- L. PASTOR, op. cit., XIX, pp, 221-240; A. ASTRAIN, Historia de la Compañía de Jesús en la asistencia en España. Madrid 1909, III, pp, 9-14, CODOIN, Vol. 102, pp, 126-127. Por otra parte, la verdadera reforma espiritual de la Compañía de Jesús no se hizo durante el generalato de Mercuriano, sino en el de sus sucesor, Claudio Aquaviva (J. DE GUIBERT, "Le généralat de Claude Aquaviva (1581-1615). Sa place dans l'histoire de la spiritualité de la Compagnie de Jésus" Archivum Historicum Societatis Iesu 10 (1941), pp, 59-93); una completa visión de la significación de este cambio en la Compañía de Jesús en J. MARTINEZ MILLAN, "Transformación y crisis de la Compañía de Jesús (1578-1594)" (en prensa).

consiguió dos importantes logros, como eran arrebatarse a la Compañía de Jesús del influjo hispano y propiciar la creación de una facción cortesana que imprimiese a la política de la Monarquía un carácter de menor rigidez que la desarrollada por el Cardenal Espinosa y por su directo heredero, el secretario Mateo Vázquez, hubo de sortear los intentos realizados por Felipe II para tratar de imprimir su impronta a las decisiones del nuevo pontífice.

6.1.1. Gregorio XIII y la Corte hispana

La llegada al solio pontificio de Gregorio XIII, que se había mostrado proclive durante su cardenalato al favorecimiento de los asuntos pertenecientes a la Monarquía hispana, lo que le procuró el explícito apoyo de Felipe II en su elección, hizo albergar al rey la esperanza de establecer con la Santa Sede unas relaciones menos tensas que las que había mantenido con su antecesor en el pontificado, y sobre todo, el convencimiento de que el nuevo papa sería más cercano a los intereses hispanos (9). El embajador Juan de Zúñiga había indicado al monarca como la pieza clave para lograr atraer a Gregorio XIII y plegarle a sus deseos era el favorecimiento del hijo del pontífice, Jacobo Buoncompagni, castellano de Sant'Angelo (10). El envío por parte de Gregorio XIII de Marco Antonio Colonna, en noviembre de 1572, con la finalidad de tratar sobre la evidente efimeridad futura de la Santa Liga, también sirvió para que el pontífice se informase de la situación de los diversos personajes en la Corte hispana tras la muerte de Espinosa, consciente de que

(9).- Sobre el apoyo procurado por Felipe II a Hugo Buoncompagni para acceder a la Silla de Pedro, véase, L. PASTOR, op. cit., XIX, pp, 45 ss.

(10).- No estaba equivocado Zúñiga en su apreciación, pues con el tiempo el Papa entregó el gobierno interno de los estados de la Iglesia a su hijo Jacobo Buoncompagni, duque de Sora, a quien designó como gobernador de la Santa Iglesia, General en Jefe del ejército pontificio y gobernador militar de Roma. Sin embargo, las relaciones entre padre e hijo no fueron muy estables, puesto que la existencia del vástago representaba para el pontífice serios problemas de conciencia, a pesar de que su nacimiento fue fruto de su relación con una dama boloñesa anterior a su adopción del estado eclesiástico. La incomodidad que despertaba en Gregorio XIII la existencia de este hijo le llevaba a retirarle sus poderes y desterrarle de Roma, aunque posteriormente siempre volvía a llamarle a su lado (R. HINOJOSA, Los despachos de la diplomacia..., p, 257.).

necesitaba contar con un enclave que le permitiese actuar de forma menos condicionada y mantener intacto el legado que había recibido de su antecesor (11). La vinculación existente entre Marco Antonio Colonna y Ruy Gómez de Silva propició que, a través de las conversaciones mantenidas entre ambos, proyectasen el matrimonio de Jacobo Buoncompagni con alguna joven perteneciente a un linaje adscrito a la Monarquía, como medio de atraer a Gregorio XIII a la facción cortesana ebolista. La concertación se realizaría de forma secreta, sin poner a Felipe II en conocimiento de sus planes, y contando con la ayuda del secretario Antonio Pérez (12). Mientras esta maquinación se realizaba en ausencia del rey, en las mismas fechas, enero de 1573, Felipe II venció sus reticencias y aceptó el consejo de su embajador en Roma, comunicando a Zúñiga sus deseos de favorecer al hijo del pontífice otorgándole tres mil ducados de pensión, y ordenándole que comunicase a don Juan de Austria sus deseos de que le dispensase un excelente tratamiento, procurando la cercanía a su persona atrayéndole a su armada, y le incluyese en los Consejos donde entrasen las personas principales (13).

Desde Roma, Zúñiga informaba al monarca en el mes de marzo de los deseos expresados por Jacobo Buoncompagni de casarse con una nieta de Tomás Marín que contaba con derechos sucesorios sobre el ducado de Terranova. La noticia fue bien acogida por el rey que, ordenó al embajador que se favoreciesen

(11).- Un pormenorizado estudio de todas las implicaciones que revistió el viaje de Colonna para entrevistarse con Felipe II, así como sobre el ambiente cortesano, desfavorable a continuar en el seno de esta alianza y los planes en reconvertirla, tras la salida de los venecianos, en "una liga defensiva para la quietud de Italia", donde el papado quedase en una situación de control y subordinación bajo la política de la monarquía, véase, M. RIVERO RODRIGUEZ, "El servicio a dos Cortes...", pp, 345-357.

(12).- De esta complicada operación, Colonna esperaba obtener también un beneficio personal, utilizando la influencia de Ruy Gómez para rehabilitar su figura ante Felipe II abandonando el servicio al papado (Ibid., pp, 358).

(13).- Véase la carta que Felipe II remitió al embajador el 28 de enero y el 9 de febrero de 1573 en, CODOIN, Vol. 102, p, 18 y 25-26; AGS, Estado, leg. 921, n° 161-163.

las conversaciones para que se efectuase el matrimonio (14). Sin embargo, esta posibilidad se vió prontamente entorpecida. Desde la Corte pontificia llegaron noticias de como el cardenal Farnesio, en correspondencia con Francia, procuraba que el hijo del papa tomase en matrimonio a una hija del duque de Urbino, obteniendo como dote el ducado de Sora. Si bien Juan de Zúñiga seguía haciendo instancias en la propuesta anterior, declaraba que no trataría de entorpecer este enlace, puesto que, quedando arraigado al reino de Nápoles, estaba forzado a buscar el entendimiento con Felipe II (15). La noticia también llegaba a la Corte a través de una carta cifrada que Marco Antonio Colonna remitía a Ruy Gómez de Silva. Si bien Felipe II seguía ajeno a sus manejos, Gregorio XIII estaba informado de su intención de promover la unión de su hijo con la candidata que se había elegido para el efecto, Guiomar Pardo, hija del difunto Ares Pardo de Tavera, sobrino del Cardenal Tavera, y de su mujer Luisa de la Cerda. El papa había escrito al nuncio en la Corte hispana para que se informase de lo ventajoso del casamiento, lo que hacía albergar esperanzas a Colonna de que el pontífice se aviniese a la concertación, mostrando su temor a que si la cuestión se dilataba en exceso, la familia de la muchacha decidiese aceptar otras opciones. No dejaba de señalar que se debía presentar toda la oposición posible a que se acordase la unión con la Casa Urbino, que, de producirse, haría fracasar su proyecto. Para esta actuación contaba con la ayuda de los cardenales de Como y Altaemps, así como de los florentinos. Decía hallar proclive a Gregorio XIII a aceptar su proposición, favorecida, además, por los buenos oficios desarrollados por el cardenal de Como, a quien el papa había comunicado el asunto. A través del mismo, el pontífice se había puesto en comunicación con el nuncio, pidiéndole que se informase de esta materia a través del doctor Velasco. Colonna se lamentaba de que hubiese equivocado la persona a la que debía remitirse, puesto que el

(14).- Véase, en este sentido, la misiva que el monarca envió a Zúñiga el 28 de marzo de 1573, así como un informe sobre esta cuestión, en, *Ibid.*, nº 158 y 160. Sobre las buenas expectativas que abriría este matrimonio para los intereses de Felipe II insistía el embajador, ante la continua provisión de cargos que recibía Jacobo de su padre (CODAIN, Vol.102, pp, 100-102).

(15).- Sobre estos aspectos, véanse las cartas de Zúñiga al monarca con fecha de 1 y 13 de mayo. *Ibid.*, pp, 110-111 y 122-123.

nombre de Velasco no era el que debía aparecer sino el de Gaspar de Quiroga, lo que viene a confirmar que el obispo de Cuenca se hallaba también en el secreto y mantenía sobre el asunto comunicación con el nuncio (16).

La sospecha expresada por Colonna de que Luisa de la Cerda pudiese decidir otra posibilidad para el matrimonio de su hija estaba fundada en que, desde los últimos meses de 1571, se habían iniciado las conversaciones encaminadas a casar a doña Guiomar con Juan de Zúñiga, único hijo varón de Luis de Requesens (17). La preocupación del gobernador de Milán, tanto por su precario estado de salud como por su debilitado estado financiero, había motivado que procurase concertar prontamente los enlaces matrimoniales de sus hijos. Mientras que para su hija, Mencia de Mendoza, había convenido su unión con Pedro Fajardo, marqués de los Velez (18), esperaba que su hijo Juan pudiese realizar una ventajosa boda con doña Guiomar, destinataria de la sustanciosa herencia paterna tras el fallecimiento en ese mismo año de su único hermano varón (19). Obteniendo el consentimiento regio, Requesens inició las conversaciones a través de Andrés Ponce, persona de su entera confianza, y del gobernador del arzobispado de Toledo, Sancho Busto de Villegas. Por otra parte, no dudó en recabar la ayuda de la Compañía de Jesús, por la cercanía que tanto su propia familia como la de Luisa de la Cerda mantenían con los miembros de dicha Orden, actuando como intermediario el Padre Luis de

(16).- Los informes remitidos por Marco Antonio Colonna a Ruy Gómez de Silva, en los que no perdía la oportunidad de solicitar su favorecimiento ante el rey, principalmente en lo referente al cargo de virrey de Sicilia se encuentran en AGS, Estado, leg. 921, nº 42 y 43.

(17).- M. RIVERO RODRIGUEZ afirma que a la elección realizada por parte de Ruy Gómez y de Colonna de doña Guiomar no era ajeno el enfrentamiento que este último mantenía con el embajador Zúñiga ("El servicio a dos Cortes...", p, 359).

(18).- Sobre la conveniencia que encontraba Requesens en este matrimonio a pesar de la enorme diferencia de edad y de los avatares de su concertación, véase, CODOIN, Vol.97, pp, 382-383; IVDJ, envío 109 (caja 153) nº 3-5; las capitulaciones matrimoniales en Ibid., envío 81 (caja 109) nº 311-312; J.M. MARCH, El Comendador mayor..., p, 89.

(19).- Ibid., pp, 83-85; La orden recibida por el rey de hacerse cargo del gobierno de Flandes acrecentó la angustia de Requesens ante la situación de su hijo (CODOIN, Vol.102, p, 41).

Guzmán (20).

La progresión de las negociaciones preocupaban seriamente a Marco Antonio Colonna, que, como medio de desbaratar la toma de un posible acuerdo, decidió hacer público que se estaba negociando entre ambas familias el concierto matrimonial. El 5 de abril de 1573, Requesens solicitaba al monarca la licencia pertinente para tornar a la Península antes de poner rumbo a Flandes y encargarse de forma personal de que se alcanzase un entendimiento con Luisa de la Cerda, poniendo de manifiesto el daño que había causado la indiscreción de Colonna, pues mientras que él había guardado el secreto siguiendo las instrucciones de Felipe II al respecto, el asunto era ya público, causando a Requesens y Zúñiga situaciones inconvenientes con sus parientes y amigos (21). El 24 de mayo, una mano anónima, posiblemente la de Antonio Pérez, ponía al corriente a Busto de Villegas de los planes trazados por Colonna y Ruy Gómez de Silva para lograr atraer al papa. Según dicho informante, la elección de doña Guiomar había sido realizada por el príncipe de Eboli, lo que había recibido la aprobación de Colonna a pesar de que la rica heredera no tenía disponibilidad de sus bienes para trasladarse a Italia, por hallarse estos vinculados en mayorazgo. Se le encargaba al gobernador de Toledo que favoreciese en todo lo que estuviese en su mano este negocio, advirtiéndole que no diese noticia de ello a nadie, guardando absoluto secreto, puesto que el mismo rey desconocía el asunto, y en particular debía evitar informar a Gaspar de Quiroga y a la propia doña Luisa, a la que debía entretener para que, mientras

(20).- El 1 de abril de 1573 Requesens informaba a su hermano de la marcha de las negociaciones pidiendo que hiciese partícipe de todo ello a Luis de Guzmán, comunicándole además su intención de retornar a la península para ocuparse personalmente del asunto: "pues es tan necesaria la ida para concluir este negocio y Villegas tiene en más de lo que yo pensé la ida de Flandes y así les pareciera a los teatinos que gobiernan a doña Luisa" (IVDJ, envío 81 (caja 109) nº 275). En la misma línea, véase, J.MARCH, *El Comendador mayor...*, p. 166, nº 17.

(21).- Ibid., p. 320; CODOIN, Vol.102, pp. 74-76. Requesens, en su misiva al rey, exponía las condiciones que doña Luisa había establecido para llegar al concierto, y para las que solicitaba la merced real. Pretendía Requesens, según los requisitos demandados, que el monarca pasase su encomienda a su hijo y que le diese título y tratamiento de Grande. En cuanto a los doscientos mil ducados que debían ser empleados en cuestiones provechosas a la hacienda de doña Guiomar Requesens afirmaba que estaba dispuesto a vender los juros que poseía y consignar los frutos de su hacienda, solicitando a Felipe II que le procurase algún medio para su propia subsistencia.

tanto, no acordase el matrimonio de su hija con otra persona. Se aseguraba a Busto de Villegas que recibiría el favorecimiento del príncipe de Eboli si actuaba convenientemente en esta cuestión, quien, por otra parte, se hallaba muy decepcionado por el comportamiento del obispo de Cuenca, a quien había dispensado su protección y no estaba actuando en este tema de la manera que cabía esperar de su gratitud. Sin duda se sospechaba que estaba favoreciendo las intenciones por un lado de Requesens y, por otro, de Alvaro de Mendoza, castellano de Nápoles, quien también esperaba unir a doña Guiomar con su primogénito. Una carta posterior del mismo personaje e igual destinatario viene a arrojar luz sobre lo que había sucedido, salvando la responsabilidad de Gaspar de Quiroga en la evolución de esta cuestión y resaltando la homogeneidad del grupo (22). Muy posiblemente Quiroga hubo de mantener una apariencia de equilibrio entre las diferentes candidaturas a alzarse con la mano de doña Guiomar. Si bien debía servir los intereses de su patrón, también estaba obligado por los lazos que le unían a la familia Mendoza, e, igualmente por su amistad con Luis de Requesens (23). Su estrecha vinculación a la familia de su primer protector, el cardenal Tavera, y la continuidad de su relación con Luisa de la Cerda, convertían a Quiroga en una importante pieza que todos los aspirantes trataron de ganar para favorecer sus intereses, por la capacidad para inclinar la

(22).- Dichas misivas escritas a Busto de Villegas se encuentran en AGS, CJH, leg.164, nº 22. En la segunda de ellas, a la que hemos hecho referencia, fechada el 7 de julio de 1573, se dice: "y parecame q tiene [Ruy Gómez] más satisfacción que antes de Quiroga porque con lo q te avra dicho y Vs^a me escribió debe haber visto q no tuvo culpa en lo del casam^o y esto se comprueba con haber pasado tan adelante lo del com^o mayor cuya amistad no podía anteponer a la de Ruy Gómez q le hizo obispo y aunque en esta parte confieso a Vs^a que no me ha hablado claro por el sinsonete de las palabras entiendo que tiene queja de Vs^a que le haya antepuesto al dho comendador mayor pareciendole que como cosa del Collegio habra Vs^a de favorecer los descendientes del q lo fundó demas de tener esta pretensión". También se planteaba en la carta que, puesto que la hija de doña Luisa debía esperar cuatro años para realizar el matrimonio con el hijo de Requesens por la edad de este, y no estando la boda definitivamente acordada, no se debía excluir la posibilidad de que, dejando pasar seis años, pudiese tomar estado con el segundo de los hijos varones de Ruy Gómez. Sobre la vinculación de doña Luisa de la Cerda con la princesa de Eboli, véase, M. FORMICA, María de Mendoza (Solución a un enigma amoroso) Madrid 1979, pp, 49 y 53-54.

(23).- Si bien Diego de Espinosa había sido una figura cercana tanto a Luis de Requesens como a Juan de Zúñiga, a cuyos buenos oficios en Roma creía deber la concesión del capelo cardenalicio, al final de su vida las relaciones entre ellos se fueron deteriorando, acercándose Requesens a su grupo opositor en la Corte. Sobre las cuestiones que motivaron el enfrentamiento entre Espinosa y Requesens, véase, J.M. MARCH, El comendador mayor..., pp, 115 y 151.

voluntad de doña Luisa que le otorgaba esta confianza.

No obstante, el rumbo de los acontecimientos sufrió un cambio en los meses siguientes debido principalmente a dos cuestiones. La primera vino determinada por la actividad de Juan de Zúñiga. Enterado el embajador de los planes de Colonna, no dudó en poner a Felipe II en conocimiento de la propuesta matrimonial que este había realizado a Jacobo Buoncompagni referida a Guiomar Pardo. El 19 de junio, Juan de Zúñiga señalaba al monarca como, a pesar de sus reiterados intentos, Gregorio XIII había prohibido a su hijo aceptar la pensión de tres mil ducados que se le había ofrecido, aunque según el criterio del propio interesado, la negativa de su padre estaba condicionada por la poca cuantía del beneficio. La avaricia del hijo contrastaba con el buen criterio del papa, sabedor de que consentir la concesión de estas mercedes condicionaría seriamente su libertad de actuación durante su pontificado. Esta había sido la causa, según informaba el embajador, de que Gregorio XIII hubiese desconfiado de la propuesta de Colonna, pues consideraba que el ofrecimiento de un matrimonio tan ventajoso escondía, necesariamente, otras pretensiones, sobre todo, como había apuntado el Cardenal Pacheco a Zúñiga, teniendo en cuenta que los bienes de doña Guiomar se hallaban en la Península, considerando más factible la aceptación de un estado en Nápoles. Finalmente, el embajador no dejaba de señalar a Felipe II su sorpresa y desconocimiento absoluto sobre este tema, que le había participado el Cardenal Altaemps hacía solamente seis días. El purpurado creía que Zúñiga se hallaba al corriente de esta cuestión, puesto que, tanto Gregorio XIII como la Curia pensaban que Colonna actuaba por orden del rey (24). Si bien esta actuación enojó en un primer momento al monarca, puesto que esta operación se estaba desarrollando en su más absoluta ignorancia, lo cierto fue que posteriormente atisbó las posibilidades del plan trazado por Eboli y Colonna. Por otro lado, quien también encontró la parte positiva a este intento fue Juan de Zúñiga, que, a pesar de que esta cuestión contravenía seriamente los planes de su hermano, el 24 de julio de 1573,

(24).- Sobre dicha cuestión, véase, AGS, Estado, Leg.921, n° 119-120 y 185-186; CODOIN, Vol.102, pp, 158 y 163.

comunicaba a Felipe II que sus intentos frustrados de que Jacobo Buoncompagni optase por la pensión que el monarca le ofrecía sin que el pontífice lo supiese, convertían la posibilidad de que aceptase el matrimonio con Guiomar Pardo en una excelente opción para los intereses del monarca. Por el contrario, advertía al rey que, si la proposición era rechazada, convenía aclarar tanto a Gregorio XIII como a su hijo que Felipe II era desconocedor de la misma y que Marco Antonio Colonna había actuado por cuenta propia. Para que no pudiesen sentirse ofendidos, se podría ofrecer a Gregorio XIII, cuando se decidiese a casar a su hijo, el hacerle una merced de tres o cuatro mil ducados de renta sobre vasallos del reino de Nápoles, lo que, sin duda, el monarca vería recompensado largamente en la concesión de gracias papales (25). Solamente unos días después, se producía el segundo factor fundamental para el desarrollo de los hechos. El 29 de julio fallecía Ruy Gómez de Silva sin que la actuación en torno al matrimonio del hijo de Gregorio XIII hubiese logrado clarificarse. La evolución de los acontecimientos era imprevisible y, ante el aparente enfado del rey, Antonio Pérez no dudó en poner en conocimiento del monarca todo el asunto en la misma carta en que le daba la noticia del fallecimiento del príncipe de Eboli, cargando con toda la responsabilidad de lo sucedido a Marco Antonio Colonna, al que acusaba de haberse excedido y de haber obrado de forma personalizada (26). La orden recibida del rey fue que todo lo concerniente a esta cuestión lo tratase con el doctor Martín de Velasco. Esta actitud del secretario se reiteró en sucesivas comunicaciones con el monarca, llegando a asegurar que desconocía este negocio hasta que, muerto Ruy Gómez, se hizo cargo de su correspondencia (27).

(25).- CODAIN, Vol.102, p, 197.

(26).- IVDJ, envío 60 (caja 80 bis) fol 38r-39v. Por su parte Luis de Requesens escribía a su esposa el 6 de agosto de 1573: "Es cierto que me ha pesado mucho la muerte de Rui Gómez y héchome muy gran lástima, con habersenos quitado un muy grave embarazo para el casamiento de nuestro hijo ...y no podriades creer las maldades que se han hecho y hacen de nuevo para desbaratarlo..." (J.M.MARCH, El Comendador mayor..., pp, 325-326).

(27).- A través de la correspondencia de Pérez conocemos que, otra de las posibilidades que se contemplo fue el matrimonio del hijo de Gregorio XIII con la segunda de las hijas de Luisa de la Cerda, doña Catalina. Pérez afirma que Colonna se había excedido en prometer al papa una dote de trescientos mil ducados, pero que era de vital importancia ganar al pontífice por este camino. Velasco le había preguntado qué medio se podría utilizar para conocer con qué dote contaba doña

Mientras que Marco Antonio Colonna remitía a Felipe II un memorial que le congraciase con el monarca, consciente de la delicada situación en la que se encontraba (28), Gaspar de Quiroga decidió optar definitivamente por favorecer las pretensiones de Luis de Requesens y, sobre todo, los intereses de Luisa de la Cerda, protagonizando, junto a Busto de Villegas, las negociaciones conducentes al matrimonio, de las que se mantuvo permanentemente informado al rey (29). En octubre de 1573, el gobernador del arzobispado de Toledo procedió a realizar un borrador de las capitulaciones matrimoniales, según los poderes que para ello había recibido de Requesens y de su esposa, e informaba a Felipe II que si eran aceptadas por doña Luisa, el matrimonio se podría celebrar con brevedad (30). Sin embargo, las negociaciones se siguieron desarrollando a lo largo de 1574, paralizadas por la falta de resolución el monarca en relación a conceder a Luis de Requesens la petición realizada en

Catalina. Opinaba Pérez que la información la podría obtener el secretario Escobedo, a quien Ruy Gómez ya había utilizado en sus comunicaciones con Busto de Villegas, que se había encargado informar a doña Luisa de estos planes. Pensaba además el secretario que esta opción era bien acogida por Velasco, por Juan de Zúñiga y por Luis de Requesens, puesto que así tendrían parentesco con el hijo del papa. El rey, en su contestación, pareció desconcertado, apuntando a Pérez que se debía decidir cual de las dos hijas de Luisa de la Cerda se debía ofrecer en matrimonio, dando su negativa a que ni Escobedo ni otra persona realizase dicha indagación (IVDJ, envío 60 (caja 80 bis) fol 30r-32r).

(28).- M. RIVERO RODRIGUEZ, "El servicio a dos Cortes...", pp. 359-360.

(29).- Véase la carta que el gobernador de Toledo remitió al monarca el 18 de septiembre de 1573, en la que contaba el consentimiento dado por doña Luisa al casamiento condicionado a la información que esperaba recibir de Gaspar de Quiroga, a quien la dama había solicitado que se informase sobre ciertas noticias que había tenido acerca de la precaria salud del pretendiente (IVDJ, envío 89 (caja 125) n° 214). Sobre la importancia que había tenido la actitud del rey respecto a esta boda, comentaba el gobernador al monarca el 23 de octubre: "yparecese bien haber puesto V.Mt. la mano en él tan de veras y haber prevenido al Inquisidor General porque él [Quiroga] y madre y hija se han allanado de manera que desean el efecto y brevedad del negº con la voluntad de V.Mt.o el Comendador Mayor o yo" (Ibid., envío 62 (caja 83) n°6).

(30).- Busto de Villegas apuntaba que Luisa de la Cerda expondría las capitulaciones al criterio de Quiroga, "y siempre que V.Mt. encomiende la brevedad del [negocio] al Inquisidor General sera de gran importancia porque es el todo con madre y hija" (Ibidem). Menos optimista se mostraba Requesens sobre el avance de las negociaciones aunque mantenía una fluida correspondencia con todos los interesados (CODOIN, Vol.102;p, 351). Igualmente desconfiado se mostraba su hermano Juan de Zúñiga, aunque esperanzado por las noticias que tenía, "y al obispo de Cuenca he scripto las gracias de lo bien que lo ha hecho, de que le quedamos en grandísimo cargo" (Ibid., p, 346). En términos semejantes de gratitud hacia Quiroga se expresaba Luis de Requesens (Ibid., pp, 374 y 419). Sobre las instrucciones dadas por Requesens y su hermano en torno a los preparativos de la boda, véase, Ibid., pp, 384-409).

torno a otorgar a la familia de Arias Pardo el título de Grandeza, así como el retraso de hacer efectivas las condiciones monetarias exigidas por doña Luisa y reflejadas en las capitulaciones, además de por las serias dudas que ésta albergaba sobre el buen estado de salud del pretendiente (31). Finalmente, el matrimonio quedó concertado el primer domingo de noviembre, habiendo adoptado resolución Felipe II de resolver la cuestión concerniente al título nobiliario tras la celebración del desposorio (32).

Por otra parte, Felipe II no había renunciado a su proyecto de lograr un mayor influjo sobre el pontífice a través de crear una vinculación con su hijo. En este sentido, Juan de Zúñiga comunicaba al rey, en noviembre de 1573, como Jacobo Buoncompagni se mostraba menos ambicioso, lo que hacía albergar esperanzas de que se aviniese a aceptar la pensión de tres mil ducados que en ocasiones precedentes le había sido ofrecida. De igual manera, transmitía al rey la información que le había procurado el Cardenal Pacheco, según la cual, el hijo del papa se encontraba inclinado a casarse con una hija bastarda del duque de Parma, a la que el Cardenal Farnesio iba a dotar con doscientos mil ducados. Pacheco había recibido comisión para evitar esta unión, presentando como contraoferta el desposorio con una hija del duque de Florencia habida antes de su matrimonio. En opinión del embajador, ninguna de las dos opciones tenía mucho fundamento (33). A pesar de los intentos realizados por Felipe II para conseguir sus objetivos, la cuestión del matrimonio de Jacobo Buoncompagni se dilató durante años. Finalmente, tomó como esposa a una hija del duque de Urbino y obtuvo la concesión del título de conde de Sora, adscrito al reino de Nápoles.

(31).- IVDJ., envío 89 (caja 125) n° 215 y 216.

(32).- Las negociaciones se continuaron hasta unos días antes de la boda, manteniendo siempre Gaspar de Quiroga un papel central en las mismas y actuando siempre en favor de las pretensiones de Luisa de la Cerda y velando siempre por sus intereses económicos. Sobre los pormenores de la misma, véase, *Ibid.*, envío 89 (caja 125) n° 217; *Ibid.*, envío 53 (caja 69) n° 142, 145, 146, 147 y 175; *Ibid.*, envío 76, (caja 102), fols 483-484; Sobre la efímera duración de este matrimonio a causa de la prematura muerte del hijo de Luis de Requesens, véase, M. FORMICA, op. cit., pp. 55-58.

(33).- CODOIN, vol.102, pp. 348, 371 y 372.

6.2. Los años de dominio del "partido papista" (1576-1579)

Tras la muerte de Diego de Espinosa, Felipe II procedió a realizar la elección de los personajes que debían tomar el relevo en los cargos que había acumulado el Cardenal. En la presidencia del Consejo Real, si bien había sonado con insistencia en la Corte el nombre del doctor Martín de Velasco para hacerse cargo de la misma, lo que hubiese supuesto la continuación de la política desarrollada por Espinosa, el monarca resolvió designar para el ejercicio de este oficio a Diego de Covarrubias, obispo de Segovia (34). Al frente de la Suprema, el rey señaló a Pedro Ponce de León, obispo de Plasencia. Sin embargo, su pronta muerte hizo que el cargo de Inquisidor General recayese, en abril de 1573, en Gaspar de Quiroga, quien también había sido considerado un posible candidato a la presidencia de Castilla (35). La sucesión de fallecimientos de señalados personajes que se produjo a lo largo de ese año conllevó que se abriese un período de indeterminación por parte del monarca sobre las personas en las que iba a depositar su confianza. Durante el mismo, las

(34).- Según informaba Juan de Zúñiga al rey en noviembre de 1572, Gregorio XIII había expresado su alegría cuando le fue notificada por el embajador esta provisión. Afirmaba que el agrado del pontífice provenía de que conocía a Diego de Covarrubias por haber asistido juntos a la tercera etapa del Concilio de Trento, y además porque "era tanto el miedo q'l papa y todos los desta Corte tenían q no entrase en este lugar el Doctor Velasco q de cualquiera se contentaran (...) holgo mucho también el papa de q VMD divida el offº de presidente del de Inquisidor General y me dijo que pluviese a Dios q VMD acertase en la election de Inqor como ha hecho en la de presidente, también se contenta de que pueda entremeter en las causas criminales como no tenga voto decisivo en la sentencia" (IVDJ, envío 111 (caja 156) nº 318); En torno a la figura de Diego de Covarrubias, véase, C. GUTIERREZ, Españoles en Trento, pp, 238-245; R. BURGOS, España en Trento, p, 142; L. PEREÑA VICENTE, Diego de Covarrubias y Leyva. Maestro de derecho internacional, Madrid 1957; J. FERNANDEZ MONTAÑA, Los Covarrubias, Madrid 1935, pp, 27-29, 34-36 y 136-138.

(35).- L. CABRERA DE CORDOBA, op. cit., II, p, 127: "Luego, D. Felipe mandó a un ministro de quien fiaba mucho, que después fue presidente de Valladolid, le advirtiese de las personas más a propósito, para elegir de ellas sucesor del Cardenal, y dixo: "Era Obando, presidente del Consejo de Indias inmediato a serlo del de Castilla, verdadero, entero, suficiente, solo se le oponía el tener tan bien entendidas las materias de su oficio, que le haría falta. El doctor Martín de Velasco, del Consejo de Cámara, tenía mucho del gran expediente de Espinosa, y práctica de los negocios de Italia y Flandes y de los Castilla por sus oficios; más sus hijos y nietos daban que pensar para dudar de elegille. Don Antonio de Padilla, presidente del Consejo de Ordenes, procedía bien y como gran letrado, más la persona pequeña le desfavorecía y por entonces estaba bien premiado. Gaspar de Quiroga, obispo de Cuenca, tenía condición más para la Inquisición General, y así se la encargó el rey".

facciones cortesanas se fueron reorganizando en torno a los nuevos patronos, pugnando por obtener una mejor situación para atraer la confianza real y beneficiarse de su gracia para dominar la administración de la Monarquía (36). Mientras que Mateo Vázquez centró sus esfuerzos en dominar el Consejo y la Cámara Real, el "partido" papista diversificó sus objetivos, comenzando a colocar a sus miembros en los distintos organismos del aparato institucional. Para alcanzar su aspiración de convertirse en el secretario personal del rey, Vázquez no dudó en deshacerse del lastre de otras ocupaciones y oficios, aunque estas tuvieran una alta significación, como la secretaría del Consejo de Inquisición. Pocos meses después de haber ocupado Gaspar de Quiroga el cargo de Inquisidor General, Mateo Vázquez remitía al monarca un memorial en el que le informaba de su situación en el ejercicio de dicha secretaría, así como de sus futuros proyectos (37). En favor de los mismos, Vázquez alegaba que si bien todas las materias contaban con un secretario propio, el rey era el único que carecía de él, lo que incrementaba sus ocupaciones y minaba su salud. El contar con un secretario suavizaría enormemente el trabajo del monarca, ocupándose de recordar los asuntos al rey, redactando las respuestas a los mismos, concertando las juntas secretas o extraordinarias, etc. Aludía también a que el contar con un secretario personal conllevaba la dificultad de tener que hacer una rigurosa

(36).- Altamente clarificadora, en este sentido, es la carta que el doctor Juan Milio remitió desde Flandes al secretario Juan de Albornoz en 1573. Además de disertar sobre el reciente óbito de Ruy Gómez de Silva, a quien se refería en términos de profunda enemistad por el perjuicio político que había causado a su patrón, el Duque de Alba, Milio describía la situación que se vivía en la Corte. Según sus observaciones, Felipe II "no se resuelve con nadie", y los únicos que acumulaban un mayor poder, aunque adscrito a su ámbito de actuación, eran los secretarios Delgado y Gaztelu, Hopperus y el Vicecanciller. No demostraba tener mucha confianza en el futuro político de Velasco, puesto que si el monarca se apoyaba en él era únicamente con necesidad, logrando mantener sujetos a Zayas y a Antonio Pérez solamente por las Ordenanzas. Aseguraba que únicamente mantenía su influencia en cuestiones de hacienda a causa de ser el más antiguo, y esto lo demostraba que andaba mendicando provisiones para poder comunicárselas a las partes. De los llamados por el rey a sustituir a Espinosa comentaba: "El presidente es buen hombre, pero no para más que para su oficio y aun para este pudiera ser mejor, de mas espediente, y ya su Majd entiende que ha herrado el tiro" (...) "Quiroga hace bien su officio, y no creo pasará de ay, que le han descubierto por muy colérico y cabeçudo". Por último, resaltaba los progresos que hacía Mateo Vázquez en ganarse la confianza regia "y pienso que le hemos de ver personaje" (Documentos recogidos del Archivo de la Casa de Alba. Publicados por la duquesa de Berwich y Alba, condesa de Siruela. Madrid 1891, pp, 459-462).

(37).- El mismo se encuentra en AZ, carp.144 nº1. Citado por A.W. LOVETT. op. cit., p, 36 n.41.

elección de la persona destinada a servir dicho oficio, puesto que debía estar al corriente de las materias más reservadas. Teniendo esto presente, Vázquez se presentaba ante Felipe II como el candidato idóneo para realizar este servicio, puesto que estaba avalado tanto por la confianza que el Cardenal Espinosa había depositado en él, así como por su condición de clérigo presbitero. En el memorial, el secretario pasaba incluso a describir la forma cómo quedarían organizados los escritorios y papeles, su lugar de trabajo en palacio, que debía asegurar la comunicación continua y reservada con el monarca, la necesidad de contar con una posada modesta en sus aledaños y los pasos que se debían seguir para que la otorgación del título se realizase de forma secreta (38). Puesto que para el desarrollo de tan significativa labor sería precisa una total dedicación, Vázquez mostraba su disposición a exonerarse del resto de sus oficios y beneficios, principalmente de la secretaría del Consejo de Inquisición, que conllevaba la obligatoriedad de la asistencia a las reuniones de la Suprema (39). Por otra parte, era consciente de que abandonar su cargo en dicha institución favorecía las aspiraciones del "partido papista" de dominar este organismo, por lo que representó a Felipe II el cambio operado en el secretario Jerónimo Zurita, principal hacedor del acceso de Gaspar de Quiroga al puesto de Inquisidor General. Recordaba Vázquez al monarca como antes de producirse la muerte de Espinosa, Zurita había expresado sus deseos de retirarse a su casa,

(38).- "y si la pieça en palacio pudiese tener puerta al aposento de VMd para q el paso y asist^a no se entendiese todas las veces sino las menos sería por ahora lo mejor y si en el título VMd fuese servido de resolverme podría hacerlo secretamente el s^o Gaztelu o Gracian por el suyo y refrendarlo". Añadía Mateo Vázquez que esta cuestión correspondía realizarla a Antonio de Eraso, pero que al hallarse este en Sevilla, era difícil que se pudiese mantener el secreto. Además señalaba que en dicho título se debía especificar que, hasta nueva orden del rey, todos los papeles debían pasar por sus manos, en virtud de la confianza que Diego de Espinosa tuvo siempre con él, y que el rey debía informar al Presidente del Consejo Real para que le fuese tomando juramento (Ibidem).

(39).- Además del salario y de los derechos inherentes a dicha secretaría, Vázquez ostentaba "una media ración en Cordoba q por estar cargada de pensión y lo del subsidio y excusado, la recompensa que entiendo se hallaría sería algún prestamo o beneficio simple de ciento cincuenta ducados de renta, este gozo sirviendo en el Santo Oficio lo que no sería sin él y si la nueva ocupación no fuese compatible, parece de consideracion lo de mi entretenimiento". De igual manera ostentaba el arcedianazgo de Pastrana, de cuyos frutos debía desconocer su verdadero valor, aunque, en ningún caso, sobrepasaba los cien ducados. Si bien Vázquez conservó en un principio esta renta, el 6 de febrero de 1575 dirigió una carta a la princesa de Eboli haciendo dejación del mismo (IVDJ, envío 15 n^o2, paquete n^o3).

solicitando al rey que su oficio fuese ocupado por su hijo. Sin embargo, tras la desaparición del Cardenal, el secretario no había vuelto a mostrar su intención de abandonar su ocupación, lo que ahora dificultaba el camino de esta sucesión. Vázquez ponía a disposición del monarca su cargo para favorecer al hijo de Zurita, siempre que él obtuviese el título de secretario real y un beneficio eclesiástico en el arzobispado de Sevilla, así como que se le permitiese mantener su derecho de entrar y asistir a las sesiones del Consejo sin percibir salario, al igual que se había procedido con su antecesor, Pedro de Tapia (40). Sin embargo, no fue hasta mediados de 1574 cuando Mateo Vázquez vió cumplido su objetivo de convertirse en secretario personal del monarca, lo que le procuró una excelente situación para el ejercicio y expansión de su poder e influencia. En relación con la secretaría del Consejo de Inquisición, Vázquez quedó exonerado de su servicio, aunque vió cumplidos sus deseos de mantener la capacidad de poder entrar y asistir a las sesiones de la Suprema, y obtuvo el beneficio eclesiástico del Sarro, cercano a Utrera (41).

La ventajosa situación que Mateo Vázquez logró para sus intereses fue contestada por el grupo cortesano opositor con la obtención por parte de sus miembros de destacados puestos en el aparato institucional de la Monarquía. Junto a los principales personajes de esta facción que contaban con una importante actividad administrativa como Antonio Pérez, Gaspar de Quiroga y el secretario Martín de Gaztelu, a cuyo cargo se encontraban, entre otras, las materias relacionadas con las Ordenes Militares, las Iglesias, las Obras y Bosques, pronto aparecieron una serie de personajes que, encuadrados en el "partido papista", extendieron su influencia a otros ámbitos y organismos de la Monarquía. Especial atención merecen aquellos letrados que llegaron a ostentar señalados

(40).- AZ, carp. 144, n° 1-2; IVDJ, envío 51 (caja 67) n° 23; Ibid., envío 90, fol. 588.

(41).- A.W.LOVETT, op. cit., pp. 36-38. El 16 de julio de 1574, Felipe II comunicaba a Quiroga su decisión respecto a las ocupaciones de Vázquez en relación a la Suprema, y la merced realizada en torno al beneficio eclesiástico (BL, Eg. 1506, fol. 22r-v). Pocos días después, el monarca tornaba a escribir al Inquisidor General y al secretario Gaztelu en relación a estas concesiones (IVDJ, envío 51 (caja 67) n° 34). En la expresiva felicitación que Sancho Busto de Villegas remitió a Vázquez quedaba reflejada la importancia de la situación adquirida (Ibid., envío 91 (caja 130), n° 379).

cargos a través de su vinculación a Gaspar de Quiroga (42). Este fue el caso de Antonio Mauriño de Pazos. La amistad entre ambos se remontaba a 1555, cuando Quiroga ejercía el oficio de auditor en la Sacra Rota y Pazos se desplazó a Roma, terminados sus estudios en el colegio de San Clemente de Bolonia, con la intención de iniciar su andadura en el ámbito administrativo. Esta relación se continuó cimentando a lo largo de los años, puesto que en 1566, Pazos, entonces inquisidor en el tribunal de Toledo, realizaba una firme defensa de Gaspar de Quiroga ante el agravio que estaba recibiendo por parte del cabildo catedralicio de dicha iglesia con su reiterada negativa de hacer efectivo el pago de los frutos de su canonicato en ausencia, y que Quiroga reclamaba en virtud de los privilegios otorgados por los pontífices al Santo Oficio. La ostentación por parte de Quiroga del Cargo de Inquisidor General favoreció el ascenso de Pazos, quien contando con su protección y con una amplia experiencia administrativa, pasó a ocupar la Presidencia del Consejo de Castilla en 1578 (43). Desde que Pazos

(42).- La acumulación de oficios y dignidades obtenidas por Gaspar de Quiroga entre 1573 y 1577 hicieron que su poder e influencia en la Corte durante dichos años fuesen crecientes. La proliferación de las Juntas habida en 1574 provocó en muchos casos un retraso en el tratamiento de los negocios por pertenecer sus integrantes a varias de las mismas, además de tener que atender las obligaciones inherentes a sus oficios. Una de las personas que mayores dificultades encontraba para poder coordinar su asistencia a todos los ámbitos en los que desarrollaba su actividad, tanto por su variedad como por la dedicación que por su importancia requerían, era Gaspar de Quiroga. En este sentido véase la carta que Mateo Vázquez remitió a Felipe II el 14 de julio de 1574 manifestando sus dificultades para poder acordar la asistencia de todos los miembros a las juntas para una nueva sesión, siendo el monarca quien señalaba las prioridades: "es verdad que mañana conviene q despues del qº destado queden juntos el presidente y el Inquisidor General y así por mañana podran descansarla juntos" (IVDJ, envío 53 (caja 69) s. f.). El 29 de agosto el secretario refería al monarca: "A lo de las juntas lo que yo puedo decir es que a las mañanas hay más necesidad del Inquisidor General que a las tardes y no hay para que se regale tanto por que a las mañanas se trata lo principal del gobierno y se ven las cartas y se provee lo que tiene más necesidad de su asistencia, parecer y orden / para las tardes se suelen dejar algunos pleitos criminales en que él no vota (...) y que el Inquisidor General podra ordenar los negocios del Consejo de la manera que haga menos falta su ausencia de las tardes" (Ibid, envío 51 (caja 67) nº 37).

(43).- Tras su salida de San Clemente, Pazos retornó a la península comenzando a prestar sus servicios en la Audiencia de la Coruña. Gracias al favorecimiento de Fernando de Valdés, en 1562 entró a formar parte del engranaje del Santo Oficio, ejerciendo el cargo de inquisidor en los tribunales de Sevilla y Toledo, hasta que en 1566 fue incluido en el grupo de letrados inquisitoriales que debían trasladarse a Roma para la continuación del proceso que se seguía contra el arzobispo Carranza. Tras realizar en 1574 una visita a la Inquisición de Sicilia, a instancias de Quiroga, en 1577 llegaba a la Corte, donde obtuvo el favor de su protector. Sobre dicho personaje, véase el excelente trabajo realizado por I. J. EZQUERRA REVILLA, El ascenso de los letrados eclesiásticos: el presidente del Consejo de Castilla don Antonio Mauriño de Pazos, 1578-1582.

retornase a la Península en la primavera de 1577, tras haber realizado labores de visitador en el tribunal inquisitorial de Sicilia, Quiroga había iniciado sus peticiones al rey en favor de su protegido, solicitando que el título de obispo de Pati que Pazos poseía se viese conmutado por el de un obispado en Castilla (44). Si bien Quiroga logró su objetivo y Pazos fue proveído como obispo de Avila, hubo de renunciar a esta prelación cuando accedió a la presidencia del Consejo Real. El 27 de septiembre de 1577 había fallecido Diego de Covarrubias. El rey volvió a considerar la candidatura de Gaspar de Quiroga para que se pusiese al frente de dicha institución, como había sucedido tras la muerte de Diego de Espinosa, teniendo presente que Quiroga contaba con licencia del papa para residir en la Corte en virtud de su ocupación como Inquisidor General, estando exento de la obligación de residir en su iglesia establecida en los decretos tridentinos. Quiroga rehusó el asumir este nuevo cargo, excusándose ante el monarca por las muchas ocupaciones con que contaba, y señalando al rey la persona de Antonio Mauriño de Pazos como la más idónea para ejecutar este oficio. Siguiendo el parecer del Inquisidor General, Felipe II proveyó a Pazos en dicha presidencia en abril de 1578 (45). Sin duda el nombramiento no fue bien acogido por el "partido castellanista", que contaba con aspirantes más cualificados que Pazos para ocupar este oficio como Antonio de Padilla, presidente del Consejo de Ordenes, Sancho Busto de Villegas o Diego de Simancas (46). Los informes remitidos por Juan de Zúñiga, vinculado a dicha

Memoria de Licenciatura. U.A.M 1992; Un resumen de la misma aparece recogido en La Corte de Felipe II, pp, 271-303.

(44).- El 6 de mayo de 1577 Quiroga se dirigía al monarca con esta petición, resaltando los muchos servicios que Pazos había realizado a la Monarquía. Felipe II advertía al Inquisidor General que si bien parecía una persona idónea para ocupar esta dignidad, el otorgarle un obispado podía resultar un impedimento para otros acrecentamientos a causa de su obligación a residir en su sede. Además, era inconveniente que abandonase el obispado de Pati, por las dificultades que representaba el tratamiento de los asuntos eclesiásticos de Sicilia con el pontífice, así como porque había que señalar como nuevo prelado de Pati a un natural del reino. No obstante, aseguraba a Quiroga que sopesaría dichas cuestiones (BL., Eg. 1506, fol.54r-v).

(45).- BSCV, Ms. n°16, fols 148v-149r; P. SALAZAR Y MENDOZA, op. cit., p, 290; G. GONZALEZ DAVILA, Teatro eclesiástico de las Iglesias..., p, 489.

(46).- Diego de Simancas había tornado a la Corte tras la finalización del proceso Carranza. Muerto su protector, Fernando de Valdés, acudió en búsqueda de un nuevo patrón. Proveído para el obispado de Zamora, trató de no verse desplazado de la Corte por la forzosa residencia.

facción política, intranquilizaron a Felipe II, puesto que, según refería el embajador, el nuevo presidente procuraría que su actividad al frente de la institución se hallase cercana a los planteamientos papales sobre la política de la Monarquía. Quizás, la duda sembrada en el rey en cuanto a haber procedido a una elección errónea en este sentido, motivó que le fuesen entregados a Pazos unas intrucciones muy concretas sobre el ejercicio de su oficio, siendo impuesto, a propuesta de Mateo Vázquez, Antonio de Eraso como secretario de oficio, lo que evitaba que el nuevo presidente hubiese de tener posibilidad de acceso directo y trato cotidiano con el monarca (47).

Por otra parte, la vinculación existente entre el "partido papista" con los asuntos derivados de la Santa Sede motivó que en la Corte tratasen de mantener bajo su control los asuntos relacionados con la concesión de la Cruzada. La ofensiva desplegada por el "partido papista" mediante el influjo que sus miembros fueron adquiriendo en la toma de decisiones políticas de la Monarquía y la ocupación de importantes cargos en la misma (48), logró desplazar a

Simancas se quejaba amargamente de que tanto el secretario Gaztelu como Gaspar de Quiroga había actuado de forma artificiosa con él, asegurándole su ayuda para alzarse con la presidencia de Castilla mientras que favorecían realmente a Pazos. En relación con el Inquisidor General refería: "El discurso que sobre esto hicieron hombres cuerdos fue este: que viéndose el arzobispo muy malquisto y siendo de condición áspera y altiva, no pudo sufrir que fuese presidente hombre bienquisto y más letrado y que más había servido que él; y que temió que si a mi se daba la presidencia yo no había de estarle sujeto, y que podría desbaratar su prianza si el rey me comunicase (...) Algunos meses antes se dijo en su casa que o él sería Presidente o quien él quisiese; y el dijo una vez que no había tenido día bueno después que fue obispo, pero que todo lo sufría la señora ambición". Simancas aseguraba que las razones que habían movido a Quiroga a apoyar a Pazos estaban fundadas en el común origen gallego de sus familias, en la vieja amistad que les unía y en los servicios que Pazos le había prestado "como hombre de su propia casa". Sobre dichas cuestiones, así como las conversaciones que Simancas mantuvo con Quiroga sobre dicho asunto, véase, "La vida y cosas notables ..." pp, 197-200; El 20 de mayo de 1578 Mateo Vázquez informaba al monarca que había recibido una carta de Antonio de Padilla "y todavía parece que le escuece lo de la presidencia y he sabido que está sentidísimo del Arzobispo de Toledo" (C. RIBA GARCIA, Correspondencia privada de Felipe II con su secretario Mateo Vázquez, 1567-1591), Madrid 1959, I, pp, 175-176.

(47).- I.J. EZQUERRA REVILLA, op. cit., pp, 280-281.

(48).- Junto al secretario real Antonio Perez y a Gaspar de Quiroga, que en 1577 unió a sus otros cargos la ostentación de la sede arzobispal toledana, se encuadraban dentro de dicha facción cortesana, entre otros personajes, Martín de Gaztelu, quien tenía amplísimas atribuciones como secretario real de las Ordenes Militares, de la junta de Obras y Bosque, de las Iglesias, etc; Antonio Mauricio de Pazos, quien sustituyó a Diego de Cobarrubias en la presidencia del Consejo de

antiguos clientes de Espinosa, ahora bajo el patronazgo de Mateo Vázquez, siendo sustituidos en sus puestos por miembros de dicha facción. Esto fue lo que sucedió respecto a la comisaría general de Cruzada. Francisco de Soto Salazar, íntimo colaborador del Cardenal Espinosa y de la política propugnada por éste, fue relevado de dicho cargo por Pedro Velarde en abril de 1576 (49). Velarde, inquisidor en el tribunal de Toledo, había accedido a un puesto de consejero en la Suprema en 1572, siendo el último apadrinado que Diego de Espinosa promocionó a dicho organismo (50). Sin embargo, tras la muerte de éste, se vinculó a Gaspar de Quiroga, quien sustituyó al Cardenal al frente de dicha institución, y por tanto al "partido papista", que, sin duda, puso un especial interés en controlar el cargo de Comisario General y, por ende, los designios del Consejo de Cruzada, tan directamente relacionados con el devenir de la política pontificia y de las relaciones con la Santa Sede.

Finalmente, hemos de señalar que, al igual que había actuado Ruy Gómez de Silva, Antonio Pérez intentó atraer y mantener bajo su control a don Juan de Austria. Para ello, el secretario Juan de Soto no parecía la persona más apropiada para el desempeño de esta función, puesto que no gozaba de la confianza de importantes miembros del grupo cortesano, a los que se había enfrentado en los años anteriores (51). Antonio Pérez presentó a Soto ante Felipe II como el causante de que su hermano albergase ambiciosos proyectos, alentando las acciones de don Juan, lo que despertó los recelos del rey ante el

Castilla, y Francisco de Garnica y Juan Díez de Fuenmayor pertenecientes al Consejo de Hacienda y a la Cámara real respectivamente, dejando sentir su influencia en dichos organismos. (Ibidem)

(49).- AGS, PR, 20-81; IVDJ, envío 51 nº 60.

(50).- Sobre la relación de Velarde y Diego de Espinosa vease, IVDJ, envío 92 (caja 132) "Cartas misivas del Cardl Espinosa"; J. MARTINEZ MILLAN, "Grupos de poder en la Corte..." p, 189.

(51).- Antonio Pérez aseguraba a Felipe II que el propio Ruy Gómez había expresado su opinión de que era conveniente apartar a Soto de don Juan (BL, Add., 28.262, fols. 568-569 y 665-666). Por otra parte, habiendo fallecido el príncipe de Eboli, Soto no dudó en recabar de nuevo el apoyo del duque de Alba ante el surgimiento de las dificultades (Epistolario del III duque de Alba, Don Fernando Álvarez de Toledo. Madrid 1952, II, pp, 256-257 y 709; Documentos escogidos del Archivo de la Casa de Alba, p, 296).

secretario y propició su relegamiento de la vida política. Su puesto fue cubierto por Escobedo, pieza clave en los planes trazados por Pérez (52). Así pues, a través de dicha sustitución, Antonio Pérez y Gaspar de Quiroga conseguían un doble objetivo. Además de situar al lado de don Juan de Austria una persona de su entera confianza, saldaban a su favor un viejo enfrentamiento que, nacido durante la visita de Quiroga a Nápoles en 1559, tuvo como resultado la desaparición de Juan de Soto de la escena política.

6.2.1. Alfrente de la Suprema

Como hemos señalado, tras la muerte de Diego de Espinosa, el cargo de Inquisidor General recayó en Pedro Ponce de León, obispo de Plasencia. Sin embargo, su pronto fallecimiento, acaecido el 17 de enero de 1573, le impidió llegar a tomar posesión del oficio, puesto que las bulas de su nombramiento, fechadas el 2 de diciembre del año anterior, llegaron a la Corte cuatro días después de haberse producido su óbito (53). La tardanza en la expedición de los documentos papeles había venido determinada por la postura adoptada por Gregorio XIII, celoso defensor de la jurisdicción eclesiástica, en relación con las facultades que los Inquisidores Generales habían obtenido de sus predecesores, a las que consideraba excesivas en algunas de sus acepciones (54). El 15 de diciembre, Juan de Zúñiga remitía al monarca un memorial en el que explicaba las dificultades que el pontífice había puesto en conceder el breve al Inquisidor

(52).- A. OSORIO, Vida de Don Juan de Austria Madrid 1946, p. 175; B. PORREÑO Don Juan de Austria Madrid 1899, pp. 334-335, 339-341, 404-405, 412-414; CODOIN, Vol.28, pp. 241-247, 266-267, 280-281.

(53).- En torno a la figura de Pedro Ponce de León, véase, C. GUTIERREZ, Españoles en Trento, pp. 984-990.

(54).- El surgimiento de dificultades en torno al nombramiento había sido previsto por el secretario Jerónimo Zurita, quien, el 20 de octubre de 1572, recomendaba al rey que, en cuanto a la forma de realizar la declaración del mismo en la persona del obispo de Plasencia, se guardase el decoro debido al pontífice, no haciéndose público con anterioridad a que le fuese comunicado a Juan de Zúñiga y al Consejo de Inquisición la denominación (RAH, "Salazar" R-63, fol. 124r).

General en los términos acostumbrados (55). El embajador había realizado las gestiones pertinentes con la Congregación de la Inquisición, y, principalmente, con el Cardenal de Como, al que había representado los inconvenientes que se derivarían de limitar los poderes de los Inquisidores Generales. Los escrúpulos papales se había centrado sobre todo en tres cláusulas. Primeramente, se pretendía eliminar la facultad de advocar las causas que estuviesen introducidas en la Curia romana. En segundo lugar, mostraba su disconformidad con que el nombramiento facultase al Inquisidor General en todas las posesiones de la Monarquía y, por último, quería anular el recurso a la apelación. Zúñiga aprovechó la postura favorable del cardenalato para presentar al papa la interpretación que se daría al breve para que no resultase ningún inconveniente, señalando que, en relación a la advocación de las causas en la Corte romana, se entendía las introducidas hasta ese momento y no las que se produjesen en el futuro. De igual manera, concretaba que la facultad del Inquisidor General se refería a todos los territorios de la Monarquía donde habían hecho uso de la misma sus predecesores y, por último, que parecía conveniente que la apelación no se otorgase a los inquisidores de distrito, pero que el Inquisidor General debía mantener esta concesión referida al papa. Después de diversas conversaciones entre Zúñiga, Gregorio XIII y la congregación inquisitorial, el embajador logró su objetivo, realizándose el breve de la forma acostumbrada, sin mutación en el contenido de las cláusulas aunque sí en el formato. Así mismo, ponía de relieve el buen oficio que el Cardenal de Como y el colegio de Cardenales habían realizado para esta consecución, advirtiéndole que, durante el transcurso de estas comunicaciones, había mostrado un gran enfado por las pretensiones papales, amenazándolo con el disgusto y escándalo que provocaría en Felipe II que los documentos no se realizasen según la costumbre. El propio Zúñiga reconocía que, si bien había actuado de esta forma en salvaguarda de la autoridad de la Inquisición, podía haber imprimido excesiva dureza en la negociación, apuntando que, aunque el papa no se había mostrado molesto hacia él, era presumible que

(55).- El mismo se encuentra en IVDJ, envío 111 (caja 156) n° 326. Sobre las facultades otorgadas por los pontífices a los Inquisidores Generales, y los intentos realizados por la Santa Sede para reducirlas, véase, R. LOPEZ VELA, "Estructuras administrativas del Santo Oficio", pp. 93-104.

hiciese llegar una queja ante el rey a través del nuncio (56). No obstante, Zúñiga señalaba, el 26 de Diciembre, que, si bien se había conseguido apaciguar las reticencias papales y el nombramiento se había confeccionado con normalidad, el pontífice aún no había despachado el documento pertinente para que el obispo de Plasencia pudiese estar ausente de su prelación, lo que equivalía a un nuevo retraso (57). Por su parte, Pedro Ponce de León culpaba de las dificultades que estaban revistiendo estos trámites a la cercanía que Gregorio XIII mantenía con la Compañía de Jesús, con cuyos miembros había mantenido una latente enemistad y a quienes acusó de intentar evitar su provisión en el cargo (58).

La muerte del obispo de Plasencia desató la pugna de las facciones cortesanas por lograr colocar a uno de sus integrantes en el cargo de Inquisidor General. La propuesta del "partido castellanista" llegó al rey a través de un memorial elaborado, siguiendo un mandato del monarca, por Juan de Ovando, presidente del Consejo de Indias, en febrero de 1573. En primer lugar, establecía el principio de que era inconveniente designar para ocupar dicho cargo a un prelado, siendo mucho más provechoso que, como había sucedido en tiempos del Cardenal Espinosa, este oficio se uniese al de presidente del Consejo de Castilla. Argumentaba esta apreciación, razonándole con diversos ejemplos, con el convencimiento de que difícilmente se podían atender las obligaciones derivadas de estar al frente de la Suprema y las que procuraba la prelación, produciéndose como resultado que una de estas dos importantes ocupaciones pasaría a estar abandonada, sobre todo si la edad de la persona elegida era avanzada. Sin embargo, vincular los cargos de Inquisidor General y presidente del Consejo de

(56).- En esta misma cuestión insistía cuatro días después, enviando a Felipe II copia de los billetes que escribía al Cardenal de Como, en los que se daba a entender al papa que se produciría la ruptura con la Santa Sede si en todo no se procedía como el monarca deseaba. Apuntaba que las reticencias del Papa también estaban motivadas por la evidente desintegración de la Santa Liga (IVDJ, envío 111 (caja 156), nº 333).

(57).- Ibid., nº 337.

(58).- "y por su fallecimiento presentó el rey católico para la Inquisición General a Don Gaspar de Quiroga, tan amante de N.P. San Ignacio y de su religión, cuanto adverso le había sido el obispo de Plasencia" (B. ALCAZAR, Chrono-historia..., p. 114).

Castilla resultaba muy favorable para el acrecentamiento de la autoridad real. Finalmente, hacía llegar al rey los candidatos que, según su criterio, eran los más idóneos para ocupar dicho oficio, poniendo en primer lugar, en consonancia con lo expuesto, a Diego de Covarrubias, presidente del Consejo real y obispo de Segovia. Si esta opción no resultaba del agrado regio, se inclinaba por Pedro de Deza, presidente de la Chancillería de Granada, a quien recomendaba vivamente, antes de pasar a ofrecerse él mismo como nuevo Inquisidor General (59). Sin embargo, la designación de Felipe II para la provisión del oficio se inclinó hacia los intereses del "partido papista", puesto que para ello siguió las consideraciones realizadas por el secretario del Consejo, Jerónimo Zurita, quien presentó al rey el nombre de Gaspar de Quiroga. El conocimiento entre ambos se remontaba a los años en que Quiroga se encontraba al servicio del Cardenal Tavera, con quien Zurita había desarrollado una estrecha colaboración. Buen conocedor del funcionamiento político de la Monarquía, Zurita avalaba ante el monarca la figura de Quiroga señalando la importancia que revestía el poder contar con una persona que tenía experiencia tanto en los Consejos de Castilla y de Inquisición, siendo un perfecto conocedor de la Curia romana, donde además mantenía excelentes relaciones (60). El 22 de marzo de 1573, el rey notificaba a Zurita su decisión, ordenándole que para evitar los inconvenientes surgidos con el obispo de Plasencia, cuya designación se hizo pública antes de solicitar el nombramiento al pontífice, se avisase en primer lugar a Roma, antes de comunicárselo al propio interesado (61). La reacción del grupo "castellanista" no se hizo esperar. Solamente tres días después, Mateo Vázquez iniciaba sus maniobras en torno a conseguir el preciado título de secretario personal del rey,

(59).- Véase, IVDJ, envío 76 (caja 102), fols 458-460.

(60).- El 5 de marzo de 1573 escribía al rey: "en mi juicio no se ocurre persona de tantas cualidades y partes como la del obispo de Cuenca porque es tenido generalmente por varon muy austero y grave y lo que tienen las gentes en él por aspereza y aún lo temen en mi entendimiento en severidad, autoridad y bondad que son muy necesarias partes para este ministerio. Con esto tiene mucha experiencia de negocios, así de la curia romana como del estado de V Majestad lo que importa mucho que ha sido del Consejo real y del de Inquisición tanto años después de haber residido en cargos tan principales en q ha dejado gran aprobación de su virtud y bondad ..." (RAH, "Salazar" R-63, fol 159v); BSCV, Ms n° 16, fol 146r-v; A. CANELLAS, "El historiador Jerónimo Zurita" Congreso Nacional Jerónimo Zurita, pp, 7-22.

(61).- RAH, "Salazar" R-63, fols 130 y 162; BSCV, Ms. n°16, fols 146v.

consultando a Zurita los precedentes existentes para poder conservar su cargo de secretario de la Suprema, al que, posteriormente, como hemos señalado, no tuvo inconveniente en renunciar tras haber logrado su objetivo, quedando intacta, por otra parte, su capacidad de intervenir en el Consejo de Inquisición (62).

La bula papal referida al nombramiento llegó a Madrid el 20 de abril, comunicándose que el documento eximente de la residencia en el obispado de Cuenca se dispensaría algunos días después de que hubiese tomado posesión del cargo, lo que se produjo el 28 de mayo en el monasterio de San Felipe, sito en Madrid y perteneciente a la Orden de San Agustín, en presencia de los miembros del Consejo de Inquisición (63). Al primer acto al que asistió Quiroga ostentando el título de nuevo Inquisidor General, por expreso deseo del rey, fue el juramento como príncipe heredero del infante don Fernando, acaecido en la iglesia de San Jerónimo el día 31 del mismo mes (64).

Con el encumbramiento como Inquisidor General, Gaspar de Quiroga pasaba a convertirse en uno de los principales patronos de la Corte de Felipe II, aumentando, posteriormente, su ámbito de influencia con el nombramiento como consejero de Estado y arzobispo de Toledo. No obstante, no se puede decir que desde 1573 hasta su muerte gozase del mismo influjo y poder. La herencia política que dejó el Cardenal Espinosa fue esencial para la evolución de la política cortesana en la conformación de dos nuevos "partidos". Si bien la inclusión de Quiroga en el grupo "papista", y su acercamiento a Antonio Pérez

(62).- RAH, "Salazar" R-63, fol 163; D. DE SIMANCAS, op. cit, p, 175.

(63).- P.SALAZAR Y MENDOZA, op. cit., pp, 293-294; BSCV, Ms. nº 16, fols. 146v-147r; RAH, "Salazar" R-63, fols. 168, 172 y 179-180; A.LEON PINELO, Anales de Madrid. Madrid 1971, p, 110; AHN, Inq., leg. 5054, exp. 5; El nombramiento, comunicado a Quiroga solamente unos días antes de que las bulas llegasen a Madrid, se hizo público el 9 de mayo (Ibid., libro 252, fols. 111v-112r), recibiendo el parabién de los miembros de la Suprema unos días después (Ibid., libro 578, fol. 84r). Sobre el auto de posesión, véase, Ibid., libro 359, fols. 55v-56r. Una de las mayores dificultades que conllevó el nombramiento de Quiroga fue la asignación de una posada que tuviese las condiciones adecuadas para las reuniones del Consejo. En torno a las tribulaciones que se produjeron por esta causa, véase, RAH, "Salazar" R-63, fols. 165, 179-180; AHN, Inq. libro 578, fol. 98r-v.

(64).- RAH, "Salazar" R-63, fol. 176.

y a la princesa de Eboli cimentaron su ascenso a tan significados cargos, la caída en desgracia del secretario y de Ana de Mendoza también motivó que Quiroga se viese relegado de la gracia real desde 1580. Los principales puestos de la administración fueron ocupados por los miembros de la facción "castellanista", que pasaron a gozar de la confianza del monarca, lo que se tradujo para Quiroga en su relegamiento en los asuntos de Estado y también del Santo Oficio, quedando reducida su actividad a la labor desarrollada en su arzobispado. El cambio político que tuvo lugar en el gobierno de la Monarquía en torno a 1585, una vez que Felipe II retornó de Portugal, celebró Cortes en Monzón y desposó a su hija, convirtió a Quiroga en una mera figura decorativa en el desempeño de los cargos que ostentaba, como en aquellos que se le encomendaron en adelante, puesto que no contaba con una posición propicia en la nueva configuración. Así pues, la evolución vital de Gaspar de Quiroga desde 1573 tuvo dos etapas claras, desarrollándose la primera de ellas desde su nombramiento como Inquisidor General hasta 1580, en que alcanzaría su máxima influencia en el ejercicio del poder, mientras que durante la segunda, que estaría referida al periodo 1580-1594, hubo de irse adecuando a los avatares cortesanos y a la modificación en la forma de gobierno que se produjo a mediados de la década de los ochenta. Sin embargo, con la finalidad de procurar una unidad temática al estudio y mostrar la influencia que esta evolución tuvo en determinadas cuestiones, hemos traspasado en algunas ocasiones los márgenes cronológicos definidos por ambas etapas.

a/ La renovación de la institución inquisitorial

La gestión de Gaspar de Quiroga al frente de la Suprema revistió una enorme importancia, no sólo por el amplio margen de años que ejerció esta labor, sino porque supuso el colofón del proceso iniciado durante la ocupación del cargo de Inquisidor General por parte de Diego de Espinosa. En términos generales, podemos establecer que, durante el último tercio del siglo XVI, Gaspar de Quiroga afianzó la estructuración y reformas administrativas que habían introducido sus predecesores, todas conducentes al fortalecimiento del Santo Oficio, además de poner a la institución al servicio de la Monarquía para

culminar el proceso de confesionalización como un instrumento político y de control social (65).

Como hemos señalado, durante los años centrales de la centuria se había producido una dicotomía de carácter político-religioso en Europa. La iglesia católica había establecido unos principios reformísticos que se habían visto plasmados en los preceptos emanados del Concilio de Trento, que fueron asumidos por la Monarquía hispana como elementos consustanciales a su política, lo que hizo que se iniciase una imposición de esta ideología que afectó tanto a la esfera política y religiosa como social (66). La renovación y adecuación del Santo Oficio al servicio de la política confesional fue iniciada por Diego de Espinosa en la década de 1560. En este proceso, no sólo fijó los diversos organismos y oficiales que debían existir en el Santo Oficio, así como su extensión por todos los reinos de la Monarquía estableciendo el número de familiares que debía haber en cada población y potenciando la creación de nuevos tribunales inquisitoriales, sino que, además lo organizó administrativamente, promulgando una serie de cartas acordadas en las que se estipulaban los libros que debían constar en los archivos de cada tribunal y fijaban los oficiales que pertenecían al fuero inquisitorial, detallando cuales eran

(65).- La historiografía tradicional ha valorado la actividad de Gaspar de Quiroga al frente de la Suprema como de una menor rigidez que la desarrollada por sus predecesores. Sin embargo, son varios los historiadores que han denotado la continuidad en su línea de actuación, aunque tal vez se perciba en el caso de Quiroga un talante distinto porque cuando accedió al cargo la labor fundamental ya estaba realizada. En este sentido, véase, V. PINTO CRESPO, "Los inquisidores Espinosa y Quiroga". J. PEREZ VILLANUEVA Y B. ESCANDELL BONET, op. cit., I, pp, 768-769; En torno al enorme control que se ejercía en la segunda mitad del siglo XVI sobre los tribunales inquisitoriales no pertenecientes a la Corona de Castilla y su utilización política, afirma W. MONTER: "ya no era necesario tanto detalle al realizar los informes. La lección había sido aprendida en lo esencial y la autonomía local ya se encontraba definitivamente recortada" (La otra Inquisición. La Inquisición española en la Corona de Aragón, Navarra, País Vasco y Sicilia, Barcelona 1992, pp, 90-92).

(66).- En torno al Confesionalismo en Europa, véase, R. PO-CHIA HSIA, Social discipline in the reformation central Europe, 1550-1750. London-New York 1992, pp, 1-9; H. SCHILLING, "The Reformation and the rise of the Early Modern State". Luther and the Modern State in Germany. Kirksville 1986 (Ed. James D. Tracy), pp, 21-30; Así mismo, véase el artículo de R. BIRELEY "Neve Orden, Katholische Reform und Konfessionalisierung". Die Katholische Konfessionalisierung. (Hrg. W. Reinhard und H. Schilling) Münster 1995, pp, 145-157. Este libro, que contiene las ponencias del Congreso que sobre reforma católica se celebró en 1993, resulta, a mi juicio, el más interesante y renovador sobre la confesionalización católica.

sus privilegios. También obtuvo una Cédula Real en 1568 que aumentaba el salario de los servidores del Santo Oficio de forma conveniente (67).

Gaspar de Quiroga vino a culminar este proceso de adecuación de la estructura administrativa inquisitorial a las nuevas necesidades de la Monarquía. Por una parte, encauzó su actividad para conseguir que la Inquisición controlase en mayor medida el espacio peninsular. Para ello, hizo que en 1574 se asentase de forma definitiva el tribunal inquisitorial en Galicia, tras las vicisitudes acaecidas en los años precedentes (68). También continuó manteniendo la llamada Inquisición de la Mar, creada en 1571, y posteriormente Inquisición de la Armada, al extender su labor de vigilancia a los ejércitos de tierra, aunque su evolución estuvo intimamente ligada a la de la Santa Liga y su existencia provocó infinidad de conflictos jurisdiccionales (69). Por otra parte, también veló por ejercer un fuerte control del territorio desde el seno de la propia institución, rematando la reglamentación en torno a la visita del distrito iniciada por Fernando de Valdés. La obligada salida anual de un inquisidor para realizar una inspección dentro del marco geográfico dependiente de la sede del tribunal había sido normativizada tanto en sus métodos como en sus objetivos. Sin embargo, Valdés dejó sin resolver una de sus mayores dificultades, el problema económico, puesto que el inquisidor encargado de llevar a cabo la visita había de costear los gastos que se derivaban de la misma, por lo que esta actuación provocaba displacencia en los propios inquisidores y favorecía la aparición de la corrupción. Para remediar esta situación Quiroga estableció una cantidad fija que se debía abonar a cada inquisidor que efectuase la visita del distrito en concepto de gratificación, y una variable para sus acompañantes relacionada con la calidad del oficio que desempeñase en el escalafón inquisitorial. Esta actuación sobre el

(67).- J.MARTINEZ MILLAN, "En busca de la ortodoxia...", pp, 216-227.

(68).- Sobre la accidentada fundación del tribunal inquisitorial de Galicia, véase, J.CONTRERAS, El Santo Oficio de la Inquisición de Galicia (poder, sociedad y cultura). Madrid 1982, pp, 23-41.

(69).- Idem, "Las adecuaciones estructurales en la Península" J.PEREZ VILLANUEVA Y B.ESCANDELL BONET, op.cit.,I,pp, 742-743.

distrito venía a complementar el control sobre el territorio ejercido a través de la labor realizada por comisarios y familiares (70).

A los intentos de extremar la vigilancia sobre el espacio físico para prevenir el nacimiento de cualquier brote de heterodoxia religiosa y asegurar el mantenimiento de la calma sociopolítica, Quiroga unió su deseo de hacer del Santo Oficio una organización modélica en su funcionamiento. Para ello, era esencial que todos los oficiales que prestaban sus servicios en la Inquisición se condujesen con un recto proceder, ajustado a la reglamentación institucional. Para evitar y corregir las posibles desviaciones que se produjesen de una estricta y limpia conducta, Quiroga continuó favoreciendo y ordenando la realización de visitas a los distintos tribunales inquisitoriales, al igual que había actuado Espinosa, encargando dicha labor a un miembro de la Suprema o a un inquisidor ajeno al tribunal objeto de la visita (71).

Junto a esta supervisión que el Inquisidor General desarrolló sobre los oficiales inquisitoriales para ajustar su actividad al correcto servicio a la institución y sancionar la producción de desmanes, Quiroga trató de facilitar y hacer más cómoda la labor desarrollada por los mismos, introduciendo importantes mejoras en los edificios pertenecientes a los tribunales, tanto en las casas de la Inquisición como en las cárceles (72). En este sentido, una especial preocupación mostró en torno a la precaria situación económica que

(70).- Por otra parte, esta forma de pago a los inquisidores y oficiales encargados de la visita se traducían en un aumento del salario efectivo. Sin embargo, la Suprema mantenía su carácter extraordinario como medio de coacción si algún inquisidor trataba de desentenderse de su realización (Ibid., pp, 752-759).

(71).- Sobre esta actuación sirvan algunos ejemplos: R.GARCIA CARCEL, Herejía y sociedad en el siglo XVI. La Inquisición de Valencia 1530-1609. Barcelona 1980, p, 69; I.J.EZQUERRA REVILLA, "El ascenso de los letrados eclesiásticos...", pp, 278-279; H.PIZARRO LLORENTE, "Las relaciones de patronazgo a través de los inquisidores de Valladolid durante el siglo XVI" Instituciones y élites de poder..., p, 260, n.50.

(72).- Ya hemos hecho referencia en las páginas precedentes a la resolución que por iniciativa de Quiroga se tomó en relación a las casas ocupadas por los inquisidores de Cuenca. En cuanto a otros tribunales, véase, R.GARCIA CARCEL, op. cit., pp, 91-92; J.SIMON DIAZ, "La Inquisición de Logroño (1580-1600)" Berceo 6 (1948), pp, 83-96; H.PIZARRO LLORENTE, "Las relaciones de patronazgo...", pp, 258-259.

sufría el tribunal de Barcelona, cuando, precisamente, debía contar con mayores medios a causa de su situación fronteriza con Francia. Durante los años que ocupó el cargo de Inquisidor General, solicitó en diversas ocasiones tanto al rey como a Mateo Vázquez que se atendiese la extrema necesidad que existía en dicha inquisición, puesto que suponía una gran rémora para que pudiese ejercer plenamente sus funciones, y un factor que propiciaba la aparición de la corrupción (73).

Por otra parte, además de procurar una mayor presencia del Santo Oficio sobre el territorio, y vigilar que el comportamiento de sus servidores fuese el idóneo, Gaspar de Quiroga también procuró el fortalecimiento de la institución, realizando una ferrea defensa del fuero inquisitorial frente al resto de jurisdicciones existentes en la Monarquía, aspecto que desarrollaremos más adelante.

Finalmente, hemos de señalar, que la primera actuación de carácter administrativo que efectuó Quiroga, tras tomar posesión del cargo de Inquisidor General, fue dictar una provisión confirmando los títulos y nombramientos de todos los servidores del Santo Oficio (74).

a.1. El Consejo de Inquisición

Desde los orígenes de la Suprema, el número de consejeros que la conformaban se había establecido, dictado por la costumbre, en cinco, aunque

(73).- En este sentido, véase, IVDJ, envío 91, nº 56; Ibid., envío 89 (caja 125), nº 184; Ibid., envío 8 (II), fol. 162; AHN, Inq., libro 327, fols. 318v-319r. Igualmente, en 1588, se trataron de acrecentar los salarios de todos los servidores del Santo Oficio (IVDJ, envío 55 (caja 73), nº 253, 280; AZ, carp. 143, nº 168).

(74).- R. PEREZ BUSTAMANTE, "Nóminas de inquisidores. Reflexiones sobre el estudio de la burocracia inquisitorial en el siglo XVI" J. PEREZ VILLANUEVA (dir.), La Inquisición española. Nueva visión, nuevos horizontes. Madrid 1980, pp. 259 y 269; AHN, Inq., libro 356, fol. 268r-v.

por lo general, nunca se alcanzó este número (75). En 1567, Felipe II introdujo a través de una Cédula Real la pertenencia de dos miembros del Consejo de Castilla simultáneamente al de Inquisición, estipulándose su asistencia a las sesiones que se celebrasen durante la tarde, donde se dirimían asuntos generales y de actuación inquisitorial, mientras que durante la mañana, contando con la presencia del Inquisidor General, se trataban las materias referidas a asuntos religiosos (76). Si bien la composición de la Suprema estaba fijada cuando Quiroga accedió a dicho cargo, no sucedía de igual manera con el manejo de las cuestiones hacendísticas. El mantenimiento económico del tribunal se había tratado de asegurar desde 1559, cuando el papa aplicó al Santo Oficio las rentas de una canonjía de cada Iglesia metropolitana, catedral o colegial. De este modo, los tribunales contaron con una fuente de ingresos estable que aseguraba la cobertura de sus gastos y permitía generar un remanente que mandar a la Suprema. A partir de este momento, aunque ya se habían aplicado con anterioridad a algunos tribunales, se comenzó a desarrollar un sistema de consignaciones por el que se definía la cantidad de dinero que cada tribunal tenía que enviar al Consejo de forma anual, teniendo presente su evolución hacendística para la determinación de aquella. Éste funcionamiento no sólo garantizó hacer frente a los crecientes gastos de la Suprema, cuyas rentas propias eran insuficientes, sino que también posibilitó que desde el Consejo se pudiese hacer una distribución que equiparase el nivel económico de los tribunales. A las consignaciones establecidas en 1556 sobre las inquisiciones de Córdoba y Granada se unieron, en 1572, las dictaminadas por Diego de Espinosa para Murcia y Sevilla. Sin embargo, para sufragar a la Suprema, Quiroga hubo de ampliar las consignaciones, en 1576, a los tribunales de Llerena y Valencia, aunque rebajó la cantidad de dinero que le era requerida regularmente al de Granada. Esta situación no sufrió cambios hasta 1593, en que las sumas aportadas por las inquisiciones de Sevilla, Llerena y Murcia se vieron incrementadas, fijándose, igualmente, una consignación para el tribunal de

(75).- En torno al número habitual de miembros del Consejo de Inquisición, véase, J.MARTINEZ MILLAN, "las élites de poder durante el reinado de Carlos V..." pp, 163-167.

(76).- J.MARTINEZ MILLAN Y T.SANCHEZ REVILLA, "El Consejo de Inquisición (1493-1700)", Hispania Sacra 73 (1984), pp, 88-89.

Logroño (77).

La elección de los consejeros que pasaban a formar parte de la Suprema, venía definida por dos cuestiones primordiales. En primer lugar, se debía tratar de oficiales que contasen con una preparación suficiente y adecuada para el cargo que iban a desempeñar. Como hemos señalado, la evolución del aparato administrativo de la Monarquía había conllevado que la mayoría de los cargos pasasen a ser ocupados por juristas salidos de los Colegios Mayores. Esta tendencia se había agudizado durante los años en que Diego de Espinosa contó con el beneficio de la gracia real y ejerció como gran patrón cortesano, dado que, para llevar a cabo el proceso de confesionalización de la monarquía, creó una red clientelar que, identificada con el proyecto, ocupó durante estos años los puestos más relevantes de la administración. Para prestar estos servicios, Espinosa se ayudó de letrados que, en el caso de los consejeros de Inquisición, formaban parte, simultaneamente, de otros organismos de la monarquía, facilitándose, así, la extensión del espíritu reformístico a las mismas. Este funcionamiento viene a poner de manifiesto la segunda cuestión a la que hemos hecho referencia, puesto que los elegidos para formar parte de la Suprema no sólo debían contar con una formación académica adecuada, así como con una larga experiencia al servicio de la institución adquirido a través de años de itinerario por diversos tribunales inquisitoriales culminado con el ascenso al consejo desde alguno de los más importantes de Castilla o Andalucía, sino que su designación venía motivada por su vinculación al patrón cortesano que se

(77).- Sobre estas cuestiones, véase, J. MARTINEZ MILLAN, "Estructura de la hacienda de la Inquisición", J. PEREZ VILLANUEVA y B. ESCANDELL BONET, Historia de la Inquisición..., II, pp. 916-919. La preocupación de Quiroga por las cuestiones económicas fue constante desde que ocupó el cargo de Inquisidor General. En septiembre de 1573 envió una carta acordada a todos los tribunales para que se cumpliese lo estipulado en 1554 en relación con el depósito del dinero en el arca de las tres llaves, así como su especificación en el registro. Igualmente, insistía en que se gestionasen convenientemente los recursos de la hacienda (AHN, inq., libro 578, fols. 115v-116r, 117r-v). Al mes siguiente, también por carta acordada, solicitaba información de los censos perpetuos y al quitar que se habían vendido en los diez últimos años, si se habían vuelto a cargar o si bien se había gastado el dinero, y en qué cuestiones se había empleado (ibid., fol. 122v). En 1575, se realizaba una instrucción sobre la forma y orden que habían de guardar los contadores de las inquisiciones en tomar las cuentas a los receptores (ibid., fols. 345v-347r).

alzase con el favor regio dentro de la pugna que mantenían las diversas facciones por el ejercicio del poder (78).

Cuando Gaspar de Quiroga accedió al cargo de Inquisidor General, la Suprema estaba compuesta por individuos que habían prestado sus servicios y colaboración al Cardenal Espinosa. Estos eran: Rodrigo de Castro Osorio, que había recibido el nombramiento en 1560 (79), Sancho Busto de Villegas, provisto en 1564 (80), Francisco Soto de Salazar, nominado al año siguiente (81), Hernando de Vega de Fonseca, nombrado en 1567 (82), Juan

(78).- En torno a las características de los consejeros de la Suprema, véase R. LOPEZ VELA, "La provisión del Inquisidor General y de los miembros del Consejo". J. PEREZ VILLANUEVA y B. ESCANDELL BONET, Historia de la Inquisición..., II, pp. 709-712. En el período que nos atañe, únicamente dos consejeros tuvieron ascendencia noble, Rodrigo de Castro y Sancho Busto de Villegas, mientras únicamente tres obtuvieron hábito de Orden Militar: Rodrigo Vázquez de Arce y Francisco de Ribera de Alcántara, mientras Juan Hurtado de Mendoza lo tenía de Santiago. Véase T. SANCHEZ RIVILLA, "Sociología de los Inquisidores Generales y Consejeros", *ibid.*, pp. 722-730. Sobre la evolución de los miembros del Consejo de Inquisición durante los años en que Quiroga ocupó el cargo de Inquisidor General, véase, el Apéndice I.

(79).- Realizó sus estudios en las universidades de Valladolid y Salamanca, donde desarrolló labores docentes. Canónigo y Chantre de la catedral de Cuenca, fue nombrado consiliario en 1560, ocupando el cargo de Inquisidor General Fernando de Valdés. Desarrolló diversas labores en el proceso inquisitorial contra el arzobispo Bartolomé de Carranza, asistiendo, posteriormente, a las Cortes que se celebraron en Córdoba en 1570 (A. COTARELO Y VALLEDOR, El cardenal don Rodrigo de Castro y su fundación en Monforte de Lemos, Madrid 1945-46 (2 vols.); T. MUÑOZ SOLIVA, *op. cit.*, pp. 213-215).

(80).- Desarrolló sus estudios en la Universidad de Salamanca, ingresando, en 1554, en el colegio Mayor de Santa Cruz de Valladolid. Pasó a ejercer como oidor en la Chancillería de dicha ciudad, en 1560, siendo nombrado, posteriormente, gobernador del arzobispado de Toledo durante el proceso inquisitorial del arzobispo Carranza. Una semblanza, en P. SALAZAR Y MENDOZA, Crónica... Pedro González de Mendoza, pp. 335-338; J. REZABAL Y UGARTE, *op. cit.*, pp. 40-41.

(81).- Colegial de San Bartolomé en Salamanca, continuó sus estudios en Valladolid. Fue inquisidor en los tribunales de Córdoba, Sevilla y Toledo, siendo designado visitador de la inquisición de Aragón en 1568. Como hemos referido, en 1572 fue nombrado Comisario General de Cruzada, ostentando desde el año anterior la prelación de Segorbe y Albarracín. Sobre su biografía, nos remitimos a las obras citadas.

(82).- En 1553 ingresó en el colegio de san Bartolomé, donde obtuvo la licenciatura en Leyes. En 1559, fue nombrado inquisidor en el tribunal de Zaragoza y, al año siguiente, oidor de la Chancillería de Valladolid (M. S. MATIN POSTIGO, *op. cit.*, pp. 49-50; F. RUIZ DE VERGARA Y ALAVA, Historia del Colegio Viejo de San Bartolomé, Madrid 1766, I, p. 369; J. MARTINEZ MILLAN, "Grupos de Poder en la Corte...", p. 189.

Redin, que ocupó su plaza en 1571 (83), Pedro Fernández de Temiño (84) y Pedro Velarde (85), quienes llegaron al consejo en 1572. La muerte del cardenal Espinosa había dejado una herencia política que las nuevas facciones cortesanas trataban de encauzar en su propio beneficio. Como hemos señalado, la pugna de Mateo Vázquez por mantener su influjo sobre los asuntos inquisitoriales se desarrolló a través de la ostentación de la secretaría del Consejo, logrando salvaguardar la influencia sobre un ámbito que había dominado su protector, a pesar del nombramiento de un miembro del "partido papista", como era Gaspar de Quiroga, en el cargo de Inquisidor General. Esta lucha por el control de la institución tuvo un claro reflejo en la evolución que observaron los consejeros, puesto que, mientras algunos buscaron la protección del nuevo Inquisidor General, otros se mantuvieron vinculados a Mateo Vázquez, pasando a engrosar las filas de la facción "castellanista".

Así, mientras Fernández de Temiño y Pedro de Velarde comenzaron a colaborar con Quiroga, obteniendo Velarde, como hemos señalado, el nombramiento de Comisario General de Cruzada, el Inquisidor General desplegó una ofensiva contra el resto de miembros de la Suprema encaminada a que abandonasen la institución para que sus plazas pudiesen ser ocupadas por individuos más afines al nuevo Inquisidor General. Así, Rodrigo de Castro fue propuesto para el obispado de Calahorra en 1573, aunque fue al año siguiente cuando Gregorio XIII le nombró obispo de Zamora (86). En el caso de

(83).- Oidor de la Chancillería de Valladolid, fue nombrado miembro del consejo de Castilla en 1570. Como hemos señalado, realizó una visita a la chancillería de Granada (M.S. MARTIN POSTIGO, op. cit., p. 49).

(84).- Colegial en el Colegio Mayor de Oviedo en Salamanca, se licenció en Derecho Canónico. Canónigo de la catedral de León y, posteriormente, de la de Toledo, se ocupó en el proceso de Bartolomé de Carranza (J. GONZALEZ NOVALIN, El Inquisidor General..., I, pp. 167, 176; J.I. TELLECHEA IDIGORAS, "Cartas del inquisidor Temiño sobre el proceso romano de Carranza", Revista Española de Teología, 39-40 (1979-1980), pp. 343-369; AHN, Inq, libro 356, fol. 257r).

(85).- Como ya hemos señalado, fue canónigo e inquisidor en el tribunal de Toledo, siendo nombrado Comisario General de Cruzada en 1576.

(86).- Posteriormente, en 1577, pasó a ocupar el obispado de Cuenca en sustitución de Gaspar de Quiroga, como hemos referido, siendo preconizado al arzobispado de Sevilla (J. MARTINEZ MILLAN, "Grupos de Poder en la Corte...", p. 178).

Sancho Busto de Villegas, en septiembre de 1575, informaba a su protector, Mateo Vázquez, que cuando aceptó ocuparse de la gobernación del arzobispado de Toledo a causa del proceso inquisitorial que se estaba siguiendo contra fray Bartolomé de Carranza, Diego de Espinosa le había continuado asistiendo con su salario de consiliario de la Suprema. No obstante, el nuevo Inquisidor General, aduciendo la pobreza del Santo Oficio y la falta de residencia en su plaza, había decidido retener el pago. Representaba ante Vázquez no sólo el agravio que suponía la falta de respeto al acuerdo alcanzado con Espinosa, sino también que Fernández de Temiño recibía puntualmente su salario en Roma sin que se tuviese en cuenta su falta de asistencia, por lo que concluía que se estaba desplegando una ofensiva contra su persona (87). La excusa presentada por Busto de Villegas para no retornar a la Corte fue la falta de posada. Sin embargo, con el paso de los meses, su situación económica se tornó insostenible, por lo que siguió instando a Mateo Vázquez para que le fuese abonada su remuneración, conocedor de que el problema de numerario expuesto por Quiroga era una argucia para forzar su vuelta, puesto que el mismo Inquisidor General le había comunicado que únicamente accedería a darle su retribución si el rey así lo ordenaba (88). A pesar de que el mandato de Felipe II fue acorde a la decisión de Quiroga, Busto de Villegas insistió en permanecer alejado del Consejo de Inquisición, condicionando su regreso a que el rey le concediese alguna merced o pensión en recompensa a los servicios prestados en el arzobispado toledano, teniendo en cuenta además, que el ambiente que se iba a encontrar en la Suprema no era muy propicio hacia su persona, y que volver sin este reconocimiento redundaría en su descrédito (89). En 1578, Sancho Busto

(87).- Igualmente, pedía consejo a Vázquez, puesto que por su orden se mantenía alejado, sobre lo que debía hacer en caso de que Quiroga insistiese, dado que había recibido aviso de que iba a utilizar con él gran rigor (IVDJ, envío 91, n° 376). Por otra parte, el Inquisidor General instó a la Iglesia de Toledo para que acudiese a Temiño con los frutos de su canonjía (AHN, inq, libro 1235, fols. 226r-227r).

(88). Véase la carta que remitió a Vázquez el 25 de octubre de 1576 (IVDJ, envío 91, n° 380).

(89).- La misiva escrita al secretario, en enero de 1577, en Ibid., envío 89 (caja 125), n° 218. El 6 de mayo Quiroga reiteraba al rey la ausencia injustificada de Busto de Villegas del Consejo hacía más de un año, proponiéndole que su plaza fuese provista en otra persona. El rey apuntaba que estaba considerando la posibilidad de otorgarle alguna pensión (BL, Eg. 1506, fol. 56). Esta solución pareció complacer a Quiroga como forma de alejar de la Suprema al consejero, señalando

de Villegas fue elegido obispo de Avila, con lo que Gaspar de Quiroga veía cumplido su objetivo de apartarle definitivamente del Consejo de Inquisición (90). En cuanto a Francisco Soto de Salazar, como hemos señalado, abandonó el cargo de Comisario General de Cruzada en 1576, habiendo recibido el año anterior nombramiento como obispo de Salamanca. No obstante, en los años sucesivos, continuó desarrollando diversas funciones para el Santo Oficio, resaltando la labor que efectuó en relación a la aparición de un grupo de alumbrados en Extremadura, como veremos más adelante. Igualmente, en 1578, Hernando de Vega de Fonseca recibió nombramiento como presidente de la Chancillería de Valladolid (91). No obstante, Hernando de Vega no emprendió inmediatamente la marcha hacia su nueva ocupación, puesto que se estaba encargando de forma secreta de la visita que se estaba realizando a Pedro Velarde, Comisario General de Cruzada. Esta situación, encuadrada en la ofensiva que el "partido castellanista" desplegó contra la facción "papista", conllevó que tanto Quiroga como Antonio Mauriño de Pazos instasen repetidamente al monarca para que Hernando de Vega acudiese sin dilación a hacerse cargo de sus funciones, aunque sus intentos para que abandonase la Corte fueron estériles (92). Por último, Juan Redin no había asistido al Consejo de Inquisición desde que en 1570 fuera nombrado visitador de la

a Mateo Vázquez en agosto, que no perdiese la oportunidad de pedir al monarca la concesión de una merced para su protegido. Esta situación contrastaba con la exposición que realizaba de la situación que tenía Fernández de Temiño tras su vuelta a la Corte, puesto que, al no disponer de posada, tenía que pagar un alto alquiler, que suponía gran parte de su salario. Quiroga comunicaba a Vázquez que había solicitado al rey que se le concediese la que había pertenecido al doctor Velasco (IVDJ, envío 91 [caja 130], n° 53).

(90).- Véase la correspondencia que, en este sentido, mantuvo con Mateo Vázquez, en Ibid., envío 89 (caja 126), n° 312; *ibid.*, envío 62 (caja 84), n° 860. Por otra parte, en mayo de 1578, Felipe II ordenaba a Quiroga que le fuesen abonados al nuevo prelado todos los salarios que le habían sido retenidos, aunque el propio rey escribía: "bien sospecho que ha de hallar algún inconveniente en ello" (AZ, carp. 144, n° 313).

(91).- El 22 de noviembre, Mateo Vázquez refería al monarca cómo se había realizado la publicación del nombramiento (Ibid., n° 221). En junio del año anterior, Quiroga había instado al secretario a que obtuviese una merced "como a cosa de la buena memoria del cardenal", puesto que era el consejero más antiguo de la Suprema (IVDJ, envío 91, n° 51). En el mes de agosto, Quiroga no ocultaba su impaciencia para que fuese provisto en un puesto que le apartase del Consejo (Ibid., n° 53).

(92).- Al respecto, véase AZ, carp. 144, n° 217, 221; Ibid., carp. 145, n° 37.

chancillería de Granada, ciudad en la que permaneció hasta que, en 1577, fue nombrado obispo de Tarazona (93).

Así pues, entre 1573 y 1578, Gaspar de Quiroga apartó de la Suprema a los miembros que formaban parte de la misma cuando accedió al cargo de Inquisidor General, nombrados durante los años que Espinosa ostentó dicho cargo (94). No obstante, hemos de señalar que, la pugna por el control del Consejo de Inquisición se mantuvo igualmente durante estos años por parte de las facciones cortesanas. Mateo Vázquez trataba de conservar su influjo sobre aquellos ámbitos que había dominado su protector, centrando su interés, como hemos referido, sobre el Consejo Real. Junto a sus intentos de mantener en su poder la secretaría del Consejo y la influencia sobre los asuntos inquisitoriales, Vázquez consiguió que las plazas de consiliario fuesen ocupadas por individuos que, en algunos casos, habían sido clientes del cardenal Espinosa, y que, posteriormente, pasaron a formar parte del partido "castellanista". Por otra parte, resultaban los candidatos idóneos para continuar con el proceso de confesionalización de la Monarquía, al que ya habían prestado diversos servicios. Esta actuación quedó claramente reflejada entre los años 1573-1575, cuando el grupo "papista" aún no se encontraba plenamente afianzado en el beneficio de

(93).- J.MARTINEZ MILLAN, "Grupos de Poder en la Corte...", p, 189.

(94). Por otra parte, esta actuación no sólo estuvo referida a los consejeros sino que comprendió también a los oficiales que conformaban la Suprema. Así, en octubre de 1573, nombró tasador de los procesos civiles que llegaban en grado de apelación al consejo, a Juan de Ledesma, que era secretario del Consejo de Indias. Así mismo, en agosto de 1574, Quiroga otorgaba licencia para retirarse a Toledo al Licenciado Serrano, relator del Consejo, que se había significado en los servicios prestados en el proceso contra Bartolomé de Carranza, aduciendo su falta de salud. Ese mismo año, Diego Torres de Molina era sustituido en el cargo de receptor por Nicolás Ortiz de Carriazo. Al año siguiente, Pedro de Naveda, portero, era reemplazado por Llorente García de Amuña, mientras que Alonso de Doriga recibía a Pablo García como compañero en la secretaría, al que además se favoreció para que alcanzase la categoría de presbítero. En 1577, Alvaro de Alderete sucedió al difunto Juan Cebrián de Ibarra en el cargo de alguacil (AHN, Inq, libro 357, fols. 139v, 176v; Ibid., libro 358, fols. 131r, 200r; Ibid., libro 252, fols. 122r., 145r.-147r, 167r-168v; Ibid., libro 249, fol. 230r.v). Mayor importancia revistió el nombramiento de Martín de Salvatierra, fiscal del consejo, como obispo de Albarracín en 1578, siendo ocupada su plaza por Cristobal de Ovalle de forma interina y, posteriormente, por el licenciado Arenillas de Reinoso (Ibid., libro 579, fol. 166r; P. L. LLORENS RAGA, op. cit., pp. 307-317). Esta actuación provocó que aquellos que se vieron desfavorecidos presentasen sus quejas ante el rey. En este sentido, véase la carta que el obispo de Sacer dirigió a Felipe II en julio de 1578 (IVDJ, envío 89 (caja 125), nº 33).

la gracia regia. No obstante, no eran tampoco personas a las que, durante este periodo de cierta indefinición en las facciones cortesanas, Quiroga tuviese motivos para mostrar enemistad, puesto que, en la mayoría de los casos contaban con trayectorias que estaban relacionadas con la suya propia, por su vinculación al obispado de Cuenca o al Colegio de Santa Cruz de Valladolid. Así, en 1573 fue nombrado consejero Pedro Gasco, perteneciente al Consejo y Cámara Real (95), mientras que en 1575, fueron provistos Rodrigo Vázquez de Arce, perteneciente al Consejo de Castilla (96), Jerónimo Manrique de Lara (97) y Tomás de Salazar, que años después sucedió a Pedro Velarde en la Comisaría General de Cruzada (98).

Entre 1576 y 1579, período en el que el "partido papista" logró extender su influjo y alzarse con el favor regio, no se produjo ningún ingreso en el Consejo de Inquisición, de manera que Gaspar de Quiroga no pudo promocionar a ninguno de sus clientes para que formaran parte de dicho organismo y contrarrestar así el dominio ejercido por Mateo Vázquez y sus hombres en él. El Inquisidor General buscó durante estos años, como hemos señalado, apartar de la Suprema a aquellos que habían accedido al Consejo bajo el patrocinio de

(95).- AHN, Inq, libro 578, fol. 131r. Natural del obispado de Cuenca y colegial de San Bartolomé, era bachiller en Cánones (J. MARTINEZ MILLAN, "Grupos de Poder en la Corte...", p. 174).

(96).- Colegial de Santa Cruz de Valladolid, fue oidor en la Chancillería de Valladolid y, en 1570, pasó a formar parte del Consejo Real (Ibid., p. 187; I.J. EZQUERRA REVILLA, "La distribución de la Gracia durante la anexión de Portugal: Rodrigo Vázquez de Arce (1578-1583)", Política, religión e Inquisición en la España Moderna, pp. 268-270).

(97).- Hijo ilegítimo del arzobispo de Sevilla, se licenció en Derecho Canónico. Después de un amplio periplo por los tribunales de Murcia, Valencia, Barcelona y Toledo, en 1571, fue nombrado Inquisidor General de la Mar, hallándose junto a Juan de Austria en la batalla de Lepanto. Tomó posesión de su plaza en el Consejo el 8 de febrero de 1575 (AHN, Inq, libro 252, fol. 145r; J. MARTIN CARRAMOLINO, Historia de Avila, su provincia y obispado, Madrid 1873, III, pp. 269-272). En junio de 1577, Gaspar de Quiroga solicitaba a Felipe II que concediese licencia por unos días a Jerónimo Manrique y a Sancho Busto de Villegas para que dirimiesen las diferencias y pleitos que mantenían sus familiares en Ocaña desde hacía tiempo (BL, Eg. 1506, fol. 59).

(98).- Colegial en el Colegio Mayor de Cuenca y en el de Santa Cruz, fue provisor de Plasencia y, posteriormente, prior y maestrescuela en Coria. Tesorero y canónigo de Sevilla, ocupó plaza en el tribunal de dicha ciudad en 1567 (Q. ALDEA y otros, DHEE, Suplemento I, p, 169; F.J. GARMA Y DURAN, op. cit., p, 503).

Espinosa, mientras que Vázquez, alejado de la Secretaría del Consejo tampoco pudo auspiciar nuevos nombramientos. La caída en desgracia del secretario Antonio Pérez arrastró consigo al Inquisidor General, quien, desde 1580, se vió relegado a su arzobispado toledano. Esta situación vino a coincidir con el fallecimiento del secretario Jerónimo Zurita y con el asalto definitivo de Mateo Vázquez a la secretaría de Inquisición. De esta manera, apartado Quiroga de la gracia regia, el dominio que el "partido castellanista" pasó a ejercer sobre el Consejo de Inquisición fue absoluto (99). Evidentemente, el primero en sufrir las consecuencias de esta nueva situación fue Pedro Fernández de Temiño, quien se había vinculado a Gaspar de Quiroga desde que accedió al cargo de Inquisidor General. Provisto en el obispado de Avila al fallecer Sancho Busto de Villegas, agradecía con verdadera ironía a Mateo Vázquez la merced recibida (100).

En los años siguientes, por tanto, Quiroga no pudo influir en la designación de los puestos de los consejeros de la Suprema, siendo todos ellos ocupados por los clientes del secretario real y del propio organismo, intentando, por otra parte, mostrar sumisión al nuevo patrón cortesano. Así, en 1580, recibía nombramiento de consiliario Juan de Llano de Valdés (101). No obstante, su paso por el Consejo de Inquisición fue breve, puesto que, en 1583, recibía

(99).- En diciembre de 1579, Mateo Vázquez anunciaba al rey la intención que Quiroga tenía de solicitar una breve audiencia para consultar la provisión de la plaza del Consejo de Inquisición que debía recaer en un miembro del Consejo de Castilla, así como los dos miembros del mismo que debían asistir a la Suprema (IVDJ, envío 55 (caja 72), n° 184).

(100). El 24 de febrero de 1581 escribía a Mateo Vázquez cómo Quiroga le había hecho llegar la carta del secretario por la que se le comunicaba el nombramiento en la prelación abulense, representando su agradecimiento con estas palabras: "que bien entiendo haber sido v.m. el todo para que se me hiciese". Al margen escribía el secretario: "es manera de decir bien excusada" (AZ, carp. 136, n° 152).

(101).- Sobrino de Fernando de Valdés, realizó sus estudios en el Colegio de Santa Cruz de Valladolid. Rector de la universidad, inició su andadura inquisitorial en 1557 en el tribunal de Zaragoza, pasando en 1572 al de Toledo (T. SANCHEZ RIVILLA, El Consejo de Inquisición. Su Burocracia (1483-1700), Tesis Doctoral inédita, UAM 1990, apéndice).

nombramiento como comisario del Santo Oficio para el tribunal de la Corte (102). En mayo de 1581, era proveído Pedro de Portocarrero, perteneciente al Consejo de Castilla (103). Simultáneamente, fue nominado como consiliario Antonio Matos de Noroña, quien, a pesar de su vinculación al partido "castellanista" tuvo algunas dificultades y retrasos en cuanto a la provisión efectiva de su plaza por las buenas relaciones que paralelamente mantenía con Gaspar de Quiroga (104). En julio de 1582 pasaron a formar parte de la Suprema Pedro Junco de Posada y Valdés (105), así como Francisco de

(102).- En torno a las características del mismo, véase, M.P. DOMINGUEZ SALGADO, "Los orígenes del Tribunal de Corte (1580-1665)" Inquisición Española. Nuevas Aproximaciones. Madrid 1987, pp, 99-100, en que aparece recogido el nombramiento efectuado por Quiroga en septiembre de 1583. El 16 de octubre, Juan de Llano de Valdés escribía a Mateo Vázquez pidiéndole paracer y licencia para comenzar a ejecutar esta función: "pues le tengo por patrón y dueño de todas mis cosas, con quien siempre hallo tanto abrigo y merced y especialmente siendo lo que agora se ofrece neg^o tocante al Sto. Off^o de la Inquisición de que v. m. es tan dueño y protector". Refería la buena voluntad que había movido a Quiroga a realizar esta provisión, siendo el primer título que había realizado de su propia mano desde que había accedido al cargo de Inquisidor General (IVDJ, envío 96 (caja 139), n^o 787). Sobre la oposición que encontró por parte de los inquisidores de Toledo para llevar a cabo su oficio, véase, AHN, Inq., leg. 3314, n^o 57-58; Ibid., libro 361, fols. 319v-320r.

(103).- Doctor en leyes por la universidad de Salamanca, ostentó en tres ocasiones el rectorado de la misma. Oidor en la Chancillería de Valladolid y canónigo de la catedral de Sevilla, fue nombrado gobernador de Galicia en 1571. Se ocupó también de realizar una visita a la Chancillería de Valladolid (A. CARABIAS TORRES, Colegios Mayores..., III, p, 1194; F.J. GARMA Y DURAN, op. cit., IV, pp, 69, 503; T. MUÑOZ SOLIVA, op. cit., pp, 253-257; J.P. MARTIR RIZO, op. cit., pp, 202-204.

(104).- Claramente exponía esta cuestión Antonio Matos de Noroña en la carta que dirigió a Mateo Vázquez, el 29 de marzo de 1581, aduciendo que la dilación en la expedición de su título se debía a murmuraciones y envidias que había en la Corte. No dejaba de solicitar a Vázquez que procurase su promoción a la canonjía de la Iglesia de Toledo que había quedado vacante tras la provisión de Pedro Fernández de Temiño como obispo de Avila (IVDJ, envío 62 (caja 84), n^o 869). Nacido en Santarem (Portugal), inició sus estudios en Coimbra, culminándolos como colegial de San Bartolomé de Salamanca. Fue inquisidor en el tribunal de Córdoba, pasando posteriormente al de Toledo. Se ocupó por mandato de Quiroga en reprimir un brote de alumbradismo en Extremadura, como habrá ocasión de tratar (AHN, Inq., libro 580, fol. 59v; T. SANCHEZ RIVILLA, op. cit., Apéndice). Su vinculación al partido "castellanista" estaba claramente establecida. Así, en junio de 1575, Juan de Ovando recomendaba a Matos de Noroña a Mateo Vázquez para que fuese provisto en una capellanía de los Reyes Nuevos de Toledo (IVDJ, envío 94 (caja 135), n^o 91).

(105).- Protegido por su tío, el Inquisidor General Fernando de Valdés, realizó sus estudios en el Colegio de Santa Cruz de Valladolid. Oidor de la Chancillería de Granada en 1568, al año siguiente de ingresar en la Suprema obtuvo una canonjía en la iglesia de Palencia, siendo elegido posteriormente, abad de San Miguel de Traina (Sicilia) y miembro del Consejo Real (G. GONZALEZ DAVILA, Teatro... de las dos Castillas, III, pp, 355-357; M. S. MARTIN POSTIGO,

Ribera y Ovando, pariente del confesor real Diego de Chaves (106). Las provisiones de consejeros se cerraban en este período con los nombramientos de Francisco Dávila y Guzmán, en 1583 (107), y de Juan Fernández de Cogollos, en 1585 (108).

Sin embargo, cuando Felipe II retornó de Portugal, comenzaron a vislumbrarse una serie de cambios en el gobierno de la Monarquía, que se evidenciaron a partir de 1585. Si bien pasaremos a analizar esta nueva orientación más adelante, baste decir que la pugna por el control de la gracia regia tuvo como consecuencia el surgimiento de nuevos patronos cortesanos que terminaron con el dominio ejercido en los años precedentes por el "partido castellanista". Respecto al tema que nos ocupa, el progresivo declinar de la influencia de Mateo Vázquez vino acompañado por el ascenso de García de Loaysa, cuyos criterios no sólo se dejaron sentir en las cuestiones inquisitoriales, sino en las religiosas en general. Esta nueva configuración del ejercicio del poder propició que Gaspar de Quiroga, relegado durante los años precedentes en su arzobispado, reapareciese en la escena política. El cambio en la situación provocó la reorganización de las facciones cortesanas, lo que, evidentemente, tuvo un

op. cit., pp. 54-55; P. SALAZAR DE MENDOZA, op. cit., pp. 340-341; AHN, Inq., libro 358, fol. 35r). En mayo de 1584, Junco de Posada se dirigía a su protector, Mateo Vázquez, solicitando licencia para acudir a su lugar de nacimiento, Llanes (Asturias), pidiendo que le fuese concedida la abadía de Covadonga, distante solamente dos leguas de su casa y solar, puesto que, aunque requería residencia, ninguno de los que la habían ostentado había cumplido con ella (IVDJ, envío 96 (caja 138), n° 407).

(106).- Caballero del hábito de Alcántara, fue inquisidor en los tribunales de Barcelona (1572-1577) y Zaragoza (1577-1582), (AHN, Inq, libro 356, fols. 243r, 248r; Ibid, libro 357, fols. 33v-34r; Ibid., libro 358, fols. 91v-92r). El 21 de julio de 1582, el conde de Uceda agradecía a Mateo Vázquez la promoción de Ribera al Consejo (IVDJ, envío 8 (III), caja 13, fol. 177).

(107).- Realizó sus estudios en el Colegio Mayor de Cuenca, permaneciendo vinculado a la Universidad hasta 1572. Arcediano y canónigo de la catedral de Toledo, fue inquisidor en el tribunal de dicha ciudad (AHN, Inq., libro 358, fols. 189v-190r; T. SANCHEZ RIVILLA, op. cit., apéndice).

(108).- Colegial de Santa Cruz de Valladolid, realizó una amplia labor docente. Fue oidor de la Chancillería de Granada así como Juez Mayor y fiscal en la de Valladolid. En 1577 fue nombrado regente de la Audiencia de Sevilla, y en 1581, miembro del Consejo Real (AHN, Inq, libro 361, fols. 357v-358r; G. GONZALEZ DAVILA, Teatro... de las dos Castillas, I, p. 179; P. SALAZAR Y MENDOZA, op. cit., p. 340

reflejo en los miembros que componían los organismos de administración de la Monarquía. La rehabilitación política del Inquisidor General se tradujo en el nombramiento de tres nuevos consejeros para la Suprema. Así, en 1586, recibió nombramiento Juan de Zúñiga (109). En 1589 era provisto Juan Alvarez de Caldas (110), y al año siguiente, Juan Vigil de Quiñones (111). Todos ellos eran clientes de Quiroga, quien, por primera vez desde que en 1573 accediese al cargo de Inquisidor General, lograba introducir en el organismo a alguno de sus protegidos (112). Por otra parte, el propio Mateo Vázquez era consciente de su pérdida de ascendiente sobre el monarca, y también, en concreto, en relación al dominio que había ejercido en la provisión de los cargos del Consejo de Inquisición. Esta situación parecía clara no sólo por la inclusión de nuevos consejeros vinculados al Inquisidor General, sino también por la provisión de otros oficiales, como el caso del receptor Antonio Vázquez Vuelta (113). De esta manera, todos los apadrinados del secretario fueron

(109).- Natural de Madrigal de las Altas Torres, como Gaspar de Quiroga, estudió Derecho en la Universidad de Salamanca. Quiroga le promocionó como inquisidor del tribunal de Valencia en 1573. Igualmente, fue canónigo de la catedral de Toledo, pasando a prestar sus servicios en la inquisición de dicha ciudad. En 1586, fue presentado para ocupar el obispado de Canarias, pero Sixto V se negó a efectuar el nombramiento por su condición de hijo ilegítimo (AHN, Inq., libro 361, fols. 409v, 417r-v; G. GONZALEZ DAVILA, *Teatro eclesiástico... de las dos Castillas*, I, p. 336; J. MARTINEZ MILLAN, "Los miembros del Consejo de Inquisición durante el siglo XVII", *Hispania Sacra*, 37 (1985), p. 425; T. SANCHEZ RIVILLA, op. cit., apéndice).

(110).- Colegial de Santa María en Salamanca, pasó posteriormente al colegio del Arzobispo. Catedrático en Salamanca, se doctoró en Derecho en Sigüenza, donde también obtuvo una canonjía doctoral. Inició su carrera inquisitorial en 1578, cuando Quiroga le nombró inquisidor en Barcelona, tribunal en el que permaneció hasta su ascenso al Consejo (AHN, Inq., libro 357, fol. 269v; J. MARTIN CARRAMOLINO, op. cit., III, pp. 301-303; J. REZABAL Y UGARTE, op. cit., pp. 42-43; G. GONZALEZ DAVILA, op. cit., I, p. 82; T. SANCHEZ RIVILLA, op. cit., apéndice).

(111).- Colegial de San Pelayo en Salamanca, ingresó posteriormente en el Colegio de Santa Cruz de Valladolid. Catedrático en dicha universidad, fue nombrado inquisidor del tribunal sito en esta ciudad en 1583. Fue arcediano de Ribadeo en la Catedral de Oviedo (H. PIZARRO LLORENTE, "Las relaciones de patronazgo...", p. 260).

(112).- Esta vinculación queda establecida por diversas cuestiones que se irán poniendo de manifiesto, siendo especialmente nítida en el caso de Juan de Zúñiga, beneficiario del testamento de Quiroga, y en el Juan Vigil de Quiñones, que actuó como testamentario.

(113).- Su título fue despachado el 31 de octubre de 1587 (AHN, Inq., libro 249, fols. 531v-532r). Ocupaba el cargo en lugar de Juan Manuel Alderete, quien lo ostentaba desde 1585 (Ibid., fols. 517v-519r; Ibid., libro 357, fol. 192r-v). Alderete había tratado de hacer dejación de su oficio a Diego de Chaves Bañuelos, regidor de Madrid, quien había ofrecido al receptor una gratificación

desplazados de la Suprema en los años siguientes, incluso aquellos que como Pedro de Portocarrero o Junco de Posada se había aprestado a colaborar con García de Loaysa. Así, en 1586, Francisco de Ribera era promovido al obispado de Segovia (114). Por su parte, Pedro de Portocarrero ocupó la Comisaría General de Cruzada, en sustitución del fallecido Tomás de Salazar (115), pasando, en 1589, a ostentar el obispado de Calahorra. A su vez, este puesto fue cubierto por Francisco Dávila (116). También en 1589, Pedro Junco de Posada y Juan Fernández Cogollos fueron nombrados presidentes de las chancillerías de Valladolid y de Granada respectivamente (117). Por último, Antonio Matos de Noroña fue igualmente alejado de la Suprema, puesto que recibió orden de trasladarse a Portugal para ayudar al archiduque Alberto en labores inquisitoriales, siendo nominado como obispo de Elvas en 1591 (118).

Con la expulsión de los miembros del "partido castellanista" del Consejo de Inquisición en la segunda mitad de la década de los ochenta, la Suprema pasó a estar controlada por los nuevos patronos cortesanos, esto es, García de Loaysa, que pasó él mismo a integrar el organismo en 1590 (119) y por Arenillas de Reinoso, que ostentó la secretaría del Consejo a la muerte de Mateo Vázquez,

si finalmente obtenía el nombramiento real. Antonio Vázquez había entrado también en estas negociaciones, recurriendo a Arenillas de Reinoso, fiscal de la Suprema, con quien tenía amistad, para que éste instase a Quiroga en esta provisión. El regidor acudió por su parte al confesor regio, del mismo nombre, y al presidente del Consejo de Indias para que hiciesen su recomendación ante el Inquisidor General "yaunque dió buenas palabras como le tenía Arenillas fiscal prendado, dicen que se resolvió a darlo al Ant^o Vázquez". El propio Mateo Vázquez, en carta que remitió al rey el mismo 31 de octubre decía: "muy buena persona es el ant^o Vz que dice el Cardl y yo creo que tiene ya banco" (IVDJ, envío 51, n^o 137), habiendo mostrado claramente impedimento a que se efectase el nombramiento (AZ, carp. 142, n^o 247).

(114).- Q. ALDEA y otros, DHEE, IV, p, 2400.

(115).- Véase la carta que al respecto escribió a Mateo Vázquez (IVDJ, envío 91 (caja 131), n^o 698).

(116).- AGS, Comisaría General de Cruzada, leg. 290 (s.f.).

(117).- Véase la felicitación que Quiroga le remitió a Junco de Posada por esta provisión en AHN, Inq., libro 361, fol. 564r.

(118). T. SANCHEZ RIVILLA, op. cit., Apéndice.

(119).- Una semblanza en Q. ALDEA y otros, DHEE, suplemento I, pp. 432-438.

en 1591, hallándose bajo la protección del conde de Chinchón (120), a quien Gaspar de Quiroga también buscó acercarse. Así pues, los consejeros que accedieron a la Suprema entre 1590 y 1594, año en que falleció el Inquisidor General, estaban vinculados a los nuevos depositarios de la confianza regia tras el cambio observado en el gobierno de la Monarquía después de 1585, en el que, como hemos señalado, Quiroga no tenía cabida, convirtiéndose en un mero comparsa. Así, en 1590, recibieron nombramiento Alonso Núñez de Bohorquez (121) y Pablo de Laguna (122), completándose las incorporaciones con las provisiones, realizadas en 1592, de Pedro Pacheco (123) y Juan Hurtado de Mendoza (124).

Así pues, podemos establecer que Gaspar de Quiroga, durante los años que ostentó el título de Inquisidor General, no logró ejercer su dominio sobre el Consejo de Inquisición. Esta cuestión vino determinada por la evolución de las facciones cortesanas que pugnaban en la corte filipina por el ejercicio del poder. El corto espacio de años (1576-1579) en que el "partido papista", donde se hallaba encuadrado Quiroga, contó con el beneficio de la gracia regia, conllevó que el Inquisidor general no pudiese desvincular al organismo de la red clientelar

(120). Recibió título de secretario real y de la Suprema en agosto de 1591 (AHN, Inq., libro 359, fols. 53r-54r). Era canónigo de la Iglesia de Sevilla.

(121). Colegial del mayor de Cuenca en Salamanca, fue catedrático de dicha universidad. Oidor de la chancillería de Granada, fue consejero de Guerra, incorporándose, en 1581, al Consejo de Castilla, interviniendo, igualmente, en la Cámara (A.M. CARABIAS TORRES, op. cit., p. 191; G. GONZALEZ DAVILA, op. cit., III, p. 318; AHN, Inq., libro 1338, f. 14v., cit. por J. MARTINEZ MILLAN y T. SANCHEZ RIVILLA, "El consejo de Inquisición...", pp. 71-193, p. 120; P. GAN GIMENEZ, La Real Chancillería de Granada (1505-1834), Granada 1988, p. 200).

(122).- Colegial de san Salvador de Oviedo en Salamanca, fue nombrado consultor del tribunal inquisitorial de Granada, prior de Puerto Real y arcediano de Cuéllar. Fue oidor de la Chancillería de Granada, ejerciendo el mismo oficio en el Consejo Real. Algunos datos para completar su biografía en T. SANCHEZ RIVILLA, op. cit., apéndice.

(123).- Arcediano de Moya, obtuvo su título como consiliario de la Suprema el 13 de octubre de 1592, entrando a cubrir la plaza que había abandonado Antonio Matos de Noroña (AHN, Inq., libro 359, fol. 113v-114v).

(124).- Hijo del marqués de Cañete, virrey del Perú, realizó sus estudios en Salamanca. Caballero de la Orden de Santiago, era maestrescuela y canónigo de la Catedral de Cuenca, e inquisidor en los tribunales de Zaragoza y Sevilla. Su título de consiliario se despachó el 15 de diciembre de 1592 (Ibid., fol. 126r; T. MUÑOZ SOLIVA, op. cit., p. 245).

establecida por el cardenal Espinosa, su predecesor en el cargo, que fue mantenida y defendida por Mateo Vázquez durante los distintos períodos en que ocupó la secretaría del Consejo. El cambio en el gobierno de la Monarquía acaecido en torno a 1585 propició el surgimiento de nuevos patronos, que desbancaron al "partido castellanista" en el disfrute de la confianza regia. Si bien el nuevo orden significó un breve resurgir para Quiroga, el Inquisidor General era un personaje que ya no tenía espacio en el mismo. Por otra parte, la imposibilidad de promocionar a su propios clientes para que pasaran a formar parte de la Suprema, llevó a Quiroga a esgrimir la jurisdicción del Inquisidor General para tratar de someter a un Consejo que le era poco afín, generándose tensiones que se pusieron de manifiesto en el debate que se abrió tras su fallecimiento (125).

a.2. Los tribunales de distrito.

Un primer acercamiento a la cronología de los nombramientos de los inquisidores y fiscales que compusieron los tribunales de distrito establece un perfecto paralelismo con las etapas que hemos señalado de la evolución de los miembros del consejo de Inquisición, determinadas, a su vez, por el devenir de las facciones cortesanas. Sin animarnos la pretensión de realizar un análisis pormenorizado de las provisiones efectuadas en cada una de las sedes inquisitoriales, cuestión que desbordaría ampliamente los propósitos de este estudio, intentaremos trazar unas líneas generales, que quedarán concretadas con algunos ejemplos representativos (126).

(125).- En torno a esta cuestión, así como a los intentos del Consejo por ampliar su jurisdicción, véase, R. LOPEZ VELA, "Estructuras administrativas del santo Oficio", Historia de la Inquisición en España y América, II, pp. 93-97.

(126).- Para esta visión de conjunto, véase el listado de inquisidores y fiscales que fueron provistos en los distintos tribunales entre 1573 y 1594, que se adjunta en el apéndice II. En este sentido, hemos de señalar que, como se ha puesto de manifiesto en diversos trabajos, cada sede inquisitorial tenía diversas categorías de oficiales. Generalmente, el personal que se ocupaba en labores "técnicas" pertenecía a la comarca, mientras que los inquisidores y fiscales además de contar con un poder y jurisdicción que venía directamente delegado del Inquisidor General, era el que los escogía y nombraba. Este es el motivo por el que hemos centrado nuestro interés en estos cargos, puesto que la atención sobre el resto de oficiales que conformaban el tribunal compete directamente a un estudio que se ocupe del ámbito provincial.

Cuando, en 1573, Gaspar de Quiroga accedió al cargo de Inquisidor general, inició, al igual que en lo relativo a la Suprema, una renovación de los tribunales inquisitoriales, destinada, por una parte, a dismantelar las redes clientelares establecidas por Diego de Espinosa, y por otra, a dar cabida en los cargos de inquisidores y fiscales a algunos de sus propios clientes. Este procedimiento se intensificó en algunas sedes, cuyo distrito albergaba problemas particulares sobre los que se tenía que poner especial atención, como era el caso de los tribunales de la Corona de Aragón, en referencia a la presencia de las mayores concentraciones de población morisca tras la dispersión por Castilla que se realizó de esta minoría como resultado de la rebelión en Granada, o bien, por el surgimiento de algún foco de heterodoxia religiosa, como en el caso de Llerena o Córdoba a causa del resurgimiento de los alumbrados. Si bien no vamos a insistir en estas cuestiones, puesto que sobre ellos volveremos más adelante, hemos de señalar que, en la mayoría de los tribunales, Gaspar de Quiroga logró alcanzar su propósito, pero en consonancia con lo que había sucedido en el Consejo de Inquisición, Mateo Vázquez trató de recoger la herencia de su protector y salvaguardar los ámbitos de influencia adquiridos, principalmente, en los tribunales de mayor significación. Además, el Inquisidor General hubo de servirse, para que el Santo Oficio pudiese cumplir con la función esencial que desempeñaba en el proceso de confesionalización de la Monarquía, de inquisidores experimentados y comprometidos con el proyecto, aun cuando estos hubiesen sido clientes de Diego de Espinosa y se encontrasen cercanos al partido "castellanista" (127). Sin embargo, y a diferencia de lo acontecido en el Consejo, Quiroga logró introducir, entre 1573 y 1579, a algunos de sus protegidos en la ostentación de los principales oficios en los tribunales inquisitoriales. No obstante, la pugna por el control de los mismos se desarrolló durante estos años de la misma forma que había tenido lugar en la Suprema,

(127).- En algunos casos, rescatando a algún personaje para puestos poco apreciados. Así, en marzo de 1576, escribía al rey como había decidido enviar como inquisidor de Cerdeña al licenciado Juan de Zurita. Señalaba que había ocupado este cargo en los tribunales de Cataluña y Aragón y que se hallaba recogido en su casa, en Sigüenza. Informaba que era difícil encontrar otro inquisidor que quisiese acompañarle, puesto que no tenían señalado salario y el tribunal era extremadamente pobre. El monarca le otorgó quinientos ducados de pensión (BL, Eg. 1506, fols. 27v-28r).

logrando mantener Mateo Vázquez cierto dominio sobre los principales. Así, el trío de inquisidores que conformaba el tribunal de Barcelona, Francisco de Ribera y los licenciados Minaya y Amatos, provistos en 1572, fueron sustituidos por el doctor Romano, Juan Becerra de la Cuadra, Juan de Aymar, que ocupaba el cargo de fiscal en la inquisición de Zaragoza y Juan Álvarez de Caldas, a quien, posteriormente, Quiroga logró promocionar a la Suprema. En la sede inquisitorial de Cuenca, el Inquisidor General nombró a Francisco de Arganda, mientras que el inquisidor Diego Gómez de la Madrid era promovido al obispado de Badajoz (128). Igualmente, también efectuó una renovación en la inquisición de Navarra, siendo especialmente significativo el nombramiento como inquisidor de Juan de Aramayona en 1578, que, proveniente del tribunal de Murcia, efectuó este oficio hasta 1582, en que obtuvo una canonjía de la Iglesia de Toledo (129). Mucho menos fácil resultó para Quiroga introducir a sus clientes en los tribunales más importantes de Castilla y de Andalucía, que, como hemos señalado, constituían normalmente el paso previo para llegar a la Suprema, puesto que, si bien realizó algunas provisiones, no logró sustraerlos totalmente de la influencia de inquisidores vinculados al "partido castellanista". Así, en el tribunal de Sevilla, proveyó de manera escalonada a Rodrigo Gutiérrez de Páramo en 1574, a Juan López Sierra en 1576 y a Lope de Mendoza en 1579. Si bien pudo apartar a Hernando Bravo de Zayas a través de su nombramiento como visitador de la Inquisición de Canarias en 1573, Miguel de Carpio se mantuvo como inquisidor en Sevilla hasta 1578 (130). Un caso similar fue

(128).- En 1573, Diego Gómez de la Madrid formaba parte de la terna, junto a Juan Llano de Valdés y Diego González, inquisidor de Valladolid, que Jerónimo Zurita proponía al monarca para la provisión de la abadía de San Isidro en León, vacante por la muerte del doctor Gregorio de Miranda, inquisidor de Valencia (RAH, "salazar" R-63, fol. 187). En carta que dirigió a Mateo Vázquez, en enero de 1578, le agradecía su designación como prelado (IVDJ, envío 94 (caja 135), nº91). Por otra parte, Quiroga trató de que el inquisidor Arganda, que con anterioridad ejercía el cargo de fiscal en Sevilla, pudiese percibir los frutos del canonicato que ostentase en la iglesia colegial de San Justo y Pastor en Alcalá de Henares (AHN, Inq., libro 1235, fols. 203r-205v).

(129).- En este sentido, nos remitimos a la relación de canónigos nombrados en la Catedral de Toledo durante los años en que Gaspar de Quiroga ostentó el arzobispado que se incluye como apéndice.

(130).- Véase P. GARCÍA DE YEBENES PROUS, El tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de Sevilla. Burocracia y hacienda, UAM, Tesis Doctoral publicada en microfichas, 1990, pp. 818 y ss.

el referido a la inquisición de Valladolid, donde la sustitución de los inquisidores nombrados por Espinosa se hizo de forma gradual. Así, junto a Diego de Valcárcel y a Pedro de Quiroga, sobrino del Inquisidor General, ocupó plaza de inquisidor Andrés de Álava, como veremos, señaladamente vinculado al "partido castellanista". Menor influjo tuvo Quiroga en relación con el tribunal de Toledo, donde ocupaban cargo de inquisidor Juan de Llano de Valdés y Antonio Matos de Noroña. Especial significación tuvieron también las provisiones de inquisidores y fiscales realizadas en la inquisición de Sicilia, que nos merecerán especial atención, por las implicaciones políticas de la peculiar composición del poder entre Virrey y Santo Oficio en la isla. Así pues, si bien el Inquisidor general procuró promocionar a sus protegidos, utilizando tanto el relegamiento como la movilidad de los oficiales inquisitoriales para desarticular o neutralizar la red clientelar configurada por Espinosa, no consiguió introducir a ninguno de ellos en la Suprema, logrando un control parcial sobre los tribunales más relevantes (131).

El declive político del "partido papista" a partir de 1580, provocó que todos los tribunales inquisitoriales se viesen nuevamente sometidos a un cambio, en referencia a los inquisidores y fiscales que los formaban, puesto que el ascenso de la facción "castellanista" propició que aquellos servidores inquisitoriales promovidos por Quiroga sufriesen las consecuencias del relegamiento político de su patrón (132). Sirva como ejemplo lo acontecido al inquisidor de Granada Mexía de Lasarte. El 6 de noviembre de 1581, escribía al Inquisidor General cómo por obra de sus enemigos, el monarca estaba convencido de que había realizado el ofrecimiento de abandonar el Santo Oficio

(131).- Por su parte, Mateo Vázquez no perdía la oportunidad de apartar a los clientes del Inquisidor General. Así, en agosto de 1577, recordaba a Gaspar de Quiroga la obligación que tenía Rodrigo de Mendoza, nombrado inquisidor de la Armada en 1575, en sustitución de Jerónimo Manrique, de residir en su canonjía en Toledo. Quiroga aseguraba que estaba cumpliendo con este requisito desde que había retornado de Italia (IVDJ, envío 91, n° 55). No obstante, Quiroga había procurado que Rodrigo de Mendoza recibiese sus frutos sin necesidad de residir (AHN, Inq., libro 1235, fols. 202v-203r; ACT, Actas Capitulares. Tomo 16, fol. 275v). Sobre nuevos intentos de favorecimiento del mismo abortados por el propio rey, véase, CODOIN, Vol.7, p. 522.

(132).- Para apreciar, en conjunto, los cambios de inquisidores que sufrieron los tribunales entre 1580 y 1585, remitimos nuevamente al listado de los mismos recogido en este trabajo.

a cambio de la concesión de la abadía de Santa Fe. Pocos días después, Quiroga trataba de esclarecer este asunto con Mateo Vázquez, rogando que fuese concedida la merced al inquisidor sin que esto le apartase del tribunal granadino, por lo que también hizo instancia el secretario Gaztelu (133). Su influencia sobre los nuevos nombramientos fue muy limitada o nula. Así, en septiembre de 1582, desde el consejo se informaba de la necesidad de oficiales que tenía la inquisición de Aragón. Quiroga mandó hacer información de Francisco Magdaleno para el cargo de fiscal a instancia del arzobispo de Zaragoza, y de Jerónimo Doro para notario del secreto a petición de Jerónimo Manrique, siendo ambos provistos en dichos cargos (134). La carencia de influjo por parte de Quiroga fue puesta de manifiesto en su intención de que el licenciado Benito Rodríguez Valtodano fuese admitido como consultor de la inquisición de Sevilla. Los inquisidores sólo le aceptaron tras realizar diversas consultas a la Suprema, dos años después de que el Inquisidor General hubiese efectuado su mandato al respecto (135).

Por otra parte, el tribunal inquisitorial de Toledo adquirió durante estos años una relevancia especial, puesto que la presencia de Gaspar de Quiroga en la ciudad, ocupado en labores de su prelación, motivó que la inquisición de Toledo

(133).- IVDJ, envío 21, (caja 32), nº 727. Mexía de Lasarte gozaba además de un beneficio en la iglesia de Santa María de la Cuesta en la villa de Hita, con cuyo abad y cabildo Quiroga había insistido para que continuasen acudiendo con sus frutos al inquisidor (AHN, Inq., libro 1235, fols. 222r-224r). Igualmente, en 1586, instó a la iglesia de Córdoba para que le abonasen su renta como capellán de Santa Inés (Ibid., fol. 289r-v). Por otra parte, estos intentos de apartar al inquisidor del tribunal de Granada pudieron venir determinados por la intención de Andrés de Alava de retornar al mismo, que, por estas mismas fechas, recibía nombramiento en la inquisición de Sevilla. Sobre sus enfrentamientos con el inquisidor Juan López Sierra y el favorecimiento que recibió por parte de Hernando de Vega y Mateo Vázquez, véase, Ibid., envío 96 [caja 138] nº 168; AZ, carp. 139 nº 257, 259; AHN, Inq., leg. 2947 (s.f.).

(134).- Ibid., libro 328, fols. 60r-v, 66v, 69r.

(135).- El 30 de noviembre de 1580 Quiroga había dado orden a los inquisidores de Sevilla para que recibiesen a Benito Rodríguez Valtodano como consultor. Juez de Grados en la Audiencia Real de Sevilla, había realizado sus estudios en el Colegio de San Bartolomé. Había actuado como comisario en la inquisición de Valladolid, y estaba casado con una hermana del licenciado Montoya, procurador del Santo oficio en Roma. Después de elevar varias consultas al Consejo, los inquisidores sevillanos se avinieron a aceptar su admisión en septiembre de 1582 (Ibid., leg. 2947, s.f.).

actuase en diversas ocasiones como mediador entre el inquisidor General y la Suprema, pasando a cobrar gran importancia no sólo por esta función, sino por el propio apoyo que Quiroga trató de encontrar en este tribunal, tal vez como forma de sustituir o paliar su completa falta de influencia sobre el Consejo de Inquisición, sito en la Corte. Así pues, la promoción de los inquisidores toledanos vinculados al "partido castellanista" como consejeros, propició que Quiroga atrajese a este tribunal a algunos de sus clientes. Así, proveyó a Rodrigo Gutiérrez del Páramo, a Juan de Zúñiga y a Lope de Mendoza, contando también con la presencia de Francisco Dávila, arcediano de Toledo. A partir de 1585, el control de Quiroga sobre el tribunal toledano se intensificó, puesto que fueron nominados como inquisidores Rodrigo de Mendoza, Antonio Morejón, sobrino de Gaspar de Quiroga, y el inquisidor de Granada Diego Mexía de Lassarte (136).

El cambio operado en el ejercicio del poder en torno a dicho año, que marcó el declive del "partido castellanista" y el surgimiento de nuevos patronos cortesanos, conllevó que, nuevamente se procediese a la renovación de los inquisidores y fiscales que conformaban los distintos tribunales (137). Como había sucedido en relación a la Suprema, fueron los inquisidores que se vincularon a los nuevos patronos cortesanos los que comenzaron a ocupar dichos puestos en los tribunales principales. Este fue el caso del licenciado Molina de Medrano, quien, en 1584, agradecía servicialmente a Mateo Vázquez su nombramiento como inquisidor del tribunal de Zaragoza, al que se trasladó desde la inquisición de Córdoba. No obstante, sólo dos años después, utilizaba al

(136).- Resulta significativo que el inquisidor Andrés de Álava, estrechamente vinculado al "partido castellanista", como hemos señalado, recibiese nombramiento como inquisidor de Toledo en 1589. Sin duda, esta situación vino motivada por su adecuación a la nueva configuración cortesana que se produjo a partir de 1585, como lo prueba el hecho de que, finalmente, obtuviese su acceso a la Suprema en 1601 (T. SÁNCHEZ RIVILLA, op. cit., apéndice).

(137).- En este sentido, véase la llamativa carta que el licenciado Alfonso Fernández de Bonilla, inquisidor fundacional del tribunal de México escribía a Mateo Vázquez, en octubre de 1588, reconociéndose su hechura y rogándole le sacase del olvido en que estaba sumido "de efectos que ha hecho la muerte y mudanzas del Consejo de Inquisición a donde apenas hay quien me conozca" (IVDJ, envío 62 (caja 84), n° 400). Para una visión de conjunto, nuevamente nos remitimos al listado que se adjunta en los apéndices.

secretario como un mero intermediario para solicitar una merced al conde de Chinchón (138). Por su parte, Gaspar de Quiroga aprovechó la rehabilitación política que tuvo en estos años para favorecer también a alguno de sus clientes, como Francisco Blanco de Salcedo, a quien Quiroga había nombrado inquisidor de Murcia en 1578, pasando, en 1592, a integrar el tribunal de Sevilla junto a Juan Hurtado de Mendoza (139).

Así pues, podemos concluir que, la evolución de los inquisidores y fiscales que configuraban los tribunales inquisitoriales fue pareja a la que siguió el Consejo de Inquisición, determinada a su vez por el devenir de las facciones cortesanas. Sin embargo, mientras que el Inquisidor General no contó con el control de dicho organismo, sin lograr minimizar el influjo de Mateo Vázquez, en los tribunales de distrito pudo ejercer con mayor facilidad su patronazgo, puesto que los inquisidores recibían sus poderes directamente derivados del Inquisidor General (140). No obstante, como hemos señalado, la resolución de Mateo Vázquez en mantener las redes clientelares establecidas por Espinosa, obstaculizando los intentos de Quiroga por dismantelarlas a través de la movilidad y el apartamiento, dificultó el nombramiento por su mano de inquisidores en tribunales especialmente relevantes. Su relegamiento al arzobispado toledano en 1580 propició que el Inquisidor General tratase de reforzar el tribunal de dicha ciudad ante la poca afinidad que encontraba en el Consejo de Inquisición, volviendo a favorecer a sus protegidos tras el cambio

(138).- Ibid., envío 8 (III), fol. 180; Ibid., envío 56 (caja 75), paquete 6, n° 13 (s.f.).

(139). P. GARCIA DE YEBENES PROUS, op. cit., pp. 826-827. Hemos de señalar que Quiroga instó a la iglesia de Santiago de Compostela para que acudiese a Francisco Blanco de Salcedo con los frutos de su canonjía a lo largo de los distintos cargos inquisitoriales que ocupó (AHN, Inq., libro 1235, fols. 221r-v, 286v-287r, 296v-298r).

(140).- En este sentido, creemos necesario realizar una aclaración, aunque sobre esta cuestión tendremos oportunidad de insistir. Según establecía el breve de nombramiento del Inquisidor General, del que derivaban sus facultades, una de sus atribuciones estaba referida al nombramiento de todos los servidores inquisitoriales, lo que atañía también a los servidores de la Suprema, cuya jurisdicción sobre los asuntos inquisitoriales nunca fue reconocida por la Santa Sede, puesto que dependía del rey. La intervención del monarca en su designación vino establecida por la costumbre, aunque, en última instancia, la provisión estaba conferida al Inquisidor General. Sobre estos aspectos, véase R. LOPEZ VELA, "Las estructuras administrativas del Santo Oficio", pp. 78-79, 86).

político operado en la Monarquía en torno a 1585, aunque, como sucediese en la Suprema, fueron los nuevos patronos cortesanos quienes marcaron, principalmente, las pautas en este sentido.

b) La actividad confesionalista de la Inquisición.

Como hemos señalado, el Santo Oficio constituía una pieza clave en el proceso de confesionalización de la Monarquía propugnado por Felipe II. Su labor de control social para que no se produjeran desviaciones peligrosas para el mantenimiento de la ortodoxia católica, que provocasen conflictos de orden sociopolítico, fue un vehículo esencial para la implantación de los preceptos confesionalistas, asegurando que el conjunto de la sociedad asumiese esta ideología, a través de sus funciones de vigilancia y castigando toda extralimitación de los rígidos márgenes ideológicos, que, además, venían a justificar la actuación política desarrollada por la Corona (141). De esta manera, la Inquisición reorientó su actividad, centrando sus esfuerzos en que este ideario, configurado al servicio del propio monarca y de una élite social, impregnase todas las realizaciones individuales o colectivas, quedando constatada esta función en los datos que diversos autores han recopilado en torno a la evolución del ejercicio procesal realizado por el Santo Oficio a lo largo del siglo XVI (142). Un somero análisis de las cifras de los individuos procesados pone de manifiesto cómo, en el último tercio de la centuria, había disminuído el

(141).- J. MARTINEZ MILLAN, "En busca de la ortodoxia...", p. 209. R. GARCIA VILLOSLADA, op. cit., III-2º, pp. 249-250.

(142).- Sirvan como ejemplo los datos referidos a algunos tribunales sobre la evolución de los delitos contemplados en las causas de fe habidas en los tribunales de Canarias, Córdoba y Barcelona en el último tercio del siglo XVI. A. ACOSTA GONZALEZ, Estudio comparado de tribunales inquisitoriales, UNED 1991, pp. 232-234; R. GRACIA BOIX, Autos de fe y causas de la inquisición de Córdoba, Córdoba 1983; J. CONTRERAS, "Las causas de fe en la Inquisición de Galicia, 1560-1700", en La Inquisición española. Nueva visión, nuevos horizontes, pp. 355-370; J. P. DEDIEU, "Les causes de foi de l'inquisition de Tolède (1483-1820). Essai statistique", Melanges de la Casa de Velázquez 14 (1978), pp. 143-171; en relación con los tribunales americanos, B. ESCANDELL BONET, "La peculiar estructura administrativa y funcional de la Inquisición española en Indias", en Historia de la Inquisición en España y América, II, pp. 655-656; en dicho volumen aparece un trabajo de síntesis realizado por J. CONTRERAS, "Estructura de la actividad procesal del Santo oficio", p. 630.

número de judeoconversos y moriscos, que representaban el mayor porcentaje en épocas anteriores, observándose un incremento de los que fueron acusados de realizar "proposiciones" y blasfemias. Así pues, la Inquisición dirigió su acción sobre aquellos que mostraban mantener algún tipo de disidencia o un entendimiento equivocado de los cauces ideológicos que se estaban imponiendo a toda la sociedad desde las altas instancias de la Monarquía. Desde este punto de vista, la persecución a judeoconversos y moriscos, que también existió, cobra una nueva orientación.

En este sentido hemos de entender el proceder de Gaspar de Quiroga al frente de la institución, viéndose forzado a intervenir para atajar el surgimiento de posturas críticas, como la representada por Fray Luis de León, independientemente de que, personalmente, compartiese con el agustino su vía de religiosidad; erradicar cualquier tipo de apartamiento de la ortodoxia católica, como era el resurgimiento del movimiento alumbrado, que, además, ponía en peligro la consecución de la reforma de la Orden del Carmen, por las acusaciones que se hicieron recaer sobre su principal hacedora, Teresa de Jesús, siendo este un proyecto directamente implicado con uno de los aspectos fundamentales de la confesionalización de la monarquía y auspiciado por el propio rey. Igualmente, trató de buscar una solución al problema que representaba la existencia de la minoría morisca, discordante en el proceso de homogeneización ideológica, al servicio de la que se realizó, tal vez, la obra de mayor significado y perspectiva desde el punto de vista inquisitorial: un nuevo Índice de libros prohibidos.

b.1. La amistad con Fray Luis de León.

En marzo de 1572, fueron arrestados por el tribunal inquisitorial vallisoletano los catedráticos hebraístas de la Universidad de Salamanca Gaspar de Grajal, Martín Martínez de Cantalapiedra y fray Luis de León. Pocos meses después, el 18 de julio, los inquisidores de Valladolid apresaban al biblista Alonso de Gudiel, profesor de la universidad de Osuna, también perteneciente

a la orden de San Agustín (143). La maquinaria inquisitorial se había puesto en funcionamiento para atajar las críticas que se estaban desarrollando contra la escolástica tradicional desde un humanismo reformista, que venía a poner en tela de juicio algunos de los preceptos establecidos como ortodoxia teológica (144). Estas dos concepciones estaban representadas por la orden de Santo Domingo, defensora del tomismo, conservador, en contraposición a los agustinos, quienes, a través de su sólida formación humanista, auspiciaban la introducción de ciertas innovaciones (145). La pugna mantenida por ambas órdenes religiosas en el ámbito teológico, tenía su reflejo en la vida universitaria, generándose bandos, en función de la filiación dominica o agustina del pretendiente, en cuanto a la provisión de las cátedras. Esta situación, junto a la existencia de envidias y rencillas personales, constituyó la base de las acusaciones proferidas contra los hebraístas desde la universidad de Salamanca, señaladamente por León de Castro, que condujeron a la instrucción de los

(143). La conexión entre el procesamiento ejecutado contra los salmantinos y el que se llevó a cabo contra Gudiel ha sido realizada por M.DE LA PINTA LLORENTE, quien se ha ocupado del estudio de estos procesos en diversas obras: Procesos inquisitoriales contra los catedráticos hebraístas de Salamanca, Madrid 1935; Proceso criminal contra el hebraísta salmantino Martín Martínez de Cantalapiedra, Madrid 1946; Causa criminal contra el biblista Alonso Gudiel, catedrático de la universidad de Osuna, Madrid 1942; el proceso contra fray Luis de León aparece publicado en CODDIN, 10-11; A. ALCALA (Ed.), El proceso de fray Luis de León, Junta de Castilla y León 1991.

(144).- Además de los citados anteriormente, véase: Idem, "Control inquisitorial de humanistas y escritores", A.ALCALA y otros, Inquisición española y mentalidad inquisitorial, Barcelona 1984, pp, 294-297; B.BENNASSAR, Inquisición española: poder político y control social, Barcelona 1984 (2ª ed.), pp, 262 ss; desde 1569 se habían mantenido en la universidad de Salamanca algunas reuniones destinadas a configurar un nuevo catálogo de libros prohibidos. Los enfrentamientos mantenidos en torno a la autoridad de la Vulgata, reconocida por el Concilio de Trento, en 1546, como la versión "auténtica", a la que los hebraístas criticaban por no considerar convenientemente los textos judaicos y helenísticos, se encontraban en el origen de estos procesos inquisitoriales. En torno a estas disputas, véase V.PINTO CRESPO, "El proceso de configuración y elaboración del índice expurgatorio de 1583-84 en relación con otros índices del siglo XVI", Hispania Sacra, 30 (1977), pp, 13, 18-19; Idem, Inquisición y Control ideológico en el siglo XVI, Madrid 1983, pp, 191-192.

(145).- La importancia que se quería otorgar a las fuentes judaicas era considerada perniciosa por las cualidades que se atribuían al pueblo hebreo. Sobre las distintas vías teológicas encarnadas por dichas órdenes, véase, M.ANDRES, La teología española en el siglo XVI, I, pp, 135-139, 155-158; V. BELTRAN DE HEREDIA, Las corrientes espirituales de los dominicos de Castilla..., pp, 19-30, 155-156.

procesos inquisitoriales (146).

Cuando Gaspar de Quiroga se puso al frente de la Suprema la actividad procesal había cumplido su primer año de andadura. No debió resultar confortador para el nuevo Inquisidor General la prisión que vivían los miembros de la Orden de San Agustín, sobre todo, en el caso de fray Luis de León, a quien conocía desde su juventud y con el que había continuado vinculado a lo largo de su trayectoria vital (147). A ésto se unía que, con la actuación de la Inquisición, se estaba poniendo en valoración una concepción teológica que el propio Quiroga compartía (148). No obstante, la peligrosidad que implicaba el desarrollo de una postura crítica a los preceptos rígidamente establecidos de la ortodoxia católica, siendo la principal función del Santo Oficio su defensa, condicionaron la actuación del Inquisidor General en que los procesos siguiesen su curso, interviniendo de forma muy limitada para tratar de suavizar la

(146).- Estas cuestiones aparecen constatadas en diversas testificaciones realizadas en el marco de los procesos. Véase, por ejemplo, CODOIN, Vol.10, pp, 422-424, 482; M.DE LA PINTA LLORENTE, Proceso criminal contra el hebraísta salmantino..., pp, LXXXIV-LXXXVI.

(147).- Un comentario del propio fray Luis de León nos remonta a los orígenes de su conocimiento: "se ve a los hombres cambiar de rango, y sucede con frecuencia que una persona nacida en la obscuridad asciende a las alturas de los más encumbrados y dignos puestos (...) el cardenal Quiroga no tenía un maravedí cuando llegó a Salamanca". De igual manera, parece que un nuevo encuentro se produjo en 1570, cuando el agustino se trasladó a Córdoba, encontrándose allí Quiroga acompañando al rey (A.F.G.BELL, Luis de León, Barcelona 1927, p, 26 y 201). Esta circunstancia ha sido también puesta de manifiesto por A.ALCALA, quien afirma que, principalmente, por dos razones se puede asegurar el conocimiento personal entre ellos: la vinculación de fray Luis al convento agustino de Madrigal de las Altas Torres, población natal de Quiroga, y su prelación de Cuenca, lo que le relacionaba con la familia de Belmonte. Por otra parte, la familiaridad en el trato que el agustino dispensaba al Inquisidor General aparece clara en las cartas que el dirigió, sobre todo si tenemos en cuenta que nunca escribió a Diego de Espinosa, quien ocupaba dicho cargo cuando se llevó a cabo su procesamiento. Además, no deja de ser llamativo que se dirigiese a él de forma directa, sin intermediación del tribunal, no sucediendo algo similar en los procesos del resto de los profesores hebraístas presos (El proceso inquisitorial de fray Luis de León, p, 436).

(148).- Sirva como ejemplo ilustrativo que uno de los puntos en los que diferían agustinos y dominicos estaba referido a la utilización de la lengua romance para la escritura de libros de materia religiosa. Cuando Juan López de Velasco publicó en Burgos en 1582, Ortografía y pronunciación castellana, en la dedicatoria menciona "el entusiasmo que sentía el cardenal Quiroga por el idioma castellano" (A.F.G. BELL, op. cit., p, 45, n. 72). Esta circunstancia debía ser conocida por fray Luis cuando en uno de los escritos que le dirigió presentaba una especie de resumen de sus fundamentos doctrinales. En estos mismos aspectos incide M. BATAILLON, op. cit., pp, 768-769.

consecuencia que, para los reos inquisitoriales, había de tener este episodio (149). Sin embargo, durante los años de prisión, el agustino no dudó de la amistad de Quiroga, a quien, posteriormente, dedicó una de las obras que había realizado en la cárcel, el comentario al Salmo XXI (150), y a quien no dejó de apelar cuando su situación comenzó a hacer mella en su ánimo por lo dilatado de la causa (151). Esta no conoció su finalización hasta diciembre de 1576, en que primero la Suprema, y después los inquisidores de Valladolid, pronunciaron la sentencia absolutoria, aunque la liberación de fray Luis debía ir precedida de una severa reprimenda, y de la advertencia de que usase de mayor prudencia cuando tratase de ciertas materias religiosas, puesto que la peligrosidad de sus afirmaciones había sido el motivo de su procesamiento. Igualmente, el Santo oficio ordenaba que fuesen retirados de la circulación los ejemplares traducidos al castellano del Cantar de los Cantares. Parece que, en esta determinación, la intervención personal de Quiroga en favor del agustino fue decisiva, reconduciendo los cauces que estaba tomando el

(149).- Sobre el contacto mantenido por fray Luis de León con el Inquisidor General en los meses centrales de 1574, véase, A. ALCALA, El proceso inquisitorial..., pp, 435-451, 467; CODOIN, Vol.11, pp, 5-29. Por otra parte, hemos de tener en cuenta que acceder a algunas de las peticiones realizadas por el agustino hubiesen comprometido seriamente la gestión de Quiroga al frente del Consejo de Inquisición, puesto que una de sus pretensiones era conocer los nombres de sus integrantes para, si lo juzgaba conveniente, proceder a su recusación como jueces de la causa. Si bien Quiroga guardó silencio ante estas demandas, ateniéndose a la conveniencia de favorecer las directrices marcadas por el proceso de confesionalización de la Monarquía (sobre la información que remitía al rey en torno a la marcha del proceso, véase BL, Eg. 1506, fol. 16), dejaba clara su postura cuando, en diciembre de dicho año, el claustro salmantino abogó ante él por la breve resolución de los procesos. En su respuesta, el Inquisidor General prometía acortar el despacho de los mismos (G. DE SANTIAGO VELA, Ensayo de una biblioteca iberoamericana de la orden de San Agustín, Madrid 1971, III, p, 407). Sobre las peticiones de aplicación presentadas a los inquisidores de Valladolid, CODOIN, Vol.11, pp, 52-53.

(150).- Iniciado en julio de 1575, no vio la luz hasta 1580, reflejando el agradecimiento que sentía hacia el Inquisidor General por su labor para que fuese reconocida su inocencia. A.F.G.BELL, op. cit., pp, 288-289; FRAY LUIS DE LEON, Obras Completas Castellanas, Madrid 1944, p, 1329.

(151).- El 21 de noviembre de 1575, fray Luis escribía una patética carta a Quiroga pidiéndole que le mudase su prisión en las cárceles inquisitoriales por un monasterio vallisoletano "aunque sea en San Pablo" (pertenciente a la orden de Santo Domingo). A. ALCALA, op. cit, p, 604; CODOIN, Vol.11, pp, 196-198. No obstante, nuevamente los ruegos del reo fueron desoídos por el Inquisidor General.

proceso y procurando su terminación (152).

Sin embargo, este encuentro con la actuación del Santo Oficio no fue el último para Fray Luis de León, puesto que entre febrero y agosto de 1582, el tribunal vallisoletano siguió un segundo proceso en su contra (153). El origen de este nuevo procesamiento estuvo relacionado con la controversia que mantuvieron en la universidad de Salamanca el jesuita Prudencio de Montemayor y el dominico Fray Domingo Báñez sobre cuestiones referidas a la doctrina de la gracia. En el transcurso de las discusiones, la intervención del agustino vino a apoyar la tesis de Montemayor, más cercana a sus propios planteamientos que la sustentada por el dominico (154). Las acusaciones de defender posturas heréticas se entrecruzaron; no obstante, fueron los miembros de la Orden de Santo Domingo los que acusaron ante el Santo Oficio la inconveniencia de los argumentos teológicos presentados tanto por el jesuita como por fray Luis de León. Es posible que el agustino temiese esta ofensiva, por lo que, el 10 de febrero, dirigió un carta al Inquisidor General por la que le informaba de la diferencia de opiniones surgida, y en la que incluía una copia de las proposiciones declaradas por Báñez (155). En virtud de este aviso, y de las

(152).- En este sentido hemos de considerar dos cuestiones: la primera, que se había votado el someter a Fray Luis a tormento, y la segunda, que Pedro de Quiroga, sobrino del Inquisidor General, se había incorporado como inquisidor al tribunal vallisoletano en septiembre de 1576. Sobre la sentencia de fray Luis de León, *Ibid*, pp, 353-357; A. ALCALA, *op. cit.*, pp, 698-702. Igual suerte corrió su compañero Martínez de Cantalapiedra unos meses después (M.DE LA PINTA LLORENTE, *Proceso criminal...*, pp, 395-399). Peor fortuna tuvieron el maestro Grajal y Alonso de Gudiel, quienes murieron presos durante el desarrollo del proceso inquisitorial, en septiembre de 1576 el primero, y algunos meses después de su inicio el segundo, en abril de 1573.

(153). F.BLANCO GARCIA, "Segundo proceso instruido por la Inquisición de Valladolid contra Fr. Luis de León", *La Ciudad de Dios* 41 (1896), pp, 15-37.

(154).- Posteriormente, en su declaración ante el Santo Oficio, fray Luis afirmaba que su intervención había sido motivada porque las impugnaciones que se hicieron a Montemayor sólo habían buscado humillar a la Compañía de Jesús. En torno a la polémica teológica suscitada, véase, L.PASTOR, *op. cit.*, vol. 24, pp, 166-167; A.ASTRIN, *op. cit.*, IV, pp, 129-132; G.DE SANTIAGO VELA, *op. cit.*, III, p, 408.

(155).- Como señala F.BLANCO GARCIA, en este segundo proceso también se hallaron presentes algunos condicionantes que habían tenido una gran importancia en el primero, como eran el enfrentamiento entre órdenes religiosas por la provisión de las cátedras universitarias y las rencillas personales. En su contra, fray Luis de León argumentaba que las opiniones de Báñez eran: "doctrina peligrosa y casi errónea; y no obstante esto, después acá la ha enseñado, y añadido otras

denuncias presentadas por los dominicos, Quiroga escribió al Consejo de Inquisición, remitiendo el escrito del agustino, y ordenando que el inquisidor del tribunal de Valladolid, Juan de Arrese, se trasladase a Salamanca para realizar el correspondiente informe (156). Así pues, se iniciaba la instrucción del proceso que se desarrollaría con gran celeridad, puesto que estaba completado a los seis meses de su comienzo. Durante los mismos, Arrese recogió las declaraciones de los implicados. Fray Juan de Santa Cruz, fraile jerónimo, fue quien detalló ante el inquisidor las dieciseis afirmaciones realizadas por fray Luis durante la disputa que habían conducido a la delación. No obstante, su testificación presentaba una gran deficiencia, puesto que, como el mismo denunciante refería, no había asistido al primero de los tres actos donde se discutió el asunto en torno al que se había suscitado la polémica, aduciendo que su testimonio se basaba en las referencias que había escuchado sobre lo acontecido. Por su parte, fray Luis de León presentó su defensa el 8 de marzo, alegando que su intervención en la ratificación de las tesis de Montemayor estaba motivada por el convencimiento de que era injusta su calificación como heréticas, habiendo sido proferido este juicio por los miembros de la Orden de Santo Domingo únicamente a causa de las diferencias que mantenían con la Compañía de Jesús (157). Finalizadas las representaciones efectuadas por los implicados en favor de sus razones, fue necesario que las universidades de Salamanca y Alcalá de Henares procediesen a calificar las proposiciones, aunque, según las noticias procuradas por el inquisidor Arrese, la opinión emitida por

de tan mala calidad. No creo de él que sea hereje; y así me pareció que el camino más acertado era dar aviso de ello a V.S. Ilustrísima solamente, que con su grandísima prudencia y rectitud verá mejor que nadie lo que con ellos conviene y lo provea. En el papel que va con ésta van las proposiciones y lo que yo siento de ellas; y he visto que otros hombres doctos sienten, aunque mi parecer vale poco, y yo lo conozco así" (F.LUIS DE LEÓN, *Obras completas...*, p. 1398).

(156).- La carta de Quiroga al Consejo de Inquisición se encuentra en AHN, Inq., libro 358, fol. 75 r. La transmisión de la orden al inquisidor Arrese en Ibid., libro 357, fol. 75v.

(157).- Ambas declaraciones aparecen publicadas en A. ASTRAIN, op. cit., IV, pp. 133-141. El 16 de marzo, el Consejo de Inquisición ordenaba a Arrese que remitiese la confesión de fray Luis junto con un memorial que el agustino había prometido adjuntar. Igualmente, los consejeros se interesaban por una información que fray Domingo Báñez había procurado al inquisidor sobre un libro de Santo Tomás que contaba con unas adiciones que, evitando la censura romana, se había impreso en León (AHN, Inq., libro 580, fol. 132r.). Pocos días después, la Suprema pedía a Arrese que remitiera todas las testificaciones del proceso (Ibid., fol. 135v.).

ambas fue de muy distinto talante, esperándose, además, que prontamente el pontifice otorgase su respaldo a las argumentaciones jesuíticas desde Roma (158). A comienzos de agosto todo estaba dispuesto para que se adoptase una determinación (159), pero la sentencia definitiva no se emitió hasta febrero de 1584. Se han aportado diferentes explicaciones para justificar un retraso de casi dos años en el dictado del veredicto, aludiendo a la actividad que durante estos años desplegó el Santo Oficio contra otros maestros salmantinos y a que el Inquisidor General retrasó conscientemente la conclusión del proceso para que los fragores de la polémica y las enfrentadas posiciones se fuesen relajando, atribuyéndose la benignidad de la resolución a la intervención directa de Gaspar de Quiroga, significativamente vinculado a la religiosidad de la compañía de Jesús, y quien se hallaba apartado de la gracia real, estando los asuntos inquisitoriales dominados por los miembros del "partido castellanista" (160). Así, durante estos meses, como el propio Prudencio de Montemayor refirió posteriormente, el Inquisidor General había hecho llamar a los provinciales de la Orden para solicitarles que las doctrinas que enseñasen los jesuitas no generasen polémicas y desuniones (161). Igualmente, en agosto de 1583, el consejero de Inquisición Pedro de Portocarrero se había encargado de revisar dos obras de fray Luis de León sobre las exposiciones de los Cantares y los doce profetas menores, para comprobar si se había cumplido lo que la Suprema había ordenado en torno a ellas en consonancia con la publicación del

(158).- La correspondencia cruzada entre Arrese y el Consejo de Inquisición durante el mes de abril, se encuentra en *Ibid.*, fol. 139r.; A.ASTRAIN, *op. cit.*, IV, pp. 143-144. Por la misma sabemos que, además de a las Universidades, fue requerida la calificación de fray Hernando del Castillo y fray Lorenzo de Villavicencio.

(159).- El 3 de agosto la Suprema requería a Arrese la documentación derivada del proceso con este fin, obrando en su poder el día 13 (AHN, Inq., libro 580, fols. 161r. y 164v.).

(160).- F.BLANCO GARCIA, *op. cit.*, p. 30-31.

(161).- MHSI, *Epistolae Salmeronis*. Madrid 1917, II, pp. 716-717; A. ASTRAIN, *op. cit.*, IV, pp. 145-146. En julio de 1585, Montemayor afirmaba: "Ha tres años y medio que el Provincial me trae de acá para allá, de probación en probación. Dice que así conviene para ejemplo y escarnio de los demás, y que así le dijo el Arzobispo que lo hiciese, que no me emplease en ejercicios de letras". El posterior permiso otorgado por Quiroga, le permitió, pocos meses después, enseñar nuevamente Teología.

nuevo Índice de Libros Prohibidos (162). Por deseo del propio rey también fue requerida la opinión de su confesor, el dominico fray Diego de Chaves (163). Todas estas gestiones tuvieron como resultado que, como hemos señalado, hasta febrero de 1584, Quiroga no llamase a fray Luis a su presencia. Como sucediese en su anterior proceso, el agustino recibió una reprimenda del Inquisidor General, quien le pidió que, en adelante, no tornase a defender las proposiciones que habían suscitado la controversia. Así pues, Quiroga se decantó por una vía media desde su menguada situación, evitando que se castigase a la persona, a la que le unían no sólo vínculos de amistad, sino también de religiosidad, pero sí imponiendo un silencio total a las posturas que supusiesen una crítica teológica a los preceptos que se consideraban ortodoxos (164).

Esta determinación se vió ratificada en otro representativo proceso, puesto que la Universidad de Salamanca no dejó de ser un foco de atención para la actividad inquisitorial. A comienzos de dicho año, los inquisidores vallisoletanos iniciaron el procesamiento del catedrático Francisco Sánchez de las Brozas, quien habiendo realizado ciertas críticas a la retórica de Aristoteles, que, según declaraban los testigos, habían merecido la calificación de herejía realizada por el dominico Mancio, argumentando que, puesto que Santo Tomás se basaba en Aristóteles, sus afirmaciones contravenían la fe católica. Durante los meses que duró el proceso, que finalizó en septiembre de 1584, las testificaciones no

(162).- J.M.DE BUJANDA, Index de l'Inquisition espagnole 1583-1584. Université de Sherbrooke 1993, p, 595.

(163).- IVDJ, envío 55 (caja 72), nº 119, 127 y 131. Este gesto denota una cierta desconfianza por parte de Felipe II, quien escribía a Chaves: "mas debe haber en esto que lo que aquí se dice". Sobre todo, si tenemos en cuenta que, en 1578, sugerida por Quiroga la necesidad de calificar un escrito sobre Job de Diego de Zúñiga, agustino y con una postura que no revestía crítica a los preceptos teológicos imperantes, el rey desestimaba que se eligiese para esta función a fray Diego de Chaves. "pareceme que sería ocuparle mucho para su edad" (Ibid., nº 230). Sobre la vinculación de Diego de Zúñiga a Mateo Vázquez, véase, Ibid., envío 92 (caja 133), nº 6, fol. 443; I.ARAMBURU CENDOYA, "Fr. Diego de Zúñiga. Biografía y nuevos escritos" Archivo Agustiniiano 55 (1961), pp, 77-78.

(164).- A.ASTRAIN, op. cit., p, 144: "le reprendió de la culpa que resultaba de los autos y méritos del proceso, y le amonestó benigna y caritativamente".

pasaban de reflejar el enrarecido ambiente universitario, sin que en ellas los inquisidores pudiesen encontrar atisbos de heterodoxia. No obstante, a través de las mismas, se observaba que el Brocense constituía un espíritu crítico ante la ideología imperante en la sociedad, utilizando una aguda ironía para evidenciar las limitaciones impuestas. Al igual que para fray Luis de León, su encuentro con el Santo Oficio se saldó con una llamada al orden realizada por el inquisidor Leciñana a instancias de la Suprema (165).

Por otra parte, cuando en abril de 1573 el biblista Alonso de Gudiel moría en las cárceles inquisitoriales, su proceso quedaba paralizado, reanudándose en agosto del mismo año contra su memoria y fama. No obstante, unos meses después las diligencias quedaron interrumpidas, sin que se volviesen a retomar hasta 1584 (166). Parece claro que este nuevo impulso vino provocado por la actuación personal de Gaspar de Quiroga, quien, el 30 de mayo, se dirigía a la Suprema dando orden de que fuesen remitidos a dicho consejo todos los papeles que se conservasen del maestro Gudiel, puesto que había sido informado de que no convenía que nadie los tuviera ni leyera. Esta actuación debía realizarse de forma secreta y sin publicación de edictos (167). El 23 de junio los papeles habían llegado a su destino, solicitando el Consejo ser informado del estado en que se hallaba la consecución de la causa. Sin embargo, a los pocos días, eran nuevamente enviados a Valladolid, puesto que los inquisidores juzgaban que podían esclarecer algunas cuestiones relacionadas con

(165).- Entre 1593 y 1600 se siguió un segundo proceso contra el Brocense. Ambos han sido recogidos por A.TOVAR y M.DE LA PINTA LLORENTE, Procesos inquisitoriales contra Francisco Sánchez de las Brozas. Madrid 1941.

(166).- M. DE LA PINTA LLORENTE, Causa criminal contra el biblista..., p. 44, alude a que no existen motivos inmediatos que justifiquen tan largo paréntesis, explicando que, tal vez, los inquisidores vallisoletanos postergasen este proceso condicionados por su mucha actividad y la existencia de causas más urgentes.

(167).- AHN, Inq., libro 361, fol. 244r. La carta que el Consejo de Inquisición dirigió en conformidad con este mandamiento el 2 de junio se encuentra en Ibid., libro 580, fol. 284v. Parece que Quiroga se refería en concreto a los papeles que se hallaban en poder de la Orden de San Agustín.

el proceso (168). Las gestiones realizadas por el tribunal vallisoletano, entre las que se encontraba la petición de nuevas censuras, se prolongaron hasta enero de 1591, en que se tomó la decisión de sobreseer la causa (169).

Este mismo año fallecía fray Luis de León en el convento agustino de Madrigal de las Altas Torres. Nada hacía presagiar el fatal desenlace, pues fray Luis había estado trabajando con normalidad los días anteriores, especialmente en sus comentarios al libro de Job (170). La muerte liberó al agustino del que hubiese supuesto su tercer encuentro con el Santo Oficio, puesto que, en enero de 1594, la Suprema escribía al consejero Juan de Zúñiga a Salamanca, dando orden de que dicha obra fuese llevada al Consejo, para ser examinada. El maestro Alonso de Curiel había informado a Gaspar de Quiroga, por mandato del Consejo Real, de que este libro, que estaba escrito en lengua vulgar, contravenía la sexta regla del Catálogo de Libros Prohibidos de 1584, por la que se establecía que las Sagradas Escrituras no se debían reflejar en romance si no era con la autorización expresa del Santo oficio (171).

b.2. Arias Montano y su servicio a la Corona.

En mayo de 1568, Benito Arias Montano llegaba a los Países Bajos obedeciendo un mandato regio. Había recibido el encargo de realizar la supervisión de los trabajos conducentes a la reedición de la Biblia Políglota cisneriana de forma ampliada. El proyecto de la llamada Biblia Regia había sido iniciado por el impresor Plantino y un grupo de estudiosos. No obstante, la magnitud de la obra y sus elevados costes hicieron necesaria la búsqueda de un mecenas. Felipe II aceptó el ofrecimiento por considerar que suponía un importante jalón en la lucha contra el protestantismo, puesto que utilizaba sus

(168).- Ibid., fol. 289r y 292r-v.

(169).- M.DE LA PINTA LLORENTE, Proceso contra el biblista..., pp, 44-46, 237-270.

(170).- A. GARCIA ZURDO, op. cit., pp, 84-87.

(171).- AHN, Inq., libro 329, fols. 302v.-303r.

propias herramientas, es decir, el estudio filológico de los textos originales (172), mientras que, por otra parte, quedaría perpetuada como la gran creación cultural acorde con la idiosincrasia de su reinado (173). Paralelamente a la realización de esta labor, Arias Montano llevó a cabo un trabajo de revisión del Índice de libros prohibidos de 1554 junto a los teólogos de Lovaina, aunque el nuevo Index manuscrito fue obra personal suya. Su peculiaridad residió en que se realizó desde el punto de vista expurgatorio, no condenando obras completas, sino eliminándose las frases que resultasen inadmisibles, con lo que vino a inaugurar un nuevo concepto de censura que tuvo un marcado influjo en los Catálogos posteriores. La situación política que se vivía en los Países Bajos hizo que el monarca designase para ejercer este control ideológico a un personaje, formado en la universidad de Alcalá de Henares bajo el influjo erasmista, que no tenía ninguna vinculación con la Inquisición, tan odiada y temida en estos territorios (174).

No obstante, los servicios de Arias Montano al rey comprendieron también otro tipo de funciones, directamente relacionadas con la evolución de la política de la Monarquía en Flandes. Poco a poco el exégeta se convertiría en un fiable consejero para Felipe II. Como agudo observador y desde la posición que tenía conferida, fue informando puntualmente al monarca de la situación real que se vivía en los Países Bajos, siendo sus opiniones altamente valoradas

(172).- Frente al trilingüismo de la Biblia cisneriana, el proyecto de Plantino contemplaba la reproducción en cinco idiomas. Las Universidades de Salamanca y Alcalá aprobaron el proyecto, señalando a Arias Montano como el mejor especialista en la materia. Este informaba, en febrero de 1569, de los intentos que los protestantes alemanes estaban realizando en el mismo sentido (L.MORALES OLIVER, op. cit., pp, 124-125).

(173). F. PEREZ AGUADO, "La Políglota regia". La Ciudad de Dios 47 (1898), pp, 151-168; B.REKERS, Arias Montano, Madrid 1973, pp, 61-74.

(174).- M. BATAILLON, op. cit., pp. 722-723; J. GONZALEZ NOVALIN, "La Inquisición Española" en R. GARCIA VILLOSLADA, op. cit., III-2º, pp, 194-195; A. SIERRA CORELLA, La censura en España. Índices y Catálogos de Libros Prohibidos. Madrid 1947, pp, 236-242; J.L. DE ORELLA Y UNZUE, Respuestas católicas a las censuras de Magdeburgo (1559-1588), Madrid 1976, pp. 369-377; A.PALAU Y DULCET. op. cit., VIII, p, 43; J.M.DE BUJANDA, Index d'Anvers 1569, 1570, 1571. Université de Sherbrooke 1988, pp, 89-102, 409-556.

en relación a las directrices políticas que se debían seguir (175). Además, estas ocupaciones contaban con el beneplácito del gobernador de los Países Bajos, el duque de Alba, con el que, desde su llegada, Arias Montano inició una estrecha colaboración, apoyando con los informes que remitía a la Corte la ferrea política desplegada por el mismo, resaltando la necesidad de defender el catolicismo, y por ende, los intereses políticos de la Monarquía hispana por todos los medios permisibles, incluyéndose en estos las medidas de fuerza (176).

En 1571 comenzó a divulgarse el nuevo Índice de Libros Prohibidos obra del exégeta. A finales del mismo año, los trabajos en torno a la Biblia Regia se encontraban también finalizados. No obstante, los resultados de la labor desplegada no se ajustaban totalmente a las intenciones que los habían promovido, puesto que su contenido despertó fuertes críticas, tanto en Roma, como en la península Ibérica. El método empleado por Arias Montano para la traducción de los textos era puramente filológico, es decir, trataba de reproducir lo más fidedignamente posible el original. Esta era la cuestión principal, junto a la valoración que se daba a las fuentes hebraicas, que provocó el surgimiento de la polémica teológica, puesto que ponía en entredicho la autoridad de la Vulgata, versión en la que se cimentaba la unidad doctrinal del cristianismo. Esta era la máxima que se trataba de salvaguardar con su defensa, por encima de otro tipo de valoraciones, y lo que provocaba la persecución de los criterios discordantes expresados desde posturas humanistas (177). Por tanto, cuando la Biblia Regia fue presentada ante la Santa Sede, la comisión papal encargada de su examen presentó una serie de objeciones que imposibilitaron su aprobación. Arias Montano tuvo que acudir a Roma, en febrero de 1572, para satisfacer las dudas

(175).- En este sentido, véanse las cartas que dirigió a Felipe II a los pocos meses de su llegada a estos territorios, designando al secretario Zayas como su interlocutor en la Corte (L. MORALES OLIVER, *Arias Montano y la política de Felipe II en Flandes*, Madrid 1927, pp 128-129).

(176).- B. REKERS, op. cit., pp, 21ss.; L. MORALES OLIVER, op. cit., pp, 119-121, 137-204.

(177).- Estas valoraciones aparecen puestas de manifiesto de forma más amplia en B. REKERS, op. cit., pp, 92-93.

que albergaban los cardenales (178). Por otra parte, el viaje a la Ciudad Eterna vino a marcar la finalización del entendimiento político que hasta entonces había mantenido con el gobernador de los Países Bajos. La política rigorista aplicada por el duque de Alba no estaba ofreciendo los frutos apetecidos, por lo que el consejero comenzó a inclinarse por tratar de buscar un entendimiento pacífico, advirtiendo que medidas de presión, como era la implantación de la décima, sólo conducirían a la revuelta generalizada (179). Además, en su itinerario, se detuvo en Milán, lo que le permitió mantener encuentros con Luis de Requesens, quien abogó ante su hermano, Juan de Zúñiga, para que favoreciese su actuación ante la Curia. Esta prueba de amistad constituyó el preludio del alto grado de entendimiento que ambos alcanzaron cuando Requesens fue nombrado gobernador de los Países Bajos sólo unos meses después (180). Su estancia en Roma no fue muy prolongada, pues los buenos oficios realizados por el exégeta, con la inestimable ayuda del embajador, lograron el beneplácito provisional para la Políglota,

(178).- La orden de partida fue inmediata cuando en la Corte hispana se tuvo noticia de lo sucedido por medio de informe remitido por Juan de Zúñiga. Junto al embajador, el cardenal Pacheco y Pedro de Fuentidueña, teólogo amigo de Arias Montano, se ocuparon en la defensa de la obra (Ibid., p. 75. M.R.PAZOS, "En torno a Arias Montano y su Biblia (Cartas inéditas)" Archivo Iberoamericano 2 (1942), p. 471-472). Por su parte, el duque de Alba transmitió a Zúñiga la opinión de que la presencia en Roma del exégeta para conseguir la aprobación papal era muy conveniente. Sin dudar de la buena voluntad de Alba, que puso de manifiesto en otras ocasiones, es posible que buscara el alejamiento del consejero de los Países Bajos, puesto que las buenas relaciones mantenidas en otros momentos se habían deteriorado gravemente. La carta que el gobernador dirigió al embajador el 25 de febrero en IVDJ, envío 6 (I), fols. 336-338; Cf. M.ANDRES, "Introducción" al Dictatum Christianum de Arias Montano. Badajoz 1983.

(179).- L.MORALES OLIVER, op. cit., pp. 130-132, 204-231. Sin duda, Alba era consciente del influjo que tenían en el rey las opiniones de Arias Montano, por lo que trató de propiciar la reconciliación. En abril de 1572 escribía a Juan de Zúñiga en su favor: "que demás de lo que el servicio de Su Md. v.m. hará conozca el doctor la que v.m. le hace por mi intercesión, y por tenerle yo en el lugar que le tengo" (IVDJ, envío 6 (I), fols. 346-347).

(180).- Sobre esta carta, fechada el 21 de mayo, de la que existen varias copias, véase, ibid., envío 6 (II), fol. 5: "Le tengo por muy amigo y me escribe el señor duque de Alba que tenga con él esta cuenta"; L.MORALES OLIVER, op. cit., pp. 236-237. Por otra parte, la comunicación entre ellos no se interrumpió desde entonces, así, el 21 de enero de 1573, Requesens refería a su hermano cómo había escrito a Arias Montano en torno a un diseño destinado a la capilla familiar (J.M. MARCH, El Comendador Mayor de Castilla..., p. 107).

retornando a Flandes inmediatamente conseguido su objetivo (181). Si bien las explicaciones dadas y la presión diplomática ante la Santa Sede habían obtenido un resultado favorable para la obra realizada por Arias Montano, la controversia teológica en torno a los textos bíblicos había estallado también en la península Ibérica. La detención de los maestros hebraístas salmantinos por parte de la Inquisición hacían poco recomendable su vuelta a la Corte hispana, a lo que había que unir que Felipe II no estaba dispuesto a prescindir de tan valioso consejero en torno a la política de dichos territorios (182).

En enero de 1573, el monarca adoptó la determinación de relevar al duque de Alba de la gobernación de los Países Bajos ante el fracaso de su actuación. El elegido para ocupar su puesto fue Luis de Requesens, que debía poner en práctica un programa de acción diametralmente opuesto al de su antecesor con la finalidad de obtener la pacificación, abandonando el uso de la fuerza, e intentando llegar a un entendimiento a través de la negociación. Por otra parte, este era el camino por el que Arias Montano llevaba abogando desde los meses anteriores, por lo que se aprestó a informar tanto al rey como al nuevo gobernador de los pasos que se debían seguir para obtener una solución exitosa (183). Desde que Requesens se puso al frente de la gobernación se generó una estrecha colaboración entre ambos orientada a conseguir los fines

(181).- El 14 de julio Zúñiga escribía a Gabriel de Zayas sobre la buena amistad y compañía de Arias Montano, informando de que aún no se había comenzado a tratar el negocio (IVDJ, envío 6 (II), fol. 7). En una carta que el embajador remitió al rey el 31 de agosto, refería cómo la biblia había sido presentada al papa el 16 del dicho mes, y cómo Arias Montano había atraído al cardenal Sirleto para que hiciese los oficios pertinentes con el pontífice, quien, contando con el precedente de la aprobación hecha por Lovaina, había preparado un breve en esta conformidad (Ibid., envío 111 (caja 156), n° 304). Pocos días después, Zúñiga informaba a Zayas de la vuelta de Arias Montano a los Países Bajos "y v.m. debe ayudarle como tan verdadero amigo que le saquen de Flandes porque lo desea en gran manera" (Ibid., envío 6 (II), fol. 8).

(182).- Su amigo Zayas se aprestó a informar a Arias Montano de los sucesos acontecidos, por una carta que le envió el 13 de abril de 1572 (CODIN, Vol.41, p, 272). Por otra parte, en la Corte era perfectamente conocida la inconveniencia de algunas de sus afirmaciones contenidas en la Biblia, aunque se trataban de encubrir ante la Santa sede. En este sentido, véase, IVDJ, envío 6 (II), fols. 10 y 12.

(183).- Hizo llegar sus "advertimientos" a Requesens antes de que se incorporase a su nuevo destino en noviembre de dicho año (L.MORALES OLIVER, op. cit., pp, 237-275; F. BARADO FONT, Don Luis de Requesens y la política española en los Países Bajos. Madrid 1906, p, 80.

marcados. La influencia del consejero en las directrices políticas que se seguían tuvo un enorme alcance, visible no sólo en la consecución del Perdón General, sino también en la elección y designación de las personas más idóneas para acceder a los distintos cargos de la administración (184). Paralelamente a esta actividad, continuó desarrollando sus trabajos de exégesis bíblica desde una visión crítica de la Vulgata, realizando, en 1574, un texto corregido de la misma junto a teólogos de la universidad de Lovaina, y que fue publicado por Plantino con el título de Biblia Sacra. Esta publicación vino a coincidir con el incremento de la oposición a la Biblia Regia en el seno de la disputa teológica que había suscitado su edición. Los ataques lanzados, principalmente por León de Castro hacia la obra ante Roma y ante la Inquisición, así como las implicaciones que para Arias Montano se derivaban del proceso inquisitorial que se estaba siguiendo contra fray Luis de León forzaron su llamada a la Corte (185).

Desde el comienzo de su causa, el agustino afirmó haber mantenido diversos contactos con el exégeta, alguno de ellos en torno a la autoridad de la Vulgata, puesto que le escribió a Flandes para intentar que sus proposiciones fuesen sometidas al juicio de los teólogos de Lovaina. No obstante, no había obtenido ninguna respuesta al respecto. Igualmente, solicitó, actuando como intermediario del maestro Grajal, que enviase ciertos libros desde los Países Bajos, a lo que sí accedió Arias, quien incluyó en las obras remitidas algunas de sus propias composiciones destinadas a fray Luis (186). La primera acusación que se realizó en la instrucción del proceso provino de otro agustino, de fray Diego de Zúñiga. En su declaración afirmaba que, en 1559, el procesado

(184).- El gran influjo que Arias Montano tuvo sobre el nuevo gobernador ha sido puesto de manifiesto por diversos autores (L.MORALES OLIVER, op. cit., pp. 275-297; B.REKERS, op. cit., pp. 35ss.; A.W.LOVETT, Philip II and Mateo Vázquez..., pp. 45-46, 52).

(185).- B.REKERS, op. cit., pp. 79-81. Según L.MORALES OLIVER, el requerimiento que se hizo a Arias Montano vino propiciado porque el rey consideraba finalizada su misión política en los Países Bajos (op. cit., pp. 299-301). A. PEREZ GOYENA, "Arias Montano y los jesuitas" Revista de Estudios Eclesiásticos 7 (1928), p. 282.

(186).- Así lo afirmaba en su autoacusación, realizada ante los inquisidores de Valladolid el 17 de abril de 1572. Especulaba con la posibilidad de que los libros requeridos, que decía desconocer, pudiesen ser perniciosos, "lo qual en ninguna manera puedo creer, porque al mº Grajal le e tenido por catholico y al mº Benito Arias por muy catholico" (A.ALCALA, op. cit., pp. 50, 58).

le había participado como había conocido el contenido de un libro a través de Arias Montano, en el que se referían algunas afirmaciones sospechosas de herejía. Fray Luis, en su respuesta y defensa, quitó importancia a estas apreciaciones, teniendo en cuenta que él mismo había informado al Santo Oficio y que dicha obra fue posteriormente quemada por el propio exégeta, poniéndose ambos a salvo de cualquier sospecha, sin que este asunto tuviese otra transcendencia (187). Sin embargo, mayor gravedad revistió el hallazgo, entre los papeles del reo de un libro sobre el Cantar de los Cantares de Salomón en lengua romance, manuscrito por Arias Montano, que había sido solicitado a éste por el propio fray Luis. Lo había recibido con la condición de que se ocupase de su traducción al latín, aunque nunca había acometido esta labor a causa de sus muchas ocupaciones. Para ratificar sus afirmaciones, el agustino apuntaba que la identificación de la letra podía ser fácilmente realizada por Gabriel de Zayas (188). La obra fue requerida por la Suprema, que se ocupó de verificar la autoría de los trazos caligráficos comparándolos con los contenidos en las cartas que el exégeta había dirigido a Francisco Soto de Salazar y al secretario Mateo Vázquez (189). No obstante, las gestiones quedaron detenidas durante los meses siguientes, siendo el propio procesado quien solicitó una audiencia con los inquisidores vallisoletanos, que tuvo lugar el 2 de agosto de 1574, para volver a tratar el tema, e insistir en que se debía atribuir la creación a Arias Montano. Fray Luis no dejaba de sorprenderse por el hecho de que no se hubiese realizado ninguna averiguación con el propio interesado, a pesar de la facilidad existente para ello, y puesto que, aunque prescindiendo de esto, el Santo Oficio pretendía realizar algunas gestiones, el agustino señalaba al presidente del Consejo de Indias Juan de Ovando, como una de las personas que podía reconocer la letra de Arias Montano por la frecuente correspondencia que

(187).- Ibid., pp, 147-148, 231, 286-289, 300-301, 599; I. ARAMBURU CENDOYA, op. cit., pp. 62-63; F. CANTERA, "Arias Montano y Fr. Luis de León" Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo 22 (1946), pp, 310-319.

(188).- Así lo reconocía el agustino en noviembre de 1573 (A. ALCALA, op. cit., pp, 373 y 376), aunque efectuó esta misma declaración tras producirse su detención.

(189).- Estas gestiones por parte del Consejo de Inquisición se realizaron entre abril y mayo de 1574. Parece que Arias Montano había escrito una serie de cartas a Mateo Vázquez solicitando su protección (Ibid., pp, 430, 433-434; F. CANTERA, op. cit., pp, 321-324.

mantenían (190), e igualmente, adjuntaba dos cartas suyas, que obraban en su poder, con esta finalidad, lo que además redundaría en defensa de ambos. La protesta presentada por el preso viene a poner de manifiesto cuestiones significativas si consideramos que, por una parte, el mantenimiento de posturas teológicas parejas había deparado consecuencias muy distintas para ellos. Mientras que fray Luis de León había sido procesado y encarcelado por el santo oficio, Arias Montano seguía desempeñando su importante misión política en los Países Bajos sin que las actuaciones inquisitoriales hubiesen supuesto ningún impedimento para continuar, paralelamente, realizando sus estudios bíblicos. Por otra, a través de la defensa presentada por el agustino, podemos conocer las personas que estaban procurando un apoyo a Arias Montano en la Corte, todos ellos colaboradores cercanos de Diego de Espinosa, y posteriormente, integrados en la facción "castellanista". Esta circunstancia viene a explicar porqué, al contrario que fray Luis de León, el exégeta no trató, sino de forma ocasional, de buscar el favor de Gaspar de Quiroga (191).

Sólo dos días después, el 4 de agosto, el Inquisidor General informaba a Felipe II de la existencia del libro, calificado como pernicioso, y de la autoría de Arias Montano, planteando al monarca la necesidad de que retornase a la Corte (192). El rey no estimaba convenientes los planes del exégeta de acudir nuevamente a Roma para defender su postura crítica hacia la Vulgata. En este sentido, Quiroga también comunicaba al monarca cómo la Biblia Regia se vendía públicamente en casa de un librero llamado Robres, a pesar de las órdenes expresamente dadas por Felipe II para detener su comercio hasta que se procediese a un exhaustivo examen. El monarca proponía retrasar cualquier tipo de medida sobre la Biblia de Arias Montano hasta que éste se hallase en la

(190).- M.JIMÉNEZ DE LA ESPADA, "Correspondencia del doctor Benito Arias Montano con el licenciado Juan de Ovando" BRAH 19 (1891), pp, 479-498.

(191).- La declaración realizada por fray Luis de León, el 2 de agosto de 1574, así como una posterior, del día 12, aparecen recogidas en A. ALCALA, op. cit., pp, 456-459; CODOIN, Vol.11, pp, 18-20, 293-294.

(192).- Quiroga utilizaba una frase ambigua para definir la situación: "Mucho conviene que este hombre venga a estos reinos antes que se pueda oler lo que aca pasa por el daño que por allá podrá hacer si se quitase la máscara" (BL, Eg. 1506, fol. 23r-v).

Corte, puesto que dar mandato al Santo Oficio de proceder a su recogida con anterioridad, podría decidir a éste a no acudir a la llamada. Respecto a éste asunto, el rey proponía que se le incluyese en el grupo de personas que iban a trabajar en torno a las Centurias, siendo requerido junto a estas para que, una vez en la Corte, se pudiesen realizar las diligencias pertinentes respecto a su actividad (193). Esta era, sin duda, una cuestión importante que podía atraer la atención del especialista bíblico, puesto que se trataba de presentar una réplica a la Ecclesiastica historia secundum singulas centurias realizada por un grupo de teólogos protestantes en Magdeburgo. Esta historia de la Iglesia, apologética de la reforma luterana, cuyos primeros trece tomos fueron publicados entre 1559 y 1574, quedando inéditos los tres restantes (cada uno se correspondía con una centuria), provocó que, desde la Corte hispana, se pensase en la ejecución de una versión católica de las centurias. Para ello se iniciaron las gestiones referidas a configurar una congregación, que se encargase de llevar a cabo esta labor (194). El conocimiento de Arias Montano sobre la materia se remontaba a su llegada a los Países Bajos, donde había llegado el encargo papal, realizado a la universidad de Lovaina, de rebatir las Centurias (195). En la Corte hispana, el asunto se había avivado por la actuación del nuncio Ormaneto, que, desde junio de 1573, comenzó a tratar la conveniencia de que se ejecutase la conformación de una junta con esta finalidad. Felipe II designó para ocuparse de esta cuestión a Gaspar de Quiroga y a Diego de Covarrubias, presidente del Consejo Real. En los últimos meses de dicho año, el proyecto parecía bastante concretado, incluyendo a Arias Montano como uno de los especialistas cuya participación era conveniente recabar. No obstante, la puesta

(193).- Ibid., fols. 23v-24v. Por otra parte, Felipe II indicaba que había hecho recoger a través de un particular veinticuatro biblias que habían quedado en su propiedad. Hay autores que han interpretado la oferta de tomar parte en este proyecto efectuada por el rey a Arias Montano como prueba de la satisfacción que el monarca sentía por el cumplimiento de su misión en los Países Bajos (L.MORALES OLIVER, op. cit., pp. 125-126). No obstante, parece claro que sólo fué una excusa para atraerle, puesto que la comisión comenzó a trabajar con anterioridad a su llegada.

(194).- Sobre los precedentes de dicha junta, véase, J.L.ORELLA Y UNZUE, op. cit., pp. 348-365.

(195).- Ibid., pp. 219-221 y 259-261.

en práctica del proyecto se fue dilatando (196). En este sentido, Quiroga escribía a Felipe II, el 8 de marzo de 1574, expresando la conveniencia de efectuar esta obra y adjuntando una relación de las personas que eran más idóneas para integrar esta junta, señalaba al obispo de Lérida, Antonio Agustín, al doctor Pedro de Fuentidueña, canónigo de Salamanca, al doctor Villalpando, de Alcalá de Henares, al doctor Miguel Thomas, valenciano residente en Roma y dignatario de la Iglesia de Mallorca, al prior de Atocha fray Hernando del Castillo, y al doctor Inglés (Nicolao Sanders). Por su parte, Felipe II ordenaba al Inquisidor General que todo lo concerniente a este tema lo tratase con Diego de Covarrubias, encargándoles que eligiesen definitivamente a los centuriadores, así como el lugar donde había de celebrarse la reunión (197). La determinación adoptada por ambos fue que, a los candidatos propuestos por Quiroga, se uniese el jesuita Francisco de Torres, fijándose Alcalá de Henares como sede de la congregación (198).

Así pues, el nombre de Arias Montano no aparecía finalmente vinculado al proyecto de las llamadas Centurias, hasta que el rey propuso este asunto como motivo que justificase su llamada a la Corte. Así, el propio nuncio aseguraba, el 1 de abril, que Felipe II había estimado conveniente iniciar el proyecto sin esperar el regreso del exégeta (199). No obstante, como temía el monarca, Arias conocía los ataques que estaba lanzando León de Castro en su contra, así como la amenaza de prohibición que se cernía sobre la Biblia Regia. Informado por sus amigos de la situación a la que se tendría que enfrentar si volvía, decidió

(196).- Véase la correspondencia que el nuncio mantenía con Roma informando pormenorizadamente de los sucesos que se iban produciendo en *Ibid.*, pp. 367-369.

(197).- BL, Eg. 1506, fols. 16v.-17r. El monarca repetía el mandato pocos días después, indicando que se reuniesen después de las sesiones del Consejo de Estado, del que ambos eran miembros (*Ibid.*, fol. 18). Por otra parte, es significativo el hecho de que los integrantes de la junta propuestos por Quiroga fuesen los mismos que se habían designado meses antes, con la única diferencia de la ausencia de Arias Montano.

(198).- Véase la carta que Quiroga dirigió al rey el 17 de marzo de 1574, *Ibid.*, fol. 20.

(199).- J.L. ORELLA Y UNZUE, op. cit., p. 381, n. 133.

trasladarse a Roma en mayo de 1575 (200), donde trató de representar ante la Santa Sede la necesidad de que la aplicación del precepto tridentino que establecía la "autenticidad" de la Vulgata se aplicase con menor rigurosidad. Sin embargo, en este segundo viaje, no encontró un ambiente tan propicio para sus intenciones como en el primero, puesto que las acusaciones de Castro le habían precedido en su llegada. Ésta fue la causa que motivó a Arias Montano a escribir al Inquisidor General, el 12 de agosto de dicho año, rogándole que pusiese freno a las críticas que el maestro salmantino estaba realizando en torno a la Biblia Regia y a todas las personas que se habían ocupado en su realización, puesto que con ello estaba actuando en perjuicio del servicio al rey. También pedía que se le orientase sobre el modo de proceder más conveniente para que esta polémica se finalizase de forma conveniente para todas las partes implicadas (201). A pesar de que, en el mes de octubre, mostró su conformidad con acudir al llamamiento regio para ocuparse en el asunto de las Centurias (202), su estancia en la Ciudad Eterna se fue dilatando. Su situación se tornó más complicada cuando, en enero de 1576, la congregación de Cardenales que se había reunido para valorar la validez de la Vulgata había reiterado su infalibilidad. Esto suponía que la Biblia Regia quedaba en una situación poco favorecida por el criterio de la Santa Sede, a lo que había que unir la polémica

(200).- B. REKERS, op. cit., pp, 83-86. De nada sirvieron los reiterados llamamientos realizados por Felipe II para que se uniese a la congregación alcaláña (J.L. ORELLA Y UNZUE, op. cit., pp, 382-383).

(201).- La carta aparece recogida en CODOIN, Vol.41, pp, 316-320, citada por A. PEREZ GOYENA, op. cit., pp, 291-292; F. PEREZ AGUADO, op. cit., p, 167; B. REKERS, op. cit., pp, 86-86. Sin duda, Arias Montano recurría a Quiroga en busca de una información de la que carecía, pues, a pesar de que seguía escribiendo a Zayas, a finales de agosto, recriminaba al secretario que no le hubiese enviado ninguna carta desde su llegada a Roma (CODOIN, Vol.41, pp, 321-326).

(202).- El 20 de octubre, escribía al monarca: "pues V. Md. ha sido servido de tenerme por hombre de confianza para este negocio de las Centurias, y el que siendo el servicio de V. Md. que esto se ponga por obra, entiendo, según lo poco que alcanzo, que antes que se publiquen las personas que han de ser nombradas para ésto, importa que V. Md. sea advertido de algunas particularidades de buena consideración, por las cuales se podría mejor y más presto y más claramente expedir esta empresa, y estas no son para carta o a lo menos para que otra persona las entienda primero que V. Md., y no se perderá tiempo en que no se publique ésto ni se nombren las personas antes de mi llegada a España; porque antes se ahorrará tiempo en acertar con el modo si no me engaño yo, y creo no me engaño, por tener noticia alguna destas materias y de las gentes en cuyo favor y contra quien se emprende este negocio" (Ibid., pp, 326-328).

teológica y las denuncias al Santo Oficio protagonizadas por León de Castro. Como en otras ocasiones, recurría a su valedor en la corte, Gabriel de Zayas, buscando su protección, y ofreciéndose para asesorar al nuevo gobernador que debía ir a los Países Bajos tras la muerte de Luis de Requesens (203).

Finalmente, a mediados de 1576, decidió retornar a la Península. Su llegada coincidía con las últimas actuaciones del proceso inquisitorial que se seguía contra fray Luis de León (204). La implicación más grave que se derivaba del mismo para Arias Montano, por su manuscrito sobre el Cantar de los Cantares en lengua romance hallado entre los papeles del agustino, quedó anulada a causa del extravío del escrito por parte de los inquisidores de Valladolid, quienes comunicaron a la Suprema su pérdida definitiva el mismo día que el Consejo de Inquisición ordenaba la absolución de fray Luis (205). Así pues, a pesar de los intentos realizados por León de Castro, el exégeta pudo sortear las amenazas de la instrucción de un proceso inquisitorial en su contra (206). No obstante, quedaba aún por dilucidar la cuestión suscitada en torno a la Biblia Regia, cuya sentencia definitiva Gregorio XIII había remitido a la Inquisición hispana. Gaspar de Quiroga y la Suprema designaron al jesuita Juan de Mariana para que emitiese un juicio concluyente sobre la obra, labor en la que se ocupó hasta agosto de 1577. Según su opinión, aunque en su contenido

(203).- B.REKERS, op. cit., pp. 88-89. Por otra parte no dejó de expresar su reticencia al proyecto hispano de las Centurias, que se abandonó definitivamente a mediados de 1576. J.L.ORELLA Y UNZUE, op. cit., pp. 384-386. También en estos meses había desaparecido uno de sus más sólidos apoyos cortesanos con el fallecimiento de Juan de Ovando. El 8 de septiembre de 1575, Mateo Vázquez informaba al rey de su muerte, proponiendo a Antonio de Padilla para ocupar la presidencia del Consejo de Indias (IVDJ, envío 51, nº 173).

(204).- Unos meses antes, el 22 de marzo, el agustino había reiterado la inocencia de ambos en torno al libro que Arias Montano le había mostrado y que contenía algunas proposiciones sospechosas de herejía (A. ALCALA, op. cit., p. 637).

(205).- Ambos hechos se produjeron el 7 de diciembre (Ibid., pp. 697-698).

(206).- Los nuevos ataques realizados por Castro ante el consejero de la Suprema Hernando de Vega, en noviembre de 1576, aparecen referidos por J.A.LLORENTE, Historia crítica de la Inquisición..., III, p. 56, quien refiere que Benito Arias pudo eludir la prisión por la protección que le dispensaba el propio rey y personajes influyentes en la Corte, como Rodrigo Vázquez de Arce. Por su parte, el exégeta había querido reducir el enfrentamiento teológico a una cuestión personal, aduciendo como motivo de persecución la envidia y cerrazón mental (B.REKERS, op. cit., p. 92).

había algunos puntos discutibles, ninguno era abiertamente censurable teológicamente, por lo que, quedando constancia de su crítica, se inclinaba por la aprobación definitiva (207).

Sin embargo, con anterioridad a que la Biblia Regia quedase libre de los cuestionamientos que había generado, los servicios de Arias Montano fueron requeridos nuevamente por Felipe II. En marzo de 1577 llegaba a el Escorial obedeciendo el mandato real por el que se le encomendaba expurgar y ordenar la librería del Monasterio. En esta labor estuvo ocupado diez meses, en los que realizó el catálogo de los ejemplares griegos y latinos, distinguiendo, igualmente, los manuscritos de los libros impresos (208). En el desarrollo de esta función hubo de mantener comunicación con el Inquisidor General, al que informó del deseo de Felipe II de contar en la biblioteca real con una biblia en romance, solicitando que, si obraba alguna en poder del Santo Oficio, se remitiese a el Escorial. Quiroga apuntaba al rey que había dos de excelente calidad en la Suprema, aunque estimaba conveniente contar con la licenecia del pontífice para su inclusión en la colección regia a causa de la prohibición establecida al respecto. El monarca estimó prudente la solicitud del breve pertinente, así como realizar una consulta sobre este asunto a fray Hernando del Castillo (209).

Terminada esta ocupación, Arias Montano obtuvo el permiso del monarca para retirarse a la Peña de Aracena. Sin embargo, a pesar de que el parecer

(207).- B. REKERS, op. cit., pp, 89-91; A. PEREZ GOYENA, op. cit., p, 294.

(208). CODOIN, Vol.7, pp, 184-186. No parece que este mandato agradase a Arias, que mostraba deseos de retirarse a su tierra para proseguir sus estudios. Así lo transmitía a su amigo Zayas el 31 de mayo: "ahora no sé lo que el rey quiere de mí, y voy contemporizando y callando hasta acabar este índice que voy haciendo, para pedirle luego la licencia que me prometió" (Ibid., Vol. 41, pp. 342-346). Por otra parte, otro personaje de la Corte que mostró su apoyo al exégeta durante estos meses fue Antonio de Padilla, presidente del Consejo de Ordenes (AZ, carp. 155, n° 24ss.).

(209).- La carta de Quiroga al rey, fechada el 7 de julio de 1577 en, BL, Eg. 1506, fol. 64r. Los breves correspondientes fueron concedidos por el papa (AHN, Inq., leg. 4470, exp. 4). Sobre el resto de funciones desarrolladas por Montano en el Escorial, véase, A. BUSTAMANTE GARCIA, La Octava Maravilla. Madrid 1994, pp, 770ss.

expresado por el jesuita Mariana parecía haber zanjado la cuestión en relación a la permisividad de la Biblia Regia, la polémica tornó a suscitarse. El 7 de enero de 1579, el Inquisidor General enviaba al rey una carta que había recibido del Cardenal Savello, Inquisidor Mayor de la Inquisición romana, por la que quedaba constancia del desagrado con el que se veía en la Santa Sede dicha obra. También hacía constar Quiroga como en la península habían surgido nuevamente críticas, por lo que se había encargado desde la Suprema la realización de una nueva censura a la universidad de Salamanca para remitirla al pontífice (210). En esta ocasión, la polémica la habían suscitado los dominicos sevillanos. Benito Arias Montano recurrió nuevamente a Zayas, a quien rogó que la situación se clarificase con rapidez y de forma secreta, con la única intervención de Sebastián Pérez. Igualmente, escribió a Gaspar de Quiroga reiterando su ortodoxia, recurriendo finalmente al rey al que encomendaba su justicia. Parece que la pronta y sigilosa actuación defensiva planteada por Arias Montano estaba encaminada a evitar el escándalo, posiblemente tratando de impedir que este nuevo encuentro con el Santo Oficio interfiriese la actividad que estaba desarrollando por orden de Felipe II en relación a la sucesión del trono portugués (211). Pocos meses después, a comienzos de septiembre, habiéndose excusado de asistir a las negociaciones que se estaban desarrollando en Lisboa, recibió el encargo real de volver a ocuparse en una visita a la librería de el Escorial, designándose como su residencia la casa de Sebastián de Santoyo (212). Allí continuaba dos meses después, condicionado por la indiferencia con la que le trataba el rey, de la que se quejaba abiertamente a su valedor Zayas (213). El secretario instó a Mateo Vázquez para que Arias

(210).- Ibid., libro 284, fol. 105.

(211).- Las cartas que remitió a Zayas aparecen recogidas en CODIN, Vol.41, pp, 379-382, 387, 394-397. En la primera de ellas, consta que incluyó pliegos destinados a Quiroga y al rey; B.REKERS, op. cit., pp, 94-96. En torno a la misión que Felipe II le había encomendado en relación con Portugal, Ibid., pp. 50-60; CODIN, Vol.41, pp, 383-386. Por otra parte, el 12 de mayo, la Suprema solicitaba a los inquisidores de los tribunales de Córdoba y Sevilla información sobre si se había presentado en las mismas alguna acusación en su contra (AHN, Inq., libro 579, fol. 208r).

(212). CODIN, Vol.7, p, 269.

(213).- Ibid., Vol.41, pp, 407ss.

Montano se trasladase con la Corte a Portugal. No obstante, sus esfuerzos resultaron infructuosos (214).

El tratamiento de cuestiones referidas a la Biblia Regia continuó en los meses siguientes, aunque en esta ocasión con un talante distinto, puesto que el interés que movía a Fernando de Rueda, obispo de Canarias, era acallar definitivamente la polémica. En carta que remitió a Mateo Vázquez el 29 de enero de 1581, justificaba con esta intención la composición de un libro donde quedaban allanadas las causas que habían provocado las reticencias hacia esta obra tanto en Roma como en la Península (215). El secretario real informó a Gaspar de Quiroga, quien se desentendió de continuar interviniendo en este asunto, puesto que la reforma de la Biblia Regia se estaba efectuando desde el año anterior en Roma, habiendo cometido el pontífice esta labor al Inquisidor Mayor, el cardenal de Santa Severina. Por su parte, el obispo de Canarias no dudaba en criticar la postura "papista" del Inquisidor General, apartado, en estos años, de la gracia real, haciendo llegar sus reticencias sobre esta actuación al propio rey (216). A pesar de las presiones recibidas a favor de la actuación del obispo de Canarias, sobre las que también abogó ante el Inquisidor General el cardenal Granvela, Quiroga mantuvo su decisión inamovible, reiterando lo innecesario que resultaba acometer nuevamente su corrección tras las calificaciones y censuras realizadas a instancias de la Suprema por diversos especialistas, en las que no se había encontrado motivo para su condena. Además, aducía la inconveniencia de efectuar una labor que se estaba

(214).- En noviembre de 1580 refería: "La partida se acerca y en verdad que no querría que fuesemos sin una joya como Arias Montano como iremos si Su Md. no le da con qué, y pues se le hace servicio en acordarlo, bien sé que no es menester que yo lo traiga a la memoria de v.m." (IVDJ, envío 6 (II), fol. 19). Sin embargo, la súplica de Zayas no obtuvo respuesta (Ibid., fol. 23).

(215).- Ibid., envío 89 (caja 126), n° 369.

(216).- El 12 de abril de dicho año, Fernando de Rueda escribía a Mateo Vázquez: "Con todo entiendo que es baldón de nuestra nación y que Su Md. no es nada servido con el medio que el señor cardenal ha tomado con creer de su santo zelo que deso dar en el fiel, y que le debió mover el que Su Santidad tiene de que este libro se reforme en Roma (...) y como cosa que importa al pundonor de Su Md. aunque por no errar no oso acalorarme más. Yo no sé si acierto en avisar ésto, porque puede ser que Su Md. enfadado del ruido deste libro (...) y disguste que le replique sobre él" (Ibid., envío 94 (caja 135), n° 43).

desarrollando por miembros de la curia (217). Después de la asistencia de Arias Montano al Concilio Provincial celebrado en Toledo en 1582, los contactos que mantuvo el exégeta con Gaspar de Quiroga vinieron propiciados por la ocupación que continuó desarrollando en relación a la librería de el Escorial, en la que influyó la publicación del nuevo Índice de Libros Prohibidos.

b.3. El resurgir de los alumbrados

El movimiento alumbrado tuvo su origen en los primeros decenios del siglo XVI. La renovación y reforma de la espiritualidad hispana que había tenido lugar en el último tercio de la centuria anterior había propiciado el germen de la mística, que postulaba el camino de la "oración afectiva" frente a la vía "intelectual", aferrada al estudio de la teología tradicional. Un mal entendimiento de esta nueva orientación nacida del misticismo dió lugar a la desviación alumbrada. En la formulación de su doctrina influyeron diversos elementos vinculados a la tradición conversa y a la búsqueda de una religiosidad interior. El foco surgido en Toledo en 1525 vino a marcar las diferencias entre alumbrados y recogidos, aunque la sutileza de las fronteras establecidas entre ambos movimientos en algunos aspectos hizo recaer las sospechas de la Inquisición también sobre los segundos. Además, el paralelismo cronológico que se produjo entre los momentos de mayor auge de los grupos alumbrados y el florecimiento de la mística ortodoxa, de la que suponían una proyección deformada, incrementó los recelos inquisitoriales. No obstante, la actuación del Santo Oficio no logró arrancar las raíces del alumbradismo en su totalidad, que si bien se mantuvieron aletargadas, tornaron a brotar en los años setenta como renuevos del antiguo tronco (218).

(217).- AHN, Inq., libro 358, fol. 69r.-v.

(218).- Sobre dichas cuestiones, véase, A.MARQUEZ, Los alumbrados. Origen y filosofía (1525-1559). Madrid 1980 (2ª ed.), passim; M.ANDRES, Los recogidos. Nueva visión de la mística española (1500-1700). Madrid 1975, caps. I-II y XIII. Destacamos, por la claridad que arrojan sobre estas cuestiones, los cuadros comparativos entre alumbrados y recogidos, así como entre los distintos focos de alumbradismo que se manifestaron a lo largo de los siglos XVI y XVII; A.HUERGA, Predicadores, alumbrados e Inquisición en el siglo XVI. Madrid 1973, pp, 64-80; B. LLORCA, La Inquisición española y los alumbrados (1509-1667). Universidad Pontificia de Salamanca 1980, pp, 115, 297-301.

Entre 1570 y 1582 una nueva eclosión alumbrada tuvo lugar en Extremadura. El descubrimiento de su reaparición se debió a la actividad desarrollada por el dominico fray Alonso de la Fuente, que, en 1570, llegó al convento de Badajoz para ocuparse en labores de predicación. Si bien, al año siguiente, hizo llegar sus primeros informes al tribunal inquisitorial de Llerena, sobre el núcleo que estaba asentado en torno a Zafra y sus ramificaciones (219). La ausencia de una respuesta complacedora por parte de los inquisidores del distrito, motivó que el dominico elevase un memorial a la Suprema en 1573, en el que además de hacer constar una queja por el trato que le habían dispensado los servidores inquisitoriales, ponía en conocimiento del Consejo la existencia del grupo alumbrado. Esto dinamizó la maquinaria inquisitorial, produciéndose las primeras detenciones. Igualmente, fray Alonso representó ante Gaspar de Quiroga la inconveniencia que suponía hacer el proyectado traslado de la sede del tribunal inquisitorial a Plasencia por la necesidad de que se efectuase una ferrea labor de vigilancia y de castigo de estas manifestaciones en la zona (220). Sus avisos provocaron que fuese llamado a la Corte, para que se informase más detalladamente sobre los comportamientos heréticos a los que aludía en su escrito (221). Antes de acudir a este requerimiento, decidió solicitar el parecer de los teólogos dominicos de la universidad de Salamanca Mancio, Gallo y Bartolomé de Medina, que reforzaron con sus criterios las manifestaciones que, posteriormente, Alonso de la Fuente realizó ante el Consejo de Inquisición. Para remediar el daño que estaba causando la extensión de esta doctrina proponía que la Suprema ordenase la

(219).- A.HUERGA, Historia de los alumbrados (1570-1630). I. Los alumbrados de Extremadura (1570-1582). Madrid 1978, pp, 98-130. Consultado el asunto con una junta de teólogos perteneciente a su orden, recomendaron a fray Alonso que pusiese el tema en conocimiento de la Inquisición, estableciendo una clara relación entre estas manifestaciones y las acaecidas en Toledo varios decenios antes. En torno a la relación existente entre alumbrados y religiosos observantes, sobre todo pertenecientes a la orden de San Francisco, véase, M.ANDRES, La teología española en el siglo XVI, I, pp, 115-118.

(220).- A.HUERGA, op. cit., I, pp, 131-138.

(221).- Así escribía Quiroga a Felipe II, el 8 de enero de 1574: "En siendo venido el fraile de Badajoz se entenederá dél particularmente lo que pasa cerca de la materia que trata en su carta y se proveerá lo que entenderemos que conviene dando ante todas cosas aviso a V.Md." (BL, Eg. 1506, fol. 16).

realización de una visita al distrito inquisitorial del tribunal de Llerena. Para ejecutar esta labor no creía aptos a los dos inquisidores que se hallaban al frente del mismo por su ancianidad y desinterés, sino a Juan López de Montoya, que ocupaba el cargo de fiscal, ofreciendo su propia colaboración y ayuda en este quehacer. Todas sus propuestas fueron llevadas a la práctica, iniciándose con el nombramiento de López de Montoya como inquisidor, el 28 de junio de 1574, una profunda renovación de los oficiales que prestaban sus servicios al Santo Oficio en esta demarcación (222). El doctor Quexo y el licenciado Muñoz fueron sustituidos por individuos que atendiesen convenientemente el crecido volumen de procesos que se iban remitiendo al tribunal, que, además, se vio reforzado en el número de inquisidores que lo integraban. Su actividad no se debía limitar a intervenir para atajar y castigar los extravíos alumbrados sino que, por mandato de Quiroga, la Suprema les instó para que actuasen en referencia a la prohibición inquisitorial dictada sobre ciertos libros, cuya lectura podía haber conducido al fomento de creencias heterodoxas (223). El Inquisidor General escogió cuidadosamente a las personas que iban a llevar a cabo estas funciones procesales y de control ideológico, puesto que los designados se habían significado en la aplicación de los principios confesionalistas auspiciados por la Corona, siendo, alguno de ellos, colaborador del cardenal Diego de Espinosa. Así, en julio de 1575, Antonio Matos de Noroña fue enviado a la inquisición de Llerena, donde actuó como presidente del tribunal, no perdiendo por ello la

(222).- Sobre dichas cuestiones, véase A.HUERGA, op. cit., pp. 139-150. Juan López de Montoya y su hermano Diego, que ocupó el cargo de procurador general del Santo Oficio en Roma entre 1576 y 1591, eran hijos de María de Montoya, criada de la reina Isabel de Valois. Así consta en carta fechada en junio de 1572 que, escrita y firmada por Antonio Pérez, Felipe II dirigió al embajador Juan de Zúñiga en recomendación de Diego López de Montoya, a quien debía favorecer para entrar al servicio del nuevo pontífice, como lo había estado al de Pío V (IVDJ, envío 111 (caja 157), nº 591). El nombramiento de Juan López de Montoya como inquisidor de Llerena y el encargo de realizar la visita al maestrazgo de Santiago, en AHN, Inq., libro 578, fol. 186v-187r, citado por A. HUERGA, así como la correspondencia que mantuvo con la Suprema durante los primeros meses de su actuación (Ibid., fols. 197r, 207r-208r, 212r, 213r-v, 228v), estando el asunto totalmente conferido a su entendimiento. Así, el 31 de agosto de dicho año, Quiroga ordenaba a los inquisidores de Llerena que no entendiesen en materia de alumbrados hasta que el nuevo inquisidor no tornase de realizar la visita al distrito (Ibid., fol. 206r).

(223).- El 13 de enero de 1575, el Consejo escribía a los inquisidores de Llerena para que mandasen prohibir un libro titulado Livro da vida admiravel da benaventurada Catherina de Genoa e de su doctrina, traducido del italiano al romance portugués por el doctor Elías de Lemos, e impreso en Lisboa en 1564 (Ibid., fols. 262 r-v).

plaza de inquisidor que ocupaba en el de Toledo (224). A este nombramiento siguieron otros en los primeros meses de 1576. El 27 de enero fueron provistos como nuevos inquisidores el fiscal del tribunal de Valladolid, el licenciado Victor de Salinas y Tomás de Leciñana, oidor de la chancillería de Granada, mientras que el 9 de febrero fue designado el doctor Fabián López de Saldaña, maestrescuela y canónigo de la iglesia de Sigüenza (225). Finalmente, Quiroga destacaba a un miembro de la Suprema para que acudiese a Llerena. En septiembre de 1577, Francisco Soto de Salazar, obispo de Salamanca, recibía el encargo de ocuparse de los asuntos relacionados con los alumbrados. Realizando esta función fallecía en enero de 1578, por lo que la labor desarrollada constituyó el colofón a su larga trayectoria al servicio del Santo Oficio y del proceso de confesionalización de la Monarquía (226).

(224).- Mateo Vázquez informaba al rey de la llegada de Matos de Noroña a la Corte en su camino hacia Llerena: "y cierto ha sido muy bien enviarle porque es principal sujeto, V. Md. sea servido ver si le diré algo de la carta del obispo de Córdoba que va aquí, por lo que toca a esta materia [alumbrados] encargándole el secreto" (IVDJ, envío 53 (caja 69), nº110). La relación entre el inquisidor, así como el tratamiento de estos temas cuando éste se encontraba exonerado de las funciones de secretario de la Suprema manifiestan su vinculación. Por otra parte, la carta que fray Bernardo de Fresneda remitió al rey comprendía diversas acusaciones de alumbradismo, que hizo recaer, principalmente, sobre los miembros de la Compañía de Jesús, reiterando denuncias anteriores en el mismo sentido: "se han ligado y conjurados con teatinos a decir mal de sus religiones cuyo intento ha sido y es desde su Ignacio, que yo conocí en París, deslucir y poner mal nombre a las religiones para cerrarles la boca porque no ladren (...) una de las cosas que siempre me ha parecido mal de los de la compañía es que a todos cuantos tratan con ellos hacen indevotos de las religiones (...) En esta tierra Sr de han conjurado dos frailes de la orden de Santo Domingo, el maestro Salucio, hijo de genovés, y de no buena madre, y otro que llaman tal Aguayo y de la orden de san Agustín otros que no sé quién son, y de mi orden fray Diego de Buenaventura y otros descalzos a mi parecer harto ambiciosos con él (...) trabajan para salirse del juicio de sus religiones, favorecen para esto según me dicen de los arzobispos de Sevilla y Valencia que son las amas que han criado estos alumbrados de Extremadura, siendo obispos en Badajoz" (Ibid., envío 89 (caja 126), nº 393). En su contestación a Mateo Vázquez, el rey estimaba que estas declaraciones no tenían fundamento. Los prelados a los que se refiere Fresneda son Cristobal de Rojas y Juan de Ribera.

(225).- Los nombramientos como inquisidores aparecen recogidos en AHN, Inq., libro 578, fols. 304r, 363v, 368v, citados por A. HUERGA, op. cit., I, pp. 158, 233-236. Sobre la vinculación de Tomás de Leciñana con el secretario Mateo Vázquez en julio de 1580, véase AHN, Inq., leg. 3285, nº 8.

(226).- A. HUERGA, op. cit., I, pp. 338-339. La carta que Felipe II remitió al prelado encomendándole esta misión, en AHN, Inq., libro 249, fols. 231v-232v. De igual manera, el rey escribía al embajador en Roma, Juan de Zúñiga para que procurase que el Papa concediese la Alternativa a Soto de Salazar durante el período que tuviese que estar ausente por este motivo (Ibid., libro 252, fols. 183v-184r). Habiéndose significado como uno de los colaboradores más

No obstante, el excesivo celo que fray Alonso de la Fuente había puesto en la persecución del alumbradismo deparó unas consecuencias que desbordaron el ámbito del tribunal de Llerena e incluso el puramente inquisitorial, puesto que sus acusaciones se hicieron extensivas a personas y órdenes religiosas que encarnaban una postura teológica que se apartaba del "intelectualismo" defendido por la de Santo Domingo. Así, incluyó en sus denuncias a Juan de Ribera, a Juan de Avila, a fray Luis de Granada y, sobre todo, a los miembros de la Compañía de Jesús. A comienzos de 1576 se trasladó a Portugal, donde hizo llegar un memorial al Cardenal-Infante don Enrique, protector de los jesuitas y de fray Luis de Granada, que se hallaban inmersos en la realización de una regeneración espiritual auspiciada por el propio don Enrique, lo que provocó una repulsa generalizada contra el dominico en la Corte portuguesa, que se tradujo en la petición realizada a Gaspar de Quiroga para que castigase el exceso cometido, y en el envío a Madrid de un embajador extraordinario, Manuel Antúnez, que se encargó de entregar la carta del Cardenal-Infante al Inquisidor General (227). La presión diplomática ejercida tuvo como resultado la llamada de fray Alonso a la Corte, donde Quiroga le reprendió por lo desmedido de su actuación y le confirió a un convento de su orden cercano a Sevilla, del que no podría ausentarse sin licencia. Sin embargo, esta solución no satisfizo a don Enrique, que instó al nuncio Ormaneto para que interviniese en el pleito, e informó de lo acontecido a Gregorio XIII. Ormaneto, que mantenía unas excelentes relaciones con Quiroga, creía que la gestión efectuada por el Inquisidor General era suficiente para saldar la cuestión, manteniendo su actuación dentro de los cauces diplomáticos. Por su parte, Manuel Antúnez logró

cercanos de Diego de Espinosa, el 6 de octubre de 1577 escribía desde Llerena a Mateo Vázquez para que mediase en favor del maestro Gil, rector del colegio de Cuenca en salamanca, que pretendía una canonjía en la iglesia de Toledo (IVDJ, envío 94 (caja 135), n° 146). En enero de 1578 volvía a recurrir al secretario, recordándole la amistad que les había unido cuando ambos estaban al servicio de Espinosa, para pedirle que se le concediese a su sobrino, Antonio de Soto, un hábito y asiento de paje, y a Francisco de Galarza, su mayordomo, un asiento de capellán (Ibid., n° 147).

(227).- La interpretación ofrecida por A.ASTRAIN, op. cit., III, p, 61-64, es rebatida por A. HUERGA, op. cit., I, pp, 168-170 y 175-177. También Fray Luis de Granada acudió en su defensa a Gaspar de Quiroga, a quien, posteriormente, dedicó su libro Introducción al símbolo de la Fe (Ibid., pp, 170-175).

que, a través de Gabriel de Zayas, Felipe II tuviese noticia de las peticiones que se realizaban desde Portugal. El rey solicitó un informe al Inquisidor General en el que inspiró su contestación a don Enrique, que hubo de desistir de sus intentos de que fray Alonso recibiese un castigo mayor que el procurado por el Santo Oficio hispano (228).

Así pues, los ánimos encrespados contra fray Alonso en la corte portuguesa se fueron apaciguando. No obstante, recluido en el convento de Portaceli desde julio de 1576, si bien obedeció el mandato efectuado por Quiroga de que no volviese a tratar el tema de los alumbrados durante algunos meses, a comienzos de 1577, reiteró sus acusaciones de alumbradismo sobre los miembros de la Compañía de Jesús. Las quejas que por estas reincidencias comienzan a llegar al Inquisidor General provocaron que, averiguada su autenticidad por los informes remitidos por los inquisidores del tribunal de Sevilla, se iniciase un proceso en la Suprema contra el dominico, en previsión de que sus repetidas extralimitaciones deparasen nuevamente consecuencias no deseadas y se reiterasen las presiones diplomáticas. Sin embargo, el cambio de actitud operado en Quiroga ante el antiguo colaborador inquisitorial no revistió mayores consecuencias para el procesado, que pudo zafarse de la prisión con la condición de que se apartase definitivamente del tratamiento del tema. Fray Alonso hubo de conformarse y renunciar a su persecución obsesiva contra los alumbrados, aunque no cejó en su labor de tratar de descubrir la posible presencia de su doctrina en los libros a los que tenía acceso (229).

A comienzos de 1578, la Suprema instó al tribunal de Llerena para que fuese finalizando la instrucción de los procesos, procediendo a la votación de los

(228).- Ibid., pp, 178-200. La carta que el Cardenal-Infante remitió a Quiroga, fechada el 24 de marzo de 1576, en *ibid.*, pp, 608-609; la respuesta del Inquisidor General, el 17 de julio en *ibid.*, pp, 616-617. El memorial que Quiroga remitió a Felipe II en *Ibid.*, pp, 622-624. Finalmente, la Compañía de Jesús mostró su conformidad con la actuación del Inquisidor General. Así escribía Mercuriano a Quiroga, el 17 de septiembre: "me he consolado con toda satisfacción sólo con la rectitud que conozco en el santo tribunal, mas también saber la antigua obligación que la compañía tiene a V. S. Illma. como padre y protector nuestro" (*Ibid.*, p, 627).

(229).- *Ibid.*, pp, 210-221.

que se encontrasen concluidos (230). La labor inquisitorial tuvo su culminación en el auto de fe celebrado el 14 de junio del año siguiente, aunque los trabajos de vigilancia sobre el distrito se siguieron realizando a través de las visitas ejecutadas por los inquisidores Tomás de Lecifiana y Rodrigo de Mendoza, que se había incorporado en los primeros meses de 1579. Un nuevo auto de fe, que tuvo lugar en julio de 1582, vino a marcar la conclusión de la actividad inquisitorial contra el grupo de alumbrados extremeños y la extinción del mismo (231).

El descubrimiento de un foco de alumbradismo en Llerena había provocado la alerta en los tribunales inquisitoriales con distritos colindantes. En septiembre de 1574, los inquisidores de Valladolid, Toledo, Córdoba y Sevilla recibieron mandato de la Suprema de realizar averiguaciones sobre la posible presencia de alumbrados en sus demarcaciones. El resultado fue la comprobación de que las doctrinas alumbradas se habían extendido por la circunscripción cordobesa. Quiroga, al igual que había actuado en relación al tribunal de Llerena, procedió a reforzar esta sede con individuos idóneos para el tratamiento de este asunto. Así, en junio de 1575, designó a Alvaro de Reinoso, inquisidor de Cuenca, para que actuase como presidente interino, y pocos meses después se agregó como inquisidor ordinario Juan de Portilla. La vacante provocada por su muerte, en octubre de 1580, y la de Juan Delgado, fueron cubiertas por dos servidores experimentados por la práctica adquirida en el tribunal de Llerena: el promocionado el fiscal Molina de Medrano y el licenciado Juan López de Montoya. Sin embargo, a partir de 1587, coincidiendo con los años claves de la acción antialumbrada en Córdoba, el tribunal se encontraba completamente

(230).- El Consejo de Inquisición escribió al procurador en Roma Diego López de Montoya, para que solicitase un breve al papa por el que los inquisidores pudieran dar a los reos la pena ordinaria del Derecho, relajándolos al brazo seglar, sin incurrir por ello en irregularidad, a causa de las disputas habidas entre los presos alumbrados, que se habían saldado con la muerte que Mari Sánchez propició a su compañera de prisión (AHN, Inq., libro 327, fols. 123v-124v).

(231).- Sobre dichas cuestiones véase A.HUERGA, op. cit., I, pp. 224ss; Idem., Predicadores, alumbrados..., pp. 81-86. B.LLORCA, La inquisición española y los alumbrados, pp. 113-115.

renovado, estando integrado por los inquisidores Cristóbal Martínez de Vallecillo (232), Luis de Copones, procedente de la inquisición de Sevilla, aunque con anterioridad había prestado sus servicios en la ciudad califal, quien asumió la presidencia, Juan Zapata Osorio y Alonso Ximénez de Reinoso (233). Al igual que había sucedido con el foco extremeño, los alumbrados de la alta Andalucía fueron anulados por la actividad inquisitorial, que tuvo su culminación en el auto de fe celebrado en Córdoba el 21 de enero de 1590 (234).

No obstante, una de las características de la doctrina alumbrada era su aparición simultánea, como un reflejo falseado, con los momentos en que la mística ortodoxa alcanzaba altas cimas espirituales. Esto condicionó la actitud del Santo Oficio hacia los máximos representantes de esta vía de religiosidad. Desde septiembre de 1574, la actuación de los inquisidores tuvo uno de sus centros de mayor atención en las poblaciones de Ubeda y Baeza, donde se denotaba la presencia de una nueva espiritualidad por la labor realizada por Juan de Avila y sus discípulos. Las reticencias del Santo Oficio hacia los preceptos que transmitían, condujeron a que se buscasen en la zona posibles desviaciones alumbradas. La consecuencia fue, entre otras, la instrucción de cuatro procesos contra clérigos de la universidad biacense. No obstante, resultaban especialmente significativas las implicaciones que se derivaron para Teresa de Jesús, puesto que alguno de los procesados aseguraron conocer el Libro de la Vida. Sin embargo, a pesar de que las informaciones requeridas por la Suprema respecto a la monja carmelita no se materializaron en ninguna actuación concreta, supusieron el precedente de los problemas que la religiosa y su obra hubieron afrontar ante el

(232). Su actuación fue bastante negligente, lo que provocó que fuese objeto de una visita. Esto contrasta con el excesivo celo que imprimió Juan López de Montoya, que le supuso una llamada de atención por parte de la Suprema (A. HUERGA, Historia de los alumbrados. II. Los alumbrados de la alta Andalucía. Madrid 1978, pp. 269-279).

(233).- Estas pesquisas obtuvieron también resultados positivos en Toledo (A HUERGA, op. cit., II, pp. 13-41).

(234).- A.HUERGA, op. cit., pp. 297-306.

Santo Oficio (235).

b.4. Teresa de Jesús y la reforma de las órdenes religiosas.

Las acusaciones de mantener doctrinas alumbradas que recayeron sobre Teresa de Jesús, en 1574, inauguraron un período de cinco años durante los que su manuscrito del Libro de la Vida, constituyó el principal punto de valoración para definir la ortodoxia o heterodoxia de la religiosa. Estas imputaciones no se derivaban solamente de la acción inquisitorial sobre el foco alumbrado de Córdoba y Jaén, sino que partían de la misma Corte, realizadas por Ana de Mendoza, princesa de Eboli, que tras la muerte de Ruy Gómez de Silva había optado por morar al abrigo carmelita en la fundación que ella misma había patrocinado en Pastrana. Su inadecuación al estricto modo de vida del convento se saldó con la decisión de trasladar a las monjas a Segovia y con la enemistad que la viuda comenzó a profesar hacia la reformadora. Manteniendo en su poder una copia del Libro de la Vida, la hizo llegar a Gaspar de Quiroga, a quien conocía y tenía fácil acceso por la vinculación que el Inquisidor General había mantenido con su esposo (236). Los informes de los calificadores inquisitoriales fueron favorables a la obra, que, a pesar de ello, fue retenida por la Suprema. El Inquisidor General siguió con interés la revisión del libro, que él mismo leyó, quedando muy gratamente impresionado por lo que contenía. La atención de Quiroga venía motivada principalmente por la labor de reforma que estaba realizando la monja abulense, auspiciada directamente por el rey, pero además fue incentivado por una persona unida por una estrecha amistad a ambos, Luisa de la Cerda. El beneplácito otorgado por el Inquisidor General supuso que el escrito quedase liberado de sospecha a partir de 1579, aunque

(235).- Ibid., pp, 127-166; B.LLORCA, La Inquisición española y los alumbrados, pp, 138-142.

(236).- En torno al origen y fases en la composición de esta obra, conocida y examinada por Domingo Báñez, Francisco Soto de Salazar y por fray Hernando del Castillo, así como su difusión por el prelado Alvaro de Mendoza y el envío de la misma al maestro Juan de Avila, véase, TERESA DE JESUS, Libro de la Vida, Madrid 1981 (3ª ed.). Introducción de E. LLAMAS MARTINEZ, pp, 15-17; Idem, Santa Teresa de Jesús y la Inquisición española, Madrid 1972, pp, 27-36, 256-266; Idem, "Teresa de Jesús y los alumbrados" Actas de Congreso Internacional Teresiano. Salamanca 1983, pp, 137-142, 146-167.

como el resto de sus creaciones, no vió la luz con anterioridad al fallecimiento de la carmelita (237).

No obstante, existía otro vínculo entre Gaspar de Quiroga y Teresa de Jesús, que había tenido su origen en la fundación que la carmelita realizó en Medina del Campo en 1567. Para culminar su propósito de establecer un convento en esta población, la religiosa contó con la ayuda de una sobrina de Gaspar, Elena de Quiroga, hija de su hermano Juan, que gozaba de una pudiente situación económica alcanzada a través del matrimonio que había realizado con su tío Diego de Villarroel (238). Su apoyo a este proyecto fue propiciado por su confesor, el jesuita Baltasar Alvarez, quien también había ejercido estas funciones con la monja de Avila (239). Pocos años después, la hija menor

(237).- Quiroga apuntó su gusto por la obra "porque sus enseñanzas y doctrina le habían causado mucho provecho espiritual" (Ibid., pp. XII, 127, 267-271). No obstante, hasta esta fecha se habían sucedido diversas gestiones en los tribunales inquisitoriales, en relación a Teresa de Jesús, en 1575, en el tribunal de Valladolid, y entre 1575 y 1579 en el de Sevilla (Ibid., pp. 44-194; Idem., "Teresa de Jesús y los alumbrados", pp. 143-144; E.DE LA MADRE DE DIOS y O.STEGGINK, Santa Teresa y su tiempo, Salamanca 1984, I, pp. 492-497; M.DE LA PINTA LLORENTE, "Historia interna de los Indices expurgatorios españoles" Hispania 14 (1954), p. 437). La amistad entre Teresa de Jesús y Luisa de la Cerda se remontaba a 1561, cuando la dama toledana había solicitado la compañía de la monja para consolarse de su reciente viudez. En 1568 Luisa de la Cerda patrocinó la fundación del convento de Malagón, contando con el apoyo de Teresa de Jesús en una nueva desgracia familiar, la muerte de Juan Pardo de Tavera, su único hijo varón, en 1571. Gran protectora y amiga de la religiosa carmelita, medió ante Gaspar de Quiroga en su favor. Sobre dichas cuestiones, véase Libro de la Vida, pp. 327-328; Santa Teresa. Cartas, Burgos 1981, pp. 996, 1047-1048; A.RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Santa Teresa de Jesús en Toledo, Toledo 1981, pp. 14-33, 63-64; V.GONZALEZ, "Santa teresa y San Juan de la Cruz en Toledo", Simposio Toledo ¿ciudad viva? ¿ciudad muerta?, Toledo 1988, pp. 484-495; J.ESCRIBANO HERNANDEZ, "Las fundaciones de Santa Teresa", Cuadernos de Investigación Histórica, 11 (1987), pp. 208-209.

(238).- De esta unión fueron vástagos Juan y Gaspar, que fueron canónigos de Toledo, Jerónima, que profesó como monja carmelita, Diego de Villarroel, que se casó con María Alvarez, y Teresa, que matrimonió con Francisco Morejón. Una semblanza de Elena de Quiroga aparece recogida en Biografía eclesiástica completa, XIX, pp. 1201-1203; TERESA DE JESUS, Obras Completas, Madrid 1962, p. 505. Sobre la protección que Quiroga dispensó a Francisco de Morejón, véase la recomendación que de su persona realizó a Mateo Vázquez en 1577 (IVDJ, envío 91, n° 55).

(239).- Sobre el apoyo prestado por los miembros de la Compañía de Jesús a la labor fundacional desarrollada por la reformadora carmelita y en torno a este episodio en concreto, véase J.A.ZUGASTI, Santa Teresa y la Compañía de Jesús, Madrid 1914, pp. 146-147. El autor señala cómo la religiosa realizó parte de los Ejercicios bajo la tutela de su primer confesor; E.DE LA MADRE DE DIOS y O.STEGGINK, Tiempo y vida de Santa Teresa, Madrid 1969, p. 286; Idem.,

de doña Elena, Jerónima, mostró deseo de profesar en dicho convento, aunque la corta edad de la candidata hizo aconsejable retrasar su ingreso, que se produjo, finalmente, en 1575, adoptando el nombre de Jerónima de la Encarnación (240). Tras enviudar, la propia doña Elena decidió seguir los pasos de su hija. En este caso, Gaspar de Quiroga no acogió con agrado esta decisión, puesto que consideraba necesario que su sobrina se emplease en el cuidado del resto de su progenie. A pesar de su oposición, en la que poco a poco fue cediendo, realizó sus votos en octubre de 1581, pasando a llamarse Elena de Jesús. Éste hecho vino a enfriar durante algunos meses las buenas relaciones que Teresa de Jesús mantenía tradicionalmente con el Inquisidor General, en un momento poco propicio para los planteamientos de la reformadora, que proyectaba la fundación de un nuevo convento en Madrid, para lo que era imprescindible el permiso de Quiroga como arzobispo de Toledo (241).

Por otra parte, las conexiones entre el Inquisidor General y Teresa de Jesús no sólo se centraron o estuvieron determinadas por la ilación proveniente de estos tratos referidos a la familia o amigos, sino que vinieron propiciadas por los servicios que Gaspar de Quiroga estaba prestando a la culminación del

Santa Teresa y su tiempo, II, p. 142.

(240).- Véanse las cartas que Teresa de Jesús escribió en torno a este tema y al favorecimiento que doña Elena continuaba haciendo al convento, en Obras Completas, pp. 686-687, 717, 783-784. La fundadora compuso una poesía con motivo de esta incorporación de la que sólo se conocen unos versos: "¿Quién os trajo acá doncella/ del valle de la tristura?/ Dios y mi buena ventura" (Ibid., p. 488); E.DE LA MADRE DE DIOS y O.STEGGINK, Tiempo y Vida..., p. 518; idem., Santa Teresa y su tiempo, II, p. 412. Por el jesuita Gaspar de Salazar conoció Teresa de Jesús la alegría que esta toma de hábito había causado en el Inquisidor General: "dice que el ángel mayor [Quiroga] está muy contento de tener sobrina entre las mariposas y que las tiene en mucho" (Santa teresa. Cartas, p. 239); Jerónima de la Encarnación ejerció el priorato en las casas de Toledo y Medina del Campo (BNM, Ms. 7108, fol. 210; Archivo del Convento de las Carmelitas de Medina del Campo, libro de profesiones nº 17, cuaderno A, folios 92-105).

(241).- Sobre esta cuestión, véase TERESA DE JESUS, Obras Completas, p. 1021; Santa Teresa. Cartas, pp. 195-197, 450-453, 963-965 y 969-972. E.DE LA MADRE DE DIOS y O.STEGGINK, Tiempo y Vida..., p. 107. Por otra parte, hemos de destacar la amistad que unía a doña Elena con la priora del convento carmelita, fundación teresiana en Soria. Catalina de Cristo, al igual que la familia Quiroga era natural de Madrigal de las Altas Torres, y su linaje tenía una vinculación familiar con Ares Pardo de Tavera, y por tanto, con Luisa de la Cerda. Sobre la relación entre ambas familias madrigaleñas, véase E.DE LA MADRE DE DIOS, Catalina de Cristo, Barcelona 1982, pp. 78-79, 98-102; P.RODRIGUEZ y I.ADEBA, Leonor de la misericordia. Vida de Catalina de Cristo, Burgos 1995.

proceso de confesionalización de la Monarquía. Su actuación no se redujo a la labor desplegada al frente de la Suprema, y a las reticencias que los escritos elaborados por la monja abulense habían despertado en el Santo Oficio, por su incierta identificación con las doctrinas alumbradas, puesto que Quiroga apoyó el entusiasmo reformador protagonizado por Teresa de Jesús, dentro de un propósito más amplio que, alentado por el propio Felipe II, incluía a otras Ordenes religiosas.

Desde el comienzo de su reinado, el monarca había representado ante la Santa Sede la necesidad de proceder a una reforma que pusiese fin a la vida claustral y estableciese la sujeción a la observancia. Sin embargo, para llevar a cabo esta reforma se encontraba un inconveniente derivado de la naturaleza extranjera de los superiores de las Ordenes y de su residencia habitualmente fijada fuera de los territorios adscritos a la Monarquía, por lo que era aconsejable, para alcanzar el buen término del proyecto, que éstos fuesen elegidos entre religiosos de los reinos hispanos, conocedores de la problemática que habían de afrontar. Los planteamientos filipinos, que coincidieron con la celebración de la tercera etapa del concilio tridentino, no fueron bien acogidos en Roma. Sin esperar los acuerdos de la asamblea, desde noviembre de 1563, se iniciaron las presiones diplomáticas conducentes a otorgar al rey, a través de la concesión de un breve, la comisión general que le permitiese acometer la reforma de las Ordenes según su deseo. El beneplácito papal dificultado por las tensas relaciones mantenidas por ambas instancias, no se obtuvo hasta finales de 1566. A esta disposición se sumaba, en los primeros meses de 1567, un conjunto de breves agrupados bajo el título "In prioribus", en los que se regulaba lo concerniente a la reforma de algunas Ordenes, que como era la del Carmen, no contaban con una rama observante. La realización de esta labor quedaba cometida a los obispos y a los Provinciales de cada hábito, evitando, como era deseo de Felipe II, la acción directa de los Generales, casi siempre cercanos a la Curia. Paralelamente a esta aprobación papal, Felipe II configuró una junta, que, a las órdenes de Diego de Espinosa, comenzó a poner en práctica la reforma, dirigiendo la actuación de los Provinciales y de los prelados. Esta actividad despertó las reticencias de Pío V, que a través de nuevos breves y de

la influencia de Nicolás Ormaneto, recondujo la situación, eliminando la impronta que estaban dejando los obispos en la reforma, encargando esta función a visitadores apostólicos. La muerte del pontífice en 1572 y la llegada al solio pontificio de Gregorio XIII provocó una revisión, que supuso el cese de la actividad de los visitadores, y la sustitución de Castagna en la nunciatura por Ormaneto, que vino a desempeñar un papel fundamental en la consecución de la reforma, siendo una de sus atribuciones la nominación de los visitadores (242).

La nueva orientación procurada desde Roma para recuperar las directrices de la reforma de las Ordenes no condicionó la actividad que se desarrollaba en la Corte hispana sobre esta materia. El 19 de marzo de 1574, el arzobispo de Sevilla, Cristobal de Rojas y Sandoval, hacía llegar un informe a Felipe II sobre las cuestiones que según su criterio era necesario reformar. El memorial no incluía novedades, puesto que representaba una reiteración de los puntos esenciales del proceso de confesionalización puesto en marcha por el cardenal Espinosa. Hacía referencia a la conveniencia de modificar las costumbres, de fortalecer la presencia del Santo Oficio en las tribunales pirenaicos para impedir el "contagio" herético, de mejorar el nivel del clero y avanzar en el buen gobierno de las iglesias, utilizando como vehículo la celebración de concilios provinciales. Por último, señalaba la inadecuada situación que contemplaban las Ordenes de la Trinidad, la Merced y el Carmen, instando al rey para que hiciera uso del breve pontificio que posibilitaba su reforma (243). Felipe II remitió el entendimiento de todos estos asuntos al

(242).- Sobre el proyecto filipino para la reforma de las Ordenes religiosas como parte integrante de la política confesional de la Monarquía, véase J.MARTINEZ MILLAN, "En busca de la ortodoxia..." pp, 201-207. En el mismo sentido, aunque referido a la Orden del Carmen, E.DE LA MADRE DE DIOS y O.STEGGINK, Santa Teresa y su tiempo, II, pp, 513-546; O.STEGGINK, La reforma del carmelo español. La visita canónica del General Rubeo y su encuentro con Santa Teresa, Roma 1965, passim. El papel de Ormaneto en la dirección de la reforma, sabiendo conjugar la postura del monarca hispano y del pontífice ha sido destacado por J. GARCIA ORO, "Felipe II ¿reforma española o reforma tridentina?", en R. GARCIA VILLOSLADA, Historia de la Iglesia..., III-1º, p, 330.

(243).- El prelado informaba de que había comunicado estos negocios al Licenciado Padilla, para que instase al monarca a adoptar una resolución (IVDJ, envío 89 (caja 125), nº 50 y 53). Su vinculación al tema de la reforma de las Ordenes religiosas le llevó a granjearse enemistades, fruto

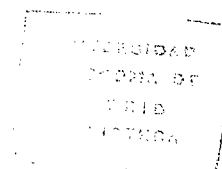
presidente del Consejo Real y al Inquisidor General (244). Por su parte, Quiroga escribía a Felipe II, el 8 de marzo del mismo año, expresando lo poco adecuado que resultaba que la orden de la Cartuja no contase con un superior en los reinos hispánicos, dependiendo de Francia, cuya situación en cuestiones de religión era sospechosa de herejía. Puesto que los superiores franceses ignoraban la realidad de estos religiosos, dado que eran informados por los priores, a los que únicamente movían intereses económicos, proponía al rey que solicitase al Papa que liberase a los cartujos de esta autoridad, mientras la monarquía francesa se mantuviese en esta circunstancia, quedando únicamente conferidos sus asuntos al cardenal protector de la Orden. La idea de la desvinculación de un superior extranjero fue muy bien acogida por el monarca, que envió a Antonio Pérez para que Quiroga ordenase la carta que se debía remitir al embajador Juan de Zúñiga (245).

Ante los pocos resultados obtenidos de la visita efectuada por Rubeo,

de la cuales resultó la denuncia que se efectuó, sobre algunos predicamentos que había realizado, en el tribunal inquisitorial de Toledo. En enero de 1579, Quiroga refería a Mateo Vázquez su creencia en la inocencia de Padilla, y su convencimiento de que esta actuación no tendría consecuencias negativas para él (AZ, carp. 135, n° 14).

(244).- En abril de 1577, Mateo Vázquez refería al rey: "...Assiconvendría que siempre huviese para la reformation y castigo algún tribunal en la corte que espantase y durase y atendiese a oír y encaminar y ordenar lo que el comissario general no hiziesse, este pienso que sería el mismo que V. Mgd. ordenó para la reformation del estado seglar presidiendo en él el presidente y el Arçobispo de Toledo con facultad apostólica y real para que a sus tiempos usaren de lo uno y de lo otro, y se hiziese recta justicia" (IVDJ, envío 53 (caja 69) n°35).

(245).- En su respuesta, Felipe II solicitaba la ayuda de Quiroga, para que los prebendados cumpliesen con la residencia en sus iglesias, a través de no solicitar sus servicios como consultores ni oficiales de la inquisición, sino donde tuviesen sus cargos eclesiásticos, "pero los inquisidores no entran en la cuenta", aunque si fuese posible, en este caso, también se debía procurar (BL, Eg. 1506, fol. 17). El Inquisidor General afirmó que desde que desempeñaba dicho oficio, había respetado estas disposiciones, exceptuando a los inquisidores, sobre los que aducía la imposibilidad de condicionarse por ellas. Igualmente, aceptaba gustoso la comunicación con Antonio Pérez, en torno a los religiosos de la Cartuja (Ibid., fol. 18). Por otra parte, hemos de señalar que unos meses antes, Quiroga había mantenido contactos con el General de la orden de San Francisco, en relación con el proceso de fray Miguel de Medina, puesto que éste había castigado a aquellos franciscanos que habían declarado contra el reo ante el Santo Oficio. Las quejas de Quiroga por esta actuación habían obligado al General a sobreseer las penas impuestas, aunque se temía que recurriese al pontífice aludiendo a la intromisión de la Inquisición en cuestiones internas de su Orden. Felipe II pedía a Juan de Zúñiga que informase de lo acontecido al Papa (AHN, Inq., libro 252, fol. 114v).



General de la Orden del Carmen, Gregorio XIII encargó su realización a dos religiosos dominicos, Pedro Hernández, que debía atender a la reforma en Castilla, y Francisco de Vargas, que se ocupó de la misma en Andalucía. Desarrollaron este cometido hasta agosto de 1574, cuando el papa decidió someter el proceso al criterio del General. Esta decisión no fue del agrado de Felipe II ni del nuncio que, en virtud de sus poderes restituyó a Vargas en las funciones de visitador, al que además señalaba un ayudante para el ejercicio de su labor en Andalucía, el carmelita Jerónimo Gracián (246), que fue quien de forma efectiva pasó a ocuparse de esta labor. En el capítulo de la Orden celebrado en Piacenza, en mayo de 1575, Rubeo nombró como vicario general al portugués Jerónimo Tostado, confiriéndole poderes de visitador y reformador. Su misión era poner en práctica un breve otorgado en el mes de abril por el que, si bien se apuntaba la conveniencia de introducir la observancia en la Orden, también facultaba para proceder contra los conventos que se hubiesen erigido al margen de su autoridad, lo que podía poner fin a la reforma iniciada (247). Por estas fechas, Gracián, que aún no había iniciado su cometido, llegó a la Corte. Consciente de que sus poderes provenían de facultades apostólicas, ajenas al superior de la Orden, y de la oposición que en su seno iba a encontrar, solicitó que se configurase una provincia diferenciada para la rama descalza. El asunto pasó a discutirse por mandato de Felipe II, que proporcionó a Gracián cartas dirigidas a los obispos para que apoyasen su actuación. Para contrarrestar las

(246).- En junio de 1574, el arzobispo de Sevilla había escrito al secretario Gracián que su hermano era la persona indicada para ocuparse de la visita a Andalucía, puesto que Vargas era un hombre enfermo y muy ocupado por su condición de provincial de la Orden de Santo Domingo (IVDJ, envío 89 (caja 125), nº 54). Sobre los impedimentos realizados por los opositores de la reforma y las instancias que realizaban ante el pontífice y el General, Ibid., nº 55-59. El 17 de enero de 1575, el arzobispo de Sevilla informaba al rey de la llegada de nuevos documentos pontificios, cuando Vargas se proponía reanudar la visita (AZ, carp. 128, nº 76; E.DE LA MADRE DE DIOS y O.STEGGINK, Santa Teresa y su tiempo, II, p, 559: "Gracián estaba dominado por el nuncio, cuyas prevenciones contra Rubeo eran notorias, por la Corte y por muchos de sus descalzos que preferían seguir la diplomacia dura del rey contra cualquier intromisión extranjera".

(247).- Ibid., pp, 559-578; L. PASTOR, op. cit., vol. 19, pp. 150-153. Existía un gran entendimiento entre Rubeo y el cardenal protector de los carmelitas, Felipe Buoncompagni, sobrino del pontífice, que culpaban al nuncio de haber provocado nuevos problemas con el nombramiento de Gracián. Según su opinión, no podía desempeñar estas funciones de forma satisfactoria, por los pocos años que hacía que había tomado el hábito, siendo su mayor mérito contar con un hermano secretario real y con el explícito apoyo de Felipe II.

decisiones del capítulo general, las facultades de Gracián fueron ampliadas, quedando eximido únicamente, por ruego propio, de entender sobre los calzados de la provincia de Castilla (248).

La actuación del visitador en Andalucía se desarrolló bajo la atenta mirada del arzobispo de Sevilla, quien informaba puntualmente al rey de la marcha de la misma. El prelado mantenía comunicación, igualmente con el licenciado Padilla y el secretario Gracián. En sus informes, Cristobal de Rojas refería las dificultades que estaba encontrando el carmelita dentro de su propia Orden para llevar a cabo su misión. Los opositores, apoyados por religiosos de otros institutos, especialmente por los franciscanos, que instaban a los del Carmelo a resistirse a la reforma, trataban de abogar ante el pontífice para que impidiese la continuación de la visita. El arzobispo se mostraba preocupado por la influencia que esta presión ante la Santa Sede pudiese deparar para la reforma de otras Ordenes, significando, en julio de 1576 la necesidad de que se pudiesen los medios convenientes para acometer la de la Orden de San Francisco (249). En la Corte, el monarca había encargado el entendimiento de estas cuestiones al presidente del Consejo Real y al Inquisidor General, que debían actuar utilizando la información que les procurase Jerónimo Gracián (250). Según refería Quiroga al rey, la elección realizada por el nuncio del visitador de los franciscanos en Andalucía en fray Diego de Buenaventura, no había sido

(248).- También Teresa de Jesús se dirigía al rey solicitando la creación de una provincia propia para los descalzos (Ibid., p. 154). Durante su estancia en la Corte, Gracián se entrevistó con Gaspar de Quiroga: "temblando Gracián por la responsabilidad del cargo, increpóle el cardenal: maten os ¿a quién hemos de fiar esto sino a hombres de sangre y nobleza y conocido como vos, que no teme a la muerte?. Y así con esta resolución de perder la vida torné a caminar -dice Gracián- la vuelta del Andalucía" (E.DE LA MADRE DE DIOS y O.STEGGINK, Santa Teresa y su tiempo, II, p. 557).

(249).- IVDJ, envío 89 (caja 125), n° 60-68.

(250).- Así lo ordenaba el rey a Covarrubias el 5 de julio de 1576 (Ibid., envío 21 (caja 32), n° 605). En carta que escribía Teresa de Jesús a María de San José a Sevilla el 11 de julio, decía: "a nuestro padre ha mandado el rey que acuda para estas cosas de la orden al presidente del consejo real y a Quiroga" (Obras Completas, pp. 743-744). Las buenas relaciones que Gracián y Teresa de Jesús mantuvieron con el Inquisidor General, al que consideraban, junto a Ormaneto, el adalid de la reforma, tienen amplias muestras en la correspondencia de a la monja abulense, siendo especialmente significativo el regocijo con que ambos acogieron el nombramiento de Quiroga como arzobispo de Toledo (Ibid., pp. 776-780, 793, 809, 830-831, 847).

adecuada por su juventud, su naturaleza catalana y portar distinto hábito. Aconsejaba que la reforma se hiciese por los superiores de la Orden, o bien por un religioso de la misma rama, pues el desasosiego que estaba produciendo esta actuación, moviendo a los frailes a organizarse en su contra, era contraproducente para la finalidad que se perseguía (251). Felipe II reconocía el error de Ormaneto, comunicando a Covarrubias y a Quiroga que la solución a esta problemática se encontraba en solicitar a Roma el nombramiento de comisarios generales de las Ordenes que residiesen en reinos hispanos, lo que evitaría que los religiosos tuviesen que acudir al extranjero a solucionar cuestiones de la Orden con sus Generales, y permitiría a dichos comisarios reformar y castigar con mayor conocimiento de las situaciones (252). Contando con el beneplácito del nuncio, se habían iniciado de forma secreta las negociaciones en la Santa Sede, para evitar sembrar mayor intranquilidad. Como el propio monarca reconocía, ante la negativa a nombrar Generales o superiores hispanos y la inutilidad de continuar insistiendo en esta petición, era más factible que la Santa Sede aceptase este camino (253). Así pues, en los días siguientes se prepararon las gestiones para que el franciscano recoleto fray Diego de Buenaventura fuese sustituido en su cometido por un religioso del "paño", encargándose Covarrubias y Quiroga de tratar el asunto con Ormaneto (254). Esta cuestión no quedó resuelta hasta finales de 1576, condicionada

(251).- Quiroga alertaba de la peligrosa situación que se podía generar, puesto que como eran buenos para quietar los pueblos, también podían ser muy malos para alborotarlos, "como se vio en el tiempo pasado de las Comunidades" (AHN, Inq., libro 284, fols. 14r-15r).

(252).- Las grandes reformas de la Monarquía tenían como punto esencial la designación de comisarios por los poderes extraordinarios con los que estaban dotados. En este sentido, véase O.HINTZE, Historia de las formas políticas, pp. 155-192.

(253).- Véase la carta que dirigió a Covarrubias, fechada el 13 de julio de 1576, IVDJ, envío 8 [III], caja 13, s.f.

(254).- En este sentido, escribía el rey al presidente del Consejo Real el 5 de agosto, aunque precisando que se debía cuidar la forma en que se realizaba el llamamiento, para que no supusiese una desautorización (AZ, carp. 144, n° 106). Por su parte, Mateo Vázquez informada al rey de que Padilla encontraba también conveniente realizar una sustitución, proponiendo que se remitiese una terna a Roma, asesorados por el confesor de la reina, de donde saldría la nueva designación (IVDJ, envío 53 (caja 69), n° 152). El 6 de septiembre, Felipe II comunicaba al secretario como el nuncio parecía dispuesto a adoptar esta determinación, de la que también se había mostrado favorable el arzobispo de Sevilla (Ibid., n° 173; Ibid., envío 89 (caja 125), n° 69). No obstante, la dilación en

por las enfermedades del nuncio y del Inquisidor General. El presidente del Consejo Real elaboró un memorial, que contaba con cuatro puntos, en el que se contemplaba la vuelta de Buenaventura y el nombramiento de nuevos visitadores, así como las pautas que debían seguir en esta actuación para eliminar los inconvenientes que habían surgido con anterioridad (255). El encargado de apaciguar los ánimos entre los franciscanos andaluces fue primeramente el provincial compostelano Alonso Gutiérrez, enviado por el comisario Navarro, aunque a causa de su indisposición la labor fue culminada, siguiendo el mandato de Felipe II, por el guardián de Toro Antonio Velón. Este advirtió al monarca que su actuación no tendría éxito si no contaba con licencia y comisión del Ministro General de la Orden. El rey solicitó al mismo el nombramiento de Velón como Comisario General de las Provincias franciscanas en España, obteniendo resultados positivos en esta gestión (256).

Igualmente Covarrubias y Quiroga debían considerar el modo de proceder ante la anunciada llegada de Jerónimo Tostado, de quien el rey aseguraba que, con los poderes otorgados con el nombramiento de vicario general de la Orden

efectuar la elección del sustituto impacientó a Felipe II, que el 12 de octubre, escribió a Mateo Vázquez para que, en conformidad con Quiroga, se informase por el nuncio del religioso nominado, que creía se trataba del guardián de Aguilar de Campoo (C.RIBA GARCIA, Correspondencia privada de Felipe II con su secretario Mateo Vázquez, 1567-1591, Madrid 1959, pp. 52 y 60). Tres días después, el secretario remitía las consultas de Padilla y Covarrubias sobre hacer vicario provincial de Andalucía a fray Pedro de los Angeles, guardián de Lucena y la conveniencia de informarse sobre otro franciscano de la provincia de Castilla llamado Mora, pues parecía apropiado para relevar a Buenaventura. Felipe II recomendaba que todo se pudiese en conocimiento de Quiroga, y advertía que "cierto no convendrá poner allí comisario de la misma provincia sino de fuera y así sería bien saber quién es el de Mora o el otro que os dijo el Inquisidor General" (IVDJ, envío 53 (caja 69), n° 206).

(255).- Los cuatro puntos tratados por Vázquez con Ormaneto aparecen recogidos en la carta que el secretario envió al rey el 14 de noviembre (C.RIBA GARCIA, Correspondencia privada..., pp. 70-72). Dos días después, el nuncio mostró su conformidad con estas disposiciones (IVDJ, envío 53 (caja 69), n° 221). Sobre la enfermedad de Quiroga, que motivó que algunos temas de la reforma fuesen tratados por Covarrubias y los miembros de la Cámara, véase, *Ibid.*, envío 90, n° 647.

(256).- Sobre dichas cuestiones, véase, M.R.PAZOS, "Provinciales compostelanos", Archivo Iberoamericano, 24 (1964), pp. 79-81, 88-89; IVDJ, envío 53 (caja 69), n° 72. El 1 de febrero de 1577 Mateo Vázquez escribía al rey: "He pedido al Inquisidor General los apuntamientos para Velón, y responde que se han dado para V. Mt. y Velón no espera otra cosa" (AZ, carp. 144, n° 125 y 174).

del Carmen, se proponía finalizar la expansión de la rama descalza e impedir la reforma (257). Para hacer frente a este intento, el 24 de noviembre se firmó una provisión real, por la que Tostado quedaba impedido para visitar cuatro provincias. Mientras tanto, Gracián seguía desarrollando su cometido, bajo la tutela del nuncio, no alcanzando su finalización hasta mayo de 1577. Con antelación a la celebración del Capítulo acudió a la Corte para poner en su conocimiento los resultados obtenidos. Su llegada vino a coincidir con la muerte de Ormaneto, lo que ponía en grave peligro el futuro de la reforma. Felipe II comunicó a Gracián que sus facultades como visitador conservaban la vigencia, puesto que la comisión que había recibido no estaba limitada a Andalucía, y ésta no quedaba anulada por la muerte del nuncio. Este mismo parecer fue expresado por los letrados del Consejo Real, encabezados por Antonio Mauriño de Pazos, que había accedido a la presidencia tras la muerte de Diego de Covarrubias (258).

Por otra parte, los asuntos referidos a la Orden fundada por San Bruno tampoco se descuidaban, comenzando a discutirse en septiembre de 1576, quienes debían encargar de efectuar una visita al monasterio del Paular (259). En enero de 1577 el prior de dicho cenobio instaba al rey a que se adoptase una resolución sobre dos puntos esenciales: nombrar al presidente del Capítulo que la Orden iba a realizar y que el nuncio pusiese en práctica los breves que habían llegado en este sentido (260). Requerida la opinión del Inquisidor General, se mostró partidario de que se ejecutase lo recogido en los documentos pontificios, referido el primero de ellos a la designación de la presidencia del capítulo, que debía preceder a la elección de provincial, y el segundo al nombramiento de dos visitadores para los cartujos. La dilación había surgido

(257).- IVDJ, envío 21 (caja 32), nº 615.

(258).- E.DE LA MADRE DE DIOS y O.STTEGINK, Santa Teresa y su tiempo, II, pp, 579-584.

(259).- Véanse las cartas que Mateo Vázquez remitió a Felipe II sobre esta cuestión, señalando que Quiroga podría orientar sobre las personas idóneas para desarrollar esta labor, (IVDJ, envío 53 (caja 69), nº 179 y 194).

(260). Ibid., nº 3.

porque Ormaneto mantenía que la visita debía ser previa a la nominación de provincial, teniendo en cuenta la data de los breves. Quiroga convenció al nuncio de la prioridad de proceder, según era deseo del rey, a fijar un provincial con antelación a la visita, puesto que la previsible duración de ésta ponía en grave riesgo el cumplimiento de esta cuestión, si en el transcurso de la misma fallecía Gregorio XIII y su sucesor no acogía con el mismo talante la reforma. Ormaneto, mostrándose de acuerdo con estas apreciaciones, prefirió, no obstante, consultar a Roma, obteniendo el permiso pertinente. Con los priores del Paular y de Aula Dei se llegó al acuerdo de que el capítulo se celebrase en El Paular (261). Este tuvo lugar el 12 de mayo teniendo como principal consecuencia el nombramiento de Juan de la Parra, prior del monasterio que albergaba la reunión, como primer vicario general de la Cartuja hispana, independiente del superior de la Orden, residente en Francia. La creación de la nueva congregación había sido establecida por un breve papal fechado el 15 de febrero de 1577 (262).

La muerte de Nicolás Ormaneto, en el mes de junio, generó una fuerte intranquilidad en la Corte en relación al proceso de reforma de las Ordenes

(261).- Sobre la premura requerida por el prior del Paular respecto a la ejecución de los breves, Quiroga apuntaba el 12 de enero: "sospecho que en esto le queda otra cosa porque él no solía estar bien en ello y ahora muestra gran voluntad y el nuncio hallándole yo en la ejecución de estos breves pocos días ha no me parece que salió también a ello como otras veces y habiendo visto las cartas que van aquí se me acrecenta esta sospecha. Será bien a lo que entiendo que Vuestra Majestad envíe a hablar al nuncio para saber cómo está en estas materias". Las reticencias de Quiroga también se extendían a la lista que Ormaneto le había dado sobre los religiosos que podían ejercer el cargo de provincial "de los cuales yo he hecho la información que he podido y los que más conviene son los que van señalados con ciertas cruces, aunque no estoy muy satisfecho de esta mi diligencia, pero no lo he podido hacer mejor". En su respuesta, Felipe II señalaba la conveniencia de que ninguno de los visitantes que se nombrase fuese prior y que en su labor se incluyesen también las casas de la Corona de Aragón (AHN, Inq., libro 284, fol. 90; C.RIBA GARCIA, Correspondencia privada..., p. 83).

(262).- J. M. GOMEZ, "La Cartuja en España", Studia Monastica, 4 (1962), pp. 161-165. Este proceso había sido seguido atentamente por Quiroga, como lo demuestra la correspondencia que sobre el tema mantuvo con mateo Vázquez, así como por los informes remitidos por Covarrubias al rey (IVDJ, envío 91, n° 46-47; Ibid., envío 21, caja 32, n° 641).

religiosas, en favor de la que el nuncio había empeñado importantes esfuerzos (263). El entendimiento mantenido en el tratamiento de diversos temas y la amistad que había unido al fallecido con Gaspar de Quiroga, motivaron al Inquisidor General a amparar a sus servidores y criados, mediando en diversas ocasiones ante Felipe II para procurar su favorecimiento (264). Una de las mayores preocupaciones del monarca estaba referida a las facultades que traía conferidas el nuevo nuncio, Felipe Segá, así como los del colector Canobio. Hizo examinar las mismas a Gaspar de Quiroga, cuya opinión fue que eran más moderadas y limitadas, obedeciendo este cambio a salvaguardar la obediencia a los decretos tridentinos. Apuntaba que la comisión del nuncio para realizar visitas era muy amplia, puesto que comprendía iglesias metropolitanas, catedrales y colegiales, universidades y colegios, monasterios de frailes y de monjas, así como hospitales y lugares píos. Advertía que alguna de sus atribuciones podía colisionar con las limitaciones establecidas por el Consejo Real, aunque no estimaba oportuno que esta institución revisase los poderes con que venía investido Segá, teniendo presente que esta actuación no se había ejecutado con sus antecesores y podía provocar el disgusto de Gregorio XIII y del propio nuncio, que había expresado a Quiroga su intención de atenerse a la voluntad de Felipe II (265).

(263).- La misma noche en que falleció Ormaneto, Quiroga recibió el mandato del rey para que se dirigiese a diversas personas "para que se guardasen los papeles que se habían dado al nuncio que sea en gloria para la reformatión de las órdenes hanme respondido que los tienen guardados y a recaudo y con el secreto que conviene" (Ibid., envío 91, nº49).

(264).- A las pocas horas de morir Ornameto, Quiroga abogaba ante el rey por el Marqués de Malaspina, siguiendo los ruegos que al respecto le había hecho el moribundo (Ibidem); sobre ello insistía algunos días después, al igual que Pedro Nuñez de Toledo (BL, Eg. 1506 fol.61; IVDJ, envío 92 (caja 133), nº 347), para el que Quiroga solicitaba también una merced por su cercanía al nuncio: "sobre lo del Marqués de Malaspina hablé a Padilla con la disimulación que supe y lo que pude entender de él es no estar bien con él porque estorbava que el nuncio no le dicesse tan larga mano sobre el castigo de los religiosos y assi dice él agora que este Marqués lo estorbava todo" (Ibid., envío 91, nº54; Ibid., envío 89 (caja 125), nº 166).

(265).- Refería Quiroga: "Si él en todo esto quisiese meter la mano como su comisión se lo da, sería cosa bien nueva y que no faltarían inconvenientes. Aunque yo pienso que este nuncio no se meterá en este zarzal por no salir rasguñado". El rey en su contestación instaba al Inquisidor General para que pusiese de manifiesto a Segá los graves inconvenientes que surgirían si albergaba esta intención (BL., Eg., 1506, fol. 67); A.FERNANDEZ COLLADO, Gregorio XIII y Felipe II en la nunciatura de Felipe Segá (1577-1581), Toledo 1991, pp, 307-308.

Sin duda, el asunto que centraba el interés en cuanto a la reforma de las Ordenes religiosas estaba referido, en estos meses, a la actividad desarrollada por Jerónimo Tostado, quien, apoyado en su actuación por Segá, quien cumplía con las órdenes que recibía de Roma, comenzó a realizar diversas acciones que provocaron continuos enfrentamientos con la rama descalza. Así, en contraposición a lo que había hecho Ormaneto, el nuncio potenció la actuación del visitador enviado por Rubeo, frente a la acciones de Gracián, que se vieron altamente limitadas (266). El enfrentamiento más grave estuvo motivado por la elección de Teresa de Jesús como priora del monasterio de la Encarnación, que fue declarada nula por Jerónimo Tostado, otorgando este puesto a la candidata que había obtenido un respaldo minoritario. Además, ordenó que se encarcelase a los confesores descalzos que atendían a las religiosas de dicho convento, siendo enviado fray Juan de la Cruz de forma secreta a Toledo (267). A través de las cartas de la monja abulense estos hechos tuvieron una importante resonancia en la Corte. Uno de sus máximos defensores fue Gaspar de Quiroga, que apeló tanto al rey como al nuncio para que se respetase la justicia de su designación, sobre la que, además, había pedido información al corregidor de Avila, cerciorándose de que el procedimiento había sido correcto (268). El 7 de noviembre, el fiscal del Consejo Real, Francisco

(266).- Esta actuación no fue bien acogida por el rey, que, a través de Quiroga, trataba de que el nuncio no interviniese en este asunto, o bien que favoreciese la actividad de Gracián. Segá pretendía realmente reconducir la reforma de las Órdenes e iniciar un camino distinto al que había seguido su predecesor, manteniendo que eran las propias Órdenes las que debían proceder a su reformación, sin que se produjesen intervenciones ajenas a ellas en el proceso (Ibid., pp. 348-351; AZ, carp. 144, nº 194; IVDJ, envío 91, nº 58).

(267).- Véase una recopilación de trabajos sobre este tema en L.MORENO NIETO, La prisión de San Juan de la Cruz en Toledo, Toledo 1991.

(268).- El 20 de octubre de 1577, Quiroga informaba al rey de sus gestiones sobre este asunto: "Teresa de Jesús es fundadora de algunos monasterios de descalzas y esto solo basta para que Tostado no esté bien con ella/ yo tengo información hecha con diligencias que Teresa de Jesús es buena religiosa y de muy buena vida y ejemplo (...) ya V. Md. sabe el modo que este fraile hubo con fray Hierónimo Gracián y es cargo de conciencia dejarle usar el offº" (AHN, Inq., libro 284, fol. 81). El 14 de noviembre refería al monarca sus comunicaciones con el nuncio. Segá insistía en que, antes de actuar en contra de Tostado, era necesario oír su versión de los hechos, que, según opinión de Quiroga, "se puede adivinar con el dedo lo que dirá" (Ibid., fol. 78). Parece que nuevamente, la religiosa contó con la mediación de Luisa de la Cerda. Así, el 22 de octubre escribía a María de San José: "La señora doña Luisa nos ayuda mucho y hace merced en todo. Encomiéndela a Dios y al arzobispo de Toledo, y del rey nunca se olvide" (Obras Completas, p,

Chumacero, inició diligencias contra Jerónimo Tostado por haberse excedido en el ejercicio de sus facultades, aunque esto no hizo cejar al visitador en su propósito, conocedor del respaldo que Segá prestaba a su actuación (269), pese a que pocos meses después hubo de abandonar los territorios hispanos acompañado por la opinión desfavorable de Felipe II hacia su proceder. Igualmente, Pazos disuadió a Gracián de que entregase los documentos pertenecientes a la visita al nuncio, que se los demandaba en virtud de sus facultades, y, el 19 de junio de 1578, se elaboró una Cédula Real en respaldo de su labor, así como para que continuase efectuando su cometido con la ayuda del brazo secular. Así pues, el visitador se había convertido en el epicentro de un nuevo conflicto jurisdiccional. El 23 de julio, Segá derogaba la comisión que le había sido concedida por su predecesor, estableciendo pena de excomunión para quien acatase su autoridad como visitador. Gracián recurrió al rey y obedeció su mandato de entregar los papeles de la visita al presidente del Consejo Real, lo que motivó que su petición de absolución al nuncio fuese denegada, quedando confinado en el convento de Pastrana (270). Por su parte, Teresa de Jesús comenzaba a mostrar su disconformidad con el camino que iban tomando los acontecimientos, reiterando que la solución a los problemas planteados pasaba por enviar religiosos descalzos a Roma, como llevaba solicitando desde años atrás. La inoportunidad demostrada por dicha rama de los carmelitas al celebrar un Capítulo en Almodóvar, en cumplimiento de lo establecido en las constituciones promulgadas por Gracián para la rama descalza en 1576, provocó una respuesta inmediata en el nuncio que, el 16 de octubre, estableció por un decreto la extinción de la reforma, quedando sometidos los descalzos a los

849). Por otra parte, tenía una total confianza en la ayuda que Quiroga le procuraba (Ibid., p. 854).

(269).- E.DE LA MADRE DE DIOS y O.STEGGINK, Santa Teresa y su tiempo, II, pp. 587-599.

(270).- En un informe que Teresa de Jesús envió al padre Julián de Avila sobre lo acontecido durante la estancia de Gracián en la Corte refería: "Después este nuncio, en viniendo le dijo que trajese los poderes y los procesos; él lo quería dejar todo. Avisáronle que se enojaría el rey, porque también estaba a su mandato. Él fue al arzobispo [Quiroga] y le dijo lo que pasaba. Él le refirió y le dijo que tenía un ánimo de mosca, que fuese a dar cuenta de todo al rey, y cómo él le dijese los inconvenientes que había por amor del nuncio, dijole que a el superior de todos podían ir; hízole ir al rey y le mandó se fuese a su monasterio, que él lo averiguaría" (Obras Completas, pp. 889-890).

provinciales calzados de Castilla y de Andalucía (271). Sólo unos días antes, Segá había acordado con Felipe II ayudarse de dos asistentes para dirimir definitivamente los problemas surgidos entre ambas ramas de carmelitas. Por su parte, Teresa de Jesús no se mantuvo inactiva, escribiendo cartas y memoriales a todas aquellas personas que tuviesen influencia para realizar una defensa que tuviese resultados positivos para los descalzos. Entre los que mayor actividad desplegaron en este sentido se encontraba Luis Hurtado de Mendoza, quinto conde de Tendilla, que no dudó en enjuiciar que la labor de Pazos no era lo suficientemente efectiva para contrarrestar la acción del nuncio, defendiendo a los reformados, puesto que Segá había conseguido, entre otras cuestiones, apartar a Gracián y lograr que Jerónimo Tostado pudiese visitar en las provincias que habían sido excluidas al comienzo de su comisión. Las críticas a la actuación de Pazos venían a coincidir con la pérdida de poder protagonizada por el "partido papista", tras la caída en desgracia del secretario Antonio Pérez, como reflejaba la composición de la junta designada por el rey -el capellán mayor Luis Manrique, fray Hernando del Castillo y fray Lorenzo de Villavicencio- para asesorar a Segá en la disputa existente entre las ramas de la Orden del Carmen, que comenzó sus reuniones el 1 de diciembre de 1578. El juicio de esta junta sobre la labor de Gracián fue muy negativo. A finales de dicho mes se emitió la sentencia, por la que el carmelita quedaba confinado en el colegio que los descalzos tenían en Alcalá de Henares, sujeto a la autoridad del rector. No podría ausentarse de él sin licencia del nuncio y se le prohibía recibir y escribir cartas. Inutilizado Gracián, Teresa de Jesús trató de impulsar la defensa de la reforma propiciando la inclusión en la junta del dominico fray Pedro Fernández,

(271).- En el mes de abril, Teresa de Jesús había advertido a Gracián la inconveniencia de celebrar el Capítulo, afirmando que era más prudente pedir ayuda a Felipe II y a su confesor, el dominico fray Diego de Chaves, y así lograr el envío de frailes descalzos a Roma. Pedía a Gracián que él mismo consultase esta posibilidad con el rey y con Gaspar de Quiroga (Ibid, pp, 871-872). Igualmente, en agosto, insistía en esta solución, rogando al carmelita que informase al monarca, a Pazos y a Quiroga del escándalo que causaba la disputa existente en el seno de la Orden (Ibid., p, 892). Las constituciones elaboradas por Gracián aparecen recogidas en Constitutiones Carmelitarum discalceatorum 1567-1600, Roma 1968, pp, 29-32.

que obtuvo el beneplácito regio previa consulta a fray Diego de Chaves (272).

Si bien Gaspar de Quiroga seguía con el máximo interés la evolución de las vicisitudes por las que atravesaba la Orden del Carmen, su labor a lo largo de 1578 se centró en ocuparse, por mandato de rey, de todo lo concerniente a la visita que por orden del General de los cartujos se pretendía realizar a los monasterios hispanos. Esta visita canónica había sido sancionada por un breve papal, pero no contaba con el permiso de Felipe II para su realización. Segá, instado por la Santa Sede, trataba de inclinar a Felipe II a conceder la autorización para que se procediese a la misma, pero el monarca se mantuvo impasible ante los ruegos del nuncio, tratando, con esta maniobra, de alcanzar la total autonomía de la Congregación hispana en virtud de los breves papales otorgados el año anterior (273). Tampoco tuvieron mayor éxito las gestiones que Segá realizó con Quiroga, puesto que desde el comienzo de su comisión mostró la misma determinación que el rey (274). El intento de buscar una solución, provocó que, el 21 de abril, el Inquisidor General escribiese al monarca, apenado por la situación que los dos visitantes enviados vivían en la Corte, proponiendo que se les permitiese proceder a la visita bajo la supervisión de otro religioso que se designase para ir en su compañía, con la finalidad de vigilar su manera de actuar e impedir que tomasen ninguna represalia contra los cartujos hispanos (275). Los infructuosos oficios ejecutados por el nuncio motivaron que aconsejase a Roma que se realizase la revocación de las normas recogidas en el breve y se aceptase la opción de acceder a la visita por este medio. El 14

(272).- Sobre estas cuestiones, Véase E.DE LA MADRE DE DIOS y O. STEGGINK, Santa Teresa y su tiempo, II, pp, 601-619; A.FERNANDEZ COLLADO, Gregorio XIII y Felipe II..., pp, 352-357.

(273).- Ibid., pp, 341-344; C.RIBA GARCIA, Correspondencia privada..., p. 153.

(274).- Véase, AZ, carp. 144, n° 362-363.

(275).- AHN, Inq., libro 284, fol. 96. En su contestación, Felipe II consideraba esta posibilidad, aunque, como el propio Quiroga, dudaba de que los visitantes admitiesen esta solución, pero le proponía que, con disimulo, fuese buscando a la persona adecuada para este cometido (IVDJ, envío 55 (caja 72), n° 100).

de febrero de 1579, un monje del Paular, Matías de Toledo, dió aviso a Quiroga de que el prior de dicho monasterio había fallecido, por lo que había que propiciar la elección de un sustituto, para lo que se debía avisar a los priores de las cartujas de Miraflores y Aniago, que eran los más próximos al Paular, cumpliendo así con lo establecido en las constituciones. Por otra parte, aseguraba que las mismas no obligaban a que en esta designación se contase con la presencia del visitador que, además, se hallaba lejos, en los alrededores de Granada, usando de sus atribuciones. El Inquisidor General se mostró conforme con que no se realizase esta llamada, puesto que no tendría ninguna utilidad (276). Unos días después, el 4 de marzo, notificaba Quiroga como el dicho visitador, prior de la cartuja de Roma, preparaba su vuelta a dicha ciudad. Felipe II le había autorizado para ocuparse de algunos asuntos de la orden en su camino hacia Francia, para lo que había designado como acompañante a Blas Carrasco, prior de Aniago, que debía prolongar su labor de tutela hasta la última casa que fuese visitada en los reinos hispanos (277).

Simultaneamente, aunque no contó con una participación directa, Quiroga se mantenía informado de los inconvenientes que estaban surgiendo en relación a la reforma de la orden de la Merced (278). La resistencia de los conventos de Cataluña a someterse a la misma, que había quedado plasmada en las Constituciones elaboradas por un Capítulo General celebrado en Guadalajara en 1574, se tradujo en su oposición al nuevo General, Francisco Maldonado, electo

(276).- En la carta que Quiroga escribió a Mateo Vázquez refiriendo esta entrevista, aseguraba que Matías de Toledo se inclinaba por un religioso del Paular para ocupar el priorato, presentando su propia candidatura. El Inquisidor General afirmaba: "a mi parecer lo que conviene es que el prior que fuese elegido sea suficiente e inteligente y más devoto del servicio de Dios y del bien de su religión que de su General y para esto no hago diferencia que sea hijo del Paular o de otra casa y ternía por persona conveniente al prior de Miraflores, porque me parece muy aficionado al servicio de su Magd." (AZ, carp. 135, nº 18). La respuesta del rey, en la que hacía referencia a un informe presentado por el nuncio, en IVDJ, envió 55 (caja 72), nº 28.

(277).- Quiroga refería cómo el prior de Roma debía regresar puesto que se tenía que hallar presente en el capítulo que iba a celebrar la orden (Ibid., envió 89 (caja 125), nº 187).

(278).- Aunque Quiroga no tuvo tampoco participación en ella, hemos de señalar que durante estos años también se culminaba la reforma de los premonstratenses. Sobre dicha cuestión, véase, J.GONÍ GAZTAMBIDE, "La reforma de los premonstratenses españoles en el siglo XVI" *Hispania Sacra* 13 (1960), pp. 71-88.

en 1577, negándose a recibir su visita y protagonizando una sublevación. El nuncio encargó el entendimiento del asunto al obispo de Barcelona, Juan Dimas Lloris, y representó a Felipe II la necesidad de solucionar esta situación. Tanto Francisco Maldonado como el prelado barcelonés iban poniendo al monarca en conocimiento de la evolución de este prolongado conflicto, que provocó que la reforma de los mercedarios no se culminase hasta los últimos años de la centuria (279).

Mejor rumbo había adquirido para la rama descalza de la orden del Carmen el entendimiento y acción combinada entre el nuncio y la junta de asesores que se había configurado sobre este tema. En abril de 1579, aduciendo que los provinciales calzados de Castilla y Andalucía no podían atender por exceso de trabajo la labor que les había sido encomendada, fue nombrado Ángel de Salazar como vicario general de los descalzos, aunque quedaba especificado que esta solución se adoptaba con carácter provisional. Este era el comienzo de lo que se pretendía con estos trabajos. la erección de una provincia independiente para los descalzos con el beneplácito de la Santa Sede. En este camino se esforzaba Teresa de Jesús. Entró en contacto con Diego López de Montoya, canónigo de Avila y procurador del Santo Oficio en Roma, recomendado por el prelado Alvaro de Mendoza, determinándose finalmente a enviar al religioso descalzo Juan de Roca y al prior del convento de Pastrana. Llegados a la Ciudad Eterna, Montoya, a quien se había prometido pagar sus gestiones en favor de los descalzos, facilitó mucho los contactos con diversos cardenales y con el embajador hispano. No obstante, Montoya regresaba a los pocos meses a la corte, portando el capelo cardenalicio para Gaspar de Quiroga. Los trabajos de la junta culminaban en el mes de junio de 1579, redactando un informe para Felipe II en el que se solicitaba la creación de una provincia para los descalzos que abarcaría Castilla y Andalucía, quedando únicamente sujeta a

(279).- Por su parte, Felipe II transmitía las noticias que recibía a Gaspar de Quiroga (IVDJ, envío 55 (caja 72), nº 132). En torno a la correspondencia mantenida por el obispo de Barcelona con el rey sobre esta cuestión, véase, *Ibid.*, envío 89 (caja 126), nº 342-344, 351-352. En cuanto a la actuación del nuncio Sega, A.FERNANDEZ COLLADO, Gregorio XIII y Felipe II..., pp. 310-318; G.TELLEZ, Historia General de la orden de Nuestra Señora de las Mercedes, Madrid 1974, II, pp. 93-99.

la autoridad del General de la orden, sin mediación del provincial calzado. El breve que finalmente sancionaba esta autonomía fue despachado por Gregorio XIII el 22 de junio de 1580. Días después, el monarca pedía al papa otro documento por el que se encargase la puesta en práctica de la separación a fray Pedro Fernández y al arzobispo de Sevilla. El 30 de agosto, el pontífice ordenaba que el dominico ocupase la presidencia del primer capítulo de los descalzos y nominaba a Cristobal de Rojas, Alvaro de Mendoza y Gaspar de Quiroga para que ejecutasen lo establecido en su contenido, aunque tanto al prelado sevillano como a Pedro Fernández la muerte les impidió cumplir con este cometido. Sustituidos por los dominicos Juan de las Cuevas y Alberto de Aguayo se procedió a la celebración del capítulo en Alcalá de Henares, en marzo de 1581 (280).

Por otra parte, desde finales de 1579, Teresa de Jesús procuraba realizar la fundación de un convento en Madrid. Según informaba la propia religiosa a doña Isabel Osorio, el arzobispo de Toledo, Quiroga, cuya licencia era necesaria, no accedería a la misma si no se fundaba con renta. El convencimiento de la carmelita se sustentaba en las informaciones que al respecto le había procurado Luisa de la Cerda. Teresa de Jesús no dudó en tratar de conseguir la licencia arzobispal, recurriendo a todas las personas que pudiesen influir en el ánimo de Quiroga para que se aviniese a su propósito, y puesto que el Inquisidor General se negaba a otorgarle audiencia, proyectó abordarle en la iglesia donde escuchaba misa. Tal solución no fue necesaria, pues, finalmente, en junio de 1580, consiguió entrevistarse con el prelado, que además de alabar el Libro de

(280).- E.DE LA MADRE DE DIOS y O.STEGGINK, Santa Teresa y su tiempo, II, pp. 618-621, 677-690. De especial relieve nos parece el documento citado de BNM, Ms. 3537, fols. 199r.-202v. Idem, Tiempo y vida de Santa Teresa, pp. 653ss. A. FERNANDEZ COLLADO, op. cit., pp. 357-363. Por otra parte, hemos de destacar la enorme ayuda que la reforma carmelita encontró en el prelado Alvaro de Mendoza, quien apoyó a la monja abulense en las distintas sedes que ocupó. Además de la bibliografía precedente, véase, J.BILINKOFF, The Avila of Saint Teresa. Religious reform in a sixteenth-century city, Cornell University Press 1989, pp. 147-148; J.ESCRIBANO HERNANDEZ, op. cit., pp. 204, 210 y 223. Las constituciones resultantes del capítulo complutense aparecen recogidas en Constitutiones Carmelitarum discalceatorum, 1567-1600, pp. 33-40. El contacto entre Teresa de Jesús y Quiroga no se interrumpió durante estos meses, utilizando la religiosa al Inquisidor General como mediador para hacer llegar al destino deseado su correspondencia (Obras Completas, pp. 928-929).

la Vida, le otorgó el deseado permiso, aunque solamente de forma protocolaria, lo que provocó que las negociaciones no cesasen hasta que la religiosa extinguió sus días (281).

Por otra parte, la actuación del Inquisidor General en relación a los cartujos no terminó con la marcha del prior de Roma en 1579, puesto que, en febrero de 1584, contestaba a una carta del cardenal de San Sixto, protector de la orden. En ella hacía constar cómo la Suprema había revisado los estatutos y constituciones de la Cartuja, mandándose traer del monasterio del Paular. Argumentaba que esta labor se encuadraba dentro del control inquisitorial sobre los libros y, una vez que se comprobó que no contenían ninguna cuestión reprochable o prohibida, se enviaron a su lugar de origen con una carta del propio Inquisidor General y una certificación (282).

Un proceso semejante al seguido con la Orden del Carmen fue el que se desarrolló respecto a los franciscanos, aunque complicado por la diversidad de ramas existentes en su seno. El espíritu reformista desarrollado por Felipe II y desde la propia Orden conllevó que, a comienzos de la década de los setenta, la sujeción a la observancia frente a los claustrales estuviese prácticamente lograda (283). Aun así, quedaban algunas cuestiones pendientes para culminar la reforma y asegurar la coexistencia pacífica entre los mismos franciscanos. Los descalzos gozaban de cierta independencia, contando con una provincia propia a partir de 1578 por otorgamiento papal, aunque continuaban dependiendo de la

(281).- Es muy abundante la correspondencia en que Teresa de Jesús abordaba esta cuestión, siendo uno de sus principales interlocutores Dionisio Ruiz de la Peña, confesor y secretario personal de Gaspar de Quiroga. Véase, E.DE LA MADRE DE DIOS y O.STEGGINK, Tiempo y vida de Santa Teresa, pp, 631-633; Ibid., Santa Teresa y su tiempo, II, pp, 653-654; Obras Completas, pp, 940, 943-945, 961, 967-968, 970-971, 987, 1014-1017, 1025, 1030, 1047-1048, 1056 y 1066.

(282).- AHN, Inq., libro 361, fol. 228v.

(283).- M.DE CASTRO, "Supresión de los franciscanos conventuales en la España de Felipe II" Archivo Iberoamericano 42 (1982), pp, 187-265.

autoridad del General de los Observantes (284). Los recoletos, desde 1576, trataban de emanciparse de esta tutela, buscando generar una excisión. Desde 1579 se encontraban exentos de la obediencia al dicho General, lo que provocó diversos enfrentamientos con los llamados "del paño". Para dirimir estos conflictos, Felipe II ordenó la formación de una junta conformada por el Comisario General de los franciscanos, Pazos, fray Diego de Chaves y un auditor de la Cámara. El presidente del Consejo Real propuso que las reclamaciones de ambas partes se representasen ante el nuncio, lo que aprobó Felipe II, aunque convocó para asesorar la decisión de Segá al Comisario General, al confesor de la reina, que era recoleto, a fray Hernando del Castillo, a Villavicencio y al jerónimo fray Miguel de Soto. Los resultados de la consulta fueron remitidos a Roma. No obstante, ni el nuncio ni el General de la Orden estaban conformes con sancionar la división que pretendían los recoletos, con el reconocimiento de una provincia propia como tenían los descalzos. El Guardián de Cataluña, fray Angel de la Paz, se trasladó a Roma junto a otros religiosos recoletos para tratar el asunto directamente con Gregorio XIII, contando además con el apoyo del obispo de Tarragona, Antonio Agustín. La impresión causada en el pontífice fue muy positiva, lo que se tradujo, en febrero de 1581, en un breve sancionador para la constitución de una provincia independiente. Sin embargo, esta separación tuvo un corto lapso de vida, puesto que el desagrado mostrado por el General de la Observancia hacia su existencia, y los incesantes problemas entre recoletos y observantes, que provocaban desórdenes en las poblaciones, condujeron a que, en 1583, se iniciase la asimilación pactada y pacífica de los recoletos a la observancia (285).

(284).- Sobre el apoyo a esta estricta rama observante por diversos personajes de la Corte, como el prelado Alvaro de Mendoza, Francisco de Garnica o Antonio Pérez, véase, F.FERNANDEZ COLLADO, op. cit., pp, 319-321; A.BARRADO MANZANO, "Constituciones de la provincia de San Gabriel (1580)" Archivo Iberoamericano 27 (1967), pp, 135-153; L.DE ASPURZ, Manual de Historia franciscana. Madrid 1954, p, 168.

(285).- La opinión favorable del arzobispo de Sevilla, Cristobal de Rojas, sobre la división de la Orden sancionada por el papa en 1579 en, IVDJ, envío 89 (caja 125), nº 79, 81. En torno a la evolución de estas cuestiones, véase, A.FERNANDEZ COLLADO, op. cit., pp, 321-324; J.SEGUI CANTOS, "La reforma franciscana en Valencia. Los recoletos (1581-1583)" Archivo Iberoamericano 53 (1993), pp, 423-448; L.DE ASPURZ, op. cit., pp, 164, 170; P.SANAHUJA, Historia de la seráfica provincia de Cataluña. Barcelona 1959, pp, 343-347. Hemos de hacer constar que en ningún momento el monarca convocó a Quiroga a las diversas reuniones que se celebraron,

Por otra parte, en abril de 1579, La Orden de San Francisco celebró un capítulo General de París. Desde los meses anteriores, el embajador Juan de Zúñiga había intentado disuadir al pontífice de que esta reunión tuviese lugar en Francia, presentando como alternativas Barcelona o Roma, pudiendo contar, en esta última opción, con la presencia papal. No obstante, todos los intentos habían sido inútiles, manteniéndose París como la sede del mismo. Además estaban evidenciadas las reticencias que Gregorio XIII tenía hacia que el Comisario General de la Orden para los reinos hispanos fuese natural de estos territorios, pues temía que, introducidos equivalentes en todas las Ordenes, podría suceder que, posteriormente, no exceptasen la autoridad de los Generales. Así pues, se negó a nombrar para este cargo a fray Buenaventura de Ibañez, como pretendía el embajador. Si bien, finalmente, el ocupante de este cargo fue designado por el propio General entre los religiosos hispanos, le fueron impuestas unas limitaciones muy importantes. Zúñiga había establecido contacto con el embajador de Portugal para presionar conjuntamente al papa y evitar que el Capítulo se celebrase en Francia, al igual que Felipe II y el Cardenal-Infante don Enrique. Según informó Quiroga a Segá, don Enrique había rogado al monarca hispano que se uniese a la medida que había adoptado de prohibir salir a los franciscanos de sus reinos. Por otra parte, Zúñiga también efectuaba esta recomendación al rey, apuntando a la revocación de todas las licencias con excepción de aquellos que tuviesen voto en el Capítulo, asegurando que Gregorio XIII escribía al nuncio en esta conformidad. De la misma manera, el embajador anunciaba que el pontífice iba a otorgar la presidencia del Capítulo a Anselmo Dandino, nuncio en Francia, a pesar de las representaciones hechas por Zúñiga sobre la inconveniencia de esta designación, señalando como persona más adecuada al obispo de Génova por su condición de franciscano. Sin embargo, la principal preocupación venía determinada por el nombramiento de los cargos superiores de la Orden que se iba a realizar en el Capítulo. Zúñiga instaba al rey a mantener una postura de fuerza si el religioso elegido como Comisario General para los reinos de la Monarquía hispana no era natural de los mismos, y más concretamente, aquel que el monarca prefiriese. Según el embajador, del mismo

siendo un claro reflejo del relegamiento de la gracia real que vivía en estos años.

modo se debía procurar que el nuevo General de la Orden fuese italiano. Los resultados del Capítulo de París no pudieron ser más favorables para los intereses hispanos, puesto que para ocupar el generalato fue nombrado fray Francisco de Gonzaga, y como Comisario General fray Antonio de Aguilar (286).

Los contactos entre Francisco de Gonzaga y Gaspar de Quiroga en los años sucesivos vinieron determinados por la comisión realizada por Gregorio XIII al Inquisidor General, a través de letras apostólicas, para la reducción total de los frailes franciscanos claustrales y terceros, así como para proceder a la aplicación de sus bienes y hacienda. Recibido este mandato, Quiroga se puso en comunicación con Gonzaga, quien expresó su parecer sobre el modo correcto de proceder en este asunto. Posteriormente, durante la celebración del Capítulo de la Orden reunido en Toledo, pudieron conversar sobre esta cuestión, aunque, como el propio Quiroga refería, estas diligencias tendrían muy poca importancia, puesto que el reparto de los frutos se había realizado en época del Cardenal Espinosa. No obstante, mantuvo informado a Felipe II de la evolución de estas gestiones, reclamando la colaboración de los comisarios Antonio de Aguilar y Antonio Manrique (287).

b.5.El control sobre los moriscos

La rebelión de los moriscos granadinos se saldó con su sometimiento mediante las armas y con el decreto, fechado el 28 de octubre de 1570, de destierro del reino de Granada, pasando a ser repartidos a lo largo de toda

(286).- AGS, Estado, leg. 935, fols. 37, 100; A.FERNANDEZ COLLADO, op. cit., pp. 325-330. Una breve semblanza de Francisco de Gonzaga en L.DE ASPURZ, op. cit., p. 175.

(287).- Sobre estas cuestiones, véase, J.HERRES, The activity of Lodovico Taverna Apostolic Nuncio in Spain (1582-1586). Camberra 1980; AHN, Inq., libro 361, fols. 234v-235r, 236v, 402r; L.DE ASPURZ, op. cit., p. 481. Sobre la buena acogida que Quiroga deparó a la celebración del Capítulo como arzobispo de Toledo, véase, ACT, Actas Capitulares. Tomo 17, fols. 196v, 197v.

Castilla (288). Esta decisión vino determinada por la creencia de que la dispersión podía favorecer su integración social y religiosa, así como para evitar que se uniesen a las concentraciones moriscas existentes en los territorios de la Corona de Aragón (289). La existencia de una minoría que rompía la pretendida uniformidad procurada por el proceso de confesionalización de la Monarquía llevó a que se tomaran medidas especiales para controlar sus actividades, en las que la vigilancia ejercida por el Santo Oficio constituía uno de los puntos esenciales para prevenir una nueva sublevación o su posible actuación como "quinta columna" en relación con otros enemigos de la Monarquía hispana. Así, mientras que en la zona de Levante se trataban de evitar o descubrir los contactos que pudiesen establecer con los musulmanes del Norte de Africa o con el Turco, en el reino de Aragón la preocupación venía determinada por la comunicación y presunta confabulación con los protestantes franceses capitaneados por el príncipe de Bearn. Cualquier pequeño indicio en este sentido, independientemente de que constituyese una amenaza con fundamento real, hacía que prendiese la alarma y el temor a la conjura de todos

(288).- Sobre las consecuencias económicas y demográficas que esta decisión causó sobre el territorio, véase, F.RUIZ MARTIN, "Movimientos demográficos y económicos en el reino de Granada durante la segunda mitad del siglo XVI" Anuario de Historia económica y social 1 (1968), pp, 127-184; R.BENITEZ SANCHEZ BLANCO, "El diezmo de moriscos en el obispado de Málaga" Estudis 4 (1975), pp, 169-170; F.MARTIN RUIZ, Economía y sociedad en el siglo XVI. Moriscos y cristianos en el partido de Marbella. Málaga 1984, pp, 101-138. Sobre el descenso de la actividad inquisitorial, K.GARRAD, "La Inquisición y los moriscos granadinos, 1526-1580" Bulletin Hispanique 67 (1965), pp, 67-71. Otra consecuencia reseñable del levantamiento de 1568 fue la esclavitud morisca. Al respecto, I.BAUER LANDAUER, Relaciones y manuscritos (moriscos). Madrid 1923, pp, 137-155; J.ARANDA DONCEL, Los moriscos en tierras de Córdoba. Córdoba 1984, pp, 126-134.

(289).- Sobre las características de los grupos de moriscos granadinos que llegaron a diversos puntos de la geografía castellana, véase, B.VICENT, "La expulsión de los moriscos del reino de Granada y su reparto en Castilla" Andalucía en la Edad Moderna: economía y sociedad. Granada 1985, pp, 215-266. Sobre los que permanecen en Granada después de la expulsión, véase, Ibid., pp, 267-286; J.M.MAGAN GARCIA y R.SANCHEZ GONZALEZ, Moriscos granadinos en la Sagra de Toledo, 1570-1610. Toledo 1993; passim; S.DE TAPIA SANCHEZ, La comunidad morisca de Avila. Salamanca 1991, pp, 147-161; A.GARCIA LOPEZ, Moriscos en tierra de Uceda y Guadalajara. Madrid 1992, pp, 86-90; J.B.VILAR, Los moriscos del reino de Murcia y obispado de Orihuela. Murcia 1992, pp, 40-51; M.GARCIA ARENAL, Inquisición y moriscos. Los procesos del tribunal de Cuenca. Madrid 1987, pp, 10-18. Los principios de la política de asimilación fueron establecidos por una pragmática real fechada el 6 de octubre de 1572, encargando su control a las autoridades locales y a los prelados en cada una de las diócesis. Sobre esta cuestión, J.ARANDA DONCEL, op. cit., pp, 286-305.

los adversarios para realizar una ofensiva combinada. Si bien efectuar una labor de custodia sobre la comunidad morisca y procurar su asimilación revestía dificultades derivadas de las propias características de las mismas, la problemática se complicaba con la protección que los señores de dichos territorios les procuraban, lo que les permitía disponer de unos trabajadores experimentados y poco conflictivos (290).

Durante los años sesenta se había abordado la cuestión tratando de forzar la asimilación social y religiosa de los moriscos, lo que había causado, entre otras razones, el estallido de la revuelta granadina. No obstante, en la década siguiente, si bien se continuó la labor evangelizadora, el asunto adquirió unos marcados matices políticos relacionados con la situación de la Monarquía en el concierto europeo. Esta preocupación llevó a intentar buscar soluciones que evitasen el surgimiento de conflictos que complicasen la comprometida situación que la Monarquía hubo de afrontar durante estos años, y que, concluyó, al comienzo de los ochenta, con la formulación del remedio definitivo que terminase con esta intranquilidad: la expulsión (291).

Desde que Gaspar de Quiroga se puso al frente de la Suprema, en 1573, comenzó a realizar una serie de actuaciones encaminadas a mantener a esta minoría controlada, no sólo en referencia a la persistencia de las prácticas religiosas pertenecientes a la doctrina de Mahoma, sino también extremando las medidas de vigilancia en los tribunales cuyos distritos presentaban una mayor presencia morisca, coincidiendo ser aquellos situados en el Levante Peninsular

(290).- A.DOMINGUEZ ORTIZ y B.VICENT, Historia de los moriscos, pp, 57-59; J.CARO BAROJA, Los moriscos en el reino de Granada, pp, 210-224; R.ROBRES LLUCH, San Juan de Ribera. Patriarca de Antioquía, Arzobispo y Virrey de Valencia, 1532-1611. Barcelona 1960, p, 372; R.GARCIA CARCEL, "Trayectoria histórica de la Inquisición valenciana", La Inquisición española. Nueva visión, nuevos horizontes. Madrid 1980, p, 426; Idem, "El itinerario de los moriscos hasta su expulsión (1609)", Inquisición española y mentalidad inquisitorial, pp, 73-74; P.LOGAS BARTIBAS, Vida religiosa de los moriscos. Granada 1990 (Ed. facsímil), p, LVII; J.REGLA, Estudio sobre los moriscos. Barcelona 1974 (3ª Ed.), pp, 195-208; B.BENNASSAR, op. cit., p, 158,324.

(291).- R.BENITEZ SANCHEZ-BLANCO, "Felipe II y los moriscos. El intento decisivo de asimilación, 1559-1568", Estudios de Historia de Valencia. Universidad de Valencia 1978, pp, 183-201.

o fronterizos con Francia. Uno de los instrumentos que el Santo Oficio utilizó para llevar a cabo su labor fue la promulgación de edictos de gracia, por los que la Inquisición prometía, durante el periodo de tiempo determinado en estos, cierta impunidad a los individuos que confesasen sobre ellos mismos y denunciasen a sus cómplices en relación al mantenimiento de prácticas o creencias heterodoxas (292). Por otra parte, esta situación estaba directamente relacionada con los infructuosos intentos efectuados en torno al adoctrinamiento de los moriscos en la fe católica. Esta labor, asumida por los prelados, entre los que, sin duda, hay que significar al arzobispo de Valencia Juan de Ribera, encontró diversas dificultades para su puesta en práctica. Según el propio Ribera comunicaba a Felipe II, la falta de resultados estaba condicionada por la carencia de iglesias y de rectores suficientes, causada por el poco apoyo económico que recibían. No obstante, la situación de las finanzas de la Monarquía a mediados de la década de los setenta no era la más idónea para aumentar sus gastos por este concepto, por lo que los nuevos intentos realizados resultaron igualmente fallidos (293).

(292).- Sobre los edictos de gracia promulgados en los años que Gaspar de Quiroga ocupó el cargo de Inquisidor General, véase, J.P.DEDIEU, "L'Inquisition face aux morisques: aspects juridiques" en L.CARDAILLAC, Les morisques et l'Inquisition. París 1990, pp, 117-118, 127; Además de los aquí consignados, véase, los referidos a "los cristianos renegados que estan en tierra de infieles", en 1575, (AHN, Inq., libro 357, fol. 5r-v), concedido al tribunal de Sicilia, en 1578 (Ibid., fol. 40r), y al tribunal de Mallorca, en 1579 (Ibid., fol. 61r-v); Igualmente, en julio de 1576, se despachó en favor de los moriscos de la villa de Arcos, en el distrito de la Inquisición de Cuenca (Ibid., libro 578, fol. 408r-v; Ibid., libro 252, fol. 173r-174r; Ibid., libro 249, fol. 227v-228r).

(293).- Sobre la postura extremista que adoptó Ribera con el paso de los años en relación a los moriscos, así como del prelado Martín de Salvatierra, obispo de Segorbe, y del clero regular, véase, P.BORONAT y BARRACHINA, Los moriscos españoles y su expulsión. Valencia 1901, I, pp, 285-286; R.BENITEZ SANCHEZ-BLANCO, "L'église et les morisques" Les morisques et l'Inquisition, pp, 65-77; Idem, "Las parroquias de moriscos en los territorios valencianos de la diócesis de Tortosa" en E.MARTINEZ RUIZ y V.SUAREZ GRIMON, Iglesia y sociedad en el Antiguo Régimen. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 1994, pp, 111-127; H.Ch.LEA, Los moriscos españoles. Su conversión y expulsión. Alicante 1990, pp, 199-204; R.ROBRES LLUCH, op. cit., pp, 390-412; Sobre los intentos realizados en otros obispados, véase, S.DE TAPIA SANCHEZ, op. cit., pp, 272-277; J.B.VILAR, op. cit., pp, 77-96, 99-129; J.ARANDA DONCEL, op. cit., pp, 300-305. Un talante distinto mostraban los miembros de la Compañía de Jesús, que colaboraron activamente con el arzobispo Ribera en Valencia durante los primeros años que ocupó la prelación, empleándose también en estas funciones en otros lugares. Así, en mayo de 1575, la Suprema se dirigía a los inquisidores de Toledo otorgando la petición presentada por los jesuitas de dicha ciudad en relación a la ampliación del plazo de absolución sobre los moriscos que hubiesen incurrido en errores, puesto que, empleados en labores de confesión, habían denotado que los moriscos llegados de Granada no habían realizado este acto de forma correcta por temor.

Por otra parte, las cuestiones económicas estaban estrechamente vinculadas al tema morisco, no solamente en lo referente a los límites que estaba implicando para la actividad evangelizadora o por el aporte que significaba para las rentas señoriales el trabajo que desempeñaba esta minoría, sino por los grandes fraudes que se habían cometido al abrigo de la guerra granadina en relación a los suministros y salarios del ejército así como en cuanto a la confiscación de bienes de los moriscos. Para atajar esta situación, en 1569, Diego de Espinosa comisionó a uno de sus protegidos, Francisco Gutiérrez de Cuéllar, sobrino del Inquisidor General Fernando de Valdés (294). Esta actividad se prolongó en los años siguientes, permaneciendo Gaspar de Quiroga informado de estas gestiones en lo concerniente a la hacienda inquisitorial (295). Igualmente, la obtención de ganancias ilícitas también se había extendido a los rescates de los cristianos que estaban cautivos en el Norte de Africa. En un informe que el jesuita Gabriel Bautista del Puerto remitió a Felipe II en diciembre de 1574 se denunciaba como, tras haber acudido varios religiosos de dicha orden a realizar el canje a través de las limosnas recogidas para esta finalidad y aportaciones realizadas por doña Magdalena de Ulloa, el dinero, tras ocho meses de espera, no había llegado a su destino por actuación de los intermediarios. También aludía a los planes que los moriscos llegados de Granada trataban de trazar para realizar un ataque a la Península Iberica, principalmente desde Tetuán, proponiendo al monarca la organización de una expedición que terminase con esta posibilidad. Finalmente, apuntaba al rey la buena acogida que había tenido la labor de predicación que habían realizado, logrando alguna conversión, y la disposición que existía para alcanzar resultados en este sentido. Estas noticias, junto al memorial remitido por el franciscano fray Luis de Sandoval, motivaron a Felipe II a solicitar a Juan de Zúñiga, en una carta refrendada por Quiroga y por el Consejo de Inquisición, la necesidad de

Pretendiendo volver a realizar las confesiones, habían instado al Santo Oficio a esta prorrogación (AHN, Inq., libro 578, fol. 292v).

(294).- C.J.DE CARLOS MORALES, *Política y finanzas...*, p. 138.

(295).- En este sentido, véanse las cartas que Mateo Vázquez remitió al rey en julio y diciembre de 1574 (IVDJ, envío 53 n^o87; AZ, carp. 144 n^o 34). Sobre la evolución de la hacienda del tribunal granadino, R.DE LERA GARCIA, *El tribunal de la Inquisición de Granada...*, pp. 243-246.

representar al papa la conveniencia de que otorgase su permiso para que los religiosos que se encontrasen entre los cristianos cautivos en Marruecos y Berbería pudiesen celebrar oficios, administrar sacramentos y predicar. De esta manera, se podría conseguir que los prisioneros se mantuviesen fieles a la fe católica, corregir las posibles desviaciones y potenciar las conversiones (296).

Si bien estas cuestiones atrajeron la atención del Inquisidor General, la principal función del Santo Oficio estaba referida, como hemos señalado, a establecer una estricta vigilancia sobre esta minoría. Para ello, Gaspar de Quiroga realizó una renovación de los inquisidores que prestaban sus servicios al Santo Oficio en aquellos tribunales donde los moriscos contaban con una mayor presencia. Así, en el caso de Valencia, entre 1574 y 1579, el tribunal estuvo compuesto por Juan de Zúñiga, proveniente de Roma y hombre de gran confianza de Quiroga, el doctor Zárate y Juan de Rojas, único oficial que persistió de la época de Espinosa, aunque, ciertamente, la actividad inquisitorial en el tema morisco vió mermada su significación ante la labor efectuada por el arzobispo Ribera (297). De igual manera procedió en cuanto al tribunal con sede en Zaragoza, puesto que, en 1573, recibieron nombramiento el doctor Rodrigo de mendoza y los licenciados Diego de Ahedo, que había ostentado el mismo oficio en el tribunal de Valencia, y Cristobal Roche. Ante la alarma que provocaron las noticias de los contactos mantenidos por los moriscos aragoneses con protestantes franceses y musulmanes del Norte de Africa, y la medida defensiva adoptada, materializada en la orden de desarme, conllevaron que, en 1575, el tribunal se reforzase con la presencia de un nuevo inquisidor, Andrés Santos de San Pedro, contando con que Rodrigo de Mendoza pasó a ser en dicho año inquisidor de la Armada. Cuando Diego de Ahedo fue trasladado al tribunal

(296).- El memorial remitido por Gabriel Bautista del Puerto en IVDJ, envío 91 (caja 131), nº 699; Sobre la petición realizada a Gregorio XIII, en julio de 1575, AHN, Inq., libro 252, fols. 148v-149r. Parece que esta actuación debió obtener algunos resultados, puesto que, en junio de 1577, Quiroga se dirigía al rey para que recibiese con brevedad a un infante de Túnez que se hallaba en la Corte hispana después de haberse convertido al cristianismo, teniendo serias dificultades económicas para hacer frente a sus gastos en Madrid (BL, Eg. 1506, fol. 61v).

(297).- R.GARCIA CARCEL, Herejía y sociedad en el siglo XVI, pp. 62 y 87.

de Sicilia, en julio de 1577, el tribunal de Zaragoza se completó con los licenciados Francisco de Ribera y Francisco Gasca de Salazar provenientes de las inquisiciones de Barcelona y Córdoba respectivamente (298).

Sin embargo, los cambios realizados por Gaspar de Quiroga no fueron bien acogidos por el "partido castellanista", en especial por Mateo Vázquez, que trataba de mantener las redes clientelares establecidas por Diego de Espinosa, así como su influjo sobre los asuntos inquisitoriales. Esta situación se puso de manifiesto cuando, en 1574, el inquisidor Andrés de Alava recibió orden de trasladarse al tribunal de Córdoba abandonando el de Granada, donde había prestado sus servicios desde 1566. La sintonía de los inquisidores granadinos, Andrés de Alava, Juan Briceño y Diego González, con el presidente de la chancillería, Pedro de Deza, había sido absoluta en relación a la política de intransigencia que éste estableció en referencia a la población morisca, apoyando sus criterios en contra de los del marqués de Mondejar. Además, se significaron notablemente en cuanto a la represión que se siguió a la finalización de la guerra, utilizando en ocasiones un rigor excesivo, que provocó que desde la Suprema se realizasen algunas llamadas de atención (299). Materializada la expulsión, y ocupando el cargo de Inquisidor General Quiroga, éste procedió a renovar el tribunal granadino, nombrando como inquisidor, en 1573, a Diego Mexia de Lasarte (300). En diciembre de 1574, Mateo Vázquez comunicaba al rey como Quiroga, siguiendo la indicaciones que le había realizado al respecto el arzobispo de Granada, Pedro Guerrero, había decidido proveer a Andrés de Alava inquisidor en el tribunal de Córdoba, puesto que el inquisidor más antiguo del mismo, el licenciado Andrés Santos de San Pedro, pasaba a ocupar una plaza

(298).- Sobre los nombramientos de estos inquisidores, véase, AHN, Inq., libro 356, fols. 257v, 270r; Ibid., libro 357, fols 3-5r, 9r, 33v-34r, 36r.

(299).- R.DE LERA GARCIA, op. cit., pp, 368-372.

(300).- Juan Briceño falleció en 1571, mientras que Diego González fue nombrado obispo de Almería en 1572 (Ibid., p, 62).

en el de Valladolid (301). También Juan de Ovando mostró su desagrado ante Felipe II por esta decisión, haciendo constar la influencia con la que contaba el arzobispo granadino sobre el Inquisidor General (302). Instó a Mateo Vázquez para que, con el permiso del rey, pidiese a Quiroga que otorgase a Andrés de Alava licencia durante algunos días para que pudiese terminar los asuntos en los que estaba ocupado antes de emprender su marcha a Córdoba. No obstante, todas las gestiones encaminadas a hacer cambiar de parecer al Inquisidor General resultaron infructuosas (303).

Las reticencias con que se miraba la existencia de concentraciones moriscas en las costas mediterráneas se incrementaron en el invierno de 1574-1575 con la pérdida de Túnez y La Goleta. El efecto que ello causó en la población morisca hizo que en la Corte se plantease el proyecto de dispersar a los moriscos Valencianos hacia el interior, al igual que se había realizado con la población de Granada. Sin embargo, impedimentos de diversa índole motivaron que este plan se abandonase, aunque se aplicaron medidas especiales orientadas

(301).- En su carta, Mateo Vázquez indicaba al monarca la necesidad que tenía de comunicar, en referencia a este asunto, ciertas cuestiones de palabra y con secreto (AZ, carp. 144, n° 34). Una breve semblanza de ambos inquisidores en H. PIZARRO LLORENTE, "Las relaciones de patronazgo a través de los inquisidores de Valladolid...", pp. 258-259.

(302).- "diciendo [Ovando] que lo había hecho [Quiroga] por respeto de un viejo caduco, que se gobernaba por confesos" (AZ, carp. 144, n° 43). Sobre lo que resultó en contra del inquisidor Andrés de Alava en una visita que se realizó a la iglesia de Granada en 1574, donde ostentaba la dignidad de Chantre, véase, IVDJ, envío 8 (II), (caja 13), s.f.

(303).- Mateo Vázquez, el 24 de diciembre de 1574, refería a Felipe II sobre este tema: "tratelo con el Inquisidor General y en ninguna manera se quiso persuadir diciendo que no convenía al servicio de Dios y de V.Mt. y que si fuese menester que él mismo iría, pero que V.Mt. de su poder si fuese servido lo hiciese/ díjome los muchos que le habían hablado por Andrés de Alava y que con él no había de valer negociación/ Apúntele que allí había dos venticuatro que el uno es contador y el otro familiar de la Inquisición que son con los que se entiende tendría mucha mano Andrés de Alava y estos con otros del cabildo, respondiome que más harían por él y que les escribiría si fuese menester..." "El rey en su contestación ordenaba a Vázquez que no insistiese más, y procurase que Quiroga redactase dichas cartas para alcanzar el buen término de los negocios, así como el inquisidor a sus amigos (Ibid., n° 44). Sobre el cumplimiento de este mandato, Ibid., n° 40. Dos años después, era el propio arzobispo granadino quien solicitaba a Felipe II que tomase medidas para remediar la falta de residencia del inquisidor Alava en su prebenda (Ibid., envío 91 (caja 130), n° 114).

a intensificar la fortificación de las costas (304). Si bien esta actuación pone de manifiesto la peligrosidad con la que se veía la existencia de esta minoría y sus contactos con los enemigos exteriores, la actividad desarrollada por el tribunal inquisitorial de Zaragoza a comienzos de 1575 vino a incrementar los temores al descubrir la comunicación existente entre grupos de moriscos aragoneses y los hugonotes de Bearn, que querían contar con su ayuda económica para realizar una incursión en territorio hispano que los moriscos apoyarían además con una sublevación. Mientras se efectuaban estas negociaciones, se habían enviado embajadas al Turco y a Argel para recabar su ayuda financiera y militar. Por su parte, los moriscos hacían saber a sus aliados que contaban con gran número de armas escondidas (305). El descubrimiento de esta confabulación hizo que el proyecto se postergase, aunque nunca se abandonó, puesto que episodios de similares características se fueron repitiendo durante los años siguientes (306). No obstante, la intranquilidad que causaron estas noticias estuvo directamente relacionada con la orden dada, en marzo de 1575, de desarmar a los moriscos de Aragón. El día 22, el Consejo de Inquisición informaba a Quiroga de la relación que el inquisidor Rodrigo de Mendoza había remitido a la Suprema, por la que se afirmaba que el vicecanciller Bernardo de Bolea y Pedro de Cabrera y Bobadilla, conde de Chinchón y tesorero general de la Corona de Aragón, habían acordado solicitar a Felipe II que ordenase a los señores de vasallos de dicho reino procediesen a desarmar a los moriscos. El inquisidor mantenía que estos no llevarían el mandato a cabo, teniendo en cuenta que esta medida colisionaba con sus

(304).- En torno a estas cuestiones, véase, R.BENITEZ SANCHEZ-BLANCO, "Felipe II y los moriscos...", pp, 195-196, 199-201; Idem, "L'église et les morisques", p, 78.

(305).- Sobre los contactos mantenidos por los moriscos con el gobernador de Bearn y con el Imperio turco en 1575, véase, H.Ch.LEA, Los moriscos españoles..., pp, 295-296; L.CARDAILLAC, Moriscos y cristianos. Un enfrentamiento polémico (1492-1640). Madrid 1979, pp, 131-132. En torno a la sospecha de alzamiento realizada por el vicecanciller Bernardo de Bolea, en marzo de dicho año, F.JANER, Condición social de los moriscos en España. Barcelona 1987 (Ed. facsímil), pp, 269-270.

(306).- Sirva como ejemplo la misiva que Francisco de Ibarra, del Consejo de Guerra, remitió al rey en agosto del mismo año, donde quedaba reflejado que, por dos cartas interceptadas por el alcalde del Peñón, se sabía que los moriscos seguían manteniendo contactos con los musulmanes de Argel y actuando como informadores para el turco (AZ, carp. 139, nº 14).

intereses. El asunto se hallaba en suspenso y en grado de apelación, puesto que, según las Cédulas reales despachadas en 1559, esta función estaba cometida al Santo Oficio, no debiéndose permitir que se introdujese esta novedad, que se traduciría en una desautorización de la Inquisición (307). Así mismo, el conde de Chinchón expresó la conveniencia de que el desarme lo efectuasen los señores, que también debían realizar un inventario de las armas que recogiesen, pudiéndolas mantener en su poder y aprovecharse de su uso en caso de necesidad. Igualmente, proponía que acudiesen a residir a los lugares donde habitaban los moriscos para que pudiesen avisar al virrey de sus actividades, prometiéndoles para mayor seguridad y tranquilidad, la concesión de una gracia cuya única condición para poder gozar de ella fuese que acudiesen con las armas cuando les fuesen requeridas. Según Chinchón, el virrey debía encargarse de hablar de forma singularizada con cada uno de los señores y coordinar la operación de desarme, que se tenía que hacer por todos ellos al mismo tiempo (308). Estas apreciaciones fueron bien recibidas por Felipe II, que, el 30 de marzo, despachaba la Cédula correspondiente (309). De esta resolución fueron informados Gaspar de Quiroga y los inquisidores del tribunal de Zaragoza, a quienes el monarca encargó que mantuviesen una estrecha colaboración con el virrey, el conde de Sastago, procurando aviso de todas aquellas cuestiones que pudiesen ser de utilidad (310). No obstante, este asunto provocó que se tuviesen que reunir Bernardo de Bolea y Gaspar de Quiroga para tomar una resolución conjunta, mientras que la decisión de otorgar una gracia a los moriscos se remitió al criterio regio, contando con los informes remitidos por los consejeros de Aragón Campi y Paulo Pla, el obispo de Segorbe

(307).- La carta que la Suprema remitió a Quiroga en AHN, Inq., libro 326, fol. 250v. El edicto de la Inquisición de Aragón, prohibiendo a los moriscos poseer armas de fuego, en M.GARCIA ARENAL, Los moriscos. Madrid 1975, pp, 223-227. En torno a Pedro de Cabrera y Bobadilla, véase, S.FERNANDEZ CONTI, "La nobleza cortesana: Don Diego de Cabrera y Bobadilla, tercer conde de Chinchón" La Corte de Felipe II, pp, 230-232.

(308).- AZ, carp 128, nº 114 y 136.

(309).- AHN, Inq. leg. 1791, nº 2; Las estimaciones sobre el número de armas recogidas en A.DOMINGUEZ ORTIZ y B.VINCENT, Historia de los moriscos..., p, 66.

(310).- AHN, Inq., libro 251, fol. 61r.

y los inquisidores de Zaragoza, siendo el fiscal de la Suprema, el licenciado Salvatierra, el encargado de transmitir estas noticias al monarca (311). Por la correspondencia del licenciado Salgado, procurador del Santo Oficio en Roma, conocemos que Gregorio XIII concedió a Gaspar de Quiroga un breve en favor de los moriscos de los reinos de Valencia y Aragón. Unos meses después, en mayo de 1576, la Suprema pedía a Salgado que solicitase al pontífice un documento semejante referido a los moriscos de Castilla y León, así como para el principado de Cataluña (312).

Al igual que había sucedido en el caso de Aragón, en Valencia se trató de que las relaciones entre el tribunal inquisitorial y el virrey de Valencia, Vespasiano Gonzaga, estuviesen bien coordinadas para el tratamiento de este asunto, mediando el rey y el Consejo de Estado para definir las competencias y las actuaciones que debía ejecutar cada una de las instancias (313).

Mientras que la atención se centraba en controlar a los moriscos de la Corona de Aragón, la agitación también se extendió, en 1577, a las comunidades provenientes de Granada instaladas en Castilla. La causa fue el inventado rumor que se propagó sobre la negociación que se estaba llevando a cabo con Felipe II con el fin de que se permitiese su retorno. La posibilidad de que el presunto trato se llegase a efectuar, otorgando el rey su autorización a cambio del pago de una contribución, potenció la inquietud morisca, así como la de los nuevos

(311).- Ibid., libro 326, fols. 254v-255r; AZ, carp. 128, n° 119; IVDJ, envío 51 (caja 67), n° 51.

(312).- AHN, Inq., libro 327, fol. 24v.

(313).- Estas medidas se combinaron con ciertas prevenciones de carácter militar, puesto que, en marzo de 1576, se pensaba que la sublevación de los moriscos valencianos y aragoneses se podría producir con brevedad (AGS, GM, Leg. 81, n° 215). Véase, igualmente, la carta que Gaspar de Quiroga remitió a Felipe II el 19 de octubre (BL, Eg. 1506, fol. 49). Sobre las prohibiciones efectuadas a los moriscos valencianos en 1575 respecto a la posesión de armas, así como a acercarse a la costa sin licencia expresa del virrey bajo castigo de servir tres años en galeras, véase, A.DOMINGUEZ ORTIZ y B.VICENT, *Historia de los moriscos*, p. 65.

pobladores del reino (314).

La actitud de Quiroga ante la problemática morisca quedó claramente establecida en su actuación como Inquisidor General. No obstante, su opinión también fue requerida en el seno del Consejo de Estado, donde, el 6 de marzo de 1577, se trató en torno a los moriscos de Aragón y Valencia en relación a las noticias procuradas por el vicecanciller y los inquisidores de Zaragoza en referencia a las nuevas noticias llegadas sobre los contactos mantenidos con el Turco y el proyectado levantamiento coincidiendo con la llegada de una armada otomana. Si bien el vicecanciller creía improbable que los turcos se arriesgasen en una operación semejante, proponía la toma de una serie de medidas en prevención de lo que pudiese acontecer, aunque estas debían ser moderadas para que no empujasen definitivamente a los moriscos a la sublevación. Además de exponer ciertos remedios de carácter militar, estimaba conveniente reparar la Aljafería, edificio al servicio del Santo Oficio y en bastante mal estado, no resultando apropiada otra sede para el tribunal. Igualmente, solicitaba que se contase con ocho o diez familiares de la Inquisición en Zaragoza. El resto de los miembros del Consejo de Estado mostraron su conformidad con estas apreciaciones. Por su parte, Quiroga añadió que no suponía tan incierto el ataque de la armada turca, puesto que la Monarquía Católica constituía su mayor enemigo, aunque consideraba que no vendría en ayuda de los moriscos, a los que solamente arengaba a levantarse como maniobra de distracción. Así mismo, compartía plenamente las apreciaciones realizadas respecto a la Aljafería, pero, en cuanto a los familiares, opinaba que no eran aptos para esta labor, porque, por su propio mandato, todos ellos eran viejos y de ánimo pacífico, puesto que de esta manera se trataban de evitar los desórdenes que solían protagonizar. Estimaba que era necesario contar con otras personas, unas diez o doce, para

(314).- También en este año comenzaron a operar bandoleros moriscos en Castilla, siendo este un fenómeno habitual en otros territorios de la Monarquía. En este sentido, véase, S.GARCIA MARTINEZ, "Bandolerismo, piratería y control de moriscos en Valencia durante el reinado de Felipe II" *Estudios* 1 (1972), pp. 85-167; A.DOMINGUEZ ORTIZ y B.VICENT, op. cit., pp. 60-61, 64. La carta remitida por Pedro de Deza a Felipe II, el 28 de abril de 1577, así como la del corregidor de Toledo, ciudad de donde había partido la rumorología al presidente de la Chancillería de Granada y a Juan Vázquez, fechadas en el mes de mayo, en AGS, CC, leg. 2179, s.f.

desempeñar esta función (315).

Ciertamente, entre 1576 y 1579, la Inquisición se centró en agudizar su labor de control y vigilancia sobre la minoría morisca en previsión de un alzamiento que parecía contar con la decidida alianza de apoyos exteriores. Si bien durante estos años, como hemos señalado, Quiroga extremó la adopción de estas medidas y respaldó los intentos de adoctrinamiento en la fe católica de los moriscos, su evolución fue semejante a la desarrollada por el conjunto de la Monarquía, decantándose, en los años ochenta, por la expulsión (316).

b.6. El Índice de Libros Prohibidos

El conocido como Índice de Quiroga fue el resultado de una labor que se prolongó durante más de una década, representando, pues, la culminación de un trabajo que se había iniciado durante los últimos años que el Cardenal Espinosa ocupó el cargo de Inquisidor General. Las gestiones para conformar un nuevo Catálogo se habían iniciado en 1569, cuando desde la Suprema se instó a las Universidades y a otras instancias sociales para que expresasen sus opiniones y colaborasen en su confección. Posteriormente, en 1572, las actuaciones se continuaron desarrollando por los maestros teólogos de Salamanca, que contaban con los pareceres recabados en la consulta previa. La resolución adoptada fue la determinación de que el nuevo Índice debía tener el Catálogo Romano, fruto del Concilio tridentino, y los anteriormente elaborados por el Santo Oficio como referencias básicas. También se procuró el establecimiento de los criterios que habían de regir su elaboración. La propuesta llegada desde Salamanca fue bien acogida por el Consejo de Inquisición, que únicamente procedió a matizar algunas apreciaciones (317). El comisario inquisitorial Francisco Sancho fue

(315).- Sobre dicha consulta, véase, P.BORONAT Y BARRACHINA, op. cit., I, pp, 282-285; M.DANVILA Y COLLADO, La expulsión de los moriscos españoles. Madrid 1889, pp, 192-193.

(316).- H.Ch.LEA, Los moriscos españoles..., p, 296; M.BOYD, op. cit., pp, 48-54.

(317).- Sobre el origen del Índice de Quiroga, así como los criterios elaborados por los teólogos salmantinos y las precisiones realizadas por la Suprema, véase, J.MARTINEZ MILLAN, "En busca de la ortodoxia...", p, 211; V.PINTO CRESPO, "El proceso de configuración y elaboración del

relevado en la tarea de coordinar estas diligencias por el Doctor Diego de Vera. Para ejecutar esta actividad pudo contar con la ayuda del maestro León de Castro, de fray García del Castillo y de algunos religiosos del convento de San Juan. Desde la Suprema se instaba para que se dinamizase el proceso, puesto que, a finales de año, llegaban noticias de que en la Santa Sede se estaban realizando algunas actuaciones sobre libros prohibidos, siendo posible que se procediese a configurar un nuevo Catálogo por parte de la congregación creada por Pío V, en 1571, para actualizar el tridentino. A pesar del interés con que se seguía la consecución de las reuniones, el camino se recorría con extrema lentitud (318).

Así pues, cuando Gaspar de Quiroga se puso al frente de la Suprema el proceso de configuración del nuevo Índice se encontraba ya iniciado. La participación en el mismo de diversos organismos y personas, como las Universidades, el propio aparato inquisitorial y las colaboraciones individuales, hacen que el Catálogo de Libros prohibidos deba ser considerado un trabajo colectivo, puesto que, además, incluía y suponía una renovación y ampliación de los elaborados con anterioridad. Constituyó, sin duda, uno de los principales instrumentos para encauzar la labor de control social e ideológico que desarrollaba el Santo Oficio para culminar el proceso de confesionalización de la Monarquía, puesto que, a través de la censura de los libros, no sólo se impedía que se expandiesen ideas heterodoxas peligrosas desde el punto de vista religioso, y por tanto sociopolítico, sino que, la permisibilidad de las obras que no aparecían contenidas reflejaba su adecuación a la ideología que desde las élites

índice y expurgatorio de 1583-84 en relación con otros índices del siglo XVI" Hispania Sacra 30 (1977), pp. 16-19.

(318).- Ibid., pp. 20-21; J.L.GONZALEZ NOVALIN, "La Inquisición española" R. GARCIA VILLOSLADA Historia de la Iglesia en España, III-2º, p. 195; J.MARTINEZ DE BUJANDA, "Literatura e Inquisición en España en el siglo XVI" J.PEREZ VILLANUEVA (dir), La Inquisición española. Nueva visión, nuevos horizontes, pp. 579-580; Sobre el llamamiento de Francisco Sancho a la Corte, véase, AHN, Inq., libro 356, fol. 257r. Nombrado consultor de la Suprema, posteriormente se trasladó a Roma (Ibid., fol. 262v-263v); Sobre las noticias transmitidas por el embajador Juan de Zúñiga al rey acerca de la expedición de un breve papal de carácter general para que nadie pudiese leer libros prohibidos, véase, IVDJ, envío 111 (caja 156) nº 332.

sociales se trataba de implantar y hacer extensiva a todo el conjunto de la sociedad. Por tanto, el periodo comprendido entre 1559, en que se promulgó el Índice de Valdés, y 1583, en que vio la luz el de Quiroga, supuso, en este sentido, un endurecimiento de las condiciones de circulación y una multiplicación de las prohibiciones, que se significaron como los jalones conducentes a intensificar dicho control, durante unos años en que se estaban generando posturas críticas desde la producción intelectual de los autores humanistas (319).

Por otra parte, hemos de señalar que, durante el periodo de preparación del nuevo Índice, desde la Suprema se siguió con sumo interés las actuaciones que se estaban desarrollando en Roma en este sentido, no acogiéndose de buen grado los mandatos realizados por la Santa Sede sobre esta materia, defendiendo que el entendimiento de este tema debía competir únicamente al Consejo de Inquisición. Así, el 14 de noviembre de 1573, Hernando de Birviesca refería al secretario Antonio Gracián los problemas que había tenido con Gaspar de Quiroga en relación a la publicación de un breve papal referido a la condenación de las Horas en romance, y el mandato de que se acudiese a la Inquisición con las que se hallasen escritas en latín, señalando al inquisidor Vaca como encargado de su recogida. Si bien el Inquisidor General había accedido a la presentación del documento papal en las iglesias, había mostrado su oposición a que dicho inquisidor realizase esta labor, apuntando que no se obedecería este mandato si no era presentado el breve original. Después de revisarlo, Quiroga apuntó la posibilidad de su falsificación, así como que tampoco se daría crédito al que venía referido a los breviarios. Birviesca adujo que, tras haberse hecho público en las iglesias, constituía un gran escándalo proceder de manera contraria, teniendo presente que el rey le había encargado que se alcanzase un

(319).- Hemos de recordar que el procesamiento inquisitorial de fray Luis de León tuvo su origen en las discusiones que en torno al nuevo Catálogo se desarrollaron en el seno de la Universidad de Salamanca. B.BENNASSAR, Inquisición española: poder político y control social, pp, 257-261; V.PINTO CRESPO, "Los Indices de Libros Prohibidos" Hispania Sacra 35 (1983), p, 179; Idem, "La censura: sistemas de control e instrumentos de acción" Inquisición española y mentalidad inquisitorial. Barcelona 1984, p, 286; Idem, Inquisición y control ideológico en la España del siglo XVI. Madrid 1983, pp, 177-186 en las que el autor realiza un registro de las prohibiciones que se dictaminaron en este periodo; Idem, "Institucionalización inquisitorial y censura de libros" La Inquisición española. Nueva visión, nuevos horizontes, pp, 513ss.

entendimiento en este asunto. Sólo cuatro días después, se enviaba una carta acordada a todos los tribunales inquisitoriales por la que se comunicaba la prohibición de todas las Horas en romance, o las que combinaran romance y latín, ordenando que fuesen apartadas de la circulación y llevadas a la Suprema para que se sometiesen al examen de teólogos (320). De igual manera, en septiembre de 1577, nuevamente habían llegado noticias a la Corte sobre el mandato efectuado por el pontífice acerca de la realización de un Índice de libros prohibidos en Roma. Desde el Consejo de Inquisición se instaba con gran urgencia al procurador inquisitorial, el canónigo Montoya, para que si se hallaba impreso adquiriese un ejemplar, pero que, si aún no se hubiese publicado, tratase de conseguirlo por cualquier vía (321). Tal vez, una de las cuestiones que más claramente pudiese ilustrar la independencia de criterios que el Consejo de Inquisición pretendía mantener respecto a las directrices de la Santa Sede fue la referida a la distinta actitud mantenida por ambas instancias en relación con las obras e ideario de Ramón Lluï. Reavivada la polémica durante la segunda mitad del siglo XVI, desde Roma se insistía en la tradicional postura de condena, mientras que la Monarquía hispánica era plenamente favorable, habiéndose introducido el estudio de su doctrina en algunas Universidades desde la centuria anterior. Las gestiones realizadas al respecto por el Cardenal Savello, en 1581, provocaron que Gaspar de Quiroga encargase efectuar informaciones para que fuesen remitidas a Roma. Estas tuvieron como resultado que el juicio sobre la obra de Lluï se mantuviese inalterable, comenzándose, al final del reinado de Felipe II, las actuaciones conducentes a su beatificación (322).

(320).- IVDJ, envío 89 (caja 125) n° 162; AHN, Inq., libro 378, fol. 118v. De igual manera, en enero de 1574, el Consejo de Inquisición escribía al procurador en Roma, el licenciado Salgado en torno a la prohibición establecida por la Santa Sede sobre las glosas de Derecho Canónico. Pedían que se solicitase al pontífice la prorrogación por un año en la aplicación de este mandato, puesto que en la Monarquía hispánica no se había tratado hasta ese momento en relación a dichas publicaciones (Ibid., libro 326, fol. 167r).

(321).- Ibid., libro 327, fol. IIIv.

(322).- Una de las personas que mayor labor desplegó en favor de las obras de Lluï fue el canónigo Juan Vileta (IVDJ, envío 89 (caja 126) n° 350); En torno a esta polémica, véase, V. PINTO CRESPO, "La censura inquisitorial, inquietud e incertidumbre: el caso Ramón Lluï (1559-1610)" *Miscelánea Conmemorativa* Madrid 1982, pp. 293-314. Hemos de señalar que, el favorecimiento de Quiroga de las obras del mallorquín frente a la Santa Sede quedó reflejado en

Desconocemos cómo se continuó el proceso de configuración del nuevo Índice desde que Gaspar de Quiroga ocupó el cargo de Inquisidor General, puesto que existe una ausencia de noticias al respecto hasta que en 1578 fue nuevamente requerida la opinión de las Universidades de Salamanca y de Alcalá de Henares (323). Un año después, las reglas del catálogo fueron remitidas a los distintos tribunales inquisitoriales para que los calificadores u otras personas con preparación sobre la materia, que los inquisidores estimasen conveniente emplear en esta labor, emitiesen su parecer. En la sede toledana, entre la de otros hombres de letras, los inquisidores recabaron la colaboración del jesuita Juan de Mariana. Dentro de las aportaciones que realizó, cabe destacar su crítica a los Índices anteriores, al de Valdés de 1559 y al catálogo tridentino de 1564, apostando por un nuevo estilo y estructura. Según mantenía Mariana, no se debían elaborar reglas de carácter general, que resultaban poco clarificadoras, en ocasiones, al aplicarlas en casos concretos, motivando el surgimiento de dudas, sino que se debían constatar de forma singularizada los autores y obras que quedasen prohibidos. De esta manera, el Índice conformaría un aparato práctico y dinámico, puesto que se podía proceder a su reimpresión de forma periódica, pasado un intervalo de años, con lo que siempre estaría actualizado. Igualmente, aducía que la condena absoluta no debía recaer sobre aquellos libros que, conteniendo errores, podían ser aptos si estos fuesen borrados. Para ello, proponía que junto al Índice de libros prohibidos se confeccionase otro donde figurasen estos, así como las cuestiones concretas que se habían de corregir. No obstante, opiniones semejantes estuvieron también presentes en memoriales

la dedicatoria que Dimas de Miguel hizo al Inquisidor General en su Apología.

(323).- Por las cartas que el Consejo de Inquisición remitió al consiliario Pedro Velarde al respecto, consta que, durante estos años, se continuaron ininterrumpidamente las diligencias en la Universidad salmantina bajo la supervisión de Diego de Vera (V.PINTO CRESPO, "El proceso de configuración..." pp, 50-51); J.M. DE BUJANDA mantiene que la falta de una actuación clara en estos años estuvo motivada por el enrarecido ambiente que se generó en la universidad salmantina a causa del procesamiento inquisitorial de los maestros hebraístas, que contribuyó a ahondar las divisiones entre el profesorado (Index de l'Inquisition espagnola 1583-1584. Université de Sherbrooke, Quebec 1993, pp, 36-39).

remitidos al Consejo de Inquisición con distinta procedencia (324).

Las gestiones conducentes a la finalización del catálogo se debían encontrar muy avanzadas cuando, en 1581, se envió a las Universidades de Salamanca y Alcalá de Henares el Índice que se había configurado en Portugal, donde se encontraba la Corte hispana. La inclusión en el mismo de libros que no se hallaban en estos centros hizo que se iniciasen una serie de actuaciones por parte del licenciado Tomás de Salazar para procurar su adquisición y consiguiente examen, lo que provocó el retraso en la terminación del Índice hispano a causa de la intención de armonizarlo con éste (325). Por otra parte, no resulta extraño que las diferencias en torno al Índice se hubiesen agilizado notablemente a partir de 1579. En este sentido, hemos de tener presente, que Gaspar de Quiroga había desempeñado importantes cargos en las instituciones de la Monarquía contando con un gran influjo en la toma de decisiones políticas durante los años que el "partido papista" contó con el beneficio de la gracia real. Sin embargo, la caída en desgracia del secretario Antonio Pérez arrastró al Inquisidor General, que hubo de refugiarse, a partir de 1580, en su arzobispado toledano. Al igual que sucedió con la labor que desarrolló en el mismo, fue a partir de dicho año cuando Quiroga impulsó y acometió cuestiones que por sus múltiples quehaceres en la Corte habían quedado un poco relegadas (326). El cambio que se produjo con el ascenso

(324).- Así pues, la afirmación realizada por A.SIERRA CORELLA atribuyendo la autoría del Índice a Juan de Mariana parece claramente excesiva (La censura en España, p, 244); F.ASENSIO, "Juan de Mariana ante el Índice quiroguiano de 1583-1584" Estudios bíblicos 31 (1972), pp, 135-178. Algunas de sus apreciaciones sobre el protagonismo de Mariana en la conformación del catálogo aparecen matizadas en V.PINTO CRESPO, "El proceso de configuración...", pp, 22-23, 51-52.

(325).- El catálogo portugués se había publicado por orden del Inquisidor General, el arzobispo de Lisboa Jorge de Almeida. Como señala J.M.DE BUJANDA, representaba una declaración de independencia de la Inquisición portuguesa respecto a la hispana, que hubo de realizar el esfuerzo de incorporarlo para que no contuviesen divergencias (Index de l'Inquisition Portugaise, 1547, 1551, 1561, 1564, 1581. Université de Sherbrooke, Quebec 1995, pp, 58, 111-112).

(326).- Si bien las múltiples ocupaciones de Quiroga debieron contribuir a que el Catálogo no viese la luz con anterioridad, creemos que en este asunto influyeron también otras cuestiones. Mientras que la conformación del Índice realizado en época del Inquisidor General Fernando de Valdés obedeció a un rápido intento de poner freno a la extensión del protestantismo, el que vio la luz en 1583 supuso, sobre todo, poner veto a las críticas provenientes del pensamiento

de la facción "castellanista", y el influjo que sus miembros adquirieron en el ánimo regio, también dejó sentir su influencia en que fuese en estos años en que los herederos políticos directos del Cardenal Espinosa propiciasen la culminación de una obra tan representativa del proceso de confesionalización de la Monarquía, contando con la colaboración de un Inquisidor General que, sin tener ninguna influencia en el Consejo de Inquisición, trató de buscar un acercamiento a los nuevos patronos cortesanos. Si bien volveremos sobre estas cuestiones más adelante, es conveniente señalar que Quiroga buscaba cualquier nimio asunto para establecer comunicación con Mateo Vázquez, siendo la cuestión referida a los libros una de las más utilizadas. Así, el 26 de febrero de 1582, Felipe II notificaba al Inquisidor General como había tomado a su servicio al licenciado Alonso del Castillo, médico de Granada, por sus conocimientos de lengua arábica, quien le había informado que en el tribunal del Santo Oficio de dicha ciudad se encontraban algunos libros escritos en este idioma. Mostraba su deseo de que Castillo los viese con el fin de discernir si convenía hacer traducción de alguno de ellos para engrosar la biblioteca real de el Escorial. Solicitaba a Quiroga que escribiese a los inquisidores granadinos para que permitiesen a Castillo realizar esta diligencia (327). El Inquisidor General mantuvo diversas comunicaciones con Mateo Vázquez al respecto. Obedeciendo el mandato regio seleccionó algunos libros, entre los que se encontraba un ejemplar del Corán, a pesar de que, como hacía constar, se trataba de un libro prohibido (328).

El 28 de julio, Quiroga comunicaba al secretario como había encargado

humanista. La actitud personal de Gaspar de Quiroga hacia diversos autores, como fray Luis de León, y su religiosidad cercana a la mística, reflejada en su defensa de Teresa de Jesús, de fray Luis de Granada, y en su relación con la Compañía de Jesús, no debieron motivar al Inquisidor General a potenciar su finalización. Sobre la significación del Catálogo en el declive del pensamiento humanista, véase, V. PINTO CRESPO, "Los índices de libros prohibidos", p. 189.

(327).- AGS, Estado, leg. 428, s.f.

(328).- IVDJ, envío 91, nº 318. Por una misiva posterior, sabemos que los ejemplares escogidos eran cuatro, tratando tres de ellos sobre medicina, y el cuarto sobre astrología (Ibid., nº 323). Siguiendo las órdenes que le transmitía Mateo Vázquez, los libros fueron entregados a Sebastián de Santoyo (Ibid., nº 325 y 327), a pesar de las reticencias expresadas por Quiroga (Ibid., envío 8 (II), caja 13, s.f.).

al licenciado Tomás de Salazar, consiliario de la Suprema y Comisario General de Cruzada, cargo al que accedió tras la ofensiva realizada desde el grupo "castellanista" contra Pedro Velarde, que se ocupase de terminar el Catálogo para que se pudiese proceder a su publicación. Salazar asumió esta labor, aunque todo indica que el Índice se debía encontrar prácticamente conformado una vez que se superó el escollo que había significado la publicación del Catálogo portugués, puesto que, solamente unos días después, el 2 de agosto, Quiroga concedía el privilegio de la impresión del mismo a Mateo Vázquez, aludiendo al esfuerzo que éste había invertido en su culminación desde que había asumido la secretaría de la Suprema. Sin duda, la pugna que se generó en torno a la provisión de este cargo, así como conseguir el relegamiento de Quiroga en todos los asuntos inquisitoriales, vino a contribuir a dilatar su salida a la luz (329). Dos días después, Salazar informaba a Vázquez de que Quiroga había enviado esta provisión al tesorero Juan Fernández de Espinosa, asegurando que el Índice se hallaba listo para imprimir. Añadía que el Inquisidor General había establecido graves penas sobre aquellos que actuasen en perjuicio de la gracia concedida al secretario. No obstante, apuntaba que podía solicitar su refrendación por una Cédula real despachada por los Consejos de Inquisición y de Aragón (330). Vázquez inició de forma directa las diligencias al respecto con Felipe II, puesto que, en febrero de 1583, el Inquisidor General transmitía desde Toledo a Salazar su malestar por la provisión que el secretario había recibido del monarca concediendo esta prebenda, ignorando las competencias de su cargo, dado que esta era una atribución que estaba conferida a los Inquisidores Generales. Además, decía desconocer los privilegios que se le habían otorgado en la misma,

(329).- Igualmente, por esta provisión, el Inquisidor General permitió que Vázquez encargase esta labor a la persona que creyese apropiada, gozando de los intereses que resultasen de la misma, sin que se le pusiese impedimento o embargo alguno (AHN, Inq., libro 357, fols. 90v-91r, citado por V. PINTO CRESPO, "El proceso de configuración..." p. 224). En carta que el vicecanciller de Aragón, Bernardo de Bolea, dirigió a Mateo Vázquez, en julio de 1581, con el parabién por su nombramiento como secretario del Consejo de Inquisición, decía: "El privilegio que v.m. pide, para la impresión del Catálogo de libros, se mandó luego hacer como era justo, y creo que irá con esta para firmar de su Magd" (AZ, carp. 136, n° 145); J.M. DE BUJANDA, *Index de l'Inquisition portugaise*, p. 111; Idem, *Index de l'inquisition espagnole, 1583-1584*, pp. 103-105.

(330).- AZ, carp. 136, n° 195. El 11 de agosto, Quiroga escribía a Mateo Vázquez: "Cada día acuerdo al licenciado Salazar lo del Catálogo aunque él se tiene harto cuydado" (IVDJ, envío 91, fol. 330).

requiriendo la información pertinente (331). Cuando ésta estuvo en su poder, Quiroga mostró su desacuerdo con alguna de las cuestiones contenidas en la concesión, recomendando que la impresión se retrasase hasta que hubiese oportunidad de tratar este asunto (332). Finalmente, el 2 de julio, el secretario de la Suprema, Pablo García, testificó la tasación realizada por el Inquisidor General de la impresión de los pliegos del Catálogo en cinco maravedís (333). Días después, Quiroga recibía muestras del contentamiento de Felipe II por la terminación de la impresión, así como la indicación del monarca de que el Inquisidor General enviase un ejemplar del Índice al arzobispo de Lisboa, como muestra de amistad y para que tuviese noticia de la labor efectuada por la Inquisición hispana, señalando su intención de enviar personalmente otro a su sobrino, el archiduque Alberto (334).

El resultado final de tantos años de gestiones en torno a la conformación de un nuevo Índice de libros prohibidos fue la realización de un Catálogo que vino a racionalizar y clarificar la actividad censora y el control ideológico. Su estructura, basada en sus inmediatos predecesores, tenía la peculiaridad, como el confeccionado por Arias Montano en los Países Bajos, de diferenciar las prohibiciones totales de aquellas obras que bastaba que se sometiesen a una corrección, y que fueron reunidas en el Expurgatorio (335). El Índice se iniciaba con la exposición de catorce reglas de carácter general, después de las que aparecían consignados los libros clasificados por el idioma en que se habían escrito, y dentro de cada una de estas secciones, los autores aparecían dispuestos en orden alfabético. En último lugar, aparecían los principales escritores

(331).- AHN, Inq., libro 361, fol. 181r.

(332).- Véase la carta que Quiroga remitió a Salazar el 17 de marzo en Ibid., fol. 183v. El privilegio refrendado por Quirga en favor de Mateo Vázquez aparece en el decreto de publicación, fechado el 20 de mayo de 1583 (J.M.DE BUJANDA, Index de l'Inquisition espagnole 1583-1584, pp, 45, 878).

(333).- AHN, Inq., libro 328, fol. 125v; Ibid., libro 357, fol. 92r.

(334).- IVDJ, envío 55 (caja 72), nº 119; AHN, Inq., leg. 3314, nº 43.

(335).- Sobre las expurgaciones comunes entre ambos, véase, J.M.DE BUJANDA, Index de L'Inquisition espagnola, 1583-1584, pp, 102-103.

heréticos (336). El contenido del Catálogo reflejaba, como hemos referido, un importante aumento de las prohibiciones. A través de éstas, no sólo se trataba de evitar la extensión de la herejía, de las ideas claramente heterodoxas, sino también de frenar cualquier postura crítica nacida en el seno del catolicismo, como la proveniente del pensamiento humanista y científico (337).

Finalizada, pues, su impresión en 1583, la del Expurgatorio que acompañaba al Índice se prolongó durante unos meses. Así, los miembros de la Suprema escribían a Quiroga a Toledo, el 4 de febrero de 1584, notificando la terminación de los trabajos referidos al mismo. Solicitaban que Quiroga procediese a su tasación, significando que la utilización de diferentes letras y las citas numeradas de los lugares donde se tenía que aplicar la corrección habían supuesto un esfuerzo mayor que el realizado con el Catálogo, por lo que se solicitaba una valoración semejante, teniendo en cuenta, además, que se había realizado a costa del Santo Oficio, que también era el destinatario de los beneficios que produjese (338). Dos meses después, la Suprema se centraba en los asuntos concernientes a su distribución, decidiéndose, tras consultar con el Inquisidor General, encargar esta función al librero Francisco López (339). Así pues, a finales de 1584, la publicación del nuevo Catálogo y Expurgatorio se fue realizando en los distintos tribunales inquisitoriales (340).

(336).- V.PINTO CRESPO, "El proceso de configuración...", pp, 24-32; Idem, Inquisición y control ideológico..., pp, 75-85.

(337).- Ibid., pp, 198-204; Idem, "Institucionalización inquisitorial y censura de libros", pp, 518-522; M. y J.L.PESET REIG, "El aislamiento científico español a través de los índices del inquisidor Gaspar de Quiroga de 1583 y 1584" Anthologica Annua 16 (1968), pp, 25-41.

(338).- AHN, Inq., leg., 3314, nº 49; Ibid., libro 328, fol. 155v.

(339).- A pesar de que López requería el diez de los beneficios para tomar esta ocupación, el Consejo decidió otorgarle un cinco por ciento (Ibid., fol. 175r-v; Ibid., libro 361, fol. 237v).

(340).- V.PINTO CRESPO, "El proceso de configuración..." pp, 33-38; A.SIERRA CORELLA, op. cit., pp, 255-259; A.PALAU DULCET, op. cit., VII, p, 43; J.L.GONZALEZ NOVALIN, "La Inquisición española", pp, 196-197; Idem, El Inquisidor General..., I, p, 286; M.DE LA PINTA LLORENTE, "Aportaciones para la historia externa de los índices expurgatorios españoles" Hispania 12 (1952), pp, 264-265; J.M.BUJANDA, Index ...1583-1584, pp, 46, 50-54.

Las diligencias en torno a la expurgación de libros continuaron hasta 1586. Así, en julio de 1585, Quiroga se había dirigido al prior del monasterio de el Escorial para que enviase memoria de los libros prohibidos que existían en la biblioteca del cenobio, así como en el de Parraces, y los que se hallaban en poder de los frailes. Informado el rey, ordenó que Benito Arias Montano se encargase de realizar una visita y resolver lo que se debía hacer con estas obras. Las mismas quedaron guardadas en lugar apartado y cerrado para evitar que se pudiesen leer sin licencia. El Inquisidor General mostró su conformidad con que el prior actuase como comisario del Santo Oficio para revisar y firmar los libros corregidos y expurgados. Arias Montano abandonó esta labor, trasladándose a Andalucía en abril de 1586 (341).

Por otra parte, hemos de señalar, que el Libro de la Vida de Santa Teresa continuaba retenido por la Inquisición. Las gestiones realizadas por Ana de Jesús con Gaspar de Quiroga, que seguía mostrando su favor a las carmelitas descalzas, se encaminaron a liberar el libro y conseguir que pudiese ver la luz. Por estas fechas se hallaba en la Corte fray Luis de León, ocupándose del pleito que la Universidad de Salamanca mantenía con el Colegio del Arzobispo. Esta cuestión motivó que se encontrase frecuentemente en Madrid entre 1584 y 1589. Sin duda, el agustino encontraba en esta cuestión una buena excusa para alejarse del enrarecido y rígido ambiente salmantino, ofreciéndole la posibilidad de cultivar la buena amistad que mantenía a lo largo de los años con Gaspar de Quiroga. Además de prestar atención a estos asuntos judiciales, fray Luis también se ocupó de cuestiones derivadas de la publicación del nuevo Catálogo de libros prohibidos, actuando como conmutador de las cartas que la Universidad de Salamanca enviaba al Inquisidor General y a la Suprema. Así, el agustino recibió el encargo de preparar la edición de las obras de Teresa de Jesús, que fueron publicadas en 1588, seis años después de su muerte. Si bien esto parecía zanjar la polémica sobre la ortodoxia de los escritos de la monja abulense, sólo un año más tarde, fray Alonso de la Fuente volvía a presentar ante el Consejo de

(341).- AHN, Inq., leg. 4470, exp. 4; Documentos escogidos del Archivo de la Casa de Alba, p. 135; IVDJ, envío 55 (caja 72), nº 105.

Inquisición sus acusaciones de concomitancia con las doctrinas alumbradas (342).

c/Las relaciones de la Inquisición con otras instituciones

Los amplios poderes con los que contaba la Inquisición hispana vinieron propiciados por la peculiar combinación de jurisdicción eclesiástica y temporal que albergó en su seno. Era el Inquisidor General, a través del breve de nombramiento realizado por el pontífice, quien recibía las facultades apostólicas delegadas por el papa, mientras que la organización contaba con una jurisdicción dependiente del rey que se materializó en la constitución del Consejo de Inquisición, pasando a integrarse en el sistema polisinodial que integraba la Monarquía. En relación con la provisión del Inquisidor General, el monarca únicamente presentaba ante la Santa Sede al candidato, al igual que efectuaba en consonancia con el patronato en cuanto a las prelacías, pero el nombramiento y jurisdicción que otorgaba el cargo derivaban directamente del papa, lo que diferenciaba sus poderes de carácter excepcional para la persecución de la herejía, de los de los obispos, que sólo contaban con jurisdicción ordinaria. Según las facultades recibidas, bajo su criterio quedaba la provisión y castigo de todos sus subordinados, así como la revisión, modificación o anulación de las sentencias establecidas por los inquisidores y la atención a las apelaciones que pudieran presentarse. Así pues, el Inquisidor General era el eje jurídico estructural y constitutivo de la institución. El rey no tenía capacidad para intervenir en estos poderes espirituales. Por ello, el Consejo de Inquisición, que no contaba con la legitimación jurídica de la Santa Sede, sólo podía conocer y decidir aquellos asuntos para los que el Inquisidor General comisionaba en sus nombramientos a sus miembros en forma de delegación de facultades, o bien aquellos que eran remitidos a la Suprema por la costumbre, contando con plenos poderes estrictamente en las cuestiones que el monarca hubiese remitido su entendimiento al Santo Oficio, en los que la opinión del Inquisidor General tenía

(342).- A.F.G.BELL, op. cit., pp, 206-208; E.LLAMAS MARTINEZ, Santa Teresa de Jesús y la Inquisición española, pp, 286-291; Idem, "Teresa de Jesús y los alumbrados", p, 144; FRAY LUIS DE LEON, Obras completas castellanas, pp, 1331, 1359-1364.

la misma valía que la de los consejeros en la toma de decisiones mediante votación. De esta manera quedaban diferenciados los poderes jurisdiccionales constitutivos de la Inquisición (343).

No obstante, otra cuestión distinta era definir en qué medida el Inquisidor General hacía uso de estas facultades privativas para conducir el gobierno de la institución y qué capacidad de intervención tenía el Consejo en el mismo. Para un Inquisidor General que, como Gaspar de Quiroga, no logró dominar la Suprema durante los años en que ocupó este cargo, esta cuestión reviste una gran importancia, estando estrechamente vinculado su influjo en los asuntos inquisitoriales con la evolución de las facciones cortesanas que, en la Corte de Felipe II, pugnaban por alzarse con el ejercicio del poder. Por otra parte, como hemos señalado, Quiroga continuó la trayectoria que sobre la Inquisición había marcado Diego de Espinosa, poniendo la institución al servicio de la culminación del proceso de confesionalización de la Monarquía. Este llevaba implícito un enfrentamiento entre la Corona y el papado por defender sus ámbitos de influencia, tratándose desde la Corte hispana de salvaguardar las prerrogativas y privilegios concedidos procurando la obtención de la primacía de la jurisdicción temporal frente a la espiritual. En consonancia con esta política confesional auspiciada por la Corona, en el último tercio del siglo XVI se inició un proceso, que tuvo su continuación en la centuria posterior, en el que se potenció el papel desempeñado por el Consejo en cuanto a la gobernación y dirección de los asuntos inquisitoriales, que se puso de manifiesto, como hemos referido, cuando, a la muerte de Gaspar de Quiroga, se abrió un debate en torno a la ampliación de la jurisdicción de la Suprema (344).

Este intento de fortalecer el Consejo de Inquisición, dependiente de la autoridad real, frente a la figura del Inquisidor General, dejó sentir su influencia en las relaciones mantenidas entre el Santo Oficio hispano y la Santa Sede. Por

(343).- Para estas cuestiones, nos remitimos al clarificador estudio elaborado por R. LOPEZ VELA, "Estructuras administrativas del Santo Oficio", Historia de la inquisición en España y América, II, pp, 71-90.

(344).- Ibid., pp, 120-137.

otra parte, el ejercicio de la actividad inquisitorial generaba conflictos de competencias con otras instituciones. La regulación de los mismos revistió una enorme importancia en el seno de una organización sociopolítica corporativa.

c.1. Las actuaciones respecto a la Santa Sede.

Las relaciones que la Inquisición hispana tuvo con el papado aparecen reflejadas en la correspondencia que Inquisidor General y Suprema mantuvieron con el procurador del Santo Oficio hispano en Roma. Los asuntos principales que centraban la atención estaban referidos a cuestiones relacionadas con la jurisdicción inquisitorial, que conoció, en los primeros años que Quiroga ocupó el cargo de Inquisidor General, una ampliación de sus márgenes (345).

Cuando Gaspar de Quiroga accedió a dicho cargo, este oficio era desempeñado por el licenciado Lucas Salgado, que se había trasladado a Roma, en 1567, para asistir a la causa del arzobispo fray Bartolomé de Carranza, pasando a ocuparse paralelamente de este cometido (346). Salgado continuó desarrollando estas funciones hasta 1576, en que, al igual que la mayoría de los enviados a Roma en seguimiento de este proceso, tornó a la Península. En febrero de 1573, Gregorio XIII concedía nuevamente el breve denominado "De fructibus in absentia" por el que los inquisidores podían gozar de los frutos de sus prebendas eclesiásticas y canonicatos sin cumplir con la obligada residencia. No obstante, la inclusión de una nueva cláusula exceptiva referida a las canonjías teologales provocó que, en el mes de julio, se instase a Salgado desde la Suprema para que se negase a su aceptación, entablando comunicación con el embajador Juan de Zúñiga para que insistiesen ante el

(345).- R. GARCIA CARCEL, Herejía y Sociedad..., pp. 70-72, señala que las relaciones entre la Santa Sede y la Inquisición mejoraron notablemente a partir de 1572 como consecuencia, por una parte, de la buena actuación de los procuradores, y por otra, del conocimiento que Quiroga tenía de la Curia romana. A ello habría que añadir que su entendimiento fue mayor debido a la integración de Quiroga en el partido "papista".

(346).- Véase la credencial que Felipe II remitió a Pío V en favor del licenciado Salgado, fiscal del Consejo de Inquisición, el 25 de enero de 1567, en L. SERRANO, Correspondencia diplomática..., II, p. 29.

pontífice sobre la necesidad de su rectificación (347). En octubre, el breve era sometido de nuevo al criterio del Consejo de Inquisición, reiterándose la necesidad de que la concesión se efectuase de manera semejante a la que habían otorgado los papas anteriores, significando que se procuraría que las prebendas teologales no fuesen ocupadas por los miembros del Santo Oficio, sin necesidad de que constase ninguna salvedad al respecto en el documento (348). Las conversaciones mantenidas con Gregorio XIII tuvieron un resultado positivo para las intenciones del Santo Oficio (349). En enero de 1574, se pedía al procurador que enviase una relación del breve, remitiéndose, en el mes de marzo, el original a Roma para que se pudiesen guiar por él en el proceso de renovación de la concesión, aunque, finalmente, no se pudieron vencer en su totalidad las reticencias albergadas por el pontífice respecto a las prebendas teologales, quedando definitivamente elaborado en el mes de junio (350).

Esta defensa de los privilegios inquisitoriales también se efectuó referida a la dificultad que tenía el Santo Oficio para que las Iglesias Catedrales o Colegiales cumpliesen con la disposición papal de suprimir una canonjía en favor de la Inquisición. Este fue un tema recurrente en la correspondencia con la Santa Sede por las dificultades e impedimentos que ponían las iglesias a su disfrute (351). En mayo de 1574, Quiroga solicitaba la mediación de Felipe

(347).- AHN, Inq., libro 326, fols. 119v-120r. Por su parte, Felipe II escribió a Juan de Zúñiga en el mismo sentido, señalando que "como el pp. Pío V excluyó los que tienen beneficios curados y ahora se exciben esta siempre se iría disminuyendo este santo ministerio (Ibid., libro 252, fols. 112v-113r).

(348).- Véase la carta que la Suprema remitió a Salgado, el 20 de octubre en Ibid., libro 326, fol. 145r-v.

(349).- El día 29 del mismo mes escribía la Suprema al procurador en este sentido, Ibid., fol. 151r.

(350).- El consejo refería a Salgado: "De manera que donde trata de gozar las prebendas diga nontamen theologales attitude servientes y que no habéis podido sacar otra cosa, consultado con el inquisidor General ha parecido deis orden como se pongan aquellas palabras en el dicho breve y le envieis con el primero".

(351).- Véanse, por ejemplo, los problemas que causaba la concesión de una pensión sobre el canonicato que el Santo oficio poseía en la iglesia de Valencia (Ibid., fol. 127r). Si bien ya hemos hecho referencia a algunas de las reclamaciones realizadas por Quiroga a las iglesias en relación

II y los oficios del embajador Zúñiga para solicitar al pontífice la concesión de la primera canonjía que vacase en la iglesia de Mallorca, puesto que el tribunal inquisitorial era tan pobre que era necesario procurar una dotación (352). Conseguida esta ampliación del breve concedido por Paulo IV, una petición semejante se presentó, en el mes de octubre, en relación a Cerdeña (353). Sin embargo, el otorgamiento papal fue respondido con la desobediencia por parte de la iglesia mallorquina, que interpuso apelación e hizo instancia ante los jurados de la ciudad para que mostrasen también su oposición, enviando al canónigo Antonio Bellver a Roma para la prosecución de la causa (354).

Otra cuestión que apareció de forma repetitiva en las relaciones entre el Santo Oficio hispano y la Santa Sede fue el asunto referido a los procesados por la Inquisición que escapaban a Roma para presentar recurso. Si el papa recibía la causa e inhibía a los inquisidores, desde la Corte hispana se trataba de recuperar su entendimiento, representando al pontífice el debilitamiento que suponía para el Santo Oficio esta actuación y la conveniencia de que las apelaciones se realizasen ante el Inquisidor General. Así sucedió en 1575, con los hermanos Francisco y Andrés Minuta, condenados a galeras y Pedro Grisú Roger, por bígamo, en la inquisición de Cerdeña. Gregorio XIII inhibió al

a esta cuestión, puesto que a través de las mismas buscaba beneficiar a sus clientes, el conjunto de las presentadas durante los años que ocupó el cargo de Inquisidor General, se encuentran en *Ibid.*, libro 1235, fols. 196r-319v.

(352).- BL, Eg. 1506, fol. 17. En la carta que el monarca escribió al embajador hacía constar la falta de sentido que tenía que la Iglesia de Mallorca contribuyese a la sustentación de la Inquisición de Valencia, cuando el tribunal insular tenía tanta necesidad (AHN, Inq., libro 252, fol. 119r-v).

(353).- En este sentido, escribió el Consejo a Salgado (AHN, Inq., libro 326, fol. 214v). Las que se remitieron al papa y a Juan de Zúñiga, en *Ibid.*, libro 252, fol. 133r-v. Sobre ello también insistió el rey ante el embajador (IVDJ, envío 8 (III), caja 13, fol. 167).

(354). El rey prevenía a Zúñiga que suplicase al papa no accediera a modificar o derogar el breve, remitiendo al canónigo a Gaspar de Quiroga, puesto que tenía cometido el entendimiento del negocio (AHN, Inq., libro 251, fol. 56v). La carta que el Inquisidor General y la Suprema remitieron al lugarteniente general del reino de Mallorca al respecto, en *ibid.*, fols. 56v-57r. Por su parte, Felipe II también instó al obispo, al cabildo y a la ciudad (*ibid.*, fols. 57r-59r). Sobre este asunto véase igualmente AZ, carp. 138, n° 193-194.

inquisidor Lorca en favor del obispo de Córcega (355).

Igualmente sucedía en lo referente a la renovación de la concesión de la Cruzada. En mayo de 1576, Felipe II, Gaspar de Quiroga y el Consejo de Inquisición instaban a Juan de Zúñiga para que representase al pontífice los inconvenientes que se derivaban de una clausula general recogida en dicho documento, por la que quedaban absueltos todos los delitos en el foro de la conciencia. Se solicitaba al papa que exceptuase el de herejía de esta gracia, puesto que esto suponía un grave desfavorecimiento para el Santo Oficio (356).

A pesar de estas dificultades, Gregorio XIII propició la extensión del fuero inquisitorial, puesto que asumió la jurisdicción sobre materias que hasta entonces quedaban fuera de su entendimiento. Estas nuevas atribuciones estaban referidas a la sodomía (357), las solicitaciones en confesión (358) y el comercio ilícito de caballos (359).

(355).- Sobre las cartas que, en torno a este asunto, remitió por una parte el rey al embajador y por otra la Suprema a Salgado, véase AHN, Inq., libro 326, fols. 298v-299r, 305v-306r; *Ibid.*, libro 251, fol. 61v, 65v-67r; *Ibid.*, libro 252, fols. 164r-165r.

(356).- *Ibid.*, fol. 171r-v; *Ibid.*, libro 251, fol. 67v.

(357).- *Ibid.*, libro 326, fol. 102r. La expedición de dicho breve trajo dificultades para el licenciado Salgado, puesto que había tomado ciento cincuenta ducados de Cámara en Roma, de los que había empleado veintisiete escudos de oro y dos reales en la expedición del mismo. En octubre de 1573, la Suprema le reprochaba que el documento no se hubiese remitido a pesar del gasto efectuado, que se estimaba innecesario, puesto que si lo hubiese solicitado el embajador en nombre del rey hubiese sido gratuito (*Ibid.*, fol. 145r-v).

(358).- En junio de 1575, el Consejo escribía a Salgado comunicándole que Pío IV había dado un breve en relación a este asunto, pero que era fácil burlar su contenido, puesto que la solicitación también se efectuaba antes o después de la confesión. Debía pedir al papa un nuevo documento donde quedase esclarecido este tema (*Ibid.*, fols. 268r, 298v-299r).

(359).- En marzo de 1576, Quiroga escribía al rey en referencia a este asunto, puesto que los inquisidores de Aragón y Cataluña no podían atender de manera conveniente a todos los pasos que había que guardar, no contando con la colaboración que sería necesaria de los jueces seculares. Significaba que, de no cortarse este tráfico, cuando el monarca necesitase caballos no los iba a encontrar, puesto que se vendían en Francia, donde, a causa de la guerra alcanzaban un alto precio. Pedía que se escribiese a Juan de Zúñiga solicitando un breve al respecto, teniendo en cuenta que los que los vendían comerciaban con luteranos. El Inquisidor General decía que competía a la justicia real impedir el paso de los equinos de la Corona de Castilla a la de Aragón, resaltando la

En noviembre de 1576, el Consejo de Inquisición admitía la resolución del licenciado Salgado de volver a la Península y le comunicaba cómo Gaspar de Quiroga había provisto en su oficio al licenciado Diego López de Montoya, canónigo de la catedral de Avila y persona cercana al prelado Alvaro de Mendoza. Se ordenaba a Salgado que le instruyese sobre el estado de los negocios y las diligencias que convenía realizar (360). Una de las primeras actuaciones que efectuó el nuevo procurador fue obtener la renovación del breve "De fructibus in absentia" (361).

Los asuntos en los que López de Montoya hubo de centrar su atención fueron los mismos que había tratado su antecesor. Sin duda, una de las cuestiones que con mayor frecuencia debía representar ante el pontífice estaba referida a la resistencia de las iglesias a la aplicación de un canonicato al Santo Oficio. Así, el obispo de Lérida se negaba a renunciar a la pensión que tenía otorgada sobre la canonjía aplicada al tribunal de Valencia (362). En el caso de un canonicato y prebenda de la iglesia leridana, el pleito que mantenía Montoya con el clérigo Juan Plá terminó a través de una concordia establecida por Gaspar de Quiroga, que fue remitida a Roma para obtener la conformidad

deficiente labor que en este sentido realizaban los jueces ordinarios y de saca (BL, Eg. 1506, fols. 27r-v, 36r-v).

(360).- AHN, Inq., libro 327, fol. 64r. El poder e instrucción otorgados por Quiroga el 5 de noviembre en Ibid., libro 357, fols. 21v-23r. El rey escribió en su recomendación al embajador Juan de Zúñiga, así como a los cuatro cardenales que conformaban la congregación del Santo oficio en Roma (Ibid., libro 252, fols. 174v-175r; Ibid., libro 251, fol. 69r-v). Las contestaciones emitidas por los curiales en AGS, Estado, leg. 929, n° 216. Como hemos señalado, Diego López de Montoya era hermano de Juan López de Montoya, inquisidor en los tribunales de Llerena y Córdoba, siendo ambos hijos de María de Montoya, criada de la reina.

(361).- Junto a esta cuestión, se comunicaba a Montoya, en julio de 1577 que, a petición del Inquisidor General, el cabildo de la iglesia de Avila había acordado asistirle con todos los frutos de su prebenda (AHN, Inq, libro 327, fols. 92r-v, 98v). No obstante, era advertido de que no tornase a encargarse de la expedición del breve, para la que había establecido una cédula de cambio con Juan Bautista Lita, pues el embajador se encargaría de esta gestión (Ibid., fol. 107v-108r).

(362).- Véanse las cartas que el prelado y Juan de Zúñiga remitieron al rey, IVDJ, envío 94 (caja 135), n° 104, 203.

papal, en febrero de 1578 (363). Igualmente, en el mes de mayo, el Consejo de Inquisición prevenía al procurador de que por muerte de Fabián Monroy había vacado un canonicato en la iglesia de Plasencia, que se suprimió en beneficio del tribunal de Llerena. En un primer momento, el obispo y el cabildo proveyeron la canonjía alegando poseer un indulto que les habilitaba para ello, pero ante la actuación inquisitorial, posteriormente cumplieron con lo que se les mandaba y dieron posesión pacífica al Santo Oficio. Sin embargo, después se había sabido que trataban de hacer instancia en Roma en favor de sus pretensiones y en contra de los intereses de la Inquisición (364). Por otra parte, se trataba de recordar a Gregorio XIII que, cuando procediese a la provisión de una canonjía, tuviese en cuenta si era la primera que vacaba desde la expedición del breve de Paulo IV, como sucedía con la que se hallaba disponible en la iglesia de Segorbe en noviembre de 1578 (365). De igual manera, Montoya continuó actuando en relación a los reos inquisitoriales que huían de la Península para presentar recurso en Roma, siendo especialmente significativo el caso de Juan de Berri, por el prolongado proceso que se siguió hasta obtener su remisión (366). También insistió en que los jubileos otorgados por el pontífice especificaran, como años atrás había sucedido en relación a la bula de Cruzada, que los confesores no podían absolver del delito de herejía, de haber leído libros prohibidos o de haber conspirado contra el Santo Oficio (367).

Sin embargo, el procurador no consiguió que el papa ampliase el

(363).- AHN, Inq., libro 327, fol. 128v. Para los problemas que aparecieron posteriormente, *ibid.*, fol. 187v.

(364).- *Ibid.*, fol. 143r-v, 176r-v.

(365).- Véase la carta que el rey dirigió al embajador en este sentido (*Ibid.*, libro 251, fol. 90v).

(366).- Sobre este tema escribía Quiroga a Mateo Vázquez en agosto de 1577 (IVDJ, envío 91, nº 54). En torno a las diligencias que se realizaron en relación al bachiller Alonso Rodríguez, presbítero residente en Sevilla (AHN, Inq., libro 327, fols. 107v-108r, 124r-v, 140r y 172v), así como en cuanto a Gonzalo Estévez, preso en la Inquisición de Galicia por haber testificado falsamente (*Ibid.*, fol. 172r-v; *ibid.*, libro 251, fols. 86r-87r).

(367).- *Ibid.*, libro 327, fols. 170r-v, 186v-187r.

entendimiento jurisdiccional de la Inquisición sobre algunas cuestiones, a pesar de las reiteradas peticiones que se presentaron. En enero de 1578, Montoya recibía la orden de la Suprema de solicitar al pontífice un breve por el que los inquisidores pudiesen condenar en la pena ordinaria y relajar al brazo seglar a los presos que en las cárceles diesen muerte a otro reo, aunque éstos fuesen eclesiásticos. Ante la negativa pontificia a realizar esta concesión, se decidió que fuese Juan de Zúñiga quien volviese a hacer instancia con Gregorio XIII cuando encontrase la ocasión propicia (368). Así mismo, se trató de lograr, sin éxito, un privilegio para que los jueces ordinarios eclesiásticos no interviniesen impidiendo e interponiendo recurso ante la actuación de los jueces de bienes confiscados (369).

En junio de 1579, el licenciado López de Montoya retornó a la Península portando el capelo cardenalicio para Gaspar de Quiroga (370). Unos meses después, en marzo de 1580, se encontraba nuevamente desempeñando su oficio, teniendo que afrontar, una vez más, la problemática derivada de la aplicación de los frutos de una canonjía de cada iglesia catedral o colegial al Santo Oficio, insisitendo en que se extendiese esta concesión a la inquisición de Cerdeña por su extremada pobreza (371), así como el pleito mantenido con la iglesia de Segorbe, sobre el que se alcanzó una concordia (372). Sin embargo, el relegamiento que Quiroga sufrió a partir de 1580 también trajo sus consecuencias

(368).- Ibid., fols. 124r, 139v-140r. Hemos de señalar que esta petición estaba directamente relacionanda con lo acontecido entre los procesados alumbrados de Llerena.

(369).- Ibid., fols. 187r-v, 212r-v.

(370).- En referencia a esto escribía Juan de Zúñiga al rey: "Su Sd. ha enviado el capelo al cardl de Toledo con el canónigo Montoya que hacía aquí los negocios de la Inquisición/ y parecele a Su Sd. que se difiere tanto la resolución de los que me encarga que determinó de encomendar a Montoya que a cordase a V.Md la respuesta en lo de las jurisdicciones y que hiciese mrd. a Jacobo Boncompaño y otros desta qualidad y él se halla tan suficiente para traer de todos buen despacho que ha asegurado que volverá para septiembre con grandes resoluciones" (IVDJ, envío 111 (caja 157), nº 363).

(371).- AHN, Inq., libro 327, fol. 257r. En este sentido, Felipe II escribía también al embajador, el abad Briceño, significando igualmente la necesidad de que en Roma no se amparase a los que huían del Santo oficio (Ibid., libro 251, fols. 96v-97r).

(372).- Ibid., libro 327, fols. 295v, 370r; Ibid., libro 328, fols. 59v-60r.

para el procurador del Santo Oficio en Roma. En marzo, el Consejo advertía a López de Montoya cómo se había tenido noticia de que, además de ocuparse de las cuestiones propias de su cargo, entendía en los asuntos que le encargaban otras personas. Se le aconsejaba que se excusase de efectuar estas actuaciones, puesto que si persistía en este comportamiento, se tomarían medidas en su contra (373). En septiembre del año siguiente, los miembros de la Suprema escribían a Quiroga a Toledo señalando la falta de crédito y reputación que tenía Montoya, así como la necesidad de que su oficio fuese provisto en otra persona, como en diversas ocasiones habían solicitado al Inquisidor General. Quiroga opuso resistencia para acceder a esta petición alegando el descrédito que esta sustitución supondría para Montoya, adjuntándose desde el Consejo, además de una relación de los candidatos idóneos, la manera de realizar el relevo de forma honrosa para el procurador (374).

No obstante, la ofensiva desplegada por el "partido castellanista" desde la Suprema contra Montoya no obtuvo los resultados deseados, puesto que éste se mantuvo en el cargo de procurador hasta 1591 (375). En los meses sucesivos, el interés se centró en dirimir el problema jurisdiccional que había generado la admisión del recurso presentado en Roma por Juan de Berri, huido de la Inquisición hispana. Tras este alias se escondía Jaime Sánchez, quien había permanecido quince años en París, recibiendo las enseñanzas del doctor Morillo.

(373).- Ibid., libro 327, fol. 257r. Ante las dudas presentadas por López de Montoya en cuanto a dónde se extendía esta limitación, en el mes de junio, el Consejo le permitió que en caso de recibir poderes particulares para efectuar alguna sustitución, pudiese efectuar esta función, pero sin percibir salario por ello y sin que tuviese interés particular en el negocio, "porque se entiende tenéis agencia y lleváis salario y interés de algunas personas" (Ibid., fol. 273v).

(374).- Las personas propuestas para desempeñar esta ocupación por parte del Consejo fueron, pertenecientes al Santo Oficio, el licenciado Luis Gutiérrez Serrano, inquisidor de Murcia, el licenciado Peña, inquisidor de Sicilia, el doctor Caldas, inquisidor de Cataluña, el licenciado Quintana, fiscal de Córdoba, el licenciado Mandiolaza, fiscal de Zaragoza y el doctor Juan Ruiz de Prado, fiscal de Granada. En cuanto a individuos ajenos a la inquisición, se señalaba al doctor Juan de Llano, capellán real, al doctor Montoya, canónigo de León y al licenciado Francisco de Silva, canónigo de Badajoz residente en Roma (Ibid., fol. 375r-v, 381v-382r).

(375).- Por su parte, Mateo Vázquez contaba con un informador de todos los asuntos de la Santa Sede, el doctor Bartolomé de Quesada. Véanse sus comunicaciones en IVDJ, envío 57 (caja 79), paquete 5, fols. 127-161.

Su vinculación a doctrinas luteranas hizo que fuese procesado y sentenciado por la inquisición de Zaragoza, produciéndose, posteriormente, su escapada a Roma (376). En junio de 1582, el Consejo escribía a Montoya dando su aprobación a la manera como estaba conduciendo este negocio, aunque se le advertía que era Juan de Zúñiga, virrey de Nápoles, quien se estaba encargando de las cuestiones necesarias para su remisión (377). Esto provocó el desagrado del embajador, el conde de Olivares, que vió en esta actuación un menoscabo de sus competencias. Sobre ello presentó sus quejas a Quiroga, quien ordenó al Consejo que se avisase a Pedro de Leyva que el preso se debía entregar al embajador (378). En marzo de 1583, desde la Suprema se informaba a Quiroga de las gestiones que se seguían sobre este asunto, ocupado en las labores de su arzobispado toledano. Bartolomé Martínez Carnacedo, secretario de la embajada en Roma (379), había comunicado al fiscal del

(376). Un memorial sobre su vida, procesamiento por el Santo Oficio y recursos presentados por su causa ante la Santa Sede en AMAE, Santa Sede, leg. 21, fols. 94-133. En cuanto al doctor Morillo, hemos de señalar, que fue un teólogo que asistió a la primera etapa del concilio de Trento, como familiar del cardenal Pole. Acusado de mantener posturas heterodoxas manifestó que sus afirmaciones se debían a las enseñanzas del propio Pole y de Bartolomé de Carranza. Establecido en París, actuaba como protector de los estudiantes españoles que acudían a dicha ciudad y de algunos de los que huían de la actividad inquisitorial sobre el foco luterano de Sevilla, colaborando activamente con el confesor real fray Bernardo de Fresneda en la ofensiva que había desplegado contra Carranza, que culminó con su procesamiento inquisitorial. La insegura situación que vivía a causa de su ideario religioso, provocó que Morillo huyese a Amberes y después, a Frankfurt, donde trató de propagar la noticia de su muerte. Sobre estas cuestiones, véase C.GUTIERREZ, Españoles en Trento, p. 658; M.BATAILLON, op. cit, p. 516; J.I. TELLECHEA IDIGORAS, "Españoles en Lovaina en 1551-1558", Revista española de Teología 23 (1963), pp. 21-45; Idem, Fray Bartolomé de Carranza y el Cardenal Pole. Un navarro en la restauración católica de Inglaterra (1554-1558), Pamplona 1977, pp. 155-156.

(377).- AHN, Inq., libro 328, fol. 39r. Por su parte, el Cardenal Savello trataba directamente con Juan de Zúñiga sobre esta cuestión (IVDJ, envío 80 (caja 104), nº 199). Mientras tanto, Quiroga realizó directamente sus gestiones con el pontífice (BNM, Ms. 718, fol. 26r).

(378).- Véanse las cartas que Quiroga remitió a Mateo Vázquez, en este sentido, en enero de 1583 (IVDJ, envío 21 (caja 30), nº 182; Ibid., envío 91, nº 328, 332, 333, 339, 340). AZ, carp. 135, nº 20. El mandato al Consejo y al embajador en AHN, Inq., libro 361, fols. 174r, 176v.

(379).- Cuando recibió nombramiento como secretario de la embajada en Roma, a finales de 1580, ocupaba el cargo de notario del secreto en la inquisición de Sevilla. Por otra parte, contaba con una larga experiencia al servicio del Santo Oficio, puesto que había servido once años en los tribunales de Sevilla y Llerena. En torno a dichas cuestiones, véanse las cartas que Martínez Carnacedo remitió a la Suprema el 22 de mayo y el 7 de julio de 1581, en las que consta la resistencia que presentó Quiroga a aceptar el nombramiento, aunque, en noviembre de dicho año, el secretario acudía a su nuevo destino (Ibid., leg. 2947, s.f.).

Consejo, el licenciado Arenillas de Reinoso, la conveniencia de presentar ante la congregación del Santo Oficio en Roma un alegato con fundamento jurídico para que se aviniesen a remitir a Juan de Berri. Los consejeros no estimaban conveniente efectuar este recurso, puesto que el Inquisidor General, por delegación papal, contaba con la misma jurisdicción sobre las causas de fe en los reinos hispanos que los cardenales tenían en Roma. Actuar de este modo, sería reconocer a los mismos superioridad jurisdiccional y subordinar la autoridad del Inquisidor General y de la Suprema a la Congregación romana (380). Finalmente, después de cuatro años de reiteradas peticiones, a comienzos de julio, Juan de Berri fue entregado al embajador, pasando a disposición de los inquisidores de Zaragoza (381).

Sin embargo, en la cuestión de los condenados por la Inquisición hispana que presentaban sus apelaciones ante la Santa Sede, se intentaba que los privilegios y autoridad concedidos al Inquisidor General y al Santo Oficio se respetasen. Sin duda, como ha quedado reflejado en el caso de Juan de Berri (382), el dominio ejercido en la Suprema por parte del "partido castellanista" se tradujo, respecto a las relaciones con Roma, en una mayor dureza en la postura defensora del fuero inquisitorial y de las cuestiones que estaban bajo su jurisdicción. Esto conllevó que las relaciones se tornasen más tensas, en contraposición de lo acontecido cuando Gaspar de Quiroga ocupó el

(380).- Ibid., libro 328, fols. 111v-112r.

(381).- Véanse las cartas que los cardenales Savello y Gambara remitieron a Quiroga en torno a la remisión del reo, el 2 de julio de 1583 (Ibid., leg. 2947, s.f.). Dos días después también se comunicaba con el Inquisidor General el licenciado López de Montoya sobre este asunto, señalando los buenos oficios que había realizado el cardenal Gambara en este tema (Ibidem). Las contestaciones de Quiroga al papa, cardenales de la congregación y miembros de la embajada hispana en Roma, en Ibid., libro 361, fols. 198v-200r. En mayo de 1586, el cardenal Alejandrino escribió a Quiroga con el fin de librar a Juan de Berri de las galeras (Ibid., leg. 3284, n° 34).

(382).- Si bien este fue el más significativo, no fue, desde luego, el único que se produjo. Así, se volvió a producir un conflicto en torno a la dispensación otorgada por el papa a Nicola Ali, monje de San Benito, condenado por la inquisición de Sicilia a llevar hábito y ser recluido en un monasterio para el resto de su vida en 1579. Véase la carta que Felipe II escribió al conde de Olivares sobre este asunto, en abril de 1583 (Ibid., libro 251, fols. 108v-109r). Las gestiones que realizó Quiroga en los meses siguientes aparecen reflejadas en la carta que remitió al monarca el 15 de enero de 1584 (IVDJ, envío 9 (caja 14) s.f.).

cargo de Inquisidor General. Así, en julio de 1580, el Consejo escribía a Quiroga, relegado en Toledo, cómo el Cardenal Savello se había interesado en conocer la competencia que el Santo Oficio tenía en relación al delito de incesto, lo que se consideró un intento de intromisión (383). Esta situación aparece también claramente reflejada en la aclaración que el nuncio realizó a Mateo Vázquez, en torno a la detención que se efectuó de un cura de la diócesis de Toledo que vivía amancebado, especificando que la subdelegación de jurisdicción realizada únicamente estaba referida a este asunto en concreto (384). Igualmente, surgieron algunas dudas en cuanto a la competencia sobre el delito de solicitación, que no dejaron de sorprender a Quiroga, pues, como expresaba a Mateo Vázquez en junio de 1582, hasta entonces no había aparecido ningún inconveniente sobre este tema (385).

Por otra parte, durante estos años también se trató de obtener del pontífice nuevas concesiones que ampliasen los privilegios inquisitoriales. Así, en noviembre de 1583, Felipe II ordenaba al conde de Olivares que suplicase al papa que le otorgase a él y a sus sucesores una bula e indulto, semejante al que Alejandro VI concedió a los Reyes Católicos, para poder nombrar a los ministros y oficiales del Santo Oficio, que hubiesen servido o sirviesen su oficio, en una canonjía o prebenda en cada una de las iglesias metropolitanas catedrales o colegiales, así como que diese poder a los Inquisidores Generales para reservar las mismas, proveer y hacer colación de ellas para las personas que fuesen nombradas por los monarcas. El rey aseguraba que el motivo para hacer esta petición era la enorme necesidad que padecía la Inquisición (386). En

(383).- Esta circunstancia se produjo porque el Santo Oficio no entendía sobre dicho delito, salvo en los tribunales de Aragón, Valencia y Cataluña por un breve otorgado por Clemente VII. El consejo refería a Quiroga: "como V.S. Illma. dice todavía es de mucha consideración que tomen en Roma tanta mano en querer entender tan particularmente las cosas que se tratan en la Inquisición, que casi dan a entender quererse hacer dueña de todo lo que se ofrece" (AHN, Inq., libro 327, fol. 276v-277r).

(384). Una relación de lo acontecido, fechada en enero de 1582, se encuentra en IVDJ, envío 21 (caja 32), n° 729.

(385).- Ibid., envío 91, n° 320; AHN, libro 358, fol. 88r-v; AMAE, Santa Sede, leg. 21, fol. 87.

(386).- AHN, Inq., libro 251, fol. 111r-v.

enero de 1584, el embajador comunicaba a Felipe II que había suspendido la presentación de tal petición al papa, difiriendo esta actuación en espera de ocasión más propicia, puesto que, además de su propio convencimiento de que el papa no se avendría a ello, había influido en su decisión la acogida que había tenido la concesión al arzobispo de Sevilla del capelo cardenalicio. Además, refería la necesidad de que, si se iba a realizar esta diligencia, se le informase si la canonjía que tenía suprimida el Santo Oficio a su favor entraba en la nueva concesión (387). Igualmente, señalaba cómo había tratado con dos cardenales de la congregación en cuanto a que el Santo Oficio pudiese proceder contra los que pasaban caballos a Francia y el Bearn, no albergando muchas esperanzas de que se alcanzase ninguna aprobación sobre esta materia (388).

Gregorio XIII fallecía en abril de 1585, subiendo al solio pontificio Sixto V. Desde que ocupó la Silla de Pedro, Sixto V inició una serie de reformas encaminadas a fortalecer el poder económico de la Santa Sede, así como su autoridad temporal y espiritual. Esto conllevó, en relación a la Inquisición hispana, que el pontífice tratase de que no se produjeran innovaciones que contribuyesen a acrecentar su poder (389). El cambio de talante en el pontificado dejó pronto sentir sus efectos. En noviembre del mismo año, Bartolomé Martínez Carnacedo comunicaba a Quiroga la marcha de los asuntos que se trataban en Roma, así como que se había pretendido hacer cumplir a López de Montoya el edicto papal por el que los prelados y beneficiados estaban obligados a cumplir con la residencia en sus iglesias. Anunciaba que tanto por su parte como por la del embajador tratarían de que el procurador lograra su

(387).- Por otra parte, las iglesias continuaban presentando resistencia a esta cesión. Véase, por ejemplo, *Ibid.*, libro 327, fols. 372v-373r; *Ibid.*, libro 328, fol. 109r.

(388).- "...parece plática para otro pontificado, porque Su Sd. no es amigo de ampliar las facultades de los inquisidores" (IVDJ, envío 9 (caja 14), s.f.).

(389).- E. GARCIA HERNAN, "La curia romana, Felipe II y Sixto V" *Hispania Sacra*, 46 (1994), pp. 631-649.

permanencia (390). Meses después, en abril de 1586, las noticias que remitía revestían mayor gravedad. Sospechaba que algunos cardenales de la Congregación del Santo Oficio habían persuadido al papa de que el Inquisidor General y la Suprema guardaban poco respeto y obediencia al pontífice, puesto que no le informaban de los negocios que trataban ni se cumplían las ordenes que se remitían desde la Santa Sede. Sixto V había amenazado con quitar a la inquisición hispana todas sus facultades y a Quiroga su indulto para no residir en su arzobispado, según informaba el cardenal Savello a López de Montoya. Igualmente, el papa le había mostrado su disconformidad con que los asuntos inquisitoriales estuviesen en manos de legos, en referencia directa al conde de Olivares, de lo que el secretario deducía que la pretensión papal era que el Inquisidor General dependiese directamente de su criterio, sin que se recibiese ninguna intervención proveniente de Felipe II (391). Reconocía haber tratado de incentivar al cardenal Deza para que tomase la iniciativa en la congregación en favor de la Inquisición hispana, puesto que sus facultades no eran superiores a las que tenía el Inquisidor General. Por último, aconsejaba que se mantuviese una postura firme, aunque Quiroga debía tratar de escribir con frecuencia al papa para tornarle más propicio (392). El Inquisidor General acogió la recomendación, aunque en la correspondencia que mantuvo en los

(390).- La actitud del nuevo pontífice era expuesta por Martínez Carnacedo en referencia a la conversación que el Conde de Olivares había mantenido en torno a los condenados por el Santo Oficio que huían o apelaban a Roma: "dice que reciben a los que van a confesar para ser absueltos como ovejas perdidas y que dicen que no por ello dificultan la consecución del proceso en las inquisiciones ya que adjuntan sus confesiones completas que los inquisidores pueden ver". El secretario deducía que, como esta práctica no iba a terminar, lo que se debía hacer era castigar a los que volviesen a la Monarquía Hispana (AHN, Inq., leg. 3284, n° 29).

(391).- En este sentido, hemos de señalar, que la actividad de Diego López de Montoya había quedado relegada a un segundo plano por la actuación del embajador, que esgrimía ante Sixto V que si se ocupaba de los asuntos inquisitoriales se debía al encargo que de los mismos le habían hecho y hacían el pontífice y la congregación. Por su parte, el procurador se ocupaba en asuntos de menor importancia, normalmente relacionados con prestar apoyo a diversos clientes de Quiroga en sus peticiones o gestiones en Roma, como eran los casos de Juan Pérez Muñoz, que se ocupaba de negocios referidos a la dignidad arzobispal de Toledo (véase la carta que Quiroga le remitió en octubre de 1585, *Ibid.*, libro 361, fol. 405r-v) y del secretario de la Suprema Pablo García, que trataba de conseguir la expedición gratuita de las bulas sobre la pensión en el obispado de Canarias que le había concedido el rey (*Ibid.*, libro 328, fols. 286r, 326v, 365v-366r).

(392).- *Ibid.*, leg. 3284, n° 33.

meses siguientes con Roma, tanto con el embajador como con los cardenales que conformaban la congregación, no dejó de mostrar su desagrado ante la actitud papal, especialmente referido a que se continuasen admitiendo las reclamaciones de los presos del Santo Oficio (393).

No obstante, Quiroga había aprovechado estas comunicaciones para representar al pontífice la necesidad de que renovase el breve "De fructibus in absentia" por espacio de cinco años, de igual manera que habían procedido sus predecesores. Martínez Carnacedo le había informado de cómo López de Montoya había pedido dicha prorrogación, pero que, aunque el breve estaba escrito, se había detenido su despacho por mandato del papa. La mediación del conde de Olivares había logrado que Sixto V se aviniese a conceder la gracia por espacio de dos años, puesto que consideraba muy grave la falta de servicio que se hacía en las iglesias. Este criterio era compartido por el cardenal Deza, señalando que había un exceso de prebendados en las inquisiciones (394). Todas las gestiones que se realizaron al respecto fueron inútiles, e incluso, con el paso de los meses, la postura de la Santa Sede se fue endureciendo. Así, en febrero de 1587, tanto el secretario como el procurador transmitían al Inquisidor General las pocas expectativas existentes, puesto que el Datario también se había mostrado contrario a la concesión del privilegio, aludiendo a que los prebendados asumían oficios inquisitoriales como manera de librarse de la residencia (395). Sixto V se negaba a firmar la prorrogación en forma de

(393).- En este sentido, véase *Ibid.*, libro 328, fols. 319v-321r, 390v-391r, 421-423r, 437v-438r; AMAE, Santa Sede, leg. 21, fols. 81-85, 89. Por otra parte, hemos de señalar que de poco sirvieron las reclamaciones efectuadas por el Inquisidor General, puesto que este fue uno de los temas centrales que se trataron, en cuanto a los asuntos inquisitoriales, con la embajada en Roma, no solo por parte de Quiroga, sino también por la Suprema y Felipe II en los años sucesivos. Al respecto, véase, *Ibid.*, fols. 17-18, 91, 148-195; AHN, Inq., libro 249, fols. 533r-534v; *Ibid.*, libro 361, fol. 526r.

(394).- AHN, Inq., leg. 3284, n° 33.

(395).- Sobre el cambio acontecido en las cuestiones de la dataría, así como de los que se encargaban de estos asuntos, Quiroga había sido advertido por Martínez Carnacedo en septiembre de 1585: "no tienen mano en las provisiones de beneficios porque se dice que el papa las mete en libro aparte, de donde salen por la suya y muy cargadas de pensiones. No quiere dar ninguna cosa por vía graciosa" (*Ibid.*, n° 28).

breve, sino como una súplica, de manera que lograría una composición, algo a lo que, decidido a detener las negociaciones, se había opuesto el conde de Olivares (396). Por tanto, las dificultades estaban referidas, en última instancia, a una cuestión económica, no al otorgamiento del privilegio, al que el papa no se había negado, aunque por un plazo bienal (397). A pesar de ello, Quiroga insistía en que la introducción de esta novedad representaba un enorme perjuicio, puesto que con anterioridad los pontífices habían cubierto los gastos de la Dataría, dado que el disfrute no estaba referido a las personas, sino al oficio que servían (398). La falta de acuerdo sobre esta cuestión conllevó que se produjese una gran preocupación en la Corte hispana que se fue acrecentando a medida que iba pasando el tiempo. En diciembre de 1589, Felipe II se había dirigido a su embajador para que rogase al papa que efectuase la prorrogación por el tiempo y en la misma forma que se había realizado con anterioridad, sin que en ninguno de estos aspectos se contemplase algún cambio. Debía resaltar la importante función que realizaban los servidores inquisitoriales, nunca comparable con la que cumplía un prebendado en su iglesia y la urgencia que revestía esta diligencia, puesto que, en febrero de 1590, se cumplía la última concesión quinquenal (399). Parece que, finalmente, la actuación

(396).- Ibid., nº 40-41. Sobre el ambiente que había en Roma, refería Montoya: "gran compasión es Sr. Rmo. lo que pasa porque no habiendo dinero no se tiene respeto a cosa y Su Sd. parece que en cuanto dice y hace quiere echar por tierra a la Inquisición, es necesario que de cuenta V.S. Rma. a Su Magd. para que se tomen estas materias de otra manera, el embajador está temeroso, y así acertará mal los negocios y si de allá no viene todo dispuesto agotase aca fácilmente, todos los cardenales están descontentísimos, y la corte tan perdida que nunca tal se ha visto, porque no para hombre en ella, ni se halla un escudo de oro que los tiene en el castillo y hasta juntar cinco millones quiere que se haga de esta manera, no hay quién dé a cambio y dentro de pocos días cerrarán las casa la mayor parte de los mercaderes". Igualmente, se quejaba del comportamiento de Deza, de quien aseguraba que únicamente buscaba obtener beneficios.

(397).- Quiroga escribía al Cardenal Savello, al embajador y a Martínez de Carnacedo mostrando su satisfacción por la prorrogación (Ibid., libro 361, fols. 445r-447v). En relación con el problema surgido, el cardenal Savello había ofrecido su ayuda, "con reserva de lo poco que se puede con el papa". Martínez Carnacedo estimaba que era mejor asentar el asunto en las condiciones que el papa quisiese, por la importancia que tenía para el Santo Oficio, "que si Su Sd. quiere deshacer la Inquisición de España no puede tomar camino más rengible para ello" (Ibid., leg. 3284, nº 42).

(398).- Véanse las cartas que dirigió al Conde de Olivares en AMAE, Santa sede, leg. 21, fols. 137, 140, 145.

(399).- Este asunto se incluyó también entre las cuestiones que el Duque de Sessa debía tratar con el pontífice (AHN, Inq., libro 329, fols. 20v-22r).

diplomática consiguió su objetivo, puesto que esta cuestión no se tornó a suscitar hasta 1594 (400).

La muerte de Sixto V, en agosto de 1590, abrió un periodo de pontificados muy breves -Inocencio IX, Urbano VII y Gregorio XIV- que generaron una situación de vacío de poder en la Santa Sede. En 1592 fue elegido papa Clemente VIII, que ocupó el solio pontificio hasta los primeros años del siglo XVII (401). Esta situación coincidió con el relevo en el cargo de procurador del Santo Oficio, puesto que López de Montoya fue sustituido, en julio de 1591, por el doctor Juan de Hoces, tesorero y canónigo de la catedral de Cartagena (402). Hasta noviembre de 1594, cuando se produjo el fallecimiento de Gaspar de Quiroga, hemos de señalar que las comunicaciones con el nuevo procurador desde la Corte hispana no tuvieron como interlocutor al Inquisidor General sino a la Suprema. Esta cuestión resulta significativa si tenemos en cuenta que, como hemos señalado, por una parte la Santa Sede no reconocía legitimidad jurídica al Consejo de Inquisición que, por otra parte, trató de ampliar su jurisdicción en el último decenio de la centuria en detrimento del Inquisidor General. En octubre de 1593, se instaba a Juan de Hoces desde la

(400).- Por otra parte, esta situación acrecentó la resistencia habitual de las iglesias a acudir con los frutos de sus beneficios a los servidores inquisitoriales. Como en ocasiones precedentes, Quiroga trataba de favorecer a sus clientes. Así, en junio de 1588, escribía al Conde de Olivares cómo el rey había concedido al licenciado Lorenzo Flórez, relator del Consejo, una ración que había sido impetrada por parte de Gregorio de Ayala, que había iniciado el pleito (Ibid., libro 361, fol. 518r, 556r-v; *ibid.*, libro 329, fols. 236v, 270v-271r. AMAE, Santa sede, leg. 21, fol. 90; *Ibid.*, leg. 9, exp. 27, fol. 177). Igualmente, la Iglesia de Ciudad Rodrigo se negaba a pagar al inquisidor de Sicilia Lope Barahona las rentas de su prebenda (AHN, Inq., libro 249, fols. 555r-558v; *Ibid.*, libro 251, fols. 119r, 120r-121v; *Ibid.*, libro 254, fols. 215r-217r).

(401).- Sobre este tema, véase, A.BORRAMEO, "España y el problema de la elección papal de 1592" Cuadernos de Investigación Histórica 2 (1978), pp. 175-204.

(402).- El poder e instrucción otorgados por Quiroga en, *Ibid.*, libro 357, fols. 126v-128r. También se enviaron cartas del monarca y de la Suprema en recomendación del nuevo procurador al papa, a la congregación del Santo Oficio y al nuevo embajador, el duque de Sessa (*Ibid.*, libro 359, fols. 60v-61v; *Ibid.*, libro 251, fols. 129v-130v). Hemos de señalar, que durante este tiempo se había realizado oposición en la Corte hispana a publicar un jubileo otorgado por Inocencio IX por el que cualquier confesor podía absolver del delito de herejía. No obstante, la muerte del pontífice hizo innecesaria la presentación de recursos, aunque, tratado este asunto por Quiroga, Arenillas de Reinoso, García de Loaysa y Diego de Chaves, se advertía que era conveniente permanecer atentos a estas novedades por los inconvenientes que de ello se podrían derivar (*Ibid.*, libro 249, fols. 577v-581v; IVDJ, envío 21 (caja 32), n° 534; *Ibid.*, envío 91 (caja 131), n° 735).

Suprema para que activase las diligencias necesarias para la expedición del breve "De fructibus in absentia" (403). En enero del año siguiente, se insistía sobre esta cuestión, señalando al procurador que el documento no debía contener ninguna excepción en relación con las canonjías doctorales, a pesar de los reparos que al respecto había expresado el pontífice (404). Las gestiones culminaron en el mes de octubre, pidiéndose desde el Consejo que el breve se despachase con la mayor celeridad posible (405).

Por otra parte, los primeros años de Juan de Hoces en el cargo de procurador revistieron menos dificultad y tensión que la que se había generado durante el pontificado de Sixto V, puesto que, junto a la obtención sin dificultades del breve referido, no se suscitaron problemas de cariz jurisdiccional entre el Santo Oficio hispano y la Santa Sede (406).

c.2.El fuero inquisitorial y los conflictos jurisdiccionales

Como hemos señalado con anterioridad, la existencia de una realidad sociopolítica corporativa llevaba implícita la promulgación de estatutos particulares y diferenciados que regían cada uno de los organismos y entidades. En este contexto, cada grupo trató de salvaguardar su ámbito de actuación exclusiva frente al resto, lo que generaba conflictos de competencias. La peculiar combinación jurisdiccional con que contaba la Inquisición posibilitó que, por una parte, aunque dependiese estructural y constitutivamente de las facultades otorgadas por los pontífices al Inquisidor General, la organización pudiese actuar de forma autónoma de la Santa Sede, mientras que, por otra, la conformación

(403).- AHN, Inq., libro 329, fols. 279v-280r.

(404).- Ibid., fol. 305r-v. Las negociaciones se continuaban desarrollando en el mes de junio, Ibid., fols. 336v-337r.

(405).- Ibid., fols. 367r-v.

(406).- Entre 1591 y 1594, hemos encontrado únicamente un caso de remisión de presos (ibid., fol. 257v), así como una ratificación del entendimiento de la Inquisición en materia de solicitud (Ibid., 220v-221r, 327v).

de la Suprema y los importantes privilegios que los reyes hispanos otorgaron a la institución, en consonancia con la orientación política de la Monarquía, significaron la creación de un fuero especial, cuya fortaleza y superioridad respecto al resto de las jurisdicciones existentes se estimaba necesaria para que el Santo Oficio pudiese acometer las funciones que tenía asignadas: la lucha contra la heterodoxia religiosa, y, por ende, el mantenimiento de la estabilidad sociopolítica (407). La Inquisición, en virtud de las facultades delegadas por el papa y por la activa voluntad e impulso de la Corona, se superpuso a los fueros de los reinos, otorgándose a la burocracia que se integraba a su servicio los privilegios e inmunidades derivados de la jurisdicción inquisitorial. No obstante, si bien fueron los poderes emanados de la concesión papal los que permitieron esta actuación, fueron los apoyos que los monarcas prestaron al Santo Oficio los que consagraron la supeditación del resto de los ordenamientos jurídicos, definiéndose así el ámbito donde se iban a desarrollar los conflictos de competencias entre la Inquisición y el resto de jurisdicciones emanadas del rey. Junto a la prohibición de inmiscuirse o pretender el conocimiento de las causas temporales que estuviesen bajo el entendimiento de los inquisidores o de los jueces de bienes confiscados, la Cédula Real despachada en 1553 establecía que las reclamaciones que se hubiesen de efectuar en relación a la actuación de los inquisidores se debía realizar ante la Suprema, sin intervención de otro organismo de la justicia regia, pudiendo el monarca dirimir el conflicto en última instancia. El papel central, en este sentido, se otorgaba al Consejo de Inquisición, que era el que recibía la jurisdicción emanada del rey, no al Inquisidor General, que, por gracia papal, tenía remitida la presentación de apelaciones referidas a las cuestiones espirituales. Aunque el rey conservaba el último control sobre las decisiones adoptadas por la institución inquisitorial, la consolidación del fuero conllevó que, al igual que sucediese con la Santa Sede, el Santo Oficio pudiese actuar con un alto grado de autonomía. Además, la Concordia de 1553 estableció la distinción en cuanto a los privilegios que gozaban los miembros de los

(407).- En torno a estas cuestiones, véase, R. LOPEZ VELA, "Las estructuras administrativas del Santo Oficio", pp. 192-197.

tribunales de distrito, diferenciándose entre oficiales y familiares (408).

El proceso de confesionalización de la Monarquía conllevaba la activación de una serie de actuaciones conducentes a la adecuación de las estructuras, que ya han sido estudiados (409), entre los que se encontraba la reactivación del Santo Oficio como organismo que controlase las desviaciones que de la ortodoxia se pudiesen producir en el seno de la sociedad. Para ello, fue necesario fijar y estructurar a la Inquisición en cuanto institución, definiendo su marco jurisdiccional y los privilegios de que gozaban sus oficiales, todo ello de acuerdo a la composición sociopolítica de la Edad Moderna (410). Este proceso confesionalista estaba incidiendo simultáneamente en la cristalización de las instituciones de la Monarquía moderna, lo que vino a traducirse en una separación entre política y jurisdicción (411). Los consejos fueron concretando su campo jurisdiccional, labor en la que desarrollaban su actividad personas dotadas con una formación específica en esta materia, normalmente letrados (412). Esto conllevó, en el ámbito del Santo Oficio, no sólo la tendencia al perfeccionamiento de la Suprema, sino al establecimiento de una serie de Concordias con el resto de los Consejos que conformaban la Monarquía.

Los conflictos de competencias surgidos entre el Santo Oficio y otros organismos se sucedieron ininterrumpidamente durante el periodo en que Gaspar de Quiroga estuvo al frente de la Suprema. Si bien, evidentemente, estas fricciones estaban íntimamente relacionadas con el surgimiento y devenir de la concepción sociopolítica de la Monarquía, por otra parte, no eran ajenas, en muchas ocasiones, a la pugna de las facciones cortesanas por el ejercicio del

(408).- Sobre la evolución del fuero inquisitorial, véase, *Ibid.*, pp, 197-206.

(409).- Nos remitimos a los aspectos expuestos en el capítulo anterior.

(410).- A.M.HESPANHA, *História das Instituições*, pp, 110ss.

(411).- J.MARTINEZ MILLAN, "Introducción" *La Corte...*, pp, 15-19; *Die katholische konfessionalisierung*, *passim*.

(412).- CH.H.McILWAIN, *Constitucionalismo antiguo y moderno*, p, 110.

poder. El favorecimiento que los reyes hispanos habían procurado a la Inquisición había provocado que apoyasen tradicionalmente al Santo Oficio en estas pugnas jurisdiccionales frente a cualquier otra institución de sus reinos, estando avocada a los monarcas la resolución de dichos pleitos. No obstante, tras la Concordia de 1568, los conflictos pasaron a dirimirse de forma singularizada entre la Inquisición y el otro organismo en liza, dando lugar a diversas soluciones, aunque la Corona debía intervenir como último recurso si no lograban un entendimiento entre ambas. En lo concerniente al Consejo Real y a los servidores dependientes de él, la resolución que se adoptó fue reunir dos representantes de cada institución para que alcanzasen un acuerdo en cada caso (413). En este sentido, una Cédula Real, fechada en 1567, establecía la pertenencia de dos miembros del Consejo de Castilla a la Suprema, estipulándose su asistencia a las sesiones que se celebraban durante la tarde, donde se dirimían los asuntos generales de actuación inquisitorial y de matiz político, mientras que durante la mañana, contando con la presencia del Inquisidor General, se tratarían las materias referidas a asuntos religiosos (414). No obstante, estos dos consejeros que formaban parte de ambas instituciones, estaban inhabilitados para integrar el cuarteto que se ocupase de clarificar los diversos y numerosos conflictos de jurisdicción surgidos entre ambos organismos, siendo estos designados entre sus otros miembros. Así, en marzo de 1574, el Inquisidor General informaba al rey del contencioso que había surgido entre el familiar Antonio Gómez y el corregidor de Burgos, en el que ambos habían obrado excediendo sus atribuciones. La junta que se debía

(413).- J.MARTINEZ MILLAN, "Los problemas de jurisdicción del Santo Oficio: "La Junta Magna" (1596)" Hispania Sacra (1985), pp. 220-221.

(414).- J.MARTINEZ MILLAN y T.SANCHEZ REVILLA, "El Consejo de Inquisición (1483-1700)" Hispania Sacra 73 (1984), pp. 88-89; F.BARRIOS, "Relaciones entre Consejos: los consejeros de Castilla en la Suprema. Notas para su estudio" Perfiles jurídicos de la Inquisición española. Madrid 1989, pp. 573-581. Así, en julio de 1575, Mateo Vázquez escribía al rey: "para la sobrecédula de Inquisición se juntaron con los del Consejo de Inquisición los dos del Consejo Real que lo son también del de Inquisición y demás de ser sobrecédula de otras, podría V.Mt. siendo servido, ver por la decisión la justificación dellas" (IVDJ, envío 53 (caja 69) nº 127); Igualmente, en mayo de 1576, el secretario refería al monarca: "El despacho de Roma que ayer dió el nuncio a V.Mt. se vió esta mañana en el Consejo de Inquisición y parecióles que se quedase para esta tarde el decir sus pareceres por haberse de hallar también los dos del Consejo Real que son del de Inquisición" (ibid., nº 105).

celebrar entre los miembros de la Suprema y del Consejo de Castilla se estaba retrasando a consecuencia de la enfermedad del licenciado Pedro Gasco, muy afectado además por su reciente viudez, y que había sido designado por el rey para asistir a la misma. Quiroga proponía al rey que para que esta contingencia no afectase de forma inconveniente a la celebración de la reunión, los asistentes podrían ser Hernando de Vega y Pedro Velarde, puesto que importaba que estas cuestiones se resolviesen con la mayor brevedad posible para que el Santo Oficio no sufriese el menoscabo de su autoridad (415). No obstante, en octubre del mismo año, Mateo Vázquez se dirigía al monarca en relación a los problemas surgidos entre el Consejo de Navarra y los inquisidores del tribunal de Logroño, y la inconveniencia de que las juntas se dilatasen por la enfermedad de Antonio de Padilla, puesto que los miembros del mismo se encontraban excomulgados. Felipe II determinó que Quiroga y el presidente del Consejo Real les escribiesen y reprendiesen su actitud, ordenándoles que solicitasen la absolución por procurados, petición que debía ser admitida por los inquisidores (416). Paralelamente, se había generado un conflicto de competencias en relación a la prisión de un servidor del Santo Oficio por parte de los jueces de la junta de población que actuaba en Granada, que, de la misma manera, se resolvió con toda brevedad (417).

Sin embargo, hemos de significar que, los años setenta no revistieron una conflictividad excesiva, dándose una rápida solución a aquellos problemas que se produjeron, aunque sí resulta conveniente señalar algunos casos concretos por su significación. Evidentemente, el problema de las competencias surgía con mayor frecuencia con las autoridades e instituciones de la Corona de Aragón. Si

(415).- Sobre dicho asunto, véase, BL, Eg. 1506, fols. 16 y 18-20. Tras mostrar su conformidad con la elección de los consejeros realizada por Quiroga, Felipe II respondía: "Yo daré prisa a estas competencias por que cierto es muy necesario para todo, y que por todas partes se procuren desinchar y atajar cuanto sea posible/ y las cosas del Santo Oficio favorecé yo y aunque siempre entiendo como entiendo las causas y obligación que hay para ello y más en mi bien nadie".

(416).- IVDJ, envío 53, fols. 122v-123r; J.SIMON DIAZ, "La Inquisición de Logroño", pp. 90-93.

(417).- AZ, carp. 144, n° 17; IVDJ, envío 53, fols. 126v-127r. Por otra parte, los mayores problemas, en este sentido, no los tuvo el tribunal inquisitorial con la junta de población, sino con la Chancillería. Sobre esta cuestión, véase, Ibid., fols. 156, 162-163, 173.

bien en estas actuaciones se vieron involucradas diversas instancias (418), especial relevancia adquirieron las relaciones que los distintos tribunales inquisitoriales mantuvieron con los virreyes, no siendo ajeno a las mismas, además de las consideraciones realizadas con anterioridad, la adscripción del virrey a una determinada facción cortesana. Mientras que entre el conde de Sástago y el tribunal sito en Zaragoza surgió alguna diferencia, aunque sin que existiese una tensión específica, al igual que sucediese en Mallorca (419), un talante distinto tuvieron los conflictos que se desarrollaron con el virrey de Valencia, Vespasiano Gonzaga, y con el virrey de Sicilia, Marco Antonio Colonna.

El nombramiento de Gonzaga como virrey de Valencia, cargo que ejerció entre 1575 y 1578, no fue bien acogido por diversos personajes en la Corte (420). Su labor se centró en establecer una fuerte vigilancia y fortificar las costas en relación con el problema morisco y los ataques realizados por los corsarios berberiscos (421). No obstante, fue precisamente en referencia al tratamiento de la cuestión morisca donde surgieron los conflictos de competencias con los inquisidores del tribunal de Valencia. Gaspar de Quiroga, siguiendo un mandato regio, expresó la opinión que tenía en este tema a Felipe II, en julio de 1577, señalando que el virrey estaba introduciendo diversas novedades en el entendimiento de un asunto en el que estaban interesadas ambas jurisdicciones, sin tener las consideraciones convenientes con los inquisidores desde que había accedido a la gobernación del reino. Quiroga apuntaba que había presionado tanto a él mismo como a la Suprema para lograr

(418).- Sobre los conflictos jurisdiccionales surgidos entre la Inquisición y los regentes del Consejo de Aragón, véase, por ejemplo, RAH, "Salazar" A-49, fols. 185-188; BL., Eg. 1506, fol. 36. En cuanto al Principado de Cataluña, IVDJ, envío 53 (caja 69), n° 118; Ibid., envío 55 (caja 72), n° 242.

(419).- En este sentido, véase, Ibid., n° 29; Ibid., envío 8 (III), caja 13, fol. 169.

(420).- El propio Vespasiano Gonzaga era consciente de ello, como quedó reflejado en la carta que remitió a Felipe II poco después de su designación. Aludía a que la causa era la envidia y su naturaleza italiana, refiriendo al rey las razones de su enemistad con el duque de Alba, el de Medinaceli, el conde de Chinchón y el secretario Gaztelu (Ibid., envío 10 (caja 18), n° 391).

(421).- J.MATEU IBARS, Los virreyes de Valencia. Valencia 1963, pp. 143-145.

liberar a unos moriscos procesados para favorecer a uno de sus criados. Ante la negativa recibida, había hecho instancia en el Consejo de Aragón, que declinó intervenir en las actividades del Santo Oficio. En opinión del Inquisidor General, la presión ejercida por el virrey estaba motivada por otras razones, pero, en ningún caso, se debía permitir que la autoridad del Santo Oficio se viese desfavorecida (422). Así pues, Quiroga aludía a que el problema jurisdiccional surgido entre ambas instancias era un reflejo de la pugna mantenida en la Corte por las distintas facciones por acrecentar su influjo y poder. La vinculación del virrey al secretario Mateo Vázquez condicionó que las relaciones que Vespasiano Gonzaga mantuvo con los miembros del "partido papista" no fuesen muy amistosas, solicitando en diversas ocasiones a su protector que su correspondencia no pasase por manos de Antonio Pérez, hacia quien tenía una especial desconfianza, mostrando desagrado y agravio respecto a la provisión recibida por Marco Antonio Colonna como virrey de Sicilia, y calificando de "triunvirato" la influencia que sobre el ánimo regio tenían las opiniones expresadas por Antonio Pérez, Gaspar de Quiroga y el marqués de los Vélez (423). Por su parte, Mateo Vázquez no dudó en disculpar la actuación del virrey ante Felipe II, alegando que eran los inquisidores de Valencia los que se extralimitaban en sus actuaciones (424). Por tanto, la pugna entre el tribunal inquisitorial y el virrey se mantuvo hasta que éste fue relevado del cargo, encrespándose, en los últimos meses que ocupó el mismo, los tensos contactos que mantenía con la facción "papista" (425).

Un caso diferente fue el acontecido con Marco Antonio Colonna, virrey de Sicilia. Cuando accedió a hacerse cargo de su nuevo oficio, el tribunal

(422).- BL., Eg. 1506, fol. 63r-v.

(423).- En torno a estas cuestiones, véase, IVDJ, envío 10 (caja 18), n° 403, 450, 455.

(424).- AZ, carp. 144, n° 409.

(425).- Gonzaga se quejaba amargamente a Mateo Vázquez de la falsedad de los rumores que Antonio Pérez había hecho correr por la Corte, por los que Vespasiano descalificaba gravemente a Quiroga, el marqués de los Vélez y el príncipe de Melito (IVDJ, envío 15 (paquete 1), n° 10; Ibid., envío 89 (caja 125), n° 199.

inquisitorial había sido objeto de una renovación (426). Desde el comienzo, los incidentes entre los inquisidores y el virrey se sucedieron de forma continuada, generándose un conflicto que se prolongó a lo largo de los años (427). La gravedad de la situación hizo que Colonna recurriese al monarca, solicitando su mediación para que los ámbitos de influencia de ambas jurisdicciones quedase regulado a través de una Concordia (428). No obstante, este problema entre el virrey y los inquisidores de Sicilia vino a coincidir con la pugna que las facciones cortesanas desplegaron para asumir el control del Consejo de Italia ante las vacantes producidas en su secretaría y presidencia en 1578. Si bien sobre esta cuestión volveremos más adelante, hemos de señalar que Colonna buscó en Mateo Vázquez la ayuda que precisaba para salir victorioso de sus enfrentamientos con la Inquisición, puesto que Antonio Pérez se encontraba vinculado a Gaspar de Quiroga, habiendo mostrado el

(426).- Esta fue consecuencia de los resultados de la visita realizada por Antonio Mauricio de Pazos. En torno a la misma, véase, I.J.EZQUERRA REVILLA, op. cit., pp. 278-279. Revocado el poder del embajador Carvajal, el tribunal permanecía con un único inquisidor, Bernardino Gasco, que, por iniciativa de Mateo Vázquez, era propuesto para el obispado de Girgento. Quiroga aprovechaba esta situación, en octubre de 1576, para solicitar al monarca el nombramiento de tres inquisidores para dicho tribunal, así como una merced para el licenciado Peñaranda, fiscal. Felipe II apuntaba que uno de ellos podría ser el licenciado Juan de Rojas, inquisidor de Valencia, que le había sido recomendado desde el Consejo de Italia (BL., Eg. 1506, fols. 48-49). Meses después, tanto Carvajal como Gasco resultaron castigados por las culpas que arrojaba la visita en su contra, aunque Quiroga comunicaba al rey, en mayo de 1577, que "teniendo respeto a su honor y principalmente al del Santo Oficio yo tengo intención de ocuparlos acá en otras inquisiciones" (ibid., fols. 54r, 58r-v). Así, en 1577, recibieron nombramiento como inquisidores de Sicilia Juan de Rojas, y el licenciado Diego de Ahedo, proveniente del tribunal de Zaragoza (AHN, Inq., libro 357, fols. 32v-33r). A ellos se unió, en 1578, el licenciado Juan de la Peña (Ibid., fols. 54v-55r), y un nuevo fiscal, el doctor Diego Beltrán (Ibid., fol. 39v).

(427).- Por otra parte, esto no constituía ninguna novedad, puesto que, como explicaba el propio inquisidor Carvajal, su relevo había sido propiciado por los enfrentamientos mantenidos con los representantes de la jurisdicción real (Ibid., leg. 2479 (caja 1ª), n° 32). Por su parte, Quiroga informaba al monarca como, utilizando la información recogida en la visita efectuada por Pazos, se habían tomado algunas medidas respecto a estos conflictos (Ibid., libro 284, fol. 93). Sobre los problemas jurisdiccionales entre los inquisidores y el virrey de Sicilia, véase, M.RIVERO RODRIGUEZ, El Consejo de Italia..., pp. 229-241.

(428).- Felipe II instó en diversas ocasiones al Inquisidor General, en los primeros meses de 1578, para que tratase de apaciguar los ánimos y pusiese paz en el conflicto, evitando así su intervención (IVDJ, envío 55 (caja 72), n° 29; AZ, carp. 144, n° 395, 408).

Inquisidor General un decidido apoyo a los inquisidores sicilianos (429). La opción tomada por Colonna le permitió continuar ostentando el cargo de virrey, puesto que Mateo Vázquez ejerció toda la presión posible para tratar de apartar a los individuos vinculados a Antonio Pérez y a Quiroga en el Consejo de Italia, formándose, de forma paralela, a comienzos de 1579, la junta que debía encargarse de los problemas jurisdiccionales surgidos en Sicilia, compuesta por los licenciados Fernández Temiño y Salazar de la Suprema y los regentes Ramondetta y Carvajal del Consejo de Italia, que además se debía ocupar de la provisión de las vacantes producidas en el mismo (430). El arresto de Antonio Pérez, en junio de dicho año, significó la caída en desgracia del resto de los componentes del "partido papista". Sólo unos días después, el licenciado Quintanilla recibía el engargo de realizar una visita a la Inquisición de Sicilia, mientras que la secretaría del Consejo de Italia recaía en Gabriel de Zayas, y la presidencia en el Cardenal Granvela. Quiroga era relegado a su arzobispado toledano en marzo de 1580, pasando a reunirse en casa del Presidente de Castilla los miembros de la junta que trataba sobre los problemas jurisdiccionales de Sicilia (431). Si bien la publicación de la Concordia de julio de 1580 o de Badajoz significaba el triunfo de aquellos que habían apoyado la supremacía jurisdiccional del fuero inquisitorial frente a las facultades del virrey, el cambio producido en la Corte con el ascenso del "partido castellanista", y, en concreto, en el Consejo de Italia, terminaron por favorecer los intereses de Marco Antonio

(429).- Sobre el acercamiento de Marco Antonio Colonna a Mateo Vázquez, así como las causas que lo motivaron, véase, M.RIVERO RODRIGUEZ, "El servicio a dos Cortes...", pp. 368-371; Idem, "Luis II Enríquez, la crisis cortesana de 1579 y el gobierno de Sicilia" Tra Spagna e Sicilia: La Contea in Età Moderna (En prensa).

(430).- Idem, El Consejo de Italia..., pp. 248-264. A lo largo de 1579, Colonna insistía en su correspondencia tanto con Mateo Vázquez como con el rey en que se debía alcanzar un acuerdo firme y duradero que devolviese la gobernabilidad al reino. Por otra parte, refería al monarca como Quiroga le había amenazado "que me sucedería peor que a Vespasiano", y como estaba poniendo a las élites locales en su contra (IVDJ, envío 80 (caja 106), n° 664).

(431).- Véanse las cartas que Arenillas de Reinoso remitió a Mateo Vázquez al respecto (AHN, Inq., leg. 3285, n° 3-4, 7). Por su parte, Quiroga iniciaba su intento de acercamiento a Vázquez, mostrando un gran servilismo, destacando la labor que estaba efectuando para que la junta siguiera celebrándose y en defensa de la autoridad del Santo Oficio (IVDJ, envío 91 (caja 130), n° 293, 298; Ibid., envío 89 (caja 125), n° 209).

Colonna (432). Para lograr anular los efectos de dicha Concordia, el virrey desarrolló un comportamiento de indiferencia y desobediencia ante los requerimientos del Santo Oficio de forma calculada y aplicacada para que los inquisidores no pudiesen actuar en su contra con armas jurídicas, sin que tampoco lograsen evitar sus consecuencias. Junto a ello, desplegó una serie de actuaciones y subterfugios legales con el objetivo de contrarrestar las disposiciones de la Concordia de 1580, aunque, finalmente, fueron dos Cédulas Reales, fechadas en junio de 1581 y noviembre de 1582, las que terminaron con la preeminencia del fuero inquisitorial fijado en la misma (433).

Por otra parte, en la segunda mitad de la década de los ochenta se abría un periodo de mayor conflictividad en cuanto a la generación de problemas de competencias entre el Santo Oficio y las justicias civiles, que hemos de entender dentro del cambio político en la gobernación y orientación de la Monarquía. El 4 de noviembre de 1585, Gaspar de Quiroga refería a Mateo Vázquez como en la Suprema se habían revisado los capítulos elaborados por las Cortes de Monzón. De ello se derivaban bastantes divergencias con la Concordia establecida en 1568, resultando muy perjudicada la autoridad y el ejercicio de la actividad inquisitorial. El Inquisidor General proponía que el rey remitiese la resolución de este asunto a Madrid, comprometiéndose a enviar un visitador a las inquisiciones de los tres reinos para que se castigasen los excesos que se hubiesen cometido. No dejaba de señalar que lo que se pretendía por parte de los brazos era imponer la ley que emanaba de ellos, obligando a su cumplimiento a los inquisidores, que quedarían sujetos a las mudanzas que sobre la misma se hiciesen, con lo que no podrían desempeñar su labor (434). Por mandato regio se reunieron el consejero de Inquisición Juan de Zúñiga y el regente

(432).- AZ, carp. 141, n° 23; AHN, Inq., libro 251, fols. 98r-102r; Ibid., libro 327, fol. 278v; M.RIVERO RODRIGUEZ, El Consejo de Italia..., pp. 264-268.

(433).- Ibid., pp. 277-290; Idem, "El servicio a dos Cortes..." pp. 372-374; AHN, Inq., leg. 5054 (II), exp. 32.

(434).- AZ, carp. 135, n° 23-24. En su respuesta, Mateo Vázquez apuntaba que el rey había mostrado su acuerdo con lo expresado por Quiroga, "si los reinos quisiesen guardar la concordia del año sesenta y ocho con que también la guardasen las inquisiciones no se podría dejar de venri en ello, se llava fin a apuntarles cerca desto lo que conviene" (IVDJ, envío 62 (caja 84), n° 817).

Quintana, del Consejo de Aragón, para examinar las peticiones realizadas concretamente por los brazos del Principado de Cataluña. Igualmente, como había ofrecido Quiroga, Francisco de Ribera, consejero de la Suprema electo obispo de Segovia, se trasladó a Barcelona para visitar el tribunal inquisitorial y escuchar las querellas que se presentasen contra el proceder de los inquisidores. Según informaba la Suprema a Felipe II, en septiembre de 1588, se había solicitado la reforma de los capítulos primero y último de la Concordia de 1568. El que ocupaba el primer lugar estaba referido al número de familiares que podía haber en la ciudad de Barcelona, así como en otras poblaciones, intentando una reducción, y su desaparición de los lugares con menos de doscientos fuegos o sujetos a señorío seglar o eclesiástico. El postrero disponía que, en los casos de competencia jurisdiccional entre la justicia real y la Inquisición, se debían concordar el regente y el inquisidor más antiguo, remitiéndose el acuerdo alcanzado a la Suprema y al Consejo de Aragón. No obstante, querían que se nombrase una persona que, en el supuesto de que no se alcanzase el entendimiento, revisase la causa según las leyes de Cataluña. Si no procurase una solución en treinta días, el asunto quedaría encomendado a la justicia seglar. Tanto Quiroga como el Consejo de Inquisición estimaban que de ninguna manera se debían permitir cambios en la Concordia, apuntando que muchos familiares habían abandonado esta ocupación a causa de la prohibición fijada en las Cortes de Monzón de que ocupasen oficios de gobierno en sus lugares de residencia (435).

En este sentido, hemos de señalar que, desde que Gaspar de Quiroga accedió al cargo de Inquisidor General había tratado de establecer un fuerte control sobre los familiares del Santo Oficio. Para mantener la actuación de los mismos en los márgenes correspondientes y evitar que se produjesen comportamientos abusivos aprovechando su adscripción al fuero inquisitorial, Quiroga recogía las denuncias y castigaba a los culpados si se probaba la veracidad de las quejas que se producían respecto a los excesos cometidos por

(435).- AHN, Inq., libro 328, fols. 425r-427v; C.RIBA GARCIA, El Consejo Supremo de Aragón en el reinado de Felipe II. Madrid 1915, p. 24.

dichos oficiales (436). La preocupación que se albergaba para que se realizase una acertada elección de estos servidores hizo que tanto el Inquisidor General como la Suprema instasen a los inquisidores, a través de provisiones, para que se designase por tales a personas llanas y pacíficas, aunque el propio Quiroga reconocía que, a pesar de la meticulosidad con la que se actuaba, era inevitable que se errase en algunas ocasiones (437). En este sentido, la actuación delictiva de algunos familiares provocó diversos conflictos de competencia jurisdiccional entre la Inquisición y otras instituciones de la Monarquía, lo que tuvo como consecuencia que se firmasen Concordias al respecto en 1580, 1582 y 1592 (438). No obstante, Quiroga y la Suprema también procuraron que no se viesen desfavorecidos en cuanto a la merma de sus privilegios y exenciones, puesto que éstos se estimaban convenientes para que pudiesen ejercer sus funciones (439).

(436).- Véase, por ejemplo, AHN, Inq., libro 578, fol. 121v. Prueba del interés que Quiroga ponía en estos aspectos fue la carta que remitió al monarca el 16 de julio de 1574. Agradecía al rey la merced hecha al Santo Oficio mandando remitir a un familiar de Plasencia a la inquisición de Llerena para que fuese castigado y privado de su familiatura. "No puedo dejar de sentir q ayan informado a VMd q en numero de los familiares aya habido exceso hasta aqui por ser cosa muy lejos de lo q pasa porq en Castilla en cada pueblo hay numero de los familiares que puede haber y en el ayuntamiento tienen lista de cuantos y quienes son y fuera de aquellos no hay mas ni aunque los hubiese gozarían en la Corona de Aragón se podra VMd acordar que por la visita q hizo el obispo de Segorbe siendo inqor gñal el cardenal Espinosa se quitaron muchos familiares y se redujeron a cierto honesto numero y no sabemos que despues aca aya avido exceso". El rey respondía al margen del documento: "no me han informado que ahora aya desorden y por lo pasado todos sabemos que lo ha habido y muy grande y yo os certifico que en Valencia yo lo ví por mis ojos / pero en vro tiempo yo estoy muy cierto q no lo habrá y así os lo encomiendo" (BL, Eg. 1506, fol. 21).

(437).- Ibid., fol. 22; Quiroga expresó en diversas ocasiones la inconveniencia de que las familiaturas recayesen en caballeros, puesto que, según su opinión, estos sólo buscaban adquirir la exoneración de la justicia y el goce del fuero inquisitorial (Ibid., fol. 32r-v; AZ, carp. 144, nº 313; IVDJ, envío 91, fol. 340; L.CABRERA DE CORDOBA, op. cit., p. 168).

(438).- J.MARTINEZ MILLAN, "Los problemas de jurisdicción del Santo Oficio..." pp, 213-218; P.FERNANDEZ ALBALADEJO, Fragmentos de Monarquía. Madrid 1992, p. 108; R.LOPEZ VELA, "Las estructuras administrativas..." pp, 204-218; IVDJ, envío 91, nº 319.

(439).- Sobre estas cuestiones, véase, IVDJ, envío 89 (caja 125), nº 204. Quiroga estimaba respecto al comportamiento de los familiares que "muchas veces se quejan los oficiales reales sin razón" (Ibid., envío 91, nº 341). En noviembre de 1583 tuvo lugar una junta entre dos miembros del Consejo Real y dos de la Suprema para discutir sobre la prorrogación de la exención de alojamiento de soldados y repartimiento de bagajes, consiguiéndose la misma (AZ, carp. 147, nº 204-207; IVDJ, envío 56 (caja 75), paquete 6, nº 20).

Los intentos de modificar la Concordia de 1568 por parte de las Cortes de Aragón, celebradas en 1585, se vieron acompañados por un incremento de los conflictos jurisdiccionales entre la justicia real y el Santo Oficio (440). Esta ofensiva era percibida por la Suprema, desde donde se rogaba al rey que no permitiese que la Inquisición perdiese su reputación, así como su capacidad de requerimiento y actuación como fruto de la misma (441). Las relaciones se fueron tornando cada vez más dificultosas (442), por lo que, a finales de 1587 se comenzó a reunir una junta que debía procurar dirimir las diferencias existentes. No obstante, en la composición de la misma, formada en principio por fray Diego de Chaves, Pedro Portocarrero, Juan Fernández Cogollos, Alonso Núñez de Bohorques y Junco de Posada, habían quedado excluidos tanto Gaspar de Quiroga como el Presidente del Consejo Real, el conde de Barajas. Si bien sobre esta cuestión incidiremos más adelante, puesto que este relegamiento estaba directamente relacionado con la evolución de las facciones cortesanas, hemos de señalar que las protestas efectuadas por el Inquisidor General, en torno a que un asunto inquisitorial se tratase sin su presencia, provocaron que tanto Quiroga como Barajas fuesen incluídos en la misma, que se celebró en la celda del confesor real (443). Sin embargo, parece que una vez solucionados conflictos que se habían suscitado en los últimos tiempos, la junta interrumpió las sesiones. Felipe II insistió ante el Presidente del Consejo Real

(440).- Son innumerables los ejemplos que se podrían referir en torno a estos años. Sirvan, por la distinta procedencia del conflicto, los que se encuentran en *Ibid.*, envío 55 (caja 72), nº 132; *Ibid.*, envío 91, nº 295; AZ, carp. 146, nº 216-217; *Ibid.*, carp. 147, nº 54-56; AHN, Inq., libro 328, fols. 301v-302v. En este sentido, uno de los casos más significativos fue el pleito que generó la prisión de Paulo Jordam, familiar del Santo Oficio en Tortosa, por parte de la justicia real (*Ibid.*, fols. 384v-387r; AZ, carp. 147, nº 228; C.RIBA GARCIA, El Consejo..., pp. 123-124). Si bien los contenciosos con la justicia real eran los más frecuentes, también se producían con otras instituciones, como con el cabildo municipal y la capilla real de Granada. En el primer caso referido a la incompatibilidad de oficios, y en el segundo, a cuestiones de protocolo (IVDJ, envío 8 (II), caja 13, s.f.; *Ibid.*, envío 89 (caja 125), nº 27; A.A.RUIZ RODRIGUEZ, op. cit., pp. 40-41; R.DE LERA GARCIA, op. cit., pp. 302-341).

(441).- Véase el billete remitido por Francisco Dávila en agosto de 1586 (AZ, carp. 126, nº 213).

(442).- IVDJ, envío 55 (caja 73), nº 196.

(443).- *Ibid.*, nº 1, 3, 134; AZ, carp. 143, nº 11. Por otra parte, en estos días de enero de 1588, Junco de Posada se encontraba enfermo, decidiendo el rey que, en caso de que estuviese impedido para asistir a la junta, fuese sustituido por Antonio Matos de Noroña.

sobre la conveniencia de que se reanudasen los encuentros, dado que lo que se trataba de conseguir era una solución definitiva, fijándose los límites de las competencias de cada una de las jurisdicciones para que no se volviesen a generar problemas (444). Obedeciendo el mandato regio, en agosto de 1588, la junta retomó su actividad, abordando también la cuestión referida a la declaración de las preeminencias que debían gozar los oficiales y familiares del Santo Oficio, tanto jurisdiccionales como referidas a otro tipo de exenciones y privilegios. En cuanto a la conformación de la junta, Quiroga había expresado reiteradamente sus quejas, puesto que de sus siete integrantes, contando con que Diego de Chaves había sido sustituido por Rodrigo Vázquez de Arce, había solamente dos, el propio Quiroga y Junco de Posada, pertenecientes a la Suprema, dado que el resto, aunque habían formado parte del Consejo de Inquisición, como el Inquisidor General expresaba, se encontraban más inclinados a favorecer las pretensiones del Consejo Real. Quiroga solicitaba que, si Felipe II insistía en mantener a los designados, se permitiese a Diego de Chaves asistir para que con mayor facilidad se pudiese consultar las dudas que surgiesen al rey (445). Por su parte, el monarca accedió a ello, pero estimaba que los miembros de la junta no debían exceder de ocho, puesto que aumentar los nombramientos equivaldría a inutilizarla. No obstante, las disputas por definir quiénes iban a ser convocados se prolongaron durante los meses siguientes, considerándose esencial el equilibrio entre la procedencia de sus integrantes para asegurar la justicia del resultado, pero también significando un importante reflejo de la pugna existente en la Corte entre las distintas facciones, cuestión sobre la que volveremos más adelante (446).

Parece que la lucha cortesana por el control de la junta atrajo más el

(444).- Véase la carta que el monarca remitió al conde de Barajas en junio de 1588 (Ibid., carp. 141, n° 160).

(445).- La memoria que Arenillas de Reinoso remitió a Mateo Vázquez en este sentido en, Ibid., carp. 143, n° 157. Sobre el protagonismo que adquirió Rodrigo Vázquez de Arce desde que comenzó a ocuparse de estos asuntos, véase, Ibid., carp. 146, n° 220; IVDJ, envío 55 (caja 73), n° 57.

(446).- En torno a estas cuestiones, véase, AZ, carp. 143, n° 155-156; Ibid., carp. 141, n° 187-190.

interés que la obtención de soluciones, puesto que en los años siguientes, hasta que se produjo el fallecimiento de Gaspar de Quiroga en 1594, los conflictos jurisdiccionales se siguieron produciendo de igual manera, retornándose a la práctica, en 1590, de reunirse dos miembros de cada Consejo en liza para dirimir el pleito, habiendo producido la junta únicamente unos apuntamientos como resultado (447). La irresolución de la problemática, no sólo referida a los pleitos de competencias derivados de la actuación de las distintas justicias, sino también relacionada con las exenciones y privilegios que gozaban los servidores inquisitoriales (448), provocó que, pocos días después de morir Gaspar de Quiroga, aunque siguiendo sus recomendaciones, se volviese a plantear la necesidad de conformar una junta que efectuase una reglamentación general que evitase que se continuasen generando conflictos de competencias (449).

6.2.2 Consejero de Estado

Desde abril de 1572 se venía desarrollando en los Países Bajos una revuelta que, durante los primeros meses de su evolución, pareció posible controlar a través de la actuación armada dirigida por el gobernador de dichos territorios, el Duque de Alba. Además, la teórica recuperación de las buenas

(447).- En marzo de 1590, Mateo Vázquez refería a Felipe II los problemas surgidos con el virrey y el Consejo de Navarra en torno al asiento que se debía dar al inquisidor que acudía a visitar Pamplona. El secretario proponía que "para no entrar en embarazos de nominación de muchos consejeros", se podrían juntar Quiroga, el conde de Barajas, Rodrigo Vázquez de Arce y Diego de Chaves (Ibid., carp. 143, n° 257-258). A los mismos se remitió la competencia surgida entre la audiencia de Granada y la inquisición de Córdoba (IVDJ, envío 55 (caja 73), n° 61). Sin embargo, en esta misma fecha, Quiroga y la Suprema designaban a Juan Alvarez de Caldas y a Juan de Zúñiga para que junto con dos miembros del Consejo Real se ocupasen del conflicto surgido entre los inquisidores de Valladolid y los alcaldes del crimen de la audiencia de dicha ciudad sobre el delito que se imputaba a Asensio de Arévalo, barbero del tribunal inquisitorial (Ibid., envío 8 (III), caja 13, fol. 200).

(448).- En torno a estas cuestiones, relativas a la falta de respeto a lo establecido en la Concordia de 1592 sobre los familiares, así como los nuevos enfrentamientos con los virreyes, véase, Ibid., envío 92 (caja 133), n° 1, fols. 110-111, 195; AZ, carp. 141, n° 195, 222; AHN, Inq., libro 284, fol. 58r; Ibid., libro 329, fol. 218r. No obstante, Quiroga continuó ejerciendo un ferreo control sobre los familiares, no dudando en castigar y excluir del fuero a aquel que hubiese delinquido (IVDJ, envío 63 (caja 85), fol. 239v).

(449).- Ibid., envío 92 (caja 133), n° 220.

relaciones con la Inglaterra de Isabel I y el descalabro sufrido por los hugonotes franceses, tranquilizaba el ánimo de Felipe II ante la improbabilidad de que los rebeldes recibiesen apoyo exterior, lo que motivó que su interés se siguiese centrando principalmente en la detención del expansionismo turco en el Mediterráneo (450). El fracaso de la política del Duque de Alba para sofocar la rebelión motivó su sustitución en el gobierno de los Países Bajos por Luis de Requesens en enero de 1573, que abandonaba así su cargo en Milán (451).

Esta situación venía a coincidir con una profunda renovación del Consejo de Estado, mermado por la conjunción de muertes acaecidas en dicho año. Así, junto al prior Antonio de Toledo, al duque de Francavilla y a los secretarios Antonio Pérez y Gabriel de Zayas, Felipe II dió cabida en dicha institución, en noviembre de 1573, a dos nobles, el marqués de Aguilar y el Conde de Chinchón, junto a tres letrados, Diego de Covarrubias, presidente del Consejo Real y obispo de Segovia, Andrés Ponce de León, personaje cercano a Luis de Requesens, junto a quien había servido en Milán, y a Gaspar de Quiroga, Inquisidor General y obispo de Cuenca. Igualmente, poco después se sumaba el Duque de Medinaceli a la composición del organismo, que quedaba completado con la llegada del duque de Alba en el verano de 1574 (452).

(450).- En torno a la problemática existente en Flandes, Holanda y Zelanda, véase, G.PARKER, El ejército de Flandes y el Camino Español Madrid 1976; *Ibid.*, España y los Países Bajos. 1559-1659. Diez estudios. Madrid 1986; *Ibid.*, España y la rebelión en Flandes. Madrid 1989; A.W.LOVETT, Philip II and Mateo Vázquez..., pp. 39-48.

(451).- El nombramiento de Requesens no fue bien acogido por el Duque de Alba ni por el propio interesado, que trató de evitar por todos los medios a su alcance esta misión. Sin embargo, se vió obligado a cumplir con la orden regia, haciendo su entrada en Bruselas en noviembre del mismo año (CODOIN, Vol.102, pp. 352-355). En los meses precedentes escribía a su hermano Juan de Zúñiga mostrando su pesar por la ocupación asignada y refiriendo: "como otros señores tienen criados para que les ganen amigos los tiene el comendador mayor para que se los hagan perder digolo por que estando nosotros en Peñaranda pasó por aquí el obispo de Cuenca que iba a la Corte y no se hizo con el cumplimiento ninguno como no se hace con otras personas principales (...)y a todos les parece que estaría esta encomienda mejor arrendada que no como está". (IVDJ, envío 81 (caja 109) n° 290); J.M.MARCH, El Comendador Mayor..., pp. 311-330.

(452).- M.J.GOUNON-LOUBENS, Essais sur l'administration de la Castille au XVI^e siècle. París 1860, pp. 161-162; E.ALBERTI, Le relazioni degli ambasciatori veneti al senato durante il secolo decimosesto. Firenze 1861, Serie I, Vol. IV, p. 254; S.FERNANDEZ CONTI, Los Consejos de

Tras la toma de contacto con tan enjudioso asunto, los consejeros se apartaron de la postura mantenida por el duque de Alba, caracterizada por su inclinación a adoptar medidas de fuerza sobre los sublevados y apaciguar la rebelión por medio de las armas, para significar la necesidad de negociar y otorgar algunas concesiones que terminasen con un conflicto bélico que tenía un coste demasiado elevado para la dificultosa situación que atravesaba la economía de la Monarquía (453), aunque, en ningún caso, estas medidas debían conducir a dar una imagen de debilidad. En este sentido, la falta de clarificación en la configuración de las facciones cortesanas tras la muerte del cardenal Espinosa y el periodo de tiempo que había de transcurrir hasta su definición, motivaron que hasta 1576, coincidiendo con el fallecimiento de Luis de Requesens, los miembros del Consejo de Estado no adoptasen un criterio determinante relacionado con la opinión defendida por cada una de las mismas en referencia a la problemática de los Países Bajos. Así pues, durante estos años, fue el conde de Chinchón quien mostró tener un mayor influjo sobre el ánimo regio en torno a la solución que se debía procurar al conflicto (454).

Por su parte, Gaspar de Quiroga parecía albergar, en los primeros meses de 1574, un mayor interés por atender sus obligaciones pastorales en el obispado de Cuenca que por asistir a las sesiones del Consejo (455), solicitando repetidamente al monarca, como hemos referido, licencia para trasladarse a su prelación y proceder a la realización del sínodo diocesano que tuvo lugar durante

Estado y Guerra en la Monarquía hispana durante la época de Felipe II. Tesis doctoral, UAM 1997, pp, 171-173.

(453).- C.J.DE CARLOS MORALES, Política y finanzas..., pp, 147ss; F.BARADO Y FONT, Don Luis de Requesens y la política española en los Países Bajos. Madrid 1906, pp, 12-18.

(454).- A.W.LOVETT, op.cit., pp, 49-52.

(455).- No obstante, en enero de 1574, tenían lugar en su propia posada las reuniones de la junta convocada por Felipe II para seguimiento de los movimientos efectuados por el turco (IVDJ, envío 87 (caja 122) nº144).

la primavera (456). No obstante, terminadas las reuniones sinodales, Quiroga pasó a ocuparse de forma señalada en el tratamiento de este asunto, recibiendo el encargo real de realizar la superintendencia de la junta que para la resolución de los negocios de Flandes se reunía en su propia posada (457).

a/ En la junta para los asuntos de Flandes

El 28 de noviembre, Mateo Vázquez remitía al monarca una carta descifrada enviada por Luis de Requesens. El secretario proponía que la misma se sometiese primeramente al criterio del Inquisidor General y de Andrés Ponce de León, como personas que, entre el resto de los miembros del Consejo de Estado, eran más proclives a favorecer los intereses del Comendador Mayor. De esta manera, podrían expresar sus pareceres con mayor fundamento en la reunión de este organismo, traduciéndose esta actuación en términos de eficacia, y evitándose la interferencia de opiniones contrarias a la labor desarrollada por Requesens, en clara referencia al duque de Alba (458). En su respuesta, Felipe II ordenaba que el escrito se remitiese a la junta conformada por Gaspar de Quiroga, Andrés Ponce de León, el marqués de Aguilar, el conde de Chinchón y el secretario Zayas que había mandado reunirse en la posada del Inquisidor General independientemente del Consejo, para ocuparse de las cuestiones relacionadas con los Países Bajos. En origen, se les había convocado concretamente para dilucidar en torno a las propuestas realizadas por el

(456).- Felipe II había insistido ante Quiroga en la necesidad de su presencia en las sesiones del Consejo, sobre todo, teniendo en cuenta que, tras su marcha, su ausencia se prolongaría a causa de la celebración del sínodo. De igual manera, el rey solicitaba al prelado que encomendase en su diócesis la realización de oraciones y plegarias para la pronta resolución del conflicto (BL, Eg, 1506, fols. 16r y 18r). Esta misma instrucción recibieron el resto de consejeros eclesiásticos (I.SANCHEZ BELLA, "El gobierno del Perú, 1556-1564" Anuario de Estudios americanos 17 (1958), p. 156).

(457).- P.SALAZAR Y MENDOZA, op.cit.,p, 294; BNM, Ms.13044, fol.129r; BSCV, Ms.nº 16, fol.147r; G.GONZALEZ DAVILA, op.cit.,I, p, 489.

(458).- "sin hacer en ninguna manera caso de sombras de ministros q plega a Dios no sean invenciones para vengarse de sus sentimientos q suelen aquellas ser de mucho daño..." (AZ, carp.144 nº39). La contestación del rey aparece escrita en el margen.

guardasellos Joachim Hopperus para lograr la pacificación de dichos territorios. Sin embargo, la actuación realizada por el Consejo de Estado respecto a estos negocios quedó relegada a un segundo plano en referencia a la labor desarrollada por la junta compuesta por cuatro de sus integrantes, que pasaron a ocuparse de forma específica de dichos temas (459).

Un importante periodo de reuniones de los integrantes de la junta tuvo lugar en la segunda quincena del mes de diciembre. En su seno, cada uno de los capítulos presentados por Hopperus fue discutido, tomándose la resolución de recomendar la adopción de una serie de medidas que, como bien había señalado Mateo Vázquez, se hallaban en conformidad con las directrices políticas seguidas por Requesens y entraban en contraposición con las opiniones mantenidas por el duque de Alba (460). Se intentaba, a través de estas actuaciones, buscar el remedio para la situación que se había generado, potenciar una actitud favorable en los quince estados que se habían mantenido ajenos a la revuelta y tratar de atraer a los rebeldes para que depusiesen su actitud. Desestimada la conveniencia de que el Cardenal Granvela retornase a los Países Bajos por la aversión que despertaba allí su figura, se recomendaba que se eligiese por gobernador a una persona de sangre real, aunque la junta no se definía sobre cual era la más apropiada. De igual manera, estimaban muy beneficiosa la creación de un Consejo de los Países Bajos por el contentamiento que esto produciría, siendo necesario para ello llamar a la Corte a mayordomos y gentilhombres (461), así como, emplear a ministros naturales de estos territorios para su gobernación. Si bien se aconsejaba la abolición del "Consejo des Troubles" y de la décima, no parecía conveniente ceder a la demanda de moderar los "placards", y en relación a los privilegios reales otorgados a los

(459).- El memorial de Hopperus había sido leído en el Consejo el día 3 de noviembre, dando lugar a la orden real para la formación de la junta (AGS, Estado, leg.559, n°78).

(460).- Sobre la diferenciación de las opciones presentadas por la junta y por el duque de Alba, véase, Ibid., leg.568 n°49 y n°70.

(461).- No obstante, la formación del Consejo de Flandes no se materializó hasta 1588 (J.M.RABASCO VALDES, El Real y Supremo Consejo de Flandes y Borgoña (1419-1702). Granada 1980).

Estados, solamente se restituirían aquellos que no se hallaban en litigio. También se planteaba la necesidad de reparar las plazas fronterizas, poner freno y castigar los excesos cometidos por los soldados y respetar el Acto de 1557, por el que se estipulaba que las tropas debían estar integradas por naturales de los Países Bajos, aunque solamente en tiempo de paz, quedando invalidado en caso de conflicto bélico. Por último, se estimaba que se debía proceder al secuestro de los bienes de aquellos que se negasen a tornar a vivir como católicos, restituyéndose de forma singularizada, como medida de gracia, las haciendas a algunos de los que habían sido condenados o ejecutados (462).

Las actuaciones de la junta continuaron en enero de 1575 (463). Felipe II ordenó a sus miembros que hiciesen una revisión de sus recomendaciones, puesto que Requesens, sin esperar la determinación real de hacer efectiva su aplicación, había iniciado los contactos con los rebeldes. La variación de la situación no influyó en los dictámenes emitidos con anterioridad, lo que significaba el apoyo manifiesto de la misma a la actuación de Requesens, al que se solicitaba que se dotase de poder negociador y de todo el dinero posible en contra de las tesis mantenidas por el duque de Alba. Partiendo de la evidencia de que el uso de la fuerza no había producido ningún resultado positivo, sino que muy al contrario, había aunado los ánimos de los habitantes de los Países Bajos enfrentándolos al monarca, llegándose a considerar la situación irrecuperable cuando el Comendador Mayor llegó a Bruselas, unido a la carencia de hombres y dinero para sufragar la guerra y la imposibilidad de enviar una flota, el único camino viable para la pacificación pasaba por satisfacer

(462).- M.GACHARD, *Correspondence de Philippe II sur les affaires des Pays-Bas*. Bruxelles-Gand-Leipzig 1858, III, pp, 220-222; S.FERNANDEZ CONTI, *Los Consejos...*, pp, 177-179. El monarca ordenó un escrito en el que se reflejasen las diferencias existentes entre la forma de gobernarse los Países Bajos en este momento con la observada con anterioridad, en época del Emperador, así como que refiriese qué privilegios se conservaban y cuales habían sido abolidos.

(463).- Además de volver a hacer referencia a los temas ya expuestos, se reflejaba la conveniencia de restablecer el estado que tenían los oficios de Bravante en la época de Carlos V, de que Sancho Dávila fuese retirado del castillo de Amberes, así como Champagny de los Países Bajos a petición de Requesens, de volver a publicar el nuevo Perdón General con las adiciones que se habían realizado, y que los quince Estados que no habían mostrado rebeldía mediasen en la negociación (M.GACHARD, op. cit., III, pp, 226-227).

las expectativas de los quince estados que se habían mantenido fieles y lograr su intervención para atraer a Holanda y Zelanda. Por otra parte, la junta consideraba que la mayoría de las peticiones realizadas no eran injustas, no obstante, quedaban fuera de materia de negociación o consideración las cuestiones referentes a la religión católica y a la autoridad real (464). Si bien las recomendaciones efectuadas por la junta se mantuvieron inalterables (465), la misma sufrió variaciones tanto en su composición como en su carácter. Joachim Hopperus siguió expresando sus opiniones sobre dicha problemática, siendo convocado por Felipe II a las reuniones celebradas por los cuatro consejeros de estado, permaneciendo así perfectamente informado de la evolución de la situación en los Países Bajos. Sin embargo, este gesto estuvo motivado por la desconfianza que tanto en el monarca como en su círculo de servidores más próximos despertaba su actuación, sospechando que procuraba información confidencial desde la Corte hispana a aquellos territorios. Su inclusión en la junta, con la finalidad de favorecerse de este doble juego, motivó a su vez la duplicación de la misma, puesto que, por un lado, se mantenían las sesiones a las que asistía Hopperus donde se trataban los asuntos de la manera que se quería que se conociesen en los Países Bajos, mientras que, por otro lado, y sin su presencia, se discutían las verdaderas directrices políticas que se debían adoptar (466).

(464).- Ibid., pp, 247-248; Simultáneamente, la situación en el Mediterráneo se estaba tornando tensa. La caída de Túnez y de La Goleta en manos turcas a finales de 1574 motivaron la petición papal de que, en beneficio de la Cristiandad, Felipe II se trasladase a Italia (R.HINOJOSA, op.cit., pp, 269ss). Este tema fue tratado por el Consejo de Estado el 21 de enero de 1575, decantándose por estimar inconveniente que el monarca abandonase la Corte. Dicha consulta, así como la opinión expresada particularmente por los consejeros aparece recogida en B.PORREÑO, op.cit., pp, 384-388.

(465).- Gaspar de Quiroga llegó incluso a apelar a la conciencia regia para favorecer sus planteamientos: "En particular añadió el Inquisidor General y ordenó que se advirtiese de su parte a S.M. que tiene en esto muy cargada su real conciencia, porque el que no socorre a su prójimo [Requesens] puesto en extrema necesidad, pudiendolo hacer, peca mortalmente, porque es contra la caridad, y que así sea obligado a hacerlo S.M. en este caso". De igual manera, el duque de Alba persistió en expresar sus reticencias en relación a lo acordado por la junta (M.GACHARD, op.cit., III, pp, 263-264).

(466).- Sobre el talante de Hopperus y los motivos que condujeron a su inclusión en la junta, véase, S.FERNANDEZ CONTI, Los Consejos..., pp, 180-181; En relación con un memorial presentado por el guardasellos al monarca en cuanto a la necesidad de que se retornase a la

Mientras que Requesens establecía contactos negociadores con los rebeldes, en la Corte se adoptó una postura de ambigüedad. Si bien la junta apoyaba, en la mayoría de los aspectos, las actuaciones realizadas por el Comendador Mayor para favorecer la pacificación, aun cuando durante estos meses Felipe II nunca mostró tener la intención de proceder a la aplicación de las recomendaciones efectuadas por lo que conllevaban de cesión (467), las pocas expectativas de que dichas conversaciones obtuviesen un fruto positivo, condujeron al propio gobernador a efectuar paralelamente la preparación de planes bélicos. Esta doble actividad aparece constatada por la correspondencia remitida por Gaspar de Quiroga en los primeros días de abril de 1575 desde Cuenca, como consecuencia de una breve estancia en su obispado. Así pues, en relación a los pareceres emitidos por Hopperus en el seno de la junta y en consonancia con lo que convenía que este comunicase, el Inquisidor General se mostraba conforme con que el monarca remitiese a Requesens las concesiones acordadas en cuanto a la gobernación de los Países Bajos antes de que se produjesen variaciones, incluyendo en las mismas las demandas presentadas por los rebeldes en torno a la restitución de los bienes confiscados y las referidas a las personas que se debían poner al frente de los castillos de Amberes y Gante si de ello dependía la pacificación (468). No obstante, en una carta remitida al rey, Quiroga afirmaba que mantener separado de la dirección de los naturales solamente los castillos situados en las plazas fronterizas con Francia antes de que los Países Bajos estuviesen completamente pacificados, equivalía a otorgar la libertad de conciencia, con lo que la religión católica y la autoridad real se

manera de gobierno que los Países Bajos habían tenido en época del Emperador y la conveniencia de encomendar su gobernación a Juan de Austria, la junta convino que "en él ha manifestado más que nunca la ponzoña que tiene en el pecho" (M.GACHARD, op.cit., III, pp, 264-266).

(467).- La sintonía en este sentido tampoco fue completa entre Requesens y los componentes de la junta, puesto que, el 23 de marzo, mostraron su contradicción a la oferta realizada por el gobernador a los rebeldes en torno a sus pretensiones de no incurrir en pena de confiscación de bienes en caso de incidir en pena de Lesa Majestad y de otorgar el cargo de castellano de Gante a un natural en detrimento de Mondragón (Ibid., pp, 285-286; B.BARADO Y FONT, Don Luis de Requesens..., pp, 47-52).

(468).- M.GACHARD, op.cit., III, pp, 288-289.

pondrían en grave peligro (469). Tampoco se mostraba conforme con la propuesta de Requesens de convocar Estados Generales, pues en su opinión, tanto los rebeldes como los que aparentemente mantenían la fidelidad, perseguían el único fin de liberarse de su sujeción a la Monarquía hispana y a la religión católica, por lo que se debía impedir la celebración de esta asamblea (470). Igualmente, dudaba del buen criterio del Comendador Mayor en recomendar que el gobernador general de los Países Bajos fuese un natural de dicho territorio, puesto que la experiencia había demostrado que esta cuestión no había influido en el estallido de la revuelta. Por todo ello, Quiroga no dudaba en aconsejar a Felipe II la imperiosa necesidad de enviar a los Países Bajos algunas galeras y otros bastimentos de guerra, mientras que un embajador se dirigiese a Inglaterra para entretener a la reina y tratar de averiguar sus intenciones (471).

Esta situación se mantuvo sin variaciones hasta el mes de julio, cuando las negociaciones entre Requesens y los rebeldes quedaron rotas sin haber conseguido alcanzar ningún acuerdo. La expectativa de tener que hacer frente a la continuación de una guerra cuyos costes económicos no se podían asumir por más tiempo habían condicionado la posición de Felipe II en los meses anteriores, admitiendo, durante la interrupción de las campañas en la estación invernal, la actuación de Requesens ante la posibilidad de lograr a través de estas conversaciones unas condiciones para la pacificación más favorables para sus

(469).- Refería que se podía aplicar lo narrado en la fábula de los lobos, que convencen a las ovejas para que ataquen a los perros que las custodian como si fuesen sus verdaderos enemigos y prometen para ello su amistad a los ovinos (W.T.WALSH, Felipe II. Madrid 1949 (3ª ed.), pp, 607-608).

(470).- "Los rebeldes y los que dicen que no son, todos son unos y, como dicen, el lobo y la vulpeja todos son una conseja: todos quieren la libertad, poca sujeción o ninguna a su príncipe natural ¡y place a Dios que la libertad que pretenden no sea también para su mala conciencia! (...) Siempre se han visto monstruos de semejantes juntas y juntos osan más y se desvergüenzan más..." (Ibidem).

(471).- Véase la carta que Quiroga remitió a Felipe II el 5 de abril en la que difería con varios de los puntos propuestos por Requesens, propugnando una política de mayor dureza respecto a la negociación (M.GACHARD, op. cit., III, pp, 289-292). Sobre el influjo que tuvo la opinión de Quiroga en el seno de la junta, véase, Ibid., pp, 321-328.

intereses. No obstante, la ruptura del diálogo ponía en primer plano la incapacidad de continuar sufragando la actividad bélica. Mientras que Hopperus y los miembros de la junta seguían apostando por reconducir la situación mediante la aplicación de las concesiones recomendadas lo que abrió las deliberaciones sobre la persona que sería más adecuada para acudir a esta misión a los Países Bajos, y en la persona de sangre real que debía ocuparse de su gobernación, la situación de la Hacienda era cada vez más agobiante, por lo que en el mes de septiembre el rey resolvió hacer efectiva la suspensión de pago (472).

Por otra parte, durante los meses siguientes, los miembros del Consejo de Estado centraron parte de su atención en definir la posición que la Monarquía hispana debía mantener respecto a Inglaterra, puesto que la postura adoptada por Isabel I en referencia a la problemática de los Países Bajos revestía una enorme importancia en cuanto a la consecución de la pacificación. La tradicional alianza dinástica había dejado paso, en los años setenta, a una rivalidad económica, política y religiosa, que provocó un progresivo empeoramiento de las relaciones, hasta que éstas terminaron rompiéndose, produciéndose la retirada de los embajadores (473). No obstante, la evolución del conflicto armado en Flandes hacía necesario contar con la alianza inglesa restando apoyos a los rebeldes, mientras que, el debilitamiento de los hugonotes franceses, después de

(472).- F.BARADO Y FONT, Don Luis de Requesens..., pp, 53-56; Por otra parte, la forma de actuación entre Hopperus y la junta no varió durante estos meses. El 28 de agosto Mateo Vázquez escribía al rey: "después traté lo que Hopperus escribió a V.Mt con el Inquisidor General y quedó de que el sábado se juntaría allí Andrés Ponce a las tres de la tarde y que yo me hallase allí aquella hora". Felipe II contestaba al margen: "está bien esto y advertídes no sea a hora que se hallan de juntar los demás" (IVDJ, envío 53 (caja 69), nº 162). Sobre la decisión adoptada de enviar a Hopperus a los Países Bajos con el marqués de Havré y el favorecimiento del conde de Aremberghe, véase, M.GACHARD, op. cit., III, pp, 366-367; AZ, carp. 128, nº 148. No obstante, la remisión de estos enviados se dilató ante la renuencia de Felipe II a realizar concesiones, pasando a desarrollar Hopperus un importante protagonismo en las reuniones mantenidas por la junta tras la muerte de Requesens, produciéndose su propio fallecimiento en diciembre del mismo año (S.FERNANDEZ CONTI, Los Consejos de Estado..., pp, 192-194).

(473).- En torno a las relaciones entre la Monarquía hispana e Inglaterra durante estos años y los motivos del enfrentamiento producido entre 1568-1569, véase, M.FERNANDEZ ALVAREZ, Tres embajadores de Felipe II en Inglaterra. Madrid 1951; J.RETAMAL FAVEREAU, Diplomacia anglo-española durante la Contrarreforma. Universidad Católica de Chile 1981; C.GOMEZ-CENTURION, La Invencible y la empresa de Inglaterra. Madrid 1988, pp, 1-25.

la matanza de San Bartolomé, inclinó a Isabel I a buscar el entendimiento con Felipe II, reanudándose las conversaciones y el camino para el intercambio de embajadas a partir de 1572 (474). Sin embargo, la reticencia existente en la Corte en torno a la duplicidad de la actividad desplegada por la Monarquía inglesa y a la autenticidad de sus buenas intenciones al iniciar este acercamiento conllevaron que, por una parte, se comenzase a plantear, al menos desde 1571, la conveniencia de efectuar una intervención armada en Inglaterra. A pesar de que tanto Pío V como, sobre todo, Gregorio XIII, trataron de estimular al monarca, en diversas ocasiones, para que acometiese la empresa contra Isabel I, el rey se mostró remiso a desatar un conflicto abierto, puesto que las consecuencias políticas que esta actuación podía tener en el contexto europeo y el exhausto estado de la hacienda, incapaz de sufragar más gastos bélicos, lo hacían desaconsejable (475). Por otra parte, sin muchas esperanzas de conseguir una alianza duradera, los consejeros de Estado optaron por simular la creencia de estas pruebas de amistad, bajo la presión de la situación que se vivía en Flandes. No obstante, la llegada de un enviado de Isabel I a la Corte hispana en el otoño de 1575 puso de manifiesto las diferentes actitudes de los miembros de este organismo ante la respuesta que se debía dar a la Monarquía inglesa sobre sus ofrecimientos de normalizar las relaciones (476). El 5 de

(474).- E.GOSSART, Espagnols et flamands au XVI^e siècle. Bruxelles 1905, pp, 282-284; A pesar de los intentos realizados por el duque de Alba, gobernador de los Países Bajos, para que el embajador destacado en Inglaterra fuese una persona afín a su tradicional postura de buen entendimiento entre ambas instancias, y no se volbiesen a producir enfrentamientos como los que había mantenido con Guerau de Spes, el designado por Felipe II fue el comerciante Antonio de Guaras. Sobre dicha cuestión, así como en torno al establecimiento de un tratado que permitía nuevamente el intercambio comercial, véase, J.RETAMAL FAVEREAU, op. cit., pp, 228-231.

(475).- En septiembre de 1570, Gaspar de Quiroga había intervenido en una junta al lado del Cardenal Espinosa y al doctor Velasco en torno a este tema (A.W.LOVETT, Philipp II and Mateo Vázquez..., p, 42). Sobre el apoyo que la Corte hispana procuró al complot de Ridolfi, *ibid.*, pp, 192ss. El espíritu de ofensiva contra Inglaterra fue mantenido en la Corte por el nuncio Ormaneto (A.M.VOCI, "L'Impresa d'Inghilterra nei dispaacci del nunzio a Madrid Nicolò Ormanetto (1572-1577)" Annuario dell'Istituto Storico Italiano per l'Eta Moderna e Contemporanea 35-36 (1983-1984), pp, 337-345). Sobre los contactos mantenidos por el nuncio y Quiroga sobre esta cuestión, *ibid.*, pp, 404-405.

(476).- El 25 de octubre Henry Cobham representó ante Felipe II la propuesta realizada por Isabel I. Habiendo rechazado el ofrecimiento que había recibido del príncipe de Orange, la reina deseaba que comerciantes ingleses pudiesen desarrollar sus actividades en la Península Ibérica, así como que fuese recibido un embajador. En torno al primer punto, y en conformidad con lo

noviembre, en el Consejo de Estado se vivió un pequeño enfrentamiento entre el duque de Alba y Gaspar de Quiroga, que representaban, sin duda, las opiniones más opuestas en su seno, puesto que, mientras que Alba mantenía su tradicional alegato sobre la conveniencia de alcanzar un entendimiento con Inglaterra, el Inquisidor General adoptó una postura muy crítica, esgrimiendo las disposiciones establecidas por el Santo Oficio para evitar la propagación de la herejía a través del contacto con extranjeros (477). En este sentido, Felipe II mandó a Quiroga que hiciese que la Suprema pusiese por escrito el comportamiento que, en cuestión de religión, debían guardar los mercaderes y el embajador inglés que hubiesen de venir para evitar el surgimiento de mayores problemas (478).

Ante la dilación en la respuesta, el enviado inglés, Henry Cobham, volvió a insistir en la necesidad de alcanzar un acuerdo entre ambas Monarquías a causa de los contactos que el príncipe de Orange estaba manteniendo con

expresado por el Consejo de Estado, el monarca encargó la respuesta al duque de Alba, remitiéndose al acuerdo ya establecido, aunque resaltando que los comerciantes ingleses debían respetar lo que la Inquisición tenía ordenado respecto a los extranjeros, a lo que también se tenía que plegar el nuevo embajador y su familia, por lo que, facilitaría mucho el entendimiento que este fuera católico. Por otra parte, Felipe II no dejaba de sorprenderse de que Isabel I iniciase estas negociaciones sin haber cumplido los seis artículos que, en su nombre, solicitaron los comisarios (CODOIN, Vol. 91, p. 102; AGS, Estado, leg. 829, fol. 53. Una copia de dichos artículos en *Ibid.*, fol. 98).

(477).- Quiroga no había dudado en recomendar a Felipe II que para mantener la Monarquía a salvo de cualquier "contagio" convenía prohibir la entrada a todos los extranjeros, así como que se debía informar al papa de las negociaciones que se estaban llevando a cabo para admitir un embajador hereje. En torno a esta última cuestión, el rey otorgó su consentimiento (*Ibid.*, fol. 56).

(478).- *Ibid.*, fol. 55. El 14 de noviembre, Quiroga presentó dicho asunto al Consejo de Inquisición, que realizó diversas disposiciones. Recomendaban que el nuevo embajador destacado fuese católico, puesto que si no cumplía esta condición, durante todo el tiempo que durase su misión, no podría decir ni escribir cosa contraria a la fe católica, ni discutir la doctrina de la Iglesia Romana, tenía que permitir que su equipaje fuese registrado para comprobar que no introducía libros prohibidos, y reverenciar al Santísimo Sacramento. Estas normas de conducta se hacían extensivas a los acompañantes del diplomático y también a los comerciantes, advirtiendo la aplicación de las penas establecidas si en algún momento incumplían con lo estipulado (*Ibid.*, fol. 59; AHN, Inq., libro 578, fols. 347v-348r). Sobre la valoración que este escrito mereció por parte del rey y de algunos consejeros, véase, AGS, Estado, leg. 829, fol. 58. Para el duque de Alba, don Antonio de Toledo y el conde de Chinchón "algunas disposiciones se podrían especificar menos, pues así se espanta a los extranjeros". Sobre el parecer concreto de Alba en torno a la conveniencia de moderar estas disposiciones y su formulación final, *Ibid.*, fols. 81 y 94.

Francia, que perjudicaban seriamente los intereses tanto ingleses como hispanos (479). Isabel I se ofrecía como mediadora para alcanzar una pacificación en Flandes, puesto que, aunque ponía a disposición de Felipe II su armada, la reina creía que la utilización de las armas no era la mejor solución para el conflicto. El monarca rechazó esta oferta, respondiendo a este gesto de buena voluntad prometiendo su mediación ante la Inquisición para que se despachasen las causas de los ingleses que se hallaban presos en el tribunal de Sevilla y que tan reiteradamente le había sido solicitada (480). No obstante, toda posible suavización de la actuación inquisitorial en estos procesos se encontró con la firme oposición de Quiroga y de la Suprema, lo que se hallaba en perfecta consonancia con lo que realmente pensaba el rey en virtud de los preceptos de confesionalización de la Monarquía, quien pasó a aducir, ante las repetidas demandas efectuadas desde Inglaterra, que la Corona no podía intervenir en los designios del Santo Oficio (481). La opinión expresada por el Inquisidor General en el Consejo de Estado sobre las diligencias efectuadas por Cobham, mostraba la enorme desconfianza que sentía respecto al papel que estaba jugando Inglaterra en el conflicto de Flandes. Si embargo, recomendaba alcanzar un entendimiento por cuatro causas principales: frenar los afanes expansivos del rey de Francia a costa de los territorios de la Monarquía Hispana, el favorecimiento del comercio en los Países Bajos y obtener seguridad en la navegación, tanto en relación a estos como a las Indias. Igualmente, encontraba

(479).- El 19 de noviembre, Cobham exponía ante el rey y el duque de Alba: "que tenía entendido que el príncipe Dorange viendose apretado había enviado a ofrecer al rey de Francia que le daría los Estados de Holanda y Zelanda, o plazas importantes en ellos, porque le socorriere y ayudase / Que ella [Isabel I] creía que el dicho rey abrazaría esta oferta que sería de gran daño como su Magd sabía". Por otra parte, expresaba los temores de la reina de que, si los franceses dominaban estos territorios, no tardarían en desplegar una ofensiva contra Inglaterra (Ibid., fols. 61 y 69). La consulta realizada a Alba, al prior don Antonio y al conde de Chinchón al día siguiente, en *ibid.*, fols. 66 y 70.

(480).- El 2 de diciembre, Alba transmitió a Cobham la decisión real, quien, finalizada su misión, inició su retorno a Inglaterra (Ibid., fols. 62 y 75). Una relación de los ingleses procesados por el tribunal sevillano aparece en *ibid.*, fol. 60.

(481).- Véase la carta que Zayas remitió al monarca el 20 de noviembre, donde le hacía llegar el malestar demostrado por el nuncio por estos tratos con Inglaterra (Ibid., fols. 63-64). Esta misma justificación con el enviado John Smith, que acudió a la Corte, en febrero de 1576, para proseguir las negociaciones (CODOIN, Vol. 91, pp. 124 y 161).

conveniente que Felipe II accediese al mantenimiento de una embajada recíproca y a la admisión de comerciantes ingleses, aunque se debía respetar lo estipulado por la Inquisición en torno al comportamiento que debían guardar, mostrándose inflexible en relación con los procesos inquisitoriales que se estaban desarrollando en Sevilla. También había pedido el monarca que Quiroga expresase su parecer en relación al tratado de comercio establecido por el duque de Alba con Inglaterra en marzo de 1573. Si bien, para el Inquisidor General la utilización que Isabel I hacía del mismo era una prueba de su doblez de intenciones, aconsejaba tratar de sacar el mayor beneficio posible a la situación (482). La rigurosidad exhibida por el Inquisidor General motivó que el duque de Alba y el propio rey pidiesen a Quiroga que matizase el escrito elaborado en la Suprema sobre los condicionantes que se impondrían al embajador y comerciantes ingleses, no en la aplicación de los requisitos, sino, al menos, en la dureza empleada en el lenguaje (483).

Mientras tanto, Gregorio XIII no cejaba en sus intentos de atraer a Felipe II a iniciar las hostilidades contra Isabel I. Nuevos planes fueron trazados por el pontífice a partir de las informaciones procuradas por católicos ingleses e irlandeses. Remitida esta propuesta a la Corte hispana, Quiroga fue el encargado

(482).- Junto al parecer de Quiroga, expresado el 23 de noviembre, aparecen reflejados el del presidente del Consejo Real y el del príncipe de Mérito (C.GOMEZ-CENTURION, op. cit., pp. 26-27; AGS, Estado, leg. 829, fol. 72). Al final de la consulta añadía Zayas: "También mandará ver V. Md. que parte se habrá de dar a Hopperus de la resolución que V. Md. tomare, para que sepa lo que habrá de escribir a Flandes"; Sobre la opinión de Quiroga en relación a lo que se debía informar al guardasellos, *ibid.*, fol. 74. En este sentido, el duque de Alba refería, de forma burlesca, la oposición que mantenía Hopperus al entendimiento entre Felipe II e Isabel I, advirtiéndole que, si se le dejaba intervenir produciría resultados muy negativos en la negociación (*Ibid.*, fol. 82). La carta que el rey escribió finalmente a Hopperus, el 27 de noviembre, y su contestación, en *ibid.*, fol. 83.

(483).- El 25 de noviembre, Alba escribía a Zayas: "Yo hice con el Inquisidor General la justicia que v. m. vio y estase como una peña duro en no mudarse palabra ninguna de todas quantas se pusieron en dicho escripto, pudiéndose dezir a mi parecer la mesma sustancia en muy pocas que lo comprehendiessen todo, como las que él mismo dixo dos veces en cons^o muy bien dichas, y si esto no se pone en otros términos es cierto que la Reyna de Inglaterra se bolverá del todo atrás (*Ibid.*, fols. 76-79).

de mantener la comunicación con Roma (484). Uno de los puntos cruciales que el papa quería clarificar con Felipe II estaba relacionado con la persona que ocuparía el trono de Inglaterra tras la exitosa expedición. Si bien, el secretario Antonio Pérez no nombraba directamente a don Juan de Austria como la persona indicada para hacerse cargo de esta empresa, sí apuntaba que el papa consideraba que el designado por el monarca para esta actuación se debía casar con la reina de Escocia para que no pareciese una usurpación. Otro aspecto importante estaba referido a quién se iba a encomendar la dirección militar, opinando Gregorio XIII que no era conveniente que la realizase ni hispano ni un flamenco, puesto que la ofensiva se haría bajo patrocinio papal y no de Felipe II, por lo que consideraba más apropiado la designación de un italiano. Antonio Pérez refería cómo el nuncio había declarado que el papa se inclinaba abiertamente por otorgar el mando a Marco Antonio Colonna, y que estaba dispuesto a sufragar los gastos de la operación (485).

Así pues, Juan de Austria pasaba a convertirse en una pieza clave de los planes tanto de la Santa Sede como de Antonio Pérez, comenzando a vincularse la gobernación de Flandes con el proyecto de intervención sobre Inglaterra.

b/ El entendimiento con Antonio Pérez

La muerte de Luis de Requesens, el 5 de marzo de 1576, dinamizó la discusión que se venía desarrollando desde meses atrás para definir que miembro de la familia Habsburgo debía pasar a ocuparse de la dirección de los Países Bajos. Las reuniones celebradas en el Consejo de Estado el 20 y 22 de

(484).- Antonio Pérez escribía la rey: "...comenzó Quiroga a dar cuenta de lo que se ha tratado acerca de lo de Inglaterra e Irlanda y como don Juan de Zúñiga había hablado a su Sd y después tratado con el Cardl de Como sobre algunos puntos tocantes a la materia, entretanto que venía aquellos dos ingleses que no estaban en Roma, por quien su Sd había enviado para poder responder a V Md y que entendía serían en Roma por todo noviembre" (IVDJ, envío 60 (caja 80 bis), fol. 139r).

(485).- Pérez señalaba al rey las enormes ventajas que entrañaba la consecución del proyecto. Sin embargo, Felipe II únicamente ordenó que el Inquisidor General se mantuviese atento a la evolución de esta cuestión, aunque se fuese dilatando dar una contestación definitiva al nuncio (Ibid., fols. 139v-142v).

febrero para proceder a esta elección volvieron a enfrentar a los partidarios de mantener una política de dureza en relación con los rebeldes contra aquellos que proponían alcanzar la pacificación mediante la negociación (486). Mientras que el duque de Alba, el prior don Antonio de Toledo y el marqués de Aguilar estimaron conveniente enviar al archiduque Alberto, Quiroga, el conde de Chinchón y el presidente del Consejo Real, Diego de Covarrubias, se decantaron por Juan de Austria (487). La necesidad de adoptar una solución definitiva tras el óbito de Requesens inclinó la balanza hacia Juan de Austria candidato propuesto por Antonio Pérez, cuyos planteamientos favorables a apaciguar la rebelión a través de los remedios expresados por la junta que se ocupaba en dichos asuntos se vieron reforzados, tanto en esta como en el Consejo de Estado, con la inclusión en este organismo de Pedro Fajardo, marqués de los Vélez, en sustitución de Andrés Ponce de León, fallecido en noviembre de 1575, que además pasó a convertirse en una de las principales figuras de la facción "papista" (488). El secretario real supo presentar ante Felipe II la conveniencia de este nombramiento, que además venía a poner fin a la delicada situación que vivía don Juan en Italia como consecuencia de su enfrentamiento con algunos virreyes de dichos territorios, especialmente con el Marqués de

(486).- En este sentido, se habían producido algunas deliberaciones secretas por parte de algunos componentes de la junta. Así, el 16 de febrero, Mateo Vázquez informaba al rey de cómo, a pesar del precario estado de salud del conde de Chinchón, éste se había reunido con Quiroga para deliberar (IVDJ, envío 53 (caja 69) n° 30).

(487).- M.GACHARD, op. cit., III, pp, 429-435. Otros candidatos sugeridos por los representantes de la opinión de seguir una política rigurosa fueron el archiduque Ernesto y el duque de Saboya. Sobre este último, Mateo Vázquez escribía al rey cómo el duque de Francavilla había apuntado que, en caso de desconfianza, se podría casar a una de las infantas con el hijo del duque para que viviesen en la Corte (IVDJ, envío 53 (caja 69) n° 64).

(488).- M.GACHARD, Relations des ambassadeurs vénétiens sur Charles-Quint et Philippe II. Bruxelles, Gand, Leipzig 1856, pp, 185-191. Establecida la relación entre Antonio Pérez, el marqués de los Vélez y Quiroga, señala sobre este: "L'archevêque de Tolède est le chef du parti dominant. Ce prélat a des connaissances étendues. Son humeur le porte à la paix. Quoique son langage soit rude, il a de la bonté, et tout le monde s'accorde à le regarder comme un homme de bien. Le roi l'aime et se sert beaucoup de lui (...)"; J.GARCIA MERCADAL, Viajes de extranjeros por España y Portugal. Madrid 1952, pp, 1246-1249; Pedro Fajardo retornó a la Corte en 1576, tras dos años de ocupar el cargo de embajador ante el Emperador. Casado con la hija de Luis de Requesens, fue uno de los máximos perjudicados por la caída de Antonio Pérez (J.M.MARCH, El Comendador Mayor..., p, 125; G.MARAÑÓN, Antonio Pérez, I, pp, 129-131). Sobre la captación por parte de Pérez de Juan de Austria, a la que ya hemos hecho referencia, y la relación que se estableció entre ambos, véase, Ibid., pp, 240-246.

Mondejar y el Cardenal Granvela, considerándose igualmente propicia su presencia en los Países Bajos para encauzar la política de la Monarquía respecto a Inglaterra, sobre la que tanto Antonio Pérez como Gaspar de Quiroga mantenían una actitud adversa (489). Por otra parte, con la designación de Juan de Austria como gobernador, el secretario obtenía beneficios en diversas direcciones, lo que vino a fortalecer su creciente influencia en la Corte. Así, tras la desintegración de la Santa Liga, las directrices políticas que el papado trataba de imponer en los territorios italianos quedaron relegadas ante el surgimiento de diversos conflictos jurisdiccionales con la Monarquía hispana, por el estado de tensión, entre ambas instancias, que provocaron la elección de Cosme de Medicis como Gran Duque de Toscana y por la situación bélica que se vivía en Génova (490). En este contexto, la figura de Juan de Austria, vinculada al proyecto papal, quedaba en una situación comprometida, pero, sobre todo, no constituía para Antonio Pérez una pieza de utilidad para poder influir en los asuntos italianos. Pérez trató de establecer su influjo sobre los mismos en la Corte a través de la obtención de la secretaría del Consejo de Italia, organismo que, dominado por hombres de Mateo Vázquez, le era poco propicio (491). Además, con el traslado de Juan de Austria a los Países Bajos, aprovechando la

(489).- En un escrito remitido por Antonio Pérez al rey, refería: "...si el Sr D. Juan convenía que viniese luego acá, no habiendo de convenir que vuelva a Nápoles, ni que esté en Italia, como dice Quiroga que no conviene, aunque no hubiese de ir a Flandes, porque el Papa no le pida para lo de la armada si viene el turco (...) Añadiendo las otras razones de quitarse D. Juan de las pesadumbres de los ministros de Italia" (B.PORREÑO, op. cit., p, 419); Por otra parte, M.BOYD califica a Quiroga de "anglofobo" (op. cit., pp, 62-63). El enviado inglés John Smith insistió ante el monarca sobre la puesta en libertad de varios ingleses procesados por la inquisición de Sevilla, Quiroga, desde Cuenca, dirigió una carta a la Suprema, en mayo de 1576, para que recordasen al rey lo que se había establecido durante las gestiones realizadas en el mismo sentido por Cobham (AHN, Inq., libro 876, fol, 342r). Zayas también realizó gestiones ante el Inquisidor General por petición del delegado Inglés en torno a algún caso en particular (AGS, Estado, leg. 830, nº 112).

(490).- Sobre la consolidación de la hegemonía hispana en Italia en detrimento del papado y el importante papel desempeñado por Granvela y Juan de Zúñiga en este proceso, véase, M.RIVERO RODRIGUEZ, "El servicio a dos Cortes...", pp, 362-366; Sobre los informes enviados por Antonio Pérez al rey en relación a la deliberación de dichos asuntos en el Consejo de Estado, y la continua presión a la que estaba sometido Don Juan por parte, principalmente de Granvela, véase, IVDJ, envío 60 (caja 80 bis), fols 168r, 177r-178r. La relación y el conocimiento que Quiroga tenía sobre estas materias hacía que fuese uno de los interlocutores escogidos por el secretario Escobedo junto al propio Pérez.

(491).- Sobre la presencia de personajes cercanos a Mateo Vázquez en su composición, véase, M.RIVERO RODRIGUEZ, El Consejo de Italia..., pp, 104ss.

calma que se vivía en el Mediterráneo en relación con el turco, cubría un doble objetivo en sus planteamientos en relación al problema de Inglaterra. Por una parte, conseguía aparecer como el defensor de los intereses pontificios en cuanto a los planes de intervención bélica auspiciados por Gregorio XIII en relación con la Monarquía de Isabel I, recabando el apoyo de la Santa Sede para que Juan de Austria fuese designado en dicha gobernación, mientras que, a su vez, el proyectado matrimonio con María Estuardo constituía el aliciente necesario para alimentar sus ambiciones políticas y debilitar la resistencia que presumiblemente el interesado iba a presentar a la aceptación del cargo (492). Pero, sobre todo, sus afanes estaban orientados a controlar él mismo los asuntos relacionados con los Países Bajos, a través del influjo con el que contaba sobre don Juan y su entendimiento con su secretario, Juan de Escobedo. Formando parte de la documentación que se adjuntó para demostrar la culpabilidad de Antonio Pérez en cuanto a la utilización de información reservada en su propio beneficio, constaba una carta que el secretario escribió a Escobedo el 12 de abril de 1576 (493). La epístola se centraba en el tratamiento de las cuestiones de Flandes por el Consejo de Estado tras la muerte de Luis de Requesens. Pérez solicitaba al destinatario que colaborase en convencer a don Juan de que abandonase Italia e iniciase su viaje hacia los Países Bajos sin pasar por la Corte hispana, puesto que actuar de otra manera supondría contrariar las ordenes del rey, y acabar con sus posibilidades de protagonizar la empresa de Inglaterra (494). Sin perder de vista la política en los territorios

(492).- Si bien los planteamientos que el papado hacía en torno al nombramiento de Juan de Austria fueron claros desde abril de 1576, quedaron nítidamente expuestos en las finalidades que se marcaron al nuncio Felipe Sega cuando, en febrero de 1577, fue enviado al lado de don Juan, debiendo apoyar la pacificación de los territorios, proteger los intereses católicos y avivar la expedición contra Inglaterra, para la que el pontífice hizo entrega al nuncio de cincuenta mil ducados de oro. Sobre la corta legacía de Sega en los Países Bajos, véase, A.FERNANDEZ COLLADO, *Felipe Sega...*, pp, 135-168; Sobre la intranquilidad que provocó en Inglaterra la presencia de don Juan en Flandes véase la carta que Antonio de Guarás remitió a Zayas en diciembre de 1576 (CODOIN, Vol. 91, pp, 153-155).

(493).- La misma se encuentra recogida en CODOIN, Vol. 15, pp, 547-553.

(494).- Pérez aseguraba que la insistencia de Felipe II en que su hermano no acudiese a la Corte estaba motivada por la desconfianza y celos que albergaba hacia las ambiciones de don Juan, a lo que el secretario había ofrecido su colaboración y la de Escobedo para convencer a don Juan para que adoptase el estado eclesiástico si con ello se tranquilizaba el ánimo del rey: "Dijo que él

italianos (495), y los asuntos financieros de los que don Juan se debía ocupar a su llegada a los Países Bajos (496), pasaba a informar a Escobedo de una nueva situación: si bien había sido Zayas el secretario que se había ocupado de las cuestiones de Flandes en el Consejo de Estado, el rey le había encargado la realización de la sobreconsulta sin ponerlo en conocimiento ni de dicho organismo ni del propio Zayas. Esta decisión había venido motivada por dos razones, su vinculación con don Juan y con su secretario, y la relación existente entre Zayas y el duque de Alba, insistiendo en que, a partir de ese momento, todos los asuntos le fuesen remitidos a él, evitando igualmente la intervención de Mateo Vázquez (497).

lo creía todo de su hermano, pero que no podía ser: y quise hacer otra, pareciéndome que en este negocio había más hondo, que pasé lo mismo con Quiroga una noche con ocasión de estas materias, y fue él bien recibido y dijome grandes cuentos, porque para decir a V.M. la verdad a todos estos se los llevó de las barbas" (Ibid.).

(495).- "Pide el rey parecer en la orden que se debe dar en lo de la mar. Los Toledo querrían a Sicilia y teniente della para el prior, o general della él mismo. Yo he dicho que demás de lo que no conviene que al señor don Juan se le quite su cargo, se quitará su Magestad de pesadumbres con hacerlo así, poniendo en ausencia del señor don Juan buena orden en esto; le decía sera bien tener cuenta con Juan Andea [Doria], porque le perdemos, y entendiendolo así, y Quiroga y todos los del Consejo, sino los Toledo" (Ibid.).

(496).- Pérez encarecía que don Juan pusiese especial cuidado en las cuestiones referentes al dinero e indicaba que podría solicitar al rey a un hermano de Lorenzo Spinola y así servirse del crédito de esta familia. Afirmaba que Garnica había expresado al monarca una opinión semejante a la suya, y que se trataba de enviar a Auñón (Ibid.); Sobre el entendimiento entre dichos personajes, véase, C.J.DE CARLOS MORALES, "Ambiciones y comportamiento de los hombres de negocios. El asentista Melchor de Herrera" *La Corte de Felipe II*, pp. 391-399; G.MARAÑÓN, *Antonio Pérez*, I, pp. 96-99.

(497).- CODOIN, Vol. 15, p. 552: "o por necios o por bellacos, no nos degüellen; y aun para decir a V.M la verdad, Quiroga me la echó, diciendo que sería justo dar a su Alteza satisfacción en la correspondencia"; M.GACHARD, *Relations des ambassadeurs...*, p. 190. Recien llegado a Flandes, don Juan escribía a Felipe II: "No sé si será V.M. servido que estas mis cartas se lean en Consejo, a lo menos esta, que esotra necesario pienso que será; si no lo fuere, lealo V.M.: suplicóselo de que las vean y traten sobre ellas dos: el Marqués de los Vélez (tan confidente y tan buen consejero de V.M.) y el Secretario Antonio Pérez, y Escobedo, si estuviere, que de los dichos yo sé bien y aseguro que será servido con lo que no se usa agora en todos los hombres, y vale harto más que junto con mucho saber mucha malicia, digo experiencia, que saber V.M. conoce el de cada uno". El rey contestaba al margen: "Esto será mejor que no se lea, digo lo que se sigue [en concreto este párrafo], y si se hubiese de leer podríase añadir el Inquisidor General; mas creo que mejor no leerlo ni volverse esta plana. Vos haced lo mejor, Antonio Pérez" (B.PORREÑO, op. cit., p. 442).

Así pues, Pérez vió cumplido su objetivo de lograr que todos los asuntos provenientes de Flandes pasasen por sus manos, convirtiéndose en la pieza clave de la comunicación entre Felipe II y don Juan de Austria, lo que le procuró el acrecentamiento de su poder y la posibilidad de ejecutar los turbios manejos que condujeron a su caída. En el despacho de estas cuestiones Pérez contó con el apoyo de sus dos incondicionales partidarios, Gaspar de Quiroga y el marqués de los Vélez, procediendo a dilucidar entre los tres las directrices de la política a seguir (498).

Por tanto, los asuntos de Flandes pasaron a estar bajo la influencia de la facción "papista". En este sentido, hemos de señalar, que fue en torno a estos meses cuando se produjo un notable acercamiento entre Pérez y Quiroga. Si bien el conocimiento y entendimiento entre ambos se remontaba a la década anterior, cimentado en el tratamiento de las materias concernientes a los territorios italianos y en las buenas relaciones establecidas con la Santa Sede, éste se fortaleció cuando Quiroga depositó en el secretario sus esperanzas de alzarse con el arzobispado de Toledo, vacante tras el fallecimiento de Bartolomé de Carranza en mayo de 1576 (499). El apoyo que le procuró Antonio Pérez para conseguir alcanzar su objetivo conllevó el inicio de una productiva vinculación entre ambos, que se tradujo, en referencia a los negocios de Flandes, en el seguimiento del Inquisidor General de las directrices marcadas por el secretario y, en consecuencia, en el abandono de la rigurosidad que había

(498).- A este respecto, véase, IVDJ, envío 60 (caja 80 bis), fols. 61r, 63r y 71r; A. ALBERI, *Le relazioni...*, serie I, Vol. V, pp. 278-279. Así Pérez escribía al rey: "Anoche se juntaron los dos, leiles las cartas que habían de ver (...) quedó concertado para que esta noche que se tornasen a juntar después del Consejo de Estado, yéndonos a casa de Quiroga Vélez y yo".

(499).- En febrero de 1577, Pérez comentaba a Felipe II sobre Quiroga: "...anduestos días muy su privado de campo y de poblado, hasta traerme en su coche a mi posada y aprovecharé desta privanza que agora me corre para irle empeñando y prendando en la inteligencia destos negocios" (BL, Add. 28.262, fol. 225v). De este cambio de actitud fue consciente el propio Pérez, quien afirmaba: "Y vino a decir, aunque ayudado, que lo que combenía era acabar por concierto como se pudiese y presto. Es buenísimo Quiroga fácil de llevar y a ratos duro de mudar" (Ibid., fol. 220v). Igualmente refería: "Y digo a V. Mag. que fue cosa extraña lo que Quiroga encareció la necesidad del concierto lo mejor que se pudiese, la imposibilidad de entrar en guerra y los grandes peligros que correría todo lo de acá y de Italia, diziendo que aun era de temer que no se cansasen estos reinos de verse desangrados por cosa tan perdida" (Ibid., fol. 239). Quiero agradecer a Santiago Fernández Conti la facilitación de los documentos que conforman esta nota.

caracterizado sus opiniones anteriores en torno al desarrollo de las negociaciones (500).

A pesar de los deseos expresados por Felipe II de que don Juan se encaminase directamente desde Italia a los Países Bajos, éste se personó en la Corte en agosto de 1576, permaneciendo en Madrid durante dos meses, en los que la junta de Flandes se empleó en definir y concretar las medidas que don Juan debía aplicar en su gobernación (501). Transcurrido este periodo, iniciaba su viaje, de forma secreta y protegido por un disfraz, para emprender su misión (502). Desde este momento, la comunicación con su hermano, como él mismo había solicitado, se encontró mediatizada por el secretario Antonio Pérez, quien pasó a controlar el devenir de dichos asuntos, con la anuencia de Juan de Escobedo, desarrollando, desde su estratégica posición, un doble leguaje

(500).- La sumisión de Quiroga a los criterios de Antonio Pérez se puso también de manifiesto cuando fue solicitada la opinión del Consejo de Estado en relación con la negociación de la tregua con el turco. La afinidad del Inquisidor General con los planteamientos de Gregorio XIII y el apoyo procurado a los nuncios para convencer al monarca de continuar la lucha contra el Imperio otomano se había puesto de manifiesto en diversas ocasiones (véase, por ejemplo, la carta que Quiroga remitió a Felipe II en mayo de 1577, *Ibid.*, Eg. 1506, fols. 55v-56r). Sin embargo, en la relación que el secretario remitió al rey sobre lo acontecido en la reunión mantenida en dicha institución, relataba como el marqués de Almazan, favorable a la firma del armisticio, había matizado su opinión ante el parecer contrario expresado por Quiroga con la contundencia que acostumbraba, y continuaba: "que me pareció flojedad y respeto/ No me pasó a mí esto con el arzobispo que me preguntó a mí mi parecer y se lo dije muy abiertamente". El Consejo de Estado dio su consentimiento para que se negociase con la Sublime Puerta, sin que Quiroga hiciese constar ninguna protesta, únicamente señaló, junto al marqués de Aguilar y al prior don Antonio de Toledo, que hubiese sido conveniente que el rey les hubiese hecho partícipe de sus intenciones desde el comienzo de este asunto (IVDJ, envío 60 (caja 80 bis), fols. 127r-128v).

(501).- IVDJ, envío 21 (caja 32) n° 614. A finales de septiembre, los miembros de la junta planificaron cinco cuestiones: la concesión de un Perdón General a los rebeldes, del que quedaba excluido el príncipe de Orange; que se adoptase la forma de gobernación establecida en los tiempos del Emperador, especificando que Felipe II no estaba obligado a designar a una persona de sangre real para que se hiciese cargo de la misma, en consideración a los avatares sucesorios; el modo de reunir los Estados Generales, y finalmente, el controvertido asunto referido a la salida de los soldados extranjeros de dichos territorios. Mientras que algunos de los asistentes, como Hopperus, consideraban este requisito necesario, el marqués de Aguilar se mostró renuente, mientras que Gaspar de Quiroga condicionaba su retirada a la previa pacificación total. Sobre dichas cuestiones, véase, S.FERNANDEZ CONTI, *Los Consejos de Estado...*, p. 194.

(502).- Sobre la consulta realizada al Consejo de Estado en torno al camino más conveniente que debía seguir don Juan para conseguir mayor brevedad y seguridad, véase, B.PORREÑO, *op. cit.*, pp. 415, 418. Por su parte, Gaspar de Quiroga hizo llegar sus apreciaciones al respecto al rey a través de Antonio Pérez (BL, Eg. 1506, fol. 50).

y una ambigüedad que utilizó al servicio de sus intereses. Por otra parte, su acrecentamiento en la confianza regia le procuró el acercamiento de Ana de Mendoza, princesa de Eboli, que, llegada a la Corte a mediados de 1576, pasaría a ser copártcipe de sus intrigas políticas. Así pues, Pérez veía cumplidos sus anhelos de encumbramiento como gran patrón cortesano, cimentando su medro en una maquinación de la que, tanto él mismo como sus colaboradores, obtuvieron funestas consecuencias (503).

Conseguida trabajosamente tan preponderante situación, el secretario no dudó en obstaculizar el retorno de don Juan de Austria a la Península una vez que había logrado alcanzar la concertación, tras la firma del Edicto Perpetuo y la retirada de los soldados. La presencia de don Juan en la Corte contravenía sus aspiraciones, puesto que, no sólo pondría fin a su control sobre el devenir político de los Países Bajos, sino que quedaría relegado a un segundo plano en cuanto al encabezamiento de la facción "papista". Por consiguiente, Pérez tornó a instrumentalizar su función de conmutador de la comunicación entre ambos para, por un lado, aparentemente, apoyar las pretensiones de regreso emitidas por don Juan, mientras que, por otro, transmitía y representaba ante Felipe II la imperiosa necesidad de su permanencia en Flandes, sabiendo conducir el ánimo del monarca para que la decisión regia fuese acorde a sus deseos (504).

Por tanto, el dominio ejercido por el "partido papista" hizo estériles las

(503).- El entendimiento establecido entre Antonio Pérez y la princesa de Eboli estaba referido a la utilización de secretos e información privilegiada en su propio beneficio, contando con el secretario Escobedo para la utilización de don Juan de Austria al servicio de sus planes de encumbramiento político. Si bien hay indicios de que Pérez pudo mantener contactos con los rebeldes flamencos, parece claro que se convirtió en un informante fundamental sobre cuestiones reservadas para la Santa Sede, lo que se tradujo en el enorme ascendente que el secretario tenía en las cuestiones provenientes de Roma y en sus excelentes relaciones con Gregorio XIII. El arzobispo de Sevilla declaró en Lisboa "que el Cardenal Granvela y don Juan de Zúñiga, embajador en Roma, habían escrito a Su majestad que cuando iban a negociar con el Papa, estando en Roma, hallaban que Su Santidad estaba prevenido y sabía todod lo que iba atratar con él y de ello no podía dar aviso sino Antonio Pérez (G.MARAÑON, Antonio Pérez, I, pp, 254-257. Sobre el talante de las relaciones que unieron al secretario y a la princesa de Eboli, véase, Ibid., pp, 189-213; E.SPIVAKOVSKY, "La Princesa de Eboli" Chronica nova 9 (1977), pp, 40-42.

(504).- F.MIGNET, Antonio Pérez y Felipe II. Madrid 1983, pp, 39-44.

iniciativas de don Juan, manteniéndose inalterables los dictados sobre la política a seguir hasta septiembre de 1577. El desasosiego que esto produjo en el gobernador de los Países Bajos, unido a la creciente merma de la autoridad real en estos territorios, provocó la determinación de don Juan de Austria de buscar una solución a través del envío de su secretario Escobedo a la Corte, en julio de dicho año, así como la resolución de volver a tomar las armas como respuesta al estado crítico en que se encontraba la situación política (505). Los acontecimientos que tuvieron lugar en septiembre con el nuevo inicio de la actividad bélica vinieron determinados por un cambio de expectativas en relación a la política que se estaba desarrollando en Flandes, contra lo que la postura pacifista mantenida por el grupo "papista" nada pudo alegar. La falta de operaciones en el Mediterráneo por parte del Imperio otomano permitía disponer de las tropas destinadas en Italia para acudir al auxilio de don Juan, a lo que había que unir el alivio que supuso para las maltrechas arcas regias la llegada de una flota procedente de América, portadora de preciados metales (506). La decisión adoptada por el rey de volver a tomar medidas de fuerza contra los rebeldes flamencos, tras un periodo de paz forzada, fue aprobada por los miembros del Consejo de Estado. Hemos de señalar que, al expresar su voto, Gaspar de Quiroga volvió a reiterar la necesidad de ejecutar acciones muy rigurosas, en consonancia con lo que con anterioridad había expuesto en el seno de la junta que sobre los asuntos de Flandes había albergado en su propia posada, previamente a que su acercamiento a Antonio Pérez, vinculado a sus ambiciones de convertirse en arzobispo primado, le llevase a moderar sus juicios

(505).- El 6 de julio, don Juan escribía a su amigo Rodrigo de Mendoza anunciando la llegada de Escobedo a la Corte, afirmando que, igualmente, había comunicado esta noticia a Antonio Pérez, al marqués de los Vélez y a Gaspar de Quiroga (A.MOREL-FATIO, *L'Espagne au XVIe et au XVIIe siècle*. Helbronn 1878, pp, 120-121).

(506).- Esta situación fue resaltada por el presidente Covarrubias en el Consejo de Estado: "y parece que nro Sr ha traydo el dinero de las Indias en coyuntura que será el todo y tan prompto como se sabe, pues según dixo ay en Sevilla en plata dos millones y quatrocientos y cinquenta mill ducados y mas lo que se sacará del concierto del encabeçamiento" (AGS, Estado, leg. 571, nº 103). Sobre las circunstancias que confluieron para que se recuperase el crédito real, véase, C.J.DE CARLOS MORALES, op. cit., pp, 160ss.

en este sentido (507). No obstante, la situación que contemplaban el resto de las Monarquías europeas hizo aconsejable templar estos planteamientos en los meses sucesivos, desplegando, paralelamente, una actividad diplomática que impidiese que el inicio de las acciones bélicas en Flandes procurase reacciones no deseadas por parte de las mismas, siguiéndose, en este sentido, las sugerencias expresadas por el marqués de los Vélez, con lo que el "partido papista" supo reconducir nuevamente los asuntos de Flandes a términos más favorables a sus propuestas políticas, aunque el desencadenamiento del conflicto bélico era ya inevitable. En este contexto, aunque Gaspar de Quiroga moderó la radicalidad de sus opiniones, no dudó en seguir apostando por el empleo de las armas, abogando ante el rey por la conveniencia de emplear la fuerza para reducir a los rebeldes (508).

Esta misma actitud beligerante mantuvo Quiroga respecto a Inglaterra. Ante el fracaso de los planes pontificios en torno a don Juan de Austria, Gregorio XIII se decidió a apoyar una ofensiva organizada por Geraldino y Stucley desde Irlanda. El respaldo procurado por Quiroga al proyecto papal en la Corte fue absoluto, manteniendo informado a Felipe II de los pormenores e incidencias de la proyectada expedición, arengando al monarca para que tomase parte en esta iniciativa de forma efectiva. Igualmente, no modificó su postura en relación al comportamiento que el embajador inglés residente en la Corte hispana debía guardar para defender la ortodoxia católica de cualquier tipo de desviación herética, haciendo llegar al rey el malestar expresado por el papa en

(507).- "Le pareçe que ni se puede ni se deve curar ya con ensalmos sino con açote et virgaferrea, porque no lo atribuyan a clemencia, sino a flaqueza e imposibilidad, y sería darles materia con que se bolver más insolentes y agravar mucho su conçiencia a V.Md. y poner en aventura su honor y estimación y aun la obediencia pa con otros vassallos que es mucho de temer, lo tomarían por exemplo, para se levantar a lo menos los de conquista como Nápoles y Milan, que por tanto se devrían hazer tres cosas, castigarlos con las armas en la mano, usar de gran brevedad por la obligación particular que V.Md. tiene a acudir a su hermano puesto en tal término por su servicio y proveerle de dinero como lo ha mandado V.Md." (AGS, Estado, leg. 571, nº 103).

(508).- Sobre el cambio de actitud operado en Quiroga, así como en el resto de los miembros del Consejo de Estado, y las directrices propuestas por el marqués de los Vélez, véase, *Ibid.*, nº 43-44. La evolución de las Monarquías europeas en relación con la política hispana en los Países Bajos ha sido ampliamente puesta de manifiesto por S.FERNANDEZ CONTI, *Los Consejos...*, pp, 203-210.

que se facilitase la presencia de un hereje realizando algunas concesiones (509). No obstante, también en este aspecto, Quiroga hubo de retroceder en cuanto a la rigurosidad inicial, mostrando una mayor prudencia ante la posibilidad de que la utilización de la fuerza desencadenase un conflicto de mayores dimensiones (510). A pesar de ello, intentó alentar en la Corte el desarrollo de una intervención armada en Inglaterra, no dudando el expolear al nuevo nuncio, Felipe Segá, para que siguiese la línea trazada por su predecesor, y pusiese todo su entusiasmo en obtener la vinculación del monarca hispano a la empresa (511).

Por otra parte, Quiroga mantenía una fluída comunicación con Juan de Escobedo desde que había llegado a la Corte (512). Esta circunstancia no

(509).- El 6 de mayo de 1577, Quiroga escribía al rey : "cuando estuvo aquí otro embajador de aquella reina que V.Md. mandó salir de la Corte tanía ya pervertidas algunas personas y aun algún criado de V.Md. que sino se muriera había de ser preso por el Sto off^o (...) y el Papa, según me ha dicho el nuncio teme mucho que en la Corte de V.Md. haya embajador de aquella reyna (...) que en estos reinos no se puede consentir lo que pide" (BL, Eg. 1506, fols. 54v-55r).

(510).- En el mes de junio, Quiroga refería a Felipe II: "En el neg^o de Irlanda hay mucho que mirar para entrar en él a descubierta/ lo uno porque es menester que las cosas de Flandes estén más asentadas de lo que están para mover guerra contra Inglaterra o Irlanda porque esta es la que ha favorecido a los rebeldes y tienen en ella su esperanza para no ser sujetos o castigados/ lo otro porque V.Md. está muy gastado ay alicaído y no sé si terná fuerzas de presente para tantas empresas y también por lo que V.Md. tiene asentado y concertado con el papa que parece que es camino con menos inconvenientes y así por ahora lo que convendría sería entretenir estos irlandeses con esperanzas y con algún socorro..." (Ibid., fol. 61v, citado por A.W.LOVETT, *Philip II and Mateo Vázquez...*, p. 43).

(511).- En septiembre de 1577, Juan de Zúñiga informaba a Felipe II de como Segá consideraba esta cuestión uno de los puntos esenciales de su misión (AGS, Estado, leg. 929, n^o 193-194). Cuando llegó a la Corte, Segá buscó rápidamente el apoyo de Quiroga para convencer a Felipe II de la conveniencia de que el proyecto se llevase a la práctica (Ibid., n^o 175). La reiteración de esta solicitud por parte del nuncio consiguió incomodar al rey, quien escribió a Juan de Zúñiga al respecto. En su contestación, el embajador justificaba la actuación de Segá tanto por acabar de iniciar su andadura en la Corte hispana y el interés que tenía el papa en el asunto, como "porque tenía noticias de que el Cardenal de Toledo había ofendido el amor propio del nuncio Segá diciéndole que ponía menos interés en la empresa que su antecesor el nuncio Ormaneto" (A.FERNANDEZ COLLADO, op. cit., pp. 169-176; A.M.VOCI, "L'Impresa d'Inghilterra..." pp. 386-388, 424-425).

(512).- El 1 de diciembre de 1577, Quiroga escribía al rey: "También he visto el papel de Escobedo antes de esto me lo ha mostrado pre[roto]lendo traerme a su parecer con él, y en verdad Señor que a todo lo que yo alcanzo y entiendo por lo que dicen cuantos tratan de las cosas de Flandes y desean el servicio de V.Md. que esta jornada no sólo conviene pero es muy necesaria

debió ser del agrado de Antonio Pérez, cuyas relaciones con el secretario de don Juan se habían ido deteriorando progresivamente desde el verano de 1577, cuando Escobedo llegó a Madrid (513). El que hasta entonces había sido uno de los principales instrumentos de las intrigas de Pérez había pasado a convertirse en un personaje incómodo y peligroso, que amenazaba con poner al descubierto los manejos políticos y financieros urdidos por el secretario y la princesa de Eboli. La enorme influencia que Pérez había adquirido sobre el ánimo del monarca le permitió convencer a Felipe II de la necesidad de eliminar físicamente a Escobedo, a lo que también se mostró inclinado el consultado marqués de los Vélez (514). Parece muy probable que otras personas cercanas a Antonio Pérez conociesen los planes para asesinar a Escobedo, como eran la propia mujer del secretario, Juana de Coello, y Gaspar de Quiroga, aunque, en la creencia de que la orden había partido de Felipe II, no presentaron ninguna oposición a este designio (515). No obstante, la rectitud de conciencia de Quiroga se debió ver alterada ante la idea de que se fuese a dar muerte a Escobedo. Al igual que había obrado con anterioridad en relación a la provisión del arzobispado de Toledo, Antonio Pérez supo acallar los escrúpulos albergados por Quiroga utilizando su influencia sobre el rey y las buenas relaciones que mantenía con la Santa Sede para intervenir decisivamente en que le fuese concedido el capelo cardenalicio. Una vez más, Pérez supo aprovechar la ambición de Quiroga para lograr atraerle a sus propósitos (516). Si bien

para el servicio de Dios y al de V.Md. y para el bien de la Cristiandad y para que los malos sean castigados para ejemplo del mundo y que vasallos no se rebelen contra su rey y señor y es necesario que V.Md. se resuelva y haga un gran esfuerzo para que los rebeldes teman y los vecinos se contenten con estar en sus casas". Además, solicitaba la concesión de un hábito para el secretario, cuestión sobre la que le había insistido Juan de Austria (AHN, Inq., libro 284, fol. 83).

(513).- G.MARAÑÓN, op. cit., I, pp, 257-270.

(514).- Ibid., pp, 345-352. Como apunta dicho autor, según se desprende de las declaraciones de los asesinos materiales, la decisión se debió tomar en torno a los últimos días de 1577.

(515).- Ibid., p, 317.

(516).- En una carta, sin fechar, que Mateo Vázquez dirigió a un comunicante anónimo, refería como Antonio Pérez había visitado a Antonio de Padilla, que se hallaba enfermo: "y dijomé [Padilla] también que en la plática se había atravesado hablar del arzobispo de Toledo, y que él [Pérez] le había dicho lo mucho que le había ayudado para lo del capelo, interpretando el presidente de Ordenes que aquello era para advertirle que podía y hacía amistad a quien el valía

este nuevo acrecentamiento resultó convincente para acallar el reconcomio de Quiroga, no debió eliminar totalmente su resquemor por las actividades desplegadas por el secretario regio. Esto viene a explicar las motivaciones que llevaron al Inquisidor General, en marzo de 1578, pocos días antes de que se llevase a cabo el asesinato, a tratar de poner en aviso al rey, de forma sutil e indirecta, de los manejos efectuados por Pérez, señalando al monarca el eje sobre el que giraban los mismos: su labor de intermediario en la comunicación que Juan de Austria mantenía con su hermano. Hacía llegar a Felipe II el disgusto que sentía Gabriel de Zayas al haber sido apartado del tratamiento de los asuntos de Flandes, y el menoscabo que sufría el secretario por esta causa. El rey, en su respuesta, justificaba esta medida no por desconfianza hacia los buenos oficios de Zayas, sino porque el propio don Juan así se lo había solicitado con gran instancia, llegando a condicionar su partida a los Países Bajos a que su correspondencia fuese únicamente despachada por Antonio Pérez (517). Igualmente, anunciaba al rey su marcha a su arzobispado toledano, siendo posible que quisiese evitar su presencia en la Corte cuando se produjesen los hechos, proponiendo al monarca la celebración de un sínodo diocesano (518).

Mientras tanto, los crónicos problemas económicos de la Monarquía hacían aconsejable reducir los costes de la política bélica desarrollada en los Países Bajos, recomendándose a don Juan que mantuviese el conflicto dentro de

y hacía por él" (CODDIN, Vol. 56, p, 189).

(517).- AHN, Inq., libro 284, fol. 94. Las minutas de las cartas despachadas como respuesta a Quiroga se encuentran en AZ, carp. 144, n° 362-363. Al margen anotaba Mateo Vázquez: "Sobre esto me ha hablado muy largo Zayas y cierto que es fuerte cosa y mucho para mirar lo que se usan estas negociaciones en el mundo, y sospecho que el otro secretario [Pérez] se va desvaneciendo demasiado lo que ni al servicio de V.Md. ni al bien público conviene, y quisiera yo no ser secretario para hablar más claro, aunque cierto no me pasa por pensamiento pretender otro oficio ninguno, que todas mis pretensiones vienen a parar a tener una retirada honrosa y quieta dondeirme a morir, cuando no esté para ayudar aquí, porque mi condición no puede llevar invenciones ni negociaciones de las que con tanto daño se usan".

(518).- Quiroga, finalmente, no pudo abandonar la Corte, de lo que se excusaba ante el monarca. En su respuesta, Felipe II decía: "Está muy bien esto, y si lo del sínodo hubiese de ser cosa larga y se pudiese dilatar, podreis ver si se dexara algo para más adelante, pues estando tan cerca podriades volver ahí a ello cuando le hubiese de tener" (IVDJ, envío 55 (caja 72), n° 72; AHN, Inq., libro 284, fol. 154).

unos márgenes que supusiesen unos gastos mínimos. La falta de claridad que estas órdenes implicaban respecto al camino a seguir motivaron a Juan de Austria a enviar a la Corte a Gaspar de Robles, para que representase ante el monarca, el marqués de los Vélez y Gaspar de Quiroga la necesidad de adoptar una resolución definitiva en torno a la continuación de la guerra o a la búsqueda de la concertación (519). Sin embargo, todos los intentos realizados por don Juan para variar su situación resultaron estériles a causa de la actuación de Antonio Pérez y de los miembros de la facción "papista", cuya postura en el Consejo de Estado se había visto reforzada por la inclusión en dicho organismo del duque de Sessa (520). El propio Quiroga, en carta remitida a Felipe II, el 30 de julio de 1578, aseguraba que para mejorar la marcha de los acontecimientos en Flandes era necesario que el gobernador "sea prudente y muy circunspecto y sin codicia porque esta era la raíz de todos los males". Comunicaba al rey que, a petición del conde de Chinchón, se había entrevistado con Federico Furió Ceriol, con quien había discutido ampliamente los motivos que habían conducido a la rebelión. Según informaba Quiroga, el valenciano había afirmado que la manera de someter aquellos territorios pasaba únicamente por dos soluciones. La primera consistía en que Felipe II enviase a un infante a los Países Bajos para que se educase según su condición y costumbres, mientras que, la segunda opción estaba referida a que constituyesen la dote de alguna de las infantas, que debía unir en matrimonio con el emperador o alguno de sus hermanos (521).

Sin embargo, en los días siguientes, el interés de la Corte se centraba en

(519).- El 23 de febrero de 1578, don Juan escribía a su amigo Rodrigo de Mendoza comunicándole el viaje de Robles y el carácter de su misión (A.MOREL-FATIO, op. cit., pp, 130-132). Junto a tan enjundioso asunto, Robles también intervino en cuestiones de menor importancia, como era el cambio de posada solicitado por Quiroga al rey, que mostró deseo de ocupar la que había sido de don Juan (IVDJ, envío 55 (caja 72), nº 100), proposición a la que el gobernador accedió gustosamente (A.MOREL-FATIO, op. cit., pp, 137-138).

(520).- S.FERNANDEZ CONTI, Los Consejos..., pp, 211-212.

(521).- AHN, Inq., libro 284, fols. 156-157; sobre la actuación de Furió Ceriol en torno a los Países Bajos, véase, P.D.LAGOMARSINO, Court factions and the formulation of spanish policy towards the Netherlands. University of Cambridge 1973, passim. Un estudio de su obra en M.BATAILLON, op. cit., pp, 551-555, 630-633.

las noticias que llegaban de Portugal en relación a la confirmación de la muerte del rey don Sebastián en la batalla de Alcazarquivir. Su desaparición inauguró un doble proceso. Al decidido intento de Felipe II de anexionar Portugal a la Monarquía hispana, vino a sumarse el declive de la facción cortesana encabezada por Antonio Pérez. De este cambio de situación no pudo beneficiarse Juan de Austria, que fallecía el 1 de octubre de 1578, aislado por el doble juego desarrollado por el secretario regio (522). La gobernación de los Países Bajos fue encomendada por Felipe II a Alejandro Farnesio, quien había acompañado en sus últimos avatares a su antecesor, y que, como éste, se encontraba vinculado al "partido papista" (523).

6.2.3. Arzobispo de Toledo

a/ La finalización del proceso de Carranza

La muerte de Pio V abría una nueva etapa en el devenir del largo proceso inquisitorial que se seguía en Roma contra el arzobispo de Toledo. Al nuevo pontífice, Gregorio XIII, buen conocedor de la causa y de las implicaciones que se derivaban de la misma, le correspondía la responsabilidad de dictar la sentencia que pusiese fin a tan problemático proceso. Sin embargo, si bien esta característica presagiaba una pronta resolución, el papa resolvió tornar a revisar el mismo, circunstancia que el fiscal Lucas Salgado aprovechó para solicitar la asistencia de nuevos consultores hispanos. Desde la Corte se agilizó el envío de cuatro nuevos teólogos, que junto con su aportación documental, fueron

(522).- Entre las cuestiones que el confesor de don Juan refería a Felipe II, tras la muerte de su hermano, ensalzando su labor, apuntaba: "Y después que Su Santidad le envió autoridad en todo lo eclesiástico a la persona que él nombrase en este felicísimo ejército de V.M. de Vicario General, como entendido habrá S.A. que está en gloria, avisado a V.M. por vía del arzobispo de Toledo, siendo servido mandármelo me dijo con grandísimo espíritu le ayudase a desterrar de este ejército las blasfemias" (CODOLIN, Vol. 7, pp. 254-255).

(523).- En torno a estas consideraciones, véase, A. RODRIGUEZ VILLA, "Correspondencia de Alejandro Farnesio, duque de Parma" Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos (2ª época) 9 (1883), pp. 352, 439-440; J. MARTINEZ MILLAN, "Alexandre Farnese, la Corte di Madrid e la Monarchia Cattolica" I Farneses: Corti, Guerra e Nobilita in Antigo Regime. Piacenza, noviembre 1994 (ponencia mecanografiada).

admitidos por Gregorio XIII a la vista de la causa. Las congregaciones en torno al proceso de Carranza se reanudaron en noviembre de 1572, lo que terminaba con la posibilidad de que se alcanzase una rápida solución (524).

Mientras, en los sucesivos meses, Gregorio XIII era debidamente informado de los pormenores del dilatado proceso, desde la Corte hispana no cesaron los intentos orientados a obtener un resultado acorde a los deseos de Felipe II. Tras la ocupación del cargo de Inquisidor General por parte de Gaspar de Quiroga, que, al igual que el pontífice, estaba altamente familiarizado con este asunto, sus gestiones al frente de la Suprema se centraron en lograr este objetivo. Así, por una minuta de carta confeccionada en contestación a las noticias remitidas por Juan de Zúñiga, fechada el 1 de agosto de 1573, conocemos el buen acogimiento que se tuvo del talante con el que Gregorio XIII estaba conduciendo las actuaciones relacionadas con la causa, así como el continuo encarecimiento de que se alcanzase justicia en un negocio en el que se estimaban comprometidos el honor y quietud de la Monarquía junto con el acrecentamiento de la Iglesia. No obstante, tanto este borrador (525), como en las sucesivas comunicaciones mantenidas con el embajador Juan de Zúñiga, quedaba reflejado como la principal preocupación del rey, y por extensión también de Quiroga, era lograr el compromiso papal de que fuese enviada noticia a la Corte hispana de lo que contuviese la sentencia antes de que se hiciese pública. Se encargaba a Zúñiga que insistiese ante el pontífice de la conveniencia de proceder de esta forma, refiriendo como apoyatura que Pío V

(524).- A Roma acudieron el maestro Francisco Sancho, catedrático de Teología y decano de la Universidad de Salamanca, ciudad donde desempeñaba también la labor de comisario inquisitorial, fray Juan Ochoa, fray Diego de Chaves y fray Juan de la Fuente, dominicos (J.I.TELLECHEA IDIGORAS, *El proceso romano...*, pp, 41-46; Ibid., "Memorias sobre el proceso y muerte..." ,pp, 228-229; Ibid., "Fray Rodrigo de Vaillo, OSB, en el proceso romano de Carranza" *Yermo* 14 (1976), pp, 75-77).

(525).- Quiroga escribía al margen del mismo: "pareceme que por la manera que a v.m. pareciese más a propósito de entender la voluntad de su Md que es saber la sustancia de la sentencia antes que se publique y pronuncie" (RAH, "Salazar" R-63, fol. 183).

había accedido a dicha petición (526).

Por otra parte, la admisión de nuevos teólogos hispanos en la comisión encargada del proceso contribuyó a que la Inquisición pusiese en marcha una nueva actuación: obtener la retractación de las censuras favorables realizadas por diversos teólogos al Catecismo de Carranza. En febrero de 1574, se iniciaron las conversaciones con el arzobispo de Granada, Pedro Guerrero, y con Francisco Blanco, que ocupaba la prelación de Málaga y había sido electo para la mitra de Santiago, consiguiendo que ambos revocasen sus anteriores pareceres y emitiesen un juicio condenatorio. De igual manera se actuó sobre Francisco Delgado, obispo de Jaén, lográndose el mismo resultado. Ninguno de los prelados se había mostrado proclive a la variación de sus criterios, pero la presión ejercida sobre ellos por los enviados del Consejo de Inquisición, Francisco de Orantes, Juan de la Fuente, y, principalmente, por el licenciado Serrano, relator de la Suprema, les convenció de que tras la misma se encontraba la mano de Gaspar de Quiroga como ejecutor de la voluntad del rey. Así pues, a pesar de los escrúpulos demostrados, se plegaron y obedecieron los deseos del monarca (527). Sus censuras fueron remitidas a Roma durante los meses de mayo y junio, coincidiendo con la licencia de Gregorio XIII para que Felipe II fuese informado por Diego de Simancas y Diego de Chaves sobre los aspectos jurídicos y teológicos concernientes al proceso (528). A pesar de las gestiones

(526).- Las minutas de cartas, fechadas entre el 25 de noviembre de 1573 y el 22 de junio del año siguiente, fueron escritas por mano del secretario Zurita y revisadas por Gaspar de Quiroga. En las mismas, se insiste sobre esta cuestión repetidamente (Ibid., fols. 189, 191, 198, 200).

(527).- Sobre este asunto, véase, V.BELTRAN DE HEREDIA, "La retractación de las censuras favorables al "Catecismo" en el proceso Carranza" La Ciencia Tomista 54 (1936), pp. 312-321; B.LLORCA, "Sobre el proceso Carranza. Diversos dictámenes dados en esta célebre causa por el arzobispo de Granada Don Pedro Guerrero" Estudios eclesiásticos 14 (1935), pp. 75-103; J.A.LLORENTE, Historia crítica de la Inquisición en España. Madrid 1980, III, pp. 46-48, 200-204; E.LLAMAS-MARTINEZ, "Documentación Mss sobre Carranza...", pp. 277-284. En carta que Gaspar de Quiroga remitió al monarca, en julio de 1576, atribuía los méritos de la mudanza de parecer de los prelados a los oficios realizados por el relator Serrano, para el que solicitaba al rey la concesión de alguna merced en premio a su eficacia (BL, Eg. 1506, fol. 23).

(528).- La actuación desarrollada por Simancas, encaminada a obtener el permiso papal para poder remitir a la Corte hispana dichos informes, que se estimaban de gran utilidad, mereció la explícita felicitación de Gaspar de Quiroga (J.I.TELLECHEA IDIGORAS, "Cartas inéditas de un inquisidor por oficio. El Dr. Simancas y el proceso romano de Carranza" Homenaje a Julio Caro

realizadas por Juan de Zúñiga ante el papa, éste se negó a aceptar las nuevas calificaciones presentadas procedentes de los obispos. A la insistencia que Gaspar de Quiroga y el Consejo de Inquisición realizaron a través del embajador con la finalidad de convencer al pontífice, estimando muy conveniente su inclusión en el proceso por el crédito con el que contaban dichos prelados (529), se opuso la fuerte resistencia del papa, que aludía como razones de su rechazo la negativa de su antecesor, Pío V, a admitir nuevas calificaciones después de 1571, y la circunstancia de que los obispos hubiesen realizada esta labor de censura obedeciendo las órdenes del rey, cuando la causa dependía de la Santa Sede, lo que las convertía en irregulares jurídicamente. La habilidad diplomática de Zúñiga venció la resistencia de Gregorio XIII que, mediante un breve, comisionó al Inquisidor General para que tornase a tomar nuevas calificaciones a Pedro Guerrero y a Francisco Blanco, esta vez por mandato pontificio. Semejantes documentos papales se extendieron en relación a la revisión de las censuras hechas por Francisco Delgado, y también por los teólogos Hernando Barriovero, canónigo magistral de la iglesia de Toledo, y el Maestro Mancio, quienes habían sido llamados a Madrid para que apoyasen igualmente con sus nuevas calificaciones las efectuadas por los prelados. Las elaboradas por Guerrero y Blanco se hallaban nuevamente en Roma en febrero de 1575 (530).

Así mismo, la actividad de Gaspar de Quiroga al servicio de la obtención de una sentencia condenatoria para Carranza no se limitó a sus actuaciones al frente del Consejo de Inquisición, puesto que, siguiendo siempre las indicaciones del monarca, aprovechó las buenas relaciones que mantenía con el nuncio en la Corte hispana para comunicarle, en julio de 1574, los inconvenientes y el escándalo que se derivaría si se produjese el retorno de Carranza a Toledo, así como la necesidad de pastor de la que estaba aquejada dicha iglesia (531).

Baroja. Madrid 1978, pp, 974-977, 996-997).

(529).- RAH, "Salazar" R-63, fols. 204, 212-213.

(530).- V.BELTRAN DE HEREDIA, op. cit., pp, 321-327; J.I.TELLECHEA IDIGORAS, El proceso romano..., pp, 51-53.

(531).- BL, Eg. 1506, fol. 22; E.LLAMAS MARTINEZ, "Documentación Mss..." p, 277.

Sin duda, estas observaciones, que Quiroga realizaba como si fuesen de propia iniciativa, escondían, por una parte, el temor a que Gregorio XIII terminase por emitir una sentencia absolutoria, puesto que, según las informaciones que llegaban a la Corte, la condescendencia del pontífice con las solicitudes realizadas por la Inquisición se debían a su falta de intención de resolver con prontitud sobre la causa por la influencia que sobre su ánimo representaba la memoria de Pío V y sus juicios sobre la misma (532), mientras que, por otra, contrastaban el interés del propio monarca sobre la cuestión del futuro del importante arzobispado toledano. Sin embargo, la aceptación de las nuevas censuras por parte de Gregorio XIII fue considerada en la Corte como un signo de que el proceso se iba inclinando poco a poco a favor de sus pretensiones, considerándose conveniente aprovechar esta coyuntura favorable para seguir ejerciendo presiones. El 17 de febrero de 1575, en la misma fecha que se hizo envío de las calificaciones del obispo de Jaén y del doctor Barriovero, el monarca remitió al pontífice una carta en la que relataba la importancia de que Carranza fuese castigado por sus errores y las dificultades que conllevaba que la emisión de una sentencia se siguiese dilatando. Felipe II no olvidaba ratificar su solicitud de que la misma fuese puesta en su conocimiento antes de hacerse pública (533).

Finalmente, en enero de 1576, Juan de Zúñiga consideraba que todas las gestiones inherentes al proceso estaban terminadas, por lo que retomó su enérgica actividad sobre el pontífice para lograr la revisión de la sentencia en Madrid antes de su publicación. Si bien el papa reiteró su negativa a este deseo, sí permitió que informase al rey sobre el contenido de la misma, recibiendo desde la Corte una instrucción del monarca, fechada el 2 de abril, elaborada por los miembros de la Suprema y revisada por Gaspar de Quiroga, respecto a cómo se debía proceder en cuanto a la determinación de la causa. En ésta se insistía

(532).- J.I.TELLECHEA IDIGORAS, "Cartas del inquisidor Temiño sobre el proceso romano de Carranza" *Revista Española de Teología* 39-40 (1979-1980), pp, 367-368; Ibid., "Cartas inéditas de un inquisidor por oficio..." pp, 977-978.

(533).- La minuta de dicha carta, elaborada por Jerónimo Zurita, se encuentra en, RAH, "Salazar" R-63, fol. 218.

en las cuestiones que se habían apuntado en los meses precedentes: la conveniencia de que fuese comunicada a Felipe II la sentencia antes de que transcendiese, y que, como se consideraba probado el carácter herético de algunas afirmaciones del reo, en ningún caso se debía permitir que volviese a hacerse cargo de la mitra de Toledo. Aunque se podía admitir que Carranza conservase nominalmente la dignidad arzobispal, jamás retornaría a su ejercicio. Para encargarse de la ocupación efectiva del cargo, el monarca había pensado en su sobrino, el archiduque Alberto, quien recibiría además nombramiento para la sucesión tras la muerte de Carranza (534).

La sentencia fue firmada por Gregorio XIII el 10 de abril, y comunicada a Carranza cuatro días después. Felipe II fue avisado de la determinación papal, aunque sin tiempo para la réplica. Su contenido, así como las lecturas e interpretaciones que derivan del mismo, han propiciado diversos estudios (535), aunque la mayoría de los autores coinciden en señalar el carácter "salomónico" de la determinación papal, que evitaba la declaración de culpabilidad referida al reo, después de diecisiete años de prisión, pero que tampoco proclamaba su inocencia. El proceso se cerraba con una reprimenda por

(534).- Sobre las órdenes del rey al embajador y la intervención de Quiroga, que supervisaba la correspondencia entre ambos sobre dicho asunto, véase, *Ibid.*, fols. 228, 230, 234-235, 237-238; V.BELTRAN DE HEREDIA, "La retractación...", pp. 328-332; E.LLAMAS MARTINEZ, "Documentación Mss..." pp. 284-286.

(535).- Carranza fue considerado sospechoso, que no culpable, de haber mantenido diecisiete proposiciones erróneas, de las que se le obligaba a adjuar. Se le confinaba en un monasterio de Roma y se le apartaba cinco años, ampliables a voluntad del pontífice, del ejercicio del cargo de arzobispo de Toledo (V.BELTRAN DE HEREDIA, *op. cit.*, pp. 333-336; J.I.TELLECHEA IDIGORAS, "El final de un proceso. Sentencia original de Gregorio XIII y adjuración del arzobispo Carranza" *Scriptorium Victoriense* 23 (1976), pp. 202-232; A.HUERGA, "La muerte de Carranza" *Cuadernos de Investigación histórica* 5 (1981), pp. 15-27; L.PASTOR, *op. cit.*, XIX, pp. 284-286). Una copia de la correspondencia entre Juan de Zúñiga y Felipe II, en la que el embajador informa primero de la sentencia del proceso y, posteriormente, de la muerte de Carranza, se encuentra en RAH, "Salazar" R-63, fols. 145-146. El 26 de junio, Quiroga respondió a Zúñiga, en nombre del rey, agradeciéndole sus buenos oficios, y enviándole el pasaje para que retornasen los asistentes al seguimiento de la causa en Roma (*Ibid.*, fol. 248), quienes, al igual que el propio Carranza, habían vivido su dilatada estancia como una prisión. En este sentido, junto a los estudios ya citados que recogen la correspondencia de Vaillo, Temiño y Simancas durante los años que duró el proceso, véase, J.I.TELLECHEA IDIGORAS, "El Cardenal Gaspar de Gaete (1511-1575). Arzobispo de Salerno y Tarragona" *Analecta Sacra Tarraconensia* 51-52 (1978-79), pp. 295-321; *Idem*, "El doctor Pazos en el proceso Carranza (Cartas inéditas)" E.VERDERA Y TUELLS (Ed.), *El Cardenal Albornoz y el Colegio de España*. Bolonia 1979, V, pp. 451-531.

los errores cometidos, dejando así a salvo el honor y la autoridad del Santo Oficio hispano. No obstante, quedaba por resolver definitivamente una cuestión en ningún modo valadí. Carranza había sido suspendido, pero no privado de la mitra toledana. Sin embargo, su pronto fallecimiento, acaecido el 2 de mayo de 1576, conllevó que esta determinación careciese de consecuencias. Su muerte abrió principalmente dos cuestiones en las que Gaspar de Quiroga se encontró directamente implicado. La primera estaba relacionada con la administración de las rentas del arzobispado toledano durante los años de prisión de Carranza y en la sede vacante, mientras que la segunda de ellas estaba referida a la designación del nuevo arzobispo (536).

b/ La administración de las rentas del arzobispado de Toledo

Cuando en 1559 Bartolomé de Carranza fue procesado por la Inquisición, tanto sus pertenencias personales como las rentas del arzobispado de Toledo fueron secuestradas por el Santo Oficio, configurando un depósito destinado a sufragar los gastos derivados de la causa. Esta riqueza había sido administrada junto con la Suprema, por privilegio papal, por los cuatro gobernadores que se habían ocupado sucesivamente de esta demarcación. Estos fueron Diego Ramírez, Gómez Tello Girón, Diego de Zúñiga y Sancho Busto de Villegas (537). El control establecido sobre dichos recursos y en torno a la gestión realizada por los gobernadores por parte del rey fue riguroso. Así, Busto de Villegas fue encargado de tomar las cuentas a sus predecesores, mientras que su

(536).- El 22 de mayo, Felipe II volvía a escribir a Zúñiga, desconociéndose en Madrid aún la publicación de la sentencia y el fallecimiento de Carranza. En la carta, insistía en que su sobrino Alberto debía ser nombrado sucesor en la mitra de Toledo, manteniendo sólo Carranza nominalmente la dignidad (E.LLAMAS MARTINEZ, "Documentación Mss..." pp, 286-288).

(537).- Gómez Tello Girón gobernó el arzobispado desde noviembre de 1560 hasta 1569, en que se produjo su fallecimiento. Tras su muerte, Felipe II nombró gobernador para los asuntos temporales al corregidor Diego de Zúñiga, mientras que para ocuparse de las cuestiones espirituales fue nominado por el papa el consejero de la Suprema Busto de Villegas (J.I.TELLECHEA IDIGORAS, "Memoria sobre el proceso..." p, 226: "No se puede evitar la sospecha de que esta escrupulosa división de poderes oculta intereses manejos, como más tarde se demostró").

propia actuación fue sometida al examen de Hernando de Vega (538). De igual manera se actuó en relación a las partidas que eran demandadas por Lope de Avellaneda, custodio de Carranza, quien se trasladó con el preso a Roma, donde se hizo cargo de administrar las partidas de dinero provenientes de las rentas toledanas que debían emplearse en la atención de la persona del arzobispo y de sus criados, así como en el pago de los salarios de las personas que acudieron a Roma por mandato de la Inquisición para el seguimiento de la causa. Sus cuentas fueron revisadas en 1568 y en 1573, realizando esta última actuación Antonio Mauricio de Pazos, cuyas apreciaciones en referencia al mecanismo por el que el dinero era remitido a Roma provocaron un cambio de proceder en la financiación del proceso inquisitorial (539).

Si bien parece claro que el sostenimiento de la causa precisó importantes sumas de dinero, éstas quedaban perfectamente cubiertas por las pingües rentas del arzobispado. No obstante, en los meses anteriores a la promulgación de la sentencia, las quejas de los inquisidores y de los criados de Carranza sobre la falta de pago de sus salarios se reiteraron. Sin duda, no era ajena a esta situación la desfavorable coyuntura económica que atravesaba la Monarquía en torno a 1575, por lo que en Roma arreciaron las críticas de los partidarios del arzobispo, que atribuían la dilación en la resolución del proceso a los beneficios económicos

(538).- El 3 de julio de 1572, Busto de Villegas fue comisionado por el rey para que tomase las cuentas de los frutos del arzobispado toledano desde el día que se terminaron con Gómez Tello Girón, así como de lo que había recibido este gobernador hasta el día de su fallecimiento (RAH, "Salazar" R-63, fols. 77r-78r). Las respuestas que recibió Busto de Villegas a las dudas que presentó en relación a este poder se encuentran en, IVDJ, envío 57 (caja 77), fols. 336r-340v. Su actividad provocó la reclamación sobre cierta libranza del hermano y heredero de don Gómez, Hernando Girón, que fue comunicada por la Suprema a Busto de Villegas en marzo de 1574 (AHN, Inq., libro 326, fols. 179v-180r). La comisión real otorgada a Hernando de Vega para revisar las cuentas de Busto de Villegas, fechada el 17 de julio de 1575, en *Ibid.*, libro 251, fols. 62r-63r.

(539).- Sobre dichos aspectos, véase, J.I. TELLECHEA IDIGORAS, *El proceso romano...*, p. 56; Idem, "Aspectos económicos del proceso de Carranza (1567-68)" *Príncipe de Viana* 128-129 (1972), pp. 193-263; Idem, "El doctor Pazos en el proceso de Carranza..." pp. 515, 522-525; H. PIZARRO LLORENTE, "Banqueros e inquisidores: Módica y la financiación del proceso del arzobispo Carranza (1573-1578)" *Tra Spagna e Sicilia: La Contea in Eta Moderna*. (En prensa).

que el monarca estaba recibiendo de la hacienda de Toledo (540). La crítica situación económica y la necesidad urgente de numerario con el que atender los costes de la política de la Monarquía provocaron que Felipe II utilizase los recursos del arzobispado toledano para otros fines que nada tenían que ver con el proceso inquisitorial. En este sentido, el 17 de agosto de 1574, Busto de Villegas escribía al rey informando de las quejas recibidas desde Roma a causa de la falta de dinero para cubrir los gastos y alimentos del preso, así como la nómina salarial. El gobernador aseguraba que, si bien en ningún momento se les había comunicado explícitamente, tanto los estantes en Roma como el nuncio sospechaban que esta situación estaba provocada por la apropiación que Felipe II había realizado de estas rentas. El propio Busto de Villegas estimaba que la cantidad percibida por el monarca alcanzaba, aproximadamente, el millón de ducados, lo que había debilitado seriamente los recursos toledanos, y hacía muy difícil atender las nuevas demandas del monarca sobre las mismas en relación a una Cédula librada a favor de Juan Fernández de Espinosa, asentista directamente relacionado con el mantenimiento y provisión de los ejércitos en Flandes (541). Aducía, además, que esta orden de pago contravenía el asiento establecido entre su propia persona y el secretario Escobedo para que estos frutos no se pagasen al contado ni recibiesen consignaciones, porque era necesario cubrir deudas y pensiones que se mantenían atrasadas, así como atender los gastos del proceso inquisitorial, que el gobernador estimaba prioritarios, pues representaba un agravio que de las rentas del arzobispo no se pudiese librar lo que correspondía a su alimentación para favorecer el pago de los intereses a Juan Fernández de Espinosa (542). La disposición de las

(540).- Esta acusación se había vertido desde el comienzo de la causa (J.I.TELLECHEA IDIGORAS, "Cartas del inquisidor licenciado Temiño..." pp, 368-369). Por otra parte, parece claro que Felipe II tomó préstamos de los frutos del arzobispado toledano desde el comienzo del proceso inquisitorial (M.ULLOA, La Hacienda Real..., p, 384).

(541).- Sobre dicho personaje, véase, C.J.DE CARLOS MORALES, "Finanzas y relaciones clientelares en la Corte de Felipe II: Juan Fernández de Espinosa, banquero y ministro del rey" Política, religión e Inquisición en la España moderna, pp, 221-237.

(542).- Esta interesante carta se encuentra en E.LLAMAS-MARTINEZ "Documentación Mss sobre Carranza...", pp, 280-281; El reconocimiento efectivo de que la deuda adquirida con el arzobispado de Toledo ascendía a un millón doscientos mil ducados, en A.W.LOVETT, Philipp II and Mateo Vázquez..., pp, 74-77.

rentas toledanas por parte del rey había sido absoluta, empleándolas también para atender las necesidades económicas de su hermana, la emperatriz María. En relación a esta situación, en abril de 1576, Felipe II comunicaba a Juan de Zúñiga su intención de solicitar a Gregorio XIII, tras la resolución final del proceso inquisitorial de Carranza, que le exonerase de reponer la cantidad global que hubiese tomado de estos frutos, puesto que había procedido así obligado por circunstancias "graves" y "urgentes" causadas por su anhelo de favorecer a la cristiandad (543). Sin duda, el monarca contaba con la obtención de una sentencia condenatoria que privaría a Carranza de su mitra. Sin embargo, como hemos señalado, el veredicto papal suspendía al prelado durante cinco años y establecía la provisión de doce mil ducados de las rentas arzobispales para los gastos de su manutención.

Si bien la promulgación de la sentencia no produjo ningún cambio en relación con los frutos de la prelación toledana, la pronta muerte de Carranza provocó una nueva situación. Anulado el testamento del prelado por no cumplir los preceptos jurídicos, las rentas del arzobispado se convirtieron en un nuevo motivo de disputa jurisdiccional entre la Santa Sede y la Monarquía hispana. Desde Roma se instó al nuncio Ormaneto, que actuaba como colector, para que iniciase las gestiones necesarias para hacerse cargo del cobro de las mismas desde el día que se produjo el óbito de Carranza hasta que fuese nombrado el nuevo arzobispo. Unos días después, era remitido a Madrid un breve por el que Ormaneto y Gaspar de Quiroga quedaban facultados para examinar las cuentas pertenecientes al arzobispado durante los años que Carranza estuvo en prisión, desde que se produjo su apresamiento por la Inquisición hasta el día de su muerte (544). Por otra parte, esta situación favorecía la actuación del Inquisidor General para apartar a Busto de Villegas, personaje cercano a Mateo

(543).- E.LLAMAS-MARTINEZ, *op. cit.*, pp. 285-286.

(544).- A.HUERGA, "La muerte de Carranza", pp. 22-23; Los despachos llegados de Roma se vieron en el Consejo de Inquisición en la sesión de la tarde con la presencia de los dos miembros del Consejo de Castilla que asistían a la Suprema, despachándose cédulas para el corregidor de Toledo y el gobernador del arzobispado así como unas detalladas instrucciones confeccionadas por Mateo Vázquez (IVDJ, envío 53 (caja 69) n° 105-106).

Vázquez, de la gobernación y cobro de las rentas del arzobispado toledano. Según comunicaba a su patrón, Quiroga y el nuncio, tras consultar con Felipe II, habían cometido la realización de las cuentas a Pedro Núñez de Toledo, quien rápidamente requirió los papeles al contador Lucas Ruiz (545). De igual manera, cuando la noticia de la muerte de Carranza fue recibida por el cabildo de la catedral toledana, se aprestaron a acudir a Felipe II para que se respetasen sus prerrogativas durante la sede vacante. El monarca dejó en manos del consistorio el discernimiento de las cuestiones espirituales, reservándose el gobierno temporal. No obstante, el conflicto se desató cuando el nuncio envió al capítulo el breve por el que el pontífice, a través de su delegado, pasaba a hacerse cargo de los asuntos temporales. El cabildo informó al rey, oponiéndose a las pretensiones de Ormaneto. Sin embargo, ante las censuras presentadas por el nuncio, el consistorio se vió forzado a obedecer la orden papal (546). Esta actuación provocó la intervención real a través del Consejo de Castilla, que envió a Toledo a uno de sus miembros, Francisco de Villafañe para que asumiese la gobernación de los asuntos temporales y pusiese al día los cobros de las rentas del arzobispado. Si bien su labor se había planteado teóricamente de forma diferenciada de la que por mandato del nuncio y de Quiroga estaba realizando Pedro Núñez de Toledo, representaba una clara injerencia de la jurisdicción

(545).- Busto de Villegas era consciente de que con esta medida se perseguía su descrédito: "porq temo q tn^a a desacreditar en no buena coyuntura lo cual sera fácil en esta era" (Ibid., envío 91 (caja 131) n° 563 y 565); Por otra parte, la estrecha relación existente entre Quiroga y Pedro Núñez de Toledo se remontaba a años atrás. En una minuta de carta remitida por Juan de Zúñiga al rey en noviembre de 1573 refería: "...he tenido mucho contentamiento de haber aclarado que lo que se escribió a Pedro Núñez de Toledo salió del obispo de Cuenca, por que me daba pena sospechar que en negocio de tal cualidad no hubiesen guardado las personas a quien V.M. lo había comunicado el secreto que era justo" (CODIN, Vol. 102, p. 339).

(546).- Si bien el cabildo catedralicio había mantenido una postura favorable a Carranza durante el desarrollo del proceso (véase, en este sentido, la pormenorizada relación que Busto de Villegas remitió al monarca el 31 de Marzo de 1576 sobre la estrecha vinculación que unía a la mayoría de sus miembros con el arzobispo preso y el ambiente de euforia que se vivía en la ciudad con motivo de los rumores de que la sentencia era absolutoria, así como la necesidad de adoptar medidas especiales, Ibid., s.n.), cuando se conoció su fallecimiento se despertaron también en su seno las ambiciones (J.I. TELLECHEA IDIGORAS, "Memorias sobre el proceso...", pp. 231-232); Según informaba Francisco Dávila, arcediano de Toledo, a Felipe II, el 3 de julio de 1573, se habían visto forzados a plegarse al nuncio "no se aviendo por parte de VMd mandado el orden como se avia de defender". El propio Dávila había sido nombrado por Ormaneto juez de las causas temporales para todo el arzobispado, y requería saber cual era la orden real para poder contestar al nuncio (AZ, Carp. 128, n° 181).

regia en los asuntos de la Cámara apostólica (547). Este nuevo conflicto había venido provocado por una cuestión meramente económica. La comprometida situación que atravesaba la Monarquía había propiciado que el Monarca se sirviese de unos sustanciosos fondos cuya finalidad debía ser otra. Ante la imposibilidad de su reposición, la intervención se vio forzada cuando la repentina muerte de Carranza impidió que Felipe II tuviese tiempo para obtener del pontífice la concesión de los mismos.

Así pues, Villafañe se aplicó en los meses siguientes en esclarecer las cuentas del arzobispado de Toledo durante los años de prisión de Carranza, tratando de definir con exactitud los fondos que había empleado Felipe II en diversos asuntos de la Monarquía. Esta cuestión fue considerada de máxima importancia. Durante el mes de julio de 1576, Mateo Vázquez escribía repetidamente al monarca acerca de como, según las ordenes recibidas, se había comenzado a actuar en los temas más urgentes, entre los que se encontraba la gestión de las rentas toledanas, sobre las que junto al mismo secretario y su protegido, Sancho Busto de Villegas, se estaba empleando el contador Garnica (548). La necesidad de resolver con prontitud esta cuestión venía además determinada por los requerimientos que desde Roma se realizaban por parte de las personas con las que se habían establecido cédulas de cambio sobre los fondos arzobispales para el mantenimiento de la causa inquisitorial. El 27 de agosto, el embajador Juan de Zúñiga había remitido a la Suprema el breve papal

(547).- R. HINOJOSA, Los despachos de la diplomacia..., pp, 225; Sobre las primeras gestiones realizadas por Villafañe y los problemas que tuvo en relación a la provisión de los oficios del arzobispado, véase, AZ, carp. 128 n° 183-186, 192 y 194. En torno al talante de la actuación de Villafañe en el cobro de las rentas del arzobispado y la consulta realizada por Quiroga al rey, véase, BL, Eg. 1506, fol. 30r.

(548).- E. LLAMAS-MARTINEZ, "Documentación Mss. sobre Carranza...", pp, 289-290; Una copia de la carta que Busto de Villegas remitió a Antonio Pérez el 12 de julio, en respuesta a la orden real recibida para que elaborase una relación de lo que había rentado el arzobispado desde que se produjo la prisión de Carranza hasta su muerte y la cantidad con la que se había socorrido al rey de sus frutos se encuentra en AZ, carp. 159 n° 17. En la misma establecía que, si bien, a causa de haber tenido que entregar sus libros tenía que hacer los cálculos de memoria, estimaba que el monarca había tomado millón y medio de ducados. Una anotación al margen refiere que, según reflejaban los libros "esto no es tanto con mucho". De igual manera recordaba que aún quedaban por pagar algunos conceptos y recomendaba la venta de algunas de las pertenencias del arzobispo.

por el que se mandaba que el dinero fuese abonado a los que les era adeudado, pues la dilación estaba creando dificultades a los fiadores. Los consejeros Redín, Rodrigo Vázquez, Jerónimo Manrique y Tomás de Salazar junto con Gaspar de Quiroga informaron que, teniendo en cuenta el estado en que se encontraban las gestiones que estaba desarrollando Villafañe, podrían resultar inconvenientes en poner este breve en ejecución, donde aparecía nombrado el nuncio como persona encargada de la supervisión de las cuentas. La resolución adoptada fue que, para evitar la intromisión del nuncio en dicho asunto, los consejeros Redín y Rodrigo Vázquez tratasen con el presidente del Consejo Real advirtiéndolo a Villafañe de los pasos que debía realizar (549). De igual manera, también se multiplicaban las peticiones de cobro por parte de los deudos y criados de Carranza. Puestas en conocimiento del Presidente del Consejo Real admitió que Villafañe accediese a realizar los pagos si el nuncio y Gaspar de Quiroga ponían en ejecución la orden de cobranza en función del poder que les otorgaban los breves que poseían. No obstante, se adoptaron ciertas precauciones sobre esta actuación. Mateo Vázquez presionó a Gaspar de Quiroga, quien se avino a enviar a Felipe II una copia de los documentos papales para que pudiesen ser revisados en el Consejo de Castilla en prevención del surgimiento de inconvenientes (550).

La situación no sufrió variaciones durante la primera mitad de 1577, centrándose todos los esfuerzos en favorecer las gestiones realizadas por Villafañe e impedir cualquier intento por parte del nuncio de realizar nuevas actuaciones, siendo Gaspar de Quiroga una pieza clave para orientar convenientemente sus intenciones (551). Sin embargo, el 18 de junio fallecía

(549).- RAH, "Salazar" R-63 fol. 255. En este sentido, hemos de recordar, que los dos consejeros pertenecían a ambas instituciones.

(550).- C.RIBA GARCIA, Correspondencia privada de Felipe II..., pp. 53-54, 69-70, 73-74: "Fui al Inquisidor General a lo de los deudos del Arçobispo, y quantas, y para lo que toca a estas me dixo que enbiaria a Vuestra Magestad los breves o copia, dixe los 4 puntos acordados para dezir al Nuncio, y pareciole todo muy bien".

(551).- En este sentido, véase, Ibid., p. 93; IVDJ, envío 53 (caja 69) n° 32; Ibid., envío 91 (caja 131) n° 743-745; El 1 de junio Quiroga comunicaba al monarca como se estaba informando "del orden que se podría tener en las cosas q entiende el Doctor Villafañe en caso q él se hubiese de

Ormaneto. La muerte del nuncio abría una nueva etapa en relación con el asunto de las rentas toledanas (552). Su sustituto, Felipe Segá, fue debidamente informado de los pormenores de la cuestión, recibiendo el encargo de insistir ante el rey en que el Consejo Real dejase de inmiscuirse en el cobro de las rentas, así como que dichos frutos debían permanecer en depósito y ser empleados en aquello que el pontífice estimase conveniente, siendo preciso para ello terminar con la toma de las cuentas. Con estas instrucciones, el nuevo nuncio llegó a Madrid a finales del mes de agosto. No obstante, el nombramiento de Segá contaba con una novedad respecto a las atribuciones que había ejercido su predecesor, puesto que las funciones de colector y nuncio, hasta entonces unificadas, fueron desgajadas, siendo nombrado colector Juan Bautista Cannobio (553). Por otra parte, la muerte de Ormaneto situaba a Gaspar de Quiroga en una privilegiada posición respecto al control de este asunto, puesto que se convertía en la única persona que contaba con poderes papales para entender en el mismo, habiendo aceptado además la provisión como nuevo arzobispo de Toledo el 19 de febrero de dicho año. Esta situación fue puesta de manifiesto por el embajador Juan de Zúñiga, quien en carta dirigida al rey el 28 de julio expresaba que no había podido averiguar si entre las facultades recibidas por Cannobio se encontraba la de entender sobre las cuentas de los frutos del arzobispado toledano, reconociendo que su ignorancia se debía a que había omitido hacer referencia a esta cuestión por si había caído en olvido, siendo muy conveniente para los intereses del rey que fuese únicamente Quiroga quien se

venir" (BL, Eg. 1506, fol. 60); Villafañe desarrolló dicha labor hasta el mes de octubre de 1577 (P.SALAZAR Y MENDOZA, Vida y sucesos prósperos y adversos de don Fr. Bartolomé de Carranza y Miranda. Madrid 1788, pp, 203-204).

(552).- El 7 de julio Quiroga escribía al rey: "Al doctor Pero Nuñez que hace las cuentas del tiempo de fray Bartolomé de Miranda pregunté como de mio si se podría embever el socorro que se hiciese a los criados del nuncio en alguna partida dijome que sí mandando V.Md. al doctor Villafañe que enviase aquí la cantidad que se les hubiese de dar y después embeverla en lo que V.Md. ha tomado de aquella hacienda conviene a saber que si V.Md. ha tomado un millón se añadiese esto que agora V.Md. les diese porque al papa solo se le ha de decir en grueso la cantidad que V.Md. ha tomado destos bienes" (BL, Eg. 1506, fol. 64r).

(553).- R.HINOJOSA, Los despachos..., pp, 221-226; A.FERNANDEZ COLLADO, Gregorio XIII y Felipe II en la nunciatura de Felipe Segá (1577-1581). Toledo 1991, pp, 28-29. Hemos de señalar que uno de los primeros personajes que recibió la visita del nuevo nuncio fue Gaspar de Quiroga.

ocupase de su resolución. En su respuesta, el propio Felipe II lamentaba que esta circunstancia no se hubiese producido, puesto que Cannobio recibió la comisión papal para, que igual que Ormaneto, se ocupase junto a Quiroga del discernimiento de las mismas (554). Finalmente, el óbito del nuncio abrió también nuevas expectativas para el cabildo de la catedral de Toledo, que solicitó al monarca la recuperación de la jurisdicción temporal del arzobispado, que les había sido arrebatada por éste. Felipe II aducía que, si bien estaba ya nombrado el nuevo prelado y no tardaría en producirse la toma de posesión, con lo que terminaría esta polémica, se podía condescender con esta petición, por lo que ordenaba que este tema fuese tratado en el Consejo Real y se buscase el medio de satisfacer esta demanda. Aseguraba que con ello también se contentaría al pontífice, quien hacía instancia sobre esto, aunque debía señalarse al cabildo que al recibir nuevamente esta jurisdicción no debían mudar los oficiales que Villafañe había designado para la gobernación de los lugares ni para la administración de la hacienda (555).

Así pues, Quiroga y Cannobio comenzaron a realizar la labor encomendada de forma conjunta, actuando el Inquisidor General en este sentido de igual manera que había procedido con Ormaneto, poniendo en conocimiento de Felipe II y del Consejo Real sus planes de actuación y consultando la forma correcta de proceder. Así, el 24 de octubre, Quiroga informaba al rey de como el Colector le había comunicado la conveniencia de cometer al contador mayor de la dignidad arzobispal, Lucas Ruiz, la toma de las cuentas de los cuatro primeros meses de 1576. Si bien Quiroga admitía que dicha actuación estaba dentro de la normalidad y que siempre se podría encargar una revisión de los balances efectuados, no había procedido a formalizar la comisión hasta no

(554).- La carta que el embajador dirigió al rey se encuentra en AGS, Estado, Leg. 930 (s.f.); La respuesta del monarca en *Ibid.*, Leg. 929, nº 195; Una copia del breve y comisión papal dirigida a Cannobio y Quiroga en IVDJ, envío 91 (caja 131) nº 579.

(555).- *Ibid.*, envío 53 (caja 69) nº 29.

conocer el parecer del monarca (556). Este se debía mostrar conforme con esta designación, puesto que según informaba Busto de Villegas a Mateo Vázquez, el 5 de noviembre, era Lucas Ruiz quien tenía en su poder todos los libros referidos a las cuentas del arzobispado. No dejaba de mostrarse sorprendido de que el secretario real le hubiese demandado nuevamente una relación del dinero que había cobrado de dichas rentas, puesto que una semejante había entregado el año anterior al contador Garnica (557). Esto ponía de manifiesto dos cuestiones. En primer lugar, la falta de comunicación y el enfrentamiento existente entre Vázquez y Garnica, y por otro, que restaba por realizarse la toma de las cuentas referidas al periodo de la sede vacante. Si bien Pedro Núñez de Toledo había finalizado su labor, no obstante, quedaban por efectuarse los balances referidos a las funciones ejercidas por Francisco de Villafañe, que por haberse ocupado de la cobranza de las rentas arzobispaes dentro del mismo año en que terminó dicha ocupación Busto de Villegas, había impedido poner el colofón al rendimiento de las cuentas de éste. En este sentido, hemos de señalar que, aunque Pedro Núñez de Toledo había terminado sus trabajos en relación con la comisión recibida por Ormaneto y Quiroga para la toma de las cuentas del arzobispado toledano, siguió vinculado a este asunto realizando diversas informaciones, si bien cambió sus afectos en relación con las facciones cortesanas que pugnaban por el poder en la Corte filipina. Aunque había accedido a efectuar esta función por su cercanía a Ormaneto y a la facción "papista", tras la muerte del nuncio, y a pesar de las reiteradas recomendaciones que de su persona realizó Gaspar de Quiroga ante el rey y ante Mateo Vázquez, Pedro Nuñez inició su acercamiento a la figura del secretario real vinculándose, a partir de 1578, al "partido castellanista" (558). De igual manera, faltaban

(556).- No perdía además la oportunidad Quiroga de expresar otras preocupaciones sobre el estado de su arzobispado. Ponía en conocimiento del Consejo Real el pobre estado de los edificios de la dignidad arzobispal y la necesidad de realizar reparaciones con brevedad, puesto que cuanto mayor fuese el deterioro en igual medida crecerían los costes de su remedio (AHN, Inq., libro 284, fol. 79).

(557).- IVDJ, envío 94 (caja 135) n° 41.

(558).- El propio Mateo Vázquez, si bien utilizó sus servicios, desconfiaba de su fidelidad, pues en 1579 escribía en una minuta : "Pº Nuñez es mucho del Nuncio. El Nuncio y Pº Nuñez no se como estan con el Canobio. El Canobio es mucho de la Princesa de Eboli, la Princesa y el Canobio

por revisar los gastos efectuados por don Lope de Avellaneda para la sustentación del proceso romano de Carranza referidos a los tres últimos años del mismo, estimándose que había recibido trescientos mil ducados, a los que había que añadir los doscientos mil entregados a los receptores de la Suprema (559).

A partir de la llegada de Cannobio, el asunto de las rentas del arzobispado toledano quedó difuminado en la pugna jurisdiccional que mantuvieron el colector y el Consejo Real (560). La muerte de Diego de Covarrubias, Presidente del Consejo de Castilla, provocó la intervención de Cannobio por la condición eclesiástica del finado. Su actuación fue impedida por el corregidor de Madrid, que fue excomulgado por el Colector en respuesta al agravio que había infringido a la jurisdicción eclesiástica. Esta decisión provocó la reacción colérica del consejero más antiguo, Fuenmayor, que actuando como cabeza de la institución se enfrentó abiertamente con Cannobio acusándole de proceder precipitadamente, innovando en las costumbres a causa de su desconocimiento (561). El nuncio Segá trató de mediar en el asunto buscando el apoyo de los miembros del "partido papista", y, especialmente, del secretario Antonio Pérez, solicitando también una audiencia con Felipe II. Por su parte, el monarca ordenó la formación de una junta para dilucidar esta controversia. Los

no se como están con P^o Nuñez ni el Cardenal [Quiroga] tampoco" (Ibid., envío 53 (caja 69) n^o 6); Sobre las encarecidas recomendaciones que Quiroga realizó del mismo, véase, Ibid., envío 91 (caja 130) n^o 54. Parece claro que Pedro Nuñez de Toledo realizó durante estos años un doble juego, no desvinculándose totalmente de sus antiguos protectores, realizando labores de información para Mateo Vázquez.

(559).- Ibid., envío 89, n^o 237-238.

(560).- Estas controversias han sido puestas de manifiesto por A.FERNANDEZ COLLADO, Gregorio XIII y Felipe II..., pp, 283-301.

(561).- En este sentido véase la carta que remitió Mateo Vázquez al rey el 14 de enero de 1578. Pedro Nuñez de Toledo se había informado de las diferencias surgidas entre el Consejo y el Colector. Según su criterio, los consejeros esperaban "q V. Mt. mande responder al nuncio q el Collector conviene q cumpla lo q el Cons^o ha advertido q se debe hacer y q seguir camino diferente sería novedad de no buena satisfacción para estos reinos (...) lo q mucho importa es q el collector proceda de manera que no de ocasión para que devenga a estos términos...". En su respuesta, el propio rey estimaba que Fuenmayor había arrastrado al resto de los miembros del Consejo a una reacción excesiva (IVDJ, envío 55 (caja 72), n^o 22).

componentes de la misma, Antonio Pérez, Gaspar de Quiroga, el Presidente del Consejo de Ordenes, Busto de Villegas y Mateo Vázquez, debían reunirse en casa del arzobispo de Toledo con el fin de encontrar una solución a esta cuestión (562). Entre los días 14 y 20 de enero de 1578 se sucedieron las sesiones de la junta, donde Antonio Pérez informó de la resolución adoptada por Cannobio y Segá de ofrecer a Felipe II la absolución del corregidor de Madrid como deferencia a la figura real, y como un primer paso para remediar la tirantez que se había generado (563). Expresados los pareceres de sus distintos miembros ante esta oferta, el monarca aprobó la opinión mantenida por Quiroga y Busto de Villegas. Según estos, se debía admitir el ofrecimiento que se había realizado, aunque el perdón tenía que hacerse extensivo a todos los excomulgados. De igual manera, en los días siguientes se liberarían los criados del colector que se hallaban presos por orden del Consejo Real, y se encomendaba a Fuenmayor que hablase con el corregidor para que se ocupase de dilatar artificiosamente el asunto del expolio de Covarrubias (564). Finalmente, el rey cumplimentó y agradeció al nuncio y al colector su actuación para alcanzar la concertación, aunque, según su criterio, anteriormente se hubiesen excedido en su celo por defender la jurisdicción eclesiástica. Unos días después, recibía en audiencia a Segá, que le presentaba un memorial sobre los agravios recibidos por la misma,

(562).- Mateo Vázquez recibió la orden real de asistir a la reunión y proponer el medio de concertación apuntado por Pedro Núñez de Toledo, "decidle allí como de vro sin que entiendan el autor del" (Ibid., n° 23). Por otra parte, no faltaron las visitas de diversos participantes en la misma al colector, como Gaspar de Quiroga y Busto de Villegas, con el fin de ejercer presión para que suavizase su conducta. Conocedor Segá de estas maniobras, justificaba la actuación del arzobispo de Toledo como "realizada a impulso de otras personas" (A.FERNANDEZ COLLADO, op. cit., p, 290). Paralelamente al desarrollo de la reunión, se siguieron sucediendo los contactos entre Pedro Núñez de Toledo y Cannobio, bajo la supervisión de Mateo Vázquez, para lograr una salida que conformase a las partes (IVDJ, envío 55 (caja 72), n° 32).

(563).- Mateo Vázquez informaba al monarca que el cambio de actitud en el nuncio y el colector se debía a sus propios desvelos y a los buenos oficios de Pedro Núñez de Toledo. Sobre las reiniones de dicha junta, véase, Ibid., n° 35, 37.

(564).- En este último punto no coincidía la opinión del Presidente del Consejo de Ordenes, que pretendía que el corregidor, una vez absuelto, mantuviese una postura de dureza ante el colector. El monarca desestimó esta opción para que pudiese finalizar la controversia, inclinándose por lo expuesto por Quiroga y Busto de Villegas, aunque no encargó a Fuenmayor orientar los pasos del corregidor, sino a Mateo Vázquez, señalando que Pedro Núñez debía concertar con el nuncio la forma de actuación futura (Ibid., n° 38).

para buscar su remedio y evitar que se volviesen a reproducir situaciones semejantes (565). A pesar de las buenas intenciones expresadas por ambas partes, los conflictos entre jurisdicción real y eclesiástica a causa de los asuntos de la Colectoría se siguieron suscitando. Esto deterioró gravemente las relaciones entre Segá y Cannobio, puesto que el nuncio se veía obligado a tener que matizar el celo que el Colector imprimía a su cometido. No obstante, las difíciles relaciones entre Cannobio y el Consejo Real desembocaron en la ruptura, en 1581, cuando el colector fue expulsado de la Corte y del Reino, siendo sustituido por Traiano Mario.

En este ambiente de tensión se siguieron desarrollando las gestiones en torno a las rentas del arzobispado toledano. En marzo de 1578, Felipe II escribía a Gaspar de Quiroga encargándole que hablase con el Colector sobre el dinero que se hallaba en depósito, puesto que el monarca reconocía que los frutos que había tomado y empleado en sufragar los costes de la política de la Monarquía no habían sido repuestos (566). De estos fondos se debía proceder a pagar los salarios fijados por Cannobio a aquellos que se habían ocupado en la resolución de las cuentas, así como lo que se adeudaba a los criados de Carranza. En este sentido, el rey comunicaba a Quiroga como había ordenado a Francisco de Villafañe que, mientras se terminaba de clarificar esta cuestión, prestase a éstos siete mil ducados, y encargaba al arzobispo de Toledo la supervisión de las

(565).- Ibid., nº 40; A.FERNANDEZ COLLADO, op. cit., pp. 291-292; Idem, "Intervención del nuncio Felipe Segá en la reforma de la Iglesia en España (1577-1581)" *Anthologica Annua* 37 (1990), p. 79. El 1 de febrero, Pedro Núñez de Toledo informaba a Mateo Vázquez de los problemas que se estaban teniendo con Cannobio en relación al expolio del arzobispo de Zaragoza. Pedro Núñez y el nuncio habían acordado tratar de disuadir al colector de su actitud para evitar el surgimiento de nuevos inconvenientes, así como incluir este asunto en el memorial que Segá entregó a Felipe II. Núñez matizaba que el nuncio se encontraba dispuesto a renunciar a algunos expolios si con ello se llegaba a clarificar la solución para el futuro, y se ponía freno a los ímpetus del colector. Proponía además poner en conocimiento de Gaspar de Quiroga estas actuaciones para poder contar con su ayuda. Sobre dicho asunto, véase, IVDJ, envío 92 (caja 133), nº 6, fols. 281-282, 284-285.

(566).- Ibid., envío 55 (caja 72), nº 67.

sumas y personas con las que se realizaba el empréstito (567). De igual manera, el Inquisidor General informaba a Felipe II de que el licenciado Tomás de Salazar, perteneciente a la Suprema, había finalizado de tomar las cuentas a don Lope de Avellaneda, custodio de Carranza, en relación con los gastos del proceso inquisitorial. El balance arrojaba un resultado desfavorable para don Lope en una cuantía de ochocientos diez escudos (568). Con ello quedaba finalizada, tres años después del fallecimiento de Carranza, la revisión de las cuestiones económicas referidas a su causa ante el Santo Oficio. Por otra parte, Quiroga no dejó de encomiar ante el monarca la labor realizada por don Lope de Avellaneda, y solicitar, en nombre de la Suprema, que le fuese concedida alguna merced (569).

(567).- Ibid., nº 68; AZ, carp. 144, nº 194, 368. Esta situación resultaba especialmente embarazosa para Quiroga, puesto que, en los meses siguientes, escribía a Mateo Vázquez como María de Carranza, hermana del arzobispo, insistía en cobrar la gracia que el pontífice le había otorgado sobre estos frutos. Quiroga reconocía la justicia de su petición, y su impotencia ante la negativa del rey a que se efectuase el pago: "no sé que puedo hacer en este negº sino decirle q yo no soy parte para hecerle pagar. V.m. por lo q debe a la razón y a la justicia y a la necesidad de la suplicante debe decir esto a Su Magd o no me remitir más sus peticiones, pues yo no le puedo ayudar ni hacer más de lo que he hecho (IVDJ, envío 89 (caja 125), nº 190). Por otra parte, también mostró ciertos reparos en relación con la ocupación de Quijano, que siendo criado del doctor Villafañe, estaba actuando como procurador de los criados de Carranza que solicitaban la cobranza. No le parecía lógico que "sea procurador contra la hacienda del Arpº deviéndola defender" (Ibid., envío 15, nº28, paquete 1).

(568).- Quiroga proponía que de éstos se diesen mil maravedíes a Juan López de Zubizarreta y cien mil maravedíes a Salazar por el trabajo que habían desempeñado. Por otra parte, no descuidaba la cuestión del estado ruinoso de los edificios de las dignidad. El Colector y el nuncio habían visto la tasación que se había realizado para su reparación. Si bien no accedían a contribuir con una suma tan elevada, ofrecían una cantidad que Quiroga estimaba que era conveniente tomar y evitar el litigio ante el penoso estado de las edificaciones (AHN, Inq., libro 284, fol. 154. La respuesta del rey, mostrando su conformidad, en IVDJ, envío 55 (caja 72), nº 72).

(569).- En la misma carta, fechada el 14 de junio de 1578, Quiroga continuaba haciendo referencia al tema de los edificios. El rey había ordenado que los veinte mil ducados destinados a las reparaciones fuesen librados en Pedro Salmerón, antiguo receptor de la dignidad. Quiroga aducía que esta medida no era conveniente, puesto que se encontraba apremiado por infinidad de deudas. Sin embargo, advertía al monarca que tampoco era recomendable entregar este dinero a Francisco Villafañe, por la enemistad que el consejero le profesaba, con lo que trataría de buscar su perjuicio. En este sentido, hemos de señalar que Villafañe era un personaje cercano a Mateo Vázquez (AHN, Inq., libro 284, fols. 159-160). Las apreciaciones realizadas sobre don Lope de Avellaneda fueron escuchadas por el rey (IVDJ, envío 21 (caja 31), nº 253). Tras haber recibido la encomienda de Aguilarejo, el 15 de julio de 1582, fue encargado por el monarca de realizar funciones para el arreglo de la gente de la armada en Vizcaya y Guipuzcoa (BNM, Ms. 1749, fols. 380r-384v). El favorecimiento de Avellaneda había sido solicitado al rey también por otras personas, como Pazos, cuando terminó la labor de tomar sus cuentas, así como por el embajador

Así pues, el problema quedaba únicamente centrado en los fondos tomados por el rey para atender las necesidades económicas de la Monarquía. El 2 de junio de dicho año, Felipe II escribía a su embajador en Roma, Juan de Zúñiga, encareciéndole que suplicase al pontífice que, como había solicitado en otras ocasiones, le concediese los frutos del arzobispado toledano desde que se produjo la prisión de Carranza hasta su muerte. Si el papa se avenía a esta demanda, el monarca se comprometía a tomar a su cargo el cumplimiento de los cien mil ducados otorgados por el pontífice a su hermana, la emperatriz María, sobre dichos frutos, y a cubrir los cincuenta mil ducados que se adeudaban a los criados de Carranza. Advertía el rey a Zúñiga que, si el pontífice no se mostraba conforme con la totalidad de esta concesión, debía insistir en obtener gracia para aquella cantidad que se había cobrado y gastado (570). Sin embargo, las tensiones que revistieron las relaciones entre la Santa Sede y la Monarquía hispana en los meses siguientes, a causa de la firma de la tregua con el Turco y la sucesión al trono de Portugal, motivaron que Felipe II no viese satisfechos sus anhelos, y la cuestión de las rentas toledanas quedase en suspenso. No obstante, los deseos de Gregorio XIII de conseguir ganar a Inglaterra para la causa católica le llevaron a ofrecer a Felipe II la concesión de los frutos del arzobispado de Toledo pertenecientes a la Cámara apostólica, referidos al periodo que comprendía la prisión y muerte de Carranza, si respaldaba la actuación de Geraldino y de Bastian de San Josefo en Irlanda, aderezada además por la promesa de otras gracias. Aunque el monarca apoyó de forma teórica esta iniciativa, sus intenciones no se tradujeron en hechos concretos, a pesar de la insistencia papal, puesto que los objetivos políticos de la Monarquía no estaban centrados, en este momento, en acometer la empresa inglesa. Así pues, entre agosto de 1579 y enero de 1581, en que los planes de invadir Inglaterra desde Irlanda se vieron frustrados por la rendición de los componentes de la expedición ante las tropas isabelinas, Gregorio XIII se mostró dispuesto, en varias ocasiones,

Juan de Zúñiga, cuando terminó el proceso inquisitorial (J.I.TELLECHEA IDIGORAS, "El doctor Pazos..."p, 524; E.LLAMAS MARTINEZ, "Documentación Mss..."pp, 246-247).

(570).- Felipe II advertía a Zúñiga que realizase esta petición antes de tratar con el papa el asunto de la tregua con el Turco, puesto que esta cuestión podía propiciar su negativa (IVDJ, envío 89 (caja 125), nº 212).

a hacer uso de dichas rentas y emplearlas, primeramente, en la financiación de la empresa, y, posteriormente, en el rescate de los prisioneros. Fracasado este intento, en febrero de 1581, el pontífice reiteró sus ofertas sobre las rentas toledanas a través del legado Riario, ante las alusiones filipinas a lo costoso de esta actuación y a los problemas surgidos en torno al concesión del subsidio (571).

Por otra parte, la finalización de las escaramuzas bélicas en Irlanda coincidía con un nuevo conflicto de competencias entre el Colector y el Consejo Real motivado por el expolio del obispo de Plasencia, Francisco Tello Sandoval. Al igual que había sucedido con el de Diego de Covarrubias, la injerencia del corregidor de la ciudad fue contestada con la excomunión dictaminada por Cannobio que, posteriormente, ante las presiones efectuadas por el Consejo Real, hizo extensiva a todos los miembros de dicha institución. Si bien el nombramiento de Antonio Mauricio de Pazos como Presidente del Consejo de Castilla había hecho presagiar un mayor entendimiento con la Santa Sede por su adscripción al "partido papista", la inmediata caída en desgracia del secretario Antonio Pérez y, por consiguiente, la pérdida de poder de la facción que encabezaba, provocaron en Roma la reacción contraria, estallando una serie de conflictos jurisdiccionales que habían permanecido aletargados por la mediación y oficios de los miembros de dicho "partido" (572). La nueva situación se traducía en un cambio de nuncio. A finales de 1581, Segá fue sustituido por Luis Taverna, obispo de Lodi, apuntándose como el motivo de su llamada a Roma el poco celo que había exhibido en defensa de la jurisdicción eclesiástica, labor que se resaltaba dentro de las funciones que debía llevar a cabo su sucesor (573). Para hacer frente a la postura adoptada por la Santa Sede, Felipe II

(571).- Sobre la disposición que el papa quería realizar de las rentas toledanas como forma de presión hacia Felipe II para conseguir recabar su apoyo, véase, A.FERNANDEZ COLLADO, Gregorio XIII y Felipe II..., pp, 195-214; R.HINOJOSA, Los despachos..., p, 303.

(572).- Sobre los conflictos jurisdiccionales que estallaron a partir de 1579, véase, A.FERNANDEZ COLLADO, op. cit., pp, 151-282.

(573).- M.PHILIPPSON, "Felipe II y el pontificado" Estudios sobre Felipe II. Madrid 1877, pp, 159, 162; R.HINOJOSA, op. cit., pp, 231-233.

resolvió ordenar la formación de la Junta Grande de Cosas Eclesiásticas, donde se debía discutir el derecho que otorgaba al pontífice la pertenencia de las vacantes arzobispales, así como las herencias y bienes que los obispos dejaban cuando fallecían. La inactividad de Pazos en la junta le hizo perder sus buenas relaciones con Roma, mientras que los personajes designados como miembros de la misma delataban el retroceso de la facción "papista" frente al grupo encabezado por Mateo Vázquez (574). Sin embargo, entre las cuestiones que se trataron en la misma, no se hizo ninguna alusión al asunto derivado de la actuación del monarca sobre los frutos del arzobispado toledano.

No obstante, la apropiación que Felipe II había realizado de las rentas del arzobispado no fue la única actividad que desarrolló sobre el mismo con la finalidad de obtener el dinero necesario para sufragar los gastos derivados de la política de la Monarquía. Por una bula otorgada por Gregorio XIII, el 6 de abril de 1574, el rey recibía la facultad de desmembrar y vender, donar o disponer perpetuamente de las villas y lugares, jurisdicciones, fortalezas, así como de otras posesiones, que perteneciesen a cualquier iglesia catedral metropolitana, colegial o primacial, e igualmente, a cualquier monasterio, cabildo, convento o dignidad, siempre que las rentas enajenadas no excediesen los cuarenta mil ducados anuales. Para poder ejecutar esta actuación no era preciso contar con el consentimiento de las personas o institución que tuviesen su posesión, que recibirían a cambio una compensación que se estimase justa y equivalente. Esta concesión se vió fortalecida por las disposiciones recogidas en una nueva bula, despachada el 14 de marzo de 1579. Ambas tuvieron una especial repercusión en la rica archidiócesis toledana (575).

(574).- Junto a Pazos, formaban parte de la reunión: los consejeros de Castilla Iñigo de Cárdenas, el licenciado Ribadeneyra y el licenciado Guardiola, Pedro Fernández Temiño de la Suprema, Tomás de Salazar, Comisario General de Cruzada, Diego de Zúñiga y Gedeón de Hinojosa del Consejo de Indias, Juan de Zuazola y Francisco Albornoz del Consejo de Ordenes, y los teólogos agustinos fray Lorenzo de Villavicencio y fray Gabriel Pinelo. La junta se reunió por espacio de ocho meses desde agosto de 1581 (BNM, Ms. 6278).

(575).- Sobre estas gracias papales y sus antecedentes, véase, S.DE MOXO, "Las desamortizaciones eclesiásticas en el siglo XVI" Anuario de Historia del Derecho Español (1961), pp, 350-352.

Así, en 1575, fueron secularizadas e incorporadas a la Corona y Patrimonio Real diversas poblaciones pertenecientes a la dignidad arzobispal, que únicamente reservó los diezmos eclesiásticos de pan, vino, aceite, ganado, y otros frutos. Esta actuación se llevó a cabo sobre las villas de Yepes y Cabañas de Yepes (576), Lillo (577), Illescas (578), Torrelaguna (579), Uceda (580), Torrejón de Ardoz (581), Tielmes (582), Morata de Tajuña (583), Valdemoro (584), así como Utrilla y Almaver, sitas en el obispado de Sigüenza, pero pertenecientes a la dignidad arzobispal toledana (585). Junto a estas villas se desmembraron, igualmente, el lugar de Perales

(576).- Las desmembraciones se realizaron el 23 de junio y el 28 de septiembre, actuando como juez el doctor Brizuela. En ambos casos el privilegio correspondiente se fechó el 29 de octubre (ADT, IV/2072, fols. 2r-3r).

(577).- Se apartó de la dignidad arzobispal el 23 de junio, encargándose las diligencias al juez Brizuela. El privilegio se dató el 31 de octubre (Ibid., fols. 3v-4r).

(578).- Se produjo su separación el 6 de marzo, otorgándose el privilegio el 16 de mayo. En este caso, actuó como juez el licenciado Valdivia (Ibid., fol. 4r-v).

(579).- Esta fue una desmembración más temprana, puesto que se efectuó el 30 de septiembre de 1574, aunque el privilegio no se despachó hasta enero de 1575. El juez que realizó los trámites fue el licenciado de la Vega (Ibid., fols. 6v-7r).

(580).- Junto a la misma, se enajenaron también los lugares pertenecientes a su jurisdicción: Alpedrete, Valdepeñas, Tortuero, Valdesotos, La Puebla de los Valles, Matarrubia, La Casa, Villaseca, Fuente el Fresno, Fuente la Higuera, Viñuelas, Valdemuño Fernández, Venturada y Redueña. La separación se produjo el 28 de septiembre, firmándose el privilegio solamente unos días después, el 6 de octubre. Actuó como juez el licenciado Arceo (Ibid., fols. 8v-9r).

(581).- Desmembrada el 9 de noviembre de 1574, el privilegio no se otorgó hasta el 26 de enero de 1575. El licenciado Luis de Godoy fue el juez encargado de esta actuación (ibid., fols. 19v-20r).

(582).- También con la participación de Luis de Godoy, se hizo la separación el 30 de septiembre de 1574, fechándose el privilegio el 26 de enero del año siguiente (Ibid., fols. 23v-24r).

(583).- Fue desmembrada el 6 de febrero, teniendo data el privilegio del día 22 del mismo mes. Actuó como juez el licenciado Francisco de Morales (Ibid., fol. 24r-v).

(584).- Separada el 15 de junio, el privilegio se otorgó el día 30 del mismo mes. El juez encargado de los trámites fue el licenciado Arceo (Ibid., fols. 24v-25r).

(585).- La desmembración tuvo lugar el 13 de marzo, fechándose el privilegio correspondiente el día 21 del mismo mes. Las funciones de juez fueron efectuadas por Francisco de Morales (Ibid., fol. 27v-28r).

de Tajuña (586), y el término de Silillos, posesión del contador Francisco de Garnica (587). Sin duda, estas incorporaciones estaban motivadas por el precario estado que la economía atravesaba en este periodo, tratando el monarca de obtener un incremento de los ingresos de las arcas regias.

Si bien, en 1576, únicamente se produjo la enajenación de la villa de Alcolea de Tajo (588), las secularizaciones se continuaron efectuando después de que Gaspar de Quiroga fuese nombrado arzobispo primado. Durante 1578, fueron incorporadas las villas de Talamanca (589), Alcolea de Torote (590), Villar, Ajalvir, Los Santos de Humosa, Campo (591), Carabaña (592), Casar (593), Algete (594), Ambite (595), Pozuelo de

(586).- Realizada la separación el 9 de noviembre de 1574, el privilegio no se otorgó hasta el 26 de enero de 1575, actuando como juez Luis de Godoy (Ibid., fol. 8r-v).

(587).- Estas diligencias se efectuaron en noviembre de 1574, siendo Diego de la Vega el juez encargado de su ejecución (Ibid., fol. 16r-v). Cuando Gaspar de Quiroga fue nombrado arzobispo de Toledo, Garnica trató de obtener la mayordomía de Ocaña, aunque no vió cumplido su deseo (AHN, Inq., libro 284, fols. 81, 190).

(588).- La separación se produjo el 20 de febrero, mientras que el privilegio fue datado el 2 de mayo. Jerónimo de Fuentes actuó como juez (ADT, IV/2072, fol. 1v).

(589).- La desmembración afectó igualmente a los lugares de Valdepiélagos, Zarzuela y Alalpando, pertenecientes a la jurisdicción de dicha villa. A pesar de que el privilegio se había otorgado en octubre de 1575, la enajenación no se hizo efectiva hasta septiembre de 1578, encargándose el licenciado Arceo de las labores de juez (Ibid., fol. 6r-v).

(590).- Junto a la misma se incorporaron los lugares de Torrejón de Alcolea, Galápagos y Valdeavero. La separación se realizó el 30 de enero, aunque el privilegio no se despachó hasta finales de año. Actuó como juez Francisco Velázquez (Ibid., fols. 5v-6r).

(591).- En los cuatro casos, tanto la desmembración como el privilegio correspondiente se realizaron en el mes de noviembre, siendo los jueces designados Francisco Suárez Delgadillo, que se ocupó en las dos primeras, Juan Carrillo y Juan de Salas (Ibid., fols. 10v, 16v-17r, 18r-v, 20r-v).

(592).- La separación se efectuó el 1 de septiembre, teniendo fecha el privilegio del día 16 del mismo mes. Francisco Velázquez actuó como juez (Ibid., fol. 17r-v).

(593).- Fue desmembrada el 20 de octubre, otorgándose privilegio el 30 de noviembre. Pedro de la Sierra se encargó de las labores como juez (Ibid., fols. 20v-21r).

(594).- Perteneciente al partido de Talamanca, tanto la separación como el privilegio correspondiente se efectuaron en julio, actuando como juez Francisco Velázquez (Ibid., fol. 21v).

Torres (596), Valdilecha (597), Fuente el Saz (598), Orusco (599), y Rivatejada (600). También fueron desmembrados los lugares de Villamuelos (601), Corpa (602) y Camarma de Esteruelas (603). Un caso peculiar fue el constituido por la villa de Puente del Arzobispo, puesto que, después de realizar las averiguaciones conducentes a su incorporación, ésta quedó sin efecto, continuando vinculada a la dignidad arzobispal (604).

Un importante conjunto de poblaciones fue igualmente enajenado a lo largo de 1579. Estas fueron las villas de Alía (605), Castilblanco (606),

(595).- La desmembración y la concesión del privilegio se realizaron en el mes de septiembre, siendo el juez el licenciado Morales (Ibid., fol. 22r-v).

(596).- Perteneciente a la jurisdicción de Alcalá de Henares y de la dignidad arzobispal, el privilegio se otorgó en el mes de enero, aunque la separación no se realizó hasta el 26 de junio. Francisco Velázquez se ocupó como juez en esta cuestión (Ibid., fol. 23r-v).

(597).- Desmembrada el 15 de octubre, el privilegio fue datado el 7 de noviembre. Actuó como juez Juan de Salas (Ibid., fol. 25r-v).

(598).- Fue enajenada el 28 de agosto, siendo fechado el privilegio el 3 de septiembre. El juez encargado de las actuaciones fue Diego de Paz (Ibid., fols. 25v-26r).

(599).- Perteneciente al partido de Uceda, tanto la desmembración como el privilegio se realizaron en el mes de septiembre, actuando como juez Francisco Velázquez (Ibid., fols. 26v-27r).

(600).- Como en casos precedentes, el privilegio, otorgado el 3 de septiembre, fue previo a la separación, que se produjo el 30 de noviembre, interviniendo Francisco Velázquez como juez (Ibid., fol. 27r-v).

(601).- Tanto la enajenación como el privilegio correspondiente se ejecutaron en el mes de diciembre, actuando como juez Diego de Paz (Ibid., fol. 3r-v).

(602).- Perteneciente a la jurisdicción de Alcalá de Henares y de la dignidad arzobispal, la desmembración y concesión del privilegio se efectuaron en septiembre, siendo Francisco Velázquez el juez encargado de las gestiones (Ibid., fol. 11r).

(603).- Realizada la separación el 27 de agosto, el privilegio fue fechado el 2 de septiembre, interviniendo Juan de Salas como juez (Ibid., fols. 15v-16r).

(604).- Ibid., fol. 1r.

(605).- Desmembrada el 30 de julio, el privilegio se libró el 22 de agosto, actuando como juez Pedro de la Sierra (Ibid., fol. 2r).

Romancos (607), La Olmeda (608), Pezuela (609), Archilla y Pesadilla (610), El Molar (611), Fuentes (612), Vellón (613), Torres de la Alameda (614), Loeches (615), Belinchón (616), Tomelloso (617), Valdetorres (618), Valdeolmos (619) y

(606).- La separación se efectuó el 21 de marzo, despachándose el privilegio correspondiente el 21 de abril. Como en el caso precedente, Pedro de la Sierra desarrolló las funciones de juez (Ibid., fols. 4v-5r).

(607).- Tanto la enajenación como el privilegio se realizaron en los primeros días de abril, interviniendo como juez Juan de Salas (Ibid., fol. 7r-v).

(608).- Fue desmembrada el 9 de agosto, siendo fechado el privilegio el 5 de septiembre, contando, igualmente, con la actuación de Juan de Salas como juez (Ibid., fol. 9r).

(609).- Tanto la separación como el privilegio correspondiente se realizaron en el mes de marzo, interviniendo el licenciado Chumacero de Ayala y Juan de Salas como jueces (Ibid., fol. 10r-v).

(610).- Aunque, en ambos casos, la desmembración se realizó en diciembre de 1578, el privilegio no se otorgó hasta febrero de 1579, contando con la intervención de los jueces Juan de Salas y Diego de Paz respectivamente (Ibid., fols. 7v-8r, 11r-v).

(611).- Fue enajenada el 13 de octubre, librándose el privilegio correspondiente el 5 de noviembre. Actuó como juez Diego de Paz (Ibid., fol. 9v-10r).

(612).- Junto a ésta, se incorporaron los lugares de Gajanejos, Valdesanz, Castilmembre, Pajares y San Andrés, pertenecientes a la misma. Tanto la desmembración como la concesión del privilegio se efectuaron en el mes de marzo (Ibid., fols. 12r-13v).

(613).- Realizada la separación el 13 de octubre, el privilegio se libró un mes después, siendo Diego de Paz el juez encargado de efectuar las gestiones pertinentes (Ibid., fols. 14v-15r).

(614).- Tanto la desmembración como el privilegio correspondiente se realizaron en el mes de febrero, actuando como juez Juan de Salas (Ibid., fol. 15r-v).

(615).- La separación se produjo el 1 de abril, no despachándose el privilegio hasta el 2 de mayo, interviniendo Juan de Salas como juez (Ibid., fols. 17v-18r).

(616).- Tanto la incorporación como la libranza del privilegio se efectuaron en el mes de abril, encargándose Juan Díaz de Castañeda de la actuación como juez (Ibid., fols. 18v-19r).

(617).- Perteneciente a la jurisdicción de Brihuega y de la dignidad arzobispal, fue desmembrada el 25 de febrero, otorgándose el privilegio el 12 de mayo. Actuó como juez Juan de Salas (Ibid., fol. 19r-v).

(618).- La separación y el despacho del privilegio tuvieron lugar en el mes de julio, cumpliendo con las labores de juez Alfonso de Salas (Ibid., fol. 21r-v).

(619).- Fue desmembrada el 10 de septiembre, teniendo fecha el privilegio de 24 de octubre. Diego de Paz intervino como juez (Ibid., fol. 26r-v).

Villumbrales (620). Junto a las mismas fueron incorporados los lugares de Vilches (621), Anchuelo (622) y Villaviciosa (623). Al igual que había sucedido con Puente del Arzobispo, se iniciaron las gestiones para desmembrar de la dignidad arzobispal la villa de Santorcaz, llegándose a despachar el privilegio correspondiente. No obstante esta actuación quedó posteriormente anulada (624).

En los años sucesivos, la Corona continuó con su política de incorporaciones respecto a las poblaciones vinculadas a la dignidad arzobispal de Toledo, aunque descendió notablemente el número de las enajenaciones que se realizaron. Así, en 1580, fue desvinculada la villa de Arganda (625), mientras que, en 1581, se producía una actuación semejante sobre las villas de Valverde y Villalvilla (626). Al año siguiente, fueron desmembrados la villa de La Guardia (627) y el lugar de Espinoso (628), realizándose un

(620).- Realizada la separación el 10 de septiembre, el privilegio se libró un mes después, actuando como juez Diego de Gálves (Ibid., fols. 28v-29r).

(621).- La incorporación también afectó a su término de Valtierra. Fue desmembrado el 17 de marzo, despachándose el privilegio correspondiente el 13 de abril. Juan de Salas fue el juez encargado de las gestiones (Ibid., fol. 13r-14r).

(622).- Perteneciente a la jurisdicción de la dignidad arzobispal y de Alcalá de Henares, fue desmembrado el 17 de marzo, aunque la libranza del privilegio no se efectuó hasta el 2 de mayo. Juan Suárez Delgadillo actuó como juez (Ibid., fol. 29r-v).

(623).- Perteneciente a la jurisdicción de Brihuega, tanto la separación como el despacho del privilegio se realizaron en el mes de marzo, interviniendo como juez Juan de Salas (Ibid., fols. 29v-30r).

(624).- Ibid., fol. 5r-v.

(625).- La desmembración se realizó el 24 de febrero, mientras que el privilegio se libraba el 16 de noviembre. Juan de Salas actuó como juez (Ibid., fol. 11v).

(626).- La separación se produjo el 21 de marzo, otorgándose el privilegio el 1 de julio. El juez encargado de esta actuación fue Francisco Javier Delgadillo (Ibid., fols. 22v-23r).

(627).- Tanto la desmembración como el despacho del privilegio se realizaron en el mes de abril, siendo el juez nominado para efectuar las gestiones Diego de Paz (Ibid., fol. 14r-v).

(628).- Perteneciente a la jurisdicción de Talavera, la separación se efectuó el 10 de septiembre de 1579, aunque el privilegio no se libró hasta el 27 de agosto de 1582, actuando como juez Francisco Suárez Delgadillo (Ibid., fol. 30r-v).

intento que quedó sin efecto sobre Brihuega en 1584 (629).

Tras realizar estas incorporaciones al Patrimonio regio, estas poblaciones fueron vendidas por la Corona, pasando a constituir nuevos señoríos nobiliarios. Por otra parte, una importante porción de las mismas fue adquirida por banqueros y asentistas que asistían a la Hacienda real (630).

Sin embargo, esta actuación no sólo afectó a pertenencias de la dignidad arzobispal, sino que la secularización se extendió también a lugares vinculados al cabildo catedralicio, como fue el caso de Ajofrín. En mayo de 1578, el consistorio mostró resistencia a la enajenación de la villa, encargando a Gaspar de Mendoza que actuase en la Corte en favor de los intereses del capítulo (631). Después de la incorporación, la villa fue vendida a don Luis Carrillo, señor de Pinto. Igualmente, el cabildo no acogió con agrado la permuta de las dehesas de Tiesa, Matilla y Arenal del Conde, en la ribera del Jarama, por la de Poveda para San Lorenzo de el Escorial (632). No obstante, el prelado no opuso ninguna objeción al trueque propuesto, formalizándose la escritura en marzo de 1580 (633). Así mismo, en diciembre de 1582, el consistorio se reunió para tratar en torno a la venta de los lugares pertenecientes a la jurisdicción de Talavera, decidiendo escribir una carta al rey solicitando que la iglesia toledana no fuese perjudicada en esta forma. También se comisionó a Antonio de Zapata para que acudiese en defensa de las pretensiones del capítulo de anular la venta del lugar de Espinoso ante el presidente del Consejo de

(629).- Ibid., fol. 28r.

(630).- Estas cuestiones han sido puestas de manifiesto por S.DE MOXO, "Las desamortizaciones eclesiásticas..." pp, 352-361; Idem, Los antiguos señoríos de Toledo, pp, 29-30, 120-123, 197-204. Así, Uceda fue vendida a Diego Mexía de Avila y Ovando, Talamanca y Alalpando fueron comprados por el marqués de Auñón, Valdetorres por Francisco de Garnica, El Casar y Fuente el Saz fueron adquiridos por banqueros genoveses, etc.

(631).- ACT, Actas capitulares. Tomo 16, fol. 201r-v.

(632).- Ibid., fol. 303v.

(633).- AGS, PR, 33-37.

Hacienda (634). El cabildo acudió de igual modo al contador Garnica y a Gaspar de Quiroga para tratar de evitar esta actuación (635).

El plegamiento de Quiroga a la actuación de Felipe II sobre las rentas del arzobispado de Toledo fue absoluto, a pesar de la esquilmación a la que fueron sometidas para sufragar la política de la Monarquía. La necesidad del monarca de incrementar el dinero que aflúa a las arcas regias tuvo un importante recurso en dichos frutos, primero al abrigo de la prisión de Bartolomé de Carranza, y, posteriormente, con el consentimiento de su sucesor en la mitra (636).

c/Quiroga arzobispo primado

La muerte de Bartolomé de Carranza, el 2 de mayo de 1576, dejaba vacante el cargo de arzobispo de Toledo. Como hemos señalado, antes de que se produjese su fallecimiento, Felipe II había mostrado el deseo de que dicha dignidad fuese ocupada por su sobrino, el archiduque Alberto de Austria, para lo que había instado en diversas ocasiones a Gregorio XIII con la finalidad de asegurar esta sucesión. No obstante, la importancia del arzobispado de Toledo provocó un enorme interés en la Corte en torno al nombramiento del nuevo prelado, a pesar de que la designación del archiduque se consideraba segura. El 16 de junio, Antonio Pérez trataba de sembrar la desconfianza en el monarca ante la gestión que podría desarrollar el joven Alberto al frente de la iglesia primada hispana. El secretario afirmaba que, aunque se estaba procurando que

(634).- ACT, Actas Capitulares. Tomo 17, fols. 161v-162v.

(635).- Ibid., fol. 172r. La carta que Quiroga dirigió a Mateo Vázquez al respecto en IVDJ, envío 21 (caja 30), nº 187.

(636).- Esta situación aparece claramente reflejada en una carta que Quiroga remitió al secretario Mateo Vázquez en diciembre de 1578: "Recibí la carta de v.m. de 12 del presente en que me escribe por mandado de Su Magd que del pa[go] de las rentas de nra dignidad que se hubiere de vender pudiéndose hacer proveamos como se den mil fa[ne]gas para el servicio de la Casa Real y como casi todo lo que nos tocaba se dió a los labradores para sembr[ar] y por ayudarles con lo que más se pudiere se reservó para el gasto de nra casa y para repartir en limosna a los pobres no tanto como se pudiera y fuera menester dejar, y dello se han dado mil fanegas de trigo y dos mil de cebada a Su Magd, lo que nos quedó es tan poco que no ay de do[nde] se puedan dar estas mil que agora Su Magd manda y así se lo dirá v.m. de mi parte" (Ibid., envío 89 (caja 125), nº 185).

se le concediese el capelo cardenalicio, su condición de clérigo no debía impedir considerar que se le estaba proporcionando con esta prelación una gran autoridad y cuantiosas rentas, estimando más seguro que percibiese el dinero suficiente a través de otros medios, pero sin que conllevasen ostentar tan alta dignidad. Igualmente, aunque de forma sutil y solapada, no dudaba en estimular la memoria regia sobre los inconvenientes que habían surgido en los años precedentes, cuando el arzobispado toledano había recaído en un personaje poderoso. En su respuesta, Felipe II admitía que estas consideraciones se habrían de tener en cuenta en caso de que se estimase su candidatura, pero le parecía excesivamente prematuro confiar esta responsabilidad a su sobrino, que aún se estaba ocupando en su formación (637). En los meses siguientes, el rey no tomó ninguna determinación, debatiéndose entre los inconvenientes derivados de la juventud de su sobrino y su reiterada intención de que ocupase la prelación toledana. Finalmente, en diciembre de 1576, los condicionantes marcados por la poca edad y la falta de preparación para afrontar una labor tan significada, llevaron al monarca a escribir a su hermana María, comunicándole su intención de designar como arzobispo de Toledo a algún anciano que viviese poco y ocupase la prelación por un corto espacio de años, suficiente, por otra parte, para que Alberto adquiriese la madurez y aptitudes que el cargo requerían. Aseguraba que le dotaría con alguna pensión, puesto que, con la ostentación del cardenalato, vería incrementar sus gastos (638).

Así pues, la decisión regia de excluir a su sobrino de la nominación a la mitra toledana, aunque proyectando su futura sucesión, provocó el comienzo de la pugna cortesana encaminada a conseguir que el nombramiento del nuevo arzobispo fuese acorde a sus intereses. El "partido castellanista" hizo llegar sus propuestas al rey a través de Antonio de Padilla, que encarecía a Felipe II la necesidad de que la provisión recayese en un prelado que, frente a lo que había hecho sus antecesores, se emplease en la atención de la archidiócesis como

(637).- B.PORREÑO, op. cit., pp, 412-414.

(638).- L.CABRERA DE CORDOBA, op. cit., IV, p, 69; F.CAEIRO, O Archiduque Alberto de Austria vicerei de Portugal. Lisboa 1961, pp, 35-36, 359-361.

ocupación fundamental, sin realizar actuaciones conflictivas, y que entablase buenas relaciones con el cabildo catedralicio. Para llevar a cabo estas funciones, no dejaba de recomendar, en primer lugar, a Hernando de Toledo. En su defecto, Padilla estimaba que eran idóneos Cristobal de Rojas, arzobispo de Sevilla, Francisco Blanco, arzobispo de Santiago, Francisco de Rivera, patriarca y arzobispo de Valencia, así como el Cardenal Pacheco, arzobispo de Burgos, aunque hacía constar que los años que había permanecido en Roma le habían hecho desarrollar ciertas inclinaciones que no eran totalmente de su agrado. Además, aprovechaba esta circunstancia para emitir sus juicios sobre el resto de los obispos de la diócesis peninsulares, resaltando las opiniones negativas y acusaciones que vertió sobre los dos que se hallaban en la Corte. Respecto al obispo de Segovia, Presidente del Consejo Real, señalaba al rey la inconveniencia de que fuese proveído en la mitra de Toledo, puesto que, aunque era un hombre bondadoso, su cortedad de entendimiento y carencia de memoria sobre los negocios que trataba le incapacitaban para acometer las actuaciones que debía realizar. Semejante parecer expresaba en relación al obispo de Cuenca, Gaspar de Quiroga, aunque los motivos aducidos estaban referidos a su falta de interés, en los últimos tiempos, por las labores pastorales y su clara intención de hacerse rico. Padilla apuntaba que, si bien Quiroga había mostrado preocupación por atender sus obligaciones en el obispado conqunense después de su provisión, posteriormente su atención se había dirigido a las cuestiones políticas, descuidando los asuntos de su diócesis por su tendencia a la comodidad y al poco esfuerzo en el trabajo (639).

Sin embargo, fue Antonio Pérez quien, utilizando el influjo que tenía sobre Felipe II, logró patrocinar el nombramiento de Gaspar de Quiroga como arzobispo primado, siendo éste el motivo principal, como hemos referido con anterioridad, que propició el acercamiento del Inquisidor General al secretario. Por otra parte, la avanzada edad del sexagenario Quiroga le hacía ajustarse a los planes trazados por el rey respecto a su sobrino. Lo que no pudo preveer el

(639).- AZ, carp. 155, nº 230, 236.

monarca fue que el nuevo prelado viviría diecisiete años más (640). Parece claro, por la actuación desarrollada por el Inquisidor General, que éste anhelaba la ostentación de la mitra toledana, lo que viene a contradecir las noticias tradicionales que diversos autores han transmitido respecto a la resistencia que durante tres meses hubo de vencer el rey para que Quiroga aceptase ocupar la prelación, proponiendo en su lugar a Francisco Blanco, y aviniéndose únicamente a que se efectuase su nombramiento cuando el propio monarca le ordenó que no presentase más réplicas (641). En este sentido, a pesar de que no notificó a su hermana María su decisión hasta finales de año, Felipe II había optado definitivamente por la provisión de Quiroga en el mes de octubre, aunque esta circunstancia se mantuvo en secreto hasta febrero de 1577, cuando se hizo pública la designación (642).

El 17 de agosto de 1577, Felipe II notificaba a Juan de Zúñiga la designación del Inquisidor General como nuevo arzobispo de Toledo, señalando, como razón fundamental que había conducido a esta nominación, la buena

(640).- Que Gaspar de Quiroga debió la provisión como arzobispo de Toledo a Antonio Pérez ha sido puesto de manifiesto por G.MARAÑÓN, Antonio Pérez, I, p, 122. La inesperada longevidad de Quiroga también ha sido resaltada por P.PIERSON, Felipe II de España. México 1984, p, 78.

(641).- Igualmente se señala que cuando Quiroga consintió en su presentación, Felipe II mostró su contentamiento diciendo: "Ya he dado marido a mi mujer y padre a mis hijos" (P.SALAZAR Y MENDOZA, Crónica del Gran Cardenal..., p, 294; G.GONZALEZ DAVILA, Teatro eclesiástico...de las dos Castillas, I, p, 489; Idem, Teatro de las grandezas de la villa de Madrid. Madrid 1623, p, 464; D.CASTEJON Y FONSECA, op. cit., pp, 1133-1134; Biografía Eclesiástica Completa, p, 1205; M.BOYD, op. cit., pp, 25-27; BNM, Ms. 13044, fol. 129r.

(642).- BSCV, Ms. n° 16, fol. 148r. El 27 de noviembre, el deán y el cabildo toledano solicitaban al monarca que procediese a nominar nuevo arzobispo, enviando a la Corte a Francisco Dávila con esta finalidad (IVDJ, envío 89 (caja 125), n° 180). El 21 de febrero de 1577, Francico Hernández de Liébana refería a Mateo Vázquez: "oy e visitado y dado el parabien al alecto de Toledo/ dixome que lo sabía desde el el 22 de octubre. Dios se lo dexe gozar que por mi fe que ha remado bien" (Ibid., envío 81 (caja 107), n° 109). A comienzos del mes de marzo, Quiroga decidió trasladarse al pueblo de Vallecas para evitar el concurso de toda la Corte en su posada para felicitarle. Acababa de superar una grave enfermedad, y regresaba de realizar un viaje al Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe (J.ROMAN DE LA HIGUERA, op. cit., fol. 179).

gobernación que había efectuado en la prelación conquesa (643). El 6 de septiembre, fueron despachadas las bulas correspondientes, que llegaron a la Corte a finales de mes, procediéndose a la toma de posesión, que realizó, el 23 de octubre, Antonio Mauricio de Pazos en nombre de Quiroga (644).

Así pues, con la ayuda de Antonio Pérez, Gaspar de Quiroga se ponía al frente de la iglesia primada hispana, de cuyas características y problemática era un excelente conocedor, tanto por los años que, en su juventud, había prestado sus servicios al Cardenal Tavera y a Martínez Silicio, como por su participación en el pleito jurisdiccional que se estaba desarrollando entre la Monarquía y la Santa Sede en torno a las rentas del arzobispado. Esta cuestión, junto a las derivadas del ejercicio del cargo de Inquisidor General, conllevaron que Quiroga no hubiese perdido el contacto con los temas referidos con la iglesia toledana. Así, en febrero de 1574, desde la Suprema se informaba a Sancho Busto de Villegas, gobernador del arzobispado, que tras consultar con Gaspar de Quiroga se había estimado conveniente acceder a la petición presentada por Jorge Gómez, deudo de Bartolomé de Carranza, quien había recibido título en el oficio del sello antes de que el prelado fuese puesto en prisión. Este solicitaba que se le permitiese permanecer en el mismo y percibir los frutos correspondientes (645). En agosto de dicho año, el Inquisidor General informaba al rey como

(643).- El borrador de la carta se encuentra en AGS, PE, leg. 6, s.f. Por otra parte, hemos de señalar que después de tantos meses sin que se llevase a cabo la provisión, ésta se realizó coincidiendo con la llegada del nuevo nuncio y el agravamiento del conflicto jurisdiccional en torno a las rentas del arzobispado.

(644).- Las bulas de nombramiento se encuentran en Ibid., PR, leg. 62, nº 117. Citado por A.FERNANDEZ COLLADO, *Gregorio XIII y Felipe II...*, pp. 220-221. El 20 de octubre, Quiroga recibió el palio en la iglesia de San Pedro de Madrid (AHN, Inq., libro 284, fol. 81). Sobre la toma de posesión realizada por Pazos en Toledo, véase, ACT, *Actas Capitulares*. Tomo 16, fols. 139-141; L.CABRERA DE CORDOBA, op. cit., II, pp. 353-354. Diversos Cardenales conservaron la pensión que tenían sobre las rentas toledanas, concediéndose además veinte mil ducados al archiduque Alberto de Austria (G.VAN GULIK y C.EUBEL, op. cit., III, p. 315; AGS, Estado, leg. 929, nº 38). En torno al efecto que causó la provisión de Quiroga en la mitra toledana en el obispado de Cuenca, véase, J.MARTIR RIZO, op. cit., p. 193; T.MUÑOZ SOLIVA, op. cit., p. 210. Por su parte, Quiroga señaló que, personalmente, le había causado más alegría su ingreso en el Colegio de Santa Cruz que la designación para la dignidad arzobispal (P.SALAZAR Y MENDOZA, op. cit., p. 295).

(645).- AHN, Inq., libro 326, fol. 171v.

había instado tanto al cabildo catedralicio como a los capellanes de los Reyes Nuevos para que tuviesen por presente al doctor Barriovero, canónigo y servidor inquisitorial, amenazando con proceder con las censuras que estaban recogidas en las letras apostólicas donde se establecían los privilegios otorgados al Santo Oficio al respecto (646). Igualmente, a finales de 1575, se estimaba conveniente conocer la opinión de Quiroga en relación a un memorial remitido a la Corte por la iglesia de Toledo respecto a la limosna que pretendía obtener el Hospital de Santa Cruz (647). Así mismo, en marzo de 1576, Felipe II recababa el parecer de Quiroga en torno a la provisión del doctor Torres o de Pedro Martínez en la abadía de Alcalá de Henares, que quedaba vacante tras la designación del doctor Serrano como obispo de Coria (648). Por otra parte, los conflictos de jurisdicción que se suscitaron durante estos meses entre la iglesia de Toledo y el tribunal inquisitorial con sede en esta ciudad provocaron que el Inquisidor General ordenase a los inquisidores que admitiesen como ordinario a Francisco Dávila, nombrado vicario general durante la sede vacante, para alcanzar una mejor resolución de los mismos (649).

Quiroga no acudió personalmente a tomar posesión de la mitra hasta finales de marzo de 1578. Unos días antes se había presentado ante el cabildo el breve otorgado por Gregorio XIII al nuevo arzobispo, por el que se concedía indulgencia plenaria el día que hiciese su entrada en la ciudad y celebrase su

(646).- BL, Eg. 1506, fol. 23; IVDJ, envío 89 (caja 125), n° 260. El 10 de marzo de 1574, el monarca había recordado al cabildo la obligación que tenían los prebendados de residir, lo que provocó que, días después, el consistorio realizase una ordenanza para no dar los frutos en ausencia, en obediencia a la orden regia (Ibid., s.n.).

(647).- Ibid., envío 53 (caja 69), n° 213.

(648).- BL, Eg. 1506, fols. 30v, 34v.

(649).- Así lo comunicaba la Suprema a los inquisidores de Toledo el 20 de junio de 1576 (AHN, Inq., libro 578, fol. 404v). El origen de los problemas surgidos se encontraba en ciertos excesos cometidos por el fiscal del tribunal (BL, Eg. 1506, fol. 28r-v). Cuando Quiroga fue nombrado arzobispo, concedió este mismo poder a Juan de Obregón. No obstante, en noviembre de 1577, como se estaba desarrollando el importante proceso contra el franciscano Miguel de Medina, el Inquisidor General estimó que, por la magnitud del proceso, se perdería mucho tiempo en instruir en él a Obregón, por lo que prefirió que fuese Francisco Dávila quien continuase actuando como ordinario (AHN, Inq., libro 357, fol. 37r-v).

primera misa, beneficiándose de ésta todos aquellos que acudiesen a la iglesia, confesasen y comulgasen (650). El cabildo comisionó a los canónigos Juan de Guzmán y Rodrigo de Mendoza para que acudiesen a Oñas, donde Quiroga pernoctó en su viaje hacia Toledo, para concretar los ceremoniales que se desarrollaron los días 24 y 25 de marzo, rechazando el arzobispo que se le procurase ningún tipo de recibimiento (651). Como hemos referido anteriormente, Felipe II no creyó conveniente que Quiroga permaneciese por mucho tiempo alejado de la Corte, desestimando que fuese el momento más propicio para realizar el sínodo diocesano que había propuesto el prelado. Por tanto, su estancia en Toledo solamente se prolongó por espacio de unos días, puesto que, el 14 de de abril, cuando nació el infante don Felipe, que estaría llamado a suceder a su padre en el trono, Quiroga se encontraba nuevamente en la Corte, siendo el encargado de bautizar al vástago real (652).

c.1.El comienzo de la labor arzobispal (1577-1579)

Una de las primeras actuaciones que Gaspar de Quiroga realizó cuando ocupó la mitra toledana fue confirmar el nombramiento de Rodrigo de Mendoza, hermano del duque del Infantado, en el Adelantamiento de Cazorla. La provisión fue realizada por el cabildo catedralicio durante la sede vacante, habiendo motivado la reactivación del pleito por parte de la familia Cobos, lo que impidió que se llegase a efectuar la toma de posesión (653). El nuevo prelado

(650).- Dicho breve, despachado el 18 de febrero, se encuentra a ACT, V.5.A.1.22. Véase, igualmente, Ibid., Actas Capitulares. Tomo 16, fol. 179v.

(651).- En torno a los actos que se celebraron en estas jornadas, véase, Ibid., fols. 180v-182v; BNM, Ms. 4336, fols. 182v-183r.

(652).- A.LEON PINELO, op. cit., p, 120; P.SALAZAR Y MENDOZA, op. cit., p, 295; BSCV, Ms. n° 16, fol. 148v. El 17 de abril, Mateo Vázquez enviaba al rey una relación del Auto de Fe que se había celebrado en Toledo, "dicen que no se halló el arzobispo y que se notó mucho" (IVDJ, envío 55 (caja 72), n° 90). Si bien algunos autores refieren que Quiroga también suministró el bautismo al príncipe don Diego (entre otros A.LEON PINELO, op. cit., p, 115), parece que esta actuación fue efectuada por el nuncio Ormaneto (BSCV, Ms. n° 16, fol. 147v).

(653).- J.RIVERA RECIO, El Adelantamiento de Cazorla, p, 121; L.POLAINO ORTEGA, Estudios históricos sobre el Adelantamiento de Cazorla. Sevilla 1967, pp, 325-328, 333; IVDJ, envío 91 (caja 131), n° 481; RAH, "Salazar" M-13, fols. 105v-106v (n° 281); C.RIBA GARCIA,

mostró un enorme interés por este asunto (654), puesto que, además de su propia vinculación a la familia Mendoza, don Juan de Austria había instado a Gaspar de Quiroga y a otros miembros de la facción "papista" para lograr la obtención de este beneficio para su amigo (655). En mayo de 1578, el arzobispo procedía finalmente a ratificar la nominación, aunque ello no impidió que se continuase desarrollando el contencioso existente en torno a esta cuestión (656).

Otro de los temas de los que el prelado hubo de ocuparse de forma inmediata estaba referido a la provisión del administrador del Colegio de las Doncellas de Toledo fundado por su predecesor Martínez Silicio, que había conferido este nombramiento a sus sucesores en el cargo por una clausula de su testamento. El elegido por el rey para realizar esta función fue el licenciado Rades, lo que provocó la súplica de Quiroga al monarca para que se respetase la voluntad del fundador y no sufriese la dignidad arzobispal ninguna merma en sus atribuciones, aunque accedió a efectuar la provisión de la persona designada por el rey (657).

Igualmente, Quiroga procuró que la iglesia toledana honrase la memoria

Correspondencia privada de Felipe II..., p. 69.

(654).- El 24 de octubre, es decir, sólo un día después de que Pazos hubiese tomado posesión de la mitra en su nombre, escribía a Felipe II: "cerca del adelantamiento de Cazorla verá V. Magd lo que es servido que se haga por es razón que está mal enajenado se procure que se restituya a su dueño/ dicen los letrados que la justicia es clara yo no he visto lo que en esto hay por no hacer ruido antes de tiempo" (AHN, Inq., libro 284, fol. 79v).

(655).- Véase las cartas que Juan de Austria remitió a la Corte al respecto en B.PORREÑO, op. cit., pp, 558, 563-564, 568-569; A.MOREL-FATIO, op. cit., pp, 125-128, 134-137, 678.

(656).- J.RIVERA RECIO, op. cit., p, 121; P.SALAZAR Y MENDOZA, op. cit., p, 294; BNM, Ms. 13027, fol. 113v; BSCV, Ms. n° 16, fol. 148v. El 28 de mayo, Felipe II escribía a Juan de Zúñiga para advertirle de que, tras el nombramiento de Rodrigo de Mendoza, era factible que la parte contraria acudiese a Roma para intentar que se revocase la provisión. Encargaba al embajador que previniese al pontífice para que no se realizase ninguna novedad en este negocio, sino que cada uno siguiese su justicia (IVDJ, envío 111 (caja 157), n° 642).

(657).- El 24 de octubre de 1577, el rey trataba de informarse a través de Gaztelu sobre la validez de la nominación por parte de los prelados toledanos (Ibid., envío 53 (caja 69), n° 129; Ibid., envío 55 (caja 72), n° 100; AHN, Inq., libro 284, fols. 81, 96).

de Bartolomé de Carranza, celebrándose los ceremoniales pertinentes (658). Ordenó que el retrato del arzobispo se pusiese junto al resto de los que habían ostentado la mitra toledana, acompañado de la inscripción correspondiente, siendo el doctor Delgado y García de Loaysa los encargados de realizar la ejecución (659).

No obstante, la preocupación del nuevo arzobispo se centraba, principalmente, en el estado en que se encontraba la iglesia toledana después de que tantos años hubiese estado privada de prelado, procurando aplicar los criterios reformísticos al igual que había actuado en la diócesis de Cuenca. El 5 de abril de 1578, el cabildo catedralicio se reunía para encargar a algunos de sus miembros que se ocupasen en realizar un informe, que había sido solicitado por Quiroga, sobre la observancia que se tenía de los preceptos derivados del Concilio de Trento. El origen de esta diligencia se encontraba en un breve que Gregorio XIII había remitido a Felipe II, fechado el 20 de octubre de 1576, por el que decía estar prevenido de que en la iglesia de Toledo no se guardaban convenientemente las premisas tridentinas (660). Igualmente, el consistorio creó una comisión para que fuese examinado el Concilio provincial celebrado en 1565 capítulo por capítulo con la misma finalidad (661). El 12 de abril, quedaron especificados los temas sobre los que Quiroga había insistido en que se ajustasen a los criterios tridentinos. En primer lugar, se señalaba la necesidad de que todos los canónigos estuviesen ordenados en misa, a lo que el capítulo no presentó ninguna objeción. De la misma manera, se estipulaba que los

(658).- Para definir los mismos, el canónigo Jerónimo Manrique se trasladó a Madrid (ACT, Actas Capitulares. Tomo 16, fols. 189v-190r, 198v).

(659).- Ibid., fols. 209v-210v, 212v, 214v-216r, 243v, 249r; J.ROMAN DE LA HIGUERA, op. cit., fol. 182; P.SALAZAR Y MENDOZA, *Vida y sucesos prósperos...*, pp. 207-209; J.A.LLORENTE, op. cit., III, p. 209.

(660).- Los designados por el cabildo para esta función fueron el arcediano de Toledo Francisco Dávila, el tesorero Pedro González de Mendoza, el maestrescuela doctor Delgado, el arcediano de Guadalajara García de Loaysa, y los canónigos Juan de la Cerda y Tomás de Borja (ACT, Actas Capitulares. Tomo 16, fol. 184r-v).

(661).- Los comisionados fueron el deán Diego de Castilla, el arcediano de Toledo, el maestrescuela y algunos canónigos (Ibid., fol. 185r).

beneficiados - canónigos y racioneros - no podían ausentarse de sus prebendas por un espacio superior a tres meses durante el mismo año. Sin embargo, las constituciones de la iglesia toledana permitían una ausencia de cuatro meses, aunque repartidos en plazos de cuarenta días cada cuatrimestre, no pudiéndose unir estos periodos de alejamiento entre sí, lo que el cabildo estimaba que hacía guardar la residencia de forma más estricta de lo que figuraba en los acuerdos tridentinos, por los que el trimestre se podía gozar de forma continuada e incluso vincular el permitido en un año con el correspondiente al siguiente. Esto conllevaba que los beneficiados pudiesen permanecer alejados durante un semestre de forma ininterrumpida, lo que además traía inconvenientes en la práctica si la mayoría de los mismos decidían tomar su trimestre simultáneamente, como había demostrado la experiencia que se había seguido en otras iglesias. Esta era la razón de que en otras sedes como Burgos, Santiago y Valencia continuasen con la costumbre referida a los cuarenta días como Toledo, contando con el beneplácito de la congregación de cardenales que en Roma velaba por la observancia de los decretos tridentinos. Suplicaba a Quiroga que, puesto estimaban perjudicial la mudanza de esta usanza, se diferiese la toma de cualquier resolución hasta que se informase al papa y al rey sobre esta cuestión (662). Por último, el deán y el consistorio pretendían un aumento de las distribuciones cotidianas que no se hallaban en consonancia con lo establecido por la normativa tridentina. El día anterior había llegado noticia al capítulo de la decisión adoptada por Quiroga de acrecentar las mismas para que el coro fuese servido con mayor frecuencia y asistencia de los beneficiados, optando por dejar en suspenso el resto de diferencias suscitadas por la actuación que había ordenado efectuar (663).

(662).- Esta solicitud el cabildo fue el resultado de las indagaciones realizadas a petición de Quiroga, que fueron expuestas en su seno por el canónigo Juan de la Cerda. Por ello, decidieron diputar a Diego de Castilla, Francisco Dávila y el doctor Delgado para que tratasen directamente con el arzobispo en relación a este asunto. También debían representar al prelado otros temas, como era nombrar a dos canónigos mas, además de los nominados, para acudir al Auto de Fe que se iba a celebrar próximamente, así como en relación a la visita de las capillas que Quiroga había encargado al licenciado Martínez, del Consejo de la dignidad (Ibid., fols. 186v-187r).

(663).- El aumento de las contribuciones cotidianas se cifraba en cuarenta maravedíes para los canónigos, sobre los noventa que ganaban, y veinte para los racioneros (Ibid., fol. 187r-v). Igualmente, Quiroga dictaminó que dicho aumento se repartiese en función de las horas canónicas.

Igualmente, a comienzos del mes de abril, el prelado ordenó al licenciado Martínez, perteneciente al Consejo de la dignidad, que realizase una visita a las capillas, labor en la que se ocupó por espacio de un año (664).

Una de las mayores novedades que introdujo el arzobispo en estos primeros años estuvo referida al pago del excusado. Entre 1550 y 1579, esta función había sido desarrollada por arrendadores particulares. No obstante, a partir de entonces, Quiroga mandó que el arriendo lo efectuase el contador mayor, encargando la cobranza a los mayordomos, a los que se les otorgó derecho de caballerías y salario por esta función (665). En abril de 1578, el canónigo Juan de Varnuevo fue designado receptor general del arzobispado para la recaudación de la gracia, mientras que Miguel Díaz y el doctor Velázquez fueron nombrados contadores (666). En febrero de 1580, el arzobispo dió provisión a Pedro de Ayala, vicario de la iglesia toledana, para que ostentase el oficio de contador mayor en sustitución del canónigo Miguel de Silva, que había fallecido (667).

Por otra parte, hemos de señalar, que en contraposición a lo que había sucedido con sus antecesores en la mitra, Gaspar de Quiroga mantuvo unas excelentes relaciones con el cabildo catedralicio, que únicamente se vieron

sobre la reunión capitular celebrada el 12 de abril, véase, Ibid., fols. 187v-189v.

(664).- Ibid., fols. 190v, 280r.

(665).- L.SANTOLAYA HEREDERO, La Obra y Fábrica de la catedral de Toledo a fines del siglo XVI. Caja de Ahorros Provincial de Toledo 1979, p. 60.

(666).- ACT, Actas Capitulares. Tomo 16, fols. 195r, 197v. El 20 de junio, el cabildo escribía al prelado para que mandase pagar el subsidio y el excusado que correspondía a su dignidad por ese año (Ibid., fol. 209r). Unos días después, el consistorio comisionaba al racionero Alonso Sánchez para que acudiese a Madrid a tratar con los contadores reales acerca del repartimiento del descuento sobre subsidio y excusado de las pensiones de cardenales, puesto que se excusaban de efectuarlo. Se le ordenaba que diese cuenta de todo ello a Quiroga, "pues a Su S^a Illma le va más que a nadie" (Ibid., fol. 213v). El 23 de julio, el licenciado Matienzo era encargado de ocuparse de estos negocios en la Corte (Ibid., fol. 218r). Sobre las diversas gestiones que se desarrollaron en torno a este tema y la resistencia que presentó el capítulo respecto a algunas cuestiones, véase, Ibid., fols. 220r, 233r, 243r-v, 250v.

(667).- Ibid., fol. 347v.

enturbiadas en escasas ocasiones (668). El prelado ejerció una amplia labor de patronazgo en la iglesia toledana, favoreciendo a sus clientes para que obtuviesen beneficios en la misma. Así, a finales de 1577, la muerte del doctor Barriovero dejaba vacante la canonjía magistral que ostentaba (669). El 2 de enero de 1578, el vicario general, Juan de Obregón, presentaba al cabildo un poder otorgado por el prelado para que pudiese votar en su nombre en esta provisión, habilitándole, igualmente, para asistir a todos los actos que tuviesen lugar en relación a la elección que se debía realizar (670). Esta actuación no fue bien acogida por el consistorio que, siguiendo el parecer expresado por Francisco Dávila, resolvió representar al prelado que, como él bien sabía por haber sido capitular, la facultad que había otorgado al vicario constituía una novedad que perjudicaba la autoridad del cabildo, puesto que, con anterioridad, nunca se había encontrado presente ni tenido voto en estas designaciones. Además, Gaspar Yanes aducía que el Derecho Común no proporcionaba la capacidad a los arzobispos para subdelegar su voto en los vicarios (671). A pesar de las protestas, el cabildo se plegó finalmente a aceptar la participación del vicario, aunque señalando que condescendían por satisfacer a Quiroga, sin renunciar al uso tradicional y derecho de no admitir a ninguna persona que no fuese canónigo. El 7 de febrero, se nombraba para ostentar la canonjía magistral a Alonso de Mendoza, chartre de la iglesia de Alcalá de Henares (672). No

(668).- Sobre el buen acogimiento que la noticia de su nominación como arzobispo tuvo en el consistorio, véase, *Ibid.*, fol. 143r. Los componentes del mismo, cuando Quiroga pasó a ostentar la mitra toledana, aparecen recogidos en el apéndice III que se adjunta.

(669).- *Ibid.*, fols. 145r, 151r-v.

(670).- *Ibid.*, fol. 152v. Así mismo, en noviembre de 1577, Quiroga otorgó poder a Juan de Obregón para que asistiese a los negocios de la fe en su nombre (AHN, Inq., libro 357, fol. 37r-v).

(671).- Para realizar esta labor comisionaron al doctor Delgado, que se trasladó a la Corte para entrevistarse con Quiroga (ACT, Actas Capitulares. Tomo 16, fols. 156r, 157v). Hemos de señalar que un problema semejante surgió cuando llegó al consistorio una Cédula Real por la que se otorgaba asiento al corregidor de Toledo durante la elección (*Ibid.*, fols. 160r-164r).

(672).- *Ibid.*, fols. 172v-174r. Los opositores que habían optado a la misma junto al designado fueron: el doctor Alonso Pérez, canónigo de la iglesia de Plasencia, el doctor Fernando Bueso y el doctor Matra, canónigos de Jaen, el licenciado Alonso Navarro y el doctor de la Plaza, canónigos de Granada, el doctor Muñoz, canónigo magistral de Córdoba, el doctor Barrios, canónigo y catedrático de Teología de Sigüenza, Alonso Petrel, prior de Baeza, el doctor Sierra, canónigo

obstante, a mediados de julio, el consistorio encargó a varios de sus componentes revisar la bula otorgada por León X sobre las canonjías doctorales y magistrales, en torno a la pretensión que el vicario tenía de hallarse presente cuando se viese la información recabada referida al canónigo electo. La resolución adoptada, conforme a los preceptos jurídicos, fue denegar a Obregón esta posibilidad, así como en cuanto a presenciar la toma de posesión (673). Sin embargo, el problema se tornó a suscitar cuando, en noviembre de 1578, vacó una canonjía de lectura por la promoción del doctor Velázquez al obispado de Osma (674). El vicario trató de tomar parte igualmente en la votación conducente a la elección del nuevo canónigo, haciendo valer el poder otorgado por el prelado. Como en el caso precedente, el cabildo accedió a que Obregón asistiese y emitiese su voto, aunque no por ello renunciaba ni tácita ni expresamente a su derecho a no acoger a nadie que no fuese canónigo de dicha iglesia (675). El 23 de febrero de 1579, se efectuaba la provisión de Gabriel de Cárdenas, maestro de Teología de la Universidad de Salamanca (676).

Además de esta cuestión, únicamente surgió un pequeño conflicto derivado del enfrentamiento que protagonizaron los canónigos Juan Manrique de Lara y el licenciado Mexía de Gomara en el consistorio, que provocó que Quiroga ordenase su prisión en cumplimiento de las Constituciones de la iglesia. A comienzos de agosto de 1579, el capítulo mediaba a favor de los mismos,

magistral de Burgos y el doctor Valcázar, canónigo de Avila (Ibid., fol. 420r).

(673).- Ibid., fols. 216v, 218r.

(674).- Ibid., fols. 251r, 259r-v, 261v.

(675).- Ibid., fols. 262v, 263v-264r. Es posible que el cabildo tratase de buscar una solución a esta incómoda situación cuando, en abril de 1579, suplicaron a Quiroga que proveyese al vicario en una canonjía de penitenciario (Ibid., fol. 282r). No obstante, el prelado nombró a Juan Calderón (Ibid., fols. 285v-286r).

(676).- Además de Cárdenas, opositaban a la canonjía: Pero Martínez, canónigo de Sigüenza y catedrático de Prima de Teología, el doctor Barrio, canónigo y catedrático de Sigüenza, el doctor Calderón, catedrático de Prima de la Universidad de Alcalá, Alonso Pérez, canónigo de Sagrada Escritura de Plasencia, el doctor Juan Pérez de Valenzuela, canónigo de Córdoba, el doctor Molina, canónigo de Sagrada Escritura en Antequera y el doctor Juan Cantero, canónigo y catedrático de Escritura en Alcalá de Henares (Ibid., fol. 420v).

solicitando que se les señalase su casa como cárcel en lugar del claustro (677). El 1 de diciembre, el capítulo comisionó al deán para que escribiese al arzobispo para suplicarle su puesta en libertad, señalando que habían alcanzado la conformidad entre ellos y habían cumplido con todo lo que se les había impuesto (678).

Sin duda, a estas armoniosas relaciones con el cabildo catedralicio contribuyó la renovación que el mismo sufrió entre 1577 y 1579. Si bien cuando Quiroga pasó a ostentar la mitra toledana recibió a su servicio a todos aquellos que habían ostentado cargos y dignidades en la prelacia precedente (679), en los años sucesivos, las muertes y alejamientos del consistorio permitieron a Quiroga introducir en el mismo a algunos de sus clientes. Así, por fallecimiento del licenciado Valdivieso fue proveído en una canonjía doctoral el doctor Alonso Hondegardo. Como hemos referido, el doctor Barriovero fue sustituido por Alonso de Mendoza, mientras que el nombramiento del doctor Velázquez como obispo de Osma propició la nominación de Gabriel de Cárdenas. Igualmente, la renuncia de Juan de Guzmán permitió al arzobispo nombrar a Antonio Manrique. Francisco García de Valloboso vino a ocupar la canonjía vacante por muerte de Miguel de Silva, siendo Juan Calderón el designado para ocupar la plaza de Jerónimo Manrique, electo obispo de Salamanca. Juan de Alarcón relevó al fallecido doctor Peralta, mientras que la vacante producida por la muerte de Ramiro de Guzmán fue cubierta por Juan de Obregón, vicario general. A finales de 1579, Pedro de Quiroga, sobrino del prelado e inquisidor de Valladolid, era proveído canónigo y tesorero en lugar de Pedro González de

(677).- Ibid., fol. 299r. Esta situación afectó a los repartimientos de ambos capitulares (Ibid., fol. 302v).

(678).- Ibid., fol. 330v. La carta de Diego de Castilla al prelado aparece recogida en, RAH, "Salazar" N-4, fol. 22.

(679).- J.ROMAN DE LA HIGUERA, op. cit., fol. 204; P.SALAZAR Y MENDOZA, op. cit., pp. 79-80.

Mendoza (680). No obstante, un caso diferenciado fue la designación de Bernardino de Mendoza en la canonjía que había poseído Diego de Guzmán. Fue presentado a la misma por Gregorio XIII, contando con el beneplácito de Felipe II, a pesar de que el monarca hubiese preferido que esta prebenda hubiese sido para alguno de los deudos del fallecido Guzmán de Silva, para quien el rey había solicitado al pontífice la concesión del capelo cardenalicio (681). De la misma manera que había procedido con los capitulares, Quiroga procuró la renovación de los racioneros y clerizones, prestando además una especial atención a los beneficios curados, resaltando la importancia de que fuesen personas idóneas para cumplir con una labor tan significada por los decretos tridentinos (682).

Por último, hemos de señalar, que durante los decenios finales del siglo XVI, existió en Toledo un grupo de eruditos humanistas que, formados en la Universidad de Alcalá de Henares principalmente, dinamizó y dió brillantez a la vida cultural de la ciudad y procuró el mecenazgo de las artes y de algunos estudiosos, contando con el decidido apoyo de Gaspar de Quiroga. Los personajes más destacados dentro del mismo fueron el canónigo Antonio de

(680).- Sobre dichos nombramientos, nos remitimos al apéndice III que adjuntamos. En el caso de Pedro de Quiroga, sus obligaciones en el tribunal inquisitorial le retuvieron durante meses en Valladolid, lo que provocó que instase a la iglesia toledana para que le tuviese igualmente por presente (ACT, Actas Capitulares. Tomo 16, fols. 349v-350r, 359r). Por otra parte, surgieron problemas respecto al pago de los frutos de la canonjía que ocupaba el licenciado Ibarra, consultor del Santo Oficio en el tribunal vallisoletano (Ibid., fols. 353v-356r).

(681).- En este sentido, véase la carta que Felipe II remitió a Juan de Zúñiga en marzo de 1578 (IVDJ, envío 111 (caja 157), n° 631).

(682).- Sobre la gracia que Gregorio XIII concedió a Quiroga para proceder a la elección de los curas, véase, D.CASTEJON Y FONSECA, op. cit., p, 1135; G.GONZALEZ DAVILA, Teatro de las grandezas de la villa de Madrid, p, 464. En este sentido, los clientes de Mateo Vázquez no tuvieron opción de acceder a los cargos dependientes de la provisión del prelado, quejándose algunos de ellos del trato recibido por Quiroga, como fue el caso de Cipriano de la Cruz (IVDJ, envío 96 (caja 138), n° 409). Por otra parte, los propios canónigos pugnaban entre sí por beneficiar a sus protegidos en la nominación de capellanías, surgiendo disputas entre ellos para definir a quien correspondía el nombramiento por estar ejerciendo funciones de semanero mayor. Al respecto, véase, ACT, Actas Capitulares. Tomo 16, fols. 272v-273r, 275r, 292r, 309v, 318r). En torno a estas provisiones, así como a los referidas a los racioneros y clerizones, nos remitimos al apéndice adjunto.

Covarrubias, maestrescuela de la Universidad de Santa Catalina (683), y el deán Diego de Castilla, que junto con su hermano Luis de Castilla, arcediano de Cuenca, actuaron como protectores de Doménico Theotocópuli, El Greco, que se asentó en Toledo en 1577 (684). Las buenas relaciones que entabló con el cabildo catedralicio se vieron truncadas por el pleito que se generó en torno al cuadro de "El Expolio de Cristo", lo que supuso que, a partir de 1580, el pintor sufriese un importante parón en su carrera (685). En este sentido, la Catedral constituía una importante fuente de encargos para los artistas que desarrollaban su labor en Toledo por las múltiples obras que realizaba (686). Así, en noviembre de 1579, García de Loaysa transmitía al consistorio

(683).- Hermano de Diego de Covarrubias, obispo de Segovia y presidente del Consejo Real, estudió Leyes en Salamanca, donde obtuvo la licenciatura en 1556. En 1561, era proveído oidor de la Chancillería de Granada, acudiendo, al año siguiente, a la celebración del Concilio de Trento. En 1569, comenzó a actuar como oidor en la Chancillería de Valladolid, siendo nominado consejero real en 1573. El impedimento provocado por su sordera motivó que Felipe II le apartase de esta función, obteniendo nombramiento de canónigo en Toledo y maestrescuela de la Universidad. Ocupando este cargo, se puso en concurso la plaza de profesor de griego. Entre los cuatro candidatos presentados se encontraba Andrés Schott, flamenco llegado a la ciudad en 1579, y protegido de Gaspar de Quiroga, quien le hospedó en el palacio arzobispal. En torno a Diego de Covarrubias y el grupo de humanistas toledanos, véase, G.DE ANDRES, "El helenismo del canónigo toledano Antonio de Covarrubias. Un capítulo del humanismo en Toledo en el siglo XVI" Hispania Sacra 40 (1988), pp, 237-271; J.FERNANDEZ MONTAÑA, Los Covarrubias, pp, 67-98.

(684).- Sobre ambos hermanos, véase, G.DE ANDRES, "El arcediano de Cuenca don Luis de Castilla (†1618) protector del Greco y su biblioteca manuscrita" Hispania Sacra 35 (1983), pp, 87-141; V.GARCIA REY, El deán don Diego de Castilla..., passim. sobre la relación que les vinculó con el secretario de la Suprema Jerónimo Zurita, Ibid., pp, 37-39.

(685).- Mientras que la mayoría de los autores han resaltado el talante "místico" de la pintura de El Greco (Sin pretender ser exhaustivos, sirvan como ejemplo, C.JUSTI, "El Greco en Toledo" La España Moderna 311 (1914), pp, 86-108; G.MARAÑÓN, Notas sobre la vida y muerte de San Ignacio de Loyola. Madrid 1985, p, 38; VV.AA., El Toledo de Felipe II y el Greco. Toledo 1986, p, 11; J.BROWN (Ed.), Visiones del pensamiento. El Greco como intérprete de la historia, la tradición y las ideas. Madrid 1984, sobre todo, p, 9), esta interpretación ha sido revisada por F.MARIAS y A.BUSTAMANTE GARCIA, Las ideas artísticas del Greco. Madrid 1981, pp, 196-219. En torno a las diversas representaciones de Quiroga efectuadas por dicho pintor, véase, V.GARCIA REY, "Datos relativos a la vida del famoso Greco" Arte español 8 (1926), n° 4, pp, 174-175; H.E.WETHEY, El Greco y su escuela. Madrid 1962, II, pp, 94-95, 142-143, 222; A.VEGUE Y GOLDONI, "El Cardenal Quiroga, retratado por el Greco" Archivo Español de Arte y Arqueología 4 (1989), pp, 135-137.

(686).- Sobre estos aspectos, véase, A.LOPEZ-AMO Y MARIN, "Estudios de los contratos de las obras artísticas de la Catedral de Toledo en el siglo XVI" Anuario de Historia del Derecho Español 19 (1948), pp, 103-217; M.I.RODRIGUEZ QUINTANA, "La contratación artística en el Arzobispado de Toledo durante la segunda mitad del siglo XVI" Arte, Individuo y Sociedad 2 (1989), pp, 89-106.

la propuesta del arzobispo para realizar el ensanche del Sagrario, comenzándose a confeccionar las nuevas trazas (687). Por otra parte, dentro de este grupo de estudiosos toledanos, el arzobispo mantuvo una estrecha amistad con Alvar Gómez, biógrafo de los prelados que le precedieron en la mitra, que falleció en 1580 (688).

6.2.4. El Cardenal de Santa Balbina

Las buenas relaciones que Gaspar de Quiroga había mantenido tradicionalmente con la Santa Sede se vieron culminadas con la concesión del capelo cardenalicio. El 16 de marzo de 1578, Felipe II escribía a Juan de Zúñiga cómo había recibido sus noticias en relación a la promoción última de cardenales realizada por Gregorio XIII. En ésta, el pontífice había otorgado el capelo, según había solicitado el monarca, a Pedro Deza, a Hernando de Toledo y al fallecido Guzmán de Silva. El rey instaba a Zúñiga para que, en aquel que se había dado a éste último, fuese nombrado Gaspar de Quiroga. Igualmente, el monarca dirigía al papa una petición en el mismo sentido de su propia mano (689). Un año antes, en respuesta a la solicitud efectuada por Felipe II, Gregorio XIII había nominado cardenal a su sobrino, el archiduque Alberto de Austria. Ante las nuevas promociones proyectadas por el pontífice, efectuadas en marzo de 1578, el rey pretendía que, en el mismo consistorio en que estas se llevasen a cabo, su sobrino accediese por gracia papal a la dignidad de presbítero. Con ello trataba

(687).- ACT, Actas Capitulares. Tomo 16, fols. 322r, 330v.

(688).- J.ROMAN DE LA HIGUERA, op. cit., fols. 185-186, 201-203. Igualmente, Quiroga se hallaba muy vinculado a Ambrosio de Morales, al que conocía por la amistad que ambos habían mantenido con el Maestro Fernán Pérez de Oliva. El prelado favoreció a Morales encargándole, en diciembre de 1577, la vicaría y administración de los Hospitales de Puente del Arzobispo (E.RETEL, Ambrosio de Morales. Córdoba 1908, pp. 262-263). Pocos meses después, en octubre de 1578, era nombrado alcalde y regidor de dicha villa Alvaro de Quiroga, sobrino predilecto del prelado (C.VIÑAS y R.PAZ, Relaciones histórico-geográficas de los pueblos de España hecha por iniciativa de Felipe II. Madrid 1963, Toledo (2ª parte), p. 296).

(689).- La misiva remitida al embajador fue despachada por Antonio Pérez. Véase una copia en IVDJ, envío 111 (caja 157), nº 625. Por otra parte, el nombramiento de Pedro Deza para el cardenalato motivó que hubiese de abandonar la presidencia de la Chancillería de Valladolid para acudir a Roma (AZ, carp. 144, nº 371). Como hemos señalado, su sustituto fue Hernando de Vega.

de que obtuviese precedencia en relación a los cardenales diáconos, así como que el papa anticipase la fecha del breve donde quedaba incluido en este orden, con el fin de que precediese igualmente a aquellos que iban a ser nombrados (690). Esta misma preocupación expresó a Juan de Zúñiga el 16 de marzo, cuando requería el nombramiento de Quiroga como cardenal, estableciendo que su sobrino debía tener precedencia sobre el arzobispo de Toledo (691). Por otra parte, el 4 de mayo, volvía a dirigirse al embajador comunicándole que Hernando de Toledo se negaba a aceptar el capelo, apuntando la conveniencia de que, puesto que el otorgamiento del mismo estaba hecho, no se debía permitir que se perdiese, proponiendo para su ostentación a otra persona que considerase adecuada. No obstante, advertía a Zúñiga que en ningún caso debía ser nominado Quiroga en su lugar, sino en el capelo que había vacado por muerte de Guzmán de Silva (692).

En los meses siguientes, la actividad se centró en estas dos cuestiones. En referencia a la precedencia sobre el resto de los cardenales que Felipe II quería lograr para su sobrino, el papa mostró su conformidad con que el archiduque Alberto fuese ordenado como presbítero, aunque no le parecía un asunto propio de un consistorio, sino que se debía establecer a través de un breve. El mismo fue remitido a la Corte, aunque constando la recomendación papal de que no se ordenase como presbítero hasta los veintidos años, pudiendo recibir las órdenes menores a los dieciocho. Si se estimaba que esta edad era prematura, podría esperar el momento más idóneo, gozando igualmente de la antigüedad si esta era la opción elegida. Sin embargo, la decisión del pontífice no satisfacía las pretensiones del rey, que siguió demandando al embajador que continuase haciendo instancia a Gregorio XIII en lo que concernía al asunto de la precedencia. Estas gestiones dieron su fruto en el verano de 1578, pidiendo el monarca que el papa realizase una declaración explícita en previsión del

(690).- A. FERNANDEZ COLLADO, *Gregorio XIII y Felipe II...*, pp. 233-235.

(691).- IVDJ, envío 111 (caja 157), n° 626-627.

(692).- Ibid., n° 636.

surgimiento de inconvenientes (693).

Mucho más dificultosa se presentó la obtención del capelo cardenalicio para Gaspar de Quiroga. En el mes de mayo, el embajador refería a Felipe II la resistencia que mostraba Gregorio XIII a realizar el nombramiento. La actitud papal provocó que el rey tornase a escribir al pontífice, para tratar de inclinarle a realizar la concesión. Como hemos señalado, fue Antonio Pérez quien había auspiciado la candidatura de Quiroga como forma de atraerle a sus planteamientos políticos, recabando su apoyo y ganando su amistad a través de satisfacer su ambición. En este sentido, no nos parece casual que la petición del capelo se realizase solamente unos días antes de que se produjese el asesinato del secretario Escobedo. Pérez contaba con que sus buenas relaciones con la Santa Sede procurarían su nominación sin que existiese ningún problema. No obstante, las reticencias mostradas por el papa a acceder a la petición presentada por el embajador y por el mismo rey forzó la intervención directa del secretario, que a finales de año veía cumplido su objetivo (694).

Así pues, el 15 de diciembre de 1578, Gaspar de Quiroga era nombrado cardenal en promoción única. La noticia llegó a Madrid el 20 de enero del año siguiente (695). Juan Bautista Magnano, camarero secreto del papa fue el

(693).- Ibid., nº 640, 646-647.

(694).- Ibid., nº 643. Sobre estas cuestiones nos remitimos a las páginas precedentes. Además, véase, J.I.TELLECHEA IDIGORAS, "Antonio Pérez a través de la documentación de la nunciatura de Madrid", pp. 656-660. Por otra parte, L.PASTOR también percibió el cambio súbito de actitud en Gregorio XIII, que procedió a efectuar el nombramiento cuando ya Juan de Zúñiga desestimaba su ejecución (op. cit., XIX, p. 214).

(695).- La satisfacción de Antonio Pérez por el éxito de sus gestiones quedó reflejada en las cartas que dirigió a diversas personas comunicando la noticia. Así, el 21 de enero, escribía a Cristobal de Moura (CODDIN, Vol.6, p. 73); el día 26, al marqués de los Vélez (Obras y relaciones. Colonia 1676, p. 19). Por otra parte, en estos mismos días, informaba al rey de cómo en la Corte se estaba intentando que Quiroga no fuese huésped del secretario en "la casilla". No obstante, estos intentos de disuasión no tuvieron resultado, puesto que, en febrero de 1579, el nuevo cardenal gozó de la hospitalidad del secretario (Ibid, p. 21; G. MARAÑÓN, Antonio Pérez, I, p. 124). Pero, sin duda, quien recibió con mayor alborozo el nombramiento fue el propio interesado, pues, como el propio Pérez refería al rey, estaba "tan ancho que habrá menester más paño ahora para vestirse que antes" (ibidem). El 23 de enero, Quiroga mostraba su agradecimiento a Felipe II por las instancias realizadas (IVDJ, envío 89 (caja 125), nº 186) y tres días después

encargado de traer el breve, despachado el 2 de enero (696), junto al bonete, personándose en Madrid el 7 de abril. Al día siguiente, el nuncio Felipe Segá hacía entrega de los mismos a Gaspar de Quiroga en su posada (697). El breve referido al capelo se otorgó el 6 de junio, siendo Diego López de Montoya, procurador del Santo Oficio en Roma, quien, como hemos referido, realizó su traslado (698). Se le deparó un gran recibimiento en Alcalá de Henares, siendo escoltado hasta la posada de Quiroga por Antonio de Padilla y Hernando de Vega. El 2 de agosto, el nuevo cardenal recibía el capelo de manos de Segá en el Real Monasterio de las Descalzas en Madrid. Poco después, el papa le envió el título de Cardenal de Santa Balbina, que, curiosamente, también había ostentado su predecesor en la mitra toledana Francisco Ximénez de Cisneros (699).

escribía a Juan de Zúñiga en el mismo sentido (Ibid., envío 91 (caja 130), n° 289). Igualmente, el monarca remitía su gratitud a los cardenales de Como, Buoncompagno y Gambara por los oficios realizados en favor de Quiroga (Ibid., envío 111 (caja 157), n° 399-404).

(696).- El mismo aparece transcrito en J. ROMAN DE LA HIGUERA, op. cit., pp, 201-203.

(697). A. LEON PINELO, Anales de Madrid, pp, 121-122. La instrucción que recibió el nuncio al respecto en BL, Add. 16176, fols. 227-229; por otra parte, ésto contribuyó a acelerar el cambio de posada que tanto había solicitado Quiroga, pasando a ocupar la que había pertencido a don Juan de Austria (IVDJ, envío 55 (caja 72), n° 20).

(698).- AGS, Estado, leg. 935, n° 102. Por otra parte, Quiroga había solicitado al embajador Zúñiga que junto al capelo se le diese indulto y facultad para testar (IVDJ, envío 91 (caja 130), n° 290).

(699).- P.SALAZAR Y MENDOZA, Cronica del Gran Cardenal..., pp, 290-291; Biografía eclesiástica completa, p, 1206; G.GONZALEZ DAVILA, Teatro eclesiástico...de las dos Castillas, I, p, 489; BSCV, Ms. n° 16, fol. 150r; C. CASTEJON Y FONSECA, op. cit., p, 1135, donde aparecen incluídos los versos que se realizaron en Toledo para dar el parabién a Quiroga. El cabildo catedralicio designó a Francisco Dávila y a García de Loaysa para que acudiesen a cumplimentar al prelado (ACT, Actas Capitulares. Tomo 16, fols. 262v, 272r, 281r). Entre las felicitaciones recibidas, fue especialmente significativa la enviada por Marco Antonio Colonna, quien aprovechaba la ocasión para instar al nuevo cardenal a llegar a un entendimiento en relación a las diferencias que mantenía con el tribunal inquisitorial de Sicilia (AHN, Inq., libro 877, fol. 372). Por otra parte, el 12 de marzo de 1579, consultaba con Mateo Vázquez si sabía lo que Diego de Espinosa había pagado a los que le trajeron el bonete y el capelo, para obrar convenientemente en este sentido (IVDJ, envío 89 (caja 125), n° 188).

CAPITULO 7

7. LA PERDIDA DEL FAVOR REAL (1580-1585)

7.1. La reacción del "partido castellanista" y la destrucción de la facción "papista" (1579-1580)

El influjo que el "partido papista" había alcanzado sobre el ánimo regio tras la muerte de Espinosa, se vió acompañado por la ocupación por parte de sus miembros de los principales cargos de la administración de la Monarquía. Para contrarrestar el poder adquirido por este grupo, Mateo Vázquez inició una serie de actuaciones tendente a minimizar su influencia, que culminaron a finales de la década de los setenta, cuando la prisión de Antonio Pérez y de la princesa de Eboli propició el declive del "partido papista", cuyos componentes, perdida la gracia real, fueron excluidos del ejercicio del poder.

Con tal objetivo, Mateo Vázquez trató de ejercer cierto dominio sobre el rey, restringiendo el acceso tanto a su persona, poniendo obstáculos a la presencia de otros cortesanos ante Felipe II, como en lo referido a su conciencia, para lo que contó con la impagable ayuda del nuevo confesor real, fray Diego de Chaves (1). En este sentido, en un memorial secreto, fechado en diciembre de 1578, exponía al rey la situación en la que se hallaba la Monarquía en términos misteriosos y providencialistas. Después de invitar al rey a realizar un examen de su propio comportamiento respecto a faltas o pecados cometidos, apuntaba que las dificultades que atravesaban sus reinos eran achacables a los

(1).- C.J. DE CARLOS MORALES, "La participación en el gobierno a través de la conciencia regia. Fray Diego de Chaves, O.P., confesor de Felipe II". (En prensa).

malos consejos recibidos, que el rey había aplicado en ámbitos que, curiosamente, estaban sometidos al control de los "papistas". Así, aconsejaba que se pusiera especial atención en el funcionamiento de los tribunales, por la enorme importancia de hacer y aplicar la justicia (2), así como en el control de los gastos de la monarquía, por lo que convendría revisar los Consejos de Hacienda, Estado y Guerra. Igual importancia revestía la gestión y utilización de los ingresos, no solo derivados de las imposiciones, sino también de las Gracias concedidas por el pontífice. Para tratar sobre estas cuestiones, usando del mayor secreto hasta que se hubiesen adoptado las resoluciones pertinentes, Mateo Vázquez proponía a Felipe II que fueran cometidas únicamente a tres personas: a Gaspar de Quiroga, al duque de Alba y al confesor Diego de Chaves. No deja de sorprender la inclusión en tan selecto comité de un miembro tan señalado del "partido papista" como era el Inquisidor General. Es posible que la intención del secretario fuese la misma que había motivado un acercamiento a otros miembros de la facción como el contador Francisco de Garnica o el Comisario General Velarde, sometidos a la presión de una visita, aunque esta táctica no obtuvo ningún resultado en referencia a Antonio Pérez y a la princesa de Eboli. El consolidado influjo alcanzado por el grupo, evidenciado para el secretario cuando el Presidente del Consejo Real le ordenó dejar de intrigar en torno al asesinato de Juan de Escobedo, llevó a Vázquez a emprender este camino para que el rechazo de su aparente buena voluntad le permitiese aparecer ante el rey como una víctima del comportamiento de sus enemigos políticos (3).

Desde comienzos de 1579 recrudeció sus actividades contra los personajes que conformaban el "partido papista". Uno de los primeros en sufrir las consecuencias de los ataques conducidos por el secretario fue el marqués de los

(2).- "Porque además que en ley de Dios se debe ésto hacer, y cumpliéndose con ello se puede esperar que alumbrará a V. M. para elegir buenos ministros (en que va tanto, pues sabemos que cuando quiere castigar a los príncipes comienza cegándolos en esta parte), en consideración de estado, es cosa segurísima, por la satisfacción que el pueblo recibe de que el ministro que mal procede, no gobierne" (IVDJ, envío 51, n° 181 [antiguo 179]).

(3).- Además, Vázquez se esforzaba en promocionar una imagen personal caracterizada por la rectitud. Sobre estas cuestiones, así como la labor que en este sentido efectuaron Agustín Álvarez de Toledo y Pedro Núñez de Toledo, véase J. MARTINEZ MILLAN, "La herencia...".

Vélez, quien, estrechamente relacionado con Antonio Pérez, había secundado el consejo de éste respecto a la necesidad de eliminar a Escobedo. Perdida la gracia real, hubo de abandonar la Corte y su cargo de Mayordomo Mayor de la reina, oficio en el que fue sustituido por Francisco de Zapata y Cisneros, conde de Barajas, señaladamente vinculado al "partido castellanista" (4). Como había expuesto en el secreto memorial que había enviado al rey, Vázquez convenció al monarca de la necesidad de revisar el funcionamiento de determinados organismos, haciendo recaer sobre sus servidores sospechas de no proceder con la limpieza conveniente. Así, se inició una visita sobre el Comisario General de Cruzada Pedro de Velarde, al que se acusaba de cometer irregularidades en relación con los ingresos provenientes de las Gracias. Paralelamente, se había instruido un procedimiento semejante contra Garnica y Juan de Herrera, después del intento fallido realizado en 1576. El encargado de llevar a cabo las gestiones fue el consejero de Castilla Francisco de Avedillo, personaje cercano a Mateo Vázquez (5). De igual manera, el secretario trató de reactivar la visita que desde años antes se estaba efectuando al Consejo de Italia, aunque, en este sentido, su principal preocupación estuvo centrada en impedir que la secretaría de dicha institución, vacante tras el fallecimiento de Diego de Vargas, recayese en Antonio Pérez, para lo que contó con la ayuda de otro de sus amigos, Diego de Cabrera y Bobadilla, tercer Conde de Chinchón (6). Al mismo tiempo, Hernando de Vega asumía la presidencia del Consejo de Hacienda, mientras que

(4).- "Mateo Vázquez formaba, con el confesor Diego de Chaves y el Conde de Barajas (...) una de esas ligas de Corte conocidas con el nombre de amistad, y que era semejante a la que existía entre Antonio Pérez, el marqués de los Vélez y el cardenal de Toledo, don Gaspar de Quiroga" (F. MIGNET, op. cit., p. 99). Gravemente enfermo, Pedro Fajardo falleció poco después de abandonar la Corte. Sobre la protección que Gaspar de Quiroga procuró a su viuda, Mencía de Requesens, hija de Luis de Requesens, véase, M. FORMICA, La hija de don Juan de Austria. Ana de Jesús en el proceso al pastelero de Madrigal. Madrid 1975, pp. 77-85.

(5).- En relación a dicha visita, véase, C. J. DE CARLOS MORALES, Política y finanzas..., pp. 167-184. A la muerte de Avedillo se produjo un paréntesis en las pesquisas, tras el que fue nombrado como visitador Juan Chumacero de Sotomayor. Igualmente, se acusó al Duque del Infantado de cometer irregularidades en el pago de la alcabala aprovechando su amistad con el presidente del Consejo de Hacienda y con Pazos, siendo especialmente conocida su vinculación con Velarde y con Quiroga (AZ, carp. 138, n° 15; ibid., carp. 144, n° 489).

(6).- Sobre la vinculación del conde de Chinchón al "partido castellanista", véase, S. FERNANDEZ CONTI, "La nobleza cortesana...", pp. 234-236.

Antonio de Padilla era proveído en la de Indias (7). Un gran amigo de Vázquez, Gabriel de Zayas, ocupaba la secretaría del Consejo de Italia, siendo nominado como presidente de la institución el Cardenal Granvela. Así mismo, el propio Mateo Vázquez puso todo su empeño en lograr alzarse con la secretaría de la Suprema, objetivo que consiguió, acrecentando así su dominio sobre los asuntos inquisitoriales. Igualmente, aunque Velarde permaneció en su cargo hasta 1582, su influencia en los asuntos dependientes del Consejo de Cruzada fue nula, siendo finalmente sustituido por el consejero de Inquisición Tomás de Salazar. En este proceso, así como en lo referido a la continuación de la visita al Consejo de Italia, Vázquez contó con la ayuda de uno de sus más fieles clientes, Sancho Busto de Villegas, que fue rescatado políticamente por el secretario real después de que su nombramiento como obispo de Avila le alejase de la Corte. Junto a estas ocupaciones, Busto de Villegas tomó igualmente a su cargo la visita instruida a diversos secretarios, alentada por el objetivo último de destituir al encarcelado Antonio Pérez (8). El candidato presentado por Mateo Vázquez para ocupar su puesto fue Juan de Idíaquez, que pasó a formar parte de la facción "castellanista". Por último, Antonio Mauricio de Pazos consiguió igualmente permanecer en la presidencia del Consejo de Castilla hasta 1582, cuando Mateo Vázquez y el Conde de Barajas, que había reemplazado a Antonio de Padilla en la presidencia del Consejo de Ordenes, procuraron su nombramiento como obispo de Córdoba a fin de alejarlo de la Corte. No obstante, desde hacía meses, era Rodrigo Vázquez de Arce quien se encargaba

(7).- El 29 de mayo, el rey comunicaba a Vázquez su resolución de nombrar a Vega presidente del Consejo de Hacienda y le consultaba sobre si le parecía conveniente Pedro de Portocarrero para sustituirlo en la presidencia de la Chancillería de Valladolid (IVDJ, envío 55 (caja 72), n° 110). Igualmente, aparece recogido el nombramiento de Padilla, fechado el 9 de junio (ibid, s.f.).

(8).- Ibid., envío 90, n° 9. En febrero de 1580, Busto de Villegas refería a Mateo Vázquez que estaba esperando que se le entregase la comisión correspondiente para acometer su instrucción (Ibid, envío 91, n° 384), sobre la que mantuvo informado a Vázquez (ibid, n° 12). Cuando falleció el obispo de Avila, la continuación de la visita fue encargada a Tomás de Salazar. Uno de los objetivos era Francisco González, que había servido como oficial de otro destacado "papista", el secretario Gaztelu, fallecido en 1580. Tal inspección, pese a su profundidad, no halló ninguna irregularidad en su contra (Ibid, envío 7 (caja 11), fols. 146-148, 209; AHN, Inq., leg. 3314, n° 63). En febrero de 1585, Hernando de Vega advertía a Vázquez que se estaban examinando testigos cercanos a su secretaría. En su respuesta, el secretario tranquilizaba sus temores, explicando que la diligencia había de servir para que el rey supiese lo bien que procedía en el ejercicio de su oficio (IVDJ, envío 56 (caja 74), paquete 6, n° 4).

en la práctica de los asuntos de Castilla, realizando además, por mandato regio, una supervisión de las actuaciones desarrolladas por Pazos. A pesar de sus intentos para evitar su relegamiento, el Conde de Barajas pasaba a ocupar la presidencia del Consejo Real en octubre (9).

Así pues, a través de la activación de procedimientos administrativos extraordinarios, como eran las visitas, y con la caída en desgracia de Pérez y la Eboli, que arrastraron al resto de los componentes del "partido papista", Mateo Vázquez consiguió desplazar a los mismos de los principales cargos de la monarquía, consiguiendo su sustitución por sus propios clientes. De modo que la pugna entre las facciones cortesanas que se habían formado a la muerte del cardenal Espinosa en 1572, se saldaba, al final de la década, con la destrucción del "partido papista" y con el afianzamiento en el beneficio de la gracia real de la facción "castellanista", que se vió reflejado en el dominio alcanzado en el ejercicio del poder.

Por su parte, Gaspar de Quiroga trató de favorecer los intereses del grupo en que se encuadraba, intercediendo ante el rey por la provisión de Antonio Pérez en la secretaría del Consejo de Italia y entorpeciendo el desarrollo de la visita que se estaba llevando a cabo sobre su protegido, Pedro Velarde. No obstante, al igual que al resto de los miembros de la facción "papista", la prisión de los principales patronos del "partido" marcó el declive de su influencia. La fidelidad mostrada por Quiroga, que ofreció ayuda a la familia de ambos a pesar del ambiente hostil reinante, favoreció su relegamiento cortesano: al mismo tiempo que el rey se trasladaba a Badajoz, en marzo de 1580, el Inquisidor General emprendía el camino hacia su arzobispado de Toledo, donde permaneció apartado ejerciendo diversas labores. El "perecismo" de Quiroga conllevó que perdiese el ascendiente del que había gozado en los años precedentes, viéndose forzado a admitir que Mateo Vázquez accediese al cargo de secretario de la Suprema, con lo que su influencia en los asuntos inquisitoriales, pese a su prominente cargo, sufrió una considerable merma.

(9).- I.J. EZQUERRA REVILLA, "El ascenso de los letrados eclesiásticos...", pp. 299-300.

7.1.1. La revitalización de la visita al Consejo de Italia

Como hemos señalado, desde 1568 se estaba desarrollando una visita al Consejo de Italia. Sin embargo, sus efectos quedaron neutralizados por el control que sobre este organismo ejercían los miembros del "partido ebolista", a lo que se unió el hecho de que Francisco Hernández de Liébana, el visitador designado, compartía con ellos sus inclinaciones políticas. A pesar de que en su curso se pusieron de manifiesto diferencias entre los integrantes de este grupo, el cambio operado en la configuración de las facciones cortesanas, tras la muerte de los principales patronos del mismo y de Diego de Espinosa, se tradujo en el comienzo de la pugna entre los nuevos partidos surgidos en la Corte, para alzarse con el dominio de la institución y de los asuntos derivados de los territorios italianos. El creciente influjo adquirido por Mateo Vázquez desde 1574 conllevó que la visita, prácticamente estancada hasta entonces, adquiriese un nuevo talante, favoreciendo tal mutación el acercamiento del visitador al "partido castellanista" (10).

No obstante, el aumento de la influencia de Mateo Vázquez en estas materias trató de ser contrarrestado por la actuación desplegada por el "partido papista", puesto que ni Antonio Pérez ni Gaspar de Quiroga dejaron de procurar marcar su impronta sobre las decisiones que se adoptaban (11). En el caso del Inquisidor General, su vinculación a las cuestiones napolitanas continuaba siendo muy importante. Así, en septiembre de 1574, el virrey, el cardenal Granvela, remitía a la Corte la nómina de los candidatos para cubrir el oficio de lugarteniente de la Sumaria, por si Felipe II quería realizar consulta al Consejo de Italia. Entre los elegidos se hallaba el doctor Francisco Alvarez de Ribera,

(10).- M. RIVERO RODRIGUEZ, El Consejo de Italia..., pp. 103-104. La correspondencia entre Mateo Vázquez y Hernández de Liébana en torno a la visita se halla en IVDJ, envío 81 (caja 107), nº 105-176.

(11).- Así, en junio de 1574, Mateo Vázquez refería al rey, sobre una carta proveniente de Italia: "esa otra carta venía con las de Antonio Pérez así abierta, como va darla al obispo de Cuenca o a Zurita, porque creo que es respuesta de la que se escribió por su mano" (Ibid., envío 53, nº 67).

ante la insistencia con que Quiroga había demandado al rey su inclusión. Por su parte, Mateo Vázquez trataba de evitar que los temas relacionados con la provisión de cargos fuesen sometidos al criterio de este organismo, puesto que su dominio no se encontraba suficientemente afianzado (12).

La confianza que el monarca tenía en Gaspar de Quiroga como experto conocedor de las materias relacionadas con los territorios italianos deparó el mandato regio realizado a Baltasar de Molina, Conservador General del patrimonio en Milán (13), de reunirse con el Inquisidor General para tratar problemas urgentes. El 28 de mayo de 1575, Molina comunicaba al rey cómo habían finalizado las diversas reuniones que había mantenido con Quiroga, de las que resultó un memorial en el que se exponían los asuntos tratados y la opinión de Quiroga sobre los mismos, que se entregó a Santoyo para que lo hiciese llegar al monarca (14). Las cuestiones contenidas en el mismo estaban referidas a las revueltas genovesas, que, en opinión de Molina, se debían a la intervención de Francia, a las ciudades y lugares pertenecientes a Milán usurpados por Venecia y algunos individuos particulares, contra los que el

(12).- Mientras que Granvela se inclinaba por designar a Moles o a Marcelo de Moro, presentando como tercera opción a Santa Cruz, refería: "El Ribera nombro por no reñir con el obispo de Cuenca Quiroga, él sirve bien y cuanto puede, en las cosas que alcanza, pero temo se hallaría embarazado en tan gran machina (...) He suplicado a V.Md. algunos días ha fuese servido mandarle proveer por la Iglesia que es lo que me dice pretende y apto para ello y pobre con buena conciencia se le podía cometer alguna prelacia o buen beneficio" (AZ, carp. 150, n° 117). El 25 de octubre del mismo año, Vázquez refería al rey la necesidad de proveer los cargos de Italia, proponiendo que solicitase memoriales independientes para informarse de las personas que resultasen más idóneas: "El Inquisidor General habla mucho en esto, y a este se le habría de pedir primero / y al duque de Alba y al presidente de Indias y al de Ordenes (...) también se podría pedir al obispo de Córdoba para ver lo que dice/ y aunque proponerse esto en Consejo pleno se suele hacer y debe de ser bien para que allí vaya cada uno diciendo lo que se le ofreciere muchas veces creo que embaraza la libertad el deudo, la afición y las dependencias y cada uno en particular puede hablar con más libertad" (IVDJ, envío 53 (caja 69), fol. 152v).

(13).- Un memorial sobre sus amplios servicios, realizado por el propio Molina, se encuentra en Ibid, envío 80 [caja 104], n° 179 bis.

(14).- Igualmente, Molina solicitaba que se le diese una ocupación en la Península a causa de su avanzada edad y precaria salud. Dicho memorial se encuentra en Ibid, n° 178.

monarca podía actuar sin recurrir al Emperador (15). Igualmente, tanto Molina como Quiroga, insistían en la necesidad de que los obispados y beneficios eclesiásticos fuesen proveídos en personas de probada fidelidad a Felipe II y que se esforzasen por salvaguardar sus privilegios jurisdiccionales frente a la injerencia de otros poderes. También se mostraban preocupados por la pérdida paulatina de la autoridad, tanto del rey como del Senado frente a los jueces eclesiásticos, refiriendo los conflictos suscitados con el Cardenal Borromeo, aunque, como Quiroga apuntaba, la solución se había solicitado al pontífice, no siendo conveniente adoptar medidas previas a la intervención papal. De la misma manera, informaban al rey de la conveniencia de reparar el castillo de Milán, afectado por la picaresca de los constructores y fortificar la ciudad y otros lugares susceptibles de ser invadidos. En lo concerniente a la hacienda, señalaban al monarca los beneficios que se obtendrían si se pusiese orden en los arrendamientos tanto para evitar las restauraciones como para que las cobranzas se efectuasen en las plazas contempladas y que los gastos se realizasen en cosas necesarias ajustadas a las órdenes reales, no siendo apropiado que el mismo magistrado que ordenaba efectuar el pago se fiscalizara a sí mismo (16). Por último, no dejaban de apuntar que se debía permanecer muy atento a todos los intentos de intervención tanto armada como política de Francia sobre Milán.

Con el paso de los meses, ante la falta de actuaciones para atender estos asuntos, Molina comenzó a desconfiar de que el memorial hubiese sido presentado verdaderamente ante Felipe II, ante quien reiteró la urgencia de acometer su tratamiento y alcanzar algunos resultados (17). Conseguido su deseo de no abandonar la península, en agosto de 1576 ingresó en el Consejo de

(15).- Quiroga creía que estas afirmaciones no tenían fundamento y que las medidas apuntadas por Molina para cerrar la ribera de Génova eran inconvenientes, pues motivaría enfrentamientos con el Emperador. Sobre los sucesos acontecidos en Génova, véase L. CABRERA DE CORDOBA, op. cit., II, pp. 184-187, 207-211, 252-269, 290-293, 297-300. La opinión del Inquisidor General fue nuevamente rebatida por Molina mese después (IVDJ, envío 81 (caja 107), n° 68).

(16).- Por su parte, el Inquisidor General consideraba que estas cuestiones se debían someter al criterio del Consejo de Italia, y que se debían aplicar severos castigos a los oficiales que no se comportasen con rectitud en el manejo del dinero (ibid.).

(17).- Ibid., n° 178 bis.

Italia como regente por Milán. Poco después escribía a su protector, Mateo Vázquez, denunciando la ineficacia en el funcionamiento del organismo, al menos en los asuntos que a él atañían, puesto que el presidente remitía en la práctica los asuntos que le llegaban a Quiroga, con lo que la dilatación en la toma de decisiones era importante, aunque ambos hacían recaer esta responsabilidad en el rey, al que atribuían la lentitud en despachar las cuestiones (18).

Durante estos meses, el influjo de Vázquez sobre las materias derivadas de los territorios italianos se había incrementado a través de su naciente relación con Vespasiano Gonzaga y Marco Antonio Colonna (19), a las que se unían las previas con el conde de Chinchón, tesorero, y los oficiales de la Secretaría, cuando, ante el previsible fallecimiento de Diego de Vargas, buscaron su apoyo para frenar la ambición de Antonio Pérez de sucederle en el cargo, de manera que la secretaría del Consejo quedaría de nuevo vinculada a la de Estado de Italia. En este sentido, Vázquez buscó afianzar su dominio respecto al grupo "papista", solicitando al monarca la configuración de la Junta de Hacienda de Italia, cuya finalidad era revisar la situación en que se hallaban las rentas y patrimonio real en Milán, Nápoles y Sicilia, utilizando la información que habían procurado las visitas a dichos territorios, lo que, además, suponía una reactivación de la visita que se continuaba instruyendo sobre el Consejo, contando, en este sentido, como hemos señalado, con la colaboración de Hernández de Liébana (20).

(18).- Ibid., envío 81 [caja 107], n° 63, 72 y 80.

(19).- Sobre la amistad que Colonna mantenía tanto con Mateo Vázquez como con Antonio Pérez para asegurar su acceso al virreinato de Sicilia, véase, M. RIVERO RODRIGUEZ, "El servicio a dos cortes...", pp. 366-368. En marzo de 1576, Felipe II comunicaba a Quiroga que su intención era servirse de Colonna, sin que se le hubiera asegurado un cargo en Italia (BL, Eg. 1506, fol. 28v).

(20).- La composición de la Junta era marcadamente "castellanista", puesto que la formaban el visitador Hernández de Liébana, Baltasar de Molina, el Conde de Chinchón, los licenciados Avalos y Montenegro, los regentes Cutinario y Herrera y el contador Garnica (M. RIVERO RODRIGUEZ, El Consejo de Italia..., pp. 104-105).

La lucha por el control del Consejo de Italia se recrudeció a comienzos de 1577 como consecuencia de la muerte del secretario Diego de Vargas (21). Felipe II encargó al presidente del Consejo de Italia, el duque de Francavilla, la elaboración de una nómina sobre las personas más adecuadas para acceder a dicho puesto. Sin duda, ésto favorecía las pretensiones de Antonio Pérez, aunque la ausencia de la Corte de Diego Hurtado de Mendoza provocó el retraso en la ejecución de estas gestiones (22). La importancia del oficio a proveer, puesto que, según había demostrado el ejercicio precedente de Vargas, la secretaría permitía controlar la administración y los negocios italianos, conllevó que, al producirse el fallecimiento del suegro de Ruy Gómez de Silva en 1578, las presiones y tensiones en la Corte por lograr alzarse con la misma se incrementasen, lo que propició que el rey ordenase constituir una junta, formada por el conde de Chinchón, Gaspar de Quiroga y el marqués de los Vélez, en la que también tuvieron cabida Vázquez y Hernández de Liébana, quien asumió, además, la presidencia interina, para que se ocupase de realizar la designación (23).

Paralelamente al desarrollo de estas actividades, Quiroga procuró el favorecimiento de algunos de sus clientes. Así, seguía insistiendo en promocionar al doctor Francisco Alvarez de Ribera, en este caso para la plaza de regente en el Consejo vaca por la muerte de Baltasar Molina. Felipe II se mostraba sorprendido de que no hubiese propuesto al doctor Carvajal, inquisidor de Sicilia

(21).- En diciembre de 1576, Jerónimo Gassol presentaba a Vázquez su pretensión de suceder en lo que vacaba sobre negociaciones por muerte del secretario (AZ, carp. 138, nº 188).

(22).- Durante este tiempo, el encargado de realizar las consultas que se debían hacer llegar al rey fue Francisco Hernández de Liébana, que junto con Quiroga asesoraban al príncipe de Mérito en la elección de sustitutos (IVDJ, envío 80 (caja 104), nº 188). También realizaba labores relacionadas con la secretaría Francisco de Idiaquez, lo que no fue del agrado del duque de Francavilla, que presentó sus quejas al rey ante su acceso al Consejo y su intención de permanecer cubierto en el mismo (Ibid, envío 81 (caja 107), nº 204; *ibid*, envío 21 (caja 32), nº 507).

(23).- En este sentido, nos remitimos a los excesos y arbitrariedades cometidos por Vargas, que quedaron puestos de manifiesto al comienzo de la instrucción de la visita. Su resistencia a mostrar la instrucción con las atribuciones de su oficio, aduciendo su extravío, estaba relacionada con estas extralimitaciones, que equiparaban su actuación a la de los regentes (M. RIVERO RODRIGUEZ, *op. cit.*, pp. 106-109).

al que Quiroga había prometido ocupar en un nuevo cargo inquisitorial tras los resultados que en su contra arrojaba la visita realizada al tribunal por Antonio Mauricio de Pazos. Carvajal ingresó en el Consejo Real con la recomendación del Inquisidor General, aunque se había mostrado remiso a efectuarla por la amistad que unía al nuevo regente con Mateo Vázquez, quién le había presentado como candidato al monarca (24). Igualmente, en junio de 1577, era nombrado regente por Sicilia el doctor Pedro León, vinculado al Duque de Francavilla y para quien Quiroga solicitó una rápida incorporación. Sin embargo, ante la prisión del regente Cutinario, en julio de 1577, el presidente del Consejo le nombró regente por Nápoles (25). También se apoyó en sus opiniones sobre las personas adecuadas para ocupar los obispados en los territorios italianos, cuestión en la que el monarca continuaba consultando con el Inquisidor General (26).

No obstante, Quiroga continuaba mostrando una especial preocupación por los asuntos relacionados con Nápoles, así como por favorecer a diversos servidores vinculados a dicho reino (27). Así, se aprestó a hacer llegar a

(24).- De igual manera, una petición semejante había presentado Quiroga con anterioridad (AHN, Inq. libro 284, fol. 14r), pero el monarca opinaba que el doctor Ribera convenía en el puesto que ocupaba (BL, Eg. 1506, fol. 58v). Por su parte, Carvajal agradecía a Vázquez la merced que había recibido por su mediación, pese a que, aparentemente, había sido obra de Quiroga (IVDJ, envío 92 [caja 133], n° 6, fol. 386).

(25).- Ibid., envío 80 [caja 104], n° 187. Sobre la prisión de Cutinario refería Mateo Vázquez al rey: "V.Mt. vera el Alde. que será servido se ponga, Hernán Velázquez estuviera bien por ser más antigo, pero no sé si es ido a Colmenar, luego el Ximénez (que es mucho del Inquisidor General) y luego Tejada, que se ha visto en trabajo, los dichos digo que son los que agora hay por acá" (Ibid., envío 53 [caja 69], n° 82).

(26).- Así, en junio de 1577, Quiroga proponía al rey para el arzobispado de Ríssoles al agustino fray Lorenzo de Villavicencio, y a Juan Bautista de Cardona, canónigo de la catedral de Valencia que residía en Nápoles en casa del duque de Soma y que contaba con la aprobación del doctor León (BL, Eg. 1506, fol. 58r.-v.). Sobre la intervención de ambos en las provisiones de otros obispados (Ibid., fols. 61v-62r; IVDJ, envío 80 [caja 104], n° 189).

(27).- Así, el 7 de julio, pedía al monarca una ayuda económica para Carrillo de Quesada, capitán general de la artillería en Nápoles, encomiando notablemente los servicios que había prestado (BL, Eg. 1506, fol. 63v). Unos días antes, había rogado a Mateo Vázquez que favoreciese a Pedro Ossorio, que había sido criado de Juan de Mendoza, con quien Quiroga había mantenido una gran amistad, sirviéndose de él en cuestiones de Guerra en Italia. El 13 de septiembre, avalaba ante el secretario la pretensión de Ossorio de acrecentar la ventaja que le mandó dar de cuatro

Felipe II el memorial que le había remitido un soldado, Miguel de Piédrola y Beaumont, en el que se exponía la situación que estaba generando el gobierno del virrey, el marqués de Mondéjar (28). Con anterioridad a Piédrola, llegó a la Corte el marqués de Padulo, comisionado por la ciudad de Nápoles para gestionar el despacho de los negocios (29). Un año después, el Inquisidor General escribía al rey alarmado ante el estado de descontento generalizado que se vivía en Nápoles, temiendo que se pudiese producir una rebelión. Instaba al rey a adoptar alguna solución antes de que las posiciones se radicalizasen y se causase algún daño al virrey, contra el que se hallaban los ánimos muy encrespados, sobre todo porque había llegado noticia de que el monarca le desautorizaba y que tenía ya nombrado un sustituto (30). Quiroga estimaba que si Felipe II estaba decidido a realizar este cambio en el gobierno de Nápoles,

escudos de la infantería de Nápoles (IVDJ, envío 91, n° 50, 57).

(28).- El 1 de junio, Quiroga remitía el escrito al rey asegurando que se había informado sobre Piédrola, apuntando que era tenido por buen soldado y que el rey le conocía. No obstante el monarca apuntaba: "yo le conozco y no le tengo por muy asentado aunque debe de ser hombre de bien". Ordenaba a Quiroga que pusiese este asunto en conocimiento del regente León, que debía saber por su experiencia el estado en que se encontraba el reino (BL, Eg. 1506, fols. 59v-60r). Sin duda, Felipe II debía estar informado de la inclinación de Piédrola a realizar profecías. Según narraba, posteriormente, el propio Piédrola, una voz que escuchaba en su interior, y que le decía lo que iba a suceder, le empujó a trasladarse a la Corte para aconsejar al rey el camino que debía seguir. En este sentido, véase, RAH, "Salazar", N-4, fols. 55-58, en donde aparece reflejada una semblanza de este personaje.

(29).- IVDJ, envío 80 (caja 106), n° 555-565. AHN, Inq., libro 284, fol. 83. Sobre el contacto mantenido entre Quiroga y Mateo Vázquez sobre estas cuestiones, véase IVDJ, envío 91 (caja 130), n° 53.

(30).- Igualmente, el 30 de julio de 1578, solicitaba al monarca que recibiese a Piédrola (AHN, Inq., libro 284, fols. 156-157). Estas noticias habían llegado a Quiroga a través de uno de sus clientes, Jerónimo de Palacios, quien acusaba a Mondéjar de libertino y estimaba conveniente su relevo con cierta urgencia, "enviando a un gran personaje, de años, limpio de manos, de gran pecho y autoridad" (Ibid., fols. 100-102). Otra cuestión que había contribuido a enturbiar las relaciones entre Quiroga y el virrey napolitano estaba referida a la pretensión de Mondéjar de que le fuese concedida a su hijo, Pedro González de Mendoza la Cruz Grande de Tricopler de la Orden de San Juan de Malta. Si bien el papa había accedido a sus deseos, la propuesta había chocado con la oposición del Gran Maestre, que había reclamado ante el rey el modo de proceder de Mondéjar. Felipe II había solicitado la opinión de Quiroga (en este sentido, hemos de recordar la vinculación existente entre la familia Quiroga y dicha Orden), puesto que además esto podía significar que hubiese dificultades en la sucesión de la casa. El Inquisidor General se mostró partidario de respetar los deseos del Gran Maestre. En torno a esta cuestión, véase AZ, carp. 159, n° 26; AGS, Estado, leg. 929, n° 62-63, 70 (II). Por su parte, Mondéjar se apresuró a felicitar a Quiroga por la obtención del capelo cardenalicio (IVDJ, envío 80 [caja 104], n° 55).

debía honrar convenientemente al marqués de Mondéjar, nombrándole del Consejo de Estado o presidente del de Indias, e incluso en ambos cargos, reconociendo que era necesario que se le relevase en el virreinato (31). La campaña de desprestigio contra Mondéjar tuvo como resultado su sustitución, siendo el cargo ocupado, bajo los auspicios de Mateo Vázquez, por Juan de Zúñiga en agosto de 1579, con tanta premura y secreto que el nuevo virrey hubo de partir a Nápoles sin recibir las instrucciones inherentes al cargo (32).

Así pues, la influencia del "partido castellanista" sobre los territorios italianos se incrementaba, puesto que, como hemos referido, Marco Antonio Colonna fue nombrado virrey de Sicilia en 1577, evitándose la intervención del Consejo de Italia (33). Los problemas jurisdiccionales entre el mismo y el tribunal inquisitorial provocaron el definitivo acercamiento de Colonna a Mateo Vázquez, puesto que Antonio Pérez, por la vinculación que mantenía con Quiroga, no se presentaba ante el virrey como la mejor opción para defender sus intereses. Si bien en un principio Colonna trató de buscar el entendimiento con

(31).- Además de estas cuestiones, el 2 de enero de 1579, refería al rey que esta había sido la causa del viaje de Piédrola y Beaumont, según había expresado el mismo al regente León. También apuntaba que había abandonado la Corte unos días atrás (AHN, Inq., libro 284, fol. 103; AZ, carp. 144, n° 217). Poco antes de su marcha, Piédrola había escrito a Mateo Vázquez, comunicándole el mandato que tenía para partir, agradeciendo su intento de que permaneciese en Madrid y afirmando que seguiría reiterando sus denuncias sobre Mondéjar (IVDJ, envío 96 (caja 139), n° 763). Llegado a Nápoles, ofreció sus servicios al secretario real (ibid., envío 80 (caja 105), n° 380). En mayo del mismo año, Juan de Zúñiga comunicaba al rey lo que había sucedido cuando, en su camino hacia Madrid, había pasado por Roma. Señalaba que, como los cardenales eran aficionados a las artes adivinatorias, le procuraban un excelente tratamiento, pero que le impidió ver al papa porque Mondéjar le advirtió que estaba loco y que se creía un profeta. No obstante, en su viaje de vuelta no había podido evitar la entrevista, aunque no realizó ninguna queja sobre el virrey ante el pontífice (AGS, Estado, leg. 935, n° 71).

(32).- M. RIVERO RODRIGUEZ, op. cit., p. 106. Cuando Quiroga se dió cuenta de que estas maniobras habían estado encaminadas a desbancar a Mondéjar, cambió radicalmente su actitud. Así, en julio de 1579, Vázquez refería al rey: "El que mejor rostro solía hacer al marqués de Padulo era el cardenal de Toledo, agora dizq. es con quien más aspereza le acoge" (IVDJ, envío 15, n° 11).

(33).- Sobre la actuación de Quiroga y el regente León respecto a su predecesor, el duque de Terranova, H. G. KOENIGSBERGER, *La Práctica del Imperio*, pp. 208-209. El 20 de marzo de 1576 Mateo Vázquez escribía al rey: "Enviome a llamar el duque de Francavilla y dixo que a él se le ofrecía advertir a V. Magd. que la inclinación que tenía Marco Antonio al papa para dalle contentamiento era de consideración si fuese proveído a Sicilia para lo que toca a la monarquía" (IVDJ, envío 53, n° 64).

el Inquisidor General, sabedor de las quejas que desde la Suprema se estaban haciendo llegar al rey sobre su actuación (34), utilizó estas mismas, aduciendo el desprestigio que los miembros de la facción "papista" estaban efectuando sobre su persona, para que públicamente estuviese justificado su cambio de grupo cortesano, vinculándose a Mateo Vázquez como medio de permanecer en el cargo (35).

Con todo, la batalla principal estaba planteada en relación a la provisión de la secretaría y presidencia del Consejo. En este sentido, la gestión que estaba desarrollando Hernández de Liébana al frente de la misma había provocado el surgimiento de fuertes tensiones en el seno de la institución, puesto que, aprovechando la unión de la ostentación interina de dicho cargo con el de visitador, estaba actuando con cierta arbitrariedad, sin tener en consideración los juicios emitidos por los regentes, mientras que la falta de secretario venía a aumentar la confusión en el despacho de los asuntos, que, en la mayoría de los casos, quedaron relegados hasta que no se produjesen las designaciones para cubrir las vacantes (36).

A comienzos de 1579, todos los indicios apuntaban que Antonio Pérez lograría su pretensión de ser nombrado en la secretaría del Consejo de Italia. Hacia esta finalidad se había encaminado la actuación desplegada por Gaspar de

(34).- Ibid, envío 51, nº 77. En agosto de 1578, Colonna traía a a la memoria de Quiroga la vieja amistad que les unía: "habiendo V.S. Illma. hecho siempre conmigo oficio de padre, sería yo el más ruyn hombre del mundo quando en algo faltase de reconocer esto" (AZ, carp. 135, nº 69).

(35).- El 13 de agosto escribía a Vázquez: "El Arzobispo de Toledo razonando con el señor Pompeo Colonna ha prorrumpido en unas quejas muy acras contra mí, buena parte de las cuales V.S. comprehendera por una carta que le escrivo, cuya copia va con este (...) me imagino que haya dicho aquellas palabras por la llaneza y libertad de su ánimo, todavía por el deseo que tengo de que Su Magd. quede enteramente informado de todas mis acciones V.S. hara grandísimo placer presentar la dicha copia a Su Magd (...) con la secretez que es razón, porque si acaso el dicho arzobispo supiese que desto doy cuenta a Su Magd., fácilmente tomará algún desdén contra de mí" (Ibid., nº 67).

(36).- M. RIVERO RODRIGUEZ, op. cit., p. 110. El 14 de marzo de 1578, Quiroga instaba al rey a que se designase secretario del Consejo por las dificultades que estaba generando su carencia. El monarca aseguraba que el retraso se debía a que Hernández de Liébana estaba realizando unos apuntamientos al respecto que todavía no había terminado (AHN, Inq., libro 284, fol. 106; IVDJ, envío 55 (caja 72), nº 68).

Quiroga y el marqués de los Vélez, quienes, haciendo uso de su influencia sobre el monarca, obtuvieron la promesa regia de que Pérez sería proveído en el oficio, pudiendo ejercitarlo en las mismas condiciones que lo había hecho Diego de Vargas. No obstante, las presiones provenientes de Mateo Vázquez y, principalmente, del conde de Chinchón, convencieron al monarca de la necesidad de reformar el mismo. Esto resultó un impedimento decisivo para las ambiciones de Pérez de establecer su dominio sobre los asuntos de Italia, a lo que se unió la evidente caída de la Gracia real a que le condujeron las intrigas que habían desembocado en el asesinato de Escobedo, que culminó con su encarcelamiento en julio de dicho año. Finalmente, fue Gabriel de Zayas el designado para hacerse cargo de la secretaría, mientras el Cardenal Granvela asumía la presidencia (37).

La prisión de Antonio Pérez marcó el definitivo declive del "partido papista", cuyos miembros fueron alejados de la Corte, o, en caso de continuar en el ejercicio de sus cargos, no contaron con ningún influjo en la toma de decisiones. Así sucedió con Gaspar de Quiroga, quien, en los meses precedentes a su marcha a Toledo, no intervino en los asuntos italianos de forma significativa (38). La visita que se estaba realizando al Consejo, en la que, junto a Hernández de Liébana intervino el presidente de Ordenes Antonio de

(37).- M. RIVERO RODRIGUEZ, op. cit., pp. 111-114; L. CABRERA DE CORDOBA, op. cit., II, p. 450; G. MARAÑÓN, Antonio Pérez, I, pp. 384-385; P. RODRIGUEZ, "Gabriel de Zayas...", pp. 60-61; P. PIERSON, op. cit., p. 135; H.G. KOENIGSBERGER, The government of Sicily under Philip II of Spain. Londres 1951, pp. 65-66; IVDJ, envío 55 (caja 72) n° 142. Por su parte, Quiroga había tratado, en los meses precedentes, de continuar favoreciendo a sus protegidos, entre los que se encontraba Juan de Casanate, vinculado al Inquisidor General desde que actuara como visitador en Nápoles. En febrero, Quiroga presentó a Mateo Vázquez un memorial donde se recogían los oficios a los que Casanate podía ser promocionado, rogando que le favoreciese (AZ, carp. 135, n° 16). Sobre las mismas cuestiones insistía en mayo (IVDJ, envío 89 (caja 125), n° 189; ibid, envío 55 (caja 72), n° 112). Por otra parte, el regente León solicitó licencia para acompañar a Quiroga, exonerándose de su asistencia al Consejo (Ibid., n° 64).

(38).- Una vez en Toledo, su intervención se limitó a realizar reiteradas recomendaciones a Mateo Vázquez en favor del presidente de la Sumaria, el doctor Francisco Alvarez de Ribera (Ibid, envío 89 [caja 125], n° 201, 206), o bien a recibir la de otros que pensaban que aún tenía capacidad de patronazgo sobre los oficios italianos. En este sentido, véase la carta que, en diciembre de 1580, le remitió el Cardenal de Santa Cruz para que favoreciese al doctor Ludovico Ayme, cremonés, que pretendía la plaza vacante en el Senado de Milán por fallecimiento de Sigismundo Picinardi (AHN, Inq., leg. 2947, s.f.).

Padilla, no había concluído, ni los resultados obtenidos eran lo suficientemente sólidos como para cimentar ninguna actuación, por lo que pronto se estimó que no constituía el medio óptimo para atajar las deficiencias que había puesto de manifiesto en el funcionamiento de la institución la lucha entre las facciones cortesanas por alzarse con la secretaría del organismo, aunque sí había servido para que se evidenciasen los abusos que se cometían en el ejercicio de los oficios. Para poner orden en el tratamiento de los asuntos italianos era necesaria la configuración de un cuerpo normativo que regulase estructural y funcionalmente el Consejo de Italia en su conjunto y no sólo la secretaría. Para acometer esta labor, continuó reuniéndose la Junta que se había formado para dilucidar la sucesión de Diego de Vargas, de cuyo trabajo fueron resultado las importantes Instrucciones de 1579 (39).

A partir de 1580, el encargado de continuar la paralizada visita al Consejo fue Sancho Busto de Villegas, que contó con la ayuda de su predecesor en este cometido (40). El obispo de Avila tomó a su cargo esta actuación hasta que se produjo su fallecimiento, en enero de 1581 (41), pasando a encomendarse al licenciado Tomás de Salazar, consejero de la Suprema (42).

(39).- Sobre su gestación y la transcendencia de las materias abordadas, véase M. RIVERO RODRIGUEZ, op. cit., pp. 115-138.

(40).- Así, el 10 de febrero refería a Mateo Vázquez: "El presidente de Valladolid y yo nos emos juntado muchas vezes y hojeado la visita que es grande y está bien trabajada y apuntada, aunque por aver yo de dar los cargos y ser graves y de gran suma será forçoso examinar los testigos que faltan y verlos todos despacio y conferirlos, y en lo que toca a la comisión que para esto se me a de dar ya e dicho a v.m. que no está a mi cargo ordenarla sino al presidente y assí se lo e dicho a él" (IVDJ, envío 91, n° 384).

(41).- En el año que se había ocupado de la visita, había tratado de realizar un inventario de los bienes de Diego de Vargas. Escribió al virrey de Nápoles para completar la información al respecto, puesto que, en contra de lo que sucedía en los casos de Sicilia y Milán, la proveniente de dicho reino sobre Vargas y Gaytán era escasa (Ibid., n° 12). Igualmente, en el mes de julio, temió por el secreto de la instrucción por algunos despachos que se enviaron cuando se estaba muriendo el gobernador de Milán (Ibid., n° 527).

(42).- Ibid., envío 21, n° 823.

7.1.2. La visita al Consejo de Cruzada (43)

Desde que Pedro Velarde ocupó el cargo de Comisario General de Cruzada, sustituyendo a Francisco de Soto Salazar, los asuntos derivados de la concesión y administración de dicha gracia, así como del subsidio y el excusado, habían quedado bajo el dominio del "partido papista". Al igual que sucedía en otros ámbitos, desde la facción "castellanista" se instrumentalizó la activación de una visita para lograr sustraer estas materias del influjo ejercido por el mismo. El paso previo a su ejecución vino motivado por la ausencia de la Corte que Pedro Velarde hubo de realizar, en mayo de 1578, para atender ciertas cuestiones referidas a sus beneficios eclesiásticos en la iglesia de Toledo (44). Mateo Vázquez consiguió que el rey designase a Hernando de Vega como Comisario subdelgado durante el alejamiento de Velarde, a pesar de la oposición mostrada por éste y por Gaspar de Quiroga, que expresó al rey la inconveniencia de esta provisión aduciendo la condición de Hernando de Vega de consejero de Inquisición, puesto que, al coincidir las sesiones de ambos Consejos, la falta de asistencia a la Suprema estaba forzada, siendo éste el motivo que había condicionado el relegamiento de Velarde de esta institución (45).

(43).- Algunos de los aspectos comprendidos en este epígrafe han sido puestos de manifiesto de forma más amplia en nuestro trabajo, "La pugna cortesana por el control de la Cruzada (1573-1586)" Política y administración en tiempos de Felipe II. El gobierno por juntas, 1573-1598. (En prensa).

(44).- Por otra parte, este tema había motivado cierto enfriamiento de las relaciones de Velarde con el resto de los miembros de la facción "papista", y especialmente, con Gaspar de Quiroga, puesto que el Inquisidor General le había retirado su salario como consiliario de la Suprema a causa de su falta de asistencia. Si bien esta actuación estaba relacionada con la presión a la que Quiroga estaba sometiendo a otros consejeros, como Sancho Busto de Villegas, había permitido que Velarde conservase el título, pero se le había impedido la entrada a las sesiones del Consejo. Así pues, únicamente contaba con la remuneración procedente de su cargo de Comisario General, que Velarde estimaba insuficiente. Sus demandas no encontraron respuesta en sus patronos, por lo que inició un acercamiento a Mateo Vázquez, solicitando la concesión de una prebenda eclesiástica que no tuviese obligada residencia. Prior de Santillana, hubo de renunciar a dicha dignidad cuando fue nombrado canónigo y capiscol de la iglesia de Toledo en 1577, mediando Quiroga en su favor ante Felipe II (Ibid.).

(45).- IVDJ, envío 22 (caja 33), tomo 1, n° 179; Ibid., envío 21 (caja 31), n° 253; AZ, carp. 128, n° 201.

Así pues, en junio de 1578, Hernando de Vega tomó a su cargo, aunque de forma provisional, el tratamiento de los negocios relacionados con el desempeño del oficio de Comisario General. Habiendo colocado a uno de sus clientes al frente del organismo, Mateo Vázquez inició con el monarca las actuaciones precisas para encaminar la consecución de una visita al Consejo de Cruzada, cuya finalidad era conseguir que el mismo quedase bajo el influjo de la facción "castellanista". Así, en septiembre, Felipe II requería la opinión del último visitador de la institución, Gaspar de Quiroga, sobre la necesidad de que esta actuación se llevase a cabo. El Inquisidor General mostró un absoluto rechazo a que fuese oportuno emprender dicho procedimiento, dado que había transcurrido muy poco tiempo desde que se finalizó la precedente. Señalaba que la ejecución de una visita, que se había iniciado ya de manera solapada, únicamente obedecía a intereses políticos, apuntando como promotor de esta diligencia a Mateo Vázquez (46). Esta situación se puso de manifiesto cuando Hernando de Vega, recibido el nombramiento de presidente de la Chancillería de Valladolid en el mes de noviembre, retrasó su marcha de la Corte con diversos pretextos. La razón se encontraba en que se estaba ocupando secretamente de instruir la visita e investigando la labor efectuada por el Comisario General, al que se acusaba de no haber administrado con rectitud los ingresos provenientes de las Gracias (47).

Consciente de la comprometida posición en la que se encontraba, Velarde no dudó en tratar de buscar un entendimiento con el secretario real que le permitiese salir airoso del trance, pasando a colaborar incluso en las intrigas cortesanas que se urdían contra Antonio Pérez después del asesinato de Escobedo (48). Por otra parte, los miembros del "partido papista" procuraron dificultar el desarrollo de la visita, comenzando a ejercer una fuerte presión

(46).- AHN, Inq., libro 284, fol. 159.

(47).- Ibid., fol. 165; AZ, carp. 144, n° 217.

(48).- CODOIN, Vol.56, p. 89; G.MARAÑÓN, Los procesos de Castilla contra Antonio Pérez. Madrid 1947, p. 56. Véase, igualmente, la carta que Velarde remitió a Vázquez en enero de 1579 en, IVDJ, envío 91 (caja 131), n° 511.

sobre Hernando de Vega, quien expresó a su patrón los temores sobre las negativas consecuencias que tendría para él esta actuación si el rey, que estaba informado por medio de Mateo Vázquez de las actividades que efectuaba, no respaldaba abiertamente su labor como visitador. Si bien, en febrero de 1579, fue despachada la Cédula correspondiente (49), la responsabilidad de asumir en solitario un desenlace poco previsible, tanto por la cautela con la que acogía el monarca las noticias que se le procuraban, como por los intentos de invalidar la visita por parte del presidente del Consejo Real, motivó a Hernando de Vega a solicitar a Mateo Vázquez que, para salvaguarda de su prestigio, pudiese contar con la ayuda de personas de confianza para continuar ejecutando las pesquisas (50). Atendiendo su petición, en el mes de abril, cuando Velarde compareció ante el visitador para prestar declaración, el secretario real propuso a Felipe II que Hernando de Vega recibiese la ayuda de Antonio de Padilla, presidente del Consejo de Ordenes, a causa de la importante cantidad de informaciones recogidas. No obstante, Felipe II prefirió esperar el regreso de Gaspar de Quiroga, que se hallaba en Toledo, para definir qué personas debían ocuparse de llevar a cabo los trámites que fuesen menester (51).

La confianza que el rey otorgaba a Quiroga como buen conocedor de los asuntos relacionados con el Consejo de Cruzada permitió que el Inquisidor General pudiese integrar la junta que se constituyó para dirimir este asunto junto a Hernando de Vega, Antonio de Padilla, Avedillo y Miguel de Marañón, quedando excluido de la misma Francisco Hernández de Liébana, así como cualquier miembro de la Suprema (52). Desde el comienzo de las reuniones, que se celebraban en la posada de Quiroga, la actitud de éste estuvo claramente

(49).- Ibid., envío 76, fol. 435; Ibid., envío 55 (caja 72), n° 39.

(50).- Ibid., envío 90, fols. 655-656. Pazos había representado que Velarde se había quejado de que la visita estaba dirigida únicamente en su contra, puesto que no afectaba a otros miembros del Consejo. Esto suponía una irregularidad, dado que esta actuación se debía aplicar necesariamente sobre organismos, nunca en relación a individuos (G.CESPEDES DEL CASTILLO, op. cit., p. 988).

(51).- AZ, carp., 155, n° 101. IVDJ, envío 55 (caja 72), n° 80, 88.

(52).- Ibid., n° 95.

orientada a entorpecer su funcionamiento como medio de liberar a Velarde de la consecución de la visita. Exigía, frente a la opinión favorable del resto de los componentes de la junta a continuar la instrucción, que las culpas que se hacían recaer sobre el Comisario General se demostrasen antes de proseguir con las gestiones (53). A pesar de que Hernando de Vega consideraba que estos escollos quedarían superados con prontitud y que, tras obtener el permiso real, la consecución de la visita estaba asegurada, la persistencia del Inquisidor General en sus apreciaciones provocó que fuese necesario multiplicar las sesiones, aunque no se logró durante las mismas que Quiroga mudase su parecer. Su actitud intranquilizaba a Vega, que estimaba conveniente que el monarca ordenase al Inquisidor General que los trabajos de la reunión se concluyesen, puesto que, proceder a verificar las acusaciones como pretendía Quiroga, equivaldría a que el proceso de la visita ocupase un plazo de tiempo tan amplio como el que se había empleado en la que Inquisidor General había actuado como visitador (54).

Una nueva ausencia del Comisario General, en mayo de 1579, para atender los asuntos concernientes a sus prebendas eclesiásticas en Toledo, provocó que tanto Hernando de Vega como Mateo Vázquez expusiesen a Felipe II que la ocasión era propicia para que, realizada la subdelegación de su cargo y alejado de la Corte, se ordenase a Velarde que no regresase. Si bien el rey se mostró conforme con el definitivo alejamiento del Comisario General, adujo que no era posible efectuar este procedimiento a causa de lo establecido en los mandatos papales (55). El cambio de talante operado por el monarca en referencia a la visita, ante la que hasta entonces, como hemos señalado, se había

(53).- AZ, carp. 155, n° 112; IVDJ, envío 76, fol. 432.

(54).- Mientras tanto, Hernando de Vega seguía con las actuaciones en contra de Velarde, objetivo principal de la visita. Así, en relación con las supuestas faltas cometidas en las actividades de la receptoría, no se hacía responsable de las mismas al titular de ésta, sino el teniente de receptor, Juan Velarde, familiar del Comisario General, a quien se acusaba de negociar fraudulentamente con estos frutos siguiendo las órdenes de Pedro Velarde, por lo que se representó al rey la necesidad de recoger sus papeles para poder comprobar su culpabilidad y la responsabilidad del Comisario General en estas irregularidades (Ibid., fols. 424, 437).

(55).- Ibid., envío 55 (caja 72), n° 114.

manifestado con cautela, estaba directamente relacionado con los acontecimientos que estaban teniendo lugar en la Corte. La muerte de don Juan de Austria había marcado el comienzo del declive del "partido papista", culminándose su caída en desgracia con las detenciones de Antonio Pérez y de la princesa de Eboli, que se tradujeron en el relegamiento de toda la facción cortesana de la gracia real. Así, poco pudo hacer Gaspar de Quiroga por favorecer a Velarde, puesto que, pocos meses después, él mismo fue apartado de la Corte, pasando a ejercer diversas labores en el arzobispado de Toledo. A pesar de que las sesiones de la junta que se reunía en su posada se prolongaron hasta el mes de junio, su labor de oposición, esclarecida por Hernando de Vega ante Mateo Vázquez y ante el rey, hubo de cesar. Aunque se negó adoptar determinación alguna, se vió forzado a permitir que fuese Vega, que pasó a ocuparse de forma efectiva de los asuntos concernientes a la Cruzada, quien presentase a Felipe II las conclusiones alcanzadas en torno a la conveniencia de la instrucción de la visita (56). La pérdida de influjo y poder por parte de la facción "papista" se vió acompañada por el ascenso del "partido castellanista", cuyos miembros pasaron a ocupar importantes puestos en la administración de la Monarquía. Este fue el caso de dos de los componentes de la junta. Mientras que Hernando de Vega fue promocionado a la presidencia del Consejo de Hacienda, Antonio de Padilla recibió nombramiento como presidente del Consejo de Indias (57).

Si bien Pedro Velarde logró permanecer en el cargo de Comisario General hasta 1582, desde septiembre de 1579, adoptó una actitud que mantuvo hasta que dejó de ostentar dicho puesto. Consciente de que las motivaciones que habían propiciado la generación de una visita eran políticas, y que perseguían su cese en el ejercicio de sus atribuciones, trató de buscar una salida honrosa que le permitiese mantener limpio su nombre y le procurase unos ingresos económicos suficientes. Por una parte, rogaba al rey que le fuesen presentadas las acusaciones que se habían realizado en su contra para poder contar con la

(56).- Ibid., fols. 118, 123; Ibid., envío 76, fols. 386, 409-410.

(57).- Ibid., envío 96 (caja 139), nº 767.

oportunidad de defenderse. Por otra, una vez que hubiese quedado demostrado su recto proceder, Velarde pedía al monarca que le diese otra ocupación que le permitiese alejarse de la Corte. No obstante, hasta que la corrección en su actuación se evidenciase, su principal preocupación se centraba en su pobre estado financiero, sobre el que demandaba algún remedio a Felipe II en forma de un beneficio eclesiástico que le otorgase mayores rentas que sus prebendas toledanas y estuviese exento de residencia, o bien, que se le concediese la opción de asistir a la Suprema y recuperar su salario como consiliario, sin que ello conllevara renunciar al cargo de Comisario General, puesto que esto se interpretaría como un reconocimiento de sus delitos. Gaspar de Quiroga apoyó las solicitudes de su protegido ante el monarca. Señalaba que el retorno de Velarde al Consejo de Inquisición no era factible tanto por la incompatibilidad con el cargo de Comisario General como por no haber una plaza vaca, a lo que había que unir las apreciaciones que al respecto había realizado el propio Velarde. Igualmente, era imposible concertar la falta de residencia sobre la canonjía que el Comisario General gozaba en la iglesia de Toledo, dado que la obligatoriedad de la misma estaba perfectamente establecida. Por ello, Quiroga insistía en que los únicos caminos que se abrían para Velarde eran los que el interesado apuntaba: la concesión de una renta eclesiástica que no requiriese residencia o la provisión en un cargo que le alejase de la Corte con el honor debido a sus largos años de servicio (58). Mientras, Mateo Vázquez no cejaba en sus intentos de que Velarde fuese relevado definitivamente de la Comisaría General, aconsejando al rey que, contando con la opinión de Hernando de Vega se eligiese a la persona idónea para que se hiciese cargo de la subdelegación (59).

Las gestiones en torno a la visita se continuaban realizando, por lo que, en octubre, se conformó una nueva junta, que venía a ser la continuación de la que se había reunido en los meses de mayo y junio. Tanto Quiroga como Hernando de Vega, a pesar de que el Inquisidor General trató de evitar su

(58).- Ibid., envío 89 (caja 125), n° 191.

(59).- Ibid., envío 55 (caja 72), n° 164.

asistencia (60), y Antonio de Padilla fueron nuevamente convocados, quedando excluido Miguel de Marañón. La muerte de Avedillo conllevó que desde la junta se remitiese a Mateo Vázquez una lista de los candidatos más apropiados para su sustitución para que la hiciese llegar al rey. Esta nómina estaba compuesta por el licenciado Hinojosa del Consejo de Ordenes y los licenciados Villafañe y Mardones de la Contaduría (61). Si bien desconocemos sobre quien recayó la designación real, lo cierto fue que la junta tuvo un papel secundario en la consecución de la visita; por su parte, Quiroga siempre trató de favorecer los intereses de Pedro Velarde.

Las múltiples ocupaciones que hubo de atender Hernando de Vega desde que asumió la presidencia del Consejo de Hacienda forzaron su renuncia a continuar entendiendo en la visita, que según refería el propio Vega al rey, a comienzos de diciembre, se encontraba prácticamente finalizada. Proponía al monarca a Pedro de Portocarrero y a Tomás de Salazar, consejeros de la Suprema, como personas adecuadas a las que encomendar la prosecución de esta labor por la confianza que tenía depositada en ellos (62). Sin embargo, fue otro cliente de Mateo Vázquez, Sancho Busto de Villegas, quien se encargó de realizar esta función (63). Instruido en este cometido por Hernando de Vega y por el contador Juan Bernardo, empenó un gran esfuerzo en lograr que se culminase con éxito. El obispo de Avila continuó insistiendo sobre las inculpaciones lanzadas contra Pedro Velarde por Hernando de Vega en cuanto a las irregularidades cometidas en la administración de los ingresos provenientes de las Gracias, que se derivaban de unos papeles que habían sido tomados a la Orden de San Agustín. No obstante, su labor no obtuvo los resultados apetecidos, puesto que la acusación se fue diluyendo a causa de la actuación de la junta que trataba sobre la visita, así como por la actuación de Pedro de Barreda, criado del

(60).- Ibid., envío 89 (caja 125), n° 196.

(61).- Ibid., fol. 197; Ibid., envío 55 (caja 72), n° 160.

(62).- Ibid., envío 76, fol. 228; AZ, carp. 144, n° 488.

(63).- Hemos de señalar que el obispo de Avila se estaba ocupando igualmente en la visita al Consejo de Italia (IVDJ, envío 90, n° 9).

Comisario General (64). Busto de Villegas estimaba que el testimonio de Barreda era la clave para desentrañar los tratos ilícitos efectuados por Velarde, tanto por el conocimiento que tenía de los mismos como porque había participado y obtenido beneficio de ellos, posibilitando que hubiese ampliado sus bienes en su tierra natal. A pesar de haber compartido prisión con otros testigos, los que, en algunos casos, habían sufrido tormento como medio de forzar su confesión (65), Barreda pudo evitar esta contingencia a través de la intervención de la junta, que sin conocimiento ni autorización del obispo de Avila, mudó la prisión de éste a casa de un alguacil. Temeroso de que en estas nuevas circunstancias Barreda se negase a testificar, como así sucedió, Busto de Villegas trató de que el reo tornase a la cárcel pública. Las amenazas proferidas resultaron inútiles, puesto que el preso se mantuvo firme en no realizar ninguna declaración incriminatoria, quedando finalmente en libertad (66). Como había predicho el prelado abulense a Mateo Vázquez, el montañés Barreda abandonó con premura la Corte y se dirigió a su tierra. Desde Comillas escribió a Felipe II justificando su modo de proceder. Refería como, informado de la instrucción de la visita, se había dirigido a Madrid para poner en conocimiento de los miembros de la Cámara regia algunas cuestiones concernientes a la misma, pero la pronta intervención de Velarde impidió que pudiese llevar a cabo esta actuación. Además, por indicación del Comisario General, el duque del Infantado le ordenó que acudiese a resolver ciertos negocios en la zona cántabra, viéndose obligado a obedecer el mandato a causa de su pobreza. Aunque adjuntaba un memorial, su contenido no debió resultar de utilidad para Busto de Villegas, de quien refería que se encontraba unido por viejos lazos de amistad con Velarde. Sin duda, Barreda trataba de que el monarca sospechase de la efectividad del

(64).- Véanse las gestiones que, en este sentido, había realizado Hernando de Vega en abril y mayo de 1579 (Ibid., fols. 437, 655).

(65).- En torno al permiso solicitado por Hernando de Vega a Pazos, en abril de 1579, para someter a tormento a dos agustinos, de cuya confesión se obtuvo de esta manera graves implicaciones para Velarde, véase, AGS, PE, leg. 10, s.f.

(66).- IVDJ, envío 91, nº 12 y 384.

visitador (67).

Coincidiendo con la marcha de Felipe II a Badajoz para ocuparse de los asuntos de Portugal, Gaspar de Quiroga abandonaba la Corte camino de su arzobispado toledano. Este relegamiento, fruto de su marcado "perecismo" y de la caída en desgracia del grupo "papista", propició que Velarde perdiese a su mayor valedor, ante la imposibilidad de que pudiese realizar nuevas actuaciones en su favor. El Comisario General optó por buscar el entendimiento con Mateo Vázquez para que su situación quedase definitivamente clarificada, insistiendo de forma reiterada en los aspectos que había expuesto desde el comienzo de la visita, tanto en los conducentes a probar su inocencia como a los que hacían referencia a cuestiones económicas. Sin embargo, todos los intentos realizados por el Comisario General chocaron con la extrema frialdad e indiferencia exhibida por parte del secretario real, que no contestaba sus cartas incluso cuando estas estaban referidas a consultas concernientes a las materias de las Gracias o al funcionamiento del Consejo de Cruzada (68).

La muerte de Sancho Busto de Villegas, en enero de 1581, supuso un cierto retraso en la conclusión de la visita, haciendo cada vez más insostenible la posición de Velarde, que veía agravarse las presiones que en su contra se ejercían en la Corte, así como dentro de la propia institución que encabezaba (69). En el mes de marzo, otro cliente de Mateo Vázquez, Jerónimo

(67).- Ibid., envío 94 (caja 135), n° 39. Por su parte, Busto de Villegas siguió procediendo contra Barreda. En marzo de 1580 envió al doctor Gascón a efectuar averiguaciones a diversas poblaciones montañosas para establecer la procedencia de sus bienes. Fruto de esta actuación fue un grueso memorial que no tuvo consecuencias para la visita (AGS, CJH, leg. 225, n° 12). Igualmente, como había procurado Hernando de Vega, el obispo de Avila trató de buscar algunas implicaciones incriminatorias en relación a Paulo Pla, asesor del Consejo de Cruzada perteneciente al de Aragón. El motivo de esta persecución estaba referido al cambio de facción cortesana que el mismo había realizado en 1578, pasando a integrar el grupo "papista", abandonando la protección de los patronos "castellanistas". Si bien las pesquisas no obtuvieron ningún resultado en este sentido, Pla fue progresivamente relegado de los asuntos de la Cruzada, desvinculándose definitivamente de estas actividades en 1580 (Ibid., Comisaría de Cruzada, leg. 290, s.f.; IVDJ, envío 55 (caja 72), n° 82; Ibid., envío 94 (caja 135), n° 160; Ibid., envío 90, fol. 544).

(68).- Ibid., envío 91 (caja 131), n° 512-520, 552.

(69).- Ibid., n° 741; Ibid., envío 21 (caja 32), n° 834; AZ, carp. 138, n° 19.

Manrique, recibía el encargo de culminar la misma (70). El visitador cumplió este cometido en un breve plazo, puesto que la instrucción se concluyó en agosto, tres años después de que diese comienzo. Contó con la ayuda del secretario Ramírez, que había colaborado igualmente con el obispo de Avila en estas labores. Así pues, desde comienzos de septiembre, el interés de Velarde se centró en que las conclusiones de la visita se hiciesen públicas sin que existiese dilación (71). En diciembre, Felipe II ordenó la formación de una junta conformada por seis jueces que debían dirimir sobre la determinación final de los resultados obtenidos (72). La opinión unánime sobre la necesidad de que Velarde fuese sustituido en el cargo de Comisario General propició que, el 22 de enero de 1582, Mateo Vázquez comunicase a Hernando de Vega el mandato regio por el que se solicitaba su parecer sobre la persona idónea para ocupar este puesto (73).

Mientras tanto, la intromisión del Consejo de Hacienda en el tratamiento de cuestiones que tradicionalmente estaban conferidas al de Cruzada, llevaba a Velarde, como al resto de los servidores de dicho organismo, a sospechar que esta injerencia en sus atribuciones y el vaciado de contenido de las competencias estaba motivado porque el Comisario General no contaba con el favor real. A pesar de ello, Velarde trató de mantener la capacidad de la institución intacta, procurando frenar la intervención de Hernando de Vega (74). Igualmente, el Comisario General señalaba a Mateo Vázquez que la irresolución de la visita

(70).- IVDJ, envío 21, nº 823.

(71).- Ibid., envío 90, nº 675; Ibid., envío 94 (caja 135), nº 187.

(72).- Sus miembros fueron Agustín Álvarez de Toledo, Hernando de Vega, Jerónimo Manrique, Rodrigo Vázquez de Arce, el fiscal Martín de Salvatierra y el contador Juan de Portillo, todos ellos vinculados al secretario Mateo Vázquez (Ibid., envío 91 (caja 131), nº 522; Ibid., envío 21 (caja 32), nº 867).

(73).- AZ, carp. 139, nº 231.

(74).- IVDJ, envío 91 (caja 131), nº 523-525. Si bien Velarde fue consciente del proceso que se estaba llevando a cabo, no acertó totalmente al apuntar sus causas, puesto que estas estaban relacionadas con el control que Mateo Vázquez trataba de establecer en cuanto a las cuestiones de gobierno a través de la actuación de Hernando de Vega. Por ello, cuando Velarde abandonó el cargo de Comisario General, esta situación se continuó produciendo.

obedecía a que Jerónimo Manrique ambicionaba ocupar su lugar en la ostentación de dicho cargo. Si bien convenía que era digno candidato a la sustitución, denunciaba los métodos que estaba utilizando para lograr su objetivo. Principalmente, las quejas de Velarde estaban referidas a que se hubiesen hecho públicos algunos aspectos de la visita que atentaban seriamente contra su honor, planteándose la posibilidad de acudir al Consejo Real para solicitar que se hiciese justicia, puesto que no estimaba correcto el enconado modo de proceder de Hernando de Vega como instructor de la misma (75), así como que no hubiese vuelto a solicitar el parecer de Gaspar de Quiroga, ni de Villafañe o del licenciado Mardones en la última junta, compuestas por tres colegiales de San Bartolomé, conociéndose el apoyo y solidaridad que se prestaban los colegiales del mismo centro, lo que constituía una manifiesta parcialidad cuando eran requeridos sus juicios, a la que había que unir la que albergaba un visitador que anhelaba su propia promoción. Aunque Velarde perseguía la obtención de un resultado que salvaguardase su buen nombre, como en ocasiones precedentes, demandaba la licencia para abandonar la Corte y la concesión de una pensión o beneficio, que, en recompensa a su recta gestión, solucionase sus problemas económicos (76).

La artificial prolongación que había sufrido la determinación de la visita había estado condicionada por la imposibilidad de probar los delitos de los que Velarde había sido acusado y que habían constituido la excusa para iniciar su instrucción. Como consecuencia de ello, los resultados no se hicieron públicos, sino que únicamente fueron leídos en el Consejo de Cruzada. Mientras que algunos servidores fueron condenados a pagar pequeñas penas pecuniarias y el contador Gaspar de Cuéllar fue suspendido durante un año en el ejercicio de su oficio, no se emitió ninguna sentencia en referencia al Comisario General (77). A finales de mayo de 1582, se otorgaba a Velarde la licencia que tantas

(75).- El propio Vega, en junio de 1581, se lamentaba ante Mateo Vázquez de que no se hubiese guardado el secreto que era conveniente en cuanto a la visita (Ibid., envío 8 (II), caja 13, s.f.).

(76).- Ibid., n° 526.

(77).- AGS, CJH, leg. 225, n° 12; AZ, carp. 139, n° 258.

veces había requerido para poder abandonar la Corte. Pocos días después, se le instaba para que se pusiese en marcha con la mayor brevedad posible, fijándose un plazo corto y limitado para que hiciese efectiva su ausencia. Velarde acogió esta resolución como una humillación, puesto que la urgencia con que se le obligaba a alejarse, dejando en suspenso los asuntos que se estaban tratando en el Consejo, contribuía a que se tuviesen por ciertas las incriminaciones que se habían vertido sobre su persona y actuación, aun cuando se había demostrado su inocencia. Volvía a reiterar a Mateo Vázquez sus peticiones sobre una merced que aliviase su empobrecida hacienda y que restituyese su fama y honor, dado que se le estaba tratando como si hubiese resultado culpado (78).

Así pues, el "partido castellanista" logró su objetivo, quedando Pedro Velarde definitivamente apartado del cargo de Comisario General. El 13 de junio, realizó la pertinente subdelegación en Hernando de Vega (79), no consiguiendo que le fuese otorgada la merced tan profusamente solicitada, con el consiguiente perjuicio no sólo para su estado económico, sino también para su crédito personal, víctima de los avatares políticos cortesanos. Así pues, el presidente del Consejo de Hacienda asumía el entendimiento de unas materias sobre las que tenía un amplio conocimiento. No obstante, no acogió con agrado esta designación, por considerar inconveniente que ambos cargos fuesen ostentados por la misma persona, por lo que pidió al monarca que fuese nombrado un nuevo Comisario General. Su ruego fue atendido con prontitud, puesto que, en los últimos días de junio, fue designado para cumplir esta función otro cliente de Mateo Vázquez, el licenciado Tomás de Salazar, con lo que la facción "castellanista" extendía su influjo a los asuntos dependientes del Consejo de Cruzada (80). Por otra parte, la rapidez en la ejecución de los trámites fue factible porque los mismos se habían iniciado por los representantes de Felipe II en Roma en el mes de marzo, antes de que le fuese comunicada a Velarde su

(78).- IVDJ, envío 90, fols. 579, 664; Ibid., envío 91 (caja 131), n° 742; Ibid., envío 96 (caja 139), n° 781.

(79).- AZ, carp. 152, n° 45.

(80).- IVDJ, envío 90, fol. 665; AGS, Comisaría de Cruzada, leg. 290, s.f.

destitución (81).

La condición del nuevo Comisario General como consiliario de la Suprema conllevó que Gaspar de Quiroga, como había exigido en ocasiones precedentes en relación a la asistencia a las sesiones del Consejo, mostrase su oposición a que Tomás de Salazar siguiese manteniendo su plaza a causa de la incompatibilidad entre ambas ocupaciones. Salazar, que trató de no ser despojado de este título, pues con el mismo perdía igualmente sus prebendas eclesiásticas al carecer del privilegio para no residir otorgado a los servidores del Santo Oficio, contó con la ayuda de Rodrigo Vázquez de Arce y de Mateo Vázquez para no tener que renunciar a su plaza de consejero de Inquisición, a pesar de la opinión contraria del Inquisidor General. El control que el "partido castellanista" ejercía en la Suprema, acrecentado desde que Mateo Vázquez había pasado a ostentar la secretaría de la institución, favoreció los intereses de Salazar, que prevalecieron frente al criterio de Quiroga (82).

El desconocimiento que Salazar reconocía tener en relación a las materias que le habían sido encomendadas provocó que Hernando de Vega siguiese interviniendo activamente en las mismas. De igual modo que había actuado su predecesor, el Comisario General presentó quejas sobre la actitud del presidente del Consejo de Hacienda, que se estaba apropiando atribuciones tradicionalmente conferidas a la Comisaría y al Consejo de Cruzada (83). No obstante, bien condicionado por esta falta de familiaridad con los temas que debía tratar, o bien, limitado por las otras ocupaciones que paralelamente estaba desempeñando (84), la tutela que tanto Hernando de Vega como Rodrigo Vázquez de Arce ejercieron sobre Salazar y los asuntos referidos a las Gracias se extendió hasta

(81).- IVDJ, envío 80 (caja 105), nº 293, 298.

(82).- Ibid., envío 91 (caja 130), nº 325; Ibid., envío 55, paquete 1, s.f.; AZ, carp. 148, nº 48.

(83).- AGS, CJH, leg. 195, nº 16.

(84).- Nos estamos refiriendo a las visitas al Consejo de Italia y a los secretarios, especialmente, a Antonio Pérez (G.MARAÑÓN, op. cit., I, pp. 502-519).

las cuestiones más nimias (85).

Tomás de Salazar fallecía el 26 de junio de 1586. Su muerte venía a coincidir con el declive del "partido castellanista" en la Corte y con la inauguración de un nuevo sistema de gobierno. Su sustituto en el cargo de Comisario General, Pedro de Portocarrero, contaba con una situación propicia dentro de la nueva configuración.

7.1.3. La pugna por la secretaría de la Suprema

En enero de 1578, Gaspar de Quiroga comunicaba al secretario del Consejo de Inquisición, Jerónimo Zurita, el permiso que Felipe II le había otorgado para residir durante dicho año en el reino de Aragón. El motivo de la licencia era ocuparse en la composición de los anales del mismo (86). La ausencia de Zurita propició que Mateo Vázquez se hiciese cargo de los asuntos relacionados con la secretaría de la Suprema de forma interina (87).

En los meses siguientes, la correspondencia entre el Inquisidor General y Zurita estuvo centrada en la labor de cronista realizada por este último en Aragón. El plazo que el rey había concedido al secretario para realizar esta función resultó insuficiente, por lo que Quiroga rogó al monarca una prórroga

(85).- Como muestra de ello, véase, IVDJ, envío 62 (caja 84), nº 459; Ibid., envío 91 (caja 131), nº 706; AGS, CJH, leg. 215, nº 26; Ibid., Guerra y Marina, leg. 173, nº 298.

(86).- RAH, Salazar A-111, fol. 85.

(87).- Así se lo comunicaba el fiscal Salvatierra al secretario real el 4 de febrero (C. RIBA GARCIA, Correspondencia privada..., p. 157). Por su parte, Mateo Vázquez había instado al rey para evitar que estas atribuciones recayesen en otro miembro del "partido papista": "Esto es para resolvello y no meter a Gaztelu en pretensión del offº de Zurita, en que no he menester acordar a V.Mt. como por enero de 1577, me nombró a V.Mt. el Arzobispo, para en caso que hubiese coyuntura y V.Md. me hizo mrd. de aproballo" (IVDJ, envío 53 (caja 69), nº 6). Las relaciones entre Quiroga y Gaztelu, por un lado y Vázquez, por otro, se encresparon en los meses siguientes, no dudando Gaztelu en presionar a Vázquez en relación con la posesión de sus beneficios eclesiásticos. Esta actuación provocó que Vázquez adoptase el papel de víctima con el rey, ante el que tuvo palabras muy fuertes para con sus adversarios: "va aquí lo que he tenido de Villegas y en la inclusa suplico a V.Mt. vea lo que le dijo el arzobispo, de que me he reído, y de considerar los esfuerzos que en Madrid muestran muchos por oler a hombres" (AZ, carp. 144, nº 323).

de su término, que fue ampliado hasta febrero de 1579, de modo que Zurita podía atender a la impresión de la segunda parte de los Anales (88). No obstante, la dispensa real no satisfacía los deseos del secretario, que había solicitado al monarca, atendiendo a su edad, la exoneración de su ocupación en la Suprema para dedicarse por entero a la ejecución de su obra. Su intención era que el oficio pasase a ser desempeñado por su hijo, para lo que procuró el apoyo de Gaspar de Quiroga. Sin embargo, Felipe II no consintió que abandonase el cargo, cediendo únicamente en que se dilatase el período de su alejamiento (89).

La decidida voluntad de Zurita de ver cumplidos sus objetivos colisionaba con la ambición de Mateo Vázquez de acceder definitivamente a la ostentación de la secretaría del Consejo de Inquisición. En mayo de 1579, se inició la lucha entre ambos secretarios, en la que Mateo Vázquez contaba con dos importantes apoyos: Hernando de Vega y Diego de Cabrera y Bobadilla, conde de Chinchón. La actuación del primero de ellos estaba referida, por una parte, a proporcionar información a su patrón sobre lo que se trataba en la Suprema respecto a este tema, por lo que, a pesar de recibir el nombramiento como presidente del Consejo de Hacienda, no dejó de asistir a las sesiones de dicho organismo (90). Por otra, Vega se encargó de someter a una fuerte presión

(88).- Incluso Zurita satisfizo algunas curiosidades que Quiroga albergaba sobre la historia del reino (RAH, "Salazar" A-111, fol. 36; *ibid.*, A-112, fols. 350-356). Esta correspondencia fue publicada por D. DORMER, Progresos de la historia en el Reyno de Aragón y elogios de Geronimo Zurita su primer cronista. Zaragoza 1680, pp. 366-367.

(89).- El 17 de enero, Quiroga escribía a Zurita: "En lo que toca al particular de su hijo, yo creo señor secretario que tendrá creído de mi que si estuviere en mi mano poco tiempo y solicitud sería menester para tener el efecto que desea, conociéndose los servicios y méritos del padre y teniéndose tan buena satisfacción y esperanza del hijo; pero como esto se ha de tratar con Su Magestad y ha de proceder de su voluntad es menester que haya quien lo pida y solicite y para esto habrá necesidad de la presencia de v.m. o de otra que entienda en ello, que en lo que de mi parte fuere y se pudiere no dexaré de ayudarlo con toda buena voluntad" (*Ibid.*, pp. 111, 357-358).

(90).- El 1 de mayo, Vázquez refería a Hernando de Vega: "desseo que antes de salir v.s. del Cons^o de Inquisición, se concluyesse si pudiesse ser lo de Çurita, suplico a v.s. de priessa al conde de Chinchón" (TVDJ, envío 56 (caja 75), paquete 6, n^o 5 [s.f.]). A finales del mismo mes le refería: "No sé que mundo corre allá en lo del secretario Viejo, crea v.s. que me va mucho en este particular". Solamente unos días después le informaba de que estaba despachado su título como presidente del Consejo de Hacienda, y cómo debía proceder en su nueva ocupación: "estoy

a Gaspar de Quiroga, tratando de recabar su apoyo en beneficio de los intereses de Mateo Vázquez o que, al menos, no pusiese ningún impedimento a que se alzase con la plaza (91). En cuanto al conde de Chinchón, su intervención en esta cuestión venía determinada por su ejercicio como Tesorero General de la Corona de Aragón, al que atañían algunas de las demandas efectuadas por Zurita para desvincularse de la secretaría (92).

A pesar del optimismo con que Hernando de Vega contemplaba la evolución de las gestiones y de su afianzamiento en el favor real, Mateo Vázquez era consciente de la oposición que el "partido papista" iba a ejercer para que no se alzase con dicho oficio (93). A comienzos de julio, la actitud negativa de algunos consejeros hacia su pretensión era manifiesta, evidenciando al secretario que su acceso al cargo entrañaba dificultades, que no se suavizaron al producirse la prisión de Antonio Pérez y la princesa de Eboli, que marcaron la caída en desgracia de la facción (94). Por su parte, Gaspar de Quiroga no cejó en su

contentísimo porque se me hacía muchísima soledad pensar en la ida a Valladolid (Ibid., caja 74, paquete 6, nº 3, s.f.). Sobre su continuidad en la Suprema, véase, *ibid.*, envío 76, fol. 384.

(91).- Así, Vázquez señalaba: "suplico a v.s. se acuerde con el Cardl. de Toledo y Salazar y Arenillas del off^o del s^o viejo antes de salir de aquel Consejo procediendo v.s. muy de suyo y como tan señor mío" (Ibid, envío 56 [caja 74], paquete 6, nº 3, s.f.). "Con este favor tan grande que v.s. me ha hecho de ver a monseñor de Toledo estoy con gran esperanza de que aquel negocio ha de suceder muy bien (...) yre al Cons^o antes de que tengan la consulta con Su Magd. y procuraré también velles en sus casas" (Ibid.). Quiroga logró convencer a Vega de que estaba actuando en favor de los intereses de Mateo Vázquez ante el rey, lo que motivó al informador a tranquilizar al secretario sobre la sincera amistad que le profesaba el Inquisidor General (Ibid., envío 76, fols. 382, 399, 439-440).

(92).- Por su parte, en sus entrevistas con Hernando de Vega, Quiroga trató de sembrar la duda sobre la fidelidad de Chinchón hacia Mateo Vázquez, a quien, el 28 de mayo, Vega escribía: "diome quejas del conde de Chinchón diciendo que aél y a mí trata uno y al Zurita le dice que porque no se ha de hacer con él lo que se ha hecho con sus predecesores" (Ibid, envío 76, fol. 439). Pocos días después, Vega informaba a Mateo Vázquez: "me dijo el Sr. conde de Chinchón que tenía cuasi compuesto el negocio de Zurita (...) sabré mañana lo que en ésto pasa para hablar al Cardl. y está muy de buena tinta" (Ibid., fol. 416).

(93).- A comienzos de junio refería a Vega: "En lo que toca a las peticiones de Zurita, beso a v.m. las manos por el cuidado que le da/ plegue a Dios que no lo sepa la vecina del de Galicia" (Ibid., envío 56 [caja 74], paquete 6, nº 3, s.f.).

(94).- Así, el 1 de julio refería a Hernando de Vega: "en lo de Zurita, si no fuese tan de honra el neg^o y de la qualidad y espiritualidad que es, quizá cuando se viniera a dar el off^o no se aceptara para que los que lo procuran divertir quedaran muy confusos, acá he hecho diligencia con el rey

intento de favorecer los intereses de Zurita, tratando de presentar ante Felipe II la inconveniencia de que fuese Mateo Vázquez el designado, aduciendo su incapacidad para cumplir convenientemente las obligaciones propias del desempeño de esta función, a causa de sus muchas ocupaciones (95).

No obstante, la atención del rey estaba centrada en cuestiones de mayor enjundia política, por lo que no adoptó ninguna resolución sobre este asunto. La incertidumbre impacientó tanto a Zurita, quien sólo deseaba una respuesta a sus demandas para marchar a Aragón (96), como a Mateo Vázquez, preocupado en contrarrestar las gestiones de Quiroga ante Felipe II sobre este asunto, trayendo a la memoria real la merced que tenía concedida para sustituir a Zurita, así como los amplios servicios prestados al Santo Oficio (97).

La situación no sufrió ninguna variación durante la primera mitad de 1580, a pesar de que, en el mes de marzo, Quiroga se vió postergado en su arzobispado

y sospecho que conviene ir callando y mirando diestramente a todos a las manos hasta la vuelta de af". Producidas las prisiones, el 28 de agosto, escribía a Vega: "muy desconsolado quedo de lo que V.S. me dice del Cardl., yo sospecho que algunos del Cons^o no han andado bien, como si les hubiese de aprovechar, si no para que yo entienda la mrd. que me han hecho, digo la que no me han querido hacer sin porqué ni para qué, si bien supiesen que mundo corre/ yo les perdono" (Ibid.).

(95).- Así, a finales de agosto, hizo llegar al monarca un memorial sobre lo que había sucedido cuando, años atrás, Zurita se quiso retirar y solicitó el oficio para su hijo (Ibid., envío 55 [caja 72], n^o 153). Ante la ofensiva desplegada por Quiroga, Vázquez adoptó el papel de víctima ante el rey, afirmando que su intención no era generar conflictos: "y tanto me podrán aprestar allá que dandome V. Mt. licencia para ello no lo acepte ni agora ni nunca, ni yo lo deseo, ni lo pido, ni pienso por mí tratar más del". En su respuesta, el rey reflexionaba sobre la posibilidad de que, efectivamente, trajese excesivas complicaciones al secretario si únicamente buscaba librarse de residir en sus beneficios eclesiásticos (AZ, carp. 144, n^o 477). Si bien, evidentemente, esta no constituía su pretensión principal, era un atractivo añadido (IVDJ, envío 57, carp. IV, n^o 84).

(96).- Nuevamente, el informador de Vázquez sobre los planes de Zurita era Hernando de Vega, que el 17 de septiembre refería: "como voy a la Inquisición sin faltar día hasta ver este neg^o acabado vi el memorial,... y dijo todo el Cons^o, éste no piensa volver" (Ibid., envío 15, paquete 1, n^o 33). En él, Zurita solicitaba Cédula de Guía para trasladar todas sus pertenencias a Aragón.

(97).- Véase la carta que remitió al rey el 22 de diciembre (AZ, carp. 144, n^o 490).

toledano (98). El relegamiento de los patronos de la facción "papista" de la Gracia real no mermó la resistencia de los consejeros de la Suprema afines a dicho grupo a la obtención por parte de Mateo Vázquez de tan ansiado nombramiento. Ingenuamente, el presidente del Consejo Real Antonio Mauricio de Pazos, atribuía la actitud del Inquisidor General, respecto a la contradicción presentada por los consiliarios, a la necesidad de contemporizar en las disputas que se producían en la institución, aunque creía innecesaria esta actitud cuando la oposición representaba una minoría de los mismos (99). La solución de la pugna estuvo determinada por el fallecimiento de Jerónimo Zurita y por la fuerte presión ejercida por el "partido castellanista" sobre Gaspar de Quiroga, quien, privado de todo influjo sobre el monarca, trató de buscar un mejor entendimiento con Mateo Vázquez. Así, el 29 de diciembre de 1580, el Inquisidor General escribió a Felipe II dando su beneplácito a que fuese proveído como secretario de la Suprema (100).

El 15 de enero de 1581, Vázquez escribía al rey agradeciendo la merced recibida y el despacho del título pertinente (101). Su satisfacción, expresada

(98).- Sobre las gestiones realizadas en estos meses tanto por Zurita como por Vázquez, que no consiguieron ninguna solución, véase *Ibid.*, carp. 139, nº 153; IVDJ, envío 56 [caja 74], paquete 6, nº 3, s.f.

(99).- En este sentido, hemos de tener presente que, como hemos señalado, Quiroga nunca logró dominar la Suprema. Pazos, en las cartas remitidas a Vázquez en junio de 1580, parecía sinceramente sorprendido por esta cuestión, de la que había sido recientemente informado por Arenillas de Reinoso. No dudaba en ofrecer al secretario su mediación ante Quiroga (*Ibid.*, envío 21 [caja 32], nº 780-781).

(100).- "Ya V.Mt. sabrá cómo murió Hierónimo Zurita secretario de los negocios deste consejo acerca de V.Mt. y porque Mateo Vázquez ha muchos días que los trata y por mandado de V.Mt. cuando dejó el oficio que tenía quedó oficial y miembro deste Consejo y así ha venido a él y asistido a los negocios que se trataban sin guardar con el secreto mas que tenía su oficio y esto muchas veces y si yo nombrase a otro para este oficio se le haría notable agravio, siendo V.Mt. servido se le dara la provisión de la manera que se ha dado a los secretarios que han tenido este oficio (*Ibid.*, nº 511).

(101).- Hernando de Vega le había advertido, el 2 de enero, que la emisión del título sufriría algún retraso, no dejando de señalar lo solícito que se encontraba Quiroga (AZ, carp. 138, nº 18). La carta de Vázquez al rey, en *ibid.*, carp. 142, nº 12.

con reconocimiento a Hernando de Vega por la labor realizada (102), fue compartida por todos sus clientes, que consideraron este nombramiento como un triunfo personal del secretario (103). Con la llegada de Mateo Vázquez a la secretaría de la Suprema, el dominio ejercido por el "partido castellanista" en el Consejo de Inquisición se afianzó, teniendo como consecuencia el ingreso en la institución de diversos consejeros vinculados a dicho grupo cortesano.

7.2. El relegamiento de la gracia real (1580-1585)

7.2.1. La caída de Antonio Pérez

Desde que, el 28 de marzo de 1578, se cometió el asesinato de Juan de Escobedo, los rumores cortesanos adjudicaron a Antonio Pérez el crimen. Sólo unos días después, la viuda y el hijo del secretario asesinado presentaron acusaciones en su contra ante el monarca. Pronto las incriminaciones comprendieron también a la princesa de Eboli, copártcipe de las maquinaciones políticas y financieras de Pérez (104). Esta situación otorgaba a Mateo Vázquez una excelente oportunidad para iniciar una conspiración contra sus enemigos políticos, alentando en la sombra las denuncias presentadas por los familiares del finado, de tal modo que estalló el inevitable conflicto entre ambos secretarios. Felipe II ordenó intervenir al presidente del Consejo Real, que impuso silencio tanto a Escobedo como a Vázquez, invocando la falta de pruebas

(102).- "Oficio es del que se trata de que yo no hago más consideración y estimación que de todas las otras secretarías juntas" (IVDJ, envío 56, [caja 74], paquete 6, nº 3, s.f.).

(103).- Ibid., envío 24, nº 261. Algunos de los parabienes recibidos en *ibid.*, envío 57 (caja 76), carp. IV, nº 88-90; *ibid.*, envío 21 (caja 30), nº 109; AZ, carp. 136, nº 146; *ibid.*, carp. 139, nº 137.

(104).- Pese a que Ana de Mendoza ha sido presentada tradicionalmente por la historiografía como una mujer desequilibrada psicológica y emocionalmente, no parece que esta interpretación se ajuste por completo a la realidad, ni que se limitase a seguir sin más las iniciativas adoptadas por Pérez; puesto que fue ella quien buscó de forma interesada la amistad del secretario, para asegurar la protección de sus intereses económicos y políticos. Al mismo tiempo, la desdénosa actitud que mostró hacia Mateo Vázquez dificultó aún más el entendimiento entre ambos secretarios (E. SPIVAKOVSKY, "La Princesa de Eboli, pp. 40-43; G. MARAÑÓN, Antonio Pérez, I, p. 389: "Los propios amigos de Mateo Vázquez consideraban a Antonio Pérez un simple instrumento de la "hembra", que era "la levadura de todo").

para sostener tan graves imputaciones (105). Si bien Mateo Vázquez acató aparentemente el mandato, continuó maquinando con suma discreción la destrucción del "partido papista" y su sustitución en el beneficio de la Gracia real por el grupo que él mismo encabezaba. Como ya hemos señalado, el medio utilizado por el secretario fue tratar de convencer al monarca de que los miembros de dicha facción que ostentaban importantes cargos de la administración de la Monarquía, no estaban actuando con la rectitud conveniente, incitando al rey a que autorizase la instrucción de visitas que aclarasen tales conductas (106). Al mismo tiempo, intentó, aparentemente, congraciarse con Antonio Pérez y la Princesa de Eboli, a los que, a través de diversos mediadores procuró convencer de que no era responsable de las inculpaciones vertidas sobre ellos en relación con la muerte de Escobedo. Esta actividad alcanzó a otros importantes miembros del "partido papista" como Gaspar de Quiroga (107).

Por otra parte, el Inquisidor General estaba plenamente informado del modo de proceder de Mateo Vázquez por ciertas indiscreciones cometidas por personas cercanas al círculo del secretario y comprometidas en la conspiración.

(105).- Por otra parte, tampoco faltaron las presiones a los familiares para que abandonasen su actitud. Así, el 1 de enero de 1579, Pedro Núñez de Toledo escribía a Mateo Vázquez: "ynovissime han envidado a decir al hijo del muerto, que mire en lo que se pone porque le han de destruir, e que tienen cartas de su padre que dice mal del rey" (CODOIN, vol. 56, p. 89).

(106).- G. MARAÑÓN, op. cit., I, pp. 390-392. Vázquez combinó esta actuación con un intento de acercamiento a distintos miembros del grupo que, sometidos a la presión de las visitas, reaccionaron de diversa forma. Frente a la sorpresa con que acogió Garnica este cambio de actitud, Velarde, como hemos referido, pasó a participar de las intrigas que se estaban llevando a cabo contra Antonio Pérez. Esta colaboración obedeció a las amenazas que los "castellanistas" realizaron para implicarle en el asesinato de Escobedo y al intento de permanecer en su cargo (Ibid., pp. 82-83, 85-86, 89).

(107).- El 26 de diciembre de 1578, Pedro Núñez de Toledo refería al secretario las gestiones que su hermano había realizado con Ana de Mendoza al respecto, quien le prohibió que volviese a tener contacto con ella: "porque quien acuse al portugués de la muerte de Escobedo no pude dejar de tenerle por enemigo (...). Presupuesto todo esto, y que debe haber alguna bellaquería contra v.m. y contra mi hermano, nos ha parecido hablar al Arzobispo y decirle lo que pasó entre v.m. y Escobedo y entre v.m. y nosotros; y cómo la resolución que v.m. tomó fue no querer encargarse del negocio ni escuchalle, ni tomar papel ni escribir al Rey ni hacer otra diligencia, sino solo dejar a Escobedo in manu cinsilii sui, para que entendiendo el Arzobispo esta verdad no pueda desengañar las partes a quien toca, porque este cáncer no pase adelante..." (Ibid., pp. 86-88, 99; G. MARAÑÓN, op. cit., p. 395).

Esto hizo que Vázquez solicitase mayor recato en el tratamiento de un asunto tan delicado, en el que era esencial actuar con el pertinente secreto (108). No obstante, puesto sobre aviso, Quiroga procuró indagar sobre cuáles eran los próximos planes del secretario, con la intención de mitigar sus efectos (109).

Sin embargo, en la primavera de 1579, Felipe II había tomado una clara decisión sobre Antonio Pérez y la Princesa de Eboli. Gregorio Marañón alude a dos cuestiones que estimamos fundamentales para que el rey mudase la cautelosa actitud que hasta el momento había mantenido en relación a las acusaciones realizadas sobre los patronos del "partido papista". Por una parte, la poderosa influencia que Diego de Chaves tenía sobre la propia conciencia regia y, por otra, mucho más significativa, la llegada a Madrid de los papeles de don Juan de Austria, enviados después de su fallecimiento. Estos sirvieron para que el monarca se cerciorase de la instrumentalización de la función de transmisor entre el rey y su hermano que el secretario había realizado en beneficio de sus propios intereses, cuestión que ya se había puesto de manifiesto para Felipe II cuando, con anterioridad, recibió las últimas cartas que don Juan le remitiese desde los Países Bajos (110). Las evidentes pruebas de los manejos de Pérez y la Eboli propiciaron que el rey tomase una serie de decisiones muy

(108).- Ya en diciembre de 1578, Pedro Núñez de Toledo comunicaba a Vázquez sus temores sobre la posible imprudencia con la que podrían obrar algunos en este asunto (CODAIN, vol. 56, pp. 78-80). Sobre las recomendaciones de comedimiento realizadas por el secretario (Ibid., pp. 121-122). Parece que uno a los que Vázquez culpó por este tipo de actuación fué a Pedro Niño de Ribera, que ingenuamente refería: "Bien me holgaría que al arzobispo de Toledo tuviese v.m. por amigo, y téngolo por hombre amigo de justicia y de verdad, v.m. me avise de lo que tiene con él" (Ibid., pp. 142-143).

(109).- El 23 de marzo de 1579, Antonio de Padilla narraba a Vázquez cómo había acudido a visitar a Quiroga en su nueva posada por invitación de éste, aprovechando para presentarle su felicitación por el capelo cardenalicio: "él creo yo tenía prevenido que cuando yo estuviese con él no entrase nadie(...) y después me preguntó por v.m. con estas palabras: ¿qué hace Mateo Vázquez? Yo le respondí que creía que estaba v.m. muy al servicio de Su S^a y le acordé cuando él me convidó a que entrásemos a ver a v.m. en su aposento, cuando le hicieron obispo de Cuenca. Véale v.m. algún día, pues ya él para en ello. También sin decirle yo nada, me habló muy de propósito en lo del estado, y me dijo tanto en ésto como v.m. pudiera decirme; y no he podido, aunque sea ocupando a v.m. dejar de darle cuenta de esto que pasó ayer" (Ibid., p. 175).

(110).- G. MARAÑÓN, op. cit., I, pp. 398-400.

desfavorables para los intereses de dicha facción. Así, como hemos referido, durante este período fue expulsado de la Corte el marqués de los Vélez, en quien Pérez se había apoyado para argumentar la necesidad de dar muerte a Escobedo ante el monarca. Igualmente, dió su beneplácito oficial para instruir una visita a Pedro Velarde, Comisario General de Cruzada, aunque la misma ya se estaba efectuando de forma secreta, mientras obstaculizaba la pretensión de Pérez de alzarse con la secretaría del Consejo de Italia. A ello se añade el urgente llamamiento que hizo el rey al cardenal Granvela, que se hallaba en Roma, para que se personase en la Corte a finales de marzo (111).

El cambio de talante operado en Felipe II, reflejado en la evidente caída en desgracia de los miembros de la "facción papista", motivó que Mateo Vázquez incrementase sus insidias contra Antonio Pérez. En mayo, se hizo llegar al rey un memorial que cargaba tres graves imputaciones sobre el secretario: en él, se le proclamaba responsable del asesinato de Escobedo y se le acusaba de tratar materias que perjudicaban la honra de la Casa Real y de falsear en beneficio personal los despachos venidos a sus manos. Pronto conoció Pérez este nuevo ataque. Nuevamente, personas cercanas a Vázquez, y al tanto de la conspiración, trataron de salvar su responsabilidad, así como las posibles consecuencias de esta actuación, poniendo este escrito en conocimiento de Quiroga a través del licenciado Ximénez Ortiz, vinculado a la familia del Inquisidor General. Para ello, no dudaron en apuntar a Vázquez como autor del mismo, lo que declararon también ante Pérez y la princesa de Eboli (112). El enfrentamiento se agravó por la remisión al monarca de otro papel en el que, además de reiterarse las incriminaciones contra ambos, se acusaba a Pérez de no ser de buena casta,

(111).- E. VAN DURME, El Cardenal Granvela (1517-1586). Barcelona 1957, pp. 343-344; F. MIGNET, op. cit., pp. 100-101.

(112).- Véase la carta que el doctor Milio remitió a Mateo Vázquez aconsejándole que se apresurase a proclamar que no había intervenido en este asunto (CODON, vol. 56, pp. 181-182). Por otra parte, el propio Antonio Pérez declaraba al rey que el origen de estas informaciones era Pedro Núñez de Toledo (G.MARAÑÓN, op. cit., II, pp. 439-440).

lo que le imposibilitaba la obtención del hábito que había solicitado (113).

En diversas cartas, Mateo Vázquez reiteró su inocencia ante el rey respecto a las quejas presentadas por Pérez y la princesa de Eboli atribuyéndole la autoría directa o la promoción de estas acusaciones por terceros (114). Pedía a Felipe II que hiciese lo posible por conciliar las enemistades y, ante el fracaso del mediador enviado por el rey, el confesor Chaves, aceptaba la intervención de Gaspar de Quiroga y fray Hernando del Castillo, propuestos por la Eboli como conocedores de las intrigas que estaba llevando a cabo Vázquez, aunque el concurso del último parecía excesivo al monarca (115). Unos días antes de producirse las detenciones, el 25 de julio, el rey comunicaba a Pérez su decisión de acceder a la petición que el secretario le había realizado reiteradamente para poner fin a esta situación: la concesión de un cargo fuera de la Península, en concreto, la embajada en Venecia. Igualmente, hizo llegar a Pazos noticia de su determinación, de la que también se enteró Quiroga, quien se apresuró a comunicarle la nueva a Ana de Mendoza, aunque sin ocultar su extrañeza ante una provisión que permitía a Pérez alejarse de la Corte, si bien interpretaba erróneamente los motivos por los que Felipe II quería mantener al

(113).- Ibid., I, pp. 396-397. Por su parte, Pérez había visitado al presidente del Consejo de Ordenes, Antonio de Padilla, que se hallaba enfermo, comunicándole su intención de pedir la concesión de un hábito, como hijo de Gonzalo Pérez, nieto de Bartolomé Pérez o hijo de Ruy Gómez, pudiendo obtenerlo por cualquiera de estas partes (CODOIN, vol 56, p. 188).

(114).- Véanse las cartas que remitió al monarca, fechadas el 27 y 28 de junio en AZ, carp. 143, nº 207-209. Igualmente, aseguraba que ni Agustín Álvarez ni Pedro Núñez de Toledo habían tenido ningún tipo de participación en este asunto. Tampoco decía haber instado al conde de Chinchón para "que por vía secreta procurase divertir los de la Secretaría de Italia a Antonio Pérez". El rey contestaba al margen: "desto yo no he entendido ninguna queja ni sé que la aya". Unos días antes, en el mismo sentido, IVDJ, envío 15, nº 12.

(115).- F. MIGNET, op. cit., p. 98; A. PEREZ, *Obras y relaciones*. Ginebra 1654, pp. 23-26; sobre la correspondencia mantenida entre Hernando del Castillo y Vázquez en torno a este asunto y los intentos realizados por los "castellanistas" para que colaborase en favor de sus intereses, véase CODOIN, vol. 56, pp. 195-196, 204-205; G. MARAÑÓN, op. cit., pp. 404-406, afirma que el dominico conocía la verdad de lo sucedido en relación al asesinato de Escobedo, así como de otras muertes acaecidas en virtud de la "razón de Estado", puesto que fue llamado para confesar a Montigny poco antes de su ejecución en el castillo de Simancas. Su participación se limitó a criticar duramente el doble juego desarrollado por todos los implicados en la "maraña", especialmente, el practicado por el propio rey.

secretario en Madrid (116). El monarca parecía que únicamente intentaba tranquilizar la evidente inquietud de Pérez en su conciencia de que había perdido el favor real. Tres días después arribaban las naves en que venía Granvela. Esa misma noche, Pérez y la princesa de Eboli fueron apresados.

Al día siguiente, el estupor entre los miembros del "partido papista" era enorme. Nada pudieron sospechar ni Quiroga ni Pazos de los planes del rey, puesto que sólo el confesor Chaves y el conde de Barajas conocían lo que iba a suceder. La medida se adoptó, sin duda, en prevención de que pudiesen alertar a los interesados (117). El Inquisidor General y sus amigos especularon con la posibilidad de que la detención de la princesa de Eboli hubiera venido motivada por la resistencia que había mostrado a llegar a un entendimiento con Mateo Vázquez, condicionando la postura adoptada por Pérez en la disputa. Se hacían eco de los rumores cortesanos que aseguraban que el detonante estaba en una supuesta carta que doña Ana había escrito al rey en que amenazaba de muerte a Vázquez si no cambiaba de actitud y dejaba de intrigar en su contra (118). La fidelidad de Quiroga a sus patronos cortesanos le llevó a visitar, el 30 de julio, tanto a Juana Coello como a los hijos de la Eboli, ofreciéndoles su ayuda, extensiva a cuestiones económicas (119). No obstante el escándalo producido por las prisiones causó una fuerte mella en el ánimo del arzobispo de Toledo. Así, el 2 de agosto, refería Hernando de Vega a Mateo Vázquez: "El Cardenal ha estado muerto, no ha bajado al Consejo de Inquisición porque yo no he faltado día ninguno, dicenme no levantaba los ojos

(116).- Ibid., p. 407.

(117).- Ibid., p. 412.

(118).- Esta situación fue descrita por Pedro Núñez de Toledo a Mateo Vázquez, añadiendo que mantenían que, si éstas eran las causas, no entendían los motivos de la prisión de Pérez, que no sería responsable de nada de lo sucedido. Por otra parte, Pérez también había denunciado al monarca que su vida podía correr peligro por obra de Vázquez. No obstante, no parece que ninguna de estas amenazas tuviese mucho fundamento real (IVDJ, envío 15, nº 14).

(119).- Ibid., nº 15; CODOIN, vol. 56, p. 216; G. MARAÑÓN, op. cit., I, pp. 416-417; J. GARCIA MERCADAL, Antonio Pérez, secretario de Felipe II, Madrid 1943, p. 81.

del suelo" (120).

Semejante sorpresa había causado la detención de Pérez en el colector y nuncio apostólicos. Las excelentes relaciones que el secretario mantenía con la Santa Sede motivaron que desde Roma no se le abandonase en estos momentos adversos. Segá trató de informarse a través de Quiroga de la situación del secretario, asegurando que era comúnmente aceptado que la causa de la prisión era que se le culpaba de la muerte de Escobedo, aunque dejaba entrever que los móviles de la decisión real escondían motivos más complejos (121). Sólo unos días después, Segá era consciente de la pérdida de poder sufrida por la facción "papista", así como del papel que venía a desempeñar Granvela en el gobierno de la monarquía. Explicaba cómo todos los esfuerzos realizados por Quiroga con el rey en favor de los reos habían resultado inútiles, a pesar del apoyo que el nuncio le había procurado. Señalaba que se empezaba a intuir que iba a abandonar la Corte con la excusa de tener que trasladarse a su arzobispado para proceder a la celebración de un sínodo diocesano o provincial (122).

Sin duda, los juicios de Segá eran acertados, no sólo en referencia al

(120).- Vega completaba esta noticia aludiendo a que Quiroga había realizado su visita a la mujer de Antonio Pérez por orden del rey, quien había enviado un billete al Inquisidor General en el que le explicaba las causas del apresamiento de la princesa de Eboli (IVDJ, envío 15, nº 17). Hemos de señalar que, en este período, Vega buscaba las entrevistas con Quiroga para presionarle en relación con la pretensión de Vázquez de alzarse con la secretaría de la Suprema. El abatimiento del Cardenal le causó una profunda impresión, resaltando a su protector que, si bien estaba vinculado a los reos, su calidad personal le hubiese impedido realizar cualquier acto en su perjuicio (Ibid, nº 20, 34).

(121).- Escribía Segá: "il S. Card. de Toledo mi é andato intonando che le cose del secretario Antoni Pérez andavano peggio che mai, dicendomelo como di cosa che lo affligesse molto, essendo essi strettissimi amici. Ma sempre mi ha parlato in un genere, che più presto mostrasse che il Sr. Antonio Pérez fusse disgustato di S. Mta, che S. Mta. avesse sinistra intentione contra di lui mostrandomi di haverci fatti diversi officii et sempre in danno et dolendosi che la Principesa fusse quelle che lo tenesse così sollevato et che con lei fussero frustatori tutti gli officii che si facessero per l'odio che teneva concetto contra di Mateo Vázquez" (J.I. TELLECHEA IDIGORAS, "Antonio Pérez a través de la documentación de la nunciatura de madrid", p. 666). Por su parte, los amigos de Vázquez también hicieron diversas gestiones con el nuncio para que en la Santa Sede no se le hiciese responsable de su caída en desgracia (IVDJ, envío 15, nº 19, 22).

(122).- "Et a mio parer, credo che sia per riuscire facilmente fra le altre ragioni perche una domus non alit duos canes" (J.I. TELLECHEA IDIGORAS, op. cit., pp. 669-670).

Inquisidor General, sino también a la destrucción del "partido papista" (123). Es muy posible que el relegamiento de Quiroga en su arzobispado se hubiese producido de manera inmediata si no hubiese recibido el mandato real, un día después de producirse las prisiones, de ocuparse de los hijos y hacienda de la princesa de Eboli. Uno de los primeros consejos que transmitió al monarca estaba referido a que se buscara una mujer apropiada para acompañar a doña Luisa de Cárdenas, duquesa de Francavilla y nuera de doña Ana, que había asumido la dirección de la casa (124). Pazos, que colaboró con el Inquisidor General en estas funciones, representó al rey, igualmente, la necesidad de poner un tutor al joven duque de Pastrana, así como de procurar que la hacienda familiar no resultase dañada (125). Si bien Quiroga, de acuerdo con el presidente del Consejo Real y de Felipe II, decidió asumir de forma provisional el tratamiento y cuidado de ambas cuestiones (126), los dos primeros estimaron conveniente a comienzos de diciembre que se llamase al comendador Briceño para que se hiciese cargo de este asunto. Si bien el rey estimó apropiado realizar el llamamiento, quedaba aún por resolver la cuestión referida a doña Luisa de Cárdenas (127). En enero de 1580, coincidiendo con la decisión regia de mudar la prisión de la princesa de Eboli de Pinto a Santorcaz, ambos abogaron por que fuese doña Teresa Figueroa quien efectuase esta tutoría, aunque las dificultades surgidas por el comportamiento de los dos

(123).- El 25 de agosto, Pedro Núñez de Toledo escribía a Mateo Vázquez: "De Garnica dicen por ay que está dada la extrema unción quando a unas muertes civiles que suele dar Su magd. y los ayos que Su Mgd. le va dando en todos sus ministerios algo quieren decir" (IVDJ, envío 15, n° 26).

(124).- Por otra parte, Quiroga aprovechaba cualquier comunicación con el rey para insistir en sus propósitos: "Antonio Pérez debe ya estar bien arrepentido de sus culpas y enmendado para adelante como es razón que lo esté. Suplico a V.Md. humildemente sea servido de perdonarle y recibirle en su gracia que será para mí señalada mrd." (Ibid., n° 28, cit. por G. MARAÑÓN, op. cit., p. 418). Sólo dos días después de la recomendación de Quiroga, el 30 de agosto, Mateo Vázquez señalaba la intención de la duquesa de retirarse a un monasterio, cuestión que había ocultado al Inquisidor General (Ibid., envío 55 [caja 72], n° 156).

(125).- CODAIN, vol. 56, pp. 236-237.

(126).- Ibid., pp. 238-240.

(127).- Ibid., pp. 275-276; IVDJ, envío 15, n° 5.

jóvenes terminaron con el intento de poner orden realizado por Quiroga y Pazos (128). Finalmente, en noviembre de 1582, el influjo alcanzado por el "partido castellanista" y el interés personal que Mateo Vázquez puso en este tema supusieron que Felipe II encargase a una Junta formada por el conde de Barajas, Rodrigo Vázquez de Arce y el confesor Chaves la custodia de los hijos de Ana de Mendoza y la administración de su hacienda (129).

Por otra parte, Quiroga tampoco descuidó su atención hacia la familia de Antonio Pérez, a la que visitaba con frecuencia a pesar de las murmuraciones que ello provocaba en la Corte (130), no dudando en afrontar las críticas que su marcado "perecismo" concitaba sobre su persona, si con ello podía favorecer al secretario, que no pudo contar con muchos apoyos tras su caída en desgracia (131). Esta fidelidad se mantuvo igualmente, a lo largo del proceso de visita, que se desarrolló desde 1580 hasta 1584, de cuya instrucción se encargó Rodrigo Vázquez de Arce y, posteriormente, Tomás de Salazar (132). Cuando este estuvo finalizado, el 12 de junio, fue entregado

(128).- CODOIN, vol. 56, pp. 285-293; Antonio Pérez, Relaciones y cartas. Madrid 1986, I, p. 430; G. MARAÑÓN, op. cit., pp. 424, 428-430.

(129).- Ibid., pp. 434-435. Marañón interpreta que la decisión regia estuvo motivada por su voluntad de separar su causa de la de Antonio Pérez, equivalente a declarar la "muerte civil" de la princesa, quien comunicó esta decisión a Quiroga, al que no dejó de solicitar que velase por sus intereses y por los de su familia (AHN, Inq., leg. 3314, exp. 1-5, 9; AGS, Estado, leg. 163, s.f.).

(130).- El 3 de septiembre de 1579, Zayas refería a Mateo Vázquez: "El Rojo [Quiroga] fue ayer a visitar a la de Pamphilo [Juana Coello] y estuvo juntas dos horas, con nota y murmuración universal, pues en efecto es querer salir con su tirría y no sé yo que tanto holgara el dueño dello" (IVDJ, envío 15, n° 36).

(131).- Así, Pedro Núñez de Toledo informaba a Mateo Vázquez unos días después: "sé que vino enfadado el de lo rojo [Quiroga] de no aver podido sacar al confesor más que de una piedra, el ql, fr. Diego de Chaves dicen que la ocasión de ir a ver a Antº Pérez fue hacerle reconocer unas firmas suyas. Es gran cosa los pocos amigos que se le descubren en este trabajo, grande señal que no tenían buen cimiento los que lo parecían" (Ibid., n° 30).

(132).- G. MARAÑÓN, op. cit., I, pp. 434, 438-441; idem., Los procesos de Castilla contra Antonio Pérez, Madrid 1947, pp. ; G. UNGERER, La defensa de Antonio Pérez contra los cargos que se le imputaron en el proceso de visita (1584). Instituto "Fernando el Católico", Zaragoza, passim. Por otra parte, la correspondencia entre ambos no se interrumpió. Así, informó al prelado de lo que había sucedido en el viaje de su mujer a Lisboa, y le instó para que tratase de favorecer a Agustín Spinola (AHN, Inq, leg. 3314, exp. 6-8).

a Pérez el pliego de cargos. En su respuesta a los mismos, el secretario presentó entre otros testigos, al propio rey, al confesor Chaves, ante el que había esgrimido papeles presuntamente comprometedores para el monarca y a Gaspar de Quiroga, al que hizo llegar un ejemplar de las contestaciones que él mismo había dado a las imputaciones que en su contra se habían realizado. Por lo alegado por el reo a la acusación número diecisiete conocemos que, hallándose en prisión, Quiroga le otorgó la mayordomía de Ciudad Real, cuya renta oscilaba entre los quinientos y los seiscientos ducados anuales, argumentando que esta merced le había sido otorgada por el arzobispo, en recompensa por haberse alojado en "La Casilla" durante ocho días en febrero de 1579 (133). La sentencia se dió a conocer a Pérez cuando se hallaba inmerso en el proceso criminal por el asesinato de Escobedo (134).

Así pues, los manejos políticos y financieros que Antonio Pérez y la princesa de Eboli habían desarrollado durante los años en que gozaron de la gracia real, beneficiándose de información privilegiada y secreta, instrumentalizando las confusas relaciones entre Felipe II y Juan de Austria, no dudando en usar medios que fueron desde la falsificación al asesinato, provocaron su caída en desgracia, que arrastró al resto de miembros del "partido papista". Este complejo proceso fue dinamizado desde el "partido castellanista" que, en la pugna por el poder, abogó por la destrucción de la facción "papista" a través de medios administrativos extraordinarios, como eran las visitas, al mismo tiempo que sus componentes ocupaban paulatinamente los principales cargos de la administración. Con el llamamiento del cardenal Granvela, figura

(133).- Además de lo referente a esta cuestión, el testimonio de Quiroga se remitió a diversos cargos (10, 18, 39). Cuando recibió las respuesta dadas por Pérez, el 21 de junio de 1584, dijo que "han parecido llenos [los descargos] de verdad y sinceridad y tales creo pareçeran a todos los que los vieren; y si me vinieran a examinar diría la verdad pura de la mayordomía de Ciudad Real y de lo que entiendo del secreto y fidelidad de v.m.", en relación a los cargos 40 y 41 (Ibid., pp. 38-39, 75-77). La carta de Quiroga aparece recogida en A. GONZALEZ PALENCIA, "Fragmentos del archivo particular de Antonio Pérez, secretario de Felipe II", Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 42 (1921), p. 125.

(134).- El 23 de marzo se comunicaba al reo, que se hallaba recluido en Turégano, que quedaba despojado de su oficio de secretario, cuestión fundamental perseguida por la visita. Curiosamente, el 9 de febrero la nunciatura informaba a Roma del contenido de la misma (J.I. TELLECHEA IDIGORAS, op. cit., p. 678).

de autoridad y de la confianza del monarca, se inauguraba un nuevo período en la política de la Monarquía que vino marcado por uno de los hechos más significativos del reinado: la anexión de Portugal. En este sentido, el mosaico cortesano no estaría completo sin analizar la pérdida de influencia del grupo "papista" en los asuntos de Estado, así como la actuación de Quiroga en relación a la sucesión del trono luso.

7.2.2. La anexión de Portugal

El 12 de agosto de 1578 llegaban a la Corte hispana los ecos de la derrota sufrida por las tropas portuguesas en la Batalla de Alcazarquivir. Estas noticias traían aparejada la que refería la muerte del rey don Sebastián, confirmada oficialmente unos días después. El trono luso recaía así en el anciano Cardenal-Infante don Enrique, iniciándose un proceso en el que aquellos que contaban con derechos sucesorios trataron de hacer valer su pretensión de acceder al mismo (135). Sin duda, el candidato con mayores posibilidades era Felipe II, que se apresuró a comunicar a Antonio Pérez las nuevas sobre el suceso. Con el secreto conveniente a la magnitud del asunto, Pérez se entrevistó con don Cristobal de Moura, perfecto conocedor de la situación que se vivía en Portugal y bien relacionado en la corte lisboeta, para contar con su asesoramiento sobre los pasos que se debían seguir, recomendando al monarca la conveniencia de informar al marqués de los Vélez y a Gaspar de Quiroga de este acontecimiento (136).

(135).- Junto a Felipe II, los aspirantes a la corona portuguesa eran don Antonio, prior de Crato, el duque de Saboya, la duquesa de Braganza y Ranucio Farnesio, príncipe heredero de Parma (L. CABRERA DE CORDOBA, op. cit., pp. 498, 521-522; J.M. RUBIO, Felipe II y Portugal. Madrid 1927, pp. 118-120; A. DANVILA, Felipe II y el rey don Sebastián de Portugal, Madrid 1954, pp. 422-426; J. M. QUEIROZ VELLOSO, Don Sebastián, 1554-1578, Madrid 1943, pp. 305-307.

(136).- Por otra parte, Pérez no perdía la oportunidad de prevenir al rey sobre el Duque de Alba, que podía entablar relaciones sospechosas por mor de sus posesiones colindantes con la frontera de Portugal. En este sentido, véase S. FERNANDEZ CONTI, Los Consejos de Estado y Guerra..., pp. 215-217. En torno a la figura de Cristobal de Moura, véase A. DANVILA Y BURGUERO, Don Cristobal de Moura, primer marqués de Castel Rodrigo (1538-1613). Madrid 1900.

Así pues, planeada la táctica a emplear, Moura emprendió viaje hacia Lisboa. Si bien no llevaba encomendada ninguna misión oficial, la labor que debía efectuar pasaba por desarrollar sus contactos y amistades para informar a Madrid de la actuación idónea que en cada momento se debía adoptar para que Felipe II viese cumplidos sus deseos de unir Portugal a la monarquía hispana. Para ello, se estableció una vía de comunicación secreta dominada por los miembros del "partido papista", nuevamente en detrimento de Gabriel de Zayas, a quien correspondía el tratamiento de los asuntos derivados de dicho reino, así como de sus adversarios políticos en el Consejo de Estado, especialmente del duque de Alba (137). Por tanto, el manejo de información privilegiada y confidencial otorgó a la facción "papista" el dominio en una materia en la que actuaron siguiendo las directrices que marcaba meticulosamente el propio rey, quien llegaba a definir quién y en qué forma debía presentar las cuestiones referidas a este tema en el seno de la institución (138). Este control se vio ampliamente favorecido por el poco entusiasmo demostrado por Alba ante las expectativas generadas por la desaparición de don Sebastián, quedando su intervención poco a poco limitada a la consulta de cuestiones meramente militares (139). Esta cierta apatía con la que acogió un proyecto que era tan deseado por el rey contribuyó a debilitar ostensiblemente su posición en el contexto de la pugna cortesana, lo que fue aprovechado por sus enemigos políticos para conseguir su relegamiento definitivo a través de la instrumentalización del controvertido matrimonio realizado por su hijo don

(137).- Ibid., cap. XV.

(138).- El 26 de septiembre, Quiroga escribía al rey: "Antº Pérez me dijo esta mañana lo que V.Md. me mandaba proponer mañana en consejo de Estado sobre el negº de Portugal y hacerse ha al pie de la letra como V.Md. manda. Aunque a mí me parece que será bien que el mismo Antº Pérez lo propusiese porque tuviesen los del Consejo mi parecer por más sin sospecha que lo ternán viendo que en alguna manera me hago patrón de este negocio pero V.Md. lo debe haber mirado mejor y aquello se cumplirá como he dicho" (AHN, Inq., lib. 284, fol. 74).

(139).- Sobre un duro enfrentamiento acaecido entre Alba y Quiroga a finales de año, nos remitimos a S. FERNANDEZ CONTI, op. cit., p. 221. Igualmente, sobre su participación en la defensa de los enclaves africanos ante la posible contingencia de un ataque del turco, véase, id., "La Junta militar de Portugal, 1578-1580", Política, religión e Inquisición en la España Moderna, pp. 287-295.

Fadrique (140). En enero de 1579, Alba tenía que abandonar la Corte, quedando confinado en el castillo de Uceda, donde permaneció por espacio de un año, hasta que Felipe II le requirió para dirigir la campaña de Portugal (141).

El manifiesto apoyo que el "partido papista" estaba prestando a los anhelos del rey de ceñirse la corona lusa colisionaba aparentemente con los planteamientos que respecto a la sucesión tenía la Santa Sede. Sin embargo, contravenir el ferviente deseo del monarca no hubiese deparado ningún beneficio político a la facción, sino que hubiese precipitado su inminente crisis. Por otra parte, en Roma se estaba librando una importante batalla diplomática. Desde Lisboa se demandaba la dispensa necesaria para casarse y procrear un heredero directo. Felipe II ordenó al embajador Juan de Zúñiga que tratase de impedir que se otorgase la petición, mientras fray Hernando del Castillo recibía el encargo de acudir a Portugal para convencer al anciano cardenal de que desistiese de este propósito (142). No obstante, en diciembre de 1578, Quiroga proponía al rey un medio que parecía conciliar todos los intereses. Puesto que el monarca portugués tenía tanta confianza en los miembros de la

(140).- Don Fadrique, primogénito de Alba, había dado palabra de matrimonio a doña Magdalena de Guzmán, dama de la reina Ana, negándose posteriormente a cumplir con ella. Quiroga entró en contacto con este asunto en 1574 cuando fue sometido a la Junta que conformaba con los obispos de Segovia y Córdoba y dos miembros de la Cámara (IVDJ, envío 51, nº 35, 174; AZ, carp. 144, nº 96-97), interviniendo, posteriormente, el licenciado Tomás de Salazar (IVDJ, envío 53 [caja 69], nº 78, 124). En 1578, estando don Fadrique recluido en el castillo de Tordesillas, se creó otra junta para entender en dicho asunto ante las reclamaciones de la dama. Si bien Gaspar de Quiroga no se hallaba integrado en la misma, Pazos requirió su parecer como juez ordinario (CODIN, vol. 7, p. 472; IVDJ, envío 55 [caja 72], nº 1), presentando su voto (CODIN, vol. 8, p. 485). En el mes de octubre, sin que se hubiese dirimido la cuestión, el duque autorizó el matrimonio de su hijo con María de Toledo, hija de don García de Toledo (Ibid., pp. 487; *ibid.*, vol. 28, pp. 194-195, 302-303; IVDJ, envío 55 [caja 72], nº 243; C. RIBA GARCIA, Correspondencia privada..., pp. 192-193.

(141).- Véanse las cartas que el doctor Milio dirigió a Mateo Vázquez en CODIN, vol. 56, pp. 90-91, 96; *ibid.*, vol. 8, pp. 492, 516-519.

(142).- A. FERNANDEZ COLLADO, Gregorio XIII y Felipe II..., pp. 42-44. Esta medida fue tomada contra el parecer de don Cristobal de Moura, que insistía en que, si se efectuase, se debía actuar con un enorme tacto. Quiroga, que en principio estimaba que se debía emplear mayor rigor (véase AHN, inq., libro 284, fol. 163), se avino a la opinión expresada por Vélez en relación a ofrecerle ayuda en conseguir la dispensa "y disponerle más para el negº principal (...) y no vino mal el arzobispo en ello, paresciéndole que qto. mas se le contradixere tendrá el viejo más gana dello como niño" (AGS, Estado, leg. 399, s.f.).

Compañía de Jesús, que contaban con una gran influencia en la corte portuguesa, era aconsejable tratar de atraerlos a la causa filipina, lo que no consideraba complicado por los mayores derechos que la asistían. Señalaba que en Toledo residía un jesuita con una larga trayectoria en la Orden, predicador y hombre discreto, al que consideraba idóneo para encargarse de esta función. Quiroga se refería a Pedro de Ribadeneyra. Felipe II estimó conveniente efectuar su llamamiento, pero advertía al inquisidor General que no se solicitase el permiso al General de la Compañía, por la dilación que la gestión supondría, sino que el provincial se encargase de despachar la licencia (143). Sin embargo, los resultados de esta propuesta fueron contrarios a las motivaciones que la habían propiciado.

A comienzos de 1579, Quiroga instaba al monarca para que despachase sin más dilación a Pedro Girón, duque de Osuna, encargado de hacer los oficios pertinentes con don Enrique para encaminar la situación favorablemente a los deseos del rey respecto a la sucesión, tratando de que realizase una declaración explícita en este sentido. Por otra parte, Osuna contaba con el apoyo del marqués de los Vélez, que había demostrado cierta desconfianza hacia Moura en los

(143).- AHN, Inq., lib. 284, fol. 163; IVDJ, envío 55 [caja 72], n° 254. La amistad entre ambos se remontaba, como hemos señalado, a la época en que Quiroga había actuado como visitador en Nápoles. Cuando tornó de Italia, Ribadeneyra pasó una breve estancia en Madrid, donde retomaron el contacto establecido años atrás, siendo el jesuita uno de los comensales más habituales en la mesa del Inquisidor General. Cuando Ribadeneyra se trasladó a Toledo, Quiroga comenzó a tratar y consultar con él cuestiones referentes a su arzobispado, como personas susceptibles de ser designadas para cargos en él, o de ser exaltadas a la prelacia. En este sentido, el jesuita recomendó en 1579, al licenciado Temiño, al doctor León, a Luis Tello Maldonado, al doctor Delgado, canónigo y maestrescuela de Toledo, al inquisidor Juan de Llano de Valdés, a don Hernando de Toledo, a García de Loaysa, al doctor Calderón, canónigo de Toledo "y hechura de V.S.I.", al doctor Sebastián Pérez, maestro del Príncipe y del cardenal Alberto, el doctor Caxa, catedrático de Prima de Teología en El Escorial y al doctor Cebrián, teólogo por la universidad de Alcalá de Henares. Junto a estas cuestiones, Quiroga también trató con el jesuita de la elección de la abadesa del monasterio de San Clemente, donde había profesado una hermana de Ribadeneyra. Sobre la opinión que el jesuita tenía del arzobispo, cabe destacar: "porque el cardenal era hombre severo y amigo de seguir su traça, y con esto no se podía yr contra ella" (...) "era hombre chapado, grave y severo, y que era menester gran tiento con él", aunque siempre destacaba el gran afecto que sentía por la Compañía de Jesús. Sobre estas cuestiones, véase, MHSI, *Ribadeneyra*, Madrid 1920, I, pp. 827-835; *Ibid.*, II, pp. 14-21, 440-441, 468; B. ALCAZAR, *Chrono-historia de la Compañía de Jesús...*, pp. 574-579.

meses precedentes (144). Igualmente, el Inquisidor General estimó conveniente que acudiese a Lisboa el licenciado Guardiola, miembro del Consejo de Castilla especializado en cuestiones referidas a herencias, que se estaba encargando de realizar un memorial donde quedase reflejada la superioridad de derechos que el monarca hispano tenía al trono luso en relación al resto de los pretendientes. Debía acompañar a Osuna y asesorarle en caso de necesidad. Este apoyo era además del agrado del duque por la vieja amistad que unía a ambos (145).

Así pues, si bien a finales de 1578 parecía que el "partido papista" tenía el asunto de la sucesión al trono portugués bajo su control, consiguiendo, incluso, el relegamiento político del duque de Alba, logrando que fuese apartado de la Corte, la ofensiva cortesana encabezada por Mateo Vázquez y el convencimiento del propio monarca sobre los manejos políticos y financieros realizados por los patronos del mismo conllevaron que, a comienzos de 1579, se empezase a evidenciar la crisis en que se hallaba inmersa la facción, que culminaría unos meses después, con su definitiva destrucción. A la muerte del duque de Sessa se unió la marcha, a la par de la de Alba, del marqués de los Vélez, que, como hemos señalado, fallecía también en un breve espacio de tiempo. La entrada en

(144).- En este sentido, véanse las cartas que Quiroga remitió a Felipe II insistiendo en que no se dilatase más su envío, así como los consejos que le había dado sobre cómo debía ejecutar esta comisión (AHN, Inq., libro 284, fols. 103, 104, 163). Por otra parte, P. SALAZAR Y MENDOZA sostiene que para realizar esta misión se pensó en un primer momento en Quiroga, pero la obtención del capelo cardenalicio hizo que no se considerase apropiado que un purpurado acudiese a negociar con otro (Cronica del gran Cardenal..., p. 290; BNM, ms. 13027, fol. 121r; *Ibid.*, ms. 13044, fol. 129v).

(145).- AHN, Inq., libro 284, fols. 103-104. El memorial realizado por Guardiola merecía plenamente la aprobación de Quiroga: "toca y responde bien a todas las dificultades que se podrían mover (...) es tan buena que sin vergüenza se puede enviar a Roma y donde quiera". También se habían ocupado de realizar memoriales el licenciado Hinojosa, del Consejo de Ordenes y Juan de Zuazola. Parece que en este último caso se sospechaba que se podría haber procedido sin la suficiente discreción, motivando que Quiroga escribiese al rey asegurando la fidelidad de Zuazola y la suya propia "Aunque habiendo andado este negocio por tantas manos no es maravilla que no haya secreto" (BL, Eg. 1506, fols. 90, 93; AGS, Estado, leg. 401, n° 82; C. RIBA GARCIA, "El viaje de Felipe II a Portugal (1580-1583)", Estudios eruditos in memoriam de Adolfo Bonilla y San Martín (1875-1926). Madrid 1930, II, pp. 180-182. Por otra parte, Mateo Vázquez había tratado de dificultar la designación de Guardiola, representando al monarca que era mejor opción enviar a un letrado que no se encontrase prestando servicio al rey, caso de cualquiera de los hermanos Agustín Álvarez y Pedro Núñez de Toledo (IVDJ, envío 55 [caja 72], n° 267).

el Consejo de Estado del confesor real Diego de Chaves venía a consolidar el aislamiento de Antonio Pérez y Quiroga en la institución en los meses que precedieron a la detención del secretario (146). Ciertamente, la comunicación secreta que mantenía con Cristobal de Moura seguía confiriéndole una posición privilegiada en el tratamiento del asunto, pero su pérdida de influjo sobre el monarca, quien ya tenía motivos fundados para desconfiar de sus gestiones, aparecía claramente reflejado en el tratamiento de otros aspectos concernientes a la ansiada sucesión. Así, en la medida en que Felipe II fue siendo consciente de las dificultades que entrañaba alcanzar su objetivo por la vía diplomática, comenzó los preparativos necesarios ante la posibilidad de que fuese preciso plantear una campaña bélica. Siguiendo el consejo de Cristobal de Moura, entre diciembre de 1578 y febrero de 1579, se reunió una Junta cuya finalidad era realizar las previsiones militares pertinentes. Por otra parte su solapamiento sobre las actividades que en el mismo sentido se estaban proyectando sobre el Norte de Africa fue utilizada por el monarca para crear una ambigüedad sobre la finalidad de tales preparativos, lo que favorecía los intereses del rey frente a la intranquilidad que estaban generando en Gregorio XIII. En este sentido hemos de señalar que el apoyo prestado por Gaspar de Quiroga a una intervención armada, si esta fuese menester para hacer valer los derechos del rey hispano al trono luso, fue absoluto durante estos meses (147). El motivo por el que la junta cesó en su actividad vino

(146).- S. FERNANDEZ CONTI, *Los Consejos de Estado...*, p. 222. La posición de Quiroga se tornó aún más débil tras la prisión de Pérez. En la relación que el embajador veneciano Morosini realizó referida al período 1578-1581 estimaba que el Inquisidor General "non ha molta pratica di governo, e se bene é stato in grandissima reputazione apresso S.M., la quale d'uomo di bassa condizione, l'ha ridotto a la grandezza che é di cardenale ricco di piu di 200.000 scudi d'entrata, tuttavia il tempo i ha fatto conoscere per uomo poco intelligente delle cose di stato. E bensi stimato uomo da bene e di vita esemplare; la gran professione di giustizia, ma nelle azioni é austero, duro, e di pochissime parole, e al presente non é di molta considerazione" (L. CABRERA DE CORDOBA, op. cit., IV, 510-511).

(147).- Así, el 29 de diciembre de 1578 expresaba junto al marqués de los Vélez su parecer favorable a que se fuesen disponiendo las galeras para una posible intervención, que se llamase a Juan Andrea Doria, quien debía traer mil o mil quinientos hombres de la infantería de Italia, a los que se unirían los ofrecidos por el duque de Medina Sidonia (AGS, Estado, leg. 399, s.f.). Unos días después, Quiroga insistía en que se debían tener preparadas entre cincuenta y sesenta naves y un núcleo de ejército experimentado (AHN, Inq., libro 284, fol. 104). En torno a la configuración y funcionamiento de dicha junta, véase S. FERNANDEZ CONTI, "La Junta Militar de Portugal", pp. 294-297; sobre el desagrado con que se veían estos preparativos en Roma, A. FERNANDEZ

determinado por la decisión adoptada por el rey portugués de conformar un tribunal que valorase jurídicamente las candidaturas que optaban a la sucesión. Esta actuación conllevó que Felipe II ordenase conformar una nueva junta a la que, a pesar del amplio número de sus componentes, no fue convocado Antonio Pérez, aunque sí fue integrado en su seno Gaspar de Quiroga (148).

Sin embargo, la participación del Inquisidor General en la junta denotaba un importante cambio de talante en relación al asunto a tratar. Así, en la reunión celebrada el 24 de febrero, Quiroga no concluyó con ningún juicio determinante. Si bien expresó que no era perjudicial remitir la notificación que se requería, ponía en consideración que, en lugar de enviar una certificación en la forma que se demandaba desde Lisboa, Felipe II respondiese simplemente con una carta escrita por él mismo que contuviese generalidades. No obstante, no se definió por ninguna opción (149). Sólo unos días después, el 6 de marzo, se valoraba si el monarca luso podía actuar como juez para dirimir a quién correspondía la sucesión de la corona. Quiroga apuntaba que la única persona que podía actuar como tal entre aquellos que no reconocían superiores era el papa, no solamente en las cuestiones referidas a causas espirituales, sino también a las puramente temporales. Aunque admitía que en este caso don Enrique constituía un juez legítimo, proponía que se fuese dilatando el negocio mientras el rey viviese, puesto que se sospechaba que se hallaba inclinado hacia la duquesa de

COLLADO, op. cit., pp. 51-54.

(148).- Conformaron dicha junta al lado del Inquisidor General, el confesor Chaves, fray Hernando del Castillo, los presidentes de los Consejos de Castilla y Ordenes, los marqueses de Aguilar y Almazán, pertenecientes al de Estado, los licenciados Luis de Molina, Francisco Hernández de Liébana, Fuenmayor, Rodrigo Vázquez de Arce y Juan Tomás, del Consejo Real, y Juan de Silva, embajador de Portugal (A. LEON PINELO, *Anales de Madrid*, p. 122; A. DANVILA Y BURGUEO, *Don Cristobal de Moura...*, p. 421; L. CABRERA DE CORDOBA, op. cit., II, p. 526; D.M. SANCHEZ, *El deber de Consejo...*, pp. 101-104; BCSCV, ms. n° 16, fol. 149r-150r).

(149).- Al respecto, véase, E. BUCETA, "Relación de la junta convocada por Felipe II el 24 de febrero de 1579 para tratar de su pretensión a la Corona de Portugal", *BRAH* 98 (1931), pp. 655-664.

Braganza (150). En este sentido, la situación política de Quiroga se tornaba muy compleja en el asunto de la sucesión portuguesa. Por una parte, el papel decisorio conferido al pontífice, si bien se encontraba totalmente identificado con la concepción política que encarnaba la facción "papista", colisionaba frontalmente con las pretensiones y proyectos del monarca hispano. Ciertamente, Quiroga había tratado de buscar el modo de conciliar todos los intereses a través de la mediación de los jesuitas hispanos y, en concreto, de Pedro de Ribadeneyra, pero el cambio operado en la Compañía de Jesús desde que Gregorio XIII accedió al solio pontificio supuso que los miembros de dicha orden favoreciesen con su actuación la posición adoptada por el pontífice en este asunto y, por tanto, fuesen desfavorables a la unión peninsular, apoyando la candidatura de la duquesa de Braganza (151). El 4 de abril llegaba a Madrid Alejandro Frumento, al que Gregorio XIII había nombrado nuncio para Portugal unos meses antes. Junto al mismo comparecían Sauli y Magnani, que días después acudieron a imponer la birreta cardenalicia a Quiroga en la capilla de su casa (152).

La decisión del monarca portugués de reunir cortes que eligiesen una comisión formada por quince caballeros y cuarenta doctores, de la que a su vez el propio rey designaría a cinco de los primeros y once pertenecientes al segundo grupo, que serían los encargados de dictar sentencia sobre los candidatos a la sucesión, hizo que Felipe II, no habiendo controlado sus enviados a Lisboa los componentes de esta junta, adoptase diversas medidas. En primer lugar, había decidido enviar a Lisboa a Luis de Molina y Rodrigo Vázquez de Arce, cuyos informes en torno a los derechos hereditarios que amparaban la pretensión de Felipe II había destacado entre el resto de los presentados. La necesidad de crear

(150).- AGS, EStado, leg. 411, nº 66; CODON, vol. 6, pp. 249-250. Esto conllevó que la Junta, unos días después, diese una opinión favorable a la intervención armada (RAH, "Salazar" N-2, fols. 125r-126v).

(151).- Véanse las noticias que durante el mes de febrero despachó Cristobal de Moura a Madrid al respecto (CODON, vol. 6, pp. 143-148, 178-183); F.J. BOUZA ALVAREZ, Portugal en la Monarquía Hispánica (1580-1640). UCM, Tesis doctoral 1987, II, pp. 574-577.

(152).- A. FERNANDEZ COLLADO, op. cit., pp. 47-48.

un clima propicio en la corte lisboeta hacía necesario atraer a las élites sociales por diversos medios, pero también contar con unos letrados que defendiesen jurídicamente la causa. Para desarrollar esta función, el rey eligió a miembros del "partido castellanista", puesto que los integrantes de la facción "papista" eran en general partidarios de asunmir el arbitraje del papa o abiertamente contrarios a la unificación de ambas coronas (153). Por otra parte, retomó los prácticamente ininterrumpidos preparativos militares paralelamente a las actuaciones diplomáticas y negociadoras. La precaria salud de don Enrique podía forzar, en caso de que se produjese su muerte, que parecía cercana en mayo de 1579, una actuación bélica en defensa de sus derechos, no modificando su actitud ante la divergencia de los criterios expresados por los componentes de la junta que trataba las cuestiones derivadas de la sucesión, cuando fue expuesto a su juicio la legitimidad de recurrir a las armas. En esta ocasión, mudando los pareceres expresados anteriormente, Quiroga conformó el grupo de aquellos que no encontraban justificado el inicio de una guerra (154).

Por otra parte, difícilmente podían los componentes del "partido papista" oponerse a los contundentes designios reales. A pesar de que en las opiniones expresadas por Quiroga y Pazos siempre estaban presentes los planteamientos defendidos desde la Santa Sede, ambos no tuvieron más opción que colaborar en las directrices políticas marcadas por el propio monarca. Además, su menguado influjo y su aislamiento aumentaron cuando, a finales de julio, fueron detenidos Antonio Pérez y la princesa de Eboli. Diversos autores han interpretado que, en el complejo conjunto de causas que provocaron su confinamiento, los intentos de Ana de Mendoza por concertar un enlace matrimonial que vinculase su familia

(153).- En torno a estas cuestiones, véase, I.J. EZQUERRA REVILLA, "La distribución de la gracia durante la anexión de Portugal..." pp. 271-275. A estos se unió, igualmente, el inquisidor de Toledo Antonio Matos de Noroña, que utilizó a Quiroga como vehículo para ofrecer sus servicios en Portugal, estimándose conveniente que acudiese, por su naturaleza portuguesa y por la estimación con la que contaba su familia (CODOIN, vol. 6, pp. 292, 315). Desde Lisboa, solicitó una plaza de comisario en la Suprema (AGS, Estado, leg. 400, s.f.).

(154).- F.J. BOUZA ALVAREZ, op. cit., pp. 40-41; BNM, ms. 1045, fols. 293r-294v; S. FERNANDEZ CONTI, "La junta militar de Portugal..." pp. 297-300.

a los Braganza ocuparon un destacado lugar (155). La caída en desgracia del "partido papista" coincidió con la decisión de Gregorio XIII de intervenir de forma directa en el problema sucesorio. El temor que despertaban en el reino luso los evidentes preparativos bélicos que estaba llevando a cabo Felipe II provocó que desde el mismo se solicitase al pontífice la realización de un arbitraje. El papa instó al monarca hispano a abandonar la idea del uso de la fuerza y a esperar la decisión que emitiesen los jueces, puesto que, si bien los letrados consultados por el rey admitían su mayoría de derecho, en ningún caso estaba justificado que en su defensa se desatase la guerra entre cristianos. Así pues, si desconfiaba de la decisión que pudiesen tomar los juristas portugueses, se ofrecía él mismo como juez de la causa (156). Ante las complicaciones que comenzaba a presentar la cuestión de la sucesión, el pontífice decidió enviar un legado, Alejandro Riario, con la intención de que se tuviese presente la mediación de la Santa Sede para que los reinos permaneciesen en paz. En los meses que precedieron a su marcha a Toledo, Quiroga defendió de forma cautelosa los argumentos esgrimidos por la Santa Sede, colaborando en los asuntos que eran remitidos a la Junta de Portugal, en la que actuó como un mero transmisor de las propuestas reales (157).

(155).- G. MARAÑÓN, Antonio Pérez I, pp. 275-287; A. PALAU Y DULCET, op. cit., XIII, pp. 2-3; A. VALENTE, "Un dramma politico alla corte di Filippo II" Nuova rivista storica (1924), pp. 264-303, 416-442; E. SPIVAKOVSKY, op. cit., pp. 42-45; A. ALVAR EZQUERRA, "De una delicada relación personal a una cuestión de Estado" La princesa de Eboli y Pastrana, Guadalajara 1993, p. 13.

(156).- En torno a esta cuestión, en la que también estaban implícitas las reticencias de Gregorio XIII a que Felipe II aumentase su poder uniendo Portugal a su Corona, así como la forma de actuar de Felipe II en relación al ofrecimiento papal, véase, A. FERNÁNDEZ COLLADO, op. cit., pp. 55-67. Por otra parte, se estaba terminando de efectuar la información sobre el derecho que tenía el rey hispano en la sucesión, de la que se efectuaron dos impresiones diferentes. Sobre la participación de Quiroga en este asunto, véase, AZ, carp. 155, n.º 145, 165, 172, 190.

(157).- Sirva como ejemplo la reunión que mantuvo la junta a finales de octubre para enjuiciar la propuesta papal. Como venía realizando desde meses atrás, Quiroga se limitaba a presentar diversas opciones sin definirse por ninguna. Mantenía que, si bien al pontífice podía querer evitar los daños de una guerra, también era posible que "como príncipe temporal le passase de ver a otro muy armado quando él no lo está por consideración de Estado". No obstante, argumentaba que, si las necesidades económicas de la Monarquía aconsejaban no afrontar los gastos de mantenimiento de un ejército, entonces era conveniente aceptar la propuesta papal (AGS, Estado, leg. 422, s.f.).

La muerte del cardenal-infante don Enrique, el 31 de enero de 1580, sin que la cuestión sucesoria hubiese quedado clarificada de forma definitiva, llevó a Felipe II a intensificar y acelerar los trámites necesarios para la conformación de un ejército y a planificar la intervención militar en el reino luso. Apenas transcurrido un mes desde el óbito del monarca portugués, el 4 de marzo, abandonaba la Corte para reunirse con sus tropas en Badajoz. El 16 de febrero, Pedro de Ribadeneyra exponía en una larga carta a Gaspar de Quiroga la inconveniencia de que se adoptase la solución del uso de las armas. Comentaba y argumentaba las calamidades que acarrearía una guerra entre cristianos, sobre todo si los resultados que se derivaban de ella no se ajustaban a las pretensiones que la habían propiciado. Aludía a que Felipe II no era bien acogido en Portugal, que podría buscar la alianza de otros enemigos del monarca, a lo que se debía unir que la perseguida anexión venía a engrandecer aún más al rey y a la corona, pero no supondría ningún acrecentamiento para sus súbditos ni en su honra ni en sus haciendas, lo que provocaría un incremento del descontento existente en Castilla. Por último, instaba a Quiroga a que usase estos razonamientos si los consideraba de utilidad para que no hubiese alborotos en el reino, que eran la puerta de acceso a la herejía (158). El Inquisidor General accedió a los deseos del jesuita, representando a Felipe II unas consideraciones tan diametralmente opuestas a la voluntad regia, aunque algunas ya habían sido prudentemente expresadas por él mismo en el seno de la junta que trataba sobre este tema, como la cuestión referida a la dificultosa dotación de los gastos que produciría la guerra (159). En consecuencia, a los pocos días de que el rey

(158).- "...Que la confiança que tengo que V.S.I. me hará esta merced, por la que sin yo mereçerlo siempre me haçe, me ha dado animo para hacer esto, y el pareçerme que no ay persona en todo el reyno á quien yo con más seguridad y con mayor provecho lo pudiere deçir" (Obras escogidas del Padre Pedro de Ribadeneyra. BAE, vol. 60, Madrid 1952, pp. 589-591; MHSI, Ribadeneyra. Madrid 1923, II, pp. 22-29; F.J. BOUZA ALVAREZ, op. cit., pp. 96-109).

(159).- En una carta que Quiroga remitió al monarca recogiendo la contestación que Felipe II podría dar a los mensajeros enviados por los gobernadores de Portugal, se lamentaba amargamente de que no hubiese prevalecido la mayoría de derechos que asistían a la monarquía hispana en la sucesión, así como que el duque de Osuna no hubiese sido capaz de vencer con sus ofrecimientos la aversión que sentían los lusos a esta solución. No obstante, refería: "Aunque no puedo dexar de dezir y suplicar a V.Md. q. en este neg^o y en todos los desta qualidad tome el consejo q. nro. Señor da por Sant Lucas a los 15 capítulos de su evangelio a los reyes que quieren començar alguna guerra q. ante todas cosas miren y examinen sus fuerças y poder porq. si hallare q. son tales q. con

emprendiese su viaje a Extremadura, Quiroga abandonaba la Corte camino de su arzobispado, donde permaneció apartado y ocupado en el desarrollo de labores concernientes a su prelación (160).

Así pues, el relegamiento de Gaspar de Quiroga, si bien se hallaba encuadrado en la caída en desgracia sufrida por el "partido papista", a lo que contribuyó su marcado "perecismo", estuvo directamente relacionada con la postura que el Inquisidor General mantuvo en referencia a la vinculación de Portugal a la Monarquía Hispánica, cercana a las propuestas defendidas por la Santa Sede y la Compañía de Jesús. Mientras que el Cardenal Granvela quedaba como regente del reino y Mateo Vázquez aprovechaba la ausencia del monarca para afianzar el dominio adquirido por la facción "castellanista", Quiroga fue el único consejero de Estado que permaneció alejado del rey, como reflejo de su absoluta pérdida de influencia (161).

No obstante, desde su retiro toledano, hubo de ocuparse de algunas actuaciones vinculadas a los sucesos de Portugal. La primera de ellas estuvo referida al fallecimiento del nuncio Frumento en Toledo, cuando se dirigía a Roma (162). El 17 de octubre de 1580, el cabildo catedralicio, escuchada la proposición que Quiroga les hizo llegar a través del arcediano de Guadalajara,

ellas no puede salir con su pretensión no comience la guerra porq. a no se hazer assí podrían naçer tales y tan grandes daños y inconvenientes que fuesen difficultosos de remediar no sólo en Portugal y Castilla sino en todo lo demás (...)y suplico a V. Md. humildemente me perdone dezir tan abiertamente" (AGS, Estado, leg. 424, fols. 177-178).

(160).- Solicitado un permiso que Felipe II le había denegado dos años antes por la necesidad que tenía de su presencia en la Corte, "el Rey holgó de ello, y le dió licencia para estar en Toledo, todo el tiempo que durasse su jornada" en Portugal (P. SALAZAR Y MENDOZA, op. cit., p. 291). Unos días antes de su marcha, el 1 de marzo, se celebró el juramento de don Diego como príncipe de Asturias, donde Quiroga ofició de pontifical (BSCV, ms. n° 16, fols. 150v-151r).

(161).- S. FERNANDEZ CONTI, Los Consejos de Estado y Guerra..., p. 234.

(162).- Al día siguiente, el arzobispo escribía a Mateo Vázquez, dando cuenta de esta muerte: "El nuncio Frumento murió aquí ayer lunes 17 deste mes de una enfermedad que le dió luego que aquí llegó y no supe que estaba aquí hasta dos días antes que muriese, porque quería estar encubierto en un mesón. Como lo supe le fui a ver y procure traerle a mi posada, pero estaba tan enfermo que en ninguna manera fue possible (...)Perdónele Dios que creó murió de tristeza y descontento" (IVDJ, envío 91, n° 306); P. SALAZAR Y MENDOZA, op. cit., p. 298).

decidió que recibiese sepultura en la capilla de San Ildefonso con las honras convenientes (163). Este gesto del prelado fue muy apreciado por el pontífice y por la Curia, por la estima que se tenía en la Santa Sede hacia el legado papal (164). Sin embargo, mucho más importante fue la utilización de la fortaleza de Santorcaz, posesión arzobispal, para retener a los familiares de don Francisco de Portugal, conde de Vimioso, traídos a Castilla (165). Así, mientras que don Francisco era excluido del Perdón otorgado en 1581 por su adhesión a la causa del pretendiente don Antonio, su madre y hermanas formaban parte del grupo de personas que fueron desterradas de Portugal (166). A finales de agosto de dicho año, Quiroga comunicaba al rey como se había procedido, siguiendo sus órdenes, a acondicionar el habitáculo para sus nuevos ocupantes, después de haber servido como prisión a la princesa de Eboli. Además de apuntar el lamentable estado en el que se encontraba la edificación, lo que no garantizaba la seguridad de la custodia, señalaba que el guardián, don Diego de Vargas, de quien realizaba diversos elogios, no era la persona indicada para realizar esta función (167). No obstante, Quiroga trató de que su cliente no fuese removido de sus cargos, consiguiendo su propósito por medio de la proposición de que se ocupase Jerónimo de Mendoza

(163).- ACT, Actas Capitulares, tomo 16, fol. 399v, citado por A. FERNANDEZ COLLADO, op. cit., p. 73; Ibid., tomo 17, fol. 62v.

(164).- Véase la carta que Francisco de Vera dirigió a Quiroga desde Roma, fechada el 28 de noviembre (AHN, Inq., leg. 2947, s.f.).

(165).- En torno a este aliado del prior de Crato, en cuyo favor propagó la rebelión antifilipina, véase, J.M. RUBIO, op. cit., p. 227; Idem, "Don Francisco de Portugal, conde de Vimioso, y la unidad política de la península" Boletín de la Biblioteca Menéndez y Pelayo 9 (1927), pp. 322-346. Sobre la vinculación con la fortaleza de Santorcaz al arzobispo de Toledo, IVDJ, envío 7 (II), caja 11, fol. 1; Ibid., envío 76, fols. 217-218; AZ, carp. 153, n° 93.

(166).- En este sentido, véase la "Memoria de las personas que Su Magd. no perdona por haber andado en compañía de don Antonio en el reino de Portugal, que fue publicada en la villa de Tomar el 17 de abril de 1581" (AZ, carp. 153, n° 25); F.J. BOUZA ALVAREZ, op. cit., II, pp. 592-594. Por tanto, no eran verdaderas las noticias que corrieron sobre su muerte (Cartas y avisos dirigidos a don Juan de Zúñiga, virrey de Nápoles en 1581. Colección de Libros españoles raros o curiosos. Madrid 1887, XVIII, p. 104).

(167).- Quiroga aludía a que "no había podido atender a hacer las reparaciones pertinentes a causa de que había primado la reconstrucción de las casa de la dignidad, que también se encontraban muy deterioradas (AGS, Estado, leg. 424, n° 279).

de la vigilancia de los reos (168). El cautiverio se prolongó hasta que la situación en el reino luso quedó completamente clarificada y pacificada después de que el prior de Crato fuese derrotado en su intento de mantener su resistencia ante el monarca hispano en la Terceira. Para entonces, don Antonio había perdido a uno de sus mayores aliados, puesto que el conde de Vimioso encontró la muerte en Lisboa el 27 de julio de 1582, por mandato de Felipe II (169). Por otra parte, la obstinación de Quiroga por mantener a Diego de Vargas al frente de la fortaleza, a pesar de su propio convencimiento de que no estaba preparado para esta ocupación, causó diversos problemas al arzobispo, puesto que Zayas le hizo llegar varias quejas sobre su comportamiento en relación a los abusivos gastos que realizaba, forzándole a devolver parte del dinero que había requerido, y a la dureza imprimida a la prisión de la condesa y sus hijas, que no se ajustaba a los deseos del rey, cuyo objetivo era mantener a los miembros de esta familia apartados de Portugal (170). Cuando, en 1584, el monarca les concedió la libertad, aunque con algunas limitaciones, Gaspar de Quiroga ayudó a la condesa de Vimioso con cinco mil ducados para que pudiesen emprender su camino, gesto que fue muy considerado por Cristobal de Moura (171).

(168).- El arzobispo alegaba que había favorecido a Vargas por su extrema pobreza, dándole a escoger entre una vara de alguacil en Sicilia o la alcaldía de Santorcaz. Elegido esto último, Vargas ostentaba también la mayordomía (véase el apéndice IV sobre las mayordomías del arzobispado) y la vara de justicia. Cuando accedió a estos oficios, no se pensaba en que tuviera que hacerse cargo de la familia del conde de Vimioso, pero Quiroga argumentó ante el rey y ante Zayas que su destitución únicamente serviría para agravar su paupérrimo estado económico (Ibid., nº 281-282; AHN, Inq., libro 358, fols. 59v-60v, 159r-v). Sin embargo, las peticiones realizadas por Vargas para que se le permitiese ausentarse fueron reiteradas (AGS, Estado, leg. 428, s.f.). Sobre las instrucciones que Jerónimo de Mendoza recibió en cuanto a la guardia de los presos, véase AHN, Inq., libro 358, fols. 122r, 159r-161r.

(169).- Si Bien A. DANVILA Y BURGUEÑO, op. cit., pp. 693-694, afirma que Francisco de Toledo murió en la batalla naval de Strozzi, existe una declaración efectuada por el conde de Vimioso antes de morir: "Declaración del Conde de Vimioso q. murió degollado en Lisboa por mandato del Rey D. Phe. Segundo por las alteraciones del Reyno de Portugal (...). Hizolo dos horas antes de morir". La misma fue realizada ante fray Francisco Maldonado (BNM, ms. 1761, fols. 84r-85r; ibid, ms. 2572, fols. 34r-37r).

(170).- AGS, Estado, leg. 162, nº 159, 180, 205; AHN, Inq., libro 358, fol. 129r.

(171).- AZ, carp. 148, nº 16, 21.

7.2.3 La labor en el arzobispado de Toledo

El 23 de marzo de 1580, el cabildo catedralicio designaba a parte de sus miembros para que acudiesen a dar la bienvenida al prelado, recién llegado a la ciudad (172). Sólo unos días después, Quiroga comunicaba a Felipe II su intención de acometer diversas actuaciones en el arzobispado. Había procedido a la publicación de convocatoria de sínodo diocesano, que debía reunirse el 8 de mayo, e igualmente, estaba atendiendo a la visita de la iglesia toledana y de sus servidores, así como de los monasterios, colegios y hospitales que se hallaban bajo su autoridad (173). En este sentido, además de la visita que se inició sobre su iglesia, que llevó a cabo Juan López, el prelado también acometió otras, como la que encargó al doctor Esteban Sueldo en relación al monasterio de monjas de la orden de San Jerónimo de la villa de Brihuela (174). El 26 de julio de 1581, encomendaba a don Diego de la Calzada, obispo de Salona que visitase al licenciado Suero Méndez, vicario general de Alcalá de Henares, así como al resto de oficiales de la audiencia (175). Igualmente, en octubre se iniciaba una instrucción sobre los hospitales de Madrid, que no se culminaría hasta 1587 (176). La activación de diversas visitas encontró alguna resistencia por parte del consistorio, que se puso de manifiesto en los problemas surgidos con la actividad desarrollada por el licenciado Rades de Andrade, visitador del Hospital fundado por el Cardenal Tavera (177), así como, cuando, en noviembre de 1581, trataron de oponerse a que un visitador acudiese por mandato del arzobispo a la iglesia del Santísimo Sacramento de Torrijos,

(172).- ACT, Actas Capitulares. Tomo 16, fol. 358v. El 9 de marzo, Quiroga escribía a Mateo Vázquez, refiriendo que su marcha de Madrid se dilataría por unos días (IVDJ, envío 91 (caja 130), nº 292).

(173).- La carta que dirigió al rey, fechada el 12 de abril, se encuentra en AGS, Estado, leg. 424, nº176.

(174).- La comisión, datada el 5 de julio de 1581, en AHN, Inq., Libro 358, fols. 1v-2r.

(175).- Quiroga advertía que la visita no debía durar más de treinta días (Ibid., fols. 3v-4r).

(176).- A. LEON PINELO, op. cit., p. 127.

(177).- ACT, Actas Capitulares. Tomo 16, fols. 363r, 364r.

puesto que creían perjudicado su derecho (178). También se ordenó la ejecución de una visita al Colegio de los Infantes a García de Loaysa, que fue sustituido en el desempeño de esta labor, en marzo de 1584, por Pedro Carvajal (179). Así pues, como consecuencia del relegamiento sufrido, Quiroga acometía de forma decidida la aplicación de los criterios reformísticos en su arzobispado, cuestión que había quedado postergada por la permanencia del prelado en la Corte. Si bien la consecución de esta reforma se efectuó a través de dos instrumentos principales, como fueron el sínodo celebrado en 1580 y el Concilio provincial congregado en 1582, sobre los que, a causa de su significación, centraremos nuestra atención más adelante, las medidas adoptadas en los mismos se vieron complementadas a través de la realización de otras actividades.

De este modo, Quiroga también se ocupó de ordenar, en 1580, que se iniciasen las gestiones conducentes a la conformación de un manual donde quedase establecida la forma correcta de administrar los sacramentos y de realizar las ceremonias eclesiásticas, encomendando esta labor a García de Loaysa (180). En octubre del año siguiente, Loaysa fue diputado por el cabildo, junto con Rodrigo Dávalos, para que se reuniesen con Quiroga con el fin de culminar esta labor en conformidad con lo dispuesto por Roma en este sentido (181). Aunque el manual quedó autorizado en diciembre de 1581,

(178).- Ibid., Tomo 17, fol. 73r.

(179).- Ibid., Tomo 18, fol. 25r.

(180).- El 8 de agosto, el cabildo comitió a García de Loaysa que escribiese al papa sobre "el cuadernillo de rezado nuevo romano" (Ibid., Tomo 16, fol. 380v). Sobre el buen acogimiento que tuvo la elaboración de este manual, véase, P. SALAZAR Y MENDOZA, op. cit., p. 79; BSCV, Ms. n° 16, fol. 151r.

(181).- ACT, Actas Capitulares. Tomo 17, fol. 71r. A ellos se sumó, pocos días después, Pedro Ruiz, capellán de San Pedro (Ibid., fol. 72v), y posteriormente, el maestrescuela, el doctor Calderón, el maestro Pérez y el licenciado Virviesca (Ibid., fol. 94v). En abril de 1582 se decidió que la comisión encargada de este tema se reuniese por las tardes (Ibid., fol. 103r). No obstante, pasaron a formar parte de este grupo otros integrantes como Francisco de Pisa, que colaboró desde el comienzo de las gestiones con García de Loaysa, el jesuita Juan de Mariana, Juan López, visitador de las iglesias de Toledo, y Jerónimo Vázquez, catedrático de Prima de Cánones (BSCV, Ms. n° 16, fol. 152v; F. DE PISA, op. cit., pp. 200-201; J. PORRES MARTIN-CLETO, Los primados de Toledo. Toledo 1993, pp. 110-111).

su aceptación por parte del resto de las iglesias, conllevó que los trabajos se continuasen desarrollando, dando cumplida cuenta al consistorio de los avances que se realizaban en su revisión (182). No obstante, en abril de 1583, se mandó que se incluyesen únicamente aquellas ceremonias que estuviesen obligadas por el misal y breviario romano, pero que, aquellas que no fuesen de precepto, sino arbitrarias, no se aplicasen, quedando en vigor la actuación marcada por la costumbre de la iglesia toledana, siempre que ésta no fuese contraria a los mandatos romanos (183). En noviembre de 1584, el cabildo encargó al licenciado Virviesca que se dirigiese tanto a Quiroga como al Comisario General informándoles del edicto que se había puesto sobre que no se rezase por el breviario romano ni por el misal si no estaba aprobado por este último y refrendado por un comisario de San Lorenzo el Real. La respuesta del prelado fue otorgar una prorroga de un mes para aquellos misales y breviarios que no estaban rubricados por el comisario de El Escorial (184).

No obstante, a pesar de que Quiroga había iniciado su labor reformística con un gran ímpetu, los efectos del "catarro" de 1580 vinieron a frenar la amplia actividad que había comenzado a desplegar, aunque su enfermedad no revistió una especial gravedad (185). Sus estragos también alcanzaron al propio rey,

(182).- M. BOYD, op. cit., pp. 29-30; C. RIBA GARCIA, Correspondencia privada..., pp. 274-275.

(183).- AZ, carp. 159, n° 50; ACT, Actas Capitulares. tomo 17, fols. 188v, 190v.

(184).- Ibid., tomo 18, fols. 92r, 96r; AGS, CJH, leg. 195, n° 16. En junio de dicho año se había publicado Officia propria Sanctorum Toletanae Ecclesiae et Diocesis (C. PEREZ PASTOR, Bibliografía madrileña. Madrid 1891, II, p. 261). El secretario de Quiroga, Jerónimo Paulo de Manzanares, a instancias del prelado, escribió el libro Estilo y formulario de cartas familiares, según el gobierno de prelados y Señores temporales, que se imprimió en Alcalá de Henares en 1582 (J. MARTIN ABAD, La imprenta..., p. 1064, n° 922).

(185).- AHN, Inq., leg. 3285, n° 10. Su preocupación por los efectos devastadores de la epidemia, sobre todo entre los pobres, le llevaron a repartir treinta mil ducados en limosnas (P. SALAZAR Y MENDOZA, op. cit., p. 289; BL, Eg. 1506, fol. 97r-v). En una carta que el canónigo Miguel Giginta dirigió a Mateo Vázquez, en abril de 1581, refería como el remedio aplicado a los pobres por el arzobispo y el corregidor había reducido el número de mendigos de mil a trescientos (IVDJ, envío 89 (caja 125), n° 230-231). En su afán de proteger y ayudar a los necesitados, el prelado llamaba la atención, en febrero de 1585, al corregidor de Alcalá de Henares por el precio alcanzado por la carne de cabra (AHN, Inq., libro 361, fol. 298r-v).

y sobre todo a la reina doña Ana, provocando que en la iglesia de Toledo, por mandato arzobispal, se realizasen diversas rogativas y procesiones para favorecer la salud de la familia real (186). El 26 de octubre fallecía la reina. Felipe II ordenó a Quiroga que saliese a recibir el féretro real a Talavera, donde le fue entregado el cuerpo, que venía acompañado, entre otras personas, por el duque de Osuna y por Diego de la Madriz, obispo de Badajoz, ocupándose de su traslado a El Escorial, donde además realizó los oficios religiosos pertinentes (187).

Por otra parte, como consecuencia de los proyectos que el rey había realizado en torno a la vinculación de su sobrino, el Cardenal Alberto, con la mitra arzobispal de Toledo, el 18 de noviembre, escribía al Comendador Mayor de Castilla para que solicitase al pontífice un breve o cualquier otro tipo de documento que asegurase al mismo la sucesión en la prelación en caso de que el óbito regio se produjese con anterioridad al de Quiroga. De igual manera, dirigió una carta a Gregorio XIII con este propósito (188). Por un breve fechado el 12 de enero de 1581, el papa accedía a la petición realizada, estableciendo una única limitación: Alberto podría tomar posesión plena de la sede si cuando se produjese la vacante contaba con ventisiete años, pero, si no había alcanzado dicha edad, actuaría hasta entonces como administrador. Sin embargo, era nombrado coadjutor, título que ostentaría hasta que se produjese el relevo (189).

También, el 13 de noviembre de 1580, Gregorio XIII confirmaba los

(186).- También se realizaron diversos actos para rogar por la buena marcha de los asuntos de Portugal (ACT, Actas Capitulares. Tomo 16, fols. 376v, 378r-v, 380v, 387v-388r, 402r).

(187).- También el prelado se había encargado de realizar las honras y ceremonias correspondientes en Toledo (Ibid., fols. 402r-v, 403v-404r, 414r-v). Sobre el fallecimiento de la reina y las gestiones encargadas a Quiroga, véase, P.SALAZAR Y MENDOZA, op. cit., p. 299; BL, Eg. 1506, fol. 99; A.LEON PINELO, *Anales de Madrid*, p. 126; AZ, carp. 139, n° 207; Ibid., carp. 141, n° 34; IVDJ, envío 7 (caja 11), fols. 229-231; Ibid., envío 91, n° 307; L.CABRERA DE CORDOBA, op. cit., II, p. 619; BSCV, Ms. n° 16, fol. 152r.

(188).- C.RIBA GARCIA, *Correspondencia privada...*, pp. 224-228.

(189).- F.CAEIRO, op. cit., pp. 364-365; L.CABRERA DE CORDOBA, op. cit., IV, p. 69.

estatutos de limpieza de sangre de la catedral de Toledo. Como hemos señalado, si bien Quiroga había colaborado abiertamente con el arzobispo Martínez Silicio para conseguir su aprobación, esta actuación estuvo motivada por una serie de circunstancias ya expuestas, pero esta reglamentación era contraria a sus propias convicciones en materia de religiosidad. No resulta extraño, por tanto, que, una vez que ocupó él mismo la mitra toledana, no dudase en realizar diversas críticas respecto a la conveniencia de mantener en vigor este ordenamiento (190). En este sentido, es significativo que el breve despachado por el pontífice no obedeció a una previa solicitud del prelado, sino que vino determinado por su "motu proprio" (191). No obstante, Quiroga no pasó de poner en tela de juicio este mecanismo de exclusión social, puesto que no consiguió realizar ninguna reforma. De haberse producido, evidentemente, ésta hubiese encontrado una enorme resistencia por parte de aquellos que se aferraban a la vigencia de los estatutos de limpieza de sangre como práctica defensiva de la condición y significación social adquirida. El 7 de enero de 1581, el cabildo catedralicio requería a su agente en Roma que enviase un traslado en pergamino y plomado del decreto concedido por el papa en confirmación de esta reglamentación en la iglesia toledana (192). Así mismo, el 3 de noviembre, el consistorio suplicaba al pontífice que quedase reflejada la clausula referida a las cualidades y limpieza que debían cumplir los beneficiados de la iglesia toledana en las bulas

(190).- Así, el 18 de febrero de 1580, Antonio de Padilla refería a Felipe II el enfrentamiento que había tenido con Quiroga en el seno de la junta que ambos celebraban con el obispo de Avila y el confesor Chaves a causa de la concesión de un hábito a Sancho Dávila. El presidente del Consejo de Ordenes se negaba a que se otorgase el mismo por no satisfacer el candidato las condiciones requeridas de limpieza, lo que había provocado que el Inquisidor General expresase duras críticas sobre esta reglamentación, de igual manera que llevaba realizando desde años atrás: "Dijo también el martes el Cardenal en aquella junta que el estatuto de su iglesia de Toledo es malo y que no se había de hacer" (AZ, carp. 155, n° 224).

(191).- BSCV, Ms. n° 16, fol. 151v.

(192).- ACT, Actas Capitulares. Tomo 17, fol. 4r. Dos días después, se encomendaba a Bernardino de Mendoza y a Rodrigo Dávalos que se encargasen de guardar convenientemente la bula original del estatuto. Igualmente, encargaron a Antonio de Covarrubias que escribiese al papa en agradecimiento por esta actuación (Ibid., fol. 4v). El 17 de abril, Bernardino de Mendoza presentó en el consistorio un memorial, señalándose una comisión para que tratase sobre su contenido, concerniente a la conservación de este ordenamiento (Ibid., fol. 25r).

de provisión de las prebendas (193). Para evitar inconvenientes surgidos en la realización de las informaciones, el capítulo procedió a ratificar el orden dado a los comisarios encargados de esta labor el 27 de noviembre de 1568. Con la finalidad de impedir los sobornos que se producían y en salvaguarda de la constitución existente "De sobornis", que versaba sobre la forma cómo se debía realizar la votación para evitar que la reglamentación fuese burlada por este medio, decidieron que, cuando hubiese que designar un informante sobre un candidato a ocupar una canonjía o ración, se nominase a los cuatro individuos más convenientes para esta función, sin tener en consideración a qué coro estuviesen adscritos, y, posteriormente, como era costumbre, se introdujesen los nombres en una urna. Se irían emparejando por suerte con las cédulas contenidas en otra, de las que únicamente una de ellas facultaba como comisario, estando las tres restantes en blanco (194). Así pues, la postura mantenida por el arzobispo respecto a aplicar con menor rigurosidad el estatuto contrastó con la adoptada por los componentes del capítulo, que defendieron su mantenimiento en vigor y su ejecución ajustada a un estricto cumplimiento (195).

Por otra parte, su afinidad con la religiosidad representada por la Compañía de Jesús conllevó que, durante su periodo de estancia en Toledo, Quiroga intensificase sus contactos con Pedro de Ribadeneyra, y procurase el favorecimiento de la Orden. Así, consultaba con el jesuita asuntos de diversa índole, dejándose siempre guiar por su consejo. Preocupaba al arzobispo si era lícito a los prelados dejar memorias y socorrer a los futuros pobres en detrimento de los necesitados inmediatos, así como el lugar donde iba a fijar dicha memoria que, a su vez, serviría para situar su enterramiento. Ribadeneyra dió su parecer

(193).- Ibid., fol. 71v. Sobre las estrictas indagaciones que se realizaron en torno a Juan de Llano de Valdés antes de ser proveído en una canonjía, véase, Ibid., fols. 73r-76r. El 27 de noviembre se decidió no admitir a Lorenzo González como clerizón por no satisfacer el estatuto de limpieza de sangre (Ibid., fol. 78v).

(194).- Ibid., fols. 81v-82r.

(195).- Así, en septiembre de 1585, no se admitió como clerizón a Luis de la Cruz por no satisfacer las pruebas de limpieza (Ibid., tomo 18, fol. 181r). Igualmente, el 22 de mayo del año siguiente, el nombramiento de Diego García como capellán quedaba anulado por la misma razón (Ibid., fol. 244v).

favorable a que Quiroga efectuase alguna fundación, sin que con ello abandonase la atención a los más desfavorecidos, proponiendo diversos lugares que, según su criterio, eran adecuados para su eterno descanso. En primer lugar, señalaba la capilla y sepultura de sus padres en Madrigal de las Altas Torres, para continuar refiriendo una serie de emplazamientos sitios en Toledo: La catedral, la capilla de Santa Leocadia, la Casa de la Compañía de Jesús, o un colegio de dicha Orden que se estableciese en esta ciudad. Si bien alegaba las diversas causas que hacían conveniente optar por alguno de los expuestos, dedicaba una especial atención a recomendar la conveniencia de que se fundase un colegio jesuítico en Toledo. Aludía a la enorme necesidad que existía de su creación por la carencia de buenos maestros que había en esta ciudad, que enseñasen a los niños primeras letras, así como de personas doctas que impartiesen física, retórica y teología, como consecuencia del menoscabo que sufría la universidad toledana. Aseguraba que la utilidad que se derivaría de su funcionamiento sería inmensa, quedando la ciudad muy obligada y agradecida al arzobispo por esta obra que imitaría así las actuaciones realizadas por Pedro Guerrero, Francisco Blanco, y por el pontífice. Por último, apuntaba que la forma de financiar el proyecto no era complicada, pues, aunque prefería que el prelado costeara la edificación de su propia hacienda, para las rentas se podían unir, posteriormente, algunos beneficios simples (196). Quiroga inició las gestiones precisas para llevar a cabo esta propuesta, aunque su primer objetivo no fue acometer la implantación de un centro educativo en Toledo, sino en Talavera (197). Esta iniciativa chocó

(196).- *Obras escogidas...*, pp. 592-593; MHSI, *Ribadeneira*, II, pp. 323-329; J.GIL CALVO, op. cit., pp. 52-54. Por otra parte, Ribadeneira no era el único jesuita con el que Quiroga tenía contacto, puesto que también mantenía relación con los padres Deza y Juan de Mariana, vinculados a labores censoras (AHN, Inq., libro 358, fol. 74v). El 8 de mayo de 1581, el arzobispo escribió al contador Garnica comunicándole su necesidad de comprar ochocientos venticinco mil maravedíes de juro para unas memorias, y su deseo de desempeñar otros adquiridos con anterioridad, solicitando un adelanto del dinero sobre la venta (AGS, CJH, leg. 187, nº 19).

(197).- El 28 de abril de 1582, el General Claudio Aquaviva refería al arzobispo como el provincial Gil González y Pedro de Ribadeneira le habían comunicado su deseo de fundar un colegio en Talavera, prometiendo que la Orden se esforzaría por responder convenientemente a la merced recibida (AHN, Inq., leg. 3284, nº 1). Por otra parte, las indicaciones de Ribadeneira debieron agradar significativamente a Quiroga, que se hallaba muy vinculado a las actividades del Colegio Imperial de Madrid (J.SIMON DIAZ, *Historia del Colegio Imperial de Madrid*, Madrid 1992, pp. 31-32).

con la oposición de la villa, cuyo ayuntamiento envió una comisión al prelado para que desistiese de su propósito, entendiendo que no era imprescindible su establecimiento, que, además, resultaría gravoso para la población. Para aplacar los ánimos adversos, el arzobispo se comprometió a sufragar el colegio, aportando mil setecientos ducados para gastos de instalación y una renta de mil para su sustento. A finales de agosto de 1582, llegaban a Talavera seis miembros de la Compañía de Jesús, que se encargaron de realizar las actividades pertinentes, comenzándose a impartir las primeras clases en noviembre. El padre Luis de Guzmán fue designado como primer rector del colegio, que tenía la advocación de Santa Leocadia (198). No obstante, el 30 de julio, el cabildo catedralicio encomendó a los canónigos García de Loaysa y Pedro de Quiroga que acudiesen a agradecer al prelado su interés por la instrucción de los niños del arzobispado, así como, a rogar que extendiese a la ciudad de Toledo esta actuación, teniendo orden, igualmente, de tratar este tema con el corregidor y ayuntamiento de la ciudad si fuese preciso (199). Quiroga debió emprender rápidamente el proyecto, pues, el 26 de febrero de 1583, respondía al Cardenal Gambara sobre los deseos expresados por Gregorio XIII de que acometiese la construcción de algún edificio en la iglesia de Santa Balbina, cuyo título de Cardenal ostentaba. Señalaba que, si bien consideraba que constituía una excelente idea, existían algunos inconvenientes para su realización. En primer lugar, los agustinos le habían solicitado dicha iglesia para incorporarla a un monasterio que pretendían crear, estando remitido este asunto al mismo Cardenal Gambara para su resolución (200). Puesto que esta cuestión no se encontraba concluida, no podía adoptar ninguna decisión. En segundo lugar, aludía a que había fundado dos colegios de la Compañía de Jesús en Talavera

(198).- A.ASTRAIN, op. cit., III, pp. 231-232; BSCV, Ms. n° 16, fol. 153v; D.CASTEJON Y FONSECA, op. cit., p. 1153. Sobre la buena marcha del colegio informaba Luis de Guzmán a Quiroga unos meses después (AHN, Inq., leg. 3284, n° 10).

(199).- ACT, Actas Capitulares. Tomo 17, fol. 133r. El ayuntamiento de Toledo realizó un informe sobre la necesidad que existía de poner escuelas de primeras letras en la ciudad que fue remitido al arzobispo (VV.AA., Relación de pueblos del obispado de Cuenca. Cuenca 1983, pp. 105-109).

(200).- Sobre dicha cuestión, véase la carta de agradecimiento que remitió el Cardenal Farnesio a Quiroga (AHN, Inq., leg. 3314, n° 45).

y en Toledo, así como que se había comprometido a prestar su ayuda para establecer otro en Alcaraz, por lo que, considerando la carga que tenía de pensiones, no podía afrontar otros gastos (201). La erección del nuevo colegio jesuítico en Toledo tuvo lugar en el mes de octubre, nombrándose de San Eugenio. Para sostener la obra, el prelado otorgó una renta de mil treinta y seis ducados, a la que añadió unas casas y ciento sesenta fanegas de tierra en el término de Cabañas (202). Sin embargo, el proyectado auxilio a la creación de Alcaraz, que debía haberse materializado en 1584, no se llegó a producir. En este sentido, también resultó decisivo el consejo que Pedro de Ribadeneyra realizó a Quiroga. El jesuita instó al arzobispo para que los mil ducados de renta que tenía pensado aplicar a su establecimiento se empleasen en repartir limosna entre los pobres del arzobispado, posponiendo su ejecución para cuando las necesidades de estos fuesen menos extremas, cuestión que el prelado estaba obligado prioritariamente a atender (203).

Por otra parte, Quiroga también se ocupó de las cuestiones derivadas de las rentas eclesiásticas. En enero de 1582, el cabildo encargaba al deán que tratase con el arzobispo el asunto relativo a la conveniencia de arrendar las rentas del pan, como se había efectuado hasta entonces, o si era mejor que hubiese cillas (204). Así mismo, el consistorio recurrió al criterio de otras personas experimentadas en este tema, acordando acogerse a la segunda opción. Sin embargo, cuando se informó al prelado de esta decisión, Quiroga apuntó la necesidad de que se sometiese al juicio de tres letrados si para hacer esta

(201).- Ibid., libro 361, fol. 230r-v. El padre Salmerón escribía a Ribadeneyra desde Nápoles el 8 de mayo, haciéndose eco de las noticias sobre la nueva fundación en Toledo, y el agradecimiento que sentía ante esta gran merced (MHSI, *Epistolae Salmeronis*. Madrid 1907, II, p, 723).

(202).- A.ASTRAIN, op. cit., III, p, 232; J.GIL CALVO, op. cit., pp, 57ss. Sobre posteriores avatares de esta fundación, véase, BSCV, Ms. n.º 16, fol. 154r-v; C.PEREZ PASTOR, *Bibliografía madrileña*. Madrid 1891, III, p, 459.

(203).- Ribadeneyra añadía; "Nro Sr oyó nras oraciones, y estorvó la ida de V.S.I.a Aragón, para que con parte de lo que se avía de gastar en la jornada, se remediassen tantos pobres" (MHSI, *Ribadeneyra*, II, pp, 38-40).

(204).- En las conversaciones con Quiroga también intervino el racionero Alonso Sánchez (ACT, *Actas Capitulares*. Tomo 17, fol. 85r).

mudanza se requería convocar sínodo, así como, que se reuniese a los señores temporales que tenían parte en estos diezmos, y conocer el parecer de los arciprestes y curas del arzobispado. Si bien el consistorio, después de realizar consulta con los doctores Hondegardo, Calderón y el licenciado Virviesca, no cambió su opinión, desestimando que fuese necesario acometer las actuaciones señaladas por el prelado, solicitaba que se mandasen poner en ejecución las cillas. No obstante, se plegaron a que se congregase un sínodo, al que debía asistir un beneficiado de cada iglesia que estuviese instruido en este asunto (205). A pesar de la instancia realizada por el capítulo para solucionar esta cuestión, el proyectado sínodo nunca se llegó a reunir, con lo que el asunto quedó paralizado (206).

Sin embargo, este intento del cabildo de cambiar el modo de percepción de sus rentas estaba directamente relacionado con las dificultades económicas por las que estaba atravesando. En 1581, surgieron problemas en la iglesia de Toledo en relación con el pago del Excusado. El 12 de agosto, el consistorio decidió enviar a Madrid una comisión para representar al rey la injusticia que se había cometido encarcelando a algunos canónigos como consecuencia de haber expirado el plazo fijado para realizar el pago en el mes de julio sin que éste se hubiese producido. Quiroga, con quien el capítulo consultó la manera como se debía conducir este tema, decidió encargarse él mismo de escribir al monarca, evitando el traslado de los designados, aunque aprobó que se siguiesen las

(205).- Ibid., fols. 95v-96v. Sobre la preparación del mismo, fijado para el domingo después de Cuasimodo, Ibid., fols. 95v, 98r, 102r. Sin embargo, no por acceder a convocar el sínodo el cabildo había modificado su determinación: "para que cuando el sínodo se reuna no se difiera por este tema, que ya está resuelto". No obstante, el tratamiento de la cuestión se fue dilatando. El 2 de mayo, el consistorio solicitaba que, hasta que se adoptase una resolución, se remediase a los mayordomos y arrendadores (Ibid., fol. 109r). Por otra parte, este no era el único asunto relacionado con las rentas en el que se ocupaba el capítulo, puesto que enviaron a Francisco García de Valloboso para que hiciese instancia con Quiroga con el fin de que mandase pagar el situado de Illescas correspondiente a 1581 (Ibid., fol. 109v). Semejante petición fue presentado al prelado en los años siguientes (Ibid., fol. 166v; Ibid., tomo 18, fol. 166r).

(206).- Menos trabas puso el prelado para acceder a la petición realizada por María de Rojas, abadesa del convento de San Clemente, para cambiar el arrendamiento de una tierra de pasto, pasando la misma a ser de labor, con el consiguiente aumento de la renta. Quiroga mostró su apoyo a esta mudanza, a pesar de la ley existente en contra de esta práctica (IVDJ, envío 90, n° 486).

actuaciones contra el doctor Gamonal, que había dado el mandamiento de prisión, por el exceso cometido (207).

A comienzos del año siguiente, el cabildo informaba al prelado de la prorrogación de la gracia del excusado por un espacio de cinco años, señalando la próxima reunión de la Congregación eclesiástica (208). La concordia alcanzada sobre dicha gracia a comienzos de julio, no fue bien acogida en la iglesia toledana. El canónigo Alonso de Mendoza contradijo el concierto, porque creía que se gravaba en exceso a la misma en relación al resto de iglesias. El malestar se incrementó cuando el Comisario General exigió con censuras al cabildo que hiciese efectivo el pago del excusado cumplido en noviembre de 1581. Nuevamente, Quiroga asumió el tratamiento de este asunto, logrando que se concediese una prorrogación (209). Ante la carencia de dinero para hacer frente a esta exigencia, el cabildo cometi6 a García de Loaysa y a Juan Manrique que solicitasen a doña Luisa de la Cerda diez mil ducados para saldar la deuda, estableciendo un censo sobre bienes de la mesa capitular (210). La situación económica del consistorio era tan precaria que, en agosto de 1583, decidieron

(207).- ACT, Acatas Capitulares. Tomo 17, fols. 51r, 52r, 53r, 54r.

(208).- Ibid., fols. 89r, 92r. El 29 de marzo de 1582 llegaba al consistorio una carta del Comisario General fijando la fecha de reunión de la Congregación en Madrid para el día 29 del mes siguiente (Ibid., fol. 101v). Los designados para acudir a la misma fueron Pedro de Ayala y el doctor Hondegardo, nominándose como colector general del excusado a Francisco García de Valloboso (Ibid., fols. 104v, 105v, 106r-107v). Unos días antes de esta convocatoria, también se comunicaba al cabildo la concesión del subsidio por un quinquenio (Ibid., fol. 107v), dándose comisión a los mismos canónigos para que actuasen como procuradores en relación a este asunto. Se les encargaba que se informasen de lo que pensaba el nuncio y los servidores reales sobre dicha prorrogación (Ibid., fols. 113r, 121v; AHN, Inq., leg. 3314, n° 21).

(209).- ACT, Actas Capitulares. Tomo 17, fols. 110r-116r.

(210).- Si bien la mayoría del consistorio era favorable a esta solución, el licenciado Gomara y Juan de la Cerda protestaron porque se estuviesen asumiendo bienes de la iglesia para pagar una deuda generada por los capitulares. Los procuradores enviados a la Congregación también opinaban que este sistema era muy gravoso, pero se inclinaban a su adopción (Ibid., fol. 122r). La difícil situación económica llevó a que se ordenase a los procuradores que se resistiesen a realizar una concordia sobre el subsidio por la incapacidad de afrontar los pagos (Ibid., fol. 137v). En septiembre de 1582, parte del cabildo decidió sumarse al acuerdo que alcanzasen el resto de las iglesias, pero esto chocó con la resistencia de Antonio Manrique y Alonso de Mendoza (Ibid., fol. 144r-v). A pesar de ello, se otorgó poder a los procuradores para tomar concierto (Ibid., fol. 148r; AHN, Inq., libro 3314, n° 26).

solicitar un préstamo al prelado de ocho mil ducados por espacio de dos años (211). Sin embargo, a pesar de los ruegos y garantías expresados por el capítulo, el arzobispo sólo accedió a acudir con seis mil ducados (212).

La falta de medios económicos hizo que el capítulo extremase la vigilancia sobre la aplicación de las rentas eclesiásticas. Así, en enero de 1582, la labor que estaba desarrollando Quiroga en cuanto a la reparación y reedificación de las iglesias del arzobispado conllevó que el cabildo comisionase al doctor Hondegardo y al licenciado Virviesca para que estudiasen si era contrario a derecho la carta ejecutoria dada por el prelado para tomar rentas eclesiásticas con esta finalidad (213). Por otra parte, esta pretensión no se limitaba al consistorio toledano, puesto que, en junio de 1583, en el mismo se recibió una carta de la iglesia de León pidiendo consejo sobre el modo de proceder para

(211).- ACT, Actas Capitulares. Tomo 17, fols. 216v, 219r-220r, 221r. Sobre el devenir de las rentas capitulares, véase, I. LOPEZ CELADA, Evolución de las rentas del cabildo de la catedral de Toledo durante el último cuarto del siglo XVI. Caja de Ahorros Provincial de Toledo 1980, pp. 99-103.

(212).- ACT, Actas Capitulares. Tomo 17, fols. 222r-v. Hemos de tener presente que Quiroga limitó su ayuda al cabildo coincidiendo con las fundaciones de los Colegios de la Compañía de Jesús, y ante la imposibilidad, referida por él mismo, de realizar otros gastos. En este sentido, el prelado se quejó en diversas ocasiones de los robos y fraudes que sobre sus rentas cometían algunos de sus servidores. Así, en agosto de 1585, escribía al regente León: "Yo me hallo ahora con pena y cuidado porque Leonardo Rotulo mayordomo del partido de Ciudad Real se ha ausentado de España deviéndome quarenta mill ducados, que me ha puesto en mucha necesidad" (AHN, Inq., libro 361, fol. 387v). El 21 de septiembre pedía a Jerónimo de Bastiza, corregidor de Cuenca, que se hiciese justicia y ejecución sobre los bienes de Fabián Pareja, puesto que "este hombre enriquecido con mi hacienda pretende no pagar lo que me deve". Como resultado de esta declaración, Pareja fue encarcelado (Ibid., fols. 397r, 398r). Sobre el favorecimiento que había procurado al mismo, que era mayordomo de Toledo y receptor general de las rentas de la dignidad arzobispal, véase, AZ, carp. 135, nº 17. Por otra parte, el prelado trató de perseguir los comportamientos ilícitos en materias económicas, como en el caso del doctor Aceituno, vicario de Ciudad Real (AHN, Inq., libro 361, fol. 382r). Todo ello motivó que, en 1585, tuviese que negar también su ayuda al conde de La Coruña (Ibid., fol. 395v).

(213).- ACT, Actas Capitulares. Tomo 17, fol. 86. El consistorio insistió sobre el mismo tema en el mes de agosto (Ibid., fol. 134v). A finales de año, el arzobispo reincidía en esta práctica, realizando un repartimiento para modificar la iglesia de Tembleque (Ibid., fol. 159r-v). Ello provocó que el consistorio presentase sus quejas en el seno del Concilio provincial (Ibid., fol. 152v). En este sentido, esta no fue la única cuestión sobre la que el capítulo trató de ajustar los gastos dependientes de las rentas eclesiásticas, puesto que esta actuación afectó también al dinero que se destinaba para luchar contra las plagas de langosta (R. IZQUIERDO BENITO, "Las plagas de langosta en Toledo y la región manchega durante el siglo XVI" Anales toledanos 20 (1984), pp. 90-104).

librarse del repartimiento que se efectuaba para la mejora de la iglesia (214).

En esta labor, el prelado no descuidó la realización de las reformas necesarias en la catedral de Toledo. Así, en julio de 1580, el cabildo solicitó al prelado, a través de Alonso de Mendoza y del doctor Obregón, que tratase de poner algún remedio al calor que hacía en el claustro (215). Los canónigos reiteraron su petición en el verano siguiente. La solución adoptada fue tornar a repoblar el mismo de árboles, que se habían talado porque suponían un peligro para el edificio (216). No obstante, el claustro se había convertido en un refugio para los mendigos, por lo que se recomendaba que de nuevo se convirtiese en un jardín. El 10 de julio de 1581, el maestro de obras, Nicolas de Vergara, presentó al arzobispo los planos y el presupuesto. Quiroga aprobó el proyecto, iniciándose las obras el mismo día (217). También partió del consistorio la petición realizada al prelado, en agosto de 1582, para que se colocasen unas verjas de hierro en la lonja de la Puerta del Perdón. Se buscaba evitar que, durante la noche, entrasen personas para cometer actos ilícitos a su abrigo (218). El arzobispo también procuró el embellecimiento de la catedral, encargando diversos trabajos a pintores como Luis de Velasco o Blas de Prado (219). Estos mismos artistas fueron los que participaron en un

(214).- ACT, Actas Capitulares. Tomo 17, fol. 201r.

(215).- Ibid., tomo 16, fols. 374r, 376r.

(216).- En este sentido, la situación era más complicada por la persistente sequía (Ibid., tomo 17, fol. 40r).

(217).- Ibid., fol. 44r. Por estas mismas fechas, el capítulo solicitó al prelado que culminase el solado de las sillas altas del coro (Ibid., fol. 39v). También, se halló en la catedral una inscripción por la que constaba que el origen de la misma se debía a la orden dada por el rey Flavio Recaredo en el año 587 (A.PONZ, Viaje por España, p. 36).

(218).- Ibid., fol. 134r.

(219).- Además de diversas obras en el claustro, Velasco pintó un lienzo que representa a la Anunciación, en el que aparece el escudo de armas de Quiroga. El mismo se encuentra reproducido en, V.LEBLIC GARCIA y M.ARELLANO GARCIA, Armorial de los arzobispos de Toledo. Toledo 1991, p. 40. En estos años, también se debió proceder a la ejecución de una medalla, donde aparece el busto del arzobispo, por parte del grabador Pedro Angel (A.HERRERA, "Don Gaspar

proyecto en el que Quiroga empuñó importantes esfuerzos: su suntuoso cigarral (220).

Una de las actividades que el prelado continuó desarrollando durante estos años fue su labor de patronazgo en relación con la ocupación por parte de sus clientes de los principales cargos de la iglesia toledana. La vacante producida por la muerte del canónigo Diego López de Quemada fue ocupada por el licenciado Diego de Virviesca, perteneciente al Consejo de la Dignidad. Como en ocasiones precedentes, el arzobispo tomó parte en la votación a través de Juan de Obregón (221). En junio de 1581, el arzobispo proveyó, en la plaza vaca por el fallecimiento de Juan de Barrionuevo, a Antonio Morejón, perteneciente, igualmente, a su Consejo (222). Hemos de señalar, en este sentido, la resistencia que el cabildo realizó a la admisión del nombramiento por bulas apostólicas de Juan de Llano de Valdés como canónigo. Su nominación para ocupar la canonjía que abandonaba el licenciado Temiño, electo obispo de Avila, no fue bien acogida tanto por su pertenencia al Consejo de Inquisición, lo

de Quiroga" BRAH 46 (1905), pp, 353-356; A.M.ROTETA, "El retrato-grabado español en Pedro Angel" Goya 130 (1976), pp, 222-223). En torno a la labor de estos artistas, véase, A.LOPEZ-AMO MARIN, op. cit., pp, 122-126; A.CABRERA Y DELGADO, La catedral de Toledo. Barcelona 1993, pp, 18, 152.

(220).- A.MARTIN GAMERO, Los cigarrales de Toledo. Toledo 1857, pp, 109-110, 116; F.MARIAS, "El cigarral toledano del Cardenal Quiroga" Goya 154 (1980), pp, 216-222; VV.AA., El Toledo de Domenico Theotocopuly. El Greco. toledo 1982, p, 40.

(221).- El 14 de enero de 1581, el cabildo adoptó la resolución, aunque con la protesta de Antonio Manrique, de prorrogar el término del edicto para la votación por un plazo de treinta días (ACT, Actas Capitulares. Tomo 17, fols. 5v-6r). Los opositores a la canonjía doctoral eran: el licenciado Andrés de Córdoba, colegial de San Bartolomé y licenciado en Cánones, el sacerdote Andrés Martínez Manzano, canónigo doctoral de la iglesia de Sigüenza y doctor en Cánones por la Universidad de dicha población, el doctor Alonso de Anaya Pereira, colegial de Santa Cruz y doctor en Cánones por la Universidad de Valladolid, el licenciado Diego de Arellano y Zapata, canónigo doctoral de la iglesia de Coria, el licenciado Bonal, colegial de Santa Cruz, y el elegido, Diego de Virviesca, sacerdote y licenciado en Cánones por la Universidad de Salamanca (Ibid., fol. 11v; Ibid., tomo 16, fol. 418r). En torno a la elección, véase, Ibid., tomo 17, fol. 15r.

(222).- Ibid., fol. 40v. Por otra parte, como hemos señalado, la familia Morejón se encontraba emparentada con los Quiroga. Al año siguiente, fue nombrado maestrescuela y vicario arzobispal en la villa de Alcalá de Henares (AHN, Inq., libro 358, fol. 89v). En febrero de 1583, el prelado concedió licencia a la abadesa y monjas del convento de San Benito de Talavera para que recibiesen en dicho monasterio a doña María Morejón, hija de Francisco Morejón (Ibid., fol. 134v).

que le eximía de la residencia, como por su vinculación a Mateo Vázquez. Si bien se intentó impedir su admisión a través de un análisis minucioso de sus pruebas de limpieza de sangre, finalmente, tomó posesión de la misma en enero de 1582 (223). Por otra parte, su ostentación del cargo fue muy breve, puesto que, el 2 de junio, Quiroga nombraba canónigo a Juan de Aramayona, inquisidor del tribunal de Navarra, en sustitución del fallecido Juan de Llano de Valdés (224). Igualmente, la muerte del doctor Hondegardo, en los últimos días de dicho año, provocó que los tres opositores que se presentaron para cubrir la canonjía doctoral vaca obtuviesen diversos oficios en la iglesia toledana. Así, mientras que la misma fue proveída en el doctor Salvador Navarro (225), Alonso de Anaya Pereira ocupó el canonicato vacante por el óbito de Fernando de Ribadeneyra (226), y el licenciado Pedro de Tapia fue nombrado arcipreste de Santa Olalla (227). En marzo de 1584, era Andrés Fernández, vicario general del arzobispado de Toledo, quien era nombrado canónigo por el prelado en lugar del fallecido Juan de Aramoyana (228). Así mismo, el arzobispo no descuidó el favorecimiento que procuraba a sus propios familiares.

(223).- ACT, actas Capitulares. Tomo 17, fols. 69v, 70v-71r, 72r-73v, 76r, 88r; AHN, Inq., libro 580, fol. 74r. Por otra parte, Antonio Matos de Noroña también había pretendido obtener dicha canonjía (IVDJ, envío 62 (caja 84), n° 869).

(224).- ACT, Actas Capitulares. Tomo 17, fol. 120r.

(225).- Ibid., fol. 165v. Sacerdote y catedrático de Vísperas en la Universidad de Salamanca, donde se graduó doctor en Derecho Canónico en 1569 (Ibid., fols. 176v, 179v-180r).

(226).- Rector del Colegio de Santa Cruz de Valladolid, era doctor en Cánones por dicha Universidad desde 1578. Contaba con una dispensación "Super defectus natalium" (Ibid., fols. 176v-177r, 180v). Sobre la inclinación de Quiroga a favorecer a dichos colegiales, AHN, Inq., leg. 3314, n° 33.

(227).- Colegial de San Bartolomé en Salamanca, se graduó en Leyes por dicha Universidad en 1580 (ACT, Actas Capitulares. Tomo 17, fols. 177r, 181r).

(228).- Ibid., tomo 18, fol. 20r, 21r. Pocos meses después, el arzobispo refería que había sido informado de que, a causa de sus muchas ocupaciones, descargaba los negocios de la audiencia arzobispal en el licenciado Lazcano, que estaba enfermo y sordo, lo que dificultaba notablemente el desarrollo de los negocios. Quiroga indicaba que, si creía necesario tener un teniente, señalase una persona que fuese apropiada (AHN, Inq., libro 361, fol. 251v). Respecto a sus cometidos, en agosto de 1582, el prelado le había dado poder y facultad para que asistiese en su nombre como ordinario al tribunal inquisitorial de Toledo para la vista y determinación de las causas (Ibid., libro 358, fol. 116r).

El 23 de junio de dicho año, proveyó a su sobrino. Pedro de Quiroga, tesorero y canónigo, como obrero de la iglesia toledana (229). Sin embargo, el mismo falleció unos meses después, votando la mayor parte del cabildo acompañar su cuerpo hasta el monasterio de San Pedro Martir, donde fue enterrado (230). Quiroga designó para ocupar su canonjía a Martín de Alderete, vinculado familiarmente al prelado (231), así como Francisco de Monsalve, deán de la iglesia de León, que fue nombrado canónigo en mayo de 1585 (232). Por último, el arzobispo nominó a Antonio Venegas Figueroa en la plaza vacante por la muerte del licenciado Ibarra (233).

Igualmente, el 7 de noviembre de 1584 se produjo el fallecimiento del deán, Diego del Castillo, que fue enterrado en su fundación de Santo Domingo el Antiguo (234). Para cubrir este cargo, el cabildo nombró de forma interina, por un plazo de dos meses, a Juan de Mendoza, canónigo y arcediano de Talavera (235). El 8 de enero del año siguiente, Quiroga conformaba su designación como nuevo deán de la iglesia de Toledo. En este sentido, hemos de señalar, que era hermano del duque del Infantado (236).

(229).- ACT, Actas Capitulares. Tomo 18, fols. 47v, 50r. Pedro de Quiroga tomó posesión de su nuevo oficio a pesar de la contradicción presentada por el licenciado Virviesca, puesto que este nombramiento correspondía realizarlo al cabildo.

(230).- Sobre la larga discusión que esta cuestión provocó en el consistorio, véase, Ibid., fols. 60v-63v. Provisionalmente, el oficio de tesorero pasó a ser desempeñado por Juan Manrique (Ibid., fol. 63v). En enero de 1585, el arzobispo nominó en este cargo a Francisco García Valloboso (Ibid., fols. 109r-v, 110v-111v). Así mismo, el 13 de febrero nominó como obrero al maestro Sebastián Pérez (Ibid., fol. 115v) Un informe remitido por éste a Quiroga sobre la marcha de las obras el 9 de agosto en, AHN, Inq., libro 361, fols. 389r-391v.

(231).- ACT, Actas Capitulares. Tomo 18, fol. 106r.

(232).- Ibid., fol. 143r-v.

(233).- Ibid., fols. 182v-183r.

(234).- Ibid., fol. 88v; V.GARCIA REY, *El Deán don diego de Castilla...*, pp. 30-31.

(235).- ACT, Actas Capitulares. Tomo 18, fol 89r.

(236).- Ibid., fols. 105v, 130r-131v; BSCV, Ms. n.º 16, fol. 155r; MHSI, *Ribadeneyra*, II, pp. 91-92. Así mismo, obtuvo licencia papal para conservar ambas dignidades (AHN, Inq., leg. 3314, n.º 31; Ibid., leg. 3284, n.º 30). Por otra parte, también se continuaban las gestiones para finalizar con

Si bien, como en los años precedentes, las relaciones entre el arzobispo y el cabildo catedralicio fueron excelentes, el único problema surgido entre ambos estuvo referido a la provisión de una capellanía de San Pedro. En diciembre de 1584, el licenciado Juan Bautista acudió al cabildo con su pretensión, avalada por el prelado, de ocupar la capellanía vaca por la muerte de Alonso de Torres. El consistorio se negó acceder a este propósito a causa de que la misma llevaba anexa el curato primero, sobre el que el capítulo tenía derecho de presentación (237). Ante la actividad que comenzó a desarrollar el Consejo de la dignidad arzobispal, el cabildo encomendó, primeramente, a Pedro de Ayala que acudiese a solicitar a Quiroga que sobreseyese en la provisión hasta que el cabildo informase de su justicia (238), aunque, posteriormente, el encargado de tratar este asunto con el prelado fue el doctor Navarro (239). No obstante, no logró convencer al arzobispo de la corrección de las reclamaciones realizadas por el consistorio. Quiroga sugirió, en marzo de 1585, que, para evitar el inminente pleito, se podía enviar una relación de este patronazgo al tribunal de la Rota para que allí se determinase la causa, solución con la que mostró su conformidad el cabildo (240). Por otra parte, intentó que se alcanzase una concordia, proponiendo que fuese el prelado quien proveyese uno de los dos curatos existentes en dicha capilla, sin que mediase la presentación del consistorio, que podría ejercer este derecho en el que tenía anexa la capellanía mayor de San Pedro, pidiendo para este acuerdo confirmación apostólica. Así pues, el cabildo consideró conveniente acceder a

el pleito sobre el Adelantamiento de Cazorla, proveído en Rodrigo de Mendoza, hermano, igualmente, de dicho duque (ACT, Actas Capitulares. Tomo 17, fol. 33r). Sobre la estrecha relación que éste mantuvo con Quiroga, así como su intento de acercamiento a Mateo Vázquez para que favoreciese sus intereses, véase, IVDJ, envío 96 (caja 138), n° 458-459; *Ibid.*, envío 21 (caja 31), n° 273; AHN, Inq., leg. 3284, n° 9, 14.

(237).- ACT, Actas Capitulares. Tomo 18, fol. 103r. Ante la insistencia del pretendiente, el cabildo mandó que se sacase traslado de todas las escrituras concernientes a este tema y de la constitución "De officio capellani maioris" para que pudiesen mostrarse al prelado (*ibid.*, fol. 107r).

(238).- El memorial correspondiente fue elaborado por el maestrescuela y el doctor Navarro (*Ibid.*, fols. 111v-112r).

(239).- *Ibid.*, fols. 115v-116r.

(240).- *Ibid.*, fols. 123v-124r.

este medio, puesto que, aunque no creían que el arzobispo tuviese derecho fundamentado para efectuar esta intervención (241), también sus alegaciones habían sido consideradas dudosas. Así, además de retener la presentación de la capellanía mayor, sólo admitían que la provisión del curato vaco se decidiese a través de un sorteo entre las partes (242). El arzobispo aceptó esta opción, realizándose el mismo en mayo de 1585. El cabildo fue favorecido por la suerte, pasando a ponerse por escrito el acuerdo alcanzado sobre la presentación de los curatos de la capilla de San Pedro (243).

No obstante, la labor de patronazgo realizada por Quiroga no se limitaba al cabildo catedralicio o a los servidores arzobispales, sino que, por una antigua costumbre, el arzobispo de Toledo proveía los oficiales de la villa de Alcalá de Henares (244). Así mismo, también favoreció con diferentes prebendas de la iglesia alcalaína a algunos de sus protegidos como, en julio de 1581, a Francisco González, que obtuvo un beneficio de la iglesia de Santa María, a Pedro Gavilán, doctor en Teología y presbítero de la diócesis de Burgos, que fue nominado canónigo, en septiembre de 1582, al igual que al corregidor de la villa, el doctor Cámara, a propuesta de la Universidad, promoción que contó con una fuerte oposición por parte de Mateo Vázquez (245). Este mismo año, el doctor Juan Bautista Neroni, vicario de Madrid, fue proveído por el prelado en

(241).- Ibid., fol. 140r.

(242).- Ibid., fol. 141v.

(243).- Ibid., fols. 144r-v, 147v-151r. La provisión del curato vacante recayó en Juan López (Ibid., fols. 152v, 156r-157r). Posteriormente, se solicitó a Roma la confirmación de la concordia (Ibid., fols. 192v, 222v). Por otra parte, el método del sorteo también se aplicó en el aumento de las capellanías de Pedro González de Mendoza realizado por Quiroga (Ibid., fols. 158r-159v).

(244).- En este sentido, véase, el apéndice V, en que aparecen las provisiones realizadas en diversos años. Igualmente, AHN, Inq., libro 358, fol. 129v; Ibid., libro 361, fols. 408v, 489v; Ibid., leg. 3314, n° 84.

(245).- Sobre estos nombramientos, véase, Ibid., libro 358, fols. 1v, 40r-41v; AZ, carp. 136, n° 207. La oposición del secretario real a la designación del corregidor contrasta con el favorecimiento que procuró a otro canónigo alcalaíno, Juan Alonso, que, en 1581, fue promovido al obispado de Guadix (Ibid., carp. 138, n° 24-27, 31; IVDJ, envío 91, n° 336).

una canonjía de dicha iglesia (246). En 1584, Quiroga nombró en la abadía de Alcalá a don Andrés Pacheco, vinculado al servicio del archiduque Alberto (247).

a) La celebración del sínodo diocesano

El 8 de abril de 1580, el cabildo catedralicio mandaba convocar una reunión para tratar sobre el sínodo que el arzobispo tenía pensado celebrar. Al día siguiente, nombraron la comisión que debía encargarse de realizar los preparativos necesarios para su realización junto al prelado. Estuvo formada por el doctor Delgado y por Miguel Díaz (248), mientras que fueron elegidos como comisarios y representantes del consistorio en su desarrollo Rodrigo Dávalos, Jerónimo Mexía de Gomara, Alonso de Hondegardo, García de Loaysa, Juan Manrique de Lara y el doctor Delgado, electo obispo de Astorga (249).

El propio arzobispo establecía que la finalidad del mismo era ocuparse de las cuestiones referidas al culto divino y a la reformation de las costumbres. Si bien expresaba su pesar por no haber podido cumplir con los preceptos

(246).- Ibid., nº 463. Sobre un memorial que se presentó al vicario, en marzo de 1582, contra Jerónimo Manrique, al que se acusaba de un comportamiento indigno y escandaloso, así como la defensa que Chaves y Mateo Vázquez hicieron del mismo, solitando el castigo del propagador de estas acusaciones, véase, Ibid., envío 8 (III), caja 13, s.f.; AHN, Inq., leg. 3314, nº 17.

(247).- IVDJ, envío 96 (caja 139), nº 537.

(248).- Unos días después, el arcediano de Guadalajara, García de Loaysa, hacía llegar al consistorio la propuesta del arzobispo para que los canónigos que debían predicar en Cuaresma, continuaran con esta función durante la celebración del sínodo. Esta labor se encomendó al propio Loaysa, a Alonso de Mendoza y al doctor Gabriel de Cárdenas (ACT, Actas Capitulares, tomo 16, fols. 360v, 361r, 363v, 366v).

(249).- Los comisarios sinodales recibieron el encargo, junto al deán Diego de Castilla, de buscar memoriales con peticiones presentadas en sínodos precedentes, para que pudiesen ser examinadas por el cabildo. De igual modo, se comunicó al repartidor que tuviese a los dichos comisarios por presentes durante el tiempo que durase la celebración (Ibid., fol. 364r-v). Por otra parte, el año anterior, Quiroga había ordenado que se nombrasen jueces sinodales, siendo designados por el cabildo Francisco Dávila, el doctor Delgado, el licenciado López de Quemada y el doctor Hondegardo de la Iglesia de Toledo, el doctor Casas, maestrescuela y el doctor Francisco Sánchez, tesorero en Alcalá de Henares, así como el tesorero de la iglesia de Talavera (Ibid., fol. 287r).

tridentinos, que ordenaban la celebración de Concilio Provincial cada trienio y de sínodo diocesano cada año, condicionado por las múltiples ocupaciones que había tenido que atender desde que pasó a ostentar la mitra toledana, su intención era remediar esta situación, previniendo al cabildo, arciprestes y otras personas doctas para que enviasen memoriales en los que se reflejasen los asuntos que era necesario enmendar, fijando como fecha de celebración el 15 de mayo. Por otra parte, aclaraba que su intención no era promulgar constituciones nuevas, sino renovar aquellas que habían establecido sus predecesores y poner en ejecución las que, a pesar de su conveniencia, no se habían aplicado. Esta fue la causa principal de la agilidad y brevedad con que se desarrollaron las sesiones, puesto que, realmente, las constituciones publicadas el 17 de mayo eran un compendio de las promulgadas por los arzobispos Carrillo, Ximénez de Cisneros y, principalmente, por el cardenal Tavera, así como de las disposiciones tomadas por el gobernador del arzobispado Gómez Tello Girón. Quiroga, como era su pretensión, se limitó a realizar algunas puntualizaciones, y conformaciones con las directrices recogidas en los decretos tridentinos (250).

Después de realizar, a modo de introducción, una exposición de las principales oraciones y mandamientos establecidos por la iglesia, así como una clarificación de la significación de distintos actos de culto (251), se pasaba a reglamentar a través de las constituciones la forma correcta de administrar los sacramentos. Así, se establecía el plazo en que debían ser bautizados los niños y la obligatoriedad de que los clérigos realizasen un registro de los mismos. Respecto al bautismo de los adultos, se advertía que no se debía admitir a ninguna persona que no estuviese previamente instruida en la fe católica y solicitase, por su propia voluntad, ser sacramentado, haciendo constar que esta

(250).- "Constituciones sinodales hechas por el Illmo. y Rmo. Don Gaspar de Quiroga. Impresas en casa de Francisco Sánchez. Año de MDLXXXIII. A costa de Blas de Robles, mercader de libros en Corte" (BNM, Ms. 28698, fol. 1r-v). C. SANCHEZ ALISEDA señala que de las ciento ventiocho constituciones promulgadas por Quiroga, ochenta y una procedían de las estipuladas por el cardenal Tavera ("Precedentes toledanos de la reforma tridentina", pp. 481-482).

(251).- BNM, Ms. 28698, fols. 2v-6r.

medida se debía guardar como prevención de los inconvenientes que surgían cuando se bautizaba a individuos que no entendían la lengua o las implicaciones que conllevaba esta actuación, señalando, igualmente, que todos los bautismos debían realizarse en la iglesia, salvo en las excepciones recogidas por el Derecho (252). Así mismo, los clérigos debían instar a los parroquianos para que hiciesen confirmar a sus hijos, estando igualmente obligados a registrar por escrito a aquellos que recibían la confirmación (253). En torno a la Eucaristía, se insistía en que los religiosos debían instruir a los feligreses en el respeto y acatamiento a este sacramento, señalando que las procesiones y fiestas que se hacían del Corpus Christi en las parroquias de Toledo se tenían que realizar en el interior de las iglesias y dentro del octavario de la fiesta, o bien en el lugar y día fijado por la costumbre (254). En cuanto al sacramento de la Penitencia, se reiteraba la obligatoriedad de confesar y comulgar en el tiempo establecido por la Iglesia, teniendo los curas el mandato de realizar matrículas donde quedasen consignados aquellos que incumpliesen esta norma, que incurrirían en pena de excomunión. Se estipulaba que ningún religioso que no tuviese beneficio curato podía confesar sin que mediase una licencia expresa del ordinario otorgada con anterioridad, estimándose conveniente que los sacerdotes realizasen confesión con otro clérigo, que tuviese permiso para ello, antes de celebrar la misa (255). Se señalaba que ningún confesor podía aplicarse a sí mismo las penas o restituciones que imponía al penitente para evitar los fraudes. Los confesionarios debían situarse en lugares donde se hallasen bajo la visión general los copartícipes de la confesión, poniendo especial énfasis en la

(252).- Estas disposiciones se completaban con otras referidas a la localización de la pila bautismal en las iglesias, que debía existir en aquellos lugares con más de quince vecinos, así como la conveniencia de que se cerrasen con cobertores y bajo llave para que no se utilizase el agua en actos prohibidos y supersticiosos (Constituciones nº 1-7. Ibid., fols. 6r-8v).

(253).- Ibid., fol. 8v (Constitución nº 8).

(254).- Ibid., fols. 8v-9v (Constituciones nº 9-10). Así mismo, la constitución 85 establecía que las hostias las hiciese el cura, su teniente o el sacristán, quedando prohibido que se elaborasen fuera de las iglesias o que se vendiesen (Ibid., fol. 53v).

(255).- En noviembre de 1580, el cabildo representó la necesidad de que se nombrasen confesores, así como de comunicar este asunto a Quiroga cuando retornase de las exequias de la reina doña Ana (ACT, Actas Capitulares, tomo 16, fol. 404v).

manera correcta de proceder respecto a las mujeres. Además, se prohibía a los médicos y cirujanos que acudiesen a visitar a un enfermo si, después de que el galeno le amonestase para que confesase, no lo hiciese en el plazo de tres días (256). Así mismo, en todas las iglesias se hacía exponer en lugar público y de fácil acceso una lista con todos aquellos parroquianos que estuviesen denunciados por excomunión y la causa de la misma, declarándose sus nombres en la misa mayor que se celebrase todos los domingos y fiestas, para que fuesen conocidos por el resto de la población que debía evitar su compañía. Ningún clérigo ni lego se estimaba conveniente que excediese el período de un año de excomunión, por lo que se fijaban diversas penas para aquellos que sobrepasasen este tiempo sin procurar la absolución. Se recomendaba, igualmente, que los jueces no aplicasen esta censura a cuestiones livianas, puesto que se trataba de la censura eclesiástica más grave y con la profusión en su aplicación terminaría perdiendo valor. Para algunas faltas especialmente graves, el pontífice tenía reservada para sí la exculpación a través de la bula "In Coena Domini". Por tanto, los confesores debían contar con un traslado de la misma, así como conocer los casos que estaban adjudicados al entendimiento del ordinario, para que no pudiesen absolver en ellos sin su licencia y comisión (257). En relación al sacramento del orden sacerdotal, se fijaba que se siguiesen los mandatos establecidos en el Concilio tridentino con aquellos que habían de ser examinados, considerándose inhábiles para acceder al Orden aquellos que tratasen de mediatizar a los examinadores (258). Por último, respecto al matrimonio, se estipulaba que los contrayentes debían adecuarse a la normativa tridentina tanto en lo referido a los conocimientos de la doctrina católica que habían de tener, cómo a la prohibición de celebrar desposorios clandestinos, fijándose un plazo para celebrar las velaciones. Igualmente, se insistía en que se

(256).- De igual modo, se establecía que en tiempo de Cuaresma o pestilencia, los beneficiados de las poblaciones con más de cien vecinos y que cobraban parte de las primicias, debían ayudar al cura en labores de confesión, permitiéndose además tomar otro clérigo para realizar esta función (BNM, ms. 28698, fols. 9v-13r. Constituciones nº 11-17).

(257).- Ibid., fols. 13r-14v. Igualmente, aparece transcrita dicha bula, mandada publicar por Gregorio XIII en 1580 (Ibid., fols. 15r-19v), así como las cuestiones en que la absolución competía al ordinario (Ibid., fols. 19v-20v).

(258).- Ibid., fols. 22r-v (Constituciones nº 26-27).

debía guardar lo que el Derecho dictaba respecto a los grados de consanguinidad y a la concesión por parte de los jueces de cartas de quitación, completándose esta normativa con un conjunto de medidas encaminadas a impedir la bigamia (259). Por otra parte, se prohibía que los clérigos cobrasen por la administración de los sacramentos, así como por la realización de otros oficios, especificándose una tabla de derechos que era lícito percibir en cada uno de los casos (260).

Un segundo bloque temático de las constituciones sinodales se ocupó de reglamentar la vida y honestidad que debían observar los clérigos. Se determinaba que todos ellos habían de llevar tonsura y un hábito clerical acorde a su estado en cuanto a la calidad y colores de las telas. Quedaba prohibido que participasen en juegos de dados, naipes o similares, en bailes y que acudiesen a espectáculos taurinos. Se recomendaba que no albergasen a ninguna mujer que pudiese levantar sospecha de relaciones de concubinato, para evitar que se instruyesen procesamientos por esta causa, señalándose que se procedería contra los clérigos amancebados según establecían las disposiciones tridentinas (261). En éstas también se cimentaba la obligatoriedad fijada de que los curas, beneficiados y dignidades residiesen en sus parroquias e iglesias (262). Respecto a los cometidos asignados a los curas se encontraba instruir a los fieles, explicando en la declaración del evangelio los artículos de la fe y mandamientos. Debían poner especial cuidado, ayudados por los sacristanes y los maestros, en que los niños aprendiesen la doctrina católica, así como en saber cuáles de sus parroquianos cometían pecados públicos e informar de éstos a los vicarios. Para asegurar la atención a los feligreses, se estipulaba que en los beneficios anexos a las dignidades, cabildos y monasterios se nombrasen vicarios

(259).- Ibid., fols. 22v-27r (Constituciones nº 28-35).

(260).- Ibid., fols. 62v-64v.

(261).- Ibid., fols. 27r-30v (Constituciones nº 36-38). Quiroga se preocupó de que los religiosos llevasen una vida regida por la honestidad, aplicando castigos ejemplares si incumplían estos preceptos (AHN, Inq., libro 361, fol. 201r).

(262).- BNM, Ms. 28698, fols. 31r-32r (Constituciones nº 39-40).

perpetuos, mientras que, en los lugares con iglesias anexas a otras, distantes más de cuatro leguas y con una población superior a treinta vecinos se ordenaba que existiesen capellanes suficientes para su servicio y administración de sacramentos. Igualmente, tenían que visitar en su feligresía a los encarcelados por haber cometido un delito (263). En relación a los beneficiados y capellanes se establecía que debían ser examinados por los vicarios o visitadores para ser admitidos. Los capellanes tenían que decir misa en las capillas que para ello fuesen instituidas, ayudando en los oficios divinos en las fiestas. Las capellanías del coro de la Iglesia de Toledo habían de proveerse en personas con conocimientos de gramática y canto, que estuviesen ordenados en misa o accediesen a este orden en el espacio de un año. De igual manera, los beneficios de las iglesias mozárabes se debían otorgar solamente a aquellos que estuviesen instruidos en el oficio mozárabe. Así mismo, quien ocupase un beneficio que requiriera residencia no era conveniente que sirviese en otros, estando prohibido que los arrendasen a su voluntad para cubrir su servicio o llevasen distribución de las oblaiones (264). Respecto a los sacristanes, se les advertía que debían portar un hábito que se ajustase a su estado. También se estipulaba que entre sus deberes estaba, entre otros, tanto enseñar la doctrina cristiana a los niños, como inquirir a los capellanes que dejaran de celebrar misa informando de ello a los visitadores, para que castigaran a los negligentes (265). Igualmente, se reglamentaba que no se permitiese a ningún clérigo o religioso peregrino, ajeno a la diócesis toledana, decir misa sin licencia del arzobispo o de los vicarios generales (266). Para que el prelado pudiese estar más informado del estado de los fieles, así como de los beneficios y cargos de la iglesia, se ordenaba que los arciprestes y vicarios portasen al sínodo una relación completa de las iglesias, beneficios y capellanías de sus poseedores, reflejando

(263).- Ibid., fols. 32r-35v (Constituciones nº 41-47).

(264).- Ibid., fols. 35v-38r (Constituciones nº 48-54).

(265).- Ibid., fols. 38v-39r (Constituciones nº 55-56). En este sentido, en octubre de 1584 el canónigo Virviesca suplicó al arzobispo en nombre del cabildo que cuando vacasen capellanías del coro se proveyesen en sacerdotes, puesto que si no se hacía así quedaban muchas misas sin decir (ACT, Actas Capitulares, tomo 18, fol. 83r).

(266).- BNM, Ms. 28698, fols. 39v-40r (Constitución nº 57).

los que guardaban la residencia, y del resto de clérigos de sus arciprestazgos, vicarías y beneficios anexos (267). Igualmente, quedaba establecido, en relación a las actividades de los clérigos, que ninguno dijese su primera misa sin estar examinado y sin contar con licencia para ello, como establecía el Concilio tridentino, donde también se habían fijado los días en que los sacerdotes debían celebrar estas ceremonias, en las que el oficiante había de seguir el misal romano y llevar sobrepelliz. Así mismo, era necesario el permiso del prelado tanto para que los religiosos que hubiesen mudado su hábito por otro pudiesen oficiar la misa, como para que ésta se oficiase en casas privadas, estando esta posibilidad únicamente referida a unos cuantos casos concretos. Se adoptaban, además, una serie de disposiciones encaminadas a que nada perturbase o interrumpiese el desarrollo de la misa mayor, introduciéndose el mandato de que las mujeres de las casas públicas acudiesen a confesar y a escuchar misa, así como, ocasionalmente, el sermón (268). También se fijaba la obligación de que los clérigos ordenados *in sacris* o beneficiados rezasen cada día y realizasen los oficios divinos conforme al ordenamiento romano, así como que asistiesen al coro con sobrepellices y guardasen silencio durante el desarrollo de los mismos. Por otra parte, nadie que presenciase en la iglesia estos actos podría permanecer con el sombrero puesto, aunque, en este sentido, se realizaban algunas precisiones. De igual manera, se estipulaba la obligatoriedad de que predicasen todos los domingos y fiestas en las iglesias catedrales y colegiales, mediando la licencia previa que el prelado expedía a los predicadores, sin la que se les prohibía hacerlo (269). Respecto a los predicadores de la Cruzada, se les exigía mostrar la instrucción que portaban para que no excedieran lo establecido en ella ni fatigasen a los pobres. Por otra parte, quedaba reglamentado dónde y cuándo se debían decir las primeras y segundas vísperas (270), todo lo

(267).- Ibid., fol. 40r-v (Constitución n° 58).

(268).- Ibid., fols. 50r-53v (Constituciones 79-86).

(269).- En enero de 1582, Alonso de Mendoza, canónigo y abad de San Vicente fue privado de la licencia para predicar por espacio de diez años por los excesos y libertades cometidos en el sermón de la Epifanía (ACT, Actas Capitulares. Tomo 17, fols. 86r-v). Posteriormente, se le alzó la pena por el ruego que Quiroga presentó al cabildo (Ibid., fols. 86v-87r).

(270).- BNM, Ms. 28698, fols. 53v-57v (Constituciones 87-95).

concerniente a enterramientos y misas de difunto (271) y el respeto que se debía guardar de las fiestas y días de ayuno establecidos por la iglesia (272).

En tercer lugar, las constituciones pasaban a definir cómo se habían de regir correctamente las iglesias parroquiales, ermitas y monasterios, junto a otras cuestiones vinculadas a los mismos. Se estipulaba, según determinaba el Concilio de Trento, que cada feligrés debía asistir en su parroquia a la misa dominical. Así mismo, se fijaba la existencia de un libro donde constasen las escrituras y títulos de los bienes de las fábricas, beneficios y capellanías. También debía quedar constancia escrita de las memorias y sufragios de los difuntos para mejor conservación de los bienes de la iglesia, asentando, igualmente, todas las posesiones, heredades y tributos. En caso de que fuese necesario hacer uso de alguno de estos documentos, se tenía que dejar una copia en el archivo (273). Se prohibía que los bienes de las iglesias se enajenasen, encargándose especialmente a los visitadores la vigilancia y el castigo de los transgresores. Tampoco se permitía la división de las heredades atribuidas a iglesias, cabildos y capellanías. Del mismo modo, no se podían prestar los ornamentos de unas iglesias a otras, con la finalidad de que no sufriesen daño o deterioro. Las mayordomías debían recaer en clérigos, que podrían disponer para el gasto de las iglesias hasta una cantidad de doce mil maravedies. Respecto a la pintura de imágenes para decorar éstas, no se ejecutarían sin que fuesen examinadas con anterioridad por los vicarios o visitadores, estableciéndose que, tanto las imágenes que se colocasen en el altar como las que saliesen en

(271).- Ibid., fols. 61r-64v (Constituciones 101-105).

(272).- Quedaban especificados cuáles eran los días de fiesta general, los que sólo se habían de guardar en la ciudad de Toledo, así como los días de ayuno y estos referidos a las fiestas móviles (Ibid., fols. 58v-59r; Constituciones 97-100).

(273).- En abril de 1581, el cabildo solicitó a Quiroga que les permitiese usar el habitáculo que estaba debajo de su lugar de reunión para poner los libros y escrituras de la mesa capitular y otros papeles importantes que estaban fuera de la iglesia (ACT, Actas Capitulares. Tomo 17, fol. 24v, 186r). Entre las escrituras que se reclamaron se encontraban las de fundación del hospital de Puente del Arzobispo (Ibid., fols. 166v, 172r). En agosto de 1584, las llaves del archivo se entregaron al maestro Pérez y al doctor Anaya para que comenzasen a poner orden en el mismo (Ibid., tomo 18, fol. 64r, 139v).

procesión fuesen ataviadas con honestidad. Se vetaba la posibilidad de que permaneciesen en casas privadas, así como que los legos tuviesen en su morada aras consagradas ni ornamentos bendecidos para evitar un posible comercio. De igual manera, se denegaba la celebración en iglesias de concejos o ayuntamientos, sermones nocturnos y representaciones o remembranzas, reglamentando que los actos por efectuar el día de Corpus Christi fuesen primeramente sometidos al criterio de los jueces (274). También se desaprobaba la construcción en las iglesias de estrados de madera y de sepulturas voladas del suelo que, además, salvo excepciones, debían situarse en las capillas, quedando vedadas las gradas del altar. Por último, se establecían una serie de normas para reforzar la inmunidad de las iglesias (275). En lo tocante a las ermitas, se censuraba la realización de vigiliat, que en ocasiones daban lugar a graves alteraciones, por lo que se fijaba que se abandonasen cuando anochebiese. Se desautorizaba que ninguna persona pudiese morar en las mismas sin el examen previo de su vida y la licencia expresa del prelado, que era igualmente necesaria para realizar nuevas edificaciones. Respecto a aquellas que se encontraban despobladas, cuya fábrica tenían encomendada los racioneros de Toledo, se ordenaba que permaneciesen reparadas, cerradas y equipadas de los ornamentos necesarios para el culto (276). Así mismo, se adoptaron una serie de medidas para

(274).- En torno a la procesión y actos del Corpus Christi del año 1580, Quiroga expresó que le parecía indecente que las mujeres representasen autos dentro de las iglesias. El cabildo catedralicio apoyó este criterio, que hizo extensivo también al exterior de las mismas. El 1 de junio designaron a dos canónigos para que junto al prelado proveyesen lo que les pareciese más conveniente, sin necesidad de que se diese aviso al consistorio del acuerdo alcanzado entre ellos (Ibid., Tomo 16, fols. 369v-370r). Menor conformidad mostró el capítulo con la propuesta arzobispal, en las navidades de 1581, de quitar la sibila y los pastorcillos de las representaciones de la noche de Navidad por el ruido que se generaba en la iglesia, que impedía la celebración de los maitines con el silencio debido. El cabildo representó al arzobispo que el pueblo los acogía con regocijo, plegándose Quiroga a su opinión, aunque encargó que los oficiales se ocupasen de que se mantuviese la quietud (Ibid., tomo 17, fol. 83v).

(275).- BNM, Ms. 28698, fols. 41r-47v (Constituciones n° 59-73).

(276).- Ibid., fols. 48r-49v (Constituciones n° 74-77). Así, en diciembre de 1582, antes de otorgar su licencia al ayuntamiento de Alcalá de Henares para reparar la ermita de San Roque, Quiroga pidió informes de la misma y de la forma de vivir de su morador (AHN, Inq., libro 358, fol. 126r).

imponer una mayor seguridad de la clausura en los monasterios de monjas (277). En cuanto a las cofradías, se establecía la prohibición de que se fundasen sin licencia del arzobispo, quedando relajados los juramentos prestados en cuanto a la observación de sus estatutos (278). Se fijaba también el orden que debían guardar en las procesiones para impedir que se produjesen perturbaciones en su desarrollo, que se debían celebrar con el respeto y devoción pertinentes, estableciéndose la pena en la que incurrían los curas y beneficiados de Toledo si no acudían a las procesiones generales (279).

El último conjunto temático de constituciones estaba referido a la reglamentación de otros servidores arzobispales. Así, respecto a los vicarios y jueces, quedaba establecido, en torno a estos últimos, una serie de medidas encaminadas a agilizar y hacer más eficaz su cometido. También se fijaba que tanto los jueces como sus inferiores, fiscales y notarios, debían ser visitados cada tres años (280). En cuanto a los visitantes, estaban obligados, cuando realizaban la visita, a divulgar las cartas generales que se solían hacer sobre los pecados públicos y delinquentes. Los resultados de la instrucción y los procesos derivados de la misma habían de quedar en poder del secretario del Consejo arzobispal. Quedaba prohibido que se sacase la sentencia de los transgresores fuera de los lugares donde habían cometido los delitos, así como que los visitantes fuesen huéspedes de clérigos. Tampoco se podía sacar dinero del arca de los testamentos para decir misas o sacrificios cambiando el lugar de

(277).- BNM, Ms. 28698, fols. 57v-58r (Constitución nº 96). Sobre los problemas que causaba la falta de rigurosidad en esta cuestión, véase, AHN, Inq., leg. 3314, nº 30, 37, 42; Ibid., libro 358, fol. 48r.

(278).- BNM, Ms. 28698, fol. 49v (Constitución nº 78). Por otra parte, en 1581, Quiroga aprobó las Ordenanzas y Constituciones de la cofradía de San Miguel y San Bartolomé (H. RODRIGUEZ DE GRACIA, Asistencia social en Toledo, siglos XVI-XVIII. Toledo 1980, pp. 228-229, 238).

(279).- BNM, Ms. 28698, fol. 57r-v (Constituciones nº 93-95). En octubre de 1581, se acordó aumentar la pena a los ministriles que no asistiesen a las fiestas de la iglesia (ACT, Actas Capitulares. Tomo 17, fol. 66r).

(280).- BNM, Ms. 28698, fols. 69v-70v (Constituciones nº 111-115). Igualmente, se especificaban los delitos a los que habían de prestar una especial atención (Ibid., fols. 66v-69r, constituciones nº 107-110).

celebración fijado por el testador (281). Igualmente, se declaraba que el oficio de fiscal lo tenía que ejercer un clérigo ordenado *in sacris*, que se comprometería bajo juramento a formular sus acusaciones sin interés ni malicia y a no incriminar a ningún sujeto sin pruebas concluyentes, ya que, en caso contrario, estaría obligado a pagar los gastos y daños producidos (282). Respecto a los notarios y receptores, se establecía que que se limitaran a realizar las informaciones para las que les era otorgada comisión, así como que se hiciesen acompañar de un clérigo honrado que que no tuviese grado familiar con las partes, apuntándose que los notarios habían de cobrar a los mismos derechos en las causas apostólicas y en las ordinarias (283). Finalmente, se trataba de reforzar el respeto debido a los alguaciles como ejecutores de la justicia (284).

Las decisiones tomadas por el sínodo diocesano, en consonancia con las intenciones que lo habían promovido, se complementaron con una serie de disposiciones que estaban directamente relacionadas con el proceso de confesionalización de la Monarquía. Así, se prohibió terminantemente la impresión de libros sin licencia, así como la venta de obras ya impresas sin permiso (285). No obstante, la mayor novedad introducida por Gaspar de Quiroga en el conjunto de las constituciones sinodales estuvo referida a la normativa adoptada sobre los moriscos, centrando su interés en el grupo que había llegado la década anterior procedente de Granada. Se apuntaba la necesidad de que fuesen instruidos en la doctrina católica, según se desprendía de los informes remitidos por diferentes curas de Toledo que se habían ocupado de esta cuestión. Los sacerdotes de todo el arzobispado quedaban obligados a realizar matrículas de los moriscos residentes en sus parroquias mayores de cinco

(281).- Ibid., fols. 71r- 72r (Constituciones nº 116-120).

(282).- Ibid., fols. 72v-73r (Constituciones nº 121-123).

(283).- En este sentido, aparecen reflejados los aranceles que se debían cobrar tanto en las causas civiles como en las criminales (Ibid., fols. 73r.-77r; Constituciones nº 124-126).

(284).- Ibid., fol. 77r (Constitución nº 127).

(285).- Ibid., fol. 77r-v (Constitución nº 128).

años y a comprobar si los niños habían sido bautizados. De esta manera, si un morisco decidía mudarse de parroquia, debía informar primero al cura sobre su nuevo destino, para que éste, a su vez, avisase de este cambio al párroco correspondiente. De este modo, quedaba conferido a un nuevo pastor, que estaba obligado a enseñar a los mayores de catorce años los preceptos católicos los domingos y fiestas por la tarde, a administrarles los sacramentos, salvo la Eucaristía, sin previa licencia del Consejo arzobispal o de los vicarios generales y a intentar que no utilizasen la lengua árabe. Si el cura no cumplía con estos mandatos incurriría en diversas penas, así como los moriscos faltasen a la misa mayor, siendo necesario que justificasen por una cédula haber asistido a la misma fuera de su parroquia. Unicamente se establecía una salvedad sobre aquellos que trabajaban como guardas de los cigarales, que podían permutar la misa mayor por la celebrada en otro momento contando con licencia del párroco (286).

Por último, los mandatos sinodales se culminaban con el nombramiento de las personas que debían velar por su cumplimiento: los examinadores, jueces delegados y testigos sinodales (287).

En este sentido, sin duda, la constitución que planteó mayores tribulaciones en cuanto a su aplicación fue la que establecía la obligatoriedad de la residencia para curas, beneficiados y dignidades, siendo una de las cuestiones principales que debía atender la instrucción de la visita que se comenzó a ejecutar cuando Quiroga llegó a su arzobispado (288). Para entonces, se había iniciado un pleito entre el canónigo Juan de Ibarra, oidor de la audiencia

(286).- También se realizaban algunas disposiciones sobre los gitanos, de los que se afirmaba que eran difíciles de controlar por su vida nómada, aunque se tenía la creencia de que no bautizaban a sus hijos. Se pedía a los jueces que extremasen su vigilancia sobre esta comunidad (Ibid., fols. 65r-66v. Constitución nº 106; AHN, Inq., libro 358, fol. 48r). La importancia de las disposiciones sobre los moriscos han sido resaltadas por J. LOPEZ DE AYALA Y ALVAREZ DE TOLEDO, op. cit., p. 45; J. ROMAN DE LA HIGUERA, op. cit, pp. 203-205.

(287).- Sobre los designados en estos oficios, nos remitimos al apéndice VI.

(288).- Juan de Obregón se encargó de comunicar al consistorio la decisión del prelado de ejecutar la misma (ACT, Actas Capitulares. Tomo 16, fol. 369r-v). Rodrigo Dávalos y Alonso Delgado fueron comisionados por el cabildo para que acordaran con Quiroga la forma y orden con que se habría de desarrollar la visita (Ibid., fol. 371r).

de Valladolid y el Consejo arzobispal, en torno a este tema, habiendo recibido orden el consistorio del prelado de retener sus frutos (289). El asunto se prolongó hasta el mes de octubre de 1580, basándose en las alegaciones de Ibarra en su condición de consultor del Santo Oficio para poder recibir sus rentas eximiéndose de la obligada residencia. Finalmente, el canónigo llegó a una concertación con el cabildo (290). Este control también se efectuó sobre los capellanes, teniendo como resultado la expulsión de Francisco de Espinosa de su capellanía de San Pedro, en la que llevaba tres meses sin residir (291).

Puesto que, como en el caso de Juan de Ibarra, los prebendados que no obedecían el mandato de residencia aducían su pertenencia al Santo oficio, el cabildo resolvió, en mayo de 1581, revisar lo capitulado con la Inquisición en torno a esta cuestión (292). El 7 de julio, comisionaron al maestrescuela, al doctor Hondegardo, al doctor Calderón y al licenciado Virviesca para ocuparse de examinar las provisiones y bulas apostólicas relacionadas con este asunto (293). Así mismo, en la celebración de cabildo espiritual que tuvo lugar el 1 de septiembre, contando con la asistencia del prelado, entre los temas

(289).- Ibid., fols. 364v-365r, 371r.

(290).- Ibid., fols. 398r-399v, 401v-402r. Sobre el pleito mantenido con Ibarra, el 8 de agosto, Quiroga explicaba a Mateo Vázquez: "muchos días ha que hubiera yo echado aparte este negocio, pero el Consejo Real se ha hecho dueño dél llevándole a su tribunal sin aprovechar las cédulas que hay sobre ello de Su Mgd. y breve Apco. que contradizen la pretensión del licdo. Ybarra" (IVDJ, envío 91, nº 300).

(291).- Además, el cabildo decidió suprimir una capellanía de don Pedro Tenorio vaca por la muerte de Antonio Gaytán de Escobedo (ACT, Actas Capitulares. Tomo 16, fols. 408v-409r, 410v, 413r-v). Por otra parte, estas medidas se completaban con otras tendentes a reforzar la disciplina. Así, en abril de 1580, el cabildo mandó despedir a dos clerizones, Poche y Jerónimo Alonso, por ser desasosegados. El 31 de marzo del año siguiente, el consistorio presentaba sus quejas a Quiroga sobre el comportamiento insolente del racionero Monterrojo (Ibid., tomo 17, fol. 20v).

(292).- ACT, Actas Capitulares. Tomo 17. Unos días después, los canónigos Pedro de Ayala, Tomás de Borja y el doctor Calderón rogaron a Quiroga que mandase guardar lo ordenado por el consistorio sobre los salmeadores en relación con su asistencia y servicio a la Iglesia (Ibid., fol. 33r).

(293).- Ibid., fols. 44v-45r. Solamente unos días antes, el cabildo había hecho presentar sus títulos a los beneficiados, reiterando que quien no residiese no sería asistido con los frutos correspondientes a su prebenda (Ibid., fols. 36v-37r).

que se plantearon tocantes al gobierno de la iglesia, el consistorio señaló la conveniencia de que se tratase con Quiroga sobre la canonjía suprimida en favor del Santo Oficio (294). Con la provisión del inquisidor del tribunal de Navarra Juan de Aramayona como canónigo, en junio de 1582, se solicitó al arzobispo que definiese si debía cumplir con la residencia (295). Unos meses después se le concedió ser tenido por presente desde que presentó su provisión (296). No obstante, mucho más fuerte fue la oposición a la pretensión de Bernardino de Mendoza, quien, en octubre de 1583, presentó un breve apostólico por el que se le otorgaban los frutos de sus canonjía durante dos años en ausencia. El cabildo decidió apelar en Roma la justicia de esta determinación, realizando una memoria donde constaban todas las ordenanzas que, desde el reinado de los Reyes Católicos, se habían dado en contra de lo contenido en esta concesión (297).

En el cabildo espiritual celebrado a comienzos de julio de 1584 contando con la presencia de Quiroga, se decidió nombrar a una persona para que acudiese a representar al rey las muchas faltas de residencia cometidas por los beneficiados de dicha iglesia por estar ocupados en oficios inquisitoriales o en el servicio del monarca o del arzobispo, lo que suponía un gran perjuicio para el servicio del altar y del coro. Igualmente, también se debía consultar con el monarca la manera de poder recuperar el canonicato suprimido por el Santo

(294).- Junto a este tema, Bernardino de Mendoza, Rodrigo Dávalos, García de Loaysa y Miguel Díaz, debían presentar a Quiroga cuestiones relativas al orden del coro y del cabildo, a las misas rezadas, a los niños expósitos y al pago de los cantores en relación a la residencia (Ibid., fol. 57r-v). Respecto a la primera cuestión, decidieron que se respetase el acto capitular ordenado por el prelado (Ibid., fols. 62-63r). No obstante, en abril de 1583, insistieron al prelado sobre la conveniencia de encontrar un medio para incorporar la canonjía suprimida, remitiendo un meorial al rey (Ibid., fols. 186r, 187v).

(295).- El licenciado Virviesca trató de impedir esta actuación, afirmando que debía percibir los frutos de ausencia (Ibid., fol. 143r). Esto se concedió sin ningún problema a Antonio de Zapata, inquisidor de Cuenca (Ibid., fol. 170r).

(296).- Ibid., fol. 173v.

(297).- Ibid., fols. 231r, 270v. En septiembre de 1585, Quiroga escribía a Bernardino de Mendoza refiriendo cómo era conocedor de que había tomado posesión de su canonicato, rogándole que cumpliera con la residencia y que abandonase el pleito que mantenía con el cabildo, intentando llegar a un entendimiento (AHN, Inq., libro 361, fol. 397r).

Oficio. Alonso de Mendoza fue el designado por el consistorio para acudir a tratar estos asuntos con Felipe II (298). Así pues, el capítulo creó una comisión encargada de elaborar el memorial que debía portar Mendoza, para lo que se procuró contar con el consejo de Quiroga (299). Unos días después, el canónigo se trasladaba a la Corte para llevar a cabo esta labor, manteniendo correspondencia con la comisión capitular y siguiendo las indicaciones que el arzobispo había realizado sobre el orden en que se habían de presentar al rey las diversas cuestiones (300). El endurecimiento de la postura del cabildo en relación con el cumplimiento de la residencia se evidenció igualmente en el requerimiento de fianzas sobre los frutos de su vestuario realizado al doctor Salvador Navarro y a Alonso de Anaya, que no obedecían enteramente a esta obligación (301). A finales de septiembre, fue García de Loaysa quien notificó al cabildo el breve otorgado por Gregorio XIII, que iba acompañado por una carta del monarca, para que se le tuviese por presente y se le acudiese con las rentas derivadas de su canonjía por un espacio de cuatro años. Aunque el consistorio se plegó a dicho mandato, no dejó de suplicar a Felipe II que procurase que no se tornasen a despachar documentos pontificios semejantes, guardándose las cédulas reales que se habían otorgado en contra de esta práctica (302).

En octubre de 1584, Alonso de Mendoza fue sustituido por Antonio Manrique en el desarrollo de esta actividad (303). El tratamiento de la

(298).- ACT, Actas Capitulares. Tomo 18, fols. 51r, 58v-60r.

(299).- Ibid., fol. 64r.

(300).- Dicha comisión estuvo integrada por el maestrescuela, Tomás de Borja, el licenciado Virviesca y el doctor Navarro (Ibid., fols. 67r-v, 81v).

(301).- Bernardino de Mendoza presentó las fianzas en favor del doctor Navarro, mientras que Alonso de Mendoza salió fiador de Alonso de Anaya (Ibid., fol. 72r-v).

(302).- Ibid., fols. 77v-78r. Por otra parte, a la muerte del Deán Diego de Castilla, Quiroga pensó en nominar a García de Loaysa en esta dignidad. Sin embargo, consultado el rey sobre esta provisión, mandó al prelado que buscara a otro candidato, puesto que no podía prescindir del servicio que Loaysa desempeñaba en la Corte (IVDJ, envío 90, n° 587).

(303).- ACT, Actas Capitulares. Tomo 18, fol. 84v.

cuestión de la residencia hizo que se suscitase de nuevo la diferencia existente entre lo que fijaba el concilio tridentino en lo referente a los días en que se podía hacer ausencia y la costumbre más rígida que se guardaba en la iglesia de Toledo (304). No obstante, lo cierto fue que, a pesar de los esfuerzos realizados por el cabildo para hacer cumplir a los canónigos con la residencia, tratando de evitar que pudiesen eximirse por el servicio prestado en otras instancias, principalmente al Santo Oficio, no consiguió ningún cambio en relación a esta cuestión ni en cuanto a los privilegios otorgados a los servidores del mismo.

Por otra parte, los problemas derivados de estas ausencias de los beneficiados de las iglesias no sólo estaban circunscritos a la catedral de Toledo, sino que se producían, igualmente, en el resto del arzobispado, aunque el control y solución de los mismos revestía menor complejidad que los que se producían por la falta de residencia de los capitulares. Así, en abril de 1582, Quiroga escribía al canónigo de la iglesia de Talavera, Alonso de Paz, respondiendo a la propuesta de suprimir un canonicato vaco por muerte de Juan Gregorio de Medrano y dividir sus frutos en cuatro raciones, a causa de la carencia de ministros para atender al culto. Esta venía motivada, según se había referido desde la Iglesia colegial, por la ausencia que hacían los beneficiados de sus prebendas, así como porque una de ellas estaba suprimida en favor del Santo Oficio. Antes de tomar ninguna decisión al respecto, el prelado encargó a su vicario en Talavera, Fernán Fernández Melgarejo, que hiciese las indagaciones pertinentes sobre la conveniencia de acceder a la petición, así como de los

(304).- El 31 de diciembre de 1584, el cabildo ordenó a Bernardino de Mendoza, el maestro Pérez, el doctor Navarro, Tomás de Borja, el licenciado Virviesca y el doctor Anaya, que se reuniesen para tratar este asunto, así como que mantuviesen informado a Quiroga de sus deliberaciones (Ibid., fol. 102v), teniendo presente lo que el prelado había capitulado al respecto en abril de 1578 (Ibid., fols. 104v, 105v). Por otra parte, la presión ejercida por el consistorio también se extendió a Gaspar de Quiroga, sobrino del prelado, que se encontraba realizando sus estudios en Salamanca (Ibid., fols. 33r, 118v-119v, 138r). Finalmente se decidió que se procediese en este caso de igual manera que se había hecho con don Antonio Zapata entre 1577 y 1580. Se le dió licencia por dos años para graduarse, percibiendo dos tercios de sus frutos (Ibid., f. 142r). En marzo de 1585, el Inquisidor General se dirigía al obispo de Salamanca y a Pedro de Tapia en agradecimiento por el buen trato que deparaban a su sobrino (AHN, Inq., libro 361, fol. 352r).

inconvenientes que podrían surgir (305). El 20 de junio, el arzobispo se mostraba dispuesto a acceder a esta pretensión, reclamando la escritura original de dotación y fundación del canonicato para proceder a su partición (306). Esta se hizo efectiva en el mes de octubre, teniendo presente el arzobispo la función que debían realizar los nuevos racioneros para llevar a cabo las designaciones (307). Así mismo, el prelado se preocupó de castigar a los beneficiados de Talavera que faltaban a la residencia sin estar ocupados en funciones que justificasen su ausencia. En este sentido, en noviembre de 1585, escribió al embajador en Roma, el conde de Olivares, para que impidiese que Juan del Cano, canónigo, obtuviese concesión papal para cobrar sus frutos, puesto que permanecía en la Corte faltando de su prebenda sin motivo aparente (308).

(305).- Ibid., Inq., libro 358, fols. 28r-v, 84r-v y 86r-v.

(306).- Ibid., fols. 89v-90r, 91r. A comienzos de julio comunicaba su determinación a Juan de Mendoza, arcediano de Talavera, enviando una copia de la petición, firmada por el deán Pero Sánchez, los canónigos Alonso Rodríguez Castaño, Rodrigo de Haro, Rodrigo Gumiel de Madrigal, Alonso de Paz, Francisco Vázquez, el doctor Pezuela de Molina, Alonso Delgado y el secretario Alonso López (Ibid., fol. 115r-v). No obstante, el arcediano expresó un juicio contrario a esta solución, proponiendo a Quiroga la adopción de otro medio, que no fue del agrado del prelado (Ibid., fols. 92v-93r).

(307).- Ibid., fols. 119r, 121v.

(308).- AMAE, Santa Sede, leg. 9, exp. 27, fol. 173. Por otra parte, esta vigilancia también se efectuó sobre otros servidores de la iglesia toledana. Así, en julio de 1583, Quiroga encargaba a los miembros de su Consejo que se investigase la actuación del cura de Povedilla, quien llevaba ocho meses ausente de su beneficio. Como se tenía información de que, en los dos años que llevaba ostentando el mismo, solo había residido seis meses, por estar ocupado en una capellanía que tenía en Cazorla, el arzobispo aconsejaba actuar contra él conforme a derecho, si se confirmaba este hecho (AHN, Inq., libro 361, fols. 196v-197r). Igualmente, en octubre del año siguiente, Quiroga señalaba al Consejo que debía exigir al arcipreste de Canales, Jerónimo Vázquez que fuese a residir, sin atender a las reclamaciones o apelaciones que realizase. Encargaba especialmente al doctor Juan López que hablase con el arcipreste por la gran amistad que les unía, recordando que fue esta vinculación lo que hizo que se le nominase en el arciprestazgo (Ibid., fols. 255r, 341v).

b/ El Concilio provincial de 1582 (309)

Como había sucedido en cuanto a la realización del sínodo diocesano, Quiroga proyectó la reunión de un Concilio provincial en consonancia con los mandatos tridentinos, que fijaban su convocación cada tres años, no habiéndose celebrado ninguno después del que tuvo lugar en 1565. El prelado debió comunicar a Felipe II su intención en los primeros días de 1581, puesto que, el trece de febrero, el rey daba su aprobación a que el mismo se llevase a cabo. Solicitaba al arzobispo que le informase de las diligencias y prevenciones que hubiera realizado, así como de la fecha que estimaba apropiada para su consecución. Añadía que, en 1565, el concilio se había desarrollado con la asistencia de un representante real, don Francisco de Toledo, por lo que para la próxima convocatoria, era conveniente que procediese a designar a una persona que desempeñase una función semejante, pidiendo a Quiroga que le aconsejase sobre los candidatos idóneos, e igualmente, en torno al letrado de quien había de asesorarse el elegido, labor que había ejercido en el Concilio pasado Francisco de Soto Salazar. El monarca estimaba que, si bien éste había fructificado en decretos muy acertados, sus resultados fueron estériles por su falta de aplicación. Instaba al prelado para que tanto aquellos preceptos como los que resultasen del Concilio se llevasen a la práctica, constituyendo un ejemplo a seguir por el resto de las iglesias (310).

(309).- Queremos aclarar que nuestra intención no es centrarnos en el desarrollo y contenido de las actividades conciliares, que por otra parte ya han sido objeto de estudio (A. FERNANDEZ COLLADO, El Concilio provincial toledano de 1582. Roma 1995), sino poner de manifiesto la trayectoria seguida por Gaspar de Quiroga durante su celebración.

(310).- El borrador y la carta se encuentran en IVDJ, envío 89 (caja 125), n° 281; AGS, Estado, leg. 162, n° 169. En su respuesta, fechada el 20 de febrero, Quiroga afirmaba que no había realizado ningún preparativo hasta no contar con el beneplácito del rey para proceder a la realización, pero su intención era que se tratase respecto a la vida y residencia del metropolitano, obispos sufraganeos y beneficiados del arzobispado, como se proveían estos, especialmente los curatos, así como la aplicación de los mandatos tridentinos y su cumplimiento. Al igual que era su propósito cuando convocó sínodo diocesano, aseguraba que la finalidad del nuevo concilio era renovar aquello que se había dispuesto en el de 1565. Sobre la designación del representante legal, el prelado señalaba al conde de Orgaz, al conde de Montalban y a Gonzalo Chacón, mientras que, como asesor, recomendaba al maestrescuela Covarrubias, al inquisidor Juan de Zúñiga o al canónigo catedralicio Francisco Dávila (Ibid., n° 17).

Comunicando al rey su intención de que el Concilio diocesano se iniciase el 8 de septiembre, Quiroga centró su actividad en llevar a cabo los preparativos necesarios, iniciando las gestiones pertinentes (311). El 26 de abril remitía al monarca una copia de las cartas y edictos que se habían ordenado para los obispos sufraganeos con la finalidad de someterlos a la aprobación real (312). El 3 de junio, el prelado informaba al cabildo catedralicio de la convocatoria del Concilio para el mes de septiembre, señalando, como había sucedido en relación al sínodo provincial, su pesar por no haber cumplido con lo dispuesto por los decretos tridentinos en este sentido con anterioridad a causa de sus muchas ocupaciones. Así mismo, instaba al consistorio a que eligiesen a las personas que acudirían al mismo en su representación (313).

Por otra parte, la intervención regia desde Portugal en torno a la celebración del Concilio se continuaba sucediendo, encargando a dos miembros del "partido castellanista", Rodrigo Vázquez de Arce y el confesor real fray

(311).- Por otra parte, el rey había ordenado que se entregasen al arzobispo los concilios provinciales celebrados en Toledo, Salamanca, Granada y Santiago de Compostela que estaban en poder de Antonio Pérez por hallarse entre los papeles de su padre. Pazos fue el encargado de efectuar la demanda al secretario, con la finalidad de que Quiroga pudiese servirse de ellos y aprovechar lo que estimase de utilidad en este Concilio diocesano (AZ, carp. 142, nº 19).

(312).- Así mismo, consultaba la duda que le había surgido sobre si debía convocar al obispo de Cartagena. En cuanto a la recomendación que había efectuado del licenciado Covarrubias, se había informado, posteriormente, que se hallaba impedido para realizar esta labor a causa de su sordera (AGS, Estado, leg. 162, nº 216). En su contestación, datada el 15 de mayo, Felipe II remitía unas cartas en apoyo de las que Quiroga iba a enviar a los prelados, dando orden de que el llamamiento se hiciese extensivo al obispo de Cartagena (Ibid., nº 166; IVDJ, envío 89 (caja 125), nº 282; G. DE ANDRES, "El helenismo del canónigo..." p. 276). Así mismo, el monarca pedía a Quiroga que ampliase la lista de personas que proponía para actuar como representante real y su asesor en el Concilio. Además de los ya citados, en su respuesta, el prelado señalaba al conde de Buendía, al de Pliego, que era teólogo y letrado, el conde de Cifuentes, aunque señalaba que se encontraba enfermo, al mayordomo real Diego de Messía, al clauero de Alcántara Rodrigo de Mendoza, y a Juan Pardo. En cuanto a los letrados, añadía a Pedro Vélez de Guevara (AGS, Estado, leg. 162, nº 220).

(313).- ACT, Actas Capitulares. Tomo 17, fols. 33r, 35r-v, 45r, 46r, 48r. Citados por A. FERNANDEZ COLLADO, Concilios toledanos postridentinos. Diputación provincial de Toledo 1996, p. 81. Los designados para colaborar con el prelado fueron el deán Diego de Covarrubias, el maestrescuela Covarrubias, el arcediano de Guadalajara García de Loaysa, el capiscol Bernardino de Mendoza, el tesorero Pedro de Quiroga, y el canónigo doctor Hondegardo. El 14 de julio fueron nominados procuradores Bernardino de Mendoza y Diego de Castilla, quedando exonerado este último unos días después a causa de su avanzada edad y precario estado de salud.

Diego de Chaves, el entendimiento de lo que se derivase del mismo (314). Sin embargo, a finales del mes de junio, Quiroga consideraba que el Concilio no se podría celebrar en septiembre, como estaba anunciado, a causa de una serie de inconvenientes que habían surgido. Estos estaban referidos a las vacantes producidas por las muertes de los prelados de Córdoba y Segovia, a la indisposición del obispo de Sigüenza, y al encargo recibido por el ocupante de la sede conense de acudir a Barcelona a recibir a la emperatriz María, y de formar parte de su acompañamiento y servicio (315). Ello motivó que el arzobispo se viese forzado a determinar la prorrogación de la convocatoria a mediados del mes de julio, para lo que contó con la opinión favorable del deán del cabildo catedralicio, así como de algunos canónigos, y otras personas con experiencia en estas cuestiones a las que consultó, estableciéndose como fecha idónea el 3 de diciembre, primer domingo de Adviento, para que en la Cuaresma los prelados se encontrasen nuevamente en sus iglesias (316). El 17 de octubre, Quiroga escribía al monarca en obediencia de los deseos de éste en cuanto a que la proyectada reunión sufriese una nueva dilación, aduciendo que, como consecuencia de su dedicación a los asuntos portugueses, no había procedido a designar a los nuevos obispos en las sedes vacantes. Si bien el arzobispo aseguraba que se seguirían rigurosamente las indicaciones reales, advertía que se comenzaba a sospechar en Toledo que las prorrogaciones no eran sino una manera velada de evitar la celebración del Concilio, criterio que sería compartido por la Santa Sede, donde se tenía noticia de que el mismo se había convocado, puesto que partían de la creencia de que dicha celebración no era del agrado de los príncipes. Quiroga representaba al monarca, nuevamente, la conveniencia de su ejecución sin que hubiese más retrasos, subrayando que únicamente se tratarían temas relacionados con el culto divino, así como con la vida y costumbres del clero. No obstante, si Felipe II estimaba que el momento

(314).- Véase la carta que Zayas remitió a Quiroga el 10 de julio, en la que incluía diversas noticias respecto al gobierno de Portugal y la expedición a la isla Tercera (AGS, Estado, leg. 162, n° 206).

(315).- Ibid., n° 208; IVDJ, envío 55 (caja 72), n° 47.

(316).- AGS, Estado, leg. 162, n° 219. El edicto de prorrogación se encuentra en, *ibid.*, n° 135.

no era adecuado para reunir un Concilio provincial, no volvería a insistir en este asunto, considerando que había cumplido con su conciencia con solicitar la licencia necesaria para llevarlo a cabo (317).

No se equivocaba el arzobispo en sus opiniones respecto a la postura adoptada por Roma, aunque el problema principal que Gregorio XIII observaba en esta convocatoria estaba precisamente referido al control que Felipe II trataba de ejercer sobre las cuestiones eclesiásticas, materializado, en el caso del Concilio, en el significativo papel desempeñado por el representante real asistente al mismo. El nuncio Segá, conocedor de las inclinaciones regalistas del arzobispo, instó al pontífice para que, puesto que sus poderes no le facultaban para oponerse a esta práctica tradicional, se adoptase otra solución. La opción escogida por el papa fue enviar a Quiroga un breve, fechado a finales del mes de octubre, por el que le mandaba que tratase de evitar que el Concilio fuese presidido por el representante regio, pidiendo al rey que renunciase a su envío (318).

Siguiendo las indicaciones del monarca, Quiroga procedió a realizar la segunda prorrogación de la convocatoria, que quedaba pospuesta para el 29 de abril de 1582 (319). A comienzos del mes de marzo, el arzobispo remitía el breve papal a Felipe II, al que solicitaba que le avisase con tiempo suficiente para escribir al resto de los obispos, denotando en su carta el convencimiento de que el Concilio tampoco se iba a reunir en esta ocasión (320). Como presentía Quiroga, la celebración quedó nuevamente retrasada, en consonancia con el designio regio, hasta el 8 de septiembre. Igualmente, refería al rey cómo

(317).- Ibid., nº 217.

(318).- A. FERNANDEZ COLLADO, *Gregorio XIII y Felipe II...*, pp. 230-232; L. PASTOR, op. cit., XIX, pp. 328-329.

(319).- El 4 de noviembre escribía a Felipe II cómo había enviado carta a los obispos sufraganeos para que no iniciasen su traslado y comunicándoles la nueva fecha fijada para la reunión, además de informar al rey acerca de la evolución de los trabajos del Manual sobre la administración de sacramentos y el nuevo ceremonial (AGS, Estado, leg. 162, nº 218)

(320).- Ibid., leg. 424, nº 392.

había tranquilizado al nuncio Segá en cuanto a la causa que había motivado la expedición del breve papal, a quien había asegurado que la presencia de un representante real no tenía el objetivo de poder ejercer presiones o coartar el desarrollo de las actividades conciliares, como se pensaba en Roma, sino que las propuestas y resoluciones se efectuaban y adoptaban con plena libertad. El arzobispo apuntaba que el nuncio se había mostrado satisfecho con su explicación (321). Por otra parte, el nuevo retraso de la fecha de convocatoria hacía que Quiroga no confiase en que en esta ocasión se pudiese llevar a efecto, sino que ocurriría como en emplazamientos precedentes a causa de la falta de disponibilidad de algunos prelados, en concreto los de Cartagena y Segovia, el abad de Alcalá la Real, y el nuevo ocupante de la sede conquense, que aún no contaba con la presentación. No atreviéndose a insistir sobre este asunto con Felipe II, el arzobispo solicitaba a Zayas que le diese su opinión sobre lo que podría acontecer en relación con la posibilidad de que el Concilio se celebrase finalmente, puesto que necesitaba contar con un margen suficiente de días para hacer los preparativos pertinentes (322). El secretario, en su respuesta a Quiroga, ratificó que el deseo del rey era que el Concilio se iniciase el día fijado por la última prorrogación, pudiendo agregarse los obispos que contasen con algún impedimento posteriormente. En este sentido, Zayas transmitía al arzobispo la pregunta formulada por el monarca en torno a la duración que se podía estimar que tendría el mismo. Igualmente, notificaba a Quiroga que el letrado designado para asesorar al representante real era Francisco Dávila, arcediano de Toledo (323). El 3 de agosto, el secretario informaba al arzobispo de que Felipe II había decidido nombrar al marqués de Velada para que asistiese en su nombre al Concilio. Aseguraba que se le había dado instrucción de que se guiase en su actuación por los consejos de Quiroga, vaticinando que el entendimiento entre ambos sería grande, puesto que se trataba

(321).- Ibid., leg. 162, n° 16.

(322).- Las cartas que Quiroga remitió a Zayas a finales de Julio en, AZ, carp., 148, n° 24-25.

(323).- AGS, Estado, leg. 162, n° 207.

de un hombre instruido y de caracter apacible (324). Añadía que, como consecuencia de la avanzada edad de fray Diego de Chaves y las múltiples ocupaciones de Rodrigo Vázquez de Arce, el monarca ordenaba que interviniese el maestro Sebastián Pérez en las juntas que se reuniesen para tratar sobre el Concilio, quien se hallaba desocupado del servicio al Cardenal Archiduque Alberto (325). También recomendaba al arzobispo que llamase a su amigo Benito Arias Montano, cuya presencia en la celebración estimaba conveniente, siendo la ocasión propicia por encontrarse retirado en la Peña. Además, Zayas introducía en su carta algunas reflexiones que revisten gran interés. Señalaba que, Felipe II sólo había accedido a que se reuniese el Concilio después de consultar con Chaves y Rodrigo Vázquez. Estos dieron su aprobación, convencidos de que el proposito del mismo era poner en ejecución lo que se acordó en el de 1565. Según opinión de Zayas, se equivocaban en este criterio, porque necesariamente se habían de tratar materias nuevas. Por ello, aconsejaba a Quiroga que, para evitar dificultades motivadas por la ausencia del rey, con quien habrían de consultar estos temas, y la murmuración que esto provocaría en los asistentes, difiriese el inicio del Concilio hasta que el monarca retornase. Pero, si esto ya no era factible, que se procurase alargarlo todo lo posible (326).

A finales del mes de agosto, Quiroga se trasladaba a Toledo para ocuparse en la realización de los últimos preparativos (327). Así pues, hallándose

(324).- El rey comunicó su nombramiento al marqués de Velada el 13 de agosto (Ibid., nº 163). Sobre las instrucciones que recibió para realizar esta representación, véase, Ibid., nº 192, 197; AZ, carp. 211, nº 31. La carta que Felipe II envió a Quiroga aparece transcrita por J. ROMAN DE LA HIGUERA, op. cit., fols. 193-196; D. CASTEJON Y FONSECA, op. cit., pp. 1138-1140.

(325).- Respecto a la elección del representante regio tanto Quiroga como Fray Diego de Chaves habían mostrado su conformidad con que fuese el conde de Uceda, pero, según refería Zayas, el rey estimó que su ausencia perjudicaría a sus hijos, procediendo a designar al marqués de Velada (AGS, Estado, leg. 162, nº 201).

(326).- Ibid., nº 204. Sobre el llamamiento a Arias Montano insistía unos días después, Ibid., nº 202.

(327).- Ibid., nº 159, 221. Por su parte, el rey, atendiendo a la súplica del arzobispo, escribía al ayuntamiento y corregidor de Toledo para que colaborasen convenientemente en el buen desarrollo del Concilio (AZ, carp. 211, nº 63), e igualmente, al consistorio catedralicio (IVDJ, envío 89 (caja

todo dispuesto, el 8 de septiembre de 1582 se iniciaba finalmente el Concilio provincial (328). En el desarrollo de la primera sesión, que se prolongó hasta febrero de 1583, las congregaciones se fueron sucediendo, realizando los representantes sus propuestas y peticiones (329). No obstante, en los primeros días de andadura del Concilio, surgieron algunas disensiones entre el marqués de Velada y Juan Bautista Pérez, que actuaba como secretario en el mismo. Según refería Velada tanto a Zayas como a Cristobal de Moura, el maestro Pérez no se mostraba dispuesto a proporcionarle las relaciones de lo que se trataba en las congregaciones, por lo que se veía obligado a escribir sus informes al rey de memoria al finalizar las reuniones. El representante regio aseguraba que el talante de Juan Bautista Pérez obedecía a que era hechura de Quiroga, aunque no tenía la certeza de que el arzobispo hubiese ordenado este modo de proceder (330). Estas noticias, junto a las que llegaban al monarca sobre lo que se trataba en las congregaciones, no fueron del agrado de Felipe II, que, el 22 de noviembre, remitía un aviso a su representante para tratar de reconducir la situación. En la carta enviada a Velada refería el peligro que

125), nº 268). El día 31, el cabildo comisionaba a parte de sus miembros para que acudiesen a dar la bienvenida al prelado (ACT, Actas Capitulares. Tomo 17, fol. 138r). Unos días después, nombraban a García de Loaysa para que acudiese al mismo junto a Bernardino de Mendoza como procuradores del capítulo (Ibid., fols. 138v-139r).

(328).- AGS, Estado, leg. 162, nº 180. En su correspondencia con Zayas, Quiroga informaba de las fechas en que se irían sucediendo las congregaciones de la primera sesión (IVDJ, envío 89 (caja 125), nº 283). Sobre los preparativos realizados por el cabildo, así como la insistencia que éste realizó ante el arzobispo para que el inicio del Concilio no desfavoreciese los actos que festejaban la Natividad de la Virgen, que se celebraba dicho día, véase, ACT, Actas Capitulares. Tomo 17, fols. 140r-142r. Citado por A. FERNANDEZ COLLADO, *Concilios toledanos...*, pp. 82-84. Igualmente, sobre los obispos sufraganeos asistentes, véase, *ibid.*, pp. 85-88.

(329).- *Ibid.*, pp. 89-91. Sobre las realizadas por el cabildo de la catedral, véase, ACT, Actas Capitulares. Tomo 17, fols. 143v, 144v-145r, 150r, 151r, 153r-v, 160v, 162v, 168v, 173r-v. Por otra parte, el 19 de enero de 1583, el capítulo nominó a Antonio Manrique como su procurador en el Concilio junto a García de Loaysa en sustitución de Bernardino de Mendoza, que se encontraba impedido por su enfermedad (*Ibid.*, fol. 169r-v).

(330).- En su carta a Moura, Velada trataba de discernir si Felipe II prefería que la comunicación entre ambos tuviese como intermediario al propio destinatario o al secretario Zayas (AZ, carp. 153, nº 26; AGS, Estado, leg. 162, nº 227). En una carta posterior dirigida al secretario real refería cómo anotaba a escondidas todo lo que podía para que fuese más fácil recordar lo tratado después, y la ayuda que en este sentido recibía de Francisco Dávila, muy limitado por sus obligaciones en el Santo Oficio. A través de éste, Quiroga había comunicado a Velada que si tenía necesidad de algún papel se lo pidiese a él en lugar de a Pérez (*Ibid.*, nº 242).

suponía el tono que se estaba empleando en cuanto a la reforma de frailes y monjas, así como que no era conveniente que se tomaran resoluciones contando únicamente con el juicio de los congregados, sino que era necesario conocer el criterio de letrados y personas doctas ajenas a la reunión. Igualmente, señalaba que los prelados se estaban centrando en demasía en cuestiones relacionadas con su jurisdicción, desatendiendo a lo contenido en otros preceptos del Concilio de Trento que convenía aplicar (331). Por otra parte, el representante regio también recibía asesoramiento referido a cómo debía proceder a través de los pareceres solicitados a Diego de Chaves, Rodrigo Vázquez de Arce y Sebastián Pérez, cuyas opiniones sobre el desarrollo de las congregaciones y acuerdos adoptados, una vez conocidos por el rey, eran enviados al marqués de Velada (332). En este sentido, a mediados de noviembre, se incorporaba al Concilio Arias Montano, a quien Zayas recomendó a Velada, que entabló una estrecha relación con él (333).

La poca satisfacción que provocaba en Felipe II el devenir del Concilio y las directrices que estaba adoptando, llevaron a que el rey diese instrucciones a su representante para que éste se finalizase antes de la Navidad o bien en los primeros días de enero. Por su parte, Zayas añadía que debía presionar a los asistentes con esta idea para que dejaran de hacer interpretaciones poco convenientes de los decretos tridentinos y se centrasen en fijar lo concerniente al gobierno de las iglesias, utilizando como guía los artículos que se habían

(331).- Ibid., n° 22. En este sentido, en 1580, los prelados de los reinos hispanos habían presentado a Antonio de Padilla un memorial de los agravios que realizaban Consejos, Chancillerías y Audiencias contra la libertad y jurisdicción eclesiástica (AZ, carp. 155, n° 240). Por otra parte, se remitían al Concilio las indagaciones y noticias existentes sobre el inapropiado comportamiento seguido por don Alonso de Mendoza, abad de Valladolid (AHN, Inq., libro 358, fol. 99v; IVDJ, envío 89 (caja 125), n° 269; Ibid., caja 126, n° 579; Ibid., envío 91 (caja 130), n° 111, 334).

(332).- En torno a las opiniones expresadas por los mismos, véase, AGS, Estado, leg. 162, n° 19, 58-60, 64, 76.

(333).- Ibid., n° 154, 231, 254. Igualmente, Velada recibió algunas advertencias desde Lisboa en cuanto a las congregaciones realizadas en los últimos días del mes de noviembre (AZ, carp. 211, n° 35, 43).

remitido desde Lisboa (334). A comienzos de diciembre, el rey insistía en que la diversidad de los temas tratados estaba resultando perjudicial, pudiendo concluirse el Concilio de forma rápida e idónea limitándose a ratificar el cumplimiento de lo acordado en el Concilio de Trento y en el provincial celebrado en Toledo en 1565. Mandaba a Velada que representase este asunto a Quiroga, aunque afirmaba que el arzobispo conocía tan bien las implicaciones de estas materias que no era necesario realizar otros avisos (335). En enero de 1583, Velada refería al monarca el gran esfuerzo que estaba desarrollando Quiroga, pues todos los trabajos del Concilio pasaban por sus manos: "que aun el latín de los decretos pienso que ha de ser suyo". Igualmente, había pedido al arzobispo que el memorial realizado para su consulta en Roma sobre ciertas dudas que habían surgido, se enviasen primero al rey (336). Una de las cuestiones que se habían suscitado estaba referida a si era necesario que el papa confirmase los concilios provinciales, cuando en ellos no se tratasen dogmas de fe ni cuestiones que afectasen a la Iglesia en general, ni contra el derecho común o de determinación reservada a la Santa Sede (337). Unos días más tarde, los decretos, apuntamientos y minutas de los despachos destinados a Roma se enviaron al monarca (338). Por otra parte, Quiroga, al igual que había actuado en otros asuntos, tenía en alta estima las indicaciones y consejos que recibía del jesuita Pedro de Ribadeneyra, tanto referidos a la celebración del Concilio como al expresado deseo de abandonar todos sus cargos y retirarse, convenciéndole Ribadeneyra de la necesidad de su permanencia por diversas

(334).- Ibid., nº 32, 41. El marqués de Velada cumplió con el encargo regio, señalando que Quiroga se había mostrado conforme con esta determinación. No obstante, refería a Zayas su temor de que el Concilio se prolongase por todo el mes de enero (Ibid., nº 36; AGS, Estado, leg. 162, nº 232, 235).

(335).- AZ, carp. 211, nº 33. Por una carta de Zayas, conocemos que, en ocasiones, algunos de los comentarios que se realizaban sobre la actividad que estaba desarrollando el Concilio eran falsos (Ibid., nº 42).

(336).- "...élme respondió que yo podía perder cuidado que no haría cosa que no fuese en servicio de su Md" (AGS, Estado, leg. 162, nº 123).

(337).- BNM, Ms. 13019, fols. 132r-136v.

(338).- AZ, carp. 211, nº 46.

razones, entre las que figuraba la culminación del Concilio (339).

Así pues, a comienzos de 1583, todos los esfuerzos se centraban en terminar con la mayor rapidez posible las actividades conciliares. Según señalaba Quiroga a Mateo Vázquez, el 8 de enero, habían llegado a Toledo noticias sobre el inminente regreso de Felipe II. Su intención era que, cuando éste se produjese, los trabajos se hallasen finalizados (340). El 28 de febrero, día en que quedó concluída la primera sesión, Felipe II se dirigió al arzobispo, remitiendo una memoria sobre algunas consideraciones que se habían realizado en torno a los decretos, remitidos por el marqués de Velada. Encargando que se hiciese uso de ellas, insistía en que, posteriormente, el Concilio quedase clausurado (341). La segunda y tercera sesión se celebraron en un breve espacio de tiempo. El 12 de marzo, el Concilio notificaba al rey la finalización de las congregaciones y la remisión de los decretos en conformidad con lo establecido por el Concilio de Trento y con el provincial toledano precedente. Así mismo, anunciaban el retorno de los asistentes a sus respectivas iglesias (342).

Sin embargo, dos días después, el representante del cabildo catedralicio toledano en el Concilio, Antonio Manrique, presentó una apelación en nombre de dicha iglesia en relación a algunos decretos que creían perjudiciales para la misma. Esta se vió acompañada por la que realizó Juan Barahona, canónigo y

(339).- MHSI, Ribadeneyra, II, pp, 29-38, 329-336.

(340).- IVDJ, envío 21 (caja 30), n° 182. Así mismo, este deseo era compartido por otros asistentes (AZ, carp. 137, n° 135).

(341).- Ibid., carp. 211, n° 61. Sobre este asunto escribía también el rey a su representante, al que apuntaba que instase a Quiroga a seguir las instrucciones enviadas, aunque señalaba que no era necesario ni conveniente que ejerciese mucha presión. Expresaba a Velada la satisfacción que sentía por la corrección con la que había desempeñado su cometido, prometiendo que sus servicios se verían recompensados. Así mismo, le daba licencia para retornar a su casa tan pronto como se concluyese el Concilio (Ibid., n° 34). Los apuntamientos, fechados el 1 de marzo, en, Ibid., n° 49.

(342).- IVDJ, envío 89 (caja 125), n° 272. Unos días antes, Velada comunicaba al monarca como el memorial que había enviado el rey se había examinado convenientemente (AZ, carp. 211, n° 38). Sobre lo acontecido en las últimas dos sesiones, véase, IVDJ, envío 89 (caja 125), n° 271, 273-274; A.FERNANDEZ COLLADO, Concilios toledanos..., pp, 92-96. En torno a los decretos y su temática, Ibid., pp, 97-104; M. DE VILLANUÑO, Summa Conciliorum Hispaniae. Madrid 1785, IV, pp, 5-44.

procurador de Sigüenza, en representación de las siete iglesias que habían asistido a las sesiones conciliares. Las reclamaciones realizadas por los cabildos se agruparon en un único documento que fue enviado a Roma (343). El 15 de marzo, Quiroga refería al rey el escándalo que había causado la actuación de los capitulares, que sólo buscaban su interés y acrecentar su libertad, gozando las rentas eclesiásticas sin atender a sus obligaciones. Solicitaba que se buscara la manera de refrenar estas pretensiones (344). El asunto quedó paralizado hasta que se produjo el retorno del monarca a Madrid (345). Durante el mes de julio tanto el obispo de Osma como Rodrigo Vázquez de Arce expresaron sus opiniones sobre las disposiciones emanadas del Concilio. El prelado mostró su conformidad con la generalidad de los decretos, señalando solamente la conveniencia de moderar algunos aspectos (346). Por su parte, Rodrigo Vázquez, partiendo de los criterios expuestos por el obispo, se mostró conforme con sus apreciaciones, señalando que sus juicios sobre los acuerdos conciliares eran conocidos, puesto que había seguido su evolución desde Portugal, remitiéndose a Toledo las instrucciones pertinentes. Igualmente, informaba al secretario Zayas como, en las conversaciones que había mantenido con Quiroga sobre estas cuestiones, el arzobispo se encontraba dispuesto a seguir las indicaciones que el rey estimase procedentes en relación al contenido de los decretos (347).

No obstante, se hacía necesario afrontar otra dificultad. Las resoluciones

(343).- En torno a las disposiciones conciliares que habían motivado la propuesta, véase, *Ibid.*, pp. 114-116; AMAE, Santa Sede, Leg. 26, fols. 344-357.

(344).- IVDJ, envío 89 (caja 125), n° 284. Dos días después, el cabildo toledano significaba al arzobispo que Antonio Manrique había actuado sin conocimiento del consistorio, desde el que nunca se intentó ni se pensó en ofender al prelado (ACT, Actas Capitulares. Tomo 17, fol. 178v). El 2 de abril, el capítulo encargó a varios de sus miembros que estudiaran los decretos sobre los que se debía apelar e hicieran relación de los mismos (*Ibid.*, fol. 184r), prolongándose esta labor en los meses siguientes (*Ibid.*, fols. 198v, 212v, 217r).

(345).- Así lo comunicaba Quiroga al arzobispo de Santiago a comienzos de mayo (AHN, Inq., libro 361, fol. 189v).

(346).- Su parecer, emitido el 1 de julio, en IVDJ, envío 89 (caja 125), n° 275.

(347).- *Ibid.*, n° 276-277.

adoptadas por el Concilio debían enviarse a Roma para que fuesen aprobadas por el pontífice y se pudiesen poner en ejecución. Quiroga suplicó a Felipe II que escribiese tanto al papa como al conde de Olivares para que esta gestión se realizase con prontitud (348). En las epístolas remitidas por el arzobispo y el rey a Gregorio XIII constaba como principal preocupación que el papa no tuviese en cuenta las apelaciones efectuadas por los cabildos, proponiendo el monarca que tanto las disposiciones conciliares como las reclamaciones realizadas en torno a las mismas fuesen sometidas al examen del nuncio Taverna (349). Quiroga trató de aprovechar, igualmente, las buenas relaciones que mantenía con la Curia para que intercediesen con el pontífice y le mantuviesen informado de la evolución del asunto. Así mismo, también solicitó la ayuda del jesuita Francisco de Toledo (350).

La esperada respuesta de Roma tardó varios meses en producirse, puesto que no se emitió hasta septiembre de 1584 (351). Antes de proceder a su aprobación, se establecía que se debían efectuar algunas correcciones que se habían estimado oportunas por los cardenales que conformaban la Congregación del Concilio. La más significativa estaba referida a que tenía que desaparecer de las actas conciliares toda referencia a la asistencia e intervención del marqués de Velada, que se había censurado por la Sante Sede antes de que se celebrase la reunión. Quiroga advirtió que este asunto era bastante problemático y pedía que, considerando el desagrado que este condicionante iba a causar en Felipe II, con

(348).- Ibid., envío 55 (caja 72), n° 92.

(349).- Sobre dichas cartas, véase, A.FERNANDEZ COLLADO, *Concilios toledanos...*, pp, 105-106; M. DE VILLANUÑO, op. cit., IV, pp, 44-45; AMAE, Santa Sede, leg. 26, fols. 321-324; IVDJ, envío 89 (caja 125), n° 278; AHN, Inq., libro 361, fols. 208v-209r.

(350).- Véanse las cartas que el padre Toledo y el Cardenal de Como remitieron a Quiroga en 26 de septiembre (Ibid., leg. 2947, s.f.). Por su parte, en dicho mes, el cabildo de la catedral de Toledo envió a Quiroga una relación donde constaban los capítulos que eran perjudiciales para la iglesia, solicitando que pusiese remedio (ACT, Actas Capitulares. Tomo 17, fol. 223v). En los meses sucesivos, continuaron insistiendo con el prelado sobre este asunto (Ibid., tomo 18, fols. 12r, 13r, 34v).

(351).- Durante este periodo de tiempo, el arzobispo no había dejado de hacer instancia tanto al conde de Olivares como a Bartolomé Martínez Carnacedo (AMAE, Santa Sede, leg. 9, exp. 27, fols. 167, 169; AHN, Inq., libro 361, fol. 229r-v).

el consiguiente perjuicio para la iglesia hispana, se atendiese a sus explicaciones sobre esta antigua costumbre (352). Un segundo bloque de correcciones de las actas conciliares fue remitido desde Roma en enero de 1585, acompañado de la solicitud de realizar diversas aclaraciones sobre algunos de los procedimientos y usos utilizados en dicha celebración (353). Sin embargo, de nada sirvieron al arzobispo las alegaciones presentadas para justificar la actividad del representante regio. La Santa Sede mantuvo inamovible el mandato de ejecutar las correcciones y modificaciones indicadas, a las que quedaba supeditada la aprobación final del Concilio. Así pues, cuando se produjo la aceptación de llevar estas a cabo, los decretos conciliares recibieron el beneplácito del pontífice (354).

Por otra parte, hemos de hacer referencia a dos cuestiones que estuvieron vinculadas al desarrollo del Concilio provincial de Toledo. Desde que Gregorio XIII accedió al solio pontificio se había preocupado de realizar diversas actuaciones conducentes a la reforma del calendario juliano, cuyas diferencias con el año solar estaban causando dificultades en relación con la celebración de las fiestas eclesiásticas. Desde 1578, el pontífice había solicitado su ayuda a los reinos católicos para que colaborasen en esta empresa a través de sus estudiosos y de las Universidades. En el caso hispano, junto a los centros de Salamanca y Alcalá de Henares, participó destacadamente en el proyecto el maestro Juanelo Turriano (355). Las actividades se desarrollaron hasta comienzos de 1582, cuando el papa despachó la bula "Inter gravisimus", fechada el 24 de febrero, por la que el calendario juliano quedaba declarado fuera de uso, poniéndose en vigor

(352).- Ibid., fols. 256v- 257r; D.CASTEJON Y FONSECA, op. cit., pp, 1142-1145; A.FERNANDEZ COLLADO, op. cit.,pp, 106-109; M. DE VILLANUÑO, op. cit, IV, pp, 48-57.

(353).- Ibid., pp, 58-59; A.FERNANDEZ COLLADO, op. cit.,pp, 109-114.

(354).- Ibid., pp, 116-117, 155-156; AHN, Inq., libro 361, fol. 351v; M. PHILIPPSON, "Felipe II y el pontificado", pp, 157-158; R.HINOJOSA, op. cit., p, 253.

(355).- A.FERNANDEZ COLLADO, "Juanelo Turriano y la aportación española a la reforma del calendario gregoriano" *Toletum* 23 (1990), pp, 151-159; J.TURRIANO, *Breve discurso a su majestad el rey católico en torno a la reducción del año y reforma del calendario*. Madrid 1990 (Introd. de A.GARCIA-DIEGO); IVDJ, envío 80 (caja 106), nº 588. El parecer emitido por García de Loaysa sobre dicha corrección en 1579, se encuentra en, BNM, Ms. 13019, fols. 150r-159v.

la nueva ordenación. Gregorio XIII mandaba que, para comenzar a regirse por el calendario establecido, se suprimiesen diez días del mes de octubre, los comprendidos entre el 4 y 15 de dicho mes (356). No obstante, Felipe II, asesorado por el Consejo Real, no admitió el privilegio otorgado por el pontífice a Antonio Giglio para la impresión del calendario en exclusividad. Las negociaciones llevaron a que algunos libreros hispanos pudiesen proceder a la misma, quedando ésta posteriormente abierta a todo aquel que quisiese realizar esta labor (357). Por su parte, Quiroga, a comienzos de septiembre, ordenó, en el seno del Concilio provincial, dar una copia del canon de la corrección del calendario a los obispos e iglesias sufraganeas de su arzobispado para que realizasen en sus diócesis las gestiones pertinentes conforme a las instrucciones dadas por el rey (358).

Igualmente el Concilio de Trento había adoptado la determinación de que se procediese a la fundación de seminarios que procurasen una mayor formación del clero en consonancia con la reforma eclesiástica que se trataba de llevar a cabo. Este precepto emanado de Trento fue recogido por los concilios provinciales que se celebraron para proceder a la aplicación de los mandatos tridentinos. Si bien los proyectos fundacionales contaban con el apoyo explícito de Roma y con el favorecimiento de Felipe II, encontraron una serie de dificultades que frenaron su expansión. Su establecimiento perjudicaba seriamente los intereses de Universidades y Colegios Mayores, que encontraron el apoyo de los cabildos y de las ciudades, ligados a los mismos, para ejercer su

(356).- J.ROMAN DE LA HIGUERA, op. cit., fols. 196-199; D.CASTEJON Y FONSECA, op. cit., pp. 1140-1142. Como es sabido, se dió la curiosa circunstancia de que en el transcurso de la noche del 4 al 15 de octubre falleció Teresa de Jesús (A.FERNANDEZ COLLADO, Gregorio XIII y Felipe II..., pp. 242-249). La elección del mes de octubre para la supresión de los días pertinentes estuvo motivada porque no comprendía ninguna fiesta eclesiástica movable y el menor número de las fijas (C.RIBA, "El viaje de Felipe II a Portugal", pp. 202-203).

(357).- AZ, carp. 140, n° 22; AHN, Inq., leg. 3314, n° 25. El nuevo calendario fue recibido por el cabildo catedralicio de Toledo a mediados del mes de agosto (ACT, Actas Capitulares. Tomo 17, fols. 136v, 137v).

(358).- IVDJ, envío 89 (caja 125), n° 283; A.FERNANDEZ COLLADO, Concilios toledanos..., p. 91. Sobre los ajustes realizados por el capítulo de la catedral en relación con la supresión de los diez días de octubre, véase, ACT, Actas capitulares. Tomo 17, fols. 146r, 149v, 186v.

oposición a la implantación de nuevos centros educativos. Además, la dependencia económica que los prelados tenían de la Corona para que la fundación llegase a materializarse supuso también una importante rémora, sobre todo a medida que los problemas para afrontar los costes de la política de la Monarquía se fueron incrementando (359). En el Concilio provincial celebrado en Toledo en 1582-1583 se incluyó un capítulo, por indicación del rey, en el que se establecía el plazo de un año para que los obispos iniciasen las gestiones precisas que condujesen a la creación de seminarios en todas las diócesis. No obstante, los intentos realizados en este sentido fueron infructuosos en el caso de Toledo (360). En julio de 1583, Felipe II se dirigía tanto a Quiroga como al resto de prelados asistentes a la reunión advirtiéndole que las dotaciones no sólo se debían realizar anexionando préstamos o beneficios simples, como se había fijado en el decreto conciliar, sino que también se tomarían para esta finalidad parte de los frutos de la mesa arzobispal y capitular, así como otras rentas y arbitrios señaladas por la disposición tridentina al respecto (361). Finalmente, para llevar a la práctica con mayor eficacia los proyectos fundacionales, se decidió adoptar en todos los aspectos lo dispuesto en el Concilio de Trento, para que no se produjesen dilaciones derivadas de la pendiente aprobación de la actuación conciliar toledana o de provocar el disgusto del pontífice porque se procediese a su aplicación antes de que hubiese otorgado su beneplácito (362). Sin embargo, los cabildos de las iglesias sufraganeas

(359).- En torno a esta cuestión, véase, V. DE LA FUENTE, Historia de las Universidades..., II, pp, 348-356; F.MARTIN HERNANDEZ, "Fundación de los primeros seminarios españoles" Hispania Sacra 26 (1963), pp, 5-15; Idem, Los seminarios españoles. Historia y pedagogía (1563-1700). Salamanca 1964, pp, 129-148.

(360).- Ibid., pp, 148-161; Idem, "Fundación de los primeros seminarios...", pp, 16-24. sobre las indicaciones dadas por Felipe II al marqués de Velada en torno a la cuestión de los seminarios, véase, AZ, carp. 211, nº 33, 44; IVDJ, envío 89 (caja 125), nº 270.

(361).- AHN; Inq. libro 358, fols. 182r-183r. Por otra parte, también se pensó en la conveniencia de reducir el plazo dado de un año, que era más extenso que el establecido por los decretos tridentinos (IVDJ, envío 89 (caja 125), nº 275-276).

(362).- Ibid., envío 55 (caja 72), nº 92; Ibid., envío 89 (caja 126), nº 379.

comenzaron a escudar su resistencia en que no se había iniciado el de Toledo (363). En este sentido, en enero de 1584, el consistorio toledano conformó una comisión para que se encargase de este tema, compuesta por Bernardino de Mendoza y Antonio de Covarrubias. En el mes de julio ambos presentaron un informe al capítulo, que adoptó la resolución de comunicar a Quiroga, al papa y a Felipe II, su decisión de no acometer la erección del seminario por considerarlo innecesario y revestir diversos inconvenientes (364). Los argumentos presentados por el cabildo fueron sometidos al criterio de Rodrigo Vázquez de Arce y del confesor Chaves. Si bien mostraron su conformidad con los estatutos realizados por Quiroga, por los que se habría de regir el seminario, que se debía llevar a cabo a pesar de la oposición del cabildo, compartían la opinión de éste en cuanto a la inoportunidad de acometer su fundación a causa de las dificultades económicas que estaban atravesando. Estimaban más apropiado esperar uno o dos años para que se pudiesen recuperar, aplicando los beneficios que alcanzasen en su materialización. Estas consideraciones en favor de la postura capitular de posponer la erección del seminario conllevaron que el proyecto se fuese difuminando (365).

7.2.4. La postergación en los asuntos políticos

La pérdida del favor real sufrida por los miembros de la facción "papista" había conllevado para Gaspar de Quiroga el relegamiento en su arzobispado toledano, abandonando la Corte pocos días después de que el rey iniciase su camino a Badajoz en marzo de 1580. Durante los años siguientes, en los que Felipe II permaneció ausente de Madrid ocupado en los asuntos de Portugal, el

(363).- Véase la carta que el obispo de Osma dirigió a Zayas en septiembre de 1583 (Ibid., n° 568). Una clara excepción constituyó la diócesis de Palencia (AHN, Inq., libro 361, fol. 218v; AZ, carp. 138, n° 134).

(364).- Estos estaban referidos, como hemos señalado, a la existencia de otros centros educativos, que estimaban suficientes, así como a que las rentas capitulares no se viesan mermadas por este motivo (ACT, Actas Capitulares. Tomo 18, fols. 7r, 12v, 51v; F.MARTIN FERNANDEZ, Los seminarios..., p. 111; F.DE PISA, op. cit., pp. 269-270).

(365).- IVDJ, envío 90, n° 705; A.FLICHE y V.MARTIN, Historia de la Iglesia. Valencia 1976, XIX, p. 1976; R.GARCIA VILLOSLADA, op. cit., III-2°, pp. 23-26.

influjo de Quiroga pasó a ser inexistente, siendo apartado del entendimiento de las cuestiones referidas a la política de la Monarquía, aun cuando los temas tratados interesasen directamente al desempeño de sus funciones como Inquisidor General. No es por tanto extraño que, en el transcurso de estos años, residiese la mayor parte del tiempo en Toledo, donde centró su actividad con la celebración del sínodo diocesano y el Concilio provincial, participando de forma muy limitada en el tratamiento de temas que, si bien no carecían de interés, contaban en este periodo con una importancia secundaria en relación con el devenir político de la Monarquía (366).

La falta de influencia y de significación política, encuadrada en la caída en desgracia del "partido papista", se vió potenciada por el ascenso de los componentes de la facción "castellanista" a la ostentación de los principales cargos de la administración de la Monarquía, siendo también los integrantes de dicho grupo quienes acompañaron a Felipe II y gozaron de la confianza regia durante la estancia del monarca en el reino luso. En esta situación, Quiroga trató de congraciarse con los nuevos patronos cortesanos, especialmente, con Mateo Vázquez, a quien, entre 1580 y 1581, dirigió un gran número de cartas, utilizando cualquier nimio asunto, adornado de comentarios vanales, para entablar comunicación con el secretario, no desprovista de una importante dosis de servilismo (367). La indiferencia con que Vázquez respondió a los ofrecimientos de Quiroga, cuyas epístolas ni siquiera contestaba en muchas ocasiones, debieron convencer al prelado de que no lograría su rehabilitación política por este camino.

Entre los asuntos en que Quiroga dejó de tomar parte como resultado de

(366).- Así, antes de marcharse a Toledo, Quiroga participó en una junta compuesta por Antonio de Padilla, el obispo de Avila y Diego de Chaves, que se ocupó en el tratamiento de diversos temas (AZ, carp. 155, n° 224; IVDJ, envío 91, n° 291). Así mismo, a través de las actuaciones encomendadas a los tribunales inquisitoriales, sabemos que Quiroga continuaba manteniendo una postura contraria al entendimiento con Inglaterra, endureciendo igualmente el control sobre los subditos franceses (BL. Eg. 1506, fol. 103; AHN, Inq., leg. 2947, s.f.; Ibid., libro 327, fol. 396r-v).

(367).- IVDJ, envío 91 (caja 130), n° 297-299, 303-305, 308, 309, 311, 312, 316, 317; Ibid., envío 89 (caja 125), n° 202-209; Ibid., envío 62 (caja 84), n° 816; Ibid., envío 21 (caja 30), n° 184; AZ, carp. 135, n° 21.

su postergamiento, cabe destacar, tanto por la importancia de la decisión como porque ésta se adoptó sin considerar el criterio del Inquisidor General, la política que se debía seguir en relación a la problemática que generaba a la existencia de la minoría morisca. Los descubrimientos de planes de levantamientos proyectados por dicha población, contando con ayuda y apoyo exterior proveniente de enemigos de la Monarquía, principalmente, de los berberiscos del Norte de Africa y de los hugonotes de Bearn, se continuaron sucediendo a lo largo de 1580. Respecto al entendimiento con los primeros, se tuvo noticia de una conspiración cuyo centro se situaba en Sevilla, pero que contaba con ramificaciones en distintas ciudades andaluzas (368). En cuanto a la comunicación establecida con Francia, los contactos provenían, nuevamente, de los moriscos de Aragón (369). Desde Roma, en abril de 1581, se instaba a Quiroga, a través del Cardenal Savello, para que se continuase insistiendo en la instrucción de estos en la fe católica, procurándoles los cimientos espirituales necesarios. En su contestación, el Inquisidor General exponía los pocos frutos que habían dado los intentos que se habían realizado en este sentido, asegurando que no abandonaban las prácticas musulmanas aun cuando se hallaban presos en las cárceles inquisitoriales (370). Por otra parte, desde la Suprema se hacía constar que si bien se acogía la opinión expresada por la Santa Sede, no competía al Santo Oficio la instrucción de los moriscos sino a los prelados, añadiendo que en ningún caso de debía conceder el nuevo periodo de gracia solicitado por los que habitaban en Aragón, puesto que, únicamente constituía una táctica para salvar a los procesados. Se finalizaba señalando que esta

(368).- El rey mandó al conde de Villar, asistente en Sevilla, que el negocio fuese remitido al Consejo de Guerra. Villar se quejaba a Mateo Vázquez de los intentos realizados por el Consejo Real de intervenir en la cuestión, a pesar de las órdenes remitidas por el monarca, informándole, igualmente, de los indicios y desarticulación de la conjura (IVDJ, envío 21 (caja 30), n° 85, 126, 128). Quiroga fue informado de esta situación por el confesor Chaves (Ibid., envío 91 (caja 130), n° 292). Sobre este nuevo intento de sublevación, A.DOMÍNGUEZ ORTIZ y B.VICENT, Historia de los moriscos..., p, 62.

(369).- IVDJ, envío 89 (caja 125), n° 139; AHN, Inq., libro 327, fols. 286v-287v, 332v-333r, 335v-336r.

(370).- El Cardenal Savello también refería como moriscos aragoneses habían huído a tierras del Turco. Quiroga afirmaba que era el deseo de todos los moriscos, que no llevaban a cabo por no abandonar sus bienes (Ibid., libro 358, fols. 46r-47r).

situación era consecuencia de haberse encargado el desarme de 1575 a los señores de vasallos en lugar de a los inquisidores, dado que estos no procedieron efectivamente a su ejecución, recogiendo solamente las armas rotas e inservibles, por ser una medida perjudicial para sus propios intereses (371).

El 4 de diciembre de 1581, se reunía en Lisboa una junta conformada por Rodrigo Vázquez de Arce, el confesor Chaves y el secretario Delgado para tratar en torno al problema morisco. Las conclusiones de la misma fueron poner de manifiesto que se había errado en los métodos aplicados para conseguir la verdadera conversión y asimilación de esta minoría, por lo que se debía intentar esta finalidad por otros medios, solicitando la opinión de los obispos de los reinos de Aragón, Valencia y Granada sobre el camino a seguir más conveniente y fructífero (372). El Inquisidor General quedaba, por tanto, excluido del tratamiento de este tema, no siendo informado de lo acontecido en dicha junta. Sólo unos días después, Felipe II escribió a Quiroga, que recibió la carta en Toledo, sobre las noticias remitidas por el embajador en Francia sobre los preparativos para un levantamiento protagonizado por los moriscos de Aragón, Valencia y Cataluña. El conde de Sástago, quien había procurado este aviso, había alertado a los inquisidores de Zaragoza, pero estos no habían cumplido con el encargo de realizar averiguaciones. El rey pedía a Quiroga que ordenase a los oficiales inquisitoriales que colaborasen y procurasen un buen entendimiento con

(371).- Ibid., libro 327, fols. 342v-343r, 350r-v. Sobre la cuestión referida a la falta de instrucción y dureza del Santo Oficio, el marqués de Denia transmitía al rey el descontento de los moriscos de Valencia, insistiendo el Consejo de Inquisición en que la formación católica de estos no se encontraba entre sus cometidos (Ibid., fols. 378r-379v). No obstante, la actitud más benevolente de la Santa Sede hacia los moriscos provocaba que muchos acudiesen a Roma a confesar, lo que el Santo Oficio hispano consideraba muy perjudicial para su prestigio y autoridad, surgiendo los consabidos conflictos de jurisdicción. Este fue el caso de Gaspar Caydejos, vecino de Torrellas, en la diócesis de Tarazona (Ibid., 374v, 400r; BL, Eg. 1506, fols. 108r-v, 110r-v, 112r-v). Las protestas inquisitoriales sobre el poco resultado obtenido del desarme decretado en Aragón conllevó que, en septiembre de 1581, el monarca encargase a los oficiales del Santo Oficio hacer cumplir la prohibición establecida sobre los arcabuces de pedernal en el Principado de Cataluña, sin que hubiese intromisión de los oficiales reales (AHN, Inq. libro 327, fol. 377r).

(372).- Sobre el desarrollo y deliberaciones de la junta, véase, P.BORONAT Y BARRACHINA, op. cit., I, pp. 291-294; M.DANVILA Y COLLADO, op. cit., p. 196.

el mismo (373). El Inquisidor General entabló una fluida comunicación con los inquisidores de dichos tribunales, que informaron a Quiroga, pormenorizadamente, de los indicios de sublevación existentes. Este les encargó que impidiesen el contacto de los moriscos residentes en sus demarcaciones con los de otros territorios, así como, en consonancia con la orden recibida del monarca, que favoreciesen y apoyasen la actuación de los virreyes. Igualmente, Quiroga remitía con gran celeridad las informaciones que recibía de las inquisiciones a Lisboa, encomendando el rey su revisión al secretario Delgado, a Rodrigo Vázquez de Arce y al conde de Chinchón (374). El 12 de febrero, Felipe II daba instrucciones precisas al Inquisidor General sobre las medidas que se debían tomar con urgencia, puesto que las relaciones enviadas desde Valencia señalaban que la intranquilidad se iba incrementando en los lugares de moriscos (375). Según había requerido la junta de Lisboa, los pareceres pedidos a los prelados sobre los juicios emitidos por la misma llegaron a poder del rey en el mes de mayo. No obstante, tanto Juan de Ribera, arzobispo de Valencia, como los inquisidores que conformaban el tribunal sito en dicha ciudad, participaron el contenido de sus memoriales a Gaspar de Quiroga. Coincidiendo con las apreciaciones realizadas por la junta, la única salida que veían para solucionar esta cuestión era la expulsión de los moriscos (376).

Así pues, siguiendo las indicaciones del arzobispo Ribera, el Inquisidor General insistía ante el rey y ante Mateo Vázquez para que se acometiese el tratamiento de este asunto. En este sentido, en una carta que el secretario

(373).- AHN, Inq., libro 358, fol. 158r. La carta que Quiroga dirigió a los inquisidores en cumplimiento del mandato real en Ibid., fol. 52r.

(374).- Al respecto, véase, Ibid., fols. 61r-v, 64r-69r; IVDJ, envío 8 (III), fols. 173-174.

(375).- AHN, Inq., libro 358, fols. 71r-74v, 77r-80r.

(376).- Sobre los mismos, véase, Ibid., fols. 165v-168r, 100r-112v; P.LOGAS BARTIBAS, op. cit., pp. LXVII-LX; P.BORONAT Y BARRACHINA, op. cit., I, pp. 295-296, 591-607; IVDJ, envío 8 (III), fols. 174-175. También, el 31 de mayo, los inquisidores de Zaragoza remitieron un memorial a Quiroga en el mismo sentido (Ibid., s.f.). Por otra parte, hemos de señalar, las buenas relaciones mantenidas en estos años por Ribera y Quiroga, quien nombró a Miguel Valedín nuncio del tribunal de Valencia a petición del prelado (AHN, Inq., libro 358, fol. 82r; Ibid., leg. 3314, n^o 47; R.ROBRES LLUCH, op. cit., pp. 416-417).

remitió a Quiroga a finales de marzo, se mostraba molesto porque el Inquisidor General no hubiese puesto en conocimiento de la Suprema estas actuaciones (377). Sin duda, Quiroga prefirió mantenerse al margen del Consejo de Inquisición, institución donde la facción "castellanista" había incrementado su dominio tras el acceso de Mateo Vázquez a la secretaría del mismo. Además, la falta de consenso entre sus miembros, respaldando una parte y contrariando otra la opinión del Inquisidor General sobre los remedios que se debían aplicar al problema morisco, se había evidenciado cuando en la Suprema se había abordado este tema (378).

A comienzos de junio, el confesor Chaves se unió a la junta conformada por Delgado, Vázquez de Arce y el conde de Chinchón con la finalidad de revisar los memoriales y las informaciones que se remitían a Lisboa desde las inquisiciones o por parte del Patriarca Ribera, que seguían utilizando a Gaspar de Quiroga como puente (379). El coincidente juicio de los consultados y las intranquilizadoras noticias transmitidas conllevaron que, el día 19 de dicho mes, se reuniese el Consejo de Estado para tratar el medio y la forma de realizar la expulsión. A la junta anterior se sumaron así el duque de Alba y Juan de Idiáquez. Las sesiones se prolongaron hasta el mes de septiembre, quedando planificada la salida de los moriscos del territorio peninsular, que debía iniciarse por los residentes en el reino de Valencia (380). Por otra parte, el Inquisidor General recibió orden de Felipe II, a finales de julio, de poner en conocimiento del Consejo de Inquisición los escritos que enviasen dirigidos a su persona los inquisidores de Aragón y Valencia, así como de otra procedencia,

(377).- IVDJ, envío 91 (caja 131), nº 463; Ibid., envío 56 (caja 75), paquete 6, nº 22, fol. 9.

(378).- Véase la carta que Hernando de Vega escribió a Mateo Vázquez el 24 de marzo (AZ, carp. 139, nº 245). En este sentido, Quiroga se inclinó por utilizar, como en referencia a otros temas, al tribunal inquisitorial de Toledo, evitando la intervención del Consejo (AHN, Inq., leg. 3314, nº 13).

(379).- IVDJ, envío 56 (caja 74), paquete 6, nº 2 (s.f.); Ibid., caja 75, paquete 6, nº 16 (s.f.); Ibid., envío 8 (III), caja 13, fol. 175.

(380).- P.BORONAT Y BARRACHINA, op. cit., I, pp. 298-299; M.DANVILA Y COLLADO, op. cit., pp. 198-199; F.PEREZ MINGUEZ, "Don Juan de Idiáquez. Embajador y consejero de Felipe II" Revista internacional de los Estudios Vascos 23 (1932), pp. 600-601.

sobre este tema (381).

En septiembre, Quiroga centraba todos sus esfuerzos e interés en la celebración del Concilio provincial de Toledo. En relación con las medidas adoptadas en el mismo sobre la cuestión morisca, que guardaban gran similitud con las dictadas poco tiempo antes por el sínodo diocesano, el marqués de Velada recibió diversas instrucciones desde Lisboa a través del secretario Zayas. En este sentido, es significativo que varios miembros que conformaban la junta sobre moriscos también se ocupaban de examinar los acuerdos conciliares (382). Una vez concluida la reunión, el Inquisidor General retornó a la práctica que había seguido en los meses precedentes, informando al rey y a Mateo Vázquez de las noticias que le enviaban desde los distintos tribunales inquisitoriales (383).

A pesar de la intención de Felipe II de proceder en consonancia con lo dictaminado por la junta que se ocupaba del tema, posteriormente, un conjunto de motivos, entre los que se encontraban consideraciones de carácter económico, el desagrado que la decisión causaría entre los señores de vasallos de moriscos, y la posibilidad de que se produjesen alteraciones, provocaron que el rey suspendiese la decisión de expulsar a esta minoría (384). No obstante, como el problema seguía existiendo, puesto que, de modo ininterrumpido, se sucedían las informaciones sobre preparativos de sublevación en concomitancia con el

(381).- Sobre las actuaciones realizadas por Quiroga y la Suprema, de las que el Inquisidor General informaba detalladamente a Mateo Vázquez, véase, IVDJ, envío 91, nº 328-331, 340; AZ, carp. 135, nº 20.

(382).- AGS, Estado, leg. 162, nº 110, 121-122, 230, 235, 251-252; A.FERNANDEZ COLLADO, *Concilios toledanos...*, p. 103.

(383).- IVDJ, envío 91, nº 339, AHN, Inq., libro 358, fol. 130r.

(384).- P.BORONAT Y BARRACHINA, op. cit., I, pp. 300-307; M.DANVILA Y COLLADO, op. cit., pp. 200-201; J.REGLA, op. cit., p. 209.

Turco o con los hugonotes bearneses (385), decidió reforzar las medidas de control y vigilancia. El 17 de mayo de 1583, quedaron suspendidos los edictos de gracia despachados por el Santo Oficio que estuviesen en vigor en Aragón, Valencia y Cataluña (386). Igualmente, el 21 de enero de 1584, se renovó a través de una Pragmática la prohibición sobre portar armas (387). Así pues, en relación con el endurecimiento de la política regia respecto a la población morisca, Gaspar de Quiroga y el Consejo de Inquisición no dejaron de instar a los servidores inquisitoriales para que extremasen su atención en todas las cuestiones concernientes a esta minoría (388).

El fracasado intento de acercamiento a Mateo Vázquez, con el que, una vez que retornó con el monarca de Lisboa, las relaciones alcanzaron cierta tensión, pasando, posteriormente, a estar presididas por la frialdad (389), tuvo su reflejo en los exiguos contactos que Quiroga mantuvo con el resto de los componentes de la facción "castellanista", en la mayoría de los casos, forzados por la pertenencia de algunos de ellos a la Suprema (390). Ello motivó que, entre 1580 y 1582, Quiroga, como hemos señalado, no tuviese ninguna participación en el devenir político de la Monarquía, excluido por el dominio ejercido por el "partido castellanista", centrándose en cultivar y tratar de acrecentar la comunicación con aquellas instancias de las que había recibido un apoyo constante desde su estancia en Roma. Así, fue durante este periodo

(385).- Véase la comunicación que Quiroga mantuvo con los inquisidores de Zaragoza y Valencia en este sentido (AHN, Inq., libro 361, fols. 183r-v, 193v-194v, 215r-v; Ibid., libro 358, fol. 178r-v; Ibid., leg. 3314, n° 46; P.BORONAT Y BARRACHINA, op. cit., I, pp. 311-315), así como con el embajador en Roma (AMAE, Santa Sede, leg. 9, exp. 27, fols. 170-172).

(386).- P.BORONAT Y BARRACHINA, op. cit., I, pp. 307-308.

(387).- Ibid., pp. 315-316; AHN, Inq., libro 254, fols. 239r-244v; Ibid., libro 361, fols. 222v-223r, 232r-233v; Ibid., libro 328, fol. 157r-v.

(388).- Véase, por ejemplo, Ibid., libro 361, fols. 241v, 242v, 255v-256r; AZ, carp. 130, n° 12.

(389).- Véase la carta que Mateo Vázquez dirigió al arzobispo de Toledo el 10 de octubre de 1583 (Ibid., carp. 147, n° 256).

(390).- Las cartas estaban referidas a la concesión de licencias para ausentarse temporalmente o de pequeñas mercedes (AHN, Inq., leg. 3314, n° 19, 28, 38, 60; Ibid., leg. 3284, n° 11).

cuando estrechó su tradicional afecto a la Compañía de Jesús, favoreciendo la expansión de la Orden con la fundación de dos colegios en el arzobispado de Toledo. Este era un aspecto que compartía con la emperatriz María, con quien, desde su retorno a la Península, Quiroga entabló una excelentes relaciones (391). Igualmente, mantuvo una fluida correspondencia con los Cardenales de la Curia, quienes seguían considerando a Quiroga un valedor de sus intereses (392). Además, a partir de 1582, el Inquisidor General fue el único miembro destacado de la facción "papista" que continuó desempeñando sus cargos, después de que Pazos fuese nombrado obispo de Córdoba y Pedro Velarde tuviese que abandonar el oficio de Comisario General de Cruzada. La sensación de desolación y abandono percibida por los integrantes de dicho "partido" cuando se produjo la prisión de sus patronos y cayeron en desgracia ante el rey, se incrementó con el paso del tiempo (393). Así pues, Quiroga constituía la única esperanza para aquellos que, habiendo estado vinculados a la facción "papista", buscaban mantener su situación o lograr la obtención de alguna merced. Por ello, no sólo acudieron a solicitar su protección sus propios clientes, sino también quienes se habían significado por su relación con Antonio Pérez y la princesa de Eboli (394). En este sentido, el prelado prestó una especial atención a su familia, allanando y favoreciendo el medro de sus sobrinos, tanto, como hemos señalado, procurando que ocupasen significados puestos en la iglesia toledana o que entrasen a formar parte del servicio del rey. Así, Alvaro de

(391).- En este sentido, véase, *Ibid.*, leg. 3314, n° 27, 67; IVDJ, envío 91 (caja 130), n° 318. Quiroga también se ocupó de celebrar la misa cuando la infanta doña Margarita profesó en el Real Monasterio de la Descalzas (L.PINELO, op. cit., pp. 133-134; R.MENDEZ SILVA, Admirable vida y heroicas virtudes de aquel blasón de España (...) la esclarecida emperatriz María. Madrid 1655, p. 42).

(392).- AHN, Inq., leg. 2947, s.f.; *Ibid.*, leg. 3284, n° 2, 18, 24, 27; *Ibid.*, libro 328, fols. 65v-66r; *Ibid.*, libro 358, fol. 120r.

(393).- En este sentido, resulta muy significativa la carta que Pazos dirigió a Mateo Vázquez el 21 de marzo de 1580: "Aquí tenemos salud a Dios gracias y deseamos saber lo más de las Magdes Altezas y toda la demás gente que la de aquí mucho se va disminuyendo con la salida del Cardil de Toledo, presidente del Consejo de Indias e que mañana se va el marqués de Pliego y de mano en mano cada día muchos" (IVDJ, envío 21 (caja 32), n° 763).

(394).- Sobre las peticiones llegadas a Quiroga durante estos años, véase, AHN, Inq., leg. 3314, n° 12, 14, 20, 23, 31, 61; *Ibid.*, leg. 3284, n° 3-8, 12. Así mismo, Quiroga siguió ocupándose de los asuntos relacionados con la princesa de Eboli (*Ibid.*, libro 361, fol. 251r-v).

Quiroga, sobrino del Inquisidor General, que había sido nombrado paje real en 1566, y percibido el título de caballero de la Orden de Santiago en 1572, acompañó al monarca en su viaje a Portugal desempeñando el oficio de caballerizo de campo. Durante el mismo, se convirtió en un informador para su tío, entablado una buena relación con Gabriel de Zayas (395).

Los infructuosos intentos de alcanzar un mejor entendimiento con Mateo Vázquez llevaron a Gaspar de Quiroga, a mediados de 1582, a tratar de establecer un mayor contacto con una persona que había alcanzado una alta estimación por parte del rey: el conde de Chinchón. El mediador de esta nueva relación fue el fiscal del Consejo de Inquisición, el licenciado Arenillas de Reinoso, que se hallaba vinculado a ambos. Esto conllevó un cambio en la forma tradicional de Quiroga de despachar la correspondencia, que eligió la vía de Arenillas en detrimento del secretario Cristobal de Ovalle, que había sido captado por Mateo Vázquez (396). Así, mientras que, hasta entonces, la comunicación entre el Inquisidor General y el fiscal de la Suprema se había limitado al tratamiento de cuestiones inquisitoriales (397), durante el periodo que Quiroga permaneció en Toledo ocupado en la celebración del Concilio provincial, Arenillas le informaba tanto de lo que sucedía en Madrid como de las noticias que llegaban de Portugal, aunque, en este sentido, el prelado comenzó a mantener comunicación directa con el conde de Chinchón, quien, entre otros asuntos, puso en conocimiento de Quiroga los pormenores de la

(395).- AZ, carp. 148, n° 24; Ibid., carp. 140, n° 9; IVDJ, envío 91 (caja 130), n° 321, 325, 337; AHN, Consejos, leg. 5310, pieza 4, fols. 78r-79v, 144r-171v. Igualmente, se ocupó de las gestiones pertinentes para la concertación del matrimonio entre María, hija de Agustina de Quiroga, y Diego Castejón, miembro del Consejo de Ordenes (ibid., fols. 79v-81v), así como de que su sobrino, Juan de Quiroga, pudiese tomar las primeras órdenes con exención de modiciones (AHN, Inq., libro 361, fold. 395v-396r).

(396).- De esta maniobra informó Ovalle a Pedro Núñez de Toledo, que se apresuró en poner en conocimiento de Mateo Vázquez lo que estaba sucediendo, así como de los medios que Quiroga y Arenillas ponían para que no fuese visto el contenido de las cartas. Igualmente, prevenía al secretario sobre la poca confianza que debía poner en el fiscal, con quien años atrás había mantenido una buena relación (IVDJ, envío 15, paquete 1, n° 57. La misiva aparece reproducida en G.MARAÑÓN, op. cit., II, pp. 492-493).

(397).- Véase, por ejemplo, AHN, Inq., leg. 3314, n° 15, 18.

enfermedad y muerte del príncipe don Diego (398).

Por otra parte, el Inquisidor General se hallaba vinculado a un asunto, cuya resolución de forma favorable para sus intereses, preocupaba seriamente al conde de Chinchón, puesto que suponía un importante arma que podían esgrimir sus adversarios: las dudas sobre la limpieza de sangre del primer marqués de Moya, tronco del que descendía la Casa nobiliaria de los Chinchón. Los rumores se habían acrecentado en la Corte en los años en que las facciones políticas luchaban por el control del Consejo de Italia. Felipe II ordenó a Quiroga que se ocupase de iniciar las pesquisas que llevasen a clarificar este tema poco antes de su marcha a Portugal (399). Este fue uno de los asuntos que se trataron en la junta conformada por el prelado, Antonio de Padilla Sancho Busto de Villegas y fray Diego de Chaves. El Inquisidor General encargó la realización de las informaciones al doctor Arganda, inquisidor de Cuenca. Los testimonios obtenidos fueron contradictorios, aunque eran mayoritarios los que avalaban el carácter cristiano viejo del linaje. Para dirimir el resultado que se desprendería de la consulta, se reunieron Quiroga, Rodrigo Vázquez de Arce y el confesor Chaves en enero de 1581 (400). Con el cambio operado en la relación entre el conde de Chinchón y el Inquisidor General, éste puso gran empeño en favorecer el interés del mismo en acreditar la "limpieza" de sus antepasados (401).

(398).- Sobre las cartas que Chinchón y Arenillas de Reinoso remitieron a Quiroga en estos meses, véase, *Ibid.*, nº 24, 29, 32, 34, 35. El prelado había oficiado la ceremonia de juramento de don Diego como príncipe heredero el 1 de marzo de 1580 (A.LEON PINELO, *op. cit.*, p, 123). Cuatro años después, el 11 de noviembre, como consecuencia de este fallecimiento era jurado como tal don Felipe, siendo nuevamente Quiroga el encargado de realizar el oficio (*Ibid.*, p, 133; L. CABRERA DE CORDOBA, *op. cit.*, III, p, 64).

(399).- Hemos de señalar que, en los años precedentes, Quiroga, vinculado a Antonio Pérez, había contribuido a la extensión de los rumores. Sobre esta cuestión, véase, S.FERNANDEZ CONTI, "La nobleza cortesana...", p, 240.

(400).- AZ, carp. 129, nº 116. Por otra parte, tanto Quiroga como el rey parecían seguros de que Chaves y Rodrigo Vázquez habían concertado emitir un voto favorable a Chinchón (IVDJ, envío 51, nº 87).

(401).- Véase la carta que Quiroga remitió al monarca en diciembre de 1583 (AZ, carp. 145, nº 13, 24-25). Así mismo, Vázquez de Arce refería al rey: "manda digamos si convendrá dar noticia al conde de Chinchón de lo que se escribe [a Roma] para ver si le contenta o tiene que añadirnos

Cuando, en marzo de 1583, Felipe II retonó a Madrid después de tres años de ausencia, se comenzó a poner de manifiesto que este tiempo había sido aprovechado por diversos individuos para acrecentar su influjo sobre el monarca. Además de Chinchón, regresaba en una excelente posición el secretario Juan de Idiáquez, quien debía el origen de su medro a la protección que le había procurado el Cardenal Granvela (402). Igualmente, Juan de Zúñiga y Requesens esperaba ansioso la vuelta del rey desde que llegase a la Península procedente del virreinato de Nápoles. Sus malas relaciones con Granvela le llevaron a potenciar su acercamiento a Chinchón e Idiáquez. En el mes de abril, acudió finalmente a presentarse ante el rey, contando con el respaldo de sus amigos, especialmente de Mateo Vázquez, pasando a adquirir una gran relevancia en la Corte (403). La aparición de dichos personajes como nuevos beneficiarios de la gracia real hacía presagiar que, tras el paréntesis portugués, se iban a producir una serie de cambios en el ejercicio del poder. No obstante, estos no fueron inmediatos, sino que necesitaron unos meses de gestación, haciéndose visibles desde mediados de 1584. Durante este periodo, el grupo se fue consolidando, consiguiendo que la influencia del Cardenal Granvela, tanto en los asuntos de Estado como en los relativos a los territorios italianos, fuese disminuyendo hasta convertirse en inexistente (404). En relación a estos últimos, la ofensiva que Juan de Zúñiga y el conde de Chinchón desplegaron contra el presidente del Consejo de Italia incluía la reactivación de la intermitente visita a este organismo en el marco de la proyectada Visita General de Italia. Fue en este contexto donde Chinchón comenzó a beneficiarse del acercamiento realizado por Gaspar de Quiroga. Además de hallarse ávido por lograr su rehabilitación política, la colaboración del prelado era importante para

parece que se podría excusar porque él ha dicho al Cardenal de Toledo lo que pretende" (Ibid., carp. 159, n° 55).

(402).- F.PEREZ MINGUEZ, op. cit., 592-594.

(403).- El 11 de abril, Arenillas de Reinoso informaba a Quiroga de que se esperaba la llegada de Zúñiga al Pardo para hacerse cargo del príncipe y recibir nombramiento de mayordomo (AHN, Inq., leg. 3314, n° 39; S.FERNANDEZ CONTI, "La nobleza cortesana...", pp, 242-243).

(404).- Idem, Los Consejos de Estado y Guerra..., pp, 241-249; M.RIVERO RODRIGUEZ, El Consejo de Italia..., pp, 139-142.

neutralizar a Granvela, tanto por su profundo conocimiento de las cuestiones italianas como porque, desde su cargo de Inquisidor General, podía utilizar el enorme potencial con que contaba la institución. Así pues, desde mediados de 1582, Quiroga pasó a intervenir en el desarrollo de la visita, aunque no de forma oficial, comisionando al inquisidor del tribunal de Sicilia Diego de Ahedo para que realizase ciertas informaciones tocante a la misma (405). También estuvieron bajo su control, y por extensión bajo el del conde de Chinchón, la instrucción de las visitas a los territorios italianos, puesto que los visitantes designados, Lope de Guzmán para Nápoles y Gregorio Bravo, que fue enviado a Sicilia, eran personas cercanas al Inquisidor General, aunque, nuevamente, esta actividad quedaba en la sombra, puesto que, como hemos señalado, tras la salida de Hernández de Liébana, fueron Sancho Busto de Villegas, y, posteriormente, Tomás de Salazar, a quienes oficialmente estaba cometido el entendimiento de estas cuestiones (406). Así pues, la colaboración de Quiroga se realizó de forma solapada, no volviendo a adquirir cierta significación en sus actuaciones hasta que los nuevos patronos lograron asentarse en el poder, preludiando una nueva forma de gobierno (407). El 28 de noviembre de 1584, el Inquisidor

(405).- Ibid., pp. 139-140. Por otra parte, en diciembre de dicho año, se inició un pleito entre el regente Carvajal y el licenciado Arenillas de Reinoso por las reclamaciones presentadas por el primero en torno a los salarios que había dejado de percibir en el tiempo que sirvió como inquisidor en Sicilia (AHN, Inq., libro 328, fols. 79r, 86v-87r).

(406).- M.RIVERO RODRIGUEZ, op. cit., p. 145. En enero de 1581, el obispo de Avila había mostrado su desagrado ante la elección de Lope de Guzmán como visitador a causa de su falta de preparación y su pasado "perecista". Además, el nombramiento de secretario de la visita de Nápoles recayó en otro cliente de Gaspar de Quiroga como era Juan de Casanate. En torno a estas cuestiones, véase, IVDJ, envío 91 (caja 130), n° 19; Ibid., envío 80 (caja 104), n° 107; Ibid., envío 81 (caja 102), n° 2; Ibid., caja 107, n° 389; Cartas y avisos dirigidos a Don Juan de Zúñiga, virrey de Nápoles en 1581, pp. 151-152. Por otra parte, el nuevo auge adquirido por Quiroga en los asuntos italianos se puso pronto de manifiesto con la llegada de peticiones de favorecimiento de antiguos protegidos, como la que le dirigió Carlos Lan en abril de 1583 (AHN, Inq., leg. 2947, s.f.), la que realizó Agustín Álvarez de Toledo en nombre de su hermano (Ibid., leg. 3314, n° 53), así como el propio Pedro Núñez de Toledo (ibid., n° 59), el obispo de Tarragona y algunos miembros de la Curia (Ibid., n° 68-69; Ibid., leg. 3284, n° 20). Igualmente, Quiroga trató de promocionar a sus propios clientes, como era Alonso de la Cárcel, para cuyo favorecimiento medió ante Juan de Zúñiga (Ibid., libro 361, fol. 360r) y continuó manteniendo su amistad con el regente León (IVD, envío 96 (caja 138), n° 500).

(407).- La disminuida situación de Quiroga era también observada por los embajadores venecianos. Así, en la relación remitida por Matteo Zane, en 1584, decía: "Il cardinale di Toledo, inquisitor maggiore di Spagna, di settantun'anni, ricco di 250.000 scudi di entrata, e uomo duro nei

General fue comisionado por el monarca para que junto al doctor Juan Fernández de Cogollos, del Consejo Real, el licenciado Núñez de Boorquez y Francisco de Ribera, pertenecientes a la Suprema, Gedeón de Hinojosa, del Consejo de Indias, y Francisco Alborno, del de Ordenes, se ocupasen de examinar la visita realizada al reino de Nápoles, reuniéndose en la posada de Quiroga, con asistencia de Lope de Guzmán y Juan de Casanate. El rey aludía a la ausencia que debían hacer los miembros del Consejo de Italia y el Cardenal Granvela para acudir en su compañía a las cortes que se iban a celebrar en Monzón en 1585 como motivo para la conformación de esta junta. Por tanto, el presidente del Consejo de Italia quedaba nuevamente al margen del entendimiento de estas cuestiones (408). No obstante, pronto surgieron problemas en el desarrollo de los trabajos de la junta. En febrero de 1585, Lope de Guzmán presentaba sus quejas al rey por los intentos que en su seno se estaban realizando para que la visita resultase infructuosa. Para entorpecer este propósito, el visitador había escrito su voto de forma secreta en un libro que había entregado a Quiroga, quien había presentado estas conclusiones como suyas propias, siendo rechazadas por el resto de los jueces de la visita. Guzmán solicitaba al rey que, si la resolución final de los mismos no era acorde con la gravedad de los cargos presentados, hiciese revisar la visita otra vez, puesto que se estaba cometiendo un enorme perjuicio a la justicia, hacienda y patrimonio regio en dicho reino. Igualmente, ponía de manifiesto ante el monarca el irregular comportamiento mantenido por Juan de Casanate durante la instrucción por su conocimiento y entendimiento con los visitados, así como la exclusión por parte de la junta del doctor Colantonio Gizzarello, que había intervenido

negozi e nell trattare. In Corte è stimato non per altro che per esser inquisitor maggiore, ed ora il re si serve poco di lui " (A. ALBERI, op. cit., p. 359).

(408).- Dicha comisión se encuentra en, IVDJ, envío 7 (caja 11), I, fol. 299; AZ, carp. 142, n° 92. Sobre el séquito que acompañó a Felipe II en su viaje, véase, L. CABRERA DE CORDOBA, op. cit., III, p. 112. Por su parte, el visitador Gregorio Bravo desobedecía abiertamente las órdenes de Granvela, alcanzando un alto grado de entendimiento con los inquisidores del tribunal de Sicilia (M. RIVERO RODRIGUEZ, op. cit., p. 145; IVDJ, envío 96 (caja 139), n° 791), llegando a proponer al fiscal Peña como regente tras la muerte del doctor Carvajal (AHN, Inq., libro 328, fols. 186r-v). Sobre ello, también escribía el regente León a Quiroga (Ibid., libro 361, fol. 363v).

activamente en su ejecución y estaba convocado a su examen (409). El 29 de junio, Lope de Guzmán volvía a informar a Felipe II de los agravios que estaba recibiendo por parte de la comisión, que afectaban de igual manera a la autoridad real en Nápoles. Así mismo, sus relaciones con Gaspar de Quiroga se habían deteriorado de forma importante, puesto que el Inquisidor General se había avenido a los criterios del resto de los miembros de ésta, tratando además de favorecer a Juan de Casanate, que había adquirido un gran protagonismo (410). Por su parte, Quiroga mantenía informado al rey de la evolución de las gestiones que se estaban llevando a cabo por la junta, señalando que la enorme cantidad de documentación que había generado la visita hacía que se avanzase muy lentamente hacia su resolución (411).

Durante este periodo, el Inquisidor General también procuró alcanzar un mayor entendimiento con otros personajes de la Corte que le sirviesen para superar poco a poco su relegamiento político, quienes encontraron en Quiroga un solícito colaborador. Así, en enero de 1584, el conde de Barajas, presidente del Consejo de Castilla, agradecía el traslado de su hijo al tribunal inquisitorial de Toledo (412). Unos meses después, el secretario de la embajada en Roma, Martínez de Carnacedo, informaba al Inquisidor General de las gestiones que estaba realizando para satisfacer los deseos del conde de fundar en la iglesia parroquial de Barajas una capilla y patronazgo a semejanza de la constituida por el Cardenal Espinosa en su pueblo natal. Si bien parece que esta intención no se

(409).- AZ, carp. 130, n° 10. A dicha carta, Lope de Guzmán adjuntaba un memorial donde hacía constar los amplios servicios que había prestado al rey.

(410).- En este sentido, Mateo Vázquez apuntaba al rey que, si bien los componentes de la junta eran las personas idóneas para ocuparse de la visita, se podía escribir a Quiroga, sin darle noticia de las quejas del visitador, para que se tornasen a revisar en su posada, concretamente, los cargos que afectaban al regente Daroca (IVDJ, envío 81 (caja 108), n° 1122).

(411).- En torno a esta cuestión, Felipe II apuntaba la conveniencia de que se fuese sentenciando en las causas de los oficiales suspendidos como resultado de la misma (AZ, carp. 130, n° 19). Igualmente, pedía a Quiroga su opinión sobre el modo de proceder de Lope de Guzmán en su ejecución (Ibid., n° 21). Por otra parte, hemos de tener presente que, en 1585, en Nápoles se iniciaba una importante revuelta (R.VILARI, La revuelta antiespañola en Nápoles. Los orígenes (1585-1647). Madrid 1979, pp. 40-99).

(412).- AHN, Inq., libro 361, fol. 218v; Ibid., leg. 3314, n° 50.

había consultado previamente al arzobispo de Toledo, Martínez de Carnacedo aseguró al presidente del Consejo Real que Quiroga no se opondría por las buenas relaciones que ambos mantenían (413). Semejantes muestras de complacencia recibió el prelado de Gabriel de Zayas por haber atendido su petición de favorecimiento a Baltasar Fernández (414), y del marqués de Santa Cruz, por la merced que Quiroga había otorgado a su protegido Diego de Rojas (415). También siguió la indicación de Juan de Idiáquez sobre el nombramiento de Alonso de Motilloa como comisario del Santo Oficio en San Sebastián (416), así como a la de Cristobal de Moura en favor de Fernando Morella (417).

Por otra parte, continuaba cimentando su vinculación con el conde de Chinchón, quien transmitía al Inquisidor General noticias sobre la actividad desarrollada por Felipe II en Aragón, en ocasiones, a través de Arenillas de Reinoso (418). Durante este tiempo, se continuaba tratando por parte de Quiroga, Vázquez de Arce y el confesor Chaves el asunto referido a la limpieza de sangre del primer marqués de Moya. A pesar de que los tres miembros de la comisión coincidieron en afirmar que estaba suficientemente probada la calidad de la familia, la resolución del asunto se continuó persiguiendo a lo largo de 1584, ordenando Felipe II al presidente del Consejo de Castilla que hiciese pública la declaración de caballería, hidalguía y limpieza del marqués de Moya,

(413).- Ibid., leg. 3284, n° 17.

(414).- Ibid., leg. 3314, n° 56.

(415).- Ibid., n° 62.

(416).- Ibid., libro 361, fols. 398v-399r, 407v, 411v. Por su parte, Quiroga también intercedió ante Juan de Idiáquez y Juan de Zúñiga para que el veedor Cristobal de Heredia continuase desempeñando su oficio después de que el Consejo Real le tomase sus libros (Ibid., fols. 400v-401r).

(417).- Ibid., fol. 403r.

(418).- Ibid., leg. 3314, n° 76, 79.

que fue respaldada por un breve de Gregorio XIII (419). La declaración final debía proceder del Consejo de Ordenes, por lo que, para encaminar el tema, en diciembre de dicho año, Mateo Vázquez indicaba a Quiroga que hiciese llamar a Iñigo de Cárdenas, al que debía mostrar todas las escrituras que se habían despachado sobre esta cuestión, incluidas las opiniones de la junta y el breve papal, encargándole en nombre del secretario que guardase secreto sobre su contenido, así como de la conversación que mantuviesen (420). Si bien todo parecía estar perfectamente encaminado, durante el desarrollo de las cortes de Monzón, comenzaron a aparecer también dudas sobre la calidad del linaje de Beatriz de Bobadilla, esposa de Andrés de Cabrera, primer marqués de Moya. Quiroga siguió encargándose de la clarificación de esta controversia, procurando favorecer siempre los intereses del conde de Chinchón. Este tema no quedaría concluido hasta varios años después, causando diversos perjuicios personales y políticos al mismo (421).

Así pues, el acercamiento a las personas que contaban con mayor influjo sobre el monarca, y en especial, al conde de Chinchón, procuró a Quiroga la ansiada rehabilitación en el nuevo sistema de gobierno que se había comenzado a evidenciar desde mediados de 1584 (422). Mientras que los Consejos acentuaban su carácter jurisdiccional, el monarca comenzó a confiar las labores de gobierno a personajes pertenecientes a los mismos que gozaban de su

(419).- AZ, carp. 159, n° 6; Ibid., carp. 148, n° 222-231, 241, 243, 245-246; Ibid., carp. 135, n° 22.

(420).- Ibid., carp. 142, n° 98.

(421).- S.FERNANDEZ CONTI, "La nobleza cortesana...", p. 240. Sobre la correspondencia que Quiroga mantuvo con el monarca en apoyo de las quejas proferidas por Chinchón en cuanto al perjuicio que le causaba la dilación en la resolución (AZ, carp. 147, n° 14; Ibid., carp. 130, n° 19, 21; IVDJ, envío 100 (caja 141), fol. 120r).

(422).- En este sentido, también debió influir en el ánimo de Quiroga la pérdida de dos personas con las que había mantenido excelentes relaciones. En enero de 1585, fallecía monseñor Torres, y solamente unos meses después, de forma repentina, Gregorio XIII. Sobre las informaciones que se remitieron desde Roma a Quiroga de ambos óbitos, así como de la elección de Sixto V, véase, AHN, Inq., leg. 3284, n° 19, 21-23; Ibid., libro 361, fol. 363r. Sobre los actos que se realizaron en la iglesia de Toledo por la muerte del pontífice, véase, ACT, Actas Capitulares. Tomo 18, fols. 142v, 144r, 146r-147r).

confianza. Esto hizo que se formase un grupo estable que, controlando cada uno de los integrantes la parcela que le correspondía, inauguraron una novedosa estructuración gubernativa en la Monarquía hispana que comenzó a funcionar de forma realmente efectiva cuando, en marzo de 1586, Felipe II retornó a Madrid. Así, bajo el control del secretario Mateo Vázquez quedaban las materias eclesiásticas, de Hacienda, Ordenes e Indias. El Consejo de Castilla contaba con la presidencia del Conde de Barajas, mientras que el conde de Chinchón ejercía su influencia en los temas concernientes a Italia y Aragón. Bajo el influjo de Cristobal de Moura estaban las de Portugal, compartiendo con Juan de Idiáquez el dominio de los asuntos militares, siendo éste junto a Juan de Zúñiga quienes asumieron la dirección de los temas relacionados con el Consejo de Estado (423). La implantación de una nueva forma de gobierno también conllevó un cambio en la pugna por el poder. En este contexto, Gaspar de Quiroga logró salir del relegamiento político en el que se había sumido en los años precedentes, puesto que tanto la ostentación del cargo de Inquisidor General como su experiencia en el tratamiento de diversas materias le convertían en una pieza útil dentro del nuevo orden. No obstante, no consiguió alcanzar la relevancia y significación política de épocas anteriores, convirtiéndose en un mero comparsa de los designios marcados por los nuevos patronos.

(423).- S. FERNANDEZ CONTI, Los Consejos..., pp, 249-250.

CAPITULO 8

7. LA REFORMA DEL SISTEMA DE GOBIERNO DE LA MONARQUIA Y LA REHABILITACION DE GASPAR DE QUIROGA (1586-1594)

En abril de 1583, Felipe II volvía a Madrid -tras varios años de ausencia en los que había completado la incorporación de Portugal a su Monarquía- donde era recibido por los ministros que habían permanecido al frente de la administración, encabezados por el Cardenal Granvela. Aunque aparentemente todo seguía igual, la articulación política que tuvo que realizar el Rey Prudente para administrar la Monarquía durante su estancia en el reino vecino, había puesto de manifiesto, por primera vez, la separación física entre el gobierno o centro donde se tomaban las decisiones (la Corte que acompañó al monarca) y los órganos administrativos, que permanecieron en Madrid aplicando las órdenes que recibían. Observándola con un poco de perspectiva, esta situación representó -a nuestro juicio- el punto culminante y la lógica evolución del sistema de gobierno que algunos años antes implantara el Cardenal Espinosa, basado en los letrados, quienes habían protagonizado una indiscutible influencia en el gobierno de la Monarquía hispana hasta este momento dada su cercanía al rey. Pero, al mismo tiempo, la incorporación de Portugal también puso de manifiesto las limitaciones de dicho sistema al tener que recurrir Felipe II a su propia familia para gobernar el reino recién adquirido (lo que pudiera considerarse lógico dentro de una concepción patrimonial de la Monarquía) y sobre todo al asesoramiento y ayuda de ciertos personajes, que no eran letrados, para que a través de su conocimiento e influencia (patronazgo) en el reino vecino, atrajesen a las élites sociales a su causa y de esta manera culminar la campaña con éxito. No debe resultar extraño, por tanto, que durante los años siguientes del regreso de Portugal se librase una dura pugna en la Corte por conseguir el control de la gracia real cuyo resultado fue el surgimiento de nuevos personajes no letrados

como grandes patronos, siendo los letrados relegados a los organismos en que, para su correcto funcionamiento, eran precisos sus conocimientos. Tal divergencia, lejos de ser coyuntural, se fue agrandando con el paso del tiempo, favorecida por la dinámica de intervenciones militares en que -a partir de aquellos años- entró la Monarquía.

El proceso fue acompañado lógicamente por una auténtica revolución administrativa, que se hizo evidente en la fundación y promulgación de ordenanzas para determinados Consejos, carentes de ellas hasta entonces, a pesar de que tales organismos aparezcan mencionados en las crónicas por su nombre y dados por existentes institucionalmente en fechas anteriores a esta época.

Tan compleja evolución -como ya se ha dicho- no fue pacífica ni se hizo de repente, como se comprueba analizando el comportamiento de los principales patronos (1).

En este nuevo funcionamiento, Gaspar de Quiroga no tenía cabida. Su vinculación al conde de Chinchón le permitió salir de su postergación, volviendo a realizar actuaciones de cierta significación política únicamente en aquellos ámbitos que se hallaban bajo el influjo de su patrón. Así, a la muerte del Cardenal Granvela, en 1586, pasó a hacerse cargo de la gobernación del Consejo de Italia. Igualmente, continuó su labor en relación con la controversia surgida en torno a la limpieza de sangre del marqués de Moya. Si bien pertenecer a la nobleza se había convertido en un importante factor favorecedor del medro político, un linaje turbio continuaba siendo motivo de exclusión social. De dicho asunto, seguían encargándose, junto a Quiroga, Rodrigo Vázquez de Arce y el confesor Chaves, que, en agosto de 1586, volvieron a reunirse con los miembros

(1). Sobre el tema, me remito a José MARTINEZ MILLAN y Santiago FERNANDEZ CONTI, "La reorganización del gobierno: de la "Junta de Noche" a la "Junta de Gobierno" (1583-1598)". (En prensa).

del Consejo de Ordenes para tratar de clarificar definitivamente la cuestión (2). Las gestiones pasaron por solicitar a Roma un segundo breve relativo a la genealogía del primer marqués de Moya, encargándose el Inquisidor General de que el negocio se encauzase convenientemente por los consejeros de Ordenes, que fueron informados por Arenillas de Reinoso de forma individual en sus posadas (3). Sin embargo, el inconveniente fundamental partía de las informaciones recibidas en torno a Beatriz de Bobadilla, a la que no se mencionaba en los breves apostólicos ni sobre la que se había realizado una investigación profunda al considerar que los problemas estaban en la procedencia de su marido. Quiroga encomendó esta labor a uno de sus clientes, el inquisidor del tribunal de Valladolid Vigil de Quiñones, que se ocupó de realizar las informaciones entre marzo y junio de 1587 (4). A partir de julio, las presiones para que los componentes del Consejo de Ordenes emitiesen un voto favorable a la limpieza de dicho linaje se incrementaron por parte de Quiroga, que reiteraba las quejas al rey por la dilación en este tema (5). No obstante, resultó forzoso realizar nuevas indagaciones, que otra vez fueron encomendadas

(2).- En enero de 1586, se esperaba el regreso de Quiroga de Toledo para poder reunirse los tres (IVDJ, envío 55 (caja 72), n° 92. Por otra parte, como hemos señalado eran varias las casas nobiliarias que estaban involucradas en este asunto (Ibid., n° 119; AZ, carp. 137, n° 68; *ibid.*, carp. 128, n° 198; *ibid.*, carp. 130, n° 19 y 21; *ibid.*, carp. 145, n° 14). Los consejeros de Ordenes que se ocuparon de esta cuestión fueron Santoyo de Molina, Diego de Ayala, Francisco de Albornoz y Bonifaz (*ibid.*, carp. 148, n° 238).

(3).- IVDJ, envío 51, n° 120; *ibid.*, envío 55 (caja 72), n° 130; AZ, carp. 148, n° 233. En diciembre de 1586, la impaciencia del conde de Chinchón se iba incrementando ante la falta de resolución por parte del consejo de Ordenes. Ante el deseo expresado por Quiroga de acudir a su sede arzobispal, el rey estimó más conveniente su permanencia en Madrid, señalando que si no se había marchado con anterioridad era por que le retenía este asunto (*Ibid.*, carp. 142, n° 183). Por otra parte, en enero de 1587, se trataba de procurar que Quiroga, Chaves y Rodrigo Vázquez participasen en la votación del Consejo de Ordenes en relación a este tema (*Ibid.*, n° 197; IVDJ, envío 55 (caja 73), n° 30, 39 y 42).

(4).- La correspondencia que Quiroga mantuvo con el inquisidor sobre este tema en, AHN, Inq., libro 361, fols. 448r-451v, 455r-456v, 464r-456v.

(5).- IVDJ, envío 51, n° 125; AZ, carp. 141, n° 121. Así mismo, el conde de Chinchón reiteraba al monarca que las acusaciones no tenían fundamento, siendo todo obra de sus enemigos para perjudicarlo (*Ibid.*, carp. 159, n° 7).

al inquisidor Arganda, personaje cercano a Gaspar de Quiroga (6). El tratamiento del tema se prolongó hasta febrero de 1589. Antes de que se hiciese pública la declaración que avalaba la limpieza de sangre de dicha familia, Mateo Vázquez se encargó de informar de la resolución al conde de Barajas y al marqués de Almazán, pertenecientes al Consejo de Estado y cercanos a Chinchón, por expreso deseo del rey, quien ordenó al secretario que procediese a quemar, junto a Rodrigo Vázquez, todos los papeles del proceso que no fuesen imprescindibles (7). Por otra parte, fueron ambos consejeros quienes solicitaron a Felipe II el ingreso del Conde de Chinchón en dicho organismo una vez publicada su ascendencia cristiana vieja, ya que su puesta en cuestión parecía haber vetado su acceso al mismo. Pese a ello, Chinchón no pasó a formar parte de esta institución hasta 1593 (8).

Así mismo, Gaspar de Quiroga se había reintegrado a las reuniones mantenidas por el Consejo de Estado, donde no contó con un papel especialmente relevante, plegándose a las directrices marcadas por los nuevos patronos cortesanos (9). Por otra parte, estas se encontraban en perfecta

(6).- Ibid., carp. 142, n° 265; ibid., carp. 148, n° 240, 242; IVDJ, envío 55, (caja 73), n° 6-7, 150. El 13 de agosto de 1588, el Inquisidor General solicitaba al rey la concesión de una merced para el Inquisidor de Cuenca por los servicios que había prestado en este asunto (Ibid., n° 162). Para valorar el interés que el propio rey tenía en que este tema se resolviese favorablemente para el conde de Chinchón, sirva como ejemplo que, cuando, en septiembre, fue informado de una enfermedad del prelado que, dada su edad, hacía temer por su vida, apuntaba: "en verdad que por ésto es una de las cosas por que deseo que viva el cardenal y quizá la que más" (Ibid., n° 188; ibid., envío 21 (caja 31), n° 330).

(7).- AZ, carp. 143, n° 185, 198-199. Sobre ello insistía en mayo de 1591 el monarca a Gassol, resaltando la confidencialidad de los mismos (Ibid., carp. 145, n° 163).

(8).- S. FERNANDEZ CONTI, "La nobleza cortesana...", p. 241. Sobre la importancia que seguía teniendo la limpieza de sangre como método de diferenciación y exclusión social, en consonancia con la ideología del "partido castellanista", véase la defensa de la misma realizada por Mateo Vázquez en 1591 (AZ, carp. 143, n° 279).

(9).- Sobre su comportamiento, véase, S. FERNANDEZ CONTI, Los Consejos..., pp. 264ss, donde el autor pone de manifiesto la problemática inherente a la documentación generada por dicho organismo en este período. Por otra parte, en una relación sobre los consejeros de Estado en estos años, Luis CABRERA DE CORDOBA apuntaba, respecto a la experiencia de Quiroga: "El Cardenal de Toledo la tenía larga de los negocios de Italia y España, grave ministro, mas profesaba cierta dureza desagradable, excusando las adulantes (?), con decir era naturaleza, como si al político no conviniese más el vivir conforme a razón que a ella" (op. cit., III, pp. 250-251). Por

consonancia con la opinión que el Inquisidor General venía manteniendo desde la década anterior: la conveniencia de desplegar una ofensiva bélica contra Inglaterra. El ataque de Drake a Cádiz en abril de 1587 y la relativa estabilidad reinante en los Países Bajos, conllevaron la adopción de medidas concretas contra la monarquía de Isabel I. La participación de Quiroga en la empresa tuvo dos vertientes. En primer lugar, contribuyó a la financiación de la Gran Armada con cien mil ducados (10). Por otra, en consonancia con los tintes de "Cruzada" que acompañaron los preparativos de la expedición, Felipe II encargó a los arzobispos de Toledo y Sevilla que ordenasen la realización en sus diócesis de plegarias, rogativas y procesiones (11). Igualmente, el rey acrecentó el interés porque se erradicasen los pecados, abusos públicos y se reformasen las costumbres, a cuyo efecto se había constituido una Junta en la que se halló integrado el Inquisidor General (12).

su parte, P. PIERSON califica a Quiroga de "reliquia" política (op. cit., p. 136). Así, en la relación remitida por Camilo Borghese auditor de la Cámara Apostólica, en 1594, sobre el Consejo de Estado, decía: "El Cardenal de Toledo, por ser tan viejo, no entiende ni atiende en nada" (R. HINOJOSA, op. cit., p. 382).

(10).- En este sentido, no hemos de olvidar que Gaspar de Quiroga era considerado uno de los hombres más ricos de su tiempo y que había abogado, en consonancia con los planes de la Santa Sede, por una intervención armada en Inglaterra. Así pues, aunque el nuncio Speciano no especificaba en su correspondencia con Roma qué gran personaje le proporcionaba la información privilegiada que transmitía, no resulta descabellado pensar que se tratara del Inquisidor General, sobre todo si tenemos en cuenta la comunicación que sobre este tema había mantenido con sus predecesores (J.I. TELLECHEA IDIGORAS, *"La Invencible" vista desde la nunciatura de Madrid*, Salamanca 1989, pp. 11-12). Así mismo, la Compañía de Jesús también apoyaba la ejecución de la empresa, ocupando un lugar destacado las obras de Pedro de Ribadeneira, cuyos planteamientos tanta influencia tenían sobre Quiroga (C. GOMEZ CENTURION, *La invencible y la empresa de Inglaterra*, pp. 60-62, 69; F. B. MEDINA, "Jesuitas en la Armada contra Inglaterra (1588). Notas para un centenario", *Archivium Societatis Iesu*, 58 (1989), pp. 3-42). Sobre el dinero aportado, L. CABRERA DE CORDOBA, op. cit., III, pp. 356-357. No obstante, esta no fue la única ocasión en que Quiroga hizo aportaciones monetarias para sufragar los gastos de la monarquía (R. HINOJOSA, op. cit., pp. 369-370; M. ULLOA, op. cit., pp. 100, 507, 682).

(11).- J. I. TELLECHEA IDIGORAS, op. cit., pp. 18-26; C. GOMEZ CENTURION, op. cit., pp. 47-60. Sobre los actos realizados en la Iglesia toledana, véase ACT, *Actas Capitulares*, tomo 19, fols. 83r-v, 89v-90r, 93r, 107r-108r, 109r, 111r, 125v; IVDJ, envío 6 (I), fol. 32.

(12).- La misma, que comenzó a reunirse en 1586, estaba compuesta por Gaspar de Quiroga, Diego de Chaves y el Conde de Barajas, aunque también participaron en las consultas Mateo Vázquez, el licenciado Barrionuevo de Peralta, García de Loaysa y Juan Tomás (AZ, carp. 147, n° 53, 220, 267-271; Ibid., carp. 143, n° 196-197, 200; IVDJ, envío 21 (caja 31), n° 312; Ibid., envío 62 (caja 83), n° 314; Ibid., envío 91, n° 736). En este sentido nos remitimos al trabajo elaborado por I.J. EZQUERRA REVILLA sobre este tema, de próxima aparición.

La conjunción de intereses entre Felipe II y Sixto V había suavizado la tensión existente en sus relaciones. No obstante, cuando se conoció el desastre sufrido por la expedición, esta tornó a aflorar de forma más crispada, al mismo tiempo que tomaban forma planes para realizar una nueva armada que actuara al año siguiente. Según las noticias que el nuncio Speciano enviaba a la Santa Sede, los obispos habían ofrecido su ayuda económica para que esta pudiese llevarse a cabo, creyéndose que Quiroga sufragaría los gastos de tres mil infantes (13). En cuanto a las oraciones y actos religiosos para favorecer el éxito de la misión, habían quedado interrumpidos, proyectándose su reanudación cuando se encontrase todo preparado para acometer este segundo intento (14). Sin embargo, la tirantez entre ambas instancias no sólo venía provocada por la negativa del pontífice de acudir con la ayuda económica prometida para sufragar los gastos de la Armada, que había supeditado al éxito del desembarco, sino por los proyectos de reforma que Sixto V trataba de efectuar en la Iglesia, que, como había sucedido en épocas anteriores, Felipe II creía lesivos para los privilegios y poderes otorgados a los monarcas hispanos. Si bien habían surgido problemas en cuanto al deseo del papa de hacer cumplir a los que gozaban de una dignidad o beneficio eclesiástico con la residencia en sus iglesias en cumplimiento de los decretos tridentinos, sirviéndose de la Congregación del Concilio (15), el asunto que fue remitido al Consejo de Estado estuvo referido al llamamiento que Sixto V realizó de los prelados hispanos para que acudiesen a Roma a visitar el templo de los Sagrados Apóstoles, señalando que, hallándose impedidos para efectuar el viaje, enviasen a algún clérigo de sus iglesias para excusarse. La orden fue comunicada a los

(13).- Las informaciones del nuncio no eran muy precisas, puesto que únicamente los arzobispos de Sevilla y Toledo se habían mostrados dispuestos a colaborar (IVDJ, envío 6 (I), fols. 122-143).

(14).- J. I. TELLECHEA IDIGORAS, op. cit., pp. 32-36, 95; G. MAURA GAMAZO, Duque de Maura, *El designio de Felipe II y el episodio de la Armada Invencible*, Madrid 1957, pp. 270-278; P. PIERSON, op. cit., p. 160; R. HINOJOSA, op. cit., pp. 317-330.

(15).- F. GARCIA HERNAN, "La Curia romana...", p. 643. Felipe II remitió este asunto al Consejo Real, desde dónde se solicitó al pontífice, siguiendo las instrucciones del rey, que suspendiese la ejecución del Breve despachado en este sentido (IVDJ, envío 21 (caja 31), nº 315). Sobre la reforma de la Curia y de la Iglesia en general realizada por Sixto V, y sus difíciles relaciones con Felipe II, a las que no era ajena la postura papal en el conflicto francés, véase, M.B.DE HUBNER, *Sixte-Quint*. París 1882, II, passim.

obispos a través del nuncio, quienes acudieron al rey para recibir instrucciones sobre cómo debían proceder. El monarca encargó al embajador en Roma, conde de Olivares, que tratase con el papa sobre los inconvenientes que representaba el cumplimiento de su mandato, ordenando a Mateo Vázquez que pusiese este asunto en conocimiento de Juan de Idíquez y de Cristobal de Moura (16). Además de proseguir las negociaciones a través del embajador y del nuncio para lograr la anulación del breve papal, Felipe II cometió al Consejo de Estado el tratamiento de esta cuestión (17), así como que expresasen su opinión sobre la decisión regia de enviar a Roma tres procuradores, uno por cada una de las Coronas, en representación de todos los prelados, para exponer las causas que tenían para excusarse de obedecer el llamamiento. En la reunión del Consejo acaecida el 22 de mayo de 1589, Quiroga expuso su negativa a emitir ningún voto, puesto que el papa le había otorgado dispensa. A pesar de la insistencia del marqués de Almazán, el arzobispo de Toledo no mudó su parecer, forzando a que cesase la deliberación sobre esta materia. La misma postura adoptó cuando, unos días después, se tornó a considerar este tema, alegando que no quería votar para evitar ofender al pontífice, a quien tanto debía. Ante este nuevo rechazo, el conde de Barajas procedió a expresar su juicio. En la actitud papal veía un intento de acabar con el patronato regio, puesto que el pontífice podía proveer aquellas iglesias que vacasen en Roma, atrayendo a los obispos con la intención de que muriesen allí. También criticaba la actitud de algunos prelados, que trataban de salvaguardar su actuación ante la Santa Sede, alentando aparentemente las medidas de Sixto V, excusándose y culpando a Felipe II de que no se obedeciesen sus mandatos. Así mismo, recriminaba la actuación del nuncio, de quien opinaba que se debía procurar su sustitución con brevedad, así

(16).- En la carta que Vázquez remitió al monarca el 3 de agosto de 1588, le informaba de la notificación que habían recibido los obispos de Zamora y Osma. Por su parte, apuntaba algunas de las causas que se podían presentar a Sixto V para que anulase esta orden: la larga ausencia que los prelados harían del gobierno de sus iglesias y del socorro de los pobres, así como el peligro y gasto de viaje. Igualmente, aconsejaba al rey que se informase de este tema al conde de Barajas (AZ, carp. 143, n° 126). Véase, igualmente, la postura remisa a obedecer al pontífice adoptada por Juan García, obispo de Almería, que fue instado por el nuncio para que se pusiese en camino en enero de 1589 (Ibid., carp. 141, n° 181; Ibid., carp. 150, n° 32).

(17).- Así mismo, Felipe II encargó a Francisco de Idíquez que informase de este tema al confesor Chaves (IVDJ, envío 91 (caja 131), n° 621, 825).

como la toma de decisiones de mayor dureza que la simple remisión de procuradores. Ante la conformidad que el marqués de Almazán mostró tener con la opinión del presidente del Consejo de Castilla, Quiroga decidió intervenir, manteniendo pareceres semejantes a los expuestos por Barajas, mostrando mayor acritud en sus consideraciones. Añadía que se debía procurar obtener una prorrogación lo más amplia posible del plazo quinquenal que Sixto V había fijado a los obispos para que realizasen el viaje, encomendando esta negociación a una persona de autoridad y evitando la participación del conde de Olivares, por quien el papa sentía una profunda antipatía. Proponía que esta labor la efectuasen tres prelados que acudiesen a Roma bajo la apariencia de ir a cumplir con la orden papal, procediendo, una vez llegados a la Ciudad Eterna, a informarse de los verdaderos motivos que Sixto V había tenido para realizar este mandato y se ocupasen de buscar el remedio. Por su parte, el conde de Barajas estimaba que el licenciado Temiño y Pedro Portocarrero, obispos de Avila y Calahorra, serían idóneos para realizar esta comisión (18). En una sesión posterior, que tuvo lugar el 4 de junio, Quiroga añadió que lo que pretendía Sixto V era entender a través de los prelados las usurpaciones que los seglares habían realizado de las iglesias y de las materias dependientes de estas (19). El confesor Chaves puso en conocimiento de Francisco de Idiaquez que había recibido una carta del obispo de Sigüenza, por la que se daba aviso de que el papa había dispensado con los prelados sobre su ida a Roma, aunque debían acudir procuradores en su lugar (20). El conde de Barajas se encargó de tratar con el nuncio el medio que finalmente se iba a adoptar, proponiendo que acudiesen tres prelados en representación de los obispos de cada una de las coronas, o bien, que los dichos obispos eligiesen en cada una un individuo que

(18).- La relación que Francisco de Idiaquez remitió al rey, fechada el 28 de mayo se encuentra en *ibid.*, s.f.

(19).- Igualmente, Francisco de Idiaquez también mantenía informado a Mateo Vázquez sobre la evolución de este tema (*Ibid.*, nº 623, 626).

(20).- *Ibid.*, nº 624. Así, en agosto de 1589 se comunicaba al obispo de Tarragona que no iniciase su viaje, puesto que, según la declaración papal, no incurría por ello en ninguna pena (*Ibid.*, envío 94 (caja 135), nº 170). Juan Pérez Muñoz, encargado de los negocios de la dignidad arzobispal de Toledo en Roma, informaba a Quiroga en el mismo sentido, advirtiéndole que Sixto V no admitía excepciones sobre el envío de los mismos (AHN, Inq., leg. 3284, nº 48).

fuese en representación de todos ellos. No obstante, las diligencias se fueron dilatando, sin que se hubiese llegado a tomar una determinación cuando, en agosto de 1590 se produjo el fallecimiento del pontífice (21).

Por otra parte, la falta de significación política de Quiroga también quedó de manifiesto en el tratamiento de los asuntos inquisitoriales. Como hemos señalado, a finales de 1587, se conformó una junta cuya finalidad era buscar una solución a los conflictos jurisdiccionales que se producían entre Consejo Real y Suprema, que desde 1585 había sufrido un incremento directamente relacionado con la función que pasaron a desempeñar los mismos en el nuevo sistema de gobierno, en el que cada uno de los organismos trató de salvaguardar su esfera de influencia. Estuvo integrada, en un primer momento, por el confesor Chaves, Pedro Portocarrero, Juan Fernández Cogollos, Alonso Núñez de Bohorquez y Junco de Posada. El 1 de enero de 1588, Quiroga presentaba al rey sus protestas, puesto que no había sido convocado a sus reuniones, que tenían lugar en la celda de Diego de Chaves, señalando que un asunto propio de la Inquisición debía dirimirse en su presencia. La queja presentada por el Inquisidor General tuvo como consecuencia que tanto Quiroga como el Conde de barajas, que tampoco había sido convocado, fuesen incluidos en su composición, aunque era Pedro de Portocarrero, por indicación de Mateo Vázquez, quien se encargaba de informar al rey sobre el desarrollo de dicha junta (22). Terminado un primer período de sesiones, esta se tornó a reunir en el mes de agosto, puesto que si bien se había puesto remedio a los conflictos más inmediatos, el monarca insistía en que se alcanzase un acuerdo definitivo para que estos no se reiterasen (23). De nuevo se volvieron a suscitar problemas en cuanto a sus integrantes que motivaron las reclamaciones de Gaspar de Quiroga, puesto que se encontraba

(21).- AZ, carp. 141, n° 191; IVDJ, envío 91 (caja 131), n° 559. Aún en abril de 1590, García de Loaysa realizaba una memoria de cómo debían proceder los prelados si finalmente tenían que acudir a Roma (AZ, carp. 152, n° 93).

(22).- IVDJ, envío 55 (caja 73), n° 1. Sobre las dudas que albergaba el rey respecto a la conveniencia de que asistiesen a la Junta, véase, *ibid.*, n° 3; *ibid.*, envío 51, n° 134; AZ, carp. 143, n° 11.

(23).- *Ibid.*, carp. 146, n° 229; *Ibid.*, carp. 141, n° 160; IVDJ, envío 55 (caja 73), n° 57.

desequilibrada la representación de cada una de las instituciones de forma desfavorable para los intereses de la Suprema. Para subsanar el perjuicio que previsiblemente podrían sufrir los intereses inquisitoriales, solicitaba a Felipe II que permitiese la asistencia de fray Diego de Chaves, que había sido sustituido por Rodrigo Vázquez de Arce. Si bien el monarca accedió a esta propuesta, limitó a ocho el número de miembros, para evitar que la reunión resultase inefectiva por esta causa. El protagonismo adquirido por Rodrigo Vázquez de Arce desde que se incorporó a la misma fue importante (24). No obstante, como hemos referido, los cambios producidos en el Consejo de Inquisición en 1589, como consecuencia de la pérdida de poder sufrida por el "partido castellanista", provocaron una renovación de consejeros, pasando a formar parte de esta institución personajes vinculados a los nuevos patronos cortesanos. Esta situación tuvo un reflejo inmediato en la composición de la junta de competencias, ya que algunos de sus integrantes hubieron de abandonar la Corte, retornándose meses después a la práctica habitual de reunir a dos miembros de cada Consejo para tratar este tipo de asuntos (25). Por otra parte, el declive del "partido castellanista" también se hizo evidente para Mateo Vázquez, quien, el 4 de mayo de 1589, recibía aviso por parte de Zayas de como Quiroga le había referido que el tratamiento de los asuntos inquisitoriales no se realizaba a través del secretario de la Suprema, sino que eran enviados a Franqueza, hechura del Conde de Chinchón. Dos días después, Vázquez presentaba sus reclamaciones al rey por este menoscabo en sus atribuciones, mientras que Zayas, en una carta posterior, aconsejaba al secretario que hiciese saber a Chinchón que había percibido su maniobra y mencionase la amistad que siempre les había unido. Si bien Mateo Vázquez conservó la secretaría del Consejo de Inquisición hasta que se produjo su fallecimiento en 1591, este oficio fue posteriormente ocupado por un cliente del Conde de Chinchón, el licenciado Arenillas de Reinoso (26).

Así pues, durante los últimos años de su vida, Gaspar de Quiroga no contó

(24).- AZ, carp. 143, n° 155-157; Ibid., carp. 146, n° 220.

(25).- AZ, carp. 141, n° 187-190.

(26).- Ibid., carp. 143, n° 192; IVDJ, envío 8 (III), caja 13, fol. 198.

con ningún influjo en la toma de decisiones políticas, interviniendo de forma muy limitada en los asuntos en que era necesaria la presencia del Inquisidor General o bien en aquellos que obedecían a los intereses políticos del patrón cortesano que posibilitó su rehabilitación política, como sucedió con su designación como presidente del Consejo de Italia. Por ello, su labor de patronazgo fue muy reducida, teniendo que recurrir para poder favorecer a aquellos que buscaban su protección, tanto al conde de Chinchón como a García de Loaysa, quedando prácticamente limitada esta actuación a procurar el medro de su propia familia (27). Así, en marzo de 1589, Gonzalo Ruiz de Medina, sobrino de Quiroga, era nombrado paje real y obtenía la concesión de un hábito (28). Paralelamente, el Inquisidor General trató de que el licenciado Juan de Alderete, oidor de la Chancillería de Valladolid y también sobrino suyo, fuese promocionado a la plaza vacante en el consejo de Ordenes por muerte de Santoyo de Molina, e, igualmente, que no se viese perjudicado por la visita que Jerónimo Manrique, obispo de Cartagena, estaba efectuando en dicho organismo (29).

8.1. La segunda gobernación del Consejo de Italia.

Como hemos señalado, la rehabilitación política de Gaspar de Quiroga estuvo directamente relacionada con el deseo de Juan de Zúñiga y del conde de Chinchón de establecer su dominio sobre los asuntos italianos, propiciando el

(27).- En este sentido, véase, AHN, Inq., leg. 3314, n° 10; *ibid.*, leg. 3284, n° 44; *Ibid.*, libro 361, fols. 410r-v, 419r, 432v; AZ, carp. 137, n° 58. Un caso especialmente significativo fue el constituido por el doctor Acevedo. Llegado a Madrid en 1586, tras la muerte de su protector, el obispo de Zaragoza Andrés Santos de San Pedro, trató de obtener de Gaspar de Quiroga un oficio inquisitorial. Sin embargo, pronto buscó el favorecimiento de patrones más poderosos. Por mediación de Mateo Vázquez y García de Loaysa, a quien se vinculó de manera significativa, fue nombrado ayo del hijo del duque de Lerma y menino del príncipe Felipe (M. ESCAGEDO Y SALMÓN, Los Acevedo, Santander 1928, pp. 19-22). Por otra parte, Quiroga continuaba recibiendo las solicitudes de diversos miembros de la Curia, así como de los servidores de la Monarquía en Roma (AHN, Inq., lib. 361, fols. 446v, 449r-v, 465v, 479v, 483v, 514r, 515r, 517v, 531r, 556r; *Ibid.*, libro 253, fol. 315).

(28).- *Ibid.*, leg. 2479, caja 1, n° 59.

(29).- *Ibid.*, n° 59 (I y III), 61, 63; *Ibid.*, libro 361, fol. 560v; IVDJ, envío 91, n° 350-351.

relegamiento político del Cardenal Granvela. Su acercamiento al Tesorero General de Aragón permitió a éste contar con un personaje que, ávido por colaborar, puso a su servicio su experiencia en dichas materias y las posibilidades de actuación que propiciaba la ostentación del cargo de Inquisidor General. Esta situación conllevó que, muerto Zúñiga, fuese Chinchón quien pasase a controlar las cuestiones italianas en los años posteriores. El ejercicio de su poder se vio además facilitado por el fallecimiento del cardenal Granvela, en septiembre de 1586, precipitando el ascenso de Quiroga a la gobernación del Consejo de Italia (30). Si bien los cronistas señalan las dudas albergadas por el prelado para aceptar la comisión del nuevo cargo (31), su testimonio contrasta con el que Zayas transmitió a Mateo Vázquez, el 28 de septiembre, sobre la reacción de Quiroga cuando le llevó la carta de Felipe II y la cédula por la que se comunicaba a los miembros del Consejo de Italia que el Inquisidor General realizaría labores de presidente de forma provisional, hasta que se designase a otra persona, resaltando el agrado con el que recibió el nombramiento (32). No obstante, parece que, como posteriormente demostró Quiroga en su modo de proceder, ambas versiones reflejaban un determinado aspecto de la situación política del prelado.

(30).- El 9 de septiembre, Zayas refería a Mateo Vázquez: "mañana empieza León a presidir en Cons^o de Italia porque cierto Granvela va perdiendo tanto que se teme durará poco" (IVDJ, envío 56 (caja 75), paquete 6, n^o 13, s.f.); A. LEON PINELO, op. cit., p. 137; L. CABRERA DE CORDOBA, op. cit., III, p. 201). Sobre la muerte de Granvela, Zayas escribía a Mateo Vázquez el 25 de septiembre: "sepa v.m. que viendo [Quiroga] desde su ventana sin demostrarse passar el cuerpo de Granvela y el rostro descubieto se enterneció de manera que humedeció todo un pañuelo con las lágrimas y estuvo retirado sin dar lugar a que le viese nadie hasta lanoche/ signum boni ac apii anium/ y no lo es menos el querer fundar en Orán un colegio de la Compañía, que ya lo ha puesto en plática con Rivadeneyra y otros" (IVDJ, envío 56 (caja 75), paquete 6, n^o 13, s.f.).

(31).- P. SALAZAR Y MENDOZA, op. cit., p. 306: "Luego no la quería, mas viendo la determinada resolución del rey, la aceptó y tomó de ella la posesión (...) Díxome el Conde de Chinchón don Diego Fernández de Cabrera y Bobadilla, gran ministro y privado del rey, que estuvo atento hasta saber si aceptava, y que se mostró muy servido de que ubiesse aceptado, porque lo dudaba".

(32).- "agradóle mucho y con demostración de grande agradecimiento respondió que besaba humildemente las manos de Su Md. por la merced que en esto le hacía, pues estima en más el servirse del que cuanta hacienda le ha dado". El rey había señalado la posada del cardenal como lugar de reunión del Consejo, atendiendo a la edad y salud de Quiroga. Sin embargo, este insistió en que, si era más conveniente acudiría a palacio (IVDJ, envío 56 (caja 75), paquete 6, n^o 13, s.f.).

Tan pronto como Quiroga asumió sus funciones, recibió la comisión del rey para que la resolución de la visita del reino de Nápoles pasase a efectuarse en el Consejo de Italia, manteniéndose la participación del visitador Lope de Guzmán y de Juan de Casanate, incorporado al servicio de la Casa Real de Aragón (33). La tirantez de las relaciones entre el nuevo gobernador y Lope de Guzmán, así como las reiteradas quejas de éste por el comportamiento de Quiroga tanto al rey como al conde de Chinchón y a Mateo Vázquez se continuaron sucediendo a lo largo de 1587. La causa de sus reclamaciones era la ausencia que el Inquisidor General había realizado, que, unida a sus ocupaciones en otras instituciones de la monarquía, provocaban que la determinación de la visita avanzase con una extremada lentitud (34). El 31 de julio, el monarca ordenaba a Quiroga que, además de proseguir con el examen de la visita de Nápoles, se iniciase la revisión de la que se había comenzado en Sicilia. Para ello, mandaba que los miembros del Consejo de Italia que se reunían en casa del cardenal se dividiesen en dos salas. En la primera, los regentes León, Saladino y Taboada, con la asistencia de Gabriel de Zayas, Lope de Guzmán y Casanate, se ocuparían de continuar dicha visita, mientras que, en la segunda, conformada por los regentes Ponzón, Cadena y David, junto al visitador Gregorio Bravo, al que se otorgaba voto decisivo, al igual que se había dado a Lope de Guzmán, y el secretario Francisco de Idiáquez, se encargarían de entender en la visita de Sicilia. Quiroga recibía orden de presidir de forma ordinaria en la primera sala, aunque, si fuese necesario por producirse paridad de votos, debía pasar a la segunda. No obstante, si en alguna de las reuniones se trataba de cambiar o establecer de forma novedosa una ley, orden o instrucción concerniente a los tribunales u oficios de estos reinos, debía hacerse juntar a ambas salas para su

(33).- Dicha comisión en *ibid.*, envío 7 (caja 11), I, fol. 298. Por otra parte, desde otras instancias se había intentado entender en la visita aprovechando la enfermedad de Granvela. Así, Francisco de Villafañe informaba a Mateo Vázquez cómo había solicitado al rey que, para que esta quedase resuelta con brevedad, se podrían juntar algunos miembros de la comisión constituida en 1584 con diversos jueces del Consejo Real. También apuntaba las dudas que el conde de Barajas había expuesto sobre esta actuación (*Ibid.*, envío 96 (caja 139). n° 688-689).

(34).- *Ibid.*, envío 81 (caja 107), n° 245, 247-248. También representó la inconveniencia de la dilación el regente Francisco Daroca, que se encontraba esperando su sentencia desde hacía treinta meses (C. RIBA GARCIA, El Consejo Supremo de Aragón en el reinado de Felipe II. Madrid 1915, pp. 336-337).

consideración. También advertía al Inquisidor General que el Conde de Chinchón quedaba exonerado de intervenir en la determinación de ninguna de las dos visitas, puesto que estaba impedido por sus ocupaciones en otros asuntos (35). Sin embargo, la falta de actividad en relación a estos temas quedaba constatada cuando, en el mes de octubre, Felipe II tenía que repetir dichas instrucciones a Quiroga, quien parecía haberlas olvidado teniendo en cuenta las preguntas que realizaba al rey sobre el procedimiento a seguir (36). Por otra parte, Felipe II aclaraba a Zayas que, en ningún caso, el Inquisidor General se debía convertir en el juez de las visitas, sino contar con la superintendencia en ambas reuniones (37).

A comienzos de abril de 1588, quedaba finalizada la revisión de la visita de Nápoles, con lo que los regentes León y Saladino, así como Gaspar de Quiroga, se agregaron a la vista de la ejecutada en Sicilia, aunque de forma provisional, puesto que el rey les comisionaba para que, cuando retornase Luis de Castilla con los resultados de la instrucción de la visita a Milán, debían pasar a entender de ella, nombrándose junto a ellos otros jueces para la determinación de la misma. Así mismo, el monarca insistía en que la ausencia que nuevamente había realizado Quiroga no tenía que interrumpir las gestiones, señalando la sala del Consejo de Italia para proseguir esta labor ante la imposibilidad de acceder a la posada del Inquisidor General (38).

En este sentido, parece claro que el arzobispo de Toledo no se estaba empleando con mucho entusiasmo en sus funciones como gobernador del Consejo de Italia. Si bien, como hemos señalado, su aceptación del cargo equivalía a cimentar su rehabilitación política, era consciente del papel

(35).- IVDJ, envío 81 (caja 107), n° 262.

(36).- Ibid., n° 274

(37).- Esta cuestión tenía que quedar reflejada en las nuevas instrucciones, que se fecharon el 28 de enero de 1588 (Ibid., caja 108, n° 892). En la misma, Zayas era sustituido por Martín de Gante, admitiéndose también en dicha reunión a Alonso Méndez de la Fuente, que había actuado como secretario de la visita a Sicilia (AZ, carp. 153, n° 61).

(38).- Ibid., n° 60.

secundario y falta de significación que estaba condenado a desempeñar, siguiendo las directrices marcadas por el patrón cortesano que había propiciado la superación de su relegamiento, el conde de Chinchón, que era quien realmente dominaba los asuntos italianos, lo que, obviamente, pudo influir en que dudase antes de aceptar el cargo. Esto quedó perfectamente reflejado en la labor de patronazgo efectuada por Gaspar de Quiroga, que, en diversas ocasiones, solicitaba a Chinchón la concesión de oficios y mercedes para sus protegidos como si fuese éste el presidente de la institución (39). Sus limitaciones se constataron en algunos casos, como en la provisión del arzobispado de Monreal en un sobrino de Luis de Torres, con quien, como hemos señalado, había mantenido una buena amistad. El rey consultó con el Inquisidor General su provisión, quien únicamente adjuntó las relaciones y testimonios recogidos sin incluir su opinión. Esta falta de apoyo estuvo motivada porque desde el Consejo de Italia antepusieron para ocupar esta prelación a Francisco de Ribera, Junco de Posadas y Juan Fernández Cogollos, lo que suponía el comienzo de la ofensiva contra los miembros del "partido castellanista" (40). La introducción en esta institución de individuos vinculados al binomio Quiroga-Chinchón se había iniciado antes de la muerte del Cardenal Granvela, afianzándose esta práctica durante el período que el Inquisidor General asumió la gobernación (41).

(39).- Desde que Quiroga accedió a la gobernación del Consejo de Italia, muchos de sus antiguos clientes, principalmente vinculados a Nápoles, acudieron a él en busca de favorecimiento. En este sentido, véase, AHN, Inq., leg. 3284, n° 35-38, 46-47; IVDJ, envío 62 (caja 84), n° 723. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el gobernador recibía instrucciones precisas del rey (AZ, carp. 140, n° 230) o bien acudía al Conde de Chinchón (Ibid., envío 56 (caja 75), paquete 6, n° 11, s.f.; ibid., envío 80 (caja 105), n° 469; AHN, Inq., libro 361, fol. 516r). En agosto de 1588, Felipe II encarecía a Quiroga que los nombramientos no se comunicasen por cartas particulares, por el perjuicio que en su autoridad percibían los virreyes de Nápoles y Sicilia, así como el gobernador de Milán (AZ, carp. 141, n° 129).

(40).- Mateo Vázquez aclaraba que Ribera estaba propuesto para el obispado de Segovia, asegurando que los otros dos se negarían a aceptar la provisión. Esta finalmente se hizo en el sobrino de don Luis de Torres (IVDJ, envío 81 (caja 107), n° 293, Ibid., caja 108, n° 622, 715). Igualmente, Martínez Carnacedo solicitaba a Quiroga, en agosto de 1588, la concesión de una escribanía en Nápoles. El prelado en su contestación aseguraba que si estuviese en su mano "v.m. la tubiera sin duda, mas no se puede más, havremonos de contentar con hazer nuestra diligencia/ yo hare lo que pudiere" (AHN, Inq., libro 361, fols. 526v-527r).

(41).- Este fue el caso de los doctores Taboada y Saladino. En este sentido véase, M. RIVERO RODRIGUEZ, El Consejo de Italia..., pp. 146-149.

En consecuencia, la ostentación de la secretaría del mismo por Gabriel de Zayas, vinculado a Mateo Vázquez, constituía un elemento a combatir, puesto que, la superficialidad de la reforma realizada sobre el oficio de secretario en 1579 provocó que Zayas pudiese contar con unas atribuciones y posibilidades de actuación semejantes a las que había disfrutado su predecesor en el cargo. Para limitar y controlar su actividad, en 1587 le fue impuesto como oficial de la secretaría Francisco de Idiáquez, sobrino de Juan de Idiáquez, constituyendo esta una solución media que no satisfizo a las partes. La consecuencia fue que, cuando en 1593 se produjo el fallecimiento de Zayas, se retomase la reforma de la secretaría del Consejo de Italia con la intención de delimitar definitivamente sus competencias, teniendo como consecuencia la conformación de tres secretarías diferenciadas, donde se gestionasen los asuntos de Nápoles, Sicilia y Milán (42). Igualmente, la provisionalidad con que Quiroga había sido proveído en la gobernación del Consejo de Italia conllevó que Mateo Vázquez tratase de contrarrestar su pérdida de influencia, instando al monarca en 1588 para que nombrase en la presidencia de dicha institución a unos de sus clientes, en concreto a Hernando de Vega. Sin embargo, el dominio ejercido por Chinchón hizo infructuosos los intentos provenientes del grupo "castellanista" por obtener el relevo de Quiroga (43).

Así mismo, Quiroga debió hacer frente, en los primeros años de su actuación a los problemas jurisdiccionales surgidos nuevamente entre la Monarquía Hispana y la Santa Sede en los territorios italianos. El impulso que Sixto V procuró en la reforma de la Curia y de la Iglesia en general, a través de la configuración de congregaciones permanentes, volvió a generar diversos

(42).- Sobre dicha división y sus competencias, véase, Ibid., pp. 155-160; H.G. KOENIGSBERGER, La práctica del imperio, pp. 74-76. En torno a las quejas que Zayas realizaba a Mateo Vázquez en reflejo de su situación, AZ, carp. 135, n° 117. Por otra parte, en noviembre de 1586, Francisco de Idiáquez fue el encargado de advertir a Quiroga que su forma de señalar los despachos no se ajustaba al estilo del Consejo de Aragón, del que había derivado el usado en el de Italia (IVDJ, envío 81 (caja 108), n° 621).

(43).- La propuesta de Mateo Vázquez al monarca se realizaba después de que Zayas le hubiese comunicado los rumores de que Felipe II pensaba nombrar presidente, apuntando los mismos a Juan de Idiáquez, al duque de Osuna y al conde de Chinchón (Ibid., envío 57 (caja 76), carp. VII, fol. 27; Ibid., envío 55 (caja 73), n° 275).

problemas, principalmente en Nápoles, donde la aplicación de los preceptos del concilio tridentino revestía una especial problemática (44). No obstante, la decidida actuación del pontífice en defensa de la jurisdicción eclesiástica frente a los privilegios de la Monarquía Hispana tenían un alcance mayor. Según refería el licenciado Ramírez a Mateo Vázquez, en agosto de 1587, desde Roma se trataba de atentar contra la Monarchia Sicula, denunciando la usurpación que Felipe II había realizado de la jurisdicción eclesiástica y procurando que la resolución de las causas se remitiese a la Santa Sede. Para poner freno a esta actuación, Ramírez proponía que se introdujesen espías en las casas de diversos Cardenales -en concreto, Caraffa, Santa Severina, Alexandrino y Aragón- y que no se confiase en el nuncio Speciano, hechura de los cardenales Savelo y Santa Severina, cuya inclinación profrancesa y naturaleza napolitana respectivamente influían para que buscase el perjuicio de la monarquía Hispana. Advertía que el nuncio estaba versado en los asuntos de jurisdicción episcopal, por lo que se debían prevenir que no utilizase sus conocimientos para incitar a los prelados peninsulares o de Nápoles y Sicilia a una defensa radical de su jurisdicción. Por otra parte, consideraba necesario que Felipe II contase con un mayor influjo en la Curia, procurando el nombramiento de tres o cuatro Cardenales que pudiesen restringir la adopción de medidas lesivas e intervenir donde no lograsen llegar las gestiones del embajador. Denunciaba que de Nápoles se sacaban caballos que se llevaban a Roma, donde eran embarcados hacia Francia, lo que causaba un importante daño al fortalecerse así los enemigos de la Monarquía Hispana. Terminaba su informe recomendando que las fortificaciones de Sicilia y Milán fuesen reforzadas en previsión de los ataques que pudiesen sufrir y que el gobierno en dichos territorios, así como el de Flandes no fuese entregado a personas que no fuesen españolas (45). Por estas mismas fechas, el nuncio Speciano trataba con Gaspar de Quiroga y con el regente Catena de buscar una solución a la conflictiva aplicación de los acuerdos tridentinos en Nápoles, puesto que Felipe II insistía en que cualquier diligencia que se efectuase en el reino

(44).- En este sentido, véase E. GARCIA HERNAN, op. cit., p. 644; N. MOSCONI, La nunziatura del cremonense Cesare Speciano negli anni 1586-1588 alle corte di Filipp II. Cremona 1939, pp. 22-23.

(45).- IVDJ, envío 57 (caja 76), carp. VI, fols. 105-107.

debía realizarse contando con el beneplácito del virrey. Finalmente, en noviembre de 1587, Speciano escribía a Roma que gracias a la mediación que Quiroga realizaba en favor de sus pretensiones, creía que se permitiría la realización de una visita a los lugares píos y hospitales que no estaban bajo la protección del monarca hispano. No obstante, su intento colisionó con el Consejo de Italia y el virrey napolitano (46).

Sin embargo, la limitada capacidad de actuación de Quiroga en los asuntos italianos quedó plasmada, principalmente, en su vacilante política respecto a Sicilia, como consecuencia de su doble condición de gobernador del Consejo de Italia y de Inquisidor General. Si bien, por un lado, debía apoyar la autoridad de los virreyes, también procuró respaldar la actuación del tribunal del Santo Oficio, conformado por sus propios clientes. Con la tradicional conflictividad que presidía las relaciones entre ambas instancias, la táctica de Quiroga fue evitar la toma de decisiones, tratando de que la Inquisición no sufriese menoscabo, pero sin realizar una política abiertamente a su favor que hubiese podido contrariar los deseos del conde de Chinchón y del rey (47). Este difícil equilibrio y, sobre todo, la poca significación de su actuación, llevaron a Quiroga a solicitar a Felipe II repetidamente a lo largo de 1591, que le exonerase del desempeño de la gobernación del Consejo de Italia. Según refiere Luis Cabrera de Córdoba, los deseos de abandonar el ejercicio del cargo estuvieron motivados porque Quiroga se sintió ofendido y humillado a causa de que el nombramiento del Condestable de Castilla como gobernador de Milán se hizo sin consultarle, no interviniendo tan siquiera en la realización del despacho y conociendo la noticia a través de los comentarios que se relizaban en la Corte (48). La negativa

(46).- Ibid., envío 55 (caja 73), n° 47. N. MOSCONI, op. cit., pp. 23-28. Los problemas de jurisdicción reaparecieron al final del mandato de Quiroga, referidos, en este caso, a la imposición de unas décimas por parte del pontífice al reino de Nápoles (IVDJ, envío 80 (caja 106), n° 580.

(47).- Este modo de proceder ha sido puesto de manifiesto por H.G. KOENIGSBERGER, La Práctica del imperio, pp. 80-81, 190-192; Idem, The government of Sicily..., pp. 71-72.

(48).- Felipe II ordenó que: "Le enviaría a llamara y le dijese el cargo que se le daba; y aunque era público antes, el Cardenal, que era cortés y obedientísimo a su rey, fue a ver al Condestable, y recibido en la escalera dijo al Cardenal: "Si V.S.I. me hubiera enviado a llamar, fuera yo a su posada", y el Cardenal le dijo: "Los Condestables de Castilla no han de salir de su casa sino

de Felipe II a que abandonase su cometido, obligó al Inquisidor General a permanecer en el desempeño del mismo hasta que se produjo su fallecimiento en 1594. Durante estos años, como había sucedido anteriormente, Quiroga actuó como un mero intermediario de la comunicación entre los miembros del Consejo y el rey, sin que sus opiniones o su actividad contasen con ninguna significación, puesto que era el conde de Chinchón, a través de sus memoriales diferenciados y su pertenencia a la Junta de Noche, quien imponía su criterio haciendo valer su influencia con el monarca, independientemente de los juicios emitidos desde dicha institución, que en muchas ocasiones resultaban contrariados (49). Esto provocaba malestar en los consejeros y emulación hacia dicha junta, según refería Mateo Vázquez a Felipe II en septiembre de 1590, quien aconsejaba al rey que reorganizase y enmascarase el funcionamiento de la misma, puesto que se estaba provocando una relajación en el servicio que los mismos prestaban en estos organismos, conscientes de que su actuación carecía de transcendencia política, prevaleciendo el criterio del patrón cortesano que se hallase integrado en la junta. Así, proponía que se adoptasen dos posibles caminos. El primero era que el conde de Chinchón pasase a formar parte del Consejo de Estado, quedando el manejo de los papeles que se hubiesen de ver en la misma en poder de Martín de Idiáquez, que los entregaría posteriormente a un oficial de la secretaría de Vázquez para que fuesen puestos en limpio y en orden. La segunda opción consistía en que Chinchón y Zayas contasen con voto en el gobierno de los asuntos concernientes al Consejo de Italia, quedando la secretaría del mismo en manos de Francisco de Idiáquez y la de Estado de Italia en las de su cuñado

llamados de los Reyes" y que le venía a dar un recado de lo que habían dicho muchos por la calle, que Su Majestad mandaba que le fuese a servir en el cargo de Gobernador de Milán" (op. cit., III, pp. 471-472).

(49).- Esta situación quedó constatada por la correspondencia mantenida por Quiroga en estos años, dado que los temas tratados en la misma carecen totalmente de importancia. Véase, por ejemplo, AZ, carp. 152. n° 62; Ibid., carp. 140, n° 251; IVDJ, envío 92 (caja 133), n° 1, fol. 92, 107-108, 129, 134, 139; AHN, Inq., leg. 3284, n° 45, 49-51. Así mismo, cuando en enero de 1594 se reunió una Junta para realizar provisión del cargo de virrey de Nápoles, que estuvo compuesta por Cristobal de Moura, el duque de Arcos, el conde de Benavente, conde de Oropesa, Juan de Idiáquez, el marqués de Velada, el conde de Chinchón y el archiduque Alberto, no se contó tampoco con Gaspar de Quiroga (AZ, carp. 147, n° 149).

Gassol (50). Si bien con estos cambios Mateo Vázquez trataba de contrarrestar su pérdida de poder en el nuevo sistema de gobierno, sus opiniones nos acercan a la posición ocupada por Quiroga en el engranaje político, carente, como hemos señalado, de significación, siendo únicamente una pieza de utilidad para su protector, el conde de chinchón, que fue quien asumió la presidencia del Consejo de Italia de forma interina tras la muerte de Gaspar de Quiroga (51).

8.2. Las últimas actuaciones del Inquisidor General.

8.2.1 El proceso inquisitorial de Antonio Pérez.

La fidelidad de Gaspar de Quiroga a Antonio Pérez se había mantenido, como hemos señalado, después de producirse la detención del mismo, poniéndose de manifiesto en la ayuda prestada a su familia, así como al propio secretario durante la instrucción del Proceso de Visita (52). Cuando fue trasladado al castillo de Turégano, Pérez comenzó a perfilar un proyecto que albergaba desde hacía años: la huida a Aragón. No obstante, fracasó en su primer intento. Con el recrudecimiento de su prisión y los sucesivos traslados a Madrid, Torrejón de Velasco y Pinto, no retomó sus planes de fuga hasta 1590. Durante estos años, las presiones para que entregase los papeles comprometedores que conservase en su poder se sucedieron ininterrumpidamente, existiendo siempre la desconfianza de que aquellos que se habían recogido, no constituyesen la totalidad de los mismos. Simultáneamente, Rodrigo Vázquez de Arce se estaba

(50).- IVDJ, envío 55, nº 158.

(51).- S. FERNANDEZ CONTI, "La nobleza cortesana...", p. 265.

(52).- G. MARAÑÓN, Antonio Pérez, I, pp. 442-445, mantiene que, cuando Pérez trató de evitar su detención, el 31 de enero de 1585, acogiéndose a sagrado en la Iglesia de San Justo, había consultado previamente su plan con el arzobispo de Toledo, de quien obtuvo el beneplácito. Sin embargo, fue sacado del templo violándose el asilo, por lo que el doctor Neroni, vicario de Madrid, inició el consiguiente pleito. Igualmente, en las cuentas realizadas a finales de 1589 por el propio Pérez, reconocía deber dinero al Inquisidor General de un préstamo recibido. Así mismo, solicitó la mediación del prelado ante Felipe II y Chaves en diversas ocasiones (A. GONZALEZ PALENCIA, "Fragmentos del archivo particular...", p. 294, 296-297, 307).

encargando de efectuar la instrucción del proceso criminal por el asesinato de Escobedo. La resistencia de Antonio Pérez a prestar declaración sobre las causas del crimen, pese a los requerimientos de Felipe II (53), provocaron que el preso fuese sometido a tormento. La declaración que hizo a consecuencia del mismo hacía presagiar que sería condenado a muerte, por lo que los viejos propósitos de huir a Aragón se retomaron, consiguiendo alcanzar su objetivo el 19 de abril de 1590 (54).

Con su evasión a dicho reino y el acogimiento al "derecho de manifestación", para que su causa fuese remitida al Justicia evitando la intervención de Felipe II, Pérez supo aprovechar las grandes tensiones existentes en Aragón para que, por una adaptación mimética, sus autoridades y habitantes actuasen en su salvaguarda como un exponente de la defensa de sus libertades y privilegios frente al monarca (55). La convicción real de que cualquier procedimiento que se siguiese en los tribunales aragoneses tendría como

(53).- Respecto a estos, a los que el rey adjuntó la declaración de haber dado su consentimiento para que se matase a Escobedo, Antonio Pérez aseguró posteriormente que Quiroga dijo a Chaves: "Señor, o yo estoy loco o este negocio es loco. Si el rey le mandó a Antonio Pérez que hiciera matar a Escobedo y el lo confiesa, ¿qué cuenta le pide y qué causas? Miráralas entonces y él las viera, que el otro no era juez en aquél acto, sino secretario y relator de los despachos que le venían a las manos y ejecutor de lo que le mandó y encargó como un amigo a otro. Ahora, al cabo de once años, le pide las causas, habiéndole tomado sus papeles, muertas tantas personas que podían ser sabedores y testigos de muchas cosas. Resucítele quinientos muertos, restitúyansele sus papeles sin haberlos revuelto y releído, y aún entonces no se podrá hacer tal" (G. MARAÑÓN, op. cit., I, p. 463). Así mismo, Hernando de Vega informó a Mateo Vázquez del tormento al que se había sometido a Pérez (IVDJ, envío 15, paquete 1, nº 64).

(54).- G. MARAÑÓN, op. cit., I, pp. 464-476. Por otra parte, el autor afirma que Quiroga, probablemente, no fue ajeno a esta fuga, al igual que no lo había sido a las tentativas precedentes (Ibid., II, p. 502). La noticia de la evasión causó un gran revuelo en la Corte, llegando rápidamente el aviso a Roma, donde el secretario siguió encontrando apoyo (J.I. TELLECHEA IDIGORAS, "Antonio Pérez...", pp. 679-682). Por otra parte, el pronóstico sobre la sentencia no fue equivocado, puesto que el proceso se cerraba el 1 de julio de 1590, condenando a muerte al secretario. En torno a este proceso, véase, G. MARAÑÓN, Los procesos de Castilla contra Antonio Pérez, Madrid 1947, pp. 28-357).

(55).- Los focos de tensión eran diversos, destacando el pleito sobre el condado de Ribagorza, los problemas entre montañeses y moriscos, así como la controversia jurisdiccional de Teruel y Albarracín (Ibid., Antonio Pérez, II, pp. 447-499; S. FERNANDEZ CONTI, "La nobleza cortesana...", pp. 249-255; A. PEREZ, Relaciones y Cartas (Intr. y Ed. A. ALVAR EZQUERRA), I, pp. 29-34; G. COLAS LATORRE y J.A. SALAS AUSENS, Aragón en el siglo XVI. Alteraciones sociales y conflictos políticos, Zaragoza 1982, passim.

resultado la absolución, conllevó que se decidiese la intervención del Santo Oficio, a través de la acusación de que el preso proyectaba escaparse a tierras de herejes, puesto que se sospechaba su paso a Bearn. Así pues, el 5 de marzo de 1591, Gaspar de Quiroga ordenaba que se iniciasen las informaciones (56).

La comunicación entre el Inquisidor General y Antonio Pérez había sido prácticamente inexistente desde su huida a Aragón, limitándose el fugado a justificar su decisión de evadirse y a instar a Quiroga, junto a Chaves y al propio rey para que el proceso criminal que se desarrollaba en Castilla no fuese trasladado a dicho reino (57). La mediación que el arzobispo de Toledo realizó ante Felipe II, en favor de quien le había procurado su acceso a la mitra toledana y la obtención de la púrpura cardenalicia, provocó que el monarca mostrase a Quiroga unos papeles para que pudiese comprobar por sí mismo las razones que le impulsaban a perseguir a su antiguo secretario y lo engañado que se encontraba respecto a Pérez. Gregorio Marañón expone que, ante la actitud adoptada por el rey, el Inquisidor General hubo de cesar sus demostraciones de apoyo al prófugo, aunque solamente para complacer a Felipe II, sin que la lectura de los documentos lograra mudar su afecto por Pérez, por lo que, en 1591, solicitó en diversas ocasiones poder retirarse, sin conseguir la ansiada licencia real. Igualmente, también considera posible que, como afirma Luis Cabrera de Córdoba, quien pudo leer los escritos que Felipe II entregó a Quiroga, estos fueron lo suficientemente contundentes para conseguir la aproximación de Quiroga al criterio regio. Sea como fuere, el prelado obedeció las instrucciones dictadas por el monarca, aunque el desarrollo del proceso inquisitorial contra Antonio Pérez nos lleva a reiterar el poco influjo con que Quiroga contaba en los asuntos dependientes del Santo Oficio, así como en el

(56).- G. MARAÑÓN, *Antonio Pérez*, II, p. 535; I. MARTINEZ NAVAS, "Proceso inquisitorial de Antonio Pérez", *Revista de la Inquisición*, 1 (1991), pp. 141-200.

(57).- J. GARCIA MERCADAL, *Antonio Pérez...*, pp. 145-146; A. PEREZ, *Las obras y relaciones*, pp. 265 y 280.

devenir de la política de la Monarquía (58).

La elaboración de las informaciones sobre las que sustentar una acusación de herejía fue encomendada al inquisidor Alonso Molina de Medrano, cliente del conde de Chinchón, al igual que el fiscal de la Suprema, Arenillas de Reinoso y el propio Inquisidor General, aunque, mientras éste se hallaba en su arzobispado de Toledo, fueron el mismo fiscal y el confesor Chaves quienes se encargaron de realizar la calificación de los informes remitidos desde Zaragoza (59). Retornado Quiroga y valoradas las acusaciones por el Consejo de Inquisición, el 24 de mayo, los inquisidores del tribunal zaragozano recibieron orden de trasladar al preso a la Aljafería. Ejecutaron el mandato con rapidez, aunque las alteraciones que se produjeron en la ciudad tuvieron como resultado la muerte del marqués de Almenara y el retorno de Antonio Pérez a la cárcel de los manifestados (60). El estado de latente revuelta, así como las manifestaciones contra el Santo Oficio y la política regia hicieron que Felipe II mandase conformar, el 5 de agosto una junta, que, presidida por Gaspar de Quiroga, compusieron Rodrigo Vázquez de Arce, Diego de Chaves, dos miembros de la Suprema, Francisco Dávila y Juan de Zúñiga, dos consejeros de Estado, el marqués de Almazán y don Hernando de Toledo, así como los integrantes del Consejo de Aragón Frigola, Campi y Quintana (61). Las deliberaciones de la misma se centraron en dos cuestiones. Por una parte se definía que el preso debía volver a la Aljafería, negándose el Inquisidor General y el propio rey a la propuesta de que, una vez en la cárcel inquisitorial, se matase a Pérez. En segundo lugar, dirimieron la cuestión de si era lícito que un ejército castellano entrase en Aragón ante la gravedad de la situación. Las

(58).- Ibid., I, pp. 108-109. L. CABRERA DE CORDOBA, op. cit., III, p. 540.

(59).- CODOIN, vol. XV, pp. 494-497; F. MIGNET, op. cit., pp. 166-170.

(60).- G. MARAÑÓN, op. cit., II, pp. 525-549. Véase, igualmente, AHN, Inq., leg. 3314, exp. 11, "Sucesos de Zaragoza de 24 de mayo de 1591".

(61).- Por otra parte, ésta era la segunda junta que se conformaba para ocuparse de estos problemas después de la huida de Antonio Pérez a Aragón. A finales de abril había comenzado a funcionar, bajo la presidencia de Vázquez de Arce, la compuesta por el vicescanciller Frigola, el regente Campi y el Conde de Chinchón (G. MARAÑÓN, op. cit., II, pp. 503, 567).

opiniones de la Junta se encontraron divididas, aunque la intervención militar comenzaba a vislumbrarse. Así mismo, los informes sobre las opiniones expresadas en la Junta y las consultas llegaban al rey a través de memorias elaboradas por el licenciado Arenillas de Reinoso, designado por Quiroga como secretario de ésta (62).

Por otra parte, continuaban los trabajos y las consultas destinados a cimentar la acusación de herejía vertida contra Antonio Pérez, que había propiciado la intervención del Santo Oficio. Después de los sucesos del 24 de mayo, el inquisidor de Valencia Pedro Pacheco, llegado a Madrid, en obediencia de mandato de Quiroga al respecto, comenzó a ocuparse de este cometido, tomando declaración a personas que habían presenciado los mismos entre los meses de julio y septiembre, aunque, nuevamente, fueron Arenillas de Reinoso y el conde de Chinchón quienes realmente dirigieron las actuaciones y procuraron la obtención de resultados (63).

La determinación de trasladar a Pérez a las cárceles inquisitoriales decidió hacerse efectiva el 24 de septiembre, ante un nuevo intento de fuga protagonizado por el preso (64). En esta ocasión, el levantamiento producido en la ciudad, a pesar de las medidas que se habían adoptado, propició que Antonio Pérez fuese liberado de la cárcel por los amotinados. La respuesta de Felipe II no se hizo esperar, dando orden al ejército que se hallaba dispuesto en la frontera aragonesa para que avanzase sobre Zaragoza. Ante la inminente entrada de las tropas capitaneadas por Alonso de Vargas en dicha ciudad, Pérez

(62).- Ibid., pp. 567-568. Sobre las consultas que dicha junta realizó con el rey, así como la correspondencia mantenida por Quiroga y la Suprema con los inquisidores de Zaragoza, véase CODOIN, vol. 12, *passim*; IVDJ, envío 56 (caja 74), paquete 3, s.f.; Ibid., envío 62 (caja 83), n° 414, 436; AZ, carp. 145, n° 180, 189.

(63).- G. MARAÑÓN, *op. cit.*, II, pp. 567-570; S. FERNANDEZ CONTI, "La nobleza cortesana...", pp. 257-259.

(64).- El 14 de agosto, Alonso de Vargas había recibido el nombramiento de Capitán General del ejército que se estaba concentrando en la frontera aragonesa. En torno a dicho personaje, véase, Idem, "La profesionalización del gobierno de la guerra: don Alonso de Vargas", *La Corte de Felipe II*, pp. 417-450.

consumó su huida pasando por Francia. Restituída la calma, el proceso inquisitorial se continuó desarrollando con el reo en ausencia. A estos acontecimientos se sucedió la renovación del tribunal zaragozano, que incrementó de tres a cuatro el número de inquisidores en su composición, puesto que todos los colaboradores del fugado pasaron a ser sospechosos de herejía según la petición presentada por Arenillas de Reinoso. Molina de Medrano fue sustituido por el odio que había suscitado su actuación, mientras que Juan Hurtado de Mendoza y Antonio Morejón se consideraba que no habían actuado con el celo suficiente. En este sentido, hemos de recordar que ambos eran clientes de Quiroga y habían estado vinculados al "partido papista". Los nuevos inquisidores designados fueron Pedro de Zamora, Velarde de la Concha, el doctor Moriz de Salazar y Pedro de Reyes. También el fiscal Carvajal fue remplazado por Simón de Carranza (65). La sentencia definitiva se pronunció el 7 de septiembre de 1592, por la que, considerándose probada la condición de hereje, Pérez era condenado en rebeldía, a ser quemado en estatua, como sucedió en el Auto de Fe celebrado el 20 de octubre, procediéndose a la confiscación de sus bienes y a la inhabilitación de sus hijos y nietos para ocupar dignidades y cargos (66). Por otra parte, los nuevos capítulos aprobados en las Cortes reunidas en Tarazona, constitúan un sistema preventivo para evitar futuras sublevaciones, así

(65).- G. MARAÑÓN, op. cit., II, p. 613. El 18 de octubre de 1591, Antonio Morejón solicitaba a Quiroga que le trasladase a la plaza vacante en el tribunal de Toledo (AHN, Inq., leg. 3314, exp. 11). Por otra parte, el 17 de junio de 1592 moría Diego de Chaves. Rodrigo Vázquez de Arce se apresuró a consultar con el rey lo que se debía hacer con los papeles que se habían recogido a Antonio Pérez, hasta entonces custodiados por el confesor (AZ, carp. 131, n° 40).

(66).- Dicha sentencia aparece publicada íntegra en G. MARAÑÓN, op. cit., Apéndice XXVI. Así mismo, la represión de los rebelados fue llevada a cabo por Alonso de Vargas. En una carta que el monarca escribió al alcalde del tribunal inquisitorial de Zaragoza, le explicaba que el Santo Oficio no contaba con la capacidad de castigar a los que habían actuado en detrimento del respeto que se debía a la institución, por lo que esta función se encomendó a Vargas, al que debía entregar a aquellos presos que fuesen requeridos, sin que ello supusiera una merma de la jurisdicción inquisitorial, puesto que se trataba de una medida excepcional y transitoria, de la que no podrían hacer uso posteriormente ni gobernadores ni virreyes. Felipe II advertía al Capitán General que no pidiese ningún reo hasta que Quiroga informase a los inquisidores que no tenían obligación de entregar a aquellos presos que no debieran ser relajados al brazo seglar o que estuvieran incluidos en el perdón general otorgado (AHN, Inq., libro 249, fol. 577r-v). El edicto de Gracia y perdón general en Ibid., libro 357, fols. 133r-134v.

como el reforzamiento del poder real en el reino de Aragón (67).

8.2.2. Las Juntas sobre moriscos

Desestimada la medida de la expulsión por las dificultades que conllevaba su ejecución, Felipe II optó por retornar a una política de asimilación de esta minoría a través de su instrucción en la doctrina católica. Con esta finalidad instó a los prelados para que acometieran esta labor, siendo determinante, en este sentido, la opinión mantenida por el arzobispo Juan de Ribera (68). La carencia de resultados y el peligro que suponía la existencia de un grupo propenso a la conjura con los enemigos exteriores de la monarquía, decidieron al monarca a adoptar otros medios. Así, el 17 de junio de 1587, convocó una junta en Madrid, fijando como lugar de reunión la posada de Gaspar de Quiroga. Junto al Inquisidor General, formaron parte de la misma, Simón Frígola, vicecanciller de Aragón, el conde de Chinchón, el regente Sapena, el confesor Chaves, Francisco de Ribera, obispo de Segovia, Juan de Zúñiga, miembro del Consejo de Inquisición, Jerónimo Corella, caballero de la Orden de Santiago y el secretario Mateo Vázquez (69). Su cometido era discernir, a través de los memoriales donde se recogían las actuaciones realizadas por los moriscos y su persistencia en las prácticas musulmanas el modo de proceder en su adoctrinamiento y enseñanza de forma fructífera para lograr poner remedio a esta situación, principalmente en el reino de Valencia. Como herramienta de este trabajo, el rey hizo sacar relación de diversas juntas que habían tratado sobre esta materia entre 1524 y 1586, que fueron leídas, así como los dichos memoriales, a los miembros de la Junta por el fiscal del Consejo de Inquisición,

(67).- A. PEREZ, Relaciones..., I, pp. 45-48.

(68).- M. DANVILA Y COLLADO, op. cit., pp. 212-215; P. BORONAT Y BARRACHINA, op. cit., pp. 318-320.

(69).- Sobre la conformación de dicha Junta, véase, Ibid., pp. 320-323; A. LEON PINELO, op. cit., p. 140; D.M. SANCHEZ, El deber de Consejo..., pp. 124-125; C. RIBA GARCIA, El Consejo Supremo de Aragón en el reinado de Felipe II, Madrid 1915, p. 220; F. JANER, op. cit., p. 59; BSCV, Ms. n° 16, fol. 156r.

el licenciado Arenillas de Reinoso (70).

Las resoluciones que se adoptaron a propuesta de Quiroga durante el desarrollo de las sesiones fueron de diversa índole. En primer lugar, se apuntaba que se debía procurar un breve del pontífice para que los confesores y rectores de los moriscos pudiesen absolver "in foro conscientiae" a los mismos de los delitos de herejía que hubiesen cometido. Igualmente, quedaba establecido que eran los prelados quienes se debían encargar de que fuesen instruídos en los preceptos católicos a través de su labor pastoral y la ejecutada por los rectores que nombrasen para realizar esta función. Para facilitar esta actuación, se acordó que se erigiesen rectorías y se dotasen económicamente de forma suficiente, siguiendo el proyecto que se había aprobado en 1573, elaborado por el patriarca Ribera junto a otros prelados, que no había sido puesto en práctica por no haber dado Felipe II el mandato pertinente. También se convino la necesidad de edificar nuevas iglesias, que fuesen adornadas y contasen con el servicio preciso para la celebración del culto. Al logro de este propósito quedaba supeditada la propuesta de Quiroga sobre la erección de dos seminarios, donde, separados por sexos, se pudiese acoger a los niños huérfanos y jóvenes moriscos que quisieren convivir con los cristianos abandonando sus lugares de residencia. Igualmente se recomendaba que, paralelamente, se conformase otra junta en Valencia para tratar sobre este tema bajo la presidencia de Juan de Ribera, a la que podrían asistir los vicarios generales de los obispos de dicho reino y cinco religiosos de las Ordenes mendicantes y de la Compañía de Jesús que se nombrasen en Madrid. Así, la Junta presidida por Quiroga consultaría con ellos y se serviría de su ayuda en la ejecución de las decisiones adoptadas. De igual modo, se designaría un comisario real que auxiliase en todo aquello que fuese de utilidad, quedando subordinado a la autoridad de los prelados. En la sesión que tuvo lugar el 10 de julio, Mateo Vázquez hizo relación de las personas que el rey había

(70).- Una relación de lo acontecido en las reuniones de dicha Junta, que inició sus sesiones el 19 de julio (finalizando el 4 de septiembre), aparece recogida en AHN, Inq., leg. 1791, exp. 5. Tanto el obispo de Segovia como el confesor Chaves estuvieron ocasionalmente ausentes de la misma a consecuencia de encontrarse enfermos. El 30 de octubre, el monarca agradecía a los participantes la labor realizada, rogando que prosiguiera su tratamiento con la atención que la materia requería (Ibid., n° 2).

estimado idóneas para que asistiesen y colaborasen con el patriarca Ribera, a quien se inclinaron a consultar antes de tomar ninguna determinación, aceptándose la propuesta de Quiroga de que fuese incluido un inquisidor entre los participantes (71).

A comienzos del mes de agosto, la Junta quedó reducida en el número de sus miembros, puesto que el conde de Chinchón y Mateo Vázquez hubieron de atender otros asuntos por orden del rey, mientras que Francisco de Ribera acudió a residir a su iglesia. No por ello interrumpió su actividad, fijándose la conveniencia de que se concediese a los moriscos un edicto de Gracia (72). El Santo Oficio procedería contra aquellos que no abandonasen las prácticas mahometanas, declarándose que, en un principio, se procurase actuar con blandura. Mayor rigor debía usarse con los alfaquies, maestros, parteras y nodrizas (73). Quedaba también anulada la Concordia establecida en 1571 para que no se les confiscasen los bienes, dado que no se incluyeron todos los lugares de moriscos, así como por otras causas que hacían inconveniente su mantenimiento. De igual modo, se resolvió que el adoctrinamiento tenía que realizarse en lengua castellana y valenciana, puesto que la mayoría de los moriscos las conocían, o podían entenderlas, encargándose la elaboración de catecismos en ambas versiones. En este sentido, se desestimó crear una cátedra de arábigo en la Universidad de Valencia y se prohibió que los muchachos moriscos aprendiesen dicha lengua, ejecutándose su instrucción únicamente en

(71).- Así, el 12 de julio el rey comunicaba al Conde de Aitona su decisión de que se llevase a cabo dicha junta, que no inició sus sesiones hasta el 13 de octubre. Estuvo compuesta por el inquisidor Pedro de Zárate, el doctor Vicente Vidal de la audiencia real, el dominico Justiniano Antist, fray Francisco Molina, franciscano, Gregorio Satorres, agustino, el jesuita Jerónimo Domenech y Miguel Marquet, provisor del arzobispado de Tortosa (P. BORONAT Y BARRACHINA, op. cit., 330-335, 612-634; D.M. SANCHEZ, op. cit., pp. 125-127; R. GARCIA CARCEL, Herejía y Sociedad..., p. 107; R. ROBRES LLUCH, San Juan de Ribera..., p. 412).

(72).- El 26 de septiembre de 1587, Quiroga despachaba un edicto de Gracia y merced de los bienes para los moriscos de la villa de Agreda, en el distrito inquisitorial de Logroño (AHN, Inq., libro 357, fols. 103v-104r; Ibid., libro 251, fols. 114r-115v; Ibid., libro 249, fols. 530v-531v). Al año siguiente, se concedió a los que moraban en el reino de Valencia (J.P. DEDIEU, "L'Inquisition face aux morisques...", p. 127).

(73).- En este sentido, habían surgido nuevos conflictos jurisdiccionales entre la Inquisición y el virrey de Valencia en los meses precedentes (IVDJ, envío 8 (III), caja 13, fol. 185).

castellano (74). Respecto a la elaboración de los catecismos, se señalaba que se comprobase cómo se encontraba el que había comenzado Martín de Ayala, y, siendo a propósito, se mandaba su perfeccionamiento y traducción. Así mismo, se proponía que, con suavidad y de forma progresiva, se fuesen mudando las pocas prendas de vestir que diferenciaban el hábito morisco del de los cristianos, cuestión que se consideraba fácil alcanzar, dado que la mayoría de ellos habían abandonado su vestimenta tradicional salvo en algunos detalles. Respecto a la instrucción de los niños en la doctrina católica, se resolvió que en los lugares de moriscos hubiese maestros de escuela que realizasen esta labor, encomendando a los prelados la elección de personas apropiadas por sus costumbres y cristiandad. Se recomendaba que, si se contase con el suficiente número de maestros y predicadores, la enseñanza de los preceptos católicos a esta minoría se iniciase simultáneamente en todo el reino de Valencia, dejándose al criterio de los obispos la elección de los sitios más convenientes para inaugurar este proceso en caso contrario. Igualmente, se reglamentaba que los padres moriscos no tratasen de impedir el matrimonio de sus hijos e hijas con cristianos viejos, negándose a entregar las dotes, puesto que se debían favorecer este tipo de casamientos. Así mismo, se decidió solicitar de nuevo al papa la concesión de un breve de dispensa, ya que, en muchos casos, los moriscos matrimoniaban en grados prohibidos (75). De igual manera, no se debía permitir que se continuasen enterrando en tierra virgen, según establecía la práctica mahometana, sino que se hiciesen unos vasos o carneros que se usasen con esta finalidad (76). Quedaba prohibido también que hubiese carniceros moriscos, para evitar que degollasen a los animales conforme a dichos ritos, debiendo ser cristianos viejos quienes realizasen este oficio en los lugares donde estos habitasen. Finalmente, se apuntaba que si había perdurado un edificio o señal de

(74).- Esta resolución fue respaldada por la Junta de Valencia (R. GARCIA CARCEL, op. cit., pp. 108-110).

(75).- Sobre esta cuestión, el conde de Olivares comunicaba a Mateo Vázquez, el 30 de noviembre, que los despachos que se precisaban en Roma sobre las facultades de los confesores y en referencia a las rectorías se encontraban bien encaminados, siendo más dificultoso lo concerniente a las dispensaciones (AZ, carp. 135, nº 62).

(76).- En este sentido, véase, Ibid., carp. 142, nº 221-223.

la existencia de una mezquita o baño se hiciese desaparecer. Si bien se planteó que, para facilitar la aplicación de estas resoluciones, podía convenir sacar de Valencia a los moriscos granadinos y tagarinos, no se adoptó finalmente ninguna determinación, escribiéndose sobre esta cuestión a los preladados del reino de Valencia.

Mientras que se trataba de poner remedio por esta vía al problema morisco en Valencia, en Aragón se había producido un incremento de la tensión desde mediados de 1586 como consecuencia del enfrentamiento entre pastores montañeses y agricultores moriscos (77). El 3 de septiembre de 1587, Quiroga escribía a los inquisidores de Zaragoza, cómo se había informado al rey de que los moriscos se estaban armando y mantenían tratos con los franceses de Bearn, ordenando que procurasen entender en qué consistían esos conciertos, así como los lugares donde escondían las armas (78). Como señalaba el Inquisidor General, el conflicto que mantenían con los montañeses había acrecentado notablemente la peligrosidad de esta comunidad, que se había visto incrementada por la llegada de moriscos de otros puntos geográficos que acudían a prestar su ayuda (79). Así mismo, como el deseo del rey era alcanzar un compromiso de los montañeses conducente a calmar los ánimos, mandaba a los inquisidores que, hasta que este se alcanzase, suspendiesen las causas abiertas con los principales de ellos, que estaban testificados de pasar caballos a Francia,

(77).- Sobre el origen de este conflicto y su desarrollo, véase, G. COLAS LATORRE y J. A. SALAS AUSENS, op. cit., pp. 598ss; A. DOMINGUEZ ORTIZ y B. VINCENT, Historia de los moriscos..., pp. 63-65.

(78).- AHN, Inq., libro 361, fol. 476v. La presencia de bearneses en Ribagorza fue utilizada por el conde de Chinchón para tratar de que la Inquisición actuase contra el duque de Villahermosa y conseguir, por este medio, la incorporación de dicho condado a la Corona. Como esta actuación no fue factible por este camino, también lanzó acusaciones sobre la limpieza de sangre del duque, que descendía de los reyes aragoneses. Sobre esta cuestión y las consultas al Santo Oficio en las que tomó parte Quiroga, véase, G. COLAS LATORRE y J.A. SALAS AUSENS, op. cit., pp. 126-152; C. RIBA GARCIA, El Consejo Supremo de Aragón..., pp. LII-LXV, 15-17; IVDJ, envío 8 (III), caja 13, fol. 213; AHN, Inq., libro 328, fols. 380r-383v.

(79).- De igual modo, se escribía a los inquisidores de Valencia, puesto que se tenía información de que faltaban moriscos de dicho reino. Quiroga les ordenaba que averiguasen quiénes eran, donde se encontraban y si existían contactos con los que habitaban en Aragón (Ibid., libro 361, fol. 492v-493v).

pudiendo, posteriormente, retomar los procesos (80). En los primeros meses de 1588, el tribunal inquisitorial de Zaragoza intensificó sus actuaciones, centrándose, sobre todo, en interceptar las comunicaciones de los moriscos con bearneses y gascones (81).

Por otra parte, tanto en Aragón como en Valencia, las diligencias desarrolladas por las juntas habían contribuido a fomentar la intranquilidad de esta minoría, puesto que se había extendido el rumor de que el objetivo de las mismas era realizar los preparativos para su expulsión, o, cuando menos, prohibirles el uso de su lengua y traje. Quiroga comunicaba a los inquisidores que contribuyesen a crear un clima de confianza a la vez que extremaban las medidas de control y vigilancia, clarificando que la actividad de las juntas sólo se encaminaba a conseguir su adoctrinamiento. En relación con éstas, hemos de señalar que el conde de Chinchón presentaba sus pareceres al rey respecto a sus actividades de forma singularizada, encontrándose informado de las actuaciones inquisitoriales por su comunicación con el Inquisidor General lo que provocó, nuevamente, las quejas de Mateo Vázquez que se había visto desplazado en el tratamiento del asunto (82).

Igualmente, el 5 de julio de 1588, el Consejo de Estado suplicaba al rey que se adoptasen medidas urgentes antes de que la agitación que se percibía en los lugares de moriscos desembocase en una rebelión semejante a la acontecida en Granada. El 29 de noviembre Quiroga expuso en dicho organismo el peligro que representaba el crecido número de moriscos que habitaban en Castilla, sobre todo en Toledo, hallándose dispuestos a unirse a los de Aragón y Valencia en tomar las armas para protagonizar un levantamiento con ayuda exterior. Como primer paso para buscar el remedio, se acordó que se averiguase, por vía de la

(80).- Ibid., fol. 495r.

(81).- Sobre la aprehensión de una supuesta carta escrita por el príncipe de Bearn a un morisco de Azcón llamado Germán y las diligencias realizadas en torno a la misma, véase, Ibid., fols. 500r-504v.

(82).- Ibid., fols. 503v-505r; AZ, carp. 143, nº 35, 121; C. RIBA GARCIA, El Consejo Supremo..., pp. 39-40, 221-222.

Inquisición, cuántos moriscos había en todo el reino. Los tribunales debían remitir sus memoriales al Inquisidor General, que comunicaría al Consejo de Estado el resultado de este recuento (83).

Durante estos meses, la máxima preocupación se seguía centrando en la situación que se vivía en Aragón. El 17 de marzo de 1589, el Consejo de Inquisición consultaba al rey la conveniencia de publicar el edicto, fechado en 1559, por el que se prohibía a los moriscos poseer y portar armas. Este había sido apelado por parte de los mismos y de los señores de vasallos, iniciándose un proceso que se había concluido en 1573, quedando clarificada la jurisdicción de los inquisidores para vedar las armas. No obstante, la sentencia no se había hecho pública y, aunque se estimaba necesario ponerla en ejecución, la tensión existente había propiciado la realización de la consulta previa, considerando que, si posteriormente surgían dificultades que impidiesen su puesta en práctica, redundaría en perjuicio del prestigio y autoridad del Santo Oficio (84). Estas gestiones provocaron que los moriscos representasen ciertas cuestiones al conde de Sástago, quien remitió su entendimiento al Consejo de Inquisición. En el informe enviado por Mateo Vázquez al monarca de la reunión mantenida por dicho organismo, el 24 de marzo, se desprendía que los moriscos culpaban del estado en que se encontraban al hecho de haber sido bautizados por la fuerza y al rigor inquisitorial que se había aplicado contra ellos desde entonces. Así mismo, condicionaban la entrega de las armas de tiro a que se procediese con ellos con mayor benignidad y se les concediesen Edictos de Gracia. El 30 de marzo, Quiroga recibió a una comisión compuesta por tres moriscos que acudieron a la Corte en apoyo de esta peticiones, encargándoles que pusiesen las mismas por escrito (85). El memorial elaborado fue examinado por la

(83).- P. BORONAT Y BARRACHINA, *op. cit.*, p. 347; M. DANVILA Y COLLADO, *op. cit.*, pp. 217-218.

(84).- AHN, Inq., libro 328, fol. 459r. En este sentido, también se trataban de evitar conflictos de jurisdicción (AZ, carp. 140, n° 259; Ibid., carp. 130, n° 71-72; IVDJ, envío 55 (caja 73), n° 58).

(85).- Por otra parte, la Suprema aclaraba que los bautismos forzosos únicamente se habían realizado en Valencia y que la dureza y persecución mentadas eran falsas, puesto que habían conservado las prácticas mahometanas valiéndose de la condescendencia inquisitorial (Ibid., n° 63).

Suprema en el mes de agosto. Por éste, los moriscos solicitaban ser instruídos en la doctrina católica por predicadores que conviviesen con ellos de forma continuada para poder corregir sus errores, no limitándose a permanecer en las iglesias, pudiendo impartir también la misma a niños y jóvenes en estudios y seminarios que se erigiesen con este fin. Se les tenía que otorgar el perdón general de las culpas pasadas por confesión sacramental, por la que quedarían rehabilitados y reconciliados todos los que habitasen en el reino de Aragón sin ninguna excepción. Pedían que, por un período de tiempo limitado, la Inquisición no procediese con ellos, puesto que debían contar con un margen para que la instrucción que iban a recibir diese sus frutos. Pasado este plazo, se castigaría a los perinaces, pero solo se haría cumplir una penitencia razonable a aquellos que recayesen ocasionalmente, sin emplear dureza y sin que fuesen relajados. A las mujeres que se les señalara pena de hábito y cárcel, era conveniente que no fuesen trasladadas a Zaragoza, puesto que en sus residencias habituales vivirían con más honestidad y recogimiento. Así mismo, apuntaban que fuese preciso contar con tres testigos del delito para llevar un morisco a prisión, puesto que, en muchas ocasiones, las acusaciones tenían su origen en enemistades particulares. Apuntaban que, si era preciso contar con facultades dependientes del pontífice para poner en práctica estas medidas, se rogase al papa que las otorgase, y ofrecían que, si en consecuencia de la ejecución de las mismas se producía una disminución de la hacienda del fisco, aportarían una cantidad superior de la que tenían situada. Por último, insistían en que, entregadas las armas de tiro y asta, podrían seguir haciendo uso de las demás en cualquier reino de la monarquía. El 13 de julio, el Consejo de Inquisición remitió la consulta a El Escorial, donde sus opiniones, junto a las de los inquisidores de Aragón, fueron revisadas por una Junta y el propio rey. Si bien se mostraron conformes con algunas de las propuestas, salvo en que la reconciliación con el Santo Oficio se debía hacer según se acostumbraba, en cuanto a la concesión del Edicto de Gracia, éste no comprendería a los que se hallasen en las cárceles secretas, desterrados en galeras u otro lugar, así como a los condenados por penas extraordinarias de la Inquisición o que tuviesen causas pendientes. Para ser comprendidos en el perdón general, los inquisidores de Aragón opusieron que los alfaquíes y todos los moriscos entregasen los libros y papeles referidos a las

ceremonias mahometanas, quedando excluidos aquellos que los ocultasen. También desde dicho tribunal se mostraban inclinados a conceder un plazo para que fuesen instruidos, en el que no se realizarían procesamientos, a pesar de la opinión contraria emitida desde la Suprema. Con el parecer de los inquisidores se conformaron la junta y el rey, siempre que el período no excediese los cuatro o seis meses. Sin embargo, se debían guardar el Derecho e Instrucciones del Santo Oficio en cuanto a la persecución de los delitos, desestimando las peticiones que suponían una alteración de los mismos. En cuanto a las armas, Quiroga y el Consejo de Inquisición estimaban que debían hacer primero la entrega, dándose orden de que entre ellos no quedase ningún oficial que las compusiese ni dotase de pólvora. A ésto quedarían supeditadas las gracias que solicitaban en función de lo que el monarca estimase conveniente a su servicio. En este sentido, los inquisidores de Zaragoza insistían en que se tenía que consultar a los señores de vasallos, bajo cuya autoridad se encontraban, puesto que las armas que rendían eran de su propiedad (86).

El tratamiento de esta cuestión se prolongó a lo largo de 1590, extremándose las medidas de vigilancia ante los avisos de que los moriscos estaban trasladando pólvora a Castilla, especialmente a Toledo, lo que supuso una preocupación añadida para Quiroga, que puso el asunto en conocimiento del Consejo de Estado, instando a que se tomasen medidas urgentes (87). Por otra parte, a partir de este año, si bien vamos a encontrar al Inquisidor General integrado en la junta que para tratar sobre la problemática morisca se reunió en 1591, lo cierto era que, en muchos casos, ni siquiera era informado de las consultas que llegaban al Consejo de Inquisición, siendo sus miembros quienes mantenían la correspondencia con los tribunales y marcaban las directrices que se debían seguir. La dilatación de la negociación con los moriscos del reino de Aragón estuvo determinada por la tensa situación que vivía el mismo, no

(86).- Ibid., envío 8 (III), caja 13, s.f.

(87).- Sobre la noticia que a este respecto el rey dió al Inquisidor General y los avisos realizados por éste a los tribunales inquisitoriales y Consejo de Estado, véase, Ibid., envío 91, nº 351; AHN, Inq., libro 249, fols. 552v-553r; Ibid., libro 281, fol. 283v; Ibid., libro 361, fols. 558r-559r, 563v; P. BORONAT Y BARRACHINA, op. cit., pp. 348-349; H.Ch. LEA, *The moriscos of Spain...*, p. 438.

considerándose apropiado adoptar medidas novedosas hasta que los ánimos se encontrasen más sosegados. Contribuyeron también a la demora las enfermedades sufridas por varios miembros de la Suprema, retrasando las consultas, el enfrentamiento que los señores de vasallos mantenían con las autoridades aragonesas, y la disputa entre el tribunal inquisitorial y el arzobispo de Zaragoza Andrés de Bobadilla, hermano del conde de Chinchón, en torno al lugar donde se debían celebrar las juntas para definir el modo de realizar el desarme, al que había quedado condicionado la concesión de las gracias solicitadas (88). Así mismo, el 22 de mayo de 1590, el Consejo de Estado remitía un memorial al monarca sobre el problema morisco en Castilla, en consonancia con la petición realizada por Quiroga. Referían la necesidad de desalojar a los moriscos de dicho reino o, al menos, de las principales ciudades. Se proponía que se hiciesen volver a Granada, donde se harían construir fortalezas estratégicamente situadas y dotadas de una fuerte guarnición de soldados. Además, apuntaban la posibilidad de utilizarles como remeros, pagando el salario correspondiente, lo que también serviría para frenar el enorme crecimiento que presentaba esta comunidad (89). Meses después, el Inquisidor General exponía en dicho organismo cómo había ordenado a las inquisiciones realizar nuevas diligencias sobre la cuantificación de los moriscos existentes, añadiendo que solo en los reinos de Aragón, Valencia y Castilla superaban los cientocincuenta mil hombres. Representaba el peligro que suponía tanto su gran número como su inclinación a la sublevación, solicitando al rey que se buscase un remedio definitivo. Así, el 11 de agosto, el Consejo de Estado pedía a Felipe II que se conformase una junta de expertos en dicha materia con esta finalidad (90).

(88).- En torno a estas cuestiones, véase AZ, carp. 137, n° 122; AHN, Inq., libro 329, fols. 1v, 23v-24r, 31v-32r, 41r. Finalmente, el 19 de julio se reunieron en la sala del secreto del tribunal del Santo oficio los inquisidores, el arzobispo, el marqués de Almenara y el conde de Sástago (Ibid., libro 1232, fol. 216r-v).

(89).- Si bien estas medidas fueron aprobadas por la mayoría del Consejo, exceptuando a Cristobal de Moura, que no asistió por encontrarse enfermo, el marqués de Almazán mantenía unos argumentos completamente distintos, que hizo llegar al rey en un memorial aparte (P. BORONAT Y BARRACHINA, op. cit., pp. 350-351).

(90).- Ibid., pp. 352-353; M. DANVILA Y COLLADO, pp. 220-223.

En consonancia con esta recomendación, en enero de 1591, Gaspar de Quiroga, el arzobispo Ribera, Frígola, el conde de Chinchón, Diego de Chaves, Juan de Zúñiga y Mateo Vázquez fueron convocados a la misma, realizando, en sus primeras sesiones, una revisión de los capítulos establecidos en la junta que tuvo lugar en 1587. Su funcionamiento continuó hasta el año siguiente, interrumpiéndose con motivo de la celebración de las Cortes de Tarazona (91). Sobre las medidas adoptadas en éstas en relación al gobierno de Aragón, el conde de Chinchón informó a Quiroga y al Consejo de Inquisición en agosto de 1592. Proponía, además, que se valorase la conveniencia de proceder al desarme de los moriscos, así como de fortificar Zaragoza y en especial la Aljafería, antes de que el ejército que se hallaba en la ciudad pasase a otro destino. Si bien se decidió posponer el tratamiento de la primera cuestión, ni el Inquisidor General ni la Suprema estimaron apropiado vincular a soldados e inquisidores, puesto que la capacidad del edificio provocaría inconvenientes para que ambos pudiesen desarrollar sus funciones correctamente, a lo que había que añadir que esta unión provocaría mayor odio de los aragoneses al Santo Oficio. Apuntaban que era necesario que la Inquisición quedase segura tras la marcha de las tropas para ejercer su labor con garantías, pero bastaba con reforzar a la misma, en el seno del conjunto de la ciudad (92).

El 20 de marzo de 1593 quedaba finalmente confirmada la orden de desarme para los moriscos de Aragón. Esta fue acompañada por la concesión de un Edicto de Gracia, que contemplaba una vigencia de cuatro meses desde que se publicase en cada ciudad (93). Para hecerse cargo de estas cuestiones fue enviado a Zaragoza Pedro Pacheco, miembro de la Suprema, que había sido

(91).- D.M. SANCHEZ, El deber de consejo..., pp. 127-129.

(92).- AHN, Inq., libro 284, fols. 212-217. No obstante, la permanencia de los soldados en la Aljafería causó diversos problemas, referidos principalmente a la falta de espacio, lo que dificultaba el mantenimiento del secreto procesal de la Inquisición. Estos roces se incrementaron cuando las armas recogidas a los moriscos tuvieron dicha edificación por depósito (Ibid., libro 329, fols. 248v-249r, 272r-v), donde estuvieron hasta que, en agosto de 1594, fueron entregadas al virrey, el duque de Alburquerque (Ibid., fol. 351v).

(93).- M. DANVILA Y COLLADO, op. cit., p. 225; J.P. DEDIEU, "L'inquisition..." p. 127; AMAE, Santa Sede, leg. 21, fol. 92.

nombrado comisario en la Junta de 1591, cuando desempeñaba el cargo de inquisidor en el tribunal de Valencia, en conformidad con lo acordado en 1587 (94). Pacheco desarrolló este cometido hasta el mes de junio, en que obtuvo licencia del rey para retornar a la Corte. En la correspondencia que durante estos meses mantuvo con el Consejo de Inquisición, desde donde se informaba a Quiroga, que se encontraba en Toledo, se le instó repetidamente para que, en ningún caso, las armas recogidas fuesen entregadas a los señores de vasallos, aunque estos eran los propietarios de las mismas, puesto que las volverían a entregar a los moriscos para que defendiesen sus intereses (95). Llegado a Madrid, Pacheco hizo relación en el Consejo del cumplimiento del mandato que había recibido, insistiendo en una cuestión que ya había apuntado durante su estancia en Aragón: la necesidad de que dicha minoría fuese instruída en los preceptos católicos. Comunicada esta opinión a Felipe II, el 1 de agosto de 1593, el rey resolvió que, antes de tomar ninguna determinación, se debían reunir dos juntas, una en Madrid y otra en Zaragoza, para que, de igual modo que se había procedido en 1587-1588 en relación con los moriscos de Valencia, se comparasen los resultados de dichas reuniones (96). No obstante, las gestiones que se realizaron encaminadas a la celebración de las mismas se prolongaron hasta febrero de 1595, por lo que Gaspar de Quiroga, fallecido unos meses antes, no pudo hallarse presente (97).

(94).- AHN, Inq., libro 329, fol. 235v. En el poder y comisión que le otorgó Quiroga, el 23 de marzo, quedaban especificadas las pautas que se debían seguir para efectuar el desarme y la publicación del Edicto de Gracia (Ibid., libro 359, fols. 135r-139r).

(95).- Sobre dicha correspondencia, véase, Ibid., libro 329, fols. 239v-245v, 254r.

(96).- Ibid., leg. 1791, n° 2; P. BORONAT Y BARRACHINA, op. cit., pp. 353-357.

(97).- El 29 de septiembre, el rey escribía al Inquisidor General asombrado de que no se hubiesen iniciado las diligencias pertinentes, M. DANVILA Y COLLADO, op. cit., p. 226. A finales de octubre, se encomendaba al licenciado Arenillas de Reinoso que hiciese relación de todas las resoluciones que se habían tomado respecto al adoctrinamiento de los moriscos de Valencia, que se debía remitir al rey (IVDJ, envío 92 (caja 133), n° 1, fols. 108, 117). Por otra parte, durante 1594, se continuó realizando en las inquisiciones el registro de los moriscos que habitaban en sus distritos, encargando el Consejo que se realizase esta labor en los tribunales de Zaragoza, Barcelona, Valencia y Logroño (AHN, Inq., libro 329, fols. 314r, 330r).

8.2.3. La proliferación de las profecías.

La caída en desgracia del "partido papista" y el ascenso y triunfo político de la facción "castellanista" tuvo también su reflejo en el campo de la espiritualidad. Desde comienzos de la década de los ochenta, el cambio político trajo aparejado un intento de implantar en la sociedad una religiosidad más rígida y formal en consonancia con la ideología defendida por los nuevos patronos cortesanos. Este endurecimiento provocó que se incrementase el control ejercido sobre la misma, encauzada a la aceptación de los presupuestos de la cultura de élite. Esta situación quedó materializada en diversas actuaciones a las que ya hemos hecho referencia, como la publicación del Índice de Libros Prohibidos de 1583, la celebración del Concilio Provincial de Toledo del año anterior o la conformación de la Junta de Reформación en 1586. Este intento de uniformidad ideológica, garante de la estabilidad social, se había visto contestado desde diversos ámbitos, que iban desde la heterodoxia religiosa, como en el caso de los alumbrados, hasta la crítica intelectual proveniente de algunos profesores de la universidad de Salamanca. El Santo Oficio constituía una pieza fundamental para la implantación exitosa de los conceptos ideológicos dominantes en la sociedad a través de su labor de vigilancia y castigo de las desviaciones o posturas contestatarias que se pudiesen producir. No obstante, como hemos señalado, Gaspar de Quiroga quedó relegado y vio muy mermada su capacidad de intervención en los asuntos inquisitoriales, que pasaron a estar bajo el dominio de los miembros del "grupo castellanista", así como en la definición de la ortodoxia ideológica y moral que debía imperar y ser asumida por la sociedad, significándose, en este sentido, el confesor Diego de Chaves y García de Loaysa. Si bien, hubo de plegarse a los designios más radicalizados de esta corriente, la trayectoria del Inquisidor General ponía de manifiesto su clara separación de los mismos, puesto que, como hemos significado, la religiosidad de Quiroga se encontraba más cercana a la concepción mística representada por la Compañía de Jesús y a la postura crítica mantenida por los biblistas salmantinos. Si bien su situación en el contexto de la lucha faccional le obligó a acercarse a los nuevos patronos cortesanos para superar su postergamiento, su actuación, que

continuó siendo muy limitada, fue consecuente con la que había llevado a cabo en los años precedentes, lo que hizo que arreciasen las reprobaciones en su contra. La aparición de diversos visionarios, adivinadores y predicadores que, a través de la formulación de profecías realizaban una aguda crítica política y social, centrada en el propio rey, alentando la sedición y augurando todo tipo de catástrofes, fueron reprimidas por el Santo Oficio aludiendo a su talante herético. Frente al rigor de Chaves contra los acusados, Quiroga actuó con una considerable blandura. Esto provocó que el confesor real profiriese diversas quejas contra el Inquisidor General, que si bien provenían de sus marcadas diferencias ideológicas, no eran ajenas a la situación política, hallándose directamente relacionadas con el declive que comenzaba a sufrir la facción "castellanista", puesto que la exposición de las críticas por medio de las profecías ponía de manifiesto el fracaso de los proyectos auspiciados por dicho grupo, señaladamente después del desastre de la Armada Invencible (98).

Uno de los personajes que protagonizó estas manifestaciones proféticas fue Miguel de Piédrola y Beaumont, con quien Quiroga había mantenido contacto en 1578. Llegado desde Nápoles, donde servía como soldado, su intención era representar a Felipe II el penoso estado en que se hallaba el reino como consecuencia de la gestión realizada por el virrey, el marqués de Mondéjar. Su actuación en la Corte había favorecido los intentos realizados por los miembros del partido "castellanista" para establecer su dominio sobre los asuntos italianos, pasando a ofrecer sus servicios a Mateo Vázquez, una vez que retornó a Nápoles, y frecuentando la compañía de Juan de Zúñiga, que fue nombrado virrey en sustitución de Mondéjar, quien había prohibido a Piédrola la entrada

(98).- Sobre la aparición de dichas profecías, véase, V. BELTRAN DE HEREDIA, "Un grupo de visionarios y pseudoprofetistas que actúa durante los últimos años de Felipe II", Miscelánea Beltrán de Heredia. Salamanca 1972, III, pp. 335-405; R.L. KAGAN, Los sueños de Lucrecia. Política y profecía en la España del siglo XVI, Madrid 1991; Sueños y procesos de Lucrecia León, Madrid 1987 (Estudios de M. ZAMBRANO, E. SIMONS, J. BLAZQUEZ MIGUEL); M. AVILES, Sueños ficticios y lucha ideológica en el siglo de oro, Madrid 1981, pp. 179-226; C. GOMEZ CENTURION, La Invencible..., pp. 86-108.

a su casa (99). El rey, que había expresado sus dudas en relación al equilibrio mental de Piédrola, encargó a Quiroga que pusiese al regente León en conocimiento de las afirmaciones que realizaba. El Inquisidor General trató también este asunto con el confesor Chaves. Las conclusiones de los tres fueron coincidentes: no era profeta, se encontraba bastante desequilibrado y, sobre todo, convenía que abandonase la Corte lo antes posible, encargando al embajador en Roma y al virrey de Nápoles su vigilancia (100). La ausencia de Piédrola se prolongó hasta 1584, cuando retomó sus prácticas proféticas en la Corte, que le llevaron a alcanzar una importante notoriedad, procediendo a configurar las Cortes de Castilla, en el verano de 1587, una comisión para investigar la veracidad de sus augurios. El alcance que estaban obteniendo sus vaticinios llevó a que Quiroga, Chaves y el conde de Barajas, reunidos en la Junta de Reformatión, pasasen también a considerar la actuación de Piédrola. El 22 de julio, el obispo de Jaen, en cuya diócesis la Inquisición continuaba su ofensiva contra el brote de alumbradismo, escribía a Gabriel de Zayas sorprendido porque no se hubiesen tomado medidas contra el supuesto profeta con anterioridad, estimando necesario que cesasen sus discursos (101). Parece que, a través de uno de sus más fervientes admiradores, el canónigo de la catedral de Toledo y abad de San Vicente, Alonso de Mendoza, Piédrola había mantenido algunos encuentros con el Inquisidor General, hallándose presente en una ocasión fray Diego de Chaves, propiciándose un enfrentamiento entre ambos (102). Sin duda, Quiroga también podía estar influído por la opinión de su amigo fray Luis de León, que, durante estos años, como hemos señalado, residía en la Corte, y

(99).- Sobre su entendimiento con Mateo Vázquez, AZ, carp. 144, n° 225; V. BELTRAN DE HEREDIA, op. cit., p. 341; R. L. KAGAN, op. cit., p. 222, n. 30, aunque dice desconocer los motivos de esta prohibición.

(100).- Véanse las cartas que Quiroga remitió a Felipe II el 17 y el 20 de diciembre de 1578 (AHN, Inq., libro 284, fols. 163, 165). Esto, por otra parte, viene a desmentir la creencia de que el Inquisidor General creyó en las facultades proféticas de Piédrola (R. L. KAGAN, op. cit., p. 118).

(101).- IVDJ, envío 89 (caja 125), n° 176. Sobre la persecución a los alumbrados de Jaén, véase V. BELTRÁN DE HEREDIA, "Los alumbrados de la diócesis de Jaén", *Miscelánea*, III, pp. 235-334.

(102).- Idem, "Un grupo de visionarios..." p. 242.

mantenía comunicación frecuente con Piédrola, lo que había motivado que Arias Montano le reprendiese. Por contra, cuatro miembros de la Compañía de Jesús, entre ellos el padre Ribadeneyra, había emitido un juicio contrario a la autenticidad de su condición de profeta (103). A finales de agosto, los miembros de la Junta de Reformación se reunieron para valorar los informes recogidos por el doctor Neroni, vicario de Madrid. Realizadas las pertinentes calificaciones, decidieron que el negocio competía al Santo Oficio, puesto que algunas de las afirmaciones contenidas en las profecías eran contrarias a los preceptos católicos (104). La detención se hizo efectiva el 18 de septiembre, siguiéndose el proceso en el tribunal inquisitorial de Toledo, que se prolongó por más de un año (105). Al día siguiente de producirse la prisión, Alonso de Mendoza escribía al Cardenal Ascanio Colonna en favor del detenido. El conocimiento que se tenía en Roma de Piédrola, donde también había exhibido unos años antes su supuesta capacidad adivinatoria, debió generar interés sobre la marcha del proceso y, como resultado, la interpelación a Gaspar de Quiroga, que se mostró fiel a su tradicional entendimiento con la Santa Sede. Así, el 4 de junio de 1588, Francisco Dávila, miembro de la Suprema y arcediano de Toledo, informaba a Mateo Vázquez de los rumores existentes de que el Inquisidor General no había guardado convenientemente el secreto procesal informando al nuncio. Recomendaba que antes de que se produjesen mayores inconvenientes, el proceso se sentenciase con brevedad (106). Este modo de proceder evidenciaba el talante con que Quiroga contemplaba el fenómeno

(103).- Ibid., p. 343; L. CABRERA DE CORDOBA, op. cit., III, p. 568. Por un memorial redactado por Pedro Núñez de Toledo conocemos tanto la opinión del agustino como las gestiones que García de Loaysa estaba efectuando en contra de Piédrola (IVDJ, envío 89 (caja 125), nº 176).

(104).- En la carta que Quiroga remitía a Felipe II informándole de esta decisión, refería: "no faltó allí quien dijo que el tribunal más conveniente es la Casa del Nuncio en Toledo que es donde suelen estar recogidos los que son faltos de juicio como parece a algunos que lo está éste" (Ibid.).

(105).- Parece que la medida de apresar a Piédrola era firme desde finales de agosto, puesto que, el 11 de septiembre, Mateo Vázquez trataba sobre ella con el rey (AZ, carp. 142, nº 165). Igualmente, mantuvo informado al monarca de la evolución del proceso, actuando como intermediario de los informes que Arenillas de Reinoso y Quiroga enviaban al monarca (Ibid., carp. 143, nº 3).

(106).- Ibid., carp. 141, nº 157.

de las supuestas profecías. No obstante, el descubrimiento de su indiscreción hizo que las críticas arreciasen en su contra, puesto que, unos meses antes había propiciado la puesta en libertad de Lucrecia León, que, a través de sus sueños, había tomado el relevo de Piédrola en la propagación de profecías con un alto contenido político y social subversivo, encontrándose apoyada por el mismo grupo que anteriormente había respaldado al soldado: Alonso de Mendoza, el franciscano fray Lucas de Allende y el astrólogo Guillén de Casaos (107). Estos personajes fueron los encargados de dar publicidad a la actividad onírica de Lucrecia, que, en febrero de 1588, provocaba que nuevamente el vicario Neroni recibiese el encargo de realizar una investigación. El día 13 de dicho mes, hizo confinar a la misma en casa de uno de sus notarios (108), donde permaneció mientras Diego de Chaves y Juan de Orellana realizaban un dictamen sobre el contenido de dichos sueños, recomendando que se hiciese intervenir a la justicia ante la peligrosidad de las interpretaciones que realizaban de los mismos sus amigos. El criterio de fray Luis de León volvió a ser más benevolente respecto a la presunta profetisa, encontrando más apropiado su exortización que su enjuiciamiento y castigo. Para favorecer la liberación de Lucrecia, Alonso de Mendoza recurrió, como había actuado con Piédrola, a buscar la ayuda de Roma, comunicando al nuncio la detención realizada por el vicario, así como del arzobispo de Toledo. Quiroga, tras leer alguno de los sueños recogidos por el canónigo, ordenó que se pusiese en libertad a la retenida, que debía quedar recluida en su convento, mientras que la utilización de sus sueños quedaría reducida al estudio teológico. Esta actuación, unida a la falta de respeto al secreto procesal en el caso de Piédrola, provocaron fuertes críticas proferidas por Chaves al rey contra el Inquisidor General, al que se acusaba de haber perdido capacidad a causa de su edad y de no actuar con el rigor conveniente.

(107).- Sobre dichos personajes, así como los motivos que cada uno de ellos tenía para contrariar la política realizada por Felipe II, véase, R.L. KAGAN, *op. cit.*, pp. 123-135.

(108).- En una carta fechada dos días antes, Mateo Vázquez refería a Felipe II cómo el doctor Montoya le había entregado un papel, donde reflejaba la conveniencia de que se calificasen sus afirmaciones. Montoya había preguntado si se debía informar a Quiroga "y le dije que no porque se haría mucho ruido y todo debe ser muy secreto". El secretario proponía al rey que esta labor se encomendase al maestro Orellana y al padre Avellaneda. Por su parte, el monarca apuntaba que se pusiese este tema en conocimiento de Chaves (IVDJ, envío 51, nº 136).

Sin embargo, el confesor aderezó sus quejas con un importante ingrediente político: acusaba a Quiroga de tratar de favorecer a los procesados a causa de la vinculación que el grupo que respaldaba y apoyaba la actividad de ambos en cuanto a la formulación de profecías tenía con Antonio Pérez, aludiendo al conocido "perecismo" del Inquisidor General como el verdadero motivo de su blandura hacia los procesados (109). En consecuencia, en junio de 1588, el propio rey recomendaba que se hiciesen las diligencias precisas para que Piédrola no quedase libre, puesto que volvería a iniciar sus actividades (110). A mediados de noviembre, Mateo Vázquez refería a Felipe II que debía otorgar audiencia a Arenillas de Reinoso, así como ver el memorial enviado por Francisco Dávila. Ambos solicitaban que el rey aprobase la sentencia que se había acordado, que, por otra parte, merecía el beneplácito del secretario real. Además, quedaba por definir en qué fortaleza iba a ser recluso, aunque se señalaba que debía ser un lugar aislado (111). La sentencia, fechada el 10 de diciembre de dicho año, privaba a Piédrola perpetuamente de leer la Biblia u otros libros de las Sagradas Escrituras, de disponer de papel y tinta, de mantener correspondencia con nadie salvo para tratar cuestiones referidas a su hacienda, y le condenaba a permanecer el resto de su vida en la prisión que fuese señalada, así como a salir en el Auto de Fe que se celebró en Toledo ocho días después (112).

Por estas mismas fechas quedaba sentenciado el proceso inquisitorial

(109).- R. L. KAGAN, op. cit., pp. 142-146; Sueños y procesos de Lucrecia de León, pp. 56-57.

(110).- AZ, carp. 141, n° 156.

(111).- Según el memorial secreto remitido por Francisco Dávila, el reo había confesado que sus profecías eran fruto de las informaciones que le procuraban sus amigos (IVDJ, envío 55 (caja 73), n° 243, 245-246). Felipe II apuntaba la posibilidad de que fuese una fortaleza o castillo del arzobispo de Toledo, "aunque yo creo que su dueño los deja caer como si después no se hubiesen de reparar de su hacienda" (Ibid., n° 280). Sobre las gestiones realizadas por Arenillas de Reinoso para la elección del lugar, véase, AZ, carp. 152, n° 76-77. Finalmente, fue confinado en la fortaleza de Guadamur.

(112).- Una copia de dicha sentencia, que aportaba interesantes datos sobre la vida de Piédrola, que insistió en alegar locura y falta de conocimiento en su defensa, se encuentra en AGS, Estado, leg. 165, n° 340 (citado por R.L. KAGAN, op. cit., p. 22, n. 35).

seguido en Lisboa contra Sor María de la Visitación, conocida como "la monja de Lisboa". Dicha religiosa, priora del monasterio dominico de la Anunciada de dicha ciudad, alcanzó gran fama a partir de 1584 como consecuencia de su estigmatización, de sus visiones y de su capacidad de realizar milagros (113). Sin duda, fray Luis de Granada, que creyó honestamente en la veracidad de las llagas y poderes sobrenaturales, contribuyó considerablemente a fomentar la relevancia que fue adquiriendo, poniendo en conocimiento de sus amigos, como Carlos Borromeo o el patriarca Ribera, su existencia y actuaciones (114). No obstante, cuando, en el verano de 1588, la religiosa pasó a erigirse en la libertadora del dominio ejercido por Felipe II sobre el reino luso, criticando su política y abanderando el "sebastianismo", se inició un proceso inquisitorial en su contra que vino a demostrar la falsedad de sus estigmas y milagros, lo que produjo un considerable escándalo (115).

Si Piédrola quedaba impedido para continuar realizando sus "proféticas" críticas sobre la política de la Monarquía, la mediación de Quiroga había propiciado que Lucrecia León, incumpliendo las condiciones de su liberación, siguiese procurando a su grupo el material necesario a través de sus sueños para enjuiciar negativamente la evolución de los designios políticos, principalmente, después de la derrota de la Armada Invencible. Ni a Quiroga ni al propio rey parecía preocupar el predicamento alcanzado por la "soñadora" Lucrecia en

(113).- Sobre dicha religiosa, véase A. HUERGA, "La vida seudomística y el proceso inquisitorial de Sor María de la Visitación ("La Monja de Lisboa")". Hispania Sacra 12 (1959), pp. 35-130; Idem., Historia de los alumbrados, II, pp. 289-291, 624-625; B. LLORCA, La Inquisición española..., pp. 99-102; J. IMIRIZALDU, Monjas y Beatas embaucadoras, Madrid 1977, pp. 123-263.

(114).- A. HUERGA, Fray Luis de Granada. Una vida al servicio de la Iglesia, Madrid 1988, pp. 291-311. Por otra parte, la creencia de Granada fue compartida de manera generalizada, participando de ella también Gaspar de Quiroga que, el 16 de abril de 1584, escribía a García de Loaysa: "mucha consolación he recibido con la relación de la monja de la Anunciada de Lisboa y en mucho se ha de estimar que en estos tiempos veamos milagros tan señalados" (AHN, Inq., libro 361, fol. 237r).

(115).- El 14 de enero de 1589, Quiroga escribía al Archiduque Alberto, mostrando su regocijo por haber desengañado a tantos como creían en ella. Para el mismo efecto, remitía al gobernador e Inquisidor General de Portugal una copia de la sentencia dictaminada contra Piédrola (Ibid., fols. 539v-540r).

diversos ámbitos cortesanos, llegando a propiciar la conformación de la cofradía de la Santa Cruz de la Restauración, donde ingresaron los antiguos seguidores de Piédrola. Conspiradores o no en favor de Antonio Pérez -si bien no existen pruebas que demuestren este extremo, sí subsistían viejas conexiones con el secretario, siendo el argumento preferido por Chaves para actuar en su control cierto era que alrededor de estos presuntos profetas se habían congregado un grupo de personas que no estaban conformes o se habían visto perjudicados por la evolución política de la monarquía, haciendo responsable de la dificultosa situación en que se hallaba ésta al propio rey y a la facción cortesana dominante, que, obviamente, era la más interesada en acallar este núcleo contestatario. En este sentido, es posible, que cuando el confesor real acusaba de "perecismo" a sus integrantes y al propio Quiroga, no se refiriese literalmente a sus contactos con el mismo secretario, por otra parte existentes, sino, por extensión, a un entendimiento político e ideológico contrario al propugnado por los miembros del "partido castellanista", cuyo poder, a través de las críticas implícitas en las profecías, trataban de socavar (116). En este sentido, no nos parece casual que se permitiese a Lucrecia y sus amigos continuar con sus prácticas hasta que, producida la fuga de Antonio Pérez a Aragón en 1590, Chaves tomase la iniciativa de erradicar cualquier actividad que pusiese en tela de juicio la autoridad real. Los procesos inquisitoriales contra Antonio Pérez y el grupo encabezado por Lucrecia León se iniciaron de manera paralela, y, como sucediese en el caso del antiguo secretario, Quiroga hubo de plegarse a las diligencias dirigidas por el confesor, puesto que contaban con la aprobación del rey (117).

La rigidez ideológica que se trataba de implantar en la sociedad por la élite que ostentaba el ejercicio del poder tuvo también su reflejo en la persecución de cualquier posible desviación del ideario considerado ortodoxo o a las críticas que se realizasen al mismo en el ámbito intelectual. La persecución

(116).- Algunas de estas consideraciones han sido referidas por R.L. KAGAN, op. cit., pp. 147-153.

(117).- Sobre dichos procesos y condenas, véase, Ibid., pp. 154ss.; RAH, "Salazar", N-4, fols. 65-66; J. IMIRIZALDU, op. cit., pp. 65-69; Sueños y procesos de Lucrecia León, pp. 73-91.

que se había desarrollado en la década anterior contra algunos profesores de la universidad de Salamanca tuvo su continuidad en el procesamiento inquisitorial de fray José de Sigüenza. En agosto de 1591, García de Loaysa comunicaba al Inquisidor General el deseo de Felipe II de que otorgase licencia para que el bibliotecario de El Escorial procediese a expurgar los libros contenidos en dicha biblioteca en conformidad con el Catálogo de Libros Prohibidos. Apuntaba que fray José de Sigüenza, que había sido prior del monasterio de Parraces, ocupaba este oficio. No obstante, creía más conveniente que el permiso no fuese nominal, sino que se diese a quien ocupase este cargo de forma general, puesto que los religiosos que se iban sucediendo en esta función eran siempre beneméritos (118). Como hemos referido, Arias Montano había recibido en diversas ocasiones el mandato regio de ocuparse de ordenar y catalogar los libros y manuscritos que llegaban a la biblioteca real. Con este motivo fue nuevamente requerido por estas fechas, llegando a El Escorial en enero de 1592. Durante su estancia, el exégeta compaginó esta actividad con la enseñanza de diversas materias, entre las que se encontraban el hebreo y el griego, a algunos miembros de la comunidad jerónima. Sus enseñanzas tuvieron una especial influencia en Sigüenza, quien apoyó públicamente las ideas que propugnaba Montano sobre las versiones de la Biblia. Estas afirmaciones provocaban que se iniciase en su contra un doble proceso, puesto que, como consecuencia de los cargos que se le imputaron como resultado de una visita promovida dentro de la propia Orden, el 23 de abril, Sigüenza comparecía voluntariamente ante el tribunal inquisitorial de Toledo portando una carta de su prior, Diego de Yepes, en que se explicaban las acusaciones que se habían derivado de la misma. Efectuadas las pertinentes calificaciones, García de Loaysa, enemistado con Sigüenza a causa de sus esfuerzos para que los catedráticos del Colegio escurialense perteneciesen a su Orden y no recayesen en religiosos seculares, escribió a Gaspar de Quiroga informándole del escándalo y peligrosidad de las proposiciones realizadas. El proceso se desarrolló hasta el 21 de octubre, cuando los inquisidores de Toledo dictaminaron una sentencia absolutoria, que fue ratificada por el Consejo de Inquisición en enero de 1593. Por otra parte, una de

(118).- AHN, Inq., leg. 4470, exp. 4.

las consecuencias de la visita fue la prohibición a Arias Montano de continuar desarrollando su labor docente. Así pues, el proceso inquisitorial de fray José de Sigüenza puso de manifiesto diversos aspectos. Además de significar las pocas simpatías que el religioso tenía dentro de su propia Orden, a lo que no eran ajenas las ambiciones y rencillas personales, el contenido de sus sermones, apoyados en las enseñanzas críticas de Arias Montano, había provocado la intervención del influyente García de Loaysa, que, como capellán y limosnero real, había asistido a alguno de ellos, actuando como estricto defensor de la ortodoxia establecida. Si bien su procesamiento no concluyó con ninguna condena, sirvió para desprestigiar al acusado y establecer la peligrosidad de defender posturas ideológicas que cuestionaban la misma (119).

Este aumento de la rigurosidad y control sobre la sociedad tuvo un reflejo inmediato en relación con la censura de libros. Desde mediados de 1586 se habían iniciado las gestiones encaminadas a actualizar el Catálogo de Libros Prohibidos y el Expurgatorio de 1583-1584 con la inclusión de nuevas obras. Para ello, el Consejo de Inquisición escribió a las universidades de Alcalá de Henares y Salamanca para que inciasen las gestiones pertinentes encaminadas a este propósito, aunque las mismas no se debieron comenzar de forma realmente efectiva hasta el período 1590-1594 (120). Parece que la actuación del Inquisidor General en esta revitalización de la práctica censora fue inexistente o muy limitada, puesto que iba dirigida hacia postulados con los que Quiroga se identificaba, siendo el confesor Chaves quien tuvo un marcado protagonismo en

(119).- En torno a dicho proceso, véase R. GARCIA VILLOSLADA, op. cit., III-2º, p. 268; G. DE ANDRES, Proceso inquisitorial del Padre Sigüenza, Madrid 1975.

(120).- Así se recordaba el 7 de marzo de 1594, en sendas cartas de la Suprema al doctor Neroni, que había pasado a ostentar el título de abad de Alcalá de Henares y a Juan de Zúñiga, miembro de dicho Consejo que estaba en Salamanca realizando una visita a la Universidad (AHN, Inq., libro 329, fol. 317r-v). El 22 de abril, se mandaba a Neroni que encargase a los doctores Francisco Martínez, Montesinos, Cámara, Tenas, al padre Lorca, de la Orden de San Bernardo, al dominico Francisco de Mendoza y al jesuita Vázquez que se ocupasen de esta labor con la mayor brevedad posible (Ibid., fols. 326v-327r). En este sentido, también se escribía a Juan de Zúñiga y a Palacios de Terán para que favoreciesen la actuación del jesuita Enrique Enríquez, que se trasladaba a Salamanca para cumplir con la labor que el Santo Oficio le había encomendado (Ibid., fol. 327r, 336r y 368v; IVDJ, envío 91, nº 358).

esta actividad (121). En 1588, en una edición preparada por fray Luis de León, se publicaban algunos de los escritos de Teresa de Jesús. Al año siguiente, el pertinaz perseguidor de alumbrados, fray Alonso de la Fuente, acusaba ante la Inquisición el contenido de dichas obras como exponente de dicha doctrina. A las calificaciones desfavorables realizadas por el propio dominico se unieron, en 1591, las efectuadas por Juan de Orellana y, en 1593, por Juan de Lorenzana, aunque finalmente el juicio fue sobreseído (122). Por otra parte, el encargo recibido por la Universidad de Salamanca, en 1586, de proceder a la ampliación del Catálogo de Libros Prohibidos hizo resurgir la polémica teológica entre jesuitas y dominicos, como continuación de la disputa que se había desarrollado unos años antes entre Montemayor y Bañes. El dominico y el mercedario Zumel estaban integrados en la comisión que debía emitir sus juicios sobre los libros de publicación reciente. Así, procuraron que se prohibiese el escrito por el jesuita Luis de Molina por sus afirmaciones en torno a la libertad y la gracia, lo que reavivó el enfrentamiento (123). Molina recurrió a Quiroga y al Consejo de Inquisición, en enero de 1594, solicitando que tanto su obra como la de Bañes y Zumel fuesen revisadas fuera de la Universidad de Salamanca, donde se habían movido diversos pleitos contra los miembros de la Compañía de Jesús. El día 18 del mismo mes, la Suprema, siguiendo el mandato del Inquisidor General, ordenaba a Juan de Zúñiga, que se encontraba realizando una visita en dicha universidad, que enviase los libros referidos al Consejo, así como que señalase al comisario del Santo Oficio en Salamanca, el doctor Palacios de Terán, que no

(121).- Véase, por ejemplo, la instigación de Chaves para que se expurgasen las obras del doctor Roa (AZ, carp. 145, n^o 176). Por otra parte, esta circunstancia fue puesta de manifiesto por el Cardenal Baronio. En una carta dirigida a Pedro de Tapia, fechada en junio de 1594, exponía que los inquisidores hispanos habían censurado sus Anales: "solo en este particular se puede dudar que el cardenal de Toledo no lo divulgue a quien he hallado y provado contrario de tal manera que me ha hecho dudar que esta no sea traza suya y por no hacer juicio no lo afirmo" (BNM, ms. 718, fols. 30r-31v).

(122).- AHN, Inq., libro 329, fol. 262r-v; E. LLAMAS-MARTINEZ, "Teresa de Jesús y los alumbrados...", pp. 144-145; V. BELTRAN DE HEREDIA, "Un grupo de visionarios..." pp. 381-405.

(123).- Sobre las posturas encontradas que ambos mantenían, véase, A. ASTRAIN, op. cit., IV, pp. 147-166; L. PASTOR, op. cit., vol. 24, pp. 167-174.

se tratase en torno a la censura de las obras de Luis de Molina (124). Así mismo, la ofensiva desplegada por la orden de Santo Domingo contra la Compañía de Jesús también afectó a Francisco Suárez, a quien puso sobre aviso Quiroga en una visita que el jesuita realizó al Inquisidor General en octubre de 1593, sobre las acusaciones que en su contra se habían realizado en el Santo Oficio por los dominicos Mondragón y Avendaño. Esto dió ocasión a Suárez a presentar una amplia defensa, que envió a Gaspar de Quiroga en enero de 1594 (125). Meses después, según informaba Hernando de la Cerda, rector del colegio de Medina del Campo, al General Aquaviva, el ataque contra las obras de teología realizadas por los jesuitas era generalizado, reiterándose las denuncias de los dominicos ante la Inquisición (126). Igualmente, hicieron llegar diversos memoriales a Felipe II, que eran remitidos sistemáticamente al licenciado Arenillas de Reinoso para que los entregase a Quiroga (127). Para poner fin a esta polémica, el 21 de julio, el Inquisidor General escribía a los obispos de Valencia, Santiago, Burgos, Cuenca, Segovia, Cartagena, Osma, Coria, Orense, Lugo, Mondoñedo y Almería, así como al doctor Gavilán de la Universidad de Sigüenza, al doctor Gabriel Hernández que se hallaba en Valencia, al agustino Miguel Salón, al carmelita Miguel de Carranza y a los doctores Núñez, Sierra, Castro y Gómez, canónigos de Córdoba, Burgos, Avila y Santiago respectivamente, a los que se les remitieron los apuntamientos realizados sobre los libros de Molina, Bañes y Zumel para que los examinasen y expresasen su opinión (128). Realizada esta diligencia, llegó una carta del

(124).- A. ASTRAIN, op. cit., IV, pp. 166-168; AHN, Inq., libro 329, fols. 302v-303r. La designación regia de Juan de Zúñiga como visitador de la Universidad salmantina se produjo en julio de 1593. Tanto Quiroga como Rodrigo Vázquez de Arce solicitaron a Felipe II que le fuese concedida una ayuda de costa por la precariedad económica en que se encontraba (AZ, carp. 146, nº 235; IVDJ, envío 91, nº 824).

(125).- En este sentido, hemos de señalar, que Francisco Suárez había dedicado a Quiroga sus comentarios a la Tercera Parte de Santo Tomás (BSCV, Ms. nº 16, fol. 163; G.GONZALEZ DAVILA, Teatro...de las dos Castillas, I, p, 491; J.MARTIN ABAD, La imprenta..., pp, 1208-1209, nº 1066).

(126).- L. PASTOR, op. cit., vol. 24, pp. 175-176; A. ASTRAIN, op. cit., IV, pp. 168-175.

(127).- IVDJ, envío 92 (caja 133), nº 1, fols. 164, 185, 192.

(128).- AHN, Inq., libro 357, fol. 144r-v; Ibid., libro 329, fols. 342v-344r, 347v-348v.

Cardenal Aldobrandino dirigida al nuncio por la que ordenaba a éste que pidiese al Inquisidor General que se apartase el Santo Oficio del entendimiento de este asunto, que quedaba conferido al propio pontífice. También mandaba Clemente VIII que cada Orden explicase su postura por escrito, cometiendo al nuncio que hiciese un llamamiento a los Superiores para que se terminase la disputa abandonando el tratamiento de la controversia. La intervención de la Santa Sede en el conflicto, excluyendo al Santo Oficio, no fue bien acogida por el Consejo de Inquisición ni por Felipe II, que instó a la Suprema para que informase al nuncio de las gestiones realizadas por el Inquisidor General, no considerando necesario que procediese a ejecutar el mandato recibido, puesto que, todas las informaciones, censuras y calificaciones recogidas por la Inquisición, así como los memoriales que los miembros de cada Orden elaborasen en favor de sus argumentos, serían remitidos a Roma para su valoración. En este sentido, se compartía la opinión del papa de prohibir a dichos religiosos proseguir ahondando en sus diferencias, aunque podrían expresar sus opiniones siempre que actuasen con templanza. El 26 de septiembre, el rey escribía al embajador en Roma, el duque de Sessa, para que representase esta situación al pontífice, culpando a la Compañía de Jesús de haber recurrido a la Santa Sede para conseguir que el Santo Oficio fuese apartado del tratamiento de esta materia. Debía asegurar al papa que con ambas Ordenes se procedería con equidad y justicia, así como, que se tomarían las medidas pertinentes para que cesase el enfrentamiento (129). La realización de los distintos informes, censuras y memoriales solicitados se prolongó por espacio de varios años, que, finalmente, se remitieron a Roma a comienzos de 1598 (130).

Así pues, como hemos señalado, la implantación en la sociedad de los criterios ideológicos propugnados por el "partido castellanista" se había traducido

(129).- Ibid., fol. 360r-v; Ibid., libro 251, fols. 135r-137v. En este sentido, se remitieron diversas cartas a los tribunales inquisitoriales para que se ordenase a los provinciales de ambas Ordenes que no se persistiese en la disputa. También fue requerida en torno a la misma el criterio de las Universidades de Alcalá de Henares y Salamanca (Ibid., libro 357, fol. 146r; Ibid., libro 329, fols. 361v-362r, 366r-v).

(130).- A. ASTRAIN, op. cit., IV, cap. VI.

en una mayor rigidez en la defensa de la ortodoxia. Este talante de rigor en la aplicación de los preceptos confesionalistas había quedado igualmente reflejado en lo concerniente a la reforma de las Ordenes religiosas y en el aumento de los conflictos jurisdiccionales entre la Monarquía y el papado, que estaba directamente relacionado con la concepción política patrimonialista defendida por dicho grupo. En este contexto, el establecimiento de una religiosidad más formal e intelectual y la defensa de la superioridad del poder real en el seno de la Monarquía frente a otras instancias políticas y religiosas provocaron que, la Compañía de Jesús, que gozaba de diversos privilegios jurisdiccionales y cuya espiritualidad no se ajustaba a la que se propugnaba desde las altas esferas cortesanas, tratase de ser sometida a una reforma que equiparase su estructura a la del resto de las Ordenes. En este sentido, la ocasión propicia fue facilitada por algunos de sus propios miembros.

8.2.4. La visita a la Compañía de Jesús

Como hemos señalado, el cambio operado por la Compañía de Jesús desde que Gregorio XIII accedió al solio pontificio fue fundamental para la evolución de la Orden. El pontífice no sólo se apoyó en dicho instituto para extender la aplicación de la reforma católica, que conllevó una transformación en su ideología y espiritualidad, sino que también procuró reducir el influjo hispano propiciando la elección, tras la muerte de Francisco de Borja, de Everardo Mercuriano. El comienzo del nuevo generalato trajo aparejado que diversos jesuitas hispanos, que habían permanecido en Roma ocupando diversos cargos, se viesan relevados de los mismos, siendo forzados a retornar sin que les fuese encomendada ninguna ocupación. Los componentes de este grupo, integrado, entre otros, por Pedro de Ribadeneyra, Francisco Abreo, Dionisio Vázquez, Gonzalo González, Juan de Mariana, Enrique Enríquez y José de Acosta, se enfrentaron de forma diversa a su nueva situación. Si bien alguno de ellos, como Ribadeneyra, se acomodaron a las directrices marcadas por Roma, otros mostraron su descontento y fueron incrementando el tono de sus críticas hasta adoptar una postura de clara oposición. Durante los años que el "partido

papista" contó con el beneficio de la gracia real y sus miembros ocuparon los cargos principales de la administración de la Monarquía, la identificación de los mismos con la religiosidad que representaba la Compañía de Jesús hizo que protegiesen a dicha Orden de los ataques encaminados a su descrédito -como las acusaciones de alumbradismo- y que se permitiese que continuasen ostentando sus privilegios jurisdiccionales, quedando excluida del proceso de reforma de las Ordenes religiosas auspiciado por el propio Felipe II (131). La caída en desgracia de la facción "papista" y el ascenso del "partido castellanista" provocó una considerable mutación respecto al trato favorable que hasta entonces había recibido. Si bien, como hemos señalado, se sucedieron diversas polémicas y ofensivas ideológicas, provenientes principalmente de la Orden de Santo Domingo, con cuya religiosidad más intelectual se encontraba identificada la élite dominante, los privilegios jurisdiccionales de que gozaba chocaban con la concepción política patrimonialista defendida por dicha facción, que aprovechó las críticas proferidas por algunos componentes del grupo de jesuitas que habían retornado de Roma para plantear la necesidad de que la Compañía de Jesús fuese sometida a una reforma (132).

Por otra parte, los memoriales elaborados por los jesuitas discolos pedían la realización de una serie de transformaciones en la Compañía de Jesús semejantes a las adecuaciones que se habían solicitado respecto a otras Ordenes en consonancia con el proceso de confesionalización de la Monarquía, puesto que se criticaba que el General residiese en Roma, que no fuese natural de los reinos hispanos, la estructura excesivamente jerarquizada, la imposición del criterio del

(131).- El grupo de jesuitas crítico con las directrices de la Compañía había instado a Diego de Covarrubias, cuando ocupaba la presidencia del Consejo Real, para que actuase como mediador ante el papa para que aceptase tratar con Felipe II sobre el remedio de una situación que, a su juicio, era muy dañosa para la Orden. Sin embargo, sus intentos fueron infructuosos (AZ, carp. 150, n° 96).

(132).- Este cambio en las facciones cortesanas coincidía con el acceso al generalato de Claudio Aquaviva, que continuó la obra de reforma de la Orden iniciada por Mercuriano, adoptando disposiciones fundamentales que regulaban la formación y las funciones que debían recibir y desarrollar los miembros de la Orden a través del Ratio Studiorum y del Directorio de ejercicios. En torno a esta evolución, véase, J. MARTINEZ MILLAN, "Transformación y crisis de la Compañía de Jesús (1578-1594)" (En prensa).

General tanto en las personas que debían ocupar los cargos, como en la espiritualidad que estaba imponiendo a la Orden, que, según sus juicios, se apartaba de sus principios fundacionales, que su lejanía motivaba el desconocimiento de los problemas, por lo que se debía nombrar un superior o un comisario para cada reino que fuese oriundo del mismo, etc (133). Dichos memoriales se hicieron llegar al rey, resaltandose los problemas de jurisdicción que causaba la organización y privilegios otorgados a la Compañía de Jesús, lo que fue muy bien recibido por los miembros del "partido castellanista", que pasaron a apoyar su proyecto e instaron al monarca para que se tomaran medidas (134). La actividad de estos jesuitas descontentos involucró igualmente al Santo Oficio a través de las denuncias realizadas por Diego Hernández al tribunal inquisitorial de Valladolid a mediados de 1584. La acusación de solicitación lanzada por el padre Hernández contra Sebastián de Briviesca, unos meses después que Antonio Marcén, provincial de Castilla, a quien Hernández había informado del supuesto delito, ordenase el traslado de Briviesca a Roma, provocó que tanto Marcén, como los rectores Lavata y Ripalda, a los que se unió Juan López, fuesen detenidos por dicho tribunal entre marzo de 1586 y febrero de 1587. Así pues, con esta actuación, aunque después se esclareció la falsedad de la delación, se había logrado que el Santo Oficio iniciase un proceso contra diversos miembros de la Compañía de Jesús que ocupaban importantes cargos dentro de la Orden en Castilla por designación del General, siendo este uno de los puntos esenciales de las reclamaciones recogidas en los memoriales contestatarios que, por otra parte, se multiplicaron aprovechando esta circunstancia favorable para sus intereses (135).

(133).- Sobre dichos memoriales, véase, A. ASTRAIN, op. cit., III, cap. X; C. MANRIQUE, "Felipe II y los jesuitas" *Revista de España* 50 (1876), pp, 296-313; AMAE, Santa Sede, leg. 35, fols. 155-215.

(134).- Así, Mateo Vázquez comentaba al rey: "Al segundo apuntamiento de su Magd que sospecha porque los de la Compañía se han procurado eximir de servir al Santo Oficio no se dice nada pero dos cosas sospechamos, la una que no quieren reconocer superiores y la otra que son tantos los confesos dellos que apenas se hallaría (habiéndose de hacer información de limpieza, como se requiere) quien dellos pudiese servir" (AZ, Carp. 150, n° 97, s.d).

(135).- Esta situación queda claramente reflejada en la Carta que Pedro de Ribadeneyra remitió al General en junio de 1586 ("Obras escogidas..." pp, 594-596). En este sentido es representativo que, desde que, en el verano de 1584, Hernández presentase su denuncia, no se hubiese realizado

La actitud de Gaspar de Quiroga respecto a la Compañía de Jesús estuvo marcada por una doble actuación. Mientras que, por una parte, continuó su vinculación y favorecimiento hacia dicha Orden, que se materializó tanto en sus cartas dirigidas al tribunal inquisitorial de Valladolid, y en especial a uno de sus clientes, el inquisidor Vigil de Quiñones, para que las causas de los jesuitas detenidos se despachasen con la mayor brevedad posible (136), como en su proyecto de fundar un nuevo colegio jesuítico en Orán (137), por otro lado hubo de plegarse, como había sucedido en otros ámbitos, a los deseos del rey y de la facción cortesana dominante respecto al intento de reforma, procurando defender los privilegios jurisdiccionales del Santo Oficio, que, en algunos aspectos, colisionaba con los que gozaba la Compañía de Jesús. El 22 de noviembre de 1586, desde el Consejo de Inquisición se remitía a los inquisidores de Valladolid una copia de los memoriales que los jesuitas Dionisio Vázquez y Enrique Manríquez había entregado al tribunal vallisoletano, que habían sido enviados a la Suprema. Se encargaba a los inquisidores que iniciasen una investigación sobre las cuestiones que se hallaban reflejadas en los mismos (138). Estas, evidentemente, estaban referidas a las bulas otorgadas a la Compañía de Jesús y constituciones que la regían, así como a las enseñanzas que

ninguna diligencia. Meses después, en 1585, Aquaviva hizo nuevos nombramientos designando provinciales, lo que supuso un impulso para la actividad inquisitorial. El Consejo de Inquisición escribió a los inquisidores de Valladolid para que remitiesen noticias sobre el estado en que se encontraba el negocio (AHN, Inq., libro 580, fol. 328r). Por su parte, Quiroga reprochaba a Montoya, procurador en Roma, que no hubiese dado aviso del breve obtenido por la Compañía de Jesús para eximirse de los oficios inquisitoriales, representando una diferencia respecto al resto de las Ordenes y un agravio para la jurisdicción del Santo Oficio. Por ello, mandaba que solicitase al papa la revocación del mismo (Ibid., Libro 361, fol. 384r-v).

(136).- Ibid., fol. 429r-430v.

(137).- Como hemos señalado, este proyecto de Quiroga había sido presentado por los miembros del "partido castellanista" como una muestra de su senectud. En septiembre de 1586, según informaba Zayas a Mateo Vázquez, las gestiones se encontraban bastante avanzadas. Refería que don Martín de Córdoba había informado que con la erección del Colegio podrían quedar despoblados los monasterios de dominicos y mercedarios existentes, pudiéndose convertir uno de ellos en hospital, permaneciendo el de los franciscanos reformados (IVDJ, envío 56 (caja 75), paquete 6, n° 13, s.f.).

(138).- AHN, Inq., libro 361, fol. 85v-r. Sobre el curso que llevaba el proceso de los jesuitas detenidos, véase, A. ASTRAIN, op. cit., III, pp. 368-381; C. MANRIQUE, op. cit., pp. 290-295. Respecto a la opinión que el nuncio remitió a Roma, señalando que todo se había encaminado para conseguir desprestigiar a la Orden, véase, N. MOSCONI, op. cit., pp. 54-58.

recibían sus miembros a través de la Ratio Studiorum, que fueron sometidas a calificación, siendo especialmente significativa la realizada por el confesor Chaves. El resultado fue el mandato inquisitorial realizado a los provinciales, en marzo de 1587, de entregar al Santo Oficio todos los libros que hiciesen referencia a la legislación de la Orden, constituyendo el paso previo necesario para poner fin a sus privilegios y procurar la intervención de la Corona en su estructura (139). En este sentido, Quiroga había informado a Felipe II de los memoriales presentados por Enríquez y Vázquez al Consejo de Inquisición, solicitando al rey que escribiese a su embajador en Roma para que se pusiese remedio en los asuntos aludidos por estos (140). Así mismo, el nuncio acudió a ver al Inquisidor General portando una carta del Cardenal Rusticuchi, fruto de las gestiones realizadas por el General Aquaviva ante Sixto V, en la que se cuestionaba la autoridad de la Inquisición de proceder contra los miembros de dicha Orden, puesto que, si habían cometido algún delito, su castigo competía al Superior (141). Siguiendo el consejo de Quiroga, el rey escribió al conde de Olivares para que representase al papa diversas cuestiones. En primer lugar, debía procurar que el pontífice revocase diversos privilegios concedidos a la Compañía de Jesús cuyo entendimiento estaba conferido al Santo Oficio, en concreto, los referidos a la penalización de los miembros que cometiesen faltas graves, singularmente, la solicitud. Igualmente, la posibilidad de dar la absolución "in foro conscientiae" a aquellos que hubiesen incurrido en herejía, contar con licencia para tener y leer libros prohibidos, poder acudir a tierra de

(139).- A. ASTRAIN, op. cit., III, pp, 381-391; L. PASTOR, op. cit., pp, 150ss.

(140).- AZ, carp. 150, n° 120.

(141).- Esta actuación se correspondía perfectamente con las noticias que sobre las gestiones de los jesuitas en Roma transmitía a Quiroga el secretario de la embajada Martínez de Carnacedo, que valoraba como un gran perjuicio para la Inquisición esta actitud: "sabe Dios que amo y quiero esta religión entrañablemente, i que si no me placen algunas singularidades i exemptiones que procura el por parecerme que está en ellas su perdición" (AHN, Inq., leg. 3284, n° 41). Este juicio era contrario al que el padre Ribadeneyra hizo llegar al Inquisidor General, en el que señalaba que los privilegios inquisitoriales y los de la Compañía no eran incompatibles, asegurando que ambas instancias tenían la misma función, aunque utilizaban caminos distintos (MHSI, Ribadeneyra, II, pp, 338-347). En el mismo sentido escribió al General Aquaviva al que informaba de un encuentro con Quiroga y de la defensa que éste pensaba realizar de la jurisdicción inquisitorial (Ibid., pp, 53-55).

herejes y permanecer entre ellos, así como estar exonerados de ocuparse en servicio de la Inquisición. De igual manera, debía informar a Sixto V de cómo algunos jesuitas habían acudido al Consejo de Inquisición para presentar sus quejas respecto al modo de gobierno de la Orden, y de los inconvenientes y abusos que se derivaban del mismo, justificando la toma de los compendios de los privilegios, bulas, y del libro *Ratio Studiorum* por la Inquisición para poder informar a la Santa Sede con mayor fundamento. En consecuencia, debía pedir a Sixto V que otorgase el permiso pertinente para realizar una visita a la Compañía de Jesús en la Monarquía hispana (142). En su respuesta, el embajador advertía dos cuestiones. El papa había recomendado al General Aquaviva con anterioridad que acudiese a visitar a los profesos de su Orden en diversos lugares, pero éste se había excusado objetando la necesidad de permanecer en Roma, posiblemente prevenido de la intención de Felipe II. En este sentido, apuntaba que se debía haber remitido una lista con las personas idóneas para ocuparse de la misma que poder presentar al pontífice, puesto que, en caso de acceder a su ejecución, estimaba segura la designación del nuncio como visitador (143).

Mientras tanto, los jesuitas Dionisio Vázquez y Enrique Enríquez continuaban haciendo llegar sus memoriales al tribunal inquisitorial de Valladolid contra los mandatos que desde Roma se efectuaban en relación a diversas actividades de los miembros de la Orden. El 18 de abril, el Consejo de Inquisición informaba a Quiroga como a través de éstos habían tenido noticia de que los provinciales habían recibido instrucciones de elegir a varios estudiantes adelantados para que fuesen enviados a Transilvania. Los consejeros compartían

(142).- La carta, reproducida en parte por A. ASTRAIN, op. cit., III, pp, 435-436, aparece recogida en AZ, carp. 150, nº 99. También encargaba Felipe II al embajador que agradeciese al Cardenal Deza su actuación para entorpecer las reclamaciones presentadas por Aquaviva ante la Congregación de la Inquisición, a quien el rey también escribió en este sentido (Ibid., nº 101). Por otra parte, fue Arenillas de Reinoso quien se encargó de asesorar al monarca sobre las cuestiones jurisdiccionales que debía presentar el Conde de Olivares al papa (Ibid., nº 111-113). Véase, igualmente, C. MANRIQUE, op. cit., pp, 434-438.

(143).- Véase la carta que Olivares remitió a Mateo Vázquez el 23 de abril en AZ, carp. 150, nº 103. El 1 de mayo, refería al secretario cómo continuaba el desarrollo de las diligencias (Ibid., nº 102).

el criterio de los dos jesuitas del daño que podría causar en mentes jóvenes y poco formadas el contacto con las ideas heréticas. Igualmente, apuntaban que se iba a proceder a la designación de los procuradores que debían acudir a Roma en representación de las provincias hispanas, temiéndose que, hallándose reunidos en dicha ciudad un importante número de jesuitas con el General procederían a impetrar alguna cuestión contra el Santo Oficio. Así mismo, alertados de que Aquaviva había enviado un gran volumen de epístolas en latín donde, según las denuncias, se revelaban asuntos que se habían referido en confesiones sacramentales, violando el obligado secreto, habían ordenado a los inquisidores vallisoletanos que recogiesen dicho libro, así como en el que se reflejaban las constituciones de la Compañía de Jesús para que fuesen sometidos a calificación (144). El 29 de abril, Quiroga y la Suprema presentaban una consulta al rey sobre estos temas, recomendando que tanto a los estudiantes como a los procuradores se les prohibiese la salida. Advertían que habían tratado de enmascarar el destino de los primeros poniendo en las patentes que acudían a Roma requeridos por el General. Felipe II aprobó que se efectuase esta actuación, pero señalaba que se cuidasen de no provocar irritación, para que las diligencias que se efectuaban con Sixto V no se viesan afectadas (145). El mismo día, el consejero Matos de Noroña ponía en conocimiento del Inquisidor General que, siguiendo sus instrucciones, había entregado los memoriales de Vázquez y Enríquez al confesor Chaves, quien se había sumado a la opinión expresada, aconsejando que se actuase con la mayor brevedad posible (146). El 6 de mayo, el Consejo de Inquisición apuntaba a Quiroga la conveniencia de que escribiese a los tribunales de Toledo, Sevilla, Valladolid y Valencia para que hiciesen llegar a los provinciales el mandato, estableciendo pena de excomunión por su incumplimiento, de que no permitiesen salir a ningún jesuita sin dar antes noticia al Santo Oficio de las personas y del destino, así

(144).- AHN, Inq., libro 581, fols. 111v-112v. El mismo día, el Consejo transmitía dicho mandato al tribunal de Valladolid (Ibid., fol. 114v).

(145).- Ibid., libro 361, fol. 458r-v. Esta consulta así como una explicación del motivo por el que se cambió el destino en las patentes de los estudiantes, aparece reflejada en A. ASTRAIN, *op. cit.*, III, pp. 393-394.

(146).- AHN, Inq., libro 581, fol. 116r-v.

como que se hiciese retornar a aquellos que ya se hubiesen puesto en camino. Las cartas para las inquisiciones se despacharon al día siguiente, redactando Quiroga un largo memorial que remitió al conde de Olivares para que explicase a Sixto V las causas que habían movido al Santo Oficio a adoptar esta medida (147).

Como había apuntado el conde de Olivares, cuando el papa concedió el breve que posibilitaba la realización de la solicitada visita a la Compañía de Jesús, su ejecución venía cometida al nuncio o a las personas que éste designase. Evidentemente, esta comisión no se correspondía con el proyecto auspiciado por Felipe II, por lo que, durante el verano de 1587, se contempló la posibilidad de reconducir el asunto. Por otra parte, en el mes de agosto, el nuncio reprendió a Quiroga en nombre del papa por haber ordenado la recogida de diversos libros pertenecientes a la Compañía de Jesús por el Santo Oficio, estableciendo que los mismos fuesen repuestos o, en caso contrario, sería despojado del cardenalato y del título de Inquisidor General. La dureza empleada por el pontífice forzó la obediencia de Quiroga, que insistió en justificar ante Sixto V las causas que habían conducido a realizar esta diligencia (148). Por otra parte, su actuación había tenido otra consecuencia negativa más relacionada con sus afectos personales, puesto que, desde que se había producido el enfrentamiento abierto entre el Santo Oficio y la Compañía de Jesús, Pedro de Ribadeneyra

(147).- En los días siguientes, el mandato se hizo extensivo a los inquisidores de los puertos. Ibid., fols. 119r-121v; Ibid., libro 361, fols. 460r-462r; Ibid., libro 328, fol. 343r. El memorial que el Inquisidor General envió al embajador, fechado el 15 de mayo, se encuentra en AMAE, Santa Sede, leg. 35, fols. 282-283. En el mismo sentido insistía en otra relación remitida el 26 de junio, que, en esta ocasión, fue acompañada por otra para el Cardenal Savello (Ibid., fol. 284; AHN, Inq., libro 361, fols 466r-v).

(148).- Sobre su encuentro con Quiroga, refería el nuncio: "Ho parlato al S. Card. di Toletto chiaramente et dettogli precisamente tutto quello che V.S. Illma comanda in nome di N. Sre, et il povero vecchio è rimasto tanto afflito, che mi ha detto, voi vederete che queste parole di ammazzeranno, perchè l'osservanza et obediencia mia è così grande che mi pare di meritare di essere favorito et non trratato così, ma se N. Sre. non vuole che io sia Inquisitore ne Cardle. obedirò" (N. MOSCONI, op. cit., pp. 59-60); A. ASTRAIN, op. cit., III, pp. 397-400, 436-438. Sobre las explicaciones remitidas por el Inquisidor General al papa y a diversos cardenales, excusándose además por no remitir los procesos inquisitoriales que se continuaban desarrollando en el tribunal de Valladolid contra los cuatro jesuitas, véase, AMAE, Santa Sede, leg. 35, fols. 285-288; AHN, Inq., libro 361, fols. 469v-474v, 478r-482r.

había evitado su trato (149).

El 14 de noviembre, Felipe II escribía al embajador en Roma que debía representar ante el pontífice que ni el General de la Orden ni el nuncio eran personas apropiadas para realizar la visita solicitada, teniendo en cuenta la naturaleza extranjera del primero y que la mayoría de las cuestiones que precisaban reforma estaban directamente relacionadas con él y con su gobierno. En cuanto a Speciano, era muy conocida su vinculación a la Compañía de Jesús, con lo que su labor estaría bajo sospecha. Por ello, se debía proponer al papa a Jerónimo Manrique, obispo de Cartagena, como persona idónea, apuntando que contase con la ayuda del Cardenal Deza para atraer a Sixto V a este propósito (150). El 5 de marzo de 1588, Quiroga avisaba a Olivares de la recepción del pertinente breve y de la comisión de Manrique como visitador, al que se llamó a la Corte, donde acudió sin conocer el motivo del requerimiento (151). Ambos documentos le fueron entregados el 9 de junio, comprometiéndose a dar aviso al rey de la marcha y desarrollo de la visita, aunque, por decisión de éste, Manrique debía informar a Quiroga y al Consejo de Inquisición, realizándose con Felipe II únicamente las consultas que fuesen necesarias (152). Desde que los jesuitas tuvieron noticia de la puesta en marcha de la misma, iniciaron una labor de presión sobre distintas instancias

(149).- El 12 de septiembre, el jesuita explicaba a su amigo en una carta los motivos de este alejamiento (MHSI, Ribadeneyra, II, pp. 82-84; Obras escogidas..., pp. 596-597). No obstante, pasados los momentos más conflictivos volvió a frecuentar su compañía con normalidad.

(150).- C. MANRIQUE, op. cit., pp. 439-441; IVDJ, envío 7 (I), caja 11, fol. 364; Ibid., envío 55 (caja 73), n° 160: "porque así es a proposito por haber sido del Consejo de Inquisición tambien lo es lo que he entendido de ser acepto de los de la Compañia".

(151).- El propio Felipe II había insistido en que no se le hiciese abandonar su iglesia hasta que no fuese necesario. Sobre las diversas gestiones que se continuaron desarrollando para prepara la visita, véase, AZ, carp. 143, n° 7, 30, 75; AHN, Inq., libro 361, fols. 506v-509r; AMAE, Santa Sede, leg. 35, fols. 289-291.

(152).- Ibid., fols. 272-273; AZ, carp. 143, n° 87; IVDJ, envío 89 (caja 126), n° 383. Según A. ASTRAIN, op. cit., III, p. 439, Gaspar de Quiroga desempeñó un importante papel para que el obispo de Cartagena aceptase este cometido. Por otra parte, Felipe II estimaba que, puesto que el breve era general para todas las Ordenes, sería prudente iniciar la visita por otro instituto para levantar menos sospechas. E igualmente, a instancia de Mateo Vázquez, también decidió que era preferible que no se relacionase a la Inquisición con la misma (AZ, carp. 150, n° 110).

tratando de evitar su realización. Uno de los altos personajes de la Corte a quien recurrieron fue la emperatriz María que, como hemos señalado, se encontraba muy vinculada a dicha Orden. La carta que dirigió a su hermano sirvió para alertar de que la Compañía de Jesús conocía las pretensiones que se perseguían con dicha instrucción. Mateo Vázquez recomendaba que se comenzase a actuar con prontitud, apuntando que, si era necesario envolver la visita con la realizada a otras Ordenes, los trinitarios de Andalucía se encontraban bastante inquietos, constituyendo una opción adecuada (153). No obstante, la gestión más efectiva fue realizada por el General Aquaviva ante Sixto V, a quien representó la inconveniencia de que se llevase a cabo esta actuación por los grandes perjuicios que se derivarían de ella para el instituto, puesto que los jesuitas hispanos quedarían desvinculados del gobierno de Roma (154). Tampoco consideraba apropiado que esta labor se encomendase a una persona de origen ilegítimo y que había tenido hijos bastardos durante su juventud, cuestión que era conocida por que uno de sus vástagos había intentado profesar en la Compañía de Jesús, de donde fue expulsado al conocerse sus antecedentes familiares. Para ratificar la veracidad de esta acusación, que causó gran escándalo en el pontífice, el papa instó al conde de Olivares para que escribiese a la Corte hispana. Así, el 8 de agosto, el embajador remitió una carta a Gaspar de Quiroga, donde refería la audiencia que había mantenido con el papa dos días antes, aduciendo haber escogido la vía inquisitorial para que se guardase mayor secreto (155). En su respuesta, el Inquisidor General aseguraba que se encontraban prevenidos

(153).- Ibid., carp. 143, nº 97. Por su parte, el rey notificaba al secretario que había recibido al viceprovincial Porres, quien también acudió a entrevistarse con Quiroga y con don Cristobal de Moura (Ibid., nº 98; A. ASTRAIN, op. cit., III, pp. 439-441).

(154).- La ofensiva contra al Compañía de Jesús debió causar bastante intranquilidad entre los Generales de otras Ordenes, puesto que, en marzo de 1588, se escribía al General de la Cartuja felicitándole por su elección para ocupar dicho cargo, y desmintiendo que el prior del Paular pretendiese desmembrar las casas de España (AGS, Estado, Leg. 165, nº 192).

(155).- A. ASTRAIN, op. cit., III, pp. 442-443, aparecen recogidos fragmentos del texto de dicha misiva. La misma se puede ver íntegra en AHN, Inq., libro 361, fol. 574r-v. Por otra parte, resulta curioso que el embajador aludiese al secreto cuando el 30 de julio, Felipe II ordenaba que, conocida por el papa esta circunstancia, se encargase Arenillas de Reinoso de llevar este asunto al Consejo de Inquisición para su tratamiento sin que se hallase presente el obispo de Cartagena (AZ, carp. 141, nº 166).

sobre esta cuestión, así como que consideraba beneficioso que se hubiese referido a Sixto V, ante quien debía insistir sobre que el Santo Oficio no se encontraba entrometido en el tema de la visita (156). Si bien se trataba de aparentar ante Roma que las acusaciones lanzadas sobre la familia y comportamiento de Jerónimo Manrique carecían de importancia, se comenzaba a pensar en que la visita fuese realizada por Diego de Chaves, quien a través de Mateo Vázquez conocía todos los detalles referidos a la misma, teniendo su consejo un importante influjo sobre Felipe II en cuanto al modo de conducir este asunto. Igualmente, se hizo intervenir al Conde de Barajas para evitar el mal efecto que había causado en la Santa Sede la intervención del Santo Oficio, aunque el presidente del Consejo Real actuó únicamente como un intermediario, puesto que los memoriales que debía entregar al nuncio eran elaborados por Arenillas de Reinoso (157). Sin embargo, Sixto V ya había tomado la determinación de inhibir a Jerónimo Manrique de la actuación como visitador. La orden fue transmitida a Speciano por el Cardenal Caraffa, quien, a su vez, se encargó de comunicar este mandato a Felipe II el 8 de septiembre (158). Desde este momento, el confesor Chaves fue quien sustentó, apoyado por el Consejo de Inquisición, la necesidad de llevar adelante la realización de la visita, sin conformarse con los ofrecimientos realizados por el General de acometer la misma a través de una persona designada por él. No obstante, el rey se mostraba dubitativo sobre el procedimiento que se debía seguir, aunque a finales del mes de octubre, dió su conformidad a la propuesta del Conde de Barajas de nombrar a Jerónimo Manrique como visitador de la Chancillería de Valladolid. Según

(156).- AMAE, Santa Sede, leg. 35, fol. 292; AHN, Inq., libro 361, fol. 527r.

(157).- En este sentido, véase, AZ, carp. 143, n° 136-137; IVDJ, envío 55 (caja 73), n° 173; Ibid, envío 56 (caja 75), paquete 6, n° 22, fol. 11.

(158).- Conocida la determinación papal, el rey pidió parecer tanto a Chaves como al Conde de Barajas sobre el camino a seguir. Por su parte, Mateo Vázquez, que mostró un gran enfado ante el cambio producido en la Santa Sede, apuntó que Manrique podía emplearse en visitar otras Ordenes para poner en entredicho la actuación de la Compañía de Jesús (Ibid., envío 55 (caja 73), n° 181; Ibid., envío 51, n° 141). Sobre la defensa que el obispo de Cartagena remitió a Roma, véase, C. MANRIQUE, op. cit., pp. 442-445; A ASTRAIN, op. cit., III, pp. 442-447. Por otra parte, poco pudo intervenir Quiroga en estas diligencias, puesto que se encontraba gravemente enfermo, temiéndose por su vida a causa de su avanzada edad (AMAE, Santa Sede, leg. 35, fol. 297).

refería Mateo Vázquez, podría realizar esta actuación mientras se definía de qué modo se iba a instruir la visita a la Compañía de Jesús, constituyendo un factor de prestigio y autoridad que presentar ante el papa para su favorecimiento (159). Por su parte, Quiroga trataba, a través de su correspondencia con el conde de Olivares, de dejar clara ante la Santa Sede su desvinculación de la visita (160). El 9 de diciembre, Felipe II remitió una larga carta al embajador en que hacía un resumen de todo lo acontecido, presentando las razones que habían movido a plantear la necesidad de realizar una visita, y a elegir al obispo de Cartagena como la persona idónea para su instrucción. La persistencia del pontífice en su determinación conllevó que las diligencias del monarca se encaminasen en otra dirección, puesto que, como advertía, si no contaba con su beneplácito para realizar la reforma, él mismo se encargaría de adoptar los medios que creyese convenientes (161).

La determinación de Felipe II y las tensas relaciones que vivían ambas instancias en torno a los asuntos de Francia, llevó al pontífice a sugerir una solución. Si el monarca estaba decidido a realizar la reforma mediante una visita era preferible no oponerse a su instrucción, pero sí establecer unas condiciones que dificultasen y difiriesen su realización. Por ello, propuso al conde de Olivares que el rey encomendase este cometido a varios visitadores. Aceptada esta posibilidad, el 4 de mayo de 1589, Felipe II volvía a escribir al embajador para que, excluido el obispo de Cartagena, el pontífice concediese poder in solidum para realizar la visita al obispo de Palencia, y al electo de Calahorra en las provincias de Castilla y Toledo, a los prelados de Córdoba y Badajoz en Andalucía y a los obispos de Huesca y Lérida para las provincias de la Corona

(159).- El presidente del Consejo Real señalaba que se debía avisar a Quiroga para que ordenase al inquisidor de Valladolid Lecifiana que se informase con mucho secreto del funcionamiento de la Chancillería, lo que facilitaría mucho la posterior gestión de Manrique. En torno a estos temas, véase, IVDJ, envío 55 (caja 73), nº 215, 241, 257; AZ, carp. 143, nº 146.

(160).- AHN, Inq., libro 361, fol. 530v; AMAE, Santa Sede, leg. 35, fols. 293-294, 296.

(161).- Sobre dicha carta, véase, AHN, Inq., libro 249, fols. 540r-546v; A. ASTRAIN, op. cit., III, pp. 448-452; C. MANRIQUE, op. cit., pp. 445-452.

de Aragón (162). Si bien fueron enviados los breves y comisiones correspondientes que no se ajustaban exactamente a la solicitud, el monarca siguió dudando sobre la conveniencia del momento para hacer uso de estas facultades, puesto que, aunque nunca se abandonó el proyecto de realizar esta actuación, tampoco se tomaron las medidas conducentes a que la misma se llevase adelante de forma efectiva a pesar de que los conflictos de jurisdicción con el Santo Oficio se seguían sucediendo, lo que hizo que se reiterasen las reclamaciones realizadas en los años precedentes. En esta indeterminación tuvo una especial influencia el nombramiento por parte del General Aquaviva de visitadores de la propia orden a comienzos de 1589, así como que las facultades dadas por el papa iban referidas a un obispo principal y a otros dos que actuarían como auxiliares en la visita. El fallecimiento de Francisco de Ribera, obispo de Segovia y sobrino de Diego de Chaves, que se debía ocupar de esta labor, provocó una importante rémora para que esta actuación se pudiese desarrollar a la que tampoco fue ajena la pérdida de influencia sufrida por los patronos del "partido castellanista" a partir de dicho año (163). No obstante, la nueva vigencia que aparentemente parecía tomar la instrucción de la visita por medio de los prelados motivó que la emperatriz María tornase a instar a su hermano para que desistiese de su ejecución (164).

La muerte de Sixto V y la llegada al solio pontificio de Gregorio XIV procuró al General Aquaviva la posibilidad de reconducir la situación,

(162).- Sobre la argucia del papa, véase, *Ibid.*, pp. 453-455; AZ, carp. 143, n° 193. Paralelamente, Sixto V mandó que las constituciones de la Compañía de Jesús fuesen examinadas por la Congregación de la Inquisición (A. ASTRAIN, op. cit., III, pp. 453-473).

(163).- Así, en junio de 1589, se mandaba al obispo de Calahorra que fuese a residir a su iglesia en espera si se ponían en ejecución los breves recibidos (AZ, carp. 143, n° 205). Un año después, Mateo Vázquez informaba al rey como consultado el Consejo de Inquisición, el confesor Chaves y otras instancias no se ponían de acuerdo sobre si se debía proceder a efectuar la visita, apuntando que él mismo albergaba serias dudas (*Ibid.*, carp. 150, n° 98). En cambio, Quiroga únicamente comunicaba al conde de Olivares la poca participación que tenía en este asunto (AMAE, Santa Sede, leg. 35, fol. 295). En torno al conflicto surgido con la Inquisición en relación, nuevamente, con el delito de solicitación, véase, AHN, Inq., libro 249, fols. 566r-568r, 575r-576v. Por otra parte, el propio Felipe II hacía referencia a estas cuestiones en una carta dirigida al papa, fechada en mayo de 1593, en favor del jesuita Acosta y de su labor (*Ibid.*, fols. 590v-591v).

(164).- AZ, carp. 152, n° 75.

obteniendo la concesión, el 22 de mayo de 1591, de un vivae vocis oraculo, por el que quedaban derogados los documentos pontificios que facultaban que la Compañía de Jesús pudiese ser visitada por personas ajenas a la Orden, así como un breve por el que eran ratificadas sus contribuciones y privilegios. Aunque la actuación del conde de Olivares provocó que esta última disposición no fuese promulgada, posteriormente, el papa despachó una bula por la que confirmó dicho instituto (165). Por otra parte, este cambio de situación para los jesuitas en Roma tuvo su paralelismo en la Monarquía hispana, puesto que el ocaso de la facción "castellanista" cuyos miembros habían apoyado a los jesuitas díscolos e implicado al Santo Oficio en su ofensiva contra la Compañía de Jesús, daba paso a una nueva ideología sustentada por los nuevos patronos, en la que ya no tenían cabida los planteamientos patrimonialistas, con lo que el entendimiento entre ambas instancias parecía asegurado, quedando saldadas las diferencias de forma definitiva tras la Congregación General de 1593 (166).

Así pues, la intervención de Quiroga en este asunto fue muy limitada, viniendo forzada por su ostentación del cargo de Inquisidor General, por la defensa de la jurisdicción de la institución, instrumentalizada por los miembros del "partido castellanista", y por su plegamiento a los designios regios. No obstante, su postura ante esta cuestión quedó claramente establecida cuando tuvo la posibilidad de desvincularse de dicho asunto y continuar la excelente relación y afecto que a lo largo de toda su vida había mantenido con los miembros de la Compañía de Jesús (167).

Por otra parte, hemos de señalar que, también se recurrió al Inquisidor General para procurar que se sosegase el enfrentamiento que mantenían la rama masculina y femenina de los carmelitas descalzos. Según la reforma que había

(165).- A. ASTRAIN, op. cit., pp. 473-474; L. PASTOR, op. cit., vol. XXII, pp. 334-335.

(166).- Al respecto, véase, Ibid., cap. XIV, XVI, XIX; J. MARTINEZ MILLAN, "Transformación y crisis...".

(167).- Así, en julio de 1593, hizo su aportación a la información conducente a la canonización de Ignacio de Loyola (MHSI, Monumenta Ignatiana. Madrid 1918. Serie 4ª, II, pp. 110-111, 392-393).

sufrido la Orden. Las monjas habían quedado bajo la autoridad de un Vicario General, al que auxiliaban en su ejercicio cierto número de consiliares y provinciales. Denunciaban que estos cargos eran ocupados siempre por los mismos religiosos, que se iban sucediendo unos a otros en la ostentación de los mismos, decidiéndose por la junta arbitrariamente la realización de visitas a los conventos femeninos, lo que provocaba, según su criterio, graves perjuicios. Habían representado al nuncio esta situación, quien había mediado para que el pontífice les concediese un breve por el que, en la celebración del Capítulo trienal, se designase un único visitador, que se ocuparía del gobierno de las monjas junto al Vicario General. La ejecución de dicho breve había sido encargada por comisión papal al obispo de Evora y a Fray Luis de León. No obstante, la rama masculina había mostrado una fuerte oposición a que su contenido se llevase a efecto, presentando sus quejas ante Felipe II de que el agustino hubiese convocado, en octubre de 1590, un Capítulo General en un corto plazo de tiempo para proceder a la aplicación del breve, interponiendo graves censuras. El rey escribió a Gaspar de Quiroga para que pidiese a su amigo Fray Luis de León que sobreseyese temporalmente en realizar esta actuación hasta que los frailes pudiesen acudir al papa con sus reclamaciones, y el pontífice dirimiese esta polémica. Si bien el agustino se mostró remiso a aceptar lo que Quiroga le proponía, aduciendo que no podía desobedecer un mandato apostólico, finalmente aceptó excusar el procedimiento. Sin embargo, no informó a los carmelitas de la suspensión en espera de la decisión de la Santa Sede, sino que únicamente prorrogó el plazo de convocatoria del Capítulo. Esto provocó que de nuevo los religiosos reclamasen ante el monarca, quien, a su vez, representó al Inquisidor General que su gestión con el agustino no había tenido el resultado esperado. Esta cuestión enojó enormemente a Quiroga que, por encontrarse indispuerto, encargó el tratamiento de este asunto al licenciado Arenillas de Reinoso (168).

(168).- En torno a estas cuestiones, véase, IVDJ, envío 21 (caja 31), nº 428; Ibid, envío 6 (II), fols. 369-379.

8.3. La culminación de la actividad arzobispal.

La limitada rehabilitación política experimentada por Gaspar de Quiroga, fruto, como hemos señalado, principalmente, de su continuidad en el cargo de Inquisidor General y de su vinculación a los nuevos patronos cortesanao, en concreto, al conde de Chinchón, tuvo como consecuencia que hubiese que permanecer largas temporadas ausente de su sede arzobispal para poder atender sus ocupaciones en la Corte. Por otra parte, a medida que fueron pasando los años, la avanzada edad del prelado y su precario estado de salud desaconsejaron en ocasiones recorrer la distancia que separaba Madrid de Toledo, aunque nunca dejó de cumplir con la preceptiva estancia durante la Semana Santa (169). Esta situación vino a definir una de las características que marcaron el último periodo de Quiroga al frente de la Iglesia Primada, puesto que su debilitamiento físico y político conllevó que el influjo de los nuevos patronos cortesanos se dejase sentir en los asuntos derivados de la iglesia toledana, significativamente, en el caso de García de Loaysa (170). Así mismo, si bien esta etapa estuvo caracterizada por la continuación de la labor de reforma que se venía desarrollando, también marcó una ruptura respecto a la evolución contemplada por dicha iglesia desde que Quiroga había accedido a la dignidad arzobispal, puesto que se desencadenaron una serie de conflictos a los que no era ajeno el propio devenir político de la Monarquía durante los últimos años del reinado de Felipe II.

Uno de los sucesos más significativos que se produjeron en la iglesia toledana estuvo referido a la llegada a la ciudad del cuerpo de Santa Leocadia

(169).- Siguió cumpliendo con esta cuestión aún cuando el propio cabildo catedralicio, temeroso por el efecto que podía causar en su salud, le rogaba, en abril de 1593, que dejase de realizar esta actuación (ACT, Actas Capitulares. Tomo 21, fols. 28v-29r).

(170).- El consistorio le escribió varias cartas, en octubre de 1585, felicitándole por su elección como maestro del príncipe (Ibid., Tomo 19, fols. 188r). También mostró su complacencia Quiroga en una carta que dirigió al conde de Chinchón (AHN, Inq., libro 361, fols. 403v-404r).

en 1587 (171). Es conocida la importancia que se otorgaba a las reliquias en la religiosidad del siglo XVI, así como el especial interés que mostró el rey en su obtención y custodia en el Monasterio de El Escorial (172). En este sentido, la traslación de los restos de Santa Leocadia no supuso un hecho aislado en la actividad de la Iglesia Primada ni tampoco en la de Gaspar de Quiroga. Así, en la celebración del concilio provincial de 1582, se concedió la licencia para que se pudiese rendir culto a los huesos hallados en Córdoba, en noviembre de 1575, pertenecientes a los mártires Fausto, Januario, Marcial y Acisclo (173). Igualmente, las gestiones y preparativos para la recepción del cuerpo de Santa Leocadia a Toledo se desarrollaron de forma paralela a la donación que el monarca realizó de una reliquia de Santa Elena a dicha iglesia (174). La intención de Felipe II, según la carta que García de Loaysa remitió al cabildo catedralicio, era que la misma formase parte de la procesión de la Dominica in Passione, donde también se sacaba un pendón alusivo a esta festividad, para que la ceremonia contase con una mayor veneración. El consistorio encomendó a Bernardino de Mendoza y al maestrescuela, el 31 de agosto de 1584, que tratasen con Quiroga sobre este asunto (175). En octubre se iniciaron las diligencias conducentes al traslado, otorgándose poder al canónigo Pedro de Ayala para que se ocupase de realizar esta labor en febrero de 1585. Se decidió que, con mucho secreto, se depositase en el Hospital de Santa Cruz, mientras se preparaba cuidadosamente el ceremonial que se debía seguir tanto que se llevase a la iglesia

(171).- En torno a los intentos de recuperar estos restos con anterioridad, véase, V. GARCIA REY, "El deán don Diego de Castilla..." pp, 24-25, 27, 29; J.F. RIVERA RECIO, Santa Leocadia de Toledo. Toledo 1961.

(172).- Sobre estas cuestiones, véase, W.A. CHRISTIAN, Religiosidad local en la España de Felipe II. Madrid 1991, pp, 157-174; J.M. DE ESTAL, "Felipe II y su archivo hagiográfico de El Escorial" Hispania Sacra 23 (1970), pp, 193-333.

(173).- E. RETEL, Ambrosio de Morales, pp, 230-233; J. GOMEZ BRAVO, Catálogo de los obispos de Córdoba, Córdoba 1778, I, pp, 489-494. Así mismo, en abril de 1584, Gaspar de Quiroga cometió al doctor Segura Dávalos que acudiese a visitar en su nombre el cuerpo de San Isidro, que fue expuesto durante nueve días al pueblo de Madrid (A. LEON PINELO, Anales de Madrid, p, 132).

(174).- Una relación sobre dicha reliquia aparece recogida en ACT, Actas Capitulares, tomo 18, fol. 4.

(175).- Ibid., fols. 69v, 70r.

como en la procesión referida (176).

El 13 de enero de 1584, Quiroga convocó al capítulo catedralicio para informar al mismo de que un jesuita llamado Miguel Hernández había avisado de que el cuerpo de Santa Leocadia, patrona de Toledo, se hallaba en un monasterio de frailes de la Orden de San Benito denominado Sant Ghislem, sito en el obispado de Cambray. El padre Hernández, ayudado por Alejandro Farnesio, había realizado las gestiones pertinentes hasta lograr que la reliquia quedase en su poder, después de capitular ciertas condiciones con dichos religiosos. El arzobispo solicitaba al cabildo que nombrase algunos comisarios para que se ocupasen del tratamiento de esta cuestión (177). El 10 de septiembre, el consistorio se reunía a requerimiento del prelado, quien pedía su consejo sobre las noticias que transmitía el príncipe de Parma respecto a las condiciones del traslado. Farnesio refería que se había ofrecido al abad del monasterio donde se hallaban los restos una limosna de venticinco o treinta mil florines para remedio del mismo, muy deteriorado por efecto de las guerras acontecidas, que tendrían que aportar el arzobispo y cabildo toledano. La decisión del capítulo fue dejar la resolución del camino a seguir al criterio de Quiroga, aunque Juan de la Cerda señaló que se debía advertir al arzobispo varias cuestiones. En primer lugar, que, antes de efectuar ninguna actuación, se tuviese la completa seguridad de que se trataba del cuerpo de Santa Leocadia, así como, que, conforme a Derecho, estaba prohibido comprar y vender reliquias,

(176).- Ibid., fols. 78v, 111v-114r, 118r-v, 120r, 122r, 134r. Por su parte, Quiroga mostró su conformidad con las disposiciones del consistorio (AHN, Inq., libro 361, fol. 352v). Así mismo, la reliquia también formó parte de otras procesiones (ACT, Actas Capitulares, tomo 18, fol. 141r). En 1589, el arzobispo otorgó trescientos ducados de renta al Hospital de Santa Cruz para aumentar las seis capellanías que había dotado el Cardenal Pedro Gonzalez de Mendoza en la iglesia de Toledo en la capilla de Santa Elena (BSCV, Ms. n.º 16, fol. 153v; C. TORROJA MENENDEZ, Catálogo de Obra y Fábrica de la Catedral de Toledo. Toledo 1977, pp. 214-215).

(177).- El consistorio designó a Pedro de Ayala, García de Loaysa y Alvaro de Mendoza para que tratasen junto al prelado lo concerniente a este tema, comenzando a discutirse sobre el lugar que sería más apropiado para depositar los restos (ACT, Actas Capitulares, tomo 18, fols. 7r, 8v, 12r). Sobre el interés que Felipe II puso en conseguir que se pudiesen trasladar los mismos, véase la correspondencia que mantuvo con el conde de Olivares y el príncipe de Parma en, AMAE, Santa Sede, leg. 21, fols. 285-288. También Quiroga escribió al embajador en Roma en este sentido, Ibid., leg. 9, exp. 27, fol. 168.

aunque la transacción se disfrazase como una dádiva, a lo que había que añadir que la suma que se había establecido era muy elevada. Si se agregaban los gastos de la traslación, constituía una importante cantidad de dinero que, ante la necesidad existente, consideraba más útil emplear en remediar a los pobres. A pesar de estas consideraciones, se iniciaron las gestiones conducentes a la recuperación de la reliquia (178).

El 14 de abril de 1586, el consistorio reunido con el arzobispo comenzó a organizar los festejos y ceremonias que se iban a celebrar con motivo de la llegada a Toledo del cuerpo de la Santa, así como el lugar donde se iba a instalar. Respecto al recibimiento que se había de efectuar, el cabildo comisionó a varios de sus miembros para que revisasen lo que se había hecho cuando se trasladó el cuerpo de San Eugenio, decidiéndose que, hasta que se fijase un destino definitivo, la reliquia sería depositada en el sagrario (179). Dejado todo encaminado, Quiroga hacía llegar al rey, a través de García de Loaysa, su propósito de retornar a la Corte, pero Felipe II comunicó a Mateo Vázquez su deseo de ir a Toledo y asistir a una misa de pontifical, por lo que estimaba conveniente la permanencia del prelado en la ciudad, donde albergaba la esperanza de contemplar igualmente un Auto de Fe (180). Desde comienzos del mes de mayo, el capítulo se afanó en que todo se encontrase perfectamente ordenado ante la anunciada llegada del monarca, estableciendo que se bajase la imagen de Nuestra Señora del Sagrario de su ubicación habitual para que el rey pudiese rezar ante ella. El día 14 de dicho mes, Quiroga y doce comisarios del cabildo acudieron a besar las manos al rey, que llegó a la ciudad acompañado

(178).- ACT, Actas Capitulares, Tomo 18, fols. 71v, 73r-74v, 76r.

(179).- En dicha reunión también se trató sobre la espada de San Laurencio que, partida en dos mitades, una se encontraba en Roma, y la otra se había traído a El Escorial. Igualmente, se estableció que se celebrase con mayor rango y solemnidad la fiesta de San Emergildo, al igual que unos meses antes habían fijado en relación a la que conmemoraba la presentación de la Virgen (Ibid., fols. 190v, 195r, 229r-230r, 234r). Por otra parte, el 7 de abril, Juan de Idiáquez comunicaba a Mateo Vázquez como se había dado una cédula de paso, para que no se abriese la caja que contenía el cuerpo de Santa Leocadia en los puertos de Castilla, al jesuita Miguel Hernández, que traía el mismo desde Flandes (IVDJ, envío 89, (caja 125), n° 221-222).

(180).- La carta que Felipe II dirigió al secretario el 20 de abril, en Ibid., envío 51 (caja 67), n° 189.

por el príncipe y la infanta Isabel Clara Eugenia (181). No obstante, la llegada del cuerpo de Santa Leocadia se fue dilatando. El 14 de octubre, Mateo Vázquez informaba a Felipe II de que García de Loaysa había conseguido hacerse con un hueso de la Santa para que pasase a formar parte del conjunto que el monarca había reunido en el monasterio de El Escorial, así como que se estaba ocupando de que finalmente, la entrada en Toledo se realizase pasado un mes, para que el rey pudiese disponer todo para hallarse presente junto al príncipe (182). Sin embargo, el mismo día, Felipe II se excusaba ante el cabildo toledano de presenciar el acto a causa de sus muchas ocupaciones, aunque encargaba que el mismo se realizase con la misma autoridad, solemnidad y veneración convenientes, para lo que también instaba al ayuntamiento de la ciudad. Así mismo, escribía a Miguel Hernández y al provincial de la Compañía de Jesús en Castilla para que hiciesen entrega de la reliquia al consistorio catedralicio (183). Este informaba a Quiroga, el 2 de enero de 1587, que el cuerpo de la Santa debía permanecer en Jesús del Monte hasta que llegase el momento de su traslado a Toledo, solicitando al rey, a finales del mes siguiente, que señalase el día en que se había de llevar a cabo (184). Finalmente, se produjo el 27 de abril, organizándose un gran recibimiento y diversos actos para su celebración, que contaron con la presencia de Felipe II, el príncipe, la infanta

(181).- Unos días antes, el prelado y el consistorio habían establecido que Miguel Hernández trajese con secreto los restos de Santa Leocadia desde Barcelona hasta Jesús del Monte, casa de la Compañía de Jesús cercana a Alcalá de Henares, tratando así de excusar gastos. Serían expuestos al público en dicha población, en Illescas o en Ocaña, acudiendo a su encuentro ocho canónigos y doce racioneros acompañados por músicos, que custodiarían la reliquia hasta Toledo. La misma se introduciría en un arca provisional, cubierta por una tela de plata con una cruz carmesí en el centro, sobre las varas de una litera. Llegados a la dicha ciudad se seguiría un ceremonial similar al que se había usado con ocasión del traslado de los restos de San Eugenio, llevándose a la iglesia de Santa Leocadia de la Vega. El cabildo iría a recibirla a la puerta del Cambrón, para después hacer la entrada por la de Bisagra, quedando depositada, como se había fijado, en el sagrario de la catedral. Sobre estos preparativos, así como en relación al recibimiento hecho a Felipe II, véase, ACT, Actas Capitulares, tomo 18, fols. 238v-239r, 242r-243r.

(182).- AZ, carp. 142, n° 155.

(183).- IVDJ, envío 63 (caja 85), fols. 9v-10v, 11r-12r.

(184).- El 4 de abril, el capítulo se reunía para ver el breve de indulgencia concedido por el papa para el día de la entrada a la ciudad e iglesia y en toda su octava. Examinado el documento, mandaron que se realizasen las diligencias necesarias para su publicación. ACT, Actas Capitulares, tomo 19, fols. 1v, 11v, 19r.

Isabel Clara Eugenia y la emperatriz María (185).

Desde el 27 de noviembre, el cabildo convocó una serie de reuniones para tratar en torno a que se celebrase, además del día del martirio de Santa Leocadia, el de su traslado a la iglesia de Toledo. Para ello pidieron la intercesión de Felipe II ante el pontífice, quien apoyó esta iniciativa del consistorio, ordenando al embajador en Roma que obtuviese el permiso del papa, otorgado el mismo, la fiesta quedó establecida (186).

Una de las mayores preocupaciones que el arzobispo tuvo en este periodo vino determinada por hacer efectivo el cumplimiento de las constituciones sinodales promulgadas en 1580. Así, procedió a la designación de jueces y examinadores que se ocupasen en este cometido, procurando que no se produjesen vacantes que pudiesen relajar o perjudicar su aplicación. En mayo de 1586, el maestro Pérez notificó al cabildo catedralicio que, a causa de haber fallecido diversos jueces sinodales, así como, por encontrarse otros ausentes, convenía realizar nuevos nombramientos. A los que se hallaban nominados

(185).- Ibid., fols 21v-23r, 24r, 26r-29v, 31r, 36r-v, 39r. IVDJ, envío 55 (caja 73) n° 60; Ibid., envío 92 (caja 133), n° 6, fol. 38; L. CABRERA DE CORDOBA, op. cit., III, pp, 238-246; J.ROMAN DE LA HIGUERA, op. cit., fols. 205-210, 224-225, 228-230; BSCV, Ms. n° 16, fol. 155v; P.SALAZAR Y MENDOZA, op. cit., pp, 306-308; D.CASTEJON Y FONSECA, op. cit., pp, 1146-1151; "Memoria de los premios que se dieron a los poetas latinos y españoles que celebraron la entrada del cuerpo de la gloriosa Santa Leocadia" Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 5 (1875), pp, 365-367; J. LOPEZ DE AYALA Y ALVAREZ DE TOLEDO, op. cit., p, 146.

(186).- ACT, Actas Capitulares, tomo 19, fol. 71v, 78v, 83v, 86r, 104v, 115r-v; AGS, Estado, leg. 165, n° 164-165; AMAE, Santa Sede, leg. 21, fol. 289. En 1592, se publicaba en Córdoba "Officium Beatae Leocadiae Virginis & Martyris Patronae Toletanae" (J.M. VALDENEBRO Y CISNEROS, La imprenta de Córdoba. Madrid 1900, p, 25, n° 35). En este sentido, véase también, MHSI, Ribadeneira, II, pp, 481-482. Por otra parte, en abril de 1594, se iniciaron las gestiones para trasladar el cuerpo de Santa Leocadia a otro arca que fuese definitivo (ACT, Actas Capitulares, tomo 21, fols. 130v-132r). El afán por recuperar los vestigios de los santos toledanos aparece también reflejado en la obra que Simón Martínez, clérigo presbítero del Hospital del Nuncio, dedicó a Gaspar de Quiroga: "Demostración y conocimiento del sitio y lugar donde fue edificado el monasterio Agaliense en el qual el glorioso St Ildefonso tomó el abicto de Sant Benito..." (BNM, Mss. 6807, 7445; Dictionaire d'histoire et geographie ecclésiastique. París 1912, I, p, 872). Así mismo, esta práctica tuvo su reflejo en el patronazgo que Quiroga realizó sobre las artes, puesto que en este periodo se realizaron los relicarios de Santa Elena, el de Santa Leocadia y la restauración de la famosa custodia del ofebre Enrique de Arfe (A. CABRERA Y DELGADO, La Catedral de Toledo, pp, 104, 106, 124-125; A. PONZ, op. cit., pp, 55-56).

pertenecientes al mismo -el deán, el licenciado Gomara, Pedro Carvajal y Antonio Manrique- se unieron el licenciado Virviesca y los doctores Navarro y Anaya. Posteriormente, en octubre de 1588, la provisión arzobispal recayó en Gabriel Suárez de Toledo, arcediano de Madrid y, en diciembre de 1592, en el licenciado Serrano (187). De igual modo procedió en relación con los examinadores, siendo especialmente relevante que, en septiembre de 1592, eligiese para que llevasen a cabo esta labor a tres miembros de la Compañía de Jesús, entre los que se encontraba Antonio Marcén (188). Así mismo, se ocupó de corregir de forma ejemplarizante cualquier comportamiento que fuese contrario a las disposiciones establecidas por el sínodo o que no se ajustasen a una conducta modélica. En este sentido, en julio de 1586, el prelado escribía al licenciado Serrano, perteneciente al Consejo de la dignidad y vicario general de Toledo, sobre la noticia que había tenido de que la justicia seglar había encontrado una noche al canónigo Martín de Alderete portando un hábito indecente y armas, y como, habiéndose resistido, fue conducido a la cárcel. Quiroga establecía que para purgar su culpa se le diese por prisión la torre de la catedral y que se le impusiese un castigo público que sirviese de ejemplo (189). Igualmente, hubo de ordenar al vicario intervenir para encauzar el comportamiento de Diego López, cura de Carabanchel y primo de su secretario Jerónimo Paulo, a causa de los excesos que cometía de forma reiterada en la

(187).- ACT, Actas Capitulares. Tomo 19, fol. 238r; Ibid., tomo 20, fols. 137v, 280v.

(188).- El 27 de noviembre de 1587 se presentó al cabildo el nombramiento como examinador sinodal de fray Pedro de Salazar, guardián de San Juan de los Reyes (Ibid., tomo 19, fol. 71r). El 1 de marzo de 1591 eran elegidos el licenciado Andrés Hernández, fray Jerónimo Iceda, de la Orden de Santo Domingo y fray Luis de Calatayud, trinitario. El 29 de julio del mismo año, fueron designados los doctores Espinosa y Juan López (Ibid., tomo 20, fol. 160 r-v), mientras que, en septiembre de 1592, la nominación recayó en los jesuitas Antonio Marcén, prepósito de la Orden, Juan Jerónimo y Gregorio Vázquez, así como en fray Felipe, presentado de San Pedro Mártir (Ibid., fol. 267r). El número de designaciones se multiplicó en 1593, puesto que, el 7 de abril, se informaba al consistorio de los nombramientos del doctor Matías Rodríguez, del carmelita fray Hernando de Medina, de fray Matías de Cuéllar, comendador de Santa Catalina de la Orden de la Merced, y de fray Francisco de Cáceres, franciscano (Ibid., tomo 21, fol. 28r). El 30 de julio se notificaban al capítulo los del doctor Tomás de Borja y del dominico fray Alonso de Ledesma, a los que se sumó, el 19 de octubre, fray Andrés de Mendoza, también perteneciente a la Orden de Santo Domingo y consultor del Santo Oficio (Ibid., fols. 57v-58r, 86v).

(189).- AHN, Inq., libro 361, fols. 426r-427r.

práctica de la caza, que habían propiciado la intervención de la justicia real (190). A comienzos de 1587 también se preocupó de reglamentar las predicaciones que se debían realizar en la catedral, insistiendo en que la actuación de los confesores en ningún caso debía interferir en la actividad inquisitorial, siendo privativo del Santo Oficio el entendimiento en los delitos de herejía (191). Esta vigilancia en torno al correcto funcionamiento de la iglesia toledana le llevaba a estar informado de cualquier novedad que se produjese. Así, en junio de dicho año, solicitaba información sobre lo que acontecía en una ermita que se había fundado en la población de Lillo, donde se habían recogido algunas doncellas, en previsión del surgimiento de inconvenientes (192). Igualmente, para facilitar el mismo, se continuaba efectuando la instrucción de visitas, como la que realizó el doctor Calderón a la Capilla del Corpus Christi (193), o la que se encomendó al obispo de Salona sobre la Obra de la catedral toledana, de la que se derivaron diversos cargos en contra el contador Lucas Ruíz de Ribera (194). En este sentido, hemos de señalar la activa intervención que García de Loaysa tuvo en las mismas, comunicando a Felipe II cuestiones relacionadas con su desarrollo o, incluso, sugiriendo donde se debía llevar a cabo esta actuación. En diciembre de 1588, escribía al rey en relación a las culpas imputadas al hermano Obregón, sobre el excesivo gasto y suntuosidad con que celebraba las fiestas. García de Loaysa apuntaba que este asunto era bien conocido por el doctor Valderrama, visitador que Quiroga había nombrado en la Corte, que se había ocupado de la visita al Hospital de los Convalecientes donde se hallaba Obregón. Valderrama aseguraba que la acusación era falsa, aunque, a juicio de Loaysa era conveniente hacer otras diligencias para comprobar si se procedía con limpieza y legalidad en

(190).- IVDJ, envío 90, fol. 609.

(191).- ACT, Actas Capitulares, tomo 19, fol. 8v; AHN, Inq., libro 361, fols. 493v-494r.

(192).- Ibid., leg. 3284, n° 43.

(193).- ACT, Actas Capitulares, tomo 19, fol. 29v.

(194).- Véase la carta que Quiroga dirigió al Consejo de la dignidad en agosto de 1589 sobre el procedimiento que se debía seguir (AHN, Inq., libro 361, fol. 554v).

cuanto a las limosnas que recibía dicho Hospital (195). Así mismo, en marzo de 1590 representaba a Mateo Vázquez la conveniencia de realizar una visita a la capilla de los Reyes Viejos de Toledo, apuntando que la persona idónea para ejecutar esta labor era el licenciado Rades de Andrada. Señalaba que se debía poner especial atención a cierto derecho que pretendían tener sus capellanes sobre las tablas de la Carnecería, puesto que, si se confirmaba, la renta de la capilla tendría un fuerte acrecentamiento, adquiriendo mayor calidad el patronazgo que sobre la misma tenía el monarca (196). Por otra parte, la instrucción de una visita no solía ser bien acogida por aquellos que eran objeto de la misma. Ello motivó que, cuando Gaspar de Quiroga cometi6 a Antonio Portocarrero que acudiese a visitar y tomar las cuentas de la iglesia colegial de Alcalá, los prebendados aludieron estar exentos de la jurisdicción arzobispal y presentaron apelación en Roma, consiguiendo un procedimiento contra el visitador del auditor de la Cámara apostólica por no haber respetado los mandatos y privilegios que tenían concedidos por la Santa Sede. Para hacer prevalecer sus facultades jurisdiccionales, el 6 de julio de 1591, el arzobispo pedía al embajador en Roma que se ocupase de clarificar ante el pontífice este asunto (197).

El estricto cumplimiento que Quiroga trataba de imponer a las disposiciones por las que se regulaba el funcionamiento de su iglesia, tenía su paralelismo en la observancia que el cabildo catedralicio continuaba imponiendo en cuanto al estatuto de limpieza de sangre en relación a aquellos que pretendiesen gozar de un beneficio, prebenda o dignidad en la misma (198).

(195).- AZ, carp. 130, n° 68.

(196).- IVDJ, envío 94 (caja 135), n° 79.

(197).- Ibid., envío 91, fols. 348-349.

(198).- En julio de 1587 se le denegó a Dionisio Ruiz de la Peña tomar posesión de una ración por no satisfacer las pruebas de limpieza (ACT, Actas Capitulares, tomo 19, fol. 46r-v). De igual manera se procedió con Andrés Mendo, en enero de 1592, quien tampoco pudo acceder a la ración en la que había sido proveído por este motivo (Ibid., tomo 20, fol. 196r-v). También fue el caso de Gregorio Torres, a quien se le denegó poder tomar posesión de la ración en octubre de 1593 (Ibid., tomo 21, fols. 83v-85v). Así mismo, en marzo de 1590 algunos capitulares se encargaron de buscar un lugar apropiado dentro del archivo para poner una alacena, cuya función sería custodiar

Así mismo, continuaron insistiendo en la necesidad de que se respetase la obligación de la residencia, reiterando la conveniencia de que no se pagasen los frutos en ausencia. En abril de 1586, el canónigo Miguel Díaz solicitaba al consistorio que, atendiendo a su mucha edad y años de servicio, se le permitiese dejar de asistir al coro. Si bien por estas consideraciones su petición fue consultada con el arzobispo, constituye una excepción, puesto que la postura del consistorio fue muy firme en esta cuestión (199). Así, en enero de 1587 mandaron que se pidiese al Consejo arzobispal que procediese contra aquellos capellanes del Coro que no residiesen, forzándoles a que lo hiciesen, reiterando esta demanda en el mes de abril, buscando conseguir una provisión específica del fiscal del mismo (200). No obstante, el problema principal continuaban siendo los beneficiados que prestaban sus servicios en el Santo Oficio, por lo que se encontraban exentos de la residencia. Cuando el 7 de mayo de 1590 se leyó en el capítulo una misiva de García de Loaysa y un título despachado por el Inquisidor General por el que dicho canónigo era nombrado consiliario teólogo de la Suprema en una plaza acrecentada por mandato de Felipe II, ordenando que se le acudiese con los frutos de su prebenda; no se produjo ninguna resistencia por parte del cabildo (201), pero el consistorio ordenaba al deán que remitiese una carta a Quiroga suplicando que no tornase a nominar a ningún beneficiado en oficios inquisitoriales o que, quienes se ocupaban en esta labor, no gozasen de cargos en dicha iglesia, en consonancia con lo que las Cédulas

dicho estatuto (ACT, *Actas Capitulares*, tomo 20, fols. 21v-22r). El caso de Gregorio de Torres es especialmente significativo si tenemos en cuenta que era hermano de Jerónimo Paulo, secretario de Quiroga, que se había ocupado, en los años precedentes, en negocios relacionados con la dignidad arzobispal en Roma (IVDJ, envío 91, n° 352).

(199).- ACT, *Actas Capitulares*, tomo 18, fols. 231v-232r. Por otra parte, Gaspar de Quiroga, sobrino del prelado, seguía desarrollando sus estudios en Salamanca, percibiendo lo establecido por las constituciones para los que se encontraban en su situación (Ibid. tomo 19, fol. 10v).

(200).- Ibid., fols. 1r, 50r. En este sentido, no se trataba de una práctica únicamente seguida por el cabildo catedralicio, puesto que, en febrero de 1588, la iglesia de Astorga informaba al mismo de que el obispo de dicha iglesia había fijado en sus puertas un motu propio del pontífice sobre la residencia de los beneficiados. También la iglesia de León escribía al capítulo toledano sobre este asunto. Ante la gravedad de las penas contenidas en este documento, formaron una comisión compuesta por el deán y Cardenal Juan de Mendoza, y los letrados capitulares para que se realizasen las diligencias pertinentes (Ibid. fol. 86v).

(201).- Ibid., tomo 20, fol. 43r.

reales habían establecido al respecto (202). Sin embargo, el arzobispo no atendió este ruego, puesto que, el 22 de mayo, llegaba una carta suya al capítulo para que se tuviese por presente al racionero Simón de Carranza, fiscal del tribunal inquisitorial de Zaragoza (203). El 20 de agosto, el prelado se volvía a dirigir al cabildo para que acudiese con todos sus frutos al racionero doctor Leyva, que el 20 de junio había sido proveído fiscal en la Inquisición de Logroño (204). Igualmente, el 17 de diciembre se notificaba al consistorio que se acudiese con sus rentas al doctor Arganda, canónigo e inquisidor en Cuenca (205). La persistencia en esta práctica hizo que el cabildo presentase sus quejas ante Felipe II, quien transmitió las mismas a Quiroga a través del licenciado Arenillas de Reinoso (206). Sin embargo, estas protestas no propiciaron un cambio en la actitud del prelado, puesto que, en octubre de 1594, volvió a instar al capítulo para que se pagasen los frutos en ausencia a Antonio Canseco de Quiñones, secretario de Cámara y servidor inquisitorial. Esto provocó que el consistorio comisionase a Gaspar Yañez para que acudiese a informar al rey. Las gestiones se paralizaron por la ausencia de Arenillas de Reinoso y por la intención de Canseco de Quiñones de cumplir con la residencia (207).

Por otra parte, este asunto, si bien competía a aspectos relacionados con la reforma eclesiástica, tenía unas importantes implicaciones económicas. En este sentido, otro motivo de disputa entre el consistorio y el prelado continuaban siendo los tributos que Quiroga había introducido para proceder a la reparación

(202).- Ibid., fol. 226r.

(203).- Ibid., fol. 237v.

(204).- Ibid., fol. 260r-v.

(205).- Ibid., fol. 284r.

(206).- IVDJ, envío 92 (caja 133), nº 1, fols. 187-188.

(207).- ACT, Actas Capitulares, tomo 21, fols. 167v-169v, 173v-174r.

de las iglesias del arzobispado (208). El 10 de marzo de 1587, los capitulares reiteraban su indignación porque fuese un mandato de la justicia seglar el que les obligase a emplear parte de las rentas eclesiásticas en esta aplicación, cuando las mismas habían de soportar muchas cargas. Mantenían que este gasto correspondía al tercio que de la renta estipulada por los fundadores se fijaba para la reedificación, pero que de este tercio, dos terceras partes correspondían a la tercia que se pagaba al rey, quedando únicamente para esta finalidad un noveno de todos los diezmos, y como esto no es suficiente para acometer esta labor, deben acudir con las rentas eclesiásticas con los dos tercios que se desmembraron, cuando de estas ya se pagaban el subsidio, el excusado y los repartimientos. Solicitaban nuevamente a Quiroga que pusiese remedio a esta situación, constituyendo un agravio la intromisión arbitraria de los jueces seculares en este tema (209). Ciertamente, el arzobispo mostró un especial interés durante estos meses por las cuestiones relativas a los frutos de su iglesia, instando al tesorero, Francisco de Morejón, para que se ocupase en conocer el verdadero valor de las rentas, el montante que se pagaba en pensiones o cualquier otro beneficio de presentación real, las cantidades que se le adeudaban, así como las que se pagaban en concepto de excusado. Sin embargo, parece que este interés del prelado por clarificar sus cuentas venía motivado, principalmente, por conocer su capacidad para ofrecer su ayuda económica en las empresas que proyectaba llevar a cabo Felipe II (210). No por ello renunció Quiroga a

(208).- Quiroga también procuraba que no se causasen mayores deterioros. Así, en octubre de 1585, escribía al conde de Chinchón en torno al hospital de Antezana en la ciudad de Toledo, puesto que estaba utilizando la capilla mayor vieja de Santa María como almacén, proponiéndose ocupar también la del Santísimo Sacramento, con el consiguiente perjuicio para el retablo y otros ornamentos. El prelado solicitaba que favoreciese la causa de la iglesia, puesto que el hospital pretendía proceder jurídicamente (AHN, Inq., libro 361, fol. 404r-v).

(209).- Ibid., Libro 1252, fol. 372; Ibid., libro 1256, fol. 11r-v. No parece que sirvieron estas quejas para modificar la situación, puesto que, en septiembre de 1587, se acometían los arreglos de la iglesia parroquial de Santa Leocadia (ACT, Actas Capitulares, tomo 19, fol. 57r). El 10 de octubre, se ordenaron diversos ornamentos para las iglesias de Alcalá de Henares y Hazaña (Ibid., fol. 138v).

(210).- AHN, Inq., libro 361, fols. 492r, 495v-498v. En Marzo de 1586, Quiroga escribía al Duque de Francavilla, disculpándose por no poder asistirle con los tres mil ducados que le había pedido, aludiendo a las malas cosechas y a que todo estaba en manos de los mayordomos, que en ocasiones dejaban de pagar o retrasaban el pago, con lo que le era difícil hacer frente a las pensiones que debía (Ibid., Libro 361, fol. 413r).

continuar realizando obras para contribuir al embellecimiento de su iglesia, aunque resulta significativo el paréntesis producido entre 1587 y 1590. Durante este periodo se efectuaron diversos trabajos en la catedral toledana. Así, en enero de 1587, el consistorio encargó que se realizasen dos retablos para los altares colaterales de la capilla de don Pedro Tenorio, conforme habían apuntado los visitantes (211). De igual modo, mandaron al secretario que escribiese una carta al prelado adjuntando la traza del tabernáculo que se había de realizar para ubicar la imagen de Nuestra Señora del Sagrario, rogando que diese su consentimiento para que se llevase a cabo (212). En este sentido, el 5 de junio de dicho año, Nicolás de Vergara presentaba en el consistorio la provisión realizada por el arzobispo por la que era nombrado Maestro Mayor de Obras (213). El proyecto de reforma acometido por Quiroga revistió mayor amplitud que el contemplado por el cabildo, puesto que, en 1590, se decidió ensanchar el Sagrario y la Sacristía. Si bien el consistorio apoyó esta remodelación, pronto comenzaron a surgir las protestas por la magnitud de los gastos (214).

Por otra parte, en relación con las rentas de la Iglesia de Toledo, hemos de señalar que, entre noviembre de 1586 y abril de 1587 se reunió en Madrid la Asamblea eclesiástica para definir el repartimiento del excusado. A ésta siguió

(211).- ACT, Actas Capitulares, tomo 19, fol. 2r.

(212).- Ibid., fol. 4v. Sobre las capitulaciones realizadas entre los capellanes del coro y el cabildo para que los primeros se encargasen del servicio de dicho altar erigido en el claustro, véase, C. TORROJA MENENDEZ, Catálogo del Archivo de Obra y Fábrica de la Catedral de Toledo. Toledo 1977, p. 52, n° 71. Este altar fue decorado por Blas de Prado por mandato de Quiroga, constando sus armas en la composición (F. DE PISA, Apuntamientos para la II parte de la "Descripción de la Imperial Ciudad de Toledo". Toledo 1976, pp. 53-54).

(213).- ACT, Actas Capitulares, tomo 19, fol. 37v. En este sentido, el 1 de septiembre, el cabildo proponía a Quiroga la compra de una casa que sirviese como taller, ante la carencia del mismo (Ibid., fol. 54v).

(214).- Ibid., tomo 20, fol. 85r-v. Ibid., tomo 21, fol. 32v; AZ, carp. 131, n° 66. Para realizar esta obra fue necesario tomar un edificio adjunto a la catedral que ocupaba la cofradía hospitalaria de Corpus Christi, Nuestra Señora de la Paz y San Ildefonso. Las negociaciones fueron prolongadas, aunque finalmente se alcanzó un acuerdo. Esta reforma afectó también a diversas casas particulares (H. RODRIGUEZ DE GRACIA, Asistencia social en Toledo, pp. 74, 382-387; IVDJ, envío 89 (caja 125), n° 259; A. CABRERA Y DELGADO, La catedral de Toledo, p. 65).

otra convocatoria, que se prolongó hasta el mes de septiembre, donde se trataron los asuntos concernientes al subsidio (215). A las mismas asistieron los canónigos Alonso de Mendoza y el doctor Anaya, que comunicaron con el cabildo las actividades que se efectuaron durante su desarrollo (216). No obstante, los problemas comenzaron a su finalización. El 28 de septiembre, Alonso de Mendoza enviaba una carta al consistorio, adjuntando un testimonio del secretario de la Congregación, el canónigo de Burgos Juan de Arcos, en que notificaba que el resto de las iglesias encabezadas por la de Sevilla pretendían asistir a las próximas convocatorias con dos procuradores, privilegio que únicamente ostentaba Toledo. Señalaba que la iglesia sevillana proyectaba iniciar un pleito con el Consejo de Cruzada en torno a esta cuestión. Proponía que para defender la autoridad de la iglesia toledana y evitar inconvenientes se avisase a Felipe II de esta intención para que la Congregación se disolviese de inmediato, sin dar lugar a que se iniciase esta diligencia, puesto que, a su juicio, las iglesias estaban dilatando de forma artificial la reunión con este propósito. El cabildo decidió seguir las instrucciones de Alonso de Mendoza, informando, igualmente, a Quiroga, al Comisario General de Cruzada Pedro Portocarrero, a García de Loaysa y al arcediano de Toledo Francisco Dávila (217). El 12 de octubre, se ordenaba a los procuradores toledanos que retornasen a la iglesia, apuntando que si el negocio prosiguiese, se podía alegar que el Comisario General no tenía jurisdicción para conocer en esta causa, puesto que solamente era un juez ejecutor encargado de la cobranza y pago de las Gracias, contando con el agravante de ser parte interesada en su condición de canónigo de Sevilla. Además, tanto el proceder a la celebración de la asamblea como el número de procuradores dependía del mandato real, con el que hasta entonces se había cumplido. Por ello, si se llegase a hacer efectivo el pleito, el caso competía al

(215).- T. DE AZCONA, "Estado e Iglesia en España...", p, 312.

(216).- ACT, Actas Capitulares, tomo 19, fols. 1v-2r, 16v, 49r.

(217).- Ibid., fol. 61v. En este sentido, hemos de señalar que Francisco Dávila ocupó durante unos meses el cargo de Comisario General de Cruzada por subdelegación realizada por Portocarrero en junio de 1586, a causa de tener que ausentarse de la Corte (AGS, Comisaría General, leg. 290, s.f.). Desde entonces, tuvo un gran influjo en las cuestiones relacionadas con el Consejo de Cruzada, así como García de Loaysa (AZ, carp. 142, n° 187).

pontífice o a la persona en quien el papa delegase, puesto que el asunto concernía a la primacía de la iglesia de Toledo. Sin embargo, estimaban conveniente no dar ocasión a tener que presentar estas alegaciones, para lo que era necesario intentar que no se iniciase la causa. Para ello, tornaron a escribir a García de Loaysa, al que se informaba del estado de este asunto y le solicitaban que intercediese ante Felipe II para que no permitiese que Pedro Portocarrero tolerase que se generase el pleito (218). Por otra parte, la actuación del consistorio pone de manifiesto que García de Loaysa, a quien se encomendaba esta cuestión, contaba con mayor influjo en el ánimo regio que Gaspar de Quiroga, a quien únicamente se le había informado de lo que acontecía como prelado de dicha iglesia.

La situación se tornó más complicada cuando Alonso de Mendoza fue encarcelado por negarse a entregar los libros de la Congregación para su revisión. Pedro de Ayala fue encargado por el cabildo de ocuparse de este asunto. A mediados de noviembre, informaba al consistorio de que el Consejo de Cruzada estaba decidido a obtener dichos libros, que fueron llevados a Toledo por Baltasar Martínez, criado de Alonso de Mendoza. El rey ordenó que fuesen entregados al Consejo de Cruzada para su examen, cumpliendo el capítulo con el mandato, puesto que en ellos se encontraba anotada la contribución que debía realizar cada iglesia, aunque se hacía constar la necesidad de que fuesen devueltos con brevedad (219). Así mismo, los arcedianos de Toledo y Madrid notificaron al consistorio que se fuese substanciando el pleito referido al número de procuradores que debían asistir a las asambleas del clero en representación de cada iglesia, puesto que parecía que algunas de ellas se proponían su consecución (220). A pesar de los temores expresados, el mismo no siguió adelante, aunque continuaba existiendo un problema en torno a los libros de la Congregación que, en agosto de 1588, aún no habían sido

(218).- ACT, Actas Capitulares, tomo 19, fol. 64v.

(219).- Ibid., fols. 64v-67r, 70r, 72v.

(220).- Ibid., fol. 73v.

devueltos a las iglesias, a pesar de que se había solicitado en diversas ocasiones (221).

Las tensiones se relajaron cuando, en diciembre de 1588, Francisco Dávila sustituyó a Pedro Portocarrero en el cargo de Comisario General de Cruzada (222). El 22 de abril de 1589, el cabildo agradecía a Dávila que se hubiesen devuelto los libros de la Congregación a las iglesias, admitiendo las enmiendas que el rey hubiese estimado oportuno hacer (223). En este sentido, Felipe II decidió que dichos libros se debían volver a imprimir contemplando los cambios realizados, por lo que Dávila solicitó, el 16 de mayo, que el consistorio enviase a Madrid una persona que se ocupase en esta labor (224). El designado fue Antonio de Venegas, quien fue dado cuenta al capítulo del desarrollo de esta gestión. Desde el mismo, se rogaba a Quiroga que intercediese ante Dávila para que no permitiese que se hiciese ninguna mutación que perjudicase la autoridad y preeminencia de la iglesia toledana. El 18 de agosto la segunda impresión estaba finalizada, por lo que se cometió a Alonso de Mendoza y al doctor Anaya que revisasen lo que se había añadido, quitado o mudado (225). Si bien parecía que el asunto se había encaminado sin que surgiesen nuevos problemas, tres días después se notificaba al cabildo la provisión realizada por el Comisario General para que se tuviese a Alonso de Mendoza por excomulgado a causa de su desobediencia de los mandatos

(221).- Ibid., fol. 130v.

(222).- El 29 de diciembre, el cabildo enviaba su felicitación al arcediano de Toledo (Ibid., fol. 156r). En este sentido hemos de señalar que la caída de Pedro Portocarrero, nombrado obispo de Calahorra, estaba vinculada al declive del "partido castellanista", puesto que a pesar de que procuró alcanzar un entendimiento con García de Loaysa, no consiguió vincularse a los nuevos patronos cortesanos, siendo sometido a una visita llevada a cabo por Gregorio Bravo, que había sido proveído canónigo de Toledo unos meses antes (IVDJ, envío 55 (caja 73), n° 2).

(223).- ACT, Actas Capitulares. Tomo 19, fol. 189v.

(224).- Ibid., fols. 195v, 196v, 204v. Por otra parte, Dávila desconfiaba de sus concanónigos, puesto que, el 3 de julio tornaba a instar a Alonso de Mendoza y al doctor Anaya para que entregasen cualquier papel que tuviesen en su poder sobre la asamblea que había tenido lugar en 1587. Ambos negaban que retuviesen alguno, por lo que solicitaron a Quiroga que pidiese al Comisario General que dejase de insistir sobre este tema (Ibid., fol. 207r).

(225).- Ibid., fols. 210r, 212v, 216v-217r.

recibidos para que exhibiese todos los papeles de la Congregación que retuviese en su poder. Además de hacer retornar a Madrid a Antonio de Venegas para que se ocupase de este asunto, se decidió apelar a Quiroga para que interpusiese su autoridad e impidiese que de nuevo surgiesen las tensiones. El procesamiento del canónigo toledano en relación con su vinculación a los supuestos profetas que operaban en la Corte puso fin a este enfrentamiento (226).

En octubre de 1591, Gabriel Suárez de Toledo y Gaspar de Quiroga, sobrino del prelado, fueron elegidos como procuradores del cabildo para asistir a la Asamblea del clero que se reunió en el mes de diciembre. Posteriormente, Quiroga fue exonerado por motivos de salud, acudiendo en su lugar el licenciado Gomara (227). El 21 de enero de 1592, informaban al consistorio cómo se había tratado en la Congregación la conveniencia de que el estado eclesiástico contase con procuradores tanto en la Corte como en Roma para defender las causas comunes al mismo (228). En la sesión habida el 20 de abril, el consistorio advertía a sus comisionados que si la asamblea determinaba la existencia de dichos procuradores se debían definir ciertas limitaciones. En primer lugar, tenía que quedar subordinado a las órdenes del capítulo toledano, a quien también había de rendir cuentas de los asuntos que se produjesen y de su actuación. En consecuencia, si el cabildo no estuviese satisfecho con su modo de proceder podría sustituirle, contando con la consulta de otras dos o tres iglesias, pudiendo nombrar en este caso, o si se produjese el fallecimiento del que designase la Congregación, a la persona que considerasen idónea. Por último, la provisión se realizaría para un plazo de uno o dos años, pudiendo el capítulo

(226).- Ibid., fols. 218r-219r. Sobre el apoyo que le procuró el cabildo toledano en los primeros momentos de su prisión y los ruegos presentados a Gaspar de Quiroga, véase, Ibid., tomo 20, fols. 52v, 66v-67r, 113v, 127v.

(227).- Ibid., fols. 182v-183r, 185r.

(228).- El capítulo comisionó a varios de sus integrantes para que analizasen esta propuesta antes de emitir su juicio (Ibid., fols. 202r-v). Unos días después, advertían a los procuradores que diesen cuenta al rey como el nuncio trataba de entender en los casos de crimen entre clérigos, lo que era contrario al derecho de los ordinarios y a las disposiciones tridentina (Ibid., fol. 209r).

toledano prolongar este periodo si los negocios lo requiriesen (229). A comienzos del mes de junio, el cargo de procurador general del estado eclesiástico en Madrid recayó en Juan Alonso de Córdoba, que tendría que plegarse a las condiciones establecidas. Para mayor seguridad, el cabildo nombraba, unos días después, a Fernando Carrillo como letrado encargado de prestar su ayuda al procurador en su cometido (230). El día 23 del mismo mes, el consistorio celebró una reunión para nominar al procurador que debía ocuparse de estos negocios en Roma. El elegido, tras solicitar la opinión de Juan Alonso de Córdoba, fue Juan de Herrera, pero, al producirse su fallecimiento, se designó al licenciado Juan de la Torre, clérigo presbítero residente en dicha Corte (231).

Si bien, como había establecido el capítulo, las provisiones facultaban a los procuradores por un corto margen de tiempo, en marzo de 1594, se decidió prorrogar su gestión, puesto que llegaron noticias de la pretensión de Clemente VIII de que el estado eclesiástico contribuyese con una décima parte de todos los frutos y rentas para la defensa de la Cristiandad, y de la fe e Iglesia Católica contra los turcos e infieles, así como para socorrer dicha causa en las guerras de Hungría. Por la gravedad de esta cuestión, que supondría acrecentar las cargas sobre las rentas eclesiásticas, comisionaron al maestrescuela Antonio de Covarrubias y al canónigo Tomás de Borja para que acudiesen a tratar este asunto con el rey (232). Sin embargo, dichos capitulares se encontraron con muchos problemas para poder tener una audiencia con Felipe II, por lo que el cabildo les recomendó que acudiesen al archiduque Alberto para que les facilitase la misma, y si no existía otra opción, trataran con él sobre esta cuestión y le entregasen la carta y memorial que llevaban para el monarca. También efectuaron diversas diligencias con el Presidente y Consejo de Castilla,

(229).- Se señalaba que no era necesario que fuese un beneficiado de la iglesia toledana quien ocupase este oficio, si con ello la asamblea estimaba que actuaría con mayor rigor (Ibid., fol. 231r).

(230).- Ibid., fols. 241r-v, 245v.

(231).- Ibid., fols. 247v, 248v.

(232).- Ibid., tomo 21, fols. 124r-125r.

recurriendo únicamente a Quiroga para que dirimiese si era conveniente que se comunicase al nuncio, advirtiéndole que, si mantenían algún contacto, actuaran con mucho recato (233).

La preocupación del consistorio ante la posibilidad de tener que asumir nuevos cargos estaba directamente relacionado con su estado económico. Hasta finales de 1588, no pudieron comenzar a saldar la deuda adquirida con Luisa de la Cerda (234). En marzo de 1590, cometieron a la contaduría que informase al capítulo lo que se adeudaba del censo establecido, así como de la forma en que se podía pagar, haciéndose efectiva la libranza, en el mes de diciembre, de los réditos acumulados (235). Así mismo, durante 1592 y 1593 siguieron atendiendo al abono de los intereses, reduciendo también el monto principal (236). Sin embargo, esta situación no impidió que el cabildo toledano prestase su ayuda económica a Felipe II, que solicitó un préstamo al consistorio, en abril de 1591, para afrontar los gastos derivados de las guerras (237). En julio, el capítulo decidió atender su petición, después de diversas deliberaciones, acordando asistirle con dieciocho mil ducados. Desde el mismo se instó a Francisco de Reinoso y al almirante de Castilla para que hiciesen una aportación de los frutos derivados de los arcedianatos de Toledo y Madrid (238).

(233).- El 19 de abril se les ordenaba a Covarrubias y Borja que retornasen a Toledo, dejando el asunto en manos de Juan Alonso de Córdoba. Finalmente, no consiguieron la audiencia con el rey, que les hizo llegar su parecer a través del presidente del Consejo Real (Ibid., fols. 128v-129v, 130v, 132v-133r).

(234).- Ibid., tomo 19, fols. 146v-147r, 150v.

(235).- Ibid., tomo 20, fol. 21v, 92r.

(236).- Ibid., fols. 199v, 259v; Ibid., tomo 21, fol. 61r-v. En este sentido, hemos de señalar que, en los últimos meses de 1592, el cabildo volvió a instar a Quiroga para que se celebrase sínodo decimal (Ibid., tomo 20, fols. 272v-273r, 278v).

(237).- IVDJ, envío 63 (caja 85), fol. 201v.. El jesuita Bartolomé de Sicilia fue el encargado de llevar la misiva real al consistorio el 21 de mayo (ACT, Actas Capitulares, tomo 20, fol. 145v).

(238).- El préstamo realizado por el cabildo se compuso de la manera siguiente: cuatro mil ducados de los vestuarios, dos mil del refitol, seis mil de Obra y Fábrica, y otros tantos de repartimiento entre las dignidades. Sobre la cantidad correspondiente a Obra y Fábrica, solicitaron

La acuciante necesidad de dinero que tenía la Corona para sufragar los costes de la política de la Monarquía, provocó que el rey mostrase su intención de continuar la desmembración de lugares pertenecientes a la jurisdicción de la iglesia de Toledo. Como hemos señalado, en 1582, se habían desarrollado diversas gestiones en relación con los lugares del término de Talavera, aunque éstas habían quedado en suspenso. No obstante, en 1587, el monarca mostró su intención de proceder a su separación. El ayuntamiento de Talavera encomendó a Juan Carranza Girón que acudiese a la Corte para tratar de impedir que fuesen apartados de su adscripción a la iglesia toledana, logrando su propósito (239). Sin embargo, diversas poblaciones pertenecientes a dicho término se sintieron perjudicadas con el acuerdo alcanzado, por lo que representaron sus quejas ante Felipe II para que se anulase esta actuación. A petición de Talavera, el 23 de mayo, el cabildo comisionaba a Tomás de Borja y a Martín de Alderete para que informasen a Quiroga de esta situación, recabando su mediación para que el rey se aviniese a continuar con el acuerdo establecido (240). Sin embargo, la insistencia de los lugares pertenecientes a la jurisdicción de Talavera provocaron que, tras la consideración de sus reclamaciones en el Consejo Real, el 10 de abril de 1592, se dictase una sentencia favorable a sus peticiones. Esta fue apelada por Talavera, que trató de aferrarse a lo que se había convenido, ofreciendo mejorar algunas cláusulas que facilitasen el acercamiento de las posturas mantenidas por todas las partes implicadas. El 1 de junio, el cabildo toledano, nuevamente a requerimiento del ayuntamiento de Talavera, encomendaba a Francisco Morejón que acudiese a Madrid para ocuparse de este

el permiso del prelado para poder realizar esta aportación (Ibid., fols. 148r, 157r-158v, 164v, 165v). Así mismo, en enero de 1592, el consistorio acordó que seis mil ducados se aportasen de gracia (Ibid., fols. 199v-200r).

(239).- En este sentido, véase, I. FERNANDEZ Y SANCHEZ, Historia de Talavera de la Reina. Toledo 1992 (Ed. facsímil), pp. 56-57.

(240).- Igualmente, decidieron escribir a los presidentes de los Consejos Real y de Hacienda para que suplicasen al rey que mandase cumplir el asiento que se había realizado (ACT, Actas Capitulares, tomo 19, fol. 30r-v). El 26 de junio, el consistorio volvía a escribir a Quiroga informándole de la insistencia del ayuntamiento de Talavera para que interviniesen en su favor (Ibid., fol. 39v). Nuevas diligencias se efectuaron, igualmente, en octubre de 1588 (Ibid., fol. 138v).

negocio (241). El 27 de octubre, se ordenó al deán que escribiese al rey, a García de Loaysa, a Juan de Idiáquez, al conde de Chinchón y a Cristobal de Moura, suplicando que se aceptase el convenio propuesto por Talavera. Una vez más, el arzobispo de Toledo quedaba en un segundo plano, para obtener el favorecimiento de un asunto perteneciente a su iglesia en la Corte, lo que viene a reflejar su falta de influencia (242). Finalmente, el nuevo acuerdo quedaba concertado en diciembre de 1594, sin que volviesen a surgir problemas (243).

En este sentido, hemos de señalar que, durante este periodo, el cabildo catedralicio hubo de afrontar una serie de conflictos jurisdiccionales, que habían sido prácticamente inexistentes en los años precedentes (244). En junio de 1588, el corregidor de Toledo enviaba al Consejo Real una relación sobre los sucesos acontecidos cuando se iba a ajusticiar en la horca a Cristobal Lorenzo, que había cometido un asesinato, saliendo numerosos clérigos y frailes de la catedral con la intención de liberar al reo. El consistorio negaba la veracidad de esta versión, e informaron de lo sucedido a Quiroga y al conde de Barajas, buscando el favorecimiento y mediación de García de Loaysa ante el rey (245). Para esclarecer los hechos fue enviado a Toledo un Alcalde de Corte, el licenciado Gudiel, al que, el 26 de septiembre, el consistorio agradecía el trabajo realizado, suplicándole que informase de sus averiguaciones al Consejo Real (246). También la actuación del corregidor provocó, paralelamente,

(241).- Ibid., tomo 20, fols. 233r, 240r; I. FERNANDEZ Y SANCHEZ, op. cit., p. 58.

(242).- ACT, Actas Capitulares, tomo 20, fol. 274v. Sin embargo, sí se le escribió en septiembre de 1593 en este sentido, así como al licenciado Laguna (Ibid., tomo 21, fol. 69v), y en marzo de 1594, cuando a juicio del capítulo, el pleito se encontraba en un momento crítico (Ibid., fol. 121v).

(243).- El mismo aparece recogido en I. FERNANDEZ SANCHEZ, op. cit., pp. 58-59.

(244).- En este sentido, no nos parece casual que los problemas surgiesen coincidiendo con el nombramiento como corregidor de Pedro Afán de Ribera, en sustitución de Francisco de Carvajal (ACT, Actas Capitulares, tomo 19, fol. 70r).

(245).- Ibid., fols. 113v-114v, 118v.

(246).- Ibid., fols. 119v, 133r, 136v-137r, 138r.

que se produjesen competencias de jurisdicción con el Santo Oficio por la prisión que mandó hacer de Iñigo Ordoñez, secretario del tribunal inquisitorial toledano. Por iniciativa de Rodrigo de Mendoza, el cabildo solicitó que el preso fuese remitido al Santo Oficio, sin que hubiese intromisión de la justicia seglar, solicitando a Quiroga que protegiese el fuero inquisitorial (247). Por otra parte, la situación del Inquisidor General en este asunto conllevaba un interés personal, puesto que el secretario había disparado un arcabuz contra su sobrino, el canónigo Francisco de Monsalve. La intervención del rey hizo que la tensión no se incrementase, pidiendo a los inquisidores que no hiciesen efectivas las censuras lanzadas contra el corregidor y cometiendo a Quiroga y al conde de Barajas que se dirimiese esta cuestión en el mismo marco que otros conflictos de jurisdicción (248).

Por otra parte, la poca significación de Gaspar de Quiroga se evidenció en referencia a la labor de patronazgo ejercida en su arzobispado, puesto que el prelado trató únicamente de garantizar ciertos beneficios para su familia, percibiéndose el influjo de los nuevos patronos cortesanos en las provisiones que se realizaban, especialmente de García de Loaysa (249). Así, en 1587, el arzobispo proveía para ocupar canonjías a García de Mendoza, al que además nombró capiscol, y a Juan de Zúñiga, perteneciente al Consejo de Inquisición (250). Sin embargo, en mayo de 1588, la capiscolía pasó a manos de Gaspar de Quiroga, sobrino del prelado, puesto que vacó por "amissionem et privationem" de García de Mendoza (251). Dicho año, accedieron a un

(247).- Ibid., fols. 127v-129r.

(248).- AZ, carp. 143, n° 130; IVDJ, envío 55 (caja 73), n° 157, 159, 360. Hemos de señalar que, excepto un pequeño incidente entre el canónigo Miguel de Salazar y el alguacil mayor de Toledo, en agosto de 1592, las relaciones entre ambas instancias se desarrollaron sin que surgiesen otros problemas (Ibid., envío 21 (caja 31), n° 378; Ibid., caja 32, n° 536; AZ, carp. 141, n° 242).

(249).- Para una visión de conjunto, nos remitimos nuevamente, al apéndice que se adjunta.

(250).- El 4 de noviembre, Quiroga aclaraba al canónigo Juan de Mendoza que la provisión de Zúñiga había venido determinada por la decisión del rey, como compensación por no haber obtenido la iglesia de Canarias (AHN, Inq., libro 361, fol. 486r).

(251).- ACT, Actas Capitulares. Tomo 19, fols. 109v-110r.

canonicato Juan de Quiroga, Gregorio Bravo de Sotomayor, que, como hemos señalado, se había ocupado en las visitas del reino de Sicilia y del Consejo de Cruzada, y Alonso Serrano, perteneciente al Consejo de la Dignidad arzobispal (252). Durante 1589, obtuvieron nombramiento de canónigos otros dos sobrinos del prelado, Alvaro de Monsalve y Francisco Morejón. La presencia de diversos familiares de Quiroga en la composición del cabildo conllevó que éste adoptase, a finales de dicho año, la decisión de que los parientes de los beneficiados que hubiesen de recibirse en la iglesia no se hallasen presentes para ver y sentenciar las informaciones de limpieza de sangre en previsión de que se pudiesen cometer irregularidades (253). En agosto de 1591, Francisco Morejón fue nominado por Quiroga Tesorero General de la Iglesia de Toledo, oficio que se encontraba vaco por muerte de Francisco García de Valloboso. Un mes antes, el consistorio había nombrado a otro de sus familiares, Martín de Alderete, en el cargo de vicetesorero, pasando a ostentar también la vicaría del Coro (254). Así mismo, Francisco de Monsalve, el 3 de abril de 1592, notificaba al capítulo la provisión realizada por el prelado, por la que le designaba Obrero Mayor de dicha iglesia en sustitución del doctor Juan Bautista Pérez, que había sido nominado obispo de Segorve (255). Sin embargo, estos fueron los últimos favorecimientos que Quiroga pudo procurar a su familia, puesto que, desde finales de 1589, las provisiones de los canónigos comenzaron a reflejar otras influencias. En 1590, el prelado hizo una única provisión en favor de Gabriel Ortiz de Sotomayor, que pasaba a ocupar la canonjía vacante por la

(252).- Serrano ocupó la canonjía que quedó vacante por muerte del doctor Obregón. El cabildo había solicitado con anterioridad que el nombramiento recayese en Alvaro de Monsalve, sobrino del prelado, que fue proveído en otra vacante meses después (Ibid., fol. 131v).

(253).- Ibid., fols. 249v-250v.

(254).- Ibid., tomo 20, fols. 155r, 165v-157r. Fue el propio arzobispo quien avaló la fianza de Francisco Morejón para acceder al cargo (RAH, "Salazar" O-2, fols. 62-69).

(255).- ACT, Actas Capitulares. Tomo 20, fols. 224r-225r. El agradecimiento que el cabildo envió al rey por la promoción al obispado de Segorbe del doctor Pérez, en IVDJ, envió 89 (caja 125), nº 227. En cuanto a Francisco de Monsalve, Quiroga le había aconsejado, en 1586, que no aceptase el arcedianato de Madrid, puesto que se trataba de un cargo muy controvertido (AHN, Inq., libro 361, fol. 426v; Ibid., leg. 3284, nº 40).

muerte de Gregorio Bravo de Sotomayor (256). Al año siguiente, fueron nominados Francisco Ruiz de Velasco, por cuyo nombramiento habían instado al rey tanto Mateo Vázquez como García de Loaysa (257), Francisco de Espinosa y Antonio Cordones, que ocupó el canonicato vaco por el fallecimiento de su tío, el tesorero Francisco García de Valloboso. En 1592, obtuvieron provisión Jerónimo Pacheco, que estaba al servicio de Quiroga como mayordomo (258), Gabriel Pacheco, hermano del marqués de Villena, Matías Rodríguez, que ocupó la canonjía de lectura sagrada que había poseído el fallecido Gabriel de Cárdenas (259), y el inquisidor de Cuenca Francisco de Arganda, antiguo cliente del arzobispo, que tuvo dificultades para verificar los datos concernientes a su limpieza de sangre (260). Las últimas designaciones realizadas por Quiroga recayeron en Pedro Deza, sobrino del Cardenal Deza, en Antonio

(256).- En enero de 1591, el doctor Marcos Gonzáles daba fe y testimonio de la veracidad del testamento otorgado por el canónigo fallecido el 26 de noviembre del año anterior. En el mismo, constaba una clausula por la que determinaba que la canonjía de Toledo que había ostentado se debía a la orden que el rey había transmitido a Quiroga en este sentido. Solicitaba que se procurase favorecimiento a su hermano, Paulo Bravo de Sotomayor (IVDJ, envío 96 (caja 138), nº 376). Si bien éste no fue designado para sustituirle, la coincidencia en el apellido con el nuevo canónigo nos lleva a pensar que se podría tratar de algún otro familiar.

(257).- Según refería Mateo Vázquez, el hermano del Condestable había solicitado esta merced a Quiroga. No obstante, el secretario realizaba un significativo comentario : "los buenos servicios de Juan Ruiz [de Velasco] y las buenas partes de su hermano y las pocas personas que tiene el Cardenal ni de su linaje, ni de su casa, en quien proveer bien, ocasión dan a V. Mt. le pueda mandar proveer a su hermano de Ruiz" (IVDJ, envío 55 (caja 73), nº 65, 69). Que el prelado se había quedado sin clientes aptos en quien realizar provisiones parece claro por la acumulación de cargos que realizaba sobre aquellos que conservaba. Así, Felipe II advertía a Quiroga, en noviembre de 1593, que el doctor Neroni difícilmente podía ocuparse de la vicaría de Madrid y de la abadía de Alcalá de Henares a la vez (Ibid., envío 92 (caja 133), nº 1, fols. 123-124).

(258).- Ibid., envío 91, nº 357.

(259).- Los opositores a dicha canonjía fueron: el licenciado Alvaro Pizaño de Palacios, canónigo de la iglesia magistral de Antequera, el licenciado Rejón, canónigo de Zamora, el doctor Castillo, canónigo de Guadix, el doctor Terrones, canónigo de Granada, el doctor Juan de Palacios, canónigo de Salamanca, el doctor Juan Berrueco de Samaniego, canónigo de Tuy, el doctor Pastrana, prior de San Ildefonso de Jaen, el doctor Juan Gutiérrez, canónigo de Coria, el doctor Francisco Farfán, canónigo de Salamanca y el doctor Matías Rodríguez, canónigo de Jaén (ACT, Actas Capitulares. Tomo 20, fol. 203r).

(260).- AHN, Inq., leg. 2479 (caja 1), nº 49.

Canseco de Quiñones, en Pedro de Castro, que sustituyó a Matías Rodríguez (261), y en Juan Pérez de Valenzuela, que ocupó la canonjía doctoral vaca por muerte del doctor Navarro (262).

En este sentido, la nominación de coadjutores en algunas canonjías por parte del pontífice provocó que se generase cierta tensión entre el cabildo toledano y la Santa Sede. Así, el 1 de junio de 1587, se presentaron al consistorio las bulas y letras apostólicas en favor de Miguel de Salazar, vecino de Toledo, por las que era nombrado coadjutor con futura sucesión al canonicato y prebenda que poseía el protonotario Miguel Díaz. Junto a esta notificación, se adjuntó un proceso fulminado contra el prelado, deán, cabildo y vicario de la audiencia arzobispal por no haber dado ninguna respuesta a la provisión realizada, aunque los procuradores de Salazar no hicieron uso del mismo para que los nominados no incurriesen en censuras. El capítulo informó a Quiroga de esta cuestión, procediendo a apelar esta medida de fuerza (263). Finalmente, el consistorio hubo de obedecer el mandato apostólico cuando, en marzo de 1590, Miguel de

(261).- Los opositores a dicha canonjía fueron: el licenciado Gómez de Salamanca, colegial del Real de Granada, el licenciado Pizaño de Palacios, el licenciado Blas de Samaniego, canónigo de lectura en Valladolid, el maestro Juan Alonso Curiel, catedrático de Biblia en Salamanca y el doctor Pedro de Castro, canónigo de la iglesia magistral de Avila (ACT, Actas Capitulares. Tomo 19, s.f.; *Ibid.*, tomo 21, fol. 154r-v).

(262).- Los opositores a la misma fueron: Francisco Fernández de Córdoba, catedrático de Cánones en Alcalá de Henares, el doctor Salazar de Mendoza, el doctor Chaves de Mora, colegial de San Bartolomé, el licenciado Juan Pérez de Valenzuela, catedrático de la Universidad de Valladolid, el licenciado Diego de Lorian Escobar, rector de la iglesia parroquial de Santiago en la Puebla de Alcocer, el doctor Francisco García Ximénez, colegial de Santa Cruz y canónigo doctoral de Valladolid, el licenciado Antonio Coello de Portugal, canónigo doctoral de Cartagena, el doctor Domingo de Mendieta, canónigo doctoral de Osma, el doctor Tolentino de Vivar, catedrático de Prima de cánones en Osma, y el licenciado Juan Vela de Acuña, colegial de San Bartolomé (*Ibid.*, tomo 19, s.f.).

(263).- *Ibid.*, fols. 32v-33r, 34r, 39v, 41r. Por otra parte, Mateo Vázquez informaba a García de Loaysa de la curiosa situación producida, puesto que el canónigo Miguel Díaz tenía un hijo que también era canónigo de Toledo, el licenciado Bautista Vélez, mientras que Miguel de Salazar era su nieto. Este era el motivo que, según refería el secretario, había que esgrimir ante el nuncio y el papa para no obedecer la bula (AZ, carp. 142, n° 149). Así mismo, en noviembre de 1587, Quiroga representaba al conde de Olivares el agravio que había recibido por la novedad realizada por el pontífice respecto a la provisión de los beneficios simples pertenecientes a Juan Tellez, muerto en Génova, derogando el indulto de Gregorio XIII en favor del prelado para que pudiese realizar estos nombramientos (AMAE, Santa Sede, leg. 21, fol. 86).

Salazar volvió a presentar en el mismo los documentos que acreditaban su designación (264). Sin embargo, esta situación se complicó cuando, el 31 de mayo de dicho año, Alonso Gómez, clérigo de la diócesis de Toledo, acudió al cabildo con unas bulas y letras apostólicas por las que era nominado coadjutor del canónigo Miguel Díaz, quedando derogado el nombramiento que para este cargo se había dado a Miguel de Salazar. El capítulo, recibiendo así mandatos contradictorios de los jueces apostólicos, decidió poner al nuncio en conocimiento de este conflicto, quien inhibió tanto al cabildo como a dichos jueces del entendimiento de este tema (265).

Distinta fue la actitud del consistorio cuando, en septiembre de 1589, Ginés de Soto, clérigo presbítero perteneciente al arzobispado toledano, exhibió ante el mismo los documentos pontificios que le proveían como coadjutor con futura sucesión en la canonjía que ostentaba Rodrigo de Mendoza, puesto que obedecieron con prontitud la nominación, tomando Soto posesión de su cargo el 13 de noviembre. El mal acogimiento que tuvo esta actuación por parte de Gaspar de Quiroga motivó que el cabildo comisionase a Tomás de Borja para que acudiese a tratar con el prelado sobre esta cuestión (266).

Sin embargo, los mayores problemas estuvieron relacionados con el nombramiento de Juan de Mendoza como Cardenal (267). Además de ser canónigo, Mendoza ostentaba las dignidades de deán y arcediano de Talavera. A comienzos de abril, el consistorio decidió asistir al nuevo purpurado con los frutos correspondientes a su canonjía durante el tiempo que permaneciese en

(264).- ACT, Actas Capitulares, tomo 20, fols. 22r-v, 24r.

(265).- Ibid., fols. 48v-51v, 52v-53r.

(266).- Ibid., tomo 19, fols. 225v-226r, 228v, 241r.

(267).- La noticia de su nominación había llegado a Toledo el 5 de enero de 1588 (Ibid., fol. 77v). El 14 de marzo, el cabildo ordenaba que se escribiese a Quiroga para que acudiese a entregar el bonete al nuevo Cardenal el día de la Anunciación (Ibid., fol. 95v).

Roma, excepto los derivados de las contribuciones cotidianas (268). Las controversias se iniciaron inmediatamente tras su marcha, puesto que, el 3 de septiembre, el cabildo mostró su disconformidad por la designación realizada por Mendoza en Pedro de Ayala como vicedeán, aludiendo a que este derecho correspondía al canónigo más antiguo (269). Así mismo, a finales de 1588, eran notificados al cabildo los breves por los que la Cámara apostólica tomaba posesión del arcedianato de Talavera (270). En enero del año siguiente, el pontífice hizo gracia del mismo a Diego Iñiguez de Hechavarri. No obstante, cuando éste se encontraba haciendo la pertinente presentación al consistorio, entró en el cabildo el alguacil mayor de la ciudad, acompañado por un escribano público, que, mediante una provisión real, requirieron que les fueran entregados todas las bulas y despachos concernientes a este asunto para que fuesen examinadas por el Consejo Real. Como el licenciado Virviesca, que había sido encargado de realizar las diligencias acostumbradas, se negó a obedecer a la justicia seglar, solicitando indemnidad al capítulo, los documentos le fueron arrancados por la fuerza. A pesar de ello, el cabildo, reunido el 15 de enero, determinó obedecer el mandato apostólico y proceder al nombramiento de Diego Iñiguez, informando a Quiroga y al Cardenal Mendoza de lo acontecido (271). Sin embargo, examinada la provisión real recibida por una comisión conformada por canónigos letrados, el 25 de febrero se adoptó la resolución de enviar al Consejo Real un traslado autorizado de todos los autos realizados, no accediendo a sobreseer en la posesión de dicho arcedianato (272). Esta decisión conllevó que, el 9 de marzo, llegase al capítulo otra provisión real, reiterando que se suspendiese que Diego Iñiguez tomase posesión, pero el consistorio mantuvo firme su criterio, continuándose la realización de las

(268).- Ibid., fols. 100v-103r. El 1 de septiembre, el capítulo despedía a Mendoza, que iniciaba su viaje a Roma (Ibid., fol. 132v).

(269).- Se encomendó a Juan de la Cerda que revisase los escritos concernientes al nombramiento de vicedeán (Ibid., fol. 133r-v).

(270).- Ibid., fols. 154v-156r.

(271).- Ibid., fols. 158r-160r.

(272).- Ibid., fols. 170r-171r.

informaciones de limpieza de sangre. Satisfecha esta condición, el 22 de marzo, el consistorio le otorgaba la posesión, provocando que el Cardenal Mendoza presentase contradicción a la misma a través de un procurador (273). Era igualmente un procurador quien, dos años después, notificaba al cabildo las bulas y letras apostólicas en favor de dicho Cardenal para ser restituido en el arcidiano de Talavera, y percibir todos los frutos y derechos que había dejado de recibir desde que había accedido al cardenalato (274).

Si bien la reclamación del Cardenal Mendoza para mantener la dignidad de arcidiano de Talavera junto a la de Cardenal había diluido el enfrentamiento surgido entre el Consejo Real, la Cámara apostólica y el cabildo toledano, su fallecimiento provocó que volviese a resurgir el problema. El 14 de febrero de 1592, el canónigo Pedro de Carvajal comunicaba al consistorio la provisión realizada por Quiroga, por la que quedaba proveído como deán de la iglesia de Toledo (275). El 8 de mayo, el consistorio mandaba que se remitiese una carta al pontífice solicitando que nominase el arcidiano de Talavera en Gaspar de Quiroga, sobrino del prelado, en atención a sus méritos (276). Unos días después el arzobispo escribía al embajador en Roma, agradeciendo la intercesión que había realizado en favor de su sobrino, y rogando que solicitase al papa que respetase el indulto que tenía concedido por Gregorio XIII en cuanto a la competencia de los nombramientos (277). El 9 de julio llegaba a la iglesia el breve despachado por el pontífice por el que se había concedido al Cardenal Mendoza que pudiese retener dos terceras partes de los frutos de dicho

(273).- *Ibid.*, fols. 175v, 178r-181r.

(274).- El capítulo obedeció el mandato de restitución (*Ibid.*, tomo 20, fols. 123v-125v). El 19 de junio de 1591, se recibió el breve para que se tuviese por presente a Mendoza y pudiese percibir sus rentas (*Ibid.*, fol. 151r).

(275).- Pedro de Carvajal tomó posesión del deanato el 15 de febrero. Dicho día, el capítulo ordenaba las honras del Cardenal Mendoza, así como la presentación del pésame a su hermano, el duque del Infantado (*Ibid.*, fols. 211r-212r, 213r).

(276).- *Ibid.*, fol. 235v.

(277).- *IVDJ*, envío 91, n° 353-355.

arcedianato durante los cinco años siguientes a su muerte (278). A pesar de las gestiones realizadas, el 21 de enero de 1593, se notificaba al cabildo un breve despachado por Clemente VIII por el que el arcedinato de Talavera se otorgaba a la Cámara apostólica, a quien el consistorio dió la posesión. Gonzalo Ponce de León trajo de Roma bulas de gracia sobre dicho arcedianato (279). Además, quedaba por dirimir la cuestión de los frutos derivados del mismo, por lo que el capítulo se reunió, en agosto de dicho año, para examinar los documentos pontificios concedidos al Cardenal Mendoza sobre ellos, decidiendo defender sus derechos contra los que pretendía tener Bartolomé Gallego, heredero de Juan de Mendoza. Para ello, comisionaron a Antonio de Venegas y a Tomás de Borja para que informase a Felipe II sobre este asunto (280). El rey apoyó la solicitud del consistorio en Roma para que los breves dados a Mendoza fuesen revocados, aunque se vieron forzados a iniciar las cuentas de lo que correspondía pagar a Bartolomé Gallego ante las censuras emitidas por el nuncio, clarificando que, por ejecutar esta actuación, no renunciaba a su justicia, por lo que no se iban a hacer efectivos los pagos (281). El peso de la excomunión sobre algunos capitulares provocó que se tratase de alcanzar un concierto con Gallego, que, convencido de que con esto no acabaría el contencioso, puesto que el cabildo se mostraba dispuesto a continuar el pleito, se negó a aceptar ningún acuerdo. El consistorio expuso esta situación al monarca para que intercediese con el nuncio y con el papa para que se retirasen las censuras hasta que se definiese la justicia de la causa. Así mismo, también buscaron la ayuda de García de Loaysa. El 29 de septiembre, el canónigo Yáñez, que se ocupaba en el tratamiento de este tema, informaba al cabildo de que el nuncio suspendía las censuras a condición de que se hiciese un depósito con el dinero que se debía abonar a Gallego en un plazo de cuatro meses, durante los que se podría tratar

(278).- ACT, Actas capitulares. Tomo 20, fol. 250r. El cabildo siguió insistiendo ante el prelado para que favoreciese a Gaspar de Quiroga en su pretensión (Ibid., fol. 266v).

(279).- Ibid., tomo 21, fols. 9r-10r. Unos días después, Pedro de Carvajal presentaba igualmente las bulas y letras apostólicas por las que era designado como deán (Ibid., fol. 10v).

(280).- Ibid., fol. 60r.

(281).- Ibid., fols. 66r, 68r.

con el papa la justicia que defendía el cabildo. Los inconvenientes opuestos por el consistorio para avenirse a este ofrecimiento, provocaron que, el 1 de octubre, el nuncio notificase que las excomuniones se harían efectivas en un plazo de diez días, lo que forzó definitivamente al cabildo a realizar la libranza en favor de Bartolomé Gallego (282). Por otra parte, no menos oposición encontró Jerónimo de Miranda Vivero, proveído por mandato apostólico en la canonjía que había vacado con la muerte del Cardenal Mendoza, procurándose que no acudiese a residir la misma, sino que permaneciese en Roma (283). La muerte de Gonzalo Ponce de León procuró la ocasión de que Gaspar de Quiroga obtuviese la provisión del arzobispo para ocupar el arcedianato de Talavera, del que tomó posesión el 24 de octubre de 1593 (284).

Además de favorecer a su familia, Quiroga también trató de complacer los deseos de su protector, el conde de chinchón. El 14 de junio de 1586, Sixto V había otorgado al mismo una bula por la que autorizaba la fundación de una capilla en la iglesia de Nuestra Señora de la Piedad en Chinchón, que quedaba dotada con seis capellanías perpetuas, dando a una de ellas categoría de capellán mayor. El prelado confirmó y aprobó las constituciones confeccionadas por el patrono en mayo de 1590, que obtuvieron la pertinente bula de aprobación durante el pontificado de Paulo V (285).

Por otra parte, una relación que el arzobispo continuó manteniendo fue su tradicional vinculación a la familia Mendoza. El 14 de octubre de 1588, el cabildo cometió al maestrescuela que escribiese a Quiroga comunicándole la

(282).- Ibid., fols. 77r-v, 78v-79v, 80v.

(283).- Ibid., fols. 107v-109r.

(284).- Ibid., fols. 87r, 88r-v. en este sentido, llegaban noticias de Roma sobre que se estaban realizando impetraciones contra aquellos que ocupaban varios beneficios y prebendas por provisión de los ordinarios, a los que se acusaba de aprovechar las resignaciones que se hacían en sus manos para favorecer a sus propios familiares y deudos, así como a los de los resignantes. El Consejo Real, que había empezado a entender en este asunto, pidió su opinión al cabildo toledano sobre este tema (Ibid., fols. 85v, 89r-v).

(285).- ADT, IV/378, fols. 3v-5r.

necesidad de proveer el Adelantamiento de Cazorla, que se hallaba vaco por la muerte de Rodrigo de Mendoza (286). El 1 de diciembre, el prelado otorgaba el título de Adelantado a Iñigo López de Mendoza, duque del Infantado (287). No obstante, el pleito en torno al mismo seguía desarrollándose, por lo que, el 9 de enero de 1589, el consistorio comisionó al maestrescuela, a Pedro de Carvajal, al licenciado Virviesca, a Andrés Fernández y a los doctores Navarro y Ayala para que analizasen un memorial concerniente al mismo y expusiesen sus opiniones conforme a Derecho (288). También el cabildo aprovechó el nombramiento de Juan de Mendoza como Cardenal y su marcha a Roma para que se ocupase de buscar los papeles que se habían presentado ante la Santa Sede sobre este contencioso (289). Así mismo, se hicieron diversas diligencias, a lo largo de 1590, para recuperar los documentos concernientes al mismo que se hallasen en Granada (290). Realizada la recopilación documental y conocido el estado en que se encontraba dicho pleito, en marzo de 1591, el capítulo decidió que fuese examinado por el Consejo Real (291). El 14 de junio de 1592, en consonancia con los breves despachados por el pontífice, el cabildo comisionaba al licenciado Serrano para que, junto con la persona que designasen Quiroga y el duque del Infantado, fuese a tomar posesión del Adelantamiento de Cazorla (292). No obstante, la actuación desarrollada por la parte contraria impidió en los meses siguientes que el

(286).- ACT, Actas Capitulares. Tomo 19, fol. 139v.

(287).- RAH, "Salazar" M-13, n° 282, fols. 106v-107r; L.POLAINO ORTEGA, op. cit., p. 339; BSCV, Ms. n°16, fol. 155v. Así mismo, el 12 de diciembre, el cabildo decidía nombrar a una persona para que acudiese a dar el parabién al nuevo Adelantado (ACT, Actas Capitulares. Tomo 19, fol. 152v).

(288).- Ibid., fol. 157v.

(289).- Así lo pidió el capítulo al Cardenal en octubre de 1589 (Ibid., fol. 203r). En este sentido, hemos de recordar que era hermano del duque del Infantado. En Roma, también se ocupaba de este asunto Juan Pérez Muñoz (AHN, Inq., leg. 3284, n° 48).

(290).- ACT, Actas Capitulares. Tomo 20, fols. 67v, 75v.

(291).- Ibid., fol. 118v.

(292).- El poder para realizar esta actuación le fue otorgado el 24 de julio (Ibid., fols. 251v, 253r-v).

licenciado Serrano pudiese cumplir con su cometido. Volvió a recibir un mandato semejante el 20 de mayo de 1593, contando con el respaldo del auto pronunciado por el Consejo Real en contra de las quejas proferidas por Cobos (293). A pesar de las diligencias realizadas, el conflicto por la posesión del Adelantamiento de Cazorla prolongó su desarrollo durante varios años, no pudiendo Gaspar de Quiroga, a pesar de su larga trayectoria arzobispal, ver cumplidas las pretensiones de la Iglesia toledana (294).

Esta se vió completada, en el aspecto referido a las fundaciones hechas por el prelado, en la erección de una casa de acogida para mujeres seglares llamada Nuestra Señora del Refugio, establecida junto al Monasterio de San Torcuato. En 1520, existía en dicha iglesia parroquial un beatario. Sus moradoras tomaron el hábito de San Agustín, poniéndose bajo la obediencia de los superiores de dicha Orden. Quiroga les concedió clausura y velo de monjas, quedando bajo su autoridad, y dotó al Monasterio con una renta para su acrecentamiento (295). La prohibición establecida por el pontífice Sixto V de que ninguna mujer laica pudiese residir en un convento, hizo al arzobispo concebir la necesidad de fundar "el refugio" en 1589. En esta institución se podían recoger venticuatro mujeres seglares de probada honradez y de cualquier estado - viudas, doncellas esperando casamiento o mujeres casadas cuyos maridos estuviesen ausentes - bajo la autoridad de la priora y de dos monjas del Monasterio de San Torcuato (296). Así mismo, estableció unos estatutos para su funcionamiento, reservando para sí el patronato. Según estos, si alguna mujer quisiese ingresar excediendo el número de las plazas contempladas, a cuya

(293).- Ibid., tomo 21, fol. 39r.

(294).- Ibid., fols. 51v, 121v, 153v; J.F.RIVERA RECIO, El Adelantamiento de Cazorla, pp. 121-122.

(295).- Sobre la evolución de este Monasterio, véase, F.DE PISA, Apuntamientos para la II parte..., p. 73.

(296).- L.MARTZ y J.PORRES MARTIN-CLETO, Toledo y los toledanos en 1561. Toledo 1974, p. 36; S.RAMON PARRO, Toledo en la mano. Toledo 1857, II, p. 413; BSCV, Ms. n.º 16, fol. 156r, 157r; P.SALAZAR Y MENDOZA, op. cit., pp. 308, 310; D.CASTEJON Y FONSECA, op. cit., pp. 1151-1152.

sustentación y asistencia atendía el prelado toledano, debía abonar los gastos que produjese su estancia. En cuanto al cuidado espiritual, determinó que la casa fuese visitada periódicamente por el vicario general, a la vez que se realizase la visita a las monjas del Monasterio de San Torcuato. Para el gobierno temporal, administración de la hacienda y conservación de la dote otorgada, el deán y el cabildo catedralicio comisionarían a uno de los canónigos más antiguos, al que acompañaría un regidor de la ciudad de Toledo de los más veteranos y el prior del Monasterio de San Agustín de dicha población. Debían realizar una visita anual, posterior a la que efectuase el vicario, para que pudiesen ordenar mejor las cuestiones que se derivasen de ésta. En relación a la admisión de las mujeres que habían de ocupar las venticuatro plazas, señalaba que fuesen preferidas las pertenecientes a su propia familia, sus descendientes y criadas, después las naturales de Toledo y las pertenecientes al arzobispado, pudiendo ingresar, si existía posibilidad cualquier otra que concurriese si cumplía las condiciones requeridas. La priora podía castigar los excesos que dichas mujeres seglares cometiesen e, incluso, proceder con la pena de prisión o expulsión, aunque siempre tenía que contar con la opinión acorde de al menos dos visitantes para emplear estas medidas. Por último apuntaba que, si por alguna circunstancia "el refugio" quedaba fuera de funcionamiento o no sirviese para la intención que había llevado a su fundación, los bienes que había señalado para su dotación y sustento, pasarían a aplicarse al Monasterio de frailes agustinos de Madrigal de la Alta Torres y al Monasterio de la Magdalena, de monjas de la misma Orden, en Alcalá de Henares a partes iguales (297).

(297).- Dichos estatutos aparecen recogidos en BNM, Ms. 13031, fols. 119r-120v; Archivo Secreto del Ayuntamiento de Toledo, Caja 1, leg. 5, nº 4. En dicha fundación, se conservaba un retrato al fresco de Quiroga ejecutado por El Greco, del que hacen referencia diversos autores. Véase, por ejemplo, G. MARAÑÓN, *El Greco y Toledo*. Madrid 1968, pp. 137-139. Por otra parte, el arzobispo no dejó de ocuparse tampoco, durante estos años, en una obra en la que tenía su propio "refugio": su lujoso cigarral. En 1588 compuso los jardines, para lo que hizo traer diversas plantas de Nápoles. Para su riego, no disponiendo del agua suficiente, pidió licencia al Ayuntamiento de Toledo para llevar por encañado la que nacía en el sitio de Pozuela, distante en una legua del cigarral, comprometiéndose a construir una abrevadero para el ganado de la zona (AHN, Inq., libro 361, fols. 572r-v, 578r; Archivo Secreto del Ayuntamiento de Toledo, Alacena 2ª, leg. 4, nº 6).

Igualmente, las disputas mantenidas entre el patronato real y eclesiástico sobre el Colegio de Nuestra Señora de los Remedios o de las Doncellas, fundado por el arzobispo Martínez Silicio, desde que Quiroga accediese a la prelación toledana, finalizaron con la realización de una escritura de concordia, fechada el 7 de marzo de 1594, donde quedaba establecido que la provisión del administrador y rectora del mismo, así como, la presentación de cuarenta de las cien doncellas que lo conformaban, correspondía a los arzobispos de Toledo. No obstante, cuando vacase el oficio de administrador, debían presentar al rey dos candidatos para ocupar el cargo, siendo el monarca quien otorgase el título. Las disposiciones adoptadas fueron confirmadas por un breve de Clemente VIII (298).

8.4. El final de una larga vida.

Gaspar de Quiroga fallecía en Madrid el 20 de noviembre de 1594 (299). Desde finales de octubre, sus enfermedades, que venían causándole un importante deterioro físico desde el año anterior, se habían agravado considerablemente, por lo que, teniendo en cuenta su edad, en la Corte comenzó a considerarse próximo el fatal desenlace (300). Afectado por una fuerte

(298).- La escritura de concordia se encuentra en AGS, PR, 38-49, y el breve confirmatorio en, *Ibid.*, 38-53; RAH, "Pellicer", tomo XXVIII, fol. 192. Sobre los problemas existentes para designar administrador, véase, AZ, carp. 152, n.º 123. En torno a este tema, véase, J. ESTEBAN-INFANTES, El Colegio de Nuestra Señora de los Remedios vulgarmente llamado de Doncellas Nobles de Toledo. Toledo 1915, *passim*; L. SANTOLAYA HEREDERO, "El Colegio de Doncellas Nobles de Toledo. Algunos puntos de sus constituciones" Espacio, Tiempo y Forma 7 (1994), pp. 355-363. Por otra parte, Quiroga también fue nombrado como uno de los patronos del Colegio fundado por María de Aragón en Madrid. Sobre sus relaciones con dicha señora y con el beato Alonso de Orozco, véase, F. ZAMORA LUCAS, "El Colegio de doña María de Aragón y un retablo del "Greco", en Madrid" Anales del Instituto de Estudios Madrileños 2 (1967), pp. 215-239; A. BUSTAMANTE GARCIA, "El Colegio de doña María de Aragón, en Madrid" Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología 38 (1972), pp. 427-447; R. G. MANN, El Greco y sus patronos. Tres grandes proyectos. Madrid 1994, pp. 50-68.

(299).- El óbito se produjo entre las cuatro y las cinco de la mañana (AHN, Inq., libro 329, fol. 373r-v; *Ibid.*, libro 357, fol. 147v).

(300).- En 1593, Quiroga había tornado a pedir al rey que le permitiese retirarse a Toledo a causa de su precaria salud, volviendo a negarse Felipe II a otorgar su licencia, aludiendo a la necesidad que tenía de que permaneciese en la Corte (BSCV, Ms. n.º 16, fol. 157v; B. PORREÑO, Dichos y hechos del rey don Felipe II. Madrid 1942, p. 135). El canónigo de la iglesia de Toledo

apoplejía, logró recuperar la consciencia para que el benedictino fray Juan de Castañiza le escuchase en confesión, recibir la Extrema Unción, así como otorgar un segundo testamento y dos codicilos (301).

En este sentido, hemos de señalar que, entre las muchas gracias que obtuvo de Gregorio XIII, Quiroga recibió facultad para testar todos sus bienes, aunque estos fuesen adquiridos por la Iglesia. El 27 de noviembre de 1592, realizaba un primer testamento ante Juan Gutierre, notario de la audiencia arzobispal, que entregó cerrado a Juan Bautista Neroni. En este documento, dejaba su hacienda a los pobres, a diversas obras pías y a sus criados. En el segundo testamento y dos codicilos que realizó durante su enfermedad, nombró albaceas a Rodrigo Vázquez de Arce, presidente del Consejo Real, a don Juan de Borja, conde de Mayalde y mayordomo mayor de la emperatriz María, al licenciado Juan Vigil de Quiñones, del Consejo de Inquisición, al licenciado Alonso Serrano, canónigo de Toledo y perteneciente a la Dignidad arzobispal, y a Jerónimo de Chiriboga. Especialmente beneficiado resultó el convento de los agustinos de Madrigal de las Altas Torres, donde se encontraban sepultados sus padres, junto a los que dispuso su enterramiento, estimándose que la obra realizada en el "nuevo Escorial" tuvo un coste superior a los doscientos mil ducados. También dispuso que parte de su hacienda sirviese para mejor sustentar lugares e instituciones que le eran muy queridas, como su villa natal, las iglesias

Gaspar Yáñez, que se hallaba en Madrid, informaba al cabildo, el 30 de octubre, de la gravedad del estado del arzobispo (ACT, Actas Capitulares. Tomo 21, fols. 172r-174r). Al día siguiente, García de Loaysa aconsejaba al monarca que advirtiese al consistorio que no aprovecharen la sede vacante para hacer todos los nombramientos posibles, así como al colector apostólico para que no se produjesen inconvenientes en relación con los bienes del prelado (IVDJ, envío 89 (caja 125), nº 178).

(301).- Sobre la evolución de su postrera enfermedad, véase, P.SALAZAR Y MENDOZA, op. cit., pp. 312-313. Tanto este autor como Jerónimo ROMAN DE LA HIGUERA (op. cit., fol. 205r) insisten en que la longevidad de Quiroga estuvo determinada por su robusta naturaleza, su moderación en las comidas, no siendo de sus gusto las viandas muy elaboradas, sino únicamente los salazones, incrementando su frugalidad por su estricto cumplimiento con los ayunos establecidos por la iglesia. No bebía vino, tomando únicamente agua muy fría.

de Salamanca y la colegial de Talavera, el albergue de Santa Isabel en Madrid (302), el refugio de San Torcuato en Toledo, el Colegio de Santa Cruz de Valladolid, los Colegios de la Compañía de Jesús en Toledo y Talavera, así como el Monasterio de las agustinas de la Magdalena en Alcalá de Henares. Su sobrino Alvaro de Quiroga recibía mil ducados de renta, quedando como patrón y protector de algunas de sus obras pías (303). Sin embargo, la importante fortuna acumulada por el prelado, que se estimaba en millón y medio de ducados, despertó diversas ambiciones, que provocaron que se tratase de invalidar el testamento, dando lugar a un prolongado pleito, que tuvo como resultado que la hacienda dejada por Quiroga se repartiese en tres partes iguales. La primera fue a manos del pontífice, que aplicó este dinero en la guerra que mantenía en el ducado de Ferrara. La segunda se asignó al rey hispano para sufragar las actividades bélicas de la Monarquía, mientras que, la tercera quedaba a disposición de los albaceas para cumplir con la voluntad expresada por Quiroga en su testamento (304)

A pesar de los ofrecimientos que había recibido para fijar su enterramiento, principalmente del cabildo de la catedral de Toledo (305), como hemos señalado, Quiroga decidió enterrarse junto a sus padres en el Monasterio de los agustinos de Madrigal. El sepelio en la villa abulense fue solemne y multitudinario, ocupándose de su organización la iglesia de Toledo,

(302).- Dicho colegio lo había mandado fundar Felipe II en las casas confiscadas a Antonio Pérez (B.PORREÑO. op. cit., p, 200; RAH, "Pellicer", tomo XXVIII, fol. 144r-v; A.LEON PINELO, Anales de Madrid, pp, 148-149, 160, 196).

(303).- sobre las disposiciones recogidas en su testamento, véanse, Ibid., pp, 152-153; P.SALAZAR Y MENDOZA, op. cit., pp, 313-316; BSCV, Ms. n° 16, fols. 159v-161r; G.GONZALEZ DAVILA, Teatro... de las dos Castillas, I, pp, 491-492; AHN, Consejos, leg. 5310, 4ª pieza, fols. 108v-131r.

(304).- En torno a dicho pleito, véase, Ibid., fols. 171v-176v, 196v-203r; Ibid., Clero, leg. 589, carp. 2, 18; RAH, "Salazar" A-82, fol. 212; IVDJ, envío 91 (caja 131), n° 545, 784; Ibid., envío 90, fol. 637; AMAE, Santa Sede, leg. 20, fols. 385-400; AGS, Estado, leg. 2855, s.f.; AZ. carp. 145, n° 22-23; L.CABRERA DE CORDOBA, op. cit., IV, p, 127; R.HINOJOSA, op. cit., p, 391.

(305).-El consistorio propuso a Quiroga que se enterrase en la catedral el 13 de junio de 1586, insistiendo sobre ello unos días antes de que se produjese su óbito (ACT, Actas Capitulares. Tomo 18, fol. 250v; Ibid., tomo 21, fol. 177v).

que confirió al acto una suntuosidad en consonancia con la calidad del difunto (306). Sin embargo, los funerales de Quiroga coincidieron con el desenlace de un suceso que no sólo había perturbado a la población de Madrigal, sino a la Corte y a Felipe II. La aparición de un brote de "sebastianismo", protagonizado por el pastelero Gabriel de Espinosa y un religioso portugués, que implicaba a Ana de Austria, hija de don Juan de Austria, quien había ingresado, siendo una niña, en el convento de las Agustinas de Nuestra Señora de Gracia, constituyó un aliciente añadido al entierro del Cardenal (307).

Por otra parte, la muerte de Quiroga abría la sucesión de los importantes cargos que había ostentado. Si bien, en el caso del arzobispado toledano, estaba definido desde hacía varios años el nombramiento del archiduque Alberto, que se consumó según las condiciones establecidas por los documentos pontificios, la evolución política de la Monarquía y su marcha a Flandes hicieron que fuese García de Loaysa, que había extendido su influencia a los asuntos derivados de dicha iglesia en los años precedentes, quien pasase a ocupar la mitra toledana (308). Menos perfilada estaba la provisión del cargo de Inquisidor General, que, finalmente, recayó en Jerónimo Manrique, obispo de Avila. Sin embargo, sólo permaneció unos meses al frente del Santo Oficio, dado que tomó posesión el 8 de mayo de 1595 y falleció el 1 de septiembre del mismo año. Su puesto fue ocupado por el rehabilitado Pedro Portocarrero (309). En cuanto a la

(306).- G.DE ANDRES, "El helenismo del canónigo...", p. 278; P.SALAZAR Y MENDOZA, op. cit., p. 313; J.ROMAN DE LA HIGUERA, op. cit., pp. 248-249.

(307).- En torno a la figura de Ana de Austria y el proceso del "pastelero de Madrigal", véase, M.FORMICA, María de Mendoza..., passim; Idem., La hija de don Juan de Austria..., pp. 159ss; IVDJ, envío 63 (caja 89), fol. 125r; C.M.ABAD, Dofia Magdalena de Ulloa..., p. 43; A.OSSORIO, Vida de don Juan de Austria, pp. 307-312; L.CABRERA DE CORDOBA, op. cit., IV, pp. 114-119.

(308).- AGS, PR, 66-38; F.CAEIRO, op. cit., pp. 365-370; D.CASTEJON Y FONSECA, op. cit., pp. 1157ss. Durante la sede vacante, García de Loaysa se preocupó de que no se cometiesen excesos por parte del cabildo, así como de tratar de impedir cualquier actuación conflictiva por parte de la Santa Sede (IVDJ, envío 89 (caja 125), n° 179).

(309).- Sobre las consultas realizadas por el rey, que precedieron a la designación de Jerónimo Manrique, véase, AZ, carp. 147, n° 163-165; IVDJ, envío 91 (caja 131), n° 542. Por otra parte, en Roma se presentaron diversos inconvenientes para renovar el breve de nombramiento del Inquisidor General en la misma forma que se había despachado para Quiroga (Ibid., envío 8 (III), caja 13, fol. 207).

presidencia del Consejo de Italia, el designado para ocuparse de su gobernación fue, como hemos referido, el conde de Chinchón.

Así pues, Quiroga terminaba sus días pocos años antes de que lo hiciese Felipe II, a cuyo servicio había empleado su larga y azarosa vida. Es posible que el Rey Prudente también compartiese la opinión que el prelado expresara unos años antes: "Dijo uno delante de Quiroga, Arzobispo de Toledo, a buen propósito: -Triste cosa es morirse un hombre y no irse al cielo. -Respondió Quiroga: -Y aunque se vaya" (310).

(310).- E.RETEL, Ambrosio de Morales, p, 262 n.52.

APENDICES

APENDICE I

MIEMBROS DEL CONSEJO DE INQUISICION (1)

Consiliarios

Licdo. Rodrigo de Castro Osorio (1560-1573)
Licdo. Sancho Busto de Villegas (1564-1578)
Francisco Soto Salazar (1565-1576)
Licdo. Hernando de Vega de Fonseca (1567-1578)
Doctor Juan Redín (1571-1577)
Licdo. Pedro Fernández de Temiño (1572-1581)
Licdo. Pedro Velarde (1572-1576)
Licdo. Pedro Gasco (1573-1574)
Rodrigo Vázquez de Arce (1575-1584)
Jerónimo Manrique (1575-1583)
Licdo. Tomás de Salazar (1575-1585)
Juan de Llano de Valdés (1580-1583)
Licdo. Pedro Portocarrero (1581-1583)
Licdo. Antonio Matos de Noroña (1581-1591)
Licdo. Pedro Junco de Posada (1582-1589)
Licdo. Francisco de Ribera (1582-1586)
Licdo. Francisco Dávila (1583-1589)

(1).- Para la elaboración de estos datos referidos a los miembros de la Suprema, se han utilizado las nóminas de salarios del Consejo recogidas en AHN, Inq., libro 252, fols. 145r-147r, 167r-168r; Ibid., libro 249, fols. 230r-v, 232v-233r, 235v-236r, 239r-v, 247r-248v, 251v-252r, 255v-258v, 259v-260r, 261v-262v, 264r-v, 273v-274r, 276v-277r; Ibid., libro 358, fols. 17v-18r; Ibid., libro 361, fols. 270r-271v; Ibid., libro 359, fols. 73v-74r; Ibid., libro 1279, fols. 216v, 217r-v. Por otra parte, queremos aclarar que, cuando solamente aparece señalado un año al lado del nombre, está referido a la fecha en que ingresó en la institución.

Doctor Juan Fernández Cogollos (1585-1589)

Licdo. Juan de Zúñiga (1585)

Doctor Juan Alvarez de Caldas (1589)

Licdo. Vigil de Quiñones (1590)

Licdo. García de Loaysa (1590)

Licdo. Alonso Núñez de Bohorques (1590)

Licdo. Paulo de Laguna (1590)

Licdo. Pedro Pacheco (1592)

Licdo. Juan Hurtado de Mendoza (1592)

Secretarios del Consejo

Jerónimo Zurita (Fallecido en 1580)

Mateo Vázquez (1581-1590)

Arenillas de Reinoso (1591)

Fiscales

Licdo. Salvatierra (Dejó el cargo en 1578)

Cristobal de Ovalle

Arenillas de Reinoso (1578-1590)

Secretarios

Alonso de Dóriga

Pablo García (1575)

Relatores

Licdo. Alonso Serrano (Fue relevado en 1574)

Arenillas de Reinoso (Abandonó este cargo en 1578)

Licdo. Pedro de Niévalos (1576)

Licdo. Lorenzo Flórez (1579-1593)

Doctor Juan Fernández Galeote (1581-1582)

Licdo. Marcos de Lombera (1582-1584)

Licdo. Tomás de Solanara (1584)

Pedro Mates (1593)

Doctor Gamarra (1593)

Receptores

Diego de Torres y Molina (Fue sustituido en 1574)

Nicolás Ortiz de Carrazo (1575-1585)

Juan Manuel Alderete (1585-1587)

Antonio Vázquez Vuelta (1587)

Alguaciles

Juan Cebrián de Ibarra (Fue relevado en 1576)

Alvaro Alderete (1577-1591)

Mateo Enríquez de Herrera (1591)

Médicos

Licdo. Rivas (1571-1590)

Alonso Ramírez de Arellano (1590)

Andrés Camudio de Alfaro (1590)

Nuncio

Juan de Llano

Porteros

Pedro de Naveda (Dejó la institución en 1575)

Llorente García de Amuña (1575-1577)

Gabriel de Requena (1577)

Tasador

Juan de Ledesma (1573)

Calificador

Hernando del Castillo (1575)

APENDICE II

MIEMBROS DE LOS TRIBUNALES DE DISTRITO (2)

ARMADA

Jerónimo Manrique (1571-1574) (3)

Rodrigo de Mendoza (1575) (4)

BARCELONA

Inquisidores

Licdo.Francisco de Ribera (1572-1577) (5)

Licdo.Minaya (1572) (6)

Licdo.Amatos (1572) (7)

Doctor Romano (1573) (8)

(2).- Cuando únicamente aparece referido un año, indica la fecha en que el inquisidor o fiscal comenzó a prestar sus servicios en dicho tribunal.

(3).- Se le otorgó título de inquisidor de la Armada en septiembre de 1571 (Ibid., libro 356, fol. 226r).

(4).- Inquisidor en el reino de Aragón, obtuvo su nombramiento el 21 de marzo de 1575 (Ibid., libro 357, fols. 3r-5r).

(5).- Se le promueve como inquisidor de Barcelona en enero de 1572. Era prior de Alcántara. En agosto de 1577 pasó a la Inquisición de Zaragoza, y, en 1582, a la Suprema (Ibid., libro 356, fols. 243r, 248r).

(6).- Colegial de San Bartolomé, obtuvo nombramiento como inquisidor de Barcelona en enero de 1572 (Ibid., fol. 248r).

(7).- Inquisidor de Córdoba, recibió nombramiento en julio de 1572 para sustituir al licenciado Bernardo Gasco, que pasó a servir en el tribunal de Sicilia (Ibid., fol. 259r).

(8).- Inquisidor de Llerena, obtuvo título de inquisidor en Barcelona el 9 de julio de 1573 (Ibid., fol. 270r).

Licdo. Juan Becerra de la Cuadra (1575) (9)
 Doctor Juan de Aymar (1578-1583) (10)
 Juan Alvarez de Caldas (1578-1589) (11)
 Doctor Antonio de Toledo y de Lima (1582-1584) (12)
 Licdo. Alonso Blanco (1583-1592) (13)
 Doctor Miguel Jerónimo Blasco (1585-1586) (14)
 Licdo. Felipe de Tassis (1589-1592) (15)
 Licdo. Francisco Arévalo de Zuazo (1589) (16)
 Licdo. Alonso Marquez de Prado (1592) (17)
 Licdo. Diego Fernández de Heredia (1592) (18)

Fiscales

Doctor Pedro Villa (Murió en 1586)

(9).- Obtuvo, en primer lugar, nombramiento como visitador, y, el 9 de julio de 1575, se le nombró inquisidor con facultad de presidir. Había servido en el tribunal de Sicilia, siendo abad de la Mayson (Ibid., libro 357, fols. 7v-8r).

(10).- Fiscal en el tribunal de Zaragoza, obtuvo el nombramiento de inquisidor el 6 de mayo de 1578. En 1583 pasó a la Inquisición de Sicilia (Ibid., fols. 46v-47r).

(11).- Canónigo de Sigüenza, fue nominado inquisidor de Barcelona el 10 de diciembre de 1578. En 1589, pasó a formar parte del Consejo de Inquisición (Ibid., fol. 60r).

(12).- El 9 de diciembre de 1582 le fue despachado el título de inquisidor (Ibid., libro 358, fol. 44r-v).

(13).- El 24 de diciembre de 1583, obtuvo el título de inquisidor para cubrir la plaza vacante por la promoción de Francisco de Ribera a la Suprema. En 1592, pasó a servir en la Inquisición de Galicia (Ibid., libro 361, fol. 314r-v).

(14).- Deán de la catedral de Valencia, el 29 de octubre de 1585 le fue despachado el título de inquisidor (Ibid., libro 357, fol. 202r).

(15).- Canónigo de la catedral de Salamanca, fue promovido como inquisidor en Barcelona en 14 de marzo de 1589. En 1592, pasó a la Inquisición de Llerena (Ibid., fol. 269r).

(16).- Canónigo y deán de la catedral de Segovia, obtuvo el título de inquisidor el 12 de agosto de 1589 (Ibid., fol. 272r-v).

(17).- Canónigo doctoral de la catedral de Cuenca, ocupó la plaza de Felipe de Tassis, promovido al tribunal de Llerena. Obtuvo el título de inquisidor el 13 de abril de 1592 (Ibid., libro 359, fol. 94r).

(18).- Fiscal en el tribunal de Valencia, le fue despachado título de inquisidor el 9 de noviembre de 1592 (Ibid., fol. 124r-v).

Licdo. Pedro del Hoyo (1586) (19)

CANARIAS

Inquisidores

Diego Osorio de Sexas (20)

Juan Lorenzo

Licdo. Francisco Magdaleno (1585-1593) (21)

Doctor Claudio de la Cueva (1590) (22)

Licdo. Pedro Camino (1593) (23)

Fiscales

José de Armas (1571) (24)

CERDEÑA

Inquisidores

Doctor Alfonso de Lorca (25)

Doctor Juan Zurita (1576-1584) (26)

(19).- Fiscal en el tribunal de Llerena, sustituyó al difunto Pedro Vila. Obtuvo su título el 1 de julio de 1586 (Ibid., libro 357, fols. 220v-221r; Ibid., libro 361, fol. 570r).

(20).- Aparece, junto al inquisidor Juan Lorenzo, en una relación de ayuda de costas fechada en septiembre de 1581 (Ibid., libro 358, fol. 17r-v).

(21).- Obtuvo el título de inquisidor el 3 de julio de 1585. Nombrado fiscal en el tribunal de Zaragoza, no llegó a tomar posesión del cargo (Ibid., libro 357, fol. 196v).

(22).- Fiscal en la Inquisición de Granada, le fue despachado el título de inquisidor el 23 de julio de 1590 (Ibid., libro 359, fols. 6v-7r).

(23).- Fue nominado, el 16 de octubre de 1593, para cubrir la plaza del licenciado Madaleno, difunto (Ibid., fol.s. 170v-171v).

(24).- Le fue despachado título de fiscal en octubre de 1571 (Ibid., libro 356, fol. 236v).

(25).- Aparece, junto al Maestro Jara, fiscal, en una ayuda de costa fechada en agosto de 1573 (Ibid., fol. 269r-v)

(26).- Canónigo de Sigüenza, se le dió poder de inquisidor el 14 de diciembre de 1576 (Ibid., libro 357, fol. 24r-v).

Doctor Jaime Pérez (1578) (27)

Licdo. Juan de Zuazo (1579) (28)

Licdo. Andrés Martínez de Aguayo (1580) (29)

Doctor Antonio de Raya (1581) (30)

Doctor Bartolomé Benito Moles (1585) (31)

Licdo. Diego Fernández de Heredia (1587) (32)

Licdo. Diego Osorio de Sexas (1589) (33)

Alonso Muñoz de la Peña (1591) (34)

Fiscales

Maestro Jara (35)

CORDOBA (36)

Inquisidores

Licdo. Francisco Gasca Salazar (1572-1577)

Andrés Santos de San Pedro (1573-1575)

(27).- Fiscal en la Inquisición de Valencia, obtuvo poder de inquisidor de Cerdeña el 7 de julio de 1578 (Ibid., fols. 50v-51v).

(28).- Arcediano de Olmedo, le fue despachado poder de inquisidor el 21 de octubre de 1579 (Ibid., fols. 71v-72r).

(29).- Fue proveído como inquisidor el 8 de junio de 1580 (Ibid., fol. 80r-v).

(30).- El 9 de enero de 1591 fue promovido al cargo de inquisidor (Ibid., fol. 86r).

(31).- Canónigo de la Seu de Urgel, obtuvo título de inquisidor el 6 de abril de 1585 (Ibid., libro 361, fol. 361r-v).

(32).- Promotor fiscal en el tribunal de Valencia, se le otorgó título de inquisidor el 21 de julio de 1587. No sirvió (Ibid., fol. 468v; Ibid., libro 357, fol. 245r).

(33).- Fiscal en la Inquisición de Llerena, obtuvo el título de inquisidor de Cerdeña el 10 de octubre de 1589 (Ibid., 274v-275r).

(34).- Fiscal de la Inquisición de Sicilia y canónigo de la iglesia de Girgento, el 30 de marzo de 1591, le fue despachado el título de inquisidor (Ibid., libro 359, fol. 38r-v).

(35).- Véase la ayuda de costas fechada en agosto de 1573 (Ibid., libro 356, fol. 269r-v).

(36).- A. HUERGA, Historia de los Alumbrados (1570-1630). Madrid 1978, pp. 32-34; A. ACOSTA GONZALEZ, Estudio comparado de tribunales inquisitoriales. Madrid 1990, p. 166.

Andrés de Alava (1454-1575)

Alvaro de Reinoso (1575)

Juan de la Portilla (1575-1580)

Juan Delgado (Dejó el tribunal en 1580)

Licdo.Molina de Medrano (1580-1584)

Licdo.Juan López de Montoya (1581)

Doctor Cristobal Martínez de Vallecillo (1584-1594) (37)

Luis de Copones (1587)

Licdo.Juan Zapata Osorio (1589-1592) (38)

Doctor Alonso Ximénez de Reinoso (1590)

Licdo.Juan de Porres (1592) (39)

Doctor Antonio Portocarrero (1594) (40)

Fiscales

Licdo.Quintana (Fue sustituido en 1582)

Licdo.Pero Gutiérrez de Santander (1582) (41)

CORTE (42)

Inquisidores

Juan de Llano de Valdés (1583)

(37).- Canónigo de la catedral de Córdoba, obtuvo el título de inquisidor el 27 de julio de 1594. Pasó a prestar sus servicios en el tribunal de Granada (AHN, libro 361, fol. 337r-v).

(38).- Maestrescuela de la catedral de Murcia, le fue despachado el título de inquisidor el 1 de febrero de 1589. En 1592, fue a la Inquisición de Sevilla (Ibid., libro 357, fol. 267r).

(39).- Canónigo de la catedral de Avila, obtuvo el título de inquisidor el 8 de abril de 1592 (Ibid., libro 359, fols. 95r-96r).

(40).- Maestrescuela de la iglesia de Alcalá de Henares, se le dio el título de inquisidor el 28 de junio de 1594, para ocupar la plaza del doctor Cristóbal de Vallecillo (Ibid., fol. 200v).

(41).- El 25 de agosto de 1582, se le otorgó título de fiscal en sustitución del licenciado Quintana (Ibid., libro 358, fols. 36v-37r).

(42).- M.P.DOMINGUEZ SALGADO, "Los orígenes del tribunal de Corte (1580-1665)" Inquisición española. Nuevas aproximaciones. Madrid 1987, pp, 99-125.

CUENCA (43)Inquisidores

Licdo. Alvaro de Reinoso (1569-1576)

Doctor Francisco de Arganda (1577-1582)(1584-1607)

Licdo. Hernán cortés (1580-1583)

Licdo. Alonso Ximénez de Reinoso (1582-1589)

Licdo. Antonio Zapata (1582-1584)

Licdo. Francisco Velarde de la Concha (1590-1591)

Licdo. Pedro Cifuentes de Loarte (1592-1600)

Fiscales

Licdo. Egidio Ballesteros (1573-1587)

Licdo. Juan Ochoa (1588-1600)

GALICIA (44)Inquisidores

Doctor Diego Alba (1574-1584)

Licdo. Diego de la Cantera (1577-1581)

Doctor Hernando de Montoya (1582-1592)

Licdo. Juan de Cortazar (1584-1591)

Licdo. Ortiz de Matienzo (1591-1598)

Licdo. Alonso Blanco (1592-1600)

Fiscales

Licdo. Gregorio Gago

(43).- V. SANCHEZ GIL, "El tribunal de la Inquisición de Cuenca: Notas para un catálogo de sus miembros (1489-1714)" Archivo Ibero-americano 40 (1980), pp, 3-36.

(44).- J. CONTRERAS, El Santo Oficio de la Inquisición en Galicia, 1560-1700. Madrid 1982, pp, 189-190, 238.

GRANADA (45)Inquisidores

Doctor Diego Mexía de Lassarte (1573-1594)
Toribio Mongrovejo (1574)
Doctor Romano (1575)
Doctor Juan Salcedo (1581-1590)
Licdo.Fernando Martínez (1582-1593)
Diego Bravo de Sotomayor (1590-1595)
Doctor Antonio Raya (1593-1594)
Doctor Cristobal Martínez de Vallecillo (1594-1598)
Licdo.Antonio Venegas de Figueroa (1594)

Ficales

Licdo.Alonso Ximénez de Reynoso
Juan Ruiz de Prado (Su salida se produjo en 1586)
Doctor Claudio de la Cueva (1587-1590)

LLERENA (46)Inquisidores

Juan López de Montoya (1574-1581)
Antonio Matos de Noroña (1575-1581)
Licdo.Salinas (1576)
Licdo.Tomás de Leciñana (1576)
Fabián López de Saldaña (1576)
Licdo.Marcos de Piédrola (1580-1582)
Doctor Bernardo de Olmedilla (1583)
Licdo.Pedro Girón (Dejó de prestar sus servicios en 1587)
Doctor Rodrigo de Mendoza (Su marcha se produjo en 1587)

(45).- R.DE LERA GARCIA, El tribunal de la Inquisición de Granada: un poder económico y social. Tesis Doctoral, UAM 1994, pp, 62-63.

(46).- A.HUERGA, op. cit., I, pp, 233-236; M.A.PLACER RUEDA, La burocracia del Santo Oficio de la Inquisición de Llerena, 1600-1820. Tesis de licenciatura, UAM 1985, p, 204.

Licdo. Diego Bravo de Sotomayor (1587)

Doctor Diego de Córdoba y Mendoza (1587-1600)

Doctor Antonio Raya (1589-1593)

Licdo. Matos de Lombera

Fernando Martínez

Felipe de Tassis (1592)

Bartolomé Martínez Carnacedo (1593)

Licdo. Miguel Ximénez Palomino (1593-1603)

Fiscales

Pedro del Hoyo (Fue sustituido en 1586)

Diego Osorio de Sexas (1586-1589)

Gómez de Zambrano (1590)

Gil de Escobar (1591)

MALLORCA (47)

Inquisidores

Licdo. Félix Evia de Oviedo (1578) (48)

Licdo. Martín de Alarcón de Ocón (1594) (49)

Fiscales

Doctor Ramón Veri (1580) (50)

Doctor Francisco Sunnier (1594) (51)

(47).- M.J. COLOM I PALMER, El tribunal de la Inquisición de Mallorca, 1578-1678. Tesis de licenciatura. Universidad de Palma 1982.

(48).- Le fue otorgado poder de inquisidor el 15 de marzo de 1578 (AHN, Inq., libro 357, fol. 41r).

(49).- El 28 de julio de 1594 le fue despachado el Título de inquisidor (Ibid., libro 359, fols. 197v-198v).

(50).- Obtuvo poder de fiscal el 18 de marzo de 1580 (Ibid., libro 357, fol. 79r-v).

(51).- El título de fiscal aparece fechado el 1 de septiembre de 1592 (ibid., libro 359, fols. 116v-117r).

MEXICO

Inquisidores

Licdo. Alfonso Fernández de Bonilla (1571-1593)

Licdo. Francisco Santos García (1583-1593)

Doctor Bartolomé Lobo Guerrero (1593) (52)

Licdo. Alonso de Peralta (1593) (53)

Ficales

Licdo. Francisco Santos García (Dejó de prestar sus servicios en 1583)

Doctor Bartolomé Lobo Guerrero (1583-1593)

Doctor Gonzalo de Martos Bohorques (1593) (54)

MURCIA (55)

Inquisidores

Juan de Aramayona

Licdo. Luis Gutiérrez Serrano (Abandonó el tribunal en 1587)

Licdo. Francisco Blanco (Dejó de prestar sus servicios en 1592)

Licdo. Diego de la Cantera (1581- 1594)

Licdo. Luis Ponce de León (1588-1592) (56)

(52).- Obtuvo título de inquisidor el 8 de marzo de 1593, ocupando el lugar del licenciado Bonilla (Ibid., fol. 147r-v).

(53).- El 8 de mayo de 1593 le fue despachado título de inquisidor para ocupar la plaza del doctor Santos García, electo obispo de Guadalajara (Ibid., fol. 148r-v).

(54).- Fue nominado para sustituir a Bartolomé Lobo Guerrero el 26 de abril de 1593 (Ibid., fols. 145v-146r).

(55).- J.A.JORDAN ARAZO, La burocracia del Santo Oficio de la Inquisición de Murcia, 1600-1820. Tesis de licenciatura, UAM 1986. Véase, igualmente, las ayudas de costas recogidas en AHN, Inq., libro 358, fols. 2r-v, 36r, 184v-r; Ibid., libro 357, fol. 291, 322r, 335r; Ibid., libro 359, fol. 132r-v.

(56).- El 21 de junio de 1588 se le despachó el título de inquisidor. Falleció en 1592 (Ibid., libro 357, fol. 257r-v).

Licdo.Lorenzo Flórez (1592) (57)

Licdo.Hernán Cortés (1593-1594) (58)

Doctor Honorato Figuerola (1594) (59)

Licdo.Bartolomé Sánchez (1594) (60)

Fiscales

Doctor Juan Clavero (1580)

Pedro Camino (1587-1593)

Licdo.Rafael del Rincón (1594) (61)

NAVARRA (62)

Inquisidores

Licdo.Alonso de Gaytán (1573) (63)

Doctor Zurita (1573) (64)

Licdo.Juan López Sierra (1573-1576) (65)

(57).- Racionero de la catedral de Burgos, obtuvo el título de inquisidor el 29 de agosto de 1592 (Ibid., libro 359, fols. 115v-116r).

(58).- Ocupó la plaza del fallecido Luis Ponce de León, recibiendo el título el 25 de febrero de 1593. Había prestado sus servicios en el tribunal de Logroño (Ibid., fol 133r-v).

(59).- Canónigo de la catedral de Valencia, fue a servir en lugar del difunto Fernando Cortés. Le fue despachado el título el 26 de febrero de 1594 (Ibid., fols. 187v-188r).

(60).- Canónigo de Salamanca, obtuvo el título de inquisidor el 25 de octubre de 1594 para sustituir al fallecido licenciado Cantera (Ibid., fols. 213v-214r).

(61).- Fue nombrado fiscal el 12 de julio de 1594 en sustitución de Pedro Camino, que fue nominado inquisidor en Canarias (Ibid., fols. 205v-206v).

(62).- J.SIMON DIAZ, "La Inquisición de Logroño (1570-1580)" Berceo 1 (1946), pp, 89-119; Idem, "La Inquisición de Logroño (1580-1600)" Berceo 6 (1948), pp, 83-96.

(63).- El 5 de junio de 1573 recibió poder como inquisidor de Navarra (AHN, Inq., libro 356, fol. 268v).

(64).- Proveniente de la Inquisición de Zaragoza, obtuvo el título de inquisidor el 1 de agosto de 1573 (Ibid., fol. 270r).

(65).- Se le otorgó nombramiento en diciembre de 1573 (Ibid., fol. 271r).

Licdo. Victor de Salinas (1576) (66)
Doctor Juan de Aramayona (1578-1582) (67)
Licdo. Hernán Cortés (1583-1593) (68)
Doctor Diego de Alba (1584-1586) (69)
Licdo. Pedro de Zamora (1584-1591)
Licdo. Juan de Quintana (1586-1590) (70)
Doctor Íñigo de Salcedo (1590) (71)
Licdo. Menendo de Valdés (1591) (72)
Licdo. Marcos de Lombera (1593) (73)

Fiscales

Licdo. Gregorio López (1560-1584)
Licdo. Fernando Ramírez (1585-1590) (74)
Doctor Gonzalo López Ramírez (1591) (75)

(66).- Se le despachó el título el 7 de febrero de 1576 (Ibid., libro 357, fol. 16r-v).

(67).- Proveniente del tribunal de Murcia, obtuvo el título de inquisidor el 6 de mayo de 1578 (Ibid., fol. 47r-v).

(68).- Habiendo prestado sus servicios en la Inquisición de Cuenca, obtuvo el nombramiento el 11 de febrero de 1583. En 1593 pasó al tribunal de Murcia (Ibid., libro 358, fols. 134v-135r).

(69).- Inquisidor en el tribunal de Galicia, se le despachó título el 14 de enero de 1584. Murió en 1586. (Ibid., libro 361, fols. 315v-316r).

(70).- Obtuvo el título de inquisidor el 4 de marzo de 1586 (Ibid., fols. 209r-v).

(71).- Deán de la catedral de Soria, le fue otorgado título de inquisidor el 10 de febrero de 1590 (Ibid., fols. 115v-116r).

(72).- Deán de la catedral de Oviedo, obtuvo título de inquisidor en sustitución de Pedro de Zamora el 9 de marzo de 1591, que pasó al tribunal de Valencia (Ibid., libro 359, fols. 37v-38r).

(73).- Proveniente del tribunal de Llerena, fue nominado para cubrir la plaza de Hernán Cortés el 25 de febrero de 1593 (Ibid., fol. 134r).

(74).- El 12 de marzo de 1585 se le dió título para que sirviese el oficio de fiscal, vacante por la muerte de su padre, el licenciado Gregorio López (Ibid., libro 361, fols. 358v-359r).

(75).- Sustituyó al fallecido licenciado Fernando Ramírez, despachándose el correspondiente título el 21 de mayo de 1591 (Ibid., libro 359, fols 44v-45r).

Doctor Francisco Pallars Pascual (1591-1592) (76)

Doctor Jerónimo Buxeda de Leyva (1592) (77)

Licdo. Pedro Axpe (1592) (78)

PERU

Inquisidores

Doctor Juan Ruiz de Prado (1586-1592) (79)

Licdo. Pedro Ordoñez Flórez (1592) (80)

SEVILLA (81)

Inquisidores

Miguel de Carpio (1556-1578)

Rodrigo Gutiérrez de Paramo (1574-1579)

Licdo. Juan López Sierra (1576-1592)

Doctor Lope de Mendoza (1579-1581)

Luis de Copones (1580-1591)

Licdo. Andrés de Alava (1581-1589)

Juan de Llano de Valdés (1590-1608)

Licdo. Francisco Blanco de Salcedo (1592-1601)

Licdo. Juan Hurtado de Mendoza (1592)

(76).- El 27 de octubre de 1591 se le dio título de fiscal en lugar del doctor López Ramírez, difunto (Ibid., fols. 71v-72v).

(77).- Obtuvo nombramiento el 21 de marzo de 1592 para sustituir al fallecido Francisco Pallars, pasando, en el mes de agosto, a servir en el tribunal de Zaragoza (Ibid., fols. 90v-91v).

(78).- Se le otorgó título de fiscal el 13 de agosto de 1592 (Ibid., fols. 112r-113r).

(79).- El 7 de marzo de 1586 recibió título de visistador e inquisidor del Perú. Era fiscal en el reino de Granada (Ibid., libro 357, fol. 210r-v).

(80).- Obtuvo título de inquisidor el 3 de marzo de 1592 en lugar de Juan Ruiz de Prado (Ibid., libro 359, fols. 86v-87r).

(81).- P.GARCIA DE YEBENES PROUS, El tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de Sevilla: Burocracia y hacienda. Tesis doctoral, UAM 1990. Apéndice.

Fiscales

Francisco de Arganda (1574-1577)

Marcos de Piédrola (1577-1580)

Licdo. Jerónimo Gregorio (1580-1588)

Licdo. Fernando de Arrieta (1588-1595)

SICILIA (82)Inquisidores

Licdo. Juan de Rojas (1577-1578)

Licdo. Diego de Ahedo (1577-1585)

Licdo. Juan de la Peña (1578-1587)

Licdo. Juan de Corrionero (1579-1589)

Doctor Juan de Aymar (1583-1585)

Doctor Luis Rincón de Páramo (1586-1608)

Doctor Lope de Baraona (1587-1590)

Doctor Antonio Raya (1587-1589)

Doctor Martín Ollaqui (1589-1598)

Licdo. Domingo Llanes de Espriella (1592-1620)

Fiscales

Doctor Diego Beltrán (1578) (83)

Licdo. Alonso de la Peña (1585-1588) (84)

Juan Garrido de Espinar (1590) (85)

(82).- M.RIVERO RODRIGUEZ, La Inquisición en el reino de Sicilia (En prensa).

(83).- Natural de Villanueva del Arzobispo, obtuvo título de fiscal el 10 de enero de 1578 (AHN, Inq., libro 357, fol. 39v).

(84).- El 16 de noviembre de 1585, se le despachó título de fiscal. Falleció en 1588 (Ibid., libro 361, fol. 519r).

(85).- El nombramiento aparece fechado el 10 de julio de 1590 (Ibid., libro 359, fols. 1r-2r).

TOLEDO (86)Inquisidores

Juan de Llano de Valdés (1572-1580)

Antonio Matos de Noroña (1572-1575)

Alvaro de Reinoso

Rodrigo Gutiérrez de Páramo

Licdo. Juan de Zúñiga

Francisco Dávila

Lope de Mendoza (1581-1591) (87)

Antonio Zapata (1584-1588) (88)

Doctor Rodrigo de Mendoza (1587) (89)

Licdo. Andrés de Alava (1589-1494) (90)

Pedro de Zárate (1589-1593)

Licdo. Pedro Pacheco (1591) (91)

Doctor Antonio Morejón (1591) (92)

Licdo. Gaspar de Quiroga (1592) (93)

(86).- L. PARAMO, Origine et progressu officii Sanctae Inquisitionis. Madrid 1598, pp, 169-175.

(87).- Inquisidor en Sevilla, el 17 de julio de 1581, obtuvo título de inquisidor en el tribunal de Toledo (AHN, Inq., libro 358, fol. 3r).

(88).- Proveniente de la Inquisición de Cuenca, se le dió título el 31 de enero de 1584 (Ibid., libro 361, fol. 318r-v).

(89).- Inquisidor en la Provincia de León, se le despachó el título el 6 de marzo de 1587 (Ibid., libro 357, fol. 236v).

(90).- Inquisidor en Sevilla, fue nominado el 3 de octubre de 1589 (Ibid., fol. 274r-v).

(91).- Canónigo de la catedral de Cuenca y Arcediano de Moya, sirvió como inquisidor en el tribunal de Valencia. El 9 de septiembre de 1591 le fue otorgado título de inquisidor de Toledo (Ibid., libro 359, fols. 56v-57r).

(92).- Chantre de la iglesia colegial de Alcalá de Henares, fue inquisidor de Zaragoza. Obtuvo nombramiento como inquisidor de Toledo el 13 de diciembre de 1591 (Ibid., fols. 76v-77r, 91v-92r).

(93).- Canónigo de Toledo y arcediano de Talavera, el 17 de diciembre de 1592 le fue despachado el título de inquisidor (Ibid., fol. 126r-v).

Doctor Mexía de Lassarte (1594) (94)

Fiscales

Andrés Bustamante

Licdo. Pedro Soto Camero

VALENCIA (95)

Inquisidores

Licdo. Juan de Zúñiga (1574-1580)

Doctor Zárate (1574-1586)

Licdo. Juan de Rojas (1574-1579)

Licdo. Hernando Cortés (1578-1582) (96)

Licdo. Alonso Ximénez de Reinoso (1580-1582) (97)

Doctor Francisco de Arganda (1582-1584) (98)

Juan de Llano de Valdés (1582-1583)

Doctor Pedro Gutiérrez Flórez (1584-1586) (99)

Doctor Hernando de Montoya (1585) (100)

Licdo. Pedro Pacheco (1587-1591) (101)

(94).- Inquisidor de Granada, fue proveído en la Inquisición de Toledo el 13 de mayo de 1594 (Ibid., fol. 193r).

(95).- R. GARCIA CARCEL, Herejía y sociedad en el siglo XVI. La Inquisición de Valencia, 1530-1609. Barcelona 1980, pp. 89-90, 130-131.

(96).- El 2 de diciembre de 1578 se le otorgó poder como inquisidor de Valencia (AHN, Inq., libro 357, fol. 58r-v).

(97).- Fiscal en la Inquisición de Granada, el 13 de febrero de 1580, fue promovido como inquisidor de Valencia. En 1582 pasó al tribunal de Cuenca (Ibid., 78v-79r).

(98).- Obtuvo título de inquisidor el 4 de julio de 1582. Proveniente de la Inquisición de Cuenca, volvió a dicho tribunal dos años después (Ibid., libro 358, fols. 33v-34r).

(99).- Fue nominado inquisidor el 17 de noviembre de 1584 (Ibid., libro 361, fol. 344r-v).

(100).- Proveniente del tribunal de Galicia, se despachó título de inquisidor el 1 de agosto de 1585 (Ibid., libro 357, fol. 199r-v).

(101).- Se despachó el título de inquisidor el 23 de octubre de 1587. En 1591, pasó al tribunal de Toledo (Ibid., fols. 249v-250r).

Licdo. Pedro Girón (1587) (102)

Doctor Vallecillo (1590) (103)

Licdo. Pedro de Zamora (1591) (104)

Alonso de la Peña (1591)

Licdo. Juan de Gortazar (1591) (105)

Licdo. Felipe de Tassis (1592) (106)

Fiscales

Doctor Jaime Pérez (Fue sustituido en 1578)

Diego Fernández de Heredia (1579-1592) (107)

Licdo. Pedro Rodríguez Caballos (1593-1594) (108)

Pedro Gamarra (1594) (109)

(102).- Inquisidor en la Provincia de León, el 18 de noviembre de 1587 se le dio el título de inquisidor (Ibid., fol. 251r-v).

(103).- Se despachó el título el 1 de septiembre de 1590. Inquisidor de Córdoba, no fue a servir, admitiéndose la excusa que presentó (Ibid., libro 359, fol. 13r).

(104).- Inquisidor de Logroño, fue nombrado el 7 de marzo de 1591, pasando, en octubre del mismo año, a servir en el tribunal de Zaragoza (Ibid., fol. 37r-v).

(105).- Canónigo de la iglesia de Tuy e inquisidor de Galicia, obtuvo el título el 2 de diciembre de 1591 (Ibid., fol. 75r).

(106).- Inquisidor de Barcelona, se despachó el título el 13 de octubre de 1592 (Ibid., fols. 119-120).

(107).- El 26 de febrero de 1579, obtuvo el poder de fiscal. En 1587 fue nombrado inquisidor en el tribunal de Cerdeña, pero no fue a servir, pasando, en 1592, al tribunal de Barcelona (Ibid., libro 357, fols. 62v-63v).

(108).- Obtuvo título de fiscal el 16 de enero de 1593 (Ibid., libro 359, fol. 129r).

(109).- Fue nominado, el 24 de octubre de 1594, para cubrir la plaza de Pedro Rodríguez Caballos, difunto (Ibid., fols. 212v-213r).

VALLADOLID (110)Inquisidores

Licdo.Diego de Valcárcel (1573-1581)
Andrés de Alava (1575-1581)
Pedro de Quiroga (1576-1581)
Licdo.Juan de Arrese (1579-1582)
Tomás de Leciñana (1580-1597)
Juan Vigil de Quiñones 1583-1590)
Pedro de los Llanos (1583)
Alonso de Gaytán (1584-1600)
Iñigo Salcedo de Morales (1590-1599)
Juan Realiego de Ayala de la Vega (1592)

Fiscales

Victor de Salinas (1572-1576)
Prudencio de Armentia (1576-1577)
Gortázar (1580-1582)
Juan Fernández Galeote (1582-1583)
Marcos de Lombera (1583-1590)
Juan Alexandre de Posadas (1590)

ZARAGOZAInquisidores

Doctor Rodrigo de Mendoza (1573-1575) (111)
Licdo.Diego de Ahedo (1573-1577) (112)

(110).- H.PIZARRO LLORENTE, "Las relaciones de patronazgo a través de los inquisidores de Valladolid durante el siglo XVI" Instituciones y élites de poder en la Monarquía hispana durante el siglo XVI. Madrid 1992. Apéndice.

(111).- En julio de 1573, obtuvo poder como inquisidor de Zaragoza, donde permaneció hasta 1575, en que fue nombrado inquisidor de la Armada (AHN, Inq., libro 356, fols. 257v, 270r).

(112).- Inquisidor en el reino de Valencia, en agosto de 1573 fue nominado en el tribunal de Zaragoza. En 1577 pasó a servir en la Inquisición de Sicilia (Ibid., fol. 270r).

- Licdo.Cristobal Roche (1573) (113)
Licdo.Andrés Santos (1575-1578) (114)
Licdo.Francisco de Ribera (1577-1582) (115)
Licdo.Francisco Gasca de Salazar (1577) (116)
Licdo.Juan Martínez de Villaturiel (1579) (117)
Licdo.Molina de Medrano (1584) (118)
Licdo.Juan de Llano de Valdés (1585) (119)
Doctor Antonio Morejón (1587-1591) (120)
Juan Hurtado de Mendoza (1590-1592) (121)
Licdo.Francisco Velarde de la Concha (1591) (122)
Licdo.Pedro de Zamora (1591) (123)
Doctor Juan Moriz de Salazar (1591) (124)
Doctor Pedro de Reyes (1591)

(113).- Su título fue despachado en agosto de 1573 (Ibid.)

(114).- Inquisidor de Valladolid, obtuvo el título el 30 de junio de 1575 (Ibid., libro 357, fol. 9r).

(115).- Proveniente de la Inquisición de Barcelona, fue nombrado el 20 de agosto de 1577 (Ibid., fols. 33v-34r).

(116).- El 25 de octubre de 1577, fue nominado inquisidor de Zaragoza. Prestaba sus servicios en el tribunal de Córdoba (Ibid., fol. 36r).

(117).- Se le otorgó poder de inquisidor el 11 de marzo de 1579 (Ibid., fols. 63v-64r).

(118).- Inquisidor en Córdoba, fue despachado su título el 4 de abril de 1584 (Ibid., libro 361, fol. 236r).

(119).- Obtuvo título de inquisidor el 1 de agosto de 1585 (Ibid., libro 357, fols. 198v-199r).

(120).- Fue nombrado inquisidor el 27 de julio de 1587. Pasó al tribunal de Toledo (Ibid., fols. 245v-146r).

(121).- Maestrescuela y canónigo de la catedral de Cuenca, le fue otorgado título de inquisidor el 27 de julio de 1590 (Ibid., libro 359, fol. 5r-v).

(122).- Inquisidor de Cuenca, fue proveído el 8 de octubre de 1591 (Ibid., fol. 70v).

(123).- Inquisidor de Valencia, obtuvo el título el 8 de octubre de 1591 (Ibid., fol. 70r-v).

(124).- Canónigo de Salamanca, fue nominado el 23 de diciembre de 1591 (Ibid., fol. 78r-v).

Fiscales

- Doctor Juan de Aymar (1572-1578) (125)
Licdo.Miguel de Mendiolaza (1578-1582) (126)
Licdo.Francisco Magdaleno (1582-1585) (127)
Rodrigo de Mendoza y Camaño (1585) (128)
Doctor Francisco Vidal (1586-1591) (129)
Licdo.Diego de Carvajal (1591) (130)
Licdo.Simón de Carranza (1591) (131)
Doctor Jerónimo Buxeda de Leyva (1592-1593) (132)
Licdo.Pedro Mathe (1593) (133)

(125).- Accedió al cargo de fiscal en agosto de 1572. En mayo de 1578 fue promovido como inquisidor al tribunal de Barcelona (Ibid., libro 356, fol. 260r).

(126).- Natural de la villa de Azpeitia, obtuvo poder de fiscal el 6 de septiembre de 1578 (Ibid., libro 357, fol. 53r-v).

(127).- Sustituto de Mendiolaza, le fue despachado título de fiscal el 9 de diciembre de 1582. En 1585, pasó como inquisidor al tribunal de Canarias (Ibid., libro 358, fols. 42v-43r).

(128).- Deán de la catedral de Orense, le fue despachado título el 19 de junio de 1585 para sustituir a Francisco Magdaleno. No fue a servir. (Ibid., libro 357, fol. 195r-v).

(129).- El 29 de marzo de 1586 obtuvo título de fiscal en lugar de Magdaleno (Ibid., fols. 211v-212r).

(130).- sustituyó al difunto Vidal, estando fechado su título el 29 de octubre de 1591 (Ibid., libro 359, fol. 72v).

(131).- Racionero de la iglesia de Toledo, fue nominado para sustituir a Carvajal el 6 de diciembre de 1591 (Ibid., fol. 76r-v).

(132).- Fiscal en el tribunal de Logroño, recibió título el 13 de agosto de 1592 (Ibid., fol. 113r-v).

(133).- Fue nombrado fiscal el 29 de julio de 1593, ocupando la plaza del doctor Leyva (Ibid., fol. 156r-v).

APENDICE III

Cuando Gaspar de Quiroga tomó posesión del arzobispado, el deán y los canónigos que formaban parte del cabildo eran:

DEAN: Diego de Castilla

CANONIGOS:

Francisco Dávila (Arcediano de Toledo)

Pedro González de Mendoza (tesorero)

Miguel de Silva

Jerónimo Manrique

Licdo. Jerónimo Mexia de Gomara

Licenciado Temiño

Doctor Alonso Delgado (maestrescuela)

Rodrigo de Mendoza

Juan Manrique de Lara

Pedro de Carvajal

Luis de Luzón

Ramiro de Guzmán

Juan de la Cerda

Licdo. Diego López de Quemada

Miguel Díaz

Fernando de Ribadeneira

Tomás de Borja

Rodrigo Tenorio

Gaspar de Mendoza

Antonio Zapata

Juan de Guzmán (abad de Santa Leocadia)

Doctor Velázquez

Gaspar Yanes

Esteban Varela

García de Loaysa (arcediano de Guadalajara)

Juan de Barnuevo

Doctor Peralta

Diego de Guzmán

Licenciado Valdivieso

Doctor Barriovero

Pedro Velarde

Rodrigo Davalos

Juan de Mendoza (arcediano de Talavera)

Alonso Niño

Juan Calderón

Luis Davalos

Bernardino de Sotomayor

Licenciado Ibarra

Desde que Gaspar de Quiroga tomó posesión del arzobispado hasta su fallecimiento, los nombramientos que se realizaron fueron los siguientes:

DEAN:

Juan de Mendoza (134)

Pedro de Carvajal (135)

(134).- Tras la muerte de Diego de Castilla en 1584, fue nominado provisionalmente por espacio de dos meses para ocupar la dignidad de deán, pasando, posteriormente, en enero de 1585, a recibir nombramiento (ACT, Actas Capitulares, Vol.18, fols.88v, 105v y 130r).

(135).- El 26 de enero de 1593 presentó al cabildo las bulas y letras apostólicas por las que se le nombraba en el deanato vaco por la muerte del Cardenal Juan de Mendoza (Ibid., Vol.21, fols. 10v-11v).

CANONIGOS ORDINARIOS:

Antonio Manrique (136)

Bernardino de Mendoza (137)

Juan Calderón (138)

Juan de Alarcón (139)

Francisco García de Valloboso (140)

Pedro de Quiroga (141)

Juan de Obregón (142)

Antonio de Cobarrubias (143)

(136).- Presentó al cabildo la provisión de Gaspar de Quiroga el 2 de abril de 1578, pasando a cubrir la plaza vacante por renunciación que en manos del arzobispo hizo Juan de Guzmán. Tomó posesión el 20 de mayo del mismo año (Ibid. Vol.16, fols.183v-184r y 201v).

(137).- Presentó al consistorio la provisión papal el 16 de mayo de 1578. Natural de Mondejar, era clérigo de la diócesis de Toledo. Ocupa la canonjía y prebenda vaca por muerte de Diego de Guzmán, tomando la posesión el 7 de noviembre de dicho año. El 9 de septiembre fue provisto capiscol por resignación "ex causa permutacionis" hecha por Pedro Velarde (Ibid., fols.200r, 250r y 385r).

(138).- el 13 de mayo de 1579 hizo presentación al capítulo de la provisión realizada por Gaspar de Quiroga en una canonjía de penitenciario por la promoción de Jerónimo Manrique, su último poseedor, al obispado de Salamanca (Ibid., fols.285v-286r).

(139).- Tomó posesión de la canonjía vaca por la muerte del doctor Peralta el 18 de agosto de 1579 (Ibid., fols.301v-302r).

(140).- Hizo presentación al cabildo de la provisión para ocupar la canonjía que tuvo Miguel de Silva el 8 de octubre de 1579 (Ibid., fol.311r).

(141).- Sobrino del arzobispo, fue nombrado canónigo y tesorero en sustitución de Pedro González de Mendoza, presentando al cabildo la provisión realizada por su tío el 16 de noviembre de 1579. Era deán de la iglesia de leon e inquisidor de Valladolid. Tomó posesión de sus cargos el 23 de diciembre de dicho año, prestando el juramento el 28 de septiembre de 1580. El 23 de junio de 1584 fue promovido por su tío a obrero de la iglesia de Toledo, realizando el correspondiente juramento el 30 del mismo mes. Falleció unos días después.

(142).- Presentó al cabildo la provisión hecha por Gaspar de Quiroga el 14 de diciembre de 1579. Era vicario general de la ciudad y arzobispado de Toledo. Ocupó la vacante producida por muerte de Ramiro de Guzmán, tomando posesión el 10 de febrero de 1580 (Ibid., fols.334r-v).

(143).- El 9 de septiembre de 1580 hizo presentación de las bulas papales para ocupar la maestrescolía y canonjía vaca por promoción de Alonso Delgado al obispado de Astorga. Perteneciente al Consejo Real, tomó posesión el 6 de octubre de 1580 (Ibid., fols.389v-390r, 395r-396r).

Pedro de Ayala (144)

Gabriel Suárez de Toledo (145)

Juan Bautista Pérez (146)

Gaspar de Quiroga (147)

Juan de Llano de Valdés (148)

Doctor Juan de Aramayona (149)

Licdo. Andrés Fernández (150)

Martín Alderete (151)

(144).- Efectuó la presentación al consistorio de la provisión realizada por el arzobispo el 24 de septiembre de 1580 para ocupar la plaza vacante por muerte de Gaspar de Mendoza. Era vicario del Coro de la iglesia de Toledo. Tomó posesión dos días después (Ibid., fols.392r-393r).

(145).- Presentó al cabildo la provisión hecha por Gaspar de Quiroga el 27 de septiembre de 1580 para ocupar la vacante producida por la resignación realizada por Pedro Velarde. Tomó posesión el 10 de noviembre (Ibid., fols.393v y 407r-v).

(146).- El 7 de febrero de 1581 notificó al consistorio la provisión recibida por el arzobispo para cubrir la vacante producida por la muerte de Esteban de Varela. Natural de Valencia, precisó la licencia del rey a causa de no ser oriundo del reino, tomando la posesión el día 22 de abril. El 13 de febrero de 1585 Gaspar de Quiroga le otorgó el título de obrero de la catedral (Ibid., Vol.17, fols.10r-v, 26r-v; Ibid., Vol.18, fol.115v).

(147).- Sobrino del arzobispo, presentó al cabildo la provisión realizada por su tío el 26 de junio de 1581 para cubrir la vacante producida por la muerte de Juan de Barnuevo, tomando la posesión el 19 de julio (Ibid., Vol.17, fols. 40v-41v, 47r-48r).

(148).- Presentó al consistorio las bulas apostólicas que le otorgaban la canonjía el 27 de octubre de 1581. Perteneciente al Consejo de Inquisición, ocupó la prebenda resignada por el licenciado Temiño, también miembro de la Suprema, que había sido electo obispo de Avila. Tomó posesión de la misma el 19 de enero de 1582 (Ibid., fols.69v, 70v-73v, 76r y 88r).

(149).- Hizo presentación al cabildo de la provisión y colación hecha por Gaspar de Quiroga el 2 de junio de 1582 para ocupar la canonjía y prebenda vaca por muerte de Juan de Llano de Valdés. Era inquisidor de Navarra. El 3 de octubre de 1583 el capítulo le señaló sepultura tras procurarse su fallecimiento (Ibid., fols.120r-121r, 132r-133r y 227v).

(150).-El 3 de marzo de 1584 notificó al cabildo la provisión y colación realizada por el arzobispo para ocupar la vacante producida por muerte del doctor Aramayona. Era vicario general del arzobispado de Toledo. Tomó posesión el día 27 de dicho mes (Ibid., Vol.18, fols.20r-21r, 27r-28r).

(151).- Presentó al consistorio la provisión y colación hecha por Gaspar de Quiroga el 10 de enero de 1585 para cubrir la vacante producida por la muerte de Pedro de Quiroga, tomando la posesión el 7 de marzo de dicho año (Ibid., fols 106r-v, 122v-123r).

Licdo.Francisco de Monsalve (152)
Antonio Venegas de Figueroa (153)
García de Mendoza y de la Cerda (154)
Juan de Zúñiga (155)
Juan de Quiroga (156)
Gregorio Bravo de Sotomayor (157)
Alonso Serrano (158)
Ginés de Soto (159)

(152).- Presentó al cabildo la provisión y colación realizada por el arzobispo el 5 de mayo de 1585, tomando posesión el día 10 de julio. Era deán de la iglesia de León (Ibid., fols.143r-v y 167r-v).

(153).- Al producirse la muerte del licenciado Ibarra, el arzobispo realizó la provisión de la canonjía, presentada al capítulo el 13 de septiembre de 1585, en favor del capiscol Bernardino de Mendoza, quien tomó posesión de la misma el día 16 de dicho mes. Sin embargo, el 28 del mismo hizo resignación de ella en manos de Gaspar de Quiroga, que la proveyó en Antonio Venegas de Figueroa, quien efectuó el acto de posesión del 17 de enero de 1586 (Ibid., fols. 179v-180v, 182v-183v, 209r-v).

(154).- El 3 de abril de 1587 presentó al cabildo la provisión y colación realizada por Quiroga como capiscol y canónigo en las vacantes provocadas por la muerte de Bernardino de Mendoza (Ibid., Vol.19, fols. 18v-19r).

(155).- Perteneciente al Consejo de Inquisición, el 31 de octubre de 1587 presentó al consistorio las bulas y letras apostólicas que le proveían como canónigo, tomando posesión el 17 de diciembre. El 4 de enero de 1588 se ordenó al cabildo que le tuviesen por presente como al resto de los canónigos pertenecientes a la Suprema (Ibid., fols. 68v-69r, 74r-75r, 77v).

(156).- El 18 de enero de 1588, presentó al consistorio la provisión y colación otorgada por el arzobispo para ocupar la canonjía vacante por la muerte de Luis Dávalos, de la que tomó posesión el 19 de febrero (Ibid., fols. 81r, 82r).

(157).- Perteneciente al Consejo Real y auditor del Tribunal de la Sacra Rota, hizo presentación al cabildo, el 7 de abril de 1588, de la provisión y colación hecha por el arzobispo para cubrir el canonicato y prebenda vaca por omisión y privación de don García de Mendoza. Tomó posesión el 23 de junio (Ibid., fols. 100r, 116v-117r).

(158).- El 28 de septiembre de 1588 hizo presentación al capítulo de la provisión y colación realizada por Quiroga, por la que quedaba proveído en la canonjía y prebenda vaca por el fallecimiento del doctor Obregón. Tomó posesión el 31 de octubre (Ibid., fols. 137r-v, 144r-v).

(159).- Clérigo presbítero del arzobispado de Toledo, presentó al cabildo, el 22 de septiembre de 1589, las bulas y letras apostólicas de coadjutoría y regreso del papa Pío IV, fechadas el 5 de septiembre de 1560, por las que quedaba proveído en la canonjía que poseía Rodrigo de Mendoza con título de coadjutor con futura sucesión. Tomó posesión el 13 de noviembre (Ibid., fols. 225v-226r, 241r-v).

Alvaro de Monsalve (160)
Francisco Morejón (161)
Miguel de Salazar (162)
Gabriel Ortiz de Sotomayor (163)
Francisco Ruiz de Velasco (164)
Francisco de Espinosa (165)
Antonio Cordones (166)
Jerónimo Pacheco (167)

(160).- El 22 de septiembre de 1589 hizo presentación al consistorio de la provisión y colación realizada por el arzobispo, por la que le proveía en la canonjía vaca por muerte de Juan Manrique, tomando la posesión el 11 de noviembre (Ibid., fols. 226r-v, 240v-241r).

(161).- Ocupó la canonjía vacante por el fallecimiento de Pedro de Ayala, presentando al cabildo la provisión y colación otorgada por Quiroga el 8 de octubre de 1589. Tomó la posesión el 13 de noviembre (Ibid., fols. 231r-v, 242r-v). También ostentó el cargo de vicario del Coro que había poseído Pedro de Ayala (Ibid., fols. 253r, 254r-v; Ibid., Vol.20, fol. 1r).

(162).- El 29 de marzo de 1590 presentó al consistorio unas bulas y letras apostólicas por las que era proveído coadjutor "ad futuram successionem" en la canonjía que poseía Miguel Díaz (Ibid., fols. 22r-v, 24r). Por motivo del pleito que se mantuvo sobre dicha provisión, tomó posesión el 28 de febrero de 1592, sucediéndole en el cargo el otro litigante, Alonso Gómez (Ibid., fols. 206v, 207r, 217v-218r).

(163).- Clérigo de Toledo, el 19 de diciembre de 1590 hizo presentación al cabildo de la provisión y colación hecha por Quiroga, por la que era proveído en la canonjía vaca por muerte de Gregorio Bravo. Tomó posesión el abril de 1591 (Ibid., fols. 96r, 126v-127v).

(164).- En enero de 1591 hizo presentación al consistorio de la provisión y colación realizada por el arzobispo, por la que era proveído para la canonjía vacante por muerte de Juan de la Cerda. Tomó posesión el 8 de octubre (Ibid., fols. 98v-99r, 179r).

(165).- El 18 de mayo de 1591 presentó al capítulo la provisión y colación hecha por el arzobispo, por la que era proveído en la canonjía y prebenda de la penitencia vaca por el fallecimiento del doctor Juan Calderón. Tomó posesión el 1 de junio (Ibid., fols. 139v, 144v-145r).

(166).- Quiroga escuchó la petición que el cabildo realizó para que Antonio Cordones fuese proveído en la canonjía vaca por la muerte de su tío, el tesorero Francisco García de Valloboso. El 15 de julio de 1591, presentaba la provisión y colación realizada por el prelado, tomándo posesión el 30 de dicho mes. Así mismo, se exoneró de su oficio de contador (Ibid., fols. 153v-154r, 156r-v, 159r, 161r-v).

(167).- El 7 de enero de 1592 hizo presentación al cabildo de la colación y provisión realizada por el prelado para ocupar la canonjía vacante por muerte del licenciado Juan Bautista Vélez (Ibid., fol. 196r).

Gabriel Pacheco (168)

Francisco de Arganda (169)

Jerónimo de Miranda Vivero (170)

Pedro Deza (171)

Antonio Canseco de Quiñones (172)

Canonigos doctorales

Doctor Alonso Hondegardo (173)

Diego de Virviesca (174)

(168).- Hermano del marqués de Villena, el 12 de febrero de 1592, presentó al consistorio la colación hecha por Quiroga para ocupar la canonjía vaca por el fallecimiento del cardenal Juan de Mendoza. Tomó posesión el 20 de abril (ibid., fols. 210r, 230v-231r). El 14 de julio de 1593, notificó al capítulo las bulas y letras apostólicas por las que era proveído en el canonicato y prebenda vaca por la muerte del licenciado Bautista Vélez, que había sido otorgado por Quiroga a Jerónimo Pacheco, que resignó el mismo en manos del pontífice. Tomó posesión al día siguiente (Ibid., Vol.21, fols. 54r-55r). Así mismo, el 15 de diciembre, hizo presentación al cabildo de la provisión realizada por Gaspar de Quiroga, por la que le proveía en la canonjía y prebenda vacante por el fallecimiento del licenciado Andrés Hernández. Tomó posesión el día 30 de dicho mes (Ibid., fol. 99v, 105r-v). El 15 de marzo de 1594, presentó al cabildo el nombramiento de capiscol realizado por el arzobispo, cargo que se hallaba vacante por la promoción de Gaspar de Quiroga al arcedianato de Talavera (Ibid., fol. 122r).

(169).- Inquisidor en el tribunal de Cuenca, el 13 de abril de 1592, notificó al capítulo las bulas apostólicas que le proveían en el canonicato y prebenda vaca por resignación hecha en manos del pontífice por Juan Bautista Pérez, electo obispo de Segorve. Tomó posesión el 24 de septiembre (Ibid., Vol.20, fols. 227r-v, 267r-268r).

(170).- El 15 de julio de 1593, hizo presentación al consistorio de las bulas y letras apostólicas por las que era proveído en el canonicato y prebenda que vacaron por la muerte de Juan de Mendoza. Tomó posesión el 20 de diciembre (Ibid., Vol.21, fols. 55r-v, 99v-103r).

(171).- Sobrino del Cardenal Deza, el 21 de febrero de 1594 puso en conocimiento del cabildo la provisión realizada por Gaspar de Quiroga para que ocupase el canonicato y prebenda vaca por el fallecimiento de Antonio Manrique. Tomó posesión dos días después (Ibid., fol. 117v).

(172).- El 27 de junio de 1594, presentó al capítulo la provisión y colación hecha por el arzobispo, por la que le proveía en la canonjía vaca por promoción de Gabriel Pacheco a otra canonjía de esta iglesia. Tomó posesión el 14 de noviembre (Ibid., fols. 144r-v, 176v).

(173).- Ocupa la canonjía doctoral vaca por la muerte del licenciado Valdivieso. Tomó posesión de la misma el 28 de enero de 1578 (Ibid., Vol.16, fols.169r-v)

(174).- Habiendo resignado el día anterior en manos de Gaspar de Quiroga su capellanía de los Reyes Nuevos, el 2 de marzo de 1581 fue elegido para ocupar la plaza de Diego López de Quemada, fallecido, tomando la posesión el 4 de abril del mismo año (Ibid., Vol.17, fols.15r-v y 23r-v).

Doctor Salvador Navarro (175)

Alonso Anaya de Pereira (176)

Juan Pérez de Valenzuela (177)

Canonigos magistrales

Alonso de Mendoza (178)

Gabriel de Cárdenas (179)

Matías Rodríguez (180)

Pedro de Castro (181)

(175).- Tras la muerte del Doctor Hondegardo, comunicada al cabildo el 3 de enero de 1583, se procedió a su elección el día 21 de dicho mes, tomando posesión el 22 de agosto (Ibid., fols.165v, 179v-180v y 218r-v).

(176).- El 22 de marzo de 1583 fue realizada por Gaspar de Quiroga la provisión del canonicato y prebenda doctoral vaca por muerte de Fernando de Ribadeneira. Tomó posesión de la misma el 25 de mayo (Ibid., fols.180v y 196v).

(177).- El 12 de noviembre de 1594, fue elegido para ocupar la canonjía doctoral vacante por la muerte del doctor Navarro (Ibid., Vol.21, fols. 174v-176r).

(178).- Al producirse la muerte del doctor Barriovero, comunicada al cabildo el 4 de diciembre de 1577, fue elegido para cubrir su plaza en febrero de 1578. Era chartre de Alcalá, y tomó la posesión el 23 de julio de dicho año. El 17 de septiembre de 1580 presentó al consistorio la provisión hecha por Gaspar de Quiroga para la abadía de San Vicente de la Sierra, tras la resignación hecha en manos del arzobispo por Andrés Pacheco. Tomó posesión dos días después (Ibid., Vol.16, fols.145r, 173r-174r, 219r y 390r-391v).

(179).- Vacante la canonjía magistral de Sagrada Escritura por la promoción del doctor Velázquez al obispado de Osma, fue elegido para ocupar esta plaza el 23 de febrero de 1579, tomando la posesión el 6 de abril (Ibid., fols. 251r, 267r-269r, 279r-v).

(180).- El 29 de febrero de 1592, fue elegido para ocupar la canonjía vacante por la muerte de Gabriel de Cárdenas (Ibid., Vol.20, fols. 218v-219v). No tomó posesión hasta el 13 de junio, existiendo algunas dificultades, porque el prelado pretendía tener derecho a su provisión (Ibid., fols. 237r-238r, 244r-v).

(181).- Canónigo magistral de Avila, el 12 de septiembre de 1594, fue elegido para ocupar la canonjía vaca por la muerte del doctor Matías Rodríguez. Tomó posesión el 20 de octubre (Ibid., Vol.21, 157v-158v, 158v-169r).

CANONIGOS EXTRAVAGANTES:

Lope Sánchez (182)

Busto de Manzanos (183)

Mancio de Villafaña (184)

Juan Ortiz de la Torre (185)

Alonso del Aguila (186)

Pedro de Illescas (187)

Cristobal de Olmos (188)

Juan Sánchez (189)

Gregorio López (190)

(182).- El 7 de julio de 1578 presentó al cabildo la provisión realizada por el arzobispo para cubrir la vacante producida por muerte de Benito Villalpando, tomando la posesión el día 21 del mismo mes (Ibid., Vol.16, fols., 221v, 213r y 217v).

(183).- Clérigo de Toledo, realizó la presentación de la provisión arzobispal el 7 de septiembre de 1579 (Ibid., fol.305r).

(184).- Clérigo cura de Santorcaz, presentó la provisión realizada por Gaspar de Quiroga el 11 de abril de 1580 (Ibid., fols.361v-363r).

(185).- Presentó al cabildo la provisión arzobispal para cubrir la vacante producida por muerte de Alonsoo Pérez el 5 de noviembre de 1580 (Ibid., fol.404v).

(186).- Tras la resignación realizada por Gaspar Xuárez, dicho clérigo hizo presentación en al consistorio de la provisión realizada por Gaspar de Quiroga el 18 de febrero de 1581 (Ibid., Vol.17, fols.12v y 13v).

(187).- Presentó al cabildo la provisión y colación realizada por el arzobispo el 13 de julio de 1582, por la que se le nombraba para cubrir la plaza vacante producida por la muerte de Juan de Villarreal (Ibid., fols. 129r y 130r).

(188).- El 2 de junio de 1583 notificó al cabildo la provisión arzobispal para cubrir la vacante producida por la resignación hecha por Damián de Torres. Tomó posesión cuatro días después (Ibid., fols. 199r y 200v).

(189).- Dicho clérigo notificó al capítulo la provisión y colación realizada por Gaspar de Quiroga el 30 de agosto de 1583 para cubrir la plaza vaca por la resignación efectuada por el licenciado Meneses de Avendaño (Ibid., fols. 220r y 235v).

(190).- El 17 de mayo de 1586 presentó al cabildo el nombramiento realizado por el pontífice para ocupar la vacante producida por la resignación que en manos del papa había hecho Juan Gómez (Ibid., Vol.18, fols.243v y 245v-246r).

Francisco de Venavente (191)

Juan de Madrid (192)

Pedro de Villarreal (193)

Francisco Mexía (194)

Domingo de Alvear (195)

Alonso Muñoz (196)

Juan Corral (197)

RACIONEROS:

Antonio Fernández (198)

Alonso del Campo (199)

(191).- El 22 de septiembre de 1587 presentó al cabildo la provisión y colación hecha por Quiroga para que ocupase la canonjía extravagante vaca por muerte de Jerónimo de Barreda (Ibid., Vol.19, fols.59v-60v).

(192).- Hizo presentación al consistorio de la colación y provisión realizada por el arzobispo el 20 de diciembre de 1591, por la que le proveía en la vacante producida por el fallecimiento de Juan de Ortiz. Tomó posesión el 10 de enero de 1592 (Ibid., Vol.20, fols. 194v, 198r-v).

(193).- El 6 de noviembre de 1592, notificó al cabildo la provisión y colación realizada por Quiroga, por la que era proveído en la canonjía extravagante vaca por muerte del bachiller Eugenio López. Tomó posesión el día 9 de dicho mes (Ibid., fols. 276r, 277r).

(194).- Presentó al capítulo la provisión y colación efectuada por el arzobispo el 29 de mayo de 1593, por la que era proveído en la canonjía extravagante vaca por resignación simple que en manos del prelado hizo Lope Sánchez Gallo, tomando posesión el 1 de junio (Ibid., Vol.21, fols. 42r-43r).

(195).- El 25 de junio de 1593, hizo presentación al consistorio de la colación y provisión hecha por Quiroga, por la que era proveído en el canonicato extravagante que había vacado por el fallecimiento de Melchor de Santa Cruz. Tomó posesión el 9 de julio (Ibid., fols. 50v, 52r-v).

(196).- Notificó al capítulo la provisión realizada por el arzobispo el 17 de diciembre de 1593, por la que era proveído en el canonicato extravagante vacante por la muerte de Pedro de Acebedo. Tomó posesión dos días después (Ibid., fols. 100r, 103v, 104v).

(197).- El 27 de julio de 1594 hizo presentación al cabildo de la colación y provisión realizada por Quiroga, por la que le proveía en la canonjía extravagante vaca por la promoción de Alonso Muñoz a una capellanía del Coro. Tomó posesión el 29 de julio (Ibid., fol. 148v).

(198).- Natural de Astorga, el 20 de diciembre de 1577 se le dió posesión de la ración vaca por muerte de Melchor de la Fuente (Ibid., Vol.16, fol.149v).

(199).- El racionero Alonso del Campo fue nombrado secretario del cabildo el 4 de marzo de 1578 (Ibid., fol.178v).

Francisco López (200)

Juan de Guimaranes (201)

Juan Muñoz (202)

Bachiller Nicolás Galindo (203)

Antonio Cordones (204)

Pedro Chacón (205)

Melchor Sánchez (206)

Lorenzo Serrano (207)

Licdo.Alonso Serrano (208)

Jerónimo de Peraza (209)

(200).- Tiple natural de Madrid, fue presentado por el arzobispo el 2 de abril de 1578 para ocupar la ración vaca por muerte de Lucas Sánchez. Tomó posesión de la misma el día 16 de dicho mes (Ibid., fols.182v-183r y 190v).

(201) .- Teniendo posesión de la ración, el 26 de mayo de 1578 solicitó al cabildo que se le tuviese por presente en dicha iglesia aduciendo que había entrado al servicio del arzobispo. Su petición fue denegada (Ibid., fols. 202v-203r).

(202).- Presentado por el pontífice el 17 de junio de 1578 para ocupar la ración vaca por muerte de Cristobal Collantes, obtuvo el nombramiento el 20 de marzo de 1579 (Ibid., fols.208v y 372v).

(203).- Se le otorgó la ración sujeta al oficio de capiscol el 4 de julio de 1578 (Ibid., fol.211r). El 26 de noviembre de 1585 recibió provisión de una ración, vaca por muerte de Juan de Rincón, que estaba unida al oficio de sochantre (Ibid., Vol.18, fols.196v-197r).

(204).- Vecino de Tembleque, fue presentado por el pontífice el 18 de abril de 1579 para ocupar la ración vaca por muerte de Diego Alonso Silicio. Primeramente, el papa había hecho merced de la misma a Francisco García de Valonoso, tío de Antonio Cordones, que renunció en favor de su sobrino (Ibid., Vol.16, fol.281v).

(205).- El 26 de junio de 1579 hizo presentación al cabildo de la provisión de la ración concedida por el pontífice Gregorio XIII (Ibid., fol.292v).

(206).- Clérigo natural de Tarancón, diócesis de Cuenca, fue presentado al cargo de racionero por Gaspar de Quiroga el 27 de agosto de 1579 (Ibid., fol.304r).

(207).- Fue presentado por el arzobispo para ocupar la ración vaca por muerte de Tmás Pinel el 10 de noviembre de 1579 (Ibid., fol.320r).

(208).- Perteneciente al Consejo de la Dignidad, fue provisto por Gaspar de Quiroga el 23 de noviembre de 1579 para cubrir la ración vaca por muerte de Hernando de Lunar (Ibid., fol.328r).

(209).- El 27 de noviembre de 1579 se le otorgó una ración de órgano, de la que tomó posesión el 21 de marzo de 1580 (Ibid., fols.330r y 357v).

Bernardino de Barrionuevo (210)

Gabriel Rosete Villacampa (211)

Juan de Amocibar (212)

Dionisio Ruiz de la Peña (213)

Ginés de Boluda (214)

Agustín de Mena (215)

Lemes de Gomara (216)

Pedro de Río (217)

Mateo Cabello (218)

Jorge de Santamaría (219)

Jerónimo Serrano (220)

(210).- El 10 de diciembre de 1579 recibió nombramiento del arzobispo para ocupar la ración vacante por muerte de Alonso del Campo, tomando la posesión el 18 de enero de 1580 (Ibid., fols.331v y 345r-v).

(211).- La provisión como racionero aparece fechada el 7 de marzo de 1580 (Ibid., fol.356r).

(212).- Tomó posesión de la ración el 11 de abril de 1580 (Ibid., fols.361r-v).

(213).- Familiar de Gaspar de Quiroga, obtuvo el favor arzobispal para ocupar la ración vaca por muerte de Francisco Laredo el 3 de octubre de 1580 (Ibid., fol.394v).

(214).- El 7 de diciembre de 1580 obtuvo la provisión de Gaspar de Quiroga para ocupar el oficio de maestro mayor de capilla y de una ración vaca por muerte de Andrés de Torrentes (Ibid., fols.412v y 415r).

(215).- Contralto, obtuvo la provisión arzobispal para cubrir la vacante producida por muerte de Francisco Valdivieso el 23 de diciembre de 1580 (Ibid., fol.415v; Ibid., Vol.17, fols.3r-v y 17r).

(216).- Tomó posesión de la ración el 23 de diciembre de 1580 (Ibid., Vol.16, fol.415v).

(217).- El 5 de enero de 1581 fue presentado por Gaspar de Quiroga para ocupar la ración vaca por muerte de Joaquín de Aguilera, tomando posesión de la misma el 14 de febrero (Ibid., Vol.17, fols.3v-4r y 11r-v).

(218).- Tomó posesión de la ración el 25 de enero de 1581 (Ibid., fols.7r-v)

(219).- El 13 de abril de 1581 fue presentado por el arzobispo para ocupar la ración vacante por la resignación realizada por Lorenzo Serrano. El cabildo cometió a Rodrigo Dávalos que agradeciese en nombre del mismo al prelado esta merced (Ibid., fol.23v).

(220).- El 14 de agosto de 1581 presentó al consistorio las bulas apostólicas por las que era proveído en la ración vaca por la resignación efectuada por el licenciado Serrano. Tomó posesión de la misma el 5 de septiembre (Ibid., fols.53r y 58v).

Gómez de Mendoza (221)
Francisco de Tapia (222)
Alonso Saez de Carvajal (223)
Andrés de Valdivieso (224)
Francisco Crespo (225)
Francisco de Guzmán (226)
Bernardino Pérez (227)
Licdo.Francisco Lezcano (228)
Doctor Jerónimo Buxeda de Leyva (229)
Martín de San Pedro (230)

(221).- Hizo presentación al cabildo de las bulas apostólicas por las que era proveído en una ración el 19 de agosto de 1581, tomando la posesión el 27 de octubre (Ibid., fols.69v-70r).

(222).- El 7 de mayo de 1582 presentó al cabildo la provisión realizada por Gaspar de Quiroga para ocupar la vacante producida por la resignación hecha por el licenciado Dionisio Ruiz de la Peña. Tomó posesión el día 26 del mismo mes (Ibid., fols.110v, 112r, 116v-117r).

(223).- El 26 de enero de 1583 notificó al capítulo la provisión arzobispal para cubrir la ración vaca por muerte de Pedro Gaytán (Ibid., fols.170r-v, 189v-190r).

(224).- El 18 de febrero de 1583 presentó las bulas apostólicas por las que era proveído en la ración vaca por resignación hecha en manos del papa por Juan de Medina, tomando la posesión el 31 de marzo (Ibid., fols.174r-v y 183v).

(225).- El 3 de septiembre de 1583 hizo presentación de las bulas apostólicas que le proveían en la ración de la que hizo resignación Julian Crespo en manos del papa. Tomó posesión el día 19 de dicho mes (Ibid., fols.221v, 223v-224r).

(226).- El 4 de agosto de 1584 realizó la presentación al cabildo de la provisión arzobispal para ocupar la ración vacante por la muerte del maestro Damian Cedillo (Ibid., Vol.18, fols.64v-65r y 75r-v).

(227).- El 4 de noviembre de 1585 notificó al cabildo la provisión realizada por el pontífice para ocupar la ración vaca por la resignación hecha por Martín Pérez en manos del papa. Tomó posesión el día 19 del mismo mes (Ibid., fols.190v-191r y 194v).

(228).- El 6 de noviembre de 1585 presentó la provisión realizada por Gaspar de Quiroga para cubrir la ración vaca por la muerte de Andrés de Valdivieso (Ibid., fol.191v).

(229).- Hizo presentación al cabildo de la provisión hecha por Gaspar de Quiroga el 20 de diciembre de 1585. Pasó a ocupar la vacante producida por la resignación realizada por Bernardino de Barnuevo "causa permutationis" por la tesorería de la iglesia de Soria, diócesis de Osma. Tomó la posesión el 4 de marzo de 1586 (Ibid., fols.201r, 220v-221r).

(230).- El 7 de abril de 1586 notificó al consistorio la provisión arzobispal para ocupar la ración vaca por muerte de Juan de Guimaranes (Ibid., fols.227r, 228r y 230v).

Gonzalo Martínez (231)
Simón de Carranza (232)
Gaspar Martínez (233)
Martín de Herrera (234)
Esteban Primo (235)
Gabriel de Ocampo (236)
Baltasar de Avilés (237)
Juan de Gaa Aliende (238)

(231).- El cabildo le proveyó en el oficio de socapiscol y la ración unida al mismo vacante por la promoción de Nicolás Galindo el 7 de mayo de 1586. Fue además sochantre (Ibid., fols. 237v y 245v).

(232).- El 31 de enero de 1587 se presentó la provisión y colación realizada por Quiroga para la ración vaca por la muerte de Cristobal de Verrío al licenciado Simón de Carranza, de la diócesis de Calahorra y fiscal del tribunal inquisitorial de Zaragoza. Tomó posesión el 21 de marzo (Ibid., Vol. 19, fols. 8r-9r, 17r-v).

(233).- Clérigo natural del reino de Valencia, el 4 de marzo de 1587, presentó al cabildo la provisión y colación realizada por el arzobispo. Cubrió la vacante producida por la muerte del licenciado Francisco Lezcano. Tomó posesión el 16 de abril (Ibid., fols. 13v-14r, 23v-24r, 25v).

(234).- El 8 de abril de 1587 se informó al consistorio de la provisión y colación realizada por Quiroga. Ocupó la plaza del fallecido Alonso Sánchez, de la que tomó posesión dos días después (Ibid., fols. 20r, 21v-22r).

(235).- Clérigo de la diócesis de Palencia, ocupó la ración vaca por muerte de Francisco Correas. El 6 de octubre de 1587, presentó al cabildo la provisión y colación hecha por Quiroga, tomando posesión el 3 de noviembre (Ibid., fols. 63v, 64r-v, 68v). Poco después, hizo resignación de dicha ración en manos del arzobispo, a la que volvió a acceder por la provisión que nuevamente hizo Quiroga, que fue presentada al consistorio el 15 de marzo de 1589, tomando posesión al día siguiente (Ibid., fols. 175v, 177r-v). Unos meses más tarde, volvió a hacer resignación de la misma en manos del papa, obteniendo el nombramiento para ocupar otra vacante el 5 de octubre de 1589, por la provisión y colación que de nuevo le otorgó Quiroga (Ibid., fols. 228r, 229v-230r).

(236).- Por resignación que Martín de Herrera hizo en manos del arzobispo, este proveyó la vacante en Gabriel de Ocampo, que presentó al consistorio la provisión y colación el 11 de enero de 1588, tomando posesión el 26 de febrero (Ibid., fols. 79r, 84v, 91v-92r).

(237).- El 10 de febrero de 1588 notificó al cabildo las letras apostólicas por las que se le nombraba para ocupar la ración que poseía Juan López de Aranda, que vacó "causa permutationis" de ciertos préstamos en le obispado de Pamplona. Tomó sesión el 11 de abril (Ibid., fols. 87r-v, 103v-104r).

(238).- El 18 de julio de 1588 hizo presentación al consistorio de las bulas y letras apostólicas que le proveían en la ración vaca por resignación hecha en manos del papa por Juan Muñoz. Tomó posesión el 3 de agosto (Ibid., fols. 120r, 126r-v).

Martín de Tejada (239)
Antonio de Tavares (240)
Juan Ruiz de Hamusco (241)
Alonso de Marinas (242)
Luis Primo (243)
Juan Alonso (244)
Hernando Segura (245)
Marcelo Segura
Andrés García (246)

(239).- Racionero de Calahorra, el 27 de julio de 1588, obtuvo la provisión del cabildo para cubrir la vacante producida por la dejación realizada por Martín de Herrera (Ibid., fols. 124v-125r).

(240).- Clérigo de la diócesis de Palencia, el 9 de noviembre de 1588, presentó al consistorio las bulas y letras apostólicas para ocupar la ración vaca por resignación realizada por Dionisio Ruiz de la Peña en manos del pontífice. Tomó posesión el 21 de enero de 1589 (Ibid., fols. 146r, 148r, 160v-161r).

(241).- Clérigo, el 18 de febrero de 1589, hizo presentación al consistorio de las bulas y letras apostólicas por las que quedaba proveído en la ración que poseía Gabriel de Ocampo, vaca "causa permutationis" a un préstamo de Santa María de la Varga y otro en San Juan de Uceda, ambos en la diócesis de Toledo. Tomó posesión el 22 de marzo (Ibid., fols. 167v, 169r, 181v).

(242).- Clérigo, el 3 de julio de 1589, presentó al cabildo la provisión y colación hecha por el arzobispo, por la que le proveía en la ración vaca por muerte de Francisco Crespo. Tomó posesión el 26 de agosto (Ibid., fols. 207v, 219v, 220r).

(243).- Clérigo de la diócesis de Palencia, el 25 de septiembre de 1589 notificó al consistorio las bulas y letras apostólicas por las que era provisto en la ración vaca por la resignación hecha por Esteban Primo en manos del papa. Tomó posesión el 27 de octubre (Ibid., fols. 227v-228v, 235v-236r).

(244).- El 31 de enero de 1590 presentó al cabildo la provisión y colación hecha por Quiroga, por la que le proveía en la ración vaca por la muerte de Luis Niño. Tomó posesión el 10 de febrero (Ibid., Vol.20, fols. 7v, 10v-11r).

(245).- Hernando y Marcelo Segura fueron proveídos por el consistorio en dos raciones anexas el 28 de febrero de 1590, que se hallaban vacantes por los fallecimientos de Miguel de Recalde y Hernando Navarro. Estas designaciones fueron posteriormente ratificadas por las provisiones y colaciones hechas por Quiroga. Tomaron posesión el 17 de abril (Ibid., fols. 15r-16r, 17r-18r, 35v-38v).

(246).- Presentó al cabildo la provisión y colación realizada por el arzobispo el 23 de noviembre de 1590, para ocupar la ración vaca por muerte de Juan de Horozco. Tomó posesión el 14 de diciembre (Ibid., fols. 89v, 94r-v).

Miguel González (247)

Andrés Guio de Llanos (248)

Andrés Mendo (249)

Sebastián Mudarra (250)

Juan Rodríguez (251)

Juan Martínez (252)

Luis Honguero (253)

Francisco de Quiroga (254)

Francisco Ortega (255)

(247).- Clérigo presbítero, era natural de Siete Iglesias. El 23 de noviembre de 1590, presentó al capítulo la provisión y colación hecha por Quiroga, por la que le proveía en la ración vaca por muerte de Alonso de Carvajal. Tomó posesión el 17 de diciembre (Ibid., fols. 90r, 95v, 97r-v).

(248).- Clérigo vecino de Toledo, el 27 de diciembre de 1590, hizo presentación al consistorio de las bulas y letras apostólicas por las que era nombrado racionero en la vacante producida por la muerte de Pedro Ortiz. Tomó posesión el 30 de enero de 1591 (Ibid., fols. 98r, 105v-106r).

(249).- El 24 de agosto de 1591, presentó al cabildo la provisión y colación realizada por el arzobispo, por la que le proveía en la ración vaca por el fallecimiento de Alonso López de Salcedo. Tomó posesión el 10 de octubre (Ibid., fols. 166r, 179v-180r).

(250).- La promoción al canonicato de Antonio Cordones dejó vaca una ración que fue proveída por Quiroga en Sebastián de Mudarra, que hizo presentación al cabildo de la provisión y colación correspondiente el 24 de agosto de 1591. Tomó posesión el 13 de abril de 1592 (Ibid., fols. 166r-v, 227v-228r).

(251).- Clérigo de Grados de la diócesis de Cuenca, el 26 de agosto de 1591 presentó al cabildo las bulas y letras apostólicas que le proveían en la ración vacante por la resignación realizada por Melchor Sánchez en manos del pontífice. Tomó posesión el 13 de septiembre (Ibid., fols. 168r, 172v-173r).

(252).- Clérigo presbítero del arzobispado de Toledo, el 18 de octubre de 1591, notificaba al consistorio las bulas y letras apostólicas por las que era proveído en la ración que resignó en manos del papa Alonso López de Salcedo. Tomó posesión el día 31 de dicho mes (Ibid., fols. 181v, 184r-v).

(253).- El 26 de febrero de 1592, el cabildo le proveyó en la ración que había dejado vacante Martín de Iglesias (Ibid., fol. 216r).

(254).- El 23 de marzo de 1592, presentó al consistorio la colación realizada por el arzobispo, por la que le proveía en la ración vaca por muerte de Bartolomé Quevedo. Tomó posesión el 13 de julio (Ibid., fols. 224r, 250v-251r).

(255).- Clérigo presbítero de la diócesis de Toledo, el 25 de abril de 1592, hizo presentación al capítulo de la provisión y colación hecha por Quiroga, por la que le proveía en la ración vaca por el fallecimiento de Juan de Amocibar. Tomó posesión el 2 de mayo (Ibid., fols. 233r, 234v-235r).

Gonzalo Martínez (256)
Leandro de Segura (257)
Miguel Echay de Ripa (258)
Cebrián Muñoz (259)
Tomás de Miranda (260)
Alonso Lobo (261)
Antonio Sancho (262)
Juan de Ricobayo (263)

(256).- Socapiscol, el 3 de junio de 1592 pidió al cabildo que, atendiendo a sus treinta y dos años de servicio, le hiciesen la merced de proveerle en la ración de sochantre vaca por muerte del racionero Nicolás Galindo. Su solicitud fue atendida, tomando posesión el 6 de junio (Ibid., fols. 240v, 242r-v).

(257).- Clérigo de Corona de la diócesis de Palencia, el 11 de septiembre de 1592, el consistorio solicitó a Quiroga que fuese proveído en la ración vaca por el fallecimiento de Martín de Iglesias. Atendida la petición, el prelado otorgó la provisión y colación pertinente, tomando posesión el 14 de noviembre (Ibid., fols. 264v, 266r-v, 277v-278r).

(258).- Tomó posesión de la ración que había poseído Antonio Tavares el 12 de octubre de 1592 (Ibid., fols. 2709v-271r).

(259).- El 23 de noviembre de 1592, presentó la provisión y colación realizada por Quiroga, por la que quedaba proveído en la ración vaca por la muerte del licenciado Simón de Carranza. Tomó posesión el 14 de enero de 1593 (Ibid., fol. 279v; Ibid., Vol.21, fol. 7r-v).

(260).- Habiendo presentado, el 11 de febrero de 1593, la dispensación apostólica "super defectus natalium", que le habilitaba para poder ostentar beneficios eclesiásticos, el consistorio le nombró en la ración vaca por muerte de Marcelo Segura. Unos días después, el prelado despachaba la pertinente colación, tomando posesión el 13 de abril (Ibid., fols. 16v, 17v-18r, 29v, 30r).

(261).- Canónigo de Osuna y residente en Sevilla, el 22 de septiembre de 1593, el cabildo le dió provisión de la ración y oficio de maestro de capilla, que se encontraba vaco por dejación de Ginés de Boluda. Días después, obtuvo la correspondiente colación realizada por Gaspar de Quiroga. Tomó posesión el 7 de diciembre (Ibid., fols. 74v, 79v, 95r, 97r-v).

(262).- Natural de Tauste, en el reino de Aragón, el capítulo le nominó en una ración de socapiscol vacante por la dejación realizada por Gonzalo Martínez (Ibid., fol. 92r).

(263).- Secretario del tribunal inquisitorial de Toledo, notificó al cabildo, el 11 de diciembre de 1593, las bulas y letras apostólicas por las que era proveído en la ración de que hizo resignación Francisco de Quiroga "causa permutationis" por ciertos beneficios en el obispado de Oviedo. Tomó posesión el 22 de enero de 1594 (Ibid., fols. 98v, 11v-112r, 115v).

Alonso Gómez Cabezón (264)

Pedro Beltrán (265)

Lucas Cabello (266)

CAPELLANES:

Cristobal de Espinosa (267)

Francisco López (268)

Licenciado Merino (269)

Juan Bautista de Zárate (270)

Alonso Díaz (271)

(264).- El 29 de abril de 1594, presentó al consistorio las bulas y letras apostólicas por las que era proveído en la ración que tuvo Gómez de Mendoza, de la que hizo resignación "causa permutationis" por el curato de Pulgar, de la diócesis de Toledo (Ibid., fol. 133v).

(265).- Clérigo presbítero de la diócesis de Pamplona, notificó al cabildo, el 23 de junio de 1594, la bula y letras apostólicas por las que era proveído racionero en la vacante producida por resignación de Fernando Samaniego "causa permutationis" por dos préstamos que Pedro Beltrán poseía en la diócesis de Pamplona. Tomó posesión el 29 de julio (Ibid., fols. 143r, 149r-v).

(266).- El 20 de octubre, presentó al capítulo la colación y provisión realizada por Quiroga para que ocupase la ración que había poseído Cebrián Muñoz de Vizcaya, de la que hizo dejación "causa permutationis" por un beneficio simple en la parroquia de Illana (Ibid., fol. 169r).

(267).- Natural de Santa Gadea y clérigo en la diócesis de Burgos, fue proveído en una capellanía de D. Pedro González de Mendoza el 30 de abril de 1578 (Ibid., Vol. 16, fol. 197v).

(268).- Racionero, el 2 de junio de 1578 le fue concedida por el maestrescuela una capellanía de Juan Ruiz de Ribera vaca por la muerte de su anterior poseedor (Ibid., fol. 303v).

(269).- Juan de Barnuevo como semanero le nominó para una capellanía de Sacedo vaca por muerte de Alonso Ortiz el 6 de junio de 1578. Era natural de Cazorla y residente en Toledo (Ibid., fol. 204v).

(270).- El 7 de junio de 1578 Juan de Barnuevo como semanero le nombró para ocupar una capellanía de Gutierrez Díaz vaca por muerte de Benito Villalpando. Era clérigo presbítero (Ibid., fol. 205r). El 9 de julio del mismo año presentó al cabildo una provisión arzobispal para que se le diese la posesión de la capellanía vacante por fallecimiento de Juan de Benavente (Ibid., fols. 212r y 214r).

(271).- Criado de Juan de Mendoza fue elegido por Juan de Barnuevo como semanero para ocupar una capellanía de Pedro Tenorio vaca por muerte de Benito Villalpando el 9 de junio de 1578 (ibid., fols. 205r y 206r).

Diego de Estrada (272)
Licdo.Alonso Rodríguez (273)
Bachiller Aguilar
Miguel del Barco (274)
Pedro de Cabañas (275)
Martín de San Pedro (276)
Juan de Aguirre (277)
Juan Ortega (278)
Isidro Rodríguez (279)
Luis Gutierrez (280)

(272).- El 12 de junio de 1578 fue nombrado capellán de San Pedro para cubrir la vacante producida por la muerte de Juan de Benavente (Ibid., fol.207r).

(273).- Sobrino del racionero Caballero, fue nombrado junto al bachiller Aguilar para ocupar dos capellanías erigidas de nuevo por D.Alonso de Rojas el 9 de julio de 1578 (Ibid., fol.213r).

(274).- El 18 de agosto de 1578 presentó al cabildo la provisión papal para ocupar la capellanía vaca por muerte de Pedro Tamayo (Ibid., fol.225v).

(275).- El 25 de septiembre de 1578 hizo presentación al consistorio de la provisión pontificia para ocupar la capellanía vacante por la resignación realizada por Antonio de Heredia, tomando posesión el 27 de octubre (Ibid., fols.241v, 242v y 245v).

(276).- Provisto en una capellanía de Pedro González de Mendoza el 19 de noviembre de 1578 (Ibid., fol.252r).

(277).- Provisto en una capellanía de Pedro González de Mendoza el 10 de diciembre de 1578 (Ibid., fol.253r). Unos meses después, el 6 de abril de 1579, fue nombrado capellán de la capilla de Pedro Tenorio por García de Loaysa, semanero, vacante por muerte de Morales (Ibid., fol.276r).

(278).- El 3 de abril de 1579 recibió nombramiento como capellán en la capilla de Pedro Tenorio (Ibid., fol.276r).

(279).- Obtuvo el nombramiento de capellán en una capellanía de Alonso de Fonseca el 29 de abril de 1579 (Ibid., fol.283v).

(280).- Clérigo y vecino de Toledo, el 1 de junio de 1579 fue provisto por el cabildo en la capilla de San Eugenio en la capellanía de la que había hecho dejación el clérigo Montero (Ibid., fol.287v). El cabildo, reunido el 9 de junio de 1586, resolvió vacar la capellanía de Pedro Tenorio que poseía Juan de Aguirre a causa de que no residía ni servía y proveerla en la persona de Luis Gutiérrez (Ibid., Vol.18, fols.248v-249v).

Andrés de Uxena (281)

Iglesias (282)

Agustín de Herrera (283)

Juan Martínez de Corrales (284)

Melchor Navas (285)

Francisco de Escobar (286)

Alveas Méndez (287)

Bernardino de Rojas (288)

Diego de la Peña (289)

Tadeo de Santa Cruz (290)

(281).- Vecino de Esquivias, el 3 de junio de 1579 hizo presentación al capítulo de la provisión pontificia en una capellanía de la Greda vacante por dejación de Andrés Fernández de Balboa, vecino de Valdepeñas (Ibid., fol.288r).

(282).- El 5 de junio de 1579 fue proveído en la capellanía de Juan López de León de la que había hecho dejación Torrentes (Ibid., fol.288v).

(283).- El 6 de junio de 1579 presentó al cabildo la provisión papal para ocupar la capellanía de Coro vaca por resignación de Gabriel de Sanabria, clérigo de Toledo, tomando posesión el 27 de agosto (Ibid., fols.289r y 303r).

(284).- Clérigo lector de la iglesia de Toledo, el 27 de agosto de 1579 notificó al cabildo la provisión realizada por el arzobispo para cubrir la capellanía del Coro vacante por la muerte de Juan de Ortega (Ibid., fol.303v).

(285).- La otorgación de la capellanía por parte del cabildo se produjo el 31 de agosto de 1579 (Ibid., fol.304v).

(286).- Lector de la iglesia de Toledo, hizo presentación en el cabildo de la provisión realizada por Gaspar de Quiroga el 9 de septiembre de 1579 (Ibid., fol.305v).

(287).- Cantor, presentó al consistorio la provisión arzobispal como capellán del Coro en octubre de 1579 (Ibid., fol.311v).

(288).- El 2 de noviembre de 1579 notificó al cabildo la provisión realizada por Gaspar de Quiroga para una capellanía del Coro vacante por muerte de Andrés Ramírez, de la que tomó posesión el 12 de diciembre (Ibid., fols.317v y 332v).

(289).- Melchor de Ortiz le hizo traspaso de su capellanía el 8 de enero de 1580 (Ibid., fol.340r).

(290).- Cura de Santorcaz, obtuvo presentación y nombramiento de capellán en la capilla mozarabe para cubrir la vacante producida por la muerte de Diego de Mora el 14 de junio de 1580 (Ibid., fol.371v).

Licenciado Aparicio (291)
Toribio de Nava (292)
Diego de Parra (293)
Alonso de Vega (294)
Lope Sanz (295)
Francisco Vázquez (296)
Francisco de Guzmán (297)
Jerónimo de Loaysa (298)
Martín de Herrera (299)
Esteban Martín de los Reyes (300)

(291).- El 17 de julio de 1580 fue presentado por Juan Manrique para ocupar la capellanía vaca por la muerte de Diego de Muros (Ibid., fol.377r).

(292).- Clérigo, obtuvo la provisión para una capellanía de San Pedro el 27 de julio de 1580 (Ibid., fol.379v).

(293).- Clérigo de la diócesis de Toledo, fue presentado por Rodrigo Dávalos, semanero, como capellán de San Pedro el 13 de septiembre de 1580 (Ibid., fol.388v).

(294).- El 13 de septiembre de 1580 presentó al cabildo la provisión arzobispal como capellán del Coro, tomando posesión el 10 de octubre (Ibid., fols.389r y 396v).

(295).- Clérigo de la diócesis de Toledo, fue presentado por Rodrigo Dávalos, semanero, como capellán de San Pedro el 17 de septiembre de 1580 (Ibid., fol.390v).

(296).- Racionero de la iglesia de Toledo, fue presentado por Tomás de Borja, semanero, como capellán de San Ildefonso el 19 de septiembre de 1580 (Ibid., fol.390v).

(297).- Cantor, presentó al cabildo la provisión arzobispal como capellán del Coro para ocupar la vacante producida por la muerte de Juan de Cuéllar el 22 de septiembre de 1580, tomando posesión de la misma el 23 de diciembre (Ibid., fol.392r y 416r).

(298).- El 24 de octubre de 1580 obtuvo provisión como capellán de Sacedo para cubrir la capellanía vacante por la muerte del racionero Francisco Correas (Ibid., fol.401r).

(299).- Racionero, el 31 de octubre de 1580 fue presentado por el deán Diego de Castilla, semanero, como capellán de San Pedro (Ibid., fol.402r).

(300).- El 5 de noviembre de 1580 hizo presentación al cabildo de la provisión realizada por Gaspar de Quiroga como capellán del Coro para ocupar la plaza vaca por la resignación hecha por Juan López, tomando la posesión el 31 de enero de 1581 (Ibid., fol.404v; Ibid., Vol.17, fol.8v).

Licenciado Téllez (301)
Miguel de Llanos Barco (302)
Ruiz de Alcoholado (303)
Juan de Navas (304)
Martín García de San Pedro (305)
Cristobal de Oseguera (306)
Cristobal de Gámez (307)
Alonso Torres de Carvajal (308)
Juan Martínez de los Corrales (309)
Juan García (310)

(301).- El 24 de noviembre de 1580 fue nombrado en una capellanía de la capilla de la Epifanía de la iglesia de San Andrés que estaba vaca por muerte del licenciado Diego de Mora (Ibid., Vol.16, fol.410r).

(302).- Tomó posesión de una capellanía del Coro el 24 de noviembre de 1580 (Ibid., fol.410r).

(303).- El 12 de diciembre de 1580 fue nombrado capellán de San Pedro en lugar de Francisco de Espinosa, quien no cumplía con la residencia (Ibid., fol.413r).

(304).- El 29 de noviembre de 1580 obtuvo el nombramiento de capellán de la capilla de Pedro Ortiz (Ibid., fol.410v).

(305).- Fue nombrado capellán en la capilla del doctor Vergara el 29 de noviembre de 1580 (Ibid., fol.410v). El 11 de mayo de 1582 presentó al cabildo la provisión arzobispal para ocupar una capellanía del Coro vaca por la promoción de Francisco de Tapia a una ración (Ibid., Vol.17, fols.112r y 118v).

(306).- El 29 de noviembre de 1580 se le otorgó nombramiento de capellán en la capilla del obispo Castillo (Ibid., Vol.16, fol.410v).

(307).- El nombramiento de capellán en una capellanía de Gutierrez Díaz fue realizado el 12 de diciembre de 1580 (Ibid., fol.416r).

(308).- El 30 de diciembre de 1580 presentó al cabildo la provisión arzobispal para una capellanía del Coro vacante por la muerte de Alonso Gaytán de Escobedo, tomando posesión el 13 de enero de 1581 (Ibid., fol.416v; Ibid., Vol.17, fols.5r-v).

(309).- El 31 de diciembre de 1580 fue provisto en una capellanía del Nuncio (Ibid., Vol.16, fol.417r).

(310).- Natural de Consuegra, el 2 de enero de 1581 fue dotado con una capellanía de Pedro González de Mendoza (Ibid., Vol.17, fol.3r). El 22 de mayo de 1585 presentó al cabildo la provisión arzobispal para ocupar una capellanía del Coro vacante por dejación de Andrés García (Ibid., Vol.18, fol.154v y 176r).

Lucas de Andrada (311)
Alonso de Orellana (312)
Alonso Martínez (313)
Michael Ferranz Muñoz (314)
Baltasar Suárez Salmerón (315)
Juan Gómez (316)
Pero Gutiérrez (317)
Licenciado Aranda (318)
Juan de Rojas (319)
Juan Beltrán (320)

(311).- El 7 de enero de 1581 obtuvo provisión para ocupar una capellanía de Pedro González de Mendoza (Ibid., Vol.17, fol.4r).

(312).- Natural de Talavera y residente en Toledo, recibió una capellanía de Pedro González de Mendoza el 22 de febrero de 1581 (Ibid., fol.13v).

(313).- Natural de Talavera, se le cometió una capellanía del Doctor Herrera el 7 de marzo de 1581 (Ibid., fol.16v).

(314).- Clérigo, fue presentado el 29 de abril de 1581 para ocupar una capellanía de la Epifanía vaca por muerte de Gonzalo de la Plaza (Ibid., fol.28r).

(315).- El 28 de junio de 1581 presentó al cabildo la provisión arzobispal para ocupar la capellanía del Coro vaca por la muerte de Diego de Miranda, de la que tomó posesión el 25 de agosto (Ibid., fol.42r y 56r).

(316).- El 3 de julio de 1581 Gabriel de Cárdenas, semanero, hizo el nombramiento de dicho clérigo para ocupar una capellanía de San Ildefonso perteneciente al obispo de Avila, vacante por el fallecimiento de Luis de Parra (Ibid., fol.43v).

(317).- El 31 de julio de 1581 presentó al cabildo la provisión arzobispal para ocupar la capellanía del Coro de la que había hecho resignación Alonso Valdivieso. Tomó posesión el 16 de octubre, aunque se realizaron ciertas contradicciones a la misma (Ibid., fol.50v y 67v).

(318).- El 19 de agosto de 1581 fue provisto en una capellanía de Pedro Gonzáles de Mendoza que estaba vaca por dejación de Juan de Aguirre (Ibid., fol.54v).

(319).- Natural de Sonseca, el 2 de septiembre de 1581 obtuvo provisión de una capellanía de Pedro González de Mendoza vaca por dejación de Gaspar de Sueldo (Ibid., fol.57v).

(320).- Vecino de Padilla, fue proveído en una capellanía de Pedro González de Mendoza el 13 de septiembre de 1581 (Ibid., fol.62r).

Licdo.Alonso de Palenzuela (321)

Licdo.Cristobal Gómez (322)

Alonso de Salazar (323)

Luis Fernández (324)

Bachiller Francisco Crespo (325)

Licdo.Luis de Messa (326)

Gonzalo Buxía (327)

Licdo.Alonso Cebrero (328)

Alonso de las Marinas (329)

Sebastián de Valencia (330)

(321).- Vecino de Toledo, el 13 de septiembre de 1581 fue proveido en una capellanía de Pedro Ortiz vaca por dejación de Francisco Gutiérrez (Ibid., fol.62v).

(322).- Vecino de Toledo, obtuvo provisión en una capellanía de Pedro González de Burgos vacante por dejación del licenciado Villegas el 22 de septiembre de 1581 (Ibid., fol.63r).

(323).- Capellán del Coro, fue proveido en una capellanía de Alonso de Fonseca, vaca por dejación de Isidro Rodríguez, el 22 de septiembre de 1581 (Ibid., fol.63v).

(324).- Clérigo natural de Tarancón, el 7 de abril de 1582 obtuvo provisión en una capellanía de Pedro González de Burgos vacante por la muerte del racionero Juan Luis (Ibid., fol.104r)

(325).- Natural de Chillaron, el 21 de agosto de 1582 obtuvo provisión de una capellanía de Juan Sacedo, que está fundada en la capilla de la Concepción de la iglesia de Toledo, vacante por la dejación que de ella hizo Jerónimo de Loaysa (Ibid., fol.137r).

(326).- El 1 de octubre de 1582 fue proveido en una capellanía de Pedro González de Mendoza (Ibid., fol.148r).

(327).- El 26 de noviembre de 1582 se le dio provisión de una capellanía de D.Luis Daza vacante por dejación del maestro Cristobal de Gámez (Ibid., fol.158r).

(328).- Natural de Arganda, el 14 de diciembre de 1582 obtuvo provisión en una capellanía de los maestrescuelas instituida en la capilla de San Ildenfonso (Ibid., fol.161v).

(329).- Fue proveido en una capellanía fundada por Pedro Fernández de Burgos en la capilla de los Reyes Magos el 14 de diciembre de 1582 (Ibid., fol.161v).

(330).- Natural de Talamanca, el 14 de diciembre de 1582 obtuvo una capellanía de Pedro Fernández de Burgos (Ibid., fol.161v). El 5 de marzo de 1583 fue proveido en una capellanía de San Fernando de Illescas, fundada en la capilla de la Estrella de la iglesia de Toledo (Ibid., fol.176r). El 30 de agosto de 1585 fue nominado para ocupar una capellanía de Pedro Nuñez vacante por la muerte de Rodrigo Rincón (Ibid., Vol.18, fol.176v).

Diego López (331)
Diego Maldonado (332)
Pedro de Velasco (333)
Juan Bautista de Chaves (334)
Esteban de Lupiana (335)
Alonso Vega de Arnalte (336)
Francisco de Pissa (337)
Miguel Sánchez (338)
Francisco de Mesones (339)

(331).- Natural de Toledo, el 14 de diciembre de 1582 fue nombrado capellán en una capellanía de Pedro Nuñez en la capilla de San Miguel (Ibid., Vol.17, fol.161v). El 19 de marzo de 1583 fue proveído en una capellanía de Pedro González de Mendoza (Ibid., fol.179v).

(332).- Natural de Toledo, obtuvo provisión en una capellanía de Pedro González de Mendoza el 14 de diciembre de 1582 (Ibid., fol.161v).

(333).- El 8 de febrero de 1583 el licenciado Virviesca, semanero, hizo su nombramiento para una capellanía de Cristobal Fernández vaca por la muerte del licenciado Aparicio (Ibid., fol.172v).

(334).- El secretario del cabildo fue proveído en una capellanía de San Pedro el 10 de marzo de 1583, que se encontraba vaca por la dejación realizada por Diego de Estrada. El nombramiento se efectuó ante su solicitud, a pesar de que el resto de los capellanes integrantes de dicha capilla habían pedido que esta plaza fuese reducida (Ibid., fols.177v-178r).

(335).- Clérigo presbítero, su presentación para ocupar una capilla de la Epifanía fue realizada por Francisco de Rojas el 14 de marzo de 1583 (Ibid., fol.178r).

(336).- El 4 de mayo de 1583 fue designado por Francisco García de Valloboso como capellán de la capilla de Pedro Tenorio, cubriendo la vacante producida por la muerte del bachiller Francisco de Herrera (Ibid., fol.191v).

(337).- Clérigo natural de Toledo, presentó al cabildo el 13 de junio de 1583 su nombramiento como capellán de la capilla mozarabe, cubriendo la plaza vaca por muerte de Francisco Pérez (Ibid., fol.202r).

(338).- Bachiller y clérigo presbítero, el doctor Juan de Obregón, semanero, le nominó para una capellanía de Pedro Tenorio el 5 de octubre de 1583 vacante por la muerte de Ribera (ibid., fol.228r).

(339).- Natural de la Puebla de Uceda, diócesis de Toledo, fue proveído en una capellanía de Pedro Fernández de Burgos instituida en la capilla de los Reyes Magos el 5 de noviembre de 1583 (Ibid., fol.235r). El 7 de abril de 1586 fue nombrado para ocupar una capellanía del Doctor Vergara, vaca por promoción de Martín de San Pedro a una ración. El nombramiento lo hizo el cabildo a petición del canónigo Juan de la Cerda (Ibid., Vol.18, fol.227v).

Luis Pérez de Villafañá (340)
Licdo.Cristobal de Olmos (341)
Nicolás Solentino de Vinar (342)
Pedro López de Segura (343)
Juan de Mariana (344)
Baltasar de Cepeda (345)
Juan Martínez (346)
Diego Díaz (347)
Pedro Serrano (348)
Pedro Ruiz (349)

(340).- Bachiller de la ciudad de Toledo, el 7 de diciembre de 1583 obtuvo comisión para ocupar una capellanía de Gutierre Díaz (Ibid., Vol.17, fol.240r).

(341).- Fue proveido en una capellanía de Rodrigo Ortiz el 24 de diciembre de 1583 (Ibid., fol.244r).

(342).- Natural de Toledo, el 7 de enero de 1584 le fue encomendada una capilla de Pedro Fernández de Burgos que está instituida en la capilla de los Reyes Magos (Ibid., Vol.18, fol.5v).

(343).- Bachiller natural de Toledo, fue proveido en una capellanía de Rodrigo Ortiz instituida en la capilla de la Quinta Angustia el 6 de marzo de 1584 (Ibid., fol.20v).

(344).- El 2 de mayo de 1584 el licenciado Virviesca, semanero, le nombró para ocupar una capellanía de Santa Ana vaca por muerte del maestro Damián Cedillo (Ibid., fol.35v).

(345).- Natural de Toledo, fue proveido en una capellanía de Gutierre Díaz vaca por dejación de Gonzalo Buxía en 18 de mayo de 1584, con la condición de que se ordenase en un año y fuese examinado por el licenciado Gomara (Ibid., fol.39v).

(346).- El 23 de agosto de 1584 presentó al cabildo la provisión arzobispal como capellán del Coro para cubrir la vacante producida por la promoción de Francisco de Guzmán a una ración (Ibid., fols.68v-69r, 91r y 136v).

(347).- El 30 de agosto de 1585 fue realizado su nombramiento para ocupar una capellanía de la capilla mozarabe. Se le dió su colación tras atender la reclamación de Juan Bautista Jerónimo, cura de Santa Eulalia, que también pretendía dicha capellanía (Ibid., fols. 69v-70r).

(348).- Natural de Valdemorillo, el 12 de septiembre de 1584 fue proveido en una capellanía de D.Luis Daza instituida en la capilla de los Reyes Magos (Ibid., fol.74v).

(349).- El 17 de diciembre de 1584 hizo presentación al cabildo de la provisión arzobispal para ocupar una capellanía del Coro vaca por la muerte de Pedro Cabañas. Tomó posesión el 16 de enero de 1585 (Ibid., fols.107v-108r).

Juan Fernández de Quevedo (350)

Juan López (351)

Licdo.Franciso de Rioja (352)

Juan Bautista Jerónimo (353)

Diego Ortega (354)

Pedro Hernández (355)

Juan Delgado (356)

Juan Aguado (357)

Alonso Sánchez (358)

(350).- El 20 de marzo de 1585 se le encomendó una capellanía de Pedro Fernández de Burgos, vaca por la muerte del racionero Pedro Sánchez, para cantar en la capilla de la Epifanía (Ibid., fol.128v).

(351).- El 5 de junio de 1585 recibió nombramiento de capellán mayor de la capilla de San Pedro (Ibid., fol.160r).

(352).- El 4 de septiembre de 1585 fue presentado por Alonso de Rojas, Señor de Mora, para ocupar una capellanía de la Epifanía vaca por muerte de Esteban de Lupiana (Ibid., fol.178r).

(353).- Clérigo natural de Toledo, fue nombrado para ocupar una capellanía de la capilla mozarabe vaca por muerte de Melchor Gutiérrez el 13 de enero de 1586 (Ibid., fol.206v).

(354).- El 24 de abril de 1586 hizo presentación al cabildo de la provisión arzobispal para ocupar una capellanía del Coro vacante por dejación de Martín de San Pedro. Tomó la posesión el 2 de junio (Ibid., fols.232v y 247r-v).

(355).- El 9 de junio de 1586 presentó al cabildo la provisión realizada por Gaspar de Quiroga para ocupar una capellanía del Coro vacante por dimisión de Juan Pérez Calderón (Ibid., fol.249r).

(356).- El 8 de abril de 1587 presentó la provisión y colación realizada por Quiroga para que ocupase la capellanía del Coro de la que había hecho resignación Diego García Izquierdo. Aunque el licenciado Virviesca apeló el nombramiento, puesto que, por la relación efectuada por el doctor Navarro, Delgado sólo era clérigo de primera Corona, requiriéndose para esta capellanía la calidad de presbítero, tomó posesión de la misma el 26 de junio (Ibid., Vol.19, fols, 20v, 21v, 40r).

(357).- Natural de Cienpozuelos, el 22 de junio de 1587 se le encomendó la capellanía que fundó el obispo Carrillo en la capilla de San Eugenio, atento a que su poseedor, Luis Gutiérrez, hizo dejación de ella (Ibid., fol. 38v).

(358).- El 27 de junio de 1587 presentó al cabildo la provisión y colación por la que Quiroga le nombraba en la capellanía del Coro vaca por la resignación realizada en manos del arzobispo por Juan Núñez, su último poseedor. Tomó posesión el 21 de agosto (Ibid., fols. 40v, 53r).

Juan de San Pedro (359)
Sebastián de Zaballos (360)
Pedro Fernández (361)
Mancio de Villafañá (362)
Rodrigo Dávalos (363)
Lázaro Rincón (364)
Esteban Primo (365)
Cristóbal Rojo (366)
Antonio de Villalobos (367)

(359).- La provisión y colación realizada por Quiroga se presentó al consistorio el 6 de julio de 1587. Ocupó la capellanía del Coro vacante por la resignación efectuada por Pedro Hernández. Tomó posesión el 26 de agosto (Ibid., fols. 42r-v, 53v-54r).

(360).- Vecino de Toledo, el 13 de julio de 1587 le fueron encomendadas dos capellanías del Ambitu, una de Alvar López y otra del arcedianio de Toledo. Recibía por su servicio lo que fuese voluntad del cabildo (Ibid., fol. 43r).

(361).- El 21 de julio de 1587 presentó al cabildo la provisión y colación otorgada por Quiroga para ocupar la capellanía del Coro vaca por muerte de Juan de Carvajal (Ibid., fols. 46v, 47v).

(362).- El consistorio ordenó hacer colación en favor del licenciado Mancio de Villafañá de la capellanía mayor de la capilla de Corpus Christi, vaca por muerte de Juan González Camero, por nombramiento realizado por los propios capellanes de dicha capilla, siendo admitida su presentación el 7 de agosto de 1587 (Ibid., fol. 50r).

(363).- El capítulo catedralicio mandó escribir una carta a Felipe II, el 5 de septiembre de 1587, agradeciendo la provisión de Rodrigo Dávalos en la capellanía mayor de los Reyes Nuevos (Ibid., fol. 55v).

(364).- El licenciado Virviesca, como semanero mayor, nombró al maestro Lázaro Rincón, el 16 de septiembre de 1587, capellán de la capilla de San Pedro para cubrir la plaza del fallecido Jerónimo de Barreda (Ibid., fol. 58r).

(365).- Racionero de Salamanca, el 24 de septiembre de 1587, fue proveído en la capellanía de San Pedro que tenía encomendada Martín de Herrera, que fue destituido por el cabildo porque no la servía (Ibid., fol. 60v).

(366).- El 4 de enero de 1588 presentó al consistorio la provisión y colación realizada por Quiroga para cubrir la capellanía del Coro vaca por haber entrado en religión y tener hecha profesión Juan Martínez Centeno. Tomó posesión el 17 de febrero (Ibid., fols. 77r, 88v).

(367).- Clérigo de Toledo, fue nombrado por Juan de Alarcón, semanero mayor, para ocupar la capellanía de Pedro Tenorio vaca por muerte de Martín Pérez. (Ibid., fols. 79v-80r).

Juanes de Arrastia (368)
Francisco de Guzmán (369)
Lorenzo Carranza (370)
Diego de Orgaz (371)
Gabriel Díaz (372)
Pedro Martínez (373)
Alejo Martínez (374)
Pedro Gallego (375)
Luis de Huerta (376)

(368).- Natural de Iruñuela, en el obispado de Pamplona, el cabildo le encomendó, el 14 de enero de 1588, una de las capellanías de don Juan Salcedo que se cantaba en la capilla de la Concepción, que vacó por dejación de Francisco Crespo, racionero (Ibid., fol. 80r).

(369).- Racionero, fue nombrado por el cabildo para ocupar una capellanía vacante de Alonso de Rojas, el 8 de febrero de 1588, quedando anulado el nombramiento realizado por el canónigo Francisco de Monsalve, semanero mayor, en el racionero Samaniego (Ibid., fol. 86r).

(370).- Licenciado y natural de Toledo, el consistorio le encomendó, el 17 de marzo de 1588, una de las capellanías de don Juan Salcedo fundadas en la capilla de la Concepción (Ibid., fol. 96v).

(371).- Sacerdote, el cabildo le nombró capellán de la capilla de Alonso de Fonseca, en la plaza vacante por dejación de Juan Manrique, el 29 de abril de 1588 (Ibid., fol. 106r).

(372).- Clérigo y licenciado, el 8 de agosto de 1588 presentó la provisión y colación hecha por Quiroga, por la que le proveía en una capellanía del Coro vacante por muerte de Gutierre Capoché. Tomó posesión el 23 de septiembre (Ibid., fols. 127r, 136r-v).

(373).- Clérigo natural de Illescas, fue nombrado por el licenciado Virviesca, semanero mayor, en una capellanía de doña Teresa de Haro el 15 de septiembre de 1588 (Ibid., fol. 135r).

(374).- Clérigo, el 26 de septiembre de 1588 notificó al consistorio la colación y provisión realizada por Quiroga como capellán del Coro en la capellanía vacante por resignación que Vasco de Quemada hizo en manos del prelado. Tomó posesión el 15 de diciembre (Ibid., fols. 148v, 153r-v).

(375).- Quiroga otorgó provisión y colación para que ocupase la plaza vacante en la capilla del Coro por muerte de Pedro de Palmas. El 2 de diciembre de 1588 realizó la presentación de la misma al cabildo, tomando posesión el 23 de febrero de 1589 (Ibid., fols. 151r-v, 169v).

(376).- El 23 de diciembre de 1588, presentó al cabildo la bula y letras apostólicas por las que le papa le proveía como capellán del Coro en la vacante existente por resignación de Luis de Huerta, cura de la parroquia de la Guardia en manos del pontífice y en favor de Luis de Huerta el mozo. Tomó posesión el 14 de marzo de 1589 (Ibid., fols. 154v, 157r, 174v-175r).

Francisco Merchante (377)

Benito Sánchez (378)

Cristóbal Rodríguez (379)

Tomás Palmero (380)

Pedro de Herrera (381)

Simón de Carranza (382)

Juan Bautista de Chaves Arcayos (383)

Jerónimo Hernández (384)

Pedro Martínez (385)

(377).- Por haberse ausentado de la ciudad Juan Fernández de Quevedo, vacó la capellanía de don Luis Daza que poseía, encomendándola el consistorio, el 2 de enero de 1589, a Francisco Merchante (Ibid., fol. 156v).

(378).- Bachiller y vecino de Estremera, el 27 de enero de 1587, presentó al cabildo la provisión y colación hecha por Quiroga, por la que le nombraba capellán del Coro en la vacante producida por la resignación realizada por Bartolomé Sánchez. Tomó posesión el 14 de marzo (Ibid., fols. 161v-162r, 163v-164r, 174v-175r).

(379).- Bachiller y natural de Toledo, el 7 de marzo de 1589, el consistorio le nombró capellán de dos capellanías, una del arcediano de Toledo Siruela y otra de Pedro Fernández de Villalobero, que estaban fundadas en la capilla de San Gil (Ibid., fol. 173r).

(380).- El 21 de marzo de 1589 presentó al cabildo el nombramiento realizado por Francisco de Rojas, patrón de la capilla de la Epifanía, por el que se le designaba capellán para cubrir la vacante producida por la muerte de Alonso Chacón (Ibid. fol. 178r).

(381).- Natural del arzobispado de Toledo, el cabildo le encomendó, el 23 de marzo de 1589, una capellanía de Lucas de las Peñas, vacante por dejación de Tomás Palmero (Ibid., fol. 182v).

(382).- Licenciado y racionero, fue proveído por Juan de la Cerda, semanero mayor, en dos capellanías vacas, una de Diego Rodríguez de Oviedo y otra de Sancho Fernández (Ibid., fol. 187v).

(383).- El 24 de abril de 1589, presentó al consistorio la provisión y colación hecha por Quiroga para cubrir la plaza de capellán del Coro vacante por la muerte de Juan de Valladolid. Tomó posesión el 30 de junio (Ibid., fols. 190r-v, 206r-v).

(384).- Presentó la provisión y colación realizada por el arzobispo al cabildo el 5 de mayo de 1589. Por ésta, quedaba proveído en la capellanía del Coro vacante por la resignación efectuada por Pedro Ruiz. Tomó posesión el 3 de julio (Ibid., fols. 192v, 195r, 206v-207r).

(385).- Clérigo presbítero, fue presentado, el 12 de mayo de 1589, por el licenciado Virviesca, semanero mayor, para una capellanía de San Pedro vaca por muerte de Jerónimo Paez (Ibid., fol. 193v).

Alonso Niño (386)

Pedro Hernández (387)

Cristóbal Rubio (388)

Alonso de Yegros (389)

Diego Fernández de Párraga (390)

Francisco de Vega Arnalde (391)

Diego de Buenalma (392)

Juan Gómez (393)

(386).- Canónigo, el 4 de septiembre de 1589, Francisco de Rojas, patrón de la capilla de la Epifanía, le nombró capellán mayor de la misma, puesto que se encontraba vaco por la muerte de Pedro de Ayala (Ibid., fol. 222r).

(387).- Clérigo presbítero y capellán del Coro, fue nombrado por Alvaro de Monsalve en una capellanía de Pedro Tenorio, de la que se había exonerado Alonso Díaz, el 10 de abril de 1590 (Ibid., Vol.20, fols. 26v-27r, 31r).

(388).- El 2 de mayo de 1590, presentó al cabildo la provisión y colación hecha por Quiroga para que ocupase la capellanía del Coro vaca por muerte de Baltasar Suárez. Tomó posesión el 12 de agosto (Ibid., fols. 40v-41v, 60v, 69r). El 4 de febrero de 1594, el consistorio le encomendó la capellanía de Pedro Fernández de Burgos que estaba vacante por dejación de Jerónimo Ximénez (Ibid., Vol.21, fol. 113v). Así mismo, el 10 de marzo del mismo año, el capítulo le proveyó en una de las capellanías de Juan Duque de Strada, de la que hizo dejación Juan del Corral con licencia del Consejo arzobispal (Ibid., fol. 120v).

(389).- Clérigo y licenciado, el 24 de mayo de 1590, presentó al consistorio su nombramiento para la capilla de la Epifanía en la vacante producida por la muerte de Diego de Salazar (Ibid., Vol.20, fols. 51v-52r).

(390).- Vecino de Toledo, fue proveído por el cabildo, el 8 de agosto de 1590, en una capellanía de la capilla de San Miguel, dotada por Pedro Núñez, que había dejado vaca su anterior poseedor, el clérigo Sebastián de Valencia (Ibid., fol. 68v).

(391).- A petición del tesorero Francisco García de Valloboso, fue proveído, el 18 de agosto de 1590, en una capellanía de la capilla de la Concepción dotada por don Juan Salcedo, de la que había hecho dejación Cristóbal de Vargas. Era natural de Dosbarrios (Ibid., fol. 70r).

(392).- El licenciado Gomara, semanero mayor, hizo el nombramiento en la capellanía vaca en la capilla de San Miguel por muerte del licenciado Diego Hernández de Párraga, el 13 de septiembre de 1590. Era clérigo y criado de Pedro de Carvajal (Ibid., fol. 77r).

(393).- Bachiller y vecino de Ajofrón, fue nominado por el cabildo, el 13 de septiembre de 1590, para ocupar la capellanía dotada por Pedro Fernández de Burgos en la capilla de la Epifanía, que vacó por dejación de Luis Hernández, vecino de Tarancón (Ibid., fol. 77v).

Juan de Fuentes (394)
Gómez de Mendoza (395)
Licenciado Ayora (396)
Fernando de Carvajal (397)
Gonzalo Pérez (398)
Pablo Rubio (399)
Miguel Ortega (400)
Francisco Evangelista (401)
Alonso Merchante (402)

(394).- Natural de Pezuela, el 15 de septiembre de 1590, presentó al consistorio la provisión y colación realizada por Quiroga, por la que le proveía en el capellanía del Coro vaca por muerte de Pedro Ortiz. Tomó posesión el 17 de octubre (Ibid., fols. 79r, 84r).

(395).- Racionero, fue nominado por Andrés Fernández, semanero mayor, en una capellanía de Pedro González de Mendoza, vaca por muerte de Pedro de Ortiz, el 29 de diciembre de 1590 (Ibid., fol. 98r-v).

(396).- Clérigo, fue designado por Andrés Fernández, semanero mayor, el 29 de diciembre de 1590, para ocupar una capellanía en la capilla de San Ildefonso vaca por muerte de Juan Rodríguez, vecino de Toledo (Ibid., fols. 98r-v, 100r).

(397).- Clérigo presbítero, era natural de Toledo. Fue nombrado por Pedro de Carvajal en una capellanía de San Pedro vaca por la muerte del clérigo Toribio de Nava, el 1 de marzo de 1591 (Ibid., fol. 117v).

(398).- El 7 de marzo de 1591, el cabildo le encomendó la capellanía de Rodrigo Tenorio que estaba fundada en el sepulcro, vacante por la dejación hecha por el licenciado Fernando de Carvajal (Ibid., fol. 118v).

(399).- El 6 de abril de 1591, dicho clérigo presentó al consistorio la provisión y colación realizada por Quiroga, por la que le proveía en la capellanía del Coro vaca por la ausencia de Luis Martínez. Tomó posesión el 29 de mayo (Ibid., fols. 128v, 143v).

(400).- Ocupó la vacante producida de una capellanía del Coro por la resignación que hizo Francisco de Ortega en manos de Quiroga. El 27 de abril de 1591 presentó al cabildo la provisión y colación por la que era proveído en la misma, tomando posesión el 30 de mayo (Ibid., fols. 128v, 143v).

(401).- Gabriel Suárez, el 25 de mayo de 1591, le nombró para ocupar la capellanía de San Pedro vaca por muerte de Tomás Palmero (Ibid., fol. 140v).

(402).- El 5 de junio de 1591, presentó al cabildo la provisión y colación hecha por Quiroga, por la que le proveía en una capellanía del Coro, en la vacante producida por el fallecimiento de Gonzalo de Villanueva, tomando la posesión el día 27 de dicho mes (Ibid., fols. 146r, 152v).

Alonso Guio (403)
Andrés Pacheco (404)
Juan de Aliende (405)
Antonio de Tavares (406)
Pedro Martínez de Torres (407)
Andrés Guio de Llanos (408)
Juan Corral (409)
Ginés del Río (410)
Francisco Ximénez (411)

(403).- Natural de Toledo, el 5 de junio de 1591 notificó al consistorio la bula y letras apostólicas por las que era proveído en la capellanía del Coro vaca por la resignación hecha en manos del pontífice por Luis de Huerta. Tomó posesión el 7 de agosto (Ibid., fols. 146v-147r, 163r).

(404).- Francisco de Rojas, patrón de la capilla de la Epifanía, realizó el nombramiento para ocupar la vacante producida en la misma por la muerte de Tomás Palmero, que el licenciado Pacheco presentó al cabildo el 27 de junio de 1591 (Ibid., fol. 152v).

(405).- Racionero, fue nominado por Andrés Fernandez, semanero mayor, el 24 de julio de 1591, para ocupar la capellanía de Juan López de León, vaca por el fallecimiento del racionero Antonio López Salcedo (Ibid., fol. 160r).

(406).- Pedro de Carvajal, semanero mayor, le proveyó en la capellanía en el altar de Santa Elena, vaca por la muerte de Bartolomé Quevedo, el 30 de agosto de 1591 (Ibid., fol. 169r).

(407).- El 19 de septiembre de 1591, hizo presentación al capítulo de la provisión y colación realizada por Quiroga para que ocupase la capellanía del Coro vaca por la resignación hecha por Sebastián de Mudarra. Tomó posesión el 19 de noviembre (Ibid., fols. 174r, 188r-v).

(408).- Racionero, fue nombrado por Alonso Niño, el 2 de octubre de 1591, en la capellanía de Juan López de León, que vacó por la muerte del racionero Aliende (Ibid., fol. 177v). Igualmente, Bernardino de Sotomayor, semanero mayor, el 19 de abril de 1592, le nombró en una capellanía de Pedro González de Mendoza vaca por el fallecimiento del racionero Amocibar (Ibid., fol. 230r).

(409).- Ginés de Soto le designó, el 2 de octubre de 1591, para ocupar la capellanía de Juan Duque de Strada en el sepulcro, que estaba vacante por fallecimiento de Dámaso de Ribera (Ibid., fol. 178r).

(410).- El cabildo le encomendó la capellanía del tesoro que dejó Juan de Campoverde, el 2 de octubre de 1591 (Ibid.).

(411).- El 7 de enero de 1592 presentó al consistorio la colación hecha por el arzobispo, por la que le proveía en una capellanía del Coro vaca por la muerte de Juan Criado. Tomó posesión el 14 de marzo (Ibid., fols. 196v, 222v).

Francisco de Zárate (412)

Antonio Gracián (413)

Juan Sánchez (414)

Cristóbal Hernández (415)

Luis de Velas (416)

Domingo de Alvear (417)

Miguel Campillo (418)

Miguel García (419)

Antonio de Guzmán (420)

Alonso Niño de Zúñiga (421)

(412).- Natural de Toledo, el capítulo le encomendó, el 4 de febrero de 1592, una capellanía de don Juan Salcedo en la capilla de la Concepción, que vacó por dejación del licenciado Juan de Olías (Ibid., fol. 208r).

(413).- Clérigo presbítero, el 20 de febrero de 1592, Ginés de Soto le nombró en una capellanía de San Pedro vaca por el fallecimiento del maestro Rincón (Ibid., fol. 214r).

(414).- Bachiller y natural del Campo, el 24 de febrero de 1592, el cabildo le cometió dos capellanías, una de los maestrescuelas y otra del abad de San Vicente, vacantes por dejación del licenciado Pedro de Morales (Ibid., fol. 215v).

(415).- Licenciado y vecino de Toledo, los capellanes de la capilla mozárabe le nombraron por tal en la capellanía que estaba vacante por muerte de Bernabé de Tamayo, el 13 de marzo de 1592 (Ibid., fol. 220r).

(416).- El 10 de marzo de 1592, el consistorio le encomendó dos capellanías de Gutierre Díaz en la capilla de la Trinidad, vacas por dejación de Eugenio Camacho (Ibid., fol. 221v).

(417).- Natural de Ampuero, en la diócesis de Burgos, el 16 de abril de 1592, el capítulo le cometió una capellanía de doña Mencia de Haro y otra de don Gutierre (Ibid., fol. 229r).

(418).- Natural de Toledo, el 21 de abril de 1592, el cabildo le otorgó dos capellanías, una del capiscol Fernando de Illescas y otra del doctor Herrera de que hizo dejación Juan Ruíz, clérigo, con licencia del Consejo Arzobispal (Ibid., fol. 131v).

(419).- Clérigo de Corona y Grados de la diócesis de Cuenca, el consistorio le cometió, el 13 de julio de 1592, una capellanía de la capilla de San Bricio dotada por doña Catalina Ramírez (Ibid., fol. 251r-v).

(420).- Clérigo de Grado, vecino de la Guardia, el capítulo le encomendó, el 15 de junio de 1592, la capellanía del Ambitu que instituyó Fernando de Illescas, después de admitir la dejación que hizo el licenciado Alderete de Pantoja, vecino de Valdemoro (Ibid., fol. 245v).

(421).- El 22 de junio de 1592, hizo presentación al cabildo de la bula apostólica por la que era proveído en la capellanía mayor de la iglesia de Toledo, por resignación simple que hizo Juan de Vargas en manos del pontífice (Ibid., fols. 247r-248r)

Miguel García (422)

Pedro Sánchez (423)

Miguel de Burgos (424)

Luis Moreno (425)

Juan Gutiérrez (426)

Agustín Fernández (427)

Juan de Fuentes (428)

Luis de Avila (429)

(422).- Clérigo de Corona y Grados de la diócesis de Cuenca, el consistorio le cometió, el 13 de julio de 1592, una capellanía de la capilla de San Bricio dotada por doña Catalina Ramírez (Ibid., fol. 251r-v).

(423).- Racionero, el 24 de julio de 1592, el capítulo le nombró primer capellán de la capilla fundada por Francisco García Valloboso (Ibid., fol. 253v).

(424).- Clérigo de Evangelio, Gabriel Suárez, semanero mayor, le presentó el 22 de octubre de 1592, para ocupar la capellanía de Pedro Tenorio vaca por muerte de Simón de Cuevas, siendo admitido (Ibid., fol. 273r-v).

(425).- El 31 de octubre de 1592, hizo presentación al cabildo de la provisión y colación hecha por Quiroga para ocupar la capellanía del Coro vacante por el fallecimiento de Simón de Cuevas. Tomó posesión el 7 de diciembre (Ibid., fols. 275r, 281v).

(426).- Natural de Alcalá de Henares, el consistorio le encomendó, el 16 de diciembre de 1592, dos capellanías del Ambitu, una del abad de San Vicente y otra de los maestrescuelas, por dejación de Juan Sánchez, vecino de la villa del Campo (Ibid., fol. 283v).

(427).- De la diócesis de Segovia, el 30 de mayo de 1593, el cabildo le proveyó en una de las capellanías que fundó el doctor Vergara en el Hospital del Nuncio, vacante por el fallecimiento del bachiller Juan de Campoverde. Igualmente, al día siguiente, le encomendaron dos capellanías que el maestre de Santiago don Alvaro de Luna fundó en la capilla de Santiago, de las que había hecho dejación el licenciado Juan de Guemes. Obtuvo licencia del Consejo arzobispal, puesto que, por sus otras provisiones no podía servir en todas. No obstante, el 28 de agosto de 1594, Tomás de Borja le designó para ocupar la capellanía del obispo de Avila, vaca por dejación del licenciado Ayora (Ibid., Vol.21, fols. 25v, 26r, 155r).

(428).- Clérigo presbítero, presentó al cabildo, el 25 de junio de 1593, la provisión y colación hecha por Quiroga, por la que era proveído en la capellanía del Coro vaca por muerte de Diego Fernández de Ortégón. Tomó posesión el día 30 del mismo mes (Ibid., fols. 50r, 51r-v).

(429).- El 26 de junio de 1593, Francisco de Rojas, patrón de la capilla de la Epifanía, mombró al maestro Luis de Avila capellán de la misma para cubrir la vacante producida por el fallecimiento de Gabriel Pérez (Ibid., fol. 50v).

José de Valdivieso (430)

Miguel García (431)

Gregorio López (432)

Alonso López (433)

Cristobal Hernández (434)

Alonso Campillo (435)

Jerónimo de la Fuente (436)

Juan de Mora Halcón (437)

(430).- El 30 de junio de 1593 notificó al cabildo la nominación del capellán mayor y de los capellanes de la capilla mozárabe para ocupar una capellanía de la misma vaca por muerte de Diego Hernández de Ortegón. Tomó posesión el 9 de julio (Ibid., fols. 50v-51r, 52v-53r).

(431).- Natural de Tarancón, en la diócesis de Cuenca, y residente en la ciudad de Toledo, fue nombrado por el consistorio para ocupar una capellanía de las de Pedro Fernández de Burgos en la capilla de la Epifanía el 9 de septiembre de 1593, cuando admitieron la dejación realizada por Juan Gómez, clérigo presbítero de la villa de Ajofrín, que no la podía servir por estar residiendo en dicha población, donde tenía otra capellanía (Ibid., fol. 68r).

(432).- Clérigo de Grados y sacristán del Hospital de Santa Cruz, el 13 de septiembre de 1593, fue nominado por el capítulo en dos capellanías, una de Cristóbal Velázquez en la capilla de Santa Lucía, y otra de Hernán Pérez de Ayala en la capilla de Nuestra Señora de la Estrella, de las que hizo dejación el licenciado Antonio Calderón, cura propio de San Bartolomé de Sonsoles en Toledo (Ibid., fol. 69v).

(433).- El 5 de noviembre de 1593, hizo presentación al consistorio de la provisión y colación realizada por el arzobispo, por la que era proveído en la capellanía de Coro vaca por muerte de Gabriel Pérez (Ibid., fol. 90r).

(434).- Rodrigo Dávalos, semanero mayor, le nombró, el 26 de noviembre de 1593, en la capellanía de San Pedro vaca por el fallecimiento de Pedro de Acebedo (Ibid., fols. 94v-95r).

(435).- El 26 de noviembre de 1593, Rodrigo Dávalos, semanero mayor, le nominó para ocupar una capellanía de doña Teresa de Haro, que estaba vacante por la muerte de Pedro de Acebedo (Ibid.).

(436).- Licenciado y natural de Toledo, Bernardino de Sotomayor, semanero mayor, le designó capellán en la capilla de Pedro Tenorio, en la vacante producida por el fallecimiento de Alonso Maldonado (Ibid., fol. 98r).

(437).- El 20 de diciembre de 1593, hizo presentación al consistorio de la provisión de una capellanía del Coro realizada por el arzobispo, que se encontraba vacante por la resignación hecha en manos del prelado por Juan de Fuentes (Ibid., fol. 113v).

Marcos de Lara (438)
Juan Fernández Suárez (439)
Alonso de las Mariñas (440)
Licenciado Gomara (441)
Blas González (442)
Benito Arroyo Ballesteros (443)
Pedro González Pantoja (444)
Lucas Ximénez (445)
Diego Ballesteros (446)

(438).- El capítulo le encomendó, el 4 de febrero de 1594, dos capellanías, una del capiscol Fernando de Illescas, y otra del doctor Herrera, que vacaron por dejación de Miguel Campillo (Ibid., fol. 113v).

(439).- El 15 de febrero de 1594, presentó al cabildo la colación realizada por Quiroga, por la que era proveído en la capellanía del Coro vaca por la muerte de Juan Gómez. Tomó posesión el 28 de junio (Ibid., fols. 115r, 142r, 145r).

(440).- Racionero, el 17 de febrero de 1594, el consistorio le encomendó la capellanía del cardenal Pedro González de Mendoza que vacó por dejación del racionero Gómez de Mendoza (ibid., fol. 115v).

(441).- El cabildo le nombró, el 7 de mayo de 1594, capellán de la capilla que dotó Gabriel de Cárdenas en el altar de Nuestra Señora de Gracia (Ibid., fol. 135r).

(442).- Clérigo presbítero, el 13 de mayo de 1594, Francisco de Espinosa, semanero mayor, le nombró capellán de San Pedro en la capellanía vaca por la muerte de Francisco de Torres Carvajal (Ibid., fol. 136v).

(443).- El 7 de junio de 1594, el licenciado Gomara, semanero mayor, le nominó para la capellanía del arcediano de Siruela, vaca por el fallecimiento de Cristóbal Rodríguez (Ibid., fol. 140r).

(444).- Por la muerte de Cristóbal Rodríguez, el licenciado Gomara, semanero mayor, designó a Pedro González Pantoja en la capellanía de Pedro Fernández de Burgos que había quedado vacante, el 7 de junio de 1594 (Ibid.).

(445).- El cabildo le encomendó, el 23 de junio de 1594, una capellanía del arcediano de Guadalajara, fundada en la capilla de Santa Lucía, vacante por dejación del licenciado Villafañe (Ibid., fol. 143r).

(446).- El 15 de septiembre de 1594, el licenciado Gomara, semanero mayor, le nombraba capellán de San Pedro en la capilla vaca por el fallecimiento de Andrés de Arévalo (Ibid., fol. 159r).

Alonso Muñoz (447)

CLERIZONES:

Francisco de Luz (448)

Antonio Serrano(449)

Domingo de Morales (450)

Blas Ortega (451)

Juan Gómez (452)

Alonso de Salazar (453)

Francisco Merchante

Alonso Merchante (454)

Francisco Muñoz (455)

Blas Hernández (456)

Juan López Romero (457)

(447).- El 28 de septiembre de 1594 notificó al cabildo la provisión y colación realizada por Quiroga, por la que le proveía en la capellanía del Coro vaca por muerte de Gaspar Machuca (Ibid., fol. 162r).

(448).- Vecino de San Martín de la Vega, obtuvo nombramiento el 2 de noviembre de 1577 (Ibid., Vol.16, fol.142r).

(449).- Vecino de Toledo, fue nombrdo el 7 de marzo de 1578 (Ibid., fol.178v).

(450).- Recibió el nombramiento el 24 de octubre de 1578 (Ibid., fol.245).

(451).- Vecino de Villaseca, obtuvo el nombramiento el 14 de noviembre de 1578 (Ibid., fol.251v).

(452).- Vecino de Toledo, fue admitido el 29 de noviembre de 1578, recibiendo nombramiento el 10 de abril de 1579 (Ibid., fols.252r y 280r).

(453).- Fue recibido el 5 de diciembre de 1578 (ibid., fol.252v).

(454).- Ambos hermanos, naturales de Cuenca, fueron admitidos el 11 de diciembre de 1578 (Ibid., fol.253r).

(455).- Vecino de Castil de Vayuela, fue nombrado el 2 de marzo de 1579 (Ibid., fol.269v).

(456).- Vecino de Añover, fue nombrado el 29 de abril de 1579 (Ibid., fol.283v).

(457).- Vecino de Torrejoncillo, diócesis de Cuenca, obtuvo nombramiento el 5 de junio de 1579 (Ibid., fol.288v).

Agustín de Ocaña (458)
Francisco Sánchez (459)
Cristobal de Valdepareja (460)
Felipe de la Oliva (461)
Hernán Joan (462)
Antón de Bolaños (463)
Juan Castellano (464)
Alonso Gómez (465)
Alonso Pérez (466)
Blas Martín (467)
Felipe Hernández (468)
Miguel López Romero (469)
Eugenio Ruiz (470)

(458).- Vecino de Seseña, fue admitido el 21 de julio de 1579, siendo recibido el 28 de septiembre (Ibid., fols.297v y 309r).

(459).- Natural de Carrión, fue recibido el 28 de septiembre de 1579 (Ibid., fol.309r).

(460).- Paje del deán Diego de Castilla, fue recibido el 17 de noviembre de 1579 (Ibid., fol.322r).

(461).- Fue recibido el 16 de enero de 1580 (Ibid., fol.344r; Ibid., Vol.17, fol.40v y 149r).

(462).- Vecino de Migelturra, fue recibido el 11 de julio de 1580 (Ibid., Vol.16, fol.371r).

(463).- Vecino de Ciudad Real, fue recibido el 21 de julio de 1580 (Ibid., fol.378r).

(464).- Vecino de Ajofrín, fue recibido el 27 de julio de 1580 (Ibid., fol.379r).

(465).- Natural de Dos Barrios, obtuvo su recibimiento el 1 de octubre de 1580 (Ibid., fol.394v).

(466).- Vecino de Getafe, fue nombrado el 17 de noviembre de 1580 (Ibid., fol.409r; Ibid., Vol.17, fol.3r).

(467).- Natural de Hazaña, obtuvo nombramiento el 14 de diciembre de 1580 (Ibid., Vol.16, fol.413v; Ibid., Vol.17, fol.19r).

(468).- Natural de Ajofrín, fue recibido el 13 de enero de 1581 (Ibid., Vol.17, fol.5r).

(469).- Natural de Torrejoncillo, diócesis de Cuenca, fue recibido el 1 de febrero de 1581 (Ibid., fols.8v y 21r).

(470).- Expósito, fue recibido el 4 de febrero de 1581 (Ibid., fol.9v).

Antonio Ciruelo (471)
Diego de Bolaños (472)
Lorenzo González (473)
Juan de Vega Arnalte (474)
Melchor de Cuadros (475)
Andrés de Magán (476)
Luis de la Cruz (477)
Juan Bautista del Rincón (478)
Alonso Martín (479)
Juan Bautista Martínez (480)
Alonso Galán (481)
Damián Martín (482)
Alonso de Quincoces (483)
Baltasar García (484)

(471).- Natural de Valdemoro, fue admitido el 16 de marzo de 1581 (Ibid., fol.19r).

(472).- Natural de Ciudad Real, fue admitido el 20 de marzo de 1581 (Ibid., fol.19v).

(473).- Natural de Toledo, fue recibido el 1 de junio de 1581 (Ibid., fol.32v).

(474).- Fue recibido el 8 de junio de 1581 (Ibid., fol.35v).

(475).- Fue seise de la iglesia de Toledo. Fue recibido el 17 de junio de 1581 (Ibid., fol.38v).

(476).- Fue recibido el 17 de junio de 1581 (Ibid., fol.39r).

(477).- Recibido el 17 de junio de 1581 (Ibid., fol.39r).

(478).- Recibido el 17 de junio de 1581 (Ibid., fol.39r).

(479).- Fue recibido el 17 de junio de 1581 (Ibid., fol.39r).

(480).- Fue recibido el 23 de junio de 1581, formalizándose su admisión el 20 de diciembre del año siguiente (Ibid., fol.40v y 163r).

(481).- Natural de Hernanconónigo, fue recibido el 5 de julio de 1581 (Ibid., fol.43v).

(482).- Fue recibido el 6 de julio de 1581 (Ibid., fol.44v).

(483).- Recibido el 10 de julio de 1581 (Ibid., fol.45v).

(484).- Fue recibido el 14 de julio de 1581 (Ibid., fol.46v).

Luis de Aguilera (485)

Juan de Ocaña (486)

Esteban Benitos (487)

Andrés Benitos (488)

Andrés López (489)

Agustín de Xuera (490)

Jerónimo de Mora (491)

Miguel Gómez (492)

Gregorio de Ayala (493)

Juan Gómez (494)

Diego de Portillo (495)

Miguel Ortega (496)

Alonso Pérez (497)

Bartolomé Sanz (498)

(485).- Natural de las Ventas, fue recibido el 24 de julio de 1581 (Ibid., fol.48r).

(486).- Fue recibido el 27 de julio de 1581 (Ibid., fol.49v).

(487).- Recibido el 27 de julio de 1581 (Ibid., fol.49v).

(488).- Fue recibido el 27 de julio de 1581 (Ibid., fol.49v).

(489).- Recibido el 29 de julio de 1581 (Ibid., fol.50r).

(490).- Fue recibido el 29 de julio de 1581 (Ibid., fol.50r).

(491).- Recibido el 29 de julio de 1581 (Ibid., fol.50r).

(492).- Fue recibido el 8 de agosto de 1581 (Ibid., fol.51r).

(493).- Fue recibido el 11 de agosto de 1581 (Ibid., fol.52v).

(494).- Natural de Toledo, fue recibido el 16 de agosto de 1581 (Ibid., fol.53v).

(495).- Recibido el 19 de agosto de 1581 (Ibid., fol.54v).

(496).- Fue recibido el 30 de agosto de 1581, formalizándose su admisión el 17 de noviembre (Ibid., fols.56v y 76r).

(497).- Admitido el 15 de septiembre de 1581 (Ibid., fol.62v).

(498).- Fue admitido el 22 de septiembre de 1581, siendo finalmente recibido el 18 de abril de 1582 (Ibid., fol.63v y 106r).

Pedro García Luengo (499)
José Pérez (500)
Alonso de Yunquera (501)
Pero Ruiz (502)
Francisco de Guzmán (503)
Domingo Moreno (504)
Marcos de Uriarte (505)
Luis Frontal (506)
Francisco Mudarra (507)
Simón Cuadrado (508)
Tomás Rodríguez (509)
Juan Molero (510)
Juan de Ocaña (511)

(499).- Recibido el 2 de octubre de 1581, formalizó su admisión el 17 de septiembre de 1583 (Ibid., fol.64v y 223v).

(500).- Fue recibido el 2 de octubre de 1581 (Ibid., fol.64v).

(501).- Recibido el 2 de octubre de 1581 (Ibid., fols.64v y 85r).

(502).- Recibido el 2 de octubre de 1581, formalizó su admisión el 13 de enero de 1582 (Ibid., fols.64v y 87v).

(503).- Fue recibido el 9 de octubre de 1581 (Ibid., fol.65v).

(504).- Recibido el 3 de noviembre de 1581 (Ibid., fols.71v y 80v).

(505).- Recibido el 3 de noviembre de 1581, formalizó su admisión el 8 de agosto de 1582 (Ibid., fols.71v y 135r).

(506).- Fue recibido el 6 de septiembre de 1581 (Ibid., fol.72r).

(507).- Fue recibido el 6 de septiembre de 1581 (Ibid., fols.72r y 138r).

(508).- Fue recibido el 23 de diciembre de 1581 (Ibid., fols.83v, 85r y 145v).

(509).- Recibido el 23 de diciembre de 1581 (Ibid., fols.83v, 85r y 99v).

(510).- Fue admitido el 3 de enero de 1582 (Ibid., fol.85r).

(511).- Admitido el 31 de enero de 1582 (Ibid., fol.90v).

Simón Hernández (512)
José Hernández
Juan Calderón (513)
Baltasar García (514)
Juan Gómez (515)
Alonso Serrano (516)
Juan Benito (517)
Pedro Alfonso de Huerta (518)
Francisco Martín (519)
Juan Gómez (520)
Francisco Pedrero (521)
Alonso Ruiz de la Franca (522)
Juan Angel (523)
Juan Sánchez (524)

(512).- Recibido junto a su hermano José el 24 de marzo de 1582. El 8 de marzo de 1583 fue admitido como seise (Ibid., fols.100v y 176v).

(513).- Admitido el 29 de marzo de 1582 (Ibid., fol.102r).

(514).- Fue admitido el 30 de mayo de 1582 (Ibid., fol.117v).

(515).- Fue admitido el 4 de julio de 1582 (Ibid., fol.126r).

(516).- Admitido el 13 de septiembre de 1582 (Ibid., fol.143v).

(517).- Fue admitido el 17 de septiembre de 1582 (Ibid., fol.145r).

(518).- Admitido el 22 de noviembre de 1582 (Ibid., fol.157r).

(519).- Maestro natural de Ajofrín, fue admitido el 3 de enero de 1583 (Ibid., fol.165v).

(520).- Natural de Morata, fue admitido el 26 de enero de 1583 (Ibid., fols.170r y 224v).

(521).- Natural de San Martín de Valdeiglesias, fue admitido el 3 de marzo de 1583, formalizando la dicha admisión el 26 de septiembre (Ibid., fols.175v y 225v).

(522).- Natural de Almagro, fue recibido el 22 de abril de 1583 (Ibid., fols.189r y 241v).

(523).- Fue admitido el 7 de mayo de 1583 (Ibid., fol.192v).

(524).- Natural de Pulgar, fue admitido el 9 de mayo de 1583 (Ibid., fols.193r y 235r).

Gabriel Serrano (525)
Alonso Lozano (526)
Jerónimo López (527)
Pero López de Yela (528)
Gino de Gasceña (529)
Miguel Gómez (530)
Francisco Gonzalo (531)
Gaspar Ximénez (532)
Miguel Crespo (533)
Pedro Díaz (534)
Pedro de Moragón (535)
Gregorio Baltanas (536)
Francisco Romero (537)
Juan Serrano (538)

(525).- Natural de Escalona, fue admitido el 15 de julio de 1583 (Ibid., fols.211r y 217r).

(526).- Admitido el 23 de septiembre de 1583 (Ibid., fol.224v).

(527).- Hijo de Pedro López y Susana López, vecinos de Toledo, fue recibido el 8 de octubre de 1583 (Ibid., fol.229r).

(528).- Admitido el 26 de octubre de 1583 (Ibid., fol.234r).

(529).- Fue admitido el 28 de noviembre de 1583 (Ibid., fol.238v).

(530).- Admitido el 30 de enero de 1584 (Ibid., Vol.18, fol.13r).

(531).- Natural de Fuencarral, fue admitido el 27 de septiembre de 1584 (Ibid., fols.77v y 93v).

(532).- Fue recibido el 29 de octubre de 1584 (Ibid., fols.84v y 87r).

(533).- Fue admitido el 2 de diciembre de 1585 (Ibid., fol.198v).

(534).- Natural de la villa de Mora, fue admitido el 22 de marzo de 1586 (Ibid., fol.224v).

(535).- Natural de Villa Robledo, fue admitido el 24 de abril de 1586 (Ibid., fol.232v).

(536).- Natural de Parla, fue recibido el 16 de junio de 1586 (Ibid., fol.251v).

(537).- Admitido el 23 de junio de 1586 (Ibid., fol.252v).

(538).- Fue admitido el 25 de junio de 1586 (Ibid., fol.252v).

Andrés de Soria (539)
Francisco Vázquez (540)
Diego Martínez (541)
Pedro Díaz (542)
Sebastián López (543)
Zacarías García
Pablo Gutiérrez (544)
Gaspar Maldonado (545)
Eugenio de Tarazona
Pedro de Juera (546)
Diego Garroz (547)
Alonso de Ocaña (548)
Miguel López (549)
Juan de Castaneda (550)
Juan de Mora(551)

-
- (539).- Fue admitido el 14 de febrero de 1587 (Ibid., Vol.19, fol. 10v).
- (540).- Natural de Dosbarrios, fue recibido el 26 de febrero de 1587 (Ibid., fol. 12v).
- (541).- Admitido, igualmente, el 26 de febrero de 1587, era natural de Lillo (Ibid.).
- (542).- Natural de Cerralvo, fue admitido el 10 de febrero de 1588 (Ibid., fol. 86v).
- (543).- El 15 de febrero de 1588, fueron admitidos Sebastián López y Zacarías García (Ibid., fol. 88r).
- (544).- Fue admitido el 17 de febrero de 1588 (Ibid., fol. 89r).
- (545).- Junto a Eugenio de Tarazona, obtuvo su admisión el 24 de febrero de 1588 (Ibid., fol. 91r).
- (546).- Admitido el 17 de marzo de 1588 (Ibid., fol. 89r).
- (547).- Natural de Yebenes, fue admitido el 31 de marzo de 1588 (Ibid., fol. 98v).
- (548).- Natural de Valdemoro, fue admitido el 31 de marzo de 1588 (Ibid.).
- (549).- El 17 de mayo de 1588, se admitió a Miguel López, natural de Toledo (Ibid., fol. 112r).
- (550).- Fue admitido el 27 de junio de 1588 (Ibid., fol. 117v).
- (551).- Junto a Miguel Martín, fue admitido el 12 de septiembre de 1588 (Ibid., fol. 134v).

Miguel Martín

Francisco Muñoz (552)

Juan Calvo (553)

Luis López de Vega (554)

Antonio Sánchez Halcón

Juan de Arriba (555)

Antonio de la Parra (556)

Alonso Gómez Domínguez

Alonso González (557)

Pedro Fresno

Diego Nieto (558)

Alonso de la Paz (559)

Cristóbal Cordones (560)

Gabriel de Huelves (561)

Juan García (562)

Diego Díaz (563)

(552).- Natural de Toledo, fue admitido el 15 de septiembre de 1588 (Ibid., fol. 135v).

(553).- Admitido el 19 de septiembre de 1588 (Ibid.).

(554).- Junto con Antonio Sánchez Halcón, ambos naturales de Dosbarrios, fue admitido el 26 de septiembre de 1588 (Ibid., fol. 136v).

(555).- Fue hecha la admisión el 19 de octubre de 1588 (Ibid., fol. 140v).

(556).- Admitido, junto a Alonso Gómez Domínguez, el 22 de octubre de 1588 (Ibid., fol. 141r).

(557).- El 12 de diciembre de 1588, fue admitido junto a Pedro Fresno (Ibid., fol. 152v).

(558).- Natural de Ventosa, fue admitido el 22 de abril de 1589 (Ibid., fol. 189r).

(559).- Natural de Añover, fue admitido el 24 de abril de 1589 (Ibid., fol. 190r).

(560).- Fue admitido el 28 de abril de 1589 (Ibid., fol. 190v).

(561).- El 5 de julio de 1589 quedó admitido como clerizón (Ibid., fol. 207v).

(562).- Natural de Casamuros, fue admitido el 17 de noviembre de 1589 (Ibid., fol. 243v).

(563).- Natural de Añover, fue admitido el 17 de noviembre de 1589 (Ibid.).

Mateo Sánchez (564)
Hernando de Sepúlveda (565)
Esteban Primo
Melchor de Guzmán (566)
Antonio Alonso (567)
Juan de Torralba (568)
Alonso López (569)
Francisco de Oliva (570)
Esteban López (571)
Juan Muñoz (572)
Gonzalo Rubio (573)
Francisco Hernández (574)
Diego Sánchez (575)
Pedro Gómez de Rojas (576)

(564).- Natural de San Martín de Valdeiglesias, fue admitido el 11 de diciembre de 1589 (Ibid., fol. 247v).

(565).- Junto a Esteban Primo, fue admitido el 20 de noviembre de 1589 (Ibid., fol. 251r).

(566).- Fue admitido el 26 de enero de 1590 (Ibid., vol.20, fols. 6v-7r).

(567).- Natural de Tembleque, se realizó su admisión el 3 de marzo de 1590 (Ibid., fol. 17r).

(568).- Admitido el 20 de junio de 1590, era natural de Dosbarrios (Ibid., fol. 61r).

(569).- Natural de la Puebla de Montalbán, fue admitido el 3 de julio de 1590 (Ibid., fol. 63v).

(570).- Fue admitido el 6 de octubre de 1590 (Ibid., fol. 81v).

(571).- Natural de la Torre de Esteban Ambrán, fue admitido el 4 de abril de 1591 (Ibid., fol. 128r).

(572).- Admitido el 23 de septiembre de 1591, era natural de Lillo (Ibid., fol. 175r).

(573).- Fue admitido el 24 de septiembre de 1591 (Ibid.).

(574).- Admitido el 29 de noviembre de 1591 (Ibid., fol. 190v)

(575).- Fue admitido el 2 de diciembre de 1591 (Ibid., fol. 191r).

(576).- Natural de Sonseca, fue admitido el 11 de diciembre de 1591 (Ibid., fol. 192r).

Francisco Rodero (577)

Pedro de Rama (578)

Francisco de Moraleda (579)

Pedro Hernández (580)

Pedro Hernández (581)

Antonio Muñoz (582)

Francisco Gómez (583)

Tomás Moralejo (584)

Juan Zorrilla de la Concha (585)

Aparicio Ruiz (586)

Miguel López (587)

REFITOLEROS:

Licdo. Alonso Méndez de Robles (588)

Gonzalo Patiño (589)

(577).- Natural de Miguel Turra, fue admitido el 17 de junio de 1592 (Ibid., fol. 245v).

(578).- Admitido el 14 de octubre de 1592 (Ibid., fol. 271r).

(579).- Fue admitido el 26 de octubre de 1592 (Ibid., fol. 274r).

(580).- Natural de Borox, fue admitido el 25 de junio de 1593 (Ibid., Vol.21, fol. 49v).

(581).- Natural de Leganés, fue admitido el 10 de septiembre de 1593 (Ibid., fol. 69r).

(582).- Admitido el 13 de septiembre de 1593, era natural de Lillo (Ibid., fol. 70r).

(583).- Natural de Sonseca, fue admitido el 29 de enero de 1594 (Ibid., fol. 112v).

(584).- Natural de Valdemoro, fue admitido el 1 de febrero de 1594 (Ibid., fol. 113r).

(585).- Fue admitido el 29 de marzo de 1594 (Ibid., fol. 126v).

(586).- Natural de Orche, fue admitido el 13 de julio de 1594 (Ibid., fol. 146r).

(587).- Fue admitido el 15 de octubre de 1594. Era natural de Vianos (Ibid., fol. 166v).

(588).- Vecino de Yepes, recibió el nombramiento el 12 de diciembre de 1577, para comenzar a ejercer el oficio el 1 de enero de 1578. Se le señaló un salario de seiscientos ducados cada año y cien escudos de gratificación por el trabajo de tomar las cuentas a los solicitadores (Ibid., Vol.16, fol.148r).

(589).- Su nombramiento fue realizado el 16 de octubre de 1581 (Ibid., Vol.17, fol.68r).

Juan de Molina (590)

SACRISTANES GENERALES:

Alonso Caballero (591)

ARCEDIANOS:

Además de los ya consignados como canónigos aparecen:

Fernando Enríquez (592)

Pedro de Deza junior (593)

Gabriel Suárez de Toledo (594)

Gaspar de Quiroga (595)

Rodrigo de Castro (596)

ARCIPRESTES:

Pedro de Tapia (597)

(590).- El 30 de abril de 1588, el cabildo votó que permaneciese un año más ostentando este oficio, obteniendo nombramiento el 7 de enero de 1589 (Ibid., Vol.19, fols. 106r-107r, 156v-157r).

(591).- Racionero, fue proveído en dicho cargo el 12 de junio de 1578 en lugar de Cristobal de Berrio (Ibid., Vol.16, fol.206v).

(592).- El 10 de septiembre de 1578 recibió nombramiento como arcediano de Madrid (Ibid., Vol.16, fols.233r-234v).

(593).- El 9 de septiembre de 1579 hizo presentación al cabildo de la provisión pontificia como arcediano de Calatrava (Ibid., fol.306r).

(594).- El 18 de abril de 1587 presentó al cabildo la bula y letras apostólicas por las que era proveído como arcediano de Madrid, cargo vacante por la resignación hecha en manos del pontífice por Fernando Enríquez (Ibid., Vol.19, fols. 24r-25r).

(595).- Capiscol y canónigo, el 15 de febrero de 1592, presentó al cabildo la provisión y colación hecha por Quiroga, por la que le proveía en el arcedianato de Talavera, vacante por la muerte del Cardenal Juan de Mendoza (Ibid., Vol.20, fols. 212r-v).

(596).- Clérigo de la diócesis de Palencia, el 17 de mayo de 1593, notificó al capítulo la provisión y colación realizada por el arzobispo, por la que era proveído en el arcedianato de Alcaraz, vacante por el fallecimiento de Alonso del Aguila. Tomó posesión el 14 de abril de 1594 (Ibid., Vol.21, fols. 38r-v, 93r, 127v-128r, 129v).

(597).- Opositor la la canonjía y prebenda doctoral obtenida por el doctor Navarro, fue proveído en el arciprestazgo de Santa Olalla el 22 de marzo de 1583 (Ibid., Vol.17, fol.181r).

CONSEJO DE LA DIGNIDAD

Licenciado Martínez (598)

Pedro de Pantoja (599)

Doctor Juan de Obregón (600)

Licdo. Alonso Serrano (601)

Francisco de Pantoja (602)

Licenciado Virviesca (603)

Antonio Morejón

Francisco de Escobar (604)

Andrés Fernández (605)

Licdo. Bautista Vélez (606)

Pedro de Carvajal (607)

(598).- En abril de 1578 tuvo una señalada actuación como visitador de las capillas (Ibid., Vol. 16, fol. 190v).

(599).- Era notario de la Audiencia arzobispal (ibid., fols. 234r-v).

(600).- Vicario general del arzobispado y de la ciudad de Toledo, en diciembre de 1579 fue nombrado canónigo por provisión arzobispal.

(601).- Promovido a una ración en noviembre de 1579, hizo dejación de la misma en agosto de 1581, tomando posesión en su lugar Jerónimo Serrano.

(602).- Desempeñaba el oficio de secretario.

(603).- En marzo de 1581 pasó a ocupar una canonjía doctoral vaca por el fallecimiento de Diego López de Quemada.

(604).- Era notario de la Audiencia arzobispal

(605).- Vicario general del arzobispado, en marzo de 1584 fue promovido a una canonjía por provisión arzobispal.

(606).- M. GUTIERREZ GARCIA-BRAZALES, "El Consejo de Gobernación del Arzobispado de Toledo" Anales toledanos 16 (1983), p. 107.

(607).- Ibid.

APENDICE IV

MAYORDOMIAS

Dichas nóminas han sido elaboradas a través de dos documentos fechados en 1583 y 1589, que se encuentran en el Archivo Diocesano de Toledo, y cuya signatura es, respectivamente, IV/1865 y IV/1945.

MAYORDOMOS DEL PARTIDO DE TOLEDO

Toledo: Fabián de Pareja

Juan Bautista Ruiz

La Guardia: Gabriel Mexía de Cámara

Ocaña: Agustín Sánchez de Hermosa

Illescas: Diego de Alfaro

Juan de Toro

Canales: Garci Sánchez de Bustamante

Rodillas: Gaspar de Espinosa

Montalbán: Hernando de Bustamente

Talavera: Bartolomé Garra y Medrano

Alcolea de Tajo: Juan de Ludueña

Rodrigo Díaz

Escalona: Pedro Ximénez de Sotomayor

Alonso de Molina

Santa Olalla y Maqueda: Juan de Olarte

Puebla de Alcocer: Francisco García de Mansilla

Las Cuadrillas: Diego Montero

Calatrava: Leonardo Rótulo Carrillo

Mateo Elsz de Guevara

Alcaraz: Luis Muñoz de Córdoba

MAYORDOMOS DEL PARTIDO DE ALCALA DE HENARES

Alcalá de Henares: Domingo de Gorgolla

Santorcaz y Los Santos: Diego de Vargas

Juan de Beceguillas

Madrid: Gaspar de Prado

Juan Luis Vitoria

Talamanca: Juan González

Alcolea de Torote: Pedro de Trujillo

Uceda: Francisco González de la Plaza

Buitrago y el valle de Lozoya: Esteban Ahedo de San Pedro

Guadalajara: Diego Martínez Gallego

Hita: Francisco Espinosa del Castillo

Rodrigo del Castillo

Brihuega: Juan de Matallana

Hernando Ruiz

Zorita y Almoguera: Diego Pareja de Llanes

Hernando de Santarem actuaba como receptor general del Partido.

APENDICE V

NOMINA DE LOS OFICIOS DE LA VILLA DE ALCALA

Según una antigua costumbre, el ayuntamiento, justicia y regimiento de la villa de Alcalá de Henares, tras reunirse para elegir y nombrar a las personas que durante un año debían hacerse cargo del ejercicio de los oficios, presentaban una relación al arzobispo de Toledo para que, entre los sujetos propuestos, el prelado hiciese la designación y provisión de los cargos. Los nominados por voluntad de Gaspar de Quiroga en los años indicados fueron:

1582 (608)

Parroquia de Santa María

Regidores

García de Guzmán
Alonso de Villarroel
Vasco Ramírez
Benavente Dávila
Felipe Moradillo
Diego Martínez de Soto

Escribanos

Diego de Castroverde
Luis Díaz
Diego de Almazán

Caballeros de campo

Hernando de Madrid

Gabriel de Herrera

Almotacén

Baltasar Manuel

Parroquia de San JusteRegidores

Antonio de Herrera

Juan de Medinilla

Gregorio de Pliego

Bernardino de Marimol

Diego de Quintanilla

Pedro Gradiel

Escribanos

Juan Ramírez

Juan Pacheco

Gaspar Prieto (609)

Caballeros de campo

Sebastián Martínez

Lucas Guillén

(609).- Por fallecimiento de Gaspar Prieto se nombró en su lugar a Luis de Herrera el 20 de enero de 1582 (Ibid.).

1583 (610)

Parroquia de Santa María

Regidores

Pedro de Olmedilla
Pedro de Loaysa
Melchor de Torres
Antonio de Villarroel
Bautista Ruiz de Vallejo
Gonzalo de Santaren

Escribanos

Diego de Castroverde
Luis Díaz
Diego de Almazán

Caballeros de campo

Hernando de Madrid
Gabriel de Herrera

Almotacén

Baltasar Manuel

Parroquia de San Juste

Regidores

Lázaro de Mendoza
Bernardino de Mármol
Bernardino Ribera
Beltrán de Sansiver

Alonso de Veras

Pedro de Peralta

Escribanos

Julio Ramírez

Julio de Cuevas

Luis de Herrera

Caballeros de campo

Hernando de Madrid

Gabriel de Herrera

Almotacén de la Orden General

Sebastián López

1584 (611)

Parroquia de Santa María

Regidores

Salazar de Zúñiga

Pedro de Contreras

Diego Díaz de Talavera

Cebrián de la Cruz

García Gallo

Alfonso de Arce

Escribanos

Diego de Almazán

Juan Pacheco
Salvador Hernández

Caballeros de campo

Alonso Muñoz
Gabriel de Herrera

Almotacén

Baltasar Manuel

Parroquia de San Juste

Regidores

Hernando de Santaren
Cristobal de Zorita
Juan de Torres
Bernardino Hurtado
Francisco Alvarez de Moradillo
Francisco de Manzanares

Escribanos

Juan de Cuevas
Bernabé Martínez
Luis de Herrera

Caballeros de campo

Sebastián Guillén
Lucas Guillén

Almotacén de la Orden General

Sebastián López

1585 (612)

Parroquia de Santa María

Regidores

Salazar de Zúñiga
Alonso de Villarroel
Licenciado Tamayo
Vasco Ramírez
Benavente Dávila
Sancho Láriz Sarmiento

Escribanos

Diego de Almazán
Luis de Herrera
Diego de Castroverde

Caballeros de campo

Juan de San Pedro
Gabriel de Herrera

Almotacén

Baltasar Manuel

Parroquia de San Juste

Regidores

Juan Alonso de Mendoza
Diego de Vargas Manrique
Antonio de Herrera Barrionuevo

Antonio Alfonso Ximénez

Juan de Medinilla

Francisco de Castro

Escribanos

Bernabé Martínez

Juan de Cuevas

Juan de Ramírez

Caballeros de campo

Juan de Mondragón

Juan de Valladolid

Almotacén de la Orden General

Sebastián López

1594 (613)

Parroquia de Santa María

Regidores

Alonso Ximénez

Diego Martínez de Soto

Nicolás de la Torre

Andrés de Arce

Pedro Hurtado de Montalvo

Luis Verdugo

Escribanos

Juan Fernández

Luis Díaz

Juan de Cobarrubias

Caballeros de campo

Hernando de Madrid

Diego de Vargas

Almotacén

Juan de Mondragón

Parroquia de San JusteRegidores

Gregorio de Pliego

Juan Alonso de Mendoza

López de Herrera Barrionuevo

Lorenzo Hurtado de Santaren

Francisco de Gaona Barreda

Gaspar Pardo

Escribanos

Francisco García de Alharilla

Eugenio de Villalba

Juan de Almazán

Caballeros de campo

Sebastián Guillén

Francisco Sánchez

APENDICE VI

SINODO DIOCESANO DE TOLEDO DE 1580 (614)

El 19 de mayo de 1580, siguiendo el mandato establecido en los decretos tridentinos, Gaspar de Quiroga realizó las siguientes designaciones :

Nombramiento de examinadores sinodales (615)

- Los miembros de su Consejo.
- El maestrescuela de la catedral.
- García de Loaysa (arcediano de Guadalajara).
- Doctor Calderón (canónigo).
- Licenciado Quemada (canónigo).
- Doctor Hondegardo (canónigo).
- Fray Antonio Manrique, franciscano.
- Fray Marcos Valladares, dominico.
- Fray Francisco de Castroverde, agustino.
- Fray Pedro Lezcano, dominico.
- Padre Juan Manuel, preposte de la Compañía de Jesús en Toledo.
- Pedro de Ribadeneyra, jesuita.
- Padre Mariana, jesuita.

Nombramiento de los jueces delegados (616)

- Juan de Mendoza (arcediano de Talavera).

(614).- Los datos aquí recogidos han sido obtenidos de BNM, Ms. 28698.

(615).- Ibid., fols. 77v-78r.

(616).- Ibid., fol. 78r.

- Licenciado Mexía de Gomara (canónigo).
- Doctor Pedro Carvajal (canónigo).
- Licenciado Quemada (canónigo).
- Doctor Hondegardo (canónigo).
- Licenciado Antonio Manrique (canónigo).
- Sancho de Carranza, deán de la colegial de Talavera.
- Diego López de Medrano, tesorero de la iglesia de Talavera.
- Fray Juan de las Cuevas, dominico residente en Talavera, prior de San Ginés.
- Fray Diego de Loaysa, residente en Talavera, prior de San Agustín.
- Doctor Torres, abad de la iglesia colegial de Alcalá.
- Doctor Francisco Sanchez, tesorero de la iglesia de Alcalá.
- Doctor Casas, maestrescuela de la iglesia de Alcalá.
- Doctor Francia, capellán mayor de la iglesia de Alcalá.

Testigos sinodales (617)

En Toledo

- Diego Vázquez, racionero de la catedral.
- Alonso de Torres, cura de la capilla de San Pedro.
- Licenciado Juan López, cura de San Nicolas.
- Licenciado Mora, cura de San Andrés.

En Talavera

- Doctor Cipriano, canónigo de Talavera.

(617).- Su función era que se guardasen y cumpliesen las constituciones sinodales. Ibid., fols. 78r-79v. Por otra parte, cuando se celebró el Concilio provincial de Toledo en 1582-1583, dichas personas fueron encargadas, según se recogía en el decreto 52 de la tercera sesión, de investigar sobre aquellas cuestiones que se debían reformar y ponerlas en conocimiento del sínodo. La lista de las personas designadas contiene algunas diferencias con la que presentamos, motivadas por los cambios que viniesen determinados, posiblemente, por el transcurrir del tiempo. Para poder comparar ambas, véase la publicada por A.FERNANDEZ COLLADO, El Concilio provincial de Toledo de 1582. Roma 1995, pp. 37-39.

- Cristobal de Bustamante, cura de Alcaudete.

En Alcalá

- Doctor de la Puente.
- Maestro Torres, racionero de Alcalá.
- Doctor Gante, cura de Pezuela.

En Madrid

- Licenciado Mathias de Urosa, cura de San Nicolás de Madrid.
- Francisco de Avila, cura de Valdemoro.
- Maestro Gutierre, cura de Getafe.
- Licenciado Pantoja, cura de Mejorada.

En Guadalajara

- Doctor Ximénez de Lasarte.
- Juan de Albornoz.
- Maestro Juan Fernández, cura de Quer.

En la Guardia

- Doctor Escobar, cura de Lillo.
- Juan López, cura de Sonseca.

En Ocaña

- Leandro de Truxillo.
- Licenciado Torres, cura de Dos Barrios.

En Illescas

- Sancho García, cura de Illescas.
- Lorenzo de Soto.

En Canales

- Don Fernando de Mendoza, cura de Chozas.
- Licenciado Castroverde, cura de Camarena.

En Escalona

- Licenciado Pedro Romo, cura de San Martín de Escalona.
- Doctor Juan López, cura de San Martín de Valdeiglesias.

En Rodilla

- Alonso Vázquez, cura de Burujón.
- Doctor Pino, cura de Noves.

En Maqueda

- Licenciado Pero García, cura de Maqueda.
- Doctor Cáncer, cura de Carmena.

En Santa Olalla

- Licenciado Gregorio de León, cura de Techada.
- Licenciado Luis Tofino, cura de San Pedro.

En Montalbán

- Pedro de Hazaña, cura de Cuerva.

-
- Doctor Saavedra de Aguilar, cura de las Ventas.

En Calatrava

- Licenciado Araoz de Coca.
- Jerónimo Carrillo.

En Alcaraz

- Cristobal Requillo, cura de Lecuza.
- Licenciado Figueroa.

En Cazorla

- Licenciado Martín de Tero.
- Francisco de Villalobos, prior de Hiruela.

En Huescar

- Bachiller Francisco Hernández.
- Licenciado Alonso Gómez.

En la Puebla de Alcocer

- Bachiller Lucas Hernández.
- Doctor Aguilar, cura de Orcajo.

En la Vicaría de la Puente

- Ambrosio de Morales.

En Talamanca

- Doctor Vega, cura del Molar.
- Andrés Ortiz de Eguiluz, cura de Porquerizas.

En Uceda

- Licenciado Marco, cura de Nuestra Señora de la Varga.
- Doctor González, cura de Mesones.

En Hita

- Diego Calderón.

En Buitrago y Valle de Lozoya

- Bachiller Juan Orozco.

En Brihuega

- Esteban Carrillo, cura de San Felipe.
- Doctor Ramírez, cura de Fuentes.

En Zorita

- Doctor Fuentes, cura de Yebra.

En Almoguera y Mondejar

- Melchor de Collazos de Almoguera.

En Alcolea de Torote

- Licenciado Rios.

En Cogolludo

- Francisco de Campillos, cura de Santa María.

FUENTES Y BIBLIOGRAFIA

FUENTES MANUSCRITAS

ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE TOLEDO

Actas capitulares

Tomos: 7 a 9, 12, 13, 15 a 21

Manuscritos: V.5.A.1.22; A.9.I.1.2; O.1.F.1.4; O.1.F.1.5.a; O.1.F.1.1; O.1.F.1.1.a; O.1.F.1.2; I.6.B.1.14; A.9.G.1.6.a.

ARCHIVO DE LA CHANCILLERIA DE VALLADOLID

Sala de Hijosdalgos

Leg.: 12

ARCHIVO DEL CONVENTO DE LAS CARMELITAS DE MEDINA DEL CAMPO

Libro de profesiones nº 17

ARCHIVO DEL CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA (Madrigal de las Altas Torres)

Libro de Profesiones

ARCHIVO DIOCESANO DE AVILA

Parroquia de San Nicolás de Bari (Madrigal de las Altas Torres)

Libros: Ordenanza y aprobación de la cofradía de Santiago; 1º de Bautismos.

Parroquia de Santa María del Castillo

Libro: 1º de Bautismos

ARCHIVO DIOCESANO DE TOLEDO

Manuscritos: IV/378; IV/1865; IV/1945; IV/2072.

ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS (Valladolid)

Casa y Sitios Reales

Leg: 258

Cámara de Castilla

Legs: 2179, 2797

Comisaría de Cruzada

Leg: 290

Consejo y Juntas de Hacienda

Legs: 164, 187, 195, 215, 225

Estado

Legs: 162, 163, 165, 399, 400, 401, 411, 422, 424, 428, 559, 568, 571, 829, 830, 915, 917, 921, 929, 930, 935, 1050, 1054, 2855

Guerra y Marina

Legs: 81, 173

Patronato Eclesiástico

Legs: 6, 10

Patronato Real

Legs: 62, 75

Manuscritos: 20-26, 20-59, 20-80, 20-81, 25-35, 30-37, 38-49, 38-53, 62-116, 66-38.

Quitaciones de Corte

Leg: 20

Secretarías Provinciales

Leg: 1

Libro: 424

Visitas de Italia

Legs: 1, 2, 20, 22

Libro: 2

ARCHIVO HISTORICO NACIONAL (Madrid)**Clero**

Leg: 589

Consejos

Leg: 5310

Inquisición

Legs: 42, 1791, 2479, 2947, 3284, 3285, 3314, 4470, 5054

Libros: 249, 251 a 254, 281, 284, 320, 326 a 329, 356 a 359, 361, 378, 578 a 581, 876, 877, 1232, 1235, 1252, 1256, 1279, 1338

Microfilm

caja: 1579

Osuna

Leg: 1696

Universidades

Legs: 8, 10, 329, 545

ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL DE AVILA

Protocolos notariales: 3740, 3749

ARCHIVO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES (Madrid)

Santa Sede

Legs: 9, 20, 21, 26, 35

ARCHIVO SECRETO DEL AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

Manuscritos: Caja 1, leg. 5; Alacena 2, leg. 4

ARCHIVO ZABALBURU (Madrid)

Carpetas: 126 a 131, 135 a 148, 150, 152, 153, 155, 159, 211

BIBLIOTECA DEL COLEGIO DE SANTA CRUZ DE VALLADOLID

Manuscritos: 16, 316

BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID

Manuscritos: 621, 622, 718, 988, 1029, 1045, 1749, 1761, 3451, 3537, 5684, 5767, 6170, 6278, 6807, 7108, 7445, 7669, 9175, 13019, 13027, 13031, 13044, 28698

BIBLIOTECA DEL PALACIO REAL DE MADRID

caja: 49

Manuscritos: II/1823, II-233

Micrifilm: 1356

BRITISH LIBRARY (Londres)

Additional: 16.176, 28.262, 28.351, 28.359, 28.452, 28.704

Egerton: 1506

INSTITUTO VALENCIA DE DON JUAN (Madrid)

Envíos: 6 a 10, 15, 16, 21, 22, 24, 51, 53, 55 a 57, 60, 62, 63, 76, 80, 81, 87, 89 a 92, 94 a 96, 100, 109, 111

REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA (Madrid)

Códice: 184

Colección Salazar: Manuscritos A-49, A-52, A-82, A-111, A-112, C-14, D-31, F-24, M-13, N-2, N-4, R-63, O-2

Colección Pellicer: Tomo XXVIII

FUENTES IMPRESAS Y BIBLIOGRAFIA

ABAD, C.M., Doña Magdalena de Ulloa. La educadora de Don Juan de Austria y la fundadora del colegio de la Compañía de Jesús de Villagarcía de Campos. (1525-1598). Santander 1959.

ACOSTA GONZALEZ, A., Estudio comparado de tribunales inquisitoriales. UNED 1991.

AJO GONZALEZ DE RAPARIEGOS, C.M., Historia de Avila y su tierra. Salamanca 1992.

ALARCON, M.A., Apuntes históricos sobre la Villa de Torrijos. Valencia 1894.

ALBERI, E., Le relazioni degli ambasciatori veneti al Senato durante il secolo decimosesto. Florencia 1839-1863.

ALCALA, A., El proceso de Fray Luis de León. Junta de Castilla y León 1991.

- "Control inquisitorial de humanistas y escritores". A. ALCALA y OTROS, Inquisición española y mentalidad inquisitorial. Barcelona 1984, pp, 288-314.

- ALCALA, A., Y OTROS. Inquisición española y mentalidad inquisitorial. Barcelona 1984.
- ALCAZAR, B., Chrono-Historia de la Compañía de Jesús en la Provincia de Toledo. Madrid 1710.
- ALCOCER MARTINEZ, M., Historia de la Universidad de Valladolid. Valladolid 1918.
- ALDEA, VIVES y MARIN, Diccionario de Historia Eclesiástica de España. Madrid 1975.
- ALONSO CORTES, M.N., Catálogo de manuscritos de la Biblioteca de Santa Cruz. Valladolid 1976.
- ALONSO VAÑES, C., Doña Ana de Austria. Abadesa del Real Monasterio de las Huelgas. Sus primeros años de gobierno (1611-1614). Madrid 1990.
- ALVAR EZQUERRA, A., "De una delicada relación personal a una cuestión de Estado" La princesa de Eboli y Pastrana. Guadalajara 1993, pp, 7-34.
- ALVAREZ, L., "Contribución al estudio de la reforma religiosa en el reinado de los Reyes Católicos" Revista Agustiniana de espiritualidad 5 (1964), pp, 145-212.
- AMADOR DE LOS RIOS, J., Historia de los judíos en España y Portugal. Madrid 1984.
- ANDRES, G.DE, "El helenismo del canónigo toledano Antonio de Covarrubias. Un capítulo del humanismo en Toledo en el siglo XVI" Hispania Sacra 40 (1988), pp, 237-271.
- Proceso inquisitorial del Padre Sigüenza. Madrid 1975.
 - "El arcediano de Cuenca Don Luis de Castilla († 1618) protector de El Greco y su biblioteca manuscrita" Hispania Sacra. 35 (1983), pp 87-141.
- ANDRES, M., "Introducción" al Dictatum Christianum de Arias Montano. Badajoz 1983.
- Pensamiento teológico y vivencia religiosa en la reforma española. Cáceres 1980.
 - La Teología española en el siglo XVI. Madrid 1976.

- Los Recogidos. Nueva visión de la mística española (1500-1700). Madrid 1975.

ANTONIO TEIJEIRO, L., Quiroga, encomienda de San Juan. Lugo 1988.

ARAMBURU CENDOYA, I., "Fr. Diego de Zúñiga. Biografía y nuevos escritos" Archivo Agustiniano 55 (1961), pp, 51-103, 329-384.

ARANDA DONCEL, J., Los moriscos en tierras de Córdoba. Córdoba 1984.

ARELLANO GARCIA, M., Catálogo del archivo del cabildo de curas y beneficiados de Toledo. Toledo 1984.

ASENSIO, F., "Juan de Mariana ante el Índice Quiroguiano de 1583-1584", Estudios bíblicos. 31 (1972), pp, 135-178.

ASPURZ, L. DE, Manual de Historia Franciscana. Madrid 1954.

ASTRAIN, A., Historia de la Compañía de Jesús en la asistencia en España. Madrid 1909.

AVILES FERNANDEZ, M., "El Santo Oficio en la primera etapa Carolina" J. PEREZ VILLANUEVA y B. ESCANDELL BONET, Historia de la Inquisición en España y América. Madrid 1984, I, pp, 443-519.

- Sueños ficticios y lucha ideológica en el Siglo de Oro. Madrid 1981.

AZCONA, T.DE, "El hecho episcopal hispánico en tiempos de Carlos V (1516-1558)" El Erasmismo en España. Santander 1986, pp 265-288.

- "Estado e Iglesia a la luz de las asambleas del clero en el siglo XVI" Actas del Congreso Internacional Teresiano. Salamanca 1984, pp, 297-330.

- La elección y reforma del episcopado español en tiempos de los Reyes Católicos. Madrid 1960.

- Isabel la Católica. Estudio crítico de su vida y de su reinado. Madrid 1993.

- "Reforma del episcopado y del clero en España en tiempos de los Reyes Católicos y de Carlos V (1475-1558)", R. GARCIA VILLOSLADA Historia de la Iglesia en España. Madrid 1980, tomo III-1º, pp, 115-210.

BADA, J., Situació religiosa de Barcelona en el segle XVI. Barcelona 1970.

BARADO FONT, F., Don Luis de Requesens y la política española en los Países

Bajos. Madrid 1906.

BARBEY, J. La fonction royale. Essence et légitimité d'après les Tractatus de Jean de Terrevermeille. Paris 1983.

- Etre roi. Le roi et son gouvernement en France de Clovis à Louis XIV. Paris 1992.

BARRADO MANZANO, A., "Constituciones de la provincia de San Gabriel (1580)" Archivo Iberoamericano 27 (1967), pp, 135-153.

BARRANTES, V., Catálogo razonado y crítico de los libros, memorias y papeles, impresos y manuscritos, que tratan de las provincias de Extremadura. Madrid 1865.

BATAILLON, M., Erasmo y España. México-Buenos Aires 1950.

BAUER LANDAUER, I., Relaciones y manuscritos (moriscos). Madrid 1923.

BEINART, H., Los conversos ante el tribunal de la Inquisición. Barcelona 1983.

- Los conversos ante el tribunal de la Inquisición. Barcelona 1983.

- Records of the trials of the spanish Inquisition in Ciudad Real. Jerusalem 1974.

BELL, A.F.G., Luis de León. Barcelona 1927.

BELTRAN DE HEREDIA, V., Las corrientes de espiritualidad entre los dominicos de Castilla durante el siglo XVI. Salamanca 1941.

- "Un grupo de visionarios y pseudoprofetas que actúa durante los últimos años de Felipe II. Repercusión de ello sobre la memoria de Santa Teresa" Revista española de Teología 7 (1947), pp, 373-397, 483-534.

- Bulario de la Universidad de Salamanca (1219-1549). Universidad de Salamanca 1966.

- "La retractación de las censuras favorables al "Catecismo" en el Proceso de Carranza" La Ciencia Tomista 54 (1936), pp. 145-176, 312-336.

- "Un grupo de visionarios y pseudoprofetas que actúa durante los últimos años de Felipe II" Miscelanea Beltrán de Heredia Salamanca 1972, III, pp, 335-405.

- "Los Alumbrados de la diócesis de Jaén". Miscelanea Beltrán de Heredia Salamanca 1972, pp, 235-334.

BENITEZ DE LUGO, A., "Contento y regocijo de Felipe II por la matanza de los hugonotes" Revista de España 135 (1891), pp, 356-372, 416-433.

BENITEZ SANCHEZ-BLANCO, R., "Felipe II y los moriscos. El intento decisivo de asimilación, 1559-1568" Estudios de Historia de Valencia. Universidad de Valencia 1978, pp, 183-201.

- "L'église et les morisques". L. CARDAILLAC, Les morisques et l'Inquisition. París 1990, pp, 65-79.

- "Las parroquias de moriscos en los territorios valencianos de la diócesis de Tortosa". E. MARTINEZ RUIZ y V. SUAREZ GRIMON, Iglesia y sociedad en el Antiguo Régimen. Universidad de las Palmas de Gran Canaria 1994, pp, 111-127.

- "El diezmo de moriscos en el obispado de Málaga" Estudis 4 (1975).

BENITO RUANO, E., Los orígenes del problema converso. Barcelona 1986.

- Los orígenes del problema converso. Barcelona 1976.

- La sentencia - estatuto de Pero Sarmiento contra los conversos toledanos. Madrid 1957.

- "El memorial contra los conversos del Bachiller Marcos García de Mora". Sefarad. 17 (1957), pp. 314-351.

BENNASSAR, B., Inquisición española: poder político y control social. Barcelona 1984.

BILINKOFF, J., The Avila of Saint Teresa. Religious Reform in a Sixteenth-Century City. Cornell University Press 1989.

Biografía eclesiástica completa. Madrid 1864. Vol. XIX.

BIRELEY, R., "Neve Orden, Katholische Reform und Konfessionalisierung". Die Katholische Konfessionalisierung. (HRG. W. REINHARD UND H. SCHILLING). Münster 1995.

BLANCO GARCIA, F., "Segundo proceso instruido por la Inquisición de Valladolid contra Fray Luis de Leon". La Ciudad de Dios 41 (1986), pp, 15-37.

- BLAZQUEZ MIGUEL, J., Inquisición y criptojudaismo. Madrid 1988.
- BORGES, P., "Nuevos datos sobre la Comisión pontificia para Indias de 1568" Missionalia Hispánica 47 (1959), pp, 213-243.
- BORONAT Y BARRACHINA, P., Los moriscos españoles y su expulsión. Valencia 1901.
- BORROMEO, A., "España y el problema de la elección papal de 1592" Cuadernos de Investigación Histórica 2 (1978), pp, 175-204.
- BOUCHER, J., "La commistione fra Corte e Stato in Francia sotto gli ultimi Valois". M.CATTINI y M.A.ROMANI (Dirs), La Corte in Europa. Brescia 1983, pp, 93-130.
- BOUZA ALVAREZ, F.J., Portugal en la Monarquía Hispánica (1580-1640). UCM, Tesis doctoral 1987.
- BOYD, M., Cardinal Quiroga. Inquisitor General of Spain. Dubuque, Iowa, 1954.
- BRAUDEL, F., El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II. Madrid 1976.
- La Historia y las Ciencias. Madrid 1986.
- BROWN, J. Y OTROS, Visiones del pensamiento. El Greco como interprete de la historia, la tradición y las ideas. Madrid 1984.
- BRUNNER, O., Terra e Potere. Milano 1983.
- BUCETA, E., "Relación de la junta convocada por Felipe II el 24 de febrero de 1579 para tratar de su pretensión a la Corona de Portugal" BRAH 98 (1931), pp, 655-664.
- BURGOS, R., España en Trento. Madrid 1941.
- BUSTAMANTE GARCIA, A., La octava maravilla. Madrid 1994.
- "El Colegio de doña María de Aragón en Madrid" Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología 38 (1972), pp, 427-447.
- BUSTAMANTE GARCIA, A., y MARIAS, F., Las ideas artísticas de El Greco. Madrid 1981.
- CABRERA DE CORDOBA, L., Felipe II, rey de España. Madrid 1876.

- CABRERA Y DELGADO, A., La Catedral de Toledo. Barcelona 1993.
- CAEIRO, F., O Archiduque Alberto de Austria vicerei de Portugal. Lisboa 1961.
- CAMPOY GARCIA, J.M., Apuntes sobre la parroquial capilla de San Pedro en la Santa Iglesia Primada. Toledo 1926.
- CANELLAS, A., "El historiador Jerónimo Zurita" Congreso Nacional Jeronimo Zurita, su época y su escuela. Zaragoza 1986, pp, 7-22.
- CANTERA, F., "Arias Montano y Fr Luis de León" Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo 22 (1946), pp, 299-338.
- CARABIAS TORRES, A.M., Colegios Mayores: centros de poder. Los colegios Mayores de Salamanca durante el siglo XVI. Salamanca 1986.
- CARDAILLAC, L., Moriscos y cristianos. Un enfrentamiento polémico (1492-1640). Madrid 1979.
- CARLOS MORALES, C.J. de, "Ambiciones y comportamiento de los hombres de negocios. El asentista Melchor de Herrera". J. MARTINEZ MILLAN (Dir.), La Corte de Felipe II. Madrid 1994, pp, 379-415.
- "Finanzas y relaciones clientelares en la Corte de Felipe II: Juan Fernandez de Espinosa, banquero y ministro del rey". P. FERNANDEZ ALBADALEJO, J. MARTINEZ MILLAN, V. PINTO CRESPO, Política, religión e inquisición en la España Moderna. U.A.M. 1996, pp, 221-237.
 - "La participación en el gobierno a través de la conciencia regia. Fray Diego de Chaves, O.P., confesor de Felipe II" (En prensa).
 - "El poder de los secretarios reales: Francisco de Eraso". J. MARTINEZ MILLAN (Ed.). La Corte de Felipe II. Madrid 1994, pp, 107-148.
 - Política y finanzas en el siglo XVI. El gobierno del Erario Real y el Consejo de Hacienda de Castilla, 1523-1602. Tesis doctoral publicada en microfichas. UAM 1994.
 - El Consejo de Hacienda de Castilla, 1523-1602. Junta de Castilla y León 1996.
- CARO BAROJA, J., Los judíos en la España Moderna y Contemporánea. Madrid 1961.
- Los moriscos en el Reino de Granada. Madrid 1976.

- CARPINTERO AGUADO, L., "Iglesia y Corte en el siglo XVI: contribuciones y tributos". Hispania Sacra 41 (1989), pp, 547-567.
- Cartas y avisos dirigidos a don Juan de Zúñiga, virrey de Nápoles en 1581. Colección de libros españoles raros y curiosos. Madrid 1887. Vol. 18
- CASANOVAS, J., San Ignacio de Loyola. Fundador de la Compañía de Jesús. Barcelona 1980.
- CASCALES RAMOS, A., La Inquisición en Andalucía. Resistencia de los conversos a su implantación. Barcelona 1986.
- CASTEJON Y FONSECA, D., Primacía de la Santa Iglesia de Toledo. Madrid 1625, 1645.
- CASTRO, M. DE, "Supresión de los franciscanos conventuales en la España de Felipe II" Archivo Iberoamericano 42 (1982), pp, 187-265.
- CATALANO, G., Controversie giurisdizionali tra Chiesa e Stato nell'età di Gregorio XIII e Filippo II. Palermo 1955.
- CATALINA GARCIA, J., Ensayo de una tipografía complutense. Madrid 1889.
- CERECEDA, F., "El "litigio de los cabildos" y su repercusión en sus relaciones con Roma" Razón y Fe 130 (1944), pp, 115-134.
- "El nacionalismo religioso español en Trento" Hispania 5 (1945), pp, 236-285.
- Diego Lainez en la Europa religiosa de su tiempo, 1512-1565. Madrid 1945-1946.
- CERNIGLIARO, A., Sovranità e feudo del regno di Napoli, 1505-1557. Napoli 1983.
- CESPEDES DEL CASTILLO, G., "La Visita como institución indiana" Anuario de Estudios Americanos 3 (1946), pp, 984-1025.
- CHRISTIAN, W. A., Religiosidad local en la España de Felipe II. Madrid 1991.
- CHUDOBA, B., "Las relaciones de las Cortes habsburguesas en la tercera asamblea del concilio tridentino" BRAH 103 (1933), pp, 297-368.
- CIRUJANO MARIN, P., ELORRIAGA PLANES, T., y PEREZ GARZON, J.S., Historiografía y Nacionalismo español, 1834-1868. Madrid 1985.

CLAVERO, B., "Política de un problema: la revolución burguesa". B.CLAVERO, P.RUIZ TORRES, F.J.HERNANDEZ MONTALBAN, Estudios sobre la revolución burguesa en España. Madrid 1979, pp, 1-35.

- Tantas personas como estados. Madrid 1986.

COLAS LATORRE, G. y SALAS AUSENS J.A., Aragón en el siglo XVI. Alteraciones sociales y conflictos políticos. Zaragoza 1982.

Colección de Documentos Inéditos para la Historia de España. Tomos: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 28, 30, 41, 56, 91, 97, 102.

COLOM I PALMER, M.J., El tribunal de la Inquisición de Mallorca, 1578-1578. Tesis de licenciatura. Universidad de Palma 1982.

COLUNGA, E., "Intelectuales y místicos en la teología española del siglo XVI" Ciencia Tomista 9 (1914), pp, 376-394.

CONIGLIO, G., Il vicerego di Napoli e la lotta tra spagnoli e turchi nel Mediterraneo. Napoli 1987.

- Il Virregno di don Pietro di Toledo (1532-1553). Napoli 1984.

- Il regno di Napoli al tempo di Carlo V. Napoli 1951.

- I viceré spanoli di Napoli. Napoli 1957.

- Il vicerego di Napoli e lotta tra spagnoli e turchi nell Mediterraneo. Napoli 1987.

- Visitatori del vicerego di Napoli. Bari 1974.

Constitutiones Carmelitarum discalceatorum, 1567-1600. Roma 1968.

CONTRERAS, J., "Las causas de fe en la Inquisición de Galicia, 1560-1700". J. PEREZ VILLANUEVA (dir). La Inquisición española. Nueva visión, nuevos horizontes. Madrid 1980, pp, 355-370.

- "Estructura de la actividad procesal del Santo Oficio". J. PEREZ VILLANUEVA y B. ESCANDELL BONET, Historia de la Inquisición en España y América. Madrid 1993, II, pp, 588-632.

- El Santo Oficio de la Inquisición de Galicia (Poder, Sociedad y Cultura). Madrid 1982.

- "Las adecuaciones estructurales en la Península". J. PEREZ

- VILLANUEVA y B. ESCANDELL BONETT, Historia de la Inquisición en España y América. Madrid 1984, I, pp, 730-763.
- CONTRERAS, J. y DEDIEU, J.P., "Geografía de la Inquisición española: la formación de los distritos (1470-1820)" Hispania 40 (1980) pp, 22-71.
- COSS, P.R., "Bastard Feudalism Revised" Past and Present 125 (1989), pp, 27-64.
- COTARELO Y VALLEDOR, A., El Cardenal don Rodrigo de Castro y su fundación en Monforte de Lemos. Madrid 1945-1946.
- Fray Diego Deza. Ensayo biográfico. Madrid 1905.
- D'AGOSTINO, G., Il Parlamento Generale del regno di Napoli nell'età spagnola 1556-1596. Nápoles 1984.
- DALMASES, C. DE, El Padre maestro Ignacio. Madrid 1982.
- DANVILA, A., Felipe II y el rey don Sebastián de Portugal. Madrid 1954.
- DANVILA Y BURGUEIRO, A., Don Cristobal de Moura, primer marqués de Castel-Rodrigo. Madrid 1900.
- DANVILA Y COLLADO, M., La expulsión de los moriscos españoles. Madrid 1889.
- DEDIEU, J.P., L'administration de la Foi. L'Inquisition de Tolède XVI-XVIII siècle. Madrid 1989.
- "Les causes de foi de l'Inquisition de Tolède (1483-1820). Essais statistique" Melanges de la Casa de Velazquez 14 (1978), pp, 143-171.
- "L'Inquisition face aux morisques: aspects juridiques". L. CARDAILLAC, Les morisques et l'Inquisition. París 1990, pp, 110-127.
- DEROO, A., Carlos Borromeo, reformador conciliar. Villava 1968.
- Dictionaire d'histoire et geographie ecclésiastique. París 1912.
- DOBB, M., Estudios sobre el desarrollo del capitalimo. Buenos Aires 1976.
- Documentos escogidos del Archivo de la Casa Alba. Publicados por la duquesa de Berwich y Alba, condesa de Siruela. Madrid 1891.
- DOMINGUEZ ORTIZ, A. y VICENT, B., Historia de los moriscos. Vida y tragedia de una minoría. Madrid 1978.

DOMINGUEZ ORTIZ, A., Los judeoconversos en España y América. Madrid 1978.

- Los judeoconversos en la España Moderna. Madrid 1991.

- La clase social de los conversos en Castilla en la Edad Moderna. Madrid 1955.

- El Antiguo Régimen: los Reyes Católicos y los Austrias. Madrid 1983.

- "La sociedad conversa toledana en la primera mitad del siglo XVI" Simposio toledo judaico. Toledo 1972.

DOMINGUEZ SALGADO, M.P., "Los orígenes del tribunal de Corte (1580-1665)" Inquisición española. Nuevas aproximaciones. Madrid 1987, pp, 99-125.

DORMER, D., Progressos de la historia en el Reyno de Aragón y elogios de Gerónimo Zurita su primer cronista. Zaragoza 1680.

DRAGONETTI DE TORRES, A., La Lega di Lepanto nel carteggio diplomatico inedito di Don Luys de Torres nunzio straordinario di S.Pio V a Filippo II. Torino 1931.

ELIAS, N., La sociedad cortesana. México 1982.

ELIAS DE TEJEDA, F., Nápoles hispánico. Madrid 1958.

ELLIOTT, J.H., La Europa dividida, 1559-1598. Madrid 1973.

ELTON, G., "Tudor Government: The Point of contact: III The Court". Studies in Tudor and Stuart Politics and Government. Cambridge 1953.

- The Tudor Revolution in Government. Cambridge 1953.

Epistolario del III Duque de Alba Don Fernando Alvarez de Toledo. Madrid 1952.

ESCACEDO Y SALMON, M., Los Acevedo. Santander 1928.

ESCANDELL BONET, B., "La peculiar estructura administrativa y funcional de la Inquisición española en Indias". J. PEREZ VILLANUEVA y B. ESCANDELL BONET, Historia de la Inquisición en España y América. Madrid 1993, II, pp, 633-665.

- "Las adecuaciones estructurales: establecimiento de la Inquisición en

- Indias" J. PEREZ VILLANUEVA y B. ESCANDELL BONET Historia de la Inquisición en España y América. Madrid 1984, I, pp, 713-729.
- ESCRIBANO HERNANDEZ, J., "Las fundaciones de Santa Teresa" Cuadernos de Investigación Histórica 11 (1987), pp, 201-230.
- ESCRIVA DE BALAGUER, J.M., La abadesa de las Huelgas. Estudio teórico jurídico. Madrid 1974.
- ESCUADERO, J.A., (Ed.) Perfiles jurídicos de la Inquisición española. Madrid 1989.
- ESTAL, J.M. DE, "Felipe II y su archivo hagiográfico de El Escorial" Hispania Sacra 23 (1979), pp, 193-333.
- ESTEBAN-INFANTES, J., El colegio de Nuestra Señora de los Remedios vulgarmente llamado de Doncellas Nobles de Toledo. Toledo 1915.
- EZQUERRA REVILLA, I.J., "El ascenso de los letrados eclesiásticos: el presidente del Consejo de Castilla Antonio Mauriño de Pazos". J. MARTINEZ MILLAN (Dir.), La Corte de Felipe II. Madrid 1994, pp, 271-304.
- "La distribución de la gracia durante la anexión de Portugal: Rodrigo Vázquez de Arce (1578-1583)". P. FERNANDEZ ALBALADEJO, J. MARTINEZ MILLAN, V. PINTO CRESPO (Coord.) Política, religión e inquisición en la España Moderna. U.A.M. 1996, pp, 267-285.
- FEDUCHI, L. M., El hospital de Afuera. Madrid 1950.
- FERNANDEZ ALBALADEJO, P., Fragments de Monarquía. Madrid 1992.
- FERNANDEZ ALVAREZ, M., Tres embajadores de Felipe II en Inglaterra. Madrid 1951.
- FERNANDEZ COLLADO, A., "Intervención del nuncio Felipe Segá en la reforma de la Iglesia en España (1577-1581)" Anthologica Annua 37 (1990), pp, 57-129.
- El concilio provincial toledano de 1582. Roma 1995.
- Concilios toledanos postridentinos. Diputación provincial de Toledo 1996.
- "Juanelo Turriano y la aportación española a la reforma del calendario gregoriano" Toletum 23 (1990), pp, 151-159.

- Gregorio XIII y Felipe II en la nunciatura de Felipe Segá (1577-1581). Toledo 1991.

- "El Concilio provincial toledano de 1565" Anthologica Annua 42 (1995), pp, 425-613.

FERNANDEZ CONTI, S., "La nobleza cortesana: Don Diego de Cabrera y Bobadilla, tercer conde de Chinchón". J. MARTINEZ MILLAN (Dir.) La Corte de Felipe II. Madrid 1994, pp, 229-270.

- Los Consejos de Estado y Guerra de la monarquía hispana durante la época de Felipe II (1548-1598). Tesis doctoral. U.A.M. 1997.

- "La junta militar de Portugal, 1578-1580". P. FERNANDEZ ALBADALEJO, J. MARTINEZ MILLAN, V. PINTO CRESPO, Política, religión e inquisición en la España Moderna. U.A.M. 1996, pp, 287-307.

- "El gobierno de los asuntos de la guerra en Castilla durante el reinado del Emperador Carlos V (1516-1558)". J. MARTINEZ MILLAN (Ed.), Instituciones y élites de poder en la Monarquía Hispana durante el siglo XVI. Madrid 1992, pp, 47- 105.

- "La profesionalización del gobierno de la guerra: don Alonso de Vargas". J. MARTINEZ MILLAN (Dir.), La Corte de Felipe II. Madrid 1994, pp, 417-450.

FERNANDEZ DURO, C., Estudios históricos del reinado de Felipe II. Madrid 1890.

FERNANDEZ LLAMAZARES, J., Historia de la Bula de la Santa Cruzada. Madrid 1859.

FERNANDEZ MONTAÑA, J., Los Covarrubias. Madrid 1935.

FERNANDEZ Y SANCHEZ, I., Historia de Talavera de la Reina. Toledo 1992. (Ed. facsímil).

FERRANDIS, M., Don Juan de Austria, paladín de la Cristiandad. Zaragoza 1939.

FLICHE, A., y MARTIN, V., Historia de la Iglesia. Valencia 1976.

FORMICA, M., María de Mendoza (solución a un enigma amoroso). Madrid 1979.

- La hija de don Juan de Austria. Ana de Jesús en el proceso al pastelero

de Madrigal. Madrid 1975.

FUENTE, V. DE LA, Historia de las Universidades, Colegios y demás establecimientos de enseñanza en España. Madrid 1985.

- "Obras escogidas del Padre Pedro de Rivadeneira" Biblioteca de Autores Españoles Vol.60. Madrid 1952.

GACHARD, L.P., Don Carlos y Felipe II. San Lorenzo del Escorial 1984.

GACHARD, M., Correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays-Bas. Bruxelles, Gand, Leipzig 1858.

- Relations des ambassadeurs vénetiens sur Charles Quint et Philippe II. Bruxelles, Gand, Leipzig 1856.

GALASSO, G., "Momenti e problemi di storia napoletana nell'età di Carlo V" Archivio Storico per le province napoletane 1 (1961), pp, 47-100.

GAN GIMENEZ, P., La Real Chancillería de Granada (1505-1834). Granada 1988.

GARCIA ARENAL, M., Los moriscos. Madrid 1975.

- Inquisición y moriscos. Los procesos del tribunal de Cuenca. Madrid 1987.

GARCIA CARCEL, R., Herejía y sociedad en el siglo XVI. La Inquisición en Valencia, 1530-1609. Barcelona 1980.

- "Trayectoria histórica de la Inquisición Valenciana". J. PEREZ VILLANUEVA (Dir.) La Inquisición española. Nueva visión, nuevos horizontes. Madrid 1980, pp, 411-433.

- "El itinerario de los moriscos hasta su expulsión (1609)". A. ALCALA (Dir.) Inquisición española y mentalidad inquisitorial. Madrid 1984, pp, 67-78.

GARCIA CARRAFA, A. y A., Enciclopèdia heràldica de genealogia hispano-americana. Madrid 1955. Vol. 76.

GARCIA CUELLAR, F., "Política de Felipe II en torno a la convocatoria de la tercera etapa del Concilio tridentino" Hispania Sacra 16 (1963), pp, 25-60.

GARCIA DE YEBENES Y PROUS, P., El tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de Sevilla. Burocracia y Hacienda. Tesis doctoral publicada en

microfichas. UAM 1990.

GARCIA-JALON DE LA LAMA, S., "Los fundamentos jurídicos de la "sentencia-estatuto" de Pero Sarmiento" I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha. Junta de comunidades de Castilla-La Mancha 1988, vol. IV, pp, 201-204.

GARCIA GUERRERO, F., El decreto sobre la residencia de los obispos en la tercera asamblea del Concilio Tridentino. Cádiz 1943.

GARCIA HERNAN, E., "La Curia romana, Felipe II y Sixto V" Hispania Sacra 46 (1994), pp, 631-649.

GARCIA LOPEZ, A., Moriscos en tierra de Uceda y Guadalajara. Madrid 1992.

GARCIA LOUAPRE, P., Proceso al trono de Isabel la Católica. Barcelona 1994.

GARCIA MARIN, J.M., Monarquía Católica en Italia. Burocracia imperial y privilegios constitucionales. Madrid 1992.

- El oficio público en Castilla durante la Baja Edad Media. Madrid 1987.

GARCIA MARTINEZ, S., "Bandolerismo, piratería y control de moriscos en Valencia durante el reinado de Felipe II" Estudis 1 (1972), pp, 85-167.

GARCIA MERCADAL, J., La Princesa de Eboli. Barcelona 1992.

- Viajes de extranjeros por España y Portugal. Madrid 1952.

- Antonio Pérez, secretario de Felipe II. Madrid 1943.

GARCIA ORO, J., La reforma de los religiosos españoles en tiempo de los Reyes Católicos. Valladolid 1969.

- Cisneros y la reforma del clero español en tiempo de los Reyes Católicos. Madrid 1971.

- La Universidad de Alcalá de Henares en la etapa fundacional (1488-1578). Santiago de Compostela 1992.

- "Felipe II ¿Reforma española o reforma tridentina?". R. GARCIA VILLOSLADA Historia de la Iglesia en España. Madrid 1980, III, pp, 317-341.

- La Iglesia de Toledo en tiempos del Cardenal Cisneros (1495-1517). Toledo 1992.

- "La reforma de las Ordenes religiosas en los siglos XV y XVI", R. GARCIA VILLOSLADA Historia de la iglesia en España. Madrid 1980. Tomo III-1º, pp, 317-340.

GARCIA REY, V., El Deán don Diego de Castilla y la reconstrucción de Santo Domingo el Antiguo de Toledo. Toledo 1927.

- "Datos relativos a la vida del famoso Greco" Arte español 8 (1926) nº 4, pp, 174-175.

GARCIA VALDECASAS, A., El hidalgo y el honor. Madrid 1948.

GARCIA VILLOSLADA, R., San Ignacio de Loyola. Nueva biografía. Madrid 1986.

- "La reforma española en Trento" Estudios eclesiásticos 39 (1964), pp, 69-92.

- Historia de la Iglesia en España. Madrid 1980. 4 vols.

GARCIA ZURDO, A., Madrigal de las Altas Torres, cuna de la Hispanidad. Madrigal de las Altas Torres 1961.

GARMA Y DURAN, F.J., Theatro Universal de España. Barcelona 1751.

GARRAD, K., "La Inquisición y los moriscos granadinos, 1526-1580" Bulletin Hispanique 67 (1965), pp, 63-77.

GIL CALVO, J., La Compañía de Jesús en la Historia de Toledo. Madrid 1979.

GIL PUJOL, J., "Notas sobre el estudio del poder como nueva valoración de la historia política" Pedralbes 3 (1983).

GIL SANJUAN, J., Los cabildos catedrales de Castilla ante la reforma tridentina. Tesis doctoral inédita. Universidad Complutense de Madrid 1973.

GIMENEZ FERNANDEZ, M., Bartolomé de las Casas. Madrid 1984 (Reimpres.).

GLEIJESES, V., La storia di Napoli dalle origine ai nostri giorni. Napoli 1974.

GOMEZ, I.M., "La Cartuja en España" Studia Monastica 4 (1962), pp, 139-175.

GOMEZ BRAVO, J., Catálogo de los obispos de Córdoba. Córdoba 1778.

GOMEZ-CENTURION, C., La Invencible y la empresa de Inglaterra. Madrid 1988.

GOMEZ-MENOR, J., Cristianos nuevos y mercaderes de Toledo. Toledo 1970.

GOMEZ-MENOR FUENTES, J.C., "La sociedad conversa toledana en la primera mitad del siglo XVI". Simposio Toledo judaico. (Toledo 20-22 abril de 1972). Tomo II, pp, 51-63.

GONZALEZ, V., "Santa Teresa y San Juan de la Cruz en Toledo", Simposio Toledo ¿Ciudad viva? ¿Ciudad muerta?. Toledo 1988, pp, 479-500.

GONZALEZ ALONSO, B., "Poder regio, Cortes y régimen político en la Castilla Bajomedieval (1252-1474)" Las Cortes de Castilla y León en la Baja Edad Media. Cortes de Castilla y León 1988. Vol. II.

GONZALEZ DAVILA, G., Teatro eclesiástico de la Iglesias metropolitanas y catedrales de los reinos de las dos Castillas. Madrid 1645. Vol.I.

-Teatro de las grandezas de la villa de Madrid. Madrid 1623.

-Historia de las antigüedades de la ciudad de Salamanca. Salamanca 1606.

GONZALEZ NAVARRO, R., Universidad Complutense. Constituciones originales cisnerianas. Alcalá de Henares 1984.

GONZALEZ NOVALIN, J.L., El Inquisidor General Fernando de Valdés (1483-1568). Su vida y obra. Universidad de Oviedo 1968. 2 vols.

- "La Inquisición española", R. GARCIA VILLOSLADA, Historia de la Iglesia en España. Madrid 1980, pp, 107-268.

- "La Inquisición y la Compañía de Jesús" Anthologica Annua 37 (1990), pp, 11-56.

- "El deán de Oviedo don Alvaro de Valdés. Gestiones de la Inquisición española contra Bartolomé de Carranza en la Corte de Paulo IV" Archivum Historiae Pontificae 7 (1969), pp, 287-327.

GONZALEZ PALENCIA, A., "Fragmentos del archivo particular de Antonio Pérez, secretario de Felipe II" Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 38 (1918), 252-268 y 411-420; 39 (1918), 354-364; 40 (1919), 316-325; 41 (1920), 136-144; 42 (1921), 111-135 y 293-312.

- Gonzalo Pérez, secretario de Felipe II. Madrid 1946.

- GOÑI GAZTAMBIDE, J., "La reforma de los premonstratenses españoles en el siglo XVI" Hispania Sacra 13 (1960), pp, 71-88.
- "Los cabildos españoles y la confirmación del Concilio de Trento" Annarium Historiae Conciliorum 7 (1975), pp, 425-458.
 - Historia de la Bula de Cruzada en España. Vitoria 1958.
 - "Los cuestores en España y la regalía de las indulgencias" Hispania Sacra 2 (1949), pp, 285-310.
- GOSSART, E., Espagnols et flamands au XVI^e siècle. Bruxelles 1905.
- GOUNON-LOUBENS, M.J., Essais sur l'administration de la Castille au XVI^e siècle. París 1860.
- GRACIA BOIX, R., Autos de fe y causas de la Inquisición de Córdoba. Córdoba 1983.
- GRANERO, J.M., San Ignacio de Loyola. Panorama de su vida. Madrid 1967.
- GREENGRASS, M., "Funtions and limits of political clientelism in France before Cardinal Richelieu". N.BULST, R.DESCIMON, A.GUERREAU (Dirs.), L'État et le Roi. Les foncdations de la modernité monarchique en France (XVI^e-XVIII^e siècles). Paris 1996.
- GRIFFITHS, R.A., "The King's Court during the Wars od the Roses. Continuities in an Age of Discontinuities". R.G.ASCH y A.M.BIRKE (Dirs.), Princes, Patronage and the Nobility. The Court ata the Beginning of the Modern Age. Oxfort University Press 1991, pp, 41-67.
- GUERY, A., "Le roi est Dieu; le roi et Dieu". N.BULST, R.DESCIMON, A.GUERREAU (Dirs.), L'État et le Roi. Les foncdations de la modernité monarchique en France (XVI^e-XVIII^e siècles). Paris 1996.
- GUIBERT, J. de, "Le généralat de Claude Aquaviva (1581-1615). Sa place dans l'histoire de la espiritualité de la Compagnie de Jesús" Archivum Historicum Societatis Iesu 10 (1941), pp, 59-93.
- GUTIERREZ, C., Trento, un problema: la última convocación del Concilio (1552-1562). Universidad Pontificia de Comillas 1995.
- Españoles en Trento. Valladolid 1951.
- GUTIERREZ MARTIN, L., El privilegio de nombramiento de los obispos en España. Roma 1967.

- GUTIERREZ NIETO, J.I., "El proceso de encastamiento social en la Castilla del siglo XVI. La respuesta conversa" Actas del Congreso Internacional Teresiano. Salamanca 1983, pp, 103-120.
- "La discriminación de los conversos y la tibetización de Castilla por Felipe II" Revista de la Universidad Complutense. 87 (1973), pp, 99-129.
- "La estructura castizo-estamental de la sociedad castellana en el siglo XVI" Hispania. 33 (1973), pp, 519-563.
- "Los conversos y el movimiento comunero" Hispania 24 (1964), pp, 237-261.
- HARTUNG, F., y MOUSNIER, R., "Quelques problèmes concernat à la monarchie absolue" Relazioni del X Congresso Internazionale di Scienze Storiche. Firenze 1955, IV, pp, 3-55.
- HEALY, J.J., Juan de Tavera and his lesdership in Castilian diplomacy concerning some Imperial issues, 1527-1531. Saint Louis University. Ph. d., 1973.
- HERNANDEZ SANDOICA, E., y PESET, J. L., Universidad, poder académico y cambio social (Alcalá de Henares 1508 - Madrid 1874). Consejo de Universidades 1990.
- HERNANDO SANCHEZ, C.J., Castilla y Nápoles en el siglo XVI. El virrey Pedro de Toledo. Linaje, estado y cultura (1532-1553). Junta de Castilla y León 1994.
- HERREDON PEREDO, C., Información en derecho del licenciado Quiroga sobre algunas provisiones del Real Consejo de Indias. México 1985.
- HERRERA, A., "Don Gaspar de Quiroga" BRAH 46 (1905), pp, 353-356.
- HERRERA, TH de., Alphabetum Agustinionum. Madrid 1644.
- HERRERA GARCIA, A., "Los anales eclesiásticos de Cuenca de Juan Bautista Valenzuela" Hispania Sacra 20 (1967), pp, 335-355.
- HERRES, J., The activity of Lodovico Taverna apostolic nuncio in Spain (1582-1586). Camberra 1980.
- HESPANHA, A. M., História das instituições. Epocas medieval e moderna. Coimbra 1982.

HINOJOSA, R., Los despachos de la diplomacia pontificia en España. Madrid 1986.

HINTZE, O., Historia de las formas políticas. Madrid 1968.

HOROZCO, S. de, Algunas relaciones y noticias toledanas. Madrid 1905.

- Relaciones históricas toledanas. Toledo 1981.

HUBNER, M.B. de, Sixte-Quint. París 1882.

HUERGA, A., Fray Luis de Granada. Una vida al servicio de la iglesia. Madrid 1988.

- Historia de los alumbrados (1570 - 1630). Madrid 1978.

- Predicadores, alumbrados e Inquisición en el siglo XVI. Madrid 1973.

- Historia de los Alumbrados (1570-1630). I. Los Alumbrados de Extremadura (1570-1582). II. Los Alumbrados de la Alta Andalucía. Madrid 1978.

- "La muerte de Carranza" Cuadernos de investigación Histórica 5 (1981), pp, 15-21.

- "La vida seudomística y el proceso inquisitorial de Sor María de la Visitación ("La monja de Lisboa")" Hispania Sacra 12 (1959), pp, 35-130.

HURTADO DE MENDOZA, D., Guerra de Granada. Madrid 1970. Ed. de B. BLANCO GONZALEZ.

IBAÑEZ DE IBERO, C., Juan de Austria, político e innovador. Madrid 1944.

IMIRIZALDU, J., Monjas y beatas embaucadoras. Madrid 1977.

IPARRAGUIRRE, I., Historia de los ejercicios de San Ignacio. Bilbao-Roma 1955.

- Estilo espiritual jesuítico (1540-1600). Bilbao 1964.

- Práctica de los Ejercicios de San Ignacio de Loyola en vida de su autor, 1522-1556. Bilbao-Roma 1946.

IZQUIERDO BENITO, R., "Las plagas de langosta en Toledo y en la región manchega durante el siglo XVI" Anales toledanos 20 (1984), pp, 47-133.

JAEN, D.T., John II of Castile and the Grand Master Alvaro de Luna. Madrid 1978.

JANER, F., Condición social de los moriscos en España. Barcelona 1987. (Ed. facsímil).

JIMENEZ DE LA ESPADA, M., "Correspondencia del doctor Benito Arias Montano con el licenciado Juan de Ovando" BRAH 19 (1891), pp, 479-498.

JIMENEZ LOZANO, J., Sobre judíos, moriscos y conversos. Valladolid 1989.

- Madrigal de las Altas Torres. Monasterio de Nuestra Señora de Gracia. León 1994.

JORDAN ARAZO, J.A., La burocracia del Santo Oficio de la Inquisición de Murcia, 1600-1820. Tesis de licenciatura. UAM 1986.

JULIA MARTINEZ, E., "El Concilio de Trento y el Imperio español" Verdad y vida 3 (1945), pp, 233-258.

JUSTI, C., "El Greco en Toledo" La España Moderna. 311 (1914), pp, 86-108.

KAGAN, R.L., Los sueños de Lucrecia. Política y profecía en la España del siglo XVI. Madrid 1991.

- Universidad y sociedad en la España Moderna. Madrid 1981.

KAMEN, H., "Una crisis de conciencia en la Edad de Oro en España: Inquisición contra "limpieza de sangre"" Bulletin Hispanique 88 (1986), pp, 321-326.

KANTOROWICZ, E.H., Los dos cuerpos del rey. Un estudio de teología política medieval. Madrid 1985.

KENISTON, H., Francisco de los Cobos. Secretario de Carlos V. Madrid 1980.

KETTERING, S., Patrons, Brokers, and Clients in Seventeenth-Century France. Oxford University Press 1986.

KOENIGSBERGER, H., The government of Sicily under Philip II of Spain. Londres 1951.

- La práctica del Imperio. Madrid 1975.

LAGOMARSINO, P.D., Court factions and the formulation of spanish policy towards the Netherlands. University of Cambridge 1973.

- LALINDE ABADIA, J., Iniciación histórica al Derecho español. Barcelona 1983.
- LAPEYRE, H., Las monarquías europeas en el siglo XVI. Las relaciones internacionales. Barcelona 1969.
- LARIO, D.DE, "Une experience manquée: La creation à Bologne de la premiere bureaucratie moderne espagnole" Melanges de la Casa de Velazquez 17 (1981), pp, 223-232.
- LEA, H. Ch., Los moriscos españoles. Su conversión y expulsión. Alicante 1990.
- Historia de la Inquisición española. Madrid 1983.
 - The moriscos of Spain: Their conversion and expulsion. New York 1968.
- LEBLIC GARCIA, V., y ARELLANO GARCIA, M., Armorial de los arzobispos de Toledo. Toledo 1991.
- LEON, Fray Luis de, Obras completas castellanas. Madrid 1944.
- LEON PINELO, A., Anales de Madrid. Madrid 1971.
- LERA GARCIA, R. DE, El tribunal de la Inquisición de Granada: un poder económico y social. Tesis doctoral inédita. Universidad Autónoma de Madrid 1994.
- LETURIA, P., "Felipe II y el pontificado según D. Luis de Requesens y Zúñiga" Estudios Eclesiásticos 25 (1928), pp, 60-75.
- LEVILLIER, R., Don Francisco de Toledo, supremo organizador del Perú. Su vida, su obra (1515-1582). Madrid 1935.
- LLAMAS MARTINEZ, E., Santa Teresa de Jesús y la Inquisición española. Madrid 1972.
- "Teresa de Jesús y los alumbrados. Hacia una revisión del "alumbradismo" español del siglo XVI" Actas del Congreso Internacional Teresiano. Salamanca 1983.
 - "Documentación Mss. sobre la causa del Arzobispo de Toledo Fray Bartolomé de Carranza existente en el British Museum" Studium legionense 12 (1971), pp, 241-290.
- LLAMAS MARTINEZ, E., Documentación inquisitorial. Manuscritos españoles del siglo XVI existentes en el Museo Británico. Madrid 1975.

LLORCA, B., Bulario pontificio de la Inquisición española. En su periodo constitucional (1478-1525). Roma 1949.

-La Inquisición española y los Alumbrados (1509-1667). Universidad Pontificia de Salamanca 1980.

-"La Inquisición española incipiente" Gregorianum 20 (1939), pp, 101-142 y 507-532.

-"Sobre el proceso de Carranza. Diversos dictámenes dados en esta célebre causa por el arzobispo de Granada Don Pedro Guerrero". Estudios eclesiásticos 14 (1935), pp, 75-103.

- "Aceptación en España de los decretos del Concilio de Trento" Estudios eclesiásticos 39 (1964), pp, 459-482.

LLORENS RAGA, P.L., Episcopologio de la diócesis de Segorbe-Castellón. Madrid 1973.

LLORENTE, J.A., Anales de la Inquisición española. Madrid 1812.

-Historia crítica de la Inquisición en España. París 1817 (Reed. Madrid 1980).

LOADES, D., The Tudor Court. London 1986.

LOGAS BARTIBAS, P., Vida religiosa de los moriscos. Granada 1990. (Ed. facsímil).

LOPERRAEZ CORVALAN, J., Descripción histórica del obispado de Osmá. Madrid 1978 (Ed. facsímil).

LOPEZ, M., Memorias históricas de Cuenca y su obispado. Madrid 1949.

LOPEZ, P., Il movimento valdesiano a Napoli. Mario Galeota e le sue vicende col Sant'Ufficio. Napoli 1976.

LOPEZ CELADA, I., Evolución de las rentas del cabildo de la Catedral de Toledo durante el último cuarto del siglo XVI. Caja de Ahorros provincial de Toledo 1980.

LOPEZ DE AYALA Y ALVAREZ DE TOLEDO, J., Conde de Cedillo, Toledo en el siglo XVI después del vencimiento de las Comunidades. Madrid 1901.

- LOPEZ DE TORO, J., "Epístolas de Juan Verzosa" Clásicos Españoles. Madrid 1945. Vol. 2º.
- LOPEZ MARTIN, J., "El concilio provincial de Granada de 1565 y sus previsiones sobre los moriscos del reino de Granada" Anthologica Annua 36 (1989), pp, 509-541.
- "El Arzobispo de Granada D. Pedro Guerrero y la Compañía de Jesús" Anthologica Annua 24-25 (1977-1978), pp, 453-498.
- LOPEZ MARTINEZ, J.L., Historia legal de la bula llamada "In Coena Domini". Madrid 1768.
- LOPEZ MARTINEZ, N., Los judaizantes castellanos y la Inquisición en tiempos de Isabel la Católica. Burgos 1954.
- LOPEZ VELA, R., "La provisión del Inquisidor General y de los miembros del Consejo". J. PEREZ VILLANUEVA y B. ESCANDELL BONETT, Historia de la Inquisición en España y América. Madrid 1993, II, pp, 697-715.
- "Las estructuras administrativas del Santo Oficio" J. PEREZ VILLANUEVA y B. ESCANDELL BONET, Historia de la Inquisición en España y América. Madrid 1993, II, pp, 63-271.
- LOPEZ-AMO Y MARIN, A., "Estudio de los contratos de las obras artísticas de la Catedral de Toledo en el siglo XVI" Anuario de Historia del Derecho Español 19 (1948), pp, 103-217.
- LORENTE TOLEDO, E., Gobierno y administración de la ciudad de Toledo y su término en la segunda mitad del siglo XVI. Toledo 1982.
- LOVETT, A.W., Philip II and Mateo Vázquez de Leca: the government of Spain (1572-1592). Genève 1977.
- LUJAN LOPEZ, F.B., Iglesia parroquial de San Bartolomé. Tarazona de la Mancha. Albacete 1987.
- MADRE DE DIOS, E.DE LA, Catalina de Cristo. Barcelona 1982.
- MADRE DE DIOS, E. de la, y STEGGINK, O., Santa Teresa y su tiempo. Salamanca 1984.
- Tiempo y vida de Santa Teresa. Madrid 1968.

- MAGAN GARCIA, J.M. y SANCHEZ GONZALEZ, R., Moriscos granadinos en la Sagra de Toledo, 1570-1610. Toledo 1993.
- MALTBY, W. S., El Gran Duque de Alba. Un siglo de España y de Europa, 1507-1582. Madrid 1983.
- MANN, R.G., El Greco y sus patronos. Tres grandes proyectos. Madrid 1994.
- MANRIQUE, C., "Felipe II y los jesuitas" Revista de España 50 (1876), pp, 289-313, 433-460.
- MANSILLA, D., "La reorganización eclesiástica española del siglo XVI" Anthologica Annua 5 (1957), pp, 9-259.
- "Panorama histórico-geográfico de la iglesia española en los siglos XV y XVI", R. GARCIA VILLOSLADA Historia de la Iglesia en España. Madrid 1980, III, pp, 3-24.
- MANTELLI, R., Burocrazia e finance pubbliche nel Regno di Napoli. Nápoles 1981.
- MANZANO MANZANO, J., "La visita de Ovando al Real Consejo de Indias y el Código Ovandino", VV.AA. El Consejo de Indias en el siglo XVI. Valladolid 1970, pp, 111-123.
- MARAÑÓN, G., "El proceso del arzobispo Carranza" BRAH 127 (1950), pp, 135-178.
- Notas sobre la vida y muerte de San Ignacio de Loyola. Madrid 1985.
- Los procesos de Castilla contra Antonio Perez. Madrid 1947.
- Obras Completas. Madrid 1982. Vol.VI.
- Antonio Pérez (el hombre, el drama, la época). Buenos Aires 1947.
- "Los procesos de Castilla contra Antonio Perez". BRAH. 118 (1946), 219-346; 119 (1946), 195-266; 120 (1947), 171-230, 507-603.
- El Greco y Toledo. Madrid 1968 .
- MARAVALL, J.A., Estudios de Historia del pensamiento español. Edad Media. Madrid 1983.
- Estudios de Historia del Pensamiento Español (Edad Media). Madrid 1967.

- Poder, honor y élites en el siglo XVII. Madrid 1984.
- Estado moderno y mentalidad social. Madrid 1986.
- La oposición política bajo los Austrias. Barcelona 1974 (2ª Ed.).

MARCH, J.M., El Comendador Mayor de Castilla Don Luis de Requesens en el gobierno de Milán, 1571-1573. Madrid 1943.

- La embajada de Don Luis de Requesens en Roma por Felipe II cerca de Pio V. Madrid 1950.

- "Don Luis de Requesens en la guerra de Granada y unas esclavitas moriscas" Ejercito 41 (1943), pp, 38-43.

- La batalla de Lepanto y Don Luis de Requesens. Lugarteniente General de la Mar. Madrid 1944.

MARIAS, F., "El cigarral toledano del Cardenal Quiroga" Goya. Revista de arte. 154 (1980), pp, 216-222.

MARIAS, F., y BUSTAMANTE GARCIA, A., Las ideas artísticas de El Greco. Madrid 1981.

MARIN, T., "Primeras repercusiones tridentinas. El litigio de los cabildos españoles. Su proceso en la diócesis de Calahorra" Hispania Sacra 1 (1948), pp, 325-349.

MARIN MARTINEZ, T., "El obispo Juan Díaz de Luco y su actuación en Trento" Hispania Sacra 7 (1954), pp, 259-325.

MARIN OCETE, A., "El Concilio provincial de Granada de 1565" Archivo teológico granadino 25 (1965), pp, 23-178.

- El arzobispo don Pedro Guerrero y la política conciliar española en el siglo XVI. Madrid 1970.

MARMOL CARVAJAL, L. DEL, Rebelión y castigo de los moriscos. Málaga 1991 (Ed. facsímil).

MARQUEZ, A., Los alumbrados. Origen y filosofía (1525-1559). Madrid 1980.

MARQUEZ VILLANUEVA, F., Investigaciones sobre Juan Alvarez Gato. Madrid 1960.

- "Conversos y cargos concejiles en el siglo XV" Revista de Archivos.

Bibliotecas y Museos 63 (1957), pp, 503-540.

MARTIN ABAD, J., La imprenta de Alcalá de Henares (1502-1600). Madrid 1991.

MARTIN CARRAMOLINO, J., Historia de Avila, su provincia y su obispado. Madrid 1873.

MARTIN FERNANDEZ, F., Don Vasco de Quiroga (Protector de los indios). Universidad Pontificia de Salamanca 1993.

- Los seminarios españoles. Historia y Pedagogía (1563-1700). Salamanca 1964.

- "Fundación de los primeros seminarios españoles" Hispania Sacra 26 (1963), pp, 5-24.

MARTIN GAMERO, A., Los cigarrales de Toledo. Toledo 1857.

- Historia de la ciudad de Toledo. Madrid 1862.

MARTIN POSTIGO, M.S., Los presidentes de la Real Chancillería de Valladolid. Valladolid 1982.

MARTIN RUIZ, F., Economía y sociedad en el siglo XVI. Moriscos y cristianos en el partido de Marbella. Málaga 1984.

MARTINEZ DE BUJANDA, J., Index de l'Inquisition espagnole 1583-1584. Université de Sherbrooke, Quebec 1993.

- Index d'Anvers 1569, 1570, 1571. Université de Sherbrooke 1988.

- Index de l'Inquisition Portugaise 1547, 1551, 1561, 1564, 1581. Université de Sherbrooke, Quebec 1995.

- "Literatura e Inquisición en España en el siglo XVI". J. PEREZ VILLANUEVA (Dir.), La Inquisición española. Nueva visión, nuevos horizontes. Madrid 1980, pp, 579-572.

MARTINEZ DIEZ, G., "Los oficios públicos: De las Partidas a los Reyes Católicos" Actas del II symposium de Historia de la Administración. Madrid 1971, pp, 125-136.

MARTINEZ GIL, F., Toledo en las Comunidades de Castilla. Toledo 1981.

MARTINEZ MILLAN, J., La Hacienda de la Inquisición, (1478-1700). Madrid 1984.

- "Las élites de poder durante el reinado de Carlos V a través de los miembros del Consejo de Inquisición (1516-1558)" Hispania 48 (1988), pp, 103-167.

- "Elites de poder en tiempos de Felipe II (1539-1572)" Hispania 49 (1989), pp, 111-149.

-(Ed.), Instituciones y élites de poder en la Monarquía hispana durante el siglo XVI. Madrid 1992.

-(Ed.), La Corte de Felipe II. Madrid 1994.

- "Un curioso manuscrito: el libro de gobierno del Cardenal Diego de Espinosa (1512?-1572)" Hispania 53 (1993), pp, 299-344.

- "Las canonjías inquisitoriales: un problema de jurisdicción entre la iglesia y la Monarquía (1480-1700)" Hispania Sacra. 34 (1982), pp 9-63.

- "Introducción" a la obra La Corte de Felipe II. Madrid 1994.

- "Los problemas de jurisdicción del Santo Oficio: "La Junta Magna" (1596)" Hispania Sacra (1985), pp, 205-260.

- "Los miembros del Consejo de Inquisición durante el siglo XVII" Hispania Sacra 37 (1985), pp, 409-450.

- "Transformación y crisis de la Compañía de Jesús (1578-1594)". (En prensa).

- "Familia real y grupos políticos: la Princesa doña Juana de Austria (1535-1573)" La Corte de Felipe II, J. MARTINEZ MILLAN, Ed. Madrid 1994, pp, 73-106.

- "Grupos de poder en la Corte durante el reinado de Felipe II: la facción ebolista, 1554-1573" Intituciones y élites de poder en la Monarquía hispana durante el siglo XVI, J. MARTINEZ MILLAN, Ed. Universidad Autónoma de Madrid 1992, pp, 137-198.

- "En busca de la ortodoxia: el Inquisidor General Diego de Espinosa" La Corte de Felipe II, J. MARTINEZ MILLAN, Ed. Madrid 1994, pp, 189-228.

- "Estructuras de la hacienda de la Inquisición", J. PEREZ

VILLANUEVA y B. ESCANDELL BONET Historia de la Inquisición en España y América. Madrid 1993, pp, 885-1076.

- "Alexandre Farnese, la Corte di Madrid e la Monarchia Cattolica" I Farneses: Corti, Guerra e Nobilita in Antigo Regime Piacenza, noviembre 1994 (en prensa).

- "Estudio introductorio" a R.ALTAMIRA, Ensayo sobre Felipe II, hombre de Estado. Alicante 1997.

- "La herencia de Diego de Espinosa" (En prensa).

- "Las investigaciones sobre patronazgo y clientelismo en la administración de la Monarquía Hispana durante la Edad Moderna" Studia Historica. Edad Moderna 15 (1996), pp, 83-106.

MARTINEZ MILLAN, J. y CARLOS MORALES, C.J. de, "Conversos y élites de poder en Castilla durante la primera mitad del siglo XVI: Rodrigo de Dueñas, consejero de Hacienda de Carlos V" Las tres culturas de Castilla y los sefardíes. Junta de Castilla y Leon 1990, pp, 149-163.

- "Orígenes del Consejo de Cruzada (siglo XVI)" Hispania 179 (1991), pp, 901-932.

MARTINEZ MILLAN, J. y FERNANDEZ CONTI, S., "La reorganización del gobierno: de la "Junta de Noche" a la "Junta de Gobierno" (1583-1598)". (En prensa).

MARTINEZ MILLAN, J. y SANCHEZ REVILLA, T., "El Consejo de Inquisición (1493-1700)" Hispania Sacra 73 (1984), pp, 71-193.

MARTINEZ NAVAS, I., "Proceso inquisitorial de Antonio Pérez" Revista de la Inquisición. 1 (1991), pp. 141-200.

MARTIR RIZO, J.P., Historia de la muy noble y leal ciudad de Cuenca. Barcelona 1974.

MARTZ, L. y PORRES MARTIN-CLETO, J., Toledo y los toledanos en 1561. Toledo 1974.

MARTZ, L., "Converso Families in Fifteenth and Sixteenth-century Toledo: the significance of lineage" Sefarad 48 (1988), pp, 117-196.

MATEU IBARS, J., "Los Enríquez de Ribera, virreyes de Nápoles y su diplomacia con la Santa Sede sobre el "regio exequatur", la bula "Coena

- domini" y la Inquisición" Archivio storico per la province napolitane 14 (1976), pp, 60-75.
- MATUTE Y LUQUIN, G., Despojos, infamia y hoguera. Colección de los Autos generales y particulares de Fe, celebrados en el tribunal de Inquisición de Córdoba. Madrid 1912.
- MAURA GAMAZO, Duque de Maura, El designio de Felipe II y el episodio de la Armada Invencible. Madrid 1957.
- McFARLANE, K.B., "Bastard Feudalism" England in the Fifteenth Century: Collected Essays of K.B.McFarlane. London 1981, pp, 23-43.
- McILWAIN, Ch.H., Constitucionalismo antiguo y moderno. Madrid 1991.
- MEDINA, F.B., "Jesuitas en la Armada contra Inglaterra (1588). Notas para un centenario" Archivium Societatis Iesu 58 (1989), pp, 3-42.
- "Memorial de los premios que se dieron a los poetas latinos y españoles que celebraron la entrada del cuerpo glorioso de Santa Leocadia" Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 5 (1875), 365-367.
- MENDEZ SILVA, R., Admirable vida y heroicas virtudes de aquel blasón de España (...) la esclarecida emperatriz María. Madrid 1655.
- MEREGALLI, F., "La presencia de la España de Felipe II en Italia según Scipione Ammirato" Hispania 33 (1973), pp, 77-100.
- MERLIN, P., "Il tema della Corte nella storiografia Italiana ed Europa" Studi Stotici 27 (1986), pp, 203-244.
- MESEGUER FERNANDEZ, J., "El periodo fundacional (1478-1517)", en J. PEREZ VILLANUEVA y B. ESCANDELL BONET, Historia de la Inquisición en España y América. Madrid 1984, I, pp, 281-370.
- "Relaciones del Cardenal Cisneros con su Cabildo Catedral" V Simposio Toledo Renacentista. Madrid 1980, pp, 25-147.
- MIGNET, F., Antonio Pérez y Felipe II. Madrid 1983.
- MINGUELEZ, M.F., "La Iglesia y Felipe II" La Ciudad de Dios 47 (1948), pp, 138-150.
- MIRANDA GODINEZ, F., Don Vasco de Quiroga y su Colegio de San Nicolás. Universidad de Michoacán 1990.

MOLAS RIBALTA, P., "El sistema político de la Monarquía hispana en el siglo XVI" Congreso Nacional Jerónimo Zurita, su época y su escuela. Zaragoza 1985, pp, 89-105.

- Consejos y audiencias durante el reinado de Felipe II. Universidad de Valladolid 1984.

MOLENAT, J.P., "L'oligarchie municipale de Tolède au XVe siècle" Tolède et l'expansion urbaine en Espagne (1450-1650) Rencontres de la Casa de Velazquez. Madrid 1991, pp, 159-177.

MOLHO, A., "Patronage and the State in the Early Modern Italy". A.MACZAK (Dir.), Klientelsysteme im Europa der Frühen Neuzeit. München 1988, pp, 233-242.

MOLINA MELIA, A., Iglesia y Estado en el Siglo de Oro español. El pensamiento de Francisco Suárez. Valencia 1977.

MONTER, W., La otra Inquisición. La Inquisición española en la Corona de Aragón, Navarra, País Vasco y Sicilia. Barcelona 1992.

Monumenta Historica Societati Iesu:

Bobadillae Monumenta. Madrid 1913.

Epistolae Mixtae. Madrid 1898-1899. Tomos I, II.

Epistolae Salmeronis. Madrid 1906-1907. Tomos I, II.

Fabri Monumenta. Madrid 1914.

Lainii Monumenta. Madrid 1912-1915. Tomos II, IV.

Litterae quadrimestres. Madrid 1895. Tomo II.

Monumenta Ignatiana. Madrid 1904-1918. Series 1ª y 4ª. Tomos I, II, III, X.

Ribadeneyra. Madrid 1920. Tomos I, II.

Sanctus Franciscus Borgia. Madrid 1908-1910. Tomos III, IV.

MORALES OLIVER, L., Arias Montano y la política de Felipe II en Flandes. Madrid 1927.

MOREL-FATIO, A., L'Espagne au XVIe et au XVIIe siècle. Helbronn 1878.

MORENO, J. J., Fragmentos de la vida y virtudes del Illmo. y Rmo. Dr. Don Vasco de Quiroga. México 1766.

MORENO NIETO, L., La prisión de San Juan de la Cruz en Toledo. Toledo 1991.

MORGAN, D.A.L., "The house of policy: the political role of the late

- Plantegenet household, 1422-1485" D.STARKEY (Dir.), The English Court: from de Wars of the Roses to the Civil War. London 1987, pp, 25-70.
- MORGAN, V., "Some Tipes of Patronage, Mainly in Sixteenth - and Seventeenth - Century England". A.MACZAK (Dir.), Klientelsysteme im Europa der Frühen Neuzeit. München 1988, pp, 91-116.
- MOSCONI, N., La nunziatura del cremonense Cesare Speciano negli anni 1586-1588 alle corte di Filipp II. Cremona 1939.
- MOXO, S. DE, Los antiguos señoríos de Toledo. Toledo 1973.
- "Las desamortizaciones eclesiásticas del siglo XVI" Anuario de Historia del Derecho Español. 1961, pp, 327-361.
- MOYA PINEDO, J., Corregidores y regidores de Cuenca. Siglos XV al XIX. Cuenca 1977.
- MOZZARELI, C., "Principe, Corte e Governo tra '500 e '700" Cultura et ideologie dans la gènese de l'état moderne. Roma 1985, pp, 367-379.
- MOZZARELI, C., y OLMÍ, G., (Dir.), La Corte nella cultura e nella Storiografia. Rome 1983.
- MUÑOZ SOLIVA, T., Noticias de todos los Ilustrísimos Señores Obispos que han regido la diócesis de Cuenca. Cuenca 1860.
- MUTO, G., "Como leggere il Mezzogiorno spañolo. Fonti e problemi storiografici in studi recenti" Cheiron 17-18 (1992), pp, 55-80.
- NALLE, S. T., Religion and reform in a spanish diocese: Cuenca, 1545-1650. Johns Hopkins University. PH. D. 1983.
- God in the Mancha. Religious Reform and the people of Cuenca, 1500-1650. Johns Hopkins University, PH. D., 1992.
- NETANYAHU, B., "¿Motivos o pretextos?. La razón de la Inquisición", en A. ALCALA (Dir.) Inquisición española y mentalidad inquisitorial. Madrid 1984, pp, 23-44.
- NICOLAU, M., Jerónimo Nadal (1507-1580). Sus obras y doctrinas espirituales. Madrid 1949.

- "Espiritualidad de la Compañía de Jesús en la España del siglo XVI"
Corrientes espirituales en la España del siglo XVI. Madrid 1963, pp, 341-361.

NIETO, J.C., Juan de Valdés y los orígenes de la reforma en España e Italia. México 1979.

NIETO SORIA, J.M., Fundamentos ideológicos del poder real en Castilla (Siglos XIII-XV). Madrid 1988.

Obras escogidas del Padre Pedro de Ribadeneyra. Madrid 1952. BAE, Vol. 60.

OLAGUER-FELIU, F., Las rejas de la Catedral de Toledo. Toledo 1980.

ORELLA Y UNZUE, J.L. DE, Respuestas católicas a las centurias de Magdeburgo (1559-1588). Madrid 1976.

ORTI Y FIGUEROLA, F., Memorias históricas de la fundación y progresos de la insigne Universidad de Valencia. Madrid 1730.

OSSORIO, A., Vida de Don Juan de Austria. Madrid 1946.

PALAU Y DULCET, A., Manual del librero hispanoamericano. 1948-1971.

PARAMO, L., Origine et progressu officii Sanctae Inquisitionis. Madrid 1598.

PARKER, G., El ejército de Flandes y el camino español. Madrid 1976.

- España y los Países Bajos, 1559-1569. Diez estudios. Madrid 1986.

- España y la rebelión en Flandes. Madrid 1989.

PARTNER, P., The Popes's men. The Papal Civil Service in the Renaissance. Clarendon Press, Oxford 1990.

PASTOR, L., Historia de los Papas. Barcelona 1935.

PAZOS, M.R., "En torno a Arias Montano y su Biblia (Cartas inéditas)" Archivo Iberoamericano 2 (1942), pp, 469-484.

- "Provinciales compostelanos" Archivo Iberoamericano 24 (1964), pp, 47-114.

PEÑA CAMARA, J. DE LA, "Nuevos datos sobre la visita de Juan de Ovando al Consejo de Indias, 1567-1568" Anuario de Historia del Derecho español 12 (1935), pp, 425-438.

- "La Copulata de Leyes de Indias y las Ordenanzas Ovandinas" Revista de Indias 2 (1941), pp, 121-146.

PEREÑA VICENTE, L., Diego de Covarrubias y Leyva. Maestro de Derecho internacional. Madrid 1957.

PEREZ, A., Obras y relaciones. Colonia 1676.

- Relaciones y cartas. Introducción A. ALVAR EZQUERRA. Madrid 1986.

PEREZ, J., Isabel y Fernando. Los Reyes Católicos. Madrid 1988.

- La España de los Reyes Católicos. San Lorenzo de El Escorial 1986.

PEREZ AGUADO, F., "La Políglota regia" La ciudad de Dios 47 (1898), pp, 151-168.

PEREZ BUSTAMANTE, R., "Nóminas de inquisidores. Reflexiones sobre el estudio de la burocracia inquisitorial en el siglo XVI". J. PEREZ VILLANUEVA (Dir.), La Inquisición española. Nueva visión, nuevos horizontes. Madrid 1980, pp, 257-269.

PEREZ DE HEREDIA, J., "El Concilio provincial de Granada de 1565" Anthologica Annua 37 (1990), pp, 381-842.

PEREZ DE HITA, G., Guerras civiles de Granada. Madrid 1913.

PEREZ DE LARA, A., Compendio de las Tres Gracias de la Santa Cruzada. Subsidio y Excusado. Madrid 1610.

PEREZ GARZON, J.S., "Ejército nacional y milicia nacional" Zona Abierta 31 (1984), pp, 23-25.

PEREZ GOYENA, A., "Arias Montano y los jesuitas" Revista de estudios eclesiásticos 7 (1928), pp, 273-317.

PEREZ MINGUEZ, F., "Don Juan de Idiáquez. Embajador y consejero de Felipe II, 1514-1614". Revista internacional de los Estudios Vascos. 22 (1931), pp 485-522; 23 (1932), pp 70-129; 23 (1932), pp 569-619; 24 (1933), pp 225-282; 25 (1934), pp 131-189.

PEREZ PASTOR, C., La imprenta de Medina del Campo. Junta de Castilla y León 1992.

- Bibliografía madrileña. Madrid 1891.

- PEREZ RAMIREZ, D., Catálogo del archivo de la Inquisición de Cuenca. Madrid 1982.
- PEREZ RAMIREZ, D., La Custodia de la catedral de Cuenca. Cuenca 1985.
- PEREZ SANCHEZ, A., El Toledo de El Greco. Toledo 1982.
- PEREZ VILLANUEVA, J., (dir). La Inquisición española. Nueva visión, nuevos horizontes. Madrid 1980.
- "Baronio y la Inquisición española" Baronio storico e la Contrarreforma. Sora 1982, pp, 3-53.
- PEREZ VILLANUEVA, J., y ESCANDELL BONET, B., Historia de la Inquisición en España y América. Madrid 1984, 1993.
- PESET REIG, M. y J.L., "El aislamiento científico español a través de los índices del inquisidor Gaspar de Quiroga de 1583 y 1584" Anthologica Annua 16 (1968), pp, 25-41.
- PETRIE, Ch., Don Juan de Austria. Madrid 1968.
- PFANDL, L., Juana la Loca, su vida, su tiempo, su culpa. Madrid 1977 (10ª Ed.).
- PHILIPPSON, M. y otros, "Felipe II y el pontificado" Estudios sobre Felipe II. Traducido por R. HINOJOSA. Madrid 1887, pp, 89-192.
- PIERSON, P., Felipe II de España. México 1988.
- PINTA LLORENTE, M., "Aportaciones para la historia externa de los Indices expurgatorios españoles" Hispania 12 (1952), pp, 253-300.
- Causa criminal contra el biblista Alonso Gudiel, Catedrático de la Universidad de Osuna. Madrid 1942.
- "Historia interna de los Indices expurgatorios españoles" Hispania 14 (1954), pp, 411-461.
- Procesos inquisitoriales contra los catedráticos hebraístas de Salamanca. Madrid 1935.
- Proceso criminal contra el hebraísta salmantino Martín Martínez de Cantalapiedra. Madrid 1946.
- PINTO CRESPO, V., "Los Inquisidores Espinosa y Quiroga". J. PEREZ VILLANUEVA y B. ESCANDELL BONET, Historia de la Inquisición

en España y América. Madrid 1984, I, pp, 767-771.

- Inquisición y control ideológico en el siglo XVI. Madrid 1983.

- "La censura: sistema de control e instrumentos de acción". A. ALCALA (Dir.) Inquisición española y mentalidad inquisitorial. Madrid 1984, pp, 269-287.

- "Institucionalización inquisitorial y censura de libros". J. PEREZ VILLANUEVA (Dir.), La Inquisición española. Nueva visión, nuevos horizontes. Madrid 1980, pp, 513-535.

- "La censura inquisitorial, inquietud e incertidumbre: el caso Ramón Llull (1559-1610)" Miscelanea conmemorativa. Madrid 1982, pp, 293-314.

- "El proceso de configuración y elaboración del índice y expurgatorio de 1583-84 en relación con otros índices del siglo XVI" Hispania Sacra 30 (1977), pp, 201-254.

- "Los Indices de Libros Prohibidos" Hispania Sacra 35 (1983), pp, 161-191.

Pio V y Felipe II. Primeros diez meses de la embajada de Don Luis de Requesens en Roma, 1562-1563. Madrid 1891. Colección de Libros Raros y Curiosos, Vol. XX.

PISA, F. DE, Apuntamientos para la II parte de la "Descripción de la Imperial Ciudad de Toledo". Toledo 1976.

- Descripción de la Imperial ciudad de Toledo. Toledo 1605, 1617 (Edición facsímil 1974).

PIZARRO LLORENTE, H., "El control de la conciencia regia. El confesor real fray Bernardo de Fresneda", J. MARTINEZ MILLAN (Dir.), La Corte de Felipe II. Madrid 1994, pp, 149-188.

- "La visita al reino de Nápoles de 1559: el enfrentamiento entre Gaspar de Quiroga y Juan de Soto" P. FERNANDEZ ALBADALEJO, J. MARTINEZ MILLAN y V. PINTO CRESPO (Eds.), Política religión e Inquisición en la España Moderna. Madrid 1996, pp, 567-586.

- "Las relaciones de patronazgo a través de los inquisidores de Valladolid durante el siglo XVI". J. MARTINEZ MILLAN (Ed.), Instituciones y élites de poder en la Monarquía Hispana durante el siglo XVI. Universidad Autónoma de Madrid 1992, pp, 223-262.

- "Banqueros e inquisidores: Módica y la financiación del proceso del

arzobispo fray Bartolomé de Carranza (1573-1578)" Tra Spagna e Sicilia: La Contea in Età Moderna. (En prensa).

- "La pugna cortesana por el control de la Cruzada (1573-1586)" J. MARTINEZ MILLAN (Dir.) Política y administración en tiempos de Felipe II. El gobierno por juntas, 1573-1598. (En prensa).

PLACER RUEDA, M.A., La burocracia del Santo Oficio de la Inquisición de Llerena, 1600-1820. Tesis de licenciatura, UAM 1985.

PO-CHIA HSIA, R., Social discipline in the reformation Central Europe, 1550-1750. London-New York 1992.

POLAINO ORTEGA, L., Estudios históricos sobre el Adelantamiento de Cazorla. Sevilla 1967.

PONZ, A., Viaje por España. Madrid 1947.

PORREÑO, B., Don Juan de Austria. Madrid 1899

-Dichos y hechos del rey D.Felipe II. Madrid 1942 (Ed. facsímil).

PORRES MARTIN-CLETO, J., Los primados de Toledo. Toledo 1993.

POSCHMANN, A., "El Cardenal Guillermo de Croy y el arzobispo de Toledo" BRAH 75 (1919), pp, 201-282.

POU Y MARTI, J.M., "Fray Bernardo de Fresneda, confesor de Felipe II, obispo de Cuenca y Córdoba y arzobispo de Zaragoza" Archivo Ibero-Americano 33 (1930), pp, 582-603.

PULGAR, H. del, Crónica de los Reyes Católicos. Madrid 1943.

QUEIROZ VELLOSO, J.M. DE, Don Sebastián, 1554-1578. Madrid 1943.

RABADE OBRADO, M.P., Una élite de poder en la Corte de los Reyes Católicos: los judeoconversos. Madrid 1993.

RABASCO VALDES, J.M., El Real y Supremo Consejo de Flandes y Borgoña (1419-1702). Granada 1980.

RABB, T.K., "Revisionism Revisited: Early Stuart Parliamentary History" Past and Present 92 (1981), pp, 55-78.

RAMON PARRO, S., Toledo en la mano. Toledo 1857.

- RAMOS PEREZ, D., "La Junta Magna y la nueva política". Historia general de España y América. Madrid 1982. Dirigida por L. SUAREZ. Tomo VII, pp, 437-454.
- RAVIER, A., Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. Madrid 1991.
- REGLA, J., Estudios sobre los moriscos. Barcelona 1974 .
- REKERS, B., Arias Montano. Madrid 1973.
- RETAMAL FAVEREAU, J., Diplomacia anglo-española durante la Contrarreforma. Universidad Católica de Chile 1981.
- RETEL, E., Ambrosio de Morales. Estudio biográfico. Córdoba 1908.
- REVAH, I.S., "Gil Gonzalez de Avila et les statufs de purité de sang" Studia historica in honorem R. Lapesa. Madrid 1974, pp, 493-518.
- REZABAL Y UGARTE, J. de, Biblioteca de los escritores que han sido individuos de los seis colegios mayores. Madrid 1805.
- RIBA GARCIA, C., "El viaje de Felipe II a Portugal (1580-1583)" Estudios erúditos in memoriam de Adolfo Bonilla y San Martín (1875-1926). Madrid 1930, pp, 178-213.
- El Consejo Supremo de Aragón en el reinado de Felipe II. Madrid 1915.
- Correspondencia privada de Felipe II con su secretario Mateo Vázquez, 1567-1591. Madrid 1959.
- RIBADENEYRA, P.de, Vida de Ignacio de Loyola. Madrid 1967.
- RIVERA MANESCAU, S., Papeles pertenecientes al Colegio Mayor de Santa Cruz de Valladolid. Valladolid 1918.
- RIVERA RECIO, J.F., Santa Leocadia de Toledo. Toledo 1961.
- El Adelantamiento de Cazorla. Historia general. Toledo 1948.
- RIVERO RODRIGUEZ, M., "El servicio a dos Cortes: Marco Antonio Colonna, Almirante pontificio y vasallo de la Monarquía" La Corte de Felipe II. Dir. J. MARTINEZ MILLAN, Madrid 1994, pp, 305-378.
- "La fundación del Consejo de Italia: Corte, grupos de poder y periferia (1536-1559)" Instituciones y Elites de Poder en la Monarquía Hispana

Durante el Siglo XVI. Ed. J. MARTINEZ MILLAN, Madrid 1992, pp, 199-222.

- El Consejo de Italia y el gobierno de los dominios italianos en la Monarquía hispana durante el reinado de Felipe II (1556-1598). Tesis Doctoral. Universidad Autónoma de Madrid 1991.

- "Poder y clientelas en la fundación del Consejo de Italia (1556-1560)" Cheiron 17-18 (1992), pp, 29-54.

- "Doctrina y práctica política en la Monarquía hispana. Las instrucciones dadas a los virreyes y gobernadores de Italia en los siglos XVI y XVII" Investigaciones históricas 9 (1989), pp, 197-213.

- "La Liga Santa y la paz de Italia (1569-1576)", P. FERNANDEZ ALBADALEJO, J. MARTINEZ MILLAN y V. PINTO CRESPO (Eds.) Política, religión e inquisición en la España Moderna Madrid 1996, pp, 587-620.

- "Luis II Enríquez, la crisis cortesana de 1579 y el gobierno de Sicilia" Tra Spagna e Sicilia: La Contea in Età Moderna. (En prensa).

ROBRES LLUCH, R., San Juan de Ribera, Patriarca de Antioquía, Arzobispo y virrey de Valencia, 1532-1611. Barcelona 1960.

- "San Carlos Borromeo y sus relaciones con el episcopado ibérico postridentino, especialmente a través de Fray Luis de Granada y de San Juan de Ribera" Anthologica Annua 8 (1960), pp, 83-141.

RODRIGUEZ, P., "Gabriel de Zayas (1525-1593). Notas biográficas" Espacio, tiempo y forma serie IV, 4 (1991), pp, 57-70.

RODRIGUEZ, P., y ADEBA, Y., Leonor de la Misericordia. Vida de Catalina de Cristo. Burgos 1995.

RODRIGUEZ, P., y RODRIGUEZ, J., Don Francés de Alava y Beaumonte. Correspondencia inédita de Felipe II con su embajador en París. San Sebastian 1991.

RODRIGUEZ DE GRACIA, H., Asistencia social en Toledo, siglos XVI-XVIII. Toledo 1980.

- "Documentos para la biografía del Cardenal Silicio" Anales toledanos 28 (1984), pp, 85-179.

- RODRIGUEZ HORTA, A., "Sociedad y ocupación de cargos públicos del ayuntamiento de Toledo en la mitad del siglo XV" I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha. Junta de comunidades de Castilla-La Mancha 1988, pp, 207-210.
- RODRIGUEZ QUINTANA, M.I., "La contratación artística en el Arzobispado de Toledo durante la segunda mitad del siglo XVI" Arte, Individuo y Sociedad 2 (1989), pp, 89-106.
- RODRIGUEZ RODRIGUEZ, A., Santa Teresa de Jesús en Toledo. Toledo 1991.
- RODRIGUEZ RODRIGUEZ, V., Notas sobre la Historia y Geografía de la Sagra. Toledo 1983.
- RODRIGUEZ VILLA, A., "Correspondencia de Alejandro Farnesio, Duque de Parma" Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos (2ª época) 9 (1883).
- ROMAN DE LA HIGUERA, J., Historia eclesiástica de la Imperial ciudad de Toledo (BNM, Ms. 1293).
- ROTETA, A.M., "El retrato-grabado español en Pedro Angel" Goya 130 (1976), pp, 220-227.
- ROTH, C., Los judíos secretos. Historia de los marranos. Madrid 1979.
- ROVITO, P.L., Repubblica dei togati. Nápoles 1981.
- RUBIO, J.Mª., "Don Francisco de Portugal, conde de Vimioso, y la unidad política de la península" Boletín de la Biblioteca Menéndez y Pelayo 9 (1927), pp, 326-346.
- Felipe II y Portugal. Madrid 1927.
- RUIZ DE VERGARA Y ALAVA, F., Historia del Colegio Viejo de San Bartolomé. Madrid 1766.
- RUIZ MARTIN, F., "Movimientos demográficos y económicos en el reino de Granada durante la segunda mitad del siglo XVI" Anuario de Historia económica y social 1 (1968), pp, 127-184.
- RUIZ RODRIGUEZ, A.A., La Real Chancillería de Granada en el siglo XVI. Granada 1987.
- SAEZ, C., (Ed.) Annales Complutenses. Alcalá de Henares 1990.

SALAZAR ACHA, J., "La limpieza de sangre" Revista de la Inquisición 1 (1991), pp, 289-308.

SALAZAR Y MENDOZA, P., Chronica del Cardenal Don Juan de Tavera. Toledo 1603.

-Vida y sucesos prósperos y adversos de don Fray Bartolomé de Carranza y Miranda. Madrid 1788.

-Crónica del gran Cardenal de España Don Pedro González de Mendoza. Toledo 1625.

SANAHUJA, P., Historia de la seráfica provincia de Cataluña. Barcelona 1959.

SANCHEZ, M.D., El deber de Consejo en el Estado Moderno. Las Juntas "ad hoc" en España (1471-1665). Madrid 1993.

SANCHEZ ALISEDA, C., "Precedentes toledanos de la reforma tridentina" Revista española de Derecho Canónico 3 (1948), pp, 457-495.

SANCHEZ BELLA, I., "El gobierno del Perú, 1556-1564" Anuario de Estudios Americanos 17 (1960), pp, 407-524.

SANCHEZ GIL, V., "El tribunal de la Inquisición de Cuenca: Notas para un catálogo de sus miembros (1489-1714)" Archivo Ibero-americano 40 (1980), pp, 3-36.

SANCHEZ GONZALEZ, R., La población de la Sagra en la época de los Austrias. Toledo 1993.

SANCHEZ RIVILLA, T., "Sociología de los Inquisidores generales y Consejeros". J. PEREZ VILLANUEVA y B. ESCANDELL BONETT, Historia de la Inquisición en España y América. Madrid 1993, II, pp, 715-730.

- El Consejo de Inquisición. Su burocracia (1483-1700) Tesis Doctoral. U.A.M. 1990.

Santa Teresa. Cartas. Burgos 1981. Maestros Espirituales carmelitas 2.

SANTIAGO VELA, G. DE, Ensayo de una biblioteca iberoamericana de la Orden de San Agustín. Madrid 1971.

SANTOLAYA HEREDERO, L., La obra y fábrica de la Catedral de Toledo a fines del siglo XVI. Caja de ahorros provincial de Toledo 1979.

- "El Colegio de Doncellas Nobles de Toledo. Algunos puntos de sus

- constituciones" Espacio, Tiempo y Forma 7 (1994), pp, 355-363.
- SANTOS DIEZ, J.L., Política conciliar postridentina en España. El concilio provincial de Toledo de 1565. Roma 1969.
- SANZ Y DIAZ, Cl., Reseña cronológica de algunos documentos conservados en el archivo de la catedral de Cuenca. Cuenca 1965.
- Breve historia de la diócesis de Cuenca. Cuenca 1974.
- SCHÄFER, E., El Consejo Real y Supremo de las Indias. Sevilla 1935. 2 Vols.
- SCHIERA, P., "Sociedade "de estados", de "ordens" ou "corporativa". A.M.HESPANHA (Ed.), Poder e Instituições na Europa do Antigo Regime. Lisboa 1984, pp, 143-153.
- SCHILLING, H., "The Reformation and the rise of the Early Modern State". JAMES D. TRACY (Ed.), Luther and the Modern State in Germany. Kirksville 1986.
- SEGUI CANTOS, J., "La reforma franciscana en Valencia. Los recoletos (1581-1583)" Archivo Iberoamericano 53 (1993), pp, 423-448.
- SERRANO, L., "Primeras negociaciones de Felipe II con el papa S. Pio V". Hispania. 1 (1940), pp. 83-124.
- "Anotaciones al tema: El papa Paulo IV y España" Hispania 3 (1943), pp, 293-325.
 - La Liga de Lepanto entre España, Venecia y la Santa Sede (1570-1573). Madrid 1918.
 - España en Lepanto. Madrid 1971.
 - "Un legado pontificio en la Corte de Felipe II" Hispania 2 (1942), pp, 64-91.
 - Correspondencia diplomática entre España y la Santa Sede durante el pontificado de San Pío V. Madrid 1914.
- SHARPE, K., "Crown, Parliament and locality: government and communication in Early Stuart England" English Historical Review 101 (1986), pp, 321-350.
- (Dir.), Faction and Parliament. Essays on Early Stuart history. Oxford University Press 1978.

- SHENNAN, J.H., Le origini dello stato moderno in Europa (1450-1725). Bologna 1976.
- SICROFF, A.A., Los estatutos de limpieza de sangre. Controversias entre los siglos XV y XVII. París 1979. Reed. Madrid 1985.
- SIERRA CORELLA, A., La censura en España. Indices y Catalogos de libros prohibidos. Madrid 1947.
- El convento de monjas de San Juan de la Penitencia de Toledo. Madrid 1935.
- SIMANCAS, D., "La vida y cosas notables del señor obispo de Zamora don Diego de Simancas". Autobiografías y Memoriales. Madrid 1905, pp, 151-210. (NBAE, Vol. II).
- SIMON DIAZ, J., Historia del Colegio Imperial de Madrid. Madrid 1952.
- "La Inquisición de Logroño (1570-1580)" Berceo 1 (1946), pp, 89-119.
- "La Inquisición de Logroño (1580-1600)" Berceo 6 (1948), pp, 83-96.
- Historia del Colegio Imperial de Madrid. Madrid 1992.
- SOBALER SECO, M.A., Los colegiales mayores de Santa Cruz (1484-1670). Una élite de poder. Junta de Castilla y León 1987.
- SPIVAKOVSKY, E., "La Princesa de Eboli" Chronica Nova 9 (1977), pp, 7-48.
- STARKEY, D., "Intimacy and innovation: the rise of the Privy Chamber, 1485-1547" Idem, (Dir.), The English Court: from the Wars of the Roses to the Civil War. London 1987, pp, 71-118.
- "Court, Council, and Nobility in Tudor England". R.G.ASCH y A.M.BIRKE (Dirs.), Princes, Patronage and the Nobility. The Court at the Beginning of the Modern Age. Oxford University Press 1991, pp, 175-203.
- STEGGINK, O., La reforma del Carmelo español. La visita canónica del General Rubeo y su encuentro con Santa Teresa. Roma 1965.
- STEGMANN, A., "La Corte como centro amministrativo. Gerarchia e decentralizzazione amministrativa in Francia da Francesco I a Luigi XIII". M.CATTINI y M.A.ROMANI (Dirs.), La Corte in Europa. Brescia 1983, pp, 11-30.
- STONE, L., El Pasado y el Presente. Madrid 1986.

STRADLING, R.A., Europa y el declive de la estructura imperial española, 1580-1720. Madrid 1981.

STRAYER, J.R., Sobre los orígenes medievales del Estado Moderno. Barcelona 1981.

SUAREZ FERNANDEZ, L., Documentos acerca de la expulsión de los judíos. Valladolid 1964.

- Nobleza y Monarquía. Universidad de Valladolid 1975.

- "La España de los Reyes Católicos" Historia de España, dirigida por R. MENENDEZ PIDAL. Tomo XVII.

TAPIA SANCHEZ, S. DE, La comunidad morisca de Avila. Salamanca 1991.

TEJADA Y RAMIRO, J., Colección de Cánones y de todos los concilios de la Iglesia Española. Madrid 1885. Vol. V.

TELLECHEA IDIGORAS, J.I., "Españoles en lovainia en 1551-1558" Revista Española de Teología 23 (1963), pp, 21-45.

- Fray Bartolomé de Carranza y el Cardenal Pole. Un navarro en la restauración católica de Inglaterra (1554-1558). Pamplona 1977.

- "Fray Rodrigo de Vaillo, OSB, en el proceso romano de Carranza" Yermo 14 (1976), pp, 37-90.

- "Cartas inéditas de un inquisidor por oficio. El Dr. Simancas y el proceso romano de Carranza" Homenaje a Julio Caro Baroja. Madrid 1978, pp, 965-999.

- "Cartas del inquisidor Temiño sobre el proceso romano de Carranza" Revista española de teología 39-40 (1979-1980), pp, 343-369.

- "El final de un proceso. Sentencia original de Gregorio XIII y adjuración del arzobispo Carranza" Scriptorium Victoriense 23 (1976), pp, 202-232.

- "El cardenal Gaspar de Gaete (1511-1575). Arzobispo de Salerno y Tarragona" Analecta Sacra Tarraconensia 51-52 (1978-79), pp, 295-321.

- "El doctor Pazos en el proceso Carranza (Cartas inéditas)". E. VERDERA Y TUELLS (Ed.) El Cardenal Albornoz y el Colegio de España. Bolonia 1979, V, pp, 451-531.

- "Aspectos económicos del proceso de Carranza (1567-68)" Príncipe de

Viana 128-129 (1972), pp, 193-263.

- "Felipe II y el Inquisidor General don Fernando de Valdés. Documentos inéditos" Salamanticensis 16 (1969), pp, 329-372.

- "El proceso del arzobispo Carranza, "test" de las tensiones Iglesia-Estado", J. PEREZ VILLANUEVA, La Inquisición española. Nueva visión, nuevos horizontes. Madrid 1980, pp, 69-81.

- "Sondeo en el proceso romano del arzobispo Carranza" Archivum Historiae Pontificae 3 (1965), pp, 193-238.

- Fray Bartolomé de Carranza. Documentos históricos. Madrid 1962.

- "Inventario del proceso del arzobispo Carranza al tiempo de su traslado a Roma (1567)" BRAH 164 (1969), pp, 97-118.

- "El proceso romano del arzobispo Carranza. Las audiencias de Sant'Angelo (1568-1569)" Anthologica Annua 41 (1994), pp, 311-638.

- "Censura inédita del padre Francisco de Toledo, S.I., sobre el catecismo del arzobispo Carranza" Revista española de teología 29 (1969), pp, 3-35.

- "Memorias sobre el proceso y muerte del arzobispo Carranza" Príncipe de Viana 146-147 (1997), pp, 219-260.

- El arzobispo Carranza y su tiempo. Madrid 1968.

- "Cartas españolas y portuguesas dirigidas a Antonio Caraffa, Pio IV y Pio V" Anthologica Annua 9 (1961), pp, 475-493.

- "Cartas del Inquisidor Temiño sobre el proceso romano de Carranza" Revista Española de Teología 39-40 (1979-1980), pp, 343-369.

- Ignacio de Loyola, solo y a pie. Salamanca 1990.

- "Antonio Pérez a través de la documentación de la Nunciatura de Madrid" Anthologica Annua 5 (1957), 653-682.

- El proceso romano del arzobispo Carranza (1567-1576). Roma 1988.

- "La Invencible" vista desde la nunciatura de Madrid. Salamanca 1989.

- El obispo ideal en el siglo de la Reforma. Roma 1963.

TELLEZ, G., Historia general de la Orden de Nuestra Señora de las Mercedes. Madrid 1974.

TERESA DE JESUS, Obras Completas. Madrid 1945

TORRES MENA, J., Noticias conquenses (Edición facsímil) Cuenca 1985.

TORRES SANZ, D., La administración central castellana en la Baja Edad Media. Universidad de Valladolid 1982.

TORROJA MENENDEZ, C., Catálogo de Obra y Fábrica de la Catedral de Toledo. Toledo 1977.

- "El Cardenal Silicio y la reforma de la plaza del ayuntamiento" Anales toledanos 11 (1976), pp, 54-68.

TOVAR, A., y PINTA LLORENTE, M. de la, Procesos inquisitoriales contra Francisco Sanchez de las Brozas. Madrid 1941.

TURRIANO, J., Breve discurso a su majestad el rey Católico en torno a la reducción del año y reforma del calendario. (Introducción de A. GARCIA-DIEGO). Madrid 1990.

ULLMAN, W., Principios de gobierno y política en la Edad Media. Madrid 1985.

ULLOA, M., La Hacienda real de Castilla en el reinado de Felipe II. Madrid 1977.

UNGERER, G., La defensa de Antonio Perez contra los cargos que se le imputaron en el proceso de visita (1584). Zaragoza 1980.

- A spaniard in Elizabethan England: The correspondence of Antonio Pérez's exile. Londres 1975.

VALDEAVELLANO, L.G.DE., Curso de Historia de las instituciones españolas. Madrid 1977.

VALDENEbro Y CISNEROS, J.M^a., La imprenta de Córdoba. Madrid 1900.

VALENTE, A., "Un drama político alla corte di Filippo II" Nuova rivista storica (1924), pp, 264-303, 416-442.

VAN DURME, E., El Cardenal Granvela (1517-1586). Imperio y revolución bajo Carlos V y Felipe II. Barcelona 1957.

VAN ESSEN, L., Alexandre Farnèse, prince de Parme, Gouverneur général des

Pays-Bas. Bruxelles 1933-37.

VAN GULIK, G., y EUBEL, C., Hierarchia Catholica medii et recentionis Aevi. Münster 1923.

VARONA GARCIA, M.A., La chancillería de Valladolid en el reinado de los Reyes Católicos. Valladolid 1959.

VEGAS GONZALEZ, S., Toledo en la Historia del Pensamiento español renacentista. Toledo 1985.

VEGUE Y GOLDONI, A., "El Cardenal Quiroga, retratado por el Greco" Archivo Español de Arte y Arqueología. IV (1928), pp, 135-137.

VELAYOS ZURDO, O., Vasco de Quiroga: olvido y glorificación. Avila 1992.

VENY BALLESTER, A., Paulo IV cofundador de la clerecía religiosa (1474-1559). Trayectoria ejemplar de un Papa de la Contrarreforma. Palma de Mallorca 1976.

VICENS VIVES, J., "Estructura administrativa estatal en los siglos XVI y XVII" Coyuntura económica y reformismo burgués. Barcelona 1974, pp, 99-142.

VICENT, B., "La expulsión de los moriscos del reino de Granada y su reparto en Castilla" Andalucía en la Edad Moderna: economía y sociedad. Granada 1985, pp, 215-266.

VILAR, J.B., Los moriscos del reino de Murcia y obispado de Orihuela. Murcia 1992.

VILARI, R., La revuelta antiespañola en Nápoles. Los orígenes (1585 -1647). Madrid 1979.

VILLANUÑO, M. de, Summa Conciliorum Hispaniae. Madrid 1785.

VIÑAS, C., y PAZ, R., Relaciones histórico-geográficas de los pueblos de España hecha por iniciativa de Felipe II. Madrid 1963.

VOCI, A.M., "L'Impresa d'Inghilterranei dispacci del nunzio a Madrid Nicolò Ormaneto (1572-1577)" Anuario del' Instituto Storico Italiano per l'Etat Moderna e Contemporanea 35-36 (1983-1984), pp, 337-425.

VV. AA., El Toledo de Felipe II y el Greco. Toledo 1986.

VV. AA. El Toledo de Domenico Theotocopuly. El Greco. Toledo 1982.

- VV.AA., Relación de pueblos del obispado de Cuenca. Cuenca 1983.
- WALSH, W. T., Felipe II. Madrid 1949.
- WARREN, J.B., Vasco de Quiroga y sus hospitales-pueblo de Santa Fe. Universidad de Michuacán 1977.
- WETHEY, H.E., El Greco y su escuela. Madrid 1962.
- XAVIER, A., Luis de Requesens en la Europa del siglo XVI. Madrid 1984.
- ZAMBRANO, M., SIMONS, E., y BLAZQUEZ MIGUEL, J., Sueños y procesos de Lucrecia León. Madrid 1987.
- ZAMORA LUCAS, F., "El colegio de doña María de Aragón y un retablo del "Greco", en Madrid" Anales del instituto de Estudios Madrileños 2 (1967), pp, 215-239.
- ZAPATA, L., Miscelanea (Varia Historia). Badajoz 1983 (Ed. facsímil).
- ZAVALA, S., Recuerdo de Vasco de Quiroga. México 1987.
- ZUGASTI, J.A., Santa Teresa y la Compañía de Jesús. Madrid 1914.

REUNIDO, EN EL DIA DE LA FECHA, EL TRIBUNAL QUE SUSCRIBE, ACORDO CONCEDER
A LA PRESENTE TESIS DOCTORAL LA CALIFICACION DE APTO CUM LAUDE - UNANIMIDAD
MADRID, VEINTE OCTUBRE 1997

EL PRESIDENTE,

EL SECRETARIO,

de Vida Toplaza

J. Baran

FDO.:

FDO.:

PRIMER VOCAL,

SEGUNDO VOCAL,

TERCER VOCAL,

Rafael Benitez

J. I. Reguera

R. Lopez Vela

FDO.: Rafael BENITEZ

FDO.: J. I. REGUERA

FDO.: R. Lopez Vela